

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Departamento de Historia Contemporánea



**CONTROL SOCIOPOLÍTICO E IMPOSICIÓN
IDEOLÓGICA: LA PROVINCIA DE SEGOVIA 1936-1939.
UN EPISODIO DE LA IMPLANTACIÓN DEL RÉGIMEN
DE FRANCO**

**MEMORIA PRESENTADA PARA OPTAR AL GRADO DE
DOCTOR POR**

Santiago Vega Sombría

Bajo la dirección del Doctor:

Julio Aróstegui Sánchez

Madrid, 2002

ISBN: 84-669-2000-5

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA**

**CONTROL SOCIOPOLÍTICO E IMPOSICIÓN IDEOLÓGICA: LA PROVINCIA DE
SEGOVIA 1936-1939.**

UN EPISODIO DE LA IMPLANTACIÓN DEL RÉGIMEN DE FRANCO

Tesis Doctoral realizada por SANTIAGO VEGA SOMBRÍA,

Con la dirección del Dr. D. Julio Aróstegui Sánchez

MADRID, 2002

ÍNDICE	Página
INTRODUCCIÓN	9
A. Objetivos de este estudio	9
B. La información histórica: las fuentes	15
C. Fuentes Bibliográficas	20
I. LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN	25
1. LOS ANTECEDENTES. LA PRIMAVERA DE 1936 EN SEGOVIA	28
Mapa general de la provincia de Segovia	
1. 1. Segovia: una provincia diversificada	28
1. 1. 1. Los problemas del campo	33
1. 1. 2. Los problemas laborales	34
1. 1. 3. La vida cultural y religiosa	37
1. 2. Las organizaciones políticas y sindicales	43
1. 3. El Frente Popular	47
1. 3. 1. Las elecciones de febrero de 1936	47
1. 3. 2. La actuación del Gobierno del Frente Popular	51
1. 4. Los escenarios del conflicto izquierda-derecha	55
1. 4. 1. Las elecciones municipales y a compromisarios	55
1. 4. 2. La lucha por el control de la calle	56
1. 4. 3. Las demostraciones de poder de la izquierda	63
1. 5. Los momentos previos a la sublevación militar	67
2. LA SUBLEVACIÓN MILITAR EN SEGOVIA	69
2. 1. La toma del poder provincial por los sublevados	69
2. 2. La oposición al levantamiento militar	78
2. 2. 1. La huelga general en la capital	78
2. 2. 2. La defensa de la República en la provincia	79
Mapa de la resistencia a la sublevación militar en la provincia de Segovia	82
Cuadro Cronológico	83
2. 3. Control de la provincia por los sublevados	84
2. 3. 1. El Espinar	84
2. 3. 2. San Ildefonso	87
2. 3. 3. Coca	88
2. 3. 4. Bernardos	90
2. 3. 5. Nava de la Asunción	91
2. 3. 6. Cuéllar	91
2. 3. 7. Otras localidades	93
2. 3. 8. La Columna Mangada	94
3. LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN	96
3. 1. Transformaciones políticas	96
3. 1. 1. La supresión de derechos y libertades	96
3. 1. 2. La ilegalización de partidos y asociaciones	98
3. 1. 3. Sustitución de las autoridades locales y provinciales.	
Vuelta al poder local y provincial del bloque conservador	100
3. 2. Transformaciones sociales	105
3. 2. 1. La censura en los medios de comunicación, radio,	

prensa, libros, cine.	105
3. 2. 2. El adoctrinamiento de la población sometida. La propaganda del nuevo régimen	108
3. 2. 3. La Educación, valores religiosos y conservadores. La escuela nacional-católica	114
3. 2. 4. Las normas sobre ordenación de la vida en retaguardia. Las circulares del gobernador civil Pérez Mirete	117
3. 2. 5. La colaboración de alcaldes y particulares en la implantación del régimen franquista	122
II. CONTROL SOCIOPOLÍTICO E IMPOSICIÓN IDEOLÓGICA	127
4. IDEOLOGÍA Y OBJETIVOS DE LA REPRESIÓN	129
4. 1. La violencia política en la crisis de los años treinta	131
4. 2. La legitimación de la sublevación	133
4. 2. 1. El restablecimiento del orden social amenazado	133
4. 2. 2. La abolición de la democracia parlamentaria. El desalojo del poder del adversario	135
4. 3. Los fundamentos ideológicos de la represión franquista	137
4. 3. 1. La represión de clase	137
4. 3. 2. La extirpación de “los males de la patria”	139
4. 3. 3. El exterminio, la eliminación del oponente	141
4. 3. 4. La oportunidad para la venganza	143
4. 4. Los objetivos inmediatos de la represión franquista	142
4. 4. 1. Paralizar por el terror	144
4. 4. 2. La ejemplarización: la selección de las víctimas	147
4. 4. 3. Asegurar la retaguardia	148
5. LA REPRESIÓN “ILEGAL”	150
5. 1. Los mecanismos de la represión “ilegal”	150
5. 1. 1. Las denuncias y los denunciados	150
5. 1. 2. Las detenciones	152
5. 1. 3. Los ejecutores de la represión sumaria	155
5. 1. 4. Las ejecuciones indiscriminadas	164
5. 1. 5. Las sacas de las prisiones	168
5. 2. La legalización de la represión sumaria	172
5. 2. 1. La problemática de la no inscripción de los fallecidos	172
5. 2. 2. Los expedientes de desaparición	176
5. 2. 3. Las inscripciones en los registros civiles	180
5. 2. 4. Ordenante de la inscripción	182
5. 2. 5. Tipos de inscripción	183
5. 2. 6. Las víctimas sin identificar	187
6. LA REPRESIÓN “LEGALIZADA”	189
6. 1. El Fundamento legislativo	189
6. 1. 1. La reversión de la legitimidad	190
6. 1. 2. El Código de Justicia Militar	191
6. 1. 3. La regulación de los Consejos de Guerra	192
6. 2. La Justicia Militar	194
6. 2. 1. Los Juzgados Militares	194
6. 2. 2. Los procedimientos de la Justicia Militar	195
6. 3. Los Consejos de Guerra en la provincia de Segovia	197
6. 3. 1. La calificación legal de los delitos	199

6. 3. 2. Los hechos “delictivos”	202
6. 3. 3. Las penas y las circunstancias modificativas de la responsabilidad: atenuantes y agravantes	212
6. 3. 4. Las condenas	214
6. 4. La libertad vigilada	217
7. LA INCAUTACIÓN DE BIENES	222
7. 1. Las fases del proceso incautador	222
7. 2. La incautación de bienes a los partidos políticos y sindicatos	224
7. 3. El procedimiento de responsabilidad civil de los particulares	226
7. 3. 1. La incoación de los expedientes	228
7. 3. 2. La ejecución de las sanciones	237
7. 3. 3. Los recursos de los afectados	238
7. 4. Valoración del proceso de incautación de bienes	242
7.5. Un modelo de incautación encubierta: Las suscripciones patrióticas	246
7. 6. La incautación y la Ley de Responsabilidades Políticas	251
7. 6. 1. Introducción	251
7. 6. 2. La liquidación de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes	254
7. 6. 3. Los expedientes de responsabilidades políticas	255
7. 6. 4. Las sentencias	263
7. 6. 5. Los recursos	265
7. 7. Los indultos	266
7. 8. Análisis del proceso de responsabilidades políticas	267
8. LA DEPURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN	272
8. 1. La Depuración provisional	272
8. 2. La Depuración definitiva	276
8. 2. 1. La legislación	276
8. 2. 2. El procedimiento depurador	278
8. 3. La Depuración del Personal Docente	286
8. 3. 1. La depuración provisional	286
8. 3. 2. La legislación depuradora	286
8. 3. 3. Formación de los Expedientes	291
8. 3. 4. Resultados del proceso depurador	299
8. 3. 5. Valoración del proceso depurador del Magisterio segoviano	300
8. 4. El Proceso depurador en la Diputación Provincial	303
8. 4. 1. Los recursos	308
8. 5. La depuración en el Ayuntamiento de Segovia	309
8. 5. 1. Los recursos	313
9. LA COACCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS Y LA VIOLENCIA SIMBÓLICA	315
9. 1. La intimidación	315
9. 1. 1. Intimidación física	315
9. 1. 2. Intimidación psicológica	317
9. 1. 3. Coacción económica	321
9. 2. La religión como coacción	323
9. 2. 1. La vigilancia de las buenas costumbres	327

III. CONCLUSIONES	331
10. 1. El amplio espectro represivo	333
10. 1. 1. La represión "ilegal"	333
10. 1. 2. La represión "legalizada"	335
10. 1. 3. Las responsabilidades políticas	336
10. 1. 4. La depuración de la administración	337
10. 1. 5. La represión de la conducta	337
10. 2. Las responsabilidades	338
10. 2. 1. El Ejército	339
10. 2. 2. Las autoridades civiles. La colaboración de los alcaldes en la represión	341
10. 2. 3. El papel de la Magistratura	341
10. 2. 4. La colaboración de los particulares	342
10.3. La especial responsabilidad de la Iglesia en la legitimación de la violencia	345
10. 3. 1. Respaldo ideológico y moral a la sublevación	346
10. 3. 2. Participación y ocultamiento de la represión. Necesidad de la Violencia	348
10.4. Las consecuencias de la represión	352
10.5. Valoración final	355
BIBLIOGRAFÍA	363

ANEXOS

- Nº 1. Relación cronológica de víctimas de la represión "ilegal".
- Nº 2. Relación cronológica de víctimas de la represión "legalizada".
- Nº 3. Mapas de la represión.
- Nº 4. Calendario de la represión.
- Nº 5. Identificación de las víctimas según diversas variables.
- Nº 6. La vida en las prisiones de Franco.
- Nº 7. Relación de ejecutados sin proceso.
- Nº 8. Relación de fusilados por sentencia de consejo de guerra.
- Nº 9. Censo de afectados por el procedimiento de responsabilidad civil.
- Nº 10. Censo de afectados por los procesos de responsabilidades políticas.
- Nº 11. Censo general de afectados por los procedimientos depuradores.
 - a) Cuadro resumen del proceso depurador en la Diputación Provincial.
 - b) Cuadro resumen de la depuración en el Ayuntamiento de Segovia.
- Lista de testimoniante orales

Reproducciones documentales

- Informe de la Guardia Civil sobre los hechos de Prados.
- Orden del general Saliquet sobre enterramientos de cadáveres.
- Órdenes de traslado de presos.
- Expediente de desaparición de Pedro Natalías.
- Listado de partidos y sindicatos declarados fuera de la ley por el D.108.
- Sumario de posguerra.

Abreviaturas utilizadas en este trabajo

AGA	Archivo General de la Administración
AGM	Archivo General Militar
AHN	Archivo Histórico Nacional
Apdo.	Apartado
Arch.	Archivo
Arch. Mun.	Archivo Municipal
Arch. Prov.	Archivo Provincial
Art.	Artículo
BOE	Boletín Oficial del Estado
BOOS	Boletín Oficial del Obispado de Segovia
BOP	Boletín Oficial de la Provincia
C.	Caja
Cir.	Circular
Cir. Gob. Civ.	Circular Gobierno Civil
CJMil	Código de Justicia Militar
Cmte.	Comandante
Cons.	Considerando
CPIB	Comisión Provincial de Incautación de Bienes
Cpta.	Carpeta
Det. gub.	Detenido gubernativo
Dip. Prov.	Diputación Provincial
Disp. Trans.	Disposición Transitoria
Dpto.	Departamento
Ed.	Editor
Epis.	Episcopal
Exp. Dep.	Expediente de depuración
Exp. Desap.	Expediente de desaparición
Exp. fall.	Expediente de fallecimiento
Exp. Resp. Civ.	Expediente de responsabilidad civil
Exp. Resp. Pol.	Expediente de responsabilidades políticas
Extr.	Extraordinario
FE	Falange Española
GMN	Glorioso Movimiento Nacional
Gob. Civ.	Gobierno Civil
Gob. Gen.	Gobernador General
HP	Hechos Probados
INE	Instituto Nacional de Estadística
Ins.	Inscripción
I.R.	Izquierda Republicana
J.	Justicia
J. 1ª Ins.	Juez de Primera Instancia
J. Ins.	Juez Instructor
JDN	Junta de Defensa Nacional
Jgdo. 1ª Ins.	Juzgado de Primera Instancia
JSU	Juventud Socialista Unificada
JTE	Junta Técnica del Estado
LAJD	Libro de Acuerdos de la Junta de Disciplina
Leg.	Legajo
LOD	Libro de Órdenes de Dirección
MN	Movimiento Nacional
O.	Orden

OM	Orden Ministerial
Op. cit.	Obra citada
Pág.	Página
Prov.	Provincial
Reg. Civ.	Registro Civil
Res.	Resultando
Resp. Pol.	Responsabilidades Políticas
Sec.	Secretario
Sec. Gen.	Secretaría General
SGM-DNP	Secretaría General del Movimiento-Delegación Nacional de Propaganda
Sto./Sta.	Santo/Santa
TNRP	Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas
TRRP	Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas
Univ.	Universidad
U.R.	Unión Republicana
Vol.	Volumen

INTRODUCCIÓN

A. Objetivos de este estudio

En los albores del siglo XXI, la investigación histórica sobre los orígenes y la implantación efectiva de lo que fue el régimen del general Franco sigue mostrando su completa vigencia, una abundancia notable de trabajos y el interés que el asunto despierta. Gran parte de tales estudios insiste, como no podía ser de otra manera, en el componente represivo que esos orígenes, implantación y desarrollo del régimen mantuvieron siempre, represión ejercida no sólo sobre los adversarios políticos del régimen -los vencidos en la guerra civil- sino sobre la totalidad de la población, de tal forma que Francisco Moreno ha escrito: *“la represión fue de tal envergadura que constituyó la base misma del régimen, y éste en tanto subsistió en cuanto mantuvo afiladas las armas represivas. Nos hallamos pues ante la gran página negra del franquismo, ante su elemento definitorio de primer orden y, si apuramos un poco, ante uno de los principios fundamentales del movimiento”*¹.

La represión franquista durante la guerra civil continúa siendo objeto de estudio por parte de los historiadores, fundamentalmente porque es un tema que no se ha esclarecido en su totalidad. Aunque existe ya una abundante bibliografía sobre algunos temas específicos como la represión física, otros -como el control social, la depuración o la incautación de bienes-, aún no han sido estudiados en su totalidad. Al mapa de la represión franquista todavía le faltan varias provincias por investigar y realizar el censo de represaliados durante la guerra, como se ve en el trabajo coordinado por Santos Juliá, *Víctimas de la guerra civil*², donde se recogen los estudios parciales ya publicados.

En este sentido, con el presente trabajo nos hemos marcado varios objetivos, de los que el primero es contribuir al esfuerzo global para completar dicho mapa. El segundo es revisar en profundidad los datos aportados por Ramón Salas Larrazábal en su obra *Pérdidas de la guerra civil*³, donde afirma que en Segovia hubo 147 víctimas por la represión franquista, cifra que se ha revelado claramente inferior a la real, pues demostraremos con nuestra investigación que hubo al menos 356 fusilamientos. El tercer objetivo propuesto es contribuir a que el estudio de la represión franquista deje de ser tabú para muchos ciudadanos e instituciones y se pueda tratar abiertamente para conseguir la superación definitiva y positiva de la guerra civil, pues, a nuestro modo de ver, el no esclarecimiento total de la represión franquista es un aspecto fundamental que impide esta superación.

Pretendemos abordar el estudio de la utilización de todas las variantes de la violencia puestas en marcha para conseguir la implantación del franquismo en la provincia de Segovia. En esta provincia se produjo de forma paralela la destrucción de la democracia republicana y la instauración del nuevo régimen. Ambos procesos se iniciaron con la sublevación de la guarnición de Segovia, en la mañana del domingo 19 de julio y se desarrollaron de una forma violenta. Hemos analizado la represión física, en sus dos vertientes “ilegal” o “en caliente” (no utilizamos el término “incontrolada” porque en todo momento la autoridad militar dominaba y controlaba toda la provincia), como denominamos a las ejecuciones sumarias; y la violencia legal o legalizada, fruto de la aplicación de la legislación militar a través de los consejos de guerra, que condenaban a prisión o a muerte. De igual modo estudiamos la represión económica, en sus dos fases de responsabilidad civil -D. 10 de enero de 1937- y responsabilidades políticas -Ley de 9 de febrero de 1939-; la depuración administrativa y la represión formal o violencia simbólica.

¹ MORENO GÓMEZ, Francisco, *Córdoba en la posguerra (La represión y la guerrilla, 1939-1959)*. Francisco Baena, Córdoba, 1987, pág. 17.

² JULIÁ, Santos, coordinador, Julián CASANOVA, Josep M. SOLÉ I SABATÉ, Joan VILARROYA y Francisco MORENO. *Víctimas de la guerra civil*. Temas de hoy, Historia, Madrid, 1999, págs. 411-412.

³ SALAS LARRAZABAL, Ramón. *Pérdidas de la guerra civil*. Planeta, Barcelona, 1977.

La tesis que ahora presentamos tiene su origen en el trabajo de investigación presentado en esta misma Facultad el año 2000 bajo el título *La represión "ilegal" en Segovia durante la guerra civil, 1936-1939*, en el que abordábamos exclusivamente la represión sumaria, aunque la pretensión inicial era realizar un estudio general sobre la represión franquista en la provincia de Segovia que incluía la represión penal (consejos de guerra), económica (incautación de bienes) y administrativa (depuración de funcionarios). Partiendo de esta base general y del conocimiento de algunos casos de ejecuciones sumarias aisladas aquella investigación fue profundizando en ese único aspecto y concretó su objeto al estudio de la represión ilegal.

Combinamos entonces la consulta de los registros civiles de la provincia (libros de defunciones desde julio de 1936 hasta la actualidad) con la búsqueda de testigos en las distintas localidades. Una vez realizado y presentado dicho trabajo, abordamos la ampliación de todos los aspectos represivos. A la investigación previa hemos añadido, entre otra documentación, el estudio de los consejos de guerra, los expedientes de depuración, los expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas y los expedientes personales de los presos, para conseguir la visión general de la represión franquista.

La naturaleza de la represión

Hemos estudiado los numerosos casos de ejecuciones sin procesamiento ni procedimiento judicial previo que ocurrieron durante la guerra civil en Segovia, así como los fusilamientos precedidos y ordenados por un Consejo de Guerra. La jurisdicción militar aplicaba unas normas y decretos dictados desde Burgos, lo que implica una legalidad, que podríamos calificar de ilegítima y autoritaria, pero, a fin de cuentas, se trataba de la legalidad, aunque se tratara de la impuesta por los militares sublevados contra el Estado de Derecho. A pesar de que el resultado de ambos métodos represivos es la muerte, no pertenece a la misma categoría legal la ejecución en un descampado por una escuadra de falangistas tras una saca, que el fusilamiento oficial tras un juicio sumarísimo, aunque éste no fuera más que una farsa. Ambos procesos represivos pretendían el mismo fin -la eliminación del adversario político- pero no eran exactamente iguales en cuanto al procedimiento, si bien se desarrollaron de forma paralela durante los primeros meses de contienda.

Como escribe Tuñón de Lara, los militares se sublevaron asesinando y, al igual que en el resto de la España nacionalista, durante los primeros meses de la contienda se produjeron en la provincia de Segovia acciones represivas para consolidar de una manera efectiva la sublevación puesta en marcha en la capital durante la mañana del día 19 de julio. Este modo de represión ahora estudiado afectó a amplios sectores de la población segoviana que militaban o simpatizaban con los partidos republicanos y de izquierdas, o con los sindicatos de clase UGT y CNT. La represión fue ejercida, casi exclusivamente, por escuadras falangistas que recorrieron la provincia sembrando el terror entre la población.

El régimen de Franco utilizó y se sirvió de la violencia con el mismo fin que los regímenes fascistas pues, como afirma Casanova, *"sin necesidad de declararse fascistas lograron las mismas metas que esos regímenes a los que tanto admiraban"*⁴. La violencia cumplió su función social en la resolución de los conflictos sociales sirviendo a los intereses del bloque dominante y estaba planificada previamente con unos objetivos predeterminados.

La ideología que subyace en la represión franquista respondía a distintas concepciones: represión de clase y castigo a los trabajadores reivindicativos. También servía como demostración de la recuperación del poder de la burguesía ante la fuerza

⁴ CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENGA, Pilar y SALOMÓN, Pilar; *El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)*. Siglo XXI, Madrid, 1992, pág. 216.

cobrada por el movimiento obrero durante la República, para “*extirpar los males de la patria*”, el exterminio, la eliminación del adversario y la ejecución de la venganza. Los objetivos de la represión franquista eran evidentes: la ejemplarización –que se conseguía mediante dos vías, por un lado con la selección de las víctimas y, por otro, con la violencia indiscriminada, pero ambas enfocadas para que la sociedad en general tomara nota de lo que podía ocurrir a los adversarios- y la consolidación de la retaguardia dejándola libre de posibles enemigos. La clave fundamental de la imposición del nuevo régimen era la paralización por el miedo y el terror, sentimiento que se infundía no sólo a los adversarios políticos, sino también a los *tibios* afectos al movimiento que no mostraban la suficiente firmeza ante los adversarios.

Tipos de represión

Se ha abordado el estudio de la actuación de los tribunales militares en Segovia, pero, sólo hemos podido examinar dos sumarios completos, porque del resto se ignora su ubicación actual. Se han consultado 120 sentencias y conocemos parcialmente la existencia de 400 sumarios (de los que se han encontrado datos incompletos, bien el número, los encausados o alguno de ellos, las condenas, etc.). Con esta documentación hemos analizado los hechos perseguidos, los delitos por los que se juzgaba y las condenas impuestas, comprobando que la arbitrariedad se convirtió en norma de actuación en la justicia militar. También se ha corroborado que las penas de muerte se aplicaron a personas que no habían cometido delitos de sangre y que las penas de prisión eran absolutamente desproporcionadas, pues perfectamente un opositor podía ser condenado a 30 años por haber manifestado opiniones contrarias o descalificadoras de la sublevación militar.

Estrechamente relacionado con la justicia militar está el mundo penitenciario, que hemos afrontado a través de la consulta de los expedientes personales de los presos que pasaron por las prisiones de Segovia (más de 4.000, de los que 2.282 eran segovianos). También comprobamos que había tantos procesados judiciales como detenidos gubernativos –terminología aplicada a los presos que estaban a disposición de las autoridades militares, como prevención por su ideología contraria a los sublevados, pero sin estar sujetos a proceso judicial alguno y que podían permanecer meses o incluso años en la cárcel, sin llegar a ser procesados-. De igual modo analizamos, en los anexos, las duras condiciones de vida de las prisiones de Franco.

Otra manifestación de la violencia aquí tratada es la depuración de los adversarios políticos que desempeñaban su labor como empleados de la administración en sus distintas categorías (Estado, provincia o municipio), estudiada a través de la información que aparecía en los Boletines Oficiales del Gobierno de Burgos y de la provincia de Segovia. Para ilustrar mejor este aspecto de la represión administrativa hemos profundizado, estudiando los expedientes personales de depuración, en tres ámbitos concretos: el estatal, en la depuración del Magisterio primario, el provincial en la Diputación y el local en el Ayuntamiento de Segovia. De la documentación obtenida aportamos la cifra de 520 funcionarios depurados. Pero tan importante como el número de sancionados era la amenaza de depuración que se cernía sobre todos los empleados, ya fueran públicos o privados, puesto que en cualquier momento, fruto de una denuncia, se iniciaba un expediente depurador que podía originar la destitución del trabajador y con ella la miseria de su familia.

La represión económica en Segovia se llevó a cabo por medio de dos procesos consecutivos: responsabilidad civil y responsabilidades políticas. Desde el inicio mismo de la guerra las nuevas autoridades y las milicias nacionales incautaron los bienes de los adversarios. Este proceso se regularizó con el Decreto 108 de 13 de septiembre de 1936 y se completó con en el D. de 10 de enero de 1937, que concretó el procedimiento de responsabilidad civil, por el que se sancionaban ideas, actitudes o acciones anteriores a la

sublevación militar –por lo que eran perfectamente legales cuando se realizaron- en una aberrante vulneración del principio jurídico básico de la irretroactividad penal. En este proceso se vieron afectados 333 segovianos o residentes en Segovia.

Antes de la finalización de la contienda, el Gobierno de Burgos dictó la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, que pretendía extender la represión – económica, política y contra la libertad de residencia- a todos los adversarios durante la guerra, a los que se añadían también los que hubieran dirigido, militado o apoyado a cualquier partido del Frente Popular. Con ello se consolidaba la vulneración de la irretroactividad penal. Esta ley pretendía sancionar a todos los adversarios, fueran dirigentes o militantes de base, alcaldes o jueces de paz, diputados o simplemente apoderados en las elecciones de febrero de 1936, que hubieran desarrollado su labor política en la capital o en la localidad más pequeña de la provincia.

Este deseo del Estado franquista de reprimir con la Ley de Responsabilidades Políticas a todos los adversarios se vio frustrado porque la infraestructura creada al efecto por esta jurisdicción especial (Tribunal Nacional, Tribunales Regionales y Juzgados de Instrucción) se vio desbordada por la avalancha de expedientes que paralizaron las instituciones represivas. En 1942 se decretó una reforma para aligerar el volumen de expedientes. La documentación correspondiente a este proceso está incompleta, por lo que no se ha podido evaluar en su totalidad, si bien sabemos que hubo al menos 800 expedientes, de los que hemos podido conocer el resultado definitivo de 159. Del resto, la mayor parte fueron sobreseídos tras varios años de paralización procedimental.

Por último, afrontamos los diversos modos de represión psicológica que eran elementos fundamentales de la nueva realidad alrededor de los cuales se fue edificando el consenso que el régimen precisó para consolidarse tras una primera fase de imposición por el terror. En este apartado incluimos una serie de conductas desde el poder como la intimidación, las coacciones o la humillación constante a los adversarios, que se plasmaban en cualquier situación, desde la denominación de los nombres de las calles con los referentes de los vencedores, las placas de los *caídos* nacionales, los sellos de correos; a la práctica de la compra diaria o el abuso de poder de las nuevas autoridades, pasando por los cortes de pelo y el aceite de ricino. También incluimos la coerción religiosa como factor importantísimo de control social, pues la Iglesia Católica fue la institución que en mayor medida contribuyó a la socialización del régimen franquista. Desde el 19 de julio de 1936 en Segovia volvió a ser oficial -y casi obligatoria- la religión católica, retornaron las manifestaciones públicas multitudinarias de religiosidad a las que se vieron forzados a acudir los no practicantes, para evitar ser perseguidos o señalados como desafectos.

El papel de la Iglesia fue determinante en su apoyo a los sublevados y como garante y legitimador (*gran agencia legitimadora* dice Juliá) del nuevo régimen, otorgando *su legitimidad*, aunque otros hablan de justificación y no de legitimación. Como afirma Cifuentes “*su postura resultó ser decisiva no sólo para dar cobertura y justificación última a los procesos violentos desencadenados, sino para legitimar el triunfo posterior*”⁵. La implicación de la Iglesia en la represión es otro elemento a considerar, pues hubo sacerdotes en las ejecuciones y en las cárceles que no trataban de aminorar los castigos corporales o el sufrimiento físico: la exclusiva preocupación del clero por la otra vida les hacía olvidar las arbitrariedades de la justicia franquista. Por otro lado, los informes de los párrocos eran determinantes en el procedimiento de responsabilidades políticas, de depuración de los maestros o para la concesión de la libertad condicional.

Uno de los primeros obispos en mostrar la adhesión a la sublevación militar fue el prelado de Segovia, Luciano Pérez Platero, quien imploraba a comienzos de agosto de 1936: “*os rogamos que inspiréis a nuestros caudillos y jefes militares acierto en sus planes*”

⁵ CIFUENTES, J., op. cit., pág. 125.

*y fortaleza en la ejecución para llevar a cabo la empresa salvadora que tan desinteresada y gloriosamente ha empezado*⁶.

Todos los procesos represivos aquí estudiados tienen unas características comunes, entre las que destaca, en primer lugar, que servían al mismo fin: la eliminación o paralización de los adversarios –que representaban, en función de los resultados electorales de febrero, al menos la mitad de la población- para la implantación, y posterior consolidación, de un régimen antidemocrático que por las vías legales no se hubiera podido implantar nunca.

La arbitrariedad es otra peculiaridad común a todas las manifestaciones represivas. Era sabiamente administrada por las autoridades franquistas porque daba una dimensión más amplia a la represión, servía como medio de control social, obligaba a permanecer en tensión a toda la sociedad que sentía el peligro sobre sus cabezas, pues en cualquier momento una persona podía caer en desgracia y en aplicación de la ley franquista ser encarcelado, depurado o sufrir la incautación de sus bienes.

En los anexos incluimos la relación de represaliados por los distintos procedimientos represivos: los fusilados sin proceso y los ejecutados en aplicación de sentencia de consejo de guerra, apuntando lo que conocemos de cada caso particular, además de un análisis socioeconómico de las víctimas; las condiciones de vida en las cárceles, los empleados depurados y los segovianos sujetos a procedimiento de responsabilidad civil o política.

Los problemas historiográficos y sociales del estudio de la represión

A la hora de estudiar la represión: las ejecuciones sumarias o documentos como un consejo de guerra, un expediente de depuración o de incautación de bienes, en los que se condena por el simple hecho de profesar ideas contrarias, uno no puede por menos que *interpelarse* (en acertada expresión de Conxita Mir). La documentación y los hechos que se han estudiado son objetivos: las muertes, las cárceles, las depuraciones, las incautaciones, los cortes de pelo, etc, ocurrieron a unos segovianos que defendieron la legalidad republicana. Es incuestionable lo que sucedió a varios miles de segovianos. Se pueden relatar estos hechos de muchas formas, pero, de cualquier modo que lo contemos, en Segovia hubo 356 fusilados, más de 2.282 presos, 520 depurados, 1.063 segovianos sujetos a responsabilidades civiles o políticas, y la mayoría de la población estuvo sometida a unas rígidas normas de control social en materia moral, religiosa y de comportamiento cotidiano.

Este esfuerzo de recuperación histórica tropieza con el miedo de diversos sectores a que se divulgue la historia. Algunos esgrimen que investigar ciertos aspectos de la guerra y del franquismo es revanchismo o se hace con un fin vengativo. Pero como escribe Reig Tapia: *“¿Abordar la historia pasada, tratar la guerra civil de manera distinta a la empleada por la propaganda de la dictadura, es revanchismo? ¿Revanchismo de quiénes y ante quiénes? ¿Sacar a la luz la historia oculta de los vencidos y reivindicarlos ante la Historia (en la que figuraban como asesinos) es revanchismo?*⁷.

En la elección del tema de investigación no hay ningún espíritu de revancha. En nuestro ánimo tan sólo está la voluntad de realizar una investigación científica que no se ha hecho en Segovia, además del deseo de reivindicar a aquellos segovianos y segovianas que murieron por defender un sistema político democrático, la República, en la creencia de que traería consigo una sociedad más justa. Las víctimas de la guerra en Segovia, han permanecido en el anonimato durante más de 60 años, sin que nadie, ni políticos ni

⁶ Boletín Oficial del Obispado de Segovia (BOOS), nº 15, 14 de agosto de 1936. Pastoral: *El deber de todos en la hora presente*.

⁷ REIG TAPIA, A, *Ideología e Historia: sobre la represión franquista y la guerra civil*, Akal, Madrid, 1986, pág. 43.

familiares hayan hecho nada por rehabilitarlos. Es de justicia que salgan a la luz y que los segovianos y segovianas actuales conozcan el horror que también hubo en esta provincia.

Transcurridos veinticinco años desde la muerte de Franco y desaparecido su régimen político, todavía los investigadores chocamos con trabas en algunas instituciones. Aún quedan archivos cuya accesibilidad depende de las personas que los dirigen. Estos hechos dan idea de hasta qué punto se sigue considerando la guerra civil como un capítulo no cerrado de nuestra historia a pesar de haber transcurrido más de sesenta años desde que concluyó la lucha fratricida.

Los problemas con los que tropieza el investigador para estudiar la represión franquista nos hacen llegar a la conclusión de que la guerra civil aún no ha sido superada por toda la sociedad española, ni en el terreno institucional ni en el privado. Todavía no se pueden abordar abiertamente ciertos temas relacionados con la represión franquista durante nuestra contienda. Se utiliza siempre la manida excusa de no “abrir viejas heridas”, lo que quiere decir que “las viejas heridas” no han sido curadas, simplemente se han cubierto por el silencio y el olvido, y siguen estando ahí. Con ese pretexto se ha querido enterrar ese tema para no investigar responsabilidades, ni para restaurar tan siquiera el recuerdo de las víctimas. Éstas fueron completamente silenciadas, lo que parece lógico durante toda la dictadura, pero, sorprendentemente, también en las más de dos décadas vividas desde la muerte del general Franco. Se han hecho algunos merecidos, pero limitados, homenajes a los españoles que murieron por defender la legalidad republicana contra la sublevación militar, pero no se ha realizado un reconocimiento oficial de las víctimas de la represión franquista.

En muchas iglesias permanecen las placas con los nombres de los “*Caídos por Dios y por la Patria*”, ignorando de un modo vergonzoso a los otros muertos que también eran españoles. De toda la provincia de Segovia, sólo en Coca figuran en una placa los seis vecinos de la villa fusilados por ser militantes de la Casa del Pueblo y haber organizado los actos de oposición a la sublevación militar. En el resto de la provincia no ha habido el más mínimo acto, ni la más pequeña mención en recuerdo de aquellos segovianos defensores de la legalidad republicana. Ahora en Segovia se quiere subsanar esa injusticia con la colocación de la correspondiente placa en el edificio que albergó la *Cárcel Vieja* durante la guerra civil.

Otro detalle que denota claramente la no superación positiva de la guerra civil es que en la actualidad todavía permanecen las placas de numerosas calles y plazas alusivas a personajes o instituciones del bando vencedor de la contienda. En las cercanías del caserío de Prados, donde murieron un militar y cuatro obreros, una única cruz recuerda al primero, mientras que para los otros no hay nada. Aún ahora, cuando se habla tanto de que eran igualmente españoles los que luchaban en ambos bandos enfrentados, sólo se ven en las calles los referentes de uno de ellos, precisamente el que se sublevó contra la legalidad democrática e instauró una dictadura que se prolongó durante cuatro décadas.

En las provincias pequeñas se agravan aún más los problemas generados por la no superación de la guerra civil. En provincias como Segovia, donde “nos conocemos todos” cuesta más trabajo superar un trauma tan grande. Yo mismo mostré mi trabajo de investigación a un destacado personaje de la intelectualidad segoviana (afectado en su propia familia por la represión franquista), quien, a pesar de parecerle muy interesante el estudio y digno de ser publicado, vio las dificultades de hacerlo en estos momentos, por ser también de la opinión de que la guerra civil aún no está superada. Incluso jóvenes que conocen mis estudios sobre la represión consideran que es un tema poco apropiado y que puede “reabrir heridas”.

En algunas instituciones plantearon trabas de índole menor, pero en todas ellas se palpaba el malestar por el objeto de la investigación. El capellán del cementerio de Segovia aceptó de mala gana la decisión del Ayuntamiento de autorizar la consulta de los libros de enterramientos. Preguntaba para qué se sacaban ahora los temas de la guerra; para él no era conveniente “*desenterrar a los muertos de nuevo*”. De la misma opinión era el párroco

de La Granja. También ha habido algún secretario de Juzgado que no ha visto con buenos ojos la investigación y, alegando una “normativa reciente” que nunca llegaron a mostrar, decía que no se podían consultar los libros de defunciones de los registros civiles (que dependían de su autorización) sin una orden expresa del Juzgado de Primera Instancia o una solicitud por escrito. Ante mi insistencia, parece que los argumentos no eran tan incuestionables y terminaban facilitando los libros. Sin embargo, en los archivos militares, al contrario de lo que pensaba al principio de la investigación, no han puesto más dificultades que las de los largos trámites para conseguir la autorización y la imposibilidad de consultar parte de la documentación, porque no aparece.

B. La información histórica: las fuentes

Para la confección de este trabajo hemos utilizado fundamentalmente dos tipos de fuentes: orales y escritas. Las primeras se corresponden con los testimonios de familiares, vecinos, compañeros de presidio, etc. de las víctimas. Por su parte, las fuentes escritas empleadas han sido: documentales (libros de defunciones de los registros civiles, libros de enterramientos de los cementerios, y un variado elenco de expedientes personales: de desaparición o de fallecimiento, de depuración de personal funcionario, de incautación de bienes, de responsabilidades políticas, penitenciarios), bibliográficas y hemerográficas.

En la búsqueda de documentación se han echado en falta algunas fuentes importantes como las del Gobierno Civil de Segovia. Según nos informaron en esa dependencia, un incendio producido en los años 50 calcinó todos los documentos archivados: circulares; informes sobre detenidos, depurados e incautados; adhesiones al Movimiento Militar desde los primeros instantes de la sublevación; las órdenes de traslado de presos que originaron las sacas de las cárceles de Segovia, etc. También lamentamos profundamente la no aparición -pues no sabemos si realmente habrán desaparecido- los sumarios militares de la plaza de Segovia instruidos durante la guerra.

La documentación que hemos consultado en los distintos archivos es la siguiente:

1. Fuentes archivísticas

Archivo Histórico Nacional (Salamanca)

A través de la consulta de los ficheros de la Delegación de Recuperación de Documentos hemos comprobado los datos de algunos segovianos que habían pasado a zona republicana o allí les cogió la guerra, y fueron perseguidos por ello. En la sección de masonería descubrimos que no llegaban a seis los masones de Segovia en 1936, entre los que se encontraba el gobernador civil Chacón de la Mata y el que sería nombrado gobernador de Guadalajara, Miguel Benavides, dirigente local de Izquierda Republicana.

Archivo General de la Administración

En el AGA hemos analizado distinta documentación. Por un lado, los expedientes de depuración de los maestros de la provincia de Segovia. En ellos figuran los informes de párrocos, Falange Española, Gobierno Civil, y alcaldes, sobre la conducta del expedientado, que, a veces incluyen si el inculpado estaba preso, desaparecido o fusilado. También se ha examinado la documentación relativa a los procesos de incautación de bienes: informes de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Segovia a la Comisión Central y algunas sentencias de consejos de guerra que servían para iniciar el procedimiento de responsabilidad civil.

Archivo de la Fiscalía General del Estado

Se encuentra aquí la Causa General, informe de ámbito nacional distribuido por provincias en el que se describen todos los casos de represión atribuidos al bando

republicano. En el caso de la provincia de Segovia recoge 31 casos, entre los que se incluyen dos ejecuciones efectuadas por los falangistas.

Juzgados de Distrito y de Instrucción

Hemos consultado todos los Juzgados existentes en la provincia de Segovia: Cuéllar, Riaza, Sepúlveda, Santa María de Nieva y la propia Segovia. En ellos hemos encontrado expedientes de desaparición, expedientes de declaración de ausencia y expedientes de declaración de fallecimiento. En este tipo de documentación se recogen declaraciones de familiares y testigos, informes de autoridades civiles y militares, sobre las víctimas, autores, fecha y lugar de las ejecuciones. Son la fuente escrita que aporta los datos más completos sobre las ejecuciones sumarias. También localizamos en estos Juzgados algunos expedientes personales de incautación de bienes.

Prisiones Provinciales

Se han examinado los archivos de la Prisión Provincial de Segovia, que incluyen las cárceles de Cuéllar, Segovia y el Hospital Asilo Penitenciario de la capital; y en Pamplona los expedientes del Fuerte de San Cristóbal, donde fueron trasladados más de 100 presos de la provincia de Segovia en el año 1937, de los que muchos participaron en la famosa fuga de mayo de 1938⁸.

De la variada documentación existente, hemos analizado exhaustivamente los expedientes personales de los presos del Hospital Asilo y Prisión Provincial. En ellos figuran todas las vicisitudes penitenciarias de los presos (cuándo ingresaron en la cárcel, traslados a otras prisiones —entre los que figuran algunas órdenes de conducción que originaron las sacas-, compañeros de sumario, etc.) y algunos expedientes incluso contienen el testimonio de la sentencia.

Archivo de la Diputación Provincial

En la institución provincial hemos consultado los diarios oficiales: por un lado el *Boletín Oficial de la Provincia (BOP)*, donde aparecen todas las leyes, los decretos y demás disposiciones del Gobierno de Burgos, además de las circulares del gobernador civil, las requisitorias de los jueces citando a comparecer a los declarados *rebeldes* (unos muertos y otros huidos) por los distintos sumarios civiles y militares. Y, por otro, el *Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional* y posteriormente *Boletín Oficial del Estado*, donde se publicaban todas las leyes, decretos y demás disposiciones del Gobierno de Franco.

Además de los diarios oficiales, en el Archivo del convento de Santa Cruz, dependiente de la Diputación, se encuentran depositados los expedientes de depuración de los funcionarios de este organismo.

Archivos municipales

En los archivos municipales hay una variada documentación, de la que hemos estudiado -en Segovia, Carbonero el Mayor, Cuéllar, Sepúlveda, San Ildefonso y Villacastín- la correspondencia de los ayuntamientos con el Gobierno Civil. Entre estas misivas del Archivo de Sepúlveda y Cuéllar figuraban las relaciones de detenidos que ingresaban en las cárceles de dichas localidades, durante los primeros días de la guerra.

Los libros de algunas Sociedades Obreras (libros de actas y de socios) sólo se han encontrado en los archivos de Sepúlveda, Segovia y Carbonero el Mayor. Por su parte, en

⁸ La fuga del Fuerte de San Cristóbal se produjo el 24 de mayo de 1938. En ella participaron 796 presos que desarmaron a los guardias y se escaparon al monte, de ellos 207 murieron “*al resistir la acción de las fuerzas de recuperación*”, es decir, ejecutados donde eran sorprendidos; y otros 17 fueron fusilados tras ser juzgados como promotores de la fuga. Tan sólo tres alcanzaron la frontera francesa (uno de ellos el segoviano José Marinero Sanz). Hay un interesante trabajo sobre este hecho: SIERRA HOYOS, Félix, *La fuga de San Cristóbal. 1938*. Pamiela Argitaletxea, Pamplona, 1981.

el archivo de Segovia analizamos también los expedientes de depuración de los funcionarios del Ayuntamiento de la capital.

Archivo Episcopal

En el *Boletín Oficial de la Provincia de Segovia (BOOS)* se publicaban las disposiciones de la Iglesia, tanto las que emanaban del Vaticano como las de la propia diócesis.

Entre la correspondencia del obispo con los párrocos y arciprestes se encuentran los numerosos informes de los párrocos sobre la conducta de sus convecinos, que eran necesarios para múltiples fines: desde la depuración de maestros y demás funcionarios, hasta la obtención de libertad condicional o definitiva, pasando por la presentación a puestos de trabajo de la administración local o central.

Se han consultado también las partidas de defunción expedidas por cada parroquia y archivadas en el obispado. Aquí hemos comprobado que por norma general no se anotaban los fallecimientos por ejecución sumaria (incluso en localidades como Villacastín, de los diez fusilados el único inscrito no era vecino de la villa).

Archivo Provincial

En este archivo están depositados los fondos de la Audiencia Provincial de Segovia, que a su vez engloban distinta documentación:

- Expedientes personales de incautación de bienes. En ellos aparecen los correspondientes informes sobre conducta político-social de los expedientados, y, a veces, sobre dónde se encontraban: en libertad, presos o desaparecidos. También hemos encontrado en algunos las sentencias de sus consejos de guerra.

- Expedientes personales de responsabilidades políticas. Hay muy pocos completos, con información similar a los anteriores.

- Expedientes de desaparición y de fallecimiento que ya hemos explicado.

- Sumarios civiles por delitos contra la ley de Orden Público de 1933. Concretamente hemos encontrado cinco causas incoadas por actos cometidos antes de la declaración del estado de guerra, por lo que fue la justicia civil la encargada de su instrucción, aunque las actuaciones judiciales ya se produjeron iniciada la guerra⁹. En estos sumarios se procesaba a numerosos segovianos republicanos y de izquierda, a los que más adelante se emplazó a comparecer ante los tribunales, pero muchos de ellos habían muerto fusilados en los primeros meses de guerra o habían pasado a Madrid para defender a la República.

⁹ Los sumarios eran:

- 33/36, por colocación de explosivos y empleo de sustancias inflamables en el convento de los padres Carmelitas de la capital. Los citados son los destacados dirigentes obreros Manuel Bear y Celedonio González Ortega.
- 51/36, por delitos de atentado y desobediencia a los agentes de la autoridad. Se cita de nuevo a Manuel Bear, además de Félix Guantes y Francisco Polo.
- 75/36, contra Antonio Pascual Sabajanes, procesado por desorden público.
- 117/36, por sedición son citados: Alejandro González González, (a) Cartabón, Fernando Company Sanz, Alejandro González Gómez, Francisco Álvarez Matesanz, Alejandro Arranz Marinas, Gaspar Duque Serrano, Faustino Sidro Montañés, Francisco Polo Lázaro, José Peña Huertas, Manuel Serrano González, Paulino González González, Manuel Tamayo Benito, Nicolás Álvaro Lobo, Atilano-Félix Guantes Herrero, Manuel Bear Solana, Fermín Cristóbal López, Luis Rodríguez López, José Escudero y Nicolás Redondo. De ellos tenemos constancia de varios fusilados en agosto de 1936 (los subrayados).
- 122/36, por reunión ilegal a los vecinos de El Espinar y San Rafael: Mariano del Pozo Herranz, Hermenegildo del Pozo Herranz, Juan Gonzalo Sanz, Segundo Vázquez de las Heras, Hilario Vázquez Dorrego, Mariano María Postiguillo Gete, Basilio Muñoz Hontoria, Primitivo Pérez Campo, Salvador de la Iglesia Hernández, Secundino de las Heras Martín, Valentín Jiménez Marugán, Manuel Iglesias y Gregorio Rodríguez Mínguez.

Archivos Militares

Unidad de Apoyo al Comandante Militar de Segovia (UAPO). Ubicado en la Academia de Artillería, aquí se encuentran recogidos los sumarios castrenses de la provincia de Segovia desde el año 1940 hasta la fecha, a los que hay que añadir dos sumarios anteriores: el 109/36, sobre los sucesos de El Espinar y el 1377/38 sobre una red de espionaje republicano en Segovia. Del resto de sumarios correspondientes a la guerra no se ha podido averiguar donde se encuentran.

Archivo General Militar de Segovia: alberga todos los expedientes personales de los militares españoles desde el siglo XVIII hasta la actualidad, en sus categorías de suboficial y oficial.

Archivo Histórico Militar de Ávila: Contiene los fondos del antiguo Archivo de la *Guerra de Liberación* y engloba toda la documentación generada por los dos ejércitos enfrentados durante la guerra. Está organizado en dos bloques *Zona Nacional* y *Zona Roja* (en otra muestra más de la no superación de la guerra civil).

Los Registros Civiles

Hemos consultado los libros de defunciones (sección 3ª), donde se inscriben las anotaciones de defunción o desaparición. Los libros de nacimientos (sección 1ª) y de matrimonios (sección 3ª) se han utilizado para completar los datos personales de víctimas cuya defunción o desaparición no fue inscrita y que por testimonios sólo se conocían incompletos.

De las 211 ejecuciones sumarias comprobadas se han encontrado inscritas en los registros civiles 134 defunciones o desapariciones. Pero las anotaciones realizadas en los registros civiles no aportan todos los datos personales de los inscritos. Hay once casos de "*cadáveres sin identificar*"¹⁰. Hay otros muchos casos en los que los datos no son completos: falta la edad, la profesión, etc.¹¹. Por ejemplo, en las anotaciones efectuadas en los años ochenta no figura la profesión de la víctima.

De entre las anotaciones realizadas hay muchos casos dudosos, pues dichas anotaciones no aclaran lo suficiente las circunstancias de la muerte de los fallecidos. Puede haber muertes por accidente, ahogamientos en ríos, donde, por ejemplo, la causa de muerte es, a priori, violenta: "shock traumático", "colapso"; o en el frente, por "herida de bala" o "herida de arma de fuego" exactamente igual que si hubiera sido fusilado. Los datos obtenidos en los registros civiles, por tanto, no son definitivos. Tras las consultas de las fuentes oficiales, es necesario contrastar, con los posibles testigos o familiares, las circunstancias de la muerte.

Debido a que las inscripciones de fallecimiento se han hecho a lo largo de todos estos años, las comprobaciones de los libros de defunciones de los registros civiles han de hacerse hasta las fechas actuales. Es decir, hemos consultado los libros desde el mismo momento de la guerra hasta los años noventa, pues se han hecho inscripciones hasta la fecha por la aplicación del Real Decreto 2926 de 1 de diciembre de 1978¹².

Al igual que se han encontrado casos de fusilamientos realizados e inscritos en la provincia de Segovia, sobre vecinos de provincias limítrofes: Ávila y Valladolid¹³; han existido casos de segovianos ejecutados en dichas provincias, pero que hemos

¹⁰ En los Reg. Civ. de Cabezuela, (4); Anaya, (2); Torrecaballeros, (3); Escobar de Polendos (1) y La Lastrilla (1).

¹¹ Reg. Civ. de Ayllón, anotaciones de Desiderio Mateo y Juan Hernando.

¹² BOE, 15 de diciembre de 1978. Con este decreto se regulaba la tramitación de los expedientes de concesión de pensiones a los familiares de los españoles fallecidos como consecuencia de la guerra de 1936-1939 que no hubieran recibido ayuda económica previa, lo que les ocurría a todos los fallecidos por represión en la retaguardia franquista. Este decreto supone la aplicación del R.D. Ley 35/1978 de 16 de noviembre de 1978 (BOE, 18 de noviembre de 1978) que otorgaba la concesión de pensiones a los familiares de "*aquellas personas que sin haber participado en acciones de guerra, hubieran muerto violentamente por acción directa y consciente del hombre y de los que hubieran sido ejecutados durante la guerra de 1936 a 1939*".

¹³ Reg. Civ. de Villacastín y Martín Muñoz de las Posadas.

comprobado no han sido anotados en los registros civiles correspondientes: Laguna de Duero (Valladolid) donde fueron fusilados algunos vecinos de Cuéllar y Milagros (Burgos) donde testigos creen que ejecutaron a varios vecinos de Riaza.

Los Cementerios

A la falta de inscripción en los registros civiles, hay que añadir que la mayoría de los enterramientos de fusilados realizados en los cementerios se efectuaron sin ningún tipo de anotación. Y en los que están registrados no figuran todos los datos personales de los fallecidos. Por ejemplo, en el cementerio de Segovia se anota el 22 de julio de 1936 la sepultura de “*un guarda municipal, uno con mono azul, un manco de la mano izquierda y uno con pelo rubio*”¹⁴. Los cuatro procedían de El Espinar, y eran los milicianos fallecidos en el enfrentamiento de Prados del día 20¹⁵.

2. Las Fuentes Hemerográficas

Prohibida su publicación y saqueada la imprenta del semanario republicano *Heraldo Segoviano*, quedaron como únicas publicaciones locales permitidas durante la guerra, el diario conservador *El Adelantado de Segovia*, fundado en 1901 por el diputado de las derechas Rufino Cano de Rueda¹⁶ (aunque seguía siendo su propietario, desde 1931 estaba dirigido por su hijo Luis Cano Martín) y el semanario defensor de los intereses agrarios de la provincia, *La Ciudad y los Campos*, fundado y dirigido por el también diputado Juan de Contreras, de Acción Popular¹⁷. Lógicamente, en estas publicaciones aparecía muy poca información sobre la represión a los adversarios. Sólo apareció en el diario la noticia de la celebración de un consejo de guerra el 3 de agosto de 1936 y 3 fusilamientos en el mismo mes, con un total de 11 víctimas. A partir de entonces no hubo ni una sola referencia al respecto.

Desde octubre de 1936 se publicó *Falange*, semanario de la organización de Segovia. La mayoría de sus artículos eran editoriales de opinión sobre diversos temas: la guerra, la educación, la agricultura, etc. no hay apenas noticias concretas de hechos de la vida diaria, ni política ni social.

Además de estas publicaciones ceñidas al ámbito provincial se han consultado otros diarios como el *ABC* de Sevilla; *El Socialista*, *Claridad* y *El Herald* de Madrid, *El Pensamiento Navarro* de Pamplona y *El Norte de Castilla* de Valladolid, en los que no se han encontrado apenas datos sobre Segovia, pero sí han servido para tener una visión más general sobre la represión franquista.

3. Las Fuentes Orales

Para completar debidamente un estudio sobre la represión franquista se precisa, además de la consulta de las fuentes escritas, el trabajo de campo con entrevistas con los

¹⁴ Cementerio Municipal de Segovia, libro de enterramientos. Anotado el 22 de julio de 1936 la recogida de cuatro cadáveres procedentes de El Espinar.

¹⁵ Así se puede comprobar para Marcelino María y Braulio Romano que eran vecinos de El Espinar con las partidas de defunción de la parroquia de esta villa, en el Arch. Epis. Cpta. de licencias de defunción de El Espinar, 1936. Los otros dos fallecidos eran Alejandro Aranda y Pío Barbieri como se recoge en la hoja de enterramiento enviada al dtor. del cementerio de Segovia por el Cmte. J. Mil. del Jgdo. Mil. de Plaza, fechado el 21 de julio de 1936.

¹⁶ Rufino Cano de Rueda, además de diputado conservador independiente en las tres legislaturas republicanas, aunque adscrito a las derechas, y haber sido senador con la monarquía, era decano del Colegio de Abogados de Segovia y presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la provincia.

¹⁷ Juan de Contreras y Lopez de Ayala, marqués de Lozoya era el presidente y fundador de Acción Popular en Segovia, diputado a Cortes por esta provincia en 1933 y 1936. *La Ciudad y los Campos* oficialmente pasó de ser el órgano de expresión de Acción Popular Agraria a “defensor de los intereses agrarios” desde el 27 de junio de 1936. Dejó de publicarse el 24 de abril de 1937 a raíz de la unificación de FE con los tradicionalistas, despidiéndose con un editorial bastante crítico con otros sectores del nuevo régimen.

afectados directos de la represión o con familiares, amigos, compañeros y vecinos de los represaliados que nos ayuden a recomponer los hechos y las vivencias de aquella época.

En cuanto a la represión sumaria, si es difícil completar los datos oficiales de que se dispone, en el caso de los fallecidos no inscritos es mucho más complicado comprobar o completar los datos personales. Hay testigos que recuerdan únicamente el nombre de pila, el apodo, un apellido, donde trabajaba o si era forastero. Para esta labor hemos procurado entrevistar a lo largo de toda la provincia, al mayor número de testigos de aquella época, que fueran familiares o vecinos de fallecidos en estas circunstancias. Pero estos intentos han chocado con algunas dificultades, como la falta de testigos válidos, carencia en la que influyen varios factores que pasamos a analizar a continuación.

En principio, son pocos los testigos directos vivos como consecuencia lógica de los más de sesenta años que han pasado desde que se produjeron estos hechos. Los problemas físicos y psíquicos de algunos testigos de edad avanzada son muy variados (oído, vista, expresión verbal, parálisis, etc.) y fue la causa de que algunas entrevistas se aplazaran o se suspendieran. En la mayoría de las conversaciones había que preparar el terreno y empleábamos mucho tiempo en ello pues a los testimoniantes les gustaba narrar sus experiencias en el frente de batalla, sus vivencias en retaguardia, la vida en el pueblo, etc. Al final de la entrevista era cuando podíamos hablar de la represión: de las motivaciones (políticas, rencillas personales, rivalidad económica) de los fallecidos, de los verdugos y de los lugares de las ejecuciones. También tratamos de conocer las consecuencias de la represión (psicológicas, económicas, políticas).

En algunas ocasiones realizamos entrevistas colectivas de compañeros, vecinos o familiares de las víctimas. Estas conversaciones resultaron muy positivas porque entre ellos surgían más datos, iban complementándose unos con otros. Sin embargo, en ocasiones el diálogo se entorpecía pues los testimoniantes rivalizaban a la hora de narrar sus vivencias personales.

Por otro lado están las personas que, manteniendo las facultades físicas y psíquicas en perfectas condiciones, no quieren ni oír hablar del tema, y eso, en opinión de este investigador, es una consecuencia psicológica de la represión franquista que aún no se ha superado. Ese miedo se palpaba también en algunas entrevistas, pues varios testigos insistieron en que su nombre no apareciera en ningún escrito, otros directamente no decían su nombre. Los sentimientos generalizados de miedo se agravan en Segovia, pues ésta siempre ha sido una provincia mayoritariamente conservadora, hecho éste que ejerce una gran presión sobre la población, incluso la más progresista. Para las entrevistas con los testigos era imprescindible en muchos casos que el investigador fuera avalado por un familiar o conocido del propio testigo, de lo contrario, no era recibido.

En total hemos realizado 148 entrevistas (como se recoge al final de este texto) a personas cercanas: hermanos, hijos, nietos, amigos o compañeros de la mayoría de las víctimas de la represión franquista que han aportado datos personales, profesionales, político-sindicales de los represaliados, de sus ejecutores, de las causas que pudieron provocar aquellos hechos (nunca justificarlos), de las consecuencias,... Se ha intentado hablar, al menos, con un familiar de cada fusilado del que se han tenido noticias. Lo que no se ha podido conseguir totalmente pues algunos hermanos, hijos o cónyuges se han negado a hablar con el investigador¹⁸. Por otro lado, hay víctimas que no tienen familiares o éstos se encuentran fuera de Segovia.

C. Fuentes Bibliográficas

En lo que se refiere a la bibliografía sobre los distintos ámbitos de la represión, existe una gran diversidad de estudios y distinta profundidad en función del campo. Por ejemplo, en cuanto a represión física -el censo de represaliados-, se han realizado trabajos

¹⁸ Hijo de Pedro Alonso, hermana de Licinio Antón, hermana de Antonio Hernanz, etc.

sobre la mitad de España, destacando las carencias de éstos sobre Castilla y León (sólo se ha realizado sobre Soria y Valladolid¹⁹, a los que recientemente añadimos una tesis doctoral sobre León) y Galicia. La obra *Víctimas de la guerra civil* ofrece una valoración y resumen de lo investigado hasta 1999 tanto sobre la represión republicana como sobre la represión franquista.

Indudablemente hemos de rendir tributo a los trabajos teóricos de Reig Tapia sobre la ideología de la represión. Es fundamental su obra ya citada *Ideología e historia: sobre la represión franquista y la guerra civil*, en la que estudia comparativamente la represión realizada en los dos bandos enfrentados, analizando, a través de las declaraciones de los dirigentes de ambas zonas, la ideología de la violencia que la sustentaba. También es de justicia reconocer la labor pionera de los estudios de Solé y Sabaté y Francisco Moreno sobre la represión en Cataluña y Córdoba, respectivamente²⁰. Tras ellos han llegado otros trabajos importantes entre los que destacamos a Manuel Ortiz (Albacete), M. Ors (Alicante) y el ya referido sobre Aragón coordinado por Julián Casanova²¹.

En el terreno de la represión económica no existe todavía una extensa bibliografía. Fue pionero en la investigación de las responsabilidades políticas Glicerio Sánchez con su estudio sobre el partido de Monóvar (Alicante), pero hubo que esperar más de diez años para que Conxita Mir publicara su estudio sobre la provincia de Lleida y Álvaro Dueñas su tesis doctoral sobre Madrid. A estas obras hay que añadir algunos artículos de revista realizados sobre Granada, Soria y la Generalitat de Catalunya²².

En cuanto a la depuración, los estudios más numerosos y exhaustivos se han realizado sobre los maestros, en concreto sobre las provincias de Burgos, Valladolid, León y País Vasco (un trabajo sobre Segovia está a punto de salir), además del brillante estudio comparativo de 11 provincias elaborado por Morente Valero²³. Otros trabajos se han hecho sobre grupos profesionales más concretos, como diplomáticos, catedráticos de Universidad o el *Canal de Isabel II* de Madrid²⁴.

¹⁹ HERRERO Balsa, Gregorio y HERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio, *La represión en Soria durante la guerra civil*, editada por los autores, Soria, 1982; y MARTÍN JIMÉNEZ, Ignacio, *La guerra civil en Valladolid (1936-1939)*. *Amaneceres ensangrentados*, Ámbito, Valladolid, 2000.

²⁰ SOLÉ I SABATÉ, J. M., *La represión franquista en Cataluña 1938-1953*, Editado por 62, Barcelona, 1985; y MORENO GÓMEZ, Francisco, *La guerra civil en Córdoba (1936-1939)*. Alpuerto, Madrid, 1985.

²¹ ORTIZ HERAS, Manuel, *Violencia política en la II República y el primer franquismo. Albacete 1936-1956*, Siglo XXI, Madrid, 1996; ORS, M., *La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1945)*, Institut de Cultura Juan Gil Albert, Alicante, 1995; y CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENGA, Pilar y SALOMÓN, Pilar, *El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)*, Siglo XXI, Madrid, 1992.

²² SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, *Las Responsabilidades Políticas en la posguerra española. El partido judicial de Monóvar*. Universidad de Alicante, Alicante, 1984; MIR CURCO, Conxita y otros, *Repressió econòmica i franquisme: L'actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la provincia de Lleida*, L'Abadía de Monserrat, Barcelona, 1997; ÁLVARO DUEÑAS, Manuel, Tesis doctoral "Por Ministerio de la ley y voluntad del Caudillo". *La jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas*, Universidad Autónoma de Madrid, 1997.

GIL BRACERO, Rafael, *La justicia Nacional y el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Granada. Las fuentes y las primeras conclusiones*, Jornadas sobre la Administración de Justicia durante la Guerra Civil Española: Instituciones y fuentes documentales, M. Cultura, Madrid, 1990; FRÍAS RUBIO, Ana Rosa, *El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Soria, 1939-1959*, Revista de Investigación en Geografía e Historia del Colegio Universitario de Soria, vol. XI, nº 3, 1991-1992; y PRATS DE LA IGLESIA, Rosa María, *Represión económica de la posguerra: la Ley de Responsabilidades Políticas contra la Generalitat Republicana: una aproximación*. En TIEMPOS DE SILENCIO, Actas del IV Encuentro de Investigadores del Franquismo, Universidad de Valencia, 1999.

²³ ÁLVAREZ OBLANCA, Wenceslao, *La represión del posguerra en León. Depuración de la enseñanza, 1936-1943*, León, Santiago García ed., 1986; CRESPO REDONDO, J. y otros, *Purga de maestros en la Guerra Civil*, Ámbito, Valladolid, 1987; OSTEOLAZA ESNAL, Maitane, *El garrote de la depuración. Maestros vascos en la guerra civil y el franquismo (1936-1945)*, Ibaeta Pedagógica, San Sebastián, 1996.

DUEÑAS, María Jesús, *La enseñanza Primaria en Valladolid durante la Segunda República y la guerra civil, 1931-1939*, Valladolid, 1998. Tesis doctoral inédita.

MORENTE VALERO, Francisco, *La escuela y el Estado Nuevo: la depuración del magisterio nacional (1936-1943)*, Ámbito, Valladolid, 1997.

²⁴ CASANOVA GÓMEZ, Marina, *Tribunales de depuración de funcionarios diplomáticos durante la guerra civil en zona franquista*, en AA.VV. *Justicia en Guerra. Jornadas sobre la Administración de Justicia durante la Guerra Civil Española: Instituciones y fuentes documentales*; SEARA VALERO, R., *La guerra civil y sus consecuencias en la Universidad Española. Represión y depuraciones en el cuerpo de catedráticos de las facultades de medicina*, tesis inédita, Dpto. Hª de

Agradecimientos

En una investigación prolongada y prolija como la presente, se contraen siempre una cantidad de deudas con personas e instituciones, sin cuyo apoyo el éxito final del trabajo no habría sido posible. Quisiera expresar aquí mi agradecimiento a las personas y entidades de las que he recibido esa ayuda. Con respecto al trabajo en fuentes documentales, las facilidades fueron decisivas en la mayoría de los centros utilizados. Desearía expresar mi reconocimiento al personal del Archivo General de la Administración, del Archivo Histórico Nacional, en Salamanca; de los Archivos Municipales de Segovia, Cuéllar, Sepúlveda, Carbonero el Mayor, Villacastín, San Ildefonso; del Archivo de la Diputación de Segovia; de los Archivos Militares de Ávila y Segovia; de las Prisiones de Segovia y Pamplona; de los Archivos Judiciales de Segovia, Santa María, Cuéllar, Sepúlveda y Riaza; del Archivo Episcopal, del Cementerio Municipal de Segovia y de *El Adelantado de Segovia*. También hemos de reseñar las facilidades que se nos dieron en la mayoría de los más de un centenar de Registros Civiles consultados de la provincia. Igual agradecimiento merecen los profesores de los que he consultado sus trabajos inéditos, cuyos textos me han sido de gran utilidad: González Calleja, Vicente Gabarda, Álvaro Dueñas y Jesús Pastor.

Los testigos que han aportado sus vivencias personales, en muchos casos venciendo temores, superando emociones que todavía les despiertan los recuerdos por el dolor de la pérdida de familiares o los padecimientos en las cárceles, han sido parte esencial de nuestra información. La lista de testimoniante aparece al final de este trabajo. Quisiera expresar, pues, mi agradecimiento más sincero para todos ellos. Cada uno ha aportado datos, a veces no importantes en sí mismos, pero que llevaron a otros testimonios que sí han proporcionado los datos definitivos. También fueron fundamentales en la transmisión de sentimientos y percepciones de esta época crucial de la Historia de España. Asimismo agradezco la colaboración de los familiares de los testigos que han facilitado las entrevistas y han abierto sus casas a un desconocido. De igual manera otras personas han facilitado documentación personal de sus familiares: Pedro Sanz, Antonio Linaje y Carmen Arranz.

Muchas personas me han prestado una colaboración inestimable facilitando entrevistas o compañía al realizarlas. Quiero agradecer estas tareas a Eliseo Vega, Ladislao González, Carlos de Miguel, Nicolás Berzal, Honorio Muñoz, Pedro López, Alejandro González, Juan Antonio Cerezo. Por otra parte, entre estos testimoniante hay algunos que han tenido particular influencia sobre mi trabajo debido a la hondura de sus vivencias, a la tenacidad de su lucha de toda la vida por una sociedad más justa, o porque he tenido la suerte de haber hablado más con ellos que con otros. Muchos de ellos han sido militantes del PCE hasta que han extinguido sus vidas. Las personas de las que guardo un recuerdo imborrable son: Silvestre Ramos, Teófilo García, Liborio López, Antonio Gil, Juan Quinzano, Carmen Arranz, Isidoro Romano, Cipriano Herrero, Fausto Pérez, Nicolás Berzal, Daniel Cristóbal.

Numerosas otras personas de mi entorno familiar y social han tenido una labor de apoyo y ayuda que no podría dejar de valorar aquí en lo que merece y que ha sido mucho más decisiva de lo que sin duda creen muchas de esas personas. Vaya para todas ellas mi reconocimiento también y no querría dejar sin mención expresa a mi querida Rosa, apoyo infatigable, mis padres y hermanos por toda clase de ayudas materiales, físicas y apoyo moral, y, principalmente, la paciencia de escucharme cuando les hablaba de mi único tema, para mí era apasionante, pero imagino que para ellos no lo sería tanto.

Por fin, gracias a amigos como Pedro Llorente, que elaboró mapas para este trabajo, y especialmente a José Luis Martín, que fue el “culpable” de la elección del tema

la Medicina Universidad de Granada, 1986 y MINGO BLASCO, J. A. *Las depuraciones laborales en el primer franquismo: el canal de Isabel II*. Comunicación al I Encuentro de Investigadores del Franquismo. Barcelona, noviembre 1992.

de investigación y acompañante fundamental en numerosas excursiones por la provincia a la búsqueda de testimonios, lector y paciente corrector del trabajo de investigación. Gracias extensivas a Jesús Pastor y Teresa Velasco, que también han sido lectores y correctores indispensables.

Como es natural, este capítulo debe acabar con un reconocimiento expreso de la labor del director de esta Tesis, el Profesor Julio Aróstegui que me ha aportado siempre junto a sus conocimientos una especial muestra de paciencia y atención desde el momento en que aceptó mi propuesta y la dirección de la investigación. Su peculiar modo de motivación ha hecho que me haya esforzado más y no se haya presentado el decaimiento ante las dificultades.

Pero, este párrafo de desahogos afectivos y cumplimiento con quienes fueron apoyos decisivos, no debería dejar de ser continuado con algunas apreciaciones menos felices, menos frecuentes, y mucho menos complacientes, desde luego, acerca de las dificultades que una investigación de este tipo comporta, derivadas de la persistencia de mentalidades y actitudes que deben ser denunciadas en un lugar como éste.

La investigación de la guerra civil y de sus consecuencias sociales y morales tropieza aún hoy, a pesar de los años transcurridos desde el final del régimen de Franco, con dificultades que nadie sospecharía antes de entrar en contacto con el asunto. Todavía chocamos con algunas personas que no quieren que se estudie la represión franquista. Algunos organismos oficiales de la administración encargados de la custodia de documentos históricos -concretamente la Audiencia Provincial- personificada en la secretaria y secundada por el director del Archivo Provincial, impidieron sistemáticamente, en reiteradas ocasiones, la consulta de la documentación generada por la Administración de Justicia (sumarios civiles, expedientes de fallecimiento y de responsabilidades políticas) y la Comisión Provincial de Incautación de Bienes (expedientes personales).

En principio, como cualquier otro investigador, se solicitó a la dirección del archivo la correspondiente autorización para su consulta, a lo que el director respondió que, al ser material sensible y todavía vivir algunas de las personas afectadas o familiares de las mismas, era necesaria la autorización expresa de los interesados, quizá seguramente en la creencia de que no conseguiríamos ninguna. Al cabo de cierto tiempo conseguimos aportar nueve autorizaciones, pero ya no era suficiente presentar la autorización ante el director del archivo, éste había cambiado los requisitos: ahora consideraba necesario adjuntarlas a una solicitud dirigida a la presidencia de la Audiencia Provincial de Segovia, pues según el criterio de aquél, la institución judicial era la titular de los fondos de los que el archivo era simple depositario, sin autoridad sobre ellos.

La respuesta de la secretaria de la Audiencia fue negativa, por lo que hubo que recurrir, no sin antes solicitar una entrevista con el presidente de la Audiencia, quien dio buenas palabras pero delegó en la secretaria, que volvió a denegar la autorización. La argumentación esgrimida para la negación del pertinente permiso era, en nuestra opinión, un tanto trasnochada, pues según las palabras de aquélla, los fondos a consultar recogían *“actuaciones diversas que afectan aún de manera especialmente sensible en el reconocimiento o por el contrario en la desconsideración absoluta social, en definitiva, al honor y ponderación social por parte de sus conciudadanos”*²⁵. Es curioso observar cómo veinte años después estas razones son de índole similar a las excusas que se dieron a Reig Tapia cuando le negaron en 1979 el acceso a los fondos del Servicio Histórico Militar *“...dado lo relativamente poco tiempo transcurrido no hace aconsejable dar aún el calificativo de histórico a tal acontecimiento (guerra civil), máxime teniendo en cuenta que muchos de sus protagonistas viven todavía en la actualidad”*²⁶.

²⁵ Resolución del acuerdo de la Audiencia Provincial de Segovia, con fecha 31 de julio de 1998, denegando el permiso solicitado por este investigador.

²⁶ REIG TAPIA, A., op. cit., pág. 24.

Ante esta segunda negativa no quedaba más opción que el recurso ante el Consejo General del Poder Judicial para que amparase el derecho del investigador a la consulta de los fondos solicitados. El Consejo dictaminó conforme a la ley autorizando la investigación, pero poniendo en manos de la secretaria de la Audiencia el mecanismo de consulta. Ésta, en un último intento de entorpecimiento de la investigación, ha prohibido realizar copias de la documentación consultada. Semejante decisión de la secretaria fue tomada en su literalidad por el director del Archivo Provincial quien impide fotocopiar documentos en los que aparezcan datos personales.

PRIMERA PARTE:
LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN

Mapa nº 1: La provincia de Segovia



1. LOS ANTECEDENTES. LA PRIMAVERA DEL 36 EN SEGOVIA

Algunas manifestaciones de la violencia desatada a partir de la sublevación militar del 19 de julio en la provincia de Segovia pueden ser explicadas por actitudes o hechos acontecidos en los meses previos, o incluso años, y que vamos a tratar de analizar en este capítulo.

La II República en Segovia aún no ha sido estudiada en profundidad, hemos de lamentar que existe un vacío bibliográfico sobre este periodo. Sólo han sido publicados tres artículos pertenecientes a distintas tesis doctorales que, desgraciadamente, no han visto la luz²⁷. Aparte de ellos, existen unas breves reseñas de esta época en una limitada Historia de Segovia²⁸ y en la obra de Juan de Contreras sobre la sublevación militar en Segovia²⁹. En este trabajo nos vamos a ceñir (porque no es nuestro objetivo hacer una Historia de Segovia durante la II República) al análisis de la evolución política y social de esta provincia desde las cruciales elecciones del 16 de febrero de 1936, porque además, las claves más importantes para comprender algunas manifestaciones de la violencia, los protagonistas y sus víctimas, cobran especial relevancia durante estos meses de febrero a julio.

1. 1. Segovia: una provincia diversificada

Antes de analizar y desarrollar el objeto de nuestras investigaciones, conviene situar la provincia de Segovia geográficamente, en sus aspectos físico y humano. Hablamos de una provincia con una extensión de 6.949 km², lo que la sitúa como la más pequeña de Castilla y León. Está emplazada a 90 kilómetros de Madrid, hecho que influye de un modo determinante en la vida de Segovia. En los años treinta ya había comunicación diaria con la capital de la República, tanto por ferrocarril como por carretera. Quedaba Valladolid un poco más lejana –a 109 km.- y con menores posibilidades de comunicación, pues la vía férrea conectaba Segovia con Medina del Campo y ésta con aquella ciudad. Mucho más cerca –a 60 km.- está Ávila, pero con ella no existía comunicación diaria. Otras capitales limítrofes ya más distantes son Burgos y Soria, con las que se unía Segovia a través de vías menos concurridas y peor conservadas que las de Madrid y Valladolid. La línea férrea que atravesaba la provincia era la de Villalba-Medina del Campo, que dibujaba una especie de flecha (como se ve en el mapa nº 1). Tan sólo 8 localidades de la provincia disponían de estación de tren: El Espinar, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, La Losa, Yanguas de Eresma, Armuña, Nava de la Asunción y Segovia.

La población segoviana, según el censo de 1930, era de 174.158 habitantes de hecho y 183.609 de derecho. El tipo de poblamiento era netamente rural, con la característica añadida de que las localidades eran muy pequeñas y numerosas, hasta un total de 276 municipios. Únicamente la capital superaba los 6.000 habitantes, en concreto 18.027.

²⁷ Nos estamos refiriendo a tres comunicaciones en el *Congreso de Historia de la Ciudad, Segovia 1088-1988*, organizado por la ACADEMIA DE HISTORIA Y ARTE DE SAN QUIRCE. Actas, Junta de Castilla y León. 1991. Los trabajos son: MARINERO, María Jesús, *Segovia durante la II República: una aproximación histórica*.

CRESPO ABARCA, Enrique, *Segovia durante la II República. Las elecciones para Cortes Constituyentes*.

NÚÑEZ ALONSO, Julio, *El movimiento obrero en la ciudad de Segovia durante la II República*.

Además, hay una tesis doctoral también inédita de PASTOR MARTÍN, Jesús, *Segovia (1931-1939): Una ciudad en retaguardia*, Universidad Autónoma de Madrid. En ella se recoge un interesante estudio de las poesías publicadas en Segovia, la mayoría en la prensa, durante esa década.

²⁸ TOMÁS ARRIBAS, J. Coord., *Historia de Segovia*, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1987. A lo largo de 300 págs. recorre toda la historia de Segovia, desde sus primeros pobladores. La II República y la guerra civil son tratadas en las págs. 243-250, por Maximiliano BARRIO GOZALO.

²⁹ CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, Juan de, *La Iniciación en Segovia del Movimiento Nacional (julio-agosto 1936)*, imprenta de *El Adelantado de Segovia*, 1938.

Cuadro nº 1: Distribución de la población por localidades

Nº de habitantes	Nº de localidades
Menos de 250 habitantes (h)	47
250 – 500 h	119
500 – 1.000 h	78
1.000 – 2.000 h	27
2.000 – 5.500 h	4
más de 5.500 h	1

La población activa suponía 59.436 h., lo que representaba el 34,12% del censo. En esta franja poblacional se incluían gran número de menores de 15 años (3.121), pues en esta época eran muchos los niños -entre los 11 y los 13 años, todavía en edad escolar- que se incorporaban al trabajo una vez terminadas las clases, o combinaban periodos de asistencia a la escuela con las ausencias originadas por las labores en el campo. La dedicación de estos menores era mayoritariamente la agricultura -como criados o *mochileros*- y la ganadería, como pastores, aunque también eran empleados en ciertos oficios como molineros, panaderos, herreros, albañiles, comercio, etc.

Dentro de la población activa, hay que reseñar que las mujeres eran 3.002 -tan sólo un 5,05% del total- lo que demuestra claramente que la mayoría de las mujeres no estaban incorporadas al mercado laboral. Es necesario constatar que en esta provincia no había industrias textiles o conserveras, donde las mujeres de otras zonas de España ya trabajaban en estos años. En el cuadro nº 2 observamos cómo más de la mitad de la población activa femenina se dedicaba al servicio doméstico. Otro dato destacable es el segundo lugar que ocupan las monjas, en una muestra de la influencia de la Iglesia en la provincia. A más distancia se sitúan las profesiones liberales, casi exclusivamente dedicadas a la docencia, primordialmente a la enseñanza primaria. También es apreciable la poca importancia, todavía, del comercio como actividad de la mujer.

Cuadro nº 2: Población activa femenina

Actividad	Nº de mujeres	Porcentaje
Servicio doméstico	1.549	51,59%
Clero regular (monjas)	483	16,08%
Profesiones liberales	270	8,99%
Rentistas	228	7,59%
Agricultura	248	8,26%
Comercio	101	3,36%

En cuanto a la población activa en general, destaca notablemente que más de la mitad se dedicaba al sector primario (agricultura, ganadería y explotación forestal). El resto de actividades se encontraba muy repartido, superando el 12% sólo las industrias diversas -precisamente por su carácter aglutinador de distintas actividades-. Otra prueba más de la notoriedad de la Iglesia en Segovia, era la existencia en la capital de 13 conventos con 554 religiosos. A este grupo hemos de añadir 204 personas entre seminaristas y profesores y 758 internos eclesiásticos.

Cuadro nº 3: Población activa

Sector de producción		Nº personas		Porcentaje	
Agricultura, forestal y ganadería	Montes	1.370	31.985	4,28%	53,81%
	Agricultura	29.080		90,93%	
	Ganadería	1.529		4,78%	
Industrias alimentación		1.534		2,58%	
Madera		1.323		2,22%	
Construcción (incluye ladrillos y cemento)		2.147		3,61%	
Varias (electricidad, diversas, cristal..)		7.288		12,26%	
Transportes			1.196		2,01%
	Ferrovianos	481		40,21%	
Comercio		2.183		3,67%	
Servicio Doméstico		2.076		3,49%	
Fuerza pública		1.563		2,62%	
Clero		1.140		1,91%	
Profesiones liberales		1.481		2,49%	
Rentistas		1.407		2,36%	

La base de la actividad económica de la provincia era la agricultura, con una industria muy poco desarrollada y de reducidas proporciones, establecida principalmente en la capital y con pequeñas fábricas en algunos pueblos.

Las características de la agricultura en Segovia vienen determinadas por varios factores como el duro clima interior y la altitud (entre la localidad más baja, Remondo a 754 mts., y la más alta, Riofrío de Riaza a 1.333 mts., el 53,54% de los municipios está situado entre los 900 y 1.100 mts. de altitud). La combinación de ambos elementos tiene como resultado fríos inviernos, veranos calurosos y lluvias no muy abundantes. Por último, respecto a las condiciones del suelo observamos que hay dos zonas bien delimitadas: sierra y meseta (dentro de la que distinguimos la llanura y el páramo). En la zona serrana hay masas de bosque (especialmente pinares, pero también sabinas y robles) y de pastos. De las dos zonas de meseta, sólo es aprovechable la llanura, que no llega a alcanzar la mitad de la superficie de la provincia. Los páramos son poco aprovechables por corresponder a laderas de cerros, cañones de ríos, etc. Teniendo en cuenta estos factores, los aprovechamientos agrícolas se reducían casi exclusivamente a los cereales y las explotaciones de los pinares.

La parcelación de las fincas agrícolas era otra dificultad, pues predominaban las fincas pequeñas, como prueba que en tan sólo 5 municipios las parcelas superiores de 5 Has. representaban más del 25% (El Espinar, Monterrubio, Marazuela, Escarabajosa de Cabezas, Condado de Castilnovo) y por el contrario, en más de 100 localidades este tipo de parcelas no llegaban al 1%³⁰.

Un informe del gobernador civil Rodríguez Lafuente, remitido en 1938, recogía su propia valoración sobre la superficie cultivada por cada familia que disponía de una yunta. Escribía que, por término medio, labraban “14 hectáreas (has), 7 en barbecho y 7 en

³⁰ REQUES VELASCO, Pedro, *Atlas socioeconómico de la provincia de Segovia*, Diputación Provincial de Segovia, 1985, mapa nº 38.

sementera”, que le parecían claramente “insuficientes” y planteaba que “debería tener cada yunta 20 has.”³¹.

Respecto a la propiedad de la tierra, la característica más importante era el arrendamiento de las fincas de mayor producción y la propiedad de las tierras más pobres. De manera que las tierras en propiedad eran predominantes en 3 zonas concretas que precisamente no se dedicaban a la agricultura: Tierra de Pinares, de aprovechamiento forestal y La Serrezuela y La Serrana de explotación ganadera.

Como analiza Pedro Reques, las comarcas netamente agrícolas: Tierra de Santa María, Segovia, Turégano, Sacramenia, Campo de San Pedro, etc. tenían valores bajos de tierras en propiedad³². Las causas hay que buscarlas en la desamortización de bienes comunales -desarrollada en el siglo XIX- que fueron adquiridos por la burguesía y la aristocracia de la capital y, en menor medida, de Madrid³³. El arrendamiento había pasado de padres a hijos, desde la desamortización. Por el contrario, la aparcería se daba muy poco en la provincia de Segovia.

La riqueza pecuaria estaba diversificada, predominando el ganado lanar con 429.778 cabezas, seguido del vacuno con 44.030, 21.384 de cerda y 18.401 de cabrío (en datos de 1938³⁴).

En cuanto a la industria, la más importante de la provincia era de gomas y curtidos. Instalada por los hermanos Klein procedentes de Alemania, daba trabajo a más de 200 trabajadores. Hasta el año 1936 no se establece en Segovia otra fábrica tan importante en número de trabajadores. La empresa Garriga de Barcelona instaló en la capital una factoría de defensas anti-gas. El resto de fábricas de Segovia no llegaban a contar con un centenar de obreros, entre ellas destacaban³⁵:

Cuadro nº 4: Industrias más importantes de la provincia de Segovia

Producto	Propietario	Contribución
Harinas	Juan Carretero	6.866 pts
Loza	Obdulia Vargas	5.278 pts
Teja	N. Martín Sastre (Hontoria)	4.012 pts
Pastas de sopa	Juan Carretero	2.883 pts
Lavaderos de lana	Hijos de E. Redondo	2.524 pts

³¹ AGA, 25.01. Leg. 2792. Informe del gobernador civil Rodríguez Lafuente al Gobierno de Burgos, fechado el 25 de agosto de 1938.

³² REQUES VELASCO, Pedro, *Atlas socioeconómico de la provincia de Segovia*, Diputación Provincial de Segovia, 1985.

³³ Pedro Reques cita a MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo, *Segovia, evolución de un paisaje urbano*, Colegio Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1976, en su pág. 433, nota 30, publica una lista de 15 contribuyentes de la capital, en 1913. De ellos sólo anotamos los diez más importantes:

Propietario	Nº inscripciones municipales	Riqueza en pts	Cuota en pts
Marqués del Arco	34	19.060	1376
Marqués de Lozoya	24	16.199	1412
Marquesa de la Floresta	22	6.580	420
Francisco Piñera	8	15.054	1.895
Carlos de Lecea y familia	30	8.665	292
Carlos Guitián	8	5.368	472
Mª Paz Bayón del Río	9	3.846	1.066
Ezequiel González	16	3.629	312
Leopoldo Moreno	3	3.445	-----
Mariano Torre Agero	8	1.778	360

³⁴ Informe citado del gobernador civil Rodríguez Lafuente.

³⁵ MARTÍNEZ DE PISÓN, E., op. cit., pág. 396. Datos de 1930.

Las industrias más numerosas eran alimenticias. La provincia de Segovia disponía de 19 fábricas de harina, con un total de 200 obreros; una de elaboración de pasta para sopa utilizando el “sistema italiano”, con 33 obreros; en torno a 25 fábricas de embutidos con dos centenares de trabajadores en su conjunto; una de achicoria en Cuéllar y 7 industrias panaderas que exportaban a Madrid los excedentes de producción. Un sector importante, aunque no creaba demasiados puestos de trabajo, eran las 55 empresas de producción de electricidad, casi todas aprovechaban antiguos molinos y saltos de agua. Además 3 fábricas de cerámica situadas en la capital producían 4 millones de piezas – ladrillos y tejas- cada una. Entre las industrias de la provincia, la de vidrios de La Granja era la que empleaba más trabajadores, con 90 obreros.

Otras pequeñas fábricas eran: una modesta industria de mantas en Bernardos, una de productos de farmacia en Valseca; una de tinta de imprenta en Migueláñez; una de cerámica artística “*con fama en el mundo entero*”³⁶ regentada por la familia Zuloaga, en la capital; una industria papelera cerca de Palazuelos, con 45 obreros y una de curtidos en Segovia. Había nueve imprentas, entre las que destacaba la regida por Rufino Cano, dueño de *El Adelantado*, en cuyos talleres se imprimía, además del diario del mismo nombre, el semanario *La Ciudad y los Campos*.

La transformación de resinas destacaba como actividad industrial muy importante, pues situaba a Segovia a la cabeza de España en este campo. Unos 2 millones de pinos producían entre 4 y 5 kilos de miera por pino y sangría. En la provincia había 37 fábricas de resinas, entre las que se incluían numerosos talleres familiares. Otra explotación derivada de la abundancia de pinares era, lógicamente, la maderera, que daba vida a 16 aserraderos en la provincia, destacando entre ellos los de Navafría, Valsaín y El Espinar.

Por último, es importante tener en cuenta la concentración de la riqueza industrial en pocas manos, pues el 6,3% de los contribuyentes por industria reunían en sus manos el 50,86% del valor total.

En cuanto al terreno político, la provincia de Segovia había votado tradicionalmente a los conservadores, salvo en las elecciones de 1931, tanto en las municipales como en las constituyentes. En las primeras, los resultados fueron de victoria abrumadora de los candidatos republicanos, si bien hay que tener en cuenta que entre estos había diversas tendencias, de signo conservador o izquierdista³⁷.

Cuadro nº 5: Resultado de las elecciones municipales de 1931

Grupos políticos	Art. 29	Concejales elegidos	Total	Porcentaje
Republicanos	410	1.093	1.503	79,78%
Socialistas	5	23	28	1,49%
Comunistas	1	---	1	0,05%
Monárquicos	21	135	156	8,28%
Otros	32	164	196	10,40
Total	469	1.415	1.884	100%
Porcentaje	24,89%	75,11%	100%	

En las elecciones constituyentes de junio de 1931, la derecha, desorganizada, sólo obtuvo un escaño, el del candidato independiente Rufino Cano de Rueda. Juan de Contreras, fundador de Acción Popular en Segovia, no obtuvo los votos necesarios para lograr el acta de diputado. Los representantes republicanos fueron Pedro Romero, militar

³⁶ Así figura en el aludido informe del gob. civ. Rodríguez Lafuente.

³⁷ Cuadro obtenido de TOMÁS ARRIBAS, J. coord., op. cit., pág. 243.

de trayectoria política destacada desde el conflicto artillero de 1929 contra la Dictadura, Cayetano Redondo, socialista, y el canónigo de Burgo de Osma, Jerónimo García Gallego que se presentó como “católico, republicano y demócrata independiente”³⁸.

La situación electoral volvió a los resultados tradicionales en 1933, ayudada ahora por la desunión de los republicanos y los partidos obreros (el PSOE presentó como candidato al maestro Julio Fuster y al ferroviario Rodolfo Obregón), copando la derecha, aunque desde distintas formaciones, los cuatro escaños. En 1936 -como veremos más adelante-, tras una disputada campaña electoral, la derecha obtuvo la victoria con 3 diputados, dejando un solo escaño para el Frente Popular.

Cuadro nº 6: Las elecciones a Cortes en Segovia durante la II República

1931	1933	1936
Cayetano Redondo Aceña (Conjunción Republicana)	Eutiquiano Rebollar (Radical)	Arturo Martín de Nicolás (Frente Popular)
Pedro Romero (Conjunción Republicana)	M. Fernández de Córdoba (Acción Popular)	M. Giménez Fernández (CEDA)
Jerónimo García Gallego (Independiente/republicano)	Juan de Contreras (Acción Popular)	Juan de Contreras (CEDA)
Rufino Cano de Rueda (Independiente/monárquico)	Rufino Cano de Rueda (Agrario independiente)	Rufino Cano de Rueda (Agrario independiente)

1. 1. 1. Los problemas del campo

Uno de los asuntos importantes en una provincia netamente agrícola como Segovia eran los problemas de los labradores, entre los que destacaba especialmente el bajo precio del trigo³⁹. El 3 de mayo de 1936 se celebró una asamblea provincial de agricultores, tras una campaña de propaganda fomentada especialmente en los medios conservadores, que era la ideología con la que se sentían más identificados la mayoría de los agricultores segovianos. En *La Ciudad y los Campos*, desde el 27 de junio figuraba en portada la leyenda *defensor de los intereses agrarios*, y en *El Adelantado* fueron distintas asociaciones y partidos los que emitieron su llamamiento para que los labradores acudieran al acto, como la Federación Católica Agraria de Segovia y la Cámara Agraria. Se publicaron diversos anuncios, uno de ellos de tintes casi apocalípticos –en la misma línea que habíamos observado en la campaña de los contrarrevolucionarios en febrero- para conseguir que nadie faltara a la asamblea de agricultores: “Segovianos. ¡perdida la agricultura, muerta la patria!. ¡labradores segovianos, salvad a España! ¡no desmayéis! ¡adelante!”⁴⁰.

³⁸ Curiosamente al inicio de la campaña de las constituyentes Gallego aparecía en el cartel de la “candidatura recomendada por un grupo de electores de derechas” publicado en *La Ciudad y los Campos*, junto a Contreras (Acción Nacional), Cano de Rueda (independiente) y García Tapia (médico, republicano indep.). Pero ya el día siguiente, 25 de junio de 1931, se había caído del cartel de la derecha. Por su condición de sacerdote y su alineación, durante las constituyentes, con los republicanos en lugar de hacerlo con las filas conservadoras, le llovieron las críticas de los sectores católicos de la derecha segoviana. Sobre la trayectoria y personalidad de García Gallego -exiliado en Cuba tras la guerra-, Antonio Linaje Conde tiene publicados artículos en *Estudios Segovianos*, tomo XXXVII, nº 9, de 1996, 9 de octubre de 1931: *En torno a un discurso parlamentario del presbítero segoviano Jerónimo García Gallego*; y *Un eclesiástico constitucionalista en la Segunda República*, Jerónimo García Gallego. En *Anuario de Historia del Derecho Español*, tomo LXVII, vol. 1. M. Justicia.

³⁹ En una España todavía mayoritariamente agraria, son muchos los autores que achacan a los problemas del campo como una de las causas de la guerra civil. Por ejemplo, Preston afirma que “La actuación de las derechas y de los derechistas en el campo en el segundo semestre de 1935, fue uno de los principales determinantes del odio de la guerra civil, y probablemente de la guerra civil misma”. En PRESTON, P., *La destrucción de la democracia en España*, Turner, Madrid, 1978.

⁴⁰ *El Adelantado*, 23 de abril de 1936.

Desde el *Heraldo* también se animaba a la participación, pero con un punto de vista un tanto crítico con el comportamiento general de los agricultores:

Ha sido necesario que ocurrieran muchas cosas, que el labrador haya visto de cerca su miseria, para que surja espontánea -acaso tardía- la voz de alarma para buscar en la defensa colectiva el remedio a su ruina inmediata (...) sin acritud de ninguna clase (...) hemos de decir a los labriegos segovianos que están cosechando ahora el fruto de su pertinaz indiferencia, de su eterno individualismo (...) en anteriores asambleas los agricultores demostraban entusiasmo cuando se hablaba de formar un bloque que había de oponerse a todo lo que significaba desdén y preterición a la clase más esquilmada de la nación (...) pasaron los momentos de entusiasmo de estas asambleas (...) y cada cual marchó para su casa. (...) y no se consiguió nada práctico⁴¹.

En la asamblea celebrada en la plaza de toros participaron en torno a 4.000 labradores de toda la provincia. Tomaron la palabra algunos agricultores, entre ellos Isaías Herrero, de Escalona, que poseía un almacén de abonos y varias fincas⁴²; y Martirián Torrego. Hablaron también los diputados Giménez Fernández, exministro de Agricultura de la CEDA; Martín de Nicolás, de Unión Republicana, y el gobernador civil Chacón de la Mata. Entre las conclusiones de la asamblea destacaba la formación de una organización sin tintes políticos que agrupara a todos los labradores de la provincia para defender mejor sus intereses, que se resumían en la revalorización del trigo, que alcanzara no menos de 20 pts./fanega y solicitar un crédito del Estado equivalente al 75% del trigo que se ofreciera en depósito. La Asociación Provincial de Agricultores que nació de la asamblea estaba presidida por el citado Isaías Herrero.

La Reforma Agraria en esta provincia se quedó en fase de estudio, pues la Junta Provincial fue designada el 15 de julio de 1936, siendo nombrados presidente Benito García García y vicepresidente Fernando de la Calle Martín. Algún tiempo antes, el gobernador civil había remitido a los alcaldes una circular para que informaran sobre las fincas de señorío enclavadas en su término municipal, detallando la extensión, propietario y otros datos de interés para que la administración comenzara a trabajar sobre el tema⁴³. En el *Heraldo* del 7 de junio se publicó que el ingeniero jefe del Servicio Agronómico Provincial esperaba instrucciones para iniciar el estudio de los términos de Monterrubio, Zarzuela, Vegas y otros⁴⁴. Aunque en esta provincia no hubo apenas intentos de ocupación de fincas, en marzo -cuando se estaban produciendo ya algunas ocupaciones en Extremadura y Andalucía- Chacón de la Mata, advirtió a los jornaleros que no eran legales estas acciones hasta que el Gobierno así lo declarara⁴⁵.

1. 1. 2. Los problemas laborales

Desde la derecha se veía con mucho miedo el auge y la fuerza de las organizaciones obreras, por lo que fomentaban y apoyaban a los sindicatos “*profesionales y apolíticos*”. Para justificar la necesidad de sufragar este tipo de organizaciones, en un significativo editorial de *El Adelantado* se elogiaba la labor que realizaban los sindicatos de

⁴¹ *Heraldo Segoviano*, (en adelante *Heraldo*) 26 de abril de 1936.

⁴² Martín Borreguero afirma que era socialista.

⁴³ Por ejemplo, desde Valverde, informó el corresponsal, y presidente de la Casa del Pueblo, Teófilo Carrasco sobre fincas susceptibles de ser objeto de reforma agraria, de varios pueblos de la zona, por si no le hubieran informado *verazmente* al gobernador civil. *Heraldo*, 19 de julio de 1936.

⁴⁴ *Heraldo*, 7 de junio de 1936

⁴⁵ *El Adelantado*, 26 de marzo de 1936. En Segovia, sólo se realizó la ocupación de la finca “El Carrascal” en Vegas de Matute, inducida por el socialista y secretario del ayuntamiento Máximo Martín Gutiérrez. Así consta en el informe de la Guardia Civil sobre el secretario, en su Exp. Resp. Civ. 37/38, en Arch. Prov. Caja J/6350.

clase porque los obreros encontraban “claro apoyo a sus miserias y reivindicaciones obreras profesionales”, además, las organizaciones ayudaban y defendían a sus asociados cuando éstos recibían “trato injusto de los patronos”, los auxiliaban con las mutualidades, los montepíos benéficos, socorrían a los huérfanos de asociados, etc. Pero, para que los sindicatos católicos pudieran hacer la misma labor, el diario veía la necesidad de la “ayuda de las derechas segovianas”, porque, al tener pocos afiliados, las cuotas daban para pocos servicios.

La Casa del Trabajo englobaba a tres sindicatos católicos y antimarxistas: Sindicato Provincial del Trabajo⁴⁶ (Oficios Varios), Sindicato de Dependientes del Comercio y Sindicato de Albañiles. Un editorial de *El Adelantado* denunciaba que sus afiliados eran perseguidos y presionados por la Casa del Pueblo para que engrosaran sus filas:

A estos obreros se les quiere cercar por el hambre si continúan sin ingresar en las filas socialistas. Varias han sido ya las amenazas, el delegado de Trabajo debería haberse enterado ya que en San Ildefonso se ha echado de un tajo a varios obreros por no ser de la Casa del Pueblo, los 65 trabajadores de la Klein echados cuando cumplían su deberes (...) Es la tiranía marxista envalentonada (...) frente a estas actitudes hacemos un llamamiento a la opinión pública segoviana para pedir ayuda para los obreros que no se quieren doblegar ante la furia marxista. En primer lugar, pedimos trabajo preferente a los empresarios católicos y de derechas para que den trabajo a los obreros vejados y perseguidos por las izquierdas. Que ninguno de los obreros represaliados por la revolución sienta en su hogar los horrores del hambre (...) Que ninguno pueda decir que se pasa al campo revolucionario porque allí es donde los patronos católicos van a buscar mano de obra para sus tajos y talleres. Pedimos ayuda en metálico, que haya dinero en la Casa del Trabajo para abonar a los asociados prestaciones necesarias (...) que el dinero y donativos de los católicos sea para los obreros católicos que luchan como héroes contra el cerco que les ponen las Casas del Pueblo⁴⁷.

Para apoyarse en sus razonamientos, *El Adelantado* se hizo eco durante varios días de algunas huelgas de brazos caídos en el Aserradero del Patrimonio de la República en La Pradera, promovidas, según el diario “para que despidan a dos capataces y un obrero, en instancia elevada”⁴⁸ al consejo de administración del Patrimonio de la República. Recogió también la acción similar realizada por los carreteros del mismo aserradero, para que despidieran a los no afiliados, y la del sector de la construcción en San Ildefonso en contra de los obreros no militantes a UGT que sí lo estaban al Sindicato Obrero Autónomo.

Pero, sin duda, el ejemplo más claro del pensamiento reaccionario sobre los sindicatos de clase está recogido en una colaboración que, bajo el título *¡Odio en la familia!*, se publicó en *La Ciudad y los Campos*. Era una historia, a modo de parábola, en la que se narraban las vivencias de una familia formada por un matrimonio con dos hijos. Al principio, todo era felicidad. Para ilustrarlo mejor retrataba una escena cotidiana de la familia tradicional: “la mujer está cosiendo, cuando suenan las 12 en el campanario de la iglesia, y se pone a preparar la comida para llevarla después al campo donde el marido se gana el pan para la familia”. Pero, al cabo de unos años, la situación familiar se había transformado radicalmente: la casa ahora estaba fría, la tristeza había teñido el ambiente de un color gris, los niños vestían desharrapados igual que la mujer que

tiene que ocuparse de buscar el pan para sus hijos. Su marido fue bueno, tuvo amor para su mujer (...) en aquellos años que trabajaba sin otras ambiciones que ganar el pan de sus hijos. Pero fue poco a poco dejándose ganar la voluntad por compañeros que labraron su ruina con

⁴⁶ A pesar de la información de *El Adelantado* sobre los tres sindicatos católicos, en el *Heraldo*, 29 de diciembre de 1935, aparece que el Sindicato Provincial disponía de 1.401 socios en otra sección denominada Trabajo Rural. En otra información de *El Adelantado* de 3 de septiembre de 1936 aludía a los “320 socios de la sección de Oficios Varios”.

⁴⁷ *El Adelantado*, 20 de marzo de 1936. La Casa del Trabajo organizó una suscripción para ayudar a los obreros despedidos tras las readmisiones decretadas por el Gobierno (el 29 de febrero de 1936) para los trabajadores que a su vez habían sido despedidos por la Revolución de Octubre de 1934.

⁴⁸ *El Adelantado*, 19 de marzo de 1936.

malos consejos. Se afilió a la casa del pueblo y en ella llegó a ser un dirigente exaltado. Se borraron en él y en su hogar el recuerdo de Dios que aprendieron en días venturosos... Y fue una noche cuando obedeciendo una consigna que les dieron unos señoritos de Madrid, se lanzó al frente de su huestes al asalto y destrucción del cuartel de la guardia civil. Luchó como un bravo (...) murió mientras sus compañeros huían cobardemente ante los disparos de los defensores del orden social (...) ahora cuando la mujer ve saludar a convecinos puño en alto, levanta el brazo no en son de saludo sino de venganza y amenaza ¡marxismo tu has destrozado mi hogar!⁴⁹.

Los conflictos laborales tenían su cauce de resolución en los jurados mixtos con representación de obreros y patronos, designados por sus respectivas organizaciones y bajo la mediación de los presidentes elegidos por unanimidad entre los representantes sociales. Cada sector de producción tenía su jurado mixto que elaboraba las bases de trabajo -lo que ahora denominamos convenio colectivo- en las que se establecían las condiciones laborales: horarios, salarios, turnos, etc. Por ejemplo, el acuerdo del Jurado Mixto de Comercio de la capital, quedaba así: horario: 8 horas diarias, durante todo el año, en turnos de 9 a 13 y 15 a 19 horas⁵⁰. Por su parte, el Jurado Mixto de Cerámica estableció que los maestros del ramo ganaran 9,50 y los aprendices 3.50 pts.⁵¹.

Por la decisiva importancia del sector agrario en esta provincia, merecen dedicación especial las bases de trabajo rural, de las que extractamos algunos extremos que fueron aprobados para la campaña de 1936: los segadores a hoz cobrarían 10 pts. por 8 horas de trabajo (si los obreros fueran mantenidos por los patronos, el salario quedaría en 5,50 pts.). Las horas extraordinarias se pagarían con un incremento del 50% las dos primeras y del 100% las dos siguientes, hasta un máximo de 12 horas trabajadas, las mujeres sólo podrían trabajar dos horas extras. La patronal se fue de la reunión de los jurados mixtos a causa de la valoración de las horas extraordinarias, pues mientras los obreros pedían como base del cálculo las 10 pts., los patronos proponían las 5,50, porque, como recogía *El Adelantado*, no estaban dispuestos a aumentar el jornal de 1935⁵².

Estas desavenencias originaron algunos editoriales en la prensa conservadora que puso el grito en el cielo por lo que consideraban excesivas peticiones de los representantes de los obreros. En *El Adelantado* alegaban que siempre los obreros habían trabajado bien y habían sabido cuándo poder cobrar más porque había más cosecha, debido a que la mayoría de los agricultores de la provincia eran pequeños propietarios. Denunciaba el diario que estaba “*enrarecido el ambiente, no por los obreros de siempre*”⁵³: no lo expresaba claramente, pero acusaba a las organizaciones obreras que, según su criterio,

⁴⁹ *La Ciudad y los Campos*, 30 de mayo de 1936. Esta es la idea que la derecha pretendió inculcar, iniciada la guerra, en las familias de los represaliados, la culpa de la represión la tenían las ideas que profesaban los fusilados, los presos; no era el culpable el fascismo que los ejecutaba y encarcelaba. Hemos podido comprobar cómo estas ideas fueron asumidas por algunas familias, que reconocían en público “*algo habrá hecho*” o “*quién le mandaría meterse en política*”, refiriéndose a sus fusilados.

⁵⁰ *El Adelantado*, 6 de mayo de 1936.

⁵¹ *Heraldo*, 5 de julio de 1936. El Jurado Mixto de Cerámica estaba integrado por los patronos Cesáreo Martín Sastre, Nicomedes García Gómez y Juan Carretero Vera; y los obreros: Alejandro González González, Matías San José Antona y Baldomero Martín.

Por otra parte, había un Jurado Mixto Provincial, cuyo vicepresidente era Esteban Muñoz, repuesto tras las elecciones de febrero, porque había sido destituido a raíz de la revolución de octubre. Conocemos también los integrantes de otros jurados mixtos:

Jurados Mixtos Industriales: patronal: Fernando Albertos Redondo, José Moreno Aizpurúa y Antonio Bernaldo de Quirós, obreros: Antonio Hernanz Benito, Juan Yáñez Mateo y Manuel Bear Solana.

Jurado Mixto Agrario: patronos: Justo Muñoz García, (Sangarcía), Eugenio Colorado Laca, (Segovia), Isaac Herrero, (Escalona del Prado); obreros: Mariano Velasco Soria, (Cuéllar), Vicente Gomáriz, (Carbonero el Mayor), Claudio Gómez, (Labajos).

Jurado Mixto Rural: Pedro García González, joven abogado elegido presidente por unanimidad, para vicepresidente no hubo unanimidad, por lo que no fue designado. Patronos: Juan Miguel Muñoz, Lucio Muñoz Álvarez y Mariano Valverde, obreros: Donato Herranz, Manuel Bear y Alejandro González.

⁵² *El Adelantado*, 3 de julio de 1936.

⁵³ *El Adelantado*, 9 de julio de 1936.

habían puesto muy alto el listón de las exigencias. En otro artículo hacía una defensa de los jornales mantenidos que resultaban más económicos a los patronos, puesto que los jornaleros comían como uno más de la familia labradora (que sólo tenían que echar un puñado más de garbanzos al puchero) y dormían en cuadras o pajares. *El Adelantado* justificaba esta opción en que, según su criterio, era *“la modalidad de Castilla, la que más vínculos de amistad crea entre patrón y obrero y ser una realidad que el trabajador alimentado al uso castellano por el patrono rinde un trabajo mucho más fructífero que el otro”*⁵⁴.

Ante la falta de acuerdo en la valoración de las horas extras, la Asociación Provincial de Agricultores, recién creada, se estrenó con un recurso contra las bases de trabajo rural, y solicitó el apoyo a los diputados. En su protesta alegaba que la cosecha de ese año suponía el 40% de lo normal, por lo que los costes iban a provocar la ruina de los pequeños patronos, que representaban el 95% del total; y que los jornales aprobados habían subido un 40% de los de años anteriores⁵⁵.

Para combatir el paro obrero, al no llegar las iniciativas del Gobierno, como tampoco habían llegado las de los gobiernos anteriores, eran los ayuntamientos los que planteaban pequeñas obras públicas para dar trabajo a los vecinos parados. En Cuéllar, la gestora frentepopulista convocó un plebiscito para la contratación de un empréstito, con el fin de construir escuelas en las localidades anejas de Torregutiérrez y Escarabajosa, un matadero municipal y obras de alcantarillado, por un valor total de 300.000 pts. La consulta se iba a celebrar el 19 julio, fecha en que se sublevó la guarnición de Segovia. El pleno del Ayuntamiento de Carbonero el Mayor también aprobó que se dedicaran gastos especiales para combatir el paro.

Debido a la gravedad del problema del desempleo, la única temporada del año en que había empleo para la mayoría de los trabajadores parados era el verano, con la recolección de los cereales. Este año había más necesidad, si cabe, de jornales y los obreros del campo se desplazaban por la provincia en busca de empleo, lo que originó alguna rivalidad con los jornaleros de la propia localidad. Como quiera que ya se estaban produciendo *“ciertos incidentes entre segadores de distintas localidades amagando alteraciones de orden público”*, el gobernador civil Chacón dictó una circular para evitar que los incidentes pasaran a mayores. En el empleo tendrían siempre preferencia *“los obreros inscritos como parados en el registro local de colocación de la localidad, después los del mismo partido judicial, a continuación los de la provincia de Segovia, no permitiendo la contratación de jornaleros de otras provincias sin su previa inscripción como parados en el registro local, tras acreditar baja en el de su localidad”*⁵⁶.

1. 1. 3. La vida cultural y religiosa

Uno de los aspectos que más iba a cambiar en España a partir del 19 de julio de 1936 sería la vida cultural. La proclamación de la República había traído aire fresco a los ambientes culturales y a las escuelas, lo que había originado un florecimiento de las artes y las letras en todos los aspectos, que además coincidía con el esplendor de una generación como la del 27, en plena madurez. En Segovia, vivía Antonio Machado, que ocupaba la

⁵⁴ *El Adelantado*, 3 de julio de 1936.

⁵⁵ *Heraldo*, 19 de julio de 1936. En cambio, los datos de la Junta Consultiva Agronómica del quinquenio 1931-1935 ofrecen un incremento considerable respecto al quinquenio anterior, y ya no se recuperaron esos niveles de producción hasta después de la guerra, aunque hay que tener en cuenta que tras la contienda se diversificaron los cultivos, se fomentaron otros nuevos, en especial remolacha y patata. En cuanto al aumento de salario hay que apuntar que, comparado con 1933, el incremento suponía un 51%, pues ese año las bases establecían un sueldo de 5,11 pts. por 8 horas, con recargos para las extraordinarias de un 25% y un 40% respectivamente. Pero también hay que apuntar que para las campañas de 1934 y 1935 no se habían producido subidas salariales acordes con el aumento del coste de la vida.

⁵⁶ *Heraldo*, 12 de julio de 1936.

cátedra de Literatura en el único instituto de la provincia y animaba el ambiente cultural de la ciudad con su participación en la Universidad Popular. Esta institución estaba encargada desde 1932 de organizar las Misiones Pedagógicas para llevar la cultura a los pueblos, impulsadas desde el Ministerio de Instrucción Pública por Marcelino Domingo. Además de las charlas y conferencias, la Universidad Popular impartía clases nocturnas para los obreros, y disponía de una biblioteca itinerante que posibilitaba a los lectores rurales el acceso a libros que de otro modo no alcanzarían.

Otra institución que trabajaba para animar la vida cultural de Segovia era la Sociedad de Amigos de las Bellas Artes, de influencia mayoritariamente republicana, presidida por el abogado Bernaldo de Quirós. Integraban su directiva, entre otros, Lola Zubizarreta, el poeta conservador Mariano Grau, Alejandro González Gómez (dirigente comunista) como vocal de pintura y dibujo, el alcalde Pedro Rincón y el editor del *Heraldo*, Carlos Martín Crespo⁵⁷.

Entre los variados actos culturales previstos para este año de 1936, destacaba la Olimpiada Popular que se iba a celebrar a finales de julio en Barcelona. Allí acudirían representando a Segovia los danzantes de Abades y el guitarrista y recuperador del folklore castellano Agapito Marazuela. Por otro lado, el grupo de teatro La Barraca - organizado por la Federación de Universitarios Españoles (FUE) y vinculado a Federico García Lorca- había traído sus montajes varias veces a Segovia, entre 1934 y 1936.

El ansia de los obreros por acceder a la cultura era muy grande, como hemos constatado por numerosos testimonios⁵⁸, además de las clases nocturnas en la Universidad Popular, también las había en la FUE y en la Casa del Pueblo. Se multiplicaban las conferencias. Incluso se formó una coral en la sede obrera de Segovia, con los niños *pioneros*, que cantaron en el mitin del 1 de mayo. En las sedes obreras más importantes de la provincia había bibliotecas. Por ejemplo a la de Turégano se desplazaban desde Muñoveros, *“a por libros para leer e intercambiar”*⁵⁹.

En la primavera de 1936 se fundó la Asociación de Amigos de la URSS, *“desligada de toda tendencia política o religiosa, con el fin de difundir y divulgar la verdad sobre lo que pasa en la URSS”*, a través de conferencias, documentales, libros, etc. en los que se expondrían *“las conquistas y los problemas del socialismo”*, además de la organización de viajes de estudios. La presidencia de la asociación recayó en Genoveva Sanz, dirigente de I.R.⁶⁰.

En la provincia también había iniciativas culturales que se canalizaban con la preparación de obras de teatro de “carácter social”, como aparecía en la prensa de la época para referirse a este tipo de teatro que pretendía concienciar al pueblo. Los promotores de estas representaciones eran dirigentes de las organizaciones obreras que fueron muy perseguidos desde el inicio de la guerra, al igual que sucedió con los maestros, lo que prueba que el despertar las inquietudes culturales que ponían en duda el sistema de dominación tradicional era considerado peligroso por la derecha sublevada. En Samboal, un grupo de jóvenes dirigidos por Gabriel Maroto, secretario de la Casa del Pueblo, representó *Tierras Bajas*, obra que también llevaron a Navas de Oro, Mudrián y Fuente el Olmo de Fuentidueña. En Zarzuela del Monte encontramos a Cipriano Herrero, un joven autodidacta que representó una obra escrita por él, titulada *Por una idea*, con *“escenas de*

⁵⁷ Carlos Martín Crespo, impresor, había sido uno de los fundadores de UGT en Segovia. Tuvo un papel fundamental en la difusión de la cultura progresista como alternativa a la tradicionalmente conservadora que imperaba en esta provincia. Fundador y director del *Heraldo*, en sus dos épocas. Su preocupación por la cultura abarcaba también el terreno musical: fundó y dirigió la banda musical “La Popular” con asilados del Hospicio de Segovia. Entre sus obras está la música del Himno a Segovia.

⁵⁸ Por ejemplo, Leopoldo Cámara hablaba de que tenía *“siempre afán por aprender”*, en la cárcel se hizo amigo de maestros y otros intelectuales. Otros testimonios que inciden en esta apreciación son Silvestre Ramos, Fausto Pérez, Teófilo García, etc.

⁵⁹ Testimonio de Martín Borreguero.

⁶⁰ *Heraldo*, 7 de junio de 1936. El resto de cargos eran: sec. Germán González, tesorero Mariano Gómez de Caso, sec. de Propaganda Juan Yáñez Mateo y sec. de Prensa Manuel Sánchez Martín.

ambiente social", el 14 de abril de 1936. El autor ya tenía escrita otra pieza "*Contrariedades*" que había presentado en Zarzuela y otros pueblos de los alrededores. En Carbonero el Mayor el zapatero Vicente Gomáriz; en San Rafael, el calefactor Salvador de La Iglesia y en Sepúlveda el dirigente de Izquierda Republicana (I.R.) Antonio Linaje, eran quienes preparaban las obras de teatro⁶¹.

En algunas localidades eran los maestros los que se preocupaban de preparar las obras de teatro con los jóvenes más inquietos. En *El Adelantado* aparecían publicadas veladas teatrales en muchos pueblos de la provincia, como la "*Velada teatral en Duruelo bajo la dirección del culto maestro Constantino García*"⁶².

Por su parte, también los centros de derechas organizaban actividades culturales, hacían teatro, conferencias, etc. Tanto en *El Adelantado* como en *La Ciudad y los Campos* vemos continuos anuncios de actos organizados por la Juventud de Acción Popular (JAP) y las secciones juveniles de Acción Católica -femenina y masculina- pues cada una organizaba sus propias actividades, como el *catecismo para caballeros*, que se celebraba los martes en el Palacio Episcopal.

Los maestros con inquietudes profesionales, culturales o políticas, escribían en la prensa y estaban sindicados en alguna de las tres organizaciones profesionales principales: Trabajadores de la Enseñanza, adscrita a UGT, cuyo secretario provincial era Jesús Gilmartín y tesorero Alejandro de Frutos; la Confederación de Maestros dirigida por Lorenzo Fernández y la Asociación Provincial del Magisterio presidida por Julio González, siendo otro de sus dirigentes Pedro Natalías⁶³. En la primavera de 1936 se dieron varias iniciativas para conseguir la unificación de las tres organizaciones progresistas de maestros, además de reuniones y manifiestos. Cuando Marcelino Domingo volvió a hacerse cargo del Ministerio de Instrucción Pública, recibió las entusiastas muestras de adhesión de los maestros segovianos encuadrados en las asociaciones reseñadas.

A la prensa de información general hay que añadir la iniciativa de un grupo de maestros que publicaron una revista profesional y de inquietudes pedagógicas, titulada *Magisterio Segoviano* y editada en la imprenta de Carlos Martín. Su director era Ángel Gracia⁶⁴.

Entre las colaboraciones de los maestros en la prensa (casi exclusivamente en el *Heraldo*, pues en la conservadora no se han encontrado referentes similares) destacamos como muestra de las inquietudes pedagógicas de los docentes, dos opiniones sobre el estado de la enseñanza.

Pablo de Andrés Cobos escribió sobre la necesidad de buenas escuelas y la sustitución de la enseñanza confesional, que era, para el autor, mandato que "*la Constitución exige*". Fundamentaba su alegato en que

Un fraile no puede ser en estos momentos un buen educador, si no es un mal fraile (...) con el catecismo ya no se educa en ninguna parte del globo, ni con la palmeta, ni con los garbanzos bajo las rodillas, ni con la celda de las reflexiones. A la más pobre, vieja y apartada de las escuelas rurales llega el eco de las nuevas corrientes pedagógicas; no llega a los colegios de los frailes.

Y aunque fueran buenas escuelas serían malas para la República que nació y vive con signo liberal (...) toda la enseñanza debe inspirarse en los mismos principios con que estamos

⁶¹ *Heraldo*, 19 de abril de 1936. Gabriel Maroto y Cipriano Herrero escaparon vivos de la ejecución; Vicente Gomáriz fue condenado a muerte, conmutada por 30 años, Salvador de La Iglesia salvó su vida al pasarse al bando republicano y Antonio Linaje tuvo la suerte de que estaba en Madrid el 19 de julio.

⁶² *El Adelantado*, 16 de abril de 1936. Constantino García fue fusilado el 15 de agosto de 1936.

⁶³ Es triste coincidencia pero los cinco maestros mencionados fueron fusilados, si bien, Alejandro tuvo la suerte de escapar con vida de la ejecución.

⁶⁴ Esta publicación no se ha podido consultar, porque en los archivos y bibliotecas de Segovia no se conserva ningún ejemplar. Ángel Gracia fue fusilado el 30 de agosto de 1936.

organizando el Estado (...) y es claro que no podemos nunca admitir la ingenuidad de que las congregaciones religiosas acepten estos principios básicos de la República⁶⁵.

Por otro lado, Pedro Natalías hablaba de *La revolución española*, en un comentario sobre la obra de teatro de Alejandro Casona, *Nuestra Natacha*, representada en Segovia.

No creemos en ninguna revolución que surge del azar. (...) Para transformar en conciencia colectiva las células individuales del cerebro popular es necesaria una labor de largo proceso y, sobre todo, de una firme y serena meditación. (...) La juventud tiene el derecho de vivir en la escuela una vida feliz. Esta ha de ser la primera manifestación de una firme voluntad de vivir solidariamente (...) La masa es cantidad, la educación es la cualidad de las masas⁶⁶.

Las transformaciones culturales de la República afectaron de lleno a la vida religiosa. La institución eclesiástica ha tenido mucha fuerza a lo largo de la Historia en la provincia de Segovia⁶⁷. Aunque con la desamortización había retrocedido algo su importancia económica, todavía en los años treinta era preponderante el peso de la Iglesia a nivel ideológico, por ejemplo, en el terreno de la educación, donde controlaba varios centros de enseñanza. Los republicanos y las fuerzas de izquierda eran muy críticos con el comportamiento general del clero segoviano, que daba continuas muestras del más puro reaccionarismo político. El anticlericalismo de la izquierda, por tanto, podría estar originado principalmente por la actuación política de la Iglesia de defensa de la monarquía y los intereses del bloque dominante.

Para dar una idea del dominante ambiente religioso de la provincia puede ilustrarnos la primera página de *El Adelantado* ocupada completamente por la esquila de Josefa Escorial González, viuda de Antonio Escorial. Como se puede imaginar era una de las familias más pudientes de Segovia, además emparentada con otra de la misma situación económica, los Carretero. El pie de página tampoco era baladí, “los Sres. arzobispos de Valladolid y Burgos y obispos de Segovia y Madrid han concedido indulgencias en la forma acostumbrada”⁶⁸. Las diferencias sociales también eran ostensibles en el terreno religioso pues, obviamente, las clases populares no tenían acceso a estos privilegios eclesiásticos. Otro detalle sintomático de la influencia de la Iglesia en Segovia fue que el obispado heredó la finca “Terminillo”, en las afueras de la capital, propiedad de una marquesa, fallecida este mismo año de 1936⁶⁹.

La política republicana que tenía por objetivo acabar con los privilegios de la Iglesia, principalmente en cuanto a sus propiedades y al terreno de la enseñanza, se plasmó en Segovia con la expropiación del convento de las Hijas de Jesús. Ya en mayo de 1936, se declararon clausurados los colegios de las congregaciones religiosas en Coca, Bernardos, Santa María, Ayllón y Sepúlveda.

La derecha segoviana hizo de la defensa de la religión una bandera durante la época republicana, aprovechando cualquier medida del Gobierno (la retirada de los crucifijos de las escuelas, la limitación de las manifestaciones religiosas públicas: procesiones, Viático) para cargar las tintas sobre la *perversidad* del régimen laico contra la mayoría católica de los españoles. *El Adelantado* dirigió una campaña contra el director del grupo Colmenares, Pedro Natalías, acusándole de haber quemado los crucifijos, cuando en realidad los tenía guardados en el almacén del colegio. En abril de 1936, en el mismo diario se publicó un artículo bajo el título *Persecución contra los niños cristianos*, firmado por Enrique Herrera Oria, exconsejero de Instrucción Pública del Gobierno radical-cedista. En

⁶⁵ *Heraldo*, 7 de junio de 1936.

⁶⁶ *Heraldo*, 7 de junio de 1936.

⁶⁷ Sirva como referente la obra de BARRIO GOZALO, M. *Estudio socioeconómico de la Iglesia en Segovia*. S. XVIII. Segovia, 1982.

⁶⁸ *El Adelantado*, 4 de mayo de 1936.

⁶⁹ Testimonio de María Fuentetaja. Por su parte el *Heraldo* informaba el 7 de junio que parte de la finca había sido dejada por la propietaria a los trabajadores de la finca.

su colaboración criticaba el decreto que establecía el certificado de Instrucción Primaria, al que tildaba de masónico “*porque masón es el ministro*”, y que se había hecho para “*des cristianizar a media España que se adecua (sic) en escuelas privadas*”. Con este decreto la certificación oficial sólo la podía otorgar un maestro del Estado, que podía ser “*comunista y enemigo declarado de la iglesia*”⁷⁰.

En los dos órganos de prensa conservadora de la provincia, que se autodenominaban católicos, eran numerosos los artículos en defensa de la religión ante lo que definían como los ataques del Estado laico. Así se presentaba la detención en Arévalo de 17 miembros de la Adoración Nocturna, acusados de reunión clandestina o las 70.000 firmas contra la enseñanza laica y el cierre de colegios privados. De igual modo, daban gran cobertura informativa a los anuncios sobre los distintos actos religiosos de ámbito estatal o provincial: Fiesta del Sagrado Corazón en Fuentepiñel, imposición de insignias de Juventud Católica Femenina (JFC) en Cuéllar, de Acción Católica, ejercicios espirituales para maestros y maestras, actos de JFC en Segovia o la *I Semana Bíblica* de Segovia.

El obispo de Segovia, Luciano Pérez Platero, mantuvo una actitud antirrepublicana durante los 5 años que duró el régimen democrático en esta provincia. Sirva como muestra de su beligerancia la Pastoral de noviembre de 1933, sobre la confesionalidad del Estado “*El Estado no puede pasarse sin religión, sino que tiene de suyo la obligación indispensable de ser y mostrarse religioso, esto es, católico, porque no hay otra religión eficaz y verdadera, sino la católica*”⁷¹. En febrero de 1936 suspendió *a divinis* al que había sido diputado de las constituyentes Jerónimo García Gallego, canónigo de Burgo de Osma. A pesar de la suspensión, en las elecciones de febrero el exdiputado obtuvo más de ocho mil votos, aunque a gran distancia de los candidatos de la CEDA o del Frente Popular. Su campaña la basaba, a decir de *La Ciudad y los Campos*, en las descalificaciones a Gil Robles y a la coalición derechista, por lo que fue permanentemente criticado por el semanario popular y *El Adelantado*. En cambio, el *Heraldo* apoyaba al Sr. Gallego, por su defensa del régimen republicano. La polémica entre Gallego y la prensa católica derechista se mantuvo durante toda la primavera de 1936. El canónigo escribió retando a los descalificadores a que le permitieran escribir su versión en *La Ciudad y los Campos* o hablar en un teatro con los representantes del semanario, pero éstos rehusaron el debate público.

Frente a ello, podríamos hablar de reacciones anticlericales o de incidentes de contenido anticlerical ocurridos en la provincia de Segovia. En muchas localidades los jóvenes componían cánticos sobre los sacerdotes, siguiendo una tradición de romances muy antiguos en los que los protagonistas eran curas⁷². Cuentan algunos testimonios que cuando había manifestaciones públicas en defensa de la fe -o como desagravio por lo que consideraban ataques a la religión- en las que portaban grandes crucifijos, para contrarrestar esos actos, los militantes de organizaciones laicas llevaban diablos rojos en las camisas⁷³.

En muchas localidades, la rivalidad entre el párroco y los afiliados a la Casa del Pueblo era tal que aprovechaban cualquier ocasión para enfrentarse o denunciarse mutuamente. En Fuente el Olmo de Fuentidueña, como en otros pueblos, las manifestaciones finalizaban con la entrega de las reivindicaciones o de un comunicado en el Ayuntamiento, para ello tenían que pasar por la puerta de la iglesia, situada al lado del consistorio. Allí esperaban concentrados los manifestantes mientras los dirigentes

⁷⁰ *El Adelantado*, 15 de abril de 1936. *adecua* viene en el original, podría ser una errata y querer decir educa. Herrera Oria tuvo una carrera brillante, entre otros cargos fue director del órgano de expresión de la Iglesia Católica, *El Debate* y, ya durante el franquismo alcanzó la púrpura cardenalicia.

⁷¹ BOOS, noviembre de 1933.

⁷² En el folklore castellano nos encontramos con multitud de canciones basadas en este tipo de romances: “Estaba el curita”, “El entremés”, etc.

⁷³ Testimonio de Manuel Sansigre.

entregaban las peticiones. Si la espera se demoraba, la cercanía del templo originaba cualquier tipo de comentario, que el cura siempre tomaba en consideración como si se hubiera tratado de una mofa o un insulto a la Iglesia.

En este aspecto, Contreras escribía que hubo *“algún conato de incendio en las iglesias”*, refiriéndose a la colocación de unos petardos a la puerta del convento de los Padres Carmelitas de Segovia, que por la escasa potencia de los cohetes entraban más en la categoría de gamberrada que en la de atentado⁷⁴. *“No hubo aquel año procesiones de Semana Santa”*, continuaba Contreras, en cambio, podemos leer en *El Adelantado* *“Segovia Religioso, cultos en Santa Eulalia, San Millán y Misioneros, procesiones dentro de los templos”*. Incluso el diario aportaba información sobre las celebraciones en Sevilla y Madrid: *“Continua celebrándose con animación la Semana Santa en Sevilla. Trenes abarrotados de viajeros, automóviles, autobuses de Madrid”*⁷⁵.

En *El Adelantado* del día siguiente, la crónica de los actos reflejaba total normalidad:

El jueves santo en Segovia se celebró con el fervor católico de costumbre. (...) a pesar de las corrientes antirreligiosas que se manifiestan en nuestra patria. No hubo procesiones de pasos, (pero todo fue) tranquilo, sin que nadie intentara dar pruebas de intolerancia con la exteriorización de la fé de la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, perfectamente compatible con un régimen democrático que debe significarse por el respeto hacia el ajeno sentir. Con mucho gusto registramos hoy este rasgo de cultura que quisiéramos fuera, sin interrupción, la característica de todos nosotros⁷⁶.

Contreras alude también a un registro del Palacio Episcopal efectuado *“por las turbas, excitadas sabiamente por los jerifaltes de la Casa del Pueblo, que ya iban siendo duchos en el arte judeo-marxista de la calumnia, so pretexto de una reunión clandestina”*⁷⁷. No aparece información de este extremo en la prensa, pero Isidoro Romano –entonces secretario de organización de las JSU- nos cuenta que cuando la situación política era ya muy tensa, las juventudes marxistas vigilaban los lugares donde pensaban que se reunían las derechas. En este estado de nerviosismo, fruto de las continuas provocaciones de los derechistas, se produjo la denuncia de unos jóvenes socialistas de que en la residencia del obispo se reunían los conservadores. Llegó a acudir la policía para efectuar el oportuno registro, pero no encontró ninguna reunión “ilegal”.

En Navas de Oro, con ocasión de las fiestas patronales, los militantes de la Casa del Pueblo no querían que saliera la procesión de San Antonio, pero al final salió y *“hubo empujones”*. Para ayudar a la benemérita de la localidad, vinieron de Coca los guardias civiles y la banda de música. Primero hubo procesión con el santo y después manifestación de los obreros con la bandera roja, y además querían también que la banda les acompañase como lo había hecho con la procesión. La Guardia Civil de Navas de Oro culpaba de los hechos a la permisividad del gobernador civil ante las presiones de los dirigentes obreros locales:

Los actos religiosos que con autorización superior se celebraron públicamente, fueron siempre perturbados por ellos y sus secuaces dando lugar a que en alguna ocasión se perturbara el orden público, sin que a pesar de ello y de haberlo puesto en conocimiento de las autoridades se tomara contra ellos providencia, debido a la mucha protección que gozaban por parte de los dirigentes marxistas⁷⁸.

⁷⁴ En el BOP de 16 de noviembre de 1936, se publicó la requisitoria por el sumario 33/36, de colocación de explosivos y empleo sustancias inflamables en el convento de los PP Carmelitas. Eran citados Manuel Bear y Celedonio González, en paradero desconocido.

⁷⁵ *El Adelantado*, 8 de abril de 1936.

⁷⁶ *El Adelantado*, 9 de abril de 1936.

⁷⁷ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 14.

⁷⁸ Arch. Prov. Caja J/6347, Exp. Resp. Civ. 99/37, contra los procesados por la causa 392/36, entre ellos Agripino Martín e Hilario Santa Cruz, alcalde y miembro de la Gestora de Navas de Oro, respectivamente. El informe de la Guardia Civil

Otras procesiones no se llegaron a celebrar, como en Martín Miguel, porque el alcalde no dejó que saliera del templo la imagen de San Isidro, “para evitar problemas con el gobernador civil”⁷⁹, a pesar de que los mozos del pueblo habían pedido la procesión. Otras veces era el cura quien prefería que no saliera el santo de la iglesia, para no tener complicaciones. Así ocurrió en Laguna de Contreras, pero el alcalde se empeñó en que se celebrara la procesión, bajo su responsabilidad, y así se hizo. Durante la comitiva hubo miembros de la Casa del Pueblo que se colocaron a la orilla de un río que nunca tenía peces –y que pasa por medio del pueblo- haciendo como que pescaban para *mofarse* de los integrantes de la procesión⁸⁰.

En Segovia, por decisión de las autoridades eclesiásticas no se celebró “por primera vez desde 1931”, procesión del Corpus Christi, en su lugar se realizó una fiesta *solemne* dentro de la catedral. Por el contrario, en Cuéllar fue el Ayuntamiento quien prohibió la procesión del Corpus, ordenando que el mercado que se celebraba siempre los jueves, se mantuviera en esa fecha, porque el Corpus no era festivo, impidiendo situar sus productos a los que quisieran ponerlos el miércoles. Pero *El Adelantado*, con el fin de encizañar la cuestión religiosa, ya suficientemente alterada, publicó la noticia tergiversándola, al escribir que el mercado “se celebra siempre en miércoles” y, esta vez lo iba a ser en jueves para así contrarrestar la fiesta del Corpus y tener excusa para prohibir la procesión, además “multando a los que lo hagan el miércoles”. La noticia así redactada provocó la protesta del alcalde de Cuéllar, el socialista Mariano Velasco. Ante la cual, el diario se excusó alegando que había tomado la noticia de un diario de Madrid y no de su corresponsal⁸¹.

1. 2. Las organizaciones políticas y sindicales

El índice de afiliación, tanto sindical como política, en la provincia de Segovia era muy reducido en comparación con otras provincias. No hay apenas datos oficiales sobre partidos o sindicatos, tan sólo se conoce el número de los militantes de la UGT en 1931, un total de 1.503, cuando ya, por ejemplo, en Ávila había 6.060; y los 270 afiliados del PSOE en junio de 1932⁸². Se podría hacer una estimación utilizando los testimonios recogidos y alguna documentación: los 74 maestros destituidos el 14 de agosto de 1936, por estar afiliados a Trabajadores de la Enseñanza, listados sin fecha de 274 albañiles y 15 carpinteros parados afiliados a la Casa del Pueblo de Segovia, un informe sobre el socio nº 305 de la sede obrera de Cuéllar y un *Volante* de UGT, sección Oficios Varios, de El Espinar, con el nº 144; en cualquier caso, se trata de apuntar una cifra orientativa que estaría en torno a los 3.000 afiliados a UGT, en toda la provincia, en julio de 1936. Además, en las fechas previas a la guerra se estaban creando centros obreros en distintas localidades: Matabuena, Zarzuela del Monte y otras. Como en el resto de España, a raíz del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero se produjo un incremento

acusaba a Chacón de consentir actitudes de prepotencia de la izquierda, en la misma línea que expone Contreras en su obra, como analizaremos más adelante.

⁷⁹ Testimonio de Domingo Rincón.

⁸⁰ Testimonio de Justiniana Melero. Pero no todos los incidentes en torno a las procesiones tenían motivación política. En Martín Muñoz de las Posadas tenían por costumbre -como en el resto de pueblos de la provincia- alargar la procesión sin causa que lo justificara, por bailar más tiempo delante del santo o de la Virgen. El alcalde Sr. Caro, recomendó a los jóvenes que depusieran su actitud, pero éstos le quitaron el bastón y hubo intento de agresión, por lo que al final fueron detenidos por la Guardia Civil, “ofreciendo resistencia”, como recoge el *Heraldo*, 7 de junio de 1936.

⁸¹ La información primera de *El Adelantado*, es del 10 de junio de 1936, y la aclaración del 15 de junio de 1936. La carta de Mariano Velasco se publica en el *Heraldo*, 21 de junio de 1936.

⁸² De NÚÑEZ ALONSO, Julio. *El movimiento obrero en la ciudad de Segovia durante la II República*. En Academia de Historia y Arte de San Quirce, *Segovia 1088-1988. Congreso de Historia de la Ciudad*. Actas. Junta de Castilla y León, 1991. Información obtenida del Boletín de UGT, nº 36, de diciembre de 1931 y Memoria del XIII Congreso del PSOE, respectivamente.

ostensible del número de afiliados, especialmente en los sindicatos de clase, por las nuevas perspectivas del Gobierno de izquierda, por ejemplo, con la vuelta a la legislación social y la reforma agraria.

En la provincia de Segovia, la organización sindical mayoritaria era la UGT, pues la CNT sólo contaba con secciones locales en Segovia, El Espinar, Ayllón y Linares del Arroyo. Entre las asociadas a la UGT predominaban, como correspondía al carácter mayoritariamente agrario de la provincia, las de Trabajadores de la Tierra con 55 agrupaciones locales. Otras secciones importantes eran la Madera en El Espinar, San Ildefonso y Valsaín, resineros en Coca y Nava de la Asunción; y en Segovia, "El Trabajo" de obreros albañiles, Trabajadores de la Enseñanza y Artes Blancas.

Por otro lado, tampoco disponemos de datos sobre afiliación a los sindicatos que se tildaban de "apolíticos", que eran de ideología conservadora y católica, pero deducimos que no estaban tan implantados como los marxistas por los editoriales de la prensa de derechas, ya citados, llamando al fortalecimiento de las organizaciones obreras de este signo agrupadas en la Casa del Trabajo.

En cuanto a los partidos políticos, como provincia de tradición conservadora, Acción Popular de Gil Robles, fundada y presidida en Segovia por Juan de Contreras, era la que contaba con más adeptos en la provincia. El partido Radical era la segunda fuerza de la derecha, aunque a larga distancia de AP; tuvo una importancia efímera en Segovia: un único diputado en 1933, en la persona del médico Eutiquiano Rebollar. Por su parte, los monárquicos de Renovación Española estaban liderados por Segundo Gila, médico propietario de una clínica y de la concesión de las gasolinas de la provincia.

En cuanto a la izquierda, los partidos más extendidos eran los republicanos: predominaba el Radical Socialista, con 39 agrupaciones locales⁸³, Izquierda Republicana contaba con 27 y Acción Republicana con 9. La Unión Republicana de Martínez Barrio tenía algo de fuerza en la capital y en algunos pueblos como Cuéllar y Nieva. Por el contrario, el PSOE tan sólo disponía "oficialmente" de 6 secciones (aunque mantenía su influencia a través de la UGT). El PCE contaba con agrupaciones en Segovia y Coca; además de algunos militantes en Valsaín y San Ildefonso. La Juventud Socialista Unificada estaba implantada en Cuéllar, Carbonero, San Ildefonso, Coca y Segovia.

Las organizaciones juveniles

Tratamos de un modo más exhaustivo las organizaciones juveniles puesto que desarrollaban más actividad de calle que los partidos, se hacían notar más y van a ser los protagonistas de muchos de los hechos que analizamos más adelante.

En primer lugar, el auge de las juventudes marxistas durante la primavera de 1936 merece una atención especial. Con la unificación de los jóvenes socialistas con los comunistas y la creación de las **Juventudes Socialistas Unificadas**, alcanzaron un total de 115.000 afiliados toda España⁸⁴. Cuenta el militante de Juventudes Socialistas Fausto Pérez que al unirse con los jóvenes comunistas había *"más acción, eran más lanzados los comunistas, leían y hablaban más"*⁸⁵.

El domingo 7 de junio se celebró en el campo de fútbol del Racing Club, enclavado a las afueras de Segovia, una concentración de las juventudes marxistas de toda la provincia. Presentó el acto Manuel Bear, secretario general de la JSU de Segovia, que dijo entre otras cosas: *"el campesinado se va cansando de suplicar sin que se le atienda (...) actos como el de hoy son muestra de que el triunfo del 16 de febrero supone algo más que*

⁸³ A pesar de que la fusión de Acción Republicana, el partido de Azaña, y el partido Radical Socialista de Marcelino Domingo, se había producido a finales de 1934 dando origen a Izquierda Republicana; así figuraba en la lista publicada en el BOP, 21 de septiembre de 1936, de los partidos declarados fuera de la ley por el Decreto 108.

⁸⁴ *El Adelantado*, 27 de marzo de 1936

⁸⁵ Testimonio de Fausto Pérez Bonín.

*quitar a unos para poner a otros*⁸⁶. Intervinieron además Leoncio Pérez, representando al Comité Nacional de unificación, Vicente Arroyo por el Partido Comunista y Luis Romero Solano, diputado socialista por Cáceres.

Además de los discursos, se hizo una demostración típica de las escenificaciones de la época, formando una estrella de cinco puntas en el centro del campo. Al terminar el acto, desfilaron desde el campo de fútbol hasta la Plaza Mayor. Marchaban en disposición alterna un joven comunista (con camisa azul que llevaba cosidas la hoz y el martillo y las siglas J.C.) y un joven socialista (con camisa roja y las siglas J.S.), pues con la unificación, cada organización conservó su uniforme tradicional. En *El Socialista* apareció una breve reseña del acto, aventurando una cifra de asistentes: *“calculan unos 5.000”*⁸⁷. Isidoro Romano, secretario de organización de JSU, cuenta que poco antes de comenzar la guerra eran unos 200 afiliados en Segovia y otros tantos entre La Granja y Cuéllar.

Las Juventudes marxistas hacían entrenamiento con un guía que les instruía en disciplina militar, pero sin utilizar armas, porque no disponían de ellas. Se llamaban ya milicianos. Con el cierre de las Casas del Pueblo, a raíz de los sucesos de octubre de 1934, los jóvenes socialistas y comunistas utilizaron, hasta febrero de 1936, las comparsas de carnaval como excusa para practicar los desfiles, porque así no les molestaba la policía, y también como fuente de ingresos. En los carnavales de 1935 y 1936 fueron a Madrid con dos comparsas: pelotaris y segadores.

La **Juventud de Izquierda Republicana** era otra organización que tenía gran influencia en Segovia, si bien exclusivamente en la capital (uno de sus dirigentes, Serapio Bermejo, cuenta que eran unos 40 afiliados⁸⁸). En las elecciones de febrero cobraron gran protagonismo en los actos públicos por la provincia, destacando el maestro Alejandro de Frutos secretario de propaganda (y tesorero de Trabajadores de la Enseñanza) y Servando Postigo presidente provincial. En mayo fue elegida una nueva junta directiva presidida por Albino García García⁸⁹.

A pesar de su ideología republicana –burguesa– de izquierdas tenían grandes simpatías por el pujante movimiento obrero, como se aprecia en la valoración de Servando Postigo sobre el 1 de mayo (que veremos más adelante), y se corroboró ya en julio en una carta de Albino García al *Heraldo*. Esta misiva había sido motivada por la publicación en *El Adelantado* de una pequeña columna sobre la excursión a Segovia de unos jóvenes de I.R. de Madrid. La crónica hablaba de *cánticos* en la Plaza Mayor, entre los que destacó *La Internacional* y *“unos mueras contra personas de la derecha”*, apostillando el diario con las típicas críticas provincianas: *“encima que vengan de fuera a turbar nuestra tranquilidad”*⁹⁰. La queja de la Juventud de I.R. de Segovia no se hizo esperar y su presidente escribió al *Heraldo* para defender el comportamiento de sus correligionarios. Explicaba Albino García que cantaron *La Internacional*, cuyo significado *“es establecer, en el mundo entero, un espíritu fraterno, capaz de destruir las lacras caciquiles que hoy le azotan, fomentando de esta manera la unidad humana”*. No se avergonzaba de cantar el himno marxista porque *“representa un grito de paz mundial y no de guerra civil; de emancipación colectiva y no de yugo tiránico que hace del ser un esclavo y, en fin, de justicias y libertades infinitas”*⁹¹.

⁸⁶ *Heraldo*, 14 de junio de 1936.

⁸⁷ *El Socialista*, 9 de junio de 1936.

⁸⁸ Testimonio de Serapio Bermejo.

⁸⁹ El resto de la dirección lo formaban: vicepresidente, Pablo Latorre, secretario, Antonio Tablada, vicesecretario, Victorio Martín, tesorero Serapio Bermejo, secretario de Propaganda. Pedro Romero y vocal en el partido Gregorio Peña.

⁹⁰ *El Adelantado*, 6 de julio de 1936.

⁹¹ *Heraldo*, 12 de julio de 1936. El dirigente juvenil finalizaba explicando que los visitantes habían mostrado su *desagrado* por los letreros que había en las calles contra dirigentes del FP, y llamaba la atención a quien le correspondiera limpiar. Sobre este aspecto, en el pleno del Ayuntamiento acordó que se borrarían todos los letreros ofensivos, ya fueran contra personas del FP, o de cualquier otro signo, como recogía *El Adelantado* de 11 de julio.

En **Falange**, a pesar de no tener organización juvenil específica antes de la guerra, la mayoría de sus militantes eran jóvenes, casi todos estudiantes. Adelino Martín de la Morena -entonces dirigente falangista segoviano- nos dice que antes de la guerra, en FE, “*seríamos una docena, los rojos unos 2000*”⁹². La diferencia parece clara entre la militancia de uno y otro bando, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de jóvenes derechistas estaban afiliados a la Juventud de Acción Popular. En cambio, al iniciarse el conflicto, la avalancha de nuevas afiliaciones fue a parar a FE y no a JAP. La actividad que realizaba este grupúsculo era repartir propaganda que venía de Madrid: el órgano de prensa *Falange*, octavillas y hojas grandes del tamaño de un periódico. La extracción social de la militancia era casi exclusivamente burguesa y pequeño burguesa, excepto Pedro Pardo, que era el único obrero del grupo.

Según este mismo testimonio, en la primavera de 1936, un simpatizante le dio a Adelino Martín 500 pts. para que las empleara en lo que quisiera, y compró 5 pistolas. Las organizaciones de izquierda sospechaban que los falangistas tenían armas, pero -cuenta Martín- no todos disponían de ella, sólo los dirigentes: Luis Hermosa, jefe provincial, su cuñado Dionisio Ridruejo, Adelino Martín, Manuel de Lecea y Ricardo Mateo. Sabemos por testimonios que Adelino Martín, venía los lunes a Segovia y enseñaba el agujero del abrigo por haber disparado por él, dando a entender que participaba en atentados en Madrid⁹³.

Falange no participó en reuniones en Segovia con otros grupos para la preparación del movimiento militar. Dice Martín que contaban con ellos como fuerza de choque pero sin informarles de los planes de acción. Además, él mismo y Mateo estaban presos el 19 de julio⁹⁴.

No había organización de Falange en la provincia, simplemente militantes aislados. De Sepúlveda eran Marcos Cristóbal y Braulio Abad -que estaban estudiando en Madrid- y Ángel Alonso que vivía en Segovia. De Coca era Arturo Acosta quien, por estudiar en Valladolid, pertenecía a FE de la capital castellana. Otro afiliado de la provincia era Adolfo Mediavilla, de San Cristóbal de la Vega. Las provocaciones fascistas se producían en cualquier localidad donde había militantes falangistas. En Sepúlveda, fue detenido Marcos Cristóbal por hacer el saludo fascista cuando la banda municipal interpretaba el himno nacional de la República. El alcalde, Fermín Sanz, le impuso una multa de 500 pts. y permaneció varios días en prisión por no pagar la sanción⁹⁵.

La **Juventud de Acción Popular**, sección juvenil de AP, estaba presidida por Francisco Martín y Gómez, periodista y propagandista de Acción Católica. Era la organización mayoritaria entre los jóvenes derechistas. Desde 1935 adoptó un discurso de tintes fascistas, tanto en sus proclamas como en sus concentraciones. Sirvan como ejemplo uno de los carteles colocados en un mitin de Fernández Ladreda, diputado de la CEDA por Asturias, en el teatro Cervantes de Segovia: “*Un sólo jefe indiscutible: ¡el nuestro! un sólo ideal realizable: el nuestro. Una madre común: España*”⁹⁶.

En la campaña electoral de febrero de 1936 el discurso se radicalizó hasta el punto de reconocer públicamente en un manifiesto “*Para la JAP el parlamentarismo es solo paso*”

⁹² Testimonio de Adelino Martín.

⁹³ Testimonio de Liborio López, quien además cuenta que a Hermosa, que siempre llevaba la pistola encima, una vez se le cayó el arma por la calle al sacar el pañuelo.

⁹⁴ Ricardo Mateo estaba preso desde los sucesos del baile *El Pensamiento*, el 8 de marzo (como explicamos más adelante); en cambio Adelino Martín, había estado detenido tres veces: del 11 al 21 de marzo, del 17 de abril al 22 de mayo y del 14 al 19 de julio. Martín afirma que se esperaba para el 25 de julio “*un levantamiento de los rojos*”, pero que la sublevación militar se precipitó con lo de Calvo Sotelo, que “*exacerbó los ánimos*”, los falangistas mataron a Castillo porque era “*jefe de milicias*”. A Calvo Sotelo, cuenta Martín “*ya lo había amenazado la izquierda en el parlamento, Pasionaria y Nelken: ‘su señoría tiene las horas contadas’*”.

⁹⁵ *Heraldo*, 12 de julio de 1936. Por su expediente penitenciario sabemos que fue detenido el 7 de julio, trasladado el 17 a la Prisión Provincial de Segovia, y liberado el 19 de julio, por orden del gobernador civil de los sublevados comandante España, junto a Adelino Martín.

⁹⁶ *La Ciudad y los Campos*, 30 de marzo de 1935. Fernández Ladreda sería gobernador civil de Segovia durante la posguerra.

*obligado hacia otro sistema más orgánico*⁹⁷. El panfleto en esencia no se diferencia de los que se prodigaron, una vez iniciada la guerra, para justificar la sublevación militar. “*Es la hora del ser o no ser*” de España. El tono era claramente belicista

A las elecciones, pues. Todos a sus puestos de lucha, que ella ha de ser harto dura y penosa. Firmes y en haz, atentos a la orden de marcha. No importa el cansancio, porque en la contienda se ventilan intereses sagrados, que son los de España madre y signo de naciones, resuelta a marcarse de una vez en su historia, la ruta de conquista de su Imperio⁹⁸.

Los japistas pedían “*todo el Poder para el Jefe*”, utilizando una clara terminología fascista; además, los pies de página eran muy similares a los de FE “*presente y adelante*”. En la campaña electoral de 1936, destacaron como propagandistas en multitud de actos sus dirigentes Martín y Gómez, Emilio Isasa y Agustín Merino, que también lo eran de Acción Católica.

1. 3. El Frente Popular

1. 3. 1. Las elecciones de febrero de 1936

El 16 de febrero de 1936 los españoles eran conscientes de la trascendencia de las elecciones. Todos los partidos se esforzaron en acudir agrupados a la contienda, pero fue la izquierda quien mejor lo consiguió a través del Frente Popular: republicanos, socialistas, comunistas y sindicalistas unidos bajo un programa común que incluso la tradicionalmente abstencionista CNT apoyó. Por el contrario, la derecha no logró la unidad de acción, por lo que la CEDA, Renovación Española y Falange presentaron candidaturas por separado (tan sólo hubo alianzas en algunas provincias). Entre ambos bloques enfrentados navegaban radicales y otros grupos como el recién creado por el jefe de Gobierno Portela Valladares⁹⁹.

Una primera toma de contacto con los principales elementos del conflicto en Segovia puede efectuarse en la Junta Provincial del Censo, donde estaban representadas las fuerzas políticas y sociales de la provincia. Había republicanos, obreros y propietarios: su presidente era Manuel Navasqués, presidente de la Audiencia Provincial de Segovia; vicepresidente Julián Santos Blanc, director del Instituto de Segunda Enseñanza; vocales: Juan Marco (Mateo) Elorriaga, delegado de Trabajo, Rufino Cano de Rueda como decano del Colegio de Abogados y presidente de la Cámara de Comercio, Luis Rincón, notario más antiguo, Mariano Fernández de Córdoba presidente de la Cámara de la Propiedad, César Montalvo presidente de la Federación Católica Agraria, Esteban Muñoz, presidente de la Sociedad “El Arte de Imprimir”, Antonio Hernanz presidente de la Casa del Pueblo, Vicente Casado presidente de los Albañiles, Bonifacio Tejedor, presidente de los Carpinteros, Anastasio de Lucas, presidente de los Obreros Pintores y Lorenzo Hurtado, de los Zapateros “El Progreso”¹⁰⁰.

En la provincia de Segovia las candidaturas estaban integradas por el exministro de agricultura de la CEDA, Giménez Fernández; Juan de Contreras (marqués de Lozoya,

⁹⁷ *La Ciudad y los Campos*, 11 de enero de 1936.

⁹⁸ *La Ciudad y los Campos*, 8 de febrero de 1936.

⁹⁹ Para una mayor profundización sobre estos comicios, el clásico de TUSELL, J. *Las elecciones del Frente Popular*. 2 vols. Edicusa, Madrid, 1971.

¹⁰⁰ Navasqués y Elorriaga, ambos republicanos, fueron depurados y el último fusilado el 27 de agosto; es curioso que Rufino Cano titular de ambas instituciones fue designado para la Junta Electoral, por las dos, aunque, al presentarse de nuevo a diputado -ya lo era desde 1931- no desempeñó el cargo. Fernández de Córdoba, que había sido diputado de CEDA en 1933, ahora dejó el puesto en la candidatura contrarrevolucionaria a Cano de Rueda. También de ideología conservadora era Montalvo. El resto de representantes de organizaciones obreras eran asociados a UGT: Muñoz, 1º teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia, Hernanz, presidente de la Casa del Pueblo (fusilado el 31 de agosto), y Tejedor, Lucas y Hurtado, presidentes de sus sociedades respectivas. Santos Blanc había sido directivo del partido Radical Socialista en 1931. Desconocemos la adscripción política de Rincón.

cronista de la ciudad, rector del Centro de Estudios Universitarios –CEU- y de los cursos de verano de Santander, presidente provincial de AP, diputado en 1933 y dueño del semanario *La Ciudad y los Campos*) y Rufino Cano de Rueda (agrario, propietario de *El Adelantado*, como hemos referido decano del Colegio de Abogados y presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Segovia, con un largo historial político: había sido senador con la monarquía y diputado en 1931 y 1933). Por su parte, el Frente Popular presentó a Arturo Martín de Nicolás, médico, de U.R.; el también médico Francisco Martín de Antonio, de I.R. y el socialista Modesto Arranz, natural de Segovia, pero residente en Madrid, donde era el vicepresidente de la Federación de Transportes de UGT.

Además de las fuerzas mayoritarias, se presentaron los candidatos del proyecto centrista de Portela, Hipólito González Parrado y José Zubizarreta Gutiérrez; representaban al partido Radical el médico Eutiquiano Rebollar, diputado en 1933, y José María Codina; y finalmente, por el partido Progresista de Cirilo del Río, el canónigo republicano Jerónimo García Gallego, que ya fue diputado en las Constituyentes. Por otro lado, ni el Bloque Nacional ni Falange se presentaron en Segovia, manifestando su apoyo a la candidatura contrarrevolucionaria¹⁰¹.

La campaña electoral se desarrolló con pasión, pero sin incidentes ni actos de violencia¹⁰². La prensa se diversificó en el respaldo a las distintas candidaturas: *El Adelantado* apoyaba a su propietario Cano de Rueda, mientras que *La Ciudad y los Campos* también hacía lo propio con el suyo, Juan de Contreras, ambos unidos “*contra el laicismo, el separatismo, el marxismo. Votad a España*”. La propaganda electoral de la derecha era casi apocalíptica:

Afiliados a Acción Popular, en pie

Simpatizantes, propietarios, obreros, personas de todo orden

Segovianos

El jefe convoca a todos para la gran cruzada contra los enemigos de la religión y de la patria

El va en cabeza dando ejemplo de dignidad y gallardía

Acudid todos al llamamiento que os hace para templar los ánimos pensando en España, para disponernos a luchar por España y, si es preciso, morir por España¹⁰³.

La propaganda de los conservadores se centraba en los ataques al Frente Popular (que traía *la revolución bajo las órdenes de Moscú*), a la candidatura centrista de Portela (a los que acusaba de masones) y a García Gallego, al que pretendía desprestigiar por su defensa de la legalidad republicana, hasta que consiguió que el obispo de Segovia, Pérez Platero, lo suspendiera *a divinis*, por presentarse a las elecciones sin su permiso¹⁰⁴. En la portada de *La Ciudad y los Campos* se decía que “*en las próximas elecciones se ventila un régimen social*”; no escatimaba alarmar al interpretar lo que decían supuestos simpatizantes de las izquierdas cuando salían de un mitin socialista en el que se criticó a la religión y se elogió a la revolución de Asturias: “*Esto es una vergüenza es cierto lo que dice la prensa, las izquierdas son la revolución, el desorden, el caos, yo no puedo votar a esta gente, no hay más remedio que ser de derechas*”¹⁰⁵. También aprovecharon la pastoral del primado de Toledo, cardenal Gomá, en la que pedía “*la unión de todos los*

¹⁰¹ *La Ciudad y los Campos*, 25 de enero de 1936, publicó una nota del Bloque Nacional, en la que explicaba que, a pesar del auge de su fuerza en la provincia de Segovia, “*como ya se ha cerrado el pacto de las derechas, sin participación del Bloque*”, no hacían candidatura distinta y pedían que se votara la “*candidatura íntegra de derechas*”. Por su parte, durante la jornada electoral, los pocos falangistas de Segovia, entre otros servicios realizados con un coche de la fábrica de Loza, llevaron a las monjas del hospicio a votar, según cuenta Adelino Martín.

¹⁰² Para afrontar los gastos de las elecciones, los partidos organizaron suscripciones populares como la que inició la CdP que recogía los donativos en la papelería de Carlos Martín, editor del *Heraldo*. La derecha también planteó iniciativas con el mismo fin.

¹⁰³ *La Ciudad y los Campos*, 4 de enero de 1936.

¹⁰⁴ *El Adelantado*, 11 de febrero de 1936.

¹⁰⁵ *La Ciudad y los Campos*, 1 de febrero de 1936.

*católicos y la recomendación expresa de que todos los partidos de afirmación religiosa - unidos estrechamente, sin hostilizarse en aquello que es accidental y transitorio- sumen la mayor fuerza de votos, yendo a la conquista del poder político para la tutela de los intereses de orden religioso*¹⁰⁶.

El Adelantado no se quedaba atrás en la campaña, y anunciaba a los electores el significado del marxismo:

El marxismo es esto: Tus hijos del estado, tu taller del estado; tus tierras y ganado del estado; tú mismo, siervo del estado¹⁰⁷.

Por su parte, el *Heraldo*, apoyaba a la candidatura izquierdista, uno de cuyos objetivos fundamentales era captar al electorado rural más propenso a las tendencias conservadoras por su tradicional religiosidad y por creerse integrantes de la misma clase social que los grandes propietarios y terratenientes, que basaban su riqueza en la explotación de jornaleros o renteros. En contraposición con aquéllos, los labradores castellanos, en su mayoría pequeños propietarios, debían trabajar de sol a sol, durante todos los días del año, y a lo largo de todos los años de sus vidas para obtener lo justo para vivir. Para concienciar a los labradores, el Frente Popular publicaba estos anuncios:

Agricultor: si no puedes vivir sin trabajar tus tierras, si has de trabajar todos los días, no eres propietario, eres trabajador. Tus enemigos todos los que no trabajan¹⁰⁸.

Entre ambas opciones de la prensa segoviana, el periódico *Diario de Segovia*, creado expresamente en enero de 1936 para las elecciones, suscribía el proyecto del jefe de Gobierno Portela con los candidatos en Segovia Hipólito González y José Zubizarreta.

Las candidaturas recibieron sus apoyos de distintos sectores, como el sindicato de profesores Trabajadores de la Enseñanza, que pedía el voto para el Frente Popular, de igual modo que hicieron algunos maestros de la provincia, que participaron en la campaña electoral con colaboraciones en el *Heraldo*, tomando la palabra en los mítines o presentando los actos de la coalición de izquierdas en las localidades donde trabajaban como maestros. En cambio, la Federación Católica Agraria apoyaba a la CEDA, como se recogía en un anuncio publicado en la prensa:

Unos por otros y Dios con todos (...) es un deber moral unirte con tus hermanos de clase¹⁰⁹.

Se desarrollaron actos electorales en todas las localidades importantes de la provincia¹¹⁰, pues todas las candidaturas eran conscientes de la importancia de estas elecciones. Los republicanos de la provincia se movilizaron para evitar que hubiera manipulaciones o coacciones en las mesas electorales, tan habituales en las zonas rurales. Ejemplo de ello es la carta que el maestro de Montuenga, Bernabé Ranz Vázquez -afiliado a Izquierda Republicana- remitió a su presidente provincial: "*dada la proximidad del gran comicio y con el fin de que la mesa electoral de este pueblo esté controlada por personas solventes y de probado republicanismo*", proponía a varios vecinos del pueblo como interventores, pues

con esta intervención queda absolutamente garantizada la mesa de asaltos y trampas de la reacción. La opinión izquierdista de este pueblo (baluarte pequeñito de la República), está ansiosa de oír la palabra de los candidatos aunque sólo sea por breves momentos. Según informes, el pueblo de Martín Muñoz de las Posadas que siempre se distinguió por su

¹⁰⁶ *La Ciudad y los Campos*, 1 de febrero de 1936.

¹⁰⁷ *El Adelantado*, 10 de febrero de 1936.

¹⁰⁸ *Heraldo*, 16 de febrero de 1936.

¹⁰⁹ *La Ciudad y los Campos*, 20 de enero de 1936.

¹¹⁰ Y también en algunas localidades pequeñas como en Fuente el Olmo de Fuentidueña, donde en un mitin de izquierda en un salón del pueblo, se presentaron jóvenes de derecha que cuando los organizadores lanzaron vivas a Largo, una joven dijo ¡Viva Gil Robles!, a lo que hubo un cruce de réplicas: unos contestaron "*un moñigo para esa boca*" y los otros "*para la tuya salada, que la mía la tengo bien limpia*". Testimonio de Irene Arranz Gómez.

derechismo, parece ser que ha experimentado un gran cambio hacia la izquierda, hasta el extremo de no dejar hablar a Giménez Fernández. Dada la importancia de ese pueblo sería conveniente celebrar en él un acto público. Sobre esto les podría informar el correligionario maestro del Hospicio de Segovia, Mariano Izquierdo. Codorniz, pueblo próximo a éste, tampoco debe quedar sin mitin, machacando sobre el trigo, renta y desahucios¹¹¹.

Para terminar, Ranz Vázquez recomendaba tomar unas precauciones con el fin de evitar desvíos de la propaganda, *“habiendo peligro de que la correspondencia y material de propaganda no llegue a nuestro poder sería conveniente fuese certificada”*¹¹².

El resultado de las elecciones de febrero de 1936 en Segovia fue el triunfo de la *“candidatura contrarrevolucionaria de derechas”*, con los tres diputados que correspondían a las mayorías. De un total de 95.456 electores, votaron 75.088 lo que representa el 78,66%. El candidato más votado fue el exministro Giménez Fernández con 38.640 sufragios -el 51,45% del total- (hay que recordar que en las elecciones durante el periodo republicano se votaba en listas abiertas a las personas, independientemente de la candidatura de la que formaran parte cada candidato¹¹³). Los otros diputados electos de la derecha fueron Juan de Contreras y Rufino Cano de Rueda. Por su parte, el médico Arturo Martín de Nicolás, de Unión Republicana, obtuvo el único acta de diputado por el Frente Popular por ser el más votado de esta coalición, con 25.853 sufragios (el 34,43%), seguido de Francisco Martín de Antonio, de Izquierda Republicana con 24.880. Por último, el candidato socialista Modesto Arranz Velasco se quedó en 19.452 votos¹¹⁴.

Cuadro nº 7: Resultado de las elecciones de febrero de 1936

Candidato	Partido	Nº votos	Porcentaje
Giménez Fernández	CEDA	38.640	51,45%
Juan de Contreras	CEDA	38.041	50,66%
Rufino Cano de Rueda	Agrario	29.864	39,77%
Arturo Martín de Nicolás	Unión Republicana	25.853	34,43%
Francisco Martín de Antonio	Izquierda Republicana	24.880	33,13%
Modesto Arranz Velasco	PSOE	19.452	25,90%

El Frente Popular obtuvo un holgado triunfo en algunas localidades como San Ildefonso, Carbonero el Mayor, Nava de la Asunción, Palazuelos, Zarzuela del Monte, Otero de Herreros o Navas de San Antonio. En otras localidades como Cuéllar, Bernardos, El Espinar o Segovia, el triunfo de la derecha fue más ajustado.

Con los resultados de las elecciones, en esta provincia se produjo una situación paradójica, porque ganó claramente la derecha pero, como a nivel nacional el triunfo correspondió al Frente Popular, sus seguidores de Segovia se alegraron enormemente y lo celebraron por toda la provincia. Se organizaron manifestaciones de júbilo en numerosas localidades: Cuéllar, San Rafael, San Ildefonso, Segovia, etc. En *El Adelantado* de 21 de febrero aparecía la crónica de una manifestación sin incidentes, en Segovia, desde la Casa del Pueblo -encabezada por dirigentes de la misma e I.R.- hasta el Gobierno Civil, donde el

¹¹¹ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Bernabé Ranz, depurado y fusilado. Informe nº 502 del Gobierno Civil, Segovia, 21 de marzo de 1937.

¹¹² Ver nota anterior.

¹¹³ Un elector podía votar en la misma papeleta, por ejemplo, a Contreras, Martín de Nicolás y Giménez Fernández.

¹¹⁴ Los datos oficiales de las elecciones se publicaron en *El Adelantado*, 20 de febrero de 1936, *La Ciudad y los Campos*, del 22 de febrero de 1936, y *Heraldo* del 26 de febrero de 1936, así como en el *BOP*, del 24 de febrero de 1936. Como curiosidad, en algunas localidades aparecieron votos a algunas personas que no se presentaban a las elecciones por la circunscripción de Segovia: Manuel Azaña, Largo Caballero, o personajes de carácter nacional, General Sanjurjo, o locales como el cacique de Navas de Oro, Basilio Mesa.

presidente de la organización obrera, Antonio Hernanz, habló a los congregados y expresó la “satisfacción de las izquierdas segovianas por el triunfo en las elecciones”. Igualmente se produjo una manifestación en La Granja y en Cuéllar, donde el que habló al público congregado fue el maestro Juan Monje, presidente local de I.R.¹¹⁵.

Sobre este “desajuste” entre los resultados de Segovia y el resto de España, aparecía una carta muy significativa en el *Heraldo*, en la que el colaborador expresaba su pesadumbre porque en España avanzaban las fuerzas progresistas y en cambio, Segovia se mantenía mayoritariamente aferrada a la derecha más conservadora. Escribía así el remitente de Escalona “*Me es muy duro, pero no puedo por menos de decir, que casi se avergüenza uno de ser segoviano ¿a qué altura moral e intelectual se ha colocado esta provincia (...) que cuando las demás dan un paso hacia el progreso, Segovia da tres a retaguardia?*”¹¹⁶.

Por el contrario, Juan de Contreras tituló en su obra: “*Gran victoria de Acción Popular*”, para, a continuación, expresar que “*el advenimiento al poder del FP avivó los entusiasmos y las esperanzas de la minoría izquierdista de la provincia*”. En su semanario *La Ciudad y los Campos* aparecía un titular en portada, que se publicó durante varios números, en el que se exponía el pragmatismo de la formación:

Ante el resultado electoral, ni pesimismo ni depresión. Las derechas españolas deben desde ahora, tener esta consigna: A TRABAJAR COMO SI NADA HUBIERA OCURRIDO. Hay que cumplir con el deber de cada día; más aún con el deber de cada hora¹¹⁷.

1. 3. 2. La actuación del Gobierno del Frente Popular

El triunfo del Frente Popular en las elecciones originó un rápido cambio -incluso antes de la constitución del nuevo parlamento- en el Gobierno de Madrid, del que se hizo cargo Manuel Azaña, lo que desencadenó la sustitución de gobernadores civiles. Para este puesto en Segovia fue nombrado, el 20 de febrero, Adolfo Chacón de la Mata, afiliado a Unión Republicana. El único diputado del Frente Popular, Martín de Nicolás, fue designado director general de Aduanas. Pedro Romero, de I.R. -que había sido diputado por Segovia de las constituyentes- obtuvo el cargo de delegado de los Ferrocarriles Andaluces. Miguel Benavides, dirigente local de I.R., fue destinado como gobernador civil a Guadalajara. Entre las reposiciones destacó la del administrador del Patrimonio de la República, el funcionario de Hacienda Luis Fernández Cordero, ya nombrado en el primer Gobierno republicano y que había sido cesado durante el bienio negro.

Desde las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que provocaron la proclamación de la República, no se habían producido comicios locales, si bien, algunos ayuntamientos de la provincia habían sido remodelados con los diferentes cambios de gobierno, a partir de 1933 y, especialmente, tras la revolución de octubre. El Gobierno Civil, asesorado por los representantes del Frente Popular de las distintas localidades nombró gestoras en los pueblos más importantes. En algunos, como Samboal, no se llegó a concretar la nueva Gestora en el Ayuntamiento, aunque ya estaban designadas las personas que las iban a integrar¹¹⁸.

¹¹⁵ *Heraldo*, 23 de febrero de 1936.

¹¹⁶ *Heraldo*, 8 de marzo de 1936.

¹¹⁷ *La Ciudad y los Campos*, 22 de febrero de 1936. En mayúsculas en el original.

¹¹⁸ En el mes de marzo en El Espinar se produjo una asamblea de simpatizantes del FP para elegir a los concejales, aunque no hemos podido averiguar si el objetivo de la misma era elegir una Gestora o confeccionar una candidatura para las elecciones municipales. Una vez iniciada la guerra, los asistentes fueron procesados por la Audiencia Provincial, con el nº de sumario 122/36, acusados de reunión ilegal. Es de los pocos sumarios civiles que se desarrolló tras el 19 de julio, porque enjuiciaba hechos anteriores a la sublevación. La sentencia fue absolutoria para 12 personas, que fueron liberadas por esta causa y otras 13 condenadas a un año de prisión y multa de 250 pts.

Con el fin de que las organizaciones locales del Frente Popular remitieran sus propuestas, la Agrupación Socialista de Segovia remitió una circular a todas las casas del pueblo de la provincia para que, reunidos los representantes del Frente Popular de la localidad (en la mayoría de los casos UGT, PSOE e I.R., a los que, en algunos pueblos, se añadían U.R. y PCE), propusieran las personas que ellos creyeran más competentes para integrar la Comisión Gestora de su municipio. Se han podido consultar dos contestaciones, porque fueron redactadas y firmadas por sendos maestros depurados, entre cuya documentación figuran estas cartas.

La primera es del referido maestro de Montuenga, Bernabé Ranz Vázquez, en la que comunicaba que *“caso de ser destituido este ayuntamiento lo sean todos los concejales menos Rufino Lumbreras González adscrito a Unión Republicana”*. Además aprovechaba la misiva para proponer los nombramientos de vocales del jurado mixto agrario¹¹⁹.

La segunda está suscrita por los *“camaradas socialistas y republicanos de este pueblo”* -Laguna de Contreras-, entre los que aparece el maestro Valentin Saínz Pardo. En principio, remitían los nombres de los que *“consideramos insobornables”*, pero, al mismo tiempo, hacían constar una serie de consideraciones:

Primero: que vemos con agrado la decisión de nombrar gestores. Segundo: que esta decisión no debe quebrantarse por ningún motivo. Tercero: que se impone, mejor hoy que mañana, el pase culminante del control municipal de manos de la recaudación a las de auténticos republicanos. Cuarto: que sería de deplorable efecto y hundiría definitivamente el régimen, como igualmente ocasionaría incalculable perjuicio a la causa proletaria, el que por segunda vez y por juridicidades idiotas y suicidas, tuviéramos que seguir luchando en estos pueblos contra el cacique, sin más armas que nuestra probada vocación al martiriología, (...) sin más amparo oficial que el de los mismos caciques a quienes combatimos. Quinto: que consideramos también de inaplazable resolución el lanzamiento del juez municipal; hechura (de) Cano de Rueda y poderosa arma en manos de los caciques.....(sic) que si hemos de tropezar con los mismos inconvenientes de tipo legal y jurídico que tropezamos a partir del 14 de abril de 1931, y desde arriba no se nos ayuda (...) nos dan medios coercitivos para poder imponer la ley republicana y hacer acatar las instrucciones a todo bicho (sic) viviente y si una vez que jugándonos la paz y la tranquilidad, hemos podido llevar al gobierno a quien quisimos llevar, éste a su vez no nos ayuda para que por fin en los pueblos pasemos de ser los pistoleros, la canalla, etc. a ser los que hemos de hacer acatar las leyes y cumplir a rajatabla las disposiciones que el gobierno haya de dar, entonces, ante el segundo desengaño, dejaremos de ser canallas, pistoleros, etc. y nos dedicaremos a ir a misa, oír sermones y limpiar los faldones del señorito; pues al fin y a la postre nuestros hijos tendrán pan y nosotros tendremos tranquilidad y trabajo, evitándonos persecuciones y compromisos¹²⁰.

El Ayuntamiento de Segovia fue de los pocos consistorios que se mantuvo con los mismos concejales desde abril de 1931, aunque algunos, como Pedro Rincón, habían estado ausentes *“durante largo tiempo”*¹²¹. En el mes de febrero de 1936 dimitió el alcalde, Pascual Guajardo, por motivos de salud, quedando como alcalde accidental, el ugetista Esteban Muñoz. En mayo, se produjo la elección definitiva como primer edil de nuevo de Pedro Rincón, que incluso permanecería en el cargo tras la sublevación militar¹²².

¹¹⁹ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Bernabé Ranz. Gobierno Civil: Informe nº 502. Segovia, 21 de marzo 1937. Carta fechada en Montuenga, el 9 de marzo de 1936.

¹²⁰ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Valentin Sainz Pardo. Informe nº 156, del gob. civ.

¹²¹ *El Adelantado*, 14 de marzo de 1936. Pedro Rincón había sido destituido en mayo de 1934 por el gobernador civil del Gobierno radical tras la agresión a Esteban Muñoz, 1º teniente alcalde y dirigente de UGT, que precisamente lo sustituyó en el cargo. Este atentado estaba motivado por la polémica que supuso la implantación de los contadores de agua, y provocó una huelga general de 24 horas de protesta de tres secciones de UGT: tipógrafos -de la que era presidente Muñoz-, albañiles y metalúrgicos. La huelga se produjo el 14 de mayo de 1934.

¹²² Había sido presidente del partido Radical Socialista de Segovia en 1931, pero más adelante se fue distanciando de la izquierda republicana, hasta el punto de que le votaron -ahora en mayo de 1936- los concejales de la derecha. Su primer

El Adelantado -a pesar de reconocer que se había rebasado con gran exceso su mandato y se habían sustituido muchos ayuntamientos por defunción y otras causas- fiel a su línea editorial conservadora y opuesta al Gobierno del Frente Popular, se manifestaba contrario a los nombramientos de gestoras, así titulaba *"Destitución de ayuntamientos de elección popular, sustituidos por gestoras, de socialistas y republicanos"*; pero no escribía sobre las gestoras nombradas durante los gobiernos radical-cedistas de 1934 y 1935. Ya en enero de 1936 se había repuesto la corporación elegida en 1931 en La Granja de San Ildefonso, con su alcalde Aquilino Gómez, de Izquierda Republicana, a la cabeza. En marzo de 1936, son designadas gestoras en Cuéllar, Mudrián, Navas de Oro, Navalilla y Nieva¹²³. El diario conservador escribía que en otros pueblos también se producían nombramientos, pero sin especificar la localidad. En el *Heraldo* aparecían otras localidades con nueva Gestora, no mencionadas por *El Adelantado*, como Carbonero, Bernardos y Sepúlveda¹²⁴.

Daniel Cristóbal, que era el corresponsal del *Heraldo* en Sepúlveda, nos cuenta que, a partir del nombramiento de la nueva Gestora, los plenos se celebraban a las 8 de la tarde, cuando antes eran a las 12 de la mañana para que no acudiera público. A lo que se añadía ahora el grito ¡Viva la República! al finalizar los plenos, que *"antes no se oía"*¹²⁵.

Como consecuencia de los cambios operados en numerosos ayuntamientos se produjo una renovación en la Diputación Provincial, corporación integrada por los representantes de los municipios. La nueva Comisión Gestora, que tomó posesión el 22 de marzo, pasó a estar dominada por el Frente Popular, siendo elegido presidente el socialista Demetrio Hoyos (1º teniente de alcalde de San Ildefonso y presidente de su Casa del Pueblo, ya había sido gestor de la Diputación, destituido por el gobernador civil a raíz de su detención por su papel en la Revolución de Octubre de 1934¹²⁶) y vicepresidente Antonio Linaje, concejal de Sepúlveda y dirigente de I.R.

Paralelamente a los cambios en las autoridades, según *El Adelantado*, se produjeron algunas destituciones de funcionarios que -aunque no se han podido comprobar- motivaron la intervención del gobernador civil dictando algunas instrucciones que obligaban a limitarse a la normativa legal vigente, de 1934 y 1935¹²⁷. Entre la documentación requisada -durante la guerra- en casa de Joaquín Muñoz de Luna, dirigente de U.R. de Segovia, apareció alguna correspondencia y telegramas con Manuel Azaña

gesto fue dejar las 500 pts. que le correspondían de asignación como alcalde para beneficio del paro obrero.

¹²³ *El Adelantado*, 16 de marzo de 1936. Los nuevos concejales eran: Cuéllar: Pedro García, Tomás Cano, Juan Marinero y Mariano Senovilla, de I.R.; Andrés Rodrigo, Adrián Montero, Mariano Velasco, Rafael Sanz, José Redondo, Ramiro Blanco, Valentín Velasco y Gabriel González, socialistas. En mayo dimitió el alcalde José Redondo, sustituido su puesto de concejal por Juan de Dios. Navas de Oro: *"sólo queda anterior Joaquín Bartolomé, elegido alcalde, mayoría de concejales socialistas"*. De Mudrián no publicaron los nombres, pero sabemos que fue nombrado alcalde Saturnino de Lucas. Navalilla: Ángel Sacristán Rodríguez, Simón Tanarro Merino, Simeón Plaza Hidalgo, Eusebio Sacristán González, Dionisio López Vaquerizo, Cesáreo Merino Merino y Agapito José. Nieva: Antonio Hernanz, José Hernández, Máximo Olalla, Ignacio del Mercado, Tomás Martín (hasta aquí U.R.), Esteban Hernanz (socialista) y José Hernanz (I.R.).

¹²⁴ Carbonero: Matías Manso, Aquilino Pajares, Regino Sanz, Frutos Antón, Lucio Mateos, Amós López, Miguel Quiza López, Florentino Rubio, Regino Arévalo, Domingo y Juan Arévalo; Bernardos: Dimas Cañas Riz, Fabriciano Molinero, Sergio de Frutos; Mariano Casas, Clemente Casas, Félix Gaitero y Florencio Escolar. Sepúlveda: Elías Sanz, Antonino Albarrán, Antonio Linaje, Pedro Antón, Pablo de Barrio, Pablo García, Eleuterio Herranz, Félix Casado y Juan Cristóbal. Además publica la identidad de los gestores de Navas de Oro que no aparecían en *El Adelantado*: Agripino Martín Bartolomé, Hilario Santa Cruz Revuelta, Ciriaco Gallego Arévalo, Joaquín Bartolome Gallego, Pablo Gil Martín, Elías Herrero Heras, Florencio de Pablos Rubio, Daniel de Pablos Villacorta y Felipe Gómez Mayo. Por *El Adelantado* de 12 de junio conocemos que también hubo Gestora frentepopulista en Chañe, pues aparece la destitución de su presidente -de U.R.- por desobedecer al gobernador civil. Por otro lado, con la destitución de las gestoras publicada en *El Adelantado* del 31 de julio de 1936, conocemos otros ayuntamientos donde dominaban los republicanos: Santa María de Nieva, Encinillas, Coca, Aguilafuente y Pinarejos.

¹²⁵ *Heraldo*, 17 de mayo de 1936. Crónica firmada por Daniel Cristóbal, confirmada con su testimonio.

¹²⁶ El gobernador civil justificó la destitución de Demetrio Hoyos, por *"no haber correspondido a la confianza que en él puso el gobernador siendo el ministro Martínez Barrio"* y además *"su comportamiento en el desempeño del cargo no satisfacía el deseo de la opinión"*, como recogía *El Adelantado* de 9 de octubre de 1934. Hoyos había participado activamente, como presidente de la Casa del Pueblo, en la huelga de octubre en San Ildefonso.

¹²⁷ *El Adelantado*, 17 de marzo de 1936.

*“pidiendo la destitución de los jefes y jefecillos de las dependencias oficiales que no fuesen republicanos; una instancia dirigida al ministro de Comunicaciones solicitando una selección del personal a ellas adscrito y el mando de las jefaturas a personas leales a la República”*¹²⁸. En el *Heraldo* no se ha encontrado información sobre este tema, si acaso una de las peticiones del Frente Popular de Cuéllar, en asamblea celebrada en junio, era la *“republicanización total y escrupulosa del Ejército y empleados de los ministerios, provincias y municipios”*, para ello, los peticionarios eran tremendamente expeditivos: *“decretándose la expulsión sin reconocimiento de ningún derecho a los que sean o demuestren desafecto al régimen”*¹²⁹.

A nivel institucional, otra de las muchas reformas que afrontó el Gobierno del Frente Popular fue la renovación de la justicia municipal. En el *Heraldo*, Pablo Riaño -director del semanario profesional *El Secretariado Segoviano*- publicó algunos artículos denunciando que la justicia municipal rural estaba *“dominada por los caciques, que son los que asisten a los concursos, para tener en su mano un resorte que les pueda facilitar el triunfo en futuras contiendas electorales”*. Por ello abogaba por un cambio radical, una renovación de la justicia municipal, para lo que pedía que se seleccionara cuidadosamente a estas personas con el fin de *“registrar el avance iniciado en la extirpación del caciquismo que es el germen de toda la corrupción social”*¹³⁰.

Pero, sin duda alguna, uno de los puntos principales del programa electoral del Frente Popular era la amnistía para los presos por la revolución de 1934, e incluía la readmisión de los obreros despedidos por la misma causa. A raíz de la huelga general de octubre de 1934, en la provincia de Segovia habían sido despedidos numerosos obreros, entre los que destacaban, como el grupo más importante, los 62 trabajadores de la fábrica Klein de la capital. También hubo un nutrido grupo de obreros expulsados del Patrimonio de la República en San Ildefonso. La readmisión de los despedidos va a ser una excusa más de los sectores conservadores de la capital para polemizar con el gobierno provincial y nacional.

Ya el 22 de febrero, en la toma de posesión del Gobierno Civil, Chacón de la Mata, abordó el tema de los obreros despedidos de Segovia y San Ildefonso. El 6 de marzo fueron readmitidos, por orden gubernativa, los 62 trabajadores de la Klein, motivo por el cual se produjo el despido de sus sustitutos. *El Adelantado* apoyaba a los despedidos ahora, en cambio, en 1934 no había tenido la misma sensibilidad con los obreros expulsados a raíz la huelga.

El día siguiente, 7 de marzo, el gobernador civil nombró una Comisión Mixta Arbitral para la Readmisión de Obreros, presidida por el delegado de Trabajo, Juan Marco Elorriaga. Por la patronal fueron elegidos: Venancio Reguera Antón, Juan Carretero Vera y Juan Gil Escorial, representantes de las familias propietarias más importantes de la capital. Por los obreros los elegidos eran activos miembros de UGT: Antonio Hernanz Benito, presidente de la Casa del Pueblo, y Vicente Galocha Estaire, y suplentes: Celedonio González Ortega y Alejandro González González. Los trabajos de la comisión se hicieron notar pronto, pues el 13 de marzo muchos obreros ya habían sido *“readmitidos, y otros están en proceso”*¹³¹.

De los 4 presos de Segovia que quedaban, todavía en 1936, por los sucesos de octubre, fueron liberados -poco antes de las elecciones de febrero por conmutación de penas- Francisco Polo, Manuel Bear y Celedonio González. El 22 de febrero fue liberado el último preso, Demetrio Hoyos, presidente de la Casa del Pueblo de San Ildefonso y

¹²⁸ Arch. Prov. Caja J/6350, Exp. Resp. Civ. 1/37, Joaquín Muñoz de Luna. El entrecomillado es del informe de la Comisaría, por tanto no son textuales de las cartas del imputado, aunque dicho informe podría ser copia literal de las cartas.

¹²⁹ *Heraldo*, 7 de junio de 1936.

¹³⁰ *Heraldo*, 7 de junio de 1936.

¹³¹ *El Adelantado*, 13 de marzo de 1936.

teniente de alcalde de su Ayuntamiento. Pocos días después se celebró un homenaje en Segovia y La Granja a los presos liberados¹³².

1. 4. Los escenarios del conflicto entre izquierda y derecha

A lo largo de la primavera de 1936 la lucha política entre la izquierda y la derecha se desenvolvió en los distintos escenarios que vamos a analizar. La radicalización del enfrentamiento alcanzó cotas elevadas, pero no llegó a derramarse sangre hasta que las fuerzas militares de Segovia se sublevaron, en la mañana del 19 de julio.

1. 4. 1. Las elecciones municipales y a compromisarios

La renovación de los ayuntamientos elegidos en 1931 se iba a realizar el 12 de abril, aniversario de aquellas elecciones. En Segovia la representante de la patronal, la Cámara de Comercio e Industria, a través de su presidente Rufino Cano, presentó para alcalde al abogado Antonio Sanz Gilsanz, presidente local de AP, optando claramente por una opción política. Días después se produjo el anuncio de AP apoyando a Sanz Gilsanz. El Círculo Tradicionalista presentó como candidato a Manuel García Redondo, representante de la Juventud del partido. Por su parte, el Frente Popular mantenía su coalición que incluía representantes de cuatro partidos: por el PSOE Antonio Artalejo, (ferroviario, que ya era concejal desde 1931), Antonio Hernanz (obrero, dirigente de UGT), Enrique Pérez Bonín (abogado y dirigente del PSOE) y Manuel Bear (secretario general de JSU); I.R. propuso a José Carrasco (militar retirado, presidente provincial del partido), José Gutiérrez (empleado de Correos) y Tomás Gómez Parada (industrial), ambos de la junta directiva; U.R. designó a José Calderón González (militar retirado) y Carlos López (industrial); y por último, el PCE proponía a Alejandro González Gómez, dibujante, directivo de la Sociedad de Amigos de las Bellas Artes y miembro del Comité Provincial del partido¹³³.

Ante la posibilidad que estudiaba la CEDA de no participar en las elecciones, en *El Adelantado* apareció un editorial sin firma -muy breve, bajo el título *A las elecciones se debe acudir-* donde se abogaba por dicha participación porque “*ciudades y pueblos deben proteger intereses económicos*” pues quedarían “*indefensos*” con los socialistas. Además de escribir sobre la necesidad de que las “*clases agrarias, mercantiles e industriales se agrupen para la propia defensa, dejando aparte personalismos y diferencias partidistas*”¹³⁴.

Finalmente el 5 de abril, el Gobierno suspendió las elecciones, para evitar alteraciones del orden, debido a que el clima político-social del país no recomendaba otro enfrentamiento electoral.

Pocas semanas después habían de celebrarse las elecciones a compromisarios para la elección del presidente de la República, con el fin de sustituir a Alcalá Zamora, destituido por el congreso de Diputados. Los candidatos iniciales de AP-Agraria fueron Antonio Sanz Gilsanz, presidente local, Eusebio Provencio, también de la directiva local, y Francisco Martín y Gómez, presidente provincial de JAP. Pero el 23 de abril, siguiendo las órdenes de la dirección nacional del partido, se retiraron alegando que “*no se puede luchar*

¹³² *Heraldo*, 8 de marzo de 1936. Durante la estancia en prisión de estos obreros se habían producido distintas acciones de solidaridad, como una función teatral en favor de Hoyos, en La Granja, y suscripciones para ayuda de sus familias.

¹³³ Los suplentes de las candidaturas eran: I.R.: Cipriano Martín Chavente, Julián Fernández y José Seoane; U.R.: Joaquín Muñoz de Luna y Antonio García González; PSOE: Mariano Pérez, Manuel Pardo, Celedonio González y Francisco Polo y PCE: Alejandro González González, cerámico y presidente de la Casa del Pueblo de Segovia, en sustitución de Antonio Hernanz.

¹³⁴ *El Adelantado*, 28 de marzo de 1936.

*sin tener la seguridad de disfrutar de las garantías mínimas para la libre emisión del sufragio*¹³⁵. Por su parte, el Frente Popular presentó a Manuel Bear Solana, secretario provincial de JSU; Pedro Romero, exdiputado de las Constituyentes y delegado de los Ferrocarriles Andaluces, por I.R.; José Moreno Aizpurúa, del comité nacional de U.R. y secretario político del diputado Martín de Nicolás, (designado posteriormente secretario personal del gobernador) y, por último, el maestro Francisco Álvarez Matesanz, por el PCE.

Las elecciones se celebraron el 25 de abril de 1936. Con la retirada de la derecha, lógicamente, sólo fueron votados los candidatos del Frente Popular y el independiente Román Yuste de Lucas. La abstención preconizada por la conservadores fue de más del 50%. En la capital, sobre un censo de 9.834 electores, votaron 4.128, es decir el 42%. La comparación de los resultados entre capital y provincia, indica que en la ciudad el peso de las organizaciones obreras era mucho más importante que en el resto de la provincia. Esta apreciación se percibe ostensiblemente en los datos obtenidos por el Partido Comunista¹³⁶.

Cuadro nº 8: Elecciones a compromisarios

Candidato	Partido	Capital	Total provincial
Manuel Bear Solana	PSOE	2.464 (32,3%)	22.393 (27,7%)
Pedro Romero	I.R.	2.186 (28,6%)	24.933 (30,8%)
Francisco Álvarez Matesanz	PCE	1.761 (23,7%)	11.151 (13,7%)
José Moreno Aizpurúa	U.R.	1.220 (15,9%)	22.338 (27,6%)
Román Yuste de Lucas	Independiente		1.118 (1,36%)

1. 4. 2. La lucha por el control de la calle

Desde la celebración de las elecciones de febrero hasta el 19 de julio la tensión entre las derechas y las izquierdas aumentó en la provincia de Segovia en la misma medida que en el resto de España, pero aquí no llegaron a producirse incidentes tan graves como en otras partes del país.

Las obras escritas existentes nos dan una visión sesgada de la realidad. Por ejemplo, según la apreciación de Juan de Contreras –presidente de AP- la situación de Segovia era

en la capital, de franco predominio de las derechas, contrarrestado por la existencia de un grupo audaz y bullanguero del FP, en el que unos cuantos burgueses e intelectuales amargados hacían el juego a una masa envenenada de un comunismo agresivo -ferroviarios, obreros de las fábricas, albañiles, jornaleros-. Su centro, el único, era la Casa del Pueblo, en la C/ Gascos, allí se urdían tumultos callejeros y provocaciones a las derechas, bajo la mirada benévola del Gobierno Civil; allí se enseñaban a los niños canciones procaces y antirreligiosas y se procuraba fomentar la inquietud entre los obreros; en la provincia las aldeas de los cinco partidos eran incondicionalmente de AP, aunque en muchas había "Casitas del Pueblo", refugio de los cuatro vagos y borrachines que no deja de haber en ningún lugar, por honrado y pacífico que sea. Entre las poblaciones más importantes el núcleo de extrema izquierda era poderoso e influyente. Ninguno tan considerable ni tan extremista como el de San Ildefonso, especialmente la barriada obrera de Balsaín (sic), casi totalmente entregada al comunismo¹³⁷.

¹³⁵ *La Ciudad y los Campos*, 25 de abril de 1936.

¹³⁶ *El Adelantado*, 27 de abril de 1936.

¹³⁷ CONTRERAS, J., op. cit., págs. 10-11. Cuando habla de partidos se refiere a los 5 partidos judiciales de la provincia: Segovia, Santa María, Cuéllar, Sepúlveda y Riaza.

En Otero de Herreros, El Espinar, Nava de la Asunción y Coca, había grupos obreros de importancia, en palabras de Contreras *“cada vez más unidos y decididos”*. Lo mismo en Carbonero el Mayor y otros pueblos. En Cuéllar había un claro predominio de las derechas, aunque con crecimiento *“alarmante del grupo comunista”* (...) *Las derechas ganaban votos a costa del centro, manteniéndose un núcleo extremista cada vez más experto y agresivo*. Curiosamente, Contreras es bastante benévolo sobre Chacón de la Mata, en comparación con el resto de dirigentes del Frente Popular, pues explica que *“hizo lo que pudo por evitar desmanes excesivos; nombró muy pocas gestoras y procuró contener las ‘explosiones jubilosas’ (...) fue esclavo de bullangueros (...) tolerando cosas que seguramente repugnaba su conciencia”*¹³⁸.

En la provincia de Segovia había dos zonas con fuerte implantación de las organizaciones obreras. Por un lado la de la Sierra, formada por el eje El Espinar-San Ildefonso, integrando -además de los señalados- a Valsaín, Otero de Herreros, Vegas de Matute, Villacastín y Zarzuela del Monte. La otra zona era la divisoria de los partidos judiciales de Cuéllar y Santa María de Nieva, constituida especialmente por Cuéllar, Bernardos, Carbonero el Mayor, Navas de Oro, Coca y Nava de la Asunción.

Las dos zonas tenían en común el paso por sus pueblos de la línea de ferrocarril Villalba-Segovia-Medina del Campo. Arrarás corrobora esta opinión afirmando que *“generalmente los grupos perturbadores seguían el trazado de las vías férreas y estaban dirigidos por los obreros del carril”*¹³⁹. También Güell detecta la actividad de *“los elementos del Frente Popular a lo largo de la línea de ferrocarril del norte”*¹⁴⁰. La influencia del tren se plasmaba en dos aspectos: por un lado la llegada de viajeros y mercancías, con lo que siempre representaba como intercambio de ideas y cultura, la llegada de noticias de otros lugares más avanzados.... Y, por otro lado, la existencia de núcleos de trabajadores ferroviarios con gran tradición organizativa y de izquierdas.

Además de estas zonas, otros importantes núcleos republicanos y obreros eran Sepúlveda, Riaza, Navafría, Valverde del Majano, Fuente el Olmo de Fuentidueña y algunas localidades situadas en la carretera de Aranda de Duero, como Cabezuela, Cantalejo y Fuenterrebollo.

La referida zona oeste de la provincia -que abarcaba los pueblos situados entre Cuéllar y Santa María de Nieva- estaba calificada de “peligrosa” por *El Adelantado*, en el que se hizo una especie de premonición de lo que iba a ocurrir una vez iniciada la guerra, en un editorial sin firma, bajo el título de *“Agitadores extraños”*, publicado el 4 de marzo de 1936. En ella, el autor explicaba que

...vienen actuando, de un modo que se parece mucho a la agitación social, varios obreros, ajenos a nuestra provincia, y curtidos según parece en cuestiones de agitación social, pero que circunstancialmente se encuentran en ella dedicados a trabajos industriales, aprovechando la ocasión para realizar la propaganda que ellos estiman conveniente a sus fines. Si bien hasta el momento esta actitud se ha traducido en actitudes y hechos, que si intrascendentes hasta ahora, pudieran tener en determinado momento un alcance muy distinto¹⁴¹.

En este editorial, los propietarios agrarios y la patronal segovianos se quejaban -a través de diario local que defendía sus intereses- de que Segovia, *“por excelencia, amante del orden, (...) modelo de sensatez y cordura”*, comenzaba a cambiar. Esta provincia que el bloque propietario había dominado tradicionalmente sin preocupaciones, y en la que *“los*

¹³⁸ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 12.

¹³⁹ ARRARÁS, Joaquín. *Historia de la Cruzada*, Eds. Españolas, Madrid, 1940, pág. 330.

¹⁴⁰ BERTRAND GÜELL, Felipe. *Preparación y desarrollo del alzamiento nacional*. Librería Santaren, Valladolid, 1939, pág. 280.

¹⁴¹ *El Adelantado*, 4 de marzo de 1936.

conflictos sociales que hayan podido presentarse en los últimos años han quedado resueltos sin estridencias”, se estaba transformando; este contexto de dominio se estaba cuestionando. La situación sociopolítica evolucionaba. Las Casas del Pueblo se habían extendido a gran parte de la provincia, y en algunas localidades tenían, incluso, gran fuerza. Este poder se plasmaba en el nombramiento por el gobernador civil, precisamente estos días de marzo, de las gestoras municipales que hemos referido, con los representantes de los partidos integrantes del Frente Popular vencedores (a nivel nacional, pero no provincial) en las elecciones de febrero.

Los caciques locales se oponían claramente a los sindicatos de clase, puesto que éstos, en opinión de los propietarios, pretendían *“perturbar la armonía que es orgullo de la vida de relación entre las diferentes clases sociales de nuestra provincia”*. Finalizaba el artículo con un aviso al gobernador civil para que tomara medidas en un asunto que podía poner en peligro la tradicional tranquilidad segoviana, *“que forma un edificante contraste con otras regiones. ¿Puede ser perturbado impunemente y menos por elementos que son ajenos en absoluto a la vida social de Segovia?”*¹⁴². Esta queja era típica de los conservadores que criticaban, de una manera muy provinciana, que los perturbadores vinieran de fuera. En similares términos se manifiesta Arrarás explicando que *“los más activos agitadores republicanos, eran segovianos desarraigados de las tradiciones de su pueblo”*¹⁴³. En esta zona de la provincia de Segovia ciertamente había muchos obreros foráneos, especialmente gallegos y asturianos, trabajando en la instalación del tendido eléctrico. Estos obreros altamente concienciados habían influido mucho a la hora de fortalecer las organizaciones obreras de las localidades donde residían temporalmente. A ellos habría que añadir, por su importancia organizativa, los grupos de ferroviarios ya reseñados.

El Baile *El Pensamiento*

La escalada de tensión durante la primavera de 1936 en la capital se inició el domingo 8 de marzo con los incidentes en el Baile *El Pensamiento*, provocados por jóvenes de JAP en unión de algunos falangistas, como lo prueba que les fueran intervenidos, tras su detención, unas defensas de cuero. De los tres bailes que había en Segovia, *El Pensamiento* era *“el más selecto, ya de gente más mayor, pero no político”*¹⁴⁴. Allí acudieron un grupo de japistas a provocar incidentes, pero se encontraron con la oposición de un sector mayoritario del público simpatizante de la izquierda, que los redujeron y avisaron a la policía que se los llevó detenidos¹⁴⁵.

Las versiones varían según las fuentes: para los testimoniantes de izquierdas -de acuerdo con el criterio del gobernador civil Chacón- era clara la responsabilidad de los jóvenes derechistas, mientras que Contreras escribía que *“un grupo de muchachos de la JAP fue agredido por mozalbetes comunistas en un centro de recreo”*¹⁴⁶.

Después de los hechos, el gobernador civil hizo pública una nota que fue recogida en *El Adelantado* y el *Heraldo*, en la que aludía a los incidentes “provocados” por afiliados a FE y a JAP de Segovia en el baile *El Pensamiento*, donde

se presentaron en actitud violenta y de desafío a los elementos republicanos y obreros que, como domingo, se encontraban en dicho local. Esto lo prueba el incidente provocado como consigna y que dió origen a la reyerta y en el que al intervenir las Fuerzas de Seguridad

¹⁴² Los entrecorridos anteriores son del mismo editorial de *El Adelantado*, 4 de marzo de 1936.

¹⁴³ ARRARÁS, J., op. cit., pág. 329.

¹⁴⁴ Testimonio de Gregorio González.

¹⁴⁵ Fueron detenidos: Luis Domínguez Rueda, Nicolás Villagrat, José Merino, Mariano Well Pérez, Isidro Martín Cuadrado, Gregorio Duque Casas y Francisco Atorrasagasti Ibáñez. Los tres primeros heridos de pronóstico reservado; después de curados quedaron en el Hospital Provincial, y los restantes pasaron a la cárcel a disposición del Juez de Instrucción.

¹⁴⁶ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 13.

fueron ocupadas varias defensas de cuero que llevaban preparadas tan sólo para conseguir la alteración del orden dentro del baile¹⁴⁷.

Por el contrario, *La Ciudad y los Campos* se negó a su publicación porque no quería que su versión de los hechos fuera censurada -de hecho escribían: “advertimos a nuestros lectores que no publicamos lo que queremos, sino lo que buenamente podemos”¹⁴⁸-. Iniciada la guerra, bajo el título *Lo que no nos dejaron decir a su tiempo*, dio su particular interpretación de los hechos, explicando que los rojos vestían camisas y corbatas rojas, mientras que los jóvenes de derechas iban “ingenuamente a disfrutar”.

Dos o tres centenares de rojos, preparados de antemano con indignante alevosía, rodearon la sala gritando a plena voz no consentir nadie escapase, mientras otros 60 atacaban dentro a nuestros muchachos, que no eran más de 12. Como leones se defendieron. Unos guardias de seguridad esposaron a los valientes y les llevaron en vergonzosa procesión por las calles más céntricas dando un rodeo (...) una chusma acompañaba a los detenidos, dándoles insultos, puñadas, patadas, incluso una puñalada por la espalda, cuando iba atado...¹⁴⁹.

Después de este incidente en el baile, los izquierdistas agredidos improvisaron una manifestación de repulsa. Cuando caminaban por la Calle Real, desde la pensión *La Isabela* salieron unos disparos acompañados de vivas a Falange y un ¡Arriba España! que provocaron la indignación de los manifestantes, quienes buscaron a los agresores por las casas. Este nuevo incidente estaba relacionado con el anterior, según el criterio del gobernador

Que este movimiento (los incidentes del baile) estaba preparado lo prueba también los hechos que ocurrieron poco después. Ricardo Mateo González, Manuel Lecea Calderón y Vitalino Arévalo Pascual, el primero de FE y los otros de JAP, hallándose en la Calle Cervantes frente a la pensión “La Isabela”, el primero hizo dos disparos con una pistola automática, sin que hicieran blanco, arma que fue ocupada por el comisario jefe de Vigilancia, quien detuvo a los tres dentro de la pensión, que trasladó a Comisaría y luego a prisión¹⁵⁰.

De la manifestación salió entonces un grupo más exaltado que se dirigió a la sede de AP, con la intención de asaltarla, lo que no llegaron a hacer. Según la versión oficial, se limitaron al “destrozo de algunos enseres y al intento de incendio fácilmente evitado por la presencia de una pareja de Seguridad”¹⁵¹.

La versión de los hechos de Contreras es bien distinta, pues escribe que, tras los incidentes del baile,

la fuerza pública se puso de parte de los agresores y el populacho la obligó a llevarlos detenidos al Gobierno Civil, buscando el camino más largo y las calles más céntricas, consintiendo que la hez de la ciudad les abrumase a golpes e injurias (...) la misma noche fue agredido el capitán de artillería retirado Angel Onrubia, y dos muchachos que hacían pacíficamente su camino también fueron acometidos. Uno sacó una pistola para defenderse y

¹⁴⁷ Nota del Gob. Civ. Publicada en *El Adelantado*, 9 de marzo y *Heraldo*, 15 de marzo de 1936.

¹⁴⁸ *La Ciudad y los Campos*, 14 de marzo de 1936.

¹⁴⁹ *La Ciudad y los Campos*, 8 de agosto de 1936. Finalizaba el artículo con una justificación de la represión contra los oponentes:

¡8 de marzo de 1936! no se nos va a los segovianos de la memoria. La canalla marxista, dirigida y alentada por un hato de cobardes ganapanes, inmorales personajillos cuyas faenas toda Segovia conoce, se lanzó contra los bravos muchachos japistas y falangistas indefensos y desapercibidos. La justicia nunca ha sido burlada impunemente. La justicia no tiene prisas. Pero la justicia a pesar de la legalidad –a veces su mayor enemiga– se impone siempre. ¡Se está imponiendo!

Precisamente en esas fechas ya se habían producido las primeras ejecuciones ilegales de oponentes políticos, como explicamos en los anexos.

¹⁵⁰ Nota del Gob. Civ. publicada en *El Adelantado*, 9 de marzo y *Heraldo* 15 de marzo de 1936.

¹⁵¹ Nota del Gob. Civ. Por otro lado, Ángel García comenta que los manifestantes gritaban “¡vamos a quemar su sede!, pero llegaron antes los bomberos y la policía que los manifestantes”.

abrumados por el número, fueron arrastrados maltrechos a los calabozos del Gobierno Civil. (...) Llenóse la cárcel de jóvenes de la derecha. La noche del 8 fue asaltado el domicilio de AP por la chusma de la Casa del Pueblo¹⁵².

Estos incidentes provocaron el cierre gubernamental de Acción Popular y el Círculo Tradicionalista, donde se reunían los falangistas de Segovia, que no disponían de local propio. Además, Chacón amenazaba a los militantes derechistas “...y como es seguro que la provocación hecha por fascistas y JAP fue el origen de los incidentes, contra éstos actuaré enérgicamente en defensa del orden y de la tranquilidad pública”¹⁵³. Al día siguiente, fue detenido Francisco Martín Gómez -presidente de JAP de Segovia y que no había participado en los hechos del baile-, liberado tres días después. Pocas fechas después, unos particulares encontraron una pistola ametralladora en un estercolero de la Plaza de S. Nicolás –en las cercanías de la sede de AP-, arma que, según manifestaron, arrojó un individuo que iba huyendo¹⁵⁴.

El desfile del 14 de abril

Un mes después de estos hechos, con motivo del aniversario de la proclamación de la República, el 14 de abril se celebró un desfile militar en Segovia, al igual que ocurrió en el resto de capitales españolas. *El Adelantado* hablaba del “brillante desfile militar” en el que participaron fuerzas del 13 Regimiento, la Guardia Civil y la Escuela Automovilista. Cosecharon “grandes aplausos ante su paso” del público congregado. En la Plaza Mayor había un estrado situado enfrente del Ayuntamiento con las autoridades civiles y militares y, a su lado, numerosos simpatizantes del Frente Popular. Opuestos a ellos, en los bajos del consistorio, se concentraban los seguidores de la derecha.

Cuenta Ángel García que en el momento en que llegó el desfile a la altura de la presidencia, el abanderado que iba a caballo cayó sin soltar la enseña republicana. Al verlo, los derechistas gritaron ¡abajo la bandera!, lo que provocó a los republicanos. Hubo gritos enfrentados entre ambos grupos, rivalizando en los vítores, mientras unos daban vivas a la República, los otros vitoreaban al Ejército. Al poco tiempo, intervinieron los guardias de asalto que acabaron con el enfrentamiento. Ángel García, entonces un chico de 12 años que estaba entre el público, recibió un sablazo, pero, afortunadamente, “menos mal que el golpe fue de plano”¹⁵⁵.

Las versiones de este incidente, como sucedió en el caso anterior, son muy distintas según la fuente. Para Contreras fue un “tumulto” organizado por el grupo “bullanguero y soez” de la Casa del Pueblo, que siguiendo las “modas madrileñas de indumentaria roja y las insignias de la hoz y el martillo, profirieron en insultos contra el Ejército, en el cual veía a la sazón el FP el único obstáculo para implantar en España la tiranía moscovita (...) Solamente un oficial infligió un justo correctivo a cierto médico, cuyas excitaciones pasaron ya de lo tolerable”¹⁵⁶. El médico era Mariano Romero -dirigente de I.R.- que fue procesado por insulto a fuerza armada acusado de que “en el momento de pasar la cuarta bandera del 13 Regimiento Ligero, profirió el grito de ‘muera el Ejército’ siendo reprendido en el acto por el capitán que mandaba aquella batería D. Gregorio Vázquez”¹⁵⁷.

¹⁵² CONTRERAS, J., op. cit., pág. 13. Ángel Onrubia era dirigente de AP local. Ricardo Mateo asegura que si ese día hubiera estado de servicio el teniente de seguridad Feijoo, simpatizante falangista, los hechos habrían sido distintos.

¹⁵³ Nota del Gob. Civ.

¹⁵⁴ *Heraldo*, 15 de marzo de 1936.

¹⁵⁵ Testimonio de Ángel García Nuño.

¹⁵⁶ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 15.

¹⁵⁷ Causa 16/36 contra Mariano Romero. Gregorio Vázquez era el hijo del también militar Camilo Vázquez, con el que tenía alguna rivalidad su vecino Mariano Romero. El médico quedó en libertad provisional previa multa de 1.000 pts. Iniciada la guerra fue denunciado por Camilo Vázquez, volviendo a juzgarse los mismos hechos en 1937, ahora sancionados con 6 años de condena. Serapio Bermejo cuenta que el suegro y el cuñado de Mariano Romero eran militares, por lo que ratifica la enemistad de los Vázquez y que inventaron la denuncia.

El Adelantado, más comedido que Contreras debido a la censura gubernamental, recogía que “se dieron determinados vivas y con este motivo se repartieron algunos golpes entre personas de distinta ideología, teniendo que intervenir la fuerza pública que simuló algunas cargas. Parece ser que los incidentes se reprodujeron después del desfile, en algunas otras calles de la ciudad, especialmente en la plaza de la Rubia”¹⁵⁸ (cercana al edificio del Gobierno Civil).

La prensa de Madrid también se hizo eco del hecho, incluso *Claridad*, diario socialista de la tendencia de Largo Caballero, dio su versión bajo el significativo título “*También en Segovia. Durante el desfile oficial, los fascistas provocan desórdenes y los guardias arremeten contra los obreros*”¹⁵⁹.

Pero, sin duda, la información más curiosa sobre este desfile la ofreció *La Ciudad y los Campos*, que hizo el relato con mucha sorna. En la crónica daba la sensación de que el resultado final del acto había sido perfecto. Entre las autoridades figuraba la Gestora Provincial en pleno presidida por el “*presidente camarada Hoyos*”. Las fuerzas de la Academia de Artillería bajo el mando del coronel Sánchez Gutiérrez desfilaron “*magistralmente*”. Para, a continuación narrar los hechos como, evidentemente, no ocurrieron

El público que se estacionaba alrededor del hemicielo (sic) prorrumpió en ensordecedoras ovaciones. El paso de las banderas constituyó el momento culminante. Las autoridades en pie, se inclinaban en saludos patrióticos y respetuosos. El público agitaba las manos gritando hasta enronquecer. Una vez terminado el desfile, los jóvenes entusiasmados, se agolparon ante las tribunas de las autoridades ovacionando con entusiasmo a la digna presidencia del acto. Las ovaciones y gritos de júbilo continuaron hasta el Gobierno Civil, pues el público enardecido, hubo de escoltar tanto el coche de nuestra primera autoridad como el del Sr. Martín de Nicolás. Después se celebró en los salones del Gobierno Civil una brillantísima recepción que resultó muy concurrida¹⁶⁰.

En otro orden de cosas, con la clausura de las sedes de los partidos de derecha, sus militantes hacían reuniones más o menos clandestinas en casas particulares. Para evitar que éstas se llevaran a cabo, los miembros de JSU buscaban los lugares donde éstas se celebraban y así denunciarlo a la policía. Isidoro Romano cuenta que en una de ellas les salieron al paso los japistas, que sacaron sus armas y un disparo le pasó al lado. Rápidamente llegaron guardias de asalto –que, según cuenta Romano, habían venido a Segovia por “*la escalada de tensión*”- y detuvieron a algunos miembros de JAP, que permanecieron hasta el 18 de julio, unos como detenidos gubernativos, en aplicación de la Ley de Defensa de la República, y los otros, que iban armados, quedaron a disposición del juez. En *El Adelantado* este hecho fue recogido escuetamente como una *agresión*, “*se oyó un disparo en una calle de Segovia (...) contra una persona de determinada ideología. La policía investiga y el Juzgado de Instrucción*”¹⁶¹.

¹⁵⁸ *El Adelantado*, 14 de abril de 1936.

¹⁵⁹ *Claridad*, 14 de abril de 1936. La crónica se iniciaba así:

Desfile militar, la plaza abarrotada predominando el elemento obrero. En los balcones de las casas burguesas no se veían colgaduras y los de muchos edificios estaban cerrados. En la tribuna oficial en la plaza mayor, habían dispuesto para que no destacaran alcalde (de UGT) ni el presidente de la Diputación (Socialista), a los que tuvo que llamar el gobernador civil para que se sentaran a su lado.

El desfile sin novedad hasta que al pasar la bandera ante la tribuna, unos fascistas, entre ellos un hijo del teniente coronel de la Guardia Civil de la comandancia dio vivas a España y saludó mano extendida. Los jóvenes socialistas respondieron con vivas a la República puños en alto. Los fascistas agredieron a los obreros. Visto desde tribuna por las autoridades, incluido el diputado UR, y Director General de Aduanas Arturo Martín de Nicolás.

¹⁶⁰ *La Ciudad y los Campos*, 18 de abril de 1936. En la edición escrita falta una parte del artículo, aproximadamente la mitad del espacio, que está cubierto con anuncios *Lea La Ciudad y los Campos*, mecanismo utilizado para tapar los párrafos suprimidos por la censura.

¹⁶¹ *El Adelantado*, 17 de abril de 1936.

Los conflictos entre izquierdas y derechas se ampliaron a la provincia. Los incidentes tampoco llegaron a ser graves, no hubo sangre, pero sí son sintomáticos de la escalada de tensión entre simpatizantes de distinto signo político.

En Carbonero, según Contreras, *“fueron agredidas destacadas personas de la derecha”*. La realidad es que -cuenta Eufasio García, dirigente local de JSU- antes de la guerra hubo *“algunas discusiones verbales, pero nunca llegamos a las manos”*¹⁶². En uno de estos enfrentamientos, a primeros de abril, un grupo de jóvenes de izquierdas apedreó la casa del japista Vitalino Arévalo –ya citado como implicado en los incidentes del baile-, quien, ni corto ni perezoso, sacó la escopeta de su padre y disparó hiriendo a uno de los agresores, Leonardo Fernández Pilar. La escopeta fue intervenida y Vitalino fue puesto a disposición del Juez Instructor. Los militantes de derechas eran, según Eufasio García, los *“hijos de los ricos del pueblo”* y se reunían habitualmente en casa del cura. El alcalde socialista Matías Manso ordenó, el 20 de mayo, la detención del párroco y varios jóvenes de Acción Católica, acusados de reunión clandestina, porque no habían solicitado el correspondiente permiso. La versión de los jóvenes -respaldada por *El Adelantado*- era que celebraban el cumpleaños del párroco y fueron a felicitarle, además aprovecharon para que les bendijera una bandera de su organización.

En Villacastín hubo un incidente en la Plaza Mayor. Se produjo una pelea por cuestiones políticas, Pedro Grande dice que *“dieron un palo a uno, que quedó muy mal parado”*¹⁶³. En Otero de Herreros, cuenta un testificante derechista, que con motivo de una manifestación roja en Segovia, volvieron los militantes del pueblo con una bandera roja y a un falangista del pueblo se la hicieron besar. Éste, Eliseo Gómez Ingeldo, fue *“el que lideró las represalias: a unas chicas las detuvo y cortaron el pelo”*¹⁶⁴.

En Fuente el Olmo de Fuentidueña había en principio un sólo salón de baile, donde eran mayoritarios los jóvenes de izquierda, quienes, según testigos derechistas, *“no siempre dejaban entrar a los jóvenes de derechas o les empujaban, les hacían la vida imposible”*¹⁶⁵. Así que terminaron disponiendo otro salón de baile para los jóvenes conservadores. El local no reunía las condiciones mínimas –era una cochera en la que habían metido un piano-, lo que provocó una investigación del Ayuntamiento, gobernado por la izquierda. Mientras los testimonios de izquierdas dicen que no hubo enfrentamientos en el pueblo, los derechistas afirman que había peleas entre los dos bandos. Según éstos, la tensión llegó al límite cuando un médico de derechas, armado con una pistola, estuvo esperando a los rojos que venían de una manifestación, pues pensaba que le iban a atacar, lo que no se produjo.

En Cuéllar, cuenta Elías García, que a los obreros que no se afiliaban a la Casa del Pueblo no les dejaban trabajar, *“les echaban para atrás a los no afiliados”*. Incluso la Guardia Civil intervino alguna vez para que no hubiera problemas. Había dos bandos entre los trabajadores: los no afiliados se unieron para oponerse físicamente a los marxistas, *“estaban dispuestos a ello”*, pero no llegó a producirse ningún enfrentamiento. A unos albañiles que no estaban afiliados a la UGT, no les dejaban trabajar, *“hubo cuchilladas, heridos, no muertos aunque se pensó que sí, lo que provocó gran revuelo”*¹⁶⁶.

En Labajos se inició una discusión entre dos mujeres, a la que después sobrevino una reyerta entre mucha más gente del pueblo que estaba *“dividido entre izquierda y derecha, con gran animosidad entre ellos”*¹⁶⁷. En San Ildefonso fueron clausurados los

¹⁶² Testimonio de Eufasio García.

¹⁶³ Testimonio de Pedro Grande Valverde.

¹⁶⁴ Testimonio de un vecino de Otero, quien no cuenta que las represalias no se limitaron a los cortes de pelo, pues hubo 5 vecinos del pueblo fusilados, y otros testimonios señalan a Eliseo Gómez Ingeldo o Ingelmo (lo hemos encontrado escrito de ambas maneras) como su instigador.

¹⁶⁵ Testimonio de Irene Arranz Gómez.

¹⁶⁶ Testimonio de Elías García. Este suceso no se ha visto recogido en la prensa, por lo que no hemos podido comprobar cuando ocurrió.

¹⁶⁷ *El Adelantado*, 22 de abril de 1936.

locales de derecha, AP y Sociedad Obrera Autónoma, y el bar Nacional donde “había habido incidentes sin importancia entre elementos de distinta ideología”¹⁶⁸. En Gallegos, se produjo algún enfrentamiento antes de la guerra entre los distintos bandos cuando se congregaban muchas personas para segar en el prado¹⁶⁹.

Por último, debemos recoger -aunque no hemos podido averiguar la causa que lo motivó- la detención en Sepúlveda, el 17 de mayo, de tres vecinos de la villa, Miguel Abad de la Serna, Mariano Cristóbal López y Tomás Alonso Gómez, que eran, casualmente, los padres de los tres falangistas de la localidad Braulio Abad, Marcos Cristóbal y Ángel Alonso. Fueron liberados al día siguiente. La orden de ingreso en prisión y de su liberación fue firmada por el alcalde Fermín Sanz, de I.R.¹⁷⁰.

Los hechos relatados parecen expresión de rivalidades entre personas de distintas ideologías, pero no alcanzan la gravedad suficiente para justificar la dura represión que sufrieron los defensores de la República en Segovia, tras la sublevación militar. Pero *El Adelantado* participaba de la campaña de la prensa conservadora que, en todo el país, cargaba las tintas sobre las alteraciones del orden público, justificando la necesidad de mano dura o de un cambio de rumbo. Por ejemplo, el 17 de abril, el diario se hizo eco en primera página, de los datos aportados por Calvo Sotelo en las Cortes sobre los incidentes producidos en España desde el 16 de febrero: incendios de edificios religiosos, asaltos y destrozos, etc¹⁷¹. También es significativo el seguimiento que hacía sobre las detenciones de militantes fascistas, así, el 18 de abril, en dos columnas distintas titulaba “*Se intensifica la detención de elementos fascistas*” y “*Siguen las detenciones de fascistas*”, en informaciones recogidas de distintas zonas de España.

1. 4. 3. Demostraciones de poder de la izquierda

Bajo este epígrafe pretendemos analizar algunos hechos o actitudes que denominamos demostraciones de poder de la izquierda y que los sectores conservadores tomaron como provocaciones, porque no estaban acostumbrados a que los obreros salieran a la calle, la tomaran pacíficamente y exhibieran sus símbolos. Los domingos y festivos los jóvenes socialistas y comunistas se vestían con sus mejores galas, sus camisas rojas o azules, con las insignias correspondientes. Lo que, evidentemente no

¹⁶⁸ *El Adelantado*, 22 de abril de 1936.

¹⁶⁹ Testimonio de Antonia García Casillas

¹⁷⁰ Arch. Pris. Prov. Donde figuran las dos órdenes de ingreso en prisión de Sepúlveda. Este hecho podría ser una de las claves del fusilamiento de Fermín Sanz, pues su detención fue firmada precisamente por Miguel Abad, nombrado alcalde por los sublevados al inicio de la guerra.

¹⁷¹ *El Adelantado*, 17 de abril de 1936. Los datos eran los siguientes:

asaltos y destrozos:	
de centros políticos:	58
de establecimientos públicos y privados	72
domicilios particulares	33
iglesias	36
total:	199
incendios	
de centros políticos	12
establecimientos públicos y privados	45
domicilios particulares	15
iglesias (destruidas 56)	106
total:	178
huelgas generales	11
motines	169
tiroteos	39
agresiones	85
atracos	24
heridos	345
muertos	74

gustaba a los reaccionarios, como escribía el corresponsal de Cuéllar de *El Adelantado* “No hubo domingo o día festivo en que los discípulos de ambos sexos del embustero Marx, formando legión no se expusieran ante la gente en los paseos públicos con los emblemas y vestiduras propias (...) consabido grito UHP y otros que causaban rubor”¹⁷².

La liberación de la mujer que preconizaba la República reformista, se reflejaba en diversos carteles: “Mujeres: no os dejéis robar el sudor de vuestros hijos, UHP”, o en pintadas ¡Hijos sí, maridos no!. Por otro lado, en Sepúlveda se celebró una manifestación el 8 marzo, Día de la Mujer Trabajadora, exhibiendo las banderas republicana y socialista, acompañados de la banda municipal.

La juventud componía coplas en las que criticaba a los caciques, a los personajes conservadores o al clero lo que, según testimonios, fue también causa de que sus autores fueran perseguidos después. En todos los pueblos nos han hablado de este tipo de cánticos. Entre otros apuntamos los siguientes:

No queremos reina puta ni tampoco rey cabrón queremos a un presidente que gobierne la nación.	Si vas a Acción Popular fíjate en los escalones, cómo están de desgastados de subir esos cabrones.	Ya se marchan los borbones nunca jamás volverán, llevan la ropa manchada con la sangre de Galán.
--	---	---

En La Granja se celebró con entusiasmo la exaltación de Manuel Azaña a la presidencia de la República. La banda de música *La Popular* de Segovia, interpretó el himno nacional, seguida de una multitud. La comitiva se dirigió a la vivienda oficial del administrador del Patrimonio, Fernández Cordero, “*republicano consecuente perseguido por el Gobierno de la CEDA*”. Después, en la plaza, la banda y el público cantaron la Internacional, hubo cohetes y, a continuación, pronunció unas palabras el presidente de I.R. de La Granja, Joaquín Trillo¹⁷³.

Buena muestra del entusiasmo desbordado de las bases del Frente Popular en las posibilidades de cambios a realizar desde el Gobierno son las “*Conclusiones del FP de Cuéllar*”. A primeros de junio, se reunieron en el salón de actos de la Casa del Pueblo cuellarana, representantes de las organizaciones republicanas y obreras de Cuéllar y de las localidades de los alrededores: Olombrada, Remondo, Chañe, Escarabajosa, Villaverde de Íscar, Campo y otros. La primera de las consideraciones era una queja: “*parece ser que en estos pueblos no se ha notado mejora alguna a partir del triunfo del 16 de febrero pues el caciquismo y la política tortuosa de los elementos del bienio radical-cedista aún siguen campando a sus anchas*”¹⁷⁴. Deseosos de conseguir la consolidación del régimen abogaban por que se cumpliera todo el programa electoral del Frente Popular. Las propuestas eran maximalistas, derrochaban entusiasmo, pero estaban faltas de realismo, incluso una de las peticiones fue censurada y no se publicó en la prensa. Por ejemplo, para resolver el problema escolar, simplemente proponían la sustitución de la enseñanza religiosa; cuando fueran a producirse sermones en las iglesias se comunicara para que asistiera un delegado gubernativo “*como estipula la ley de asociaciones*”, que se reglamentara el toque de campanas para que éstas sonaran a horas que *no molesten*, imponiéndoles una tributación; declarar disueltas y fuera de la ley a la CEDA, Renovación Española y FE; nueva organización de la Guardia Civil para convertirla en guardia cívica republicana; renovación inmediata de jueces y fiscales municipales, con personas de probada adhesión; se activara la reforma agraria y, por último, que se organizaran milicias

¹⁷² *El Adelantado*, 6 de agosto de 1936.

¹⁷³ *Heraldo*, 17 de mayo de 1936. Es curioso que las dos personas citadas en la noticia -Cordero y Trillo- fueran los dos primeros condenados a muerte y fusilados en La Granja.

¹⁷⁴ “Conclusiones del FP de Cuéllar” publicadas en el *Heraldo*, 7 de junio de 1936.

armadas ciudadanas constituidas por milicias republicanas y obreras para la debida “salvaguardia del régimen y sus esencias democráticas”¹⁷⁵.

El Primero de Mayo

En la celebración del 1 de mayo de 1935, había quedado muy satisfecho *El Adelantado*, porque con el cierre de las Casas del Pueblo no hubo demasiados asistentes a la habitual manifestación. Decía el editorial: “Llevamos unos años en que para garantizar el cívico derecho de todos, hay que vivir alerta y con el arma al brazo. Más tranquila que las anteriores, nada de enseñas rojas (...), nada de rondas (...) de gentes revoltosas (...) de histéricos clamores de comparsas (...) con los puños en alto...”¹⁷⁶.

En cambio, la fiesta de los trabajadores de 1936 fue de júbilo, como afirman los numerosos testigos que la vivieron y que la califican de *apoteósica*¹⁷⁷. Desfilaron en la manifestación las organizaciones obreras y republicanas. En la capital hubo unas 2.500 personas, cifra estimada por el *Heraldo*. Los medios conservadores habían lanzado rumores de que habría incidentes provocados por los obreros, sin duda con el fin de desacreditar la celebración y restarle concurrencia. El día anterior, el alcalde interino, el ugetista Esteban Muñoz, hizo una alocución por radio para “desmentir los rumores sobre propósitos de disturbios de los obreros y tranquilizar al personal”¹⁷⁸.

La manifestación se inició en las inmediaciones de la Puerta de Madrid, a las afueras de Segovia. Formaban parte de ella todas las organizaciones presentes en la Casa del Pueblo –UGT, PSOE, JSU y PCE–, una banda de música y las sociedades de UGT con sus respectivas enseñas, banderas rojas, fotos de Largo Caballero, Lenin, Pablo Iglesias, etc. También la CNT, con su bandera roja y negra participó en la fiesta. Las juventudes y algunos niños –denominados pioneros– marchaban uniformados (camisa azul y corbata roja los comunistas, mientras que llevaban camisa roja y corbata azul los socialistas) y marcando el paso. De vez en cuando se lanzaba el grito UHP (Unión Hermanos Proletarios), saludado puños en alto. La manifestación desfiló por la calle de José Zorrilla, el Azoguejo y llegó hasta la Plaza Mayor, de donde bajó por la Calle Real hasta el teatro Cervantes, en el que se celebró un mitin. Durante el trayecto se “cantaron la Internacional y otros himnos, vivas a Rusia y al comunismo”¹⁷⁹.

En el mitin intervino el nuevo presidente de la Casa del Pueblo, el dirigente comunista Alejandro González González (que había sustituido recientemente al socialista Antonio Hernanz Benito¹⁸⁰), quien destacó la fuerza de la clase obrera “hoy la calle es nuestra, hoy se paraliza por completo la vida en las poblaciones y todo eso podemos mostrárselo a la burguesía diciéndole: he ahí lo que podemos nosotros”¹⁸¹. Después del mitin, los manifestantes marcharon en animados grupos al campo (cada sociedad obrera organizaba una merienda) “no decayendo la alegría hasta entrada la noche”. A pesar de

¹⁷⁵ Ver nota anterior.

¹⁷⁶ *El Adelantado*, 2 de mayo de 1935.

¹⁷⁷ Testimonio de Liborio López, Fausto Pérez, Isidoro Romano, Manuel Rodríguez, Manuel Sansigre, Ángel García, Manuel González, ...

¹⁷⁸ *El Adelantado*, 30 de abril de 1936. La reseña literal es del diario donde no pone las palabras textuales del alcalde accidental.

¹⁷⁹ *Heraldo*, 3 de mayo de 1936.

¹⁸⁰ No hemos podido averiguar la fecha del cambio pero fue en torno a abril de 1936. Alejandro González González, apodado *Cartabón*, jugó un papel relevante en la organización de acciones de guerrilla desde el Centro Segoviano de Madrid en 1938 y también en colaboración con el Servicio de Inteligencia Especial Periférica (SIEP) del ejército republicano.

¹⁸¹ Hay que recordar que en el 1º de Mayo de los años treinta, hacían fiesta los obreros que querían, tenían asegurado por el Gobierno el jornal de ese día, pero no era fiesta como la entendemos ahora en la que el cierre es oficial de fábricas, oficinas, colegios, etc. Para hacernos una idea de las dificultades para celebrar la fiesta del Trabajo en la provincia, es muy interesante conocer la estrategia utilizada en Valverde del Majano por los militantes de la Casa del Pueblo. Cuenta Domingo Martín que hubo gente “recorriendo el término a caballo mandando a casa a todos los que estaban trabajando en el campo”, curiosamente a Domingo le dejaron trabajar porque estaba en el término municipal del pueblo vecino de Martín Miguel. Por otra parte, hemos recogido alguna referencia sobre la fiesta patronal del trabajo que se celebraba el 2 de mayo, a través del manifiesto del partido Económico Patronal Español, publicado en *El Adelantado*, 28 de abril de 1936.

describir este ambiente festivo, *El Adelantado* no pudo evitar relatar la fiesta con un tono triste, al escribir que la ciudad daba “sensación de tristeza, todo cerrado y la gente al campo, no había personal en la capital”¹⁸².

Al día siguiente, el diario local tuvo que reconocer que se había celebrado “con toda normalidad” el Primero de Mayo: “Segovia dio buena prueba de comprensión y tolerancia política. Hay que elogiar la actitud del público y manifestantes. Por la autoridad eficacísimo sistema de seguridad, que no tuvo que actuar”. Además, el diario se hacía eco de las notas del gobernador civil, a las dos y a las 9 de la noche, “la fiesta del trabajo ha tenido en toda la provincia un lucimiento espléndido (...) no se ha registrado ningún incidente. Con lo cual ha quedado demostrada la falta de fundamento de los rumores alarmistas y la buena organización de los partidos que laboran en la obra republicana (...) ciudadanos: ¡Viva la República!”¹⁸³.

De las valoraciones sobre esta fiesta, destacamos la que nos parece más interesante, que estaba suscrita por el dirigente de la Juventud de I.R., Servando Postigo, porque nos ilustra de las simpatías de los republicanos de izquierda hacia el pujante movimiento obrero. Postigo resaltaba la sensación de fuerza que sentían los obreros de Segovia, y lo que ésta podía provocar en las filas conservadoras: “no era el obrero bárbaro de antaño y por eso la reacción se asustó más (...) Entonó sus cánticos proletarios como bandera y programa para un mañana y se sintió fuerte, fuerte y consciente; por eso la reacción se asustó más”¹⁸⁴.

En muchas localidades se celebró igualmente el 1 de mayo con una manifestación que, lógicamente, tuvo mayor repercusión donde existía mayor implantación de las organizaciones obreras. En La Granja, la noche anterior, hubo una representación de teatro, con una obra de *ambiente social*. Ya el día 1, se celebró la correspondiente manifestación, en la que desfilaron convenientemente uniformadas las juventudes socialistas y comunistas y los pioneros. A continuación, hubo mitin en el que participaron Justo García y Justo Alonso por Juventudes Socialistas, Cecilio Santos por Unión de Juventudes Comunistas, Máximo Sosa por el Partido Comunista y cerró las intervenciones Demetrio Hoyos -que presidía el acto- por la Agrupación Socialista. Posteriormente hubo baile amenizado por la Banda del Hospicio de Segovia. *Gran manifestación* hubo también en Cantalejo, con las banderas de las distintas sociedades, a la que siguió un mitin por el obrero Absadón Montero y, “a petición del público”, también habló el secretario del Ayuntamiento Germán Martín Hurtado.

El corresponsal del *Heraldo* en Sepúlveda, Daniel Cristóbal, secretario de Oficios Varios de la UGT, fue quien presidió el mitin celebrado en la villa, con otros dirigentes sindicales y juveniles procedentes de Madrid. Acto seguido hubo una manifestación, a la que también acompañaron los jóvenes socialistas y comunistas uniformados que vinieron ese día de la capital de la República¹⁸⁵.

El Adelantado, una vez iniciada la guerra, al confeccionar un resumen de lo acontecido en Cuéllar con motivo de la sublevación militar, incluía algunas frases sobre la celebración del Primero de Mayo en esa localidad, que más parecen de un cronista de la Casa del Pueblo, que del diario conservador. Escribía así el corresponsal de *El Adelantado*: “Celebróse la fiesta roja del 1º de mayo, y fue algo apoteósico la manifestación, que recorrió las calles integrada por más de 600 personas (...) también con muchachitas con los ‘trastos rojos’ y puños en alto”¹⁸⁶.

¹⁸² *El Adelantado*, 2 de mayo de 1936.

¹⁸³ *El Adelantado*, 2 de mayo de 1936.

¹⁸⁴ *Heraldo*, 3 de mayo de 1936.

¹⁸⁵ Los dirigentes foráneos eran Eustasio Ruiz, de Artes Blancas, Alejandro Martínez, de JJSS y Ernesto Garrido, de UJC, todos ellos de Madrid. *Heraldo*, 3 de mayo de 1936 y testimonio de Daniel Cristóbal.

¹⁸⁶ *El Adelantado*, 6 de agosto de 1936.

1. 5. Los momentos previos a la sublevación militar

Tras los conocidos acontecimientos que tuvieron lugar en todo el país en los meses de mayo y junio, y la primera mitad del mes de julio, el Gobierno de Casares Quiroga declaró el estado de alarma el 14 de julio -en aplicación del artículo 42 de la Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933-, en virtud del cual, quedaba terminantemente prohibida la formación de grupos, manifestaciones, reuniones al aire libre, etc. Los testimonios hablan de que desde los asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo, el 12 de julio, había vigilancia en las sedes de los partidos, *“había inquietud, se veía que iba a haber algo”*¹⁸⁷.

El 16 de julio aparecía en *El Adelantado* *“Detenidos todos los jefes y subjefes de FE”*. En Segovia, Luis Hermosa estuvo detenido del 11 al 14 de julio y Adelino Martín del 14 al 19 de julio. En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Segovia, celebrada el 17 de julio, se produjo una pequeña discusión ante la propuesta de envío de un telegrama a la familia de Calvo Sotelo -como se había hecho en marzo con motivo del atentado a Jiménez de Asúa-. El concejal socialista Artalejo dijo que el mismo día del asesinato de Calvo Sotelo *“hubo otro muerto que no se menciona en la propuesta”*, ante lo que el alcalde, Pedro Rincón, medió y propuso un telegrama contra todo tipo de violencia, *“venga de donde venga”*, y de adhesión al Gobierno de la República¹⁸⁸.

En el mes de julio aparecían en la prensa crónicas sobre la crítica situación política. El editorial firmado por Joaquín Aznar, publicado en el *Heraldo*, el 5 de julio, expresaba el criterio de los republicanos moderados que creían que la República ya no era cosa de todos los españoles.

Después de aquella fecha (14 de abril de 1931) la República dejó de ser para todos. Un día dicen las derechas que la han recobrado; otro proclaman las izquierdas que han conseguido su reconquista... ¿No creen los republicanos, que pusieron sus esperanzas en un régimen democrático, que ya es hora de imponerlo?. Si, es la hora del republicanismo puro, de la democracia auténtica; la hora de la paz, de la justicia, del equilibrio; la hora patriótica de la salvación de España, en riesgo de verse entre las garras de una dictadura.

¿Guerra civil?... el peligro es otro. Pensemos los demócratas de corazón en la responsabilidad en que incurriríamos si, por no aprovechar los minutos de esta hora decisiva, fuera después demasiado tarde¹⁸⁹.

Ya en el último número del *Heraldo*, que salió a la calle precisamente el 19 de julio, aparecía, en contraportada, un artículo del maestro Alejandro de Frutos, sobre el momento político en general. En él manifestaba una postura decidida de defensa de la República ante los ataques de la derecha:

La reacción invita descaradamente a las izquierdas a una guerra civil (...) nosotros estamos alerta con un ideal, una convicción y con el coraje necesario para impedir -al lado del poder- el asalto armado al régimen, exponente de las libertades patrias y de las reivindicaciones de las masas obreras ofendidas y explotadas¹⁹⁰.

Una visión totalmente distinta de la realidad tenía *La Ciudad y los Campos*. De los muchos editoriales, destacamos una colaboración de Emilio de Isasa en la que, en principio, hacía un planteamiento hipotético *“¿Qué pasaría (...) si la situación política y social que actualmente vive España cambiara de repente por uno de esos accidentes*

¹⁸⁷ Testimonio de Isidoro Romano y Fausto Pérez.

¹⁸⁸ Este incidente está recogido en *El Adelantado*, 18 de julio de 1936. Curiosa y sorprendentemente en los libros de actas del Ayuntamiento este asunto no aparece en la sesión del día 17 de julio. Es más que probable que en la siguiente reunión -que se produjo ya iniciada la guerra- al proceder a la lectura del acta de la sesión anterior consideraran inapropiado que figurara una declaración en contra de todo tipo de violencia y de adhesión al Gobierno de la República, suscrita también por los concejales conservadores que se mantuvieron en el cargo tras la sublevación.

¹⁸⁹ *Heraldo*, 5 de julio de 1936.

¹⁹⁰ *Heraldo*, 19 de julio de 1936.

fortuitos que a veces surgen en los pueblos (...) si se diera una vuelta a la tortilla?". Para, más adelante, exponer su análisis:

Se está viviendo una época dolorosa resultante de un proceso evolutivo político-social (...) para evitar la catástrofe revolucionaria en incubación (...) no hay otro camino que llegar al fin de esa evolución por medio de una verdadera justicia social (que es) la doctrina de Cristo. Pero esto no se hace (...) ha habido injusticias, atropellos a las personas de orden (...) hay quien piensa que para acabar con ello no hay más solución que el cambio brusco (...) la paz imperaría y muchos estarían contentos (...) pero hay un sector vencido y (...) sobreviene la revancha y toda revancha (...) tiene desmanes y es injusta ¿y esa evolución social necesaria? ¿se verificaría? resulta pueril pensar que sí (...) ¡a buena hora se le podía ir diciendo al propietario, al burgués, al industrial, al rico que acaba de sufrir una situación de vejamen y angustia, que tienen que atenerse a los preceptos de una estricta justicia social! ¡de ninguna manera!. Y por otra parte la masa proletaria contenida artificiosamente en su marcha, seguiría en un estado de frenético odio, rencor y pasión (...) como las causas no desaparecen, los efectos tampoco y cualquier día más o menos sobreviene el estallido, el tinglado se viene abajo (...) Por lo tanto dejemos a un lado sueños de aventura. Mientras por unos y por otros no se abandonen los impulsos de violencia, el actual conflicto se prolongará. Que todo venga por sus pasos naturales (...) Mientras tanto y por el momento todo lo que no sea serenidad, recta conducta y expiación de propias culpas, es un sueño loco, indigno de mente bien equilibrada¹⁹¹.

Por su parte, en su edición de la tarde del 18 de julio, *El Adelantado* titulaba en contraportada *La inquietud diaria*, aludiendo a la pregunta diaria *¿pasa algo nuevo?*, ¿quizá el diario conservador esperaba algo?, las palabras que venían a continuación parecían ser una amenaza

No puede vivirse con esta inquietud diaria que padecemos (...) Todo menos la inquietud de todas las horas y de todos los días. El que tenga mejor templados los aceros del alma no puede resistirlo. Los nervios tienen una capacidad de resistencia¹⁹².

A la mañana siguiente se acabó la inquietud diaria que padecía la derecha y comenzó en Segovia la persecución de todas las personas que pensaban de forma diferente a las fuerzas que apoyaron la sublevación militar.

¹⁹¹ *La Ciudad y los Campos*, 4 de julio de 1936. Aunque en este momento no parece estar muy de acuerdo con la solución de fuerza, el propagandista de AP Isasa alcanzará durante la guerra el cargo de alférez honorífico del Cuerpo Jurídico Militar, juez de la División nº 72, participando en distintos consejos de guerra.

¹⁹² *El Adelantado*, 18 de julio de 1936. Este diario no volvió a salir a la calle hasta el 27 de julio, debido a la huelga de tipógrafos declarada contra la sublevación militar.

2. LA SUBLEVACIÓN MILITAR EN SEGOVIA

Apenas existe bibliografía sobre las circunstancias que rodearon la sublevación militar en Segovia. En las distintas obras generales sobre la guerra civil existen breves reseñas sobre lo que aconteció en Segovia durante los primeros momentos. La única información que aportan es que esta provincia, como perteneciente a la VII Región Militar, se limitó a secundar el estado de guerra decretado por el general Saliquet en Valladolid. Para un estudio más en profundidad sobre lo sucedido en Segovia tan sólo existen tres obras publicadas: la mencionada *La Iniciación al Movimiento en Segovia*, de Juan de Contreras¹⁹³, *Preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional*, de Felipe Bertrand Güell¹⁹⁴ y la *Historia de la Cruzada Española*, coordinada por Joaquín Arrarás, en su volumen III, el Alzamiento¹⁹⁵. Los tres libros, publicados en 1937, 1939 y 1940, respectivamente, ofrecen una misma versión de los acontecimientos: desde el punto de vista de los sublevados. Por otro lado, la citada *Historia de Segovia* coordinada por Tomás Arribas¹⁹⁶ hace un breve resumen de la guerra civil en Segovia, que no apunta más datos que los proporcionados por Contreras en el trabajo referido. Aparte de las obras reseñadas, el diario local *El Adelantado de Segovia* también aporta su crónica de los sucesos. Existen otros escritos sobre la guerra en Segovia que ahondan en los ámbitos militares (batallas y estrategias), sobre la vida en la retaguardia, los donativos durante la guerra civil o la incautación de bienes a los adversarios¹⁹⁷.

La obra de Contreras supone no sólo la justificación del movimiento militar, sino también la exaltación del mismo. Adolece de contradicciones y errores a la hora de narrar los acontecimientos a pesar de haberse escrito en 1937, tan sólo un año después de haber sucedido los hechos. El estilo literario es, más que descalificante, insultante con los segovianos y segovianas que no profesaban su ideología.

La voluminosa obra de Arrarás aporta datos militares más concretos y exhaustivos que Contreras. Lógicamente, también es justificativa de la sublevación y narra, además, con detalle las acciones militares de los primeros momentos en los puertos de la sierra, Alto del León, Navacerrada, Navafría y Somosierra. Las informaciones de *El Adelantado*, no son menos justificativas que el folleto de Contreras.

Para el estudio de lo ocurrido en los pueblos de la provincia, se han consultado distintas sentencias de Consejos de Guerra en los que se juzgaba la oposición planteada al movimiento militar en las localidades aludidas. Los textos judiciales son además bastante más objetivos que los libros y prensa aludidos a la hora de narrar los hechos acontecidos. Hemos completado los datos de las escasas y tendenciosas fuentes escritas, con

¹⁹³ CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, Juan de. *La Iniciación en Segovia del Movimiento Nacional (julio-agosto 1936)*. Imprenta de *El Adelantado de Segovia*, 1938.

¹⁹⁴ BERTRAND GÜELL, Felipe. *Preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional*. Librería Santaren, Valladolid, 1939. El interés de este libro radica, además del relato de los primeros momentos de la sublevación en Segovia, en la inclusión de las *Bases Técnicas del Movimiento*, escritas por el general Mola.

¹⁹⁵ ARRARÁS, Joaquín, coordinador literario, *Historia de la Cruzada Española*, Eds. Españolas, Madrid, 1940. 8 vols. En el volumen III, El Alzamiento, analiza de forma exhaustiva cómo se produjo la sublevación provincia por provincia. El capítulo correspondiente a Segovia se inicia en la pág. 328. Incluye además el relato de los primeros enfrentamientos militares en la sierra, con gran profusión de datos de unidades, hombres y armamento.

¹⁹⁶ TOMÁS ARRIBAS, J. coord. *Historia de Segovia*. Caja de Ahorros de Segovia, 1978. Es un sólo volumen de 313 págs., en el que Maximiliano Barrio analiza la guerra en las págs. 249-252.

¹⁹⁷ BAGUES, A. *Charlas dadas por Ángel Bagues los días 25 al 29 de agosto, ante el micrófono de Radio Segovia, dedicadas a la muy noble y muy leal ciudad de Segovia y su provincia con motivo del Glorioso Alzamiento Salvador de España*. Segovia, 1937.

GIBAJA VELÁZQUEZ, J. C. *La vida cotidiana en Segovia durante la guerra civil*. ESTUDIOS DE SEGOVIA nº 9, Segovia, 1989.

El Episodio del Alto del León. (Materiales para su Historia). Tipografía del 13 Regimiento Ligero, Segovia 1936.

MONTÁN, Luis. *Episodios de la guerra civil. Cómo fue tomado el Alto del León*. Valladolid, 1936.

RAYMUNDO, P.J. de. *Como se inició en Valladolid el GMN y la gesta heroica del Alto del León*. Valladolid, 1936.

VEGA SOMBRÍA, Santiago. *La incautación de bienes a los oponentes políticos*. En *IV Encuentro de Investigadores del Franquismo*, Universidad de Valencia, 1999.

entrevistas a numerosos testigos de aquellos hechos, muchos de ellos incluso protagonistas de los distintos sumarios.

2. 1. La toma del poder provincial por los militares

Entre los destacamentos militares de Ejército y Guardia Civil que existían en Segovia sobresalía en primer lugar y con gran tradición, la Academia de Artillería e Ingenieros, donde se preparaba desde el siglo XVIII a los futuros mandos del Ejército en esta arma. Su director era el coronel José Tenorio Muelas. En verano, como centro de estudios que era, estaban los alumnos de vacaciones y permanecían en Segovia sólo algunos profesores y tres alumnos que al parecer residían en esta ciudad¹⁹⁸. El único cuartel del Ejército era el 13 Regimiento Ligero, con un total de 430 miembros presentes, entre mandos y soldados de tropa. Había otros tantos de vacaciones, 424¹⁹⁹. Al mando del Regimiento estaba el coronel Sánchez Gutiérrez.

Existía también una Escuela de Automovilismo con muy pocos efectivos, y que además se encontraba en fase de traslado a Madrid. El 14 de julio *El Adelantado* se hace eco del desplazamiento de una treintena de camiones con efectos de dicha institución. Según Arrarás, los jefes militares de la Escuela expusieron diferentes excusas para no trasladar todo el armamento, pues pensaban que haría falta en Segovia. Al menos quedaron 18.000 fusiles en este cuartel²⁰⁰. A estas fuerzas del Ejército hay que añadir la Guardia Civil, con cuarteles en la capital y en los pueblos más importantes de la provincia. Las fuerzas de seguridad eran muy limitadas en número, al igual que las de carabineros.

Durante la primavera el ambiente se hacía cada vez más tenso en Segovia, pues los militares ya se preparaban para la sublevación. Dionisio Ridruejo cuenta que *“a mí en Segovia, -a donde fui y encontré reyerta- un comandante me había requerido en Semana Santa para “tener listos” a los falangistas, que no llegarían a 30”*²⁰¹. La iniciativa para la preparación del movimiento en Segovia corrió a cargo del comandante Fernando Sanz, del 13 Ligero, que fue el encargado de obtener la adhesión de sus compañeros de armas.

En cumplimiento de las Instrucciones de las *Bases Técnicas* del general Mola²⁰², los militares golpistas formaron una Junta integrada por 2 representantes del 13 Regimiento Ligero, 2 representantes de la Academia de Artillería y 2 representantes de la Escuela Automovilista.

El 29 de junio se celebró una reunión de la Junta, ante la inminencia del movimiento militar. Ese mismo día fue designado ya el comandante de la Guardia Civil Joaquín España Cantos como futuro encargado del Gobierno Civil. Los golpistas quedaron a la espera del aviso que llegaría de Valladolid al cuartel de la Guardia Civil. Así mismo, se prepararon dos baterías en el cuartel del Regimiento Ligero para intervenir en caso de necesidad. Esta reunión despertó sospechas en el Ministerio de Guerra, desde donde llamaron a Tenorio, quien explicó que la reunión del 29 era *“expresión del malestar de los mandos ante la situación política nacional”*²⁰³.

En la entrega de despachos de fin de curso, en la Academia de Artillería, el 15 de julio, ya se reveló, como asegura Bertrand Güell, *“cuan elevado era el espíritu de nuestra oficialidad en esa plaza”*²⁰⁴. Para Contreras, la ceremonia *“fue fría y pobre y se resintió de la*

¹⁹⁸ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 27.

¹⁹⁹ ARRARÁS, J., op. cit., pág. 328.

²⁰⁰ ARRARÁS, J., op. cit., pág. 332.

²⁰¹ RIDRUEJO, Dionisio, *Casi unas Memorias*, Planeta, Barcelona, 1976, pág. 44.

²⁰² Base 3ª, en BERTRAND GÜELL, Felipe., op. cit., pág. 120. También recogida por *El Adelantado* del 31 de agosto de 1936, de una entrevista con el general Mola, quien mostró al periodista los papeles donde había redactado las *Bases Técnicas del Movimiento*.

²⁰³ ARRARÁS, J., op. cit., pág. 330.

²⁰⁴ BERTRAND GÜELL, Felipe., op. cit., pág. 280.

turbación del ambiente hasta el punto de que algunos civiles pudieron vislumbrar la decisión de los oficiales jóvenes de no tolerar lo intolerable²⁰⁵.

Por el contrario, en *El Adelantado* del mismo día, 15 de julio, aparece la noticia con toda normalidad, como algo tradicional, con la asistencia al acto de todas las autoridades locales y provinciales: “gobernador civil, alcalde, el diputado Contreras, el presidente de la Audiencia, Navasqués, el teniente fiscal Vigueras, el delegado de Hacienda González Palomino, el coronel del Regimiento Sánchez Gutiérrez, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil teniente coronel Nieto... Todos ellos fueron recibidos por el coronel de Artillería y gobernador militar Tenorio. Se pronunciaron los discursos de rigor por el coronel Tenorio y el gobernador Chacón, que fueron ‘muy aplaudidos’”²⁰⁶. Parece evidente que los comentarios de Güell y Contreras sobre dicho acto se hicieron a posteriori y por esa razón quieren mostrarse como premonitorios de los acontecimientos que después sucedieron.

El 17 de Julio se recibieron en Segovia las noticias del levantamiento militar en el norte de África. A la mañana siguiente, sábado 18, desde Unión Radio el Gobierno de Madrid aseguraba que se había sofocado el movimiento militar iniciado en el Protectorado. Los segovianos pasarían el día, como en otras provincias españolas, en actitud expectante, ansiosos de conocer la postura que tomaran los militares de la capital.

Los miembros del Frente Popular, especialmente los militantes de la Casa del Pueblo, pidieron armas al gobernador civil, Adolfo Chacón de la Mata, de Unión Republicana, quien alegó no tener órdenes de Madrid para hacerlo²⁰⁷. En Segovia ocurrió lo mismo que en otras capitales de provincia, donde no se dio la debida importancia al movimiento militar y se negaron en los primeros momentos las armas a las organizaciones obreras en la creencia de que la intentona golpista era fácilmente sofocable. Además, esa mañana del 17 de julio el gobernador civil había visitado la Academia de Artillería, de la que salió “muy contento”²⁰⁸, como explicaba *El Adelantado*, a la vez que anunciaba la próxima visita al Regimiento y a la Comandancia de la Guardia Civil. Sin duda, Chacón de la Mata procuraba ganarse la confianza de algunos elementos armados y aprovechaba para sondear el estado de ánimo de los mandos militares locales.

Arrarás hace responsable de la no entrega de armas a las organizaciones obreras al teniente de Seguridad Feijoo Requena, relacionado con la Falange de Valladolid, quien en palabras de Contreras “era uno de los que con más seguridad apoyaba el Movimiento”²⁰⁹. Según la argumentación de Arrarás, el gobernador civil delegó ante los representantes del Frente Popular en el teniente de Seguridad para la entrega de las armas. Pero Feijoo se negó a ello, acompañándoles a los delegados frentepopulistas a ver de nuevo a Chacón, quien, por temor al oficial allí presente, ya no mantuvo su palabra anterior, negando ahora cualquier entrega de armamento.

La única medida que tomó el gobernador civil fue concentrar en la capital a la Guardia Civil destinada en toda la provincia, lo que se mostraría como un hecho determinante para el desarrollo de los sucesos ocurridos durante los primeros días del movimiento militar en algunos pueblos. Al no haber fuerzas armadas en ninguna localidad de la provincia, los comités de huelga nombrados por las organizaciones obreras se hicieron con el control de la situación dominando sus pueblos hasta la vuelta de los guardias con los falangistas algunos días después.

A las 8 de la tarde del 18 de julio se cortó la comunicación con Valladolid. Contreras cuenta que esa misma tarde se produjo una reunión decisiva en la Academia de Artillería,

²⁰⁵ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 17.

²⁰⁶ *El Adelantado*, 15 de julio de 1936.

²⁰⁷ Testimonio de Isidoro Romano, secretario de organización de las Juventudes Socialistas Unificadas de Segovia en aquel momento.

²⁰⁸ *El Adelantado*, 17 de julio de 1936.

²⁰⁹ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 21. Isidoro Romano recuerda el comportamiento chulesco de Feijoo que originó varios incidentes con militantes de izquierda con los que tenía manifiesta enemistad. Además, Esteban Barba dice que al teniente “le llamaban ‘mi caballo murió’ porque no llevaba caballo, pero siempre llevaba una fusta en la mano”.

con el Comandante Militar, José Tenorio Mesas, el coronel del Regimiento Ligerero, Sánchez Gutiérrez, los profesores de la Academia y algunos oficiales del Ligerero y de la Escuela de Automovilismo²¹⁰.

Para Güell la situación no estaba controlada por los insurgentes, es más, escribía: *“nuestra desventaja estribaba en la confianza excesiva en el espíritu de la población, que dejó casi desprovista de armamento a la guarnición. En cambio los elementos de izquierda estaban bien armados y preparados”*²¹¹. El Gobierno Civil había declarado el estado de alarma por el que se prohibía la permanencia de grupos de personas en las calles. Para *El Adelantado* (en su narración publicada una semana después de los acontecimientos, el 27 de julio) el estado de alarma solo afectaba a los simpatizantes de las derechas:

Mientras tanto, se dieron órdenes rigurosas para cachear y desarmar a los ciudadanos de derechas. Todos los derechistas eran minuciosamente cacheados en las calles, al tiempo que se practicaban registros, muy detenidos en diversos domicilios.

Los afiliados de la Casa del Pueblo campaban por sus respetos y se reunían en legiones en diversos lugares de la capital, especialmente en las inmediaciones del cuartel donde estaba alojado el 13 Regimiento de Artillería, y la Academia de Artillería e Ingenieros. En los grupos figuraban bastantes mujeres, la mayoría jóvenes. Especialmente la noche del sábado, las calles de Segovia estuvieron bajo el dominio total de aquellos elementos²¹².

Contreras confirma los temores de los sectores golpistas de la capital, escribiendo que *“esperábamos que los marxistas se echasen a la calle y no teníamos para defendernos apenas armas, ni organización, ni nada. Sabíamos que elementos de la Casa del Pueblo vigilaban las casas de los oficiales, y grupos numerosos, entre los que había bastantes mujeres, rondaban en torno a la Academia y del Cuartel del 13 Ligerero”*²¹³. Arrarás ahonda este episodio diciendo que estos grupos insultaron a los jefes militares por los alrededores del cuartel; ante lo cual, los coroneles Tenorio y Sánchez Gutiérrez se reunieron y hablaron con el gobernador para que los disolviera, bajo la amenaza de intervención de las tropas. Este hecho es confirmado por las declaraciones de Chacón en el proceso 117/36 donde reconoció que la noche del 17 tuvo una llamada del coronel Tenorio informándole de la existencia de grupos que merodeaban el cuartel y *“ordenó a la policía evitar que grupos vigilaran el Regimiento, al día siguiente Tenorio le dijo que se había cumplido la orden”*²¹⁴.

En el relato de lo sucedido la noche del 18 de julio *El Adelantado* iba más allá, señalando incluso dónde se habían entregado las armas: *“los seguidores del Frente Popular fueron armados por las autoridades civiles, unos en el Gobierno Civil, otros en la Comisaría de Vigilancia, y otros recibieron las armas en distintos lugares de las afueras de la población”*²¹⁵.

En su argumentación de lo sucedido esa noche, los militares sublevados cargaron directamente la responsabilidad de la organización y armamento de los grupos de obreros en la persona del gobernador civil. En el consejo de guerra que condenó a muerte a Chacón de la Mata se le acusaba de que había ordenado *“que los elementos extremistas de la capital patrullasen armados en la noche del 18 julio con el fin de oponerse violentamente al movimiento preparado por el Ejército”*²¹⁶. Esta acusación fue negada por el gobernador, quien, según manifestó, tenía pocas amistades entre los componentes del Frente Popular local, que habían pedido incluso su destitución a raíz de los sucesos del 14 de abril.

²¹⁰ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 20

²¹¹ BERTRAND GÜELL, F., op. cit., pág. 280.

²¹² *El Adelantado*, 27 de julio de 1936.

²¹³ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 19.

²¹⁴ Arch. Prov. J. 4851, sumario 117/36. Declaración de Chacón el 5 de octubre de 1936 en la prisión de Segovia.

²¹⁵ *El Adelantado*, 27 de julio de 1936.

²¹⁶ Arch. Prov. J. 4851, testimonio de sentencia del consejo de guerra celebrado en Valladolid el 13 de octubre de 1936, por la causa 578/36. El gobernador civil fue condenado a muerte por adhesión a la rebelión y fusilado en Valladolid el 5 de diciembre de 1936, como quedó anotado en el Reg. Civ. de Valladolid del mismo día.

Recordaba que le pidieron armas, entre otros, los dirigentes Francisco Álvarez Matesanz, comunista, y el socialista Enrique Pérez Bonín²¹⁷, no se las llegó a facilitar “porque no las tenía, aunque me decían que las pidiera a la Audiencia o centros donde las hubiera, pero mi conciencia no me lo permitía”²¹⁸.

Contreras confirma la actitud confiada del gobernador: “los elementos de la Casa del Pueblo, que estaban armados, fueron contenidos por el gobernador civil, que creía contar con la adhesión de algunos militares”²¹⁹. Por su parte, *El Adelantado* ratificaba el realismo de los dirigentes provinciales del Frente Popular, quienes, al contrario que Chacón, veían claro el peligro de sublevación en Segovia pues “temían desde el sábado, ya conocido el levantamiento de África, que el Regimiento de Artillería Ligera y demás Fuerzas de Orden Público se sumasen al mismo”. Para el diario local, “todas las apariencias hacían suponer que las organizaciones obreras y demás elementos del FP iban a adelantarse a los sectores adversarios en la tarea de apoderarse de la ciudad y de la provincia”²²⁰.

Contreras insiste en la misma línea, afirmando que aquella noche del 18 al 19 de julio miembros armados de la Casa del Pueblo patrullaron constantemente la ciudad de Segovia. También hicieron guardias nocturnas “aquellos pocos muchachos de Falange Española o de las Juventudes de Acción Popular que se habían podido proporcionar un arma”²²¹. Este hecho es negado por algunos testimonios, que afirman que “los derechistas no aparecieron por las calles, pues sabían ya que en la Academia de Artillería estaba todo preparado para el día 19”²²²; por lo que no eran necesarios sus servicios. Al menos Contreras reconoce que “no hubo ninguna colisión, ni altercado, no se produjo ningún enfrentamiento armado. Así mismo, hubo también algunos guardias de seguridad que patrullaban deteniendo y cacheando a los grupos”²²³.

Tanto Contreras como *El Adelantado* afirman que los obreros estaban armados, lo que ha sido negado por varios testigos²²⁴ y, lo que es más importante, por el sumario 117/36²²⁵, en el que se juzgaba bajo la acusación de sedición a los integrantes de los “grupos armados” de izquierdas. La base de la acusación era un guardia de Seguridad que denunciaba que dos de estos grupos iban a asesinarlo, pero él solo logró detenerlos a todos y llevarlos a Comisaría²²⁶. Allí entregó las armas requisadas a los agresores, que resultaron ser únicamente la pistola reglamentaria de Juan Cabeza, un sargento retirado republicano que formaba parte de uno de los grupos.

La imaginación del denunciante y la “colaboración” provocada de un detenido que más adelante denunció malos tratos, hizo desarrollar las acusaciones hasta términos novelescos. Decía el joven detenido que se “habían creado dos grupos armados encargados de matar al sargento de seguridad, Estanislao Mendoza y al guardia Julián Sevillano. Un primer grupo componía la célula de acción, vigilados y seguidos por la otra

²¹⁷ El primero era miembro del Comité Provincial del PCE, había sido candidato a compromisario para la elección del presidente de la República, en abril último. Pérez Bonín era un abogado, dirigente del PSOE.

²¹⁸ Declaración de Chacón el 5 de octubre de 1936 en la prisión de Segovia. Las malas relaciones entre Chacón y los dirigentes locales del FP son ratificadas por Isidoro Romano y Serapio Bermejo.

²¹⁹ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 18.

²²⁰ Ambos entrecorridos de *El Adelantado*, 27 de julio de 1936.

²²¹ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 20.

²²² Testimonio de Isidoro Romano.

²²³ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 20.

²²⁴ Testimonio de Gregorio González Llorente, Carmen Arranz Marinas, Fausto Pérez Bonín, Isidoro Romano.

²²⁵ En el sumario 117/36 no se aplicó la justicia militar pues se juzgaron hechos ocurridos el 18 de julio de 1936, antes de la declaración del estado de guerra en la provincia de Segovia.

²²⁶ Arch. Prov., sumario 117/36. El guardia Julián Sevillano declaró el 18 de agosto que “ya de antiguo tenía conocimiento de que estaba amenazado de muerte por los elementos de la casa del pueblo, sin saber la causa, toda vez que él no había dado motivos para ello”.

*célula integrada por la directiva del Partido Comunista, que tenía por misión ejecutar a la primera célula caso de no cumplimentar la orden de asesinato*²²⁷.

La sentencia del juicio a que se le sometió seguía la acusación de Sevillano:

La noche del 18 julio dos grupos de individuos, algunos de estos con armas, se apostaron en las inmediaciones de la casa de Julián Sevillano, con el propósito de ejercer sobre él, aprovechándose de las anormales circunstancias que en aquel día existían, algún acto de odio y venganza que no está determinado, apercibido de su presencia les intimó apuntando con su pistola, levantasen las manos, lo que hicieron, se incautó el arma de Cabeza, el cual con otros que no son objeto de este juicio fue detenido y entregado en Comisaría, dispersándose los demás²²⁸.

Pero el fallo fue absolutorio para todos porque quedó sin probar si llevaban armas los procesados, tampoco se probó que llegaran a formar parte de los grupos y ser Cabeza el único que llevaba arma, pero no había sido acusado de ello.

Durante la larga noche del 18 de julio hubo distintos criterios en cuanto a las detenciones, puesto que el comisario Fernando González, republicano, cargo de confianza del gobernador, pretendía controlar preferentemente a los militantes derechistas. De hecho fue condenado a 20 años por *“poner en libertad a los militantes izquierdistas”*, aludidos en el párrafo anterior (únicamente el sargento Cabeza), que *“fueron detenidos por los agentes de policía y guardias de seguridad, y devolverles las armas que les habían sido ocupadas”*²²⁹ (tan sólo la pistola reglamentaria de Cabeza). En cambio, su segundo, el teniente de Seguridad Feijoo, falangista, prefería detener a los militantes izquierdistas aunque debía cumplir las órdenes del comisario, dato corroborado por Contreras al escribir que Feijoo, *“tenía orden del gobernador de detener a los ciudadanos de derechas con armas. Los detenidos marxistas entraban por una puerta y salían por la otra, los de derechas iban a la Prisión Provincial”*²³⁰. A pesar de lo que afirma Contreras, aquella noche no hubo ningún detenido de signo derechista puesto que si el comisario fue acusado de liberar a detenidos de izquierda, con más razón hubiera sido acusado de haber detenido a militantes de derechas, lo que no ocurrió.

Hay que resaltar que tanto *El Adelantado* como Contreras afirman que no hubo ningún tipo de enfrentamiento en la capital durante la noche del 18, con el ir y venir de segovianos: unos defensores de la legalidad republicana y otros partidarios de la sublevación militar. Todos ellos pasaron la noche expectantes puesto que todavía no se había determinado públicamente de qué lado estaba la guarnición de Segovia. Con esa incertidumbre se llegó a la mañana del domingo en la que se decidiría la suerte de la capital y con ella la de la provincia.

Al no disponer de armas los seguidores del Frente Popular, no pudieron realizar ningún tipo de guardias armadas por la ciudad; eso sí, recorrían las calles para ver qué sucedía con el Ejército de la capital. De hecho, según los testimonios recogidos, los

²²⁷ Arch. Prov. J. 4851, sumario 117/36. Declaraciones de Federico García el 18 de agosto, 12 y 14 de septiembre. Según su testimonio, las células estaban integradas por el presidente de la Casa del Pueblo, Alejandro González González, y los miembros de JSU: Isidoro Romano, José María Contreras, José Escudero, Atanasio de Antonio y Paulino González, estaban *“vigilados y seguidos por otra célula de la directiva del PC, que tenía por misión ejecutar a la primera célula caso de no cumplimentar la orden de asesinato. Que las células tenían por misión suprimir a la patrulla de vigilancia, seguridad y demás autoridades de la capital que no estuviesen de acuerdo con el FP”*. La otra célula la integraban –siempre según la declaración de Federico García– la directiva del PC: Alejandro González Gómez, el profesor del Instituto José Tamayo, el maestro Álvarez Matesanz, Guillermo Martín Tejero, Antonio Herrero Ballina y Nicolás Álvaro. Los tres primeros sí integraban el Comité Provincial del PC, pero los tres restantes eran de JSU. Federico García se retractó el 29 de septiembre afirmando que *“anteriores declaraciones no son ciertas y han sido consignadas en su mayor parte por la policía y Guardia Civil habiéndolas firmado el declarante ante la presión de dichos agentes, que incluso llegaron a emplear con él la violencia”*.

²²⁸ Arch. Prov. J. 4851, sumario 117/36. Sentencia del juicio civil celebrado el 21 de febrero de 1937.

²²⁹ Arch. Prov. J. 4851. Testimonio de sentencia del consejo de guerra celebrado en Valladolid el 13 de octubre de 1936, por la causa 578/36.

²³⁰ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 21.

dirigentes más significativos de los partidos republicanos y de izquierda²³¹, como no habían conseguido las armas necesarias para contener la sublevación militar, se marcharon esa misma noche hacia Madrid por informarse de la situación y ver la posibilidad de traer armas o contingentes de guardias de asalto²³². Ante la falta de dirigentes, parece, más bien, que las bases, de un modo espontáneo -y sin ningún tipo de organización- iban de un lado para otro entre las sedes de los partidos del Frente Popular con el fin de informarse de la situación real de la ciudad.

Hay un documento revelador de la no beligerancia por parte de las organizaciones del Frente Popular contra el movimiento militar: es el escrito del gobernador civil, Joaquín España, fechado el 23 de noviembre de 1936, a la Junta Técnica del Estado, que informaba sobre la aplicación del Decreto nº 108 de la Junta de Defensa Nacional (JDN), en el que, entre otras cosas, afirmaba: *“Al tiempo le manifiesto que ninguna organización ha tomado parte en oposición al glorioso movimiento salvador de España”*²³³.

Durante la mañana del domingo 19 de julio se produjeron los hechos determinantes. Antes de las 10 de la mañana, el teniente de Seguridad Feijoo se presentó en el Regimiento Ligero anunciando su sublevación. Posteriormente informó a la Academia de Artillería (que a la sazón era la Comandancia Militar) diciendo que sus fuerzas esperaban, *“formadas a la entrada del Gobierno Civil con orden de no dejar ni entrar ni salir a nadie”*, a que un jefe militar se hiciera cargo del edificio. Para ello se ofreció el capitán segoviano Fernando de Castro²³⁴.

Desde allí se desplazaron al Gobierno Civil, donde formaron a la Guardia de Seguridad y a la Guardia Civil -allí concentrada por el gobernador civil- y les dirigieron unas palabras. Inmediatamente, fueron detenidos el gobernador, Adolfo Chacón de la Mata, su secretario Moreno Aizpurúa y el comisario, Fernando González García²³⁵, que permanecía junto al gobernador, pues la Comisaría estaba ubicada en el mismo edificio del Gobierno Civil.

Durante la mañana del 19 llegaron a la sede del Gobierno algunos significados republicanos en busca de noticias y a ofrecer sus servicios en defensa de la legalidad constitucional. Según entraban se los reducía a prisión sin que trascendiera a la calle tal medida. Así le ocurrió al sargento Cabeza que había acudido para quejarse ante el gobernador por la detención sufrida la noche anterior y quedó retenido. Se dan casos curiosos con los mensajes telefónicos procedentes de la provincia tratando de esclarecer la situación. Por ejemplo, el alcalde de La Granja pedía autorización para detener a elementos de derecha. Lógicamente, le contestaron que no lo hiciera. Desde el Ayuntamiento de Sepúlveda llamó Daniel Cristóbal, secretario de la Casa del Pueblo, para informarse de la situación. Le contestaron preguntándole si era Miguel Abad -exalcalde conservador y padre del falangista Braulio Abad- con lo que descubrió que Segovia se había sublevado²³⁶.

Con gran retórica narra Contreras los acontecimientos que ocurrieron después. Hacia las 11 de la mañana, llegó una camioneta de la Guardia Civil a la Plaza Mayor, donde está situado el Ayuntamiento, siendo recibida con el grito de ¡Viva España!, *“el grito que en*

²³¹ De Izquierda Republicana: José Carrasco Linares; de Juventudes Socialistas Unificadas, Manuel Bear Solana, de la Casa del Pueblo que englobaba a Partido Socialista Obrero Español y Unión General de Trabajadores: Enrique Pérez Bonín, socialista, y Alejandro González González y Alejandro González Gómez, comunistas; del Partido Comunista de España: Francisco Álvarez Matesanz y Gaspar Duque Serrano.

²³² Testimonios de Gregorio González, Isidoro Romano,...

²³³ AGA, Justicia, 39.002, caja 921.

²³⁴ *El Adelantado*, 27 de julio de 1936 y 15 de marzo de 1937 en la narración del homenaje al teniente Feijoo se vuelve a rememorar su actuación de los momentos decisivos del 19 de julio de 1936.

²³⁵ Por la causa 578/36, el gobernador fue condenado a muerte y fusilado en Valladolid (*El Adelantado*, 5 de diciembre de 1936), el comisario condenado a 20 años y el secretario fue absuelto, aunque posteriormente sería condenado por el procedimiento de responsabilidad civil a una multa de 10.000 pts.

²³⁶ Testimonio de Daniel Cristóbal.

los meses anteriores no podía proferirse sin peligro de encarcelamiento²³⁷. El jefe de la fuerza habló con el alcalde Pedro Rincón, republicano conservador, quien como dice Contreras, era un “viejo republicano, cuya reacción ante los desafueros del F.P. le había valido el apoyo de la derecha para obtener la vara. Se creyó obligado a inquirir sobre el carácter del Movimiento, se le contestó que éste era republicano, a lo que el edil repuso: nada tengo que oponer”²³⁸.

Sin resistencia alguna, los guardias se posesionaron del edificio de Correos y Telégrafos, de la Central de Teléfonos, Delegación de Hacienda y demás centros oficiales, incluyendo la Casa del Pueblo “abandonada por sus dirigentes que huyeron hacia Madrid”²³⁹, según Güell.

Hacia las 12 de la mañana llegó al Azoguejo una batería del 13 Ligero, bajo el mando del capitán Marceliano López Gómez²⁴⁰. “Allí desde tiempos medievales se concentraban los obreros que afluyen de S. Millán, El Salvador, S. Lorenzo y el Mercado”²⁴¹. Aquella mañana de domingo, día de mercado, la plaza estaba llena de gente que desconocía lo ocurrido en la parte alta de la ciudad (toma del poder por los militares: Gobierno Civil, Ayuntamiento y demás organismos oficiales). Además, las noticias de *Unión Radio* y los periódicos de Madrid recién llegados mantenían en pleno optimismo a los fieles del régimen republicano. “Al aparecer el piquete militar fueron recibidos con puños en alto y vivas a Rusia. El oficial suspendió la lectura del bando y anunció que tales manifestaciones serían reprimidas con las armas, consiguiendo la inmediata dispersión general”²⁴².

Desde el acueducto los soldados se dirigieron a la Plaza Mayor, deteniéndose en algunos lugares donde se concentraban más personas para leer el bando; al tiempo que colocaban ejemplares del mismo en las paredes. En la plaza, según Contreras, “disfrutaron de gran recibimiento. Todavía un muchacho levantó el puño en un gesto desesperado que era la agonía del comunismo en Segovia y costó trabajo que no pagara cara su temeridad”²⁴³. Allí aún permanecían varios grupos de obreros, de los que habían pasado la noche en vela, que recibieron el bando con gran indignación²⁴⁴.

Tomado el control de la ciudad por los militares sublevados, se iniciaron las detenciones. Parece que no pudieron detener a los dirigentes de las organizaciones republicanas y obreras, quienes, a la vista de cariz que tomaban los acontecimientos, marcharon hacia Madrid. Así lo vemos en Contreras, “las fuerzas de Seguridad y Guardia Civil hicieron algunas detenciones de importancia secundaria, puesto que los dirigentes habían tomado, al mediodía, por el puerto de Navacerrada, el camino de Madrid”²⁴⁵; y *El Adelantado*: “...viéndose que la totalidad dirigentes PSOE, UGT y PC habían desaparecido”²⁴⁶, o la versión más descalificante de Bagues “...mientras los dirigentes de masas inconscientes huían cobardemente por la carretera de S. Ildelfonso”²⁴⁷.

Como ya se ha apuntado, algunos dirigentes republicanos y de izquierda se habían marchado ya de madrugada viendo el peligro que podrían correr. Otros partieron la misma mañana del domingo²⁴⁸. Pero los más fueron apresados esa mañana; por ejemplo Isidoro

²³⁷ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 23 y 24.

²³⁸ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 24.

²³⁹ BERTRAND GÜELL, F., op. cit., pág. 281.

²⁴⁰ Parece ser que esto era lo usual; vemos en *El Adelantado*, 8 de octubre de 1934, la última proclamación del estado de guerra en Segovia por una batería del 13 Regimiento Ligero en “los lugares de costumbre”, con motivo de la Revolución de Octubre.

²⁴¹ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 24.

²⁴² CONTRERAS, J., op. cit., pág. 24.

²⁴³ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 24.

²⁴⁴ Testimonio de Isidoro Romano, que presencié estos hechos.

²⁴⁵ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 24.

²⁴⁶ *El Adelantado*, 27 de julio de 1936.

²⁴⁷ BAGUES, A., op. cit., pág. 12.

²⁴⁸ La causa 460/36 juzga a Ángel Alonso Sánchez, como propietario de un vehículo, y otros dos como chóferes acusados de haber trasladado a Madrid a “tres extremistas de Segovia”, que no cita. En Arch. Prov. J/5342. Exp. Resp. Civ. Ángel

Romano fue detenido al llegar a casa para comer, cuando tenía previsto pasar la sierra esa misma tarde²⁴⁹. Otros líderes republicanos y socialistas locales que no se marcharon por creer que no les pasaría nada, pues “nada habían hecho”²⁵⁰, pagaron con su vida haberse quedado con sus familias (el presidente de la Agrupación Socialista Manuel Gómez, el vicesecretario Antonio Hernanz, Julio Fuster, José Peña, o los republicanos Agustín Hernández y José Gutiérrez).

Para controlar la situación no fue necesario el empleo de la fuerza, sólo en el barrio del Mercado hubo un pequeño tiroteo. Gregorio González, uno de los protagonistas del suceso, cuenta que cerca de la sede de la JSU, la Guardia Civil iba a detener a unos ferroviarios que tenían un arma. Los guardias utilizaron a unos jóvenes socialistas de parapeto en el tiroteo para detener a los obreros. Resuelta la situación fueron detenidos todos y llevados al Gobierno Civil, y de allí a la Comisaría de Policía. Los falangistas querían llevarlos a su “cuartel” en la plaza de los Huertos, pero se impusieron los guardias, diciendo que eran “detenidos suyos”²⁵¹.

Consumado el golpe militar, se hizo cargo del Gobierno Civil el comandante de la Guardia Civil de Segovia, Joaquín España Cantos, como preveía Mola en su Instrucción Reservada nº 1, Base 3ª, i) *“Tener designados, de acuerdo con el jefe del Comité Militar Territorial, la persona que, al producirse el Movimiento, ha de encargarse del Gobierno Civil de la provincia (siempre que sea posible es preferible que de dicho Gobierno Civil se encargue el Jefe más caracterizado de la Guardia Civil; si no es persona de carácter, es preferible una civil)”*²⁵². Joaquín España quedaba como gobernador delegado de la Autoridad Militar, representada por José Tenorio Mesas, coronel director de la Academia de Artillería, que se mantenía en su puesto de Comandante Militar de la provincia.

De forma paralela se produciría la liberación de presos fascistas. Los detenidos gubernativos fueron liberados el mismo día 19 de julio. Mayores problemas tuvieron los falangistas que estaban condenados, como Ricardo Mateo que cumplía pena de 6 meses por tenencia ilícita de armas, a raíz de los sucesos del baile *El Pensamiento*²⁵³. Fue liberado el 23 de julio, porque el director de la Prisión Provincial había puesto *reparos legales* a la liberación, ante los cuales se presentaron en la cárcel *“en número de 7 u 8 armados en un coche, saludando a lo fascista y diciendo que si no ponían en libertad por las buenas al recluso (...) lo sacarían ellos a la fuerza”*. Estos argumentos fueron suficientes para que el director procediera a ponerlo en prisión atenuada en su domicilio, porque, continuaba aquél, *“como la fuerza de los que hicieron tal petición era muy superior a la que yo pudiera oponer con mis funcionarios lo he puesto en prisión atenuada evitando con mi manera de proceder mayores males, dado el número de población reclusa de ideas contrarias a los mencionados asaltantes y teniendo en cuenta el estado gravísimo del preso enfermo y de carecer aquí con los medios pertinentes para poder atenderlo”*²⁵⁴. Como se puede apreciar, a cuatro días de iniciada la sublevación en Segovia ya había gran número de presos republicanos e izquierdistas. Los reparos legales del director se diluyeron ante la medida de fuerza de los falangistas, que se vieron respaldados legalmente por la orden del gobernador

Alonso. Por testimonio de José Peña Quevedo sabemos su identidad: los catedráticos de instituto Ginés Ganga y Virgilio Colchero y el abogado Enrique Pérez Bonín, que estaban tomando café en el bar Juan Bravo con su padre José Peña Huertas, al que le dijeron que se fuera con ellos en un taxi, pero él se quiso quedar por estar con la familia, y porque *“no había hecho nada, era simplemente socialista”*. Ese mismo día fue detenido y sería fusilado el 15 de agosto.

²⁴⁹ Testimonio de Isidoro Romano. De hecho había quedado para viajar a Madrid después de comer con Paulino González, quien marchó solo.

²⁵⁰ Es una expresión que este investigador ha oído en numerosas ocasiones a distintos testigos, pues era la creencia extendida entre la mayoría de las víctimas que estaban convencidas de que su inocencia les libraría de cualquier castigo. *“Como nada he hecho nada me van a hacer”* decía Cipriano Barrio a su esposa cuando los falangistas se lo llevaron de su casa.

²⁵¹ Testimonio de Gregorio González.

²⁵² BERTRAND GÜELL, F., op. cit., pág. 120.

²⁵³ Causa 29/36 del Jgdo. Ins. de Segovia.

²⁵⁴ Arch. Pris. Prov. Exp. Ricardo Mateo. Escrito del director de la Pris. Prov. al presidente de la Audiencia de Segovia, fechado el 23 de julio de 1936.

civil, comandante España, quien “de orden del comandante militar de esta plaza” dispuso la prisión atenuada en su domicilio, aprovechando el delicado estado de salud de Ricardo Mateo, y “teniendo en cuenta que por el número excesivo de detenidos que existe en la prisión, no se puede atender a la curación del aludido y antes de que la vida peligre”²⁵⁵.

2. 2. La oposición al levantamiento militar

En Segovia se escuchó por la radio a las ocho de la tarde del sábado la nota de la UGT de Madrid, que convocaba la huelga general para abortar la insurrección de los militares sublevados²⁵⁶. En la capital y en los pueblos con implantación de las organizaciones obreras fue secundada la huelga de una manera desigual en función de las zonas y los sectores de actividad: tuvo más incidencia en la siega, la resina, el comercio, las imprentas, la construcción y la madera.

2. 2. 1. La Huelga General en la capital

Para la ciudad, Contreras reconoce el dato de la diferente incidencia del paro: “Obedeciendo las órdenes lanzadas por Largo Caballero a través de la radio, muchos obreros se declararon en huelga pacífica. No hubo unanimidad. Los de la fábrica ‘Klein’, de cueros y gomas, gente levantisca que había acogido con facilidad otras veces órdenes semejantes, ahora no dejaron el trabajo”²⁵⁷.

El Adelantado no se publicó hasta el lunes siguiente día 27 de julio, y lo hizo gracias a la imprenta de la Diputación Provincial, puesto que sus tipógrafos, afiliados a la UGT, continuaban el paro. Ese día se daba información sobre la huelga: “Todavía se mantiene la huelga, pero con menor firmeza. No hay unanimidad. Cerca de la mitad de los obreros huelgan. Entre los que trabajan, Klein y Compañía, en huelga de octubre del 34, reincorporados tras la victoria del F.P. El comercio ha abierto sus puertas con o sin dependientes”²⁵⁸. En artículo aparte y bajo el epígrafe: “Huelga de tipógrafos de El Adelantado y otros talleres”, comentaban sobre la huelga que padecía el diario: “Sin excepción alguna los tipógrafos sostienen su **inmotivada huelga de marcado tipo político**”²⁵⁹.

El propietario del periódico, Cano de Rueda, entabló conversaciones con los trabajadores del diario, pero la huelga no fue desconvocada. Las otras imprentas de Segovia también prolongaron la huelga (se vio igualmente afectado el semanario *La Ciudad y los Campos*) “salvo una”, según *El Adelantado*, que era la de la Diputación. Finalizaba el

²⁵⁵ Orden del Gob. Civ. fechada el 23 de julio de 1936. En el exp. personal de Ricardo Mateo figura literalmente y con el espacio en blanco tal y como lo dejamos:

23 julio 36. Es puesto en libertad por (sin expresar la causa de liberación)

²⁵⁶ En Madrid, al conocerse la sublevación militar, los sindicatos de clase UGT y CNT llamaron a la huelga general contra el levantamiento antirrepublicano de un sector del Ejército. Los dos comunicados eran suficientemente claros respecto a la posición de la clase obrera ante el golpe de estado:

Nota de UGT: Como respuesta a la declaración del estado de guerra por parte de los elementos facciosos que se han levantado en armas contra la República, la Comisión Ejecutiva de la UGT ordena la inmediata declaración de la huelga general indefinida hasta que el criminal movimiento sedicioso sea completamente aplastado. La huelga dará comienzo automáticamente en cuantas localidades se haya declarado ya el estado de guerra, y se extenderá a todas aquellas en que suceda lo propio. La UGT leal a sus compromisos con el FP, hace un llamamiento a todo el proletariado para que, más unido que nunca, replique con toda energía a la infame intentona del fascismo.

Nota de CNT: Ante el movimiento gravísimo iniciado por los elementos fascistas, recomendamos a todos los pertenecientes a CNT que deben responder con toda energía, poniendo de su parte todos los medios que estén a su alcance contra toda provocación; pero también contra todo intento de dictadura.

²⁵⁷ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 30. Esta afirmación viene motivada porque -como expusimos en el capítulo anterior- durante la revolución de octubre de 1934, los obreros de esta fábrica protagonizaron una huelga que acabó con el despido de 62 trabajadores, readmitidos posteriormente tras la victoria en febrero del Frente Popular.

²⁵⁸ *El Adelantado*, 27 de julio de 1936.

²⁵⁹ *El Adelantado*, 27 de julio de 1936. El subrayado es mío.

artículo con un aviso a sus repartidores: “Suponemos que los repartidores de *El Adelantado* vendrán hoy a cumplir sus obligaciones. De no ser así serán sustituidos por amigos del periódico, que **nos indicarán las organizaciones políticas de derechas**”²⁶⁰. Es muy significativa esta frase que determina claramente la fractura social operada con el golpe militar y el marcado tinte político del diario.

Durante los días siguientes, continuaron las indicaciones sobre la huelga. El 28 una nota de la redacción aconsejaba la vuelta al trabajo por “patriotismo”, y también para “evitar perjuicios que pudieran ser irreparables y que todos, con el corazón puesto en la patria, y aun en nosotros mismos, estamos en el deber de evitar”²⁶¹; y el 29 de julio: “...**la huelga de tipo socialista** que los operarios de *El Adelantado* siguen prolongando”²⁶².

Para contrarrestar la huelga general el gobernador militar publicó un bando el 27 de julio, en el que amenazaba: “Serán dados de baja (...) todos los funcionarios públicos, del Estado, la provincia o el municipio, que antes del día 1º del mes de agosto, no se hayan reintegrado a sus oficinas, decretándose el cese el 31 del actual”. La misma medida se aplicaría a “los empleados de empresas públicas y particulares que no se reintegren a su trabajo la fecha indicada”²⁶³.

A pesar de las sanciones previstas en el bando, algunos autores tachan de blandas a las autoridades militares locales. Arrarás dice concretamente que, ante la huelga general, “las autoridades no procedían con la energía exigida por las circunstancias”²⁶⁴. Es evidente que los militares segovianos no actuaron tan expeditivamente como, por ejemplo, Queipo de Llano en Sevilla.

En cualquier caso, sólo consta en el *BOP* el cese por la aplicación del bando de 27 de julio de los siete empleados de la Diputación Provincial que no habían asistido a su puesto de trabajo²⁶⁵ y el Juez Instructor de Sepúlveda, Juan Becerril y Antón Miralles²⁶⁶.

2. 2. 2. La defensa de la República en la provincia

Al conocerse la sublevación militar en el Protectorado, el gobernador civil, Chacón de la Mata, concentró en la capital a la totalidad de las fuerzas de la Guardia Civil destinadas en la provincia. De este modo los pueblos quedaron “desprotegidos” por la ausencia de aquélla.

Obviamente en los pueblos donde se registró más oposición al movimiento, fue donde la represión posterior fue más dura. Se podría hablar de dos zonas:

a) La serrana, formada por el eje **El Espinar-San Ildefonso**, integrando -además de los señalados- a Valsaín, Otero de Herreros, Vegas de Matute, Villacastín y Zarzuela del Monte

²⁶⁰ Ver nota anterior.

²⁶¹ *El Adelantado*, 28 de julio de 1936.

²⁶² *El Adelantado*, 29 de julio de 1936. El subrayado es mío.

²⁶³ *BOP* nº extr. de 27 de julio de 1936.

²⁶⁴ ARRARÁS, J., op. cit., pág. 335.

²⁶⁵ Arch. Sta. Cruz, Leg. 847. Los funcionarios eran:

1. Ángel Lara Hernández, secretario interino.
2. Fermín Cristóbal López, jefe de Negociado.
3. Ricardo Carrascón Ruiz, ayudante de Vías y Obras.
4. José del Hierro San Martín, ingeniero de Vías y Obras.
5. Antonio Romero Arbeiza, auxiliar administrativo temporero.
6. César Sanz Pastor, ingeniero de Vías y Obras.
7. Francisco Frutos Ballesteros.

De todos ellos, Sanz Pastor y Frutos no serían depurados puesto que justificaron debidamente su no asistencia al puesto de trabajo.

²⁶⁶ *BOP*, 2 de octubre de 1936.

b) La zona divisoria de los partidos judiciales de **Cuéllar y Santa María de Nieva**, integrada especialmente por Cuéllar, Bernardos, Carbonero el Mayor, Navas de Oro, Coca y Nava de la Asunción.

Ya hemos explicado que ambas zonas tenían en común el paso por sus pueblos de la línea de ferrocarril Madrid-Segovia-Medina del Campo, y que la zona Cuéllar-Santa María ya había sido detectada como "peligrosa" por *El Adelantado*.

En las localidades donde las organizaciones obreras tenían fuerte implantación se declaró la huelga general, en consonancia con las instrucciones que llegaban por radio desde Madrid. En las Casas del Pueblo y los ayuntamientos dominados por gestoras del Frente Popular los obreros se organizaron para hacerse con el control y dominio de sus pueblos. El primer objetivo fue conseguir armas, y las que tenían más a mano eran las de sus convecinos de derechas, por lo que las requisaron. Como quiera que no eran suficientes las armas existentes (aparte de no ser estrictamente de combate, pues eran mayoritariamente escopetas de caza), hubo intentos de viajar a Madrid para recabar más medios de defensa²⁶⁷. De una manera muy rudimentaria y básicamente con las referidas escopetas, se organizaron en grupos *armados* controlando sus pueblos respectivos. Conocedores de la adhesión a la sublevación militar en Segovia, las acciones se encaminaban a cortar las líneas de comunicación: carreteras y ferrocarril con la capital y las que atravesaban la provincia desde Valladolid hasta Madrid.

La aventura de la resistencia popular a la insurrección militar duró tan sólo unos días, los que tardaron en volver los guardias civiles con la ayuda de grupos de falangistas. Estas fuerzas se hicieron con el control de toda la provincia sin disparar un solo tiro, deponiendo a las autoridades locales desafectas y colocando a los afines en el poder municipal.

El Adelantado del 30 de julio narraba cómo se dominó la provincia por parte de las escuadras de FE, que actuaban con la aprobación del gobernador civil: *"Unos grupos móviles de Falange, bajo la inmediata dirección del gobernador civil, y con itinerario fijado por dicha autoridad y con órdenes concretas, recorren toda la provincia desarmando a los elementos marxistas y dejando organizados grupos de ciudadanos que con gran entusiasmo se aprestan a la defensa de la población y a guardar el orden de sus respectivos términos municipales"*²⁶⁸.

Seguendo al periódico, parece que se había dado una insólita y rápida "vuelta a la tortilla". En estos pueblos de implantación marxista los obreros ya se habían cambiado de chaqueta: *"Se da el caso curioso de que las personas de los pueblos por donde pasan y que antes levantaban el puño y daban vivas al comunismo, oyen ahora en la plaza principal del pueblo, con todo respeto y saludando al estilo fascista, el himno de dicha agrupación, dando después tantos vivas a España que los jefes de grupo tienen que rogarles que cesen en sus demostraciones patrióticas"*²⁶⁹.

Evidentemente, no cuenta el diario que las personas que no respondían con un viva a los gritos patrióticos de los falangistas -o no les saludaban brazo en alto- eran inmediatamente detenidos o castigados con la ingestión de aceite de ricino²⁷⁰. El amedrentamiento de la población comenzó desde el inicio de la contienda, con una represión desproporcionada que llegaba muchas veces a situaciones que rayaban con el absurdo. Se han recogido numerosos testimonios a lo largo de la provincia sobre distintos casos que, pasados más de 60 años, resultan grotescos, pero que pudo haber costado la vida a las personas a quienes les ocurrió. Por ejemplo, cuenta un vecino de Valverde del Majano que unos falangistas que iban en una camioneta vieron por una ventana a un

²⁶⁷ Causa 689/36, sobre los sucesos de Coca; testimonio de Silvestre Ramos sobre El Espinar.

²⁶⁸ *El Adelantado*, 30 de julio de 1936.

²⁶⁹ *El Adelantado*, 30 de julio de 1936.

²⁷⁰ Testimonios diversos en distintos pueblos, Sebúlcor, Nieva, Valverde, etc.

muchacho que al levantarse de la siesta se desperezó levantando el puño, por lo que fue llevado preso a Segovia. En Nieva se dice que un señor estaba comiendo piñones sentado en una calle del pueblo, al pasar los falangistas gritaron “Arriba España” levantando el brazo. El hombre, para no ser señalado, levantó el brazo pero con el puño cerrado para no perder los piñones, por lo que según un testigo “*casi lo matan*”²⁷¹. A un jornalero de Sanchonuño que estaba segando cerca de una carretera, cuando pasó una camioneta con falangistas que gritaban ¡arriba España! contestó ¡Arriba España, Viva la República!, lo dispararon un tiro en el hombro, cayó al suelo, pero no pararon los francotiradores y se pudo recuperar. A José “Carabeles” de Veganzones los falangistas lo dispararon porque levantó la hoz con la izquierda. El caso más grave de este tipo le ocurrió a Félix Verdugo, natural de Cuéllar, que no pertenecía a ningún partido político. Estaba segando en el campo cuando le gritaron los falangistas que pasaban por la carretera ¡Arriba España! y él levantó la hoz, cayendo muerto en el acto por los disparos de aquéllos²⁷².

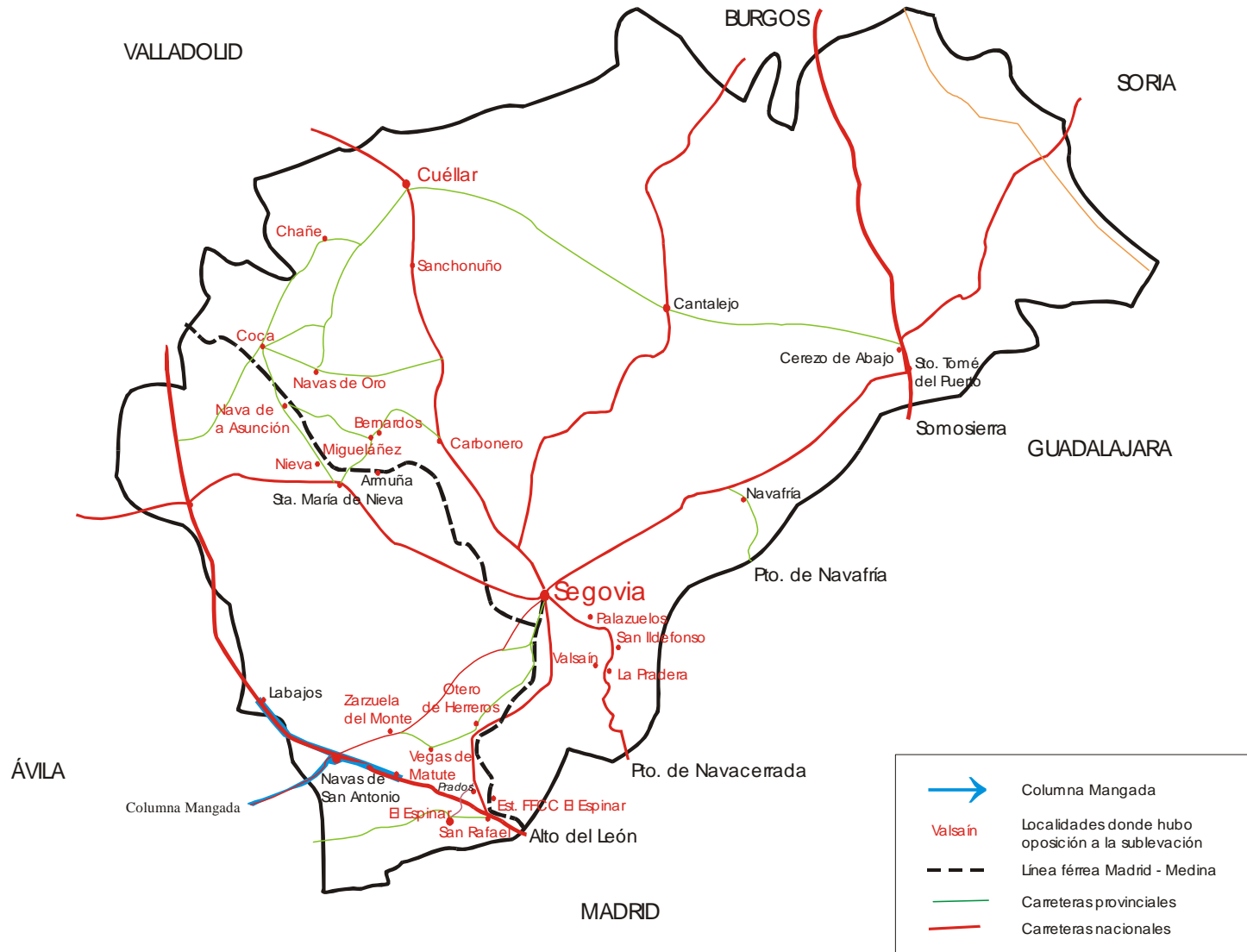
Contreras, pasando por alto este tema, quita importancia a los hechos que se tratan en este capítulo, y que se exponen en las siguientes páginas: “*Aún en las poblaciones dominadas por el marxismo no hubo, en realidad, resistencia seria. La proximidad a Segovia y su inmediata posición de frente de guerra, ocupado por el Ejército a las pocas horas del Movimiento, hizo imposible cualquier conato de resistencia en el principal reducto socialista de la provincia San Ildefonso y Valsaín*”²⁷³.

²⁷¹ Testimonio de Víctor Herranz Palomares.

²⁷² Testimonio de Cayo Quintanilla.

²⁷³ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 86.

Mapa nº 2: La resistencia a la sublevación militar en la provincia de Segovia



Cuadro cronológico de la sublevación militar en Segovia

	Segovia	Cuéllar	San Ildefonso	El Espinar	Coca	Bernardos
Sábado 18	Tensa espera. Reunión CdP. Patrullas nocturnas.	Tensa espera. Reunión CdP. Patrullas nocturnas.	Tensa espera. Reunión CdP. Patrullas nocturnas.	Tensa espera. Reunión CdP. Patrullas Nocturnas.	Tensa espera. Reunión CdP. Patrullas nocturnas.	Tensa espera. Reunión CdP. Patrullas nocturnas.
Domingo 19	Sublevación militar. Huelga general. Primeras detenciones. Huida de dirigentes.	Huelga general. Asalto cuartel Guardia Civil. Control F.P.	Manifestación. Huelga general. Asalto cuartel Guardia Civil. Control F.P.	Huelga general. Asalto cuartel Guardia Civil. Control F.P.	Huelga general. Control F.P.	Huelga general. Control F.P.
Lunes 20	Control militar. Huelga general: imprentas, industrias, comercio.	Encierro en el Ayuntamiento. Entrada falangistas y guardias civiles.	Llegada militares de Segovia, y Rgto.Trans. de Madrid. Resistencia republicana en Casa Oficios.	Tiroteos en Portachuelo, Prados y Central Teléfonos de San Rafael.	Huelga general. Control F.P.	Huelga general. Control F.P.
Martes 21	Control militar. Huelga general.	Control militar.	Control militar.	Control militar.	Huelga general. Control F.P.	Huelga general. Control F.P.
Miércoles 22	Control militar. Huelga general.				Huelga general. Control F.P.	Huelga general. Control F.P.
Jueves 23	Control militar. Huelga general.				Huelga general. Control F.P.	Entran guardia civil y falangistas.
Viernes 24	Control militar. Huelga general.				Huelga general. Control F.P.	

2. 3. Control de la provincia por los sublevados

A continuación explicamos el desarrollo de la resistencia a la sublevación de la guarnición militar de Segovia, el 19 de julio, producida en las distintas localidades de la provincia.

2. 3. 1. El Espinar

La villa de El Espinar incluía la colonia de San Rafael y el barrio de la Estación de Ferrocarril. Para el estudio de los hechos ocurridos en esta localidad, contamos -aparte de la narración de Contreras, Arrarás y *El Adelantado*- con el testimonio de uno de los protagonistas de los sucesos: Silvestre Ramos Barreno, y algunas sentencias de los distintos sumarios de la justicia militar²⁷⁴. Entre éstos últimos, se ha podido consultar el más importante, el nº 109/36, en el que están encuadrados los obreros que participaron en el enfrentamiento armado del caserío de Prados.

Los sucesos de El Espinar fueron, sin duda alguna, los hechos más importantes ocurridos en la provincia de Segovia de defensa de la legalidad republicana contra el movimiento militar triunfante en la capital. Así lo reconocían fuentes del bando sublevado, *“los actos revolucionarios que se realizaron en El Espinar el día 20 de julio (...) desde luego fueron los más graves de los realizados en esta provincia”*²⁷⁵. En cualquier caso fue el único enfrentamiento armado en la provincia, aparte, claro está, de los propios de la guerra en los campos de batalla de la sierra.

El 19 de julio, al enterarse de la sublevación de Segovia, los dirigentes del Frente Popular de la localidad avisaron a otros pueblos de los alrededores de la ausencia de guardias civiles en la villa. Por este motivo, la misma noche del domingo llegaron a El Espinar dos camiones con milicianos armados. Venían del otro lado de la sierra (de la provincia de Madrid: de Guadarrama y Tablada especialmente). Éstos se unieron a los milicianos del lugar, procediendo a la incautación de la estratégica Central de Teléfonos ubicada en San Rafael, donde dejaron a tres milicianos de guardia²⁷⁶. Los obreros asaltaron el vacío cuartel de la Guardia Civil para conseguir armas con que defender la villa. Pocas consiguieron, incluso el sumario reconocía ese detalle: *“sin que ocupasen más que dos tercerolas”*²⁷⁷. En la causa 1270/36 se hablaba de presiones al alcalde de tendencia derechista, Fermín Vigil, para que les entregase las armas que tuviera requisadas en el Ayuntamiento, que tampoco fueron muchas.

Al día siguiente, lunes 20 de julio, se declaró la huelga general en los aserraderos del barrio de la Estación y en las labores del campo. Un grupo de obreros del pueblo subieron al Alto del León²⁷⁸ (puerto de montaña de la carretera de La Coruña, que separa las provincias de Segovia y Madrid, distante unos 15 kilómetros), desde donde telefonearon a Madrid para pedir armas y defender la carretera en los pasos de la sierra. Les contestaron que se las enviarían cuando acabaran con la resistencia de los cuarteles de la Montaña y María Cristina²⁷⁹. Bajaron a la villa y cortaron árboles para formar barricadas con las que impedir el paso de las tropas que desde Valladolid iban a venir por la carretera de

²⁷⁴ Causas nº 109/36, 204/36, 772/36, 1270/37 y 1619/37.

²⁷⁵ Causa nº 1270/37, contra Evaristo Martín Santos. En AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

²⁷⁶ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 88.

²⁷⁷ Arch. UAPO, Leg 1, Sumario nº 109/36, contra Julio Valdeón y 86 más.

²⁷⁸ Al poco tiempo de iniciada la guerra el puerto cambió oficialmente su nombre tradicional por el de Los Leones de Castilla en homenaje a los soldados nacionales que lo tomaron y resistieron los ataques republicanos. Ya en *El Adelantado* del 3 de agosto de 1936 apareció un editorial aludiendo a este cambio de denominación. En el año 2000 volvió a recuperar el nombre original de Alto del León.

²⁷⁹ Testimonio de Silvestre Ramos Barreno, obrero que participó en el tiroteo de Prados, por lo que fue condenado a 30 años.

la Coruña en dirección a Madrid. También levantaron adoquines de la propia carretera para completar las barricadas.

Hacia el mediodía del lunes, una camioneta propiedad de Segundo Vázquez -uno de los dirigentes locales del Frente Popular-, conducida por su hijo Hilario, subió al Alto del León con unos 16 milicianos. En el puerto se pusieron bajo el mando de Julio Valdeón, un maestro que pasaba sus vacaciones en Olmedo (Valladolid), de cuya Casa del Pueblo era dirigente y de donde había huido al declararse el estado de guerra. Valdeón, por a su mayor cultura y preparación, fue nombrado jefe del grupo. Subieron a la camioneta unos cuarenta hombres que se sumaron a los que ya venían en ella²⁸⁰.

Los milicianos bajaron del puerto con el objetivo marcado de ir al caserío de Prados –propiedad de los marqueses de Castelar y distante unos kilómetros de la villa en dirección a Segovia- para requisar las armas que allí hubiera: las de los guardas y las que tenían para los propietarios y amigos dispuestas para las cacerías. Además, como cuenta Silvestre Ramos, allí había numerosos jornaleros en plena temporada de siega y querían informarles de la huelga general declarada para que se sumaran a ella. Al pasar por San Rafael subieron en el vehículo dos guardas forestales con sus tercerolas reglamentarias²⁸¹.

Ante estos acontecimientos, el alcalde de El Espinar, Fermín Vigil, comunicó a Segovia lo que se estaba preparando, organizándose una expedición con veinte números de la Guardia Civil, bajo el mando del teniente Higinio Valle Fernández, que salió inmediatamente en dirección a El Espinar.

A los milicianos no les dio tiempo apenas de bajar de la camioneta y requerir las armas a los empleados del caserío, cuando llegó a Prados (a las cinco y media, según el informe de la Guardia Civil) el camión con los guardias. Se produjo un breve tiroteo sin heridos, tras el cual fueron detenidos dieciocho milicianos. Los guardias continuaron viaje hacia San Rafael, no sin pedir refuerzos, pues les informaron que en el barrio de la Estación de El Espinar se organizaban otros grupos de milicianos.

A su llegada a San Rafael, a las siete y cuarto (continuando con el informe de la guardia civil) la fuerza sublevada *“se encontró con un grupo de marxistas hechos fuertes en la central de teléfonos, desde donde fue agredida nuevamente la fuerza con escopetas y al repeler la agresión resultaron muertos los vecinos de la localidad Pedro Cuesta y Félix del Pozo, y herido gravísimo, falleciendo poco después otro individuo que no pudo ser identificado (se supone pueda ser un teniente de alcalde de Guadarrama)”*²⁸². Testigos de aquellos hechos contradicen la versión oficial, y afirman que los milicianos murieron ejecutados fuera del edificio y no como consecuencia del tiroteo²⁸³. La autopsia realizada a los cadáveres parece confirmar esta versión, por cuanto señalaba que cada uno de los tres milicianos había muerto de un solo disparo, a pesar de que según el informe de la propia Guardia Civil, se registraron 20 impactos de bala, de los guardias, en el local defendido por los obreros. Además, de las armas requisadas a los milicianos (únicamente dos escopetas) tan sólo se había disparado un cartucho, por lo que parece escasa resistencia para tan duro castigo.

“Pacificado” San Rafael, los guardias civiles fueron informados de que los refuerzos solicitados que venían de Segovia²⁸⁴ estaban siendo atacados en el caserío de Prados por otro grupo de obreros, por lo que acudieron inmediatamente en su auxilio. En el caserío se encontraron con los milicianos quienes, en palabras de *El Adelantado*, *“pretendían asaltar*

²⁸⁰ Declaración de Manuel González, que había subido a la camioneta en San Rafael, efectuada el 21 de octubre de 1936; recogida en el sumario 109/36.

²⁸¹ Hay controversia sobre si subieron voluntarios al camión o fueron obligados a ello, reflejada en el sumario 109/36.

²⁸² Arch. UAPO, Leg. 1, Sumario 109/36. Informe de la Guardia Civil enviado al general de la 7ª División en Valladolid, fechado el 22 de julio de 1936. Era la ampliación de un radiograma fechado el 21 de julio, que no está en el sumario.

²⁸³ Testimonio de Hipólito Herranz.

²⁸⁴ Una expedición de otros 20 guardias civiles al mando de un sargento, y los tres alumnos de la Academia de Artillería que permanecían en Segovia, como hacía constar Contreras, op. cit. pág. 27.

el caserío, cuya servidumbre se defendía tenazmente frente a los rojos expedicionarios²⁸⁵. Tanto la defensa de los trabajadores de Prados como el ataque de los milicianos al caserío ha sido negado por los testimonios y por el propio sumario 109. El único tiroteo se produjo entre las fuerzas militares y los obreros procedentes de El Espinar.

En este segundo enfrentamiento en Prados, que se produjo a las 7 y media, participaron en torno a sesenta obreros, muy mal armados, pues llevaban entre todos “19 escopetas de caza, 4 carabinas, 17 picos, 7 hachas, 3 palas, 2 hoces, 1 bastón-estoque, 18 cajas de cartuchos y 40 sueltos de diferentes calibres”²⁸⁶. De hecho los cabecillas de la acción, Julián Gozalo y Segundo Vázquez, obligaron a los dos guardias municipales a ir con ellos para que “hubiera armas de verdad”²⁸⁷. Los milicianos iban en dos vehículos que acababan de requisar: un coche de viajeros de la empresa local “Figueredo” y un camión de frutas que casualmente había llegado a la plaza de El Espinar para vender sus productos. Según Contreras los cabecillas de la acción “obligaron a salir con ella a diversas personas, a pesar de la oposición del alcalde, hombre de orden”²⁸⁸. Esta afirmación fue corroborada por *El Adelantado* para dar a entender que los obreros convencidos de la acción eran pocos. Refería el diario que “obligaban a la gente joven a que se sumara a ellos con las armas que tuvieran en su poder”²⁸⁹. No es muy creíble esta versión, puesto que todos los que participaron en aquellos sucesos -un total de 84 personas- fueron juzgados por la causa 109/36, condenados (32 de ellos a muerte) y fusilados el 23 de abril de 1937²⁹⁰.

Los espinariegos, al verse en inferioridad de fuerzas, enviaron a un muchacho de la estación de El Espinar, para que marchara en bicicleta a Otero de Herreros, localidad cercana en dirección a Segovia, donde también había una importante Casa del Pueblo, de la que esperaban conseguir ayuda. El mensaje decía: “camaradas de Otero, pedimos refuerzo...”²⁹¹.

Los vivos de unos y otros eran ya muy significativos: ¡Viva la República! gritaban los trabajadores y ¡Viva España! respondían los guardias civiles²⁹². El enfrentamiento que se produjo ahora fue bastante duro, muriendo 5 personas, cuatro por el lado obrero (incluyendo uno de los policías locales) y uno de la expedición militar²⁹³.

Finalizado el enfrentamiento, la camioneta militar se dirigió a El Espinar, concretamente al cuartel de la Guardia Civil, donde únicamente se encontraban las esposas, pues los hombres permanecían concentrados en Segovia. Allí “liberaron” a las mujeres, según la versión de Contreras²⁹⁴; a pesar de que en ningún momento habían afirmado que estuvieran detenidas o presas de los obreros. Además, queda desmentida

²⁸⁵ *El Adelantado*, 29 de julio de 1936.

²⁸⁶ Este fue el arsenal incautado por la Guardia Civil tras el tiroteo. Sumario 109/36.

²⁸⁷ Testimonio de Silvestre Ramos Barreno y ver nota anterior.

²⁸⁸ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 88.

²⁸⁹ *El Adelantado*, 28 de julio de 1936.

²⁹⁰ Los datos están personales y el extracto de la sentencia están recogidos en el anexo nº 2.

²⁹¹ Testimonio de Silvestre Ramos Barreno y causa 109/36, donde figura el testimonio de Benigno Bartolomé Cámara, que fue el joven enviado por el presidente de UGT del barrio de la Estación, Santiago de la Calle, a Otero de Herreros. Además Benigno llevaba un salvoconducto avalado por la UGT para desplazarse por la provincia, fechado el 17 de julio, por lo que ya estaban asumidas las circunstancias prebélicas por las organizaciones obreras.

²⁹² Testimonio de Silvestre Ramos Barreno.

²⁹³ Los cuatro obreros se corresponden con los cuatro cadáveres que figuraban en la orden de ingreso el día siguiente, 21 de julio a las 12 de la mañana, en la carpeta de julio de 1936 del Cementerio Municipal de Segovia. La orden estaba firmada por el Comandante Juez de la Plaza, Manuel Lorente. Entre ellos había un guardia municipal, Braulio Romano, los otros eran Marcelino María Vara, Pío Barbieri y Alejandro Aranda Martín. Estos dos últimos eran el chófer y el ayudante del camión de fruta, que como era nuevo, dijeron que ellos iban donde fuera el vehículo. Los dos murieron tras el tiroteo cuando el resto había escapado. La Guardia Civil pensó que estaban con los obreros y los dispararon en el propio camión, según testimonio de Silvestre Ramos. El militar fallecido era el alumno de artillería Rafael Rebollo, hijo del también militar Ildefonso Rebollo Dicenta, que fue juez instructor de los sumarios 460/36, 933/36 y 1720/37.

En el Reg. Civ. del Espinar se completan los datos de Braulio, Romano Esteban, anotado el 1 de diciembre de 1937, muerto “en los denominados sucesos de Prados”.

²⁹⁴ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 29.

esta versión por la sentencia de la causa 109/36 en la que sorprendentemente sólo se acusaba a los asaltantes de que *“hicieron levantar, con el consiguiente sobresalto a las mujeres y familiares de los guardias que ya estaban dormidas”*²⁹⁵. La villa de El Espinar quedó dominada por los guardias civiles esa misma noche.

Unos días más tarde, el 25 de julio, llegaron fuerzas republicanas a El Espinar por el paso del Boquerón (puerto que une las provincias de Segovia y Ávila). Serían unos 800, según Contreras, que *“se apoderaron fácilmente del pueblo”*²⁹⁶. Arrarás explica que era el capitán Sabio quien mandaba a 500 hombres del Círculo Socialista del Oeste de Madrid²⁹⁷. Durante unas horas dominaron la villa, hasta que llegaron efectivos militares y falangistas desde San Rafael, poniendo en fuga a los milicianos²⁹⁸.

2. 3. 2. San Ildefonso

La Granja de San Ildefonso era, para Contreras, el principal reducto socialista de la provincia, especialmente su barriada obrera de Valsaín, *“casi totalmente entregada al comunismo”*²⁹⁹. Obtenemos información sobre lo que aconteció en La Granja, una vez más, de algunos testigos de aquellos hechos y de los testimonios de sentencia de las causas 393/36, 52/36, 446/37 y 768/36³⁰⁰.

Al igual que en otros pueblos de la provincia durante la noche del 18 se produjeron guardias nocturnas, en las que los simpatizantes del Frente Popular se limitaban a cachear personas y registrar vehículos, pero sin detener a nadie ni producirse ningún tipo de enfrentamiento. Aprovechando que estaban concentradas en Segovia todas las fuerzas, el día 19, grupos de obreros asaltaron los cuarteles de la Guardia Civil de La Granja y de Valsaín, con objeto de apoderarse de las armas que allí hubiera.

La mañana del domingo, una vez conocido en San Ildefonso que Segovia se había sumado a la sublevación, se organizó una manifestación popular de protesta y de reafirmación republicana. Para impedir la llegada de los militares desde Segovia, los obreros derribaron árboles, que cruzaron sobre la carretera que une al pueblo con la capital.

San Ildefonso permaneció fiel a la República hasta el día 21 de julio, salvo un pequeño intervalo de unas horas del día 20 en que llegó una sección del Regimiento de Segovia con fuerzas de la Guardia Civil, para proclamar el estado de guerra. Los militares tuvieron que volver a Segovia, con lo que los guardias civiles, al verse en inferioridad numérica con respecto a los obreros, se encerraron en el cuartel³⁰¹.

A la mañana siguiente, día 21, llegarían desde Madrid, los camiones con el Regimiento de Transmisiones de El Pardo, en el que cumplía servicio militar el hijo de Largo Caballero. Atravesaron los numerosos controles ya establecidos por la carretera de Colmenar Viejo hasta Navacerrada, alegando que iban a rendir Segovia. Saludaban puño

²⁹⁵ Causa 109/36.

²⁹⁶ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 90.

²⁹⁷ ARRARÁS, J., op. cit., pág. 374.

²⁹⁸ Los milicianos que no fueron heridos o presos, escaparon hacia la sierra, salvo tres que no lo lograron, refugiándose en los desvanes del Ayuntamiento, donde, desgraciadamente para ellos, establecieron su cuartelillo las milicias de Falange. Escapar sin ser vistos y detenidos era muy difícil, puesto que los camisas azules disponían de guardia permanente en el edificio. Como quiera que el suelo del desván era de madera, no podían moverse, para no ser descubiertos por el ruido. Así aguantaron, cuatro días con sus noches, hasta el 29, en que, como escribe Contreras *“acosados por el hambre y la sed, prendieron fuego al edificio, para intentar huir aprovechando la confusión, pero el Ayuntamiento fue acordonado rigurosamente, por lo que no pudieron escapar. Al extinguirse el fuego aparecieron sus restos calcinados”*. CONTRERAS, J., op. cit., pág. 33.

²⁹⁹ CONTRERAS, J., op. cit., Introducción.

³⁰⁰ Recogidas en AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399 y Arch. Pris. Prov.

³⁰¹ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 84.

en alto a los milicianos que encontraban. De este modo llegaron a Valsaín, donde les recibieron con vivas y cánticos, les ofrecieron vino y chorizo; en la creencia de que eran fuerzas leales a la República³⁰².

A su entrada en La Granja, desvelaron el engaño, se unieron a la Guardia Civil y dominaron el pueblo. El administrador del Patrimonio, el republicano Luis Fernández Cordero, acompañado del presidente de Izquierda Republicana y teniente de alcalde, Joaquín Trillo Matilla, con algunos carabineros intentó resistir en la Casa de los Oficios, residencia oficial del administrador, cercana al palacio. No llegó a producirse enfrentamiento armado, pues los defensores se rindieron inmediatamente.

Tras estos hechos fueron detenidos muchos paisanos de La Granja y Valsaín. De ellos serían condenados a muerte Cordero y Trillo, acusados de rebelión, el administrador en calidad de jefe y el segundo como adherido a la misma. Los acusados se *“alzaron abiertamente en armas o promovieron directa o de modo eficiente tal alzamiento contra la fuerza armada del nuevo Gobierno nacional”*³⁰³. Ambos dirigentes fueron fusilados el 15 de agosto, a pesar de que la Diputación Provincial de Segovia envió a Burgos una petición de indulto, que no fue aceptada³⁰⁴. En meses sucesivos serían fusilados, por sentencia de consejo de guerra, otros 15 vecinos de San Ildefonso, como exponemos en el anexo nº 2.

Hubo otros muchos, tanto de La Granja como de Valsaín, entre ellos algunos dirigentes de la Casa del Pueblo, que cruzaron la sierra para pasar al lado republicano. Uno de los que fueron a Madrid fue Demetrio Hoyos, último presidente democrático de la Diputación Provincial, quien, ya en la capital, contribuyó con otros segovianos, como el folklorista Agapito Marazuela y el escultor Emiliano Barral, a la organización de las Milicias Segovianas Antifascistas en el Centro Segoviano de Madrid³⁰⁵, que serían engrosadas por numerosos vecinos de ambas localidades. Otros milicianos procedentes de estas localidades se integraron en el Batallón Alpino y en la Brigada 155 de Guerrilleros que operaba en la Sierra de Guadarrama³⁰⁶.

2. 3. 3. Coca

La información sobre lo sucedido en la villa de Coca la hemos obtenido de un estudio de Fontecha y otros, del testimonio de Agapito Galindo y de la sentencia de la causa 689/36³⁰⁷, en la que fueron encuadrados todos los vecinos detenidos de la villa de Coca.

Ya la noche del 18 de julio se iniciaron las guardias nocturnas en la villa, pues los 15 guardias civiles de la dotación del cuartel de la localidad habían marchado -como el resto de fuerzas de la provincia- a concentrarse a Segovia. Según distintos testimonios se oían con entusiasmo en la radio los discursos de La Pasionaria incitando a cortar las carreteras y caminos, y a declarar la huelga general³⁰⁸.

³⁰² Causa 768/36, contra Emilio López Alonso y 11 paisanos más.

³⁰³ AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399. Causa 164/36.

³⁰⁴ Arch. Dip. Prov. Libro de sesiones de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial. Sesión de 11 de agosto de 1936.

³⁰⁵ BLANCO RODRÍGUEZ, Juan A., FERNÁNDEZ CUADRADO, Manuel y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A. *Las milicias populares republicanas de origen castellano-leonés*, pág. 319, sobre las milicias segovianas. En ARÓSTEGUI, Julio (coord.) *Historia y memoria de la Guerra Civil*. Junta de Castilla y León, 1986.

³⁰⁶ Testimonios de Teófilo García y Siro Sanz. Cuentan que formaron una compañía entre los originarios de Valsaín y La Granja, alcanzando el centenar de milicianos.

³⁰⁷ FONTECHA, A., GIBAJA VELAZQUEZ, J.C. y BERNALTE. *La vida en retaguardia durante la Guerra Civil en zona franquista: Coca, Segovia (1936-1939)*. En AROSTEGUI, Julio (coord.), *Historia y memoria de la Guerra Civil*. Junta de Castilla y León, 1986, pág. 204; y Causa 689/36 contra Eduardo Sanz González y 46 más. Recogida en el exp. nº 1766 de Romualdo Acosta, en Arch. Pris. Prov. Pamplona, Fuerte S. Cristóbal.

³⁰⁸ Testimonio de Agapito Galindo Acebes.

En principio, la Casa del Pueblo convocó la *Huelga General Resinera*, (puesto que la villa situada en la comarca Tierra de Pinares, contaba con numerosos trabajadores y jornaleros dedicados a esta actividad; incluso había una fábrica de la Unión Resinera en la localidad). Más adelante, los afiliados de la Casa del Pueblo tomaron la villa, ocupando las salidas y entradas del pueblo, con muy pocos medios, pues apenas había armas: “*escopetas de caza y tercerolas proporcionadas por el encargado de la resinería*”³⁰⁹. Las guardias se efectuaron desde el 18 hasta el 28 de julio y en ellas participaron “*socialistas, falangistas y de todo*”³¹⁰. No se llegaron a producir incidentes de ningún tipo, no hubo detenciones y a medida que pasaban los días crecía el nerviosismo y el desánimo.

Además de la huelga y la vigilancia de la villa, en el sumario 689/36 se les acusó, y no lo menciona Fontecha, de intentar levantar la línea férrea a la altura del puente del río Voltoya (muy cerca de la estación de Coca) “*del que llegaron a aflojarse algunos tornillos y tirafondos, y que no se desarmó en su totalidad, por la intervención de otras personas*”³¹¹.

Otro “delito” que cometieron los republicanos de Coca fue “*intentar buscar coches para ir a Madrid, a Ávila y Segovia, con el fin de proveerse de armas con que oponerse al Movimiento Nacional*” y “*el realizar todo género de arbitrariedades que han sido la pasión y norma en todos los pueblos rebeldes, y que en el de Coca tuvieron lugar durante los días 19 a 28 de julio en que entraron las fuerzas de Falange para dominar (...) aquella situación y a las que también en el momento de entrar se las hizo fuego*”³¹².

No parecen muy verídicas estas últimas acusaciones, pues de haberse cometido arbitrariedades o haber hecho fuego a la llegada de los falangistas, se habrían publicado en *El Adelantado*, como sucedió con otros casos (El Espinar o Cuéllar), y hubiera sido relatado también por Contreras. Lo que sí apareció en el diario, el 6 de agosto de 1936, fue una información desde Cuéllar en la que agradecía la colaboración a los falangistas de Valladolid, “*que han cooperado a la organización de los de Cuéllar, que en número superior a 100 ha formado escuadras, que llevan, bajo la dirección del teniente Casto Ramos de la Guardia Civil, importantes servicios en la localidad y limítrofes. Fueron los que tomaron Coca, entre otros*”³¹³.

Por su parte, Contreras, se limita a afirmar que Coca “*estuvo algunos días bajo el dominio de los gestores frentepopulistas y de la Casa del Pueblo, cuyos individuos, cortando pinos y tendiéndolos sobre las carreteras, quisieron improvisar una especie de barricadas, que no fueron defendidas cuando se acercaron las primeras camionetas de falangistas de Cuéllar y de la Guardia Civil*”³¹⁴.

A modo de resumen sobre lo acontecido en Coca en esos días primeros de la guerra valgan las palabras de Fontecha: “*Según lo entrevistado tanto a personas de derecha como de izquierda, lo único constatable en la villa fue la huelga general resinera, organizada por la Casa del Pueblo, y el corte de árboles, para cortar las carreteras. Las guardias fueron realizadas sin apenas armas, y, además las hizo todo el pueblo*”³¹⁵.

Los considerados dirigentes de las movilizaciones en Coca contra la sublevación militar fueron fusilados el 25 de mayo de 1937 en Segovia³¹⁶.

³⁰⁹ FONTECHA, A. y otros, op. cit., pág. 204.

³¹⁰ Ver nota anterior.

³¹¹ Causa 689/36.

³¹² Causa 689/36.

³¹³ *El Adelantado*, 6 de agosto de 1936.

³¹⁴ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 87.

³¹⁵ FONTECHA, A. y otros, op. cit., pág. 213.

³¹⁶ Los 6 vecinos de Coca fusilados están anotados en los anexos, con un extracto de la sentencia que los condenó.

2. 3. 4. Bernardos

Lo que sucedió en Bernardos se puede conocer por la vía judicial -causa 392/36 contra Manuel Sierra Iglesias y 62 más³¹⁷- y por el testimonio de uno de los protagonistas de los hechos, Leopoldo Cámara González, que formaba parte del grupo de los 63 encausados, detenidos en el pueblo el 24 de julio al entrar la Guardia Civil.

En Bernardos había muchos obreros forasteros (asturianos y gallegos, preferentemente) trabajando en la instalación de líneas eléctricas. También había un grupo importante de trabajadores en la presa de la luz. Además, por ser época de siega, a las llamadas a la huelga general de la Casa del Pueblo local, se concentraron gran número de jornaleros segadores, que estaban trabajando por los alrededores de la localidad³¹⁸.

El 19 julio, conocida en Bernardos la sublevación militar, el alcalde frentepopulista Clemente Casas Postigo, de acuerdo con el gestor Mariano Casas Ramos y el presidente de la Casa del Pueblo, Isidro Sánchez Aparicio, *“decidieron oponerse al movimiento, (negándose el alcalde a publicar el bando declaratorio del estado de guerra que le había remitido el gobernador militar) declarar la huelga general en Bernardos y pueblos limítrofes, impedir la circulación del trabajo y vigilar el pueblo, armando a los elementos socialistas y de izquierda y desarmando a los de derechas (según Leopoldo Cámara “no se desarmó a nadie”) cortar las comunicaciones telefónicas y de carreteras y nombrar un comité de huelga con jefes de grupos que vigilasen el cumplimiento de los anteriores acuerdos”*³¹⁹.

Se celebró una reunión en la Casa del Pueblo en la que se obedecieron las instrucciones que comunicaba la *Unión Radio* de Madrid a través del aparato que tenía el alcalde en su taberna. Entre aquellas consignas estaba la huelga general, convocada por medio de un bando dictado por el alcalde. A tal fin se constituyó un Comité de Huelga presidido por Ignacio Cámara, que impidió todos los trabajos entre los días 22 al 24 julio, no sólo en Bernardos, sino también en las localidades cercanas de Migueláñez y Domingo García.

La patrullas del Frente Popular incautaron todas las armas que pudieron, se presentaron en diversos domicilios de distintos vecinos *“exigiendo las escopetas que tenían los elementos de orden”*, como recogía el sumario militar. En este sentido se lamenta Leopoldo Cámara: *“Teníamos muy pocas armas, unas 20 escopetas de caza. Yo no tenía más que una garieta o espinocha, cuando entró el Ejército cada cual ocultó su arma como pudo o la tiró a algún pozo”*³²⁰. Organizaron la vigilancia armada de las calles del pueblo para impedir la entrada de los elementos del Ejército y de Falange. Un total de 46 vecinos serían acusados de la vigilancia; de ellos, ocho obtuvieron la atenuante de haberla realizado sin armas.

Otro acto de "rebelión" -según expresaba el sumario- fue la detención, en la mañana del 22 de julio, del coche correo de línea que se dirigía a Segovia, cuyos ocupantes fueron obligados a apearse. Al día siguiente, un grupo de obreros convenientemente armados, utilizó dicho coche para acudir a la estación de ferrocarril más cercana, Armuña, donde detuvieron al jefe y factores de la estación, y *“se colocaron sin saber por quien en las agujas de la línea férrea dos cartuchos de dinamita, para impedir la circulación de trenes ocupados por militares y falangistas”*³²¹. La vía quedó inutilizada. Uno de los cabecillas de esta acción era Manuel Sierra Iglesias, que decía ser empleado de la Singer y relojero de profesión, antiguo vecino de El Espinar y procesado por la causa 122/36, referente a unas reuniones ilegales, previas a la guerra, en aquella villa. Además, el sabotaje fue *“autorizado”*, según la sentencia, por el presidente del Comité de Huelga

³¹⁷ Arch. Prov. Exp. Resp. Civ. 93/37, que contiene la sentencia de la Causa 392/36.

³¹⁸ Testimonio de Crispín Rubio Arranz, vecino de Navas de Oro que se encontraba segando en Bernardos.

³¹⁹ Causa 392/36.

³²⁰ Testimonio de Leopoldo Cámara.

³²¹ Causa 392/36.

Ignacio Cámara, quien *“amenazó incluso con una pistola al conductor del mencionado vehículo que se oponía a efectuar el viaje”*³²².

Los teléfonos, tanto el público como los particulares, fueron cortados la noche del 22 de julio, también por orden de Ignacio Cámara. Se cortaron igualmente las carreteras de Armuña, Santa María y Navas de Oro. En estas vías de comunicación se causaron *“daños que no han sido tasados pericialmente”*, como había ocurrido en la vía férrea. Hubo mujeres que auxiliaron al corte de la carretera de Navas de Oro llevando picos; otras animaban y excitaban al resto de los procesados a mantenerse en la rebelión.

No hubo ningún tipo de enfrentamiento armado a la llegada de la Guardia Civil con los falangistas, como se constata en Contreras, *El Adelantado*, la sentencia y el testimonio de Leopoldo Cámara. Los milicianos se limitaron a esconder las armas -el que las tenía- y marchar para sus casas o al pinar para esconderse de los recién llegados. Sin embargo, fueron condenados a pena de muerte los 16 considerados *jefes de la rebelión*, de los que 14 serían fusilados el 7 de mayo de 1937 en Segovia³²³. A los dos restantes procedentes de Navas de Oro, les fue conmutada la pena capital. El resto de los hombres procesados fueron condenados a 30 años.

2. 3. 5. Nava de la Asunción

Tres son las causas encontradas referentes a vecinos de esta localidad: 614/36, contra Ciriaco Serrano y 45 más, 2288/37 y 915/36.

Sabedores del alzamiento militar en Segovia *“después de formarse grupos a la puerta del Ayuntamiento pidiendo que se recogieran armas por haber estallado la revolución social”*, se eligió a Ciriaco Serrano como jefe de las *Milicias Rojas*. Los milicianos recogieron las armas que había en la localidad y las repartieron entre los *“elementos extremistas que repetidamente quisieron apoderarse del armamento del cuartel de la Guardia Civil”*³²⁴.

Fue declarada la huelga general, impidiéndose los trabajos en el campo. La sentencia hacía un resumen muy elocuente de lo sucedido en Nava:

se hicieron servicios de vigilancia con armas por las calles de la localidad, se cortaron las carreteras, atravesando árboles en las de Cuéllar y Santiuste de San Juan Bautista, rompiéndose una alcantarilla en la de Bernardos, se intentó detener un tren militar, se agredió a la guardia civil que custodiando presos pasaba por la carretera de Navas de Oro y se practicaron en fin todos aquellos hechos que han sido antes de la liberación por el Ejército Nacional, desgraciado patrón en todos los pueblos³²⁵.

Los considerados dirigentes de la resistencia a la sublevación: Quintín Maestro, presidente local de Izquierda Republicana, Ciriaco Serrano, jefe de las Milicias Rojas y Leocadio Villagrán serían fusilados en junio de 1937.

Por otro lado, un grupo de obreros viajaron a Santa María de Nieva, distante a unos 10 kilómetros de Nava, para comprar 40 cartuchos, pero no los pudieron conseguir.

2. 3. 6. Cuéllar

En Cuéllar, localidad más importante tras la capital en cuanto a población (5.060 habitantes, según el censo de 1930), expresado en palabras de Contreras *“había claro*

³²² Causa 392/36.

³²³ Los datos de los fusilados están recogidos en el anexo nº 2 con el extracto de la sentencia.

³²⁴ Arch. Prov. Caja J/6347, Exp. Resp. Civ. 97/37, que contiene la sentencia de la causa 614/36.

³²⁵ Sentencia de la Causa 614/36, recogido su extracto en el anexo nº 2.

*predominio de derechas, aunque con un crecimiento alarmante del grupo comunista*³²⁶. El Ayuntamiento, tras las elecciones de febrero, estaba controlado por el Frente Popular, su alcalde era el socialista Mariano Velasco Soria. Los hechos de oposición a la sublevación militar acaecidos en Cuéllar fueron enjuiciados en los sumarios, 722/36 contra Felipe Polo Herrero y 35 más, y 186/36 contra Vicente Gómez Segarra y 37 más³²⁷.

Al estallar la guerra, como hemos comprobado que sucedió en otras localidades, los obreros organizados por la Casa del Pueblo se declararon en huelga general y, aprovechando la ausencia de la Guardia Civil, narra *El Adelantado*, “se incautaron de las armas y municiones depositadas en el cuartel por los comerciantes que las tenían depositadas, por haber sido requeridos con anterioridad, aumentando el armamento de aquéllos. Realizaron guardias armadas durante los primeros días, produciendo gran excitación por los rumores que corrían (...) paraban y registraban vehículos”³²⁸. Contreras va más allá en los miedos, escribiendo que “los elementos de orden pasaron días de verdadero terror, pues corrían espantables rumores”, pero “nada ocurrió sin embargo...”³²⁹.

Los sumarios eran menos alarmistas: “por orden del alcalde, aún no detenido, se sacaron todas las armas y explosivos de los establecimientos autorizados para la venta, el 18 de julio, que fueron llevados al Ayuntamiento, donde fueron repartidas las armas a personas afectas al FP, con el pretexto de mantener el orden público”³³⁰. Además, se trató de “impedir el trabajo y otros hechos realizados con el pretexto de mantener el orden público”³³¹.

El Adelantado también informó, el 28 de julio, sobre estos hechos utilizando los términos más truculentos cuando aventuraba que para el día 20 “según versiones recogidas después, era el señalado para el incendio de casas con sus moradores, lo que no ocurrió al desaparecer el que hacía de alcalde, la noche anterior, por acusarle de blando y no decidirse a dar el golpe”³³². Arrarás afirma que el alcalde socialista Mariano Velasco Soria pasó a Madrid, donde incluso dirigió una partida de guerrilleros republicanos por la zona del puerto del Reventón³³³. Algunos testimonios de la comarca³³⁴ corroboran esta información de Arrarás de la fuga del alcalde a Madrid, pero milicianos de la sierra no lo recuerdan como guerrillero³³⁵. Este supuesto intento de incendio lo recogió también Contreras: “Se dice que en la noche del 19 algunos mozos más empapados del veneno de Rusia, quisieron que el alcalde ordenase incendios y asesinatos y que este personaje huyó asustado de sus propios amigos”³³⁶.

Estas dos versiones alarmistas fueron desmentidas categóricamente por los tribunales militares, que incluso aplicaron como “**atenuante muy cualificada respecto de todos, el no haberse producido acto alguno de violencia en personas o cosas en el tiempo que fueron árbitros de la situación en Cuéllar**”³³⁷.

El martes 21, al conocer que venía desde Segovia la Guardia Civil, los republicanos se hicieron fuertes en el Ayuntamiento; pero no llegó a producirse enfrentamiento armado. Tras algunos intentos de rendición, como escribe Contreras, “*algunos vecinos prestigiosos,*

³²⁶ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 10. Los resultados de las últimas elecciones así lo confirmaron: el candidato más votado de la derecha había obtenido 1.201 votos, mientras que su oponente de izquierda se había quedado con 874.

³²⁷ Arch. Pris. Prov. Pamplona, Fuerte S. Cristóbal, Exp. Mariano Corral Domingo para la causa 186/36 y Exp. José Villacorta Sanz para la causa 722/36.

³²⁸ *El Adelantado*, 6 de agosto de 1936.

³²⁹ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 88.

³³⁰ Causa 186/36.

³³¹ Causa 722/36.

³³² *El Adelantado*, 28 de julio de 1936.

³³³ ARRARÁS, J., op. cit., pág. 375.

³³⁴ Testimonios recogidos en Cuéllar y Chañe.

³³⁵ Testimonio de Teófilo García, que fue miembro del Batallón Alpino.

³³⁶ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 88.

³³⁷ Causa 186/36. El subrayado es mío.

con riesgo de su vida, se adelantaron para intimar la rendición y consiguieron evitar un inútil derramamiento de sangre³³⁸.

Por el sumario 186/36 sabemos que las fuerzas de la Guardia Civil pidieron a los encerrados que *“depusieran su actitud como así lo efectuaron”*³³⁹. Sin embargo, un testigo de los hechos que vio llegar (en un autobús de línea de la empresa Galo Álvarez) a un grupo de falangistas con algunos guardias civiles, cuenta la rendición del Ayuntamiento de distinta manera que la referida. Apunta que las fuerzas militares bajaron del autocar en el Paseo de San Francisco y agruparon a unas 50 personas que estaban por allí congregadas, las mandaron delante de ellos *“a modo de escudos humanos”* y subieron hasta la Plaza del Ayuntamiento. Allí, detrás del *“escudo humano, iba el grueso de las fuerzas mientras que el resto de falangistas se distribuyó ocultándose por las columnas de los soportales de la plaza. Hablaron desde abajo algunas personas con los del Ayuntamiento, y éstos se rindieron sin que hubiera tiros. Al poco tiempo los encerrados estaban en la plaza, tumbados en el suelo, detenidos”*³⁴⁰.

Al entrar la Guardia Civil en el consistorio, descubrieron las armas que *“poseían en abundancia”*, según *El Adelantado*³⁴¹, o lo *“copiosamente armados”*, para Contreras³⁴², que estaban los encerrados. Ambas fuentes están de acuerdo en que los guardias encontraron 40 botellas de líquido inflamable y otros *“artefactos de guerra”*, si bien el diario afirmaba que también se recogieron *“armas y municiones en gran cantidad”*, lo que no menciona Contreras.

A continuación se produjo la detención de más de treinta individuos que pasaron a la Prisión de Segovia, entre ellos, el sargento de carabineros, quien *“según versiones había hecho causa común con los sublevados”*³⁴³. Otros vecinos que participaron en los hechos narrados, fueron algunos gestores del Ayuntamiento y el secretario del mismo³⁴⁴.

2. 3. 7. Otras localidades

Según cuenta Contreras, en **Carbonero el Mayor** ocurrió algo análogo a lo sucedido en Coca³⁴⁵, pues los gestores de ambos ayuntamientos eran del Frente Popular y había además influyentes organizaciones obreras, incluso una sección de las Juventudes Socialistas Unificadas.

En Carbonero se declaró la huelga general y el Ayuntamiento organizó grupos de piquetes para salir al campo y detener los trabajos de los segadores³⁴⁶. También se realizaron guardias armadas hasta la llegada de los falangistas y guardias civiles. Según distintos testimonios, al enterarse de la sublevación de Segovia salieron numerosos obreros mal armados en dirección a la capital para enfrentarse a los sublevados. Por el camino fueron convencidos del riesgo inútil que suponía aquella aventura y se volvieron al pueblo.

En **Santa María de Nieva** sucedió un caso muy curioso y que denota que no existía tanto odio en estas localidades como pudiera parecer por la represión acontecida después. Durante todo el periodo republicano, el alcalde de Santa María fue Mariano Pascual, *“lo*

³³⁸ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 88.

³³⁹ Causa 186/36.

³⁴⁰ Testimonio de Isaías Rodrigo.

³⁴¹ *El Adelantado*, 28 de julio de 1936.

³⁴² CONTRERAS, J., op. cit., pág. 88.

³⁴³ *El Adelantado*, 6 de agosto de 1936.

³⁴⁴ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399. Minutas de informes que la Comisión de Incautación de Bienes envió al general Jefe de la 7ª División: Tomás Cano Martín, gestor del Ayuntamiento de Cuéllar: *“autor por inducción hechos 19 julio (...) dada la actuación tan destacada y la magna cantidad de daños producidos...”*. Juan Gutiérrez Martínez, secretario del Ayuntamiento Cuéllar: *“trató de organizar la rebelión en Cuéllar”*.

³⁴⁵ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 87.

³⁴⁶ Testimonio de Eufrasio García Pascual.

*mismo durante las derechas que las izquierdas, sin significación política definida y buenos antecedentes*³⁴⁷. Este hombre acompañó, el día 20 de julio, a un comercio de la villa, “*sin las debidas garantías*” a unos desconocidos que habían venido de Nava de la Asunción a adquirir cartuchos (lo que ya se ha descrito anteriormente) “*resultando posteriormente que eran elementos rebeldes al Alzamiento Nacional*”.

El pregonero, Juan Aranda, parece que con la misma despreocupación que su alcalde, dio primero el bando de declaración del estado de guerra del gobernador militar y después voceó “*sin fijarse en su contenido*” el bando del Ministerio de Guerra de Madrid, por el que se licenciaba a los soldados y se prohibía su incorporación a los Regimientos que les correspondiese. Este *malentendido* no produjo ningún problema ni enfrentamiento “*por el excelente estado de ánimo del pueblo*”³⁴⁸.

En la vecina **Nieva** hacia el 20 o 21 de julio hubo una reunión en la sede de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, en la que se acordó volar el puente sito en el kilómetro 32 de la carretera Segovia-Arévalo. Un afiliado pidió dinamita a otro convecino, “*quien se negó a entregarla, por lo que no pudo llevarse a cabo*”³⁴⁹. En vista de que no conseguían dinamita, pidieron armas al presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de la localidad que no se las proporcionó y a sus correligionarios de Nava de la Asunción, que tampoco se las facilitaron. En fin, todo quedó en unos intentos de sabotaje que no llegaron a cristalizar en acciones concretas.

Se conocen pocos datos del resto de pueblos de la provincia, aunque ya se ha escrito antes que donde las organizaciones obreras eran importantes, o el Ayuntamiento estaba dirigido por el Frente Popular, se declaró la huelga general. Así ocurrió en Otero de Herreros, Vegas de Matute (en este pueblo incluso quisieron cortar la carretera con una gran piedra, pero no lo consiguieron³⁵⁰), Zarzuela del Monte (a las medidas habituales, las autoridades republicanas de la localidad añadieron que “*se diese energía eléctrica durante el día para que los aparatos de radio pudiesen oír las noticias de Madrid*”³⁵¹), Palazuelos, etc. Se conoce también que en Chañe los seguidores del Frente Popular “*al comenzar el Movimiento se opusieron al mismo recogiendo armas en casas de los vecinos de derechas para repartirlas a las izquierdas*”³⁵².

La permanencia de la legalidad republicana en estos pueblos dependió de la premura o tardanza con que llegó la Guardia Civil y falangistas para declarar el estado de guerra y deponer las gestoras del Frente Popular.

2. 3. 8. La Columna Mangada

La denominada *Columna Mangada* tuvo una estancia efímera en la provincia de Segovia. Aunque en la prensa republicana de Madrid se publicaba alegremente, el 20 de julio de 1936, que el teniente Mangada *había tomado “Ávila y marchaba sobre Segovia*”³⁵³, sus fuerzas no llegarían a esta provincia hasta el día 24 de julio. A pesar de las informaciones de *El Adelantado* y de la crónica de Contreras, que citaban el 23 de julio³⁵⁴.

La acción militar protagonizada por Mangada pudo haber sido muy importante en el desarrollo de la guerra, pero no llegó a producir resultado alguno. Aparecieron por sorpresa

³⁴⁷ AGA. Justicia, Caja 399. Causa 915/36.

³⁴⁸ Causa 915/36.

³⁴⁹ Arch. Pris. Prov. Segovia, Exp. Víctor Herranz. Causa 933/36.

³⁵⁰ Testimonio de Urbano Barreno Orejudo.

³⁵¹ Causa 685/36, contra Nemesio Fernández Peña y 26 más.

³⁵² AGA, Justicia, 39.001, Responsabilidades Políticas, Audiencia Provincial de Segovia, indultos, Caja 81, Exp. nº 35 de Francisco Pascual Morales y Felipe Yusta Barbado, vecinos de Chañe.

³⁵³ CLARIDAD, 20 de julio 1936.

³⁵⁴ *El Adelantado*, 29 de julio de 1936; y CONTRERAS, J. op. cit., págs. 93 y 95.

el día 24 de julio en Villacastín, importante nudo de comunicaciones a mitad de camino entre Ávila y Segovia y en la carretera de La Coruña, que unía Valladolid con Madrid por la sierra de Guadarrama. Tomaron Villacastín, a unos 15 kilómetros de San Rafael, donde permanecieron unas horas tras la retaguardia del puerto del Alto del León, tomado el día 22 por los militares sublevados. Mangada no fue consciente en esos momentos de la importancia de su situación o sobredimensionó las fuerzas enemigas emplazadas en San Rafael y se retiró de nuevo hacia territorio republicano en Navalperal (Ávila).

Entretanto, durante la estancia de Mangada en Villacastín, como informa Arrarás³⁵⁵, una avanzadilla de milicianos de la FAI, de esta Columna, que se había dirigido hacia Valladolid, se detuvo en Labajos, donde se cruzaron con el coche en que venía el jefe de Falange de Valladolid Onésimo Redondo. En el control se produjo el tiroteo en el que murió el dirigente falangista y un acompañante suyo. La avanzadilla se retiró seguidamente hacia Villacastín con el resto de la fuerza republicana. Estas muertes originaron que cuando llegaron los falangistas de Valladolid pocas horas después del suceso, al no poder detener a los autores directos de la ejecución de Onésimo, fusilaron allí mismo a un vecino y se llevaron a varios obreros del pueblo, de los que cinco serían ejecutados en Valladolid en el mes de septiembre. Aparte de ellos, el presidente de la Casa del Pueblo de Labajos, Claudio Gómez Estévez³⁵⁶, murió en extrañas circunstancias, no aclaradas, en el cuartel de Falange de la capital vallisoletana. *El Adelantado* indicaba que Claudio Gómez “se suicidó arrojándose por la ventana del cuartel de FE donde estaba detenido”³⁵⁷. No aporta más datos el Registro Civil de Valladolid donde figura que murió “sin que consten más circunstancias” el 28 de agosto en la Academia situada en el Paseo Zorrilla³⁵⁸.

³⁵⁵ ARRARÁS, Joaquín., op. cit., pág. 369.

³⁵⁶ Claudio Gómez Estévez había sido nombrado vocal del Jurado Mixto Agrario, representando a los obreros, junto a Mariano Velasco Soria. Así se recogía en *El Adelantado* del 25 de junio de 1936.

³⁵⁷ *El Adelantado*, 15 de septiembre de 1936.

³⁵⁸ Reg. Civ. de Valladolid, libro de defunciones, tomo 116, folio 273, acta 555.

3. LA IMPLANTACIÓN DEL RÉGIMEN FRANQUISTA EN SEGOVIA

Dominada Segovia por los militares insurgentes desde el comienzo de la sublevación, esta provincia formó parte de la llamada *zona nacional* hasta el fin de la contienda. No sufrió más combates que los iniciales producidos por el enfrentamiento para el control de los pasos de la Sierra de Guadarrama, y la ofensiva republicana de 1937 por el sector de La Granja. La situación de práctica retaguardia de Segovia durante toda la guerra nos permite analizar la evolución de la España de Franco hasta la consecución de la victoria definitiva. En este capítulo vamos a analizar cómo los sublevados acabaron con la República, con su legislación -que amparaba todos los derechos y libertades- y con sus símbolos, emblemas y fiestas nacionales, sustituyéndolos por la simbología que representaba los valores del Nuevo Estado: patria, religión, jerarquía, propiedad, etc.

Pero, a la vez que se tomaban medidas drásticas para abolir la democracia, sus instituciones, sus leyes, etc.; los militares de Burgos dictaban normas -siempre mediante decretos- para la implantación del Nuevo Estado. Las labores de demolición de la República y de construcción del régimen franquista fueron simultáneas, por eso las vamos a abordar en este capítulo.

3. 1. Transformaciones políticas

3. 1. 1. La supresión de libertades y derechos fundamentales

El primer objetivo de los sublevados era acabar con la democracia, que representaba la II República. En el propio Bando declaratorio del Estado de Guerra, que se leyó en las calles de Segovia durante la mañana del domingo 19 de julio, ya se prohibían las reuniones o asambleas de cualquier grupo o asociación, política, sindical o social. *“No podrá celebrarse ninguna reunión, mitin, conferencia o manifestaciones públicas, ni aun las juntas generales ordinarias o extraordinarias de Asociaciones o sindicatos sin mi expresa autorización, y las que se celebren sin ella serán disueltas por la fuerza y sus dirigentes y organizadores detenidos y puestos a disposición del tribunal o Juzgado correspondiente”*³⁵⁹. El Bando de Guerra de 28 de julio de 1936 -que unificaba todos los bandos de los distintos jefes militares del territorio nacional- decretó la supresión de los derechos fundamentales y libertades en toda la zona sublevada. Por el contrario, en la zona fiel a la legalidad republicana no se declaró el estado de guerra hasta 1939, detalle que hace diferenciar claramente el Estado militarizado de los sublevados desde el inicio de la contienda, del estado democrático republicano que se mantuvo como tal hasta el fin de la guerra civil.

El férreo control que ejercían los militares sublevados, en la parte de España que controlaban, se basaba en esta supresión de todas las libertades y derechos que amparaba la Constitución de 1931: libertad de movimiento, opinión, prensa, derecho a la huelga, hasta el mismísimo derecho a la vida. El Bando de 28 de julio -entre otras muchas variantes- declaraba rebeldes a *“los que celebren cualquier reunión, conferencia o manifestación pública sin permiso de la autoridad, solicitado en la forma reglamentaria, y los que asistan a ellas”*³⁶⁰.

Pero esta suspensión de hecho de todos los derechos individuales y colectivos, a efectos formales -en las disposiciones oficiales- todavía no se había llevado a la práctica. Es más, en las disposiciones emanadas de Burgos cínicamente se aludía a derechos y libertades como si éstos continuaran en vigor. Así, en el preámbulo de la Ley de Prensa se

³⁵⁹ BOP, 27 de julio de 1936. Sorprendentemente, hasta esta fecha no se publicó en el diario oficial de la provincia el Bando de Guerra dictado el 19 de julio.

³⁶⁰ Art. 6º, apdo. c) del Bando de Guerra de la JDN de 28 de julio de 1936.

recogía: “una vez redimido el periodismo de la servidumbre capitalista de las clientelas reaccionarias o marxistas, es hoy cuando auténtica y solemnemente puede declararse la **libertad de prensa**”³⁶¹; las Instrucciones del Ministerio de Interior sobre actos públicos iniciaban su encabezamiento de la siguiente manera: “Al objeto de someter a precepto único el procedimiento y régimen para el ejercicio del **derecho de reunión y manifestación** en las actuales circunstancias”³⁶²; o al restablecer, el gobernador civil, la administración procesional del Santísimo Viático, donde aludía a “**la libertad de conciencia**”³⁶³.

La Orden del Ministerio de Justicia de 18 de mayo de 1938 declaró ilegales los nombres *extravagantes* y *exóticos*. En una interesante introducción, además de criticar a las normas de la República, hacía lo propio, incluso, con las de la Restauración. En este caso, las autoridades franquistas no se conformaban con volver a la situación de 1930, querían retrotraerse a épocas mucho más antiguas:

Durante la república, las normas de adecuación de nombres (...) derivó -con el objeto de introducir nombres adecuados a la ideología de aquel gobierno- mediante un razonamiento paradójico, y confundiendo el interés público con el político, a la consecuencia de admitir como palabras individuales las que expresaban **conceptos tendenciosos**, que decían encarnados en su régimen, como Libertad y Democracia, o los nombres de las personas que habían intervenido en la revolución ruso-judía, a la que la fenecida república tomaba como modelo y arquetipo. Debe señalarse también como origen de anomalías registrales la morbosa exacerbación en algunas provincias del sentimiento regional (...) que llevó a registrar nombres que no solamente están expresados en idioma distinto al oficial castellano (...) entrañan una significación contraria a la patria (por ejemplo) Kepa, (...) no obstante deben admitirse Aránzazu, Monserrat, Begoña, como nombres netamente españoles y en nada reñidos con el amor a la patria única que es España. La España de Franco no puede tolerar agresiones contra la unidad de su idioma (...) es preciso volver al sentido tradicional en la imposición de nombres, con oportunas variantes, en 1919 se había permitido Emancipación, Armonía o Azar, ahora sólo el calendario católico (...)”³⁶⁴.

Con esta norma se imponían exclusivamente los patronímicos del santoral para los católicos. En el caso de otras confesiones o grupos no bautizados, los padres debían elegir nombres de los calendarios de otras religiones o “*personas de la antigüedad que disfrutaron de honrosa celebridad*”³⁶⁵. El mecanismo sobre el cambio de nombres, declarados ilegales por la orden anterior, no llegó hasta 1939³⁶⁶, cuando se obligó a los padres o tutores a efectuar dicha enmienda. En la localidad de Serracín, en los libros del Registro Civil correspondientes a nacimientos figuraba Libertad Sanz Matas, nacida el 11 de julio de 1935. En una nota al margen, el secretario escribió: “*En virtud de comparecencia hecha el 8 abril de 1939 por Eduvigis Matas, (madre de Libertad), por hallarse confinado su esposo, ausente, (...) sustituye el nombre de Libertad con que figura la hija por el de María Milagros*”³⁶⁷.

³⁶¹ Ley de Prensa de 22 de abril de 1938. BOP, 27 de abril de 1938. El subrayado es mío.

³⁶² Instrucciones del M. Interior sobre actos públicos. BOP, 24 de octubre de 1938. El subrayado es mío.

³⁶³ BOP, 25 de septiembre de 1936. El subrayado es mío.

³⁶⁴ BOP, 27 de mayo de 1938. O. M. Justicia de 18 de mayo de 1938.

³⁶⁵ Ver nota anterior.

³⁶⁶ BOP, 3 de marzo de 1939. O. M. Justicia de 9 de febrero de 1939.

³⁶⁷ Reg. Civ. Serracín, 8 de abril de 1939. Casualmente, el marido estaba preso por ser desafecto.

3. 1. 2. La ilegalización de partidos y asociaciones

Uno de los objetivos fundamentales de los militares sublevados era acabar con la democracia y el sistema de partidos como órganos de expresión de las ideas políticas de los españoles. Así mismo, las organizaciones obreras de carácter marxista o anarquista, por su defensa de los trabajadores, también estaban en el punto de mira de los militares. La abolición de ambos tipos de sociedades era, por tanto, una de sus prioridades. Aunque no se ha encontrado la orden expresa de cierre de las sedes obreras en los BOP, sí apareció en *El Adelantado* del 29 de julio, una *Nota del Gobierno Civil* ordenando el cierre “fulminante” de las Casas del Pueblo de toda la provincia, lo que justificaba que en la Circular de 31 de julio, reiterara “se recuerda a los alcaldes la orden de cerrar todas las Casas del Pueblo, debiendo proceder inmediatamente a la clausura y precinto de las que aún permanecen abiertas, levantando acta y dando cuenta a este Gobierno Civil de haberlo cumplimentado, bajo su más estrecha responsabilidad”³⁶⁸.

La ilegalización de organizaciones republicanas, marxistas y anarquistas no se produjo hasta el Decreto 108, de 13 septiembre de 1936, que puso fuera de la ley -en la zona controlada por el Ejército nacionalista- a los partidos y agrupaciones sindicales que habían integrado el Frente Popular, así como cuantas organizaciones se habían opuesto al movimiento militar. Todos los partidos republicanos fueron ilegalizados, incluso los conservadores Derecha Liberal Republicana, Partido Republicano Conservador y Partido Radical. Al tiempo que declaraba la ilegalización, decretaba la incautación de todos los bienes pertenecientes a dichas organizaciones, como estudiamos en el capítulo 7.

En la provincia de Segovia, esta medida afectó, a nivel sindical, casi exclusivamente a UGT, como sindicato mayoritario en Segovia, pues CNT tenía una fuerza reducida y limitada a las secciones locales de Segovia, El Espinar, Ayllón y Linares del Arroyo. En cuanto a los partidos políticos, fueron un total de nueve los afectados y dos secciones juveniles, la Juventud Socialista Unificada y la Juventud de Izquierda Republicana. Había sedes sindicales o de partidos en un total de 65 localidades de toda la provincia, lo que hemos recogido en los anexos.

Paralelamente a la ilegalización de los partidos y sindicatos, se inició la persecución de los adversarios políticos, se produjeron las detenciones en masa de los dirigentes y militantes de esas organizaciones, las ejecuciones ilegales, y la huida de los afortunados que pudieron marchar a zona republicana.

La oposición política quedó descabezada de sus líderes locales y de muchos de sus militantes, hasta quedar paralizada totalmente. La mayoría de dirigentes desapareció, unos pasaron al otro bando (Carrasco Linares -I.R.-, Demetrio Hoyos y Enrique Pérez Bonín -PSOE-, Álvarez Matesanz y Duque Serrano -PCE-), otros fueron presos (Esteban Muñoz -UGT-, Isidoro Romano -JSU-) y el resto fueron fusilados (los socialistas Antonio Hernanz, Fuster García, Gómez Fernández, Peña Huertas y los republicanos Agustín Hernández y Jose Gutiérrez).

La ideología antidemocrática y autoritaria de los militares sublevados se volvió pronto en contra de los partidos que habían apoyado el movimiento militar. En la provincia de Segovia, la unificación de Falange y los Requetés se realizó sin grandes obstáculos ya que había pocos centros tradicionalistas en los pueblos de la provincia. Pero la creación del partido único obligaba a desaparecer al resto de fuerzas políticas, Acción Popular y Renovación Española, que no siempre aceptaron de buen grado su disolución. Los militantes de AP se integraron primeramente en el Requeté, para pasar a FET con esa procedencia. La mayoría de ellos nunca se sintieron falangistas, aunque salvaban las formas. Las resistencias de los exmilitantes de AP de la provincia se fueron venciendo

³⁶⁸ BOP, 31 de julio de 1936.

debido a *“algunas sanciones que de acuerdo con la Jefatura Provincial del Movimiento y con el Gobierno Civil se van imponiendo”*³⁶⁹.

Ante el abultado volumen de militantes -de las distintas tendencias conservadoras: monárquicos, fascistas, católicos- originado por la avalancha de nuevos afiliados desde los primeros momentos de la sublevación y fruto de la creación del partido único, se produjeron sucesivos procesos depuradores de la propia organización, con más intensidad a la finalización de la guerra. Desde Segovia se pedía a Madrid que la depuración tuviera más carácter político que jurídico, ya que de la forma que *actualmente se desarrolla*, únicamente podían ser depurados aquellos que eran

marcadamente izquierdistas (la delegación exige este requisito en su comprobación más estricta) no pudiendo depurarse por tanto aquellos otros que mostrándose indiferentes, fríos de espíritu e indisciplinados y rebeldes que con su actuación causan gran perjuicio en la marcha de la organización y un grave quebranto en la disciplina. En estos casos de propuesta se tropieza con grandes dificultades, debido a que los antecedentes de los interesados no son de izquierdas. En otras ocasiones se tropieza en que por esa u otra delegación se piden informes a Organismos que no sienten tan estrictamente los conceptos de izquierdismo como nuestras delegaciones, siendo sus informes menos justos o quizá más ligeros de concepto por lo que se tropieza con diferencias³⁷⁰.

En cuanto a la actitud de la gran masa de población de la provincia con respecto al movimiento, siempre en opinión del jefe de Falange de Segovia desde antes de la guerra, Luis Hermosa, *“se muestra indiferente y acata cuantas órdenes emanan del Estado o del Partido, permaneciendo en actitud expectante”*. Con respecto a la gente de izquierdas, escribía *“guarda una actitud reservada, retraída y a la expectativa de cómo han de desarrollarse las cosas, sobre todo desde el punto de vista social, predispuesta a la sindicación pero sin gran confianza y con grandes reservas, siempre pendientes de mejoras de tipo material”*³⁷¹.

En Segovia no hubo *pleito* de camisas viejas, pues al reducido grupo inicial de falangistas de preguerra se añadieron sin distinciones, en la avalancha sobrevenida durante la guerra, los afiliados que no provenían de otros partidos de la derecha, por lo que la asimilación se llevó a cabo sin problemas.

Las asociaciones juveniles de significación conservadora permanecieron legales durante algún tiempo más: hasta el Decreto de 23 de septiembre de 1939, por el que se integraron en el SEU la Asociación de Estudiantes Tradicionalistas (AET) y la Federación de Estudiantes Católicos (FEC). En Segovia, ésta última no funcionaba desde el 18 de julio de 1936. Su sede estaba en los locales de AP, donde disponía de biblioteca. El 7 de

³⁶⁹ AGA. SGM- DNP. Caja 21. Informe de la Jefatura Provincial del Movimiento de Segovia a Secretaría General de Provincias. Luis Hermosa, jefe provincial de FE desde antes de la guerra, se mantuvo en el cargo, ahora con la nueva denominación hasta noviembre de 1940. presentó su historial político y militar a sus superiores en mayo de 1940: El 20 de julio marchó con los camaradas al Alto del León. Después fue destinado en la Academia de Artillería *“con todos los camaradas existentes para cubrir faltas de personal. Pasados los momentos de apuro, pidió salir del cuartel para atender la jefatura provincial (...) lograda incorporación de una masa de voluntarios de unos 2.700 y consolidada la provincia, reducidos los pequeños focos, nuevamente a la 2ª Centuria, en el frente de Valsain”*. Tuvo permiso del Caudillo para permanecer en retaguardia para atender el cargo de jefe provincial.

A pesar de las sanciones, se mantuvieron muchas personas encuadradas en el movimiento, pero -según el informe de Hermosa- *“con reservas”* y *“sin perder el contacto con antiguos elementos derechistas”*. Hermosa señalaba *“como más significados y que pudiéramos llamar indiferentes con FET: el presidente de la Dip. Prov. Antonio Sanz Gilsanz, el poeta Luis Martín García Marcos, Luis Uranga, el expresidente de JAP Francisco Martín y Gómez, el concejal monárquico Mariano Sáez, Alejandro Barahona, Mariano García Bermejo, Augusto López Rodríguez y José Carretero Vera; “como tradicionalistas que pudiéramos llamar rebeldía solapada”: Nicolás Gil Gil, Epifanio de Castro, Luciano Gil Gil, Eulogio García Barroso, Segundo Hernangómez Perlado y Justo Sanz Hernández. “En cuanto a los que se señalan como furibundos, actúan bajo el amparo del marqués de Lozoya y del teniente coronel, exdiputado de AP Fernández de Córdoba, cuya postura ante la organización no es clara. Como populistas furibundos colocados frente a la organización: Fausto López Velicia, los nuevos concejales provenientes de AP César Zubiáur y Eusebio Provencio, Fernando García López, Zoilo Tejedor Aceves, Eduardo Gómez, Ausencia López Velicia y Ascensión Peinador.*

³⁷⁰ AGA. SGM- DNP. Caja 21. Informe de la Jefatura Provincial del Movimiento de Segovia a Sec. General de Provincias.

³⁷¹ Ver nota anterior.

octubre de 1939 se firmó en Segovia la integración de AET en el SEU, no asistió al acto ningún representante de FEC por *“haber muerto su presidente en la guerra y estar ausentes los restantes directivos”*³⁷².

3. 1. 3. Sustitución de las autoridades locales y provinciales. Vuelta al poder local de las fuerzas conservadoras

En primer lugar, con el triunfo de la sublevación militar en Segovia, se produjo el desalojo del poder de republicanos y socialistas, gobernantes en ayuntamientos, diputaciones y Gobierno Civil. Para este último cargo fue designado por el comandante militar de Segovia José Tenorio, el comandante de la Guardia Civil Joaquín España Cantos³⁷³.

Todas las gestoras municipales nombradas tras la victoria del Frente Popular fueron destituidas. Las órdenes de las autoridades militares eran claras, en *“aquellos Ayuntamientos en que actuaban Comisiones Gestoras designadas por el Gobierno Civil, y que no hayan sido sustituidas por otras, cesen en sus funciones inmediatamente y sean repuestos acto seguido el último ayuntamiento nombrado por elección popular”*³⁷⁴, es decir, los concejales elegidos en 1931. Pero, como había muchos ayuntamientos de elección popular con representantes republicanos y socialistas, en estos casos tuvieron que recurrir al nombramiento de nuevas gestoras, cuando no era posible el relevo de aquellos concejales. Para esta labor de sustitución de ediles, el comandante España designó a los secretarios de ayuntamiento, para que ejecutaran la orden *“con la mayor urgencia”*, debiendo remitir al Gobierno Civil la copia autorizada del acta de la sesión en la que el nuevo Ayuntamiento quedara constituido. En *El Adelantado* de 31 de julio ya aparecía la designación de las nuevas Comisiones Gestoras de los ayuntamientos de Segovia, San Ildefonso, Santa María, Samboal, Cuéllar, Coca, Navas de Oro, San Martín y Mudrián, Encinillas, Bernardos, Chañe, Aguilafuente, Pinarejos, y Sepúlveda.

En los ayuntamientos constitucionales donde había representación republicana o socialista, los concejales de este signo fueron cesados. En la capital fueron destituidos los ocho ediles de estas tendencias que habían sido elegidos democráticamente en 1931³⁷⁵.

En la provincia, camionetas de camisas azules -en operaciones ordenadas por el comandante España- recorrían los pueblos destituyendo a las gestoras municipales del Frente Popular, supliéndolas por personas de reconocida ideología conservadora. Pero, aunque actuaran bajo la dirección del gobernador, no parece que funcionara demasiado bien el sistema porque el comandante España dictó, el 20 de agosto, unas instrucciones para los nombramientos de las personas que habían de integrar las gestoras, con un elocuente *“Al objeto de dar uniformidad a los servicios dependientes de este Gobierno Civil y poder controlar con la mayor eficacia la actuación de las corporaciones municipales”*³⁷⁶.

En primer lugar, las gestoras nombradas por las autoridades militares no podían ser variadas ni sustituidas por quien no fuera expresamente facultado para ello por escrito. En los ayuntamientos de elección popular o con gestora nombrada a partir del 19 de julio que estuvieran integrados por elementos afectos al movimiento, antes de procederse a su

³⁷² AGA. SGM- DNP. Caja 21. Informe de la Jefatura Provincial del Movimiento de Segovia a Secretaría General de Provincias, nº 10. fechado el 6 de octubre de 1939.

³⁷³ Los sucesores de España fueron José Jiménez Alfaro, gobernador interino desde el 11 de diciembre de 1936, por cese de su antecesor, hasta enero de 1937 en que es sustituido por Manuel Pérez Mirete, quien se mantuvo en el cargo hasta abril de 1938, siendo reemplazado por Enrique Rodríguez Lafuente, gobernador hasta enero de 1939, momento en que toma el mando de la provincia José Malcampo y Fernández de Villavicencio.

³⁷⁴ BOP, 31 de julio de 1936. Cir. Gob. Civ.

³⁷⁵ Libro de actas del Ayuntamiento de Segovia, sesión del 31 de julio de 1936, bajo la presidencia del Delegado de la Autoridad Militar, Joaquín España. Los concejales cesados eran los republicanos Aurelio García, Julián Fernández, Juan Zuloaga, Lope Tablada y Eduardo Lucio; y los socialistas Esteban Muñoz, Gregorio Olalla y Antonio Artalejo.

³⁷⁶ BOP, 24 de agosto de 1936. Cir. Gob. Civ.

sustitución o cambio, se enviaría al Gobierno Civil la relación de las personas que antes o después del *“movimiento salvador se hayan distinguido en contra del mismo, o que por su actuación o antecedentes sea prudente su destitución, expresando los motivos y propuestas razonadas de las personas que hayan de constituir (el consistorio), las cuales serán suscritas por elementos de solvencia moral, que en su caso serán responsables de las propuestas que formulen”* (2º). En estas propuestas deberían figurar personas *“no sólo de un partido o agrupación política, sino todas aquellas que por su honorabilidad, probada competencia y laboriosidad fueran acreedoras a regir la administración del municipio y encuadren en todos los partidos de derechas”* (3º). Estas instrucciones deberían ser *“rigurosamente”* observadas por los alcaldes, secretarios de ayuntamientos y subordinados de la Autoridad, haciéndoles responsables de las *“infracciones que contra las mismas pudieran cometer”*³⁷⁷.

La labor depuradora de las autoridades locales se hizo lentamente, pues, aunque no muy poblados, existían 276 municipios en la provincia de Segovia. El 2 de septiembre, el comandante España solicitó a todos los alcaldes de las localidades donde no había gestora nombrada por el Gobierno Civil que informaran de cuántos concejales eran, cuántas vacantes existían, nombre y apellidos de todos los miembros y nombre y apellidos del secretario, y si era interino o propietario. Dos días después amplió la solicitud pidiendo datos sobre los concejales elegidos por elección popular, debiendo expresar su filiación política y la elección de la que procedían³⁷⁸.

A partir de ahora y hasta 1948, en que se introdujo el sistema de tercios para la elección de las corporaciones locales, las autoridades provinciales eran las que designaban y destituían a concejales y alcaldes. Por el Decreto Ley de 16 de febrero de 1937, las autoridades militares de Segovia podían proponer al general de la 7ª División, Andrés Saliquet, la suspensión de autoridades civiles por diversas causas: *“falta de celo, de moralidad o ausencia de concurso en el mantenimiento del orden público”*³⁷⁹.

Con estas disposiciones, se impuso un sistema político autoritario cuyo primer objetivo había sido el desalojo del poder de los representantes elegidos por el pueblo en las elecciones de febrero de 1936. Las nuevas autoridades que nombraron los sublevados eran generalmente representantes de la fuerzas que habían apoyado la sublevación. Para presidente de la Diputación fue designado Antonio Sanz Gilsanz, abogado y presidente local de Acción Popular en Segovia³⁸⁰. En el Ayuntamiento de la capital, los concejales sustitutos eran también conocidos militantes de AP, Martín y Gómez, César Zubiáur, Eusebio Provencio y Ángel Bagues; de FE, José Antonio Nieves; y tradicionalistas como García Gutiérrez³⁸¹. En los pueblos donde las derechas gobernaban los ayuntamientos antes de julio de 1936, los alcaldes y concejales se mantuvieron en el poder. En la capital permaneció como alcalde el republicano conservador Pedro Rincón, aunque sería sustituido muy pronto, el 21 de agosto de 1936, por el capitán de artillería Antonio Blanco, que abandonó el cargo al ser destinado a San Sebastián. Desde el 1 de enero de 1937, el 1º teniente de alcalde, Andrés Reguera, pasó a desempeñar la alcaldía manteniéndose en el cargo durante toda la contienda y los primeros años de posguerra.

³⁷⁷ Tanto este entrecomillado como los apartados anteriores (2º y 3º) son de la Circular de 20 de agosto. BOP, 24 de agosto de 1936.

³⁷⁸ BOP, 2 y 4 de septiembre de 1936.

³⁷⁹ BOP, 24 de febrero de 1937. DL, de 16 de febrero de 1937.

³⁸⁰ Completan la primera Gestora el monárquico Esteban Rey, jefe local de FET de Sta. María de Nieva, Leopoldo Moreno Rodríguez, de Riaza, Román Velasco San Miguel, de AP de Cuéllar y Alfonso Arroyo Zúñiga de Sepúlveda. En noviembre de 1937, el Gob. Civ. ordenó la reorganización de la Gestora, en la que entraron el jefe de FET de Coca, Arturo Acosta García, el monárquico de Cuéllar Juan Herrero Garrido y Tomás Angulo, que sustituyeron a Esteban Rey, Román Velasco y a Leopoldo Moreno Rodríguez.

³⁸¹ Arch. Mun. Segovia, Libro de actas del Ayuntamiento, sesión del 31 de julio de 1936, bajo la presidencia del delegado de la Autoridad Militar, Joaquín España.

Se produjo una homogeneización conservadora/reaccionaria en el poder local y provincial. Fueron pocos los nombramientos de falangistas, camisas viejas, para cargos importantes. A partir de la unificación que estableció el partido único en la España franquista, la adscripción política de todos los cargos era falangista, pero el conglomerado de FET aglutina a distintas y dispares familias: fascistas, tradicionalistas, monárquicos, católicos y gentes sin más adscripción que el conservadurismo reaccionario. De todas las familias políticas que integraban el Movimiento no fueron precisamente los fascistas los que gobernaron en la provincia de Segovia.

Pero este proceso de renovación de autoridades municipales iniciado con fuerza en el mes de julio de 1936 no funcionó como exigían las autoridades -pues no se había finalizado aún a principios de 1937- lo que obligó al nuevo gobernador, Pérez Mirete, a dictar unas normas para la depuración de los cargos públicos de los ayuntamientos. Con ello pretendía evitar que exmilitantes o simpatizantes del Frente Popular continuaran desempeñando cargos como concejales o alcaldes. La fundamentación de Mirete era esclarecedora:

Los cargos públicos han de estar ocupados por personas absolutamente adictas al Movimiento salvador; que esta adhesión ha de estar probada por actos posteriores al 18 de julio; pero que no ha de ser desmentida por actividades anteriores a aquella gloriosa fecha. Los que antes (...) del 18 de julio estuvieran enrolados en partidos del FP, declarados fuera de la ley por D. 108, podrán convivir con nosotros, trabajar con nosotros, llegar con el tiempo a compenetrarse con nosotros, pero ahora no pueden y no deben ocupar cargos de autoridad o de pública gestión administrativa. A nadie negamos el que, por el camino del arrepentimiento, pueda purgarse de errores y rectificar equivocaciones. El general Franco ha dicho repetidas veces que otorgará su perdón generoso a los que entreguen las armas si no son reos de delito. Pero no ha dicho (...) que al enemigo que él perdona le vaya a permutar el fusil con que nos combatió por una vara de alcalde para que nos gobierne³⁸².

En vista de este razonamiento, la decisión de Mirete fue inmediata: las personas que en cualquier fecha de 1936 figuraban afiliadas a cualquiera de los partidos del Frente Popular, *“aunque sean buenas personas, aunque se hayan adherido al Movimiento Salvador, aunque le hayan servido con lealtad y hasta con entusiasmo, no deben ocupar cargo alguno de autoridad ni de gestión municipal”*. En esta orden seguía los dictados del Gobierno que pretendía *“eliminar de los escalafones y excluir de la administración a quienes prestaron ayuda, en cualquier forma de colaboración o simpatía, a aquellos partidos nefandos que llevaron a nuestra patria...”* al caos que motivó el movimiento militar. El razonamiento para convencer a los destinatarios de la circular pretendía ser convincente: *“¿no es monstruoso que mientras a un peón caminero, o a un maestro, o a un médico, se le somete a expediente o se le sanciona (...) se consienta que esté actuando de alcalde o concejal de un Ayuntamiento la misma persona que en las elecciones del 16 de febrero era interventor del FP?”*.

En su especulación, aportaba ejemplos de “cambios de chaqueta” que había conocido en la provincia de Segovia, como *“un colaborador de la dictadura y de Azaña, que el 17 de julio tenía el puño cerrado y le abrió el día 20 para saludar al estilo romano”*, mientras que otro *“arrancó personalmente el crucifijo de las escuelas y ha presidido ahora la entronización del Sagrado Corazón”*. El lugar que destinaba Mirete a los arrepentidos, después de dejar el cargo público que ostentaran -pues *“no es preciso ser toda la vida alcalde o concejal”*- , era acudir a la vanguardia en los frentes de batalla o, de lo contrario, a *“la cola de la vida política o civil”*³⁸³.

Las órdenes eran precisas: todos aquellos alcaldes o concejales que después del 1 de enero de 1936 permanecieran afiliados al Frente Popular o hubieran actuado de

³⁸² BOP, 28 de febrero de 1937. Cir. Gob. Civ.

³⁸³ Ver nota anterior.

cualquier forma a su servicio, lo debían comunicar por escrito al Gobierno Civil en un plazo de 15 días. Como en principio era una declaración voluntaria, la notificación *“no producirá otro efecto que ser relevados del cargo”*. El tono de esta circular hasta aquí es de una suavidad inusitada en las normas dictadas por Mirete, como veremos más adelante.

Si los afectados por esta circular no colaboraban, autoinculpándose, entrarían en acción los colaboradores necesarios en la represión: autoridades y particulares, que eran reclamados con la justificación del *“deber ciudadano”*. Deber que sería de *“mayor exigencia”* a cuantos ejercieran funciones de la administración o fueran agentes de la autoridad: alcaldes, concejales, maestros, comandantes de la guardia civil y párrocos. La amenaza era para los alcaldes y concejales denunciados, los que comprobada su responsabilidad, serían considerados enemigos del Movimiento, *“que han tratado de engañar a las autoridades ocultando su verdadera significación e intenciones”*³⁸⁴. Podrían ser sancionados con multas entre 500 y 10.000 pts., además de su destitución fulminante. Para asegurarse el cumplimiento de la circular, obligaba a que fuera leída en la primera sesión del Ayuntamiento después de la llegada del BOP, a continuación de ser aprobada el acta.

En mayo del mismo año se extendió la depuración a alcaldías pedáneas, de barrio y parroquias que integraran las corporaciones municipales. Ahora, el tono de Pérez Mirete era más contundente, pues ordenaba a las personas que ostentaran dichos cargos que dentro del quinto día manifestaran si se hallaban o no comprendidos en estas normas, con el fin de ser relevados de los mismos en el modo y forma que en ella se indicaban, bajo *advertencia de sanción por incumplimiento*³⁸⁵. Más adelante, la presión pasó a alcaldes y concejales que no fueran de filiación republicana, para que denunciaran a los compañeros de consistorio de aquella significación política que no se hubieran autoinculcado ante el gobernador civil.

A escala nacional se dictó la Orden del Gobernador General de la JTE, de 30 de octubre de 1937, que establecía las normas para el nombramiento de vacantes en los ayuntamientos, para los que se precisarían informes de la Guardia Civil, de la FET local y provincial y otros de *“reconocida independencia”*³⁸⁶.

Al cabo del tiempo, no parece que en Segovia tuvieran mucha confianza en las autoridades locales de la provincia, porque el 31 de agosto de 1938, el gobernador Mirete, ordenó a todos los alcaldes que le remitieran una relación de los componentes de la Comisión Gestora Municipal que presidían, expresando con toda precisión y claridad el cargo, los nombres y apellidos, la fecha del nombramiento, su filiación política y profesión, además de los datos del secretario, interventor y depositario municipal, y si eran interinos o en propiedad³⁸⁷.

Parece evidente -por lo que hemos analizado hasta ahora- que el proceso de renovación de autoridades locales no fue todo lo rápido y efectivo que hubieran deseado las autoridades de Burgos, si bien hay que hacer constar que en las localidades más importantes este cambio fue prácticamente inmediato. En Cuéllar cesaron el 29 de julio todos los concejales del ayuntamiento que integraban la gestora del Frente Popular nombrada en marzo, siendo sustituidos por miembros de la coalición de fuerzas sublevadas, entre otros, Jacinto de las Heras y Pedro Gordo, falangistas, bajo la alcaldía de Juan Herrero Garrido, presidente del Comité del Bloque Nacional de Cuéllar, que se mantuvo en el cargo durante 17 años.

³⁸⁴ Los entrecomillados anteriores son de la referida circular de 28 de febrero 1937.

³⁸⁵ BOP, 3 de mayo de 1937. Cir. Gob. Civ.

³⁸⁶ BOP, 8 de noviembre de 1937. El Gobernador General era una suerte de gobernador de gobernadores, con sede en Valladolid, el cargo estaba desempeñado por Luis Valdés.

³⁸⁷ BOP, 31 de agosto de 1938, Cir. Gob. Civ.

La alcaldía de Coca recayó en el falangista Arturo Acosta García, sobrino del alcalde republicano Romualdo Acosta, preso en Segovia. En El Espinar se mantuvo unos meses el conservador Fermín Vigil, siendo sustituido por Luis Berenguer. En San Ildefonso, el republicano Aquilino Gómez fue reemplazado por Cecilio Bermejo, que también pasó como gestor a la Diputación Provincial. En Sepúlveda volvió a la alcaldía el monárquico Miguel Abad³⁸⁸ -que desempeñaba también la jefatura local de FET- destituyendo y permitiendo el fusilamiento de su antecesor, el republicano Fermín Sanz. En Santa María de Nieva había dos líderes monárquicos durante la época republicana que pasaron a detentar el poder local, Esteban Rey, alcalde durante el Gobierno Berenguer, ahora jefe local de FET y diputado provincial; y Teodoro Llorente, nombrado alcalde.

En 1939 fue nombrado gobernador militar el comandante Eugenio Colorado Laca³⁸⁹. De carácter violento, según los informes del jefe provincial de FET, Luis Hermosa, los falangistas tuvieron varios incidentes con él, como el delegado provincial de excombatientes Julián Reguera Antón (teniente de milicias y hermano del alcalde de Segovia Andrés Reguera) al que *“reprendió duramente, sin atender al uniforme y emblemas del mando del partido”*³⁹⁰. Posteriormente discutió con el comandante de milicias de FET con motivo de los actos del *Día de los Caídos*, porque no le gustó como *desfilaban* los falangistas y las banderas que llevaban eran *iguales* que las del Ejército. También tuvieron problemas con Colorado los no falangistas, según denunciaba Hermosa. El militar le llamó *rojo* al dueño de radio Segovia, Hernández Asiaín, *“le trató mal”*, porque estaba en Madrid cuando comenzó la guerra, y su hijo más joven *“un tanto trastocado”* se pasó con un amigo a zona roja; todo ello a pesar de que los otros hijos dejaron la emisora a disposición del movimiento, para todo tipo de propaganda, convocatoria de actos patrióticos y oficiales, etc.³⁹¹

El gobernador civil Malcampo, no se libró de las críticas de Hermosa, con el que también tuvo tiranteces, *“por no plegarme en mis informes a su arbitrario criterio y manera de actuar”*³⁹².

Por otro lado, en 1940 fue destituido como presidente de la Diputación Antonio Sanz Gilsanz –en el cargo desde julio de 1936- después de varios informes de Hermosa solicitando su cese, debido a diversos actos y actitudes en contra del régimen. Entre éstas figuraba el haber remitido un telegrama a Gil Robles, cuando ya estaba exiliado, con motivo de su onomástica; haber sido sancionado el 18 de julio de 1939 por no llevar el uniforme de FET en los actos conmemorativos -obligatorio para todos los afiliados-; y la más curiosa fue la inscripción en el libro de visitas de un restaurante típico de la capital, en agosto de 1940, de las famosas frases de Cicerón, escritas en latín, que tradujo Hermosa a sus superiores: *“Entre qué gentes estamos, qué gobierno tenemos, en qué ciudad vivimos, ¡oh tiempos!, ¡oh costumbres!”*. Finalizaba la inscripción con los vivas habituales de AP *“Presente y adelante. Viva España”* y la firma del religioso Fausto López Velicia, capellán del Hospital Asilo, César Zubiáur y Sanz Gilsanz. Hermosa consideró ofensiva la anotación y a los firmantes *“enemigos encubiertos del actual régimen”*, por lo que le pidió al Secretario

³⁸⁸ Destituido, a su vez, por *“negligencia en el cumplimiento de lo ordenado”* en febrero de 1940.

³⁸⁹ Poseía fincas en Sacramenia -coto de San Bernardo- y Vegas de Matute. Como representante de los propietarios había sido miembro del Jurado Mixto Agrario. Fue comandante de milicias de FE entre septiembre y octubre de 1936.

³⁹⁰ Por esta causa, Hermosa pidió al Secretario Nacional que exigiera una satisfacción a Colorado para el *camarada* Reguera, ya que *“se le ha tratado injustamente, se ha hecho mofa a las estrellas que le fueron concedidas por el CAUDILLO, a propuesta del General Director de Milicias, y por méritos de guerra, y se ha hecho mofa del cargo que ostenta”*. Hermosa pedía que la satisfacción fuera exigida por la Sec. Gen. en lugar de la Jef. Prov. *“pues teniendo en cuenta el carácter violento y duro, que además no atiende a razones, del gobernador militar, pudiera darse lugar a una escena violenta que no es conveniente, y que es mejor tratar de evitar”*. Informe fechado el 23 de marzo de 1940. AGA, Presidencia. SGM-DNP. Caja 21.

³⁹¹ El hijo en cuestión era Antonio Hernández Asiaín, estudiante, que pasó a Madrid con Liborio López, con el que se enrolaría en el Batallón Alpino con sede en Navacerrada. A su padre, de ideología conservadora, le cogió la guerra en Madrid. Por el contrario los otros hermanos que permanecieron en Segovia colaboraron entusiastamente a favor de los militares sublevados.

³⁹² AGA, Presidencia. SGM-DNP. Caja 21. Informe de Hermosa nº 7 de 1940.

Nacional -con la *responsabilidad* de su cargo- *“me dé la inmediata destitución de Sanz Gilsanz como presidente de la Diputación y una sanción grave, enérgica y eficaz para todos los demás señores”*³⁹³.

En noviembre de 1940 fue nombrado presidente de la Diputación el comandante de Artillería José Riera Aisa, procedente de AP, aunque no militaba antes de la guerra. Sus acompañantes en la Gestora eran los mencionados Alfonso Arroyo, Arturo Acosta y Juan Herrero; a los que se añadió Ricardo Cáceres, Juez Instructor de Responsabilidades Políticas de la provincia de Segovia, hijo del que había sido durante la dictadura presidente de la Diputación, Gabriel José de Cáceres.

La designación de concejales y alcaldes por el gobernador civil, a propuesta del partido único creó una serie de problemas, como detectara Luis Hermosa, quien llegó a la conclusión de *“reconocer que aún ejerciendo la selección de gestores con la mayor escrupulosidad, entre los de mejor estilo, espíritu, energía y ganas de trabajo no se consigna la labor ni el rendimiento preciso, debido siempre a la falta de preparación y de conocimiento sobre la materia”*. Estas limitaciones obligaban a los alcaldes a *“entregarse de lleno en manos de los secretarios municipales, gente por lo general de pocos escrúpulos, acostumbrados a desenvolverse políticamente a su antojo y a quienes parece importarles poco la forma política imperante”*. Para solucionar esta situación, Hermosa planteó a la Jefatura Nacional la creación de una oficina *municipalista* consultiva en cada Jefatura Provincial, en la que los interesados *“pudieran enterarse de la solución de los problemas que tanto en el orden económico administrativo como en el jurídico administrativo se les pudiera presentar”*. La oficina estaría integrada por personal de la organización *“capacitado para ello”* y funcionaría bajo el control del jefe provincial. Con esto se habría conseguido una uniformidad en las actuaciones y que la orientación a seguir por todos los gestores fuese siempre la misma, e *“inspirada por la jefatura del movimiento, eliminando orientaciones equívocas o extraviadas, al mismo tiempo que se tendría por las jefaturas un control lo más exacto posible de la actuación y gestión (...) evitando también que pudieran verse mezclados por ignorancia la mayoría de las veces en tantos casos de mala administración como suelen darse en la haciendas municipales”*³⁹⁴.

El desalojo de los representantes de los partidos políticos y sindicatos ahora prohibidos, llegó también a los organismos sociales: Comisiones de Trabajo, Juntas Provinciales de Sanidad y Beneficencia, Previsión y Enseñanza³⁹⁵, y a los Jurados Mixtos.

3. 2. Las transformaciones sociales

3. 2. 1. La censura en los medios de comunicación: radio, prensa, libros, cine

Para conseguir el objetivo de suprimir todo vestigio republicano y que los españoles comenzaran a valorar positivamente el nuevo régimen, se hacía imprescindible aislar informativamente a la zona nacional, filtrando lo que debían conocer sus habitantes. Mediante la implantación de sus instituciones totalitarias, el régimen intentó imponer de modo coercitivo su propia visión de las cosas, excluyendo no sólo las voces discrepantes, sino, siquiera, la voz distinta. Para ello impuso una férrea censura en todos los medios de comunicación.

El único medio netamente republicano de la provincia de Segovia, *Heraldo Segoviano*, lugar de encuentro y difusión de la cultura republicana y de izquierdas, fue suprimido sin ningún tipo de nota oficial al respecto. El último número salió precisamente el 19 de julio, cuando se sublevó la guarnición de Segovia. Sus talleres fueron saqueados por

³⁹³ AGA, Presidencia. SGM- DNP. Caja 21. Informe de Hermosa nº 16, de octubre de 1940.

³⁹⁴ AGA, Presidencia. SGM-DNP. Caja 21. Informe de Hermosa nº 5, fechado el 20 de septiembre de 1939.

³⁹⁵ BOP, 18 de septiembre de 1936. Cir. Gob. Civ.

los falangistas. Al semanario no le dieron tiempo a someterse al Bando de Guerra del coronel Tenorio, que ordenaba: *“cualquier publicación que circule sin haberse presentado a previa censura será recogida y castigado su autor o director, editor o empresa editora con multa de hasta 10.000 pts. Si reincidiera en la falta acordaré la suspensión”*³⁹⁶. Su director, el republicano Carlos Martín Crespo, fue detenido y sometido al proceso de responsabilidad civil por el que fue sancionado con la incautación de todos sus bienes, entre los que se encontraba su imprenta³⁹⁷.

Los otros medios de comunicación segovianos, la emisora local -radio Segovia- y la prensa -*El Adelantado* y *La Ciudad y los Campos*- de ideología conservadora previa a la guerra, a partir de la sublevación profundizaron en sus posiciones reaccionarias en su apoyo a los militares rebeldes y al nuevo régimen.

Debido a la cercanía de Madrid, en la provincia de Segovia se escuchaban nítidamente las emisoras de la capital, por lo que los segovianos estaban perfectamente informados de las noticias del Gobierno republicano a través de Unión Radio de Madrid. Para evitar otras fuentes de información que contradijeran la versión oficial de la guerra el comandante España dictó una circular, según telegrama recibido del General del Ejército del Norte, Emilio Mola:

Para evitar propagación noticias completamente falsas emiten radios enemigas, ordene VE prohibición absoluta de aparatos de radio instalados en hoteles, cafés, bares y demás establecimientos públicos, reciban ninguna clase de información de tales estaciones emisoras, haciendo responsables del cumplimiento de esta prohibición a dueños dichos establecimientos bajo multa 5.000 pts.³⁹⁸.

El Bando de Guerra, de 28 de julio, era mucho más expeditivo y concreto en materia de censura de prensa y radio:

Art. 7º Serán sometidos a previa censura dos ejemplares de todo impreso o documento destinado a la publicidad.

Art. 9º Queda prohibido, hasta nueva orden, el funcionamiento de todas las estaciones radio-emisoras particulares de onda corta o extracorta, considerándose a los infractores como rebeldes, a los fines del Código de Justicia Militar³⁹⁹.

La guerra civil también se desarrolló en la prensa, donde se produjo una lucha por convencer a la opinión pública internacional y a los propios españoles de que la represión cruel únicamente afectaba a la zona republicana, en cambio, en zona nacional, sólo se aplicaba la justicia. Se publicaron en los diarios unas Órdenes de la Dirección de Prensa y Propaganda, bajo el título ***“Contra la difamación roja: En vista del recrudecimiento de la campaña de difamación (...) se esforzarán todos nuestros medios en rebatirla, demostrando al mundo con realidades la perversidad comunista (...) Para ello nos bastará demostrar que nuestra actuación enérgica y arrolladora, lo es en los combates; pero no en forma alguna, ni criminal ni abusiva, ni aún tan siquiera con los enemigos que están en nuestras manos”***⁴⁰⁰. En *El Adelantado* no aparecieron apenas noticias sobre los consejos de guerra ni sobre los fusilamientos producidos en Segovia, al contrario de lo que se podía encontrar en otros diarios como *El Norte de Castilla*.

Por el contrario, la prensa nacional hacía hincapié en las crueldades de los republicanos, como cuenta Antonio Bahamonde en sus vicisitudes como delegado de Queipo de Llano durante los primeros meses de guerra, por Andalucía y Extremadura. Explica que el jefe territorial de Prensa y Propaganda *“me dió la orden de que en mis viajes*

³⁹⁶ BOP, 27 de julio de 1936. Bando de 19 julio, art. 5º.

³⁹⁷ Arch. Prov. Caja J/6350, Exp. Resp. Civ. 24/37.

³⁹⁸ BOP, 27 de julio de 1936. Cir. Gob. Civ.

³⁹⁹ BOP, 5 de agosto de 1936. Bando de Guerra de la JDN.

⁴⁰⁰ *El Adelantado*, 4 de diciembre de 1936.

por el territorio propagase atrocidades cometidas por los rojos, forjadas con todo género de detalles en su despacho. Estos crímenes siempre habían sucedido en provincias distintas a las que visitaba. En Badajoz contaba lo de Málaga...”⁴⁰¹.

En los periódicos se insertaban anuncios oficiales incitando a los segovianos: “Escucha las radios españolas, lee los periódicos españoles, no escuches, no leas la prensa enemiga (...) inspírate siempre en el amor a la patria”⁴⁰².

La censura alcanzó muy pronto a todos los libros de ideologías distintas a la que representaban los sublevados. El 15 de septiembre de 1936, el gobernador civil ordenó a todos los alcaldes que procedieran con la “mayor urgencia a la incautación y destrucción de cuantas obras de matiz socialista, comunista y pornográficas se hallen en librerías y Kioscos de periódicos, de cuyo cumplimiento levantarán acta, que enviarán a este Gobierno”⁴⁰³.

Para cumplir la función censora de todos los libros existentes en establecimientos públicos de la provincia, se creó la Comisión Gubernativa Provincial Depuradora de Libros de Librerías y Bibliotecas Públicas. Este organismo elaboró largas listas de libros prohibidos que se publicaron en el BOP. Como algunos de los libros proscritos estaban prestados -en el momento de la depuración, en marzo de 1937- por la Biblioteca fija y circulante de la Universidad Popular de Segovia, el gobernador civil ordenó que fueran devueltos, en un plazo de 10 días, “considerándose desobediencia el incumplimiento”⁴⁰⁴, como, además, la Comisión Depuradora tenía los recibos de entrega a los lectores de la ciudad y provincia, el gobernador sabía perfectamente a quién tenía que perseguir.

Paralelamente, se formó en Segovia una Comisión Depuradora de Libros Escolares, presidida por Arturo Hernández, que fue publicando también listas de libros prohibidos a medida que las iban elaborando. Todas ellas recogían la advertencia a los maestros en cuyas escuelas hubiera “ejemplares de libros comprendidos en la relación, deben separarlos de las Bibliotecas Escolares y guardarlos cuidadosamente en espera de instrucciones acerca del destino de dichos libros”⁴⁰⁵. Esta Comisión Provincial finalizó sus tareas en cuatro meses: la primera lista se publicó el 5 de enero de 1937, y la quinta y última el 30 de abril del mismo año. Al tiempo que se hacían las listas de libros prohibidos, se notificaban las de libros y ediciones aprobados, advirtiendo, igualmente a los maestros, que “sólo podrán adquirir los libros y ediciones publicados en esta lista, la anterior y las siguientes”⁴⁰⁶.

Al parecer, los maestros eran remisos a prescindir de algunos libros, pues se hizo necesaria la repetición de la advertencia a los docentes que “deben retirar los libros de las misiones pedagógicas que aún no hayan recibido la aprobación de esta Comisión depuradora”⁴⁰⁷. A medida que los trabajos censores se llevaban a cabo, se hacían públicas listas de libros prohibidos, que en 1938 todavía se utilizaban en las escuelas, pero que eran vetados por la Inspección de Primera Enseñanza⁴⁰⁸. Para que la depuración de las bibliotecas llegara a todas las localidades de la provincia era necesaria la colaboración de los alcaldes. La Orden del Ministerio de Educación de 5 mayo de 1938⁴⁰⁹, encomendó a los alcaldes que informaran sobre la situación de las bibliotecas creadas por el Decreto republicano de 13 de junio de 1932.

⁴⁰¹ BAHAMONDE Y SÁNCHEZ DE CASTRO, A, *Un año con Queipo. Memorias de un nacionalista*, Eds. Españolas, Barcelona, 1938, pág. 156.

⁴⁰² *El Adelantado*, 6 de enero de 1937.

⁴⁰³ BOP, 15 de septiembre de 1936.

⁴⁰⁴ BOP, 8 de marzo de 1937. La comunicación incluía el horario para efectuar la entrega de los libros; de 10 a 14 horas, los días laborables, en el local de la Universidad, sito en la iglesia de San Quirce.

⁴⁰⁵ BOP, 5 de febrero de 1937.

⁴⁰⁶ BOP, 22 de enero de 1937.

⁴⁰⁷ BOP, 30 de abril de 1937.

⁴⁰⁸ BOP, 26 de agosto de 1938.

⁴⁰⁹ BOE, 11 de mayo de 1938.

El cine tampoco escapó a la censura. En principio, las películas eran supervisadas y autorizadas por el gobernador civil, hasta que se creó la Junta Superior de Censura en Salamanca y -bajo su control- un Gabinete de Censura Cinematográfica en Sevilla. Las películas de argumento, ya fueran importadas o realizadas en zona nacional, debían ser sometidas al Gabinete. Por su parte, las de propaganda social, política o religiosa, noticiarios así como las que se realizaran en territorio liberado, serían visadas por Salamanca. Ambas instituciones estaban presididas por el representante de la Delegación de Prensa y Propaganda, e integradas por vocales de los tres poderes del Nuevo Estado: Ejército, Falange e Iglesia.

Las normas censoras aplicadas al cine eran muy estrictas: la proyección de una película no censurada originaba la prohibición de su exhibición en todo el territorio nacional, además de la imposición de una multa. Los dueños de salas de proyección no podían emitir cintas que no tuvieran la documentación de censura en regla y tenían la obligación de denunciar cualquier infracción de estas disposiciones bajo pena de multa o cierre del local⁴¹⁰.

Los mensajes de adhesión al Gobierno republicano de intelectuales o artistas extranjeros originaban la inmediata actuación de la Delegación de Prensa y Propaganda, que ordenaba la prohibición de la venta y comercialización de sus obras. Así ocurrió, entre otros, con las novelas de Ralph Bates y las películas en que intervenía Paul Muni⁴¹¹.

La censura se extendió a todos los ámbitos de la vida, incluida la privada. En el Ejército se creó la figura del *Censor* de cartas de los soldados, trabajo realizado por la propia tropa, aunque bajo la supervisión de un mando. A los civiles también se les controlaba el correo, en el capítulo de la represión judicial veremos dos casos de procesamiento y condena por escribir -en cartas privadas- críticas a la sublevación militar. José María Palomares cita normas que se publicaron en *El Norte de Castilla* recomendando directamente a los particulares que depositaran en los buzones los sobres abiertos para facilitar la labor censora⁴¹².

3. 2. 2. El adoctrinamiento de la población sometida. La propaganda del nuevo régimen

El proceso de *fascistización* de la España de Franco fue más intenso en los resortes del poder orientados hacia la manipulación de las masas, mecanismos propagandísticos y política laboral y social, controladas por el sector fascista de FET en los ministerios de Gobernación, Trabajo y Organización Sindical.

La “nacionalización de las masas” pretendía asegurar la obediencia al régimen de gobierno, despertando y fomentando, para ello, la creencia en su legitimidad, sobre todo en el carácter carismático de la autoridad del jefe. Así la propaganda se centró primordialmente en fomentar el mito del Caudillo, Franco se convirtió en el eje integrador y articulador del ideario y propaganda del régimen, convirtiéndose su figura en catalizadora de todos los valores del régimen, garantía de la paz, del orden, protagonista de los éxitos de la guerra. La imagen de Franco se aplicó a todas las posibilidades propagandísticas en carteles, efigies, pasquines, etc. y se veía en calles, escritos oficiales, cartas particulares, etc. Desde muy pronto comenzó a hablarse de la *España de Franco*, la *Justicia de Franco*,

⁴¹⁰ BOP, 22 de diciembre de 1937. O. Secretaría General SE Jefe del Estado.

⁴¹¹ BOP, 3 de marzo de 1937. Cir. Gob. Civ.

⁴¹² PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María. *La guerra civil en la ciudad de Valladolid*. Ayuntamiento de Valladolid, 2001, pág. 40. En *El Norte de Castilla*, 17 de septiembre de 1936, se pedía: “*vallisoletano o morador en Valladolid: echa tus cartas al correo abiertas y franqueadas, antes de las 7 de la tarde. Si lo haces así, llegarán a su destino sin retraso de fecha alguno. Con esta pequeña colaboración que se te pide, prestarás un eficaz servicio a la normalización de la correspondencia en esta ciudad*”.

la *Misericordia de Franco*. Franco se convirtió en el líder indiscutible del bando nacional, por encima de las rivalidades entre las facciones que habían apoyado la sublevación: conservadores, falangistas, monárquicos legitimistas y tradicionalistas.

La labor propagandística a través de los medios de comunicación, afirma Sevillano, *“fue un mero apéndice de los mecanismos tradicionales de control social y sobre todo de la represión, destacando por su capacidad coercitiva al reducir toda expresión disidente a la espiral del silencio. Así la agobiante presión ideológica hizo que la gente permaneciera sumida en la privacidad de su vida cotidiana al quedar ahogada por el miedo al aislamiento y al castigo”*⁴¹³. Pero si la labor coercitiva de la propaganda fue innegable, no lo fue tanto su influencia persuasiva en la consecución de la adhesión o a lo sumo de la aceptación de la dictadura, pues se mantuvo una importante atención a los medios de comunicación clandestinos, como la radio España Independiente, el acceso a la información oficial fue siempre reducido, y permaneció la disonancia de gran parte de los mensajes propagandísticos con las predisposiciones de la gente y su propia experiencia cotidiana, alejada de las visiones oficiales.

La simbología nacional cambió desde el inicio del conflicto, primero en la calle y más adelante en las normas escritas. La bandera de los Borbones se hizo oficial en la zona sublevada por el D. 77 de 29 de agosto de 1936, (aunque el nuevo escudo no se aprobó hasta febrero de 1938). En 1937, con el D. 226 de 27 de febrero, se hicieron oficiales los himnos nacionales: Marcha Real, Cara al Sol y Oriamendi. En este sentido no parecían tener demasiada prisa los nuevos gobernantes. De hecho se produjeron algunos incidentes con este motivo, porque el Himno de Riego todavía era el himno oficial y, lógicamente, era el que interpretaban las bandas militares o municipales en los actos oficiales. Durante los primeros días de la guerra, en Segovia hubo un acto castrense en la Plaza Mayor, tras el cual la Banda de la Academia de Artillería e Ingenieros interpretó el Himno de Riego, que fue silbado por parte del público. Ante este comportamiento, el comandante España intervino y se procedió a la repetición del himno, *“por ahora, nacional”*⁴¹⁴. Además, cuando se interpretaban los distintos himnos patrióticos en los actos públicos tampoco recibían el debido respeto por parte de ciertos sectores de la concurrencia. Para evitar estas incidencias, el gobernador civil tuvo que publicar una circular en la que pedía *“respetar todos los himnos de las distintas milicias”*⁴¹⁵.

El Ayuntamiento de Segovia, tras un Informe de la Comisión de Gobierno, se adhirió a la petición del municipio de Vitoria para tomar la Marcha Real como himno nacional, que según el informe, *“no lo es sólo de la monarquía”*. Además, había sido instituido por Carlos III (precisamente en la localidad segoviana de San Ildefonso) el 3 de septiembre de 1770, como *“marcha de honor española”*⁴¹⁶.

Más adelante se haría obligatorio permanecer en pie, brazo en alto, al escuchar los himnos, en cines, teatros y otros establecimientos públicos cuando aparecía la efigie de Franco, y responder a los vivas, que sólo podían ser los reconocidos *¡Arriba España!, ¡Franco, Franco, Franco!, ¡Viva España!, ¡Viva el Ejército!, y ¡España una, grande y libre!*.

Todas las demás simbologías del régimen tuvieron naturalmente su reflejo en Segovia. El brazo en alto se convirtió en saludo nacional por el D. de 24 de abril de 1937, pero hasta 1938 no se establecieron los casos de uso⁴¹⁷. La unificación de Falange con los tradicionalistas, además de las reticencias políticas, originó algunos desajustes de protocolo, que no fueron solventados oficialmente hasta 1939, en que unas *“normas*

⁴¹³ SEVILLANO CALERO, F. *Cultura, propaganda y opinión en el primer franquismo*. En AYER, nº 33, 1999, pág. 155.

⁴¹⁴ *El Adelantado*, 31 de julio de 1936.

⁴¹⁵ *El Adelantado*, 23 de noviembre de 1936.

⁴¹⁶ BOP, 26 de marzo de 1937. Sesión Ayuntamiento de 28 de noviembre de 1936.

⁴¹⁷ BOP, 22 de junio de 1938. O. M. Defensa Nacional de 15 de junio de 1938.

*dictadas por el Caudillo*⁴¹⁸, obligaron al uso de boina roja y camisa azul a la vez, pero no una sin la otra.

La obsesión del Gobierno de Burgos por borrar todo vestigio republicano se llevó hasta límites insólitos, que ahora provocan la sonrisa, pero muestran la ideología excluyente de aquellos gobernantes. Se llegó a la orden de sustituir los vocablos “exóticos que pretenden introducirse en el uso corriente de nuestro rico idioma”. Así los “extranjerismos innecesarios” en hostelería fueron sustituidos por sus sinónimos “castizos”: *menú por minuta, brasserie por cervecería, watercloset por retrete*, etc.⁴¹⁹.

La denominación de las calles pasó a ser fiel reflejo de la victoria de los franquistas. El Ayuntamiento de Segovia, ya el 5 de agosto de 1936, acordó quitar los nombres cuya designación había sido ordenada durante la República, como la de Pablo Iglesias⁴²⁰. En diciembre de 1939 el gobernador civil dictó una circular para que sólo se cambiaran las calles cuyos nombres “signifiquen agravio a los principios inspiradores del Movimiento Nacional”⁴²¹. Poco a poco se fueron cambiando los nombres de las calles con personajes e instituciones representantes del bando triunfante, que todavía, en el siglo XXI, aún perduran (Alfárez Provisional, Francisco Atorrasagasti, Fernández Ladreda, Capitán Perteguer, Caídos de la División Azul).

Las procesiones de Semana Santa constituyeron otra de las manifestaciones palpables del cambio de régimen y la vuelta a un Estado confesional católico. A partir del año 1937, el Ayuntamiento de Segovia subvencionó las procesiones y participó oficialmente en ellas⁴²². Además, se anunciaban con gran despliegue propagandístico. Recordemos que en 1936, las procesiones se habían celebrado en el interior de las iglesias.

Los múltiples homenajes a militares, en particular, y al Ejército “nacional”, en general, se hicieron norma común en todo el territorio controlado por Franco. En Segovia, el Ayuntamiento nombró hijo adoptivo al coronel Carrascosa, jefe del Regimiento de Transmisiones de El Pardo (Madrid) que se había pasado a Segovia el 21 de julio de 1936⁴²³; al general Serrador, militar de Valladolid que había tomado el Alto del León⁴²⁴; y se ofreció un homenaje al teniente de Seguridad Feijoo, por su comportamiento destacado al inicio de la sublevación⁴²⁵. Por el contrario, los homenajes a civiles eran más escasos, sólo alcanzaron ese honor Calvo Sotelo⁴²⁶ y José Antonio Primo de Rivera.

Cualquier acto social era aprovechado para la propaganda de los nuevos valores imperantes y si al mismo tiempo podían humillar a los adversarios, mejor todavía. Este sentido humillante tenía el “Bautizo de dos hijos de rojos”, como figuraba de una manera pomposa en la crónica de *El Adelantado* de 12 de marzo de 1937. Los niños fueron apadrinados por los alcaldes de La Granja y Valsaín y sus esposas. Las autoridades políticas y eclesiásticas trabajaban unidas para escarmentar y adoctrinar a la población que pensaba de distinta manera. En la misma línea enmarcamos las noticias sobre la Primera Comunión de los niños huérfanos asilados en el preventorio de San Rafael, que -para escapar del frente- fueron trasladados a Segovia al principio de las hostilidades y acogidos

⁴¹⁸ 30 de enero de 1939, Cir. Gob. Civ. Así se recogía literalmente en la circular.

⁴¹⁹ BOP, 6 de diciembre de 1939. Cir. Gob. Civ. sobre escrito del Subsecretario de Gobernación.

⁴²⁰ Arch. Mun. Libro de actas. Sesión de 5 de agosto de 1936. Moción de Martín y Gómez, Jesús Tablado y César Zubiáur, “para que calles, plazas cambiadas después de 1931 y que la tradición popular ha seguido denominando por sus nombres típicos vuelvan a la rotulación tradicional, que se coloque en salón sesiones una lápida donde vayan los nombres de quienes hubieran merecido dedicación de calle y que una comisión estudie la conveniencia de revertir a su tradicional rotulación todas las calles con nombres modernos”. Por unanimidad se creó la comisión.

⁴²¹ BOP, 4 de diciembre de 1939.

⁴²² *El Adelantado*, 11 de marzo de 1937.

⁴²³ Primero le hizo un homenaje su propio Regimiento en enero de 1937 y luego en marzo fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad. *El Adelantado*, 12 de marzo de 1937. Carrascosa murió en accidente el 26 de septiembre de 1938.

⁴²⁴ *El Adelantado*, 8 de marzo de 1937. Se le entregó el bastón de mando.

⁴²⁵ *El Adelantado*, 15 de marzo de 1937.

⁴²⁶ *El Adelantado*, 1 de octubre de 1936. Suscripción pro-monumento a Calvo Sotelo.

en el monasterio de El Parral de los monjes jerónimos. Con ánimo propagandístico apareció en *El Adelantado* que cuando estaban en San Rafael, en un centro laico, “gritaban ‘no queremos catecismo que queremos comunismo’, y levantaban el puñito” en cambio ahora rezaban, “incluso algunas niñas van a tomar la Primera Comunión”⁴²⁷. Este hecho fue anunciado durante varios días en el diario local con gran despliegue informativo.

Las obligaciones patrióticas de los buenos españoles eran muchas y variadas, entre ellas se encontraba jugar a la lotería nacional, especialmente cuando había un sorteo con fines específicos como el de la Cruz Roja “cumpliendo una patriótica obligación”⁴²⁸.

Durante la guerra, cuando se tomaba una ciudad o el Ejército nacional había vencido en una batalla importante, las autoridades locales se volcaban en la demostración de júbilo, las campanas de las iglesias eran volteadas y se organizaban manifestaciones, tanto en la capital como en los pueblos de la provincia. En ellas se coreaban algunas consignas del tipo “un, dos, tres, Cartagena nuestra es”⁴²⁹. Las manifestaciones “espontáneas” eran uno de los actos públicos favoritos de las autoridades para escenificar la adhesión de la sociedad al régimen.

Pero estas manifestaciones populares no eran tan espontáneas, puesto que eran organizadas por la Falange local y presididas por las autoridades de la localidad, que, al final del recorrido, dirigían la palabra a los congregados. A mayor abundamiento, los que no asistían eran señalados como desafectos, o llamados al orden (Gregoria Díez fue reclamada a casa del alcalde de su pueblo –Fuente el Olmo de Fuentidueña- por no haber acudido a una manifestación oficial), lo que traía multitud de problemas, que se agravaban si los afectados estaban sujetos a procesos de depuración o de incautación, como veremos más adelante. Como ejemplo de estas demostraciones sirva la “imponente manifestación” celebrada en Segovia, el *día del Caudillo* de 1937, a la que asistieron todas las autoridades locales, y Luis Hermosa jefe provincial de FET, pronunció un discurso desde el balcón del Ayuntamiento⁴³⁰. En la misma fecha del año siguiente también hubo manifestación y palabras, en este caso del general Serrador.

Las autoridades locales y provinciales, e incluso los particulares, tampoco perdían ocasión para enviar telegramas a Franco felicitándole por los triunfos militares. Esta sobreutilización del telégrafo producía a veces la saturación del servicio, en el que, por las necesidades de la guerra, debía tener un uso prioritario el Ejército. Por ello, fue necesaria una Orden de la Presidencia de la JTE, sobre el uso restringido del telégrafo, que hubo de ser recordada por una circular del gobernador Mirete, en la que recomendaba que no se utilizara el telégrafo para felicitaciones, sino sólo para urgencias⁴³¹.

El deseo de muchos españoles de aparecer como más patriota que nadie organizando actos de homenaje, motivó que el Ministerio de Interior dictara unas órdenes por las que quedaba prohibida la celebración de “actos públicos o manifestaciones”, sin permiso previo del Ministerio, solicitado a través del gobernador civil. En esta prohibición estaban comprendidos incluso los actos de homenaje a las personas destacadas del Movimiento. Así mismo, no se podía convocar el acto solicitado hasta tener la autorización correspondiente⁴³².

Más adelante, el ideal del régimen de dar a la vida pública un tono de “digna templanza, de acuerdo con los principios de ascesis religiosa y militar”, obligó al Gobierno a suprimir viejos hábitos de *frivolidad pública*, como los banquetes que, cuando en opinión de las autoridades, “rebasan los límites de la comida íntima o no se armonizan con finalidades benéficas como el Plato Único, (...) pueden producir efectos desmoralizadores no ya sólo

⁴²⁷ *El Adelantado*, 18 de noviembre de 1936.

⁴²⁸ *El Adelantado*, 3 de octubre de 1938.

⁴²⁹ Testimonio de Antolín de Valleruela.

⁴³⁰ *El Adelantado*, 1 de octubre de 1938.

⁴³¹ BOP, 23 de junio de 1937, recordando O. Presidencia JTE de 17 de abril de 1937.

⁴³² BOP, 16 de febrero de 1938, Cir. Gob. Civ.

en los espíritus hipercríticos, sino también en las almas sencillas, al contrastar la apariencia suntuaria de estos actos con el deber de sacrificio”⁴³³. Estos actos estaban organizados por autoridades locales y personalidades más o menos notorias, que normalmente pretendían halagar -organizando banquetes- a las jerarquías del Estado y del Movimiento.

A finales de 1938, el gobernador civil se hizo eco de unas Instrucciones del Ministerio del Interior muy precisas y restrictivas sobre la celebración de actos públicos. La primera era fiel reflejo del control absoluto del régimen por los militares y la falta de libertades, pues establecía: “Sin perjuicio de las facultades que competen a las Autoridades Militares y de Orden Público para denegar permisos de reunión y manifestación, cuidará VE no se celebre ninguna sin la previa autorización de este ministerio”⁴³⁴. Pero estas disposiciones no eran para prohibir actos de protesta o de propaganda distinta a la del régimen, que eran imposibles de realizar; en estas prevenciones quedaban comprendidos los homenajes a personalidades ligadas con el Movimiento o aniversarios de fechas cívicas y otras de índole parecida.

Entre todos los homenajes celebrados en la España franquista, merece un estudio más pormenorizado el primer homenaje realizado a nivel nacional, al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. La primera noticia sobre su muerte apareció en *El Adelantado* del 3 de octubre de 1938: “Comunicado la muerte de José Antonio por Franco al Consejo de FET”⁴³⁵, pero sin mencionar la fecha del fallecimiento. Más adelante, fijada oficialmente el 20 de noviembre de 1936, se declaró esa fecha día de luto por Decreto del Jefe del Estado, de 16 noviembre⁴³⁶.

En las circulares del gobernador civil, Rodríguez Lafuente, no se animaba -como en otras ocasiones- a participar o colaborar en los actos, se ordenaba literalmente, en primer lugar a los fabricantes de energía eléctrica a que “faciliten fluido suficiente para que en todos los pueblos donde llegue Radio Nacional, escuchen los discursos de Franco y ministros de Agricultura e Interior, en el homenaje a José Antonio”. En segundo lugar, que este aniversario revistiera carácter de “especial solemnidad y a él se asocie el pueblo entero ofreciendo tributo de justicia y gratitud” a José Antonio. Y, para terminar, pedía a los alcaldes que prestaran la “cooperación y el más decidido apoyo” a cuantos actos se organizaran, con tal motivo por el Jefe local de FET⁴³⁷.

Por último, ya en la víspera del homenaje, el gobernador dio todas las facilidades para que empleados y obreros en general pudieran participar en los actos. A pesar de ser domingo el día 20 de noviembre, el gobernador ordenó que no se alterara el descanso dominical. Además, el lunes 21 se suspendían los trabajos en oficinas, establecimientos mercantiles e industriales durante los funerales de José Antonio, “con las excepciones de la ley del descanso dominical”⁴³⁸.

Para ciertas cuestiones como los homenajes y monumentos a los caídos, el Gobierno terminó por prohibir la iniciativa espontánea o popular para crear una Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria. Se habían producido tal cantidad y variedad de eventos de este tipo en las localidades de la España Nacional, que quizá para las autoridades franquistas esos actos requerían unas condiciones mínimas. El preámbulo explicaba perfectamente la necesidad de esta normativa:

La experiencia de otros países visitados por la guerra, y la que ya entre nosotros nos ha empezado a aleccionar, muestra los peligros, a veces irreparables, siempre de largos y difíciles cura y alivio, que para el decoro estético y hasta para la dignidad civil de las grandes urbes como de las modestas aldeas, significa el dejar abandonado a la iniciativa particular o a

⁴³³ BOE, 31 de mayo de 1938.

⁴³⁴ BOP, 24 de octubre de 1938.

⁴³⁵ *El Adelantado*, 3 de octubre de 1938.

⁴³⁶ BOP, 21 de noviembre de 1938.

⁴³⁷ BOP, 18 de noviembre de 1938, Cir. Gob. Civ. En el original con grandes caracteres toda la circular.

⁴³⁸ BOP extra de 19 de noviembre de 1938. Cir. Gob. Civ.

la espontánea y frecuentemente poco avisada de las corporaciones locales cuanto se refiere al estilo y realización de monumentos patrióticos, memoriales a los caídos, inscripciones lapidarias y otras formas materiales de homenaje, destinadas a multiplicarse, sin duda y a través de las cuales aparece retrospectivamente trocada la epopeya en caricatura⁴³⁹.

Con esta Orden, se sometía a normas generales y comunes, todo lo concerniente a la construcción de *“edificios o edículos, erección de monumentos, fijación de lápidas y hasta atribución de nombres a lugares o cambio de los que tuviera, así como cualquier otra forma de conmemoración artística del sentido, acontecimientos, figuras, glorias y duelos de la actual lucha nacional”*⁴⁴⁰. La Comisión estaría formada por académicos del Instituto de España, a los que se sumaban el general Moscardó y Pilar Primo de Rivera.

La participación de los alcaldes en los actos patrióticos no debía ser muy entusiasta porque fueron constantes las llamadas desde el Gobierno para que los ayuntamientos participaran en los actos de propaganda. Por ejemplo animándolos a que colaboraran con FET en la preparación del *Día de los Caídos*⁴⁴¹. Hasta para la celebración del final de la guerra hubo que animar a los alcaldes. La Circular del gobernador civil de 12 de mayo de 1939, alentaba a los alcaldes a que organizaran fiestas con motivo del *Día de la Victoria*, y en el *BOP* del 19 de mayo de 1939, coincidente con ese día, se publicó la Orden del Ministerio de la Gobernación, que organizaba las fiestas populares, el día 18 para toda España y el 19 la fiesta final en Madrid. En Segovia, con ese motivo se celebró una manifestación, con discursos, interpretación de los himnos nacionales españoles, además del alemán e italiano.

Otra práctica que contribuía a la propaganda del régimen era el ejercicio del indulto, que se utilizó concienzudamente por el régimen como medio propagandístico de atracción de adhesiones. En el *BOE* aparecían largas listas de presos indultados que eran liberados y en los diarios se publicaban noticias sobre la conmutación de penas de muerte por Franco, que eran seguidas del mensaje de gratitud de los conmutados agradeciendo esa medida *“a Franco y a España”*⁴⁴².

Pero, el mejor ejemplo de conducta del régimen en este sentido, nos lo aporta el gobernador Pérez Mirete con su indulto -con motivo de la Navidad de 1937- a los sancionados de la provincia por diversas razones económicas, como la no contribución a las suscripciones nacionales. La fundamentación era la habitual de íntima relación entre lo religioso y lo patriótico: *“Es tradición española, de muy honda raigambre, que el poder público asocie sus actos de gobierno a la celebración de fiestas y de solemnidades religiosas”*⁴⁴³. Por esta circular quedaron sobreesidos los expedientes y condonadas las multas originadas por denuncias relacionadas con el *Plato Único*, *Día sin Postre* y *Auxilio Social*. A continuación se publicarían listas alfabéticas de los beneficiados, pero si alguno de ellos era denunciado de nuevo, sería multado con el doble de la primera multa. Las sanciones a comerciantes e industriales sobre abastos y precios, eran reducidas a la mitad, con la consiguiente lista de los beneficiados, pero, si se producía una nueva denuncia, la multa llevaría un recargo del 50%.

En esta circular hubo un sector de sancionados que recibió distinto trato. Los multados por actividades usurarias sólo se beneficiarían del indulto si cumplían unas condiciones cargadas de significación religiosa, pero complicadas de llevar a cabo: antes del 1 de enero deberían repartir entre sus deudores las dos terceras partes de la multa, acreditando este reparto -aquí radicaba la dificultad- con el testimonio escrito de los

⁴³⁹ O. M. Educación Nacional de 18 febrero de 1938. *BOE*, 22 de febrero de 1938.

⁴⁴⁰ Ver nota anterior.

⁴⁴¹ *BOP*, 26 de octubre de 1938, Cir. Gob. Civ.

⁴⁴² *El Adelantado*, 2 y 4 de enero de 1937. Fueron conmutados 72 reos.

⁴⁴³ *BOP*, 22 de diciembre de 1937.

deudores, en acta de presencia refrendada por el cura párroco, por un notario o por el jefe del puesto de la Guardia Civil. De este modo les sería condonada la totalidad de la multa, quedando beneficiados en un tercio de su importe. También podrían entregar los dos tercios en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia como donativo para ropas de los pobres.

3. 2. 3. La Educación, valores religiosos y conservadores. La escuela nacional-católica

Los militares sublevados eran conscientes de la gran importancia que tenía la educación, especialmente la primaria, a la hora de extender la base social de un régimen que se quería implantar sin contar con el consenso general de la sociedad. De tal modo que, como manifiesta Cámara Villar, *“la preocupación escolar del régimen era casi exclusivamente ideológica y política. La función más relevante que se asignaba a la escuela era contribuir a la dominación y a la reproducción social y política mediante el adoctrinamiento en los valores propios del conjunto de las fuerzas del bloque vencedor de la guerra civil”*⁴⁴⁴.

A tal fin, paralelamente a la depuración de los docentes, se promovieron los cambios necesarios en las normativas de la enseñanza para adecuarlos a la nueva concepción de la educación que tenía como valores fundamentales la religión y las tradiciones nacionales. Las iniciativas de la provincia de Segovia se adelantaron a las oficiales emanadas de la JDN, así la Inspección Provincial de Primera Enseñanza se atrevió, el 22 de agosto, a dar unas órdenes a los maestros, eso sí, *“convenientemente autorizada por el Delegado de la autoridad militar”*⁴⁴⁵. En ella advertimos el interés por volver inmediatamente a las tradiciones católicas y patrióticas de talante conservador, borrando todo vestigio laico o republicano.

Por un lado, en cuanto a la vuelta a la escuela católica, reponía *“con todos los honores y en lugar preferente”* el crucifijo, restauraba la enseñanza religiosa, y volvía al rezo, al comenzar y terminar cada sesión escolar, de las *“oraciones de entrada y salida tradicionales en las escuelas de España”*⁴⁴⁶. Las ideas nacionales se plasmaban al restablecer la bandera nacional, roja y gualda (que oficialmente no lo sería en zona nacional hasta el 29 de agosto, por el Decreto nº 77). Proponía también la inauguración “solemne” del curso, invitando a *“autoridades y vecindario ante quienes los maestros expondrán la importancia de la escuela cristiana en el resurgimiento de la España grande, libre y una”*⁴⁴⁷ (como se puede apreciar, en estos primeros momentos no está articulado definitivamente el lema: “una, grande y libre”). Por otro lado, la circular retiraba los cuadros que la Orden del Ministerio de Instrucción Pública de 28 marzo había ordenado colocar en las paredes de las clases (entre ellos alguno alusivo a la Constitución de 1931); también abandonaba las bibliotecas del Patronato de Misiones Pedagógicas. Finalizaba el escrito con el ruego de que los *“señores maestros pongan el mayor celo en el cumplimiento de esta orden contribuyendo de manera eficaz al movimiento salvador de España”*⁴⁴⁸, en la línea habitual de que todos tenían el deber de colaborar con la causa, y desde todos los ámbitos, no sólo el militar.

La inauguración del curso escolar 1936/1937 se hizo de un modo solemne, *“en contraste con la frialdad oficial de años anteriores”*, a decir de *El Adelantado*. El obispo

⁴⁴⁴ Cámara Villar. En el prólogo de *Florido Pensil*, SOPEÑA MONSALVE, Andrés, Barcelona, Crítica, 1994, pág. 16.

⁴⁴⁵ BOP, 24 de agosto de 1936. Estas instrucciones tan acordes con el sentir del nuevo régimen, iban firmadas por la inspectora jefe en representación de la junta de inspectores, Elena Gozalo Blanco, lo que no le libró de que fuera separada definitivamente en noviembre de 1937, tras el proceso depurador.

⁴⁴⁶ Apdos. 1º, 5º y 6º, Instrucciones de 22 de agosto de 1936.

⁴⁴⁷ Apdos. 4º instrucciones de 22 de agosto de 1936.

⁴⁴⁸ Párrafo final instrucciones de 22 de agosto de 1936.

celebró una misa en la catedral, a la que asistieron las autoridades y milicias patrióticas, *infantes de JAP, pelayos y balillas*, distribuidos ordenadamente en la catedral.

Los testimonios hablan de que los niños estudiaban en las escuelas republicanas lo que llamaban el “catecismo” de Alcalá Zamora, que hablaba sobre la Constitución de la II República, los derechos y deberes, en suma, educando en los valores democráticos. Este “catecismo” fue sustituido por el auténtico catecismo de la religión católica que, más adelante, iría acompañado de los principios del Movimiento.

En el Estado nacional-católico la ideología en que se basaba la educación era, en palabras de Morente, una “*religiosidad exacerbada y fuertemente ritualista, un nacionalismo excluyente, homogeneizador e imperialista*”⁴⁴⁹, es decir, la combinación de la religión católica con el ultranacionalismo más conservador, destacando los momentos cumbre de la Historia de España con los Reyes Católicos y Felipe II, que combinaron la grandeza política con la defensa del catolicismo.

La opción del nuevo régimen era clara hacia la enseñanza privada y religiosa. En el mismo mes de septiembre de 1936 quedaron “*autorizadas para abrir sus Colegios de Enseñanza las Congregaciones Religiosas que se dedican a ella y los tengan cerrados por disposiciones anteriores*”⁴⁵⁰, como los jesuitas. La Iglesia, como agradecimiento a los servicios prestados, adquirió el ejercicio de una de las funciones que correspondían al Estado, la enseñanza, en la que adquirió una fundamentación y una presencia constante la religión. Se hizo obligatoria la enseñanza religiosa en primaria, secundaria e incluso en los estudios de Magisterio.

Al inicio del curso de 1936/37, el obispo Platero dictó unas normas muy concretas a los párrocos para su actuación en las escuelas. A la catequesis parroquial, “*cuyo programa es mucho más extenso que el simple aprendizaje de la doctrina cristiana*”, les añadía la obligación de acudir a la escuela, de acuerdo con los maestros y siquiera una vez por semana, para dar su lección o repaso del catecismo; de esta manera se plasmaba la simbiosis entre la religión y el Nuevo Estado, pues “*aparece de relieve ante los ojos de los niños el espíritu de identidad y compenetración de entrambos educadores, lo cual es ya de suyo un factor educativo de máxima eficacia para vaciar el corazón de la niñez en el molde de un españolismo sano y recio, empapado de religión, cultura, hidalguía y patriótica solidaridad*”⁴⁵¹.

Por su parte, a los sacerdotes que hubieran recibido el encargo de regentar escuelas, les transmitía “*la gravísima trascendencia y responsabilidad de su misión*”. Platero introducía un nuevo concepto, el de sacerdote-maestro que había de considerar la escuela como “*una prolongación del templo*”, donde debía desarrollar su labor con el “*mayor estímulo de conciencia y el esfuerzo mayor de voluntad a gloria de Dios, honor de la Iglesia y bien de las almas*”⁴⁵².

En este sentido de fundamentación religiosa, los maestros recuperaron una costumbre que había desaparecido con la República: acompañar a los alumnos a la misa dominical. Como se comprueba en el informe del párroco sobre Teodoro Martín: “*..desde el 1 de septiembre ha cambiado completamente. En unión del otro maestro, que ya lo hacía antes de 1931, reúnen a los niños los domingos al toque de la misa mayor en su respectiva escuela, dirigiéndose en formación a la Iglesia precedidos por la cruz, cantando el ‘Perdona a tu pueblo, Señor’ y al salir en igual forma retornan a las escuelas cantando el himno de la Falange*”⁴⁵³. Esta práctica se tornó obligatoria en Segovia por la Circular de la Inspección

⁴⁴⁹ MORENTE VALERO, Francisco. *La escuela y el Estado Nuevo: la depuración del magisterio nacional (1936-1943)*. Ámbito, Valladolid, 1997, pág. 421.

⁴⁵⁰ BOP, 11 de septiembre de 1936, Cir. Gob. Civ. de 10 de septiembre. En *El Adelantado* de 16 de mayo de 1936, se publicó el cierre de los colegios religiosos de Coca, Bernardos, Santa María de Nieva, Ayllón y Sepúlveda.

⁴⁵¹ BOOS. nº 17. 15 de septiembre de 1936.

⁴⁵² Ver nota anterior.

⁴⁵³ Arch. Epis. Cpta. Correo de entrada, 1936. Informe del párroco de Navas de Oro sobre el maestro Teodoro Martín. En otros pueblos los maestros sólo acompañaban a los niños, sin realizar procesión, lo que disgustaba a los curas. Por ejemplo,

Provincial de Primera Enseñanza de 3 de diciembre de 1936 al declarar vigentes los artículos 42 y 43 del Reglamento de Escuelas de 26 de noviembre de 1838:

Art. 42. En los pueblos donde haya la loable costumbre de que los niños vayan con el maestro a la misa parroquial, los domingos, se conservará, y donde no la hubiera, procurarán introducirla los maestros y las comisiones respectivas.

Art. 43. (...) Verificada su Primera Comunión, serán conducidos a la Iglesia cada tres meses por el maestro para que se confiesen, llevando también a todos los demás niños, para acostumarlos a estos actos religiosos y evitar que queden solos en la Escuela.⁴⁵⁴

Esta manifestación de sumisión del maestro ante la presión de la Iglesia se mantuvo, al menos en las zonas rurales, hasta entrados los años sesenta, si bien los cánticos dependían del entusiasmo patriótico y religioso del maestro que lo efectuaba.

En los centros de enseñanza los profesores marcaron las distancias con sus compañeros que hubieran hecho pública su adhesión a la República, así actuó el claustro del Instituto de Segunda Enseñanza, donde había impartido sus clases Antonio Machado. En *El Adelantado* apareció la siguiente nota:

...publicadas recientemente y por distintos medios de difusión diferentes actuaciones, imputadas a los ex-catedráticos de este instituto Machado Ruiz, Landa Vaz y Jaén Morente, indiscutiblemente censurables, por antipatrióticas y contrarias al movimiento nacional, el claustro de este centro no podía mostrarse ajeno (...) en sesión celebrada el 11 de noviembre, declaró indeseables a tales señores y estimando a la vez como depresiva la presencia de sus nombres en el mismo escalafón al que nos honramos pertenecer⁴⁵⁵.

Las alianzas de Franco con las naciones del Eje se hicieron notar también en la educación. El Ayuntamiento de Segovia ordenó la supresión de la clase de Francés en la Escuela de Artes y Oficios, sustituida por una de Lengua Castellana. Ante lo cual, el médico de Adrados escribió al Boletín Oficial de la Provincia alegrándose de la decisión⁴⁵⁶. En este sentido, más curiosa era la Orden del Ministerio de Educación de 21 de julio de 1938⁴⁵⁷ sobre la asignatura de Alemán y la terminología alemana de Veterinaria para alumnos de las facultades de dicha especialidad, en la que reconocía que no había llegado a implantarse ni existía profesorado para ella.

La enseñanza nacional católica estuvo condicionada por la configuración totalitaria del Estado y la beligerancia de la Iglesia. De ello resultaría un concepto represivo y autoritario de la educación que englobaba la obligatoriedad de asistir a misas y rosarios, los castigos corporales, los cánticos forzados. En suma, un periodo sombrío para gran cantidad de niños que tuvieron que padecer esta represión educativa. En las escuelas se bombardeaba a los niños con exhortaciones morales, bajo la amenaza de los castigos del infierno, porque el peligro de caer en el pecado acechaba en cualquier momento, como ilustra perfectamente Andrés Sopena en el *Florido Pensil*.

el de Navalmanzano pidió al obispo que se obligara a los maestros de su localidad a "restablecer la costumbre de ir con ellos a la Iglesia con la cruz, a Misa y al Rosario. Pues aunque acuden y el maestro se encarga de mantener el orden ya sabe que es otra cosa el hacerlo procesionalmente que diríamos". En Arch. Epis. Cpta. Correo de entrada, 1936. Informe del párroco de Navalmanzano.

⁴⁵⁴ BOOS, nº 23, 15 diciembre de 1936. Cir. Inspección Provincial de Primera Enseñanza.

⁴⁵⁵ *El Adelantado*, 27 de noviembre de 1936.

⁴⁵⁶ Ambas noticias aparecieron publicadas en el BOP, 27 de diciembre de 1937. Ayuntamiento de Segovia, sesión ordinaria 6 de octubre de 1937.

⁴⁵⁷ BOP, 1 de agosto de 1938.

3. 2. 4. Las normas sobre ordenación de la vida en retaguardia. Las circulares del gobernador civil Pérez Mirete

La voluntad del Nuevo Estado de inmiscuirse en todos los hogares de la zona bajo su control fue tan fuerte que se dictaron normas para regular cualquier aspecto de la vida cotidiana en retaguardia. Las órdenes del Gobernador General de la JTE, Luis Valdés, eran comentadas e incluso ampliadas por los gobernadores civiles, que tenían el mando absoluto sobre la vida cotidiana de cada provincia y contaban, además, con la posibilidad de llevar a cabo iniciativas propias dictando normas a través de los Boletines Oficiales de la Provincia. De los cuatro gobernadores que hubo en Segovia durante la guerra, Manuel Pérez Mirete, fue quien se mantuvo por más tiempo en el cargo y además, por lo demostrado en sus escritos, el que tenía mayores dotes demagógicas. Demostró ser el arquetipo de gobernador franquista: reaccionario, paternalista y religioso. Fue el más prolífico, su publicación de circulares superó ampliamente tanto a antecesores como a sucesores en el cargo⁴⁵⁸.

Pérez Mirete se dio a conocer en la provincia con una circular anunciando la *Entronización del Sagrado Corazón de Jesús* en su despacho, para lo que se servía de las palabras de Franco: *“España cuanto más cristiana, será más Española”*⁴⁵⁹. Mirete no ordenaba a los alcaldes de la provincia que le secundaran su iniciativa, sutilmente escribía: *“yo ruego (...) no creo que necesite ordenarlo, que procedan a realizar análoga entronización”* en sus despachos y salones de sesiones. Al decir *análoga* en este ruego, al menos daba la posibilidad a los alcaldes de elegir la imagen, ésta no tenía por qué ser el Sagrado Corazón, podía servir el patrón o patrona de la localidad, pero sólo si llevaba *“aparejada con su santidad, el orgullo patriótico, ya que nadie puede aventajar a España ni en el número ni en la excelsitud de sus santos”*. De tal manera que eran válidos, por ejemplo, Santa Teresa o San Ildefonso, pero, aunque no lo recogía, imaginamos que no lo serían San Patricio o San Luis, por su procedencia extranjera. La despedida de esta primera circular exaltaba de la unión de la espada con la cruz, *“Y no lo dudéis: Con Dios en el cielo y con el generalísimo Franco en la tierra, el triunfo es nuestro”*⁴⁶⁰, para finalizar el escrito con Vivas a Cristo Rey y los habituales a España y Franco. Las repercusiones en la provincia no se hicieron esperar, y el 26 de febrero se publicaba en *El Adelantado* la *Entronización del Sagrado Corazón de Jesús* en distintos pueblos de la provincia, para, unos días más tarde, el 3 de marzo, sumarse más localidades a esta iniciativa.

Las circulares de Pérez Mirete son muy interesantes por la forma, con la retórica típica del régimen, y por el fondo, porque expresaban de una manera clara y contundente - siempre bajo la constante amenaza de sanción- la ideología del régimen franquista sobre los precios de las cosas, los alquileres, los salarios de los obreros, etc., en suma, relativas a cualquier aspecto de la vida.

Pero la primera circular sobre la vida en retaguardia fue dictada por el comandante España en el verano de 1936. Establecía unas normas sobre la recolección de cereales, de gran importancia por la necesidad de actuación urgente, pues el cereal estaba en el campo esperando ser recogido y su retraso podría originar la pérdida de la cosecha. El escrito estaba basado en el telegrama del general Saliquet sobre la Orden de la Junta de Defensa Nacional, que ordenaba -*“para auxiliar a los que por amor a España han abandonado sus pueblos y cosechas”*- a todos los ayuntamientos que organizaran servicios de prestación personal con los vecinos que hubieran quedado en sus casas, para que fueran recogidas las cosechas de los alistados en el Ejército. Cuando se cubrieran las necesidades del

⁴⁵⁸ Mirete sustituyó al cmte. Jiménez Alfaro, (que había sido gobernador interino desde el 11 de diciembre de 1936, por cese del comandante España, en el cargo desde la sublevación del 19 de julio). Nombrado por D. 179 (BOE, 17 de enero de 1937), Mirete se mantuvo en el puesto hasta abril de 1938 (BOE, 23 de abril), sustituido por Enrique Rodríguez Lafuente, quien estuvo hasta enero de 1939, en que fue sustituido por José Malcampo y Fernández de Villavicencio.

⁴⁵⁹ BOP, 20 de enero de 1937. Cir. Gob. Civ.

⁴⁶⁰ Ver nota anterior.

término municipal se ayudaría a los vecinos. Para ello se suspendieron las obras en los pueblos, que no implicaran quebranto para la salud pública. El Gobierno Civil dio instrucciones para vigilar la ejecución y sancionar *“implacablemente las negligencias de ayuntamientos o particulares”*⁴⁶¹.

Sobre la vida cotidiana en retaguardia son especialmente importantes las órdenes para evitar los abusos de propietarios, empresarios, comerciantes y hosteleros que se estaban aprovechando de la situación bélica para imponer sus condiciones, sirviéndose de la escasez de productos. Se dictaron distintas normas: contra la variación de las prácticas mercantiles que pretendían exigir pagos al contado y restringir los plazos y créditos⁴⁶²; prohibiendo, sin la debida justificación y permiso, la alteración de los precios que regían el 18 julio⁴⁶³; y dictando reglas para evitar abusos en la industria de la hospedería⁴⁶⁴.

Estas normas habían de recordarse constantemente, lo que indica que su cumplimiento no era el exigido por el Nuevo Estado. En primer lugar, fue el Gobernador General el que ordenó a los gobernadores civiles que impusieran el *“exacto cumplimiento de las disposiciones dictadas para la organización de la vida cotidiana. Como norma general de la vida ciudadana se impone la mayor austeridad en todas las funciones y servicios del Estado”*⁴⁶⁵. Recordaba a los gobernadores que utilizaran *“todos los medios a su alcance”*, multas, prisión, destitución, etc. para imponer *“con toda energía el exacto cumplimiento de las disposiciones”* que se venían dictando, para que así, los comerciantes e industriales, *“lejos de aprovecharse de los momentos presentes para realizar ganancias inadmisibles, tengan por norma en sus transacciones, no sólo el cumplimiento de las leyes sino también el limitar sus utilidades tan sólo a lo preciso para el sostenimiento del negocio y atención a las necesidades más urgentes de la vida”*⁴⁶⁶.

La orden finalizaba con unas bonitas palabras (*“pues no hay nada más hermoso que el deber cumplido”*) previas a la recurrente amenaza para los *malos españoles* que no cumplieran las normas establecidas, porque, a juicio de Luis Valdés, era más noble *“enrolarse en las filas de los rojos”*, que aprovecharse de las circunstancias en la retaguardia y *“llevar cobardemente una vida de usura explotando a sus hermanos”*⁴⁶⁷. Valdés alertaba y amenazaba a los gobernadores para que extremaran su celo, haciéndoles responsables de la negligencia o lenidad en el cumplimiento de tan importante función y castigaran de modo *“ejemplarísimo”* a los que fueran merecedores, no sólo del máximo de sanciones, sino de la repulsa de los *buenos españoles*. La dicotomía buen-mal español basada en el concepto cristiano del bien y del mal, se empleó demagógicamente de forma reiterada en toda la propaganda franquista. Al igual que los premios y los castigos, aplicados a los buenos y a los malos españoles, respectivamente.

Esta orden fue recordada y profundizada por Pérez Mirete, quien la añadió algunas consideraciones, primero regalando los oídos de los segovianos, de los que decía *“son, seguramente, los españoles que menos necesitan de las exhortaciones e impulsos de la autoridad para el cumplimiento de sus deberes patrióticos”*⁴⁶⁸. Seguidamente, como Valdés amenazaba a los gobernadores, éstos pasaban las amenazas a los siguientes en la jerarquía del régimen, los alcaldes. Porque en Segovia aunque pocos, había *“malos patriotas”* contra los que, escribía Mirete, *“voy a emprender, la he emprendido ya, una campaña de persecución, de castigo, de aniquilamiento”*. Por un lado, se *“podrá formar en su día un Libro de Oro”* con los buenos españoles, que multiplicaban sus iniciativas, sus aportaciones, sus trabajos y sacrificios. Pero, por otro, iba a llevar un registro muy detallado

⁴⁶¹ BOP, 3 de agosto de 1936.

⁴⁶² O. 17 de noviembre de 1936.

⁴⁶³ O. 19 de diciembre de 1936.

⁴⁶⁴ O. 23 de diciembre de 1936.

⁴⁶⁵ BOE, 16 de enero de 1937. O. Gob. Gen. 13 de enero de 1937.

⁴⁶⁶ Ver nota anterior.

⁴⁶⁷ Ver nota anterior.

⁴⁶⁸ BOP, 28 de enero de 1937. Cir. Gob. Civ.

de los *“pocos malos españoles que me vayan saliendo al camino”*. Con ellos haría una *LISTA NEGRA* que encabezaría con el título de *ENEMIGOS DE FRANCO*, y para los cuales *“no será posible la convivencia con los buenos españoles”*. A continuación detallaba quiénes iban a formar la lista. La relación no tiene desperdicio:

Los que siendo **ricos**, contribuyen mezquinamente a las cargas extraordinarias que el Estado ha de soportar en estos momentos difíciles, los **tibios** en el cumplimiento de sus deberes ciudadanos; **los cobardes en denunciar a los malos españoles**; los **“aprovechados”** que pretenden convertir los dolores nacionales en motivos de lucro; los **patronos y obreros** que no cumplen los horarios de trabajo; los **propietarios** que en estas circunstancias! aumentan el alquiler de las viviendas; todos aquellos, en fin, que asomados al balcón de su egoísmo, presencian el paso de la trágica procesión de madres y viudas enlutadas, jóvenes mutilados, niños huérfanos, familias arruinadas, hogares deshechos y vidas truncadas, y, terminado el desfile, se adentran en su piso confortable, miran su caja de caudales, examinan el último balance y, levantando el hombro, dicen para sus adentros: *“ahí me las den todas”*.⁴⁶⁹

Vemos claramente que no sólo eran enemigos de Franco los adversarios políticos, había muchos más, como los que tenían por única ideología aprovecharse de la situación de crisis y enriquecerse a costa de los demás. Mirete dejaba claro en su circular que los que no estaban con Franco quedarían excluidos de la sociedad: *“No: en la nueva España esos seres no tienen cabida, ni podrán vivir, porque esa clase de gente, por su contextura espiritual, serán ENEMIGOS DE FRANCO, y en el Estado Nuevo, no han de vivir más que los amigos del Caudillo, sus fervorosos partidarios, los que estén dispuestos a seguirle con fe ciega”*. La guerra era de eliminación de los malos españoles, que irían a la cárcel, o al paredón, España sería sólo para los buenos españoles. Las amenazas volvían al final del escrito, Mirete *no quería* castigar, *“yo quisiera que sirviera de ejemplo y de advertencia para que todos entraran por el buen camino”*, pero advertía que iba a ser *“implacable en la tarea de limpiar nuestras filas de enemigos emboscados”*.⁴⁷⁰

La Circular del 3 de febrero de 1937 regulaba los precios de los alquileres. Mirete aprovechaba el preámbulo para criticar a la zona republicana: *“en la zona roja prácticamente la propiedad urbana quedó suprimida y sus titulares completamente arruinados”*; en comparación con la *“zona conquistada”*, donde, en cambio *“conservan la plenitud de sus derechos, gracias a nuestro Glorioso Ejército”*. A renglón seguido, espetaba a los propietarios de inmuebles *“¿qué justificación puede tener (...) un propietario que aumente el precio de sus pisos para lucrarse a costa de quienes luchan o sufren por su misma causa?”*. Porque, al no haber turismo extranjero ni nacional, la demanda de alquileres estaba provocada por los militares que acudían donde les mandaban, familias que huyeron del *“infierno rojo”*, o las que sorprendió la guerra en Segovia. Para Mirete exigir a estos inquilinos un alquiler superior al que venían pagando antes del 18 de julio de 1936, *“es injusto, es inhumano, me atrevo a asegurar que es ilegal y afirmo rotundamente que es antipatriótico y merecedor de enérgica sanción”*.⁴⁷¹

Tras el preámbulo justificativo, el *ORDENO Y MANDO* era contundente: en el plazo de 8 días naturales, los propietarios que hubieran aumentado el alquiler de sus pisos, en relación al 18 julio, *“procederán a renovar esos contratos reduciendo el alquiler, por lo menos al que hasta aquella fecha cobraban”* (Art. 1º). Previa oportuna liquidación, el propietario debería devolver al inquilino el importe de lo que había cobrado de más, desde aquella fecha. Transcurrido este plazo, los inquilinos que no tuvieran debidamente renovado el contrato y satisfecho el reintegro de lo excesivamente pagado, lo debían comunicar al gobernador para *“adoptar en cada caso la resolución que proceda”*.⁴⁷²

⁴⁶⁹ Ver nota anterior. El subrayado es mío.

⁴⁷⁰ BOP, 28 de enero de 1937. Cir. Gob. Civ.

⁴⁷¹ BOP, 3 de febrero de 1937. Cir. Gob. Civ. 2 de febrero de 1937.

⁴⁷² BOP, 3 de febrero de 1937. Cir. Gob. Civ. 2 de febrero de 1937.

Expresión del paternalismo con el que se querían afrontar desde el nuevo régimen las relaciones laborales entre patronos y obreros era la Circular de 14 de febrero sobre pagos de jornales a los trabajadores. El gobernador se escandalizaba de la situación generalizada que se daba en Segovia, donde se pagaban salarios de 1,50 por 8 horas de trabajo y no se remuneraban las horas extraordinarias ni los festivos. Estas prácticas, según Mirete, las *“prohíbe la ley de Dios, las condenan las Encíclicas de los Papas; lo repudia el programa de Franco; lo rechaza el Gobernador General del Estado, y no lo consentirá ni un minuto más el gobernador civil de Segovia”*⁴⁷³. De modo que, tras un estudio comparativo con las provincias de Burgos y Coruña -porque aún no se había establecido en zona nacional el *“salario mínimo vital”*- dispuso que, antes del 1 de marzo, en los 15 días siguientes, los empresarios de acuerdo con la Delegación de Trabajo renovaran el régimen de retribuciones de sus obreros en base a un mínimo de 5 pts. el jornal por 8 horas, para los varones y 3 pts. para las mujeres (es evidente que la discriminación sexual estaba perfectamente asumida por el Nuevo Estado). También debían establecer el porcentaje a pagar por las horas extraordinarias y los días festivos. Los nuevos jornales entrarían en vigor el 15 de febrero, aunque no hubieran sido aprobados en esa fecha. A partir del 1 de marzo serían denunciadas todas las transgresiones de estas normas, para su *“ejemplar y enérgica corrección”*⁴⁷⁴.

En 1937, como había ocurrido el año anterior, era prioridad del Gobierno de Burgos la recogida de la cosecha de cereal en Castilla, para ello dictó el D. 279, y la Orden de 28 de mayo de 1937. Pero, lo que más nos interesa aquí es la correspondiente circular de Mirete que desarrollaba ambas disposiciones. Ordenó a los alcaldes valorar si el número de brazos de que disponía la localidad eran suficientes para recoger la cosecha a tiempo. Para ello los alcaldes podrían imponer la prestación personal o el aplazamiento de otras labores, como la trilla, que se dejaría para llevarla a cabo tras la finalización de la siega en todo el término municipal. Si no fueran suficientes los trabajadores de la localidad, el alcalde hablaría con los de los pueblos vecinos para que les cedieran el personal sobrante. Esta prestación en términos vecinos era obligatoria como si se tratara del mismo pueblo y, en caso de encontrar resistencia, los alcaldes debían avisar al gobernador que impondría las sanciones que fueran necesarias.

Las Bases de Trabajo por las que debían regirse eran las que habían estado vigentes para la campaña de 1933⁴⁷⁵, que establecían para los segadores -por el trabajo mínimo de 8 horas- 5,11 pts., con un recargo del 25% para las 2 horas siguientes, y un 40% para las dos siguientes extraordinarias, hasta completar las 12 horas de jornada, por un sueldo total de 8,50 pts., además de la manutención a cargo de los patronos (este salario está muy por debajo del aprobado para la campaña de 1936, como expusimos en el cap. 1.1.2). Mirete amenazaba que no toleraría ninguna alteración ni de patronos ni de obreros, sobre retribución u horario. En el orden de recolección de la cosecha de cada municipio tendrían prioridad las madres o esposas solas, con hijos o maridos en el frente. En estos casos, el alcalde se encargaría de ello, eso sí, el pago de los jornales iría con cargo al propietario de las tierras, *“en esto no hay privilegio alguno”*.

Para terminar la circular, Mirete hacía una recomendación a los segovianos, en la que introducía su dosis de adoctrinamiento social. Patronos y propietarios debían otorgar jornales justos y una manutención reparadora a todos, tanto jornaleros de la provincia como los muchos gallegos que, como otros años, habían llegado a Segovia. Además recomendaba

Pongamos cariño en el trato y que rebose el espíritu de los segovianos, patronos o compañeros de trabajo, en afecto y cordialidad: reflejándose esto desde el exquisito cuidado

⁴⁷³ BOP, 14 de febrero de 1937. Cir. Gob. Civ.

⁴⁷⁴ Ver nota anterior.

⁴⁷⁵ BOP, 26 de junio de 1933. Estas bases no eran uniformes para toda la provincia, pues en el partido judicial de Santa María, había jornales superiores. Además, se reconocían los derechos de los trabajadores donde hubiera por costumbre jornales más altos, porque seguirán siendo mayores sin que pudieran ser bajados por los patronos.

en el condimento de la comida que se les dé para reparar sus fuerzas, hasta el solaz y el esparcimiento en las horas de descanso, después de las rudas faenas del día. A ser posible que los alcaldes dispongan para esa hora de alguna radio en obsequio de los trabajadores forasteros, para que oigan las noticias de guerra, las canciones patrióticas o las marchas nacionales; que los señores párrocos, si no hay inconveniente que lo impida, retrasen la hora del rosario para que puedan rezarlo ellos también al regreso de su trabajo; en una palabra que se sientan acogidos como en su propia casa (...) que cuando los gallegos vuelvan a su país de ensueño, puedan decir que los segovianos les han tratado como verdaderos hermanos⁴⁷⁶.

No sabemos hasta qué punto estos detalles de *cariño*, como las canciones patrióticas o el retraso del rosario, supusieran para muchos jornaleros, además de un castigo, una humillación.

Un caballo de batalla fundamental en la vida en retaguardia eran los precios de las mercancías y productos de consumo. Las autoridades franquistas dictaban normas para acabar con el aumento constante e “inmotivado” de los precios. Las sanciones podrían ser multa, prisión y decomiso de la mercancía (a veces se daban todas a la vez) y se podrían imponer a vendedores y compradores, pero también a particulares que se dedicaran a murmurar del alza de los precios sin cumplir la obligación de denunciar ante las autoridades los abusos que conocieran. Las autoridades locales y provinciales no se salvaban de las amenazas, pues incurrirían en responsabilidad los gobernadores y alcaldes que infringieran deberes propios del cargo o por negligencia en la persecución de los hechos. Para obligar a los comerciantes a denunciar a sus compañeros que incumplieran las normas, se aplicaba la responsabilidad solidaria de los comerciantes del gremio del inculpado, en la localidad donde se descubriera una reincidencia que no hubiera sido denunciada por los compañeros del infractor.

El atesoramiento de plata era otro aspecto muy relacionado con la política de precios. Como solía ocurrir en cualquier situación de crisis profunda, se produjo un acaparamiento de monedas de plata, en la creencia de la pérdida de valor de los billetes de banco. Mirete se mostró muy severo contra esta práctica, aunque envolvió su circular con un tono muy “social” –en el sentido del catolicismo social-:

La plata escasea para el cambio normal en el pequeño comercio; para el pago de jornales a los obreros de talleres y fábricas a fin de semana; para el stock necesario de moneda fraccionaria en aquellos establecimientos que han de operar con clientela modesta y pobre (...) y esto es monstruoso, *antipatriótico*, CRIMINAL. Porque indica que mientras los soldados están (...) escribiendo páginas de heroísmo sin igual (...) en retaguardia sujetos tan ignorantes o tan malvados, que se están preocupando solamente de ir adquiriendo monedas para esconderlas, por el temor de que los billetes nuestros lleguen a perder su valor. ¡Insensatos! ¡Malos españoles! (...) ¿no les remuerde la conciencia el saber que por su egoísmo escandaloso, algunos soldados al regresar del frente tropezarán con dificultades para cambiar un billete de 25 pts.?⁴⁷⁷.

Las medidas para contrarrestar el atesoramiento fueron expeditivas. En primer lugar declaró ilícita la tenencia de monedas de plata en cantidad superior a 75 pts. El sobrante debía ser cambiado en el banco por billetes o ingresado en cuenta corriente, pero el plazo para llevarlo a efecto era sólo de 4 días, a partir de entonces la guardia civil y agentes de policía se dispondrían a practicar minuciosos registros en los domicilios donde se presumiera podría haber atesoramiento. A los alcaldes les transmitía la responsabilidad de

⁴⁷⁶ BOP, 16 de junio de 1937.

⁴⁷⁷ BOP, 7 de junio de 1937, nº extr. Están respetadas las cursivas y las mayúsculas del original.

ordenar los registros, *“orientándolos para su mayor eficacia”*. En las sanciones a los culpables se aplicaba la máxima arbitrariedad, pues la cuantía de éstas dependía del criterio personal del gobernador. Todos serían castigados con la incautación de las monedas. Pero había una gradación, en función de los casos, que escribía Mirete, *“yo estime”* leves: de mil a cinco mil pts.; *“yo califique”* graves: de cinco a diez mil pts. y prisión; o *“me parezcan”* muy graves: con propuesta a la Superioridad de multa de más de diez mil pts. y prisión a disposición de la Autoridad Militar, como comprendido en el Bando de Guerra.

En diciembre del mismo año (1937) se reprodujo el problema -en este caso por la escasez de monedas de 1 y 2 pts.- por lo que Mirete tuvo que dictar otra exigente circular, en la que declaraba ilícita la tenencia de monedas de plata de estos valores en cantidad superior a 9 pts. El sobrante debería cambiarse por monedas de 5 pts. o por billetes, en un plazo, de nuevo, de sólo 4 días. Los comerciantes no podrían tener más de 75 pts. al iniciar la jornada mercantil. Finalizado el plazo, se practicarían registros domiciliarios, cacheos en la vía pública, en el interior de establecimientos, bares, cafés. Ahora incitaba a la denuncia con premios en metálico *“en consonancia con la importancia y utilidad de su confidencia”*. Los infractores serían sancionados con multas entre 500 y 10.000 pts. y entregados a la Justicia Militar por estar incursos en el Bando de Guerra.

La profusión de multas, disparidad de criterios y diversidad de autoridades que tenían potestad para imponerlas, hizo necesario la disposición de una norma para unificar las circunstancias de imposición de sanciones. El Decreto Ley de 16 de febrero de 1937 fijaba la cuantía máxima de multas en función de la categoría de la autoridad civil o militar que la aplicara: desde 500 pts. por alcaldes y comandantes militares, a 50.000 pts. por los generales jefes del Ejército y Gobernador General. Por este decreto, los generales de división y el gobernador general quedaban obligados a la formación de un registro de las multas impuestas por las distintas autoridades dependientes de su jurisdicción, donde constara el nombre de los corregidos, su cuantía, infracción que motivó la imposición y si fue apreciada reincidencia, forma en que se hizo efectivo el pago y destino atribuido a las sumas recaudadas en el caso de que se hiciera en metálico por carecer de papel apropiado y si se entabló recurso⁴⁷⁸.

3. 2. 5. La colaboración de alcaldes y particulares en la implantación del régimen franquista

La implantación del régimen chocó en muchas ocasiones con la falta de entusiasmo, cuando no con la resistencia, de muchas autoridades locales y particulares. A pesar de las continuas amenazas y sanciones, ayuntamientos y particulares incumplieron con frecuencia las normas que decretaban las autoridades de Burgos, lo que obligaba a los gobernadores civiles a dictar circulares recordando constantemente las normas y reiterando las amenazas.

Al principio de la contienda se dieron castigos ejemplares para que tanto autoridades como vecinos tomaran nota de la situación. Así ocurrió con la destitución del alcalde de Fuentepelayo, Francisco Rodríguez, por pretender infringir la Circular de 14 agosto de 1936 que prohibía la caza. Además fue multado con 1.000 pts., a pagar en un plazo de 8 días ante la Comisión del Tesoro, ya que como alcalde tenía la *“inexcusable obligación de evitarlo y dar ejemplo”*⁴⁷⁹. De no pagar la multa en el plazo indicado, ingresaría en la cárcel.

⁴⁷⁸ BOP, 24 de febrero de 1937, D.L. de 16 de febrero de 1937.

⁴⁷⁹ BOP, 16 de septiembre de 1936. Cir. Gob. Civ.

Desde el inicio de la guerra, los alcaldes debían comunicar diariamente al Gobierno Civil las novedades habidas durante las últimas 24 horas en su respectivo término municipal. Estos informes diarios no cesaron hasta el 12 de noviembre de 1936, cuando, según el criterio del comandante España, se normalizó el orden público en la provincia.

La colaboración de los alcaldes era fundamental para el buen funcionamiento de las suscripciones patrióticas, porque tenían que organizar y presidir las juntas locales, además de efectuar un seguimiento constante de su desarrollo. La colaboración siempre era sugerida por el gobernador civil a través de las circulares. Cuando no cooperaban en la manera debida o se presumían irregularidades, era enviado a la localidad el inspector provincial de FET, Arturo Acosta, que elaboraba el pertinente informe recomendando las medidas a tomar por el gobernador civil. Por ejemplo, en Fuentepelayo, las autoridades locales se negaban a pagar la *ficha azul*, “como bastantes vecinos, y eso que las cuotas asignadas son muy bajas”, por lo que el inspector propuso al gobernador que impusiera multas *sobre todo* al alcalde y concejales, por “falta de espíritu y mal ejemplo”⁴⁸⁰.

Como máxima autoridad local, los alcaldes habían de dar los preceptivos pases a sus vecinos que quisieran viajar fuera de sus localidades, aunque si los desplazamientos fueran a pueblos situados en la línea de fuego, los salvoconductos los daría la autoridad militar. El gobernador civil vio irregularidades en este sistema porque viajaban personas por la provincia utilizando las líneas de automóviles sin el correspondiente pase, debido a que los alcaldes no se los facilitaban. Bajo la imposición del oportuno correctivo, por un lado ordenaba a las compañías de automóviles que no admitieran a personas que no presentaran el pase correspondiente y, por otro, instaba a los alcaldes a que cumplieran su cometido de otorgar el oportuno salvoconducto⁴⁸¹.

Hubo negligencias en el cumplimiento del D. 69, que ordenaba remitir las declaraciones juradas de los funcionarios que contribuían con días de haber de su sueldo para suscripciones nacionales⁴⁸². Días después se publicó la lista de 43 pueblos sancionados por ese motivo con 100 pts.⁴⁸³.

Se produjeron quejas de la Delegación de Trabajo sobre el envío semanal del parte del paro, así como por lo inexacto de las cifras que remitían, ya fueran superiores o inferiores a las verdaderamente existentes⁴⁸⁴. Los alcaldes ponían como excusa que los obreros que encontraban colocación no lo comunicaban para no perder el número de orden en caso de quedarse de nuevo sin trabajo. Las estadísticas para confeccionar el censo patronal y obrero fueron otro motivo de reprimenda del gobernador civil, porque faltaban pueblos por enviar la información. El Estado nacional sindicalista que se quería implantar, pretendía *extirpar* el marxismo pero *haciendo respetar la legislación social* y para ello necesitaba la *colaboración* de las autoridades locales.

Las normas de la Junta Provincial de Abastos -tan necesarias para evitar el almacenamiento de productos que originaba la elevación de su precio- tampoco eran cumplidas por los ayuntamientos. Lo que se ponía de manifiesto en la circular que amenazaba con sanciones a los muchos pueblos que no enviaban las relaciones juradas de existencias de artículos y ganado de todas clases. Dispuesto el gobernador a que “*bajo ningún pretexto ni excusa dejen de cumplirse en un todo cuantas disposiciones dicta el Gobierno nacional*”, finalizaba amenazando “*si me viera obligado a nuevo llamamiento sería para sancionar a alcalde y secretario con fuertes multas*”⁴⁸⁵.

El incumplimiento de las órdenes no dependía de la autoridad que mandase, ni del miedo que impusiera a las autoridades locales, pues cuando era el Comandante Militar de

⁴⁸⁰ AGA, Presidencia. SGM- DNP. Caja 21. Informe suscrito por el Inspector Provincial de FET Arturo Acosta, fechado el 24 mayo de 1940.

⁴⁸¹ BOP, 22 de febrero de 1937. Cir. Gob. Civ.

⁴⁸² BOP, 19 de abril de 1937. Cir. Gob. civ.

⁴⁸³ BOP, 3 de mayo de 1937.

⁴⁸⁴ BOP, 28 de abril de 1937. Cir. Delegado Provincial de Trabajo.

⁴⁸⁵ BOP, 26 de mayo de 1937. Cir. Gob. Civ.

Segovia el que ordenaba tampoco se apresuraron los alcaldes a cumplirla. Así ocurrió con 36 pueblos que todavía en noviembre de 1937 no habían cumplido la orden sobre el envío de datos del grano almacenado de las cosechas anteriores⁴⁸⁶. Por tanto, no se puede establecer una norma general sobre los incumplimientos de las órdenes por los alcaldes, porque se han encontrado multitud de circulares (de distintos temas y procedentes de distintas autoridades) recordando las disposiciones, amenazando y sancionando a los ediles por su falta de acatamiento.

En cuestiones agrícolas, tan importantes en la provincia de Segovia, las normas tampoco se cumplían con entusiasmo. El jefe provincial del Servicio Nacional de Trigo se quejaba de la falta de envío del cuestionario por numerosos pueblos sobre la superficie sembrada de trigo, la que quedaba por sembrar y si la que faltaba se sembraría⁴⁸⁷. Finalizada la guerra se publicaron unos formularios para efectuar las declaraciones juradas de productos agrícolas existentes en cada localidad: garbanzos, piensos, cebada, ganado, etc. El delegado provincial de Abastecimientos y Transportes esperaba del patriotismo de todos su colaboración, de lo contrario, amenazaba con *“las más severas sanciones si alguien no se presta a ofrecerla voluntariamente”*⁴⁸⁸. Por último, eran numerosos los pueblos que no habían enviado el censo de vehículos de tracción animal existentes a 31 de diciembre de 1938⁴⁸⁹.

A la hora de implantar las Juntas Locales de Subsidio al Combatiente (encargadas de pagar a las familias de los soldados nacionales) surgieron problemas muy serios. Fueron continuas las normas emitidas por el Ministerio del Interior, a donde llegaban

quejas referidas a la actuación de las Juntas de Subsidio, acusando un estado de opinión desfavorable respecto a la forma de distribución de las cuotas a los beneficiarios. Según parece muchas juntas vienen desarrollando una acción puramente caciquil y política de intolerables privilegios en la clasificación y reparto, junto con amenazas y persecuciones a familias de combatientes, cuando no con indagaciones sobre la conducta y antecedentes de los causantes, que al ser conocidos de estos por cartas o en disfrute de permisos, llevan a sus ánimos el temor de represalias o perjuicios con la consiguiente depresión moral que les hace no sentirse plenamente asistidos por su retaguardia. También se conocen casos de liquidaciones muy atrasadas, sin tener en cuenta que el principal éxito de ese tan importante servicio social y de guerra, consiste en la puntualidad de los pagos a tanta familia necesitada⁴⁹⁰.

Ante esta situación, el ministerio ordenaba al Gobierno Civil que enviara a todas las juntas unas órdenes concretas para subsanar deficiencias, y que remitiera un informe al departamento sobre el estado general de la provincia con propuesta de medidas que, a juicio del gobernador civil, se pudieran adoptar para regularizarlo -lo que da a entender que el Gobierno no tenía muy claro cómo solucionar estos problemas-. La Comisión Provincial del Subsidio al Combatiente no hizo más que remitir circulares recordando las normas existentes (Órdenes de 9 junio y 20 agosto de 1937, y febrero de 1938), explicando a las comisiones locales lo que debían hacer. Fue muy expresiva la Circular de octubre de 1938:

La paciencia de esta Comisión tiene un límite, por lo que se recuerda por última vez a todas las comisiones locales que el plazo marcado para remitir el modelo 6, es del 1 al 5. Aquellas comisiones que no han conseguido hacer bien el modelo a pesar de las muchísimas instrucciones que se han dado de palabra a los interesados e instrucciones publicadas en el Boletín Oficial, etc. También se advierte que las que envíen mal confeccionadas se

⁴⁸⁶ BOP, 22 de noviembre de 1937. Cir. Gob. Civ.

⁴⁸⁷ BOP, 3 de febrero de 1939. Cir. Jefe Provincial del Servicio Nacional del Trigo.

⁴⁸⁸ BOP, 9 de octubre de 1939. Cir. Delegado Provincial de Abastos.

⁴⁸⁹ BOP, 31 de marzo de 1939. Cir. Gob. Civ.

⁴⁹⁰ BOP, 18 de febrero de 1938. Cir. Gob. Civ.

propondrán multas de cierta importancia, que pagarán los miembros de la comisión de su peculio particular. Tengan presente que tras 5 meses de consultas, aclaraciones, etc, todavía siguen muchas comisiones sin enterarse de cómo se deben llevar las cosas: Confunden los meses en las nóminas. No es posible que se encuentren en nuestro poder todas. Siempre faltan 15 o 20 por remitir; esto después de un mes de haber cobrado. Otras 7 u 8 las mandan sin sumar, sin terminar algunos, no sabemos de qué pueblo o de qué mes, y por último algunas no coinciden en absoluto las nóminas con las cantidades del padrón correspondiente. Todos estos errores y faltas deben ser corregidos en el próximo mes, de lo contrario me veré obligado a ejercer las atribuciones que me confiere la circular que ustedes conocen. Relación de pueblos con errores aludidos: 28 remitidos fuera de plazo el modelo 6, 32 no coinciden los datos, 19 vienen sin sumar y 19 son enviadas fuera de plazo. Jefe Provincial, Julio Sarmiento⁴⁹¹.

Hasta bien entrada la posguerra perduraron los incumplimientos de las administraciones locales, que ya hicieron mella en la Comisión Provincial de Subsidios al Combatiente. Ésta se quejaba amargamente de que las comisiones locales *“hacen caso omiso a cuantas órdenes se dan y publican, tanto en el BOP como en El Adelantado, y sí prestan atención a otras emanadas de organismos que nada tienen que intervenir con el Subsidio al combatiente y excombatiente y no estoy dispuesto a tolerar”*. Por lo que amenazaba con sanciones de 200 y 250 pts.⁴⁹²

Otra de las obligaciones de los alcaldes era abonar a los familiares de los reclusos las cantidades que, mediante el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, obtenían al trabajar en los destacamentos penales. En muchos ayuntamientos estos pagos sufrían gran retraso, lo que originó la queja de la Dirección General de Prisiones al gobernador civil de Segovia, y de éste a los alcaldes, a los que ordenó el mayor celo y rapidez⁴⁹³.

La propaganda del aparato del Gobierno estaba encaminada a conseguir la adhesión de la sociedad al régimen franquista, mediante la persuasión o, si ésta fallaba, por la coacción. Es decir, las multas y sanciones fueron utilizadas por la España de Franco en todos los terrenos de la vida cotidiana para hacer cumplir las múltiples normas que dictaba el Gobierno de Burgos.

La contribución de todos en la consolidación del régimen debía iniciarse en la propia administración del Nuevo Estado. En las instituciones se producía cierto absentismo laboral de algunos funcionarios, sin motivo justificado. Para evitarlo, el gobernador civil de Segovia dictó una circular en la que recordaba: *“para que el Glorioso Movimiento Militar nos lleve a una España nueva y digna, es indispensable que todos, absolutamente todos, cumplan con su obligación sin necesidad de coacciones, sino por el propio estímulo del deber”*, llamaba la atención de los interesados, amenazándoles con la destitución, pero también advertía a sus respectivos superiores jerárquicos -incluidos el jefe de la dependencia- que *“con estas tolerancias exterioriza su falta de celo y de entusiasmo por esta gesta heroica precursora de una era de paz y civismo de la que todos debemos hacernos dignos”*⁴⁹⁴.

Uno de los aspectos más importantes donde las autoridades pretendían implicar a todos los españoles era en las suscripciones nacionales, pues aparte del fin netamente recaudatorio –que abordamos en el capítulo 7- las suscripciones eran grandes vehículos propagandísticos a los que se impregnaba de toda la ideología del nuevo régimen: catolicismo y patriotismo, además de contribuir a crear cohesión, al participar toda la sociedad de la misma acción para conseguir un objetivo común. Pero, para que los resultados económicos fueran positivos, todas las suscripciones amparadas por el Estado

⁴⁹¹ BOP, 14 de octubre de 1938. Cir. Comisión Provincial de Subsidio al Combatiente.

⁴⁹² BOP, 8 de abril de 1940. Cir. Comisión Provincial de Subsidio al Combatiente.

⁴⁹³ BOP, 6 de marzo de 1939. Cir. Gob. Civ.

⁴⁹⁴ BOP, 12 de noviembre de 1936, Cir. Gob. Civ.

estaban animadas por las continuas amenazas y castigos que obligaban a los particulares a contribuir en la medida en que el Gobierno estimaba que debían hacerlo.

Así, fueron continuas las multas y sanciones, por ejemplo por no contribuir en la medida de sus posibilidades al Día del Plato Único. La primera lista se publicó en *El Adelantado* -el 23 de diciembre de 1936- con gran número de sancionados de distintos pueblos de la provincia⁴⁹⁵. Hubo otras multas por no contribuir “como es debido” al Plato Único los días 4 y 7 de enero de 1937. Pero el gobernador utilizaba las multas para sancionar otros comportamientos, como la multa a un almacenista carbonero por falta de peso en una entrega⁴⁹⁶, multas por infracciones de Abastos⁴⁹⁷, por no cumplir los requisitos de la Junta Provincial de Subsidio al Combatiente o de la Junta de Beneficencia⁴⁹⁸.

La Delegación de Trabajo reunía todos los trámites de relación entre patronos y obreros, tanto de oferta de colocaciones como de contratos de trabajo. Los agentes sociales que funcionaran ajenos al sistema oficial eran sancionados: por ejemplo con una multa de 500 pts. a un industrial por no hacer sus ofertas de trabajo a través de los “organismos de colocación”⁴⁹⁹; y a un industrial y un obrero, “por establecer entre ellos, una relación de trabajo al margen de la Oficina de Colocación”⁵⁰⁰.

La intervención del Estado en la producción agrícola y ganadera era total, desde el inicio de la guerra por las necesidades del Ejército; situación que se prolongó en la posguerra debido a la escasez generalizada de alimentos. El Servicio Nacional del Trigo ordenaba a cada cultivador de la provincia la entrega forzosa del 10% del total de cebada reservada para el consumo del ganado, bajo la amenaza de sanciones a los infractores y ampliando la responsabilidad igualmente para los alcaldes⁵⁰¹.

El mercado negro tan propio de etapas de escasez económica, se inició en la guerra y se desarrolló en la posguerra. En *El Adelantado* se publicaban los nombres de las personas que mercadeaban clandestinamente, especificando también las mercancías⁵⁰².

Las sanciones por cuestiones de acaparamientos, ocultaciones o uso indebido de productos agrícolas eran muy elevadas. La Sección de Segovia del Servicio Agronómico Nacional, impuso sanciones de 10.000 y 15.000 pts. a agricultores o almacenistas -si bien no especificaba a quienes sancionaba- por aplicar nitrato al terreno sin cumplir antes la legislación (O. M. de 1 de febrero de 1940). Los multados eran de Cantimpalos y Carbonero de Ahusín y una casa de Bilbao⁵⁰³.

Las denuncias privadas -y secretas- alcanzaban a todos los campos de la vida en retaguardia. También afectaban a los acaparamientos y ocultamientos de productos. De este modo llegaron al Gobierno Civil “*noticias confidenciales de personas dedicadas a negociar con el pienso para alimentar el ganado (...) olvidan los deberes que el patriotismo impone y las actuales circunstancias demandan, ocultando existencias u obtener pingües beneficios. Estoy dispuesto a cortar radicalmente las extralimitaciones, y advierto que he impartido las órdenes (...) para la incautación inmediata de los piensos en cuestión*”⁵⁰⁴.

⁴⁹⁵ Eran 83 sancionados de distintas localidades, entre las que destacaban los 36 vecinos de Villacastín, 13 de Valledado y 11 de El Espinar.

⁴⁹⁶ *El Adelantado*, 27 de enero de 1937.

⁴⁹⁷ *El Adelantado*, 19 de octubre de 1938.

⁴⁹⁸ *El Adelantado*, 12 de julio de 1939.

⁴⁹⁹ BOP, 8 de noviembre de 1939.

⁵⁰⁰ BOP, 29 de noviembre de 1939.

⁵⁰¹ BOP, 28 de febrero de 1939.

⁵⁰² *El Adelantado*, 1 de marzo de 1940.

⁵⁰³ BOP, 6 de marzo de 1940. Cir. Gob. Civ.

⁵⁰⁴ BOP, 7 de octubre de 1938.

SEGUNDA PARTE:
CONTROL SOCIOPOLÍTICO E IMPOSICIÓN
IDEOLÓGICA

4. IDEOLOGÍA Y OBJETIVOS DE LA REPRESIÓN

Antes de explicar todos los mecanismos de la violencia utilizados por los militares sublevados para, en primer lugar, eliminar la resistencia y posteriormente, definido el general Franco como jefe indiscutible, ganar la guerra y perpetuarse en el poder, es preciso exponer lo que entendemos por violencia política. Seguidamente estudiaremos las características de la represión franquista, su ideología y sus objetivos.

4. 1. La violencia política

Afortunadamente, un trabajo exhaustivo ha venido a llenar el vacío historiográfico del que se quejaba Aróstegui sobre los escasos estudios referentes al problema de la violencia política en la investigación social e histórica en España. González Calleja ha hecho una recopilación de las aproximaciones científicas al fenómeno de la violencia política, e *“identificado una serie de conceptos anejos que han sido definidos, analizados y testados por cada perspectiva teórica interesada en el estudio del conflicto”*⁵⁰⁵. En su obra intenta demostrar que la violencia no es un acontecimiento *anómico, excepcional o patológico* de la vida política, sino que, como todo comportamiento y relación social, *“obedece a unas motivaciones, sigue unas determinadas reglas de desarrollo y persigue unos fines concretos que, a su vez, son el complemento y la alternativa de la actividad política rutinaria”*⁵⁰⁶.

A la hora de definir la violencia política, Calleja afirma que *“no hay que reducir su definición exclusivamente a la aplicación de la fuerza, sino dirigir la atención hacia el contenido social e histórico de la violencia, su orientación política y sus objetivos”*. Para él, la violencia política es *“el empleo consciente (aunque no siempre deliberado o premeditado), o la amenaza del uso, de la fuerza física por parte de individuos, entidades, grupos o partidos que buscan el control de los espacios de poder político, la manipulación de las decisiones en todas o parte de las instancias de gobierno, y en última instancia, la conquista, la conservación o la reforma del Estado”*. Abarca, por tanto, desde los llamamientos intelectuales hasta la violencia física siempre que cumplan dos requisitos: *“manifiesten intencionalidad y se dirijan a influir en el campo de la estructura política (...) engloba tanto las actitudes de ofensa al sistema como de defensa del mismo, a través de la coerción legal o ilegal y el estado de excepción”*⁵⁰⁷.

Estas teorías vienen a profundizar los estudios de Aróstegui -pionero en la investigación sobre la conceptualización de la violencia política-, quien había aportado una primera definición de la violencia como *“toda resolución, o intento de resolución, por medios no consensuados de una situación de conflicto entre partes enfrentadas, lo que comporta esencialmente una acción de imposición, que puede efectuarse, o no, con presencia manifiesta de fuerza física. Violencia entendida como situación social, con, como mínimo dos actores”*⁵⁰⁸.

⁵⁰⁵ GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo. *La violencia en política*. Madrid, CSIC, (en imprenta). Continúa su razonamiento explicando en sus conclusiones:

Sin embargo el objetivo final de todas ellas, que ha sido desarrollar una teoría general de la violencia, está aún lejos de alcanzarse. Las numerosas y contradictorias definiciones de la violencia política –y de la violencia *tout court*– revelan que buena parte de las contribuciones a este debate se han superpuesto unas a otras antes que contribuir a un proceso ordenado y acumulativo de avance del conocimiento sobre la materia. Caben fundadas sospechas de que las diferentes teorías estén abocadas a incidir sobre unos tipos determinados de violencia colectiva (en general, la violencia subversiva) con preferencia a otros (la violencia estatal)... La mayor parte de las interpretaciones sobre la cuestión siguen estando inspiradas de modo más o menos directo en los grandes clásicos de la teoría social y política: Hobbes, Tocqueville, Marx, Durkheim, Weber, Parsons, etc.

⁵⁰⁶ Ver nota anterior.

⁵⁰⁷ Ver nota anterior.

⁵⁰⁸ ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio. *Violencia y política en España*. En *AYER*, nº 13, 1994, pág. 30.

Las consideraciones que siguen se basan fundamentalmente en la obra citada de González Calleja. La violencia política puede tener origen estructural, pero sólo en el sentido de que se pretenda con ella resolver conflictos estructurales. No obstante, ni la desigualdad, ni la injusticia, ni la lucha de clases son, por sí mismas, episodios de violencia. La clave de la definición es la imposición coercitiva de una de las partes en conflicto sobre la otra.

Se habla de violencia política en situaciones de partida desiguales, en las que se disputa sobre el “orden social”, el “poder”, los “derechos”. Violencia que se deriva de los conflictos entre gobernantes y gobernados, entre dominadores y dominados, entre clases. Siempre es vertical, pero con doble dirección, es decir de arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Durante las primeras décadas del siglo XX se desarrollaron diversas ideologías de la violencia; es decir, se creó una ideología en la que la violencia formaba parte importante de la estrategia política: el anarquismo, el sindicalismo revolucionario de Georges Sorel o el fascismo de D’Annunzio. Estas ideologizaciones marcaban y definían un uso político de la violencia, la prescribían como parte de la actividad política; y además justificaban esa utilización de la violencia como algo necesario y recomendable, reafirmando públicamente.

La utilización de la violencia se hizo a través de la instrumentalización: creando una serie de mecanismos para recoger, administrar, dirigir, ejecutar la violencia. En la crisis europea de entreguerras se instrumentalizó la violencia como recurso para el cambio social o para el cambio de titularidad en el poder. Fue clave de doctrinas de la actuación política como la fascista. En este momento tuvo su origen la “paramilitarización” de la política, puesta en práctica, por ejemplo, por la Falange a través de su “dialéctica de los puños y las pistolas”.

Muy relacionado con la violencia política está el término **represión**. Marx sería el primer autor que utilizó este concepto, siempre en un sentido político y considerándolo como atributo de un poder al servicio de la burguesía. La represión se ligaba al aparato estatal, también como producto de la intensificación de los antagonismos de clase, y era la manifestación de un poder del Estado que tomaba cada vez más carácter de un poder público organizado con fines de esclavitud social.

Precisando más, se llama represión política a la acción violenta explícita que se dirige a mantener en el poder un tipo de régimen o una forma de aparato de poder. La represión es ejercida por un grupo -generalmente el que detenta el poder- y no por la sociedad entera. La represión ataca los derechos a la integridad personal y es desplegada por gobiernos, organizaciones internacionales o grupos profesionales, es decir por aquellas instituciones dotadas de autoridad legítima o *de facto* y de medios coercitivos para hacer respetar esa autoridad como parte de un ordenamiento legal en vigor. Algunos autores creen que la represión política se ejerce en el marco de la ilegalidad si el delito sancionado no es conforme a la realidad de los hechos, o no prevenido por la ley. Puede ejercerse igualmente en el marco de una legalidad ilegítima si el delito sancionado está conforme a la ley pero en formas políticas de exclusión de la soberanía popular y poniendo en cuestión la legitimidad de su promulgar. Claro ejemplo de legalidad ilegítima es el régimen franquista durante las cuatro décadas de su existencia, pues su legitimidad procedía de la victoria en una guerra civil originada por una sublevación militar en contra de la legalidad democrática de la II República.

La coerción es multifacética: puede ser física (detenciones, ejecuciones, torturas) o no (psicológica, espiritual, intelectual); pública (oficial) o privada; individual o colectiva; oficial (realizada por los órganos estatales especializados en la violencia) o extraoficial; abierta o encubierta; legítima o ilegítima; positiva o negativa; formal o informal, etc. Para Ucelay, la represión es toda actividad institucional que “*tiende a cohibir los comportamientos colectivos*”⁵⁰⁹. Entendida como principio universal de dominio, la coerción

⁵⁰⁹ Citado por GONZÁLEZ CALLEJA, E. op. cit., pág. 234.

no es necesaria para asegurar la conformidad de los miembros de una sociedad a las normas que la rigen, sino para que una mayoría, a voluntad propia y de forma continua, cumpla con unos preceptos que ella misma sostiene. Por ello, en su grado de menor visibilidad, aparece vinculada con fenómenos como el control social y la violencia subliminal o “estructural”. Entendiendo el control social como la capacidad de una sociedad para autorregularse de acuerdo con sus propios principios y valores. Barrington Moore afirma que el control social implica un elemento de represión consciente o inconsciente. El control social engloba los mecanismos institucionales con los que la sociedad regula la conducta individual y el modo en que esta conducta estandarizada sirve para mantener la organización.

A lo largo de la Historia, el Estado siempre ha perseguido la normalización de las actitudes contestatarias y su canalización a través de normas, pero, al contrario que en el sistema del Antiguo Régimen, la represión del Estado liberal burgués *“ya no es brutal y retroactiva, sino predictiva, preventiva y selectiva, destinada en la mayor parte de los casos a canalizar, y no a yugular, la acción colectiva popular”*⁵¹⁰.

4. 1. 1. La violencia política en la crisis de los años treinta

Estas consideraciones genéricas y muy breves sobre las particularidades de la violencia política desde el punto de vista de la acción impositiva del Estado, son de gran utilidad para encuadrar el problema concreto de los aspectos represivos de la implantación del régimen de Franco. La violencia política no resolvió en España el conflicto estructural por ninguna de las vías experimentadas en la Europa coetánea, como ocurrió en Alemania e Italia con la opción fascista. Este fracaso apareció en la época como algo anormal. Como explica Aróstegui:

La insurrección instrumentada por las fracciones oligárquicas del viejo bloque histórico, desplazadas del poder político, mediante la fuerza militar convencional, no tuvo como resultado inmediato el dominio del Estado. La discusión del sistema social desembocaría en guerra civil. Ni la revolución proletaria, ni un proceso de fascistización que hubiera afectado a un mayor espectro social, se mostraron en España como trayectorias capaces de establecer una estructura de dominación distinta⁵¹¹.

Si se acepta esto, queda sin fundamento cualquier explicación o legitimación del enfrentamiento armado como consecuencia de una continua presencia de violencia en la España de la crisis de los años treinta, tal y como intentan justificar ciertos autores españoles y extranjeros, como Gerard Brenan. No obstante, desde el inicio de la crisis, en 1917, la violencia fue un factor primordial en el intento de perpetuar un sistema de dominación social y una correlación de fuerzas políticas, claramente insostenibles sin aquélla. Se ejerció la violencia desde el bloque hegemónico de poder a través del Ejército.

En los años treinta se profundizó el conflicto social, al que se añadió una crisis económica y la resistencia de los propietarios a cualquier tipo de cambio. Las dos partes principales del conflicto: bloque conservador y bloque obrero/revolucionario (en sus vertientes marxista o anarquista), aunque no eran los únicos, rechazaban el sistema parlamentario como lugar adecuado para solucionarlo. Las corrientes antidemocráticas afectaron por igual a ambos bloques. La primera confrontación de gravedad, octubre de 1934, estuvo precedida de una radicalización obrera, pero igualmente de las clases dominantes. Y ambas seguían a la experiencia reformista de Manuel Azaña, basada en

⁵¹⁰ GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., pág. 233.

⁵¹¹ ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J. en GARCÍA DELGADO, J. L. *España, 1896-1936: Estructuras y cambio*. Madrid, 1984, pág. 314.

una alianza entre republicanos -representantes de la burguesía progresista- y socialistas -representantes del sector obrero reformista-.

En estos momentos entró en juego la demagogia revolucionaria, que tuvo un notable impacto, pues a veces se canalizaba también a través de la manipulación que de aquélla hacía su contraria, la demagogia contrarrevolucionaria. La reacción española emprendió entonces el más feroz de los ataques verbales contra el supuesto peligro de la revolución del proletariado. Además, la derrota electoral en febrero de la burguesía oligárquica española aceleró, sin duda, el proceso de su fascistización, inoperante hasta entonces, al manifestarse como impotente -se dirá- la vía legal del “accidentalismo” de Gil Robles.

En la primavera de 1936 la oligarquía tradicional rechazaba y temía no ya la revolución, sino el simple contenido del reformismo republicano. Se resistía a cualquier evolución modernizadora de las estructuras económicas básicas, de las fuentes de acumulación capitalista; el más mínimo retoque de las arcaicas estructuras agrarias de la propiedad; rechazaba ceder una mínima parcela de los resortes de poder ideológico, modernizar las estructuras del Estado por medio de las autonomías, o hacer de su brazo armado, el Ejército, una institución que no estuviera al servicio de intereses sectoriales. Desde febrero de 1936 el gran obstáculo para la profundización de la experiencia liberal-demócrata en España lo constituían las fuerzas conservadoras, núcleo duro de la vieja oligarquía restauracionista, y en modo alguno el revolucionarismo del movimiento obrero.

El conflicto estaba centrado en la oposición entre reacción y reformismo. El proletariado revolucionario no se encontraba en condiciones de intentar a corto plazo una nueva experiencia insurreccional, ni siquiera existían planes concretos para ello. La existencia misma del Frente Popular era una prueba de la apuesta política de la mayor parte del proletariado, todavía muy viva la brecha entre bolchevización, anarquismo y reformismo parlamentario. Fue el triunfo del Frente Popular el que espoleó de inmediato a la derecha hacia la instrumentalización de la insurrección y no los acontecimientos de los meses posteriores en su continua derivación hacia la violencia. El papel mitológico que antes había desempeñado el fascismo, ahora lo desempeñaba el comunismo. Pero el objetivo que combatían los reaccionarios era mucho más cercano, era el reformismo.

En el bienio 1933/34 estaba en el poder una burguesía oligárquica de tendencia fascista. Pero en 1936 el poder estaba en manos de una burguesía republicana cuya debilidad para emprender reformas se ha tenido, precisamente, como uno de los factores de agudización del conflicto. En 1934 la ola de fascistización en Europa era real; en 1936 no existía un avance comparable en las expectativas de las fuerzas comunistas, sino un reforzamiento, mediante los Frentes Populares, de la lucha de burguesía y proletariado frente al fascismo. En 1936 la evidente radicalización que experimentó el proletariado desde 1934 no poseía los resortes precisos para emprender una transformación profunda.

Las fuerzas oligárquicas españolas, habiendo fracasado en España el proceso de fascistización (que era la única posibilidad aglutinadora entre los diversos sectores de la derecha española), entendieron bien que no era posible la destrucción de la democracia mediante una movilización de masas. Las organizaciones paramilitares, falangistas y requetés, fortalecidas desde febrero de 1936, no reunían las condiciones necesarias para hacer triunfar una insurrección por sí solas, sin ayuda de nadie. La derecha reaccionaria no creía en la democracia, por lo que no tenía alternativas dentro del sistema parlamentario. La única posibilidad de asalto al poder por el bloque reaccionario era el Ejército. Ya se había demostrado en 1923 con Primo de Rivera, y ensayado posteriormente en 1932 con Sanjurjo. A esta institución se dirigieron de nuevo las miras de la oligarquía tradicional.

El clima político de la derecha durante la primavera del 36 lo describe acertadamente Dionisio Ridruejo en sus memorias:

se respiraba un ambiente exasperado de renuncia a la acción civil ordinaria y que sólo se pensaba en la intervención del Ejército. (...) Sin duda, en aquella primavera se conspiraba en los cuartos de banderas, pero no tanto ni con tanta prisa como la aristocracia, la alta

burguesía y la clase media tradicional deseaban. (...) Cuando a veces se escribe sobre la decisión militar -nada unánime, por otra parte- del 18 de julio, se suele desestimar el tremendo acoso que las fuerzas armadas sufrían por parte de un sector de la población que había perdido tanto el valor civil como la imaginación y la paciencia para capear el temporal con recursos más racionales. Nadie pensaba que se produciría nunca una nueva ocasión legal (electoral) de cambio político y, lo que era más grave, casi nadie lo deseaba⁵¹².

La guerra civil demostró la ineficacia de la vía insurreccional en ese momento, puesto que la sublevación fracasó al estrellarse con la fuerte oposición de otro sector del propio Ejército y las masas trabajadoras aliadas con la burguesía progresista. Al no triunfar el movimiento insurrecto, ni ser éste sofocado completamente, se desencadenó la guerra civil. En suma, fracasó la vía insurreccional como solución al conflicto social, pues ninguno de los grupos enfrentados logró imponerse al otro por esta vía.

4. 2. La legitimación de la sublevación militar

Las condiciones políticas en las que se hizo el levantamiento del verano de 1936 obligaron, desde el comienzo mismo de la acción, a elaborar una legitimación de todo orden para el hecho insurreccional. En este sentido afirma Reig Tapia que *“la guerra viene determinada por una sublevación militar y la resistencia que a la misma opone una parte considerable de la población. Los vencedores de la guerra y sus herederos ideológicos se empeñan en presentar dicha sublevación, que abre paso a la guerra, como “necesaria” e ‘inevitable’ dada la situación del país. De esta ‘justificación’ ideológica se derivan las demás: la guerra misma y la “necesaria” o ‘incontrolable’ represión”*⁵¹³.

La primera legitimación de la violencia durante la guerra se dio con la legitimación misma de la sublevación, de la que derivó la justificación de la *necesaria, imprescindible e irremediable* represión ejercida durante la contienda provocada por el alzamiento militar. Los principios ideológicos con que pretendían legitimar su insurrección los sublevados estarían fundamentados por las formulaciones que tratamos a continuación.

4. 2. 1. El restablecimiento del orden social amenazado

El objetivo de la sublevación militar se resumía claramente en los *Resultandos* de las sentencias de los innumerables consejos de guerra: *“El 18 de julio por el Ejército de Marruecos, secundado por la mayoría de guarniciones de la península, se inició un movimiento, de carácter nacional, con el fin de evitar que España continuara por el rumbo anárquico que a partir del 16 de febrero se había iniciado”*⁵¹⁴. Por tanto, un primer motivo sería *enderezar el rumbo* de España.

La razón de ser de los sublevados se explicaba claramente en las *Bases Técnicas del Movimiento*, redactadas por el general Mola. En la introducción se exponía que

Las circunstancias gravísimas por que atraviesa la Nación, debido a un pacto electoral que ha tenido como consecuencia inmediata que el Gobierno sea hecho prisionero de las organizaciones revolucionarias, llevan fatalmente a España a una situación caótica que no existe otro medio de evitar que mediante la acción violenta. Para ello los elementos amantes

⁵¹² RIDRUEJO, D., op. cit., pág. 50.

⁵¹³ REIG TAPIA, A. *Ideología e historia: sobre la represión franquista y la guerra civil*. Akal, Madrid, 1986, pág. 14.

⁵¹⁴ Causa 664/36, contra Lorenzo Grande Gómez y 25 más. En Exp. nº 1651, Pedro Valdenebro, Arch. Pris. Prov. Pamplona, Fuerte S. Cristóbal. El subrayado es mío. En los *Resultandos* los jueces militares explicaban los fundamentos de “su legitimidad” para hacerse cargo del poder civil.

de la Patria tienen forzosamente que organizarse para la rebeldía con el objeto de conquistar el Poder e imponer desde él el orden, la paz y la justicia⁵¹⁵.

Franco ratificaba en una de sus primeras proclamas que *“el movimiento nacional, español, republicano, salvará a España del caos en que pretendía hundirla”*⁵¹⁶. Objetivo confirmado por Queipo quien creía había que *“...restablecer el orden subrectado (sic) por la intromisión de poderes extranjeros...”*⁵¹⁷.

El orden social que pretendían defender era el basado en los principios conservadores de autoridad, propiedad y religión. Los que el obispo de Segovia, Luciano Pérez Platero venía a llamar *“supremos intereses”*, que para el prelado eran *“religión, familia, patria, libertad, justicia, paz”*⁵¹⁸. Para la Iglesia no había otro medio de solucionar los problemas de la nación que la guerra, aun siendo ésta *“uno de los azotes más tremendos de la humanidad, es a veces el remedio heroico, único, para centrar las cosas en el quicio de la justicia y volverlas al reinado de la paz”*; pues *“agotados ya los medios legales, no había más recurso que el de la fuerza para sostener el orden y la paz”*⁵¹⁹.

A la sublevación iniciada por los militares insurgentes se sumaron con fervor sectores conservadores compuestos por terratenientes, burgueses, propietarios, “hombres de bien”, quienes, como apunta Casanova, *“se distanciaron definitivamente de la defensa de su orden mediante la ley porque ‘rota la paz social’ eso era ya imposible, como no se cansaban de repetir en la primavera de 1936. Los representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid pedían, en junio de 1936, el urgente restablecimiento del principio de autoridad”*⁵²⁰.

El diputado conservador Cano de Rueda se adhirió plenamente a la sublevación militar en la primera oportunidad que se le ofreció desde su periódico (*El Adelantado*), el 27 de julio. Justificaba la insurrección, precisamente por el restablecimiento del orden social tradicional, escribiendo *“... las más altas jerarquías del Ejército al iniciar la reconquista de la paz de España, alterada esencial y extensamente por los elementos del FP en que se fundieron ¡oh paradoja! hombres de la clase media emparejados con socialistas y comunistas (...) con propósito de destruir la base en que se apoya el grado más elevado de civilización creada históricamente, por la variedad de matices que produce la originaria desigualdad humana”*. Para Cano de Rueda la revolución marxista era *“contraria a la influencia de la ley natural que (...) no reconoce otros privilegios que los de la inteligencia, ha sido, es y será el conductor de la civilización alcanzada en 20 siglos”*⁵²¹.

Desde *La Ciudad y los Campos*, dirigido por el también diputado de la derecha, Juan de Contreras, se apoyaba fervientemente la rebelión militar. En el primer número publicado en guerra, el 8 de agosto de 1936, se justificaba la necesidad de la acción de los sublevados para reconducir el rumbo emprendido por el Gobierno frentepopulista, *“...ha sido inevitable desencadenar una verdadera tempestad para sacudir la nave odiosa del marxismo que se había entronizado (...) y pretendía llevar a remolque de ella toda una civilización idiosincrásica, todo un espíritu racial imperecedero...”*⁵²².

Los rebeldes, hacía decir Azaña a un personaje de *La Velada de Benicarló*, pretendían restaurar el principio de autoridad atribuyéndose la potestad de disponer de la

⁵¹⁵ BERTRAND GÜELL, F., op. cit., pág. 119.

⁵¹⁶ ABC, Sevilla, 24 de julio de 1936.

⁵¹⁷ ABC, Sevilla, 22 de julio de 1936.

⁵¹⁸ BOOS, nº 15, 14 de agosto de 1936.

⁵¹⁹ BOOS, nº 15, 16 de agosto de 1937. Carta colectiva de todos los obispos españoles ante la guerra, págs. 258-285.

⁵²⁰ JULIÁ, Santos, coordinador, Julián CASANOVA, Josep M. SOLÉ I SABATÉ, Joan VILARROYA y Francisco MORENO. *Víctimas de la guerra civil*. Temas de hoy, Historia, Madrid, 1999, pág. 82.

⁵²¹ *El Adelantado*, 27 de julio de 1936. Como ya se ha explicado, *El Adelantado* reapareció el 27 de julio, tras ocho días sin publicarse por la huelga de tipógrafos contra la sublevación militar.

⁵²² El semanario *La Ciudad y los Campos*, que salía a la calle los domingos, no se publicó ni el 25 de julio, ni el 1 de agosto, también por causa de la huelga de tipógrafos.

vida de los súbditos: *“Cuántas más gentes matemos, mayor será nuestra autoridad”*⁵²³. Franco mismo dijo a un periodista americano que no dudaría en fusilar a media España si tal fuera el precio de pagar para pacificarla. Ese sentido puede tener el ametrallamiento de cuatro mil trabajadores en la plaza de toros de Badajoz, *“Matar campesinos era la prueba irrefutable del restablecimiento del orden”*⁵²⁴. Había una facción militar que se había sublevado y estaba decidida a imponer la disciplina por medio de una represión indiscriminada.

Se trataba, una vez más, de utilizar la violencia para solucionar los conflictos sociales, como se venía haciendo a lo largo de la Historia reciente de España. Desde el siglo XIX, cuando surgía un conflicto social originado por las reivindicaciones de obreros o campesinos, se empleaba al Ejército o a la Guardia Civil para imponer el orden por la fuerza, acallando de esta manera las protestas de los trabajadores. Según opinaba Gil Robles,

el Ejército fue obligado a convertir sus intervenciones esporádicas para defender el orden público en una acción política permanente. Poco a poco la solicitud de grandes intereses, en sus apelaciones sistemáticas al ejército para consolidar unas posiciones privilegiadas, y la tendencia de la masa inerte de la nación a rehuir sus responsabilidades políticas y vegetar al amparo de la fuerza, le fueron apartando del cumplimiento de su misión profesional específica, para convertirlo en el eje de la vida del país⁵²⁵.

Con dicha afirmación, Gil Robles parecía autoexculparse de esa utilización del Ejército con fines partidistas; cuando hay autores que, precisamente, señalan al líder de la CEDA como uno de los responsables de esta tendencia. Ballbé piensa que la actuación del propio Gil Robles desde el Ministerio de Guerra iba en esta línea, y no se dedicó a *“la defensa nacional contra el enemigo exterior, sino como guardián del orden público, siendo el primero en la búsqueda del enemigo interior”*⁵²⁶.

El principio de autoridad en el sentido más reaccionario empezó a restaurarse con la declaración del estado de guerra. La huelga que quiso combatir la sublevación fue reprimida duramente. Ésta era otra de las premisas de las *Bases Técnicas*: *“serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”*⁵²⁷.

4. 2. 2. La abolición de la democracia parlamentaria. El desalojo del poder del adversario

Para el restablecimiento de este supuesto orden social, existía un presupuesto imprescindible que era el de la abolición de cualquier sistema de poder democrático. El coronel de caballería Marcelino Gavián Almuzara, gobernador civil de Burgos, decía que había que *“echar al carajo toda esa monserga de los Derechos del Hombre, el Humanitarismo, la Filantropía y demás tópicos masónicos”*⁵²⁸.

Parecía que, inicialmente, el fin declarado por los sublevados era el cambio de gobierno manteniendo el régimen republicano. Al menos eso era lo que expresaban públicamente las cabezas visibles de la insurrección. En los primeros bandos tras la sublevación, los generales Franco y Queipo declaraban su oposición al Gobierno del

⁵²³ Citado por JULIÁ, S., op. cit., pág. 25.

⁵²⁴ Citado por REIG TAPIA, A., op. cit., pág. 25.

⁵²⁵ GIL ROBLES, J. M. *No fue posible la paz*. Barcelona, 1968, pág. 227.

⁵²⁶ BALLBÉ, M. *Militarismo y orden público en la España contemporánea*. Alianza Editorial, Madrid, 1985, pág. 380.

⁵²⁷ BERTRAND GÜELL, Felipe., op. cit., pág. 123. Base 5ª.

⁵²⁸ IRIBARREN, José María. *Con el general Mola: Escenas y aspectos inéditos de la guerra*. Editado por Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1937, pág. 211.

Frente Popular, pero respetando la forma de estado republicana. De hecho, las primeras declaraciones de ambos jefes militares finalizaban con un ¡Viva la República!⁵²⁹.

El 21 de julio de 1936 decía Queipo a un periodista que lo entrevistó en su despacho de la capitanía general de Sevilla: *“Ante todo diga usted que el movimiento es netamente republicano, de lealtad absoluta y decidida al régimen, que un movimiento de opinión legalmente expresado en unas elecciones generales, que fueron sinceras, dió al país el año 1931”*⁵³⁰.

El cardenal Gomá, ya en 1937, todavía respaldaba esta opinión del movimiento militar encaminado sólo a cambiar al Gobierno del Frente Popular, manteniendo la forma de estado republicana: *“...aún no ha aparecido nadie que se haya alzado contra el régimen, que sigue siendo en sustancia el que el pueblo se dió”*⁵³¹. Pero parece evidente que ya en 1937 el nuevo régimen de Burgos no tenía nada que ver con el régimen democrático republicano. Era dirigido por la Junta Técnica del Estado, integrada exclusivamente por militares y habían desaparecido de la zona bajo su dominio los derechos y libertades básicos.

Para conseguir el desalojo del poder de republicanos e izquierdistas, los militares sublevados emplearon a fondo la represión. Ésta tenía, en principio, carácter selectivo: autoridades, políticos y dirigentes, personajes públicos, pues estaba dirigida a expulsar de todos los campos del poder a los adversarios políticos: republicanos y de izquierda. Gobernadores civiles, diputados provinciales, alcaldes, concejales, líderes obreros, etc. según Casanova, *“no eran asesinados para dar un escarmiento ejemplar, para que se enteraran sus seguidores, sino para arrebatárles el poder, para echar abajo el modelo de sociedad y el sistema de libertades que defendían. Queipo decía en noviembre de 1936 que España no podía reconstruirse mientras no se barriera a escobazos a toda la canalla política”*⁵³².

En la provincia de Segovia no se puede descartar el objetivo del “escarmiento ejemplar”, puesto que la represión no fue exclusivamente selectiva: no todos los ejecutados durante los primeros momentos eran personajes públicos. De hecho, las primeras víctimas de la capital eran jóvenes militantes de base de la JSU, no eran dirigentes. En algunos lugares fusilaron a personas no destacadas, actuando como si los rebeldes sintieran la necesidad de eliminar a alguna persona en cada lugar con claros fines ejemplarizantes. Así, en Nieva los falangistas no se pudieron llevar a los hombres que pretendían porque resultaron ser conocidos precisamente de uno de los miembros de la escuadra y “sacaron” a otro infortunado que no estaba previsto inicialmente, aunque era miembro de la Gestora Municipal por Unión Republicana⁵³³. En Fuente el Olmo de Fuentidueña, los camisas azules querían actuar, vengarse, ejecutar a alguien pero los vecinos del pueblo no quisieron y no hubo muertes. A Los Valles de Fuentidueña llegaron falangistas de Peñafiel para llevarse al maestro, pero le defendieron los vecinos del pueblo impidiendo que fuera sacado. En Navas de Oro, Afrodisio Bartolomé piensa que los falangistas que ejecutaron a cinco vecinos del pueblo, *“no vinieron expresamente a por ellos, no a por personas determinadas, pero sí venían a ejecutar”*⁵³⁴.

Pero, dicho lo anterior, no hay que olvidar que entre las primeras víctimas, aunque no exclusivamente, se encontraban alcaldes, concejales, dirigentes de las Casas del Pueblo, maestros, es decir, personajes conocidos por su ideología republicana o de izquierda e influyentes por el cargo público o la profesión que desempeñaban.

⁵²⁹ ABC, Sevilla, 20 y 22 de julio de 1936.

⁵³⁰ ABC, Sevilla, 22 de julio de 1936.

⁵³¹ BOOS, nº 3, 15 de febrero de 1937. Carta de contestación del cardenal Primado Gomá, a un discurso de 22 de diciembre de 1936, de J. A. Aguirre, presidente del Gobierno de Euzkadi, (en el periódico *Euzkadi*, de Bilbao nº 7.485).

⁵³² CASANOVA, J., en JULIÁ, S., op. cit., pág. 86.

⁵³³ Testimonio de Segundo Olalla.

⁵³⁴ Testimonio de Afrodisio Bartolomé Aceves.

Como dice Casanova “los militares rebeldes y sus aliados, los que habían perdido los puestos políticos en febrero de 1936, tuvieron que emplearse a fondo en esa limpieza, cortando en mil pedazos las redes sociales que republicanos, intelectuales, socialistas y libertarios habían establecido en pueblos y ciudades, en medios periodísticos y de difusión cultural, en casas del pueblo y ateneos, en asociaciones y sindicatos”⁵³⁵.

La cultura progresista, republicana y de izquierda tenía su asiento en la prensa de Segovia: el semanario de información general *Heraldo Segoviano* y la publicación profesional de los trabajadores de enseñanza *Magisterio Segoviano*. En la imprenta de Carlos Martín se imprimían estas publicaciones y todas las que surgían más esporádicamente de tendencia progresista. Además de la cultura impresa, como hemos apuntado, en las organizaciones políticas de izquierda había una gran preocupación por la educación de los obreros: tanto la asociación estudiantil de izquierda FUE, como las Casas del Pueblo y la Universidad Popular preparaban clases nocturnas y conferencias para jóvenes y adultos. Estas actividades fueron suprimidas con la ilegalización de dichas organizaciones.

4. 3. Los fundamentos ideológicos de la represión franquista

Hay una serie de principios teóricos que entendemos como fundamentos ideológicos de la represión franquista: la represión de clase, la extirpación de “los males de la patria”, el exterminio del oponente y la oportunidad de la venganza, los que pasamos a desarrollar.

4. 3. 1. La represión de clase

Son varios los autores que hablan de la guerra civil española como una guerra de clases (Orwell, Berneri, Tuñón de Lara, Brenan), y consecuentemente la represión consiguiente será de igual manera represión de clase. En la zona insurgente la represión era ejercida generalmente por la clase propietaria sobre la clase trabajadora y campesina, a través de su brazo armado: Ejército, Guardia Civil y milicias nacionales; Jackson hace un acertado análisis de este aspecto exponiendo que

la virulencia de la purga en la España insurgente no puede ser explicada por las leyes de la guerra (...) Los insurgentes españoles luchaban para preservar los privilegios tradicionales del Ejército, la Iglesia y los terratenientes, grupos que habían vivido bajo una terrible tensión y miedo por los cinco años de dominación republicana. Tras la Revolución de Asturias, se vio frustrado su deseo de una represión que acabara de una vez por todas con la izquierda liberal, marxista y anarquista. La sublevación militar del 18 de julio les parecía la última oportunidad de preservar una España en la que sus privilegios pudieran estar más seguros. No hay clase de seres humanos más crueles que una clase dominante amenazada, que se cree una élite natural desde el punto de vista histórico, económico y cultural, y que se siente desafiada por una masa obstinada que ya no reconoce sus privilegios⁵³⁶.

Ahonda en este aspecto Casanova, para el que

la represión durante la guerra es el reflejo de la oposición y el enfrentamiento entre dos mundos, de los desequilibrios socioeconómicos y culturales entre los que algo o mucho poseían y quienes poco o nada tenían, entre los que habían tenido posibilidades de acceder a la cultura y los analfabetos, con todos los matices y excepciones que se quiera. Es el reflejo

⁵³⁵ CASANOVA, J. en JULIÁ, S., op. cit., pág. 176.

⁵³⁶ JACKSON, Gabriel. *La República y la Guerra Civil*. Orbis, Barcelona, 1985, pág. 272.

en definitiva, de una represión de clase, desde arriba hacia abajo, acompañada y reforzada por la persecución política⁵³⁷.

Una de las primeras medidas tomadas por los militares insurgentes fue la abolición del derecho a la huelga, lo que, por otro lado, ya estaba previsto en las *Bases Técnicas*. Debido a la inicial diversidad de poderes en el campo sublevado hubo distintos criterios en cuanto a las sanciones por los “nuevos delitos”. Los castigos iban desde la destitución o cese de los empleados en huelga (Bando del Comandante Militar de Segovia de 27 de julio) a la pena de muerte para los dirigentes sindicales del sector declarado en huelga (Bando de Queipo de Llano de 18 julio), pasando por ser considerados rebeldes y por tanto procesados como tales (Bando de la Junta de Defensa Nacional de 28 de julio). El objetivo no era sólo reprimir la huelga: había llegado la hora de saldar cuentas con los sectores más combativos en las luchas sociales. Para ello se contaba con la colaboración de muchos de los patronos, que denunciaron a sus propios trabajadores.

La represión repercutió especialmente en los barrios y localidades obreras de tradición izquierdista, donde mayor votación había obtenido el Frente Popular en las elecciones de 1936. Así ocurrió, por ejemplo, en el barrio de San Lorenzo de Segovia - mayoritariamente socialista- donde hubo al menos 5 vecinos (concretamente obreros) fusilados sólo en agosto de 1936. Pero la represión también incidió en los barrios burgueses de la capital, donde afectó a profesionales liberales e intelectuales, castigados por su compromiso con las ideas y proyectos republicanos. En Segovia murieron 3 maestros, un abogado, un teniente de la guardia civil retirado, dos funcionarios de Correos, un funcionario municipal...

Al hacer un análisis social de la represión obtenemos como resultado que en una España arcaica las clases y las castas tradicionalmente dominantes se vengaron del miedo que habían padecido, con los métodos que empleaban en el pasado, aunque extendidos a las dimensiones de todo un país y todo un pueblo, y no sólo circunscritos a una región o a una explotación agrícola (por ejemplo, cuando el propietario castigaba de un modo ejemplar a un jornalero que trabajaba para él). Azaña escribía sobre la crueldad de la represión franquista aduciendo que era el “odio de los soberbios poco dispuestos a soportar la ‘insolencia’ de los humildes”⁵³⁸.

Para la represión en zonas rurales, Preston aporta como catalizador la actuación de las derechas y de los derechistas en el campo durante el segundo semestre de 1935, lo que, para el autor, “fue uno de los principales determinantes del odio de la guerra civil, y probablemente de la guerra civil misma”⁵³⁹. Aunque Segovia no se vio muy afectada ni por la reforma agraria ni por su contrarreforma, al ser una provincia eminentemente agrícola, contaba con gran número de jornaleros, afiliados en su mayoría a Trabajadores de la Tierra.

La represión fue especialmente dura en el mundo rural, donde las intensas relaciones personales propiciaron el afloramiento de viejos litigios, riñas familiares y pasionales, se mezclaron con el odio político y de clase, con la sed de venganza de unos propietarios asustados por las amenazas populares, que señalaban con el dedo a jornaleros y campesinos “revoltosos” para que grupos militares y paramilitares armados, reclutados en ocasiones entre sus hijos, señoritos y estudiantes, hicieran el trabajo sucio. En Segovia existen varios ejemplos de jovencitos hijos de cacique (Navas de Oro), de secretario (Cantalejo), de abogado (Sepúlveda), de veterinario (Zarzuela del Monte) etc., como destacados falangistas que ejercían la represión.

En Navas de Oro, en las oficinas de la fábrica del cacique local, Basilio Mesa, cercanas al puesto de la guardia civil, se decidía la suerte de los obreros vecinos del

⁵³⁷ CASANOVA, J. en JULIÁ, S., op. cit., pág. 103.

⁵³⁸ Citado por THOMAS, H. *La guerra civil de España*. Grijalbo, Barcelona, 1981, pág. 307.

⁵³⁹ PRESTON, P. *La destrucción de la democracia en España*. Turner, Madrid, 1978.

pueblo: unos iban a la cárcel, otros eran ejecutados, y los más afortunados eran liberados. Dicen algunos testigos que *“en la fábrica de los Mesa, en una oficina con guardias civiles, se reunían personas de derechas, y Pedro Crespo decía éste sí se queda detenido, éste no...”*⁵⁴⁰.

La mayoría de las víctimas de la provincia de Segovia eran trabajadores, principalmente jornaleros, aunque también los había de distintos oficios: resineros, panaderos, guardas, etc., tal como analizamos en los anexos. Un grupo especialmente sacudido por la represión franquista fue el de los maestros que educaban en libertad, poniendo en cuestión los cimientos de la sociedad tradicional. Su importante papel en la transformación de España les ocasionó la enemistad de los sectores conservadores segovianos, especialmente del clero. Fueron fusilados un total de 17 maestros en la provincia de Segovia, lo que representa casi un 10% del total de las víctimas.

4. 3. 2. La extirpación de “los males de la patria”

El fin profiláctico de la represión era una creencia generalizada entre los militares sublevados, como explican varios autores (Jackson, Tomás, Santos Juliá). Los insurgentes creían firmemente que España estaba enferma, contaminada en ideas y personas y había que curarla, era necesario limpiarla. Los militares tenían claro que para salvar a España habían de eliminar de raíz los males causantes de la situación insostenible que amenazaba con hundir a nuestro país.

Los llamados “males de la patria”, lejos de tener nada que ver con los que cincuenta años antes había denunciado el regeneracionista Lucas Mallada, eran las ideas “disolventes” que englobaban desde el republicanismo burgués que abogaba por la democracia parlamentaria, hasta el anarquismo que pretendía abolir el Estado, pasando por el socialismo o el comunismo. Otras ideas como el laicismo, la igualdad o la autonomía de las regiones, también eran consideradas nocivas para España. Pero los sublevados no sólo pretendían acabar con las ideas, querían eliminar a las personas que creían en estos ideales y hacían propaganda de ellos; y en 1936 eran muchos los españoles que pensaban libremente y luchaban por una España más justa. De aquí el convencimiento de los militares de la necesidad de exterminar a los adversarios, como explicamos en el apartado siguiente.

Algunos, como Jesús Pabón, culpan al *“maniqueísmo que se cree obligado o autorizado a la radical extirpación del mal encarnado”*, como el causante de una represión que aspiraba a *“cortar de raíz las malas hierbas que amenazaban extirpar España”*⁵⁴¹. Esta opinión parece responsabilizar de las muertes a una idea político-filosófica y no a las personas que las llevaron a cabo, ordenaron o ampararon.

En cambio, otros autores no son tan etéreos y cargan la responsabilidad de la represión sobre los militares sublevados. El propio Azaña creía fundadamente que *“en la España dominada por los rebeldes y los extranjeros, los crímenes, forman parte de un plan político de **regeneración nacional**, se cometían y se cometen con la aprobación de las autoridades”*⁵⁴². De tal manera que, a pesar de la existencia de numerosas muertes arbitrarias en la España rebelde, como escribe Thomas, *“la idea de **limpieza** del país, para eliminar los males que se habían apoderado de él, era una política disciplinada de las nuevas autoridades y formaba parte de su programa de **regeneración**”*⁵⁴³.

⁵⁴⁰ Testimonio de Crispín Rubio. Pedro Crespo había sido alcalde del pueblo, y también estaba enfrentado a los obreros de la localidad.

⁵⁴¹ Citado por SALAS LARRAZABAL, Ramón. *Pérdidas de la guerra civil*. Planeta, Barcelona, 1977, pág. 370.

⁵⁴² AZAÑA, Manuel. *La velada de Benicarló*. Losada, Buenos Aires, 1939, pág. 36. El subrayado es mío.

⁵⁴³ THOMAS, H., op. cit., pág. 306. El subrayado es mío.

A esta necesidad de limpieza pronto se la revistió de una justificación “moral”, “ideológica”. Hay una formulación teórica, cuando menos curiosa, redactada por el corresponsal católico americano del *Chicago Tribune* y presidente de la Asociación de Prensa Angloamericana, Edmond Taylor, que vivió varios meses en la zona sublevada:

El enemigo era una molécula compleja de un veneno espiritual llamado, por conveniencia, comunismo; pero el liberalismo era el elemento más mortífero del veneno y, por ello, el más odiado. Al introducirse el veneno en el organismo humano actuaba como un virus, no sólo era incurable, sino infeccioso. Algunos hombres, llamados dirigentes, se habían inoculado maléficamente a sí mismos con el veneno y, lo mismo que Satanás en la mitología católica, intentaban extender la infección tanto como les era posible. Siendo la encarnación del mal, estos hombres merecían el castigo⁵⁴⁴.

El objetivo de esta purga masiva no fue sólo aplicar justicia o tomarse venganza, sino llevar a cabo una profilaxis social y política a escala nacional. Tanto ideas como personas, consideradas nocivas por el bloque conservador, habían de ser borradas para limpiar o curar el país. Esta mentalidad represora de los insurgentes era sacada a la luz por los reporteros extranjeros en la guerra civil española. Uno de ellos, Whitaker, apuntaba que los sublevados *“asesinaban a sus prisioneros metódicamente y sin piedad porque esos hombres estaban equivocados. Estaban en la zona equivocada. La intolerancia y el fanatismo facilitan el asesinato. Hay una clara distinción entre las ‘atrocidades rojas’ y las ‘ejecuciones’ franquistas realizadas organizadamente y bajo disciplina como parte de un programa encaminado a expurgar España de rojos”*⁵⁴⁵.

No eran unos pocos iluminados los que sentían estas emociones represoras; Thomas piensa que *“la mayoría de los hombres (franquistas) estaban convencidos de la obligación de extirpar las repugnantes herejías del liberalismo, el socialismo, el comunismo y el anarquismo, creían ante Dios que esas ideas estaban destruyendo España”*⁵⁴⁶.

Los servicios de propaganda de los militares sublevados trabajaban con eficacia para extender las ideas intolerantes. En un editorial de ABC de Sevilla, el 25 de julio de 1936 se pedía *“extirpemos con la máxima energía la gangrena que corroe las entrañas de nuestra querida Patria”*⁵⁴⁷.

La limpieza no se hacía únicamente por la consideración, por parte de los sublevados, de lo pernicioso para la Patria de las actividades de los defensores de la legalidad; también había un desprecio absoluto hacia los adversarios, como seres humanos. Los militares sublevados no tenían el más mínimo respeto con el enemigo, que también eran españoles como ellos. Decía Mola a este respecto: *“Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo”*⁵⁴⁸.

Otro detalle para destacar en este sentido es la mentalidad colonialista que animaba a muchos oficiales a eliminar a los milicianos republicanos como si se tratase de alimañas. Este sentimiento se percibía especialmente en los militares “africanistas”, quienes, labrados en las campañas de África contra las kabilas, trataban con el más absoluto menosprecio a los enemigos, fueran estos bereberes o compatriotas españoles: en ambos casos se comportaban como si se enfrentaran a animales salvajes. Como dice Max Gallo: *“era la mentalidad colonialista de muchos de los oficiales del Ejército, especialmente los africanistas, lo que les llevaba al exterminio de obreros y campesinos que eran los principales componentes de las milicias, como si se tratara de sub-*

⁵⁴⁴ Citado por PAYNE, Stanley G. *Los militares y la política*. Ruedo Ibérico, París, 1968, pág. 360.

⁵⁴⁵ Citado por REIG TAPIA, A., op. cit., pág. 115.

⁵⁴⁶ THOMAS, H., op. cit., pág. 360.

⁵⁴⁷ ABC, Sevilla, 25 de julio de 1936.

⁵⁴⁸ CASANOVA, J., op. cit., pág. 81.

hombres⁵⁴⁹. Opinión ésta corroborada por Jackson, quien afirma que “para algunos oficiales nacionalistas, sus enemigos no eran personas, eran poco más que ratas”⁵⁵⁰.

El general sublevado más elocuente era Queipo de Llano, de quien conocemos su personalidad porque la reflejaba en sus discursos y escritos. No conocía los límites en crueldad y falta de respeto a las personas que pensaban de manera distinta a la suya. Como muestra un botón: “Para terminar, os digo que a todo afeminado o invertido que lance alguna infamia o bulos alarmistas contra este movimiento nacional tan glorioso, lo matéis como a un perro”⁵⁵¹.

Un amplio sector de la Iglesia católica española, encabezado por la jerarquía, participaba de estos sentimientos de falta de respeto con los españoles del otro bando. El prelado de Segovia, Platero, rezaba en una Pastoral: “Os rogamos que humilléis a nuestros enemigos, los enemigos jurados de vuestro nombre santísimo y de vuestra santa Iglesia”⁵⁵².

4. 3. 3. El exterminio del oponente

Como se ha explicado en el apartado anterior, la creencia -extendida entre los sublevados- en la enfermedad de España obligaba a los militares insurgentes a suprimir a los causantes de aquélla: ideas y personas que era necesario eliminar. Diríamos que ésta es una justificación ideológica de la voluntad de exterminio; pero también detrás de esta voluntad había una motivación, digamos práctica, pues los sublevados querían tomar el poder político encarnado en el Gobierno del Frente Popular, que obtuvo el respaldo popular y democrático en las elecciones de febrero, y como tal contaba con el apoyo de, al menos, la mitad de los españoles. Por tanto, para conseguir el poder, habían de luchar contra una fuerte oposición.

Para hacer ceder dicha oposición había que eliminar, aniquilar, etc. es decir, utilizar términos militares de guerra que no se limitaban a la expresión verbal sino que reflejaban fielmente la realidad dura y cruel de la represión ejercida por los sublevados. “La voluntad de exterminar a sus enemigos nunca faltó a los nacionalistas”, como afirma Brenan⁵⁵³. Esta voluntad se hizo notar pronto: cuando, a finales de julio de 1936, Indalecio Prieto intentó negociar con los sublevados, Mola respondió: “¿Parlamentar? ¡Jamás! Esta guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España”⁵⁵⁴.

En este sentido ahonda Tuñón de Lara, para el que, con la represión nacionalista “se trataba de la eliminación radical de todo enemigo incluso en potencia. Un movimiento que no contaba con la mayoría de la población debía servirse del terror como arma valiosa, que sin duda lo fue (...) Había que eliminar a cuantos no aceptaran el Movimiento”⁵⁵⁵. Esta eliminación respondía a una cuestión de principio: el aniquilamiento del adversario proclamado ya en las bases del Alzamiento dadas por Mola en la primavera de 1936. La base quinta decía concretamente: “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado”⁵⁵⁶.

⁵⁴⁹ Citado por REIG TAPIA, A., op. cit., pág. 77.

⁵⁵⁰ JACKSON, G., op. cit., pág. 463.

⁵⁵¹ ABC, Sevilla, 26 de julio de 1936.

⁵⁵² BOOS, nº 15, 14 de agosto de 1936.

⁵⁵³ BRENAN, G. *El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil*. Ruedo Ibérico, París, 1962, pág. 241.

⁵⁵⁴ IRIBARREN, J. M., op. cit., pág. 169.

⁵⁵⁵ MALERBE, P., TUÑÓN DE LARA, M., GARCÍA NIETO, M. C. y MAINER, J. C. *La crisis del estado: dictadura, república, guerra (1923-1939)*. Historia de España dirigida por TUÑÓN DE LARA, M. Tomo IX. Labor, Barcelona, 1993, pág. 455.

⁵⁵⁶ BERTRAND GÜELL, F., op. cit., pág. 123. También recogida por *El Adelantado* del 31 de agosto de 1936, de una entrevista con el general Mola, quien muestra al periodista los papeles donde había redactado las *Bases Técnicas del Movimiento*.

Parece ya bastante asumido por un amplio sector de historiadores de la guerra civil que en la España franquista había una voluntad clara de exterminio, una política de represión de masas llevada a cabo con el conocimiento, aprobación y dirección de las máximas autoridades que no eran otras que las militares: especialmente Franco, Mola y Queipo de Llano. Sirvan como ejemplo de ello, las siguientes declaraciones de los generales sublevados:

Mola decía que *“una guerra de esta naturaleza ha de acabar con el dominio de uno de los dos bandos y por el exterminio absoluto y total del vencido”*⁵⁵⁷.

Queipo, que era siempre el más contundente, arengaba por radio: *“Del diccionario quedarán borradas las palabras de perdón y amnistía. Se les perseguirá (a los rojos) como a fieras, hasta hacerlos desaparecer a todos”*⁵⁵⁸.

Pero este sentimiento aniquilador también anidaba en otros mandos militares intermedios. El teniente coronel Helio Rolando de Tella decía: *“¡los jefes rojos! No ha de quedar uno, ni uno. Se creen que van a escapar; con los que hemos dejado atrás de los nuestros, de nuestros muertos”*⁵⁵⁹. No desmerecía al anterior el pensamiento del coronel Barato, quien afirmó categóricamente al corresponsal del *Toronto Star*: *“Habremos establecido el orden cuando hayamos ejecutado a dos millones de marxistas”*⁵⁶⁰.

No eran los militares los únicos que participaban de estos sentimientos, también los intelectuales pensaban de igual manera y se implicaban en la justificación de la represión. Pemán recitó desde radio Jerez el 24 de julio de 1936: *“la guerra con su luz de fusilería, nos ha abierto los ojos a todos. La idea de turno político ha sido sustituida para siempre por la idea de exterminio y de expulsión”*⁵⁶¹.

La voluntad política de exterminio se llevaba a cabo en nombre de Dios, de la patria, de la moral, de la dignidad humana. Se planteó la guerra en zona nacionalista como una necesidad histórica de eliminar de raíz a “los sin Dios y sin patria”.

Los cronistas extranjeros eran los más sorprendidos por la crueldad de la represión de los militares sobre sus compatriotas españoles. Un reportero inglés del *Daily Mail*, Harold Penberton, escribía sobre las crueldades de los facciosos, desde Sevilla: *“Si es verdad que los elementos rojos cometen actos de crueldad, hay que confesar que los rebeldes matan al por mayor (‘were killing wholesales’) (sic) y que realizan sus matanzas de manera, en cierto modo matemática. Las llevan a cabo metódicamente, como un expediente militar”*⁵⁶².

En el bando republicano la sensibilidad en este aspecto era bien distinta. Otro ánimo imbuía al presidente de la República, Manuel Azaña, quien aseguraba firmemente que *“ninguna política se puede fundar en la decisión de exterminar al adversario”*⁵⁶³. De hecho, todas las actuaciones de los gobiernos republicanos y las declaraciones de los líderes de todos los partidos y sindicatos iban en el mismo sentido, de condena de la represión incontrolada y en pro de la creación, como así se hizo, de los Tribunales Populares como órganos de justicia encargados de juzgar a los acusados de colaborar con los sublevados.

⁵⁵⁷ IRIBARREN, J. M., op. cit., pág. 223.

⁵⁵⁸ REIG TAPIA, A., op. cit., pág. 155. Tomado de BARRIOS, Manuel, *El último virrey, Queipo de Llano*. Argos/Vergara, Barcelona, 1978, pág. 204. Emitido por radio el 27 de agosto de 1936.

⁵⁵⁹ IRIBARREN, J. M., op. cit., pág. 373.

⁵⁶⁰ TUÑÓN DE LARA, M., op. cit., pág. 455. Nota a pie de pág.

⁵⁶¹ PEMÁN, J. M. *Arengas y crónicas de guerra*. Cerón, Cádiz, 1937, pág. 13.

⁵⁶² *El Socialista*, 16 de septiembre de 1936.

⁵⁶³ Citado por REIG TAPIA, A., op. cit., pág. 129.

4. 3. 4. La oportunidad para la venganza

La represión afectó a provincias donde no había habido ninguna “provocación” previa a la guerra que pudiera servir de “justificación” para aquélla. Así sucedió en Soria, de donde escribe Herrero Balsa: *“Para que la represión sea menos explicable y más condenable, en Soria, repito, no hubo lucha, ni resistencia a la sublevación, tampoco hubo violencia alguna durante los 6 años de República”*⁵⁶⁴. En Segovia, provincia de similares características sociopolíticas que Soria, tampoco había habido enfrentamientos con la toma del poder por los militares, ni tampoco hubo violencia anterior a la guerra que justificara la posterior represión. Los incidentes ocurridos en la provincia de Segovia antes de la guerra fueron contados y en un número limitado de localidades: Labajos, San Ildefonso, Carbonero, Cuéllar, Fuente el Olmo de Fuentidueña y Segovia. Ya hemos explicado que dichos incidentes se redujeron a discusiones políticas sin más violencia que la verbal.

En otras zonas de España, el terror subió de tono en las ciudades que habían permanecido en poder de los republicanos durante algún tiempo. En varias localidades de la provincia de Segovia los comités del Frente Popular mantuvieron la legalidad democrática durante unos días. A pesar de que en este periodo de dominio republicano no hubo incidentes ni detenciones de elementos derechistas, cuando los falangistas y guardias civiles dominaron estos lugares comenzó la dura represión de los que habían sido líderes de la defensa de la legalidad republicana, o incluso de los que se habían limitado a participar en los actos de oposición a la sublevación. Así ocurrió en Cuéllar, Bernardos, Nava de la Asunción, El Espinar, San Ildefonso, Coca, etc.

Los jefes militares eran muy explícitos en este sentido; Mola pedía venganza por razones personales: *“A mí me han matado a un hermano, pero me la van a pagar”*, mientras que el ya reseñado Rolando de Tella exigía venganza por cuestiones “solidarias” con sus compañeros de armas fallecidos: *“Se creen que van a escapar; con los que hemos dejado atrás de los nuestros, de nuestros muertos”*⁵⁶⁵.

Los bombardeos republicanos provocaban acciones de venganza en la retaguardia sublevada. Escuadras falangistas asaltaban las prisiones y organizaban una saca de presos con la anuencia, cuando no con la orden expresa, de las autoridades militares. En Segovia hubo al menos dos sacas tras sendos bombardeos, los días 14 y 30 de agosto de 1936.

Mola arengó, desde el ayuntamiento de Valladolid, tras un bombardeo republicano que había originado víctimas en la capital castellana: *“yo os prometo, más aún, os juro que dentro de muy pocas horas habrá una represalia por este hecho vandálico, pero no será contra las mujeres y niños, sino contra enemigos antiespañoles y traidores a los que hay que exterminar”*⁵⁶⁶.

Sectores propietarios ejercían su venganza por el miedo que habían pasado en la primavera última, con la creciente ola reivindicativa de los obreros que les habían perdido el miedo a los poderosos. No podían soportar que personas de las clases populares se dirigieran a ellos de igual a igual en las negociaciones laborales. Los cabecillas obreros fueron reprimidos. El pastor de Arcones fue ejecutado porque era el dirigente de los pastores de la zona serrana en sus reivindicaciones laborales contra los propietarios ganaderos. Detrás de estas víctimas había historia de luchas y enfrentamientos. La represión fue más sistemática y mayor en número donde los conflictos sociales habían sido más intensos por la fuerza de los sindicalismos o por la victoria del Frente Popular en las elecciones.

⁵⁶⁴ HERRERO Balsa, Gregorio y HERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio. *La represión en Soria durante la guerra civil*. Editada por los autores, Soria, 1982, pág. 9.

⁵⁶⁵ IRIBARREN, J.M., op. cit., págs. 223 y 373 respectivamente.

⁵⁶⁶ *El Adelantado*, 23 de septiembre de 1936.

Esta realidad se vivió en Segovia, donde ya se ha apuntado el duro castigo que sufrió el barrio de San Lorenzo de la capital. En la provincia, la represión más violenta la sufrieron especialmente El Espinar, San Ildefonso y Valsaín, localidades donde había una clase obrera organizada y muy combativa.

Otro modo de venganza ejercida por los sublevados era el fusilamiento de familiares de militantes republicanos y de izquierda que habían pasado al otro lado para luchar en defensa de la República o simplemente habían escapado. Como no habían podido fusilar a los adversarios políticos se vengaban en sus padres, madres, hermanos o hijos. Así ocurrió, entre otros casos, en Matabuena (murió el hijo, Luis Gil, porque no habían logrado ejecutar al padre, comunista, que había muerto ya); San Ildefonso (fue fusilado Andrés Nogales porque su hermano, que era dirigente de la Casa del Pueblo, había huido); Valsaín (Juana García porque su hijo Felipe Arnay García había cruzado la sierra); Cuéllar (Pablo Marinero porque a su hermano Benito, dirigente obrero, no le encontraron); Segovia (Mario Tomé porque su cuñado, el destacado socialista Delfín Arroyo, había escapado) y San Rafael (Julián Aparicio acusado de haber ayudado a escapar al presidente del Consejo de Ministros, José Giral, del hotel donde veraneaba).

4. 4. Los objetivos inmediatos de la represión

La represión, además de tener una justificación ideológica que la sustentaba, servía perfectamente a unos objetivos marcados por los sublevados incluso antes de la propia sublevación. El objetivo fundamental y prioritario era el control absoluto del poder. Esta meta quedó alcanzada completamente, pues, en palabras de Payne *“fortaleció a la dictadura al diezmar a la oposición y domar a los supervivientes, y al mismo tiempo reforzó la unidad de los grupos rebeldes que habían participado conjuntamente en la matanza”*⁵⁶⁷.

Con anterioridad a la sublevación, los generales rebeldes, conscientes de lo limitado de sus fuerzas y de la fuerte y numerosa oposición que les haría frente, llegaron a la conclusión de que tenían que tomar enérgicas medidas represivas para lograr y mantener el control de la situación. Para conseguir dicho control, los militares sublevados se fijaron unos objetivos:

4. 4. 1. Paralizar por el terror

*“El establecimiento de la autoridad militar estuvo acompañado en todas partes por el ejercicio masivo del terror”*⁵⁶⁸, así de contundente se expresa Jackson. Los militares eran los mejores especialistas en la utilización del terror con fines bélicos. Casanova dice que *“nadie mejor que los militares conocía lo útil que podía ser el terror para paralizar las posibles resistencias y eliminar a sus oponentes. Forjados en las guerras coloniales, escenarios idóneos para el desprecio por los valores humanitarios y las virtudes cívicas, para educarse en el culto a la violencia”*⁵⁶⁹. La mayoría de los militares sublevados eran africanistas, así denominados porque su carrera la habían iniciado o desarrollado en Marruecos.

La población hostil políticamente a la sublevación representaba más del 40% del total, pues éste era el porcentaje de votantes del Frente Popular. Ante tal cantidad de adversarios, los sublevados sólo podrían someterlos por la política de terror y las represalias. *“El móvil, -acusaba Bahamonde-, es uno solo: el terror. El terror como única arma para lograr el triunfo. Saben muy bien que sólo a fuerza de terror y de torrentes de*

⁵⁶⁷ PAYNE, Stanley G. *Los militares y la política*. Ruedo Ibérico, París, 1968, pág. 368.

⁵⁶⁸ JACKSON, G., op. cit., pág. 266.

⁵⁶⁹ CASANOVA, J. en JULIÁ, S. op. cit., pág. 81.

*sangre conseguirán dominar al pueblo*⁵⁷⁰. Una de las prácticas más aterradoras era dejar los cadáveres de las víctimas sin sepultar en el lugar de la ejecución para que todos lo vieran.

Desde los mismos momentos de la planificación del movimiento sus jefes ya preveían la fuerza de oposición de los adversarios a la insurrección, por lo que presuponían la dureza que habían de emplear para someterlos. Mola recomendaba en la Instrucción reservada nº 1, firmada en Madrid el 25 de mayo de 1936: *“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado”*⁵⁷¹. En las *Directivas para Marruecos*, fechadas el 24 de junio de 1936, Mola explicaba que el movimiento *“ha de ser simultáneo en todas las guarniciones comprometidas y desde luego de una gran violencia”*⁵⁷². Ya iniciada la guerra, todos los generales sublevados ahondaron en este sentido. Decía Mola el 19 de julio: *“Hay que sembrar el terror (...) eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”*⁵⁷³.

Franco, en su célebre declaración anunciando la proclamación del estado de guerra, publicada en el *Telegrama del Rif*, fechado en Melilla el mismo 18 de julio, exigía inexcusablemente que los castigos fueran ejemplares, *“por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo sin titubeos ni vacilaciones”*⁵⁷⁴.

Pero, sin duda era Queipo de Llano el más “terrorífico” en las palabras y en los hechos. Desde el primer bando declaratorio del estado de guerra, marcó la línea directriz de su política de conquista y mantenimiento del poder: *“Queda prohibido terminantemente el derecho a la huelga. Serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas, los directivos de los sindicatos cuyas organizaciones vayan a la huelga o no se reintegren al trabajo los que se encuentren en tal situación a la hora de entrar el día de mañana”*⁵⁷⁵. La misma suerte del fusilamiento corrían los que tuvieran armas en su poder, los incendiarios y los sabotadores.

En las charlas diarias emitidas por radio Sevilla, Queipo de Llano empleaba un tono tremendamente amenazante con el fin de amedrentar y asustar a los combatientes republicanos y simpatizantes que resistían a la sublevación. Sirvan como ejemplos los siguientes comentarios:

Una columna del tercio ha impuesto ya por tales excesos un castigo tan enérgico a Carmona, que, según comunica la aviación, una parte de la población, aterrada, huye en dirección a Fuentes de Andalucía (...) Ante los horrores habrá terror⁵⁷⁶. (21 de julio)

Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso, también a las mujeres de los rojos, que ahora por fin han conocido hombres de verdad, y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará⁵⁷⁷. (23 de julio)

Con idéntico éxito Coria del Río, donde ha renacido la calma y los rebeldes se han dispersado en todos los sentidos, poseídos de un verdadero terror de caer en manos de las fuerzas armadas⁵⁷⁸. (24 de julio)

El 26 de julio Queipo explicó su “sistema” represor: *“Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan no crean*

⁵⁷⁰ BAHAMONDE Y SÁNCHEZ DE CASTRO, A. *Un año con Queipo. Memorias de un nacionalista*. Eds. Españolas, Barcelona, 1938, pág. 102.

⁵⁷¹ BERTRAND GÜELL, F., op. cit., pág. 123.

⁵⁷² Citado por REIG, A., op. cit., pág. 147.

⁵⁷³ CASANOVA, J. en JULIÁ, S., op. cit., pág. 60.

⁵⁷⁴ Citado por REIG, A., op. cit., pág. 142.

⁵⁷⁵ BOP, Sevilla, 29 de julio de 1936.

⁵⁷⁶ ABC, Sevilla, 22 de julio de 1936, págs. 4, 5 y 7.

⁵⁷⁷ BARRIOS, Manuel, *El último virrey, Queipo de Llano*. Argos/Vergara, Barcelona, 1978, pág. 205.

⁵⁷⁸ ABC, Sevilla, 24 de julio de 1936.

que se librarán por ello; les sacaré de debajo de tierra si hace falta, y si están muertos los volveré a matar⁵⁷⁹.

Queipo no hablaba así sólo en los primeros momentos ante la incertidumbre de los acontecimientos y con el fin de controlar rápidamente la situación a través del terror, sino que continuó evidenciando durante mucho tiempo la firme voluntad de acabar con todo tipo de resistencia, por medio del terror de las palabras y de los hechos. El 18 de agosto decía que el 80% de Santa Lucía estaba de luto *“y no vacilaremos en adoptar medidas más rigurosas para asegurar nuestra victoria...”*. El 8 de septiembre anunciaba: *“He dado orden de fusilar a tres familiares de cada uno de los marineros del guardacostas que ha vuelto a bombardear La Línea”*⁵⁸⁰.

Empleaba Queipo, como buen africanista, términos bélicos como si se encontrara en una de sus campañas de África, donde había estado destinado en la comandancia de Ceuta en 1924. Pues, como dice Jackson, *“la guerra no fue sólo una guerra civil, fue también una guerra colonial. Los jefes insurgentes sentían lo mismo que la minoría europea dominante en Argelia antes de 1962 (...). La zona del Frente Popular era la zona colonial rebelde que había que reducir”*⁵⁸¹.

En palabras de Queipo: *“Al Arahál fue enviada una columna formada por el Tercio y Regulares, que han hecho allí una razzia espantosa, sancionando con ejemplares castigos los excesos salvajes inconcebibles que se han hecho en ese pueblo”*⁵⁸². Empleaba Queipo el término “razzia”, que es una práctica de violencia extrema típica de ejércitos de conquista, cuando se invade otro país o el enemigo es extranjero. Pero, las “razzias” no eran prácticas exclusivas de las fuerzas militares, en ellas participaban también falangistas, requetés y fuerzas cívicas.

El informe del Colegio de Abogados de Madrid denunciaba ante la opinión pública internacional la represión indiscriminada de los militares sublevados con el fin de aterrorizar a los españoles que se oponían a la insurrección: *“instrucciones encontradas a jefes caídos en poder republicano, ordenan que se mate sin compasión no sólo a los dirigentes y obreros de la organizaciones sindicales sino a los individuos de su familia, para producir un espanto en el que se ahogue toda voluntad de defensa”*⁵⁸³.

Los mensajes de los sublevados siempre tenían un tono amenazante. No sólo representaban la voluntad de imprimir terror en el adversario y debilitar su capacidad de resistencia, sino que hacían explícita una trágica realidad. Como escribía Whitaker: *“Los hombres que los mandaban nunca negaron que los moros asesinaron a los heridos del hospital republicano de Toledo. Se jactaban de haber arrojado granadas en medio de 200 heridos desamparados y horrorizados, Nunca me negaron haber prometido a los moros mujeres blancas cuando ocuparan Madrid”*⁵⁸⁴.

Este apartado lo resume perfectamente Fontana, para quien la represión *“cumplía en el campo franquista una función política fundamental, ligada a las necesidades de una guerra de clases (...) la de paralizar al enemigo por el terror. Cuando se carezca de fuerza suficiente para asegurar la vigilancia y el control totales, una represión severa e indiscriminada, tan irracional (...) es el mejor modo de paralizar a los unos y mover a los otros a una colaboración activa”*⁵⁸⁵.

⁵⁷⁹ ABC, Sevilla, 26 de julio de 1936.

⁵⁸⁰ BARRIOS, M., op. cit., pág. 205.

⁵⁸¹ JACKSON, G., op. cit., pág. 272.

⁵⁸² ABC, Sevilla, 25 de julio de 1936.

⁵⁸³ Informe del Colegio de Abogados de Madrid recogido por REIG TAPIA, A., op. cit., pág. 161.

⁵⁸⁴ Recogido por REIG TAPIA, A., op. cit., pág. 144.

⁵⁸⁵ FONTANA, J. *España bajo el franquismo*. Crítica, Barcelona, 1986, pág. 18.

Dentro de la estrategia del terror, las amenazas cumplían su papel de paralizar a los adversarios. A los jefes militares les gustaba esta práctica a través de los medios de comunicación. Así, se pueden citar ejemplos de distintas procedencias:

a) Franco amenazaba solemnemente el 21 de julio de 1936: *“Si alguno por ignorancia se mantiene alejado del movimiento salvador, poco tiempo le queda para entrar en el camino de la patria. Elegid bien el momento y podréis aliviar la ausencia anterior, al final exigiremos cuenta estrecha de las conductas dudosas o traidoras”*⁵⁸⁶. El día siguiente culminaba la amenaza para *“el que persista en la rebeldía contra el movimiento nacional, le espera un negro porvenir de incertidumbre y zozobras (...) para los que persistan en la hostilidad o pretendan rendirse a última hora no habrá perdón”*⁵⁸⁷.

b) Mola aseguraba que *“en este trance de la guerra yo ya he decidido la guerra sin cuartel. A los militares que no se han sumado a nuestro movimiento, echarlos y quitarles la paga. A los que han hecho armas contra el Ejército fusilarlos. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo”*⁵⁸⁸.

c) Queipo no sólo amenazaba en las arengas radiadas por la estación de Sevilla, también en los decretos que dictaba y publicaba el BOP de Sevilla, era lo suficientemente explícito: *“Todo gremio que se declare en huelga o abandono del servicio, que por su importancia así se considere, serán pasados por las armas inmediatamente todas las personas que integren la directiva y además un número igual de individuos elegidos de entre los huelguistas...”*⁵⁸⁹. Este decreto iba dirigido a los albañiles que no habían entrado al trabajo el día señalado: *“he ordenado que se busque inmediatamente a la junta directiva y en cuanto me la traigan, será pasada por las armas”*⁵⁹⁰.

d) El comandante España, gobernador civil de Segovia, también practicaba el tono amenazante en sus declaraciones públicas, si bien no aparecía tan duro como Queipo. En una nota anunciando detenciones de personas que desde Segovia facilitaban noticias a las fuerzas de Madrid, amenazaba: *“A estas personas espera un porvenir muy negro y un severo castigo, como a su acción corresponde, en cuanto se confirme las responsabilidades en que han incurrido”*⁵⁹¹.

e) La Falange de Segovia no quedaba atrás en este aspecto. En los llamamientos a los segovianos para alistarse en sus milicias, la sección local amenazaba: *“Nadie debe librarse de prestar su aportación en su propio trabajo o en el puesto de combate. Que no se excuse nadie. La Falange verá como enemigos a los que ahora se retraigan intentando triunfar con la victoria ajena”*⁵⁹².

4. 4. 2. La ejemplarización: la selección de las víctimas

Como asegura Payne, *“La purga en la zona nacional fue más calculada y efectiva, dirigida, en primer lugar, aunque no exclusivamente, contra los dirigentes izquierdistas y activistas de primera línea. Tampoco ésta lograría eliminar toda oposición activa en la retaguardia, pero hizo que tal resistencia quedase limitada a márgenes muy estrechos”*⁵⁹³.

Las primeras víctimas de la represión de los militares y fascistas eran los gobernadores civiles que habían defendido la legalidad republicana. Seguían el escalafón los alcaldes y concejales del Frente Popular, y los presidentes y directivos de las Casas del

⁵⁸⁶ *El Norte de Castilla*, 21 de julio de 1936.

⁵⁸⁷ *ABC*, Sevilla, 22 de julio de 1936.

⁵⁸⁸ Citado por REIG TAPIA, A., op. cit., pág. 81.

⁵⁸⁹ *ABC*, Sevilla, 24 de julio de 1936.

⁵⁹⁰ *ABC*, Sevilla, 25 de julio de 1936.

⁵⁹¹ *El Adelantado*, 28 de julio de 1936.

⁵⁹² *El Adelantado*, 6 de agosto de 1936.

⁵⁹³ PAYNE, S. *La revolución y la Guerra Civil Española*. Júcar, Madrid, 1979 (3ª edición), pág. 27.

Pueblo. A continuación figuraban los intelectuales y profesionales liberales, que se habían significado por sus ideas republicanas o progresistas.

El gobernador civil de Segovia, Adolfo Chacón de la Mata, de Unión Republicana, fue fusilado en Valladolid. El delegado de Trabajo, Juan Marco Elorriaga, fue sacado el 27 de agosto. Además, al menos tres alcaldes fueron ejecutados: Joaquín Bartolomé (Navas de Oro), Fermín Elías Sanz (Sepúlveda), y Matías Manso (Carbonero el Mayor). También cayeron concejales de las gestoras municipales nombradas tras las elecciones de febrero: José Hernández (Nieva), Juan de Dios (Cuéllar), Pío Lobo y Ponciano Herrero (Cabezuela). Los presidentes y dirigentes de las Casas del Pueblo corrieron la misma suerte: Claudio Estévez (Labajos), Santiago Martín (Fuenterrebollo), Daniel Gómez (Cantalejo), Pedro Antón (Sepúlveda), Teófilo Carrasco (Valverde del Majano) y Manuel Gómez, José Peña, Manuel González, Alejandro Arranz y Antonio Hernanz (Segovia). A lo largo de la provincia fueron ejecutados 17 maestros, muchos de ellos eran auténticos intelectuales que publicaban colaboraciones en las revistas especializadas en Educación o en el semanario republicano *Heraldo Segoviano* (Julio Fuster, Pedro Natalías, Ángel Gracia, Norberto Cerezo, los hermanos Domínguez). También murieron abogados (Jesús Hernández) y médicos (Arturo Aparicio, Mariano Álvaro).

Pemán pensaba que se había matado a demasiada gente, aunque los ajusticiamientos desempeñaban una *“triste, pero (...) precisa, función de ejemplaridad o escarmiento”*. Opina Reig Tapia que todo el problema para Pemán fue la exageración, pues el poeta pensaba que -a efectos de “escarmiento”- dicha finalidad *“objetivamente se hubiera podido cumplir con un cupo menor de ejecuciones”*⁵⁹⁴.

4. 4. 3. Asegurar la retaguardia

En una guerra de avance y de conquista era vital asegurar la retaguardia. Especialmente cuando se contaba con un volumen importante de población hostil a los militares insurgentes, que, además, podría rebelarse tan pronto como el grueso de las fuerzas de ocupación abandonaran las localidades en su avance.

Jackson apunta que *“al fin y al cabo el Ejército tenía prisa y no disponía ni de tiempo, ni de hombres que desperdiciar en la retaguardia”*⁵⁹⁵. Este mismo sentido tenían las palabras de Yagüe al justificar las matanzas de Badajoz: *“Por supuesto que los hemos matado, ¿Suponía usted que iba a dejarme 4.000 rojos a mis espaldas, teniendo mi columna que avanzar a marchas forzadas? ¿Iba a permitir que Badajoz volviera a ser rojo?”*⁵⁹⁶. Penberton ratificaba estas ideas afirmando que *“en las localidades ocupadas no debe quedar vivo ningún elemento considerado como poco seguro, (sic) a fin de que las tropas no tengan que temer ninguna amenaza en la retaguardia”*⁵⁹⁷.

Las labores represivas de retaguardia eran realizadas por los falangistas. Camionetas de camisas azules, con autorización del gobernador civil, recorrían los pueblos de la provincia de Segovia destituyendo a las gestoras municipales del Frente Popular, sustituyéndolas por personas de reconocida ideología conservadora. Esta labor de limpieza política-institucional de la retaguardia fue completada a lo largo del mes de agosto con la parte represiva, cuando llegaron de nuevo camionetas de falangistas que sacaron de sus casas o de sus trabajos a las víctimas: unas veces dirigentes locales republicanos o de izquierda; otras, pobres infelices que alguna vez habían hablado en público de Azaña o habían participado en la manifestación del Primero de Mayo de 1936.

⁵⁹⁴ PEMÁN, J. M. *Mis almuerzos con gente importante*. Dopesa, Barcelona, 1970.

⁵⁹⁵ JACKSON, G., op. cit., pág. 463.

⁵⁹⁶ Recogido por REIG TAPIA, A., op. cit., pág. 148.

⁵⁹⁷ *El Socialista*. 16 de septiembre de 1936.

Además, la provincia de Segovia por su situación de límite, por el sur y el este, a lo largo de las sierras de Guadarrama y Somosierra, con las provincias de Madrid y Guadalajara, fue frente durante todo el conflicto, si bien la actividad bélica se limitó al verano de 1936, y a la ofensiva republicana de mayo/junio de 1937 por el sector de La Granja. La labor de limpieza fue exhaustiva en toda la franja de la sierra que era línea de frente, y desde Villacastín hasta Ayllón, prácticamente todos los pueblos serranos fueron afectados. En la zona serrana hubo un total de 91 fusilados, repartidos de la siguiente manera en las distintas localidades:

Cuadro nº 9: Ejecuciones sumarias en la zona serrana de Segovia

Localidad	Nº víctimas
Villacastín	9
Navas de San Antonio	2
El Espinar (incluido San Rafael y la Estación)	16
Otero de Herreros	5
San Ildefonso (incluido Valsaín)	29
Palazuelos	1
Collado Hermoso	1
Navafría	7
Gallegos	2
Matabuena	5
Arcones	1
Casla	1
Santo Tomé del Puerto	1
Riaza	9
Ayllón	2
Total víctimas zona serrana	91

5. LA REPRESIÓN “ILEGAL”

Establecemos dos grandes conceptos de represión: una denominada “ilegal” para referirnos a los procedimientos sumarios o ilegales conocidos habitualmente como *paseos* o *sacas* y otra “legalizada” para describir la aplicación de la justicia militar. Hemos dividido el estudio de la eliminación de los adversarios en dos capítulos diferenciados puesto que consideramos de índole distinta, por una parte, las ejecuciones indiscriminadas fruto de una *saca* y por otra, las derivadas del fusilamiento por ejecución de una sentencia dictada en un consejo de guerra. Aunque el fin de ambas era el mismo: la eliminación de los oponentes políticos a la sublevación militar; los mecanismos difieren, según vamos a tratar de explicar.

5. 1. Los mecanismos de la represión sumaria

Vamos a abordar en este apartado todos los mecanismos utilizados por los sublevados para eliminar a los ciudadanos que permanecieron fieles a la República, de una manera ilegal o sumaria, sin la aplicación de ningún procedimiento judicial y ajeno a toda legalidad, es decir la ejecución indiscriminada.

5. 1. 1. Las denuncias y los denunciantes

Ya se ha explicado anteriormente que uno de los objetivos fundamentales de la represión era la eliminación de los oponentes políticos. Ahora bien, a pesar de que la mayoría de los dirigentes políticos republicanos y socialistas que no huyeron camino de Madrid o se escondieron fueron presos, no todos serían ejecutados.

El punto de mira inicial de las denuncias y de los denunciantes eran, especialmente, los alcaldes del Frente Popular (Navas de Oro, Sepúlveda, Carbonero), aquéllos que habían pertenecido a Gestoras Municipales de la misma adscripción (Cuéllar, Nieva, Cabezuela), dirigentes de las Casas del Pueblo (Sepúlveda, Valverde del Majano, Cantalejo, Fuenterrebollo), maestros (Segovia, Castrojimeno, Adrados, Villacastín, etc.), médicos (Espirido, Duruelo), funcionarios u otras profesiones liberales que se hubieran significado por su republicanismo, por sus críticas al caciquismo imperante en la provincia, defensa de los derechos de los trabajadores y, por último, simples obreros o jornaleros líderes republicanos o de izquierda. Pero tampoco se escapaban de la persecución los que habían sido meros militantes de base, de partidos o sindicatos republicanos o de izquierda.

Desde el inicio de la guerra los falangistas se encargaron de saquear las sedes de los partidos y sindicatos republicanos y de izquierda, recogiendo los ficheros de afiliados de los mismos, por lo que el trabajo de búsqueda fue tarea bastante fácil. En algunos pueblos, como Matabuena⁵⁹⁸, se adelantaron los militantes de izquierda y rompieron o quemaron los ficheros de afiliados para impedir ser descubiertos, aunque en las localidades pequeñas se conocían todos y se sabía perfectamente la ideología de cada vecino.

En este sentido habría que distinguir entre las personas que fueron objeto de prisión, es decir, casi todos los que habían destacado políticamente, y los que eran señalados para la ejecución, que, se hubieran significado políticamente o no, podían ser fusilados para satisfacer algún tipo de venganza personal. Por ejemplo, Marcos Vela, una de las víctimas de Navas de Oro, había ganado un pleito a la familia Mesa; algo parecido sucedió a Zacarías Rojo, de Olombrada: sus enemigos fueron a buscar en su chaqueta, cuando éste yacía cadáver, los papeles del pleito que el infortunado les había ganado⁵⁹⁹.

⁵⁹⁸ Testimonio de Antonio Gil.

⁵⁹⁹ Testimonio de Felipa Laguna.

En general se podría decir que la práctica totalidad de las víctimas fueron ejecutadas por razones exclusivamente políticas. Las denuncias tenían su base y su excusa general en la militancia política de la víctima, pero, en muchos casos, había además otras razones más personales que motivaban a los denunciantes a señalar el objetivo de los verdugos. Algunos testigos aseguran que en las muertes también había *“asuntos personales, pues a otros que habían sido también miembros de la Casa del Pueblo, no les ocurrió nada”*⁶⁰⁰. Claro ejemplo era el dirigente de UGT Esteban Muñoz que había sido alcalde accidental de Segovia: fue apresado al estallar la guerra, pero no fue tan siquiera procesado. Permaneció como detenido gubernativo durante toda la contienda. De igual manera salvaron sus vidas los presidentes de las Casas del Pueblo de Navafría, Palazuelos, Samboal y otras localidades.

Por tanto, muchas de las denuncias estaban originadas por venganzas personales, que, a su vez podían estar motivadas por distintas razones:

- 1ª. Estrictamente personales, debidas a envidias y rencores de índole personal o privada: rivalidad por cuestiones profesionales, laborales, vecindad, pasionales... Se conocen casos en Valsaín, Cuéllar, Villacastín...
- 2ª. Económicas. Hubo quien denunció con el fin de quedarse con los bienes (ya fueran escasos, la mayoría de las veces; o abundantes) del denunciado (Gallegos, Cuéllar).
- 3ª. Rivalidad o competencia económica de ciertos negocios: el propietario de un bar, molino, almacén, carnicería, etc. denunciaba al propietario rival para eliminar la competencia. Abundan los casos de víctimas que poseían tabernas (Riaza, Navas de Oro), carnicerías (Riaza, Cerezo de Abajo, Sauquillo), molinos (Aldealengua de Pedraza, Valverde), panaderías (Linares del Arroyo).
- 4ª. Antiguos pleitos por la posesión o arrendamiento de fincas, ya fueran urbanas o tierras de labranza. (Navas de Oro, Olombrada, San Rafael).
- 5ª. Ambición por ocupar el puesto de trabajo del denunciado (Segovia).

En vista de que las escuadras falangistas que ejercían las labores de limpieza en la retaguardia generalmente no actuaban de modo directo en sus pueblos (como los falangistas de Navas de Oro que operaron en San Ildefonso), habían de servirse de denuncias porque no conocían a sus víctimas; con mayor motivo cuando algunas de estas escuadras procedían de Valladolid o Burgos. Normalmente estos grupos de choque llegaban a los pueblos con el trabajo hecho, es decir, llevaban una lista en la que figuraban las víctimas que tenían que ejecutar.

Silvestre Ramos cuenta que en las listas de izquierdistas que habían de ser detenidos en El Espinar *“figuraban ya con una cruz los que estaban destinados a ser ejecutados”*⁶⁰¹. Los particulares se animaron pronto a delatar a sus vecinos. Las denuncias que afectaban a los ciudadanos de a pie se amparaban en el anonimato, garantizado por las autoridades militares. Las listas de los “condenados a muerte” eran elaboradas o completadas por un variado elenco de denunciantes:

Por un lado, trabajadores que habían sido presionados para participar en alguna huelga o manifestación, o incluso por haberse visto obligados a afiliarse a la Casa del Pueblo para conseguir un empleo, se vengaban denunciando a los líderes o cabecillas que les habían coaccionado⁶⁰². En el otro lado estaban los caciques, patronos y propietarios que habían sufrido las reivindicaciones laborales de los sindicatos, denunciaban a sus propios trabajadores que habían participado en las medidas de presión. Ejemplo claro fue la familia Mesa de Navas de Oro.

⁶⁰⁰ Testimonio de Teófilo García.

⁶⁰¹ Testimonio de Silvestre Ramos.

⁶⁰² Testimonio de Gregorio González sobre algunos obreros de la fábrica de loza de Segovia.

También hubo verdaderos especialistas o profesionales de la denuncia. Los había por motivos de venganza política, como los falangistas que ya se habían enfrentado durante la primavera a los adversarios republicanos y de izquierda, o por razones personales. Uno de los más tristemente famosos en la capital fue “El Barato”. En Valtiendas había un maestro de derechas que denunciaba a los “rojos” de su comarca.

Otro grupo característico de estas situaciones eran los conversos, traidores, antiguos militantes izquierdistas. Iniciada la contienda, y a la vista del triunfo de los sublevados en Segovia, “cambiaban de camisa”, de la roja a la azul, y para mayor seguridad y demostración de su adhesión, denunciaban a los antiguos compañeros.

Por último, hubo también un policía, Luis Borreguero, que había asistido a las reuniones de los partidos políticos como delegado gubernativo, según era reglamentario, y conocía a los participantes en dichas reuniones. Llegaría a comisario jefe de Segovia en 1942.

5. 1. 2. Las detenciones

Desde la mañana del día 19 de julio de 1936, momento en que la guarnición de Segovia se adhirió a la sublevación militar, se produjeron las detenciones de todos los sospechosos de ser oponentes al movimiento triunfante. Comenzaron por las personas que se habían comprometido oficialmente con la República en Segovia, ocupando cargos públicos en los ayuntamientos, la Diputación Provincial, u otras instituciones (el gobernador civil Chacón de la Mata, el delegado de Trabajo Marco Elorriaga). Si bien, como se ha escrito en capítulos anteriores, esa misma mañana algunos de los dirigentes de los partidos integrantes del Frente Popular habían tomado la carretera de Madrid para salvarse de las represalias (José Carrasco, Gaspar Duque, Francisco Álvarez, Demetrio Hoyos, Enrique Pérez Bonín). Así podemos constatarlo en *El Adelantado*⁶⁰³ y en Contreras⁶⁰⁴.

No cayeron todos los responsables políticos, pero sí lo hicieron los militantes de base, simpatizantes e incluso muchas personas totalmente indiferentes ante la nueva situación política, simplemente por no aparentar entusiasmo en las manifestaciones de apoyo al nuevo régimen. No sólo se detenía a los militantes o simpatizantes republicanos o de izquierda, también caían presos los hijos (según cuenta Antonia García, detenida con 15 años, algunos paisanos preguntaban a la Guardia Civil “¿A qué traéis a estas criaturas?”, y los guardias contestaban “porque son hijas”) y los padres (los progenitores de los milicianos Liborio López y Gaspar Duque fueron detenidos por el simple hecho de serlo). A Gabriel Arranz, inválido, cuando preguntó por qué razón lo habían detenido, si andaba a cuatro patas, y no podía hacer nada malo, le contestaron que “tenía muchas ideas en la cabeza”⁶⁰⁵.

Desde la toma del poder por los sublevados se produjeron detenciones en masa: procedentes de todos los pueblos de la provincia llegaron detenidos que abarrotaron las prisiones de la capital. Entre el 19 y el 31 de julio ingresaron en las cárceles de Segovia 292 adversarios políticos, durante el mes de agosto entrarían otros 450, es decir, en sólo mes y medio 742 segovianos fueron detenidos⁶⁰⁶.

Para cortar la llegada masiva de presos desde cualquier localidad de la provincia, el gobernador civil de los sublevados, comandante España, tuvo que dictar una circular

⁶⁰³ *El Adelantado*, lunes 27 de julio de 1936. “...viéndose que la totalidad dirigentes PSOE, UGT y PC habían desaparecido”. Aunque no identificaba a los dirigentes, como tampoco lo hace Contreras, por testimonios y otras documentaciones conocemos los nombres.

⁶⁰⁴ “Las fuerzas de Seguridad y Guardia Civil hicieron algunas detenciones de importancia secundaria: los dirigentes habían tomado, al mediodía, por el puerto de Navacerrada, el camino de Madrid.” CONTRERAS y L. de AYALA. *La iniciación en Segovia del Movimiento Nacional*. Imprenta “El Adelantado de Segovia”, Segovia, 1938, pág. 24.

⁶⁰⁵ Testimonio de Carmen Arranz.

⁶⁰⁶ Estas son, al menos, las cifras obtenidas de los expedientes del Arch. Pris. Prov., a las que habría que añadir los numerosos presos que no llegaron a tenerlo o éste desapareció.

publicada en un número extraordinario del *Boletín Oficial de la Provincia*, el 5 de agosto de 1936. En ella se interesaba a *“todos los alcaldes de la provincia que los detenidos o presos a disposición de la Autoridad Militar no sean enviados a la capital, y sí permanezcan en las respectivas cárceles de la localidad y en su defecto en la del partido correspondiente”*⁶⁰⁷. Hasta ese punto llegaría la saturación en las prisiones de la ciudad. Únicamente permitía la circular, el envío a la capital de presos procedentes del frente de combate, con la obligación de ser comunicados desde su detención hasta su conducción, *“debiendo los alcaldes comunicarlo inmediatamente a mi Autoridad para cursar las órdenes oportunas de traslado”*⁶⁰⁸.

En una nota del Gobierno Civil publicada en *El Adelantado* del 28 de julio, bajo el título de “importantes detenciones sin especificar”, se escribía:

La policía y la fuerza pública están practicando importantes detenciones. Se sigue la pista de personas que desde Segovia facilitaban noticias a las fuerzas de Madrid. A estas personas espera un porvenir muy negro y un severo castigo, como a su acción corresponde, en cuanto se confirmen las responsabilidades en que han incurrido⁶⁰⁹.

Esta nota, más que fiel reflejo de lo acontecido, parecía tener fines claramente propagandísticos; por un lado para dar moral a sus seguidores y, por otro, pretendiendo amedrentar y asustar a los oponentes políticos. En un principio, el Gobierno Civil informaba públicamente de algunas de las detenciones que se practicaban. A este respecto se divulgó una nota en *El Adelantado* del 10 agosto de 1936:

Detenciones: en lo sucesivo se facilitará a la prensa una relación de las detenciones y los motivos porque se practican, a excepción de aquéllas, claro es, que por la índole del asunto no puedan hacerse públicas sin perjuicio para las investigaciones policíacas que de ella puedan derivarse⁶¹⁰.

Se publicaron numerosas listas de detenidos, hasta un total de 21, desde el 12 de agosto hasta el 29 de septiembre de 1936, a partir del cual dejaron de editarse. 330 personas fueron anunciadas en el diario local como detenidas. Pero, únicamente aparecían los datos personales, no figuraba la procedencia, ni la profesión, ni *los motivos porque se practicaban* (como anunciaba la nota anterior). De todas ellas, once personas sin identificar públicamente, el resto con nombre y apellidos. La relación más numerosa fue el 21 de septiembre, con 50 detenidos.

En este apartado hay algunos detalles dignos de mención, como la crónica del apresamiento del maestro Norberto Cerezo y su hijo Manuel, el 14 de agosto de 1936, día en que aparecieron muertos en Castillejo de Mesleón, sin haber pasado por ninguna prisión, pues habían sido sacados el día anterior de su casa en Castrojimeno. O la noticia de la detención de Arturo Aparicio el 31 de agosto, día en que su cuerpo yacía ejecutado en el Puente Oñez⁶¹¹.

En las prisiones de Segovia se destinaban algunas celdas para los recién detenidos. En el caso del Hospital Asilo se reservaban, *“para facilitar la labor judicial, (...) 10 celdas donde ingresarán todos los detenidos a disposición de jueces militares, los que con carácter de incomunicados permanecerán en ellas hasta que por los respectivos*

⁶⁰⁷ BOP, 5 de agosto de 1936. Cir. Gob. Civ.

⁶⁰⁸ BOP, 6 de agosto de 1936. Cir. Gob. Civ.

⁶⁰⁹ *El Adelantado*, 28 de julio de 1936.

⁶¹⁰ *El Adelantado*, 10 de agosto de 1936.

⁶¹¹ *El Adelantado*, 13 de agosto de 1936: “Nota del Gobierno Civil: Detenidos en Sepúlveda el maestro Fernando Norberto Cerezo y su hijo Manuel Cerezo Sacristán” y *El Adelantado*, 31 de agosto de 1936: “Nota del Gobierno Civil: Detenidos: Román Fernández Ayuso, Silenciarío Herrero María, Ciriaca García Magdaleno, Antonio Sala Ruiz, Arturo Aparicio González y Celedonio Berzal Lozano”.

*jueces se les tome declaración y dispongan sea levantada ésta pasando con el resto de detenidos*⁶¹².

Los encargados de las detenciones de los oponentes políticos eran, principalmente, la policía de Seguridad y Vigilancia, en la capital; y en la provincia, la Guardia Civil. También colaboraban en estas operaciones las milicias políticas: Falange, Requeté y Acción Popular⁶¹³. Las milicias tenían autorización para detener personas, trasladar presos, interrogar en sus propios cuarteles, incautar armas o cualquier tipo de bien, etc. Este poder ilimitado dio pie a las ejecuciones "ilegales" y a numerosas arbitrariedades que estudiamos a continuación.

Muchas de las detenciones eran totalmente arbitrarias y una simple denuncia era suficiente para que cualquier persona fuera detenida e ingresada en prisión. Incluso por el mero hecho de preocuparse por la situación de los reclusos podía caer sobre uno el peso del Nuevo Estado. En concordancia con la arbitrariedad de las detenciones, la liberación de muchos de los presos también lo era. Esto originó que desde el inicio de la guerra los familiares de los detenidos buscaran y encontraran recomendaciones sobre sus seres queridos presos. De qué modo se agolparían este tipo de influencias, que fue "necesaria" una nota del gobernador civil para contrarrestarlas:

Aviso contra las recomendaciones en favor de los presos. Se ha notado la ausencia completa de recomendaciones, cosa que era perfectamente inútil, pues las autoridades obrarán siempre dentro de la más estricta justicia⁶¹⁴.

Al día siguiente en el mismo diario parece ser que se completaba el aviso:

Estamos inspirados en un espíritu de justicia. No detenemos a nadie sin un motivo racional. Procuramos investigar rápidamente la responsabilidad de cada detenido para ponerlo en libertad si lo merece. No necesitamos estímulos de nadie para proceder con equidad. (...) Consideramos una ofensa toda recomendación en favor de presos o detenidos ya que si son inocentes serán libertados y si tienen alguna responsabilidad, les será exigida pese a las influencias que pretendan poner en juego.

Finalizaba la nota con una clara amenaza: *"En resumen no hacemos caso de recomendaciones y las personas que traten de influir serán consideradas como contrarias a este movimiento salvador de España"*⁶¹⁵. Ya se conoce claramente lo que significaba ser considerado "contrario al movimiento".

En Segovia existían, antes de la guerra, dos centros penitenciarios: la Prisión Provincial, destinada para detenidos, procesados y un pequeño porcentaje de penados; y el Hospital Asilo Penitenciario, en el que permanecían los reclusos que padecían tuberculosis u otras enfermedades que precisaban cuidados especiales, y ancianos. Ambas se habían construido en las afueras de Segovia y venían a sustituir a la antigua cárcel situada en el casco viejo de la ciudad. En Cuéllar, la Prisión Central estaba ubicada en el castillo medieval, y en ella se albergaban los reclusos que cumplían penas de larga duración.

Además de las cárceles aludidas, había en la provincia Prisiones de Partido, con capacidad para albergar a un número pequeño de reclusos, entre detenidos, presos y transeúntes. Se situaban en las restantes cabezas de partido judicial: Santa María de Nieva, Riaza y Sepúlveda.

⁶¹² Arch. Pris. Prov. Libro de Órdenes de Dirección (LOD), 8 de diciembre de 1936.

⁶¹³ Únicamente tenemos constancia de un caso de detención y entrega de detenidos por las milicias de AP y otro por los requetés.

⁶¹⁴ *El Adelantado*, 6 de agosto de 1936.

⁶¹⁵ *El Adelantado*, 7 de agosto de 1936.

Durante los primeros días de guerra fue tal la avalancha de detenidos que llegaron a la capital que se hubieron de habilitar edificios para el alojamiento de presos. Incluso la plaza de toros, muy cercana al Hospital Asilo, sirvió de prisión en estos primeros momentos. Desde muy pronto se tuvo que reabrir la *Cárcel Vieja*⁶¹⁶, que rápidamente se vio repleta de detenidos (en torno a 750 presos⁶¹⁷). Un antiguo convento en las inmediaciones de la muralla, al lado del puente de *Sancti Spiritus*, se convirtió en Prisión Provisional, que llegó a albergar más de 100 presos⁶¹⁸. También se volvieron a utilizar las históricas mazmorras del Alcázar como prisión militar.

En San Ildefonso se emplearon las caballerizas del Palacio del siglo XVIII como Prisión Provisional. Una circular del gobernador civil disponía rehabilitar la antigua cárcel de San Ildefonso, adecuándola para 350 personas, para así descongestionar las prisiones de la ciudad. En la provincia, aparte de los centros reseñados, hubo destacamentos penales en Villacastín, Torrecaballeros, Labajos, Prádena, Honrubia de la Cuesta, Linares del Arroyo y Navas de Riofrío. En estos centros se aprovechaba el trabajo de los presos (en principio sólo detenidos gubernativos, pero a partir de la instauración de la Redención de Penas por el Trabajo en 1938, también penados) para la realización de obras (entre otras un puente, una pista militar, un sanatorio antituberculoso y un tramo de línea férrea).

5. 1. 3. Los ejecutores de la represión sumaria

Los protagonistas de este tipo de ejecuciones fueron, en su mayoría, falangistas de Segovia y las provincias de alrededor (especialmente Valladolid y Burgos). Pero también llevaron a cabo algunos fusilamientos miembros de otras milicias políticas -requetés- y fuerzas militares como la Guardia civil.

Grupos políticos y Milicias Nacionales

Como hemos referido en el capítulo 1, hasta el inicio de la guerra la militancia de derechas se concentraba en Acción Popular, liderada en Segovia por Juan de Contreras, y en su rama juvenil, la Juventud de Acción Popular, presidida por Francisco Martín y Gómez. Este partido estaba implantado básicamente en la capital y algunos pueblos importantes de la provincia. El resto de fuerzas derechistas tenían una militancia exigua. Tanto Renovación Española como la Comunión Tradicionalista o Falange, no hacían la menor sombra a AP como fuerza hegemónica de la derecha segoviana.

Hasta el 19 de julio Falange no tenía más de 30 militantes⁶¹⁹, liderados por el jefe local, Luis Hermosa y Dionisio Ridruejo. Pero el inicio de la guerra marcó el vertiginoso aumento de afiliados, alentado por los continuos llamamientos a través de la prensa local y las informaciones sobre las heroicidades de los falangistas en los distintos frentes de batalla.

Ya en el primer número de *El Adelantado* que se publicó tras la sublevación, el día 27 de julio, FE hizo un llamamiento a la afiliación, advirtiendo “*que las personas que no estén en el ánimo de aceptar los servicios que se les ordenen, de acuerdo con sus condiciones naturales, pueden abstenerse*”. Falange no quería “*adhesiones verbales*” pues

⁶¹⁶ El alcalde interino socialista, Esteban Muñoz, ya había presentado varias propuestas, que no llegaron a fructificar, para que la antigua cárcel de partido fuera cedida al Ministerio de Gracia y Justicia para que la convirtiera en la sede de los juzgados.

⁶¹⁷ Testimonio de Juan Blasco.

⁶¹⁸ Testimonio de Manuel Rodríguez.

⁶¹⁹ Testimonio de Ricardo Mateo, falangista segoviano de preguerra, que corrobora a RIDRUEJO, D. *Casi unas memorias*. Planeta, Barcelona, 1976, pág. 44, donde expresa “*no seríamos más de 30*”.

manifestaban estar *“montados sobre bases de lucha y sacrificio, y sólo en tal disposición, aceptaremos los ofrecimientos”*⁶²⁰.

En los días sucesivos fueron continuos los anuncios: Al principio, *“animando a los que todavía no colaboran. Aunque no puedan dedicar el día completo, por lo menos horas libres. (...) La Falange necesita de vosotros, pues aun siendo excesivo el número de individuos que la componemos, son tantos y tan grandes los servicios por hacer, que para todos habrá ocupación y ninguno permanecerá ocioso”*⁶²¹. El día siguiente, reiterando el llamamiento *“por segunda vez se recuerda a todos los españoles de buena fe la obligación que tienen de sumarse a nuestro movimiento, por 2ª vez se insiste en que todos, sin distinción de edad ni clase, **absolutamente todos**, si por sus venas corre sangre de verdaderos españoles....”*⁶²². Y finalmente, amenazando: *“nadie debe librarse de prestar su aportación en su propio trabajo o en el puesto de combate. Que no se excuse nadie. La Falange verá como enemigos a los que ahora se retraigan intentando triunfar con la victoria ajena”*⁶²³.

La avalancha de "camisas azules" como prenda de vestir y distintivo político parece que fue grande pues FE se vio obligada a anunciar el 4 de agosto: *“queda terminantemente prohibido confeccionar en establecimientos o casas particulares camisas o distintivos de Falange sin la autorización expresa de esta jefatura”*⁶²⁴. Se concretó aún más al día siguiente el tema de las camisas, pues *“para evitar confusiones y mantener estrictamente la responsabilidad de la Falange, se prohíbe de ahora en adelante el uso de camisas azules y de insignias y banderas a todas las personas que no estén afiliadas”*⁶²⁵. Estos avisos dan a entender que ya había oportunistas que pretendían aprovechar la oleada de camisas azules para hacer su agosto.

La organización y distribución de los nuevos falangistas se realizaba en el recién creado Cuartel General, domiciliado en S. Facundo nº 1. Allí se remitía a todos los afiliados y simpatizantes inscritos en Falange, *“todos deberán ser acuartelados en dicho domicilio, para ser encuadrados definitivamente”*⁶²⁶.

Las otras Milicias Nacionales, JAP, Renovación Española y Requeté no llegaron a implantarse ni a extenderse tanto en la provincia de Segovia como los falangistas. Pero también publicaron en la prensa sus llamamientos a la población para reclutar voluntarios:

Acción Popular, llamó a los militantes a que *“pasen por la sede, esta noche de 8 a 10, para asunto urgente y de importancia”*⁶²⁷; Renovación Española *“siempre dispuesta a alistar milicianos...”*⁶²⁸; y el Requeté de Segovia: *“a todos los socios y simpatizantes que quieran adherirse a luchar en nuestras filas”*⁶²⁹.

En resumen, según los datos que aporta Casas de la Vega para la provincia de Segovia, el resultado total de voluntarios y su comparación con la población absoluta, es el siguiente⁶³⁰:

⁶²⁰ El Adelantado, 27 de julio de 1936.

⁶²¹ El Adelantado, 30 de julio de 1936.

⁶²² El Adelantado, 31 de julio de 1936. El subrayado es mío.

⁶²³ El Adelantado, 6 de agosto de 1936.

⁶²⁴ El Adelantado, 4 de agosto de 1936.

⁶²⁵ El Adelantado, 5 de agosto de 1936.

⁶²⁶ El Adelantado, 5 de agosto de 1936.

⁶²⁷ El Adelantado, 6 de noviembre de 1936.

⁶²⁸ El Adelantado 4 de diciembre de 1936. Incluye el salario que les dan a los voluntarios.

⁶²⁹ El Adelantado, 12 de agosto de 1936.

⁶³⁰ CASAS DE LA VEGA, R. *Las Milicias Nacionales*. Editora Nacional, Madrid, 1977. Vol. 1, pág. 237. Los datos de población son del censo de 1930. No es por tanto muy creíble la cifra de *“una masa de voluntarios de unos 2.700”* que facilitó el jefe provincial de FET, Hermosa, en su informe a la Jefatura Nacional del Movimiento, fechado el 4 de mayo de 1940. AGA. Presidencia. SGM- DNP. Caja 21. Informe nº 5.

Cuadro nº 10: Voluntarios nacionales en la provincia de Segovia

Población de hecho	Voluntarios efectivos	Porcentaje aproximado
174.158	787	2,8%

Comparando estos datos con otras provincias se obtiene igual porcentaje de voluntariado que Zamora y Ávila, siendo sólo inferior a Segovia, Salamanca con el 1%. Si bien, como dice Casas de la Vega, *“la modestia relativa de los porcentajes expuestos no debe inducir a error respecto a la adhesión de las provincias citadas al Alzamiento”*⁶³¹. Por otra parte, que estas provincias fueran mayoritariamente conservadoras no quiere decir que su adhesión al Movimiento fuera entusiasta. Ante la guerra, las nuevas autoridades se sentían mucho más motivadas que los particulares. Ayuntamientos, Diputación Provincial y otras instituciones organizaban homenajes a Calvo Sotelo, Franco, Varela, Carrascosa; suscripciones populares, compra del Avión Segovia, Ropero de Pobres, etc., mientras que los ciudadanos de a pie se limitaban a asistir o participar en dichos eventos.

Por el contrario, sí se podría comparar el número de voluntarios “nacionales” con los integrantes de las Milicias Antifascistas Segovianas, creadas en el Centro Segoviano de Madrid por los naturales de esta provincia residentes en la capital, a los que se fueron adhiriendo los muchos segovianos que cruzaron la sierra para unirse a las fuerzas leales a la República. El folklorista Agapito Marazuela, militante comunista, fue el organizador de las milicias y su primer responsable político, mientras que el escultor anarquista Emiliano Barral sería su comisario de guerra hasta su muerte en el frente de Madrid, en noviembre de 1936⁶³². Los primeros datos de estas milicias eran del 16 de noviembre de 1936 y hablaban de 165 milicianos segovianos en la Columna Mena⁶³³. Más adelante, en la relación de Milicias elaboradas en 1937 por la Comisaría General se cifraba el total de integrantes en las Milicias Segovianas en 566 hombres (si bien para estas fechas en sus filas se habían integrado voluntarios de otras provincias). Además, en la creación de las primeras unidades del Quinto Regimiento que se ocuparon del frente de Navacerrada participaron 142 segovianos, mayoritariamente originarios de los pueblos de la sierra: La Granja, Valsaín, Navafría, Vegas de Matute, Otero de Herreros o El Espinar⁶³⁴.

La Falange

La autoría de prácticamente todas las ejecuciones aquí estudiadas, hay que achacársela a las escuadras falangistas que recorrieron la provincia con absoluta impunidad, deteniendo, robando y fusilando. Contaban con la pasividad, cuando no con el beneplácito, de las autoridades militares. Prueba de ello es que todos estos asesinatos quedaron impunes. De todos los casos estudiados, 211, tan sólo se ha encontrado un caso en el que la Justicia, ya fuera civil o militar, investigó y llegó a condenar a un segoviano, no falangista, que aprovechó la llegada de los camisas azules de Valladolid para ejercer su particular venganza. Fue condenado, por un tribunal militar, a treinta años por el asesinato de Francisco de la Serna Lobato, mientras que los dos falangistas que lo acompañaban fueron condenados a 6 meses⁶³⁵.

⁶³¹ CASAS DE LA VEGA, R. op. cit., pág. 237.

⁶³² AHN, Salamanca. Leg. 1482. folio 29. PS Madrid.

⁶³³ Archivo Histórico Militar de Ávila. 97. 953, 9.

⁶³⁴ BLANCO RODRÍGUEZ, Juan A., FERNÁNDEZ CUADRADO, Manuel y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A. *Las milicias populares republicanas de origen castellano-leonés*. En ARÓSTEGUI, Julio (coord). *Historia y memoria de la Guerra Civil*, págs. 319 y 325. Además de los testimonios de Siro Sanz y Teófilo García.

⁶³⁵ Arch. Pris. Prov. Exp. nº 4134 de Felipe Valverde Municipio. Causa 467/36 por asesinato.

Al iniciarse el movimiento nacional, el acusado concibió la idea de matar a su convecino Francisco de la Serna con quién se hallaba resentido por cuestiones particulares, y a tal efecto aprovechando los servicios de los falangistas en aquellos días, se puso al habla con uno, al que manifestó que La Serna era un extremista masón y contrario al movimiento nacional. El 19 de agosto sobre las 20.30 horas se presentó Felipe acompañado de otro, Benigno Pereda, en un coche conducido por Evaristo Barrero a la puerta del domicilio de La Serna, al que sacó de su casa, lo llevaron a carretera de La Granja y pasada la casilla de

La Falange se convirtió, desde los primeros días de contienda, en el brazo armado y ejecutor de la política represiva de los sublevados en Segovia. Así se reconocía públicamente, apareciendo en *El Adelantado* que “unos grupos móviles de Falange, bajo la inmediata dirección del gobernador civil, y con itinerario fijado por dicha autoridad y con órdenes concretas, recorren toda la provincia desarmando a los elementos marxistas y dejando organizados grupos de ciudadanos que con gran entusiasmo se aprestan a la defensa de la población y a guardar el orden de sus respectivos términos municipales”⁶³⁶.

Las acciones *pacificadoras* a lo largo de la provincia consistían, además de los fines expuestos, en el saqueo y destrozo de la Casa del Pueblo local o sedes de organizaciones republicanas, quemar de sus libros en la plaza, visita a la escuela para quemar la bandera de la República y detención de todos los sospechosos. Hay testimonios de acciones de este tipo en Navas de Oro, Sebúlcor, Nieva, San Ildefonso, Segovia, Brieva, etc.

Una nota del gobernador civil, comandante España, publicada en *El Adelantado*, así lo recogía: “Se están organizando grupos de Falange con elementos de transporte para acudir dentro de cada zona a evitar que el orden pueda perturbarse”⁶³⁷. Además es muy significativa la frase de la sentencia por el asesinato de Francisco Serna, “aprovechando los servicios de los falangistas en aquellos días”, lo que parece indicar que eran habituales casos similares a éste. Unidades falangistas ejecutaban a personas denunciadas por cualquier otro vecino, acusadas de ser republicanos, masones, marxistas o contrarios al movimiento, sin la más mínima comprobación de su ideología política, detención o interrogatorio. Ni que decir tiene que las delaciones no eran comprobadas ni contrastadas por los ejecutores, que se limitaban a realizar el fusilamiento de la persona o personas señaladas. Así se demuestra en la sentencia por el asesinato de Francisco Serna ya reseñada.

Falange tenía autorización para detener personas, trasladar presos, interrogar en sus propios cuarteles, incautar armas o cualquier tipo de bien, etc. Este poder ilimitado dio pie a las ejecuciones que ahora investigamos y a numerosas arbitrariedades y robos de: animales, carne de matanza, ropas, máquinas, muebles, etc. Las propias autoridades civiles y militares encargaban detenciones a las distintas escuadras de Falange. Así lo certifica una carta de FE de Cuéllar al alcalde de la misma villa en la que informaba sobre una de sus actuaciones: “día fecha y a las 7 tarde, ingresado en depósito municipal vecino de Mata de Cuéllar, Florentino Zarzuela Marinero, cuya detención tenía usted interesada a esta Falange”⁶³⁸.

Cuando las detenciones las practicaban los falangistas, los detenidos corrían el peligro de ser ejecutados en el trayecto desde el lugar del apresamiento hasta la cárcel. Hay bastantes ejemplos de este tipo: Maximino Marugán, Norberto Cerezo, Jesús Hernández, Andrés de las Heras, etc. Aunque en la mayoría de los casos se sabía de antemano que iban a ser ejecutados y no trasladados a ninguna prisión.

Urbano Barreno, vecino de Vegas de Matute, cuenta que el peligro de muerte estaba en el viaje desde su pueblo a San Rafael, y de aquí a Segovia⁶³⁹. Por su parte, Víctor Herranz narra que en su conducción de la cárcel de Santa María a la de Segovia, a la altura del Puente Oñez, los falangistas que los trasladaban querían dejarlos allí, pero los guardias civiles los “defendieron, amenazando incluso a los falangistas”⁶⁴⁰. Algo similar les sucedió a los detenidos en Carbonero el Mayor. Durante su traslado a Segovia, subieron al autobús unos balillas que pedían a sus camaradas mayores que “se los dejaran para

peón caminero le obligó el Valverde a bajar haciéndole varios disparos que le ocasionaron la muerte. Evaristo Barrero es de intachable conducta y denunció los hechos a los jefes de Falange.

⁶³⁶ *El Adelantado*, 30 de julio de 1936.

⁶³⁷ *El Adelantado*, 6 de agosto de 1936.

⁶³⁸ Arch. Mun. Cuéllar, Cpta. Correo de entrada, 1936, fechada el 17 de noviembre de 1936.

⁶³⁹ Testimonio de Urbano Barreno.

⁶⁴⁰ Testimonio de Víctor Herranz.

*matarlos*⁶⁴¹. Hasta ese punto estaba también metido en el cuerpo de los "balillas" de FE - auténticos niños metidos a combatientes- el odio a los adversarios políticos. Al final se impuso la cordura y todo quedó en bravuconadas de chiquillos.

Conocidas las numerosas ejecuciones en pinares y descampados, el objetivo de los detenidos era llegar vivos a la cárcel, donde creían estar más a salvo; al menos tenían más posibilidades de sobrevivir. Así hubo quien, enterado de que iban a buscarle, prefirió entregarse a la guardia civil, porque éstos, a priori, tenían más respeto por las vidas de los opositores. A Domitilo de Pablos, maestro de Cuéllar que pasaba las vacaciones en Montuenga, de madrugada lo fueron a buscar a casa los falangistas, pero como estaba medio desnudo, pidió vestirse un poco, entrando para dentro de su casa. Consiguió salir por la parte de atrás de la vivienda, escapó y se entregó en el cercano cuartel de la guardia civil de Martín Muñoz de las Posadas. Con ello salvó su vida pues le detuvieron y estuvo preso durante toda la guerra, pero sobrevivió⁶⁴².

Debido al excesivo trabajo y la escasez de personal especializado (guardia civil, de asalto o de seguridad) los falangistas se encargaban también de trasladar presos de una prisión a otra. Así lo atestigua una carta del Ayuntamiento de Íscar al de Cuéllar, en la que pedían la conducción de un vecino de su pueblo, detenido en la prisión cuellarana, a Íscar. En la misiva enumeraban los nombres de los falangistas, incluido en nombre del conductor, que no siempre era del partido⁶⁴³. Los traslados se hacían en vehículo requisado por la autoridad militar; por ejemplo, el único coche que había antes de la guerra en Labajos pertenecía, precisamente, al presidente de la Casa del Pueblo, Claudio Gómez, muerto en Valladolid el 28 de agosto. Este vehículo fue requisado y utilizado por la FE local⁶⁴⁴.

Otra actividad propia de las escuadras que recorrían la provincia era la requisa de armas de los desafectos o de afectos no entusiastas. Estas armas eran repartidas entre los propios falangistas. Desde el Juzgado Militar de Segovia pidieron al Ayuntamiento de Cuéllar que le enviaran las armas y documentos recogidos en el domicilio de un detenido. Por su parte, Falange de Cuéllar informó al Ayuntamiento de su villa de que en el registro sólo habían encontrado municiones de pistola 7,65 y cápsulas sueltas del 6,35, las que "*se repartieron entre falangistas de la localidad*". Ahora bien, aunque habían sido ya distribuidas, se ofrecieron para subsanar el error, "*si es preciso se recogerán y entregarán*"⁶⁴⁵.

Algunas armas eran recogidas "distraídamente", incluso de sus propios compañeros de milicias. Se quejaba el alcalde de Montuenga al de Cuéllar, de que los falangistas de esta última villa se habían "*llevado olvidada una escopeta que era de un falangista (de Montuenga) que hacía guardia*"⁶⁴⁶. Es probable que ocurriera esto cuando una escuadra de falangistas cuellaranos fue a buscar al citado Domitilo de Pablos, maestro de Cuéllar que pasaba las vacaciones en este pueblo, como hemos referido⁶⁴⁷.

Los falangistas eran los ejecutores, pero las listas de los "condenados a muerte" las elaboraban los caciques locales: algunos alcaldes (Matabuena, Sepúlveda) propietarios, (familia Mesa de Navas de Oro) curas (Arcones, Bernardos, San Rafael), médicos (Nieva), secretarios (Nieva), veterinarios (Zarzuela del Monte), etc.; que se querían quitar de en medio a los oponentes o simplemente a las personas que habían discutido en algún momento su poder omnímodo, local o comarcal. Incluso se llegó al ofrecimiento por parte

⁶⁴¹ Testimonio de Eufasio García.

⁶⁴² Testimonio de varios vecinos de Valledado y de su hijo Fernando de Pablos.

⁶⁴³ Arch. Mun. Cuéllar, Cpta. Correo de entrada, 1936.

⁶⁴⁴ Testimonio de Santiago Fuentes.

⁶⁴⁵ Arch. Mun Cuéllar, Cpta. Correo de entrada, 1936.

⁶⁴⁶ Arch. Mun. Cuéllar, Cpta. Correo de entrada, fechada el 5 de septiembre de 1936.

⁶⁴⁷ Testimonio de Fernando de Pablos.

de la familia Mesa, de una fuerte suma de dinero, 10.000 pts., por la cabeza de Saturnino de Lucas, el "Cojo de Mudrián", alcalde de dicho pueblo y líder obrero de la comarca de la Tierra de Pinares⁶⁴⁸.

En Segovia, tradicionalmente se había señalado como autores de este tipo de ejecuciones a los falangistas de Valladolid, que habían llegado a Segovia en gran número desde finales de julio. Hay que recordar que Onésimo Redondo fue muerto en un tiroteo en Labajos, el 24 de julio de 1936, cuando se dirigía con otros correligionarios desde Valladolid hasta el Alto del León. Los falangistas de Valladolid organizaron algunas escuadras en Cuéllar y entraron en Coca, Bernardos y Nava de la Asunción, como se explica en el capítulo 2. Incluso el 30 de julio apareció en *El Adelantado* una nota por la que se convocaba a todos los falangistas de Valladolid destacados en Segovia, para que se presentaran, *"sin pérdida de tiempo, en los locales para recibir órdenes"*⁶⁴⁹. No se ha podido averiguar nada sobre el motivo del llamamiento, pero podría entenderse que estaban operando de una manera un tanto incontrolada o descoordinada.

Algunos testigos siguen hablando de los falangistas de Valladolid como muy crueles, María Fuentetaja tenía, y todavía guarda, mucho odio a los falangistas de Valladolid, incluso cuenta que *"iban a buscar a quien ya habían matado"*⁶⁵⁰. Pero, como apuntamos más adelante, con los falangistas forasteros operaban sus correligionarios de esta provincia.

Existen numerosas pruebas que certifican oficialmente, en documentos del Nuevo Estado, la autoría de todas aquellas muertes por parte de falangistas:

1. En la anotación en el Registro Civil de Cabezuela, en la partida de defunción de Francisco Sanz Herrero, natural y vecino de Sauquillo de Cabezas, se escribió: *"Fue muerto por individuos o milicianos de Falange Española, según noticias que ellos dieron al alcalde"*⁶⁵¹.
2. En la referida sentencia por el asesinato de Francisco Serna, el tribunal militar reconocía: *"Aprovechando los servicios de los falangistas en aquellos días"*⁶⁵².
3. En el informe sobre Frutos Gila de la Causa General, se recogió una carta del Ayuntamiento de Fuentemilanos, quien certificaba que estando en su domicilio fueron a por él *"cuatro o cinco desconocidos con uniforme de FE, armados, se lo llevaron y nunca más se supo"*⁶⁵³.
4. El expediente de desaparición de Ponciano Herrero Lobo dictaminaba que *"fue muerto por FE en la noche del 13 de agosto de 1936 en el término municipal de Veganzones"*⁶⁵⁴.
5. En los documentos de la Iglesia también se reconocía la autoría de las ejecuciones ilegales. Escribía el párroco de Mozoncillo en el acta de defunción de Jesús Gilmartín de Francisco, maestro de Fuentepelayo, que falleció a consecuencia de *"haber recibido uno o varios balazos disparados por uno de los de la milicia armada de Falange Española"*⁶⁵⁵.

⁶⁴⁸ LEGUINECHE, Manuel. *Los topes*. Circulo de Lectores, Barcelona, 1978, pág. 133. y testimonios de la zona. Saturnino estuvo oculto en casa del cura y después en un escondite preparado en su casa durante 34 años, hasta que salió en abril de 1970.

⁶⁴⁹ *El Adelantado*, 30 de julio de 1936.

⁶⁵⁰ Testimonio de María Fuentetaja.

⁶⁵¹ Certificado de defunción, fechado el 19 de octubre de 1936, cedido por Pedro Sanz, pues en el libro de defunciones del Registro Civil de Cabezuela, está tachada la frase referida, aunque se entiende perfectamente lo que se había escrito anteriormente.

⁶⁵² Sentencia de la causa 467/36, en Segovia, 25 de noviembre de 1936.

⁶⁵³ Arch. Fiscalía General del Estado, Causa General, Segovia, Caja 1311, Pieza Primera: pueblos.

⁶⁵⁴ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1936. Exp. Desap. Ponciano Herrero Lobo.

⁶⁵⁵ Arch. Epis. Cpta. de licencias de defunción de Mozoncillo (donde fue ejecutado el maestro) correspondiente a 1936.

Además, se cuenta con testimonios de personas que vivieron esos hechos. Por un lado, Cipriano Herrero –que tuvo la suerte de sobrevivir a la ejecución- afirma que *“los falangistas, entre 6 y 8, uniformados y armados, nos llevaron al ayuntamiento. (...) Después nos llevaron en una camioneta atados uno al otro. Al lado de un barranco entre Fuentemilanos y Guijasalvas, nos dispararon a la cabeza y empujaron barranco abajo, dándonos por muertos”*.⁶⁵⁶

Por su parte, Gabriel Arranz -que estaba preso en la *Cárcel Vieja*- escribe que *“el día 15, una patrulla de falangistas se presentó al jefe de la cárcel con una lista, entre ellos Alejandro, con el fin de tomarles declaración, nunca más se supo de ellos”*.⁶⁵⁷

Las “escuadras” de la represión

Hay que decir, en honor a la verdad, que no todos los falangistas se implicaron en las labores de limpieza. Contamos con numerosos testimonios que reconocen el valor e idealismo de los falangistas que luchaban en el frente, pero que, por el contrario, critican con dureza la cobardía de los que permanecieron en retaguardia, porque iban armados a buscar a víctimas indefensas, los apaleaban y después fusilaban. Testigos que lucharon en el frente con el Ejército de Franco, es decir, del propio bando nacional, tienen opiniones elogiosas de los falangistas de vanguardia. Pero, en cambio, descalifican con acritud a los de retaguardia, porque eran los que saqueaban y mataban.⁶⁵⁸

Jackson define muy bien a los miembros de las escuadras dedicadas a la represión. En primer lugar dice que *“muchos de los que dirigieron las purgas en zona insurgente eran los que en su vida habían cosechado menos éxito, los envidiosos de poca categoría que purgando a un ‘rojo’ destruían de paso a un competidor”*. Agrega Jackson sobre los ejecutores que

dadas las condiciones de la purga, la delincuencia juvenil floreció en ambas zonas. ¿Qué podía ser más embriagador que conducir autos requisados, usar armas de fuego, ver el terror mortal en los ojos de las víctimas bien vestidas, y matar sin sentirse responsable personalmente, en nombre de una ‘operación quirúrgica’, para limpiar a la sociedad de un ‘miembro gangrenado’?. En la zona insurgente los partidarios más conservadores se referían a la FE como la ‘FAI-lange’ y ‘nuestros rojos’. Entre los recién afiliados a FE había sin duda un número considerable de elementos anarquistas y comunistas que “habían cambiado de camisa”.⁶⁵⁹

No todos los falangistas se implicaron en las actividades de represión, pues la mayoría se alistaban para combatir en el frente. Pero la minoría que se quedó en retaguardia efectuando labores de limpieza fue especialmente cruel. Los que las ejecutaban volvían de sus acciones vanagloriándose de sus bravuconadas, presumiendo de cómo habían ejecutado a sus víctimas, de las vejaciones que les habían infligido previamente y de cómo habían hecho sufrir a los infortunados antes de fusilarlos. Un falangista andaluz que participó en las ejecuciones de los vecinos de Navas de Oro (preso posteriormente por altercado público en un burdel de Segovia) se jactaba, ante otros presos, de haber abusado sexualmente de una de las víctimas.⁶⁶⁰

Uno de los vecinos de Cuéllar fusilados en Laguna de Duero (Valladolid) llevaba en el bolsillo de la chaqueta el dinero cobrado por el trigo que había cosechado esa campaña.

⁶⁵⁶ Testimonio de Cipriano Herrero.

⁶⁵⁷ Gabriel ARRANZ MARINAS en un folleto escrito a modo de memorias titulado *Una vida truncada por la naturaleza*, entre otras vivencias personales cuenta ciertos aspectos que afectan a este trabajo. pág. 186.

⁶⁵⁸ Testimonio de vecinos de Rapariegos, Samboal, Muñoveros.

⁶⁵⁹ Ambos entrecomillados son de JACKSON, G., op. cit., pág. 275.

⁶⁶⁰ Testimonio de Crispín Rubio. El aludido bien podría ser un falangista de Jaén, Cayetano Fuentes Pardo (detenido en diciembre de 1937 y procesado por desórdenes públicos, causa 256/37), que ya estaba en Segovia al inicio de la guerra, pues había sido herido en el bombardeo republicano del 14 de agosto de 1936.

Tras la ejecución, los falangistas autores de la saca se dirigieron a Valladolid donde gastaron ese dinero en burdeles con prostitutas⁶⁶¹. Estas informaciones eran además hechas públicas con gran fanfarronería y el mayor menosprecio hacia las familias de las víctimas. Un militar comentaba jocosamente en el bautizo de un sobrino del vecino de Fuentemilanos, José de Frutos, cómo él mismo lo había ejecutado⁶⁶².

De la documentación consultada y los testimonios recogidos, se puede elaborar una lista con algunos de los falangistas más destacados implicados en estos casos (de algunos de ellos tan sólo hemos averiguado el apodo con el que se les conocía).

En la capital fue tristemente célebre la "Escuadra del Silencio", integrada, al menos por: Cipriano Allas, apodado "El Barato", quien trabajaba como porta-maletas en la estación de ferrocarril y Evaristo Barrero, hijo de un industrial de fontanería. Otros falangistas de la capital eran: Vicente Leal Vargas (propietario del Garaje España), uno apellidado Reguera, otro Mínguez y Manolo Sánchez. Otro implicado en las sacas fue José Hernández Contreras, sobrino de Juan de Contreras, que se hizo cargo del traslado de los presos fusilados en el Puente Oñez el 27 y 31 de agosto.

De la provincia también se conocen otros siniestros personajes: de Cuéllar, eran muy conocidos por sus vecinos Pedro Gordo, Jacinto de las Heras, y un tal Heredia, que fueron los que "limpiaron" en toda su comarca⁶⁶³. De Sepúlveda eran, Juan Onrubia y Marcos Cristóbal hijo del abogado Mariano Cristóbal⁶⁶⁴. Éstos se llevaron, al menos, a la víctima de Sebúcor y, muy probablemente, también al resto de los enterrados en Veganzones. A los que hay que añadir los cinco vecinos de Sepúlveda, el maestro Cerezo y su hijo. En Cantalejo el falangista más destacado era el hijo del secretario, Manolo Vírveda⁶⁶⁵.

De Navas de Oro procedían el hijo de Basilio Mesa, Alberto Vela, Quintilino López "Barbarroja", Cándido y Felipe Arévalo. Éstos actuaron en La Granja, entre otras zonas⁶⁶⁶. Los falangistas de Santiuste de San Juan Bautista, dirigidos por Australberto, secretario del Ayuntamiento, fusilaron al carretero de Nieva⁶⁶⁷. En Nava de la Asunción, había un tal "Matolas", hermano del militar Francisco González Casanova⁶⁶⁸.

En Otero de Herreros, el cabecilla local era Eliseo Gómez Ingeldo, que más tarde sería nombrado alcalde de la localidad. Participó en la ejecución de muchos vecinos de la zona de la sierra, desde San Ildefonso hasta El Espinar, cuentan que incluso en el cinto llevaba anotadas todas las víctimas que ejecutaba⁶⁶⁹.

En San Rafael, los falangistas tenían su cuartel en "la Casona". Allí murieron bastantes personas, según cuentan algunos testigos⁶⁷⁰. El más significado de los verdugos era el hijo de Manolo Rodríguez, apodado el "Fondista"⁶⁷¹, otro era un joven apellidado Lobo, y también cuentan que entre los falangistas había un cura, el del caserío de Prados⁶⁷². Los falangistas de Bernardos estuvieron actuando por la zona de El Espinar y Vegas de Matute⁶⁷³.

⁶⁶¹ Testimonio de José Senovilla.

⁶⁶² Testimonio de Felipe Dimas. El militar era Petrolino Pérez, propietario de la finca donde trabajaba la víctima.

⁶⁶³ Testimonio de vecinos de Cuéllar.

⁶⁶⁴ Testimonio de vecinos de Carrascal y Sebúcor.

⁶⁶⁵ Testimonio de Calixto, de Cabezuela.

⁶⁶⁶ Testimonio de Crispín Rubio Arranz.

⁶⁶⁷ Testimonio de Máximo Olalla.

⁶⁶⁸ Testimonio de Juan Quinzano.

⁶⁶⁹ Testimonio de Urbano Barreno Orejudo y vecinos de El Espinar.

⁶⁷⁰ Testimonio de Silvestre Ramos, Urbano Barreno.

⁶⁷¹ Testimonio de Silvestre Ramos, Urbano Barreno.

⁶⁷² Testimonio de Urbano Barreno.

⁶⁷³ Testimonio de Leopoldo Cámara.

De Carrascal del Río, era Isidro, conocido por *Pilía*, que denunció al maestro Cerezo a los falangistas de Sepúlveda⁶⁷⁴. En Villacastín hablan de una *escuadra negra* como autora de la represión en esta villa.

Entre los falangistas foráneos que actuaron en Segovia, conocemos varias escuadras de Valladolid. Testigos afirman que una de ellas procedía de la comarca de Olmedo. También operó en esta provincia alguna escuadra originaria de Burgos, concretamente de la zona de Aranda de Duero, quienes ejecutaron, al menos, a los 9 vecinos de Riaza⁶⁷⁵.

Pero, por todo lo que se ha escrito anteriormente, no podemos decir que actuaran solos, ni mucho menos, los falangistas de Valladolid o Burgos, pues iban, en muchos casos, acompañados de sus correligionarios de Segovia, tanto de la capital como de la provincia.

Al poco tiempo de iniciada la guerra los segovianos sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo, quiénes estaban muriendo y quiénes estaban matando. Los falangistas eran los ejecutores y se quejaban de que ya no les tenían bien considerados los que antes les alentaban o incluso ordenaban sus acciones represivas. Palomares ha recogido un interesante testimonio de Jesús Rivero Meneses, jefe provincial de FET de Valladolid. Exponía Rivero: *“ha sido injustamente valorada la presencia y participación directa de la Falange de Valladolid en la más penosa, dura e ingrata, pero inaplazable acción represiva de las primeras horas de intensidad revolucionaria –aplaudida por sectores de predominio público, de los cuales surgieron, más tarde, nuestros más violentos, sesudos y calculistas detractores-”*⁶⁷⁶.

Pudiera ocurrir que, superados los primeros momentos, las autoridades militares no quisieran mantener a algunos falangistas manchados de sangre; así, el 24 de octubre de 1936 Pedro Gordo fue cesado de su puesto de concejal en Cuéllar por el gobernador civil. No se conoce la razón, pero podría ser por el exceso de *celo exterminador*, en cualquier caso no estuvo más de dos meses en el Ayuntamiento.

Otro caso es el de Francisco Atorrasagasti Ibáñez, quien fue expulsado de FE *“por falta de disciplina”*, lo que se hizo público en *El Adelantado* *“para ejemplo y conocimiento”*⁶⁷⁷. Había sido uno de los detenidos por los incidentes del baile *El Pensamiento*, herido posteriormente en el bombardeo del 14 de agosto, moriría en el frente de la sierra a finales del mismo año. A pesar de haber sido expulsado de FE, más adelante le sería dedicada en Segovia una calle a su memoria, que, por cierto, perdura hasta la fecha⁶⁷⁸.

El Requeté

Se conocen muy pocos datos sobre la actuación de los requetés en la provincia de Segovia. Tan sólo hubo dos Tercios destinados en esta provincia: el Tercio de Santiago, en Navafría y el Tercio Abarzuza en Somosierra⁶⁷⁹. Respecto a las ejecuciones en Navafría, ya fueran en el puerto o en el pueblo, no se puede afirmar o descartar la participación de los requetés, puesto que ni en documentos ni por los testimonios se aclara la autoría de todos los fusilamientos en esa zona. Si acaso, parece más probable responsabilizar a los requetés de los ejecutados en el puerto donde estaban destacados. En el alto murieron, al

⁶⁷⁴ Testimonio de vecinos de Carrascal.

⁶⁷⁵ Testimonio de Honorio Muñoz y Eulalia Cancho.

⁶⁷⁶ Citado por PALOMARES IBÁÑEZ, op. cit. Obtenido de AGA, SGM, DNP, caja 23. Informe sobre situación Jefatura Provincial de Valladolid.

⁶⁷⁷ *El Adelantado*, 8 de octubre de 1936.

⁶⁷⁸ Murió en el frente del Alto del León de una forma muy poco ejemplar, pues cuentan que estaba bebido, se subió a un parapeto diciendo *“Rojillos si tenéis cojones disparadme”*, y lo hicieron.

⁶⁷⁹ CASAS DE LA VEGA, R. *Las Milicias Nacionales*. op. cit., vol. 2, pág. 932.

menos: José Gutiérrez⁶⁸⁰, Vicente Gil, Isidoro Moreno y Martín Sánchez (si bien éste último había sido detenido en el pueblo por la guardia civil).

En la capital se ha comprobado su actuación en la detención del obrero Santos San Frutos Anceja el 4 de agosto de 1936⁶⁸¹.

La Guardia Civil

Como hemos expuesto, el gobernador civil delegado de la autoridad militar nombrado tras la sublevación era el comandante de la guardia civil Joaquín España Cantos. En materia represiva, normalmente la guardia civil se limitaba a detener a los sospechosos y a trasladar a las prisiones correspondientes a los que quedaban presos. Pero en la zona de Navafría, que engloba Matabuena, Gallegos y la propia Navafría (más los anejos de Martíncano y Aldealengua de Pedraza), con un total de 14 fusilados, la mayoría de las ejecuciones estudiadas fueron llevadas a cabo por los guardias civiles del destacamento local. Salvo las de José Berzal García achacada a los falangistas, y los reseñados en el apartado anterior posiblemente fusilados por los requetés del puerto de Navafría.

Se ha comprobado la responsabilidad directa de guardias civiles en los siguientes fusilamientos:

Martín Sánchez, vecino de Navafría, *“fue llamado el 29 de octubre de 1936 por la guardia civil del puesto, donde se presentó a las 4 de la tarde, hora que en que vino del trabajo, sin volver a saber de él”*⁶⁸². *“Después fue trasladado del cuartel de Navafría al cercano Puerto del mismo nombre, situado en el frente de batalla, en unión del maestro Vicente Gil, y allí fueron fusilados los dos”*⁶⁸³. Dionisio Sanz, también vecino de Navafría, fue *“llevado por una pareja de la guardia civil el 12 de junio de 1937, sin que se volviese a saber de él”*⁶⁸⁴. De Luis Ayuso, maestro de Gallegos, cuenta su hijo en el expediente de desaparición: *“a mi padre se lo llevaron un brigada, un cabo y un número de la guardia civil del Puesto de Navafría”*⁶⁸⁵. Por su parte, Felipe de Lucas, vecino de Matabuena, *“el día 8 de septiembre se presentaron fuerzas de la guardia civil del destacamento de Navafría, y sin que se sepan las causas se llevaron detenido a Felipe al referido destacamento”*⁶⁸⁶.

5. 1. 4. Las ejecuciones indiscriminadas

En este capítulo estudiamos las ejecuciones o "paseos" llevadas a cabo sin ningún tipo de proceso judicial previo. Las víctimas eran detenidas en sus propios domicilios, su centro de trabajo o sacadas de la cárcel donde estaban para ser fusilados en alguna cuneta, pinar, río o tapias de un cementerio. Algunos de los modos de actuar se han podido estudiar en los distintos expedientes de desaparición practicados por los Juzgados de Instrucción, o incluso en la única sentencia del único caso juzgado, por el asesinato de Francisco Serna.

En principio, las sacas de los domicilios se producían cuando un grupo de falangistas uniformados se presentaba en la vivienda de la víctima, obligando a la persona

⁶⁸⁰ Éste era un joven derechista que colaboraba con los nacionales de una manera entusiasta. Subió al puerto con un cargamento de víveres y allí comenzó a preguntar por los cañones, por las posiciones propias y las de los republicanos. La curiosidad hizo sospechar a los militares, que sin mayores investigaciones lo fusilaron inmediatamente, como se explica en el anexo nº 1.

⁶⁸¹ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia. Reg. Civ. Caja 220, 1, 1941. Exp. nº 9. San Frutos Anceja.

⁶⁸² Jgdo. Sepúlveda. Civil, 1940. Exp. Desap. Martín Sánchez y de la Mata.

⁶⁸³ Jgdo. Sepúlveda. Civil, 1980. Exp. Def. Martín Sánchez y de la Mata.

⁶⁸⁴ Jgdo. Sepúlveda. Civil, 1940. Exp. Desap. Dionisio Sanz González.

⁶⁸⁵ Jgdo. Sepúlveda. Civil, 1940. Exp. Desap. Luis Ayuso García.

⁶⁸⁶ Jgdo. Sepúlveda. Civil, 1942. Exp. Desap. Felipe de Lucas.

requerida para que les acompañara con el pretexto de realizar una “*declaración ante el juez*”, después no se volvía a saber nada, “oficialmente”, del infortunado⁶⁸⁷. En algunos pueblos de la provincia, los alguaciles municipales acompañaron a los falangistas o a los guardias civiles en las detenciones, señalándoles los domicilios de las víctimas. Así ocurrió, al menos en Riaza y Zarzuela del Monte.

Varias víctimas fueron sacadas de su puesto de trabajo: Eugenio Fernández y Atanasio de Antonio fueron llevados de la carpintería donde trabajaban; Anselmo San Frutos fue sacado de la fábrica Klein. Especialmente deplorables son los casos de los maestros sacados de sus escuelas delante de sus propios alumnos, mientras estaban realizando su labor docente. Luis Ayuso fue sacado de la escuela de Gallegos “*cuando estaba dando clase el día 30 de octubre de 1936, a las 11 de la mañana*”⁶⁸⁸. Lo mismo sucedió a Vicente Gil en la escuela de Navafria⁶⁸⁹.

En algunos casos, las sacas, fueran del domicilio de las víctimas o de la cárcel, estaban motivadas por alguna acción de guerra del Ejército republicano, tal como un bombardeo de la aviación. Estos hechos eran respondidos por los falangistas con un acto de venganza. Fue recogido en *El Adelantado* lo ocurrido en Valladolid, cuando se formó una manifestación contra el ataque de la aviación republicana, que provocó dos muertos, una mujer y una niña. Mola les arengó desde el ayuntamiento: “*yo os prometo, más aún os juro que dentro de muy pocas horas habrá una represalia por este hecho vandálico, pero no será contra las mujeres y niños, sino contra enemigos antiespañoles y traidores a los que hay que exterminar*”⁶⁹⁰.

En Segovia bien pronto comenzaron estas represalias. El 25 de julio de 1936, muy de mañana, llegó a Segovia la noticia de la muerte de Onésimo Redondo en Labajos el día anterior. Un falangista de aquellas fechas cuenta que había hecho guardia junto a otros compañeros en un puente a las afueras de Segovia, cuando llegó otro falangista más exaltado que les dijo: “*vamos a vengar a Onésimo*”, por lo que cogieron una camioneta los ocho o diez que formaban la guardia y se dirigieron hacia Labajos por Santa María de Nieva hasta llegar a la carretera de Valladolid. Iban buscando los restos de la Columna Mangada, autores de la muerte de Onésimo. Como quiera que no los encontraron, de allí bajaron en dirección sur hasta Villacastín, donde también habían estado los republicanos. Los falangistas segovianos, al no encontrarse fuerzas republicanas en su camino se volvieron de Villacastín a Segovia y fueron a oír misa. De este modo tan pacífico acabó uno de los primeros intentos de venganza⁶⁹¹.

Antes de llevarlos a ejecutar muchos detenidos pasaban primero por el cuartel local de Falange donde eran torturados, obligados a ingerir aceite de ricino o molidos a palos. Tristemente famosos son la sede de Segovia, en un caserón de la plaza de los Huertos, y la “Casona” de San Rafael. Dicen que Pedro Natalías “*iba medio muerto camino del cementerio*”⁶⁹². Frutos Gila, Maximino Marugán, Julián Dimas, Alejandro Arranz, ...; sufrieron palizas antes de ser fusilados.

Hay algunos casos conocidos más minuciosamente: Alejandro de Frutos fue llevado al cuartel de FE donde fue golpeado. Después los falangistas lo pasearon por la Calle Real (calle principal de la capital). Entraban en los bares donde era obligado a beber un vasito de aceite de ricino en cada establecimiento, y, además, tenía que decir “*arriba España, muera Azaña*”⁶⁹³. Por su parte, Basilio Maté, empleado municipal depurado, sufrió innumerables palizas, lo dejaron tuerto, le quitaron hasta los pantalones. Cuando lo

⁶⁸⁷ Exptes. Desap. Venancio y Rufino Blanco Arribas, José García, Ponciano Herrero y Santiago Martín. Sentencia por asesinato de Francisco de la Serna.

⁶⁸⁸ Jgdo. Sepúlveda. Civil, 1943. Exp. Desap. Luis Ayuso.

⁶⁸⁹ Testimonio de María y Justo Moreno.

⁶⁹⁰ *El Adelantado*, 23 de septiembre de 1936.

⁶⁹¹ Testimonio de Ricardo Mateo.

⁶⁹² Testimonio de Liborio López.

⁶⁹³ Testimonio de Liborio López.

llevaban medio muerto camino del cementerio para fusilarlo, balbuceaba el nombre de un falangista importante de Segovia y los verdugos que lo llevaban se preocuparon por el error que supondría matar al amigo de un camarada y lo trasladaron al Hospital de la Misericordia, no sin antes amenazarlo para que no contara lo sucedido⁶⁹⁴.

Entre los métodos empleados para la ejecución, el más utilizado era, normalmente, el tradicional fusilamiento en las tapias de los cementerios. Pero éste no era el único. Otro sistema muy utilizado era el que eufemísticamente llamaban "la carrera del galgo" o "la del conejo", también llamada oficiosamente "ley de fugas". Consistía en que llegados a un lugar, los falangistas apeaban a las víctimas de las camionetas en que los trasladaban y les dejaban "libres", por lo que el que se escapara corriendo se salvaba (hay varios ejemplos de este tipo, que explicamos más adelante). Este método puede explicar las heridas de bala, con orificio de entrada en la espalda, de los cadáveres sin identificar aparecidos en el Puente Oñez, aunque también pudieran ser simples ejecuciones por la espalda, sin dar opción al intento de huida:

El cadáver recogido el 18 de agosto presentaba las siguientes heridas: *"una en la espalda, otra en la región lumbar superior y otra en la cabeza en el cráneo, mortales de necesidad, las que le originaron la muerte según certificado facultativo"*⁶⁹⁵. Por otro lado, el cuerpo recogido el 16 de septiembre presentaba tres heridas: *"una en el hipocondrio derecho, otra en la espalda, lado izquierdo de la región escapular y otra en la región temporal del mismo lado. Todas ellas sin orificio de salida y producidas por arma de fuego, siendo la causa de la muerte por hemorragia interna, por haber interesado órganos importantísimos para la vida"*⁶⁹⁶.

Hubo también casos de crueles asesinatos no exentos de torturas previas, (Maximino García, Marinero Criado, Natalias García); otros fueron rociados de gasolina y quemados vivos (los fusilados en Otero de Herreros, Navas de San Antonio, Escobar). La noche no siempre era cómplice de estos asesinatos, a veces a pleno sol de agosto se producían las ejecuciones (Navafría, Palazuelos, Zarzuela del Monte).

Incluso se dio un caso en que las autoridades militares obligaron a todo el pueblo a presenciar los fusilamientos para escarnio público de las víctimas y muestra de lo que podía ocurrir a los desafectos. En Matabuena fue *"avisado todo el pueblo por el alguacil, para que presenciaran el fusilamiento, amenazando incluso por lista para que todos miraran"*⁶⁹⁷.

En el modo de efectuar las ejecuciones no ahorraban sufrimiento a las víctimas, pues éstas no morían en el acto del fusilamiento. Como afirmaba Bahamonde sobre Sevilla, *"al principio fusilaban los falangistas, pero lo hacían muy mal, no acertaban a la primera descarga y los tenían que rematar en el suelo"*⁶⁹⁸. Carmen Arranz señala que su hermano Alejandro no murió del fusilamiento, decía balbuceando que lo *"mataran de una vez"*, pero lo enterraron vivo. Así le contó el cura José Yuste, capellán-director del cementerio de Segovia, amigo de la familia (por tanto, como se apunta en el apartado siguiente, el responsable del camposanto conocía perfectamente que había fusilamientos en las tapias del cementerio y se enterraban posteriormente en su recinto). Este hombre decía a los verdugos que si los tenían que fusilar se aseguraran bien de que las víctimas hubieran muerto *"y no los enterraran vivos"*. El clérigo se quejó de las muertes indiscriminadas, por lo que también fue amenazado⁶⁹⁹.

⁶⁹⁴ Testimonio de Gregorio González y Mercedes González.

⁶⁹⁵ Reg. Civ. Anaya; anotación de 18 de agosto de 1936.

⁶⁹⁶ Reg. Civ. Anaya; anotación de 16 de septiembre de 1936.

⁶⁹⁷ Testimonio de Antonio Gil.

⁶⁹⁸ BAHAMONDE Y SÁNCHEZ DE CASTRO, A., op. cit., pág. 126.

⁶⁹⁹ Testimonio de Carmen Arranz.

Se dieron varios casos extremadamente crueles en los que eran ajusticiados varios miembros de una familia en la misma saca. La crueldad se agravaba al ejecutar primero al hijo para mayor sufrimiento del padre (Norberto Cerezo y su hijo Manuel, Lucas Carrera y su hijo Mariano, Celedonio Benito y su hija Purificación); o en primer lugar la esposa y luego el marido (así sucedió al matrimonio Cabrera).

En los últimos momentos, cercana ya la ejecución, algunas víctimas gritaban ¡Viva la República! u otros vivas revolucionarios. Otros -agarrotados por el terror- no podían articular palabra, o se santiguaban si eran religiosos. Sobre este tema apareció una editorial sin firma en *El Adelantado*, titulada “*A la hora de la muerte*”, en la que su autor daba una visión demagógica de estas circunstancias. Parecía escrita por un miembro de un pelotón de ejecución, pues afirmaba:

En el momento del fusilamiento (...) hombres de vasta cultura, otros menos ilustrados, otros carentes de toda ilustración (...) todos coinciden en dedicar sus últimos momentos al homenaje de recuerdo de España, a la que han hecho tanto daño. Abjuración de ideas disolventes, protestas de amor a España (...) Ahora, ahora, cuando España contempla su territorio teñido de sangre (...). Cuánto sufrimiento habríais evitado a España, hermanos arrepentidos (...) Nuestro perdón de patriotas, nuestro perdón de católicos⁷⁰⁰.

Como norma general los cadáveres quedaban tirados en el lugar de la ejecución, para que todos vieran la suerte que esperaba a los adversarios políticos, a modo de ejemplarización. Otro motivo para utilizar este tipo de actuación era el infundir mayor terror, pues no produce el mismo efecto la noticia de que han fusilado a un vecino, que ver el cuerpo del propio vecino asesinado. Además, la costumbre de abandonar el cadáver era síntoma claro del desprecio que sentían los verdugos por sus víctimas. Con esta práctica los falangistas que efectuaban las sacas también evitaban dejar constancia de su autoría.

En algunas ocasiones los falangistas llamaban al enterrador municipal y se lo llevaban con ellos para que hiciera el trabajo en el momento⁷⁰¹. En el conato de ejecución a los vecinos de Samboal, fueron las víctimas las que tuvieron que cavar su propia fosa, aunque tuvieron suerte y no llegaron a ser fusilados⁷⁰².

Muchas veces los cadáveres abandonados en el lugar del crimen eran después recogidos por los enterradores, que incluso se encargaban de comunicar las muertes al Juzgado Municipal, como sucedió en Villacastín⁷⁰³. En otras ocasiones era el sereno quien encontraba los cuerpos, así le ocurrió al empleado de la misma villa de Villacastín, quien dio parte de los dos cadáveres que encontró⁷⁰⁴.

En Cabezuela los propios falangistas fueron quienes avisaron al alcalde de que habían fusilado a varias personas, para que el edil organizara el entierro de las víctimas⁷⁰⁵, de igual manera obraron en Navas de San Antonio⁷⁰⁶. En Pascuales también avisaron en el pueblo de los cinco fusilados en su término municipal, que procedían de Navas de Oro.

Cuando un cadáver era encontrado en el campo, eran avisadas las autoridades locales del término municipal correspondiente, alcalde o juez municipal, quienes, en muchos casos ordenaban la sepultura en el mismo lugar en que aparecían⁷⁰⁷, o trasladaban los cuerpos al cementerio de la localidad⁷⁰⁸.

⁷⁰⁰ *El Adelantado*, 31 de agosto de 1936.

⁷⁰¹ Testimonio de A. García Nuño.

⁷⁰² Testimonio de Sotero García.

⁷⁰³ Reg. Civ. Villacastín, anotaciones del 8 de agosto de 1936.

⁷⁰⁴ Reg. Civ. Villacastín, anotaciones del 17 y 24 de agosto de 1936.

⁷⁰⁵ Reg. Civ. Cabezuela, anotación literal en el libro de enterramientos de los tres fallecidos del 13 de agosto de 1936.

⁷⁰⁶ El alcalde de Las Navas, Pedro Polo Puente, declaró en el Exp. Desap. de Pedro Garrido, fusilado en su localidad, que no recordaba ni conocía “*al jefe de la fuerza armada que reclamó su auxilio para enterramiento y que supone y que era rumor en todo el pueblo que fue muerto por la fuerza como contrarios a la misma y en choque con la misma*”. Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 299, 1, 1937. Exp. nº 24. Pedro Garrido.

⁷⁰⁷ Los vecinos de Villacastín Luis García y Julio Maroto fueron enterrados en el lugar de la ejecución, como corrobora el Reg. Civ. de la villa. En Navas de S. Antonio los vecinos de El Espinar allí fusilados fueron enterrados también en el lugar

Por otro lado, como quiera que los ejecutores no siempre daban el tiro de gracia, algunas víctimas quedaron malheridas, pudiéndose recuperar a duras penas y escapar de la muerte. Esa suerte tuvieron, al menos, el vecino de Zarzuela del Monte, Cipriano Herrero, ejecutado y tirado por un barranco junto a José García; y José Díez que escapó con un tiro de un fusilamiento en las tapias del cementerio de Segovia. Parecida situación padecieron Arcadio Muñoz en Cuéllar y Pedro Puentes en San Ildefonso, que fueron fusilados, pero malheridos pudieron llegar a sus casas. A Primitivo vecino de Martín Muñoz de las Posadas lo llevaron a ejecutar al Puente Oñez, pero como después de la paliza que le propinaron le salió sangre de la sien, los falangistas lo dieron por muerto aunque simplemente había quedado inconsciente, así que pudo volver vivo al pueblo.

Se conocen también numerosos casos de víctimas que consiguieron escapar en el mismo momento de la ejecución: Alejandro de Frutos Yagüe, se salvó saltando la tapia del cementerio de Segovia; Pedro Chamorro, pastor de Torregutiérrez, se tiró al río Cega; un maestro de Fuenterrebollo y los 5 afiliados a la Casa del Pueblo de Samboal se salvaron, cuando estaban cavando su propia fosa, porque alguien llegó a tiempo para ordenar que no se produjera la ejecución; un vecino de Cabezuela y Vicente Herrero Barrio escaparon de la camioneta que los llevaba; Julián Dimas Barrio y Florencio del Rey (en distintas sacas) salieron corriendo del vehículo que los había transportado, al llegar al lugar de la ejecución en el Puente Oñez; Donato Sanz Gutiérrez, logró escaparse de sus captores con las esposas puestas, y con ellas consiguió llegar a Madrid.

A veces uno de los falangistas que practicaban las sacas conocía a alguna de las víctimas que llevaban en las camionetas. En estos casos, los infortunados condenados a muerte se salvaban “in extremis” del fusilamiento. En la camioneta de los ejecutados en Cabezuela cuentan que iban otros camisas azules de la zona de Cantalejo con los falangistas de Valladolid. Testigos refieren que estos convecinos posiblemente dejaran escapar a algún conocido, incluso puede que desataran a dos de ellos que lógicamente serían sus paisanos⁷⁰⁹.

Los fusilados no tuvieron ni misa, ni entierro, ni nada. A veces, porque los curas decían que no eran dignos de ser enterrados como católicos; otras porque algunos familiares miraban muy mal a los curas, pues los veían como cómplices de los asesinos. A la madre de Frutos Gila, *“a pesar de ser de misa diaria, el cura la quería obligar a confesar para darle un entierro digno a su hijo, ella dijo que no tenía por qué contarle sus cosas a nadie, y se quedó sin oficio religioso”*⁷¹⁰.

5. 1. 5. Las sacas de las prisiones

Al contrario que los habituales “paseos”, a las sacas de las prisiones los militares pretendían darle un respaldo “legal”. La excusa oficial era el traslado de presos de las cárceles de Segovia a las de Valladolid, Salamanca o Burgos, pues *“...habida cuenta de que por no ser posible tener en la Prisión Provincial a todos los detenidos...”*⁷¹¹, tenían que trasladar a los presos excedentes. Hemos podido comprobar las sacas de las cárceles de la capital de los días 15, 27 y 31 de agosto de 1936⁷¹². Así, Pedro Natalías *“fue entregado a la fuerza que se presentó a recogerlo con orden del gobernador, delegado de la autoridad militar, para su traslado a Burgos el 15 de agosto”*⁷¹³; y Heliodoro Fernández *“fue entregado*

de la ejecución, según testimonio de Eduardo García, hijo del juez municipal, pero no se anotaron en el Reg. Civ.

⁷⁰⁸ Reg. Civ. Mozoncillo, Exp. Desap. de Jesús Gilmartín.

⁷⁰⁹ Testimonio de Pedro Sanz, de Sauquillo.

⁷¹⁰ Testimonio de Felipe Dimas.

⁷¹¹ Arch. Prov. Caja J. 4852. Causa 586/36. Providencia del juez Antonio Rey Sánchez, 3 de septiembre de 1936.

⁷¹² Una de ellas está recogida en el anexo documental.

⁷¹³ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia. Caja 299, 1, 1937. Exp. Desap. Pedro Natalías. Informe del dtor. de la Prisión Provisional.

a la fuerza pública para su traslado a Valladolid el 31 de agosto”⁷¹⁴. Después, la explicación oficial era que la víctima “al ser conducido desde la prisión de esta capital a Valladolid saltó de la camioneta en la cual iba transportado, ignorándose su actual paradero”⁷¹⁵.

La mayoría de los presos afectados por las sacas eran detenidos gubernativos, es decir, las personas detenidas que estaban a disposición del gobernador civil o del gobernador militar. No estaban sujetos a proceso judicial alguno, pero podían permanecer recluidos varios años, de hecho la mayoría de ellos lo fueron durante toda la guerra. No se les acusaba de nada, simplemente las nuevas autoridades los consideraban peligrosos. Era una figura jurídico-penal ya empleada en el régimen republicano tanto para la represión de los revolucionarios de izquierda por los sucesos de octubre de 1934, como para combatir las acciones terroristas de la extrema derecha.

Por el contrario, la mayoría de los detenidos dependientes de la jurisdicción militar no sufrieron percance en estos primeros momentos, puesto que estaban sujetos a proceso judicial y dependían de un juez militar. Pero también es posible que simplemente no diera tiempo a que las víctimas fueran procesadas porque fueran eliminadas antes, como pudo ocurrir con Anastasio Miguel, convocado ante la justicia militar el 29 de marzo de 1937⁷¹⁶, cuando había sido fusilado el 30 de agosto de 1936; y los vecinos de Segovia José Escudero, Alejandro Arranz, José Peña y Manuel Serrano González, requeridos por los tribunales civiles el 12 de febrero de 1937⁷¹⁷, acusados de sedición, cuando habían sido ejecutados, el 12 de agosto el primero, y los tres últimos el 15 del mismo mes de 1936.

Contamos con un caso de tres presos condenados a 30 años por consejo de guerra, que fueron sacados de la cárcel el 27 de agosto, con el delegado de Trabajo, Marco Elorriaga, que era detenido gubernativo. Oficialmente iban trasladados a Salamanca, pero allí no llegaron. Desconocemos el lugar de ejecución, pero como quiera que el responsable de la conducción era Santos Hernández (también responsable de la saca del 31 del mismo mes que acabó con los presos en el Puente Oñez), es probable que tuvieran igual fin en aquel lugar.

En Segovia se produjeron al menos dos sacas de presos, coincidiendo con dos bombardeos de la aviación republicana. Los bombardeos, según cuentan numerosos testigos, no eran demasiado destructivos, se limitaban al lanzamiento, desde un único avión, de bombas de pequeño tamaño. El aparato era conocido en Segovia como el “pájaro negro” y sobrevoló la capital y la zona de la sierra con relativa frecuencia durante los primeros meses de la guerra, hasta que la aviación franquista se hizo dueña de la situación. Testimonios incluso afirman que el piloto era segoviano, concretamente de la familia Rexach⁷¹⁸.

La primera de las sacas se produjo la madrugada del 15 de agosto, como represalia por el bombardeo republicano de la mañana del día anterior. Según Contreras, “ese fue el castigo más duro, mediada la mañana, con las calles repletas de gente, especialmente en los alrededores del Azoguejo. Un avión fue descargando desde los Huertos hasta la estación del Norte, arrojó una bomba al inicio de la carretera de Boceguillas, delante de un almacén de coloniales de Claudio Moreno, donde había mucha gente”⁷¹⁹. Cayó otra bomba

⁷¹⁴ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia. Caja 299, 2, 1939. Exp. Desap. Heliodoro Fernández. Oficio de la Comisaría de Vigilancia al Juzgado de Instrucción de Segovia.

⁷¹⁵ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia. Reg. Civ. 1937. Exp. Desap. Agustín Hernández. Informe firmado por el Gob. Civ. interino de Segovia, José Jiménez Alfaro el 17 de diciembre de 1936.

⁷¹⁶ BOP, 29 de marzo de 1937, como “encartado en la pieza separada causa 392/36, comparezca en el Juzgado de Plaza, ante Ramón Utrilla Sellés”.

⁷¹⁷ BOP, 12 de febrero de 1937. El J. Mun. de Segovia, Antonio Reneses Pascuarelli, citó, entre otros, a los cuatro anotados, por la causa 117/36, ya reseñada en el cap. 1.

⁷¹⁸ Testimonio de Manuel González y vecinos de Palazuelos.

⁷¹⁹ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 105.

más en la plaza de los Huertos, donde tenía su cuartel la Falange, que hirió a tres falangistas.

El bombardeo, según una nota oficial del Gobierno Civil publicada en *El Adelantado* de la tarde del mismo día 14 de agosto⁷²⁰, produjo 8 muertos y varios heridos. Entre las víctimas había un fallecido y tres heridos falangistas. El diario publicó una nota de FE con el nombre del fallecido en su cuadro de honor.

La interpretación que da Contreras sobre el objetivo del bombardeo a Segovia, es un tanto aventurada: *“Es posible que el objetivo de aquel día fuese precisamente el Acueducto romano para dejar sin agua a la población, incluso aparecieron fotos en la prensa roja con el acueducto arruinado por las bombas”*⁷²¹. Hay que hacer constar que no hemos encontrado este dato en la prensa republicana.

En opinión de Contreras, las consecuencias políticas del bombardeo fueron nefastas para el Frente Popular, puesto que, siguiendo el razonamiento del cronista, perdieron muchos seguidores, *“antes de los bombardeos había sectores en la ciudad, sobre todo en los medios populares, que no sentían simpatía hacia el Movimiento y que a duras penas disimulaban su afición al FP”*. Los medios populares a los que se refiere Contreras son los barrios obreros como El Mercado, San Millán y, especialmente, San Lorenzo de tradición socialista. Pero continúa la aventurada interpretación, pues dice el cronista: *“El peligro nos unió a todos (...) En septiembre de 1936 muy adentro tenía que tener el veneno el segoviano que no viese en el FP la amenaza a sus hogares, el agresor dispuesto a todo para satisfacer sus anhelos de dominio”*⁷²².

Pero, lo que más nos interesa en este capítulo es la "justificación" o interpretación de las represalias que se produjeron. Contreras escribe más adelante que *“el paso de las víctimas, algunas de ellas mujeres y niños, y lo estúpido e injustificado de las agresiones contra barrios tranquilos de una ciudad indefensa, causaron un clamor de indignación general que en algunos momentos fue preciso contener, no sin trabajo para que no se desbordase en represalias sangrientas”*⁷²³. Pues bien, esa noche murieron, al menos que se haya podido comprobar con el Registro Civil y testimonios de familiares, 7 presos sacados de la *Cárcel Vieja* y 3 de la Prisión Provincial, fusilados en las tapias del cementerio de la ciudad. Es muy probable que hubiera más víctimas el mismo día, hasta un total de 15, como cuentan algunos testigos⁷²⁴.

Gabriel Arranz Marinas, hermano de un fusilado esa noche, nos narra las consecuencias que produjo el bombardeo del día 14 de agosto, en la *Cárcel Vieja*, donde estaba preso:

Decía la gente fanática: -Por cada bomba que suelte, sacamos 6 presos de la cárcel y los fusilamos-, y así lo hicieron en la madrugada del día 15, una patrulla de falangistas se presentó al jefe de la cárcel con una lista entre ellos Alejandro, ‘con el fin de tomarles declaración’. Nunca más se supo de ellos. Años después, por boca de un moribundo, probablemente algún arrepentido que tomó parte en la acción, sabemos donde reposan sus restos⁷²⁵.

Según cuenta Isidoro Romano, preso en la Prisión Provincial, el mecanismo empleado para las sacas era que el funcionario llamaba a los presos *“diciendo que iban a trasladarles, aunque por las horas que eran sabían de qué iba la cosa”*⁷²⁶. Eran falangistas

⁷²⁰ *El Adelantado*, 14 de agosto de 1936.

⁷²¹ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 105.

⁷²² CONTRERAS, J., op. cit., pág. 107.

⁷²³ Los entrecomillados anteriores son de CONTRERAS, J., op. cit., pág. 107. El subrayado es mío.

⁷²⁴ Testimonio de Manuel González, Liborio López. Como explicamos en el anexo nº 1, ese día fueron fusiladas en la capital otras 6 personas, de las que no se tiene constancia pasaron por la cárcel.

⁷²⁵ ARRANZ MARINAS, Gabriel, pág. 185. No indica dónde están los restos, su hermana Carmen tampoco conoce este dato, aunque piensa fue en las tapias del cementerio.

⁷²⁶ Testimonio de Isidoro Romano.

los que llevaban a cabo las sacas llevando las órdenes firmadas por el gobernador civil Joaquín España para el traslado de presos al penal de Burgos o a Salamanca. Los elegidos para la represalia fueron significados elementos socialistas, entre ellos, dos maestros dirigentes de Trabajadores de la Enseñanza (Pedro Natalías y Julio Fuster), el presidente de la Agrupación Socialista de Segovia (Manuel Gómez) y el presidente de la Casa del Pueblo de Valverde (Teófilo Carrasco, hermano de José Carrasco, presidente provincial de Izquierda Republicana).

Se produjo otro bombardeo en Segovia el 30 de agosto, en el que murieron cuatro personas. Según *El Adelantado* “no parece que Segovia era el objetivo, pues la aviación nacional lo perseguía, arrojando para aligerar algunas bombas.”⁷²⁷.

Gabriel Arranz dice que ese día no hubo saca en la *Cárcel Vieja*, pero hemos comprobado la orden de traslado de los presos de esta prisión que fueron ejecutados en el Puente Oñez el día 31 de agosto. Además, el párroco de San Martín escribió sobre el maestro Ángel Gracia, ejecutado el mismo día: “Salió de la Cárcel Vieja para ser fusilado”⁷²⁸. Por tanto, es muy probable que Gabriel Arranz se confundiera de fecha, como confirma Crispín Rubio, también preso allí, quien dice que “D. Recaredo, el director de la prisión, con dos hijos aviadores republicanos, no permitió que los falangistas se llevaran presos para celebrar la toma de una ciudad”⁷²⁹. Parece, por tanto, que Arranz se refiere a un intento de saca posterior, tal vez para celebrar la toma de Toledo.

En las represalias consiguientes, fueron fusilados en el Puente Oñez siete presos, cuando eran “trasladados desde esta ciudad a la prisión de Valladolid”, según consta literalmente en el Registro Civil de Segovia en las anotaciones de desaparición de Arturo Aparicio González, Ángel Gracia Morales y Agustín Hernández y Hernández. Corroborar esta afirmación el expediente de desaparición de Heliodoro Fernández, en Carbonero el Mayor. Las víctimas eran destacados políticos de Izquierda Republicana y socialistas, un maestro, un médico, un teniente de la guardia civil retirado, un secretario de ayuntamiento y dos dirigentes de la Casa del Pueblo de Segovia, Antonio Hernanz que había sido su presidente hasta marzo de 1936 y Manuel González.

En la provincia también hubo sacas de las prisiones de Sepúlveda (en la que fueron fusilados los dirigentes republicanos y socialistas de la villa, entre ellos el alcalde, el presidente de la Casa del Pueblo y el maestro), Cuéllar y San Ildefonso.

Por último incluimos en este apartado el relato de Gabriel Arranz sobre el aludido intento frustrado de saca y cómo se vivió en la *Cárcel Vieja* este episodio:

El clamor que se levantó, fue enorme. Una tumultuosa manifestación presidida por un grupo numeroso de falangistas se estacionó a los gritos de ¡queremos los presos! ¡asesinos! ¡han matado a nuestros camaradas! que nos entreguen a los presos que no vamos a dejar ninguno! y otras lindezas del estilo. Los falangistas, que iban armados, a toda costa querían entrar, y daban golpes con el fusil en el suelo y en las puertas de la calle, pues el oficial de guardia cuando vio el tumulto que se paraba en la puerta de la cárcel, mandó cerrar éstas⁷³⁰.

Esta pretendida saca no se llegó a producir porque, según cuenta Gabriel Arranz, habían puesto guardia militar, “si el día fatídico ese hubiera habido guardia de esa clase, no sacan a ningún preso, pero la guardia que había ese día, eran los paisanos voluntarios que los dejaron pasar sin oponerles resistencia”. El oficial de guardia, viendo que los golpes en las puertas arreciaban y las voces también, abrió uno de los cuarterones y requirió al grupo de falangistas para que le entregaran la orden por escrito del Gobierno Militar. Contestaron

⁷²⁷ CONTRERAS, J., op. cit., pág. 105; y *El Adelantado*, 30 de agosto de 1936.

⁷²⁸ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Ángel Gracia Morales.

⁷²⁹ Testimonio de Crispín Rubio Arranz.

⁷³⁰ ARRANZ MARINAS, G., op. cit., pág. 188.

que ellos no necesitaban ninguna orden de nadie para llevarse los presos que quisieran, pero el oficial mandó formar la guardia con los fusiles apuntando a todos los que estaban fuera, y la gente desapareció ante esto, *“no sin jurársela al oficial”*⁷³¹. A los presos les llegaba el ruido del forcejeo de la entrada, así que se organizaron para ofrecer alguna resistencia en caso de que los falangistas entraran como la noche del día 14. Para procurarse unas improvisadas armas, arrancaron los cerrojos de las cinco celdas de la galería, preparados para luchar contra los atacantes. Pero, tras los momentos de tensión vividos, pasó el susto y volvieron a recolocar los cerrojos para no sufrir represalias por parte de los empleados de la prisión. Entre la manifestación había bastantes mujeres, y eran las que más voces daban: *“pidiendo a gritos que les entregaran a los presos parecían demonios”*. No se fueron hasta que no desfilaron los falangistas, a los que insultaron, llamándoles cobardes. Entre ellas iban mujeres del comercio y tiendas, *“gentes que no salían de la iglesia”*⁷³².

A partir del mes de septiembre de 1936 no se produjeron sacas en las prisiones de la capital (en La Granja sí hubo al menos una el día 5). Este hecho puede ser debido a órdenes superiores, de las que puede ser un ejemplo la Orden de Dirección del Hospital Asilo Penitenciario, fechada el 23 de septiembre, que decía *“se recuerda a los Sres. Oficiales y guardianes (...) la prohibición absoluta de mantener conversaciones con los reclusos, fuera de las estrictamente indispensables para la marcha de los servicios. Así mismo queda terminantemente prohibido a dichos funcionarios el permanecer dentro de las celdas y **sacar reclusos** de las mismas después del toque de ‘retreta’ hora en que deberán estar todos reclusos”*⁷³³. El *recuerda* inicial da a entender que hubo alguna orden anterior que no se cumplió, de ahí la necesidad de la nueva norma. Aunque en el Libro de Órdenes de Dirección del Asilo no hay ninguna referencia a la supuesta orden previa. Parece evidente el objetivo de esta disposición: evitar las sacas de presos que se habían producido hasta entonces.

5. 2. La legalización de la represión sumaria

Introducimos este apartado para explicar los problemas de los familiares de los ejecutados sumariamente para legalizar las muertes de sus parientes, porque, como habían sido fusilados sin procedimiento legal, oficialmente no habían fallecido. Ante esta situación, los familiares debían preocuparse de iniciar el proceloso trámite judicial para lograr la inscripción del fallecimiento, necesaria para multitud de situaciones: hacer efectivas las herencias, legalizar estados de viudedad u horfandad, etc.

5. 2. 1. La problemática de la no inscripción de los fallecidos

En el año 1936 estaba vigente la Ley Provisional de Registro Civil de 17 de junio de 1870. En ella se especificaba claramente que no se podía enterrar ningún cadáver sin *“la correspondiente anotación en el Registro Civil del distrito municipal donde se produjo la muerte o del que se halle el cadáver, sin que el Juez Municipal expida la licencia de sepultura”*⁷³⁴.

⁷³¹ ARRANZ MARINAS, G., op. cit., pág. 188. De lo que ocurrió en la entrada de la *Cárcel Vieja* lo conocía el autor porque se lo contó el sargento que hacía guardia allí, 25 años después de los hechos, ya jubilado, de capitán. No indica el nombre de esta persona.

⁷³² ARRANZ MARINAS, G., op. cit., pág. 190.

⁷³³ Arch. Pris. Prov. LOD. Orden firmada por el director Primitivo Gallego, el 23 de septiembre de 1936. El subrayado es mío.

⁷³⁴ Ley Provisional de Registro Civil de 17 de junio de 1870, art. 75.

Esta norma se incumplió flagrantemente en numerosos casos en la provincia de Segovia. En el cementerio de la capital fueron enterrados los presos sacados la madrugada del 15 de agosto sin ningún tipo de inscripción, ni tan siquiera numérica, de los fallecidos. Todo ello a pesar de la vigencia de la norma aludida y otra orden expresa del general Saliquet a la Audiencia Provincial de Segovia fechada el 10 de agosto de 1936. Ante la avalancha de ejecuciones que pudiera congestionar los registros civiles -o simplemente para que las responsabilidades de los fusilamientos quedaran impunes- Saliquet ordenó simplificar los trámites legales para los enterramientos, pero obligando, al menos, a la realización de certificaciones de fallecimiento y la referencia escrita, en los libros oficiales, del aspecto exterior, sin necesidad de efectuar la autopsia a los cadáveres. La citada orden decía así:

Las circunstancias actuales que de hecho y de derecho, determinan la situación de campaña, **obliga a simplificar trámites** en lo concerniente a actuaciones para levantamiento y reconocimiento pericial de cadáveres de individuos presuntamente fallecidos por choque con la fuerza pública, debiendo en estas causas **limitarse la actuación de los juzgados, tanto militares como civiles, a ordenar rapidísimamente su traslado a los depósitos correspondientes** donde serán identificados y reconocidos a los fines de certificación de fallecimiento y **referencia solamente del aspecto exterior del mismo, sin práctica de autopsia**, procediéndose lo más rápidamente posible al enterramiento⁷³⁵.

A esta orden debían referirse los empleados del Cementerio Municipal de Segovia, cuando -para explicar las posibles causas por las que no estaban inscritos en los libros los fusilados frente a sus tapias- expresan que *“en aquellos días primeros del GMN, dado el gran número de cadáveres que diariamente tenían ingreso, tanto procedentes de los choques con las fuerzas nacionales con los marxistas, como víctimas de los bombardeos aéreos que hacía la aviación enemiga, y en la imposibilidad de mantener los cuerpos en el depósito teniendo en cuenta la época de la estación, se procedía a darles sepultura en fosas y por grupos en evitación del peligro que para la salud pública podía representar, y cumpliendo instrucciones que debían emanar de las autoridades encargadas del Movimiento”*⁷³⁶, por lo que creían dichos testigos que, en muchos casos, la dirección del cementerio no tenía conocimiento de estas inhumaciones, *“no tiene nada de particular que se le pasase anotar al director”*⁷³⁷.

De igual manera, el capellán director del citado cementerio aseguraba, cuando le pedían certificación de enterramiento de los presos fusilados en las tapias del camposanto, que *“todos los cadáveres que figuraban inhumados el 15 de agosto de 1936 están identificados y que aun creyéndolo muy difícil, no podía negar la posibilidad material de que el cadáver hubiera sido inhumado sin dar cuenta a dicha dirección”*⁷³⁸. No parece muy convincente que el director no tuviera, si no la información directa y oficial, sí, al menos, la certidumbre de que se estaba fusilando en las tapias del camposanto y se daba tierra a los cadáveres en el recinto bajo su jurisdicción⁷³⁹.

Sólo en Segovia fueron enterrados en el cementerio, sin la anotación correspondiente en los libros oficiales del mismo, los 10 presos de los que se tiene constancia que fueron sacados de las cárceles de la capital la madrugada del 15 de agosto y fusilados en las tapias del propio cementerio.

⁷³⁵ Arch. Prov. Segovia. J/218. Cpta. 1946. Es una hoja suelta dentro de una carpeta con documentos de distinta procedencia y cronología. El subrayado es mío. Está recogida en el anexo documental.

⁷³⁶ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia. Reg. Civ. 1939. Exp. Def. Julio Fuster. Declaración de Eusebio Callejo Velasco y Emilio Lázaro Pascual.

⁷³⁷ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia. Reg. Civ. 1937. Exp. Desap. Pedro Natalías. Decl. de Eusebio Callejo Velasco.

⁷³⁸ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia. Reg. Civ. 1939. Exp. Def. Julio Fuster. Declaración de José Yuste, dtor. Cementerio Municipal.

⁷³⁹ Como expusimos con el testimonio de Carmen Arranz, a la que Yuste había comunicado que vio morir fusilado a su hermano Alejandro Arranz.

Esta situación se repitió por toda la provincia. Numerosos fusilados fueron enterrados sin la consiguiente inscripción en los cementerios de San Ildefonso, El Espinar, Pascuales, Navafría, Riaza, Veganzones o Cabezuela. No estando anotados los enterramientos en el propio cementerio donde habían sido inhumados los cadáveres, aún menos se inscribían en los registros civiles por las autoridades responsables de las ejecuciones y encargadas de la comunicación, a efectos de la legalización de las muertes.

A los fusilamientos en las tapias de los cementerios hay que añadir las ejecuciones en cualquier cuneta, pinar, descampado, río, etc. Generalmente estos casos tampoco se apuntaban en ningún documento oficial, Registro Civil o cementerio, puesto que eran enterrados en el lugar del crimen, salvo contadas excepciones en que eran llevados al cementerio más cercano (así ocurrió con Julián Aparicio y Hermenegildo del Pozo en El Espinar y los fusilados en Cabezuela y Veganzones).

Hasta la referida Orden de 10 de agosto, en 1936 al igual que sucede hoy en día, cuando aparecía un cadáver en cualquier lugar -tanto dentro del casco urbano de una localidad como en el campo- era necesario avisar al juez para que ordenara su levantamiento e iniciara las investigaciones para el esclarecimiento de las causas de la muerte y quién la había provocado. De este modo se realizaba la autopsia por el médico forense y se notificaba a la policía o a la guardia civil para que investigaran los hechos. Pues bien, a pesar de la orden expresa de simplificación de trámites para la inscripción de fallecidos en *“choques con la fuerza pública”*, en la Audiencia de Segovia hay 7 expedientes de casos de este tipo, correspondientes a 9 fallecidos. Pero las actuaciones fueron bastante anómalas y muy poco tendentes al esclarecimiento de las muertes.

Todos los expedientes tienen la misma estructura y contienen los mismos vicios. Los pasos seguidos eran:

- 1º. El Juzgado de Primera Instancia informaba a la Audiencia Provincial del hallazgo de un cadáver.
- 2º. Se formaba el *“correspondiente rollo”*, como *“es preceptivo”*.
- 3º. Notificación al fiscal.
- 4º. Ni fiscal, ni juez pedían que se abrieran investigaciones, por lo que no se producía ningún tipo de actuación policial.
- 5º. El presidente de la Audiencia declaraba terminado el sumario.
- 6º. El fiscal daba su conformidad con el auto de conclusión del sumario.
- 7º. Se anotaba el auto resumen de los hechos, que se limitaba al resultado de la autopsia.
- 8º. Se archivaba el caso.

De todos los sumarios consultados, tan sólo en un expediente el fiscal no estuvo de acuerdo con la declaración de dar por terminado el sumario, y pidió indagaciones; pero el resultado fue el mismo que en los otros, tampoco hubo ninguna actuación para esclarecer los hechos. Este proceso fue como sigue:

El 13 de agosto de 1936 se formó el correspondiente rollo por el hallazgo de dos cadáveres en los alrededores de Segovia, concretamente en el paraje denominado *“Tejadilla”*. Quince días después, sin la práctica de ninguna actuación, el presidente de la Audiencia declaró terminado el sumario. El 7 de septiembre el fiscal declaró no estar conforme con la decisión del presidente y pidió indagaciones. Pasados cuatro días, el presidente de la Audiencia devolvió la causa al juez de instrucción para que procediera a lo solicitado por el fiscal. El 21 del mismo mes, el presidente declaró de nuevo terminado el sumario, sin aparecer noticias sobre las indagaciones requeridas por el fiscal. Por último, dos días después, el fiscal manifestó estar de acuerdo con el auto de conclusión del

sumario, sin que se hubiera esclarecido nada por no haberse producido ninguna actuación con ese fin⁷⁴⁰.

Lo irregular de estos sumarios puede explicarse por diversas vías: por un lado, podría demostrar claramente la connivencia de la justicia civil con la represión dirigida y ordenada por los sublevados. Por otro, mostraría la imposibilidad de jueces y fiscales para actuar con independencia, o el miedo de éstos a enfrentarse al poder militar.

En resumen, de las 211 ejecuciones ilegales recogidas en este trabajo se cumplió la legalidad existente, previa o posterior a la Orden reseñada del general Saliquet, fechada el 10 de agosto de 1936, en 29 casos, inscribiéndose 26 de ellas en los registros civiles correspondientes al término municipal donde aparecieron los cadáveres y las 3 restantes en el cementerio de Segovia.

De esta falta de inscripción de los fallecimientos pueden señalarse dos tipos de responsabilidades. Por un lado las autoridades civiles y militares, tal vez con la despreocupación o más bien desprecio de los ejecutores por sus víctimas o por no querer dejar constancia oficial de los crímenes cometidos. Por otro, los familiares de las víctimas, cuya actitud quedaría justificada por:

- *Desconocimiento de esta obligación legal.
- *Miedo a las represalias, a ser identificado como familiar de "rojo".
- *Tener los familiares más cercanos en otras provincias.
- *Desaparición de familiares directos o ausencia de éstos.
- *Pensar en la inutilidad práctica del trámite, puesto que algunos fallecidos no tenían bienes que dejar en herencia, lo que pudiera haber sido motivo de inscripción.
- *Las dificultades de iniciar y continuar el procedimiento de inscripción, que suponía un largo y tortuoso proceso, nada fácil para muchas familias y agravado por la necesidad de testigos.

Al no estar anotados los fallecimientos se producían a veces situaciones de esperpento, cuando menos. Por ejemplo, la notificación a maestros depurados, ya fusilados, de los pliegos de cargos para que aportaran documentación en su defensa:

Requerido el enjuiciado para que señale su domicilio - por haberse ausentado de su residencia habitual poco después del alzamiento salvador de España - según consta en el Boletín Oficial de 12 de Abril que se acompaña sin haberse obtenido resultado alguno, se le siguió el expediente reglamentariamente⁷⁴¹.

Éste era el formato ya elaborado, aplicado a los maestros fusilados. Con ello, las autoridades pretendían cubrir las formalidades que exigían sus propias normas de depuración, en las que se recogía el derecho al pliego de descargos por parte del maestro depurado⁷⁴².

De igual manera, la citación desde la Administración principal de Correos de Segovia al *"cartero urbano que fue de esta capital, Manuel Gómez Fernández, comparezca, a recoger el pliego de cargos del expediente de depuración Político-social, de no comparecer seguirá el expediente sin su audiencia"*⁷⁴³.

A los jóvenes ejecutados sin haber realizado el servicio militar les comunicaban que debían presentarse para hacerlo. Durante la guerra los militares le notificaron varias veces a José Escudero Otero que no se había incorporado al cuartel que le correspondía por su

⁷⁴⁰ Arch. Prov. J/4850. Exp. 104/36, defunción de Eugenio Fernández y Atanasio de Antonio.

⁷⁴¹ AGA. Educación, Depuración, Leg. 356. Exp. Dep. Hermenegildo Domínguez Martín.

⁷⁴² O. 10 de noviembre de 1936 que desarrolló el D. 66 de 8 de noviembre de 1936.

⁷⁴³ BOP, 8 de marzo de 1940. Manuel Gómez fue fusilado el 15 de agosto de 1936.

quinta; y a Jesús Serrano González, terminada ya la guerra, le reclamaron que no había hecho "la mili"⁷⁴⁴.

El desconocimiento por parte del régimen de sus propias víctimas no siempre sería malintencionado. Cabe la posibilidad del descontrol o la desorganización en la nueva administración, o cierta descoordinación entre las distintas instituciones del propio Estado. Así, se dieron casos de fusilados oficialmente, tras consejo de guerra, a los que convocaron desde los organismos franquistas como si no constara que habían fallecido:

A Francisco Arribas Calleja, fusilado en Segovia el 17 de julio de 1939, le enviaron el 14 de septiembre del mismo año, desde el Juzgado de Responsabilidades de Madrid, una notificación para que remitiera una declaración de sus bienes. Por si ésto fuera poco, se le amenazaba con el procesamiento por delito de falsedad en documento público, de no presentar la documentación exigida en el plazo de ocho días⁷⁴⁵.

En 1940, la convocatoria de quintas de San Ildefonso de los reemplazos de 1936 a 1941, incluyó a Emilio Alejandro Gil, fusilado el 20 de septiembre de 1936⁷⁴⁶.

5. 2. 2. Los expedientes de desaparición

La falta de inscripción oficial de la mayoría de las defunciones obligaba a los familiares de las víctimas a iniciar el lento y complicado proceso judicial de la declaración de desaparición o de fallecimiento.

Dadas las "circunstancias especiales" iniciadas el 18 de julio, la legislación sobre el particular debía adaptarse, pues la existente al inicio de la guerra era el Decreto de 19 de mayo de 1923 dictado con motivo de la guerra de Marruecos. Esta normativa se había mostrado desfasada porque además se había elaborado para unas circunstancias diferentes: una guerra en un país distinto y contra un enemigo extranjero. Por tanto, era necesaria una modernización y una adecuación a las características de la guerra civil española. Para cubrir esta necesidad se estableció el Decreto nº 67, de 8 de noviembre de 1936 de la Junta Técnica del Estado, en el que se disponía la inscripción de la desaparición de personas *"ocurridas con motivo de la actual lucha contra el marxismo, fueran o no aquéllas combatientes, en el Registro Civil del último domicilio, y, si éste no constase, en el de naturaleza del individuo de que se trate, lográndose una y otra mediante un expediente que habrá de tramitarse ante el Juzgado de Primera Instancia competente"*⁷⁴⁷. Este decreto había sido elaborado especialmente para fallecidos adeptos del bando nacionalista.

A los cinco años transcurridos desde la inscripción de desaparición, el Juez que la decretara, a instancia de parte interesada, debía declarar la presunción de muerte conforme a lo ordenado en los artículos 191 y siguientes del Código Civil. El plazo que se daba para la inscripción era de 6 meses desde la publicación en el *BOE* -para todo el territorio "nacional"- y el mismo plazo, contando desde su liberación, para territorios todavía no ocupados por el Ejército de Franco. A lo largo del transcurso de la guerra se dictarían más órdenes que ampliaban los plazos de inscripción de defunciones o desapariciones a medida que iba creciendo la zona sublevada⁷⁴⁸, hasta que, por fin, la Orden del Ministerio de Justicia de 1 de mayo de 1942, prorrogó indefinidamente el Decreto nº 67.

Para desarrollar el Decreto 67 se dictó la Orden de la Comisión de Justicia de la JTE de 10 de noviembre del mismo año, en la que se especificaba el procedimiento a

⁷⁴⁴ Testimonio de Mercedes González, prima de Jesús, y de Sofía Escudero, hermana de José. Ambos jóvenes fueron fusilados el 15 y 13 de agosto de 1936, respectivamente.

⁷⁴⁵ Arch. Pris. Prov. Segovia. Exp. Francisco Arribas Calleja.

⁷⁴⁶ *BOP*, 11 de marzo de 1940.

⁷⁴⁷ D. nº 67/1936. *BOP*, 18 de noviembre de 1936.

⁷⁴⁸ O. 29 de mayo de 1937, O. Presidencia JTE de 28 de Enero de 1938 y O. M. Justicia 17 de mayo de 1939.

seguir para las inscripciones de desaparición. En primer lugar quiénes podían instar la incoación de las inscripciones: el Ministerio Fiscal, el cónyuge y los parientes del desaparecido, hasta el 4º grado, o *“los interesados patrimonialmente en la muerte de éste”*⁷⁴⁹. También podían efectuar estas anotaciones los jefes militares enviando a los jueces de Primera Instancia o municipales o alcaldes más cercanos al lugar donde se encontrasen, relaciones de individuos a sus órdenes desaparecidos.

Todos los expedientes de desaparición que se han consultado fueron iniciados por los familiares de las víctimas (la mayoría de las veces viudas y, en mucha menor medida, padres, hermanos o hijos). Para iniciar el largo y difícil camino de la petición de inscripción de fallecimiento, los familiares de las víctimas podían tener las siguientes motivaciones: legalizar una situación evidente, en todos los casos, *“siendo indispensable fijar la situación jurídica de los familiares precitados”*⁷⁵⁰, viudas que quisieran o necesitaran volver a casarse⁷⁵¹, justificación oficial de ser viudas las madres de hijos en edad militar para librase los jóvenes del servicio militar⁷⁵², para hacer efectiva la herencia de los bienes de los que fuera titular el difunto⁷⁵³, viudas que habían dado a luz un hijo póstumo de sus maridos⁷⁵⁴ o para solicitar la pensión de *Huérfanos de la Revolución y de la Guerra*⁷⁵⁵.

Una vez iniciado el trámite, verificado mediante una declaración escrita ante el Juzgado y posteriormente ratificada ante el mismo; el juez municipal o alcalde que recibiera las relaciones, las remitía con los documentos (por ejemplo, la declaración de los testigos propuestos por los familiares) y el informe de las noticias que hubiera podido obtener al juez de Primera Instancia de su partido judicial. Éste había de decidir si proseguía las actuaciones (en caso de iniciarse el expediente en el municipio del fallecimiento) o enviaba los documentos al del domicilio o de la naturaleza del desaparecido. Para evitar la posible duplicidad de expedientes, cuando se tramitaba en distinto Juzgado al de naturaleza, debían comunicarlo a éste. Se han observado varios casos de doble anotación, en distinto Registro Civil e incluso en el mismo⁷⁵⁶.

Conseguir testigos que quisieran declarar en un expediente de este tipo era muy complicado, como bien se lamentaba una viuda que tuvo que afrontar ese problema:

*Tarea bien ingrata se ha impuesto a la dicente al tratar de que personas que le vieron caído y que le reconocieron sin sombra de duda (...) me prestaran su ayuda para que a todos los efectos legales constara el fallecimiento. Los mismos que particularmente me lo decían se han negado rotundamente a venir a declararlo ante el juzgado por temor a ignoro qué supuestas responsabilidades siendo así que ellos no intervinieron en su muerte*⁷⁵⁷.

Hasta ese punto llegaba el miedo de la población civil a la posible represión o simplemente a ser señalados como amigos o conocidos de represaliados; o tan sólo por haber visto algún cadáver. Sirva como ejemplo la declaración de un trabajador del cementerio de Segovia que conocía a Mariano Álvaro, muerto el 15 de agosto, además

⁷⁴⁹ BOP, 18 de noviembre de 1936.

⁷⁵⁰ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1940. Exp. Desap. de Pedro Lucas Martín.

⁷⁵¹ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 220, 2, 1946, Exp. Matías Prieto Gila. Su viuda tuvo que iniciar el procedimiento de declaración de fallecimiento porque así se lo exigieron en el obispado de Madrid para poderse casar de nuevo.

⁷⁵² Reg. Civ. El Espinar, Exp. Desap. Pedro San Mateo Segovia. Además, José Peña, para librarse de ir a la mili tuvo que firmar un papel como que su padre José Peña Huerta había desaparecido en un bombardeo de la aviación roja en el amanecer del 15 agosto. Cuando la realidad era que había sido fusilado en la saca “provocada” por dicho bombardeo.

⁷⁵³ Viuda de Norberto Cerezo.

⁷⁵⁴ Viudas de Narciso del Pozo y Claudio Martín.

⁷⁵⁵ Viuda de Anselmo San Frutos.

⁷⁵⁶ Manuel González en Reg. Civ. de Segovia y Anaya; y Claudio Martín dos anotaciones en S. Ildefonso.

⁷⁵⁷ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia. Reg. Civ. Caja 220, 2, 1948. Exp. nº 1, Juan Romano Sacristán.

“incluso era pariente algo lejano de su esposa”, declaró que aunque “le vio en dicho depósito, como nadie le preguntó su nombre, no lo manifestó”⁷⁵⁸.

El juez del domicilio o naturaleza de la víctima podría ampliar las informaciones por sí mismo o por los Jueces o autoridades a los que pidiera ayuda. Además de la declaración de los testigos propuestos por los familiares, los jueces solicitaban otras informaciones de la Guardia Civil, la Comisaría de Policía, el Gobierno Civil, así como certificaciones de los directores de las prisiones de las que habían sido sacadas las víctimas, de las cárceles a las que oficialmente habían sido trasladadas o de los capellanes de los cementerios donde habían sido enterradas. Estos trámites aparecen en los expedientes de los vecinos de Segovia desaparecidos en la capital (Natalías, Fuster, Gracia, Aparicio, Hernández) y en todos ellos desde las cárceles de salida certificaban el traslado de los presos y en las prisiones de recepción refrendaban la no entrada de dichos detenidos⁷⁵⁹. En las certificaciones del Cementerio Municipal de Segovia se aseguraba que no había sido enterrado allí ningún fallecido con los nombres de las víctimas.

En cambio, en los expedientes de los numerosos fusilados en San Ildefonso, a pesar de las declaraciones de los testigos donde se aseguraba que las víctimas habían sido sacadas de la cárcel denominada *Caballerizas*, no hay una sola petición, por parte del juez, de informe a las autoridades penitenciarias provinciales⁷⁶⁰ sobre la estancia de las víctimas en prisión.

Los jueces también solicitaban información de los registros civiles del municipio de nacimiento de la víctima o donde se había encontrado el cadáver, por si ya hubiera sido anotado el fallecimiento, si bien no se ha dado ningún caso de este tipo.

Cumplidas estas informaciones complementarias, el expediente pasaba al Ministerio Fiscal, que disponía de 3 días para solicitar la ampliación de aquéllas. De todos los expedientes consultados (un total de 10) referentes a las sacas de las prisiones de Segovia, únicamente en un caso el fiscal pidió información al Gobierno Civil sobre las circunstancias del traslado⁷⁶¹. No tuvo respuesta y el expediente se cerró sin más investigaciones. A continuación, finalizada la ampliación o inmediatamente, el fiscal había de dictar auto aprobando o no la información practicada y ordenando, en su caso, la inscripción en el Registro Civil, que podía ser de defunción o de desaparición. A la finalización del expediente, el fiscal era quien tenía la última palabra sobre la inscripción en un sentido o en otro.

En caso de que el fiscal no considerase acreditada la defunción, así lo declaraba en su auto, inscribiéndose la desaparición en el Registro correspondiente. Hay varios casos de este tipo, pues no aparecieron los cadáveres de las víctimas, aunque familiares y vecinos tenían la certidumbre de que habían sido fusilados⁷⁶².

Hay otros casos más graves en los que habiendo constancia del fallecimiento, incluso con el cadáver reconocido y enterrado, sólo se inscribió la desaparición y no la defunción. Existen varios ejemplos de ello:

En el expediente de desaparición de Jesús Gilmartín, unos falangistas de Fuentepeelayo -Jacinto Navas, Julián Sanz y José Polo- declararon haber encontrado el cadáver del maestro de su pueblo a las afueras de Mozoncillo y haberlo enterrado en el

⁷⁵⁸ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 299, 2, 1938. Exp. nº 3, Mariano Álvaro. Declaración de Antolín Sacristán.

⁷⁵⁹ Estas informaciones se pueden comprobar en el auto de resolución del Exp. de desap. de Pedro Natalías, recogido en el anexo documental.

⁷⁶⁰ Son autoridades provinciales puesto que cuando se realizaron los expedientes, finalizada la guerra, ya no existía como prisión la citada cárcel de San Ildefonso.

⁷⁶¹ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 299, 1, 1936, Exp. nº 8. San Frutos Anceja. Con fecha 23 de enero de 1937, el fiscal pidió al Gobierno Civil ampliara el oficio, “...manifieste si las fuerzas a sus órdenes que efectuaron el traslado el 14 de agosto de 1936 (...) realizaron en la forma ordenada el servicio en este caso se manifieste sitio o lugar de dicho Burgos, en que ingresó el detenido manifestándose en otro caso las incidencias en el servicio, y en su vista se acordará por el juzgado lo procedente”.

⁷⁶² Casos de Otero de Herreros, Casla, San Ildefonso, etc.

cementerio de dicha localidad⁷⁶³. Por su parte, en el de Heliodoro Fernández Caraballo, dos vecinos y trabajadores del cementerio de Segovia -Eusebio Callejo Velasco y Emilio Lázaro Pascual- declararon *“que habían conocido en vida a Heliodoro, tuvieron ocasión de ver y reconocer perfectamente a Heliodoro”*⁷⁶⁴ entre los cadáveres enterrados en el Puente Oñez.

En otros casos no se permitía la declaración de testigos que conocían los lugares de enterramiento de los ejecutados. Por ejemplo, en el expediente de desaparición de Mariano Velasco, su viuda declaró que un primo suyo, vecino de Hontoria, sabía el lugar exacto donde estaba enterrado Mariano. Pero el juez no le llamó para testificar, por lo que, al no declararse oficialmente el lugar del enterramiento y no ordenarse el levantamiento del cadáver, se inscribió la desaparición en lugar de la defunción como pedía la solicitante⁷⁶⁵.

El Nuevo Estado ponía toda una gama de dificultades y trabas para legalizar los fallecimientos de los represaliados. Después de haber ejecutado a las víctimas no se permitía tan siquiera legalizar esas muertes. Estos problemas y dificultades sólo se aplicaban a los fallecidos por la represión, pues las víctimas de los bombardeos republicanos (aunque en teoría habían sido enterrados sin identificar como los represaliados) fueron inscritas sin necesidad de tantos requisitos. Tan sólo precisaban la declaración del familiar que iniciaba el proceso. Incluso en el cementerio se había anotado perfectamente el lugar de enterramiento, lo que no ocurría con las víctimas de la represión⁷⁶⁶. Las autoridades militares no sólo pretendían la eliminación física de los adversarios, sino también borrar su existencia legal.

Para mayor escarnio de los vencidos, a partir del final de la guerra, se introdujo el castigo burocrático con la anotación del calificativo peyorativo "desafecto" en el libro de defunciones de los registros civiles, para los fallecidos del bando derrotado de la contienda. La Orden de 26 de Julio de 1939 establecía los requisitos para tal consideración. En caso contrario, se anotaba la defunción como *“afecto al Glorioso Movimiento Nacional”*⁷⁶⁷.

Esta práctica, hecha oficial en 1939, se había iniciado mucho antes. Desde muy pronto se anotaron acotaciones en las inscripciones de fallecimiento explicativas del comportamiento del difunto en la guerra. Comenzaron los párrocos en sus licencias de defunción y, ya en julio de 1936, aparecieron en la provincia de Segovia ejemplos de comentarios sobre la adscripción política de las víctimas de ambos bandos. En El Espinar murieron dos obreros el 20 de julio a consecuencia de *“un balazo peleando contra el Ejército”*, mientras que otros dos paisanos de la misma villa fallecieron, el 25 de julio, por *“balazos recibidos en defensa de la religión y del orden”* o por *“tiros de fusil en defensa de la religión y la patria”*⁷⁶⁸. Mientras que los dos primeros eran milicianos en defensa de la República que murieron en Prados, los otros dos eran defensores de la sublevación militar que fallecieron en el ataque republicano a El Espinar. Más original y más directa es la inscripción de un soldado en Turégano fallecido *“en lucha con los enemigos de Dios y de España”*⁷⁶⁹.

Más adelante, la Orden del Ministerio de Justicia de 29 de abril de 1940⁷⁷⁰ establecía los requisitos para la anotación de fallecimiento de los combatientes nacionales

⁷⁶³ Reg. Civ. Mozoncillo, Exp. Desap. Jesús Gilmartín de Francisco.

⁷⁶⁴ Reg. Civ. Carbonero el Mayor, Exp. Desap. Heliodoro Fernández Caraballo.

⁷⁶⁵ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 299, 1, Cpta. 2ª, 1937, Exp. nº 8, Mariano Velasco.

⁷⁶⁶ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 299, 1, Cpta. 2ª, 1937, Exp. nº 7. Juan Moreno Chamorro murió a causa de las heridas provocadas por las bombas de la aviación republicana el 14 de agosto de 1936. Con fecha del 6 de abril de 1937, informó el dtor. del cementerio, J. Yuste que *“fue inhumado el 15 de agosto en el nº 4 de la zanja 7ª del tercio 3º del patio 2º”*.

⁷⁶⁷ Reg. Civ. Valvieja, ins. defunción de Esteban Ibáñez Aznara, 26 de julio de 1940.

⁷⁶⁸ Arch. Epis. Cpta. de licencias de defunción de El Espinar, 1936. Ambas anotaciones del 25 de julio de 1936.

⁷⁶⁹ Arch. Epis. Cpta. de licencias de defunción de Turégano, 1936. Anotación del 23 de noviembre de 1936.

⁷⁷⁰ BOP, 10 de mayo de 1940.

con la calificación de "caído por Dios y por España", a modo de homenaje para las víctimas del bando vencedor. Este proceso implicaba la petición de informes a las nuevas autoridades locales, alcaldes, FET y guardia civil, sobre la conducta político-social desarrollada por los fallecidos. Demostrada su actuación en el bando "nacional", los que obtenían buenos informes eran premiados con el honor de hacer constar, en la inscripción del libro de defunciones del Registro Civil correspondiente, la frase: **"caído por Dios y por España"**.

En cambio los que no podían acreditar su adhesión a los sublevados, quedaban para siempre señalados con el **"desafecto"**. La discriminación y la humillación de las víctimas llegaba hasta el punto de que, una vez superados los complicados trámites burocráticos para conseguir la inscripción, quedaba la "vergüenza", la marca para siempre, en un libro oficial, de que el difunto no era adicto, no había fallecido con el reconocimiento del Estado: era uno de los enemigos de la patria. Además de muertos, señalados a perpetuidad. La represión se extendía más allá de la propia muerte de los oponentes.

Finalizada la guerra civil, se reformó la legislación sobre la inscripción de fallecimientos fuera de plazo, dictándose la Ley de 8 de septiembre de 1939, modificadora del Título Octavo, Libro 1º del Código Civil. Uno de los artículos reformados era el 193 cuya redacción quedó así: *"procede la declaración de fallecimiento de una persona, transcurridos 10 años desde las últimas noticias habidas en el ausente, o a falta de éstas desde su desaparición, presumiéndose violencia si en una subversión de orden político y social hubiese desaparecido una persona sin volverse a tener noticias suyas durante el tiempo expresado, siempre que hubiesen pasado seis meses desde la cesación de la subversión"*⁷⁷¹. Los trámites se completaban conforme a lo establecido en el art. 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la publicación de los correspondientes edictos, dando conocimiento de la apertura del expediente, por dos veces consecutivas y con un intervalo de quince días en el *BOE*, en un diario de tirada nacional, en *El Adelantado de Segovia* y en *Radio Nacional*. Se ha comprobado su aplicación en los expedientes de defunción de Lucio de Miguel, Isidoro Senovilla, Norberto Cerezo y Fermín de Andrés Calle. Por el contrario hay otros expedientes posteriores que continuaron iniciándose aplicando el Decreto 67 (Arcones Baeza, Cancho Barriga, Fernández Caraballo).

5. 2. 3. Las inscripciones en los Registros Civiles

Las inscripciones de los desaparecidos se hacían (según el art. 1, d), de la Orden de 10 noviembre de 1936) en los libros corrientes de la Sección 3ª del Registro Civil, en las hojas y libros correspondientes, pero en el espacio en blanco destinado en aquellos libros a notas marginales. Esta práctica se realizaba previendo la posible posterior anotación de defunción transcurrido el plazo preceptivo; en cuyo caso ésta ya se inscribía en el formato normalizado. De hecho se han encontrado bastantes casos de este tipo (Gilmartín de Francisco⁷⁷², Álvaro de Andrés⁷⁷³, Agustín Hernández, Ángel Gracia, Arturo Aparicio⁷⁷⁴). Por el contrario, existen otros ejemplos de anotación marginal en el lado izquierdo, aunque posteriormente no se realizara la correspondiente inscripción de fallecimiento (Felipe de Lucas García⁷⁷⁵, Pedro Cancho Barriga⁷⁷⁶, Tiburcio Muñoz Pérez⁷⁷⁷), lo que bien pudo

⁷⁷¹ Ley de 8 de septiembre de 1939, Jefatura del Estado, *BOE* de 1 de octubre de 1939.

⁷⁷² Reg. Civ. Mozoncillo, inscripción (ins.) desap. del 18 de octubre de 1937.

⁷⁷³ Reg. Civ. S. Ildelfonso, ins. desap. del 7 de febrero de 1942.

⁷⁷⁴ Reg. Civ. Segovia, ins. Agustín Hernández, Ángel Gracia y Arturo Aparicio, el día 7 de febrero de 1937 como desaparición y el día 10 de abril de 1937 como defunción.

⁷⁷⁵ Reg. Civ. Matabuena, ins. desap. 16 de mayo de 1942.

⁷⁷⁶ Reg. Civ. Rianza, ins. desap. 21 de marzo de 1946.

⁷⁷⁷ Reg. Civ. Rianza, ins. desap. 26 de enero de 1940.

ocurrir por el cansancio de los familiares a continuar los trámites burocráticos o por la desaparición o traslado de los mismos lejos de esta provincia.

Por otro lado, se han constatado tres casos de inscripciones irregulares (Vicente Gil, Dionisio Sanz y Martín Sánchez) pues en la misma hoja de las anotaciones marginales de desaparición se había inscrito posteriormente la defunción de otras personas. Es de imaginar que el motivo de ello fuera por aprovechar el espacio. Todas ellas corresponden al Registro Civil de Navafría⁷⁷⁸.

En la normativa se preveía también el caso de que apareciesen los individuos cuya defunción o desaparición hubiese sido inscrita. Éstos podían recurrir al Juzgado de Primera Instancia en cuyo partido se hubiese practicado aquélla y solicitar la cancelación del asiento. Tan sólo se ha encontrado una situación de este tipo, correspondiente a un soldado segoviano que había desaparecido en el frente de Teruel combatiendo con el Ejército nacional. Tras haber sido anotada su desaparición, acabada la guerra, regresó al pueblo y tuvo que recurrir ante el Juzgado de Riaza para legalizar su situación⁷⁷⁹.

La Ley de 1870 ya admitía la posibilidad de que, ante una *“muerte violenta, o en la cárcel, establecimiento penal, o por ejecución capital”*, no se hiciera mención en *“la partida correspondiente del Registro Civil de ninguna de estas circunstancias”*⁷⁸⁰. Esta disposición se incumplía por norma, hasta el punto de tener que dictar el Gobierno de Burgos una circular para recordar esta obligación. El encabezamiento era suficientemente expresivo: *“Tiene conocimiento esta Jefatura que en algunos Registros Civiles no se ha tenido presente, al inscribirse determinadas defunciones, lo ordenado en el art. 86”*. Con esta orden se trataba de suprimir la expresión de *“circunstancias que son forzosamente afrentosas para los sucesores del inscripto”*⁷⁸¹.

Los encargados de enmendar esta irregularidad eran los presidentes de las Audiencias Territoriales o sus delegados en la visita semestral de inspección a los registros civiles. Habían de tachar *“de oficio, en cuantas inscripciones aparezcan consignadas, las circunstancias referidas, sancionando o persiguiendo las infracciones”*⁷⁸². Como en el resto de normas emanadas de Burgos, finalizaba la circular amenazando con el castigo a los infractores para conseguir el cumplimiento de la norma.

Esta Circular parece de aplicación casi exclusiva para fallecidos nacionales en circunstancias, cuando menos, poco claras. Tan sólo se ha encontrado aplicada en el Registro Civil de El Espinar, en un caso de fusilamientos de soldados de las filas nacionales (4 soldados, un requeté y un miliciano de JAP), donde se adivina tras la tachadura *“pasado por las armas”*, si bien no se ha podido encontrar más información sobre estas ejecuciones⁷⁸³.

Pero es curioso que en el mismo Registro Civil haya otras anotaciones de muertes violentas sin tachaduras. En concreto hay dos en las que se expresaba *“asesinado por los rojos”*, en los primeros días de agosto de 1936 sin enmiendas ni tachaduras. Ya en 1937 se hizo otra anotación de muerte de un republicano por *“tiroteo en los sucesos denominados Casa de Prados”* el 20 de julio de 1936. Y otras anotaciones, ya finalizada la guerra civil, de fusilados en los primeros meses, tampoco enmendadas⁷⁸⁴.

En los otros tres lugares donde se produjeron ejecuciones legales (es decir, por sentencia de consejo de guerra), Segovia, San Ildefonso y Cuéllar, figura claramente en los

⁷⁷⁸ Reg. Civ. Navafría, realizadas una el 7 de diciembre de 1937 y dos el 22 de agosto de 1940.

⁷⁷⁹ Reg. Civ. de Ayllón. (Testimonio del secretario de dicha villa).

⁷⁸⁰ Ley Provisional de Registro Civil de 17 de junio de 1870, art. 86.

⁷⁸¹ Circular Servicio Nacional de los Registros y del Notariado de 7 de junio de 1938, BOE de 10 de junio de 1938.

⁷⁸² Ver nota anterior.

⁷⁸³ Reg. Civ. El Espinar. Los soldados fueron fusilados el 13 de febrero de 1937 y 27 de abril de 1938, el requeté el 2 de marzo de 1937 y el miliciano de JAP el 29 de julio de 1937.

⁷⁸⁴ Reg. Civ. El Espinar. Anotaciones del 1 de diciembre de 1937 y 16 de julio de 1946.

correspondientes registros civiles en el apartado referente a la causa de muerte: *“herida de bala”, “pasado por las armas”* o *“fusilamiento”*. No hay ninguna tachadura ni enmienda.

También se aplicó la Circular en el Registro Civil de Cabezuela, donde se ocultó con tinta la causa de muerte, *“heridas de bala”*, ya que en las tres inscripciones anotadas se apuntaba *“fue sacado por milicianos de Falange Española”*, lógicamente también tachado. No podía figurar en un documento público la autoría de unas muertes “ilegales”, aunque fuera conocido por todos quienes eran los ejecutores. Por el contrario, en otros registros civiles hay innumerables ejemplos de anotación de muerte violenta en el mismo año 1936, sin ninguna tachadura ni enmienda: Chañe (*“disparo de arma de fuego”*), Torrecaballeros (*“herida por arma de fuego”*) o Veganzones (*“por arma de fuego”*).

Por otro lado, únicamente se ha encontrado un caso de aplicación del art. 84 de la Ley de Registros Civiles, *“Si hubiere indicios de muerte violenta, se suspenderá la licencia de entierro hasta que lo permita el estado de las diligencias que por la autoridad competente habrán de instruirse en averiguación de la verdad”*⁷⁸⁵. Se anotaron en Chañe dos fallecimientos por orden del Juez de Instrucción de Cuéllar, 23 días después de ocurridas las muertes⁷⁸⁶, pues se había dejado transcurrir el plazo para investigar el caso. No se ha encontrado el sumario por lo que no se ha podido comprobar el resultado de las indagaciones, si es que las hubo.

5. 2. 4. Ordenante de la inscripción

Existe una gran variedad en cuanto a la autoridad o persona que propuso la inscripción de la defunción, si bien predominan los autos de los Juzgados de Primera Instancia .

- 1º. **Juzgados militares.** Las dos anotaciones del cementerio de Segovia que no fueron inscritas en el Registro Civil, fueron ordenadas por los Juzgados Militares de la plaza de Segovia⁷⁸⁷.
- 2º. **Juzgados de Primera Instancia.** Cuando la inscripción era fruto de un expediente iniciado por los familiares de los fallecidos ordenaba la anotación el juez de Primera Instancia. Así sucedió tanto en las inscripciones durante la guerra como en las de posguerra, o en los años ochenta. Son la inmensa mayoría, con 84 inscripciones.
- 3º. **Jueces municipales.** Firma las inscripciones el juez municipal en los casos de Navas de San Antonio (2 anotaciones el 28 de julio de 1936), Anaya (2 anotaciones: 19 de agosto y 16 de septiembre) y Torrecaballeros (3 inscripciones el 7 de septiembre de 1936). En total siete casos.
- 4º. **Serenos.** En Cabezuela figura en las anotaciones de los tres cadáveres recogidos el 16 de agosto: *“Manifestación verbal de Galo Gómez Arenal, natural y vecino de Cabezuela, sereno municipal”*⁷⁸⁸. En la única anotación del 24 de agosto de 1936 de Villacastín aparece *“manifestación de Jacinto Ayuso, sereno municipal”*⁷⁸⁹.
- 5º. **Enterrador.** Los tres fallecidos el 8 de agosto de 1936 en Villacastín, fueron anotados por el sepulturero Alejandro Tardón.
- 6º. **Médico.** En Torrecaballeros se anotó la recogida de un cadáver en el *“sitio del pinar”*, que había muerto el 20 de agosto de 1936, a las 17 horas, por *“herida por arma de*

⁷⁸⁵ Ley de Registro Civil de 1870, art. 84.

⁷⁸⁶ Reg. Civ. Chañe, ins. def. de Clemente de Dios y Zacarías Rojo, el 23 de septiembre de 1936.

⁷⁸⁷ Arch. Cementerio, Cpta. licencias de enterramiento de agosto de 1936, para Francisco Serna, escrito sin fecha fdo. por el Cap. J. Ins. Leonardo González, y septiembre del mismo año para Teófilo Martín, fechado el 10 de septiembre de 1936, fdo. por el Cmte. J. Ins. Luis de Cabanyes.

⁷⁸⁸ Reg. Civ. Cabezuela, ins. def. 16 de agosto de 1936.

⁷⁸⁹ Reg. Civ. Villacastín, ins. def. 24 de agosto de 1936.

fuego en región subclavicular, según resulta del reconocimiento practicado” por el médico Félix Tejedor⁷⁹⁰.

- 7º. **Auxiliar del secretario del Ayuntamiento.** En la inscripción del 23 de septiembre de 1936 de 4 *cadáveres desconocidos* recogidos en el sitio los Piñonares, del término de Cabezuela, figura que realizó la comunicación Teódulo Calvo Pastor, auxiliar del secretario.
- 8º. **Alguacil del Juzgado Municipal.** En Nava de la Asunción, la anotación del 16 de agosto de 1936, realizada según resulta *“de las averiguaciones practicadas (...) manifestación personal del alguacil de este juzgado Dionisio Vírseda Marugán”*.
- 9º. **Juzgados de Instrucción.** Son ocho anotaciones en total: los fallecidos en Chañe el 1 de septiembre, el de Sepúlveda muerto el 21 de julio, los cadáveres sin identificar recogidos en Escobar y La Lastrilla y los dos ejecutados en Tejadilla; todos ellos en 1936. A los que hay que añadir la inscripción del 15 de diciembre de 1981 en Ayllón del fallecimiento de Juan Hernando Núñez, ocurrido el 22 de agosto de 1936 en esta villa.

5. 2. 5. Tipos de inscripción

Del total de 211 ejecuciones ilegales comprobadas en este trabajo, se han recogido 136 inscripciones en los registros civiles, ya fueran éstas de fallecimiento o desaparición, repartidas de la siguiente manera:

Cuadro nº 11: Tipos de inscripción

Tipo de inscripción	Nº de inscripciones
Desaparición (incluidas 2 de ausencia)	13
Fallecimiento	104
Doble anotación (desaparición, o ausencia, primero, después fallecimiento)	19

Los registros civiles donde fueron anotadas las 136 inscripciones de desaparición o de fallecimiento -123 inscripciones de defunción y 13 inscripciones de desaparición, que posteriormente no se transformaron en anotación de fallecimiento- se corresponden con:

Cuadro nº 12: Registros Civiles donde se produjeron las anotaciones

Registro Civil	Nº de inscripciones
Último domicilio de la víctima	92
Naturaleza del fallecido	4
Término municipal donde se produjo la ejecución o donde apareció el cadáver	39
Ninguno de los anteriores	1

⁷⁹⁰ Reg. Civ. Torrecaballeros, ins. def. de Gutiérrez Sastre.

a) Desaparición

Las 11 anotaciones de desaparición, fueron inscritas entre los años 1937 y 1948, distribuidas de la siguiente manera:

Cuadro nº 13: Inscripciones de desaparición

Nombre	Ins. Desaparición	Registro Civil
Pedro Aparicio Bravo	02/06/37	Otero de Herreros
Abel de Pablos Andrés	15/10/38	Segovia
Tiburcio Muñoz Pérez	26/01/40	Riaza
José María Sáez Bartolomé	03/09/40	San Ildefonso
Heliodoro Gregorio Fernández Caraballo	20/09/41	Carbonero
Antonio Arcones Baeza	23/04/42	San Ildefonso
Felipe de Lucas García	16/05/42	Matabuena
José García García	07/07/43	Zarzuela del Monte
Tomás de la Santísima Trinidad Lucas	26/05/45	San Ildefonso
Pedro Cancho Barriga	21/03/46	Riaza
Lucio de Miguel Moral	28/01/48	San Ildefonso

A las anteriores anotaciones hay que añadir los cuatro casos de declaración de **Ausencia**, entendida ésta como desaparición, porque en ellos se aludía al apartado D) de la Orden de 10 de noviembre de 1936 que se refería a la inscripción de desaparecidos. De los cuatro casos, 3 de ellos se han encontrado en el Registro Civil de Navafría y uno en Casla. De ellos, Vicente Gil y Martín Sánchez fueron inscritos sus fallecimientos posteriormente, como figura en el cuadro nº 16.

Cuadro nº 14: Inscripciones de ausencia

Nombre	Inscripción de Ausencia
Venancio Blanco Arribas	02/12/37
Vicente Gil Cantalejo	07/12/37
Dionisio Sanz González	22/08/40
Martín Sánchez de la Mata	22/08/40

A la hora de poner fecha a la desaparición inscrita, surgía, a veces, una dificultad, pues había familiares que no sabían a ciencia cierta el día concreto de ese hecho. Los allegados conocían la fecha de la detención pero no del día que fueron sacados de la prisión a la que habían sido llevados. Por ello, algunos jueces municipales pedían aclaraciones al Juzgado de Primera Instancia del que dependían. Por ejemplo, desde Matabuena escribieron a Sepúlveda: *“han surgido dudas por su redacción (...) aclare los extremos (...) con objeto de que al practicar la inscripción pueda fijarse la fecha concreta”*. El Juzgado de Sepúlveda optó por la solución más fácil y determinó que se hiciera *“desde el 1 de julio de 1936 y sin que desde cuya fecha se haya tenido noticia del mismo, con los datos que faciliten los familiares del mismo”*. Al final, la anotación en el libro de defunciones fue *“desde el 8 de octubre de 1936”*⁷⁹¹. Es de imaginar que los familiares dieran esa fecha como la de desaparición definitiva. Tan sólo hay un caso en que no figura la fecha de desaparición de la víctima (San Ildefonso)⁷⁹². Por otro lado, hay ejemplos en que los jueces

⁷⁹¹ Reg. Civ. Matabuena. Exp. Desap. Felipe de Lucas.

⁷⁹² Reg. Civ. S. Ildefonso, ins. desap. de Antonio Arcones el 23 de abril de 1942.

otorgaban como fecha oficial de desaparición el 1 de enero de 1937 o el 1 de agosto de 1946, cuando los familiares de la víctima habían aportado la fecha concreta de la saca⁷⁹³.

En estas 13 inscripciones de desaparición no se cumplieron los preceptos del Decreto 67 de 1936, sobre el plazo de 5 años para la declaración de fallecimiento, puesto que, necesitando para ello la "instancia de parte", es probable que los familiares que debían instarlo se cansaran de tanto trámite o consideraran suficiente la anotación de desaparición, dando por finalizado el papeleo jurídico.

b) Fallecimiento

Cronológicamente, las 123 anotaciones de fallecimiento (incluidas las 19 dobles inscripciones) se pueden distribuir en tres tipos:

1. Las anotadas en el acto, en el mismo día o al siguiente del fallecimiento, inscritas por los jueces municipales, alguaciles, jueces de instrucción, etc., en los términos municipales donde se recogían los cadáveres (34 anotaciones).
2. Las inscritas desde 1936 hasta el año 1959, tras los expedientes judiciales iniciados a petición de los familiares de las víctimas (59 anotaciones).
3. Las realizadas en los años ochenta, tras el R.D. 2926 de 1 diciembre 1978 (30 anotaciones).

Entre las inscripciones mencionadas, se dan varios casos de doble anotación de fallecimiento en el mismo Registro Civil: Claudio Martín Martín en San Ildefonso, José Peña Huerta en Segovia, José Muñoz Pérez en Riaza y Julio Maroto Ortega en Villacastín.

De las 123 anotaciones de fallecimiento, "no consta" la causa de la muerte en 43 casos. Tampoco consta en 11 de las 19 dobles anotaciones. En las inscripciones de fallecimiento aparecen anotadas gran variedad de causas oficiales de muerte, hasta un total de 36 redacciones distintas, pero se podrían agrupar en torno a los siguientes conceptos:

Cuadro nº 15: Causas oficiales de fallecimiento

Causa de muerte	Anotaciones
Disparos de arma de fuego	11
Herida de bala	9
A consecuencia de la guerra civil	9
Herida de arma de fuego	7
Violenta	6
Arma de fuego	5
Heridas	4
Choque con las fuerzas nacionales	4
Fusilamiento	3
Con motivo del Glorioso Movimiento Nacional	3
Desconocida	2
Hemorragia cerebral	1

⁷⁹³ Jgdo. de Sepúlveda, auto de 27 de abril de 1949 sobre desaparición de Norberto Cerezo, su viuda declaró que su marido había desaparecido el 12 de agosto de 1936, y auto de 21 de agosto de 1951 sobre desap. de Carlos Benito en el que la viuda dio como fecha de desaparición el 30 de agosto de 1936.

c) Doble anotación: desaparición y fallecimiento

Se han encontrado 19 casos de doble inscripción de desaparición y de fallecimiento. Pues, como disponía el Decreto nº 67 de 1936, *“a los 5 años desde la inscripción de desaparición, el juez que la decretara debía declarar la presunción de muerte, a instancia de parte interesada”*⁷⁹⁴.

Cuadro nº 16: Dobles inscripciones: desaparición y fallecimiento

Nombre	Ins. Desaparición	Ins. Fallecimiento
Arturo Aparicio González	07/01/37	12/04/37
Ángel Gracia Morales	07/01/37	12/04/37
Agustín Hernández y Hernández	07/01/37	12/04/37
Julio Fuster García	24/02/37	02/08/39
Santos San Frutos Anceja	24/02/37 y 5/8/42	06/04/48
Mariano Velasco Lázaro	13/04/37	28/04/80
Pedro Natalías García	28/06/37	01/11/38
Jesús Gilmartín de Francisco	18/10/37	02/11/47
Vicente Gil Cantalejo	07/12/37	14/08/56
Martín Sánchez y de la Mata	20/08/40	01/07/81
José Berzal García	20/08/40	20/02/92
Pedro de Lucas Martín	02/09/40	26/03/53
Luis Ayuso García	02/09/40	30/12/52
Francisco Sancho López	02/09/40	18/05/81
Carlos Benito García	20/09/40	28/08/51
Gregorio Sanz Rubio	24/04/41	22/09/47
Enrique Álvaro de Andrés	07/02/42	15/02/47
Manuel González Herrero	24/07/43	17/07/79
Claudio Martín Martín	04/12/44	22/05/48 y 5/3/80

A los 5 años desde la inscripción de desaparición, el juez que la decretara debía declarar la presunción de muerte, a instancia de parte interesada. Este precepto tan sólo se cumplió rigurosamente en las inscripciones de Enrique Álvaro de Andrés y de Santos San Frutos, en el auto del juez de Primera Instancia de Segovia. Sobre el primero, se recogía que *“habiendo transcurrido cinco años desde la inscripción de la desaparición, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto Ley de 8 de noviembre de 1936 y en su consecuencia procede hacer la declaración de fallecimiento a tenor de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Código Civil, modificados por la ley de 8 de septiembre de 1939”*⁷⁹⁵.

En el resto de casos anotados no se cumplió este plazo para la anotación del fallecimiento en sustitución de la anterior de desaparición, como se puede apreciar por las fechas reseñadas. Por el contrario, se han encontrado dos casos muy similares en el Registro Civil de Gallegos en los que no se aplicó el plazo de cinco años. Eran fruto de sendos autos del Juzgado de Primera Instancia de Sepúlveda, partido al que pertenece dicha localidad. En ellos se declaró el fallecimiento de los inscritos a partir de diez años después de la desaparición. Además dictaminaba sobre el modo de efectuar la herencia de una manera, cuando menos, curiosa:

⁷⁹⁴ D. 67/36. BOP, 18 de noviembre de 1936. art. 2.

⁷⁹⁵ Reg. Civ. S. Ildelfonso, auto J. 1ª Ins. de Segovia adjunto en hoja de libro de defunciones, el día 15 de marzo de 1947, sobre Enrique Álvaro de Andrés.

Una vez firme la resolución de fallecimiento *“se abrirá la sucesión de sus bienes procediéndose a su adjudicación por los trámites que corresponda, no pudiendo disponer los herederos de ninguno de ellos, a título gratuito, hasta cinco años después a esta declaración de fallecimiento, ni serán entregados los legados, si los hubiere, hasta que transcurra dicho plazo”*. Existía una excepción a este plazo, *“salvo los relativos a mandas piadosas en sufragio del alma del testador o en favor de Instituciones de Beneficencia”*⁷⁹⁶.

Además de que las fechas de los autos eran 1952 y 1953, el juez declaró los fallecimientos a partir de 1946, pero marcando el plazo de 5 años desde la resolución para que se hiciera efectiva la defunción, con lo que se llegaba a 1957 y 1958 para proceder, por fin, a la ejecución de la herencia por unos fallecimientos que habían ocurrido en 1936, es decir 21 y 22 años antes, respectivamente.

5. 2. 6. Las víctimas sin identificar

La licencia de enterramiento de una víctima sin identificar estaba prevista por el art. 82 de la Ley de 1870, así, en *“el caso de fallecimiento de una persona desconocida o del hallazgo de un cadáver cuya identidad no sea posible identificar, (...) se expresará:*

- 1º. El lugar de la muerte o hallazgo del cadáver.
- 2º. Su sexo, edad aparente y señales o defectos de conformación que lo distingan.
- 3º. El tiempo probable de la defunción.
- 4º. El estado del cadáver.
- 5º. El vestido, papeles u otros objetos que sobre sí tuviere o se hallaren a su inmediación, y que (...) puedan ser útiles para la identificación.”⁷⁹⁷.

Se han encontrado varios casos de este tipo en los registros civiles de Anaya (2), Cabezuela (4), Escobar de Polendos (1), La Lastrilla (1), Perogordo (1) y Torrecaballeros (3). De todas ellas, sólo aportan la descripción física y las heridas que produjeron la muerte las anotaciones de Anaya. De los 12 casos recogidos, se identificaron posteriormente 5 cadáveres: 3 en Cabezuela, 1 en Torrecaballeros y otro en La Lastrilla, como explicamos en el anexo nº 1.

Anaya:

El cadáver recogido el 19 de agosto de 1936 era de unos 44 años, estatura regular, color moreno, con un lunar de tamaño de una moneda de cinco céntimos detrás de la oreja del lado izquierdo. Vestía chaqueta azul oscuro, pantalón negro de pana de cordoncillo menudo, camisa blanca, apargatas (sic) blancas de las llamadas pelotaris y un cinto estrecho de correa. El cadáver presentaba las heridas siguientes: una en la espalda, otra en la región lumbar superior y otra en la cabeza en el cráneo, mortales de necesidad, las que le originaron la muerte según certificación facultativa⁷⁹⁸.

⁷⁹⁶ Reg. Civ. Gallegos, hojas anexas a las actas de defunción de Luis Ayuso y Pedro de Lucas.

⁷⁹⁷ Ley Provisional de Registro Civil de 1870, art. 82.

⁷⁹⁸ Reg. Civ. Anaya, anotada el 19 de agosto de 1936. El otro cadáver recogido el 16 de septiembre de 1936 se correspondía con

un hombre de unos 38 años, estatura bastante regular, tez morena, vestía traje de paño corriente color marrón oscuro, camisa blanca, camiseta de verano, color crudo, calzoncillo de lienzo blanco con las iniciales enlazadas "OP", calcetines rayados de color oscuro, zapatillas de verano color café. (...) Practicado el reconocimiento por el médico titular resultó presentar las heridas siguientes: una en el hipocondrio derecho, otra en la espalda, lado izquierdo de la región escapular y otra en la región temporal del mismo lado. Todas ellas sin orificio de salida y producidas por arma de fuego, siendo la causa de la muerte por hemorragia interna, por haber interesado órganos importantísimos para la vida.

Torrecaballeros:

Las tres anotaciones del 7 de septiembre de 1936 son prácticamente iguales. Se inscribieron tres cadáveres sin identificar, *“encontrados en el kilómetro 12 de la carretera Segovia-Sepúlveda, llamado Lavazuelos, a la izquierda, a unos 140 metros de allí, por eridas (sic) de arma de fuego según parte facultativo (...) Tiempo posible de defunción, 6 a 7 días muertos, sin hallarse nada para identificar su personalidad. De unos 40/45 años”*⁷⁹⁹.

La Lastrilla:

La anotación del día 15 de agosto de 1936 es de *“un cadáver que no se ha podido identificar, muerto en este término municipal, el día anterior probablemente, debido a heridas sufridas, (...) en virtud de certificado facultativo presentado, (...) enterrado en cementerio del pueblo. Inscrito por orden judicial del Juez de Instrucción del partido de Segovia”*⁸⁰⁰.

Cabezuela:

Las cuatro anotaciones del 23 de septiembre de 1936 eran iguales, manifestaban la recogida de un *“cadáver desconocido”* que *“fue muerto por Falange”*⁸⁰¹. Sólo aportaban, y ahí radica la diferencia de unas a otras, cómo vestía cada víctima, aunque tampoco varían mucho, pues, tres de los cuatro infortunados, vestían pantalón negro de pana, con chaleco y chaqueta de pana.

Escobar de Polendos:

Sobre el cadáver anotado el 7 de agosto de 1936 se escribía *“...su sexo varón, su edad aparente unos 36 años, conformación robusta, tiempo probable de defunción cuatro o cinco días del hallazgo, estado del cadáver, de cúbito supino y carbonizado, como igualmente todas sus ropas, habiéndose encontrado cerca del cadáver tres vainas de fusil y dos cartuchos de escopeta del 12”*⁸⁰².

Perogordo, anejo de Madrona:

El juez municipal de Madrona informó al Juzgado de Primera Instancia de Segovia que el 18 de agosto de 1936 fue requerido *“por un empleado del ayuntamiento de Segovia para levantar un cadáver hallado en el sitio de Tejadilla y una vez hecho el levantamiento referido el cadáver fue trasladado al cementerio del anejo Perogordo donde recibió sepultura, no pudiendo ser identificado por su estado de descomposición y no encontrarle documentos acreditativos de su personalidad”*⁸⁰³.

⁷⁹⁹ Reg. Civ. Torrecaballeros. Anotación de tres cadáveres sin identificar el día 7 de septiembre de 1936.

⁸⁰⁰ Reg. Civ. La Lastrilla. Anotación del día 15 de agosto de 1936.

⁸⁰¹ Reg. Civ. Cabezuela. Anotaciones del 23 de septiembre de 1936.

⁸⁰² Reg. Civ. Escobar. Anotación del 7 de julio de 1936.

⁸⁰³ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja nº 299, 1. Exp. Mariano Velasco. Diligencia del juez municipal de Madrona, fechada el 4 de marzo de 1937. La recogida de este cadáver no fue inscrita en el Registro Civil de Madrona.

6. LA REPRESIÓN “LEGALIZADA”

Los militares sublevados se sirvieron fundamentalmente de los procedimientos penales ya existentes para reprimir a los adversarios políticos, emplearon y exprimieron el Código de Justicia Militar (CJMil) hasta la saciedad. Pero la aplicación a personal civil de la legislación castrense, específica de los militares, vino originada por la ilegalidad que supuso la sublevación contra el Estado de derecho iniciada la tarde del 17 de julio en las guarniciones del norte de África. A partir de entonces se inició la persecución de los defensores de la II República y del Gobierno legítimo surgido de las elecciones de febrero de 1936.

6. 1. El fundamento legislativo

El golpe militar fue acompañado de la declaración del estado de guerra en el territorio bajo la jurisdicción correspondiente de cada mando sublevado, entre los días 17 de julio -en las guarniciones de África- y 19 del mismo mes -en Segovia y otras provincias-.

Los militares sublevados se dotaron de una legalidad represora desde el bando declaratorio de estado de guerra, si bien esa legalidad en principio no estaba unificada. Por ejemplo, Queipo de Llano declaraba en su bando: *“Queda prohibido terminantemente el derecho a la huelga. Serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas, los directivos de los sindicatos cuyas organizaciones vayan a la huelga”*⁸⁰⁴. En cambio, otros jefes militares dictaron bandos de guerra menos expeditivos, como el del coronel Tenorio para Segovia: *“Se prohíbe la formación y circulación de grupos de tres o más de tres personas, que serán disueltos por la fuerza, si se resistieran a la primera intimación que previamente se les haga, y los que se resistan, serán considerados como rebeldes o sediciosos”*⁸⁰⁵, pero sin especificar las penas para estos casos.

Pero fue el Bando de Guerra de 28 de Julio, de la Junta de Defensa Nacional (JDN), el que marcó las directrices sobre las que se asentaría el castigo sobre los oponentes, que, no conviene olvidar, eran los defensores de la legalidad democrática. Este Bando tuvo gran importancia en el ámbito jurídico al ratificar, unificar (puesto que cada militar sublevado había dictado su propio bando de guerra, así, en la VIIª Región Militar, había sido el general Saliquet el encargado de su publicación) y extender a todo el territorio en manos de los sublevados la declaración de estado de guerra. Este hecho revalida, para Berdugo⁸⁰⁶, la preeminencia de los militares y de la jurisdicción militar sobre la ordinaria, haciendo de la jurisdicción de guerra, del Código de Justicia Militar y del procedimiento sumarísimo los núcleos centrales de la administración de justicia (aunque más adelante se explicará cómo en Segovia el recurso al sumarísimo es muy limitado y fue mucho más aplicado el consejo de guerra ordinario). La importancia de este Bando se prolongó más allá de la guerra civil pues se mantuvo en vigor hasta julio de 1948, en que fue derogado por un auto del Tribunal Supremo⁸⁰⁷.

⁸⁰⁴ BOP de Sevilla, 29 de julio de 1936.

⁸⁰⁵ BOP, 27 de julio de 1936. Tenorio se había limitado a secundar la declaración de Saliquet, *“declarado por el Excmo. General de la División el estado de guerra en todo el territorio de la misma...”*.

⁸⁰⁶ BERDUGO, Ignacio; CUESTA, Josefina; DE LA CALLE, Mª Dolores y LANERO, Mónica. *El Ministerio de Justicia en la España “Nacional”*. Ponencia en *Jornadas sobre Administración de Justicia durante la Guerra Civil*, Salamanca, noviembre de 1987. Ministerio de Cultura, Madrid, 1990.

⁸⁰⁷ Citado por ORTIZ HERAS, M., op. cit., pág. 364.

6. 1. 1. La reversión de la legitimidad

El primer problema con el que se enfrentaron los militares sublevados era la legitimación del golpe de estado por el que se hicieron con el poder en la zona bajo su control. Esta legitimación que pretendían arrogarse, se explicaba nítidamente en el primer "Resultando" que figuraba en las sentencias de los consejos de guerra que dictaban los tribunales castrenses. En él, con diferentes matizaciones en cuanto a la redacción de unos a otros, venía a fundamentarse la sublevación militar. Por un lado, la motivación de la sublevación era "salvar a la patria", evitando su "naufragio":

El 18 julio el Ejército español recogiendo las abandonadas funciones del Gobierno del Estado por demandarlo y exigirlo así, de manera imperiosa, ineludible e inaplazable la salvación de España necesitada de tan propia privativa y eficaz defensa contra los elementos rojos separatistas que en desaprensivo contubernio y en la más inicua de las alianzas pusieron en peligro la independencia Patria⁸⁰⁸.

Por otro, la legitimidad de la autoridad militar, en contraposición de la legalidad republicana del Gobierno de Madrid, desde el mismo instante de la sublevación: "...las autoridades militares declararon el estado de guerra asumiendo desde aquel instante la representación auténtica del poder legítimo en los territorios de sus respectivas jurisdicciones (...) en la 7ª el 19 de julio"⁸⁰⁹. Esta era la justificación habitual, pero se ha encontrado una mucho más atrevida en el razonamiento, por la tergiversación tan brutal de la realidad: **"El gobierno de Madrid, que desde el 19 de julio se levantó en armas contra el Ejército, cuando éste en vista de la marcha de los asuntos públicos se vio en la precisión de asumir la responsabilidad del poder, para evitar que el caos se adueñara del país..."**⁸¹⁰.

Contra ese nuevo poder legítimo, todos los que "aún en estos momentos se hallan alzados en armas contra los poderes del estado legítimamente representado por la Junta de Defensa Nacional"⁸¹¹, es decir, todos aquellos que resistían ante los militares que se sublevaron contra la legalidad, eran declarados rebeldes. Los referidos "momentos" se prolongaron durante toda la guerra y se extendieron por su posguerra. El delito de rebelión entendido como oposición a la legalidad franquista se mantuvo en vigor a lo largo de las primeras décadas del régimen surgido de la guerra civil.

En esta fundamentación se apoyaba lo que se ha venido a denominar la "justicia al revés", como la nombra Serrano Súñer. Porque, según afirma Aróstegui, curiosa y significativamente, los sublevados "no eliminaron a sus enemigos por la aplicación de unos principios jurídicos nuevos, de una 'justicia revolucionaria' (...) sino basándose en el estado que querían destruir, retorciendo hasta la aberración las figuras delictivas contempladas en el Código de Justicia Militar. Las figuras de sedición, auxilio a la rebelión, etc. fueron aplicadas a los adictos o sostenedores del Estado legítimo"⁸¹².

Desde otro punto de vista, el jurista Jiménez de Asúa lo calificó como "delito de rebelión a la inversa"⁸¹³. Todas aquellas personas que defendían la legalidad constitucional vigente, representada por la II República, oponiéndose a la sublevación militar, eran

⁸⁰⁸ Causa 535 contra Felipe Hernando Perdiguero, en su Exp. en Arch. Pris. Prov.

⁸⁰⁹ Causa 664/36 contra Lorenzo Grande Gómez y 25 más.

⁸¹⁰ Causa 862/36, contra Agapito Cristóbal Casado y Víctor Miguel García. El subrayado es mío. En Exp. Agapito Cristóbal, Arch. Pris. Prov.

⁸¹¹ Causa 471/36, contra Felipe Martín Ruano, en AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

⁸¹² ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J. *Los componentes sociales y políticos*. En TUÑÓN DE LARA, M. y otros; *La guerra civil 50 años después*. Cita a SERRANO SÚÑER, Ramón. *Entre el silencio y la propaganda, la historia como fue*. Memorias. Planeta, Barcelona, 1977, pág. 245.

⁸¹³ JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. *Comentario a una sentencia en viceversa*. *El Criminalista*, T. 9, Buenos Aires, 1951. Sobre el consejo de guerra a Julián Zugazagoitia y otros en 1941.

declarados “rebeldes” por las nuevas autoridades de la *España Nacional*, desde el Bando declaratorio del estado de guerra dictado por la JDN el 28 de julio de 1936.

El Bando de Guerra fue utilizado como pieza penal de guerra al margen del derecho penal ordinario y al margen de la intervención de la administración de la Justicia. Utilizaba dos vías para ello: en primer lugar, ampliaba las competencias de la jurisdicción militar incluyendo muchos tipos delictivos del ámbito civil, económicos, insulto a autoridades civiles, etc., en el ámbito de la justicia castrense. En segundo lugar, elaboraba un derecho penal, que desnaturalizaba ya, a modo de ley, el contenido del delito de rebelión, que según el artículo 6º pasaba a abarcar múltiples variantes, pues serían considerados rebeldes:

- a) Los que propalen noticias falsas o tendenciosas con el fin de quebrantar el prestigio de las fuerzas militares y de los elementos que prestan servicios de cooperación con el Ejército.
- b) Los poseedores de armas de fuego o sustancias inflamables o explosivas; entendiéndose caducadas todas las licencias de armas que no hubiesen sido otorgadas por esta Junta de Defensa Nacional o sus legítimos representantes. Los poseedores de armas, con o sin licencia, quedan obligados a entregarlas en el plazo máximo de 12 horas, sin excusa alguna, en el puesto de la Guardia Civil respectivo, donde, en cada caso, podrá convalidarse la autorización para su uso, a discreción del comandante de aquél.
- c) Los que celebren cualquier reunión, conferencia o manifestación pública sin permiso de la autoridad, solicitado en la forma reglamentaria, y los que asistan a ellas.
- d) Los que cometan delitos de los comprendidos en los apartados b), c), y d) del artículo anterior⁸¹⁴.
- e) Los que tiendan a impedir o dificultar el abastecimiento de artículos de primera necesidad, eleven injustificadamente los precios de los mismos o de algún modo contribuyan a su encarecimiento.
- f) Los que coarten la libertad de contratación o de trabajo o abandonen éste, ya se trate de empleados, patronos u obreros⁸¹⁵.

De igual manera, el art. 9 consideraba rebeldes a los infractores de la prohibición del funcionamiento de todas las estaciones radio-emisoras particulares de onda corta o extracorta.

Este Bando no derogó los Códigos vigentes pero estableció la aplicación prioritaria del Código de Justicia Militar sobre el Código Penal común, la jurisdicción militar sobre la ordinaria, y dentro de la primera el procedimiento sumarísimo sobre el ordinario.

6. 1. 2. El Código de Justicia Militar

El Código de Justicia Militar que se aplicó fue el último de la monarquía, publicado en 1930, con las reformas que fueron incorporando los decretos de la JDN primero, y la Junta Técnica del Estado (JTE) después. Eran tantas las incorporaciones y cambios que los tribunales militares precisaban asesoría y solicitaban apoyo continuamente de las Auditorías de Guerra. Esta necesidad se vio cubierta por la publicación del “*Código de Justicia Militar con notas aclaratorias y formularios*”, de José María Dávila y Huguet⁸¹⁶. En él se incluían abundantes comentarios muy útiles para los miembros de los numerosos

⁸¹⁴ Los apartados aludidos del art. 5 eran:

b) Los de atentado contra toda clase de vías o medios de comunicación, servicios, dependencias o edificios de carácter público.
c) Los cometidos contra las personas o la propiedad por móviles políticos o sociales.
d) Los realizados por medio de la imprenta u otro medio cualquiera de publicidad.

⁸¹⁵ Bando de la JDN de declaración del estado de guerra, *BOP*, 5 de agosto de 1936.

⁸¹⁶ José María Dávila y Huguet era teniente coronel auditor de Guerra de primera clase. La edición consultada ha sido la 2ª, de la Imprenta Aldecoa, Burgos, 1937. En 1938 incluye en su obra el Código Penal común más una serie de tablas para la aplicación de las penas y disposiciones complementarias.

tribunales militares, creados a lo largo de todo el territorio controlado por Franco. Era evidente la necesidad de asesoramiento de una mayoría de militares que no tenían ni la preparación, ni la práctica jurídica suficiente, y se vieron desbordados por la ingente cantidad de procesos judiciales a los que habían de hacer frente.

En su Advertencia Preliminar, Dávila explicaba los motivos que le empujaban a publicarlo:

No tiene esta obra otra pretensión que la de servir una necesidad sentida en los momentos en que se publica, ya que, agotadas otras sobre la misma materia, y **aumentando considerablemente el número de procedimientos en tramitación**, consecuencia de la gloriosísima gesta (...) son muchas las dificultades con que en su labor tropiezan cuantos intervienen en aquéllos (.....), no aspira sino a constituir elementalísimo manual orientador de quienes no cuentan con mejores medios para cumplir su misión judicial⁸¹⁷.

El éxito o más bien la necesidad de la obra lo prueba que la primera edición de junio de 1937 quedó agotada rápidamente, por lo que se editó la segunda en septiembre del mismo año. Esta publicación fue declarada de utilidad para el Ejército, por Orden de 26 agosto de 1938.

6. 1. 3. La regulación de los Consejos de Guerra

La primera disposición sobre las actuaciones judiciales de los Tribunales Militares fue el Decreto nº 79 de 31 de agosto de 1936 de la Junta de Defensa Nacional⁸¹⁸. En su preámbulo se advertía la necesidad de que en *“los actuales momentos, para mayor eficiencia del movimiento militar y ciudadano, que la norma en las actuaciones judiciales castrenses sea la rapidez”*, es decir, no se perdiera demasiado tiempo en juicios, si bien *“haciéndola compatible con las garantías procesales de los encartados”*. La esencia de esta disposición era *“que se evite en lo posible el distraer del servicio de armas a los jefes, oficiales y clases para ocuparlos en la tramitación de dichos procedimientos”*, para que se pudieran dedicar fundamentalmente *“a las conveniencias del servicio militar (...) obviando la dificultad de comunicaciones”*⁸¹⁹. Parece lógico que los mandos militares se dedicaran especialmente a su trabajo en campaña, dada la situación bélica, dejando en un segundo plano la actividad jurídica. Aunque esto les llevaba a una contradicción, porque era tal la necesidad que sentían de *“extirpar los males de la patria”* que se multiplicaban los procesos judiciales para condenar a tanto opositor. Tenían que combatir al enemigo en el campo de batalla y en los tribunales; y en ambos puestos los protagonistas de la lucha debían ser los militares.

Para contribuir a la “rapidez” de los procedimientos judiciales, establecía que *“todas las causas de que conozcan las jurisdicciones de Guerra (...) se instruirán por los trámites de juicio sumarísimo que se establecen en el Título 19, tratado 3º del Código de Justicia Militar”*. La generalidad de la utilización del procedimiento sumarísimo era total, puesto que *“no será preciso para ello que el reo sea sorprendido ‘in fraganti’, ni que la pena a imponerse sea la de muerte o perpetua”*⁸²⁰ si bien, en todo caso podía convertirse el procedimiento sumarísimo en ordinario.

Podían desempeñar cargos de jueces, secretarios y defensores en los procedimientos militares todos los jefes y oficiales del Ejército y sus asimilados, aunque se hallaran en situación de retirados.

⁸¹⁷ DÁVILA Y HUGUET, J. M., op. cit. El subrayado es mío.

⁸¹⁸ BOP, 9 de septiembre de 1936.

⁸¹⁹ Ambos entrecomillados son extractos del preámbulo del Decreto nº 79 de 31 agosto de 1936. La alusión a la dificultad de las comunicaciones podría referirse a la obligatoriedad de las que tenían que realizar los tribunales militares con los auditores de Guerra, según veremos más adelante. El subrayado es mío.

⁸²⁰ D. 79. Art. 1º. El subrayado es mío.

Conscientes de los problemas y dudas que ocasionaría la aplicación de la justicia militar por parte de los jueces y tribunales castrenses, la JDN determinaba que estas dudas serían resueltas *“por la autoridad militar, previo informe del Auditor (...) ante lo excepcional de las circunstancias que se atraviesan (...) procurarán cuantos intervengan en la administración de la justicia militar (...) acercarse lo más posible en su aplicación, al interpretarlas, a lo que disponga el Código de Justicia Militar”*⁸²¹.

En caso de disensos que se dieran en los procedimientos judiciales entre la Autoridad Militar y los auditores correspondientes con los fallos pronunciados por los Consejos de Guerra, en general se resolverían por la Junta de Defensa Nacional. Si los desacuerdos lo fueran en el trámite serían resueltos por los generales en jefe del Ejército.

Para la composición de los Tribunales Militares se dictó el Decreto nº 55 de 1 de noviembre de 1936⁸²². Esta norma se preveía inicialmente para la creación de *Consejos de Guerra Permanentes* en la plaza de Madrid, pues por aquellas fechas parecía inminente la caída de la capital, pero con la prolongación de la guerra se aplicó a la totalidad del territorio nacionalista para el resto de la contienda. En la provincia de Segovia no llegaron a funcionar los consejos de guerra permanentes y sí los consejos de guerra de plaza cuyos tribunales estarían integrados por 7 miembros: un presidente, con categoría de jefe del Ejército; cinco vocales con categoría de oficial y un vocal ponente, miembro del Cuerpo Jurídico Militar.

La plaza de un asesor jurídico en cada tribunal parecía obligada para dar una credibilidad a los procesos judiciales, porque no había tantos militares licenciados en Derecho como miembros eran necesarios en los innumerables tribunales castrenses. El Ministerio Público estaría representado por un técnico del Cuerpo Jurídico Militar o de las carreras fiscal o judicial, licenciado o doctor en Derecho, o, en su defecto, por un jefe u oficial del Ejército. Serían designados libremente por el General del Ejército del Norte, que los adscribiría a cada Tribunal. El cargo de defensor estaría desempeñado, en todo caso, "por un militar", pero no tenía que ser necesariamente abogado. Era nombrado por el tribunal y no elegido por el procesado o procesados.

También se ocupaba el Decreto 55 del procedimiento judicial-militar. La preparación de las actuaciones de los consejos de guerra por los Juzgados Militares se debía a unas normas procesales:

1º. Una vez presentada la denuncia o el atestado (por la Guardia Civil, de Seguridad, etc.), debían ratificarse ante el juez instructor los comparecientes.

2º. Identificados los testigos y atendido el resultado de las actuaciones, el Juez Instructor dictaba auto-resumen de las mismas al Tribunal, que designaba día y hora para la celebración de la vista.

Hasta el momento de la vista se exponían los autos al fiscal y defensor para que tomaran notas para sus informes.

3º. En caso de que el Tribunal considerara necesaria la presencia de testigos de cargo, se devolvían los autos al juez que los tramitaba, quien, oído el defensor, los aceptaba o no.

4º. Pronunciada la sentencia pasaban las actuaciones al Auditor para su aprobación o disenso.

5º. Una vez firme el fallo, se interesaría de la Autoridad Militar (por parte de la Auditoría de Guerra, Sección de Justicia) la ejecución dispositiva del mismo.

Las resoluciones de los Tribunales habían de ser acordadas por unanimidad o mayoría de votos, en cuyo caso quedaría constancia de los votos particulares. Se

⁸²¹ D. 79. Art. 5º.

⁸²² BOE, 5 de noviembre de 1936.

continuaba remarcando que las actuaciones judiciales se guiarían por las normas del juicio sumarísimo, *“en lo que no se oponga a este Decreto”*⁸²³.

Para desarrollar la norma anterior se dictó el Decreto nº 70 de 8 de noviembre de 1936, por el que los jueces y fiscales eran asimilados a la carrera militar. De este modo, se nombraban capitanes honoríficos de complemento del Cuerpo Jurídico Militar *“durante el tiempo que desempeñen funciones judiciales militares, a los jueces y fiscales de la jurisdicción ordinaria, destinados (...) en los Consejos de Guerra permanentes”*⁸²⁴ creados por el decreto anterior. Del mismo modo, se nombraban alféreces provisionales del Cuerpo Jurídico Militar a los aspirantes de las carreras judicial y fiscal, designados como jueces y fiscales en dichos Consejos. Con los nombramientos, *“mientras dure su cometido”*, se les reconocían los derechos y quedaban obligados a los deberes por su condición militar.

6. 2. La Justicia Militar

6. 2. 1. Los Juzgados Militares

La actuación de los Juzgados Militares de plaza no era algo innovador en la Historia de España, más bien al contrario, su actividad era tan recurrente como la presencia del Ejército en la política nacional. Demasiado recientes estaban los consejos de guerra para juzgar a los revolucionarios de Asturias. En la ciudad de Segovia, también el Juzgado Militar de Plaza había intervenido sobre los sucesos acaecidos en esta provincia durante el mes de octubre de 1934⁸²⁵. Iniciada la guerra, al quedar desbordado este Juzgado Militar por la multitud de sumarios, se crearon hasta siete juzgados militares para la instrucción de las numerosas causas surgidas de la persecución de los adversarios. Además, funcionaron los propios Juzgados de los distintos Cuerpos de Ejército existentes en la ciudad: Academia de Artillería e Ingenieros y 13 Regimiento de Infantería Ligera.

A ellos han de añadirse los Regimientos situados en el frente de la sierra de Guadarrama: Grupo de Divisiones Ávila-Segovia, que en 1938 pasó a denominarse Agrupación de Divisiones Guadarrama-Somosierra, los Regimientos de Infantería San Quintín nº 25 y de Caballería Calatrava nº 2, en el frente de S. Ildefonso, y las unidades militares desplegadas en Somosierra, Alto del León y Navafría.

No podemos adscribir un juez a cada Juzgado puesto que las mismas personas intercambiaron sus cargos. Pero, al menos, sí podemos nombrar a los distintos jueces instructores que figuran en los testimonios de sentencia y en los expedientes personales de los detenidos, cuando en éstos se especifica el juez del que dependía cada preso⁸²⁶.

⁸²³ D. 55.

⁸²⁴ D. 70, Art. 1º. BOP, 18 de noviembre de 1936.

⁸²⁵ En octubre de 1934 en Segovia la Casa del Pueblo declaró la huelga general y la policía detuvo a los dirigentes de UGT y PSOE interviniendo armas y municiones, por lo que fueron procesados y juzgados el 10 de abril de 1935. Los acusados contaron con nueve abogados defensores, entre ellos el diputado socialista Jiménez de Asúa. El juicio se saldó con la condena de 4 procesados por tenencia ilícita y la absolución de los otros 15.

⁸²⁶ Capitán Antonio Blanco García, comandante Antonio Rey Sánchez, capitán Luis Gil Delgado, capitán Juliano Quevedo, Gabriel de Cáceres y Torres, teniente Salvador Bernal Martín, Antonio Liras, capitán Leonardo González Amador, comandante Ramón Utrilla Selles, (ascendido de capitán durante la guerra), capitán Pedro Bautista Bautista, teniente Andrés Ortega García, capitán Luis de Cabanyes y Vivanco, alférez Pedro Estrados, José Mellado López, Augusto Martí Porta, Emilio de Isasa Navarro, comandante Bruno Fraile Balbuena, Pedro Paúl Puga, Pedro Anadón Mayayo, Salvador Mediano y Francisco González Casanova.

A los jueces instructores hay que añadir los jefes y oficiales que no ejercieron de instructores y pertenecieron a distintos tribunales en los consejos de guerra: Camilo Vázquez y Víctor Terradillos.

6. 2. 2. Los procedimientos de la Justicia Militar

A continuación vamos a explicar los distintos pasos que seguían los procedimientos judiciales militares aplicados por los sublevados para la persecución y el castigo a los oponentes políticos.

El procedimiento se iniciaba con unas diligencias previas, los denominados **Procedimientos Previos**, para averiguar la actuación de ciertas personas “*en relación con el Movimiento Nacional*”. Lógicamente este proceso afectaba a todos aquellos sospechosos de tener ideología republicana o de izquierda. Estos procedimientos previos no siempre derivaban en sumario judicial militar, aunque, en todo caso, sí precisaban el dictamen del auditor de Guerra de Valladolid para su resolución (ya fuera ésta sin declaración de responsabilidad para el procesado o derivara hacia el procedimiento militar)⁸²⁷.

El Consejo de Guerra, Ordinario o Sumarísimo y su tramitación completa

En los dos únicos sumarios completos (que incluyen la celebración íntegra del consejo de guerra, además de los informes policiales y de la Guardia Civil, las declaraciones de los procesados, etc.) que hemos podido consultar (porque el resto no aparecen en ningún archivo militar) se ha comprobado que, a grandes rasgos, se cumplieron las disposiciones normativas ya reseñadas, si bien predominaron en Segovia los consejos de guerra ordinarios sobre los sumarísimos. Con todo, en algunas sentencias se recogía “*consejo de guerra ordinario para ver y fallar en juicio sumarísimo*”⁸²⁸ lo que, evidentemente, se presta a la confusión, pero en estos casos los hemos computado como ordinarios (de un total de 120 sentencias consultadas, correspondientes a otros tantos sumarios, hay 108 procedimientos ordinarios y sólo 12 sumarísimos).

Además de los referidos consejos de guerra ordinarios o sumarísimos, también los había de *Oficiales Generales*. Por lo visto en la sentencia de la causa 219/36, este tipo de consejos de guerra se aplicaban a civiles sujetos a disciplina militar, puesto que, en este caso, Emiliano de Diego era empleado del Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército. Fue presidido el tribunal por el general Marcial Barro, que tuvo que desplazarse desde Valladolid porque en la plaza de Segovia no había ningún general para cumplir el requisito reglamentario.

Otra variante de procedimiento judicial militar eran los *Consejos de Guerra Sumarísimos de Trincheras*. No sabemos cómo era su funcionamiento, puesto que no lo hemos podido comprobar; lo que sí conocemos es el desenlace de dos de ellos, celebrados en el frente de la sierra de Guadarrama, con el resultado total de ocho fusilados⁸²⁹.

Los consejos de guerra se celebraban como vista pública, por lo que cualquier persona podía acudir a presenciarlos. Algunos testimonios cuentan que asistían “*señoritas*

⁸²⁷ Sirva como ejemplo el resultado de las diligencias que siguieron a Leandro Jubín, vecino de Martín Muñoz de las Posadas, recogido en su Exp. en Arch. Pris. Prov.:

...fue detenido preventivamente en razón de ser individuo de matiz izquierdista y posiblemente desafecto al GMN. Resultando que en lo actuado se acredita que si bien el referido individuo ha militado en las filas izquierdistas, en cambio a partir del 18 julio no ha tenido actuación alguna de palabra ni obra contra el Movimiento y en el pueblo de su vecindad tampoco ha habido resistencia ni oposición exteriorizada al mismo. Considerando que por lo expuesto no existe aparentemente materia delictiva ni indicios de responsabilidad criminal, y gubernativamente el Excmo. General de la División puede si lo estima conveniente, adoptar alguna medida en relación con aquél, disponiendo la continuidad de su detención por el plazo que estime teniendo asimismo en cuenta que en el pueblo de su vecindad no se ha perturbado la paz pública. Vistos los art. 398 y los de general aplicación del CJMil, acuerdo la conclusión de este procedimiento sin declaración de responsabilidad.

⁸²⁸ Incluso en la causa 109/36, el epígrafe rezaba “*Acta de celebración del consejo de guerra sumarísimo*”, y en el texto que lo seguía escribía “*...reunido el consejo de guerra ordinario...*” ¿en qué quedamos?, ¿era ordinario o sumarísimo?.

⁸²⁹ Fueron realizados respectivamente por el Regimiento de Caballería Calatrava nº 2 y el Regimiento de Infantería San Quintín nº 25, ambas unidades destacadas en la zona de San Ildefonso.

de derechas, que reían con las penas de muerte⁸³⁰. Por su parte, los oficiales que no estuvieran de servicio estaban obligados a acudir a los juicios, en cumplimiento del art. 566 del CJMil.

Otra irregularidad digna de mención, producida en los consejos de guerra, era la condena a personas a las que no se atribuía ningún delito en el proceso; como ocurrió en el sumario 392/36, por el que fueron condenados a muerte Hilario Santa Cruz y José Villacorta sin haber aparecido antes en el sumario como autores de algún hecho, ni ser tan siquiera mencionados.

En la prensa local de la provincia de Segovia no se recogieron noticias sobre consejos de guerra, fusilamientos o ejecuciones ilegales. Se corrió un tupido velo sobre esos temas, como si la guerra sólo se viviera en el frente de batalla. Al contrario de otros periódicos como *El Norte de Castilla* de Valladolid⁸³¹, en los tres años de contienda no apareció publicado en *El Adelantado* más que la celebración de un consejo de guerra (precisamente el primero celebrado en Segovia) como si estos procesos no existieran. La noticia venía recogida así:

Juicio sumarísimo contra 4 paisanos: Manuel García Mullar, Domingo Martín Barrios, Simeón García Martín y José López Jiménez (éste de Segovia), y un sargento del Regimiento de Infantería La Victoria nº 28 de Salamanca, acusado de sedición, los paisanos detenidos en El Espinar, procedentes de Madrid, asaltaron el Hospitalillo de Sangre y tras sacar a la calle a los heridos, fusilaron en ropas menores a un alférez y un militante de F.E. Sentencia pena de muerte cumplida a las 5 de la mañana en las tapias del Cementerio. Piquete Academia, Regimiento, guardias de Seguridad y escuadra de F.E. Los reos, salvo López Jiménez confesaron y comulgaron⁸³².

Dictamen del Auditor de Guerra de la 7ª División

Como se preveía en el Decreto 55, las sentencias eran enviadas a consulta al auditor de Guerra de la 7ª División (más adelante 7º Cuerpo de Ejército), José Bermejo Sanz, quien hacía un resumen de los hechos probados, del delito y de la condena impuesta por el Tribunal. Este trámite era puro formulismo en el que se repetían siempre los mismos razonamientos.

En el Resultando se hacía referencia al procedimiento seguido tras el fallo del Tribunal: *“notificada la sentencia a las partes, no han recurrido a esta Auditoría y que en el procedimiento aparecen observados los trámites legales sin protesta ni reclamación alguna”*⁸³³. Es curioso, pero de todas las sentencias consultadas no hay una sola en la que fiscal o defensa recurrieran el dictamen del tribunal. Como si de un procedimiento jurídico legal se tratara -en el que se cumplieran todos los requisitos de justicia, legalidad y derecho- ningún procesado reclamó ni protestó por el procedimiento, y admitía con toda tranquilidad y sentido de la responsabilidad la condena que el tribunal militar le imponía por defender la legalidad democrática⁸³⁴.

⁸³⁰ Testimonio de Urbano Barreno.

⁸³¹ Como se puede comprobar en MARTÍN JIMÉNEZ, Ignacio; *La guerra civil en Valladolid (1936-1939)*; aparecían casi a diario noticias sobre celebración de consejos de guerra y ejecuciones, ya fueran éstas legales o sumarias.

⁸³² *El Adelantado*, 3 de agosto de 1936. En este mismo diario se publicaron tres ejecuciones bajo el epígrafe *“Cumplimiento de sentencia”*, los días 15 y 22 de agosto, y el 15 de septiembre *“Ejecutados en Valladolid los asesinos de Onésimo Redondo”*. Además, en las notas necrológicas de 5 números inconexos (Los días 25 de agosto, 7 y 26 de septiembre, 9 de octubre y 5 de diciembre, todos de 1936) se recogían las defunciones de otros fusilados, pero sin especificar que habían sido ejecutados.

⁸³³ Causa 393/36 contra Mariano Alonso y 18 más, en AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

⁸³⁴ El Considerando del auditor no era menos cínico que el anterior razonamiento, como vemos en la sentencia anterior: Considerando que en el conjunto de testimonios aportados existe suficiente base para llegar dentro de un criterio racional, único exigible a los juzgadores a los hechos que sientan por lo que procede respetarlos y como nada hay que oponer tampoco a su acertado encaje legal (....) Considerando no ha lugar el recurso de casación ni de apelación del mentado fallo, susceptible de ser aprobado en este Cuerpo de Ejército, conforme a los artículos 28, nº 10 y 662 del CJMil. Vistos también los artículos 28 y 597 del CJMil. Acuerdo aprobar en sus fundamentos la sentencia y someterla al Excmo. Sr. General Jefe de este Cuerpo de Ejército Andrés Saliquet, (....) apruebe o interponga el recurso que crea procedente.

Prácticamente en todos los casos investigados, el auditor aprobó la sentencia enviada a consulta. Se han comprobado 34 sentencias informadas por el auditor, de las que en 32 casos ratificó la sentencia. Una de las sentencias que enmendó, fue la que condenaba a 20 años a la menor Fidela Pérez, por el delito de haber asistido a una manifestación -celebrada el 19 julio en San Ildefonso- de protesta contra el triunfo del movimiento militar en Segovia. El auditor, con buen criterio, consideró excesiva la pena y la conmutó por 3 años⁸³⁵. En la otra sentencia confirmó la absolución de la procesada pero la condenó a una multa de 10.000 pts. *“por sus antecedentes políticos desfavorables”*⁸³⁶.

Decreto de aprobación de la Autoridad Militar

La Autoridad Militar correspondiente era el General de la 7ª División, Andrés Saliquet, residente en Valladolid, quien, en caso de aprobar la pena de muerte, ordenaba comunicar por telégrafo al General Jefe de la Sección de Guerra de Burgos, a los efectos del art. 10 del Decreto Ley de 2 de Junio de 1931⁸³⁷. En algunos casos Franco aprobaba la conmutación de la pena de muerte por la de 30 años. No se ha podido comprobar de dónde viene la propuesta de conmutación, si del propio tribunal, del auditor, de Saliquet o de Franco. De las sentencias consultadas, hemos encontrado conmutaciones en las causas 109/36 (4), 392/36 (2), 419/36 (1), 614/36 (8), 685/36 (1), 933/36 (2), 384/37 (2) y 1377/38 (en ésta curiosamente fueron indultadas únicamente las cinco mujeres y el más joven de los condenados a muerte), hasta alcanzar un total de 26 indultos entre todos los sumarios.

Decreto del Auditor

Recibida de nuevo la causa por el auditor, con la conformidad del General en Jefe de la Región, la sentencia dictada quedaba firme. El auditor devolvía la causa al juez instructor para la ejecución de la pena, ya fuera ésta de muerte o de prisión. El instructor remitía otro testimonio de la sentencia al gobernador civil presidente de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, en cumplimiento del Decreto de 10 de enero de 1937⁸³⁸ por el que se establecían las incautaciones de bienes a los condenados en los Consejos de Guerra. A éstos se les declaraba también *“responsables civiles ante el estado y los particulares perjudicados a quienes se reservan las acciones pertinentes”*. La comunicación al gobernador marcaba el inicio de la incoación del oportuno expediente de responsabilidad civil, como analizaremos en el capítulo 7.

6. 3. Los Consejos de Guerra en la provincia de Segovia

En la provincia de Segovia, de los más de 400 procedimientos militares instruidos durante la guerra y la inmediata posguerra, relacionados con ella, sólo se han podido consultar dos sumarios completos porque son los únicos que se conservan en el archivo de la Unidad de Apoyo al Comandante Militar de Segovia, ubicado en la Academia de Artillería. Por el resto de sumarios se ha preguntado en diferentes estamentos militares, donde explicaron el desconocimiento de su localización actual⁸³⁹. Por tanto, del resto de

⁸³⁵ Causa 885/36, contra Andrea Pérez Espinar y otros, en AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

⁸³⁶ Causa 534/37, contra Pilar Irsen, en su Exp. Arch. Pris. Prov.

⁸³⁷ Este decreto republicano fue una de las pocas normas que se mantuvieron en vigor en la España sublevada. Decía así lo que nos interesa en este asunto: *“en el caso de imponerse la pena de muerte, no se ejecutara hasta que el Gobierno acuse recibo del conocimiento, que habrá de dársele por el medio más rápido. En tiempo o estado de Guerra, si las comunicaciones estuvieren interrumpidas, se prescindirá de ese conocimiento al Ministerio, cuando el delito demande un rápido y ejemplar castigo, por exigirlo así los intereses de la Patria o de la disciplina militar”*.

⁸³⁸ Decreto de 10 de enero de 1937. BOE, 11 de enero de 1937.

⁸³⁹ Hemos consultado en el Archivo General Militar, ubicado en el Alcázar, la Delegación Provincial del Ministerio de Defensa, la Academia de Artillería, en ninguno de ellos saben de la existencia de los sumarios de la guerra civil. En el Archivo de Valladolid, antigua sede de la región militar a la que pertenecía Segovia nos comunicaron que no tenían

causas hemos de conformarnos con la consulta de los testimonios de sentencia. Estos, a pesar de ser breves resúmenes del procedimiento judicial-militar (en los que se especifica la identidad del acusado o acusados, el delito que se les atribuye, los hechos por los que se les persigue, los fundamentos jurídicos en los que se basan y los fallos del tribunal con las penas impuestas a los procesados) son una documentación bastante completa.

Hemos encontrado información incompleta sobre 408 consejos de guerra (de algunos conocemos únicamente el número de procesados, de otros las condenas, los delitos, etc.). De todos los sumarios, hemos podido consultar 92 sentencias de los años 1936, 1937 y 1938, a las que hay que añadir otras 28 de 1939, la mayoría sobre procesos desarrollados una vez finalizada la guerra. Del estudio consiguiente podemos distribuir los delitos enumerados y las penas recaídas, dando ejemplos concretos de cada uno. Fueron procesados en la plaza de Segovia, al menos se tiene constancia de ello, un total de 1.175 personas. Si bien, hay que tener en cuenta que no todos los que fueron detenidos y procesados fueron posteriormente juzgados, porque las acusaciones que pesaban sobre ellos no se pudieron probar y no les llevaron a juicio. Por ejemplo, para la causa 685/36, llegaron a ser 40 detenidos, de los que sólo fueron juzgados 27; y de la causa 109/36 estaban procesados 98, para quedar 87 ante el tribunal. En fin, los datos obtenidos aportan el resultado siguiente⁸⁴⁰:

Cuadro nº 17: Sumarios militares en la provincia de Segovia

Año	Sumarios	Nº de Procesados
1936	133	680
1937	102	226
1938	42	116
1939	50	51
Sumarísimos (sin fecha 1939/1942)	81	102
TOTAL	408	1175

Para una mejor explicación y valoración más efectiva sobre la evolución de la justicia militar en la plaza de Segovia durante la contienda, hay que hacer constar que 29 sumarios de 1936, fueron resueltos a lo largo de 1937, cuando ya la situación de guerra se había estabilizado y habían pasado los primeros momentos de represión, digamos, en “caliente”. Casi todos los consejos de guerra más importantes, los que enjuiciaron los hechos motivados por la oposición a la sublevación (explicados en el capítulo 2) fueron celebrados entre febrero y abril de 1937, siete meses después de ocurridos los hechos que los ocasionaron, y aún así todavía la causa 689/36 se calificó de “procedimiento sumarísimo”.

La mayoría de los sumarios de 1939 eran de posguerra, puesto que tan sólo dos se resolvieron entre enero y marzo de ese año. La práctica totalidad de estas causas afectaron a segovianos que habían pasado la sierra para alistarse con el Ejército republicano, algunos de ellos fueron detenidos en Madrid o en otros frentes al finalizar la guerra, pero los más serían apresados al regresar a sus localidades de origen una vez

documentación de esta provincia. Posteriormente, en el Archivo de Ferrol, donde se almacena ahora toda la documentación de la nueva región militar del Noroeste a la que pertenece Segovia, nos informaron que allí todavía no tienen nada de esta provincia, porque desde aquí no han enviado ningún documento. Si han desaparecido los sumarios, lo cual resulta poco coherente, nos hace pensar en posibles expurgos a lo largo de los años o falta de diligencia en su archivo, de no ser así, pensaremos en la existencia de una persona o personas que impiden la investigación de este importante aspecto de la represión.

⁸⁴⁰ Entre los datos totales se han incluido los consejos de guerra que se han encontrado de otras plazas en los que se juzgaba a segovianos.

terminada la contienda. Estos sumarios se extendieron al menos hasta 1944, cuando aún seguían los juicios por la actuación durante la guerra⁸⁴¹.

Otro dato a tener en cuenta es la multitud de procesos judiciales castrenses que encausaban a un solo procesado, como se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro nº 18: Sumarios con un sólo procesado

1936	1937	1938	1939
67	61	26	Prácticamente todos

6. 3. 1. La calificación legal de los delitos

Según se establecía en el art. 237 del CJMil., “*son reos del delito de rebelión militar, los que se alcen en armas contra la Constitución del Estado, contra el Rey, los cuerpos colegisladores o el gobierno legítimo*”⁸⁴². Esta fue la clave que los militares utilizaron para legitimar la sublevación. En los *Resultandos* se justificaba el delito de rebelión en la oposición al nuevo gobierno “legítimo” encarnado por la Junta Militar de Burgos, como hemos apuntado en el apartado anterior.

Para que los autores de los hechos contra el nuevo “gobierno legítimo” fueran procesados por el delito de rebelión, debían darse alguna de las circunstancias siguientes:

- 1º. Que estén mandados por militares, o que el movimiento se inicie, o sostenga o auxilie por fuerzas del Ejército.
- 2º. Que formen partida militarmente organizada y compuesta de diez o más individuos.
- 3º. Que formen partida en menor número de 10, si en distinto territorio de la nación existen otras partidas o fuerzas que se proponen el mismo fin.
- 4º. Que hostilicen a las fuerzas del Ejército antes o después de haberse declarado el estado de guerra⁸⁴³.

En la provincia de Segovia no se dio el primer caso (*que estén mandados por militares*) puesto que no hubo resistencia militar a la sublevación. En los sumarios por los hechos acaecidos en El Espinar y Nava de la Asunción sí se imputaron los otros apartados 2º, 3º y 4º, en los cortes de carreteras, detención y registro de los coches, asalto a los cuarteles de la Guardia Civil y requisa de las armas a personas de derechas. En el resto de procesos sobre las otras localidades donde hubo hechos similares (Cuéllar, Coca, Bernardos, San Ildefonso) no se aplicó ninguno de los apartados del art. 237.

Únicamente se aplicó el 2º caso (*que formen partida.... compuesta de diez o más individuos*) a los vecinos de Zarzuela del Monte, porque, en palabras del tribunal, “*los procesados formaban una partida compuesta de más de 10 individuos que estaban militarmente organizados y en todo caso porque aunque fuesen menos de 10 es evidente que en los días 19 al 21 de julio existían en el territorio nacional otras partidas que como la de Zarzuela no tenían más fin que el oponerse al poder legítimo de los generales nacionales*”⁸⁴⁴.

Curiosamente, también se aplicaron los apartados 3º y 4º a Ángel Contreras por un comentario, porque el tribunal dedujo que “*de las frases se infiere que este simpatizaba por afinidad de ideas con quienes se alzaron en armas contra el gobierno legítimo...*”⁸⁴⁵.

⁸⁴¹ Recogemos una sentencia de este tipo de procesos en los anexos documentales.

⁸⁴² Como se ha dicho anteriormente, el CJMil vigente para los sublevados era el de 1930, decretado por la monarquía, de ahí la reseña del “Rey”. El subrayado es mío.

⁸⁴³ Art. 237 CJMil.

⁸⁴⁴ Causa 685/36.

⁸⁴⁵ Causa 380/36, contra Ángel Contreras.

Oficialmente, no había criterios claramente definidos para establecer las distintas categorías del delito de rebelión: adhesión, auxilio o excitación. Si bien, en la obra citada de Dávila y Huguet, aparecía una explicación basada en un escrito dirigido por el Alto Tribunal de Justicia Militar a las Auditorías en el mes marzo de 1937 con una serie de orientaciones. Se tenía por adheridos a la rebelión a quienes, *“además de su ayuda o cooperación a la rebelión, estén identificados con la misma y persigan con sus actos precisamente los fines de ésta, como compenetrados con los rebeldes y unidos también en espíritu a ellos”*⁸⁴⁶.

Para diferenciar los delitos de adhesión a la rebelión y mero auxilio a ésta, proponía la realización de un

examen objetivo de los actos (que) constituyen el delito, y apreciación conjunta del mayor número posible de elementos de juicio. Un ponderado análisis de cuantos antecedentes puedan adquirirse sobre las ideas y actuación política y social de cada procesado, así como los informes fidedignos que sobre el particular se obtengan, podrá ser base fundada para hacer, en cada caso, con criterio lógico, las deducciones que conduzcan a establecer aquella diferenciación⁸⁴⁷.

La distinción parecía radicar en la ideología del procesado, si era oponente político a la sublevación militar, y para comprobarlo otorgaba gran importancia al estudio de sus antecedentes ideológicos, políticos y sociales, al igual que los "informes fidedignos" tan extendidos en la época que tratamos. Eran fundamentales los de la Guardia Civil, los alcaldes, los curas párrocos, los jefes locales de Falange y las "gentes de orden". Al inicio de los resultandos se exponían los antecedentes del procesado que venían a marcar definitivamente su destino.

Que la calificación del delito dependiera del comportamiento político y social anterior al 18 de julio era claramente una aberración jurídica, pues se castigaba con carácter retroactivo por el ejercicio de unos derechos y libertades propios del sistema democrático republicano, que obviamente estaban legalmente reconocidos cuando se ejercieron. Aunque así lo reconocía un tribunal militar: *“la mera profesión de ideas con anterioridad al movimiento nacional no aparece penada en la legislación vigente”*⁸⁴⁸, si valía, y mucho, para agravar o atenuar la responsabilidad y como consecuencia de ello, hacía variar la cuantía de la condena.

Del mismo modo suponía un agravamiento de la responsabilidad de los procesados haber hecho propaganda del Frente Popular, haber participado en alguna huelga convocada por los sindicatos de clase (por el contrario no era agravante si el paro lo había organizado un sindicato católico), haber contribuido al Socorro Rojo o Propresos, etc. Lógicamente era más grave la pertenencia a partidos o sindicatos. Por ejemplo, Bernabé Martín contaba con *“antecedentes extremistas, aunque de buena conducta”*⁸⁴⁹; al contrario que Salustiano García *“de sana ideología y cooperador en el Movimiento Nacional”*⁸⁵⁰.

A la hora de calificar el delito se valoraba también la conducta privada y social. Así, Alfonso López era un *“sujeto peligroso por su conducta excesivamente pésima”*⁸⁵¹, Víctor Miguel era *“de mala conducta social”*⁸⁵² y varios vecinos de El Espinar eran *“afiliados al Partido Comunista y mala conducta en su mayor parte”*⁸⁵³.

⁸⁴⁶ DÁVILA Y HUGUET, J. M., op. cit., comentarios al art. 240 del CJMil. En su obra no especificaba la fecha concreta del escrito referido del Alto Tribunal.

⁸⁴⁷ Ver nota anterior.

⁸⁴⁸ Causa 1274/36, contra Alfonso Núñez Carrión y 7 más, en Arch. Prov. Exp. Resp. Civ. 7/38, Victoriano Burgos Arribas y otros 5.

⁸⁴⁹ Causa 993/37, contra Bernabé Martín, en AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

⁸⁵⁰ Causa 1653/37, contra Salustiano García, en su Exp. Arch. Pris. Prov.

⁸⁵¹ Causa 109/36.

⁸⁵² Causa 862/36.

⁸⁵³ Causa 109/36. Una de las valoraciones más sangrantes sobre la conducta de un procesado, fue la que se hizo de Hermenegildo Domínguez Martín, maestro de El Espinar. La sentencia (causa 1619/36) que lo condenó expresaba así:

Según los preceptos legales vigentes, la inducción a la rebelión podía presentar dos formas: en primer lugar, *“cuando la eficacia del inductor haya dado origen a que se produzca realmente cualquier acto de rebelión, (...) alcanza al inductor la responsabilidad de autor de la misma rebelión”*. Según explicaba Dávila, no sería lógico que *“sufriera menos pena que el mero ejecutor de la rebelión o adherido a ella, aquél que por su acción inductora, era culpable de que la rebelión se hubiese producido”*. En segundo lugar, cuando *“a pesar de la propaganda o actos constitutivos de la inducción, no ha logrado el inductor su propósito, y las personas a las que la inducción alcanzó no llegaron a actuar en forma alguna como rebeldes”*.⁸⁵⁴

A la explicación oficial de Dávila, podemos añadir la interpretación de las diferentes categorías del delito de rebelión aportada por Berdugo⁸⁵⁵, quien distingue la gradación en función del nivel de implicación ideológica y del cargo desempeñado por los procesados. Para este autor se aplicaría el delito de adhesión a la rebelión a los procesados con decidida participación de apoyo a la República, que ejercieran la vanguardia militar, ostentaran cargo público o mantuvieran compenetración ideológica con el régimen republicano. El auxilio a la rebelión sería para los procesados por ejercer puestos de escasa importancia, incluso para personas de ideología de derechas. Por último, la calificación de excitación a la rebelión se daría a las personas que no hubieran tomado parte físicamente en actos de oposición a la sublevación militar.

Pero ahora, tras el análisis de la documentación consultada, vemos como ninguna de las explicaciones se cumple de manera completa, por lo que no se puede aventurar una norma general.

Afiliado a Trabajadores de la Enseñanza (...) desplegó una intensa actividad dentro de su esfera, de su ideología comunista, haciendo formaciones con los niños a los que enseñó a cantar la Internacional y a levantar el puño, procurando asimismo descristianizarles con ejemplos groseros y materialistas en relación con la presencia real de Dios y llevando su sectarismo al extremo de ordenar a los niños en las elecciones de febrero de 1936, de que rompiesen los carteles de propaganda de derechas. El procesado está asimismo considerado como el principal inductor de los obreros de El Espinar, en donde al iniciarse el GMN ocurrieron hechos luctuosos que han sido juzgados en otros procedimientos. Considerando que la rebelión tuvo caracteres violentos en El Espinar, son constitutivos del delito de rebelión militar, de cuyo delito es responsable en concepto de autor por inducción.

Al maestro se le acusaba de inducción a la rebelión por sus antecedentes izquierdistas, porque en los días de julio en que ocurrieron los hechos de oposición a la sublevación en El Espinar, Hermenegildo no estaba en la localidad. A pesar de ello fue condenado a muerte y fusilado.

⁸⁵⁴ DÁVILA Y HUGUET, J. M., op. cit., comentarios al art. 240 del CJMil. Además de las explicaciones anteriores, Dávila incluye las ampliaciones en el ámbito del delito de rebelión al terreno económico, con los decretos de 14 de marzo de 1937 para evitar la salida de oro del territorio ocupado por el Ejército Nacional, y de 23 de agosto de 1937 para la aplicación del Decreto Ley de Ordenación Triguera.

⁸⁵⁵ BERDUGO y otros, op. cit.

6. 3. 2. Los hechos “delictivos”

En primer lugar exponemos el resultado del estudio de las sentencias consultadas. En función de dicho análisis, la calificación “delictiva” de los hechos por los que fueron procesados los segovianos durante la guerra se recoge en el siguiente cuadro⁸⁵⁶:

Cuadro nº 19: Los “delitos” imputados

Nº de procesados por cada delito	1936	1937	1938
Rebelión (jefe)	35	2	0
Rebelión	168	14	0
Adhesión rebelión	187	50	12
Auxilio rebelión	96	31	3
Excitación rebelión*	29	16	8
Espionaje	6	7	28
Sedición	0	11	0
Deserción	4	0	0
Insulto a fuerza armada	7	5	2
Tenencia ilícita	6	2	2
Castrenses**	4	2	3
Otros	8	6	4
Total procesados	550	146	62

*incluye conspiración e incitación a la rebelión

**incluyen desobediencia, insubordinación, etc. atribuidos exclusivamente a miembros del Ejército.

En cuanto a los delitos castrenses hay que tener en cuenta que podían ser soldados o militares del Ejército nacional, acusados de insubordinación, desobediencia, etc. o querer pasarse al ejército republicano. Por otro lado, estaban los militares republicanos capturados en el frente y conceptuados como prisioneros de guerra (conducidos y retenidos en Batallones de Trabajadores). Otros republicanos fueron procesados por el delito de espionaje al haber sido detenidos por pasar a zona nacional para informarse sobre movimiento de tropas, ubicación de infraestructuras u otros asuntos similares. Se han encontrado también casos de presos integrantes de Batallones de Trabajadores procesados por hechos o comentarios posteriores a su detención.

Los militares procesados se distribuyen de la siguiente manera:

Cuadro nº 20: Militares procesados

	1936	1937	1938
Nacionales	4	7	4
Republicanos	10	7	1

⁸⁵⁶ Recordemos que la distribución anual del cuadro se corresponde con el nº de los sumarios; p. ejp. 109/36, se incluye en 1936, independientemente de que los consejos de guerra se celebraran en el mismo año que la instrucción sumarial o que los hechos que los motivaron.

De las sentencias estudiadas, se puede aportar un balance de los hechos o palabras por los que fueron juzgados centenares de personas en los consejos de guerra celebrados en la plaza de Segovia. Se van a agrupar según las distintas calificaciones que se aplicaban siguiendo el CJMil.

Rebelión militar y adhesión a la rebelión

Como ya se ha escrito, el Bando de 28 de Julio de 1936 era suficientemente amplio para englobar todo tipo de acciones o incluso actitudes. Podían abarcar desde declaraciones sobre el curso de la guerra o no acudir a la llamada a filas, a empuñar las armas contra los sublevados. Pero los sumarios consultados indican que la aplicación literal del referido art. 6º del Bando fue mucho menor que la utilización del art. 237 del Código de Justicia Militar, puesto que la gran mayoría de procesados por rebelión en la plaza de Segovia lo fueron en función de éste, aplicado a cualquier acción o hecho que supusiera oposición al movimiento militar.

Incluimos en el mismo apartado rebelión militar y adhesión a la rebelión porque es bastante difícil explicarlas por separado. En algunos sumarios se entendía la rebelión militar como un solo delito (aplicando el art. 237: *“los que se alcen en armas contra el gobierno legítimo”*) con dos categorías respecto a él (en función del art. 238, donde se recogían las penas para los reos de rebelión⁸⁵⁷), graduándolas en función de la consideración, por un lado de jefe o promotor de la rebelión, y por otro, como adherido a la rebelión o mero ejecutor de la misma. En cambio, en otros sumarios se conceptuaba como distinto delito la rebelión militar de la adhesión a la rebelión. La consideración de jefe siempre se aplicaba al delito de rebelión y era atribuido a los que el tribunal consideraba dirigentes de las acciones de oposición a la sublevación militar.

Teniendo en cuenta las dificultades para diferenciar la rebelión de la adhesión a la rebelión, pasamos a explicar los sumarios que enjuiciaban hechos con ambas calificaciones, ya fueran actos de oposición contra la sublevación militar o palabras que *“denotan identificación con los oponentes”* a la sublevación o aplicación del art. 6 del Bando de Guerra.

a) Hechos de oposición contra la sublevación militar

Los hechos aquí reseñados están explicados más exhaustivamente en el capítulo 2. 3. sobre el control de la provincia por los sublevados y se produjeron en los primeros días de guerra. A continuación nos limitaremos a ordenarlos en función de la calificación penal que tuvieron en los consejos de guerra que los juzgaron.

En primer lugar, y como hechos más graves, estarían los enfrentamientos armados entre defensores de la República y las fuerzas militares sublevadas. En toda la provincia de Segovia se produjo sólo uno en el caserío de Prados. Todos los procesados por haber participado en ese tiroteo fueron acusados de rebelión, llevaran o no armas, hubieran o no disparado. En el resto de las localidades de la provincia, a la llegada de las fuerzas militares se diluyó la defensa sin efectuar un solo disparo. Como da a entender la propia sentencia que juzgó la resistencia de la Casa de los Oficios en La Granja, donde se afirmaba *“prescindiendo de que se disparasen o no las armas”* para justificar la pena de muerte de los dirigentes republicanos. Pero *“como en otro sitio se dispararon a igual fin”* (en otros lugares de España donde se defendió la República), no es determinante el hecho de que los defensores de la legalidad en La Granja disparasen contra los sublevados *“ya*

⁸⁵⁷ Art. 238. Los reos de rebelión militar serán castigados:

1º. Con la pena de muerte el jefe de la rebelión y el de mayor empleo militar, o más antiguo, si hubiere varios del mismo, que se pongan a la cabeza de la fuerza rebelde de cada Cuerpo y de la de cada compañía, escuadrón, batería, fracción o grupo de estas unidades.
2º. Con la de reclusión perpetua a muerte los demás no comprendidos en el caso anterior, los que se adhieran a la rebelión en cualquier forma que lo ejecuten, y los que valiéndose del servicio oficial que desempeñen, propalen noticias o ejecuten actos que puedan contribuir a favorecerla

*que esto constituye simple accidente, tras el levantamiento consumado, y que no dependió tanto de la voluntad de los procesados como de la fuerza que se le puso enfrente*⁸⁵⁸.

En distintas circunstancias se produjo otro tiroteo en Labajos que enfrentó a milicianos de la columna Mangada con un grupo de falangistas que venían de Valladolid y se cobró la vida de Onésimo Redondo. Los vecinos del pueblo que *“acompañaron y se habían unido al grupo agresor”*⁸⁵⁹ de los milicianos fueron acusados también de rebelión.

La primera respuesta contundente de la clase obrera ante la sublevación militar fue la huelga general convocada por los sindicatos UGT y CNT en la tarde del 18 de julio. En todas las localidades de la provincia donde había Casa del Pueblo se llamó a la huelga general siguiendo la convocatoria que llegó desde Madrid (San Ildefonso, Cuéllar, Bernardos, Vegas de Matute y otras). Por ejemplo en Otero de Herreros, el 19 julio de 1936 se celebró una reunión en la Casa del Pueblo, en la que se *“acordó la declaración de huelga general, lo que se llevó a cabo el día siguiente publicando un bando a tal efecto el alcalde”*⁸⁶⁰. Pero la huelga general no tuvo la misma calificación en los distintos tribunales, aunque algunos de sus integrantes repitieran en otros consejos de guerra. En las causas 392, 689 y 685 (las tres de 1936) se conceptuó este hecho como *rebelión militar* (a los organizadores de la huelga y miembros de los comités se les procesó como rebeldes), mientras que en el sumario 132/36, se consideró a la huelga como *sedición* en aplicación del Código Penal ordinario relacionada con el art. 5 del Bando de Guerra⁸⁶¹.

Los comités de huelga, integrados por partidos y sindicatos, que ejercieron el poder en representación de la legalidad republicana en algunas localidades segovianas, tomaron ciertas medidas como la requisita de armas, de vehículos o de otros efectos para garantizar el orden y organizar la defensa de la República. En El Espinar requisaron un automóvil de la empresa Figueredo para trasladar a los obreros hasta el caserío de Prados. Por otro lado, fueron requisadas armas a los elementos derechistas en Coca y Bernardos. La acusación en ambos casos fue rebelión con la condición de meros ejecutores para los procesados por estos hechos.

Otra de las medidas tomadas por los comités fue el asalto a los cuarteles de la Guardia Civil para conseguir armas con las que defender sus localidades. Todas estas instalaciones estaban vacías porque los guardias habían sido concentrados en la capital por el gobernador civil. Hubo asalto en El Espinar, San Rafael, San Ildefonso y Valsain. Todos los procesados por estos hechos fueron acusados de adhesión a la rebelión, salvo Evaristo Martín, vecino de El Espinar, procesado por rebelión y Manuel Fernández, vecino de La Granja, acusado de auxilio.

La vigilancia armada de las localidades y los controles de vehículos, se efectuaron en todos los pueblos que permanecieron leales a la República, hasta la llegada de las fuerzas militares sublevadas. Los acusados por estas acciones fueron procesados por adhesión a la rebelión.

La última de las medidas tomadas por los comités fue cortar las comunicaciones para impedir el paso de los vehículos militares de los sublevados. Se organizaron talas de árboles para la instalación de barricadas en las carreteras y vías férreas. Los autores de estos hechos en El Espinar, La Granja, Coca, Bernardos y Zarzuela del Monte fueron acusados también de adhesión a la rebelión.

Por último, hubo una manifestación espontánea en La Granja en contra de la sublevación militar de Segovia. Fueron procesadas seis mujeres por adhesión a la rebelión (en los sumarios 393, 506 y 885 de 1936) y otros 3 hombres (del 664/36) por auxilio, todos

⁸⁵⁸ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399. Causa 164/36 contra Fernández Cordero y cuatro más.

⁸⁵⁹ Causa 505/36 contra Ángel Salgado y trece más. En Exp. Ángel García Díez, Arch. Pris. Prov.

⁸⁶⁰ Causa 132/36, contra Juan Blasco y 10 más. En su Exp. Arch. Pris. Prov

⁸⁶¹ Art. 5º. Quedan también sometidos a la jurisdicción de guerra, y serán sancionados, del mismo modo, por procedimiento sumarísimo:

A) Los delitos de rebelión, sedición y sus conexos, atentados, resistencia y desobediencia a la autoridad y sus agentes y demás comprendidos en Título 3º del Código Penal ordinario bajo el epígrafe "Delitos contra el orden público".

ellos participantes en esta manifestación, con la única diferencia de que una de las mujeres iba con una piedra en la mano.

b) Hechos que denotan identificación con los oponentes a la sublevación

Este apartado se hace necesario para diferenciar las acciones o hechos que no son estrictamente de oposición a la sublevación, pero que, a criterio de los tribunales militares, *“denotan ostensiblemente una identificación con los elementos que el 19 de julio se alzaron en armas contra la única representación del gobierno legítimo encarnada en tal fecha en las Autoridades Militares”*⁸⁶², es decir eran contrarios a la sublevación. Estos hechos podían ser considerados tan provocadores como los realizados por los hermanos Santamaría Cámara, que pasearon por El Espinar con dos ejemplares del diario *Ahora* de Madrid con fotos e información de la toma del Cuartel de la Montaña, *“mostrándolo con gran satisfacción a cuántos encontraba”* y se dedicaron a *“propagar por el pueblo las noticias de Unión Radio de Madrid”*⁸⁶³. Ambos actos fueron calificados de adhesión a la rebelión.

Otros hechos, *“no obstante sus variados matices, ofrecen todos ellos una característica común, cual es la de expresar de una manera clara y categórica simpatía y deseo de favorecer en todo lo posible a los elementos hostiles al Ejército, por lo cual jurídicamente han de ser considerados dichos procesados como adheridos a la rebelión”*⁸⁶⁴. Así eran catalogadas las acciones protagonizadas por dos vecinos de San Ildefonso: Juan Sierra, que la noche del 19 de julio se encontraba a la puerta de su domicilio cargando una escopeta, y decía *“hay que prepararse para la defensa del pueblo, porque Segovia se ha unido al movimiento”*, o Jacinto Rodríguez, *“en cuyo taller de zapatería se celebraban reuniones de elementos de extrema izquierda”*⁸⁶⁵.

Para este tipo de hechos la clave de la calificación de adhesión a la rebelión militar la encontramos perfectamente expresada en otra sentencia, donde se exponía: *“los propósitos que exteriorizó (...) denotan de una manera clara su ideología en un todo conforme con los elementos armados que mantienen la insurrección frente al poder legítimo, y su deseo de favorecer en la medida de sus fuerzas al progreso de las armas de los rebeldes”*⁸⁶⁶.

Más curioso, si cabe, es cuando de las palabras se deduce la identificación de los encausados con los oponentes a la sublevación militar. Por ejemplo, un simpatizante del Frente Popular, Ángel Contreras, se encontraba el 2 de agosto en una calle de Segovia, al ver volar un avión republicano dijo

‘el pájaro no caga, lo que hace falta es que cague’, y como el avión arrojara algunas bombas que produjeron desperfectos, el público intentó linchar al procesado. (...) Las frases se infiere que este simpatizaba por afinidad de ideas con quienes se alzaron en armas contra las autoridades militares⁸⁶⁷.

c) Aplicación del artículo 6 del Bando de Guerra

Como se ha escrito anteriormente, el art. 6 del Bando de 28 de julio de 1936, recogía múltiples actividades calificadas de rebeldes por los tribunales militares y como tales juzgadas en los consejos de guerra. Pero de las sentencias estudiadas, los únicos casos de aplicación expresa de este artículo se correspondían con manifestaciones verbales. Han aparecido 5 casos en que el procesado fue considerado rebelde en función del párrafo A): *“Los que propalen noticias falsas o tendenciosas con el fin de quebrantar el prestigio de las fuerzas militares y de los elementos que prestan servicios de cooperación*

⁸⁶² Causa 204/36, contra Miguel Santamaría Beltrán y sus hijos Francisco y Miguel Santamaría Cámara. AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

⁸⁶³ Causa 204/36.

⁸⁶⁴ Causa 393/36, contra Mariano Alonso y otros.

⁸⁶⁵ Ambos de la misma causa 393/36.

⁸⁶⁶ Causa 555/36, contra Patrocinio Merino. AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.

⁸⁶⁷ Causa 380/36, contra Ángel Contreras. AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.

con el Ejército⁸⁶⁸. Todos los procesados fueron condenados por realizar comentarios sobre el desarrollo de la guerra⁸⁶⁹.

Auxilio a la rebelión

Ya hemos apuntado que la clave para diferenciar la adhesión del auxilio a la rebelión venía dada, según el criterio de Dávila, por el grado de implicación ideológica del procesado. Para ello era necesario recoger los informes necesarios que clarificaran la militancia del acusado. Es decir, se debía averiguar si los hechos eran fruto del convencimiento político del autor o debido a las circunstancias del momento. Para catalogar los distintos delitos en función de su tipología no se tenía tanto en cuenta los hechos como la motivación interna que los originaba. En este sentido, se podría casi generalizar diciendo que los que se limitaron a cumplir órdenes de otros fueron condenados por auxilio a la rebelión, pero vamos a encontrar numerosas excepciones que nos echan abajo la generalización, como explicamos a continuación con los siguientes enunciados.

a) Participación en los hechos de oposición cumpliendo de órdenes

Hay dos casos en que los procesados se limitaron a cumplir órdenes superiores sin implicarse más. El 19 de julio de 1936 (día de la sublevación de Segovia), Guillermo Blanco, jefe suplementario de la estación de Otero de Herreros, recibió órdenes telefónicas de Madrid para que suprimiera un tren entre Otero y Segovia, lo que hizo. Poco después, una vez enterado del movimiento militar y del Bando de Guerra, recibió otra orden de Madrid: cortar la vía; lo que transmitió, pero no llegó a cumplirse por haberlo acordado así los obreros encargados de ejecutarla.

Por su parte, Loreto Serrano, guarda del Patrimonio de la República en La Granja, por orden del Administrador del que dependía como empleado, *“quien le amenazó repetidamente con perder el cargo”*, cogió un coche del servicio público y recorrió las casas de los guardas del pinar diciéndoles que vinieran *“de parte del administrador a defender La Granja y la República”*⁸⁷⁰. Acusado de auxilio a la rebelión, le sirvió como atenuante el miedo irrefrenable a perder el puesto de trabajo.

b) Participación en los hechos de oposición de menor gravedad, pero con implicación ideológica

Así podríamos conceptualizar a los vecinos de Labajos que no participaron en el tiroteo que acabó con la vida de Onésimo Redondo, pero que tampoco informaron ni colaboraron cuando llegó la fuerza pública para investigar lo ocurrido, *“ya que con su silencio y encubrimiento doloso mantenido desde el día de autos hasta un mes después en que fueron perseguidos judicialmente, han contribuido a entorpecer la acción de la autoridad”*⁸⁷¹. Siguiendo este razonamiento, fueron procesados por auxilio los procesados que participaron en la vigilancia de Bernardos, aunque sin emplear armas.

Pero tampoco de esto se puede establecer una generalidad, porque hay otros casos de vigilancia con armas, incluso con actitud hostil, incluidos en la misma categoría de delito

⁸⁶⁸ BOE, 30 de julio de 1936. Bando declaratorio del estado de guerra.

⁸⁶⁹ No era necesario criticar al bando sublevado para ser procesado por rebelión; simplemente hacer comentarios pesimistas sobre la marcha de las operaciones llevaba a prisión. El hijo del comisario republicano de Segovia, Fernando González, dijo que *“la columna Mangada ‘se había apoderado de Ávila’ que había gran desmoralización en el Ejército, que del Regimiento de Valladolid no quedaban más que dos soldados, que el Capitán Castro del 13 Ligeró servía él solo 4 piezas pues no había personal”*. (Causa 419/36, AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.). Por su parte, el empleado de la Academia de Artillería, Emiliano de Diego, manifestó *“que el ejército no disponía de aviación, que todos los días le hacían muchas bajas alrededor de 200, que un día a las 9 de la mañana había ya 200 bajas y que en el campo contrario había muy pocas”*. (Causa 219/36, AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.).

⁸⁷⁰ Causa 218/37, contra Quintín Pardo y otros, AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.

⁸⁷¹ Causa 505/36, contra Ángel Salgado y 13 más.

de auxilio, que en otras localidades (El Espinar, Bernardos) habían sido calificados como adhesión a la rebelión. Como ocurrió a Lorenzo Lledó, de San Ildefonso, que formó parte de *“grupos extremistas que se manifestaron con actitud hostil, provisto de un palo insultando a personas de derechas: iba a romper la cabeza a todos los carcas”*⁸⁷².

Hay otros casos en los que tampoco se cumplió el principio de que los malos antecedentes determinaran la adhesión en lugar de auxilio. A Cremencio Barral, de trayectoria izquierdista, cotizante del Socorro Rojo Internacional y que luchó con los republicanos con la brigada del Campesino, tan sólo le acusaron de auxilio, pareciendo evidente que era opositor al movimiento militar de una manera militante.

c) Otros hechos

No todos los hechos perseguidos lo eran contra el movimiento militar, también era delito no colaborar con el Ejército franquista. Ocho vecinos de Vegas fueron condenados también por auxilio a la rebelión porque se negaron *rotundamente* a conducir el ganado de un convoy que debían llevar al cercano pueblo de Peguerinos (ya en la provincia de Ávila, en pleno frente de batalla), *“no obstante haberles requerido reiteradamente el alcalde de la localidad, y de incluso decirles y asegurarles que el servicio había de ser retribuido”*⁸⁷³. De los ocho procesados, siete eran de filiación izquierdista.

La misma conceptualización de auxilio a la rebelión tuvieron: Isacio García, de Vegas de Matute, llevó a 3 soldados que desertaron del Alto del León a casa de sus padres, donde les dieron de comer y ropa de paisano con la que se marcharon; y Florentino Sanz, propietario de un establecimiento de bebidas en Valsaín, que *“colocaba con intensidad un aparato de radio transmitiendo las noticias de la Radio Madrid y Moscú habiendo motivado con la transmisión de un discurso de la Pasionaria gran expectación”*⁸⁷⁴.

d) Comentarios sobre la guerra

Del mismo modo que ocurría con el delito de rebelión militar, emitir comentarios podía originar el procesamiento por auxilio a la misma. La diferente calificación se hacía al libre arbitrio del tribunal y no en función de los antecedentes, como proponía Dávila, pues en los ejemplos siguientes todos los procesados habían sido militantes de izquierda.

Por un lado se encontraban los soldados que no querían incorporarse cuando llamaban a su quinta y lo manifestaban públicamente. Un artillero, Luis Gómez, dijo que *“si supiera que era para meterlo en la cárcel se presentaría, pero para ir al frente no quería por no luchar contra sus hermanos y contra el régimen constituido”*. Aunque cuando llegó la orden oficial se presentó en el Regimiento que le correspondía, *“con su actitud durante esos días (...) favoreció a quienes se alzaron en armas formando partidas organizadas militarmente en contra del poder legítimo”*⁸⁷⁵.

Por otro lado estaban los simples comentarios sobre la guerra que se realizaban en la calle, como el de Nicolás Muñoz, vecino de San Cristóbal de la Vega, quien dijo que los rojos estaban *“en Segovia, irían a Ávila y luego a Arévalo, que Madrid no lo tomarían nunca”*⁸⁷⁶.

⁸⁷² Causa 48/37, contra Lorenzo Lledó, AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.

⁸⁷³ Causa 421/37, contra Lino Pérez y 7 más, en Exp. Gregorio Portal, Arch. Pris. Prov. El “convoy” era una práctica habitual durante la guerra en las localidades de los alrededores de la sierra que era línea de frente. Los vecinos varones del pueblo, al menos un representante por familia, eran convocados por el Ayuntamiento en el destacamento militar correspondiente para acudir con las caballerías y carros que tuvieran, para que trasladaran al frente de batalla todo tipo de armamento e intendencia (ropa, alimentos, herramientas, etc.). Los que no acudían eran inmediatamente detenidos y si alguno de los que participaban tenían un comportamiento sospechoso a los ojos de los militares eran pasados por las armas. Así ocurrió con varios casos como el que se relata de Vegas de Matute, y otros en Navafria y El Espinar, que se verán más adelante.

⁸⁷⁴ Causa 768/36, contra Emilio López y 11 más, AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.

⁸⁷⁵ Causa (s/nº, pero de 1936), contra Luis Gómez, AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.

⁸⁷⁶ Causa 865/37, contra Nicolás Muñoz, en su Exp. Arch. Pris. Prov.

Inducción a la rebelión

En este apartado agrupamos dos variantes del mismo delito: la inducción propiamente dicha en el sentido de efectuar propaganda, hacer proselitismo (por ejemplo, dar conferencias en la Casa del Pueblo); y la excitación a la rebelión en el sentido de animar a las personas a realizar hechos concretos contra la sublevación (por ejemplo las mujeres que animaban a los hombres a cortar las carreteras para impedir el paso de los militares sublevados).

Los tres casos que se han encontrado de la primera variante, como inducción, se refieren a campañas o propagandas anteriores a la guerra, acusando a los procesados de la situación de guerra civil existente en España. En primer lugar, tres directivos de la Casa del Pueblo de San Ildefonso que contribuyeron con sus *“aptitudes a que aumentasen los afiliados a la misma, amenazando a los obreros que no lo hacían con los despidos de sus respectivos trabajos, siendo encargados de efectuar a los patronos las reclamaciones de los obreros, muchas de ellas sectarias e infundadas, animando e infundiendo el estado de ánimo que es el espíritu de la actual revolución marxista”*⁸⁷⁷.

Los otros dos casos corresponden a otros tantos maestros, Hermenegildo Domínguez que *“desplegó una intensa actividad dentro de su esfera, de su ideología comunista (...) está asimismo considerado como el principal inductor de los obreros de El Espinar”*⁸⁷⁸. Por su parte, Pablo de Andrés, maestro de La Granja daba conferencias y mítines en la Casa del Pueblo *“excitando a la masa obrera en sentido extremista, habiendo sido discípulos del mismo varios procesados”*⁸⁷⁹.

En cuanto a la excitación a la rebelión, se refería a personas, generalmente mujeres, que animaban a los hombres a realizar los actos de defensa de la legalidad republicana. Sobre estas acciones de aliento hay casos en sumarios de El Espinar, San Ildefonso y Bernardos. En esta última localidad María de Mueg, Julia Miguel y Feliciano de Frutos animaban y excitaban *“al resto de los procesados a mantenerse en rebelión, excitación ya anterior a los hechos de autos (...) asistían a las manifestaciones públicas de carácter socialista que se celebraron en el pueblo e incluso bordaron y acompañaron la bandera comunista que desfiló en la manifestación del 1º de mayo del año anterior”*⁸⁸⁰. En este caso de las vecinas de Bernardos se agravó el delito por sus actividades anteriores a la guerra.

El resto de casos de excitación a la rebelión se referían a comentarios en público sobre la guerra, casi todos situados en tabernas y en estado eufórico, fruto de la ingesta de alcohol, momento que aprovechaban algunos para, una vez perdido el miedo, decir lo que pensaban. Lo que le sucedió a un joven segoviano que se apoderó de 450 pts. del baúl de su madre y se fue a beber. Ya eufórico, en la plaza del Azoguejo gritó *“¡Viva la República y el gobierno legalmente constituido!”*⁸⁸¹, a lo que un oficial del Ejército le requirió un ¡Viva España!, el procesado se negó, por lo que fue detenido.

Conspiración para la rebelión

No hay más que un caso con esta conceptualización delictiva. El 18 de julio los dirigentes de la Juventud de Izquierda Republicana, Serapio Bermejo y Servando Postigo se encontraron por los alrededores del Acueducto una pistola que estaba inutilizada. Como

⁸⁷⁷ Causa 52/37, contra Francisco Matesanz Marcos y 11 más. En su Exp. Arch. Pris. Prov. Pamplona, Fuerte S. Cristóbal. Los dirigentes aludidos eran Isidoro Carreras de Frutos, Cosme Marcos Grande y Felipe Sanz Pérez.

⁸⁷⁸ Causa 1619/36, contra Hermenegildo Domínguez, AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.

⁸⁷⁹ Causa 506/36, contra Andrés Hervás Alonso y 16 más. En Exp. Martín Martín Gómez, Arch. Pris. Prov. Pamplona, Fuerte S. Cristóbal.

⁸⁸⁰ Causa 392/36 contra Manuel Sierra y 62 más.

⁸⁸¹ Causa 421/38, contra Ángel Aragonese, AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.

no la entregaron hasta el 10 de agosto, fueron procesados por conspiración para la rebelión, aunque la causa fue sobreseída porque el arma no estaba en condiciones de ser utilizada⁸⁸².

Espionaje

Hemos conocido la existencia de 3 sumarios con esta consideración de espionaje, en relación con el art. 228 del CJMil. Por un lado, en la causa 205/36 dos trabajadoras del Preventorio de San Rafael fueron acusadas de hablar con la Dirección General de Seguridad de Madrid cuando entraban los guardias civiles en el pueblo, el día 20 de julio. Además, se *“alegraban de los bombardeos rojos y obstaculizaban la atención a los heridos del Ejército”*⁸⁸³. Como no era muy consistente la acusación de espionaje, al final ésta quedó como adhesión a la rebelión.

Los otros dos sumarios se originaron por las detenciones de miembros del servicio de espionaje republicano, Servicio de Inteligencia Especial Periférico (SIEP). Las causas eran la 2315/37 y 1377/38. Del primero no se ha encontrado más información que el fusilamiento de cinco milicianos, mientras que del segundo se ha podido estudiar el sumario completo. En él se demuestra que desde marzo de 1938 operó en Segovia un servicio de información entre residentes en esta provincia que pasaban información a agentes segovianos que se infiltraban desde la zona republicana para traer propaganda; secuestrar civiles y militares para llevar detenidos al otro lado...⁸⁸⁴.

Delitos aplicados exclusivamente a militares

El delito de **traición** estaba atribuido a militares en ejercicio, ya fueran tropa o mandos. Se han encontrado dos casos de 1936: un soldado y un cabo de la Academia de Artillería. El primero era Patricio Gómez, soldado segoviano destinado en Valladolid que, aprovechando que aún no tenía la ropa militar, pidió permiso para salir de paseo pretextando que había llegado su padre. Tomó el tren de Segovia con el fin de pasarse al enemigo *“por ser simpatizante del comunismo”*⁸⁸⁵. Finalizada la guerra hubo otros 7 casos de soldados segovianos que habían pasado de zona nacional a la republicana para luchar en defensa de la República.

Han aparecido tres sumarios sobre soldados acusados de intento de **deserción**⁸⁸⁶. Por otro lado hay dos sumarios por **auxilio a la deserción**, aplicado a civiles acusados de ayudar dando comida y ropa de paisano a soldados evadidos del frente del Alto del León (causas 697/36 y 236/37). Relacionado con ellos está la causa 850/37 de **inducción a la deserción** y encubrimiento de la misma, por el que fue procesado Leandro Vírseda, cabo de artillería de Nava de la Asunción.

Únicamente hemos encontrado el caso de un soldado acusado de **desobediencia** a un superior, aunque no hemos averiguado los hechos por los que fue juzgado. Por el contrario, constan varios sumarios por desobediencia a la autoridad aplicados a civiles: por un lado los referidos vecinos de Vegas que se negaron a participar en un convoy militar; por otro, Elías Marqués y Antonio Conde que no entregaron su arma tras el Bando de Guerra. Segundo Olalla no declaró un arma antigua de su padre, que no funcionaba, con lo que el tribunal consideró *“por la inutilidad del arma no es posible apreciar rebelión al no haber sido entregado en plazo legal, no es menos cierto que tal inutilidad no le constaba al*

⁸⁸² Causa 586/36 contra Serapio Bermejo y Servando Postigo. En Arch. Pris. Prov., Exp. de Servando Postigo.

⁸⁸³ Causa 205/36, contra Ascensión Andrés y Pilar Marbán, AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.

⁸⁸⁴ Sobre este particular hemos publicado un artículo en las Actas del Segon Congrés de Recerques, *Enfrontaments Civils: postguerres u reconstruccions*, Lleida, 2002, bajo el título *La construcción del Nuevo Estado desde la perspectiva del servicio de espionaje republicano*.

⁸⁸⁵ Causa 826/37, contra Patricio Gómez, AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.

⁸⁸⁶ Causas 426/36, 606/36 y 625/36.

procesado (...) debía haberla presentado (...) y al no hacerlo desobedeció el mandato de la autoridad militar⁸⁸⁷. Por su parte, Salustiano García incurrió en este delito porque no entregó la pólvora y los detonadores que utilizaba para extraer piedra para la construcción⁸⁸⁸.

Existe un caso curioso de **insubordinación**. Un soldado fue procesado por abofetear a un sargento. Los hechos sucedieron durante una manifestación celebrada en Segovia con motivo de la toma de Barcelona. El sargento tiró del pelo a una niña que acompañaba al soldado, ante lo cual la reacción del soldado fue dar un bofetón al suboficial.

Por último, José Mariné, sargento de artillería, fue reo de **sedición** por haberse reunido con otros sargentos de la Compañía en el Alto del León, *"diciéndole(s) debían rendir al capitán, para que les concediese relevo, permitiese bajar a San Rafael, con el objeto de descansar, hecho desarrollado próximo el enemigo..."*⁸⁸⁹. Estos hechos sucedieron durante los primeros días de guerra, cuando los combates eran más duros.

Igualmente, ya se ha explicado que se condenó por sedición a los procesados por la huelga general convocada y realizada en Otero de Herreros el 20 de julio.

Otros delitos

Si el **insulto a fuerza armada** ya era grave en situación de paz, su consideración se agravó con la guerra, porque los militares eran los protagonistas de la trama, como se especificaba en una sentencia: *"Es de tener en cuenta a efecto de penalidad la actual situación del país en estado de guerra que exige una mayor protección legal a la fuerza armada"*⁸⁹⁰.

El médico segoviano Mariano Romero, protagonizó un incidente durante el desfile del 14 de abril de 1936, celebrado en la capital⁸⁹¹. Un año después fue procesado por insulto a fuerza armada y juzgado el 3 de julio de 1937⁸⁹².

Por el art. 2º del Bando de 28 de julio se incluían dentro de las fuerzas armadas a las milicias que habían participado en la sublevación: falangistas, requetés, japistas y monárquicos alfonsinos:

Los insultos y agresiones a todo militar, funcionario público o individuo perteneciente a las milicias que han tomado las armas para defender la Nación, se considerarán como insultos a fuerza armada y serán perseguidos en juicio sumarísimo, aún cuando en el momento de la agresión o el insulto no estuvieren aquéllos desempeñando servicio alguno⁸⁹³.

Se han encontrado dos casos de ofensas a falangistas conceptuados como insulto a fuerza armada. Francisco Arribas, vecino de Nava de la Asunción, dijo que los falangistas eran unos *"sinvergüenzas"* y, por su parte Francisco Garzón, vecino de Navas de Oro, los

⁸⁸⁷ Causa 1144/37, contra Segundo Olalla, en su Exp. Arch. Pris. Prov.

⁸⁸⁸ Causa 1653/37, por auxilio a la rebelión, contra Salustiano García.

⁸⁸⁹ AGM Segovia. Exp. José Mariné. Consejo de guerra sumarísimo, s/nº de causa, contra José Mariné Ballester.

⁸⁹⁰ Causa s/nº de 1936 contra Luis Gómez Sebastián.

⁸⁹¹ Como explicamos en el cap. 1.4.3.

⁸⁹² Causa 16/36, contra Mariano Romero, en su Exp. Arch. Pris. Prov. Además del caso anterior, contamos con un variado repertorio de insultos a las fuerzas armadas:

Un vecino de Segovia, Rufino Ayuso, que se hallaba en estado de embriaguez *"no fortuita"* se cruzó con un artillero haciendo el saludo marxista del puño en alto y *"diciéndole 'sois unos canallas', refiriéndose sin duda a los militares"*. En las cartas privadas también se podía incurrir en este delito. La madrileña Dolores Soriano, de vacaciones en San Rafael, escribió a su novio haciendo unos comentarios sobre los sublevados, de los que opinaba *"esos generales son canallas que se valen de los pobres soldados que de ninguna manera pueden tener sus aspiraciones, (...) del tercio y regulares no hablemos, esto es indignante, y además para nadie puede ser beneficiosa una militarada que pondrá la situación peor de lo que está"*.

⁸⁹³ Bando de Guerra, BOP, 5 de agosto de 1936.

maldijo al más puro estilo castellano “*me cago en la madre que parió a todos los falangistas*”⁸⁹⁴.

Con respecto a la **tenencia ilícita de armas**, como medida preventiva, con el apartado 2 del art. 2º del Bando de Guerra de 28 de julio se suprimieron todas las licencias de armas,

entendiéndose caducadas todas las licencias de armas que no hubiesen sido otorgadas por esta Junta de Defensa Nacional o sus legítimos representantes. Los poseedores de armas, con o sin licencia, quedan obligados a entregarlas en el plazo máximo de 12 horas, sin excusa alguna, en el puesto de la Guardia Civil respectivo, donde, en cada caso, podrá convalidarse la autorización para su uso, a discreción del comandante de aquél⁸⁹⁵.

Siguiendo la norma habitual, se dejaba la decisión al libre arbitrio de la autoridad correspondiente, en este caso el jefe de la Guardia Civil de cada puesto. En principio, no entraban en la prohibición las armas de caza, como se comprueba en una sentencia en la que se justificaba que sólo eran caducadas las licencias de uso de armas “*con cuyo nombre se conoce las que autorizan el uso de armas cortas de fuego*”⁸⁹⁶ (no las de caza). Pero, por el contrario otra sentencia condenó por tenencia ilícita de una escopeta de caza, si bien le sirvió de atenuante al acusado su avanzada edad y el no tener munición para el arma. En total, hemos comprobado 10 casos de tenencia ilícita de armas a lo largo de la contienda.

Por otro lado, han aparecido dos sumarios por el delito de **reunión ilegal**. En el 52/37 afectaba a vecinos de San Ildefonso, donde se celebraban reuniones con el fin de recibir y transmitir noticias de los familiares que de alguno de los procesados y de otros vecinos de la localidad se encontraban en zona republicana. En el otro sumario, del que no se conoce el número, fueron procesados 9 ferroviarios, todos ellos vecinos de Segovia, acusados de haberse reunido en una cueva de las afueras de la capital. Al cabo de unos meses fue sobreeséida la causa por falta de pruebas.

Para finalizar, en los casos encontrados referentes a sumarios militares por **delitos económicos** no se ha podido probar su posible motivación política, por lo que nos limitamos a enumerarlos. Como se ha expuesto ya, el atesoramiento de monedas, podía ser conceptualizado como auxilio a la rebelión. Hubo -al menos así se han constatado- 1 caso en 1937 y 3 más en 1938. Por delito de hurto, también se iniciaron dos sumarios militares en 1937 y uno en 1939.

⁸⁹⁴ Causa 637/37, contra Francisco Garzón, en su Exp. Arch. Pris. Prov.

⁸⁹⁵ Bando de guerra, *BOP*, 5 de agosto de 1936.

⁸⁹⁶ Causa 458/36, contra Felipe García González, en su Exp. Arch. Pris. Prov.

6. 3. 3. Las penas y las circunstancias modificativas de la responsabilidad: atenuantes y agravantes

A pesar de estar perfectamente determinados “los castigos” (como se expresaba el Código de Justicia Militar) en los artículos 238, 240, 241 y 242; se cometieron numerosas arbitrariedades, puesto que la misma apreciación de delito fue castigada con distinta pena, incluso por el mismo tribunal. Las penas se distribuían, según el delito atribuido y el CJMil, de la manera siguiente:

Cuadro nº 21: Los delitos y las penas según el CJMil

Delito	Art. CJMil	Pena
Rebelión, en calidad de jefe	238, 1º	Muerte
Rebelión o adhesión a la rebelión	238, 2º	30 años/muerte
Auxilio a la rebelión	240 (párrafo 1º)	12 a 20 años
Excitación a la rebelión	240 (párrafo 2º)	6 años
Espionaje	228	muerte

Si se ha hablado de arbitrariedad a la hora de tipificar los hechos con los distintos delitos, la arbitrariedad a la hora de imponer las condenas se multiplicaba pues se impusieron gran variedad de penas para unos delitos que se correspondían con unos hechos, en teoría, similares.

Dentro de cada banda de penas, las agravantes y atenuantes determinaban si la condena era la máxima o la mínima. Ambas venían recogidas en el artículo 173 del CJMil, donde se otorgaba potestad para su aplicación a los tribunales, quienes **“obrarán según su prudente arbitrio, tomando en cuenta el grado de perversidad del delincuente, la trascendencia que haya tenido el delito, el daño producido o que hubiere podido producir con relación al servicio, a los intereses del Estado o a los particulares, y la clase de pena señalada por la Ley”**⁸⁹⁷. La redacción de este artículo daba la suficiente “manga ancha” para todo tipo de arbitrariedades (utilizando la misma palabra que señalaba la norma).

Las circunstancias agravantes se repetían en los distintos sumarios y venían dadas, casi siempre, por el “elevado grado de perversidad” de los procesados, demostrado en dos ámbitos: por sus antecedentes sociales y por los actos que había realizado. Así, se valoraban de una forma considerable los antecedentes, políticos especialmente, incluso más que los propios hechos, que a veces no eran más que simples comentarios. Es interesante descubrir cómo, con gran perspicacia, el tribunal deducía la ideología de los procesados: Pedro Segovia era de “*izquierda avanzada*”, porque antes del Movimiento “*no dio más importancia a la muerte de Calvo Sotelo (pues había sido peligroso para la República) que a la de Castillo*”⁸⁹⁸.

El grado de cultura de los procesados no era valorado positivamente, por el contrario suponía una agravante, porque le achacaba mayor responsabilidad. Hay varios casos bien significativos; así Felipe Martín, maestro de Fuenterrebollo, cuyo “*Índice de cultura agrava también subjetivamente su responsabilidad*”⁸⁹⁹ y los hermanos Martínez López Ocaña, médicos de San Ildefonso, cuya responsabilidad se vio agravada “*por su grado de cultura e influenciar sobre las masas*”⁹⁰⁰.

⁸⁹⁷ Art. 173, CJMil.

⁸⁹⁸ Causa 1140/36, contra Pedro Segovia, AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.

⁸⁹⁹ Causa 471/36, contra Felipe Martín, AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.

⁹⁰⁰ Causa 209/36, contra Marcelino de la Calle y 13 más. En Exp nº 721, Félix Hoyos, Arch. Pris. Prov. Pamplona, Fuerte S. Cristóbal.

De modo parecido, la jerarquía militar también se utilizaba como agravante: cuanto mayor era la graduación, mayor la responsabilidad. Además, para los militares era de mayor gravedad el ser *“simpatizante de ideologías en desacuerdo con los principios que informan el Ejército”*⁹⁰¹.

La circunstancia agravante más importante con respecto a los hechos era la trascendencia de los mismos. Fue aplicada a los encausados por los actos de oposición a la sublevación (enfrentamiento de Prados, cortes de comunicaciones, asalto al cuartel de la Guardia Civil, etc.), que, lógicamente, fueron los sucesos más trascendentes. Pero, lo que es más chocante, también fue adjudicada *“la trascendencia de los hechos”* al referido Florentino Sanz, por sintonizar emisoras republicanas *“habiendo motivado con la transmisión de un discurso de la Pasionaria gran expectación”*⁹⁰².

Otra de las agravantes era lo que podría haber pasado aunque no ocurrió, es decir *“el daño inmenso que pudo derivarse del delito en la campaña patriótica que trataba de perjudicar”*⁹⁰³. Los hechos no fueron graves ni trascendentes, pero sí lo que pudieron provocar. La gravedad de las manifestaciones o comentarios variaba en función de quién las efectuaba, ante quiénes e incluso la localidad dónde se manifestaban. Así, mientras que el insulto al Ejército durante el desfile del 14 de abril en Segovia tuvo como agravante la trascendencia del hecho por *“el momento, ocasión y lugar en que se realizó”*⁹⁰⁴; por el contrario, en otras localidades, como San Cristóbal de La Vega, servía de atenuante *“dada la poca trascendencia del pueblo donde se dijeron”*⁹⁰⁵. A Dolores Soriano le benefició que sus comentarios sobre los militares los escribiera en una carta a su novio, porque así le valió como atenuante la *“poca trascendencia de los hechos que no llegaron a tener publicidad alguna ni a causar tampoco ningún daño moral”*⁹⁰⁶.

En cuanto a las atenuantes, una de las más utilizadas era la edad, en ambos sentidos, por joven o por mayor. La avanzada edad era *“demostrativa de una menor peligrosidad social”*⁹⁰⁷, mientras que los mayores de 16 y menores de 18 también eran reconocidos como de peligrosidad menor.

En función de los hechos, sólo se aplicó en un sumario la atenuante de que no se hubiera producido ningún tipo de violencia en las localidades en las que la legalidad republicana se mantuvo, durante unos días, por la acción de los simpatizantes del Frente Popular. Ya se ha explicado que salvo el tiroteo de Prados no hubo ningún tipo de violencia en la provincia de Segovia. Pero esta circunstancia atenuante, *“muy cualificada de no haberse producido acto alguno de violencia en personas o cosas en el tiempo que fueron árbitros de la situación”*⁹⁰⁸, se aplicó únicamente para los procesados de Cuéllar en el sumario 186/36. En el resto de sumarios que enjuiciaron a la oposición a los sublevados en la provincia (Bernardos, Coca, Nava de La Asunción, San Ildefonso, Valsaín, El Espinar, Vegas de Matute, Zarzuela del Monte, Navafría y Carbonero el Mayor) no se tuvo en cuenta el modo pacífico en que habían permanecido fieles a la legalidad republicana.

A pesar de los varios casos existentes, el estado de embriaguez sólo se aplicó como atenuante a Mariano Romero Arbeiza, el resto no se beneficiaron porque o bien su “estado de embriaguez” no era fortuito o porque a pesar de estar ebrios eran conscientes de sus actos.

Curiosa atenuante, por el cinismo del tribunal que lo juzgó, fue la aplicada a Domitilo de Pablos, maestro de Cuéllar. Así le valoraron *“la presentación espontánea (ante las*

⁹⁰¹ Causa 186/36, contra Vicente Gómez Segarra y 37 más.

⁹⁰² Causa nº 768/36, contra Emilio López y 11 más.

⁹⁰³ Causa 1377/38 (pieza separada nº 1), contra Antonio Otero Allas. Arch. UAPO. Caja 3.

⁹⁰⁴ Causa 16/16, contra Mariano Romero.

⁹⁰⁵ Causa nº 865/37, contra Nicolás Muñoz.

⁹⁰⁶ Causa 1115/36, contra Dolores Soriano, en su Exp. Arch. Pris. Prov.

⁹⁰⁷ Causa 204/36, contra Miguel Santamaría Beltrán y otros.

⁹⁰⁸ Causa 186/36, contra Vicente Gómez Segarra y 37 más.

autoridades militares) *antes de tener conocimiento de la apertura del procedimiento judicial*⁹⁰⁹, cuando la realidad fue bien distinta: buscado por elementos de Falange para ser fusilado, escapó de su casa por la puerta de atrás y se presentó en el cuartel de la Guardia Civil más cercano para salvar su vida.

6. 3. 4. Las condenas

En relación a las penas impuestas, el resultado de los sumarios estudiados fue el siguiente:

Cuadro nº 22: Resultado de los sumarios militares en la provincia de Segovia

Nº de procesados a las distintas penas	1936	1937	1938
Muerte	98 (57)*	13	13
Perpetua	13	6	9
30 años	194(150)	49	2
20 años (20-30)	163 (76)	23	9
12 años (10-20)	118 (34)	20	0
6 años (1-10)	34 (13)	25	8
Menos de 1 año	4 (4)	9	3
Absolución	102 (21)	26	18
Sobreseídas	10	9	4
Totales	736	180	66

*entre paréntesis figuran las condenas correspondientes a sumarios de 1936, cuyo consejo de guerra se celebró en 1937.

A simple vista, en cifras absolutas, las penas más graves se dieron en los sumarios de 1936, pero, porcentualmente, fueron mucho más duras las condenas de 1938. Por ejemplo, las penas de muerte de 1938 suponían casi el 20% del total de las condenas, en cambio las correspondientes a los sumarios de 1936 no llegaron al 14%.

Además, hemos de recordar que 29 sumarios de 1936 fueron juzgados en 1937, entre ellos los más importantes que enjuiciaban los hechos de oposición a la sublevación en El Espinar, Bernardos, Coca, Nava de la Asunción, Carbonero el Mayor, Zarzuela del Monte y Navafría, que englobaban a 357 procesados. Estos consejos de guerra se celebraron entre febrero y abril de 1937, cuando la situación de la guerra se había estabilizado y en la provincia de Segovia no había actividad bélica. A pesar de que los duros momentos del inicio de la guerra (cuando la represión era más enérgica por las necesidades de los sublevados de imponerse rápidamente a la posible oposición) se habían superado, las penas impuestas en estos juicios fueron bastante severas, como se puede observar en el cuadro, con las cifras expresadas entre paréntesis.

A la hora de aplicar las penas correspondientes a la calificación de los delitos, la arbitrariedad de los tribunales militares fue tan habitual que se hizo norma común, por lo que las generalizaciones son muy difíciles de hacer en este estudio. No obstante, y con las debidas precauciones, se puede hablar de unos criterios generales, aunque siempre teniendo en cuenta que hay numerosas excepciones a dichas pautas.

⁹⁰⁹ Causa 817/36, contra Domitilo de Pablos, en Exp. Resp. Civ. 13/38, Arch. Prov. Caja J/6346.

De las 145 ejecuciones judiciales producidas en la provincia de Segovia hasta 1942 (entre las que incluimos los 6 segovianos y el gobernador civil de esta provincia fusilados en Valladolid, pero por hechos producidos en Segovia) se conoce la sentencia que originó 98 fusilamientos. Del resto sólo hemos podido comprobar la fecha y el lugar de ejecución. En el anexo nº 2 se recoge lo que hemos averiguado de cada caso.

Fueron condenados a muerte en calidad de **jefes de la rebelión**, es decir, como organizadores de la huelga general, vigilancia armada de las localidades, cortes de vías de comunicación, etc. un total de 24 procesados.

La clave para que la condena fuera muerte o 30 años, venía condicionada en muchos casos por las agravantes o las atenuantes. Los 32 condenados a muerte por la causa 109/36 (los sucesos de Prados), lo fueron como autores de delito de **rebelión**, aplicando el apartado 2º del art. 238, en relación con los números 2, 3 y 4 del art. 237, con la agravante de la *“gran trascendencia de los hechos y perversidad de los procesados”*. Conviene recordar que fueron los únicos procesados que se enfrentaron a las fuerzas militares en la provincia de Segovia, si bien de los 32 fusilados no todos llevaban armas y de los que las portaban no se demostró si las habían utilizado. En ese tiroteo falleció un militar, que fue la única muerte achacable al bando republicano (que sufrió 4 bajas en esa escaramuza), por lo que nadie fue fusilado en la provincia de Segovia acusado de *delitos de sangre*.

El resto de penas de muerte fueron a parar a procesados por participar en los hechos organizados por los “jefes de la rebelión”. Fueron acusados de **adhesión a la rebelión** más las agravantes reseñadas anteriormente: *“gran perversidad”*, *“el extremismo de su ideología política y social”*, etc.

En el frente de la sierra, en Valsaín, fueron ejecutados nueve soldados, entre mayo y julio de 1938. Tres de ellos fueron *“pasados por las armas por delito de traición”*⁹¹⁰, como figura en el Registro Civil.

Dentro de la injusticia de las penas de muerte a personas que no habían matado, ni habían ejercido la violencia contra nadie, hay algunos casos especialmente inicuos: Ciriaco de Frutos, ferroviario que hablaba con sus superiores de Madrid, según el tribunal *“mantenía relaciones con elementos contrarios movimiento militar, utilizando el teléfono de la estación de La Losa”*⁹¹¹ hasta su detención, el 23 de julio, 4 días después de la sublevación de Segovia. Patrocinio Merino fue fusilado por decir a los soldados que *“habían sido traídos engañados, que lo que debían hacer era abandonar a sus jefes en la primera ocasión que tuvieran, y que si salían para el frente dispararan sobre sus oficiales”*⁹¹².

El resto de condenados por adhesión a la rebelión lo fueron a 30 años, salvo los procesados del sumario 186, condenados a 20 años, por aplicación de la atenuante ya referida *“de no haberse producido acto alguno de violencia en personas o cosas”*⁹¹³.

La mayor parte de los procesados por **auxilio a la rebelión** fueron condenados a 20 años. Para el resto (salvo algunos casos excepcionales castigados con 14/15 años) la pena impuesta fue 12 años.

Los procesados por efectuar vigilancia sin armas, participar en la huelga general, los enlaces de los jefes de la rebelión, ayudar en los cortes de comunicaciones, etc., es decir, los acusados de auxilio a la rebelión en sentido estricto fueron condenados a 20 años. La misma pena tuvieron Francisca Pascual, Concepción Pérez y Tomás Yagüe que participaron en la manifestación de La Granja *“dando vivas a Rusia, ‘a por ellos’ y otros de*

⁹¹⁰ Reg. Civ. San Ildefonso. Libro de defunciones, tres anotaciones el 26 de julio de 1938.

⁹¹¹ Causa 398/36, contra Ciriaco de Frutos, AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.

⁹¹² Causa 555/36, contra Patrocinio Merino.

⁹¹³ Causa 186/36, contra Vicente Gómez Segarra y 37 más.

*clara significación marxista*⁹¹⁴. Pero hay excepciones, porque nueve vecinos de Nava de la Asunción fueron condenados a 8 años a pesar de que habían ayudado en los cortes de carreteras, en el requisado de coches y en la vigilancia sin armas.

En cuanto a los comentarios, también había distinto criterio a la hora de imponer la pena. Teodoro Marugán, Eleuterio Francisco y Lucio García, ferroviarios destinados en Yanguas de Eresma, *“comentaban desfavorablemente la marcha del Movimiento en corrillos y tertulias en la cantina de la estación, que el triunfo sería para gobierno de Madrid”*, por lo que fueron condenados a 15 años. Teodoro Marugán añadió además que tenían que *“arrojar gases asfixiantes los aviones de Madrid”*⁹¹⁵, por la contundencia de esta frase, le aplicaron una agravante que aumentó su pena a 20 años.

A pesar de que lo prescrito en el CJMil para sancionar la **inducción a la rebelión** eran 6 años, se han encontrado casos de condenas a 12 y 20 años. Si bien es verdad que la mayoría de penas impuestas son de 6 años.

Isidoro Carreras, Cosme Marcos y Felipe Sanz, directivos de la Casa del Pueblo de San Ildefonso, que *“contribuyeron con sus aptitudes a que aumentasen los afiliados a la misma, amenazando a los obreros que no lo hacían con los despidos de sus respectivos trabajos”*⁹¹⁶, fueron condenados a 12 años.

Por el contrario, a los vecinos de Navafría, Leonardo García y Martina Moreno les impusieron 20 años *“porque hacían constante propaganda de sus ideas aún después de iniciado y triunfante el movimiento, excitando las pasiones de sus convecinos en contra del Ejército y de los elementos de orden y comentando en sentido desfavorable la marcha del movimiento”*⁹¹⁷.

Por el delito de **espionaje** fueron condenados a muerte 14 procesados. De ellos, 6 eran milicianos republicanos que se habían infiltrado en territorio nacional (entre los que se encontraba una miliciana de Ávila) y los otros 8 eran residentes en Segovia, colaboradores del servicio de información republicano.

La norma habitual para condenar la **tenencia ilícita de armas** era la Ley de 22 de noviembre de 1934 (con la que se ponía en relación por el art. 3, apdo. C. del Bando de Guerra del general de la 7ª División de 19 de julio), que estipulaba 2 años y 4 meses. Pero, al jefe de la estación de La Losa, Antonio Conde, le condenaron a 6 años, sin aplicarle ningún tipo de agravante. La misma pena que impusieron a Serafín Gilgado. En cambio a Elías Marqués le aplicaron como atenuante su avanzada edad y no tener munición, por lo que se limitó su pena a 6 meses. Felipe García tuvo más suerte, o mejor influencia ante el tribunal, pues la sentencia fue absolutoria porque no le aplicaron el Bando a su escopeta de caza.

La pena por **insulto a fuerza armada** variaba en función del tribunal, hay 3 casos de condena a 6 años, otro a 3 años y uno más a un año. Las penas más graves, de 6 años, les fueron impuestas a Mariano Romero Becerril por decir *“Muera el Ejército”*, Adelina Martínez por llamar *“canallas”* a los guardias civiles y a Juan Sanz por insultarlos con *“me cago en la leche que os han dado”*⁹¹⁸. Aunque a los miembros de FE se les consideraba fuerza armada, no tenía la misma pena el que insultaba a los falangistas que el que maldecía a la Guardia Civil o al Ejército, pues a Francisco Garzón, por decir *“me cago en la madre que parió a todos los falangistas”*⁹¹⁹, “sólo” le condenaron a 3 años.

⁹¹⁴ Causa 506/36, contra Andrés Hervás Alonso y 16 más.

⁹¹⁵ Causa 380/36, contra Teodoro Marugán y otros. AGA, Justicia, 39.002, Caja. 399.

⁹¹⁶ Causa 52/37, contra Francisco Matesanz Marcos y 11 más.

⁹¹⁷ Sumario 1293 (sin fecha, pero de 1937), contra Leonardo García y Martina Moreno, en su Exp. Resp. Civ. 16/38. Arch. Prov. Caja J/6356.

⁹¹⁸ Causa 341/36, contra Juan Sanz Moreno, en su Exp. Arch. Pris. Prov.

⁹¹⁹ Causa 637/37, contra Francisco Garzón.

Las absoluciones y los sobreseimientos

El número de procesados que resultaron absueltos en los consejos de guerra es elevado, 146 sobre un total de 1.175 procesados, lo que indica más de un 12%. Este dato revela el exceso de procesados para los limitados hechos de oposición a la sublevación militar en la provincia de Segovia. Además, en algunos casos, los tribunales se vieron obligados a absolver porque las acusaciones carecían de verosimilitud.

En concordancia con las absoluciones anteriores, la cantidad de sumarios sobreseídos, 23, hace pensar que ciertas investigaciones demostraban que las acusaciones escaseaban de credibilidad.

6. 4. La libertad vigilada

Para finalizar este capítulo no podemos dejar de analizar, aunque sea de un modo breve, las excarcelaciones fruto de los indultos. Estas medidas de gracia fueron unas decisiones políticas tomadas por Franco como instrumento perfecto de propaganda de la *benignidad* del Caudillo, pero en realidad no pretendían más que solucionar el problema penitenciario que llegó al final de la guerra civil debido al gran volumen de presos en toda España.

Las carencias económicas que sobrevinieron en la posguerra se agravaron sobremanera con el incremento de la población reclusa: 213.640 presos en 1940⁹²⁰, a los que había que alimentar, en muchos casos vestir, dar medicinas, curar, etc, lo que originaba unos gastos de material y de personal que el régimen tenía grandes dificultades para afrontar. En este aspecto se dio una contradicción entre la voluntad de reprimir y encarcelar al máximo de opositores posible, con la necesidad de aligerar los presupuestos penitenciarios. A partir del fin de la contienda se dictaron normas para facilitar el acceso a la libertad condicional de presos condenados a prisión menor, más adelante a los condenados a menos de 6 años, y así sucesivamente⁹²¹.

Se prodigaron los indultos para aligerar la saturación de las cárceles, hasta un total de catorce entre el 2 de abril de 1941 y el 30 de septiembre de 1943⁹²², pero no se trataba de concesiones de libertad definitiva, sino de libertad vigilada, bajo el estrecho control de la Guardia Civil. Estos indultos los presentaba el franquismo como medidas de gracia, pero la realidad es que no eran tantos los presos beneficiados por estas acciones, permaneciendo en prisión gran número de reclusos.

⁹²⁰ TAMAMES, R. *La República. La era de Franco*. Alianza Editorial, Madrid, 1977, pág. 324, cita fuentes oficiales. Por su parte, Bennassar escribe que en 1944 Eduardo Aunós, ministro de Justicia, reconoció que 400.000 personas "habían pasado por cárceles franquistas desde 1936. Nunca se juntaron, a la vez, más de 270.000 presos". BENNASSAR, M. B. *Historia de los españoles*. Crítica, Barcelona, 1985.

⁹²¹ Por la Ley de 3 de febrero de 1940, los delitos no comunes sancionados con menos de 12 años prescribían a los dos años. El Decreto de 5 de abril de 1940 concedió libertad condicional a los penados sexagenarios por la *revolución marxista* (a causa de la guerra) condenados a penas de veinte años o inferiores, siempre que tuvieran cumplida la cuarta parte de la condena. Por la Ley de 1 de octubre de 1940 se concedió libertad condicional a los penados por la revolución marxista a doce años y un día que hubieran cumplido la mitad de la pena impuesta. El Decreto de 23 de noviembre de 1940, determinaba que los procesados que hubieran estado en prisión atenuada y fueran condenados a penas por las que se pudieran aplicar la libertad condicional, no debían ingresar en prisión, debiendo, no obstante, los directores de las prisiones correspondientes instruir los expedientes de libertad condicional. La Ley de 1 de abril de 1941 hizo extensiva la libertad condicional a los penados por la revolución marxista a penas de 12 años o inferiores. El Decreto de 2 de septiembre de 1941 autorizaba a las Autoridades Judiciales Militares para poner en prisión atenuada a todos los condenados o propuestos por conmutación para penas que por su duración se hallaran "comprendidas en las disposiciones que regulan la libertad condicional, en tanto se tramite el expediente, y sin perjuicio de la resolución que a su tiempo recaiga en éste".

⁹²² Tesis doctoral de Vicente Gabarda. *La represión franquista en El País Valenciano. 1938-1956*. Universidad de Alicante, 1993, pág. 98. Cita la estadística publicada por Mario Aguilar en *L'Espagne Republicaine* de París, 5 de enero de 1946.

A nivel nacional, ofrecemos las estadísticas de libertades condicionales, de los primeros años de posguerra⁹²³:

Cuadro nº 23: Los liberados condicionales

Año	Liberados Condicionales
1941	47.214
1942	29.353
1943	57.549
1944	24.721
1945	9.860
Total Liberados Condicionales a 31 de diciembre de 1945	168.697

Para organizar y supervisar las concesiones de libertad condicional se crearon las Juntas Provinciales de Libertad Vigilada. En Segovia se constituyó el 10 de julio de 1943, bajo la presidencia del juez de Instrucción de Segovia, Isidoro Díez Canseco y de la Puerta; Tomás de Miguel, director de la Prisión Provincial; Luis-Florencio Borreguero Gallego, comisario jefe de Segovia; y Diego Aparicio López, delegado provincial de Sindicatos⁹²⁴. Dependientes de la Junta Provincial se crearon las Juntas Locales en cada municipio de la provincia, si bien, en febrero de 1944 se quejaba la Provincial de que sólo se habían formado 165 de las 276 localidades de toda la provincia⁹²⁵.

Como cuenta Gabriel Arranz, antes de ser liberados, los presos debían de pasar por el despacho del director que les despedía con un discurso, exhortándoles a ser buenos ciudadanos y colaborar con el Nuevo Estado, para hacer una *España grande y libre*. Además les recomendaba que “se estuvieran 6 meses sin salir de casa para no volver a la cárcel”⁹²⁶.

La situación en que vivían los liberados condicionales era de continua tensión, puesto que sus vidas estaban controladas constantemente bajo la escrupulosa vigilancia de la Guardia Civil que supervisaba las conductas político-sociales. El comportamiento en lugares públicos, como el bar o la iglesia, era observado atentamente por los guardias, pero también por los colaboradores del régimen, autoridades locales, miembros de Falange, párrocos o particulares. Eran muchos los problemas a los que se enfrentaban los liberados: debían firmar periódicamente en el cuartel de la Guardia Civil más cercano (que no siempre estaba en la localidad de residencia) con los trastornos que originaba el desplazamiento, por ejemplo, para los empleados en labores agrícolas. Si uno pretendía cambiar de domicilio, debía solicitar previamente la aprobación de la Comisión Local de origen y de la de destino. El cambio de provincia era mucho más complicado, pues exigía el consentimiento de la Comisión Central de Libertad Vigilada.

En muchos casos la liberación conllevaba el destierro o el confinamiento. En este sentido una circular de la Subdirección General de Libertad Vigilada a la Junta Provincial de Segovia pedía se efectuara la comprobación pertinente para los que solicitaran cambio de residencia y estuvieran sujetos a destierro, no fuera inferior a 250 kilómetros “para no hacer ilusoria la eficiencia de la medida de destierro”⁹²⁷. Esta medida suponía a menudo la pérdida de bienes de los liberados, pues cuando volvían no quedaba nada en sus casas.

⁹²³ AGA, Justicia, 39.002, Caja 456. Aquí se recogen los estadillos de libertad condicional correspondientes a estos años.

⁹²⁴ Arch. Pris. Prov. Cpta. de la Junta Provincial de Libertad Vigilada, creada por Decreto de 22 de mayo 1943. A los integrantes aludidos hay que añadir el secretario, que no se identifica en el acta consultada.

⁹²⁵ Arch. Pris. Prov. Escrito dirigido al Subdirector General de Libertad Vigilada, fechado el 25 de febrero de 1944.

⁹²⁶ ARRANZ MARINAS, G., op. cit., pág. 196.

⁹²⁷ Arch. Pris. Prov. Cpta. de la Junta Provincial de Libertad Vigilada. Circular de noviembre de 1944.

En caso de que quisieran viajar, los permisos pertinentes se obtenían tras el necesario informe de la Policía, la Guardia Civil o la alcaldía de la localidad de residencia. Cuando por fin, en febrero de 1948, desapareció la obligatoriedad de portar un salvoconducto para viajar por España, los liberados condicionales aún necesitaban un volante azul para sus desplazamientos.

La opción de establecerse en grandes capitales para iniciar una nueva vida también chocaba con dificultades porque tenían que demostrar vínculos familiares anteriores al 18 de julio de 1936. Los liberados no se podían establecer donde quisieran, había zonas prohibidas como lugar de residencia, por ejemplo las regiones fronterizas.

Para hacer un somero análisis de la realidad de la libertad vigilada en Segovia, hemos podido consultar las estadísticas de algunos años -pues no encontramos todos- de la Comisión Provincial de Libertad Vigilada de Segovia, archivados en la Prisión Provincial. Con estos datos, podemos apuntar el volumen de segovianos que fueron presos durante la guerra, o al finalizar la misma después de haber luchado en el bando republicano. En principio, debían tener la condición de liberados condicionales los 689 procesados y condenados por los consejos de guerra celebrados en Segovia durante la guerra, pero ya apuntamos que había procesados originarios de otras provincias. También hemos de tener en cuenta que hubo muchos presos de otros lugares de España que permanecieron en la provincia tras ser liberados, puesto que aquí se les había ofrecido trabajo, no tenían ya familia, o estaban sujetos a destierro hasta que pasaran unos años. Así mismo hay que considerar a los segovianos que fueron liberados en otras provincias y permanecieron en ellas para rehacer sus vidas. Otra aclaración que conviene hacer es el hecho de que tras la guerra continuaran los tribunales militares pervirtiendo el delito de rebelión militar, condenando de tal manera a los maquis, a sus colaboradores y otros delitos claramente políticos. Por ello, no todos los presos que aparecen en las estadísticas como sujetos al delito de rebelión militar se corresponden con los tres años de guerra, aunque sí con sus consecuencias. No podemos olvidar tampoco que muchos presos fallecieron en prisión, debido al hacinamiento, falta de higiene y mala alimentación. Como tampoco pasamos por alto el millar de detenidos gubernativos que no llegaron a ser procesados, por lo que fueron liberados al finalizar la guerra sin quedar sujetos a ninguna responsabilidad.

Hechas estas advertencias, podemos ver claramente que fue lógicamente donde se produjo algún tipo de resistencia al movimiento militar en la provincia, donde hubo más liberados condicionales.

Cuadro nº 24: Los liberados condicionales por localidades en 1944

LOCALIDAD*	Nº DE LIBERADOS
Segovia	76
Aguilafuente	7
Bernardos	22
Cantalejo	4
Carbonero el Mayor	9
Cuéllar	67
Coca	13
El Espinar	10
Nava de la Asunción	24
Nieva	6
San Ildefonso	54
Vegas de Matute	5
Zarzuela del Monte	17
Total liberados condicionales a 18 de agosto de 1944	355

*Sólo reseñamos en el cuadro las localidades con un número significativo de liberados, a partir de 4⁹²⁸.

Todavía entrados los años 50 quedaban liberados condicionales por condena de rebelión militar, como se puede observar en la estadística del 15 septiembre de 1951, de la provincia de Segovia:

Cuadro nº 25: Liberados condicionales según su delito

Tipo de delito	Número de liberados
Liberados por delito político	477
Liberados por rebelión militar	19
Liberados por delito común	65
Indultados	36
Total liberados en lib. condicional	597

Por último, aportamos una estadística que nos parece interesante para analizar las profesiones de los liberados condicionales. En ella observamos el elevadísimo número de albañiles, que representan el 41,15% del total, seguido a larga distancia por los obreros agrícolas, con el 11,39%, y el porcentaje especialmente significativo de los maestros con el

⁹²⁸ Pero los datos del 18 de diciembre de 1944 son más elevados pues, tan sólo cuatro meses después, el número de liberados condicionales había aumentado en 118 personas.

Clave	Número de liberados
Base del estadillo anterior	455
Bajas	4
Altas	17
Total liberados	472
Fallecidos	4
TOTAL	468

8,84%, que muestran el carácter de la represión franquista que se ensañó con los docentes⁹²⁹.

Cuadro nº 26: Profesiones de los liberados condicionales

Profesión	Número de Liberados	Porcentaje
Albañiles	242	41,49%
Trabajos agrícolas	67	11,39%
Maestros	52	8,84%
Obras Públicas	52	8,84%
Mecánicos	26	4,42%
Arregladores de trillos	16	2,72%
Torneros	10	1,70%
Zapateros	6	1,02%
Oficinas	6	1,02%
Camareros	5	0,85%
Mercaderes	4	0,68%
Peluqueros	3	0,51%
Varios oficios	50	8,50%
Otras profesiones	50	8,50%
Total liberados	588	100%

⁹²⁹ Arch. Pris. Prov. Estadística fechada el 11 de abril de 1945. No es demasiado científica su confección como demuestra el hecho de tener dos apartados de características similares *varios oficios* y *otras profesiones*, que por su volumen podrían haberse desglosado un poco más.

7. LA INCAUTACIÓN DE BIENES A LOS DESAFECTOS

De forma paralela a la represión física, el Gobierno de Burgos empleó otro medio fundamental de represión: la incautación de los bienes a los desafectos. Con este procedimiento, por un lado se castigaba de un modo ejemplar, dejando en la más absoluta miseria al adversario, sin posibilidad de reacción, y por otro se iniciaba la recogida de fondos para una guerra que, si bien no estaba prevista por los militares sublevados, ya era inevitable desde el momento en que la acción militar no triunfó en todo el territorio nacional.

La incautación de bienes se disfrazó de “procedimiento de responsabilidad civil” que pretendía unos objetivos muy claros y definidos. En primer término, procuraba castigar a los adversarios políticos, declarándoles culpables de todos los males que aquejaban a España y responsables de los daños ocasionados por la guerra que habían “provocado” al *“oponerse por las armas al nuevo poder legítimo encarnado por las autoridades militares”*, como decían los tribunales castrenses. Este fin sancionador, punitivo, venía recogido expresamente en los documentos de este procedimiento y así se reconocía explícitamente en la propuesta de sanción a un expedientado: *“Y como por ahora no existen otros bienes embargados y lo que se persigue con este procedimiento es hacer efectiva la responsabilidad de los merecedores de esta sanción, la comisión estima que debe de abstenerse de fijarla ínterin se carezca de bienes en que pueda realizarse”*⁹³⁰.

En segundo lugar, paralizando al oponente y despojándole de todos sus bienes, se pretendía abortar cualquier voluntad de resistencia. Muchos españoles quedaron reducidos a la miseria y sin medios de ganarse la vida, ya que fueron incautados desde las tierras de labor (al que las tenía) a las herramientas de trabajo de zapateros, sastres, pasando por comercios, tabernas, etc.

Por último, y no por ello de menor importancia, este procedimiento procuraba recaudar fondos para sufragar los esfuerzos de la guerra, haciéndoselos pagar a los adversarios políticos. Como veremos a continuación, cualquier cantidad era bienvenida para engrosar las arcas del Nuevo Estado, destinadas prioritariamente a los fines bélicos.

7. 1. Las fases del proceso incautador

En el proceso de incautación de bienes se puede hablar de cinco fases:

La Incautación “descontrolada”

La primera fase abarca desde el 19 de julio hasta la promulgación del Decreto 108. Desde el inicio mismo de la contienda se procedió a la incautación más o menos “legal” de los bienes de los declarados oponentes políticos por parte de los nuevos gobernantes.

Hubo muchos oportunistas que aprovecharon los primeros momentos para hacerse con los bienes de desaparecidos, asesinados, huidos o presos, o de las organizaciones obreras o políticas. Se han encontrado numerosos casos de este tipo en Cuéllar (viviendas), Gallegos (carne de matanza, gallinas), Matabuena (maquinaria de zapatería), etc. El gobernador civil quiso cortar estas prácticas, que debieron de estar muy extendidas, con la circular de 14 de septiembre de 1936: *“Que no se incauten de muebles o efectos pertenecientes a Entidades o particulares, aunque sea bajo recibo, sin orden expresa de la Autoridad Militar”*⁹³¹.

⁹³⁰ Arch. Prov. Caja J/6353, Exp. Resp. Civ. 43/37, José Urquiza. El subrayado es mío.

⁹³¹ BOP, 14 de septiembre de 1936.

El Decreto 108 de 13 de septiembre de 1936

El Decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional fue la primera norma sobre incautación de bienes. Su encabezamiento era toda una declaración de principios:

La formación del funesto llamado Frente Popular, de cuyos males, si responsables son las agrupaciones dichas, no lo son menos aquellas personas físicas que, con su actuación anterior o coetánea, directa o indirecta, han sido autores materiales o por inducción de los daños y perjuicios sufridos por el Estado y por los particulares, con motivo de la absurda resistencia sostenida contra el movimiento nacional, por lo que procede adoptar, contra unos y otros, medidas encaminadas a garantizar la responsabilidad que en su día pueda alcanzarles para la indemnización procedente⁹³².

Este decreto marcó el inicio legal de la represión franquista en el terreno político, administrativo y económico, pues, aparte de la depuración de todos los empleados y la ilegalización de los partidos políticos y sindicatos, avanzó el inicio “legal” de los embargos de propiedades de los oponentes políticos, tanto de agrupaciones y partidos como de particulares.

La regulación del procedimiento de incautación de bienes: el Decreto de 10 de enero de 1937 de la Junta Técnica del Estado

Este decreto fue la norma fundamental en la que se basaron todas las actuaciones en este campo durante la guerra. Venía a desarrollar las líneas generales marcadas por el Decreto 108.

Además de una Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado, con sede en Burgos, en cada capital de provincia se creó una Comisión de Incautación de Bienes. La de Segovia se constituyó en febrero de 1937, presidida por el gobernador civil, Manuel Pérez Mirete (nombrado en enero), e integrada por el magistrado Martín Norberto Castellanos Sánchez y el abogado del Estado Francisco Sepúlveda y Sunyé⁹³³, ambos civiles, sin, a priori, implicaciones políticas, que se vieron inmersos en el proceso represor. La instrucción de los expedientes se reservaba al juez de Primera Instancia de Santa María de Nieva, Ángel Cano y Sanz de Trápaga.

Las personas hacia las que iba encaminado el proceso incautador eran, por un lado, “los responsables de daños o perjuicios causados a España” (es decir, cualquier persona que por sus comportamientos político-sociales fuera declarada responsable de dichos daños por el criterio arbitrario de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes) y, por otro, todas aquellas personas condenadas en consejo de guerra por “actos y omisiones contra el Movimiento Nacional”⁹³⁴.

La Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939

La denominada responsabilidad civil del procedimiento anterior fue sustituida por las responsabilidades políticas, pero sólo en términos terminológicos pues los hechos que perseguía eran prácticamente los mismos: las acciones u omisiones contra la sublevación, que incluían la militancia política previa al 18 de julio y las condenas en consejo de guerra. Esta Ley sustituyó al Decreto de 10 de enero de 1937. Su aplicación fue más exhaustiva en las zonas que permanecieron bajo la legalidad republicana durante más tiempo, porque no les había afectado el procedimiento anterior de responsabilidad civil. Las Comisiones Provinciales fueron sustituidas por los Juzgados de Responsabilidades Políticas.

En esta provincia su actuación afectó especialmente a los segovianos que se habían “pasado” a la zona gubernamental para combatir a los sublevados en el Ejército republicano. Acabada la guerra, cuando volvieron a sus casas, fueron detenidos,

⁹³² D. 108, 13 de septiembre de 1936, BOP, 21 de septiembre de 1936.

⁹³³ BOP, 1 de febrero de 1937.

⁹³⁴ Ambos entrecomillados del D. 10 enero de 1937. Art. 6º y 8º respectivamente. BOE, 11 de enero de 1937.

procesados y condenados por “adhesión a la rebelión”. También se aplicó esta ley a algunas personas que habían eludido el proceso de responsabilidad civil, pues, al ampliar el abanico de las responsabilidades, afectó a todos los segovianos que habían representado al Frente Popular como interventores electorales, concejales, jueces municipales, etc.

Los indultos

Una vez finalizada la guerra se iniciaron los trámites para conseguir los indultos a los particulares sancionados. A tal fin se aplicaron distintas normas: Ley de 19 de febrero de 1942, Decreto de 13 de abril de 1945 y Orden de 27 de junio de 1945; que ponían en relación dichas medidas con Ley de Indulto de 18 de junio de 1870. Pero la mayoría de los indultos no llegaron a Segovia hasta 1959, 20 años después del fin de la guerra civil, si bien hay que hacer constar que un gran número de expedientes, tanto de responsabilidad civil como política, fue sobreseído.

Con la documentación que se ha podido consultar, se puede llegar a aventurar que la mayoría de los sancionados fueron indultados, y por tanto, la mayor parte de los bienes embargados (o en su caso, el valor ingresado por el Estado tras la subasta de los mismos) fueron devueltos, salvo a los inculcados fallecidos o exiliados que no dejaron herederos aquí. Este hecho nos llevaría a la conclusión de que después de más de 20 años, el procedimiento de represión económica se utilizó como un préstamo sin intereses, de los adversarios políticos que sirvió al Nuevo Estado para consolidarse en sus primeros momentos.

7. 2. La Incautación de bienes a partidos políticos y sindicatos

El Decreto 108 puso fuera de la ley, en la zona controlada por el Ejército nacionalista, a los partidos y agrupaciones sindicales que habían integrado el Frente Popular, así como cuantas organizaciones se habían opuesto al movimiento militar. Todos los partidos republicanos fueron ilegalizados, incluso los conservadores Derecha Liberal Republicana, Partido Republicano Conservador y Partido Radical.

Paralelamente a la ilegalización, se decretaba la *“incautación de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecieran a aquéllos”*; todo lo cual pasaba a ser propiedad del Estado. En la provincia de Segovia esta medida afectó casi exclusivamente a la UGT, como único sindicato activo, pues la CNT no tenía apenas militancia, ni tan siquiera sede propia⁹³⁵ (aunque contaba con secciones en El Espinar, Ayllón y Linares del Arroyo). En cuanto a los partidos, fueron un total de nueve los afectados y dos secciones juveniles, la Juventud Socialista Unificada y la Juventud de Izquierda Republicana. Había sedes sindicales o de partidos en un total de 65 localidades de toda la provincia, como se puede comprobar en los anexos.

Entre las secciones sindicales asociadas a la UGT predominaban, como corresponde al carácter mayoritariamente agrario de la provincia, las de Trabajadores de la Tierra con 55 agrupaciones locales. Otras secciones importantes eran “La Madera” en El Espinar, San Ildefonso y Valsaín, los resineros en Coca y Nava de la Asunción; y en Segovia, Trabajadores de la Enseñanza y Artes Blancas.

Por su parte, los partidos políticos más extendidos eran los republicanos; entre los que predominaba el Radical Socialista con 39 agrupaciones locales⁹³⁶, Izquierda Republicana contaba con 27 y Acción Republicana con 9. La Unión Republicana de

⁹³⁵ Testimonio de Isidoro Romano, sec. de Organización de JSU en 1936; cuenta que poco antes de la guerra, compartían un local la JSU con la CNT.

⁹³⁶ Como ya hemos expuesto, así figuraba en la lista publicada en el BOP, a pesar de que la fusión de Acción Republicana y el partido Republicano Radical Socialista se había producido a finales de 1934.

Martínez Barrio tenía algo de fuerza en la capital y en algunos pueblos como Cuéllar y Nieva; sin duda gracias a la influencia del gobernador civil Chacón de la Mata, de esta orientación política. Por el contrario, el PSOE tan sólo disponía “oficialmente” de 6 secciones. El PCE contaba con agrupaciones en Segovia y Coca. Por su parte la Juventud Socialista Unificada (fruto de la fusión de las juventudes socialistas con las comunistas, durante la primavera de 1936) tenía secciones en Carbonero, Coca, Cuéllar, La Granja, Valsaín y Segovia.

Para la incautación de todos los bienes de los partidos y sindicatos, desde la Comisión Provincial de Incautación de Bienes se pidieron certificaciones a los registradores de la propiedad de los partidos judiciales y a los directores de los bancos en Segovia, sobre los bienes pertenecientes a las organizaciones prohibidas.

Además, el gobernador civil, comandante España, envió una circular a los 276 ayuntamientos de la provincia para que los alcaldes cumplieran lo estipulado en el D. 108 informando detalladamente de todos los bienes dentro de su municipio que fueran propiedad de las agrupaciones políticas y sindicales declaradas fuera de la ley. Dos semanas después, remitió otra circular recordando a todos los alcaldes de la provincia la necesidad de que cumplieran con la mayor urgencia lo mandado anteriormente, bajo la amenaza de las pertinentes sanciones. Como quiera que varios pueblos no remitieron la información requerida, fueron multados con 500 pts., al menos dos ayuntamientos⁹³⁷: Cuéllar, cuyo Ayuntamiento informó que no tenían bienes *“los partidos reseñados, y pide se quite la multa de 500 pts. por no haber cumplido la circular a tiempo”* y Perosillo, cuyo alcalde pidió que se condonara la multa por no haber cumplido a tiempo la circular, *“pues son pocos vecinos y nunca ha habido partidos o asociaciones de ninguna clase”*.

En la mayoría de las numerosas notificaciones de los ayuntamientos consultadas se comunicaba que *“no existió ningún partido ni agrupación ahora prohibidos”*; en otros indicaban que no se conocían *“bienes ni documentos, ni nada de aquellos”*⁹³⁸. Los bienes muebles, excepto el dinero en metálico, quedaron depositados en las alcaldías.

Los tampones, libros de actas y de socios se enviaron a la Comisaría de Investigación y Vigilancia. En algunos casos eran los propios falangistas los que requisaban la documentación de las sociedades y partidos, como en el caso de Madrona y Donhierro. El total del dinero recogido en metálico perteneciente a las organizaciones alcanzó la cifra de 12.044,13 pts.⁹³⁹; y fue enviado desde los ayuntamientos a la Comisión Provincial, y de ésta a la Comisión Central.

En la provincia de Segovia pocas organizaciones disponían oficialmente de local propio. Sólo apareció acreditada la propiedad de la Casa del Pueblo de la capital, perteneciente al Partido Socialista, un edificio situado en la Calle Gascos, nº 17. Otras sedes obreras no estaban registradas como propiedades de dichas organizaciones ni de particulares; así ocurría con dos edificios de “La Escoda” de Navas de Oro, y las sedes de “La Firmeza de la Tierra” de Santiuste de S. Juan Bautista, “La Autora” de Carbonero el Mayor, y la Casa del Pueblo de Samboal. Aún así, todos estos edificios fueron incautados por la Comisión Provincial. En el resto de localidades, en la mayoría de las ocasiones el espacio utilizado como sede obrera era algún desván o casa vieja perteneciente a algún asociado (Fuenterrebollo, Navas de Oro, Sepúlveda, Valverde, etc.).

Si no había edificios o locales a nombre de partidos y sindicatos, éstos tampoco disponían de muchos muebles en los espacios que utilizaban como sedes. Por todo ello, los bienes incautados eran muy limitados: alguna mesa, bancos de madera, algún armario, y poco más. Se conoce el resultado de algunas subastas de bienes de esta naturaleza, por ejemplo:

⁹³⁷ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399. Las circulares son la 940 y la 1030.

⁹³⁸ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399. Ambos entrecomillados son de la misma caja.

⁹³⁹ AGA, Justicia, 39.002, Caja 498, Cpta. nº 3. Informe de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes a la Comisión Central, de 15 de julio de 1937. Esta cuantía incluía una moneda falsa de 5 pts., de la Sociedad de Canteros y Marmolistas de Segovia.

- Izquierda Republicana de Navas de San Antonio; se obtuvo 6 pts. por *“tres libros en blanco”*⁹⁴⁰.
- Hontalbilla: Sociedad Oficios Varios. Bienes valorados en 106 pts.: *“mesas, ventana, instalación eléctrica...”*⁹⁴¹.
- Prádena, Trabajadores de la Tierra, tasación 4 pts.: *“mesa pequeña con cajón y una silla”*⁹⁴².
- Samboal, Casa del Pueblo: *“seis taburetes usados, mesa pequeña usada y un banco grande usado”*, por valor de 27,50 pts⁹⁴³.
- El Espinar: *“dos bancos de madera, una tabla como al parecer de otro banco, un armario pequeño y una mesa de madera”*, valorados en 71 pts.⁹⁴⁴.

No se puede hacer una valoración definitiva del dinero obtenido en la totalidad de las subastas de los bienes muebles porque no se ha encontrado toda la documentación, sólo se ha podido ver el anuncio de las subastas y no el resultado de las mismas. De los inmuebles no se ha localizado nada más que lo descrito más arriba.

7. 3. El procedimiento de responsabilidad civil de los particulares

El proceso incautador no se inició en 1937, con el Decreto de 10 de enero. El gobernador civil, siguiendo los artículos 5º, 6º y 7º del D. 108, tomó como medidas precautorias, ya en noviembre de 1936, la inmovilización de los créditos de personas *“notoriamente desafectas”* al movimiento militar. Estas medidas afectaron a 12 personas, destacados dirigentes del Frente Popular en Segovia, entre otros, José Carrasco (I.R.), Enrique Pérez Bonín (PSOE), Miguel Benavides (U.R.) y Manuel Tamayo (PCE)⁹⁴⁵. La suma total de las cuentas embargadas ascendía a 126.597,2 pts.⁹⁴⁶.

Pero fue el Decreto de 10 de enero el que sistematizó el procedimiento de incautación de bienes. Establecía dos vías para el inicio de los expedientes que determinarían la responsabilidad civil de los particulares.

En primer lugar, por el art. 6º, toda persona que *“por su actuación fuera lógicamente responsable directa o subsidiaria por acción u omisión, de daños o perjuicios de todas clases, ocasionados directamente como consecuencia de su oposición al triunfo del Movimiento Nacional”*⁹⁴⁷. Esta redacción englobaba multitud de cargos, hechos, actitudes e

⁹⁴⁰ AGA, Justicia, 39.002, Caja 385.

⁹⁴¹ BOP, 29 de septiembre de 1937.

⁹⁴² BOP, 1 de octubre de 1937.

⁹⁴³ BOP, 16 de octubre de 1937.

⁹⁴⁴ BOP, 20 septiembre de 1937.

⁹⁴⁵ AGA, Justicia 39.002, Caja 399. Información, fechada el 23 de noviembre de 1936, que los bancos dieron al gobernador civil, en relación con los bienes de algunos personajes significados de Segovia, oponentes al movimiento militar. Los afectados eran:

1. Joaquín Muñoz Luna, jefe de negociado de Telégrafos, dirigente de UR.
2. Antonio Vidal Lóriga, exprofesor de la Academia Artillería, residente en Madrid, afiliado a I.R.
3. Miguel de Benavides Shelly, dirigente de U.R., gobernador civil de Guadalajara.
4. Virgilio Colchero Arrubarrena, profesor de Instituto, socialista.
5. Rubén Landa Vaz, profesor de Instituto.
6. Manuel Tamayo Benito, profesor de Instituto, dirigente del PCE.
7. Antonio Linage Revilla, procurador, vicepresidente de I.R.
8. José Carrasco Linares, militar retirado, presidente de I.R.
9. Juan Gutierrez Martínez, secretario de ayuntamiento, dirigente de I.R. de Cuéllar.
10. Juan Monje Cebrián, maestro, presidente de I.R. de Cuéllar.
11. Orosio Hernández Vázquez, empleado de Hacienda, dirigente de U.R.
12. Enrique Pérez Bonín, abogado, dirigente del PSOE.

⁹⁴⁶ A esa cantidad hay que añadir dos hojas más que expresaban acciones embargadas a los anteriores, el *“pleno dominio de 2/6 partes y la nuda propiedad de 1/6 parte de una finca”* y una casa embargada con fecha 8 de enero de 1937.

⁹⁴⁷ Art. 6º, D. 10 de enero de 1937.

incluso opiniones políticas. La condición de desafecto era determinada por el gobernador civil, utilizando su propio criterio, que, lógicamente, no siempre era objetivo. Había personas a las que simplemente por ser tachadas como desafectas al Nuevo Estado, se les había cesado de su puesto de trabajo y, además, se les iniciaba el expediente de responsabilidad civil. Otros, a pesar de no haber sido detenidos, ni depurados de su cargo, vieron sus bienes incautados. Se dieron casos de denuncias de particulares por otros vecinos que aspiraban a las propiedades de los denunciados o pretendían anular la competencia de sus negocios.

El inicio de estos expedientes no tenía que ser estrictamente una denuncia, podían ser comunicaciones de autoridades que perseguían otros fines, pero destapaban la existencia de personas hostiles al movimiento y provocaban la investigación del Gobierno Civil y la apertura del correspondiente procedimiento. En estos casos, al comunicar los hechos al gobernador, éste los notificaba a la Comisión Provincial, de la que era presidente, y se iniciaban los expedientes a los vecinos ausentes.

Así ocurrió con el juez municipal de Otero de Herreros, quien ante la necesidad de colchones y ropa de cama para el Ejército, se presentó con el comandante militar del pueblo, dos guardias civiles y el alcalde, en la casa de un vecino de filiación socialista, porque *“dada su actuación antes del movimiento (es posible) se halle en zona roja”*⁹⁴⁸. De igual modo, el jefe de la Columna de Navafría informó al gobernador civil de que habían requisado 730 cabezas de ganado lanar para el servicio del Ejército, de las que 150 pertenecían a un vecino de Matabuena *“que se quedó con los rojos a primeros de julio de 1936”*⁹⁴⁹, y preguntaba por los trámites precisos para poder adquirir dichas cabezas. Por su parte, el alcalde de Tres Casas comunicó al Gobierno Civil que, el 15 de enero de 1937, desapareció de su domicilio un vecino de la localidad sospechoso de haberse pasado a zona republicana⁹⁵⁰. En los tres casos las comunicaciones referidas originaron la apertura de expediente de responsabilidad civil.

Hubo otro caso curioso, pues se trataba de la instancia de un labrador vecino de Chatún, quien al denunciar unas amenazas sobre la devolución de unos préstamos, originó la apertura de dos expedientes a las dos personas mencionadas en su misiva. El inicio del escrito ya era determinante: *“Hace tres días el procurador azañista Julio Martín Alonso acompañado de las hermanas del juez Pablo Guillén, que por sus ideas y actuación comunista ha tenido que ser fusilado en la plaza de toros de Sevilla”*⁹⁵¹. En el resto del escrito desarrollaba una exposición de verborrea franquista, que por el trazo inseguro de la firma que figuraba al pie, parece evidente que fue redactada por otra persona. Es muy interesante constatar el estilo hagiográfico del texto:

...No es justo, ni lícito ni tolerable que las personas que con su actuación nos han llevado a la deplorable situación económica que atravesamos y a la tragedia sangrienta que vivimos continúen estafando al estado cantidades que éste necesita y tiene perfecto derecho a percibir y se sigan lucrando con el sudor de los labriegos y campesinos honrados que sin tregua ni descanso fecundan el suelo patrio redimido por el invicto general Franco, a quien entregan gozosos además sus hijos para que le ayuden con la sangre de sus venas en reconquista total y definitiva a que viene consagrado por un mandamiento Providencial.

*Como una de las principales finalidades que persigue el glorioso iniciador del movimiento nacional que está forjando la nueva España es que ni un momento más pueda seguir prosperando la iniquidad a expensas de la justicia, me creo en el deber de poner en su Superior conocimiento los hechos relatados, para que siguiendo los dictados de su noble gran corazón, ponga remedio a conducta tan reprobable*⁹⁵².

⁹⁴⁸ Arch. Prov. Caja J/6350, Exp. Resp. Civ. 17/38, Florentino de Andrés Allas.

⁹⁴⁹ Arch. Prov. Caja J/6350, Exp. Resp. Civ. 84/37, Mariano García Gil.

⁹⁵⁰ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 54/37, Mariano Martín Navacerrada.

⁹⁵¹ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 65/37, Pablo Guillén. El subrayado es mío.

⁹⁵² Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 65/37, Pablo Guillén.

Por su parte, el art. 8º estipulaba que los tribunales judiciales, tanto militares como ordinarios, que conocieran por el procedimiento criminal actos u omisiones contra el Movimiento Nacional, debían comunicarlo, enviando el testimonio de la sentencia condenatoria, a la Comisión Provincial. De hecho en algunas (y no en todas, como debiera ser) de las sentencias de los consejos de guerra así lo recogía.

Los expedientes se instruían a las personas que tuvieran bienes, por eso no fueron expedientados más de la mitad de todos los segovianos condenados por consejo de guerra. Lo que prueba que la exigencia de responsabilidad civil tenía claramente un fin recaudador. Hay varios ejemplos: El informe del Ayuntamiento de Vegas de Matute sobre los bienes de 16 vecinos condenados por la causa 384/37: de los 16 procesados sólo se siguió expediente a los que pagaban contribución por rústica o urbana, y a otro vecino porque poseía un horno de cal; en total 7 vecinos. Por su parte, de los 46 vecinos de Nava de la Asunción condenados por el sumario 614/36, sólo se instruyó expediente a los 12 que tenían bienes. Así se recogía incluso en la propuesta de sanción de la Comisión Provincial al remitirla a Valladolid, alegando que el *“resto de procesados carecen de bienes”*⁹⁵³. En otros procesos masivos el resultado fue parecido: Coca, de 47 procesados por la causa 689/36, hubo 14 expedientes, y El Espinar, de 87 encausados por el sumario 109/36, se instruyeron 19.

7. 3. 1. La incoación de los expedientes

Los expedientes de responsabilidad civil seguían los siguientes pasos:

- 1º. La declaración del imputado.
- 2º. Los informes de las autoridades.
- 3º. Las acusaciones.
- 4º. La propuesta de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes.
- 5º. El informe del Auditor de Guerra.
- 6º. La sanción definitiva por el general de la 7ª División.

La declaración del imputado

En el inicio del procedimiento, el juez instructor, Cano y Sanz de Trápaga, convocaba al expedientado a comparecer, en el plazo de 8 días, ante su presencia para tomarle declaración. Dicha convocatoria aparecía en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de Burgos, avisando que la no comparecencia no suponía la paralización del expediente. Muchos de los encausados estaban en paradero desconocido, normalmente porque habían pasado al bando republicano, se hallaban en la cárcel o ya habían sido fusilados⁹⁵⁴.

En esta primera toma de declaración (en algunos expedientes se repetían las comparecencias de los inculpados, a petición de éstos o del instructor) simplemente se leían los cargos que se le imputaban: era más una diligencia de lectura de cargos que una declaración. Los inculpados normalmente negaban las acusaciones, ya fueran de militancia como de hechos por los que habían sido condenados en consejo de guerra; en este caso declaraban ser cierta la pena impuesta, pero que las acusaciones eran imaginarias o infundadas, o basadas en falsas declaraciones. Otros reconocían la afiliación a la Casa del

⁹⁵³ Arch. Prov. Caja J/6347, Exp. Resp. Civ. 97/37, Ángel Tapia y 11 más.

⁹⁵⁴ BOP, 22 de marzo de 1937. El Jgdo. Especial de Incautaciones citó a José de Frutos Gila, vecino Fuentesmilanos, “en paradero desconocido”, cuando había sido fusilado el 30 de agosto de 1936. BOP, 17 de enero de 1938, igual citación a Juan Santos Fernández, maestro de Castrojimeno, fusilado el 6 de septiembre de 1936.

Pueblo pero negaban la oposición al movimiento, o haber hecho propaganda a favor del Frente Popular, etc.

Los inculpados tenían derecho a presentar un pliego de descargos con el que poder demostrar su inocencia ante las acusaciones de que se les imputaba. La mayoría negaban los cargos, por ejemplo la afiliación a partidos o sindicatos. Hay algunos pliegos que parecen hechos “de encargo” por personas ajenas a los interesados que los presentaban. En ellos se empleaba la acostumbrada retórica del bando sublevado:

...se ha visto incluido en lista (...) de responsabilidad civil por sus ideas y actuación contrarias a normas cristianas y cívicas que integran y forman los postulados sobre los que descansa el Nuevo Estado, que se está forjando con la sangre generosa de la juventud española y los brillantes, luminosos destellos de la inteligencia del Caudillo, hombre providencial que el cielo ha suscitado para salvar una cultura y civilización milenarias, y como la sola inclusión de mi nombre (...) me produce pesar....

...dada la esfera social excepcionalmente humilde en que nos hallamos colocados los labriegos de estos pobres y esquilmados campos de la meseta (...) y las pocas luces de nuestras inteligencias, que nos sitúan en un plano inferior (...) nos expone a ser víctimas de vividores, logreros y desaprensivos, que abusan de esa humildad y falta de luces, para seducirnos y explotarnos.⁹⁵⁵

Al final del texto mecanografiado figura la firma con una caligrafía que denota claramente un nivel cultural no apto para desarrollar esa retórica.

Algunos expedientados admitían la militancia, pero dejando claro que eran afiliados de base, sin puestos de responsabilidad, que o bien llevaban poco tiempo inscritos (*“afiliación a la Casa del Pueblo solo 15 días”*), o bien se habían dado de baja en la organización antes de la guerra, lo que podía servir para rebajar la sanción. Otros aducían motivaciones más económicas que políticas para su militancia, como Marcos Pecharromán: *“dijeron que iban a roturar el monte del pueblo y solamente alcanzaban esos beneficios a los afiliados a la Casa del Pueblo...”*⁹⁵⁶; presiones de otras personas, etc.

Julio Martín pretendió que le mostraran el expediente para defenderse, amparándose en el art. 4 de la Orden de 13 de marzo de 1937, donde se recogía que *“en ningún caso dejara de intentarse la audiencia del inculpad”*⁹⁵⁷. Él entendía esta audiencia como ver el expediente para poder armar su defensa. Pero el instructor estimó que no había lugar a dicha petición.

En el pliego de descargos, los inculpados podían proponer que se tomara declaración a testigos, para apoyar su inocencia. Para darle más credibilidad, algunos presentaban a *“personas tan clasificadas de derechas como el médico, el alcalde y el juez”*⁹⁵⁸. Sin embargo, no siempre convocaban a declarar a los testigos, hay algún caso en que el inculpad lo propuso, el juez no los citó y no aparecen las razones de esa negativa.

Algunos testigos apoyaban a los inculpados indicando que tenían buena conducta social, eran personas de orden, etc. Pero, por el contrario, también se han encontrado testimonios de personas propuestas por el acusado, que no le ayudaron nada, incluso perjudicaron más al informado. Así, unos testigos de El Espinar que debían sustentar la idea de que Víctor Mauricio Jiménez no había participado en el tiroteo del caserío de Prados, por el contrario, manifestaron *“desconocer si tomó o no parte en Prados, pero que si fue detenido, sería después de los sucesos por lo que bien podría haber tomado parte en*

⁹⁵⁵ Arch. Prov. Caja J/6349, Exp. Resp. Civ. 140/37, Silverio García.

⁹⁵⁶ Arch. Prov. Caja J/6347, Exp. Resp. Civ. 110/37, Marcos Pecharromán.

⁹⁵⁷ Decreto dictado por la necesidad de aclaraciones, como recogía en su encabezamiento: *“Las normas (de 10 de enero) han sido interpretadas equivocadamente, por errores de imprenta, o por no tenerse en cuenta dichos decretos...”*.

⁹⁵⁸ Arch. Prov. Caja J/6349, Exp. Resp. Civ. 116/37, Raimundo Sanz Muñoz.

*los mismos*⁹⁵⁹. Algunos testigos incluso declararon no conocer al inculminado que los había propuesto para testificar en su favor.

El instructor también podía requerir el testimonio de personas para clarificar la actuación de los inculminados. Así llamaba a deponer a compañeros de trabajo, vecinos o autoridades que pudieran haber coincidido con los expedientados.

Los informes

Los expedientes se fundamentaban en los informes realizados por las nuevas autoridades: alcaldes, Guardia Civil y cualquier otra que el instructor considerara oportuno: Gobierno Civil, Comisaría de Investigación, Diputación Provincial. En el modelo de petición de informes del Juzgado Especial de Incautaciones, se solicitaba información sobre

...la actuación anterior o coetánea, directa o indirecta, (...) con ocasión del GMN Salvador de España, si han sido autores materiales o por inducción de daños y perjuicios sufridos por el Estado y particulares, con motivo de la absurda resistencia sostenida contra dicho Glorioso Movimiento, así como su actuación político-social, si han estado afiliados a algún partido del llamado frente popular o realizado actos de propaganda a su favor, o contribuido con cuotas o suscripciones a fines sociales o políticos, para el llamado subsidio pro-presos de la revolución de Asturias, Socorro Rojo Internacional u otro de clase análoga⁹⁶⁰.

El juez instructor enviaba el interrogatorio a las distintas autoridades para que informaran sobre los diferentes aspectos generales de la responsabilidad civil que estipulaba el decreto. A veces demandaban información concreta sobre algún cargo determinado que hubiera que ratificar o no estuviera muy claro. Por ejemplo, pidió a la Guardia Civil y al alcalde de San Ildefonso que ampliaran los informes sobre Pedro Hurtado, propietario de un bar al que, según acusaban, acudían personas de izquierda. Estas autoridades locales debían emitir su opinión sobre si estimaban que *“el hecho de que concurriesen la mayoría de los elementos del frente popular al establecimiento (...) puede considerarse que llevaba implícita la adhesión y complacencia del inculminado con la política del frente popular o no”*. La respuesta dejó en el aire la responsabilidad del tabernero, pues para el alcalde, *“de las averiguaciones y antecedentes obtenidos no puede deducirse de una manera concluyente si (...) suponía (...) adhesión...”*. La Guardia Civil fue más exculpatória, porque los izquierdistas *“no acudían por simpatizar el dueño con esas ideas, sino como un establecimiento público (...) el dueño no mirara más que servir lo mejor posible a sus clientes”*.⁹⁶¹

Los informes de los diferentes organismos tenían las siguientes características:

La mayoría de los informes del **Gobierno Civil** coincidían con los que efectuaba la Comisaría, que dependía directamente de aquel organismo, y que además estaba ubicada en el mismo edificio.

En los casos de procesados por la jurisdicción de guerra, el **Gobierno Militar** informaba del número de la causa, de la condena impuesta y de la prisión en la que se hallaban, para, en primer lugar tomarles declaración y finalmente, notificarles la sanción.

La **Comisaría** informaba de todos los residentes en la capital y, de los de la provincia, sólo si habían sido detenidos o estaban presos. La línea general es muy similar a la de otras autoridades: aunque no tuvieran antecedentes de los procesados, no por ello dejaban de emitir informes: *“no se tienen antecedentes, pero en cuanto a conducta y*

⁹⁵⁹ Arch. Prov. Caja J/6352, Exp. Resp. Pol. 16/43, Víctor Mauricio Jiménez Marugán.

⁹⁶⁰ Archivo Municipal de Segovia. Leg. 612-6. En la cita se han respetado las abreviaturas y las mayúsculas del original.

⁹⁶¹ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 87/37. Pedro Hurtado.

demás antecedentes, dada la pena que le ha sido impuesta (30 años) ha sido mala en todos conceptos⁹⁶².

Con puestos en las localidades más importantes de la provincia, cada comandancia de la **Guardia civil** informaba de los inculpadados de su zona de jurisdicción. Algunas acusaciones no estaban basadas en hechos concretos: *“tenía mala opinión y fama en el pueblo, porque después del advenimiento de la funesta república se destacó como de extrema izquierda siendo muy parlanchín, antirreligioso y blasfemo, continuamente hablaba en favor del marxismo”*⁹⁶³. Como los cargos que se imputaban no tenían demasiada base y eran inconcretos, el instructor preguntaba de nuevo para que se especificasen algunos de los hechos. Pero la Guardia Civil no siempre podía concretar:

Ante la pregunta de en qué forma Félix Gómez había realizado propaganda a favor del Frente Popular, el comandante del puesto contestó: *“la que se desprende de hacer gala en cafés”*⁹⁶⁴. Sobre Francisco Carsi, acusado de trabajar a favor de las izquierdas, ampliaron la información diciendo que *“no obstante ser simpatizante de izquierdas no se ha podido comprobar en qué forma y lugar trabajaba en favor de dichas izquierdas, pero como era amigo de Azaña y Alborno, los cuales se dice le protegieron en su carrera, se presume por estos extremos que trabajaba a favor de tan repetidas izquierdas”*⁹⁶⁵.

También la Guardia Civil aventuraba aseveraciones sobre hechos ignorados: *“Se desconoce si contribuyó a suscripciones pro-presos, pero es seguro que contribuyó muy gustoso con su voto y propaganda al triunfo del comunismo”*⁹⁶⁶.

⁹⁶² Arch. Prov. Caja J/6353, Exp. Resp. Civ. 56/37. Moisés Alonso Álvarez. Respecto a la pregunta sobre si un inculpadado podía ser considerado autor material o por inducción, hubo alguna respuesta digna de recoger aquí: *“debo hacerle constar que con su actitud constante estaba induciendo a los demás a que los referidos daños se realizasen”*. Luego le pidieron aclarara en qué se basaba para hacer esas afirmaciones, a lo que la respuesta fue aún más interesante: por un lado reconocía que el inculpadado no estaba afiliado a ninguna organización política o sindical, con lo que la responsabilidad civil era mínima, pero era de *“dominio público”* que hacía propaganda a favor de la izquierda *“aunque siempre privadamente y en conversaciones, ya que no posee condiciones oratorias para mítines o conferencias”*. Resulta cuando menos chocante hablar de propaganda privada o en conversaciones. Pero lo que ya asombra es uno de los ejemplos que ponía el comisario sobre la propaganda realizada. Escribía que el inculpadado, ante un grupo de obreros que estaban trabajando en una obra, *“les instó a que no trabajaran más horas que las reglamentarias”*. Esta recomendación parece estrictamente lógica, aunque tuviera una connotación de defensa de los derechos de los trabajadores y en contra de la explotación tan extendida en aquellos tiempos. Los otros ejemplos no pasan de ser meros comentarios. En otra ocasión hablando con el ama de llaves del difunto general Rexach, le preguntó qué periódico leía y al contestarle que el *ABC* y *Segovia Republicana*, él contestó que pronto dejaría de leer el *ABC* *“porque va a desaparecer”*. Cuando la quema de iglesias y conventos hizo comentarios en el sentido de que igual suerte iban a correr los bancos y palacios. Finalizaba el informe con la acusación secular de la dedicación a la usura, que recuerda a las denuncias medievales a los judíos. Además estaba basada en los habituales rumores sin confirmar, *“hay noticias también de que (...) se dedicaba a la usura”*. Arch. Prov. Caja J/6352, Exp. Resp. Civ. 38/37, Bernardo de Antonio Domingo.

⁹⁶³ Arch. Prov. Caja J/6353, Exp. Resp. Civ. 19/38, Santiago López Rodríguez.

⁹⁶⁴ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 20/37, Félix Gómez Trapero.

⁹⁶⁵ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Civ. 44/37, Francisco Carsi Zancares.

⁹⁶⁶ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 150/37, Feliciano Tejero Cáceres.

Los **alcaldes**, en general, no eran demasiado beligerantes con sus vecinos, no informaban de una manera negativa por norma, como ocurría con la Guardia Civil. Sirva como ejemplo el alcalde de Hontanares: *“creo y no he podido averiguar haya sido autor material (...) creo que no se halla afiliado a partido, sin que haya observado que haya hecho actos de propaganda. La actuación social nada deja que desear”*.⁹⁶⁷

Pero también había alcaldes menos escrupulosos. Uno de ellos era el de Segovia, Andrés Reguera Antón. No conocía muchos datos, pero se permitía la licencia de imaginarlos: por un lado *“Ignoro si cotizaba o no para partidos de izquierda, aunque dada su ideología me inclino por la afirmativa”* y por otro *“No consta si cotizaba o no para partidos izquierda, pero no es aventurado inclinarse a la afirmativa, dadas sus ideas”*.⁹⁶⁸

Otros ejemplos parecidos de suposiciones los daba el alcalde monárquico de Cuéllar, Juan Herrero, *“era un exaltado marxista, pues su relación con los elementos más destacados de esta clase y del frente popular así lo demostraban”*.⁹⁶⁹

El presidente de la **Diputación Provincial** de Segovia, Antonio Sanz Gilsanz, informaba sobre algunos expedientados de la capital y, en menor medida, de la provincia, concretamente de algunos personajes de Cuéllar. Demostraba estar muy bien informado de algunas personas, pues a veces ofrecía datos concretos de afiliación o propaganda, que no aportaba la Comisaría o la Guardia Civil: *“desde 1931 afiliado al partido socialista y posteriormente fue el iniciador y organizador en esta capital y provincia de las células comunistas, distinguiéndose por tanto como propagandista de dicho partido”*.⁹⁷⁰

Pero, en muchos casos proporcionó tan sólo apreciaciones personales y suposiciones: *“Desconocemos su actual postura ante el movimiento, pero por su anterior exaltación estimamos será opuesto al actual régimen”*.⁹⁷¹

En algunas ocasiones se permitía incluso la estimación del grado de responsabilidad de un inculpado. Como no constaba que hubiera intervenido en actos públicos ni en propaganda, tan sólo figuraba como cotizante de partidos republicanos, *“no creemos haya tomado parte directa en acto de resistencia al movimiento, por su carácter retraído y apocado le consideramos incapaz de influir sobre persona alguna para actuar en sentido de dicha resistencia”*.⁹⁷²

Como no eran preceptivos los informes de **Falange** en los procedimientos de responsabilidad civil (aunque veremos más adelante que sí lo serán para el de responsabilidades políticas), sólo se han encontrado en algunos de los expedientes a los vecinos de Fuentesauco. Uno de ellos es muy significativo para conocer cómo actuaban las denuncias en los pueblos de la provincia:

...pues hace unos días estaba en un huerto de su propiedad a las afueras del casco de la población con un vecino de sus mismas ideas, y al pasar un falangista de esta localidad, oyó decir a éste último que decía, nos van a fastidiar D. Ángel ya si que nos ganan, y a eso

⁹⁶⁷ Arch. Prov. Caja J/6353, Exp. Resp. Civ. 41/37, Lucio Durán Rincón. Por otro lado, es interesante comprobar cómo desde Burgos se pretendía, y se llegaba a conseguir en muchos casos, implicar a las autoridades locales en la represión. En este informe, el alcalde citaba que en una taberna del pueblo, un joven de la localidad *“me manifestó verbalmente y bajo reserva que en el establecimiento había presenciado alguna conversación poco agradable al glorioso movimiento”*. Ante lo cual, el alcalde, como *“autoridad local y afecto al movimiento”*, se identificó plenamente con su papel de garante del nuevo régimen y se enfundó el uniforme represor: *“llamé ante mi presencia a los sujetos que el joven me indicó, y después de interrogarles (...) que no era cierta la acusación (...) que no habían tenido conversaciones de esa naturaleza en sitio ninguno”*. La cuestión se zanjó con *“una amonestación a los acusados”* y una amenaza tan propia de la nueva situación: *“advirtiéndoles que si en adelante llegaban a mí noticias fehacientes de conversaciones contra el movimiento les impondría el máximo de la multa que me autoriza la ley y lo pondría en conocimiento de la superioridad”*.

⁹⁶⁸ Arch. Prov. Caja J/6353, Exp. Resp. Civ. 30/37, Julián Fernández Rincón.

⁹⁶⁹ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 65/37, Pablo Guillén y Guillén.

⁹⁷⁰ Arch. Prov. Caja J/6353, Exp. Resp. Civ. 43/37, José Urquiza Cubero.

⁹⁷¹ Arch. Prov. Caja J/6352, Exp. Resp. Civ. 38/37, Bernardo de Antonio Domingo.

⁹⁷² Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 21/37, Mariano Gómez de Caso.

*contestó el inculpado, no te preocupes que dentro de muy poco tendremos el mando en nuestras manos y entonces saciaremos nuestro apetito*⁹⁷³.

Esta última frase parece extraída de una novela y transcrita a la denuncia. Para “apuntillar” al inculpado, el informante ofrecía su valoración personal sobre la afección de aquél al movimiento: *“no puedo decir si ha contribuido a suscripciones pro-presos pero sí puedo decir que en todas las cuestaciones a favor de nuestro glorioso Ejército español han sido a la fuerza y muy escasas a pesar de su situación económica que es bastante buena”*⁹⁷⁴.

Al igual que ocurre con la Falange, tampoco abundan los informes de los **párrocos**, pues tampoco eran preceptivos como ocurrirá con la Ley de Responsabilidades Políticas. Se emitían estos informes a través del obispado, organismo que tenía que autorizarlos. Cuando los instructores remitían el cuestionario a los párrocos, éstos contestaban que debían solicitarlo primero al prelado. Los pocos informes existentes son muy exhaustivos pues hacían una visión general del inculpado en los aspectos político, social y religioso.

Sirva como ejemplo el informe del párroco de Fuentesauco sobre un vecino de la localidad: *“No sé que haya tomado parte activa en los trabajos de propaganda, pero sí creo que por su poca cultura, su posición económica desahogada y falta de criterio fijo, le tomasen los dirigentes frentepopulistas locales como señuelo de incautos y financiero de sus proyectos”*. En su misiva, el párroco explicaba muy bien la evolución del inculpado desde la situación de democracia y libertades de la República hasta la situación de dictadura iniciada con la sublevación: *“Su comportamiento en lo religioso (...) fue de apatía e indiferencia, dejando, como consecuencia de éstos incumplidos la mayoría de los preceptos tanto divinos como eclesiásticos”*. Por el contrario, desde que se inició la guerra, tanto en lo político-social como en lo religioso, como otros tantos, se adaptó a la nueva situación, *“parece cambiado, hoy coopera como el que más al sostenimiento de las cargas patriótico-sociales y cumple como buen cristiano. Gráficamente podría decirse que va hacia donde le lleva el viento”*⁹⁷⁵.

Las acusaciones

Los “delitos” por los que eran acusados los desafectos eran, generalmente, actividades totalmente legales cuando habían sido realizadas antes de la sublevación militar de julio: propaganda política, militancia en organizaciones sindicales o políticas de signo republicano o de izquierda, suscripciones con fines sociales o políticos, contribución al subsidio pro-presos de la revolución de Asturias o al Socorro Rojo Internacional, etc. Algunos sindicatos eran especialmente perseguidos, como el de telegrafistas, a decir de las autoridades, *“por la nefasta influencia perturbadora del orden social que ha de reconocerse al sindicato”*⁹⁷⁶.

El Socorro Pro-Presos se había organizado para apoyar a las familias de los encarcelados por la revolución de octubre de 1934, pues la mayoría de ellos eran obreros sin recursos. En cambio, para los nuevos gobernantes la suscripción *“no constituye un acto meramente caritativo sino íntimamente ligado a una finalidad política”*⁹⁷⁷.

Las interpretaciones de algunos hechos eran muy elaboradas. Por ejemplo el único cargo imputado a José Delgado era que había difundido la falsa noticia de la muerte de Franco. El instructor expresó la acusación de la siguiente manera:

⁹⁷³ Arch. Prov. Caja J/6349, Exp. Resp. Civ. 134/37, Ángel Cruz Antolín. El subrayado es mío.

⁹⁷⁴ Arch. Prov. Caja J/6349, Exp. Resp. Civ. 134/37, Ángel Cruz Antolín.

⁹⁷⁵ Arch. Prov. Caja J/6349, Exp. Resp. Civ. 140/37, Silverio García.

⁹⁷⁶ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 20/37, Félix Gómez Trapero.

⁹⁷⁷ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 21/37, Mariano Gómez de Caso.

Demostrado la certeza de este hecho es evidente que quien propala tal falsedad, no sólo demuestra una ideología opuesta al triunfo de la causa nacional sino que además actúa contra la misma al procurar la desmoralización de las fuerzas y elementos que siguen al Caudillo (...) ha de ser acreedor una sanción cuya cuantía (ha de ser) limitada por no podersele suponer responsable en la misma medida que aquellos que han actuado franca y decididamente en contra de la causa⁹⁷⁸.

Ahora, con la distancia del tiempo transcurrido, provoca la sonrisa leer algunos de los cargos que motivaban las sanciones, pero es muy triste saber que muchos perdieron sus bienes o fueron sancionados con fuertes multas, por esas causas. Por ejemplo, a varios vecinos de Navafría les acusaron de que cuando se proclamó la II República “se distinguieron todos por su júbilo y regocijo”. Igual regocijo mostrado por Luis de Montalbán, que hizo sonar “con insistencia en un gramófono de su propiedad el himno de Riego y la Marsellesa”⁹⁷⁹. Ángel Cruz era “acérrimo simpatizante del FP con graduación crecida comunista y eficazísimo propagandista de este ideal al que era afiliado”⁹⁸⁰.

La propuesta de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes

Una vez recogida toda la documentación solicitada (los informes sobre la conducta político-social del expedientado, de los bienes de los que era propietario y la declaración del afectado), el juez hacía un resumen de las actuaciones que pasaba a la Comisión Provincial. Ésta elaboraba una propuesta en la que recogía las acusaciones y, en caso de declaración de responsabilidad, proponía una multa como indemnización.

Para justificar el castigo a los inductores, la Comisión Provincial hacía un razonamiento interpretativo del Decreto de 10 de enero altamente elaborado. Explicaba que eran responsables todas las personas que “empezaron a predicar en España las ideas revolucionarias que formaron en ella el ambiente de oposición necesario para que el movimiento nacional encontrase la oposición que ha encontrado”. Aún se permitía una vuelta más a la retórica de la “rebelión” contra su sublevación, pues los daños materiales que “el Estado ha sufrido en la presente contienda no se hubieran causado si el MN hubiera sido acatado, como lo debió ser, por todos los españoles y a su vez esta resistencia no se hubiese producido de no haberse envenenado a la opinión con propagandas disolventes”⁹⁸¹. De este razonamiento quedaron tan satisfechos que apareció repetido en varios expedientes más.

Entre las 91 propuestas encontradas, tan sólo en 15 ocasiones la Comisión propuso la declaración sin responsabilidad, porque no vio cargos suficientes para pedir la sanción. Pero de estas propuestas absolutorias, 6 inculpadados fueron posteriormente sancionados por el general Saliquet.

En alguna ocasión aparecían en la propuesta cargos que no se habían mencionado anteriormente en el expediente. Por ejemplo, se acusó a José Moreno, secretario particular del gobernador civil republicano Chacón, de “sectario y antirreligioso”, cuando en ninguno de los informes se recogía esta acusación, ni siquiera en el resumen del instructor.

A la mayoría de los inculpadados no se les pudo probar la realización de actos en contra del movimiento, básicamente porque éste triunfó en la provincia de Segovia sin apenas oposición, como se ha expuesto en el capítulo correspondiente. Pero este hecho no impedía que se sancionase a los oponentes políticos por sus militancias anteriores a la guerra. Aparece muy claro en la propuesta de sanción a Rubén Landa:

Se carece de datos para atribuirle realización de actos directamente encaminados a producir daños materiales al Estado o particulares, mas dada su actuación anterior al movimiento

⁹⁷⁸ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Civ. 18/37, José Delgado Molina.

⁹⁷⁹ Arch. Prov. Caja J/6346, Exp. Resp. Civ. 6/38, Luis de Montalbán y Mazas.

⁹⁸⁰ Arch. Prov. Caja J/6349, Exp. Resp. Civ. 134/37, Ángel Cruz Antolín.

⁹⁸¹ Arch. Prov. Caja J/6350, Exp. Resp. Civ. 1/37, Joaquín Muñoz de Luna.

contraria sin duda alguna a lo que éste se propone en beneficio de nuestra patria, es evidente que cooperó a que se crease un estado de indisciplina social y como consecuencia que el alzamiento salvador no encontrase desde el principio todas las asistencias necesarias para un triunfo inmediato...⁹⁸².

La cuantía de las sanciones era totalmente arbitraria, para los mismos cargos hemos comprobado distintas sanciones, como se aprecia claramente con varios inculpados de Fuentesauco. Las acusaciones eran iguales, incluso literales: propagandistas del Frente Popular, afiliados a Trabajadores de la Tierra, asistieron a un acto celebrado por Largo Caballero en Segovia y *“a su regreso en unión de los demás dio vivas entusiastas al FP”*⁹⁸³. Mientras que Bruno Valentín y Silverio García fueron sancionados con 1.000 pts., Rufino de Blas lo fue con 500 pts., Julio Hernansanz con 200 pts. y Florián Arranz y Vicente Rodríguez con 100 pts.

En algunas propuestas se recogían las dificultades de la Comisión a la hora de proponer una cantidad fija, *“...no siendo posible cifrar la cuantía de los daños (...) pudiendo afirmarse sin reserva alguna que habrían de ser muy superiores al importe de los bienes embargados (...) proponemos la incautación total a beneficio del Estado”*⁹⁸⁴. En el momento de la resolución de los expedientes, ante la dificultad de establecer una cantidad en uno de ellos, la Comisión determinaba la pérdida de todos los bienes, y pasaban a sancionar al siguiente. Como se justificaba en otra propuesta: *“no puede ser inconveniente para exigir (la responsabilidad civil) la falta de evaluación concreta del daño que motiva”*. Porque así sólo se castigaría a los autores de daños materiales y no a los inductores, a los que actuando de *“directores del movimiento rebelde crearon un estado social capaz de producir aquellos actos”*.

Para la mayoría de los expedientados, las multas suponían unas cantidades totalmente desproporcionadas con sus posibilidades económicas. A pesar de los escasos bienes de los inculpados, la Comisión pretendía unas sanciones muy elevadas, sin duda para cumplir los fines de atemorizar y paralizar a los adversarios. Hay muchos ejemplos en este sentido, sanciones de 50.000 pts. *“aunque de momento no pueda hacerse efectiva, dada la escasa cuantía bienes embargados”*⁹⁸⁵.

Para determinar la cuantía se tenían en cuenta dos factores: los “hechos” por los que era sancionado y la valoración de los bienes que poseía el inculpado. Así se expresaba de diferentes formas: *“por la calidad de dirigente y poseer varias fincas rústicas lo que aconseja elevar la suma de responsabilidades”*, *“dada la fortuna personal y actuación del nombrado”*, o *“dada la tasación pericial del patrimonio y actuación tenida”*.

La propuesta de sanción en la que se recogían las imputaciones más feroces fue la de Antonio Linaje. Tras acusarle de haber sido el organizador en Segovia de Izquierda Republicana (lo que era cierto), se le hacía principal responsable de *“cuantos actos delictivos contra la propiedad y escándalos públicos se produjeron en Sepúlveda”* (lo que ya no era tan cierto, como el resto de acusaciones). Algunos informes incluso lo presentaban como agente al servicio de Rusia, que *“disponía de grandes cantidades de dinero para hacer propaganda comunista en bares y tabernas”*. La propuesta finalizaba indicando que *“huyó a Madrid con su familia el 18 de julio de 1936 y ello impidió que sufriera el castigo personal que merecía”*⁹⁸⁶. Aunque no huyó y sí viajó a Madrid para asistir

⁹⁸² Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Civ. 5/37, Rubén Landa.

⁹⁸³ Arch. Prov. Caja J/6347, Exp. Resp. Civ. 141/37, Bruno Valentín García, 139/37, Julio Hernansanz Gozalo y 136/37, Rufino de Blas Gozalo.

⁹⁸⁴ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Civ. 5/37, Rubén Landa.

⁹⁸⁵ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 186/37, Juan Pascual Gómez.

⁹⁸⁶ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 7/37, Antonio Linaje.

a una boda, no es menos cierto que si hubiera estado en su pueblo, habría sido fusilado junto al alcalde y demás dirigentes locales del Frente Popular⁹⁸⁷.

Además de las personas físicas, también fueron sancionadas empresas que no radicaban en Segovia, pero que tenían intereses en esta provincia. En estos casos, lógicamente, sólo se exigía la responsabilidad por aquellos bienes específicos en Segovia, para, (en el caso de la empresa Garriga, con sede en Barcelona) *“no prejuzgar la responsabilidad del expediente que forzosamente habrá de instruirlo cuando las fuerzas del Ejército nacional recuperen la ciudad de Barcelona”*⁹⁸⁸.

El informe del Auditor de Guerra

José Bermejo, auditor de Guerra de la 7ª División, además de informar de las sentencias de los consejos de guerra, también debía emitir el correspondiente informe sobre las resoluciones de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes. En la mayoría de los casos estudiados aumentaba la sanción propuesta por Segovia. En 6 propuestas de declaración sin responsabilidad de la Comisión Provincial, Bermejo propuso sanciones entre 500 y 10.000 pts., en 24 ocasiones estuvo de acuerdo con la petición, 3 veces rebajó la propuesta, y en las 40 restantes aumentó -generalmente duplicando- la petición de Segovia.

Para sus decisiones no sólo se regía por la actuación política del inculpado, sino, en mayor medida, por las propiedades o la posición social de aquél. Este modo de actuar lo vemos claramente en el caso de la dirigente de Izquierda Republicana, Concepción Alfaya, profesora de la Escuela Normal de Magisterio, al aumentar las 5.000 pts. propuestas por Segovia hasta 55.000. Consideraba *“tanto la destacada condición de dirigente (y la) preparación cultural que la hacen más consciente de sus actos, a la par que de mayor peligrosidad, una vez que desenvolvía sus actividades profesionales en materia de enseñanza”*, como los bienes de su propiedad embargados, ya que sólo el dinero en metálico retenido en cuenta corriente excedía de esa suma (pues tenía una cuenta en el Banco de España con un saldo de 56.439 pts., pero de la que era titular la profesora indistintamente con una hermana). Finalizaba el razonamiento del auditor afirmando que *“resultaría poco ejemplar que al volver la interesada a Segovia, después de la situación rebelde a que ella cooperó en partido afecto al frente popular, se hallara con disponibilidades en numerario cuidadosamente conservadas en el nuevo Estado que por anticipado combatió”*⁹⁸⁹. Este razonamiento tenía su lógica, la del Nuevo Estado, que no iba a guardar los ahorros a una persona que le había combatido cuando éste aún no existía.

En otros casos era más evidente aún el fin recaudador de este proceso *“por la calidad de dirigente y poseer varias fincas rústicas lo que aconseja elevar la suma de responsabilidades”*⁹⁹⁰ o *“dadas las fincas que pertenecen al nombrado individuo y actuación tan perjudicial”*⁹⁹¹, casualmente referidas ambas a los dos dirigentes obreros de Fuente el Olmo de Fuentidueña, Romualdo Díez y Mariano Pérez.

El grado de culpabilidad se veía agravado por la categoría social (capacidad económica, puesto desempeñado, nivel cultural, etc.) del procesado. Como se expresaba concretamente en varios informes, *“dada la categoría social del inculpado que hace su actuación más vituperable”*⁹⁹². Esta es una característica común a la represión franquista en general, ya que se aplicaba también en los consejos de guerra y se empleará en el procedimiento de responsabilidades políticas, con un clarificador razonamiento:

⁹⁸⁷ En unos escritos a modo de memorias, se recoge este detalle del viaje a Madrid. *Mi amigo y yo (confidencias)*. Antonio Linaje Revilla. Madrid, 1936-1938. Facilitados por su hijo Antonio Linaje Conde.

⁹⁸⁸ Arch. Prov. Exp. Resp. Civ. 96/37, Garriga Escarpenter.

⁹⁸⁹ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Civ. 86/37, Concepción Alfaya.

⁹⁹⁰ Arch. Prov. Exp. Resp. Civ. 72/37, Romualdo Díez Maté.

⁹⁹¹ Arch. Prov. Exp. Caja J/6346, Resp. Civ. 71/37, Mariano Pérez Villar.

⁹⁹² Arch. Prov. Caja J/6349, Exp. Resp. Civ. 134/37, Ángel Cruz Antolín.

No se puede medir con el mismo rasero al hombre inculto, de formación deficiente, víctima muchas veces de las sugerencias del ambiente, que al intelectual, que traicionando su misión y de espaldas a los más elementales postulados de la moral y a los imperativos de nuestra Historia, ha envenenado con sus predicaciones, frecuentemente utilitarias, el alma popular⁹⁹³.

La sanción definitiva del general de la 7ª División

El general de la 7ª División, Andrés Saliquet, estudiada la propuesta fundamentada remitida por la Comisión Provincial y visto el informe del auditor, decidía la sanción definitiva. Ésta no siempre se correspondía con la presentada por la Comisión Provincial ni con la de su auditor de Guerra, como ocurrió con muchos casos que se han podido consultar. En 50 ocasiones Saliquet aumentó, incluso duplicando la propuesta de Segovia; y en otros (sólo 8 casos), por el contrario, redujo la sanción que había recomendado Segovia. Tampoco se correspondía siempre la propuesta del auditor con la resolución de la autoridad militar. Aunque era Saliquet el que figuraba oficialmente en las resoluciones, quien las resolvía era el general Marcial Barro García.

A veces, el auditor proponía y la autoridad militar aceptaba la resolución sin declaración “*por ahora*” de responsabilidad, lo que quería decir que en cualquier momento y ante cualquier atisbo de responsabilidad, se reabría el expediente.

De la VII Región Militar se remitía de nuevo al gobernador civil (presidente de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes) el expediente de responsabilidad civil con la sanción recaída para proceder a la ejecución de la misma.

7. 3. 2. La ejecución de las sanciones

El pago de las sanciones

De los 231 expedientes incoados en la provincia de Segovia, que afectaron a 333 personas, se conoce la sanción (porque en algunos de los consultados no figura la cuantía de la misma) de 244 inculpadados. Hemos comprobado el abono de 33 sanciones, que supusieron 81.807,75 pts. A esta cantidad habría que añadir el resultado de 99 sanciones consistentes en la totalidad de los bienes del inculpadado, lo que suponía el embargo y venta en pública subasta de los mismos. Las cantidades obtenidas por estas subastas no se han podido investigar porque no figuran en los expedientes, debido a que en muchos casos no se llegaron a efectuar.

Algunas sanciones fueron pagadas por familiares de los inculpadados, porque éstos no estaban en Segovia: unos se habían pasado a la otra zona y otros habían sido fusilados. Además del valor de la multa en sí, los expedientados habían de pagar los gastos de tramitación (que incluían hasta los folios de papel a un precio abusivo, pues los cobraban a veces a 1 pta. y otras a 1,50 pts. cada uno). Este detalle estaba perfectamente previsto por el Gobierno de Burgos:

Después de haberse hecho efectiva la indemnización fijada en expediente de responsabilidad civil, más el papel sellado y demás gastos, por cuenta del expediente, quedasen bienes al inculpadado, ordenará el funcionario judicial encargado de la ejecución, que el secretario practique tasación de costas incluyendo en ella las devengadas por funcionarios retribuidos con derecho a arancel⁹⁹⁴.

La aplicación de esta Orden se ha podido comprobar en muchos expedientes de responsabilidad civil y en algunos aparecen, en folios escritos a mano, las cuentas de los

⁹⁹³ AGA, Justicia, Tribunal Responsabilidades Políticas (Tribunal Nacional), Caja 1.290. Instrucciones del TNRP a los Tribunales Regionales, fechada el 2 de febrero de 1940, pág. 4. Recogida por ÁLVARO DUEÑAS, op. cit., pág. 386.

⁹⁹⁴ O. M. Justicia, de 13 de junio de 1938, explicación sobre consultas hechas sobre O. de 15 septiembre de 1937, tasación de costas. BOP, 24 de junio de 1938.

gastos de tramitación del expediente, con las cifras de gastos de la secretaría del Ayuntamiento de donde era vecino el sancionado, del Juzgado de Instrucción, del Juzgado Especial de Incautaciones, de la Comisión Central y de la 7ª División de Valladolid. El valor total de las costas variaba mucho de unos expedientes a otros, desde 60,75 hasta 514 pts.⁹⁹⁵.

La Incautación de los bienes a los sancionados

A lo largo del proceso, en el momento que el juez instructor del expediente detectara indicios de responsabilidad civil, decretaba el embargo preventivo de toda clase de bienes del inculpado. Para ello se incoaba la pieza de embargo, que se iniciaba con la petición de información a todos los bancos radicados en la capital y provincia, el Monte de Piedad y la Caja Postal de Ahorros, sobre las posibles cuentas abiertas por los expedientados. Igual información se pedía al administrador de Rentas Públicas y al Registro de la Propiedad del partido judicial correspondiente sobre la inscripción de bienes a nombre de aquéllos. Es decir, lo prioritario era conocer si los procesados disponían de bienes que pudieran ser embargados.

Para la práctica de esta diligencia y formación de la oportuna pieza de embargo, el juez instructor delegaba en los jueces de Primera Instancia e Instrucción de los distintos partidos judiciales, quienes a su vez, lo encomendaban a los jueces municipales, que nombraban, cuando era necesario, a los administradores judiciales de los bienes sujetos a embargo. Esta responsabilidad recaía en personas de reconocida solvencia económica y clara adhesión al régimen⁹⁹⁶.

Para esta función de administrador judicial, nunca eran designados familiares de los inculcados. El juez rechazó la instancia de la hermana de Horacio Sánchez, que pedía ser nombrada administradora de los bienes embargados a su hermano, porque estos bienes eran propiedad de ambos a partes iguales. Aunque no tenía queja del administrador, alegaba que *“como es lógico, nadie cuida ni se preocupa por sus intereses mejor que su dueño”*⁹⁹⁷.

Si las fincas embargadas estaban sembradas, dicho embargo alcanzaba también las sementeras, con el nombramiento del correspondiente administrador que debía rendir cuentas al juez de instrucción encargado del embargo. Sirva como ejemplo la siguiente cuenta rendida por una cosecha de Francisco Cárdbaba⁹⁹⁸:

Ingresos: 118,25 pts. por 5 fanegas y media de trigo a 21,50 pts. cada una.

Gastos: 58 pts., por la siega, jornales de 2 obreros a 12 pts. cada uno, más la trilla y otros trabajos.

Los administradores judiciales, ya fueran de fincas urbanas, rústicas, comercios, etc. debían rendir cuentas periódicamente ante el juez. Éstas eran fiscalizadas por el abogado del Estado, que no siempre las aprobaba. Hay varios casos en este sentido:

- *“80 pts. por viajes a Madrid y Segovia no justificados y 519 pts. en trabajos invertidos sin que hayan sido autorizados por el juzgado ni pedido informe al abogado del Estado”*⁹⁹⁹.

- En otro caso el administrador judicial consideraba necesarias unas obras de reparación en las casas embargadas que administraba, pues estaban deshabitadas por su

⁹⁹⁵ Arch. Prov. Exp. Resp. Civ. 64/37, Feliciano Martín Sanz y 33/37, Abundio Anaut Nieto, respectivamente.

⁹⁹⁶ Encontramos el acta de toma de posesión de un administrador judicial. La ceremonia debía ser breve. El juez preguntó: *“¿Juráis ser fiel al presidente del Estado Nacional y fiel servidor al servicio de España y cumplir fielmente el cargo que se os ha encomendado?”*, a lo que el administrador judicial respondió: *“Si juro!”*. A continuación el juez dio posesión del cargo. Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 87/37, Pedro Valdenebro y Pedro Hurtado.

⁹⁹⁷ Arch. Prov. Resp. Pol. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 173/37, Horacio Sánchez.

⁹⁹⁸ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Civ. 113/37, Francisco Cárdbaba.

⁹⁹⁹ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 174/37, Fructoso Miño.

estado ruinoso. Al abogado del Estado, tras pedirle presupuesto (que ascendió a 1.910 pts.), le pareció excesiva la cantidad y se opuso, porque en su opinión podía suponer *“una desproporción con lo que en su día puede obtener el estado con la venta de los mismos”*¹⁰⁰⁰.

Pero, no todos los bienes embargados eran fincas, había gran variedad de enseres. Desde los muebles (mesas, armarios, camas) a las vajillas (cazuelas, sartenes, cubiertos) pasando por ropa de cama, prendas de vestir, herramientas, hasta los trapos de cocina eran embargados. Entre los variopintos bienes incautados a los particulares se encontraban algunos de incalculable valor, como una biblioteca perteneciente a Mariano Domínguez, maestro de Nieva, fusilado en agosto de 1936¹⁰⁰¹.

A Moisés Alonso, joven obrero de Madrid detenido en El Espinar, le incautaron el único bien que poseía, una bicicleta nueva marca “Candelas”, valorada en 500 pts., que había dejado en casa de sus padres. Aunque este embargo no era más que simbólico, porque el vehículo estaba en Madrid, es sintomático para observar hasta dónde pretendía llegar la represión económica: quería abarcar a todos los bienes y a todos los oponentes políticos¹⁰⁰².

También se embargaban los bienes aportados como garantía de pago de créditos otorgados por inculpadados a terceros. El abogado Pérez Bonín prestó ciertas cantidades a varios vecinos de la provincia, los que ofrecieron como garantía de pago sus tierras de labor, herramientas, cosechas o incluso derechos de herencia. Todos estos bienes ofrecidos por los deudores fueron embargados preventivamente.

El procedimiento seguido para la incautación de los bienes era el dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil, según indicaba la norma g) de la Orden de 10 de enero de 1937¹⁰⁰³. El abogado del Estado había de designar a un perito para que evaluara los bienes objeto de embargo, y requería al expedientado para que, en caso de bienes inmuebles, en 6 días presentara los títulos de propiedad de las fincas objeto de traba.

Los jueces municipales iban a la casa del inculpadado para embargar los bienes allí existentes, pero muchas veces no encontraban apenas nada que incautar, ni siquiera estaba el afectado que se encontraba en prisión o había sido fusilado. Es muy representativo el caso de un sancionado que estaba preso, cuya esposa había sido acogida en casa de la madre. Aquí acudió el juez y el secretario, *“encontrando tal estado de pobreza de muebles que no ha sido posible poner en inventario uno sólo por carecer de ellos según indicación de la esposa (...) su madre la ha tenido que recoger por caridad y además tener que recurrir a los comedores de caridad para poder dar de comer a sus hijos”*¹⁰⁰⁴. La “Justicia del Caudillo” no se conformaba con apresar a los oponentes, condenándoles a largas penas o a la muerte, también castigaba duramente a sus familias, extendiendo así la represión a madres, esposas e hijos que percibían con especial crudeza la legalidad del Nuevo Estado.

El procedimiento de represión económica no sólo afectó a personas civiles, también implicó a empresas por la aplicación de la Orden de 3 de mayo de 1937 de Intervención de Créditos¹⁰⁰⁵. Los residentes en zona nacional que tuvieran créditos otorgados por

¹⁰⁰⁰ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 188/37, José Pérez Ballesteros.

¹⁰⁰¹ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399. Así figuraba en la contestación a una circular del Servicio Nacional de Archivos y Bibliotecas, sobre incautaciones de bibliotecas, fechada el 12 de julio de 1938. Además de esta biblioteca en el informe incluían la incautación de un paquete de cartas y documentos de Miguel Benavides.

¹⁰⁰² Arch. Prov. Caja J/6353, Exp. Resp. Civ. 56/37, Moisés Alonso. Así quedó reflejado en la diligencia de embargo verificada en la cárcel donde cumplía condena el joven. Se le requirió que expusiera los bienes que poseía, como sólo tenía la “bici”, el juez, con la frialdad que caracteriza a estos procedimientos judiciales, *“declaró embargada la bicicleta en virtud de lo acordado por la superioridad”*.

¹⁰⁰³ BOE, 11 de enero de 1937.

¹⁰⁰⁴ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 87/37, Pedro Valdenebro.

¹⁰⁰⁵ BOP, 10 de mayo de 1937.

individuos radicados en zona republicana estaban obligados a presentar antes del 1 junio del mismo año, ante la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, una declaración jurada de estas deudas y las que fueran satisfechas después del 18 de julio de 1936. Además de esta declaración, debían entregar el importe de dichos créditos ante la misma Comisión. La cuantía total de estos créditos fue 7.170,7 pts. Se vieron afectadas 9 empresas, de ellas 7 editoriales de prensa de Madrid (*El Liberal*, *El Socialista*, *El Sol* y *La Voz*, *La Libertad*, *Claridad* y *Política*), la sociedad Garriga Escarpenter que suministraba material químico, radicada en Barcelona y Vicente Sansano, de Elche.

Los embargos de bienes a veces afectaban a terceras personas, en unos casos porque no sólo eran propiedad de los inculpados, podían serlo también de sus familiares (hermanos o hijos) o porque los bienes en cuestión ya habían sido vendidos. Cuando esto ocurría, los terceros afectados podían interponer las reclamaciones pertinentes, denominadas *tercerías*, acogiéndose al art. 11 del D. de 10 de enero, ante la Comisión Central. Ésta haría la propuesta de resolución pertinente, que sería dictada por la Junta Técnica del Estado, sin posibilidad de recurso posterior.

Había otros modos en que las incautaciones afectaban a terceros, como la reclamación del arquitecto de la obra en una casa propiedad de Aurelio García. Los trabajos, que habían sido iniciados en agosto de 1936, fueron paralizados por el embargo de bienes, que además inmovilizó los materiales del arquitecto. Hecha la oportuna reclamación en 1937, que no fue contestada, el afectado tuvo que volver a reclamar en 1940 para que le devolvieran los materiales. Más grave era la situación de los obreros que trabajaron para algunos expedientados, porque una vez embargados los bienes de éstos, los inculpados o sus esposas no tenían dinero para pagar los jornales. Así ocurrió a varios segadores de la campaña del 37 en distintos pueblos de la provincia (Otero de Herreros¹⁰⁰⁶).

La administración de los bienes incautados

La Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Segovia tuvo muchas dificultades para almacenar los abundantes bienes incautados. Para solucionarlo, solicitó a distintas instituciones de la provincia su disponibilidad para guardar en sus edificios parte de dichos bienes. Con este fin llegaron cartas de los diversos conventos de la capital sobre la disposición de locales para guardar bienes embargados¹⁰⁰⁷.

La administración de los bienes incautados originaba algunos problemas. Por ejemplo, la Sociedad General de Autores se quejó al presidente de la Comisión Provincial, sobre el *“atropello cometido por el administrador del Teatro Juan Bravo al corresponsal de la Sociedad General de Autores al querer cobrar los derechos correspondientes (...) le trate con el debido respeto (...) en evitación...”*¹⁰⁰⁸. El teatro fue embargado, pero mantenía sus funciones, y, en consecuencia, continuaban sus ingresos, por lo que tenían que satisfacer los derechos de autor.

El ganado generaba también complicaciones, porque debía ser ubicado en establos, alimentado y atendido por el veterinario en caso de contraer alguna enfermedad, lo que originaba los consiguientes gastos. El alcalde de Tres Casas pidió al gobernador instrucciones, con un expreso *“qué se puede hacer”* con los animales, por los gastos que ocasionaba el depósito de los mismos. Además, se habían presentado acreedores del propietario de los animales, que pedían que se vendieran los caballos para cobrar las deudas, ante lo que el alcalde no sabía cómo actuar. El abogado del Estado habitualmente

¹⁰⁰⁶ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 76/37, Jesús Otero Martín. Instancia de Meinardo Sanz Sebastián, albañil, con 6 hijos, *“convino con la esposa de Jesús la siega, a 12 pts. la obrada, 6 de centeno y 3 de trigo”*. Decretado el embargo, no había cobrado las 108 pts. por lo que solicitaba a la Comisión Provincial le abonaran dicha cantidad. Fechada el 27 de enero de 1938.

¹⁰⁰⁷ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

¹⁰⁰⁸ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

recomendaba la venta en pública subasta de los bienes incautados cuando originaban problemas de almacenaje.

Algunos bienes propiedad de los inculpados no llegaron a ser embargados porque estaban inscritos a nombre de familiares. Por ejemplo una casa de Concepción Alfaya no pudo ser embargada por figurar en el Registro de la Propiedad a nombre de su hermana.

Los embargos preventivos eran levantados cuando al finalizar el procedimiento, una vez recaída la sanción, ésta era pagada por el inculpadado o alguno de sus familiares. En otros casos, algún “avisado” aprovechaba el mal momento del procesado para comprarle los bienes (por ejemplo, fincas) a bajo precio, porque, al abonar el importe de la sanción, las tierras quedaban libres del embargo.

Los embargos eran preventivos hasta que la autoridad militar dictaba la sanción o la declaración de no responsabilidad, por tanto, no debían subastarse los bienes incautados. Si la sanción suponía una cantidad económica fija había un plazo para que el inculpadado abonara su importe. En caso de que éste transcurriera sin haber pagado, se procedía a la venta en pública subasta. Hubo algún juez municipal en funciones de Primera Instancia que no tuvo la paciencia que le ordenaba la ley y, días antes de notificar la sanción al inculpadado, anunció la fecha de la subasta en procedimiento de apremio. Después tuvo que rectificar porque el inculpadado pagó la sanción dentro del plazo establecido.

El anuncio de estas subastas se hacía a través del *BOP* y de los tablones de los ayuntamientos donde radicaban dichos bienes. A la vista de la documentación estudiada, en pocas ocasiones se adjudicaban los bienes en la primera subasta. Al contrario, en muchos casos (al menos en 11 ocasiones) se agotaron los trámites reglamentarios hasta llegar a la 3ª subasta de los bienes, porque habían quedado desiertos los dos primeros intentos de venta. Esto sucedía a pesar de que ya en la segunda subasta se efectuaba una rebaja del 25% del valor tasado de los bienes, que era la cantidad mínima exigida para litigar.

Se ha podido consultar escasa documentación de las subastas, 11 en concreto, (aunque se tiene constancia de otras tantas) con un valor total de 61.927,41 pts. Correspondientes a dos autobuses, varias casas, fincas, etc.

7. 3. 3. Los recursos de los afectados

Los Decretos 108 y de 10 de enero de 1937, así como las disposiciones que los desarrollaron, no reconocían el derecho a efectuar recursos a los sancionados por el proceso incautador. Tan sólo podían recurrir los terceros afectados por los embargos, así como los perjudicados por *acciones u omisiones realizadas en oposición al movimiento*. A pesar de la negación de este derecho hubo muchos familiares de sancionados que cursaron instancias solicitando la liberación de los embargos, entre otros motivos, para alimentar a sus familias. Estas peticiones no las podía resolver la Comisión Provincial, por lo que se enviaban desde Segovia a la Comisión Central.

Se pueden aportar varios ejemplos¹⁰⁰⁹:

- Instancia de Jesusa Garcimartín García, que solicitaba la *“liberación de grano intervenido para atender la subsistencia de los hijos”*.

- Solicitud de Ana Casas Herrero, quien pedía que le fueran entregadas las pertenencias embargadas a su marido Julio Fuster García, maestro ejecutado el 15 de agosto de 1936.

- Escrito de Miguel Martín María, de El Espinar, quien, al ser absuelto en el consejo de guerra, reclamaba que le levantaran el embargo sobre sus bienes.

¹⁰⁰⁹ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

Estas peticiones suponían un largo camino burocrático que en muchos casos finalizó en los años cincuenta.

A partir de la Ley de Responsabilidades Políticas se reconoció el derecho al recurso de revisión ante el Tribunal Nacional, también para los sancionados en aplicación del Decreto de 10 de enero. Sólo se han encontrado seis casos de rebaja de la sanción por la Sala de Revisiones de Responsabilidades Políticas. Otros, los más, recibían como contestación que no había lugar a modificar la sanción impuesta. Una de estas últimas es suficientemente explícita sobre un inculpado que poseía bienes por unas 600 pts. El tribunal consideraba que

Dada la escasa cuantía de los bienes y la gravedad del hecho¹⁰¹⁰ no puede estimarse excesiva la sanción económica (pérdida de todos los bienes), puesto que ella se refiere a los bienes que tenía cuando la condena se produjo no a los que pueda adquirir en lo sucesivo, pero, buscando una fórmula de equidad, no hay inconveniente en facultar al recurrente para que pueda recuperar la disposición de sus bienes pagando al Estado por vía de indemnización el importe de su valor.

Consecuentemente el fallo era: *“no ha lugar modificar la sanción impuesta (...) el que podrá recuperar sus bienes satisfaciendo al Estado el importe de su valor”*¹⁰¹¹. Es decir, debía comprar al Estado sus propios bienes para poder recuperarlos.

7. 4. Valoración del proceso de incautación de bienes

Como balance final se puede añadir que hemos podido comprobar la apertura de 231 expedientes¹⁰¹², que implicaron a 333 personas. De ellos se conoce el resultado que afectó a 244 desafectos, de los que 234 fueron sancionados y los 10 restantes quedaron resueltos sin declaración de responsabilidad.

La suma total de las multas comprobadas es 790.390 pts., que en tiempos de crisis económica como eran los años treinta suponía una cantidad muy importante (por ejemplo, el kilo de pan costaba 60 cts. y el sueldo medio de un peón obrero alcanzaba las 7 pts. diarias). Al importe total de las multas habría que añadir, por un lado, lo obtenido de la venta de los bienes de los 99 sancionados con la pérdida de todos sus bienes, y, por otro, las 89 sanciones restantes cuyo montante no se ha podido comprobar. Pero el valor total de las penas no se alcanzó porque no todas las multas fueron abonadas (en concreto, se ha comprobado el pago de sólo 33 de ellas, por un valor de 81.807,75 pts).

La ejecución de los expedientes se hacía muy lenta, como reconocía el informe de la Comisión Provincial al secretario de Guerra de Burgos, por dos razones fundamentales: por estar sujeta a los trámites de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por la falta de personal, puesto que *“el juzgado se ve obligado a actuar con el personal que ordinariamente dispone, a todas luces insuficiente (...) sería necesario incrementar...”*¹⁰¹³. Además, surgían numerosos problemas a la hora de la ejecución de los embargos, por la naturaleza tan diversa de los bienes retenidos y porque su administración radicaba casi siempre en juzgados municipales que designaban a un administrador judicial, cargo que recaía en una persona casi siempre poco acostumbrada a realizar funciones de esa naturaleza.

El valor total de los bienes embargados en Segovia no se puede establecer, ni siquiera la Comisión Provincial llegó a efectuar esta valoración, porque la mayor parte de los bienes eran inmuebles -rústicos y urbanos- *“cuya cuantía no es posible enumerar por*

¹⁰¹⁰ Había sido condenado a 30 años, por oponerse a la sublevación en Nava de la Asunción.

¹⁰¹¹ Arch. Prov. Caja J/6347, Exp. Resp. Civ. 97/37, Julio Quinzano.

¹⁰¹² 191 exptes. de 1937 y 40 de 1938. Relación exptes. tramitados por aplicación del D. L. 10 de enero de 1937, que se remitieron por el Jgdo. de 1ª Ins. de Segovia al TRRP, con fecha 6 de abril de 1940.

¹⁰¹³ AGA, Justicia, 39.002, Caja 385. Carta CPIB fechada 12 de junio de 1939, contestando a la circular de 26 de abril de 1939 del Jefe Superior Administrativo de Responsabilidades Políticas, con sede en S. Sebastián.

no valorarse por los juzgados al practicarse el embargo, requisito que se cumple en el periodo de ejecución mediante el evalúo que realizan los peritos designados a este efecto¹⁰¹⁴. Pero contamos con un resumen económico de 1938 que nos da una idea de la cuantía que se había obtenido hasta esa fecha¹⁰¹⁵:

Cuadro nº 27: El importe de las incautaciones de bienes en la provincia de Segovia

Entidad beneficiaria del depósito	Cuantía económica
Comisión Provincial de Incautación de Bienes	809,90 pts.
Comisión Central de Incautación de Bienes	116.873,75 pts.
Juzgado de Primera Instancia	44.958,87 pts.
Juzgado Especial de Incautación de Bienes	571,63 pts.
Total	163.213,67 pts.

Según su informe, la Comisión no tuvo más intervención en los procesos de embargo que en los casos en que por las dificultades de conservación (embargo de semovientes *"en los momentos en que los pastos son escasos y resultaba gravoso para los bienes administrados"*¹⁰¹⁶) se solicitaba su enajenación. Lo que se autorizaba siempre que se justificara debidamente esa necesidad, con las garantías prescritas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La única administración que merece destacar por su importancia y que también se llevó en administración judicial fue la del Teatro y bar "Juan Bravo" de la capital.

Con respecto a los objetivos de la incautación de bienes, parece evidente que se pretendía castigar a la oposición por haber resistido a la sublevación militar. Además, los castigos siempre tenían una función ejemplarizante, de aviso para el resto de la sociedad que conocía lo que le podría suceder en caso de pretender movilizarse contra el nuevo poder militar.

Otro objetivo era la paralización del oponente, pues despojándole de todos sus bienes se pretendía eliminar cualquier intención opositora. Por el proceso de incautación, fueron embargadas las tabernas, panaderías, barberías, estancos, etc. Los labradores se vieron desposeídos de sus tierras. De este modo los vencidos pasaron a depender de los vencedores, de las nuevas autoridades (por medio de los imprescindibles informes) que ordenaban quién trabajaba, dónde y en qué condiciones.

Algunas rivalidades motivadas por la competencia de negocios comerciales originaron denuncias. Para eliminar a un competidor hubo quien aprovechó el mecanismo de responsabilidad civil¹⁰¹⁷. Otras rivalidades comerciales se dieron en Cuéllar, Matabuena, Segovia....

¹⁰¹⁴ Ver nota anterior.

¹⁰¹⁵ AGA. IDD 25.01. Leg. 2792. Informe del gobernador civil de Segovia al Gobierno de Burgos sobre la situación general de la provincia, 25 de agosto de 1938.

¹⁰¹⁶ AGA, Justicia, Caja 385. Carta CPIB fechada 12 de junio de 1939.

¹⁰¹⁷ Como ejemplo más significativo de este tipo de actuaciones sirva la rivalidad entre las empresas de transporte de viajeros Galo Álvarez y Rufino Bermejo. Esta competencia se había iniciado en 1922, porque sus líneas coincidían en la villa de Fuentepelayo. Rufino cedió en un principio para evitar problemas, pero Galo, que se decía en posesión exclusiva de la línea, no se conformaba, exigiendo a Rufino un canon de 5.000 pts. al año, por circular por la línea; lo que éste pagó desde 1926. Pero en 1930 Rufino se enteró de que Galo no tenía la concesión exclusiva, por lo que se negó a seguir pagando y le reclamó la devolución de lo pagado. En 1935 llegaron al pleito que fue ganado por Rufino, al que tuvo que devolver Galo lo pagado, 19.136 pts., más los intereses. Esta sentencia fue apelada por Galo, entretanto llegó la guerra, y el procedimiento de incautación de bienes, que aprovechó Álvarez para hacerse con los autobuses y la línea de su oponente. En Arch. Prov. Caja J/6350, Exp. Resp. Civ. 37/37, Rufino Bermejo.

El destino que se daba a los bienes incautados tenía dos fines:

a) Recaudar fondos para la guerra

Los sublevados no contaban con la fuerte oposición planteada a su golpe militar, por lo que no tenían prevista una guerra civil. Además, el mapa que deparó la insurrección era una España agraria dominada por los militares mientras que la República contaba con toda la España industrial y minera. La zona sublevada era más pobre, tenía menos posibilidades económicas. Por ello las autoridades militares optaron por la incautación de bienes como un método óptimo de recaudar fondos para soportar el esfuerzo de la guerra. Las sanciones suponían multas económicas o la incautación de todos los bienes, que pasaban a ser subastados, con lo que su fruto se ingresaba en la Caja de Depósitos del Estado.

A los sublevados se les advirtió desde el principio este interés desmedido por incautar bienes de todo tipo, muebles, inmuebles, dinero en metálico, joyas: Primero requisaban, después comprobaban si en verdad eran opositores los propietarios de los bienes incautados. Pero se llevaron una gran desilusión al comprobar que la mayoría de los opositores no poseían bienes. De los 188 expedientes de responsabilidad civil incoados hasta octubre de 1937, tan sólo había 68 expedientes superiores a 15.000 pts. Pues, como recogía un informe: *“únicamente en contados casos aparecen bienes pertenecientes a condenados en Consejos de Guerra, la mayoría de los cuales son gente de modesta condición y carecen de bienes de todas clases”*¹⁰¹⁸.

Además, se aprovechaban muchos de los bienes incautados para las necesidades de la guerra: prendas de vestir, colchones y ropa de cama para el Ejército; además de maquinaria y vehículos.

b) Apropiación de bienes por los nuevos gobernantes: Falange, Estado y particulares

Todos los bienes incautados a los oponentes fueron “reutilizados” por los nuevos gobernantes. De los bienes incautados se hizo una utilización partidista por parte del personal incautador, el Nuevo Estado se hizo con un patrimonio que no le pertenecía y que sirvió de base para apuntalar el régimen recién instaurado. De igual manera, solares, tierras de labor, viviendas, muebles, herramientas o máquinas, sirvieron para que numerosos particulares oportunistas hicieran fortunas aprovechándose de la situación.

Por su parte, Falange, que no disponía de locales propios antes de la guerra, se apropió de un patrimonio a costa de viviendas y locales de personas desafectas y partidos y sindicatos republicanos y de izquierda. Por ejemplo, el local de FET de Santiuste de San Juan Bautista, antes pertenecía a la Sociedad “La Firmeza de la Tierra”¹⁰¹⁹.

El caso más ilustrativo de aprovechamiento de bienes incautados lo protagonizó Galo Álvarez con los autobuses de Rufino Bermejo. Con el procedimiento de responsabilidad civil, Rufino Bermejo fue sancionado con la pérdida de todos los bienes. Sus automóviles fueron subastados por un hijo de su rival Galo Álvarez, Emilio, que era juez municipal en Cuéllar, en funciones de juez de Instrucción (por cuyas actuaciones de 1937 fue procesado en 1944 a instancias del fiscal del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas). En la subasta, celebrada el 26 de septiembre de 1937, fueron adjudicados los coches de Rufino Bermejo, por 5.093,32 pts. (un 75% del valor tasado de los bienes) a Mabelino Fraile de Pedro, chófer que trabajaba para Galo Álvarez. Al día siguiente, ante el mismo juez, Emilio Álvarez, Mabelino Fraile cedió el remate de los bienes a su patrón, Galo Álvarez, padre del juez, por la misma cantidad de adjudicación.

¹⁰¹⁸ AGA, Justicia, Caja 385. Carta del gobernador civil de Segovia al general Secretario de Guerra, en Burgos; fechada el 25 de octubre de 1937.

¹⁰¹⁹ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

En la posesión de los coches, pretextando su condición de rematante, el 5 de octubre de 1937, ante su hijo Emilio, Galo Álvarez solicitó al Juzgado que se dirigiera a la Administración de Correos participándole que le había sido entregado el coche de viajeros que efectuaba el servicio de Correos de Sauquillo (que antes realizaba Rufino Bermejo con su coche y su concesión), lo que al día siguiente trasladó el juez. Con ello, Galo Álvarez se hizo con los coches de Rufino y los servicios que éste prestaba, desde finales de 1937¹⁰²⁰.

Contamos con otros ejemplos de instituciones y particulares que se aprovecharon también de la situación:

- Muebles incautados a la profesora Alfaya, solicitados por el SEU en depósito¹⁰²¹.
- De la Agrupación de Divisiones Somosierra, un motor de carpintería incautada a Juan Martín¹⁰²².
- El material de zapatería, muebles y otros enseres de Antonio Gil, de Matabuena, fue repartido entre varias familias de su pueblo¹⁰²³.
- En 1937, varios muebles embargados a Donato Postigo fueron concedidos, en depósito judicial a las oficinas de Inspección de Frentes de FET. Esta cesión originó una serie de problemas pues quedaron depositados en esas oficinas (por ser *“de absoluta necesidad para el buen funcionamiento de la oficina del combatiente (...) en beneficio de la causa nacional que todos defendemos”*¹⁰²⁴) incluso después de la subasta de los bienes. Lógicamente, el adjudicatario que pagó por ellos, reclamó para que se los entregaran. El juez pidió a FET que devolviera los muebles, Falange indicó al jefe de su oficina que, si los consideraba necesarios, se los compraran al nuevo propietario. El tiempo pasó y cuando la Audiencia requirió, ya en 1944, a FET para que explicara donde estaban los muebles, respondieron que no conocían la existencia de la oficina de Inspección de Frentes, ni de los muebles embargados.
- En la oficina central de Falange de Segovia quedaron depositados una máquina de escribir y un aparato de radio a disposición del Juez Especial de Incautaciones¹⁰²⁵.

¹⁰²⁰ La resolución definitiva de este caso nos sirve para ilustrar los problemas que tuvo para su aplicación la Ley de Responsabilidades Políticas. Rufino Bermejo recurrió en 1941 la sanción recaída ante el Tribunal Nacional. La Sala de Revisiones dictó sentencia en 1944, dejando sin efecto la resolución sancionadora. Pero esta sentencia no fue notificada al interesado hasta 1952 (Veremos en el capítulo siguiente cómo pasa el tiempo sin que se dicten resoluciones y cuando éstas se toman, tardan años en llevarse a efecto). La Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas resolvió, el 3 de agosto de 1955, se repusiera la línea a Rufino Bermejo, se le requiriera a Galo Álvarez para que presentara la liquidación de los productos de la línea desde el 5 de octubre de 1937 hasta el día que se efectuara la reposición, devolviera Galo Álvarez los dos coches de viajeros y un coche taxímetro y las cartas de pago de 5.093,32 y 5.172 pts. ingresadas en septiembre y diciembre de 1937.

Pero los hijos de Galo Álvarez, pues éste murió pocos años antes, recurrieron la resolución anterior llegando al auto definitivo de la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas, de 10 de mayo de 1957 (20 años después de recaída la sanción y embargados los bienes), que consagró la injusticia: afirmaba que los coches habían sido adjudicados en subasta legal, la línea no había sido concedida en subasta por lo que *“no ha lugar devolución de coches ni rinda cuenta de uso de la línea, ni reposición de la línea”*. Arch. Prov. Caja J/6350, Exp. Resp. Civ. 37/37, Rufino Bermejo.

¹⁰²¹ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

¹⁰²² AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

¹⁰²³ Testimonio de su sobrino Antonio Gil.

¹⁰²⁴ Arch. Prov. Caja J/6349, Exp. Resp. Civ. 100/37, Donato Postigo.

¹⁰²⁵ Arch. Prov. Caja J/6346, Exp. Resp. Civ. 38/37, Juan Gutiérrez Martínez.

7. 5. Un modelo de Incautación encubierta: Las Suscripciones Patrióticas

Las suscripciones “populares” no surgieron en la guerra civil, pues ya se venían utilizando desde tiempo atrás para distintos fines políticos o sociales. Por ejemplo, en Segovia se habían organizado suscripciones con fines tan dispares, y de signo contrario, como la erección de la estatua del republicano doctor Tapia, para “*premiar tropas y demás fuerzas que participaron en la pacificación de Asturias*”, en favor de los parados por el Decreto de 29 de octubre de 1934 (que despidió a los trabajadores que habían participado en la huelga general), de apoyo a los presos por la revolución de Asturias, etc.

Recién iniciada la contienda, el 27 de julio de 1936, se constituyó en Segovia la Junta de Asistencia a las Fuerzas Combatientes, presidida por Juan de Contreras, marqués de Lozoya (presidente provincial de AP y diputado por la CEDA) e integrada por representantes de las familias propietarias más importantes de Segovia: José Carretero Vera, Juan Gil Escorial, Andrés Reguera Antón y José de la Piñera. En el mismo día de su constitución recaudaron 60.000 pts. entre los miembros de la Junta¹⁰²⁶.

La primera suscripción que abarcó todo el territorio sublevado fue la del Tesoro Nacional, instaurada en agosto de 1936. En cada provincia se creó una Junta Provincial de Tesoro Público. En Segovia estaba presidida por Félix Bertrán de Lis, gobernador militar de la provincia, era vicepresidente el marqués de Lozoya y tesorero el comandante de Artillería Mariano Montalbán, para hacer patente el dominio de los militares en la Junta¹⁰²⁷. Las contribuciones -gracias a la propaganda y a las “presiones”- fueron cuantiosas, pues a finales de agosto ya se habían recogido más de 2 millones de pesetas en metálico, unos 5.100 quintales métricos de trigo y 128 kilos de oro¹⁰²⁸. A partir de entonces se publicaron en *El Adelantado*, casi a diario, las listas de contribuyentes con sus donativos y llamando la atención a los no contribuyentes (el 14 de octubre, se publicó una Nota de la Junta del Tesoro sobre personas adineradas que no aportaban, sin especificar la identidad).

A las suscripciones instauradas por el Estado, había que añadir las iniciativas de las instituciones segovianas para la compra del “avión Segovia” y otras propuestas por los distintos partidos y milicias nacionales. Las más destacadas eran las de Falange: Auxilio de Invierno y Ficha Azul; si bien Renovación Española, Acción Popular y la Comunión Tradicionalista también organizaron recogidas de fondos para sufragar la guerra, pero con mucho menor apoyo institucional y repercusión social.

Las cuestaciones florecieron tanto que se hacía una campaña para cada objetivo nuevo que iba surgiendo. Los fines eran tan variados como el “Monumento a Calvo Sotelo”, la “Liberación de Málaga”, “Trigo para Madrid”, “Camas para el Hospital Militar”, etc.¹⁰²⁹. Entre las múltiples iniciativas apareció el Ropero para las Fuerzas Combatientes, presidido por la señorita Amalia Vera, de “*noble familia segoviana*”. Con sede en el Hotel Victoria y en el que participaban hasta 90 mujeres “*de todas clases sociales*”¹⁰³⁰.

Las suscripciones eran teóricamente voluntarias y los ciudadanos podían aportar cuanto quisieran (testimonios cuentan que daban más las familias que tenían a alguien en

¹⁰²⁶ BAGUES, A. *Charlas dadas por Ángel Bagues los días 25 al 29 de agosto, ante el micrófono de Radio Segovia, dedicadas a la muy noble y muy leal ciudad de Segovia y su provincia con motivo del Glorioso Alzamiento Salvador de España*. Segovia, 1937, pág. 20.

¹⁰²⁷ El resto de integrantes de la Junta eran: el secretario, Juan Well, y los vocales: Andrés Reguera, alcalde de Segovia, el industrial Claudio Moreno, Julián Rueda, Ignacio García, el militar expresidente de la Dip. Prov. Gabriel de Cáceres y Ricardo Riesco.

¹⁰²⁸ TOMÁS ARRIBAS, J. coord. *Historia de Segovia*; pág. 252. No pone la fuente de donde obtiene los datos.

¹⁰²⁹ Manuel Conde, expedientado de responsabilidades políticas presentó un certificado de aportaciones económicas a 17 suscripciones distintas durante la guerra. Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. de Manuel Conde.

¹⁰³⁰ BAGUES, A., op. cit. pág. 25.

el frente¹⁰³¹). Pero muy pronto la voluntariedad se tornó obligatoriedad, pues cuando se hacían las suscripciones en los pueblos, habitualmente el alcalde iba con el alguacil presionando y recogiendo las aportaciones de los vecinos, cuando no eran falangistas uniformados y armados los que efectuaban las cuestaciones. Esta situación se dio en los primeros momentos hasta que el gobernador civil, ya en el mes de septiembre de 1936, hubo de recomendar *“que no se obligue a los vecinos por coacción, amenazas o empleando la fuerza a entregar dinero, alhajas o víveres con destino al Tesoro, Ejército o Milicias Armadas”*¹⁰³².

La estrategia empleada por los militares para la recogida de fondos a través de las cuestaciones quedaba plasmada en los recibos de la Suscripción Nacional del Tesoro Público. Estaban firmados por el presidente de la Junta Provincial y en ellos se solicitaba del destinatario su donativo. El encabezamiento era ya suficientemente significativo:

Ante el esfuerzo supremo que está haciendo el Ejército, juntamente con las milicias civiles, para librar a España del comunismo, no puede haber un español, y más si disfruta de una posición privilegiada, que no se imponga los sacrificios máximos. Hay una porción de hombres, jóvenes en su inmensa mayoría, que ofrecen cada día su sangre y su vida por la causa. Los que no pueden seguirles en este camino de honor no accesible a todos, deben corresponder dignamente entregando una parte, que siempre será muy pequeña, de su fortuna personal para las necesidades de la guerra¹⁰³³.

A continuación, dando por sentado el *“patriótico entusiasmo”* del receptor y *“teniendo en cuenta su situación económica”*, se establecía la cantidad que tenía que aportar. No sólo se le obligaba a contribuir, sino que se le dictaba la cuantía concreta de un modo muy educado: *“esta Junta espera de Vd. una aportación de pts. 1.500 (mil quinientas pesetas) para el Tesoro Público, independientemente de las que ya hubiese realizado”*¹⁰³⁴. Es decir, aunque ya hubiera abonado otras cantidades en distintas suscripciones, debía contribuir en ésta y con la cantidad estipulada. Para cumplir estas obligaciones, la Junta daba facilidades de pago: *“por si la carencia de numerario impidiese a Vd. cumplir esta patriótica finalidad, nos permitimos anunciarle que esta Junta le ayudará eficazmente para lograr los fondos de cualquiera de los bancos de la plaza”*. Era posible, por tanto, que el infortunado destinatario tuviera que pedir algún préstamo para efectuar la aportación, a lo que los bancos no oponían ninguna dificultad. Las entregas se efectuaban en la sede de la Junta Provincial, domiciliada en la Academia de Artillería e Ingenieros.

Este tipo de suscripción “voluntaria” era justificada por la Junta Provincial alegando que todos los estados de Europa, en casos semejantes, imponían a sus súbditos contribuciones de guerra. Pero la Junta de Defensa Nacional *“no ha creído necesario acudir a este medio y, por ello debemos llevar hasta el límite nuestra aportación voluntaria”*¹⁰³⁵. Es decir, la Junta pretendía únicamente darle a la suscripción una iniciativa “voluntaria”.

La siguiente suscripción nacional fue el Día del Plato Único, creada por la Orden del Gobernador General de 30 octubre de 1936. Se justificaba en la necesidad de las múltiples atenciones benéficas a que un Estado “moderno y católico” debía hacer frente para que *“no quede ningún ciudadano suyo sin alimento diario y recoja en su seno a los huérfanos para hacer de ellos hombres amantes de Dios y de su patria”*. Esta iniciativa tenía doble finalidad, por un lado económica, al proporcionar medios al Estado con que atender a los

¹⁰³¹ Testimonio de Domingo Martín.

¹⁰³² BOP, 14 de septiembre de 1936. Cir. Gob. Civ.

¹⁰³³ En el Exp. de Gil Escribano Núñez aparece el recibo del Tesoro Público que referimos. Está fechado el 29 de septiembre de 1936. Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Pol. 24/40.

¹⁰³⁴ Esta cantidad era la estipulada para el destinatario de la misiva Gil Escribano, lógicamente la cifra variaba en función del receptor del envío. Subrayado en el original.

¹⁰³⁵ Recibo del Tesoro Público.

necesitados y por otro, ideológica, al educar a la nueva sociedad española a que “se sacrifique, prescindiendo de sus comodidades habituales”¹⁰³⁶.

Para su puesta en práctica, las autoridades locales deberían dar suficiente propaganda por radio, anuncios en prensa, carteles permanentes, que se harían “fijar y conservar” en escaparates de los establecimientos céntricos, sitios de reunión, casinos, bares, cafés y hoteles, y también organizando banquetes o fiestas del Plato Único. La cuestación se celebraría los días 1 y 15 de cada mes, a partir del 15 de noviembre. La recaudación tenía dos vías, los hogares privados y los establecimientos públicos.

En primer lugar, los cabezas de familia, a quienes no sólo se estimulaba por los medios de propaganda, sino por “advertencias de las autoridades de que se publicarán listas negras de los malos patriotas que debiendo hacerlo (...) no contribuyan a esta Empresa Nacional, llegando en casos notorios, a la imposición de multas, que compensen con exceso las cantidades con que hayan dejado de contribuir”. Para la recogida de los donativos, los alcaldes contarían con la colaboración de “señoritas postulantes” que los días 2 y 16 de cada mes y siguientes pasarían por las casas para recoger las aportaciones de cada familia.

En segundo lugar, los hosteleros, que cederían un porcentaje de los hospedajes y comidas, nunca inferior al 25% del importe total. Para ello, contarían con una declaración jurada de los huéspedes de ese día y su pensión, y de las comidas servidas aparte. Los ingresos se efectuarían mediante el oportuno recibo donde constara el nombre del donante y la cantidad ingresada.

Además de estas dos vías, los gobernadores estimularían las aportaciones corporativas de Bancos, Cámaras de la Propiedad y otras instituciones.

Con las normas para establecer el Día del Plato Único afloraron las contradicciones entre el querer aparentar tolerancia y el autoritarismo propio de los militares de Burgos. Se veían muy claras estas contradicciones en la circular del gobernador civil de Segovia, que desarrollaba las instrucciones anteriores del Gobernador General. El comandante España hablaba en principio de “recaudación voluntaria” en la que, en teoría, participaba quien quería, pero enseguida amenazaba a las personas que “pudiendo socorrer a los necesitados en esta forma, se nieguen a contribuir o lo hagan en proporción notoriamente inferior a sus posibilidades serán propuestas a este Gobierno Civil para ser anotadas en la “Lista Negra” previa comprobación de su desafecto y multadas para escarmiento”. No sólo se castigaba la no aportación, también se sancionaba la contribución no acorde con las posibilidades, según el criterio de las autoridades. Pero avanzada la circular, el gobernador, volvía a sugerir que “procurarán los señores alcaldes evitar toda coacción para que las aportaciones sean espontáneamente ofrecidas”. Añadiendo, para finalizar, que tenía el convencimiento, “basado en la experiencia, de que los segovianos no necesitan estímulos externos, pues su buen corazón les impulsa a colaborar en toda obra patriótica y nacional”¹⁰³⁷.

Entre este querer y no poder, se publicaron en *El Adelantado* las listas con los segovianos multados por el gobernador civil a causa de “no contribuir en la medida de sus posibilidades al Día del Plato Único”. Los sancionados eran segovianos de distintas localidades de la provincia. Aparecieron, al menos, listas los días 23 de diciembre de 1936, 4 y 7 de enero de 1937¹⁰³⁸.

Las presiones para que los españoles aportaran “voluntariamente” se continuaron ejerciendo, por lo que se llegó al punto de publicar un *BOP* extraordinario el 24 de febrero de 1937 en el que se recogían las Órdenes del Jefe del Estado muy estrictas y concretas

¹⁰³⁶ O. del Gobernador General de 30 de octubre de 1936. *BOP*, 9 de noviembre de 1936.

¹⁰³⁷ *BOP*, 9 de noviembre de 1936. Cir. Gob. Civ.

¹⁰³⁸ *El Adelantado*, días 23 de diciembre de 1936 y 4 y 7 de enero de 1937.

en este sentido: *“la prohibición absoluta de imponer suscripciones o gravámenes forzosos, para los que el estado no haya dado su consentimiento”*¹⁰³⁹.

Pero las multas continuaron “animando” a los segovianos a contribuir en las distintas suscripciones, pues en una circular del gobernador civil sobre la Navidad de 1937, concedió el *“indulto a los multados por el Plato Único, Día Sin Postre y Auxilio Social”*¹⁰⁴⁰, lo que evidentemente quiere decir que todavía había sanciones por no aportar según el criterio de las autoridades.

Era norma habitual que los afectados por estas sanciones se defendieran alegando que, cuando menos, aportaban en la misma medida que los demás. Pedro Acebes se lamentaba, en el pliego de descargos de su expediente de responsabilidad civil, de que *“por suponer que no contribuía con arreglo a mis posibilidades al plato único se me impuso una multa de 25 pts. que pagué religiosamente, aun cuando yo venía haciéndolo en la misma proporción en que lo realizaban otros convecinos míos de mi posición”*¹⁰⁴¹.

Este proceso sancionador duró al menos hasta 1940 para Gregorio Santa María, vecino de Urueñas, que fue multado con 44,10 pts. *“por no aportación al Plato Único, 55 cts. para gastos de giro de este juzgado a Segovia y 25 pts. de costas de este juzgado en metálico”*¹⁰⁴².

Del ansia por recoger fondos no se salvaban ni los más pequeños. Hasta los escolares eran llamados a contribuir. Es muy ilustrativa la Circular de la Inspección de Primera Enseñanza de Segovia

El nuevo Estado español exige de nosotros despertemos en el alma de los niños una fé ciega en la nueva España (...) Conviene que los niños de nuestras Escuelas sepan que nuestra patria se está reconquistando a fuerza de sangre de héroes... Y es entonces cuando los escolares, hondamente emocionados, ambicionarán un puesto en la lucha: momento oportuno que el maestro aprovechará para solicitar su colaboración aportando sus cts. a la suscripción nacional o para crear roperos que confeccionen ropas para nuestros soldados y milicias¹⁰⁴³.

Otro método de recaudación voluntaria de fondos para el Estado eran las sanciones económicas impuestas a los presos. Los detenidos gubernativos al ser liberados de prisión eran obligados a pagar (en la Delegación de Orden Público) una multa, disfrazada como donativo a la suscripción al Tesoro Nacional, para así liquidar su responsabilidad. Así lo denunció Andrés Poza, militante socialista al que habían hecho pagar de este modo 2.500 pts. en enero de 1938. Acusaba que era un uso extendido porque se había dado el mismo caso con relación a otras personas: *“es público y notorio que en esta ciudad se hacía así, a pesar de la vigencia de los Decretos de 13 de septiembre de 1936 y 10 de enero de 1937 que regulaban la forma y el modo como deberían hacerse efectivas las responsabilidades de orden político”*¹⁰⁴⁴.

Es decir, a pesar de la existencia de mecanismos oficiales para exigir la responsabilidad civil, se utilizaban otros medios, bajo la apariencia de la aportación voluntaria, para responder de las culpas derivadas de la oposición a la sublevación o de militancia sindical o política previa a la misma. Por si el juez instructor no le creía, Andrés Poza continuaba el razonamiento: *“de todos modos es tan desproporcionada la cantidad que entregué al tesoro por orden del delegado de Orden Público, con mi modesta fortuna económica, que no se puede pensar lógicamente que me pudiera permitir espontáneamente la entrega de tan generoso donativo”*¹⁰⁴⁵.

¹⁰³⁹ BOP extraordinario, 24 de febrero de 1937.

¹⁰⁴⁰ BOP, 22 de diciembre de 1937.

¹⁰⁴¹ Arch. Prov. Caja J/6349, Exp. Resp. Civ. 117/37, Pedro Acebes.

¹⁰⁴² Arch. Jgdo. Sepúlveda, Civil 1940. El resultado total de la multa fue 67,65 pts.

¹⁰⁴³ BOOS, nº 17, 15 de septiembre de 1936, pág. 464. Circular fechada el 3 de diciembre de 1936, y firmada por los inspectores Julia de Pablos e Inocencio Santos Barata.

¹⁰⁴⁴ Arch. Prov. Caja J/6353, Exp. Resp. Pol. 19/40, Andrés Pozas.

¹⁰⁴⁵ Ver nota anterior.

El delegado de Orden Público de Segovia durante los años 1937 y 1938, Antonio Reparaz Araujo, comandante de la Guardia Civil, reconoció esta práctica de liberación previo pago, pues declaró, acabada la guerra, que eran *“muchos (casos) de esta naturaleza los que constantemente tenía que resolver en la delegación de Orden Público”*¹⁰⁴⁶.

Por su parte, los comerciantes y propietarios que habían contribuido generosamente a las suscripciones patrióticas a favor del movimiento tuvieron derecho -una vez finalizada la contienda- a deducciones en la contribución de beneficios extraordinarios de guerra por los negocios desarrollados durante el conflicto. Derecho al que no tuvieron acceso los segovianos que se vieron obligados a contribuir en las suscripciones.

Por todo lo expuesto en este apartado, no parece descabellado considerar a las “suscripciones patrióticas” como un método de incautación encubierto a todos los españoles residentes en zona controlada por los sublevados, pues eran obligados, sin exclusión alguna, a contribuir para sufragar los gastos de la guerra.

Por último, para hacernos una idea del resultado de las suscripciones nacionales en la provincia de Segovia, contamos con la información aportada por el gobernador civil en agosto de 1938, en la que distinguía las colectas liquidadas de las que todavía estaban abiertas. Los datos eran los siguientes:

Cuadro nº 28: Suscripciones abiertas en agosto de 1938

Suscripción	Valor recaudado
Tesoro Público: donativos de trigo, oro y plata	3.643.704,41
Junta de Asistencia a Fuerzas Combatientes (por donativos)	670.216,29
Homenaje al Generalísimo	15.235
Acorazado España	29.312,90
Suscripción Madrid	8.675,55
Navalcarnero	6.858,85
Comité del Patronato Nacional Tuberculoso	90.365,77
Colonia Varela	229.104,05
Auxilio a poblaciones liberadas	73.538
Monumento a Calvo Sotelo	10.432
Total	4.777.442,82 pts.

¹⁰⁴⁶ Ver nota anterior.

Cuadro nº 29: Suscripciones cerradas en agosto de 1938

Suscripción	Valor recaudado
Aguinaldo del Combatiente	195.077,73
Auxilio a Málaga	8.497,90
Auxilio a Santander	4.468,90
Pueblos del frente de Segovia	44.181,52
Monumento a Mola	22.238,70
Ayuntamiento de Segovia para un avión	500.000
Recaudado por ayuntamientos de la provincia para sellos, paro obrero y otros	257.631,33
En Intendencia Militar recogido en especies	537.831,25
Total	1.547.688,63 pts.

7. 6. La incautación y la Ley de Responsabilidades Políticas

7. 6. 1. Introducción

El celo sancionador del Gobierno de Franco se reforzó a la conclusión de la contienda con la euforia del triunfo de las armas. Como han afirmado muchos autores, en 1939 no llegó la paz, sino la Victoria. Por parte de los vencedores de la guerra civil no hubo ningún ánimo de superación de la confrontación civil, más bien al contrario, era norma común el argumento de que no habían derramado tanta sangre para que todo quedara como antes del 18 de julio de 1936.

El régimen organizó un procedimiento represivo que llegó a todos los rincones del país y afectó a todos aquellos españoles y españolas que habían sido simpatizantes de la II República. Este tipo de represión tenía al menos 3 objetivos: reprimir, castigar a los oponentes que les habían hecho frente en la guerra; depurar, es decir apartar de la vida pública de la administración a los vencidos y, por último, recaudar fondos para el Estado nacional, exhausto tras la sangría económica de la contienda.

La Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 pretendía castigar una amplia gama de hechos que abarcaba el simple ejercicio de los derechos fundamentales, sociales y políticos, antes del 18 de julio de 1936. Además, se retrotraía más allá del inicio de la contienda, llegando al 1 de octubre de 1934, cuando, según el criterio de los vencedores de la guerra, se había marcado el principio del fin de la República. Se obviaba que desde octubre del 34 hasta el 18 de julio de 1936 todavía existía un Estado democrático que reconocía la libre sindicación y afiliación a los partidos políticos y sindicatos, el derecho a la huelga, a la manifestación y a la expresión de unos ideales políticos y sociales.

El simple ejercicio de estos derechos fue castigado por esta Ley, que utilizó el carácter retroactivo en sentido negativo, lo que era una aberración jurídica, reconocida, pública y oficialmente, por el juez de instrucción de Sepúlveda para dejar sin responsabilidad penal a un expedientado: *“No le compete responsabilidad alguna por su actuación anterior ya que aquellos hechos anteriores al movimiento no se hallaban*

*previstos y penados en las leyes, pues de lo contrario se vulneraría la no retroactividad en materia penal*¹⁰⁴⁷. Pero no se le aplicó el mismo criterio para la responsabilidad civil o profesional, pues fue multado con 3.000 pts. y sancionado con traslado en su puesto de trabajo. En materia penal ya dijimos que se tenían muy en cuenta los antecedentes políticos y sociales de los procesados a la hora de dictar la sentencia condenatoria.

La ley pretendía revestirse de un tono redentor, influido por la doctrina de la Iglesia católica, entendiendo la redención como salvación a través de la sanción, mediante el pago por los pecados. Es el sentido que ya se venía empleando, incluso literalmente, con la denominada *Redención de Penas por el Trabajo*¹⁰⁴⁸ aplicado a los presos, desde finales de 1938. Pero la arbitrariedad de las sentencias condenatorias hablaba más de fin punitivo que de un ánimo redentor.

Los fondos recaudados por este procedimiento irían destinados a la reparación de los daños causados por la guerra. La Ley de 9 de febrero derogó la legislación anterior sobre materia de responsabilidades civiles, es decir, sobre incautaciones de bienes a los oponentes, regulados por el D. de 10 de enero de 1937.

Como órgano superior se creó el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, integrado por tres miembros en representación del Ejército, la Falange y la carrera judicial¹⁰⁴⁹. Se establecieron 18 Tribunales Regionales y en cada capital de provincia se nombró un juez instructor, cargo éste desempeñado en todo caso por un militar. Segovia pertenecía al Tribunal Regional de Madrid, junto con Ávila, Toledo y Guadalajara y el juez instructor era Ricardo de Cáceres, *“licenciado en derecho, capitán de complemento de artillería”*¹⁰⁵⁰.

El art. 1 declaraba la responsabilidad política de las personas jurídicas o físicas en dos sentidos. Por un lado, aquéllos que desde el 1 de octubre de 1934 hasta el 18 de julio de 1936 *“contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden que se hizo víctima a España”* (las actividades políticas o sindicales previas a la sublevación militar) y por otro, *“los que desde el 18 de julio se hayan opuesto o se opongan al movimiento con actos concretos o con pasividad grave”* (todos aquéllos que lucharon defendiendo la legalidad republicana o no se adhirieron entusiásticamente al movimiento).

Las causas de responsabilidad, es decir los hechos que motivaban la incoación de los expedientes, englobaban un amplio abanico que abarcaba desde haber desempeñado cargos de carácter político o administrativo del Gobierno de Frente Popular (ya fuera este cargo ministro, gobernador civil, delegado provincial de algún ministerio,...) o simple afiliado de cualquiera de los partidos integrantes del Frente Popular, o adheridos al mismo. Hasta un total de 17 causas distintas de responsabilidad venían enumeradas en el art. 4.

La primera causa de responsabilidad era la condena por la jurisdicción militar por los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación a la misma, a raíz del movimiento nacional (como se ha explicado, esos delitos englobaban innumerables posibilidades de hechos y de palabras).

La “bestia negra” del tribunal sancionador era el Frente Popular, por lo que casi todas las variantes de relación con la coalición triunfante en las elecciones de febrero, estaban castigadas. Si era causa de responsabilidad la mera afiliación a cualquier partido de los que componían el Frente Popular (de la que se excluía la militancia de base de los sindicatos), o adheridos al mismo, con mayor motivo lo era haber desempeñado algún

¹⁰⁴⁷ Resolución del J. Ins. de Sepúlveda. Arch. Prov. Caja J/6346, Exp. Resp. Civ. 6/38, Luis de Montalbán.

¹⁰⁴⁸ La O. de 7 de octubre de 1938, creó el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo. BOE, 11 de octubre.

¹⁰⁴⁹ Como bien explica Álvaro Dueñas en su tesis doctoral *“Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo”*, la rivalidad entre Ejército y Falange por controlar el procedimiento de Responsabilidades Políticas se saldó con la solución de compromiso de un representante por cada bando enfrentado, terciados por la presencia de un juez civil.

¹⁰⁵⁰ La expresión literal *“licenciado en derecho”* viene a colación porque su hermano Gabriel había ejercido de juez instructor de numerosos sumarios durante la guerra, haciéndose pasar por licenciado en Derecho cuando aún le faltaban algunas asignaturas para acabar la carrera. Descubierto el engaño al acabar la contienda, fue procesado y condenado.

cargo directivo tanto de partidos como de sindicatos. Aunque no se militara en los partidos reseñados, apoyarles o ayudarles económicamente, era otra causa de responsabilidad; de igual manera que la participación como candidato, interventor o simple apoderado en las elecciones de febrero.

Otra obsesión de los vencedores de la guerra era la masonería. Tan es así, que un año después aparecerá una ley exclusiva para “Represión de la Masonería y el Comunismo”, el 1 de marzo de 1940.

Por último, sancionaba a los inductores de los hechos comprendidos anteriormente, ya fuera de palabra o por escrito; y los que hubieran realizado actos encaminados a fomentar con eficacia la situación anárquica en que se encontraba España y que hizo *“indispensable el movimiento nacional”*.

Mientras que las causas de responsabilidad política prescribían a los quince años (a partir de la fecha de la publicación de la ley o a los mismos años de la sentencia firme de las sanciones de limitación de actividad o de residencia), las sanciones económicas no prescribían nunca (art. 17).

No estaba recogido el delito religioso, si bien era muy importante el informe del párroco sobre la conducta político-social, en la que era determinante si acudía o no a la iglesia, si cumplía o no los preceptos religiosos,...

Las sanciones previstas eran de tres tipos:

1. Restrictivas de la actividad: inhabilitación absoluta o especial para desempeñar cargos públicos o políticos.
2. Limitativas de la libertad de residencia: extrañamiento, confinamiento y destierro.
3. Económicas: pérdida total de bienes, pago de cantidad fija o pérdida de bienes determinados.

Parecería que esta ley preveía todas las causas de responsabilidad y todos los casos para exigirla y nadie quedara sin castigo, con unos rígidos plazos (el art. 80 declaraba improrrogables los plazos) para resolver todos los procesos en poco tiempo; sin embargo, al cabo de los meses se demostró poco eficaz ante la gran avalancha de expedientes fruto del ansia desmedida de castigar al mayor número de desafectos posible. Se aducía falta de presupuesto suficiente, carencias de personal y se detectaban defectos en el procedimiento.

Con la práctica se demostró que la actuación no era tan sencilla como pretendía ser. Los 45 días previstos en la ley, desde que el instructor iniciaba el expediente hasta que el tribunal dictaba la sentencia, se veían superados con creces. Los plazos de los distintos tramos no se cumplían, se demoraban los informes de las autoridades, las declaraciones de los testigos, etc. Más adelante, con los recursos, los plazos se hicieron interminables puesto que los expedientes eran reclamados por unas autoridades a otras, de un tribunal a otro y, a veces, tardaban años en aparecer.

Las autoridades franquistas vieron muy pronto la necesidad de la reforma, pero ésta no vio la luz hasta 1942 con la Ley de 19 de febrero. Con ella se pretendía aligerar el abultado volumen de los expedientes. A tal fin, se procedió a eximir de responsabilidad a gran número de inculcados, tanto los que tenían poca relevancia política (art. 4º) como los que poseían escasos bienes para hacer frente a la sanción económica (art. 8º). Así mismo, el art. 4º excluía a los condenados a menos de 12 años de prisión. Una última innovación de esta ley era la incorporación del ministerio fiscal al procedimiento represor (art. 6º). A partir de ahora no se iniciaría ningún expediente (salvo cuando hubiera recaído una condena de otra jurisdicción: tribunales militares, Masonería y Comunismo), sino a petición o con el informe del fiscal, que en caso de ser contrario a su iniciación, procedería, sin más trámites, a acordar el sobreseimiento.

Pero, oficialmente, el régimen pretendió presentar la reforma como una muestra de normalización, como una vuelta a la normalidad jurídica de un estado civil, y con ella el fin

de la excepcionalidad de jurisdicciones surgida con la guerra. De tal manera que se disolvían los tribunales y juzgados especiales para –según la versión del Gobierno- el “*restablecimiento en su plena normalidad de los Órganos ordinarios de la justicia*”. No es muy creíble esta fundamentación puesto que el Tribunal Nacional no sería disuelto hasta 1945 en que fue sustituido por la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas, que continuó ejerciendo sus funciones hasta su supresión, en noviembre de 1966, con el Decreto de Indulto para la extinción definitiva de las Responsabilidades Políticas¹⁰⁵¹.

7. 6. 2. La liquidación de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes

Como se ha escrito, la Ley de 9 de febrero derogó la legislación anterior sobre materia de responsabilidades civiles, es decir, sobre incautaciones de bienes a los oponentes políticos, regulados por el D. de 10 de enero de 1937. Los expedientes finalizados (a falta de ejecución del embargo o del pago de la sanción) o pendientes de resolución ya serían continuados por los nuevos tribunales de responsabilidades políticas. Para ello las comisiones provinciales y autoridades militares que se encontraran tramitando expedientes los debían remitir a los tribunales regionales correspondientes.

Había numerosos expedientes tramitados por la Comisión Provincial de Segovia que estaban a falta de sanción por la autoridad militar y que ésta sancionó el 26 de febrero de 1939, es decir, una vez entrada en vigor la Ley de Responsabilidades Políticas. La ley describía claramente esta eventualidad, determinando que si no se enviaba el expediente con la sanción al Tribunal Regional para su continuación, se contrariaba la 3ª disposición transitoria de la ley, lo que producía (según el art. 4 del Código Civil) la nulidad de la actuación contraria a la ley. A pesar de lo anterior, los 26 expedientes resueltos en esta fecha no tuvieron las mismas consecuencias. Por lo que hemos comprobado en 21 casos, se dieron tres variantes:

1. Anulación de la sanción y olvido del asunto para el inculcado, que era exactamente lo que preveía la Ley (1 caso).
2. Continuación del trámite con normalidad, como si la 3ª disposición transitoria de la Ley de Responsabilidades no existiera. Notificada la sanción de la autoridad militar, el inculcado disponía de 3 meses para recurrir ante el Tribunal Nacional o pagar la multa (en 14 ocasiones).
3. Hacer un nuevo expediente. En seis ocasiones en que el afectado o sus familiares (en caso de fallecimiento de aquél) interpusieron el recurso de revisión, como la sanción era posterior a la Ley de 9 de febrero, el Tribunal Nacional declaró ineficaz la sanción, en lugar de nula como preveía la Ley, ante lo que no cabía recurso y sí que se instruyera un nuevo expediente de responsabilidades políticas.

Por la disposición transitoria 6ª, a las personas a quienes se les hubiere exigido responsabilidad con arreglo al D. de 10 de enero de 1937, “*no se les podrán instruir nuevos expedientes a tenor de la presente ley por los mismos hechos que ya fueron objeto del anterior*”¹⁰⁵².

A pesar de la claridad de esta norma, se han encontrado varios expedientes conclusos (Concepción Alfaya, Esteban Muñoz, etc. que habían sido sancionados e incluso pagado la multa), a los que de nuevo se procedió a instruir el expediente. Se cumplieron todos los trámites, otra vez se realizaron los correspondientes informes de las autoridades, la declaración de los inculcados y de los testigos, para después, una vez completados, archivar en aplicación de la disposición aludida.

¹⁰⁵¹ D. 10 de noviembre de 1966. BOE, 12 de noviembre de 1966.

¹⁰⁵² Ley de Responsabilidades Políticas, Disp. Trans. 6ª.

En cambio, algunos otros expedientes que se ordenaron instruir por los mismos hechos que habían originado uno previo de responsabilidad civil, también fueron sobreesidos, aunque en éstos el razonamiento estaba basado en criterios económicos “*no entiende este tribunal se le instruya nuevo expediente que no alteraría sustancialmente la sanción impuesta*”¹⁰⁵³. Lo que indica que de haber posibilidades de incrementar la sanción, hubieran instruido un nuevo expediente.

Durante el periodo transitorio, la Comisión Central Administradora de Bienes, como había perdido el carácter de ejecutante por la derogación de la legislación de incautaciones, dictaminó la suspensión de los procedimientos de apremio de los expedientes de incautación ya fallados “*sin perjuicio de las diligencias urgentes hasta su remisión a quien corresponda*”¹⁰⁵⁴, así quedaron paralizados los innumerables procedimientos de ejecución de las sanciones dictadas en 1937 y 1938, que estaban en vías de realización.

Esta fase de adaptación, prevista para tres meses, se prolongó hasta entrado el año 1940, porque la Comisión Provincial de Segovia, todavía en enero de 1940, se encontraba traspasando sus servicios a los organismos de Responsabilidades Políticas.

En abril del mismo año los membretes de la Comisión, figuraban con un expresivo “*(extinguida)*” al responder al Tribunal Nacional que le pedía expedientes de inculpadados que habían efectuado recurso de revisión. La Comisión Provincial informaba que no tenía los expedientes requeridos, añadiendo que podían estar “*como otros pendientes de resolución por el general de la 7ª región*”¹⁰⁵⁵, es decir contraviniendo lo establecido por la Ley de 9 de febrero, ya referido, que obligaba a su remisión a los tribunales regionales.

El Tribunal Regional de Madrid, por su parte, finalizó el 25 de mayo de 1940, el fichero de expedientes de responsabilidades políticas ordenados instruir por la extinta Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Segovia.

7. 6. 3. Los expedientes de responsabilidades políticas

El inicio de los expedientes tenía tres vías (art. 35): las sentencias de los consejos de guerra, las denuncias de particulares y la propia iniciativa del Tribunal Regional o a propuesta de cualesquiera autoridades militares o civiles, agentes de Policía y comandantes de puesto de la Guardia Civil. Tanto las denuncias como las sentencias eran enviadas al Tribunal Regional.

Las denuncias

Entre los expedientes consultados, tan sólo han aparecido 3 denuncias privadas, el resto son de las distintas autoridades del régimen: gobernador civil, Comisaría, FET y Guardia Civil. Se atribuía denuncia a una autoridad cuando, a veces, eran informes remitidos al Tribunal Regional, que había solicitado previamente dicha información, por ejemplo, el Ayuntamiento de Segovia informó sobre los concejales republicanos y de izquierdas que hubo en la capital hasta el 19 de julio de 1936; mientras que la Guardia Civil lo hizo sobre las personas que habían sido interventores del Frente Popular en las elecciones de febrero, en toda la provincia.

El mecanismo tan fácil por el que cualquier persona podía denunciar a otro ciudadano sirvió para que afloraran envidias, rencores o “malos quereres”, por parte de particulares, caciques locales o autoridades, como reconoció el propio juez instructor:

¹⁰⁵³ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. Esteban Muñoz Cristóbal.

¹⁰⁵⁴ Comunicación de la Comisión Central a través de la Audiencia Provincial de Valladolid a la de Segovia, fechado el 11 de marzo de 1939. En Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 87/37, Pedro Valdenebro.

¹⁰⁵⁵ Escrito de CPIB de Segovia a TRRP de Madrid, fechado 12 de abril de 1940. En Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 90/37 contra Alberto Sanz Santos y otros 3 vecinos de Mudrián.

Por otro lado la serie de manifestaciones encontradas (...) las declaraciones prestadas con posterioridad al anuncio de incoación, los escritos firmados por vecinos de distintos pueblos, el encono y divergencias de intención que a través de ellos se perciben, las continuas visitas y aún recomendaciones encaminadas a inclinar nuestro ánimo en uno u otro sentido a favor o en contra del expedientado hacen pensar –y ésta es la impresión particular de que antes hablábamos- en que el hecho delictivo surge producido por un deseo caciquil perfectamente explicado dentro de la psicología pueblerina¹⁰⁵⁶.

De un modo similar se expresaba el general Eugenio Espinosa de los Monteros, quien alegaba en su testificación para un expediente que en el mismo “*se mezclan enemistades, antipatías y cuestiones personales locales en Segovia que retrasan el esclarecimiento de la verdad*”¹⁰⁵⁷.

La primera denuncia conocida era de un particular que acusaba a otro vecino de haber sido interventor del Frente Popular, que había mantenido relación continua con gente izquierdista, principalmente el dirigente de I.R. Antonio Linaje y el diputado Martín de Nicolás, “*con los cuales denunció las actas de Cano de Rueda y además en todo momento demostró carácter sectario (...) hasta el extremo de hacer un entierro civil cuando estaba de visita pastoral el obispo, intervino también en un matrimonio civil y un bautizo civil*”¹⁰⁵⁸.

Las otras dos eran denuncias del cura de Siguero a otros tantos vecinos de Encinas, fechadas el mismo día, 14 de junio de 1940, en ambas lo cargos eran contundentes: haber pertenecido al partido Radical Socialista; por “*haber dicho públicamente que era comunista, haber votado él y su familia al fp y haber representado oficialmente a dicho partido en las elecciones de febrero*”. Como prueba de su mala conducta aportaba el párroco que el inculpado no había sido admitido en FET, no le habían devuelto la escopeta que le habían requisado y le habían expulsado del Ayuntamiento, donde era concejal. Por si esto no era suficiente, además “*frecuentaba poco la iglesia*”¹⁰⁵⁹. El otro denunciado había fingido ser jefe local de FET, había hecho comentarios injuriosos contra Falange, no dio muestras de adhesión al GMN, “*no contribuyendo en la medida de sus posibilidades a las suscripciones patrióticas ni acudiendo a manifestaciones del mismo signo*”¹⁰⁶⁰.

El párroco se atrevió a calificar la causa de responsabilidad en que pudieran encontrarse los denunciados: apartados c) y e) del art. 4. Llegaba más allá, incluso investigó sobre las propiedades de los denunciados para hacer el servicio de información completo: “*De las averiguaciones particulares realizadas parece resultar que el aludido denunciado tiene los siguientes bienes: un rebaño de ovejas, fincas etc. pues es uno de los más ricos del pueblo*”¹⁰⁶¹.

Las sentencias de los consejos de guerra

La mayoría de las sentencias se produjeron finalizada la guerra y afectaron casi exclusivamente a segovianos que habían cruzado la sierra para unirse al Ejército republicano y fueron detenidos donde les sobrevino la conclusión de la contienda o cuando ya habían vuelto a sus localidades de origen.

Como todas las sentencias de consejos de guerra eran notificadas a los tribunales de responsabilidades políticas, encontramos algunas por delitos comunes. Hay un caso de sumarisimo de urgencia a un soldado por supuesto hurto de una maleta. Requeridos los

¹⁰⁵⁶ Resumen de las actuaciones del instructor en el Exp. Resp. Pol. 35/40, Jerónimo Gil Barrio. Arch. Prov. Caja J/6345.

¹⁰⁵⁷ Espinosa de los Monteros era general jefe del Cuerpo de Ejército de Galicia, cuando emitió su informe, en noviembre de 1939 para el profesor Mariano Quintanilla, Arch. Prov. Caja J/6349, Exp. Resp. Civ. 45/37.

¹⁰⁵⁸ Arch. Prov. Caja J/6345, Exp. Resp. Pol. 35/40, Jerónimo Gil Barrio.

¹⁰⁵⁹ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. 32/40, Basilio Llorente.

¹⁰⁶⁰ Arch. Prov. Caja J/6345, Exp. Resp. Pol. Toribio de Frutos.

¹⁰⁶¹ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. 32/40, Basilio Llorente.

correspondientes informes de la Guardia Civil, Comisaría y FET, resultó que no tenía antecedentes políticos, por lo que fue sobreseído, no llegando a instruirse expediente de responsabilidades políticas.

Si los hechos denunciados por ambas vías constituían responsabilidad, el Tribunal Regional daba parte al Nacional del inicio del expediente y el juez instructor ordenaba publicar en los boletines oficiales del Estado y provincia la incoación del mismo. En caso contrario, archivaba la denuncia sin más actuación. La publicación en los boletines también era requisito preceptivo para los expedientes principiados por la vía de la sentencia o la iniciativa de otras autoridades.

En el anuncio oficial de apertura de expediente ya se obligaba a declarar a cuantas personas tuvieran conocimiento de la conducta política y moral del inculpado, así como de los bienes que poseía. Ésta era otra de las peculiaridades de la represión franquista, el hacer partícipe en el procedimiento represor a los ciudadanos de a pie. El nuevo régimen quería implicar, y lo conseguía muchas veces, a la gente normal en los distintos tramos del proceso: en las denuncias, en los informes, en los testimonios.

También se avisaba en el edicto de que el procedimiento no se paralizaba por el fallecimiento del inculpado, ni por su incomparecencia ante el juez, ante el que era convocado por dicho anuncio. En suma, hacía responsables a los familiares de la futura sanción. Si el expedientado era fusilado, al dolor de su fallecimiento, los familiares debían añadir el esfuerzo de pagar la multa económica.

El expedientado tenía 5 días para presentarse en el Juzgado con el fin de que el juez le leyera los cargos que había contra él, concediéndole otros 5 días más para presentar pruebas de descargo (proponer testigos, aportar documentos exculpativos, etc.). Pero el art. 52 de la ley facultaba al instructor para admitir o desestimar las pruebas propuestas por el inculpado, lo que se ha comprobado en algún expediente, donde el juez no citó a declarar a los testigos propuestos por aquél, sin hacer constar por escrito las razones para tomar esa postura.

El inculpado era advertido -con las consiguientes amenazas si no cumplía las prevenciones- de que no podía ausentarse de la localidad de residencia sin permiso del juez instructor, debía presentar una relación jurada de sus bienes y los miembros de la familia que dependían de él, así como que no podía disponer de sus bienes sin la autorización del instructor. En caso de ser propietario de un negocio, el instructor nombraba un interventor mercantil, de igual manera se obraba si el inculpado poseía tierras de labor cultivadas.

En los casos de sospecha de ocultamientos de bienes o elevada cuantía de los mismos, el juez decretaba el embargo cautelar, como se hacía con el procedimiento de responsabilidad civil.

Demostración de inocencia. Estrategias de defensa

Había dos momentos en la instrucción del expediente en que se podían presentar los escritos de descargos: bien al principio, tras la lectura de cargos, o finalizada la tramitación, justo antes de la emisión de la sentencia. Pero los plazos eran demasiado cortos, lo que dificultaba la defensa del inculpado. Se han encontrado algunos casos de finalización del expediente sin haber oído al inculcado.

El inculpado era quien tenía que demostrar su inocencia y no al revés, probar el tribunal la culpabilidad del expedientado. Como se muestra expresamente en un informe del instructor *“sin que el señor López Alba haya podido comprobar (sic) lo contrario”*. No había pruebas de su militancia en el Frente Popular, como reconocía el instructor *“aun cuando la circunstancia de que en las dependencias oficiales no existan documentos originales y de la prueba de descargos y de la actuación del inculpado pueda desprenderse que su ideal político era francamente antimarxista”*, así y todo, no quedaba conforme

porque *“hace sospechar que haya algún fundamento de verdad en sus manifestaciones”*¹⁰⁶².

Como en la provincia de Segovia se había completado el procedimiento de responsabilidades civiles hubo pocos expedientes abiertos por actuaciones previas al 18 de julio de 1936: algunas personas de la capital que se les había “pasado” a la Comisión Provincial y los que habían sido interventores del Frente Popular en las elecciones de febrero. Las acusaciones ahora eran menos concretas, algunas eran tan vagas que dificultaban la defensa: ideología comunista, izquierda avanzada... Ante estas acusaciones algunos descargos eran bastante curiosos.

A Crispín Pindao, teniente de la Guardia Civil que había sido militante de I.R., le acusaron, entre otras cosas, de *“que cultivaba amistad con resineros y gente de baja condición social en los pueblos circunvecinos a Cantalejo”*. Para tener efecto el descargo, el inculcado se tenía que poner en el lugar del instructor y aparentar una ideología totalmente reaccionaria. La contestación fue así: *“Me dirigía y hablaba con resineros como igualmente con toda clase de personas que consideraba conveniente (...) pero cultivar amistad con resineros y gente de baja condición social no puede decirse con verdad, ya que repugna a mi conciencia y a mi situación de oficial de la guardia civil, el trato con tales elementos, que en primer lugar no existían pero que de existir no tendrían su amistad por mi carácter y por mi cargo”*¹⁰⁶³.

Esta misma estrategia de exponer lo que las autoridades franquistas querían leer, la eligió José Moreno, secretario personal del último gobernador civil de la República en Segovia, que había sido militante de U.R. *“más que por ideología, le proporcionaba forma de vivir”*, lo que, según su propio testimonio, reconoció el consejo de guerra. Además, fue elegido compromisario para la elección a presidente de la República *“con el 91% de votos de la derecha, porque para honor mío me tacharon los de izquierda”*. Una vez liberado se apuntó a las milicias nacionales, perdió un hermano en la guerra y estaba dispuesto a *“entregar la suya por España y el Caudillo”*¹⁰⁶⁴.

Para demostrar su poca afección a las leyes de la República y a las organizaciones obreras, Julián Lázaro presentó varios certificados de vecinos de su pueblo para los que había trabajado en diferentes épocas de la República y nunca se rigió por las Bases de Trabajo establecidas por el Gobierno o acordadas por los jurados mixtos de patronos y obreros, y sí en cambio, como escribían los patronos, *“efectuándolos en completa armonía conmigo”*¹⁰⁶⁵. Es decir, como se hacía antiguamente, de mutuo acuerdo entre el trabajador y el propietario. De toda la documentación consultada, éste es el razonamiento más rebuscado esgrimido por un inculcado para mostrar su oposición al régimen republicano.

Otra acusación usual era no asistir durante la guerra a manifestaciones patrióticas de apoyo al Ejército sublevado o de júbilo por la toma de las distintas ciudades por las tropas de Franco. Ante lo cual, los descargos eran evidentes porque el art. 1 de la Ley de 9 de febrero establecía la responsabilidad por *“actos concretos o con pasividad grave”*. Como escribió Manuel Conde, aquéllos *“podrán ser motivos para que no se me considere entusiasta del movimiento, pero no suficientes para que, sólo por eso, no se me considere adicto al mismo, y mucho menos den lugar a responsabilidades políticas”*¹⁰⁶⁶.

Algunos inculcados negaban en primer lugar los cargos. Pero, como los de afiliación eran difíciles de negar porque las autoridades y Falange tenían los libros de militantes de partidos y sindicatos, los que habían sido afiliados acudían a la socorrida excusa de la *militancia de base*, sin haber asistido a las reuniones, ni haber realizado propaganda. Otros aceptaban la militancia, pero oportunamente se habían dado de baja antes de la guerra,

¹⁰⁶² Arch. Prov. Resp. Pol. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. 23/40, Carlos López Alba.

¹⁰⁶³ Arch. Prov. Caja J/6350, Exp. Resp. Pol. Crispín Pindao. El subrayado es mío.

¹⁰⁶⁴ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 9/38, José Moreno.

¹⁰⁶⁵ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Pol. Julián Lázaro Escobar.

¹⁰⁶⁶ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. Manuel Conde.

con lo que se aminoraba la responsabilidad porque abandonaban las organizaciones antes de la radicalización tras las elecciones de febrero, alguno de ellos *“con el deseo de no hacerse cómplice de dicha actuación”*¹⁰⁶⁷.

La mayoría de los inculpados (de los que habían permanecido en Segovia durante la guerra) aducían que desde el inicio del movimiento habían contribuido en todas las innumerables suscripciones de apoyo a la causa nacional. Para otros la mejor defensa era un buen ataque. Los hubo que marcaron las distancias con otros expedientados: *“sin que esto pueda ser alegado por otros inculpados en expedientes ante la jurisdicción en que comparezco”*¹⁰⁶⁸.

El republicanismo era un cargo generalizado. Muchos lo eran desde 1931, los menos desde tiempo antes. Eduardo Lucio reconoció que durante los años 1930 y 1931 *“derivé en ideas hacia el régimen republicano como tantos españoles unos de buena fe y otros de ambiciones arribistas, pero lo que desde luego puedo asegurar es que me cuento entre los primeros. Y que si el ser republicano viejo es delito más lo será serlo nuevo, puesto que (...) son los que con sus ambiciones han destruido un régimen y con ello a nuestra patria”*¹⁰⁶⁹.

Era muy común la presentación de pruebas de adhesión al movimiento. La mayoría ofrecían resguardos de aportaciones a las suscripciones nacionales. La más curiosa muestra de afección fue una muñeca de unos 40 cm. uniformada con traje falangista que desde el inicio del movimiento presidía el comedor de la casa de Julio Martín.

Algunos expedientados aportaron testimonios de personas de derechas a las que habían ayudado durante la “dominación roja”, pues habían pasado la guerra en zona republicana. Incluso algunos, ahora inculpados, habían sido perseguidos en su estancia en dicha zona por sospechosos de desafección republicana. Finalizada la guerra, eran importantes los certificados de adhesión firmados por personas perseguidas, procesadas o condenadas por el Gobierno republicano; como el que firmaron 4 maestros destinados en Madrid, uno de ellos *“preso y martirizado por sus ideas contrarias al régimen rojo”* en apoyo de las profesoras hermanas Alfaya¹⁰⁷⁰.

Por último, no faltaron los inculpados que esgrimían, no sin razón, el haber sido objeto de malos quereres y que la denuncia que los acusaba era falsa.

Los Informes

Como en el procedimiento de responsabilidad civil, el juez instructor recababa informes de las autoridades de la localidad de residencia del inculpad: alcalde, jefe local de FET, comandante de puesto de la Guardia Civil y párroco. Con respecto al procedimiento de responsabilidad civil, se añadieron ahora los informes preceptivos de FET y los párrocos, dándoles en este procedimiento la importancia real que tenían en el régimen franquista. En el caso de residentes en la capital también emitía informe la Comisaría de Policía. En algunas ocasiones se requería el informe de la Diputación Provincial, del Servicio de Información de la Policía Militar y de la Delegación Provincial del Servicio de Información e Investigación de FET. Estos informes se referían a los antecedentes político-sociales del inculpad, los hechos que motivaron la apertura del expediente y la cuantía y naturaleza de sus bienes. Había un plazo de 5 días para emitir dichos informes, pero, como el resto de plazos, se ha comprobado que en raras ocasiones se cumplió.

Hay una constante que se debe aplicar a todos los informes: en numerosas ocasiones no sabían a ciencia cierta el comportamiento o los hechos que se atribuían a los inculpados, pero no lo reconocían, o lo que es peor, tras reconocerlo lanzaban su informe

¹⁰⁶⁷ Arch. Prov. Caja J/6347, Exp. Resp. Pol. Eduardo Lucio Cervero.

¹⁰⁶⁸ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. 23/40, Carlos López Alba.

¹⁰⁶⁹ Arch. Prov. Caja J/6347, Exp. Resp. Pol. Eduardo Lucio Cervero.

¹⁰⁷⁰ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. 26/40, Concepción Alfaya.

basado en su opinión o en el criterio de otras personas que, a su vez, les habían informado. Para ello utilizaban unas frases con gran despliegue perifrástico tales como:

*“Desconozco actuación anterior y sólo por referencias que no puedo concretar por no interesarme en aquella fecha, tengo alguna idea de que era...”*¹⁰⁷¹; *“desde luego es abiertamente antirreligioso y si se ha de creer a la opinión unánime seguramente masón”*¹⁰⁷² o *“solo puede informar de lo que se ha dicho por los vecinos y ha llegado a su conocimiento en forma de ‘se dice’”*¹⁰⁷³.

Otra característica común es la alusión a la personalidad privada, al carácter personal de los inculpados; *“es un hombre de carácter serio, retraído y dominante, no tiene sociedad con persona alguna, ni frecuenta establecimientos públicos ni templos religiosos”*¹⁰⁷⁴. Otros inculpados eran, a juicio de los informantes, de *“mala conducta por su vida alterada y nocturna”* o de *“mala conducta moral, pública y privada”*¹⁰⁷⁵.

Llama la atención que de algunos condenados en consejo de guerra se pidiera informes sobre su conducta político-social y a otros no, cuando el art. 53 establecía que sólo era necesario emitieran información sobre los bienes que poseyeran, pues ya había sido juzgada su actuación y, en función de ella, habían sido condenados.

El modo de sacar conclusiones de las autoridades era muy significativo. Sobre unos jóvenes de quienes se sospechaba que habían pasado al otro lado durante la guerra, aseguraba la Comisaría que *“marcharon con consentimiento de la madre, por no haberse observado en ella preocupación de ninguna clase”*¹⁰⁷⁶.

Otro detalle a tener en cuenta es la ignorancia política de la que hacían gala no sólo los particulares, sino también algunas autoridades. A los afiliados a partidos republicanos (I.R., U.R.) se les atribuía con frecuencia la realización de propaganda comunista o marxista. Hay ejemplos muy claros de esta ignorancia. Una acusación fue haber sido *“interventor del FP en febrero de 1936 y anteriores”*, cuando el Frente Popular se formó expresamente para las elecciones de 1936 (a la vista del fracaso de la confrontación anterior de 1933, a la que había acudido cada partido de forma individual). Algunos términos políticos eran tan originales como irreales, *“extrema liberal izquierda”*. Otros inculpados eran de *“ideas avanzadas en extremo del socialismo”*. Para la ideología reaccionaria se asociaban inexorablemente ideologías que no tenían porqué ser inseparables, de hecho la una no obligaba a comulgar con la otra, *“antes de 1931 ya se declaró republicano y por consiguiente antirreligioso”*¹⁰⁷⁷.

Intervenir en la propaganda a favor del Frente Popular era una de las acusaciones más usuales, incluso los que la habían *“verificado reservada y particularmente”*.

Las distintas autoridades que emitieron sus informes fueron:

Los **alcaldes**, como máximas autoridades locales informaban sobre los vecinos de sus localidades. Finalizada la contienda, en Segovia permanecía como alcalde Andrés

¹⁰⁷¹ Arch. Prov. Caja J/6350, Exp. Resp. Pol. Crispín Pindao.

¹⁰⁷² Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. 7/40, Manuel Conde López.

¹⁰⁷³ Arch. Prov. Caja J/6347, Exp. Resp. Pol. Eduardo Lucio Cervero. Además, en otras siete ocasiones hemos observado esta expresión “se dice” para, a continuación, acusar al informado.

¹⁰⁷⁴ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. 7/40, Manuel Conde López.

¹⁰⁷⁵ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Pol. Julián Lázaro.

¹⁰⁷⁶ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 39/38, Francisco Yagüe y 24 más. Informe sobre Cesárea Estefanía. Por otro lado, hay una curiosa anécdota que puede ilustrar el modo de elaborar los informes por parte de las autoridades. La Comisaría denunció a un afiliado de I.R. que había enviado dinero en una carta al dirigente socialista *Manuel Bear Pamplona*. En la lectura de cargos, el inculpado negó haber dado dinero al mencionado dirigente local. Las distintas autoridades emitieron informes sobre la posibilidad de ese envío a *Bear Pamplona*, pero sin poderlo asegurar. Hasta que por fin, en otro escrito de la Comisaría para ratificar las acusaciones aclaró, sin excusarse por el error, que Manuel Bear Solana estaba en Pamplona cuando el inculpado le había mandado la carta. Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Pol. 24/40, Gil Escribano Núñez. Manuel Bear Solana estuvo preso con motivo de la huelga de octubre de 1934 en Segovia.

¹⁰⁷⁷ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. 7/40, Manuel Conde López.

Reguera, quien continuó en su línea anterior, tan combativa con los oponentes políticos. Eran abundantes las afirmaciones categóricas, basadas en suposiciones y no en hechos contrastados. Sirvan como ejemplo: *“Ignoro si cotizaba, pero dada su ideología, es de suponer que sí”* o *“aun cuando se ignora su filiación política, puede asegurarse que era izquierdista”*¹⁰⁷⁸.

Otros alcaldes eran menos beligerantes con los informados, como el de Sepúlveda, Miguel Abad, que hizo sobre su pariente Manuel Conde, de quien le constaba *“no pertenecía al Frente Popular (...) retraído de política en los últimos tiempos de la República, aunque en los primeros intervino en la política local como republicano de izquierda”*¹⁰⁷⁸.

Los informes de los **párrocos** eran los menos políticos (porque no conocían datos concretos de militancia) y más sociales, pues aportaban opiniones sobre el comportamiento social o privado de los inculpados:

*“trabajó en favor de la izquierdas, faltó de temor de Dios y (...) de todo sentimiento religioso y patriótico, fáltale mucho para ser un buen caballero español”*¹⁰⁷⁹.

*“Lo que hacían en su casa cuando en ella se reunían, yo no lo puedo decir con seguridad pues no lo sé de manera cierta, mas se puede suponer que no sería nada bueno”*¹⁰⁸⁰.

Al igual que el resto de autoridades, los párrocos también debían informar lo que supieran acerca de los bienes de los inculpados. Hay un escrito muy curioso en el que el cura hacía una disquisición sobre la propiedad de los bienes, siempre sobre la base de sus hipótesis personales *“¿son de su pertenencia exclusiva, o tienen parte en ella los hijos de su primer marido? yo no lo sé, ella puso el comercio y compró la casa siendo viuda ¿lo hizo con dinero suyo o con el de sus hijos? yo me inclino a pensar esto último, al menos en parte, pues ella de por sí no creo tuviera para tanto”*¹⁰⁸¹.

En las dependencias de la **Comisaría** contaban con algunos libros de afiliación de partidos republicanos (I.R.), como se corroboraba en algún informe: *“consta como afiliado nº 25, pero no la baja, porque ni se halla tachada la línea correspondiente al referido asiento, ni aparece nota alguna, ni aclaración (...) lo que demuestra que a 18 de julio estaba dado de alta y era socio efectivo (...) diga lo que quiera el interesado”*¹⁰⁸². Esta última frase viene a responder al inculpado que había alegado su baja tiempo antes de julio de 1936.

Falange Española Tradicionalista tenía unos archivos muy completos con las militancias republicanas y de izquierdas en Segovia, por ejemplo, Joaquín Muñoz de Luna había sido afiliado al Partido Radical, y posteriormente *“según lista obra en el archivo de esta delegación a Unión Republicana”*¹⁰⁸³. De Eduardo Lucio *“se ignora si continuó afiliado al partido Republicano Socialista hasta el movimiento. En archivos de esta delegación no consta nada referente a su baja, tampoco consta si desempeñó cargos directivos, fue concejal desde el 17 de abril de 1931 hasta el 31 de julio de 1936”*¹⁰⁸⁴.

A pesar de las pruebas anteriores, en el año 1944 ya no informaban sobre militancias, utilizando cínicamente la excusa de que *“al no ser afiliado al Movimiento, se carece de antecedentes en el archivo de esta jefatura”*¹⁰⁸⁵.

¹⁰⁷⁸ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. 7/40, Manuel Conde López.

¹⁰⁷⁹ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. 32/40, Basilio Llorente.

¹⁰⁸⁰ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. Salomé Madrigal.

¹⁰⁸¹ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. Salomé Madrigal.

¹⁰⁸² Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Pol. 24/40, Gil Escribano Núñez.

¹⁰⁸³ Arch. Prov. Caja J/6350, Exp. Resp. Civ. 1/37. Joaquín Muñoz de Luna Carrasco.

¹⁰⁸⁴ Arch. Prov. Caja J/6347, Exp. Resp. Pol. Eduardo Lucio Cervero.

¹⁰⁸⁵ Arch. Prov. Caja J/6345, Exp. Resp. Pol. Dionisio García Arcones.

Algunos cargos denunciados por FET eran demostración de simple apatía ante el nuevo régimen; *“durante el movimiento no hizo ninguna prestación voluntaria ni con su persona ni con dinero (...) Dáse el caso, según mis noticias, que no sólo no acude a las manifestaciones patrióticas sino que en alguna ocasión presenció el paso de la bandera nacional sin saludarla”*¹⁰⁸⁶.

De los informes de la **Guardia Civil** son reseñables los informes que hicieron sobre los cargos públicos relacionados con el Frente Popular (interventores en las elecciones de febrero de 1936, regidores síndicos, jueces municipales o miembros de gestoras municipales) que más tarde fueron sobreseídos sin llegar a formar expediente¹⁰⁸⁷. En un formato repetido, el comandante del puesto únicamente informaba del cargo que había desempeñado y la localidad donde lo hubiera realizado¹⁰⁸⁸.

Los Testimonios

Como en otros procedimientos judiciales, los testigos podían ser de la defensa, propuestos por los inculpadados; o de la acusación, a propuesta del instructor o de las autoridades o particulares que habían formulado la denuncia. La citación a los testigos se hacía *“bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo le pararán todos los perjuicios que haya lugar”*¹⁰⁸⁹. Las amenazas para los que no cumplieran las normas eran continuas, se hicieron la norma común de todas las disposiciones legales desde el inicio de la contienda en la zona franquista.

En el interrogatorio a los testigos se aplicaba el Código de Justicia Militar, requiriéndoles si con anterioridad habían sido condenados o sujetos a proceso. Además, una pregunta obligada era si estaban afiliados a FET. En estos actos podríamos hablar de cierta manipulación del juez instructor a los testigos, porque algunas preguntas estaban claramente dirigidas. Se pueden ver varios ejemplos. Un testigo fue requerido para decir sobre un inculpadado *“si durante el movimiento ha hecho pública adhesión en cuantas ocasiones haya habido o por el contrario con su retraimiento ha dado a entender que no quería tener relación con lo que ideológicamente representaba y defendía”*. Para finalizar cuestionando si lo consideraba *“como persona de las llamadas de derechas”*¹⁰⁹⁰. Otro ejemplo más evidente si cabe, es sobre la conducta de la profesora Alfaya, la testigo fue preguntada *“si su actuación docente tuvo siempre un carácter marcadamente sectario”*. A lo que la respuesta no podía ser otra que *“ha actuado siempre en la forma que en la pregunta se dice”*¹⁰⁹¹.

Algunos testigos apoyaban la posición del inculpadado aminorando o negando los cargos y demostrando su dominio de la verborrea franquista, tan profusa de epítetos:

Pues es indiscutible que si bien tuvo el error de actuar como republicano por ser gobernador bajo el nefasto mando de la República, se apartó espiritualmente de ella en cuanto la

¹⁰⁸⁶ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. 7/40, Manuel Conde López.

¹⁰⁸⁷ Son denuncias enviadas por la Guardia Civil al juez instructor provincial de Segovia, fechadas en junio de 1941. Se han encontrado 91 denuncias, pero en otro documento bajo el epígrafe *Presuntos responsables políticos de la provincia de Segovia*, aparecen 657 personas (entre las que figuran las 91 citadas) que habían desempeñado distintos cargos relacionados con el FP, por lo que es más que probable que existieran, al menos, ese número de denuncias. Recogemos la lista en los anexos.

¹⁰⁸⁸ Arch. Prov. Caja J/6341. El documento en cuestión expresaba lo siguiente:

Tengo el honor de poner en conocimiento de VS que de los antecedentes tomados en esta villa, resulta que Juan Merinero Martín vecino de Cuéllar de 48 años de edad y de oficio labrador perteneció al Frente Popular, por haber estado afiliado al partido de Izquierda Republicana con el carácter de socio desempeñó el cargo de regidor síndico por nombramiento del Frente Popular.

Dios guarde a VS muchos años.

Cuéllar, 11 de junio de 1941.

El comandante del puesto.

¹⁰⁸⁹ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. 7/40, Manuel Conde López.

¹⁰⁹⁰ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. Salomé Madrigal Martínez.

¹⁰⁹¹ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. 26/40, Concepción Alfaya.

*criminal actitud del frente popular desató la catástrofe que ha tenido como compensación la gloriosa victoria forjada por nuestro providencial Caudillo que rápidamente ha de conducirnos a un formidable desarrollo de nuestra incomparable e insuperable España*¹⁰⁹².

Los inculpados o sus familiares procuraban el apoyo testifical de personas situadas o reconocidas por el régimen franquista. A veces, a través de intermediarios llegaban a personalidades que no les conocían directamente a los afectados, pero intercedían por ellos. Un testigo así lo reconocía en su declaración *“desconozco sus ideas políticas, pero por persona allegada a él, que lo conoce perfectamente y que me merece el máximo respeto por su profunda adhesión a nuestro glorioso movimiento nacional...”*¹⁰⁹³.

7. 6. 4. Las sentencias

El juez disponía de un mes para la finalización del expediente, que incluía la declaración del inculcado, de los testigos y los informes preceptivos de las autoridades. Concluido el expediente, el instructor debía presentar un informe, junto con el expediente, al Tribunal Regional. Al contrario que en el procedimiento anterior de responsabilidad civil, ahora el instructor no hacía propuesta de sanción sino que se limitaba a efectuar una valoración de los hechos y circunstancias modificativas de la responsabilidad (agravantes y atenuantes).

En el Tribunal Regional, el vocal ponente (que siempre era el representante de la carrera judicial) contaba con 5 días para estudiar el expediente proponiendo la anulación de lo actuado, la suspensión de la tramitación, ampliar las pruebas o los informes, o depositar la documentación en la secretaría durante tres días para que el inculcado (o sus hijos, esposa o representante) la estudiase y presentara en 48 horas un escrito de defensa. Aunque se daban facilidades para que los inculcados no tuvieran que desplazarse a la sede regional de Madrid, pudiendo ver el expediente en el Juzgado de Instrucción de Segovia (con lo que los afectados de la provincia tenían que viajar hasta la capital), el plazo era demasiado breve para que los interesados pudieran conseguir documentación exculpatoria o personas que declararan en su favor. Este escrito de defensa podía hacerlo personalmente o por medio de mandatario y valerse de abogado, pero los honorarios del mismo serían *“por cuenta del que lo mandare”*¹⁰⁹⁴.

Para finalizar el proceso, el Tribunal Regional disponía de 5 días para dictar sentencia motivada. Si ésta no era aprobada por unanimidad (de los 3 miembros) pasaba al Tribunal Nacional si era absolutoria. De lo contrario, si era condenatoria sólo iba al Nacional si se hubiera dictado sin audiencia o defensa del inculcado.

En las sentencias se hacía un resumen de los cargos, tanto de los probados como de los no probados, de los bienes, ingresos y deudas, cargas familiares. Se adscribía la responsabilidad a un apartado del art. 4, con la calificación de muy grave, grave o leve; con expresión de atenuantes y agravantes. Se imponía la sanción en sus dos vertientes: económica y restrictiva de libertad.

De las pocas sentencias que se han encontrado (pues pocos son los expedientes que cuentan con ella), han aparecido algunos ejemplos de sentencias menos graves. De Basilio Llorente se reconocía *“sin que aparezca estuviera afiliado a partidos, se condujo como si sus ideas fueran de izquierda, y representó a la candidatura de este matiz político, fue interventor en elecciones de febrero, en las que además votó a dicha candidatura”*¹⁰⁹⁵.

¹⁰⁹² Testificación del general Espinosa de los Monteros en favor de Mariano Quintanilla, recogido en su Exp. Resp. Civ. 45/37, Arch. Prov. Caja J/6349.

¹⁰⁹³ Ver nota anterior.

¹⁰⁹⁴ Arch. Prov. Caja J/6353, Exp. Resp. Pol. 19/40, Andrés Pozas. Notificación al inculcado de la parte dispositiva del auto dictado por el TRRP con fecha 22 de marzo de 1941.

¹⁰⁹⁵ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. 32/40, Basilio Llorente.

Carlos López había sido *“presidente de Unión Republicana hasta el movimiento, siendo persona de confianza dentro del referido partido”, pero “durante el movimiento contribuyó a todas las suscripciones y prestó servicios de su profesión en FE y cuartel de milicias”*¹⁰⁹⁶. La sanción por responsabilidades *menos graves* fue de inhabilitación especial por 4 años y 450 pts. de multa para el primero y 2.000 pts. más inhabilitación de 3 años para el segundo.

No hay mucha diferencia entre las condenas anteriores con las efectuadas a las responsabilidades consideradas leves. Horacio Sánchez fue sancionado con inhabilitación de 3 años y 1.000 pts. de multa porque *“se ignora si afiliado a partido, si bien su familia es de abolengo republicano, al parecer se celebraron algunas reuniones por afiliados a partidos del Frente Popular en su domicilio, y él mismo hacía alguna propaganda a favor de tales partidos, aun cuando no tuvo relación con los individuos destacados y peligrosos de la localidad. Estuvo detenido 22 meses por la autoridad militar”*¹⁰⁹⁷. Fructuoso Miño fue considerado *“peligroso por sus ideas comunistas, cabecilla de cuantas manifestaciones se celebraban en San Rafael, cuando se inició el movimiento paseaba por las calles pistola en mano alentando a los suyos y amenazando a las personas de orden, además fue inductor de la recluta de individuos para ir a Prados”*¹⁰⁹⁸, pero, a pesar de que su actuación fue considerada como leve –sorprendentemente, en comparación con los casos anteriores–, su sanción alcanzó 5.000 pts.

Gregorio Olalla fue elegido concejal en 1931 en representación de UGT. Por su cargo político se podía intuir que su responsabilidad sería calificada como grave, en cambio fue considerada leve porque aunque *“sus ideas políticas tenían tendencia izquierdista, pero sin afiliarse a este partido (...) su actuación como tal concejal se limitó a la labor administrativa, sin que hiciera ostentación de sus ideas”*¹⁰⁹⁹. Fue sancionado con inhabilitación especial política o sindical por 2 años y 150 pts.

La valoración de los bienes para establecer la sanción se debía hacer justipreciando el valor de los mismos con arreglo al valor que tuvieran en julio de 1936. Aunque la Ley disponía que se habían de valorar los bienes para establecer la sanción, éstos no siempre se tenían en cuenta. A pesar de que todos los informes (Guardia Civil, Comisaría, FET y alcalde) coincidían en que Manuel Huertas carecía de bienes sin más ingresos que los de su profesión de jornalero, fue sancionado con 10.000 pts. que *“se harán efectivas en la forma dispuesta en la Ley de 9 de febrero, en relación con el Código Penal común, adoptando para ello las medidas pertinentes”*¹¹⁰⁰.

La sentencia definitiva era notificada al inculcado, bien personalmente si se conocía su domicilio o, en caso contrario, por los boletines oficiales del Estado y de la provincia. Si la sentencia era condenatoria, otorgaba un plazo de 20 días para su abono en la delegación provincial de Hacienda (en la cuenta especial de la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas) o para la presentación de solicitud de pago a plazos. De no abonarse la sanción, el Tribunal Regional ordenaba al Juez Civil Especial los embargos y medidas precautorias que no se hubieran hecho anteriormente.

El Nuevo Estado daba facilidades para el pago de las sanciones. Se podía abonar la multa a plazos, proponiendo incluso la periodicidad y la cuantía de las aportaciones. Tales eran los beneficios del art. 14 de la Ley de 19 de febrero de 1942, que se perdían si no se abonaba algún plazo o éste se demoraba.

En los casos de inculcados que no poseían bienes, si llegado el momento del embargo no existían bienes que incautar, debía suspenderse la diligencia. Como se

¹⁰⁹⁶ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. 23/40, Carlos López Alba.

¹⁰⁹⁷ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 173/37, Horacio Sánchez.

¹⁰⁹⁸ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Pol. Fructuoso Miño.

¹⁰⁹⁹ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Pol. Gregorio Olalla.

¹¹⁰⁰ Sentencia contra Manuel Huertas, recogida en su Exp. Resp. Pol. Caja J/6345.

recogía los autos: “*resultando que decretado el embargo no pudo llevarse a efecto por carecer de bienes*”¹¹⁰¹.

Paralelamente a la aplicación de la sanción económica, el tribunal ordenaba que se ejecutaran las sanciones restrictivas de la actividad y limitativas de la libertad de residencia, cuando éstas acompañaban a la multa.

Seguidamente se publicaba un edicto anunciando a aquéllos que tuvieran derechos sobre alguno de los bienes de los sancionados, que disponían de 30 días para efectuar las correspondientes alegaciones ante los tribunales. Para evitar la avalancha de las denominadas tercerías (que eran las alegaciones de los terceros, es decir, las personas que tuvieran algún derecho sobre bienes de los sancionados), la Ley de Responsabilidades Políticas amenazaba con el 10% del valor del bien reclamado, además del 5% que ya preveían las leyes civiles.

La pieza de responsabilidad civil se ejercitaba siguiendo las normas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). La relación jurada de bienes debidamente tasados por los peritos designados por el abogado del Estado (representante de la administración), así como las tercerías, pasaban a la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas, donde se hacía una valoración de la situación del mercado y teniendo en cuenta las instrucciones del Gobierno, notificaban al juez a qué bienes se aplicaría la ejecución de la sanción.

Los bienes objeto de actuación se remitían a la situación de 18 de julio de 1936 para evitar “maniobras” de los inculpadados o sus familiares, por lo que declaraban nulas las operaciones posteriores a aquella fecha. Por ejemplo, las ventas de los bienes sobre los que se había ejecutado la sanción.

7. 6. 5. Los recursos

Una vez notificada la sentencia al expedientado, éste podía presentar un recurso de alzada contra la misma (ante el Tribunal Regional), pero este derecho no lo podían ejercer los sancionados siempre que quisieran, pues sólo era posible si detectaban “*vicio de nulidad en el procedimiento o se le hubiera negado la práctica de alguna diligencia que hubiera producido indefensión manifiesta o injusticia notoria en el fallo*”¹¹⁰². Además, sólo disponía de un plazo de 5 días para realizarlo, con lo que la dificultad se agravaba. Para seguir en la línea intimidatoria tan propia del régimen, el inculpadado era amenazado por una multa de hasta el 10% de la sanción si el Tribunal Nacional confirmaba la sentencia condenatoria. Con lo que no eran muchos inculpadados los que se atrevían a recurrir. En caso de recurso de alzada, el Tribunal Nacional disponía de 20 días para emitir su sentencia.

Esta posibilidad de recurso, aunque arriesgada, por lo menos era real, al contrario del D. de 10 de enero que no preveía dicha eventualidad. Ahora, con la Ley de 9 de febrero se podía ejercer también el recurso de revisión sobre las sanciones por las “*responsabilidades llamadas hasta ahora, civiles*”. Pero este recurso era “*únicamente de la sanción, ya que el nuevo fallo no podrá ser absolutorio, pero podrá el tribunal sustituir la incautación de bienes acordada por otra sanción económica más benigna, si bien esta será compatible con las demás de los grupos 1º y 2º del art. 8º*”¹¹⁰³.

La ley era muy clara anunciando que *el nuevo fallo no podrá ser absolutorio*, lo que muestra que la idea del perdón no estaba en las mentes de las autoridades franquistas. Es más, el término absolución se utilizó en contadas ocasiones, porque implicaba perdón o declaración de no responsabilidad. Por el contrario, la fórmula más empleada fue el

¹¹⁰¹ Arch. Prov. Caja J/6356. Exp. Resp. Pol. 28/40, Manuel Prieto Tapia.

¹¹⁰² Art. 56. Ley de Responsabilidades Políticas.

¹¹⁰³ Ley de Responsabilidades Políticas, Disp. Trans. 6ª. El subrayado es mío.

sobreseimiento que venía a ser como dar un portazo sobre los trámites anteriores. El Estado admitía que no era rentable condenar a los que no tenían bienes para pagar las sanciones, pero no reconocía nunca que las responsabilidades que ellos se habían inventado para castigar a los oponentes eran totalmente injustas y contrarias al fin de la reconciliación.

Los recursos de revisión repercutían únicamente en quienes los habían ejercido, aunque formaran parte de expedientes colectivos. Por ejemplo de los 12 sancionados en el 97/37, sólo tres recurrieron y vieron su sanción sobreseída, en cambio el resto, que no lo efectuaron, no se beneficiaron del sobreseimiento.

En armonía con los plazos del resto de trámites de la jurisdicción de responsabilidades políticas, pasaban años desde la presentación del recurso hasta la resolución del mismo. La mayoría de ellos fueron registrados a lo largo de 1940, y la sentencia de sobreseimiento no llegó hasta 1944.

Si conseguir la rebaja o incluso la anulación de la sanción era tarea larga y difícil, que esta sentencia se llevara a efecto lo era aún más. Por ejemplo, en el caso referido de Rufino Bermejo, la sentencia de sobreseimiento dictada en julio de 1944, fue notificada, a instancias del inculpado (porque de lo contrario no se le hubiera notificado) en marzo de 1952. Cumplido esto, el interesado solicitó que se ejecutara la sentencia, lo que ordenó la Audiencia Provincial en mayo de 1953. Pero parece que no surtió efecto dicha orden porque en agosto de 1955, la Audiencia dictó otra para la ejecución de la sentencia que, no olvidemos, era de julio de 1944. A los 8 meses, ya en marzo de 1956, el fiscal hizo un recurso de reposición contra aquélla, diciendo que *“en el día de hoy se ha enterado”* de la resolución. Pero, lo que es más grave, la historia finalizó con el auto de la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas, de 10 de mayo de 1957, que aceptaba el recurso del fiscal, contrariando la sentencia absolutoria de 1944.

Distinto problema tuvo Agripino Martín, cuya sanción había sido sobreseída en 1944 y comunicada en 1946, vio con sorpresa como, dos años después, en 1948, se publicaba en el *BOP* un edicto con la subasta de una finca de su propiedad, de las que había recuperado tras el sobreseimiento. Tuvo que recurrir ante la Audiencia Provincial para que comunicara a la delegación de Hacienda que el propietario de la finca había recuperado la libre disposición de sus bienes.

7. 7. Los indultos

A partir del Decreto de 13 de abril de 1945, por el que se suprimió la jurisdicción de responsabilidades políticas, se iniciaron los trámites para conseguir los indultos a los particulares sancionados. Además se aplicó la Orden de 27 de junio de 1945 y la Ley de Indulto de 18 de junio de 1870. Pero la mayoría de los indultos no llegaron a Segovia hasta 1959, veinte años después del fin de la guerra civil.

No se conocen todos los datos sobre este aspecto, pues los expedientes están archivados en el AGA, no siendo accesibles todavía algunos de ellos, pues no han pasado los 50 años preceptivos. Por ejemplo, en la caja 81 que contiene 69 expedientes, hay 14 no accesibles. De los que se han consultado aparecen los siguientes indultos concedidos:

Cuadro nº 30: Los indultos por responsabilidades civiles y políticas

Años	Nº indultos
1946	1
1952	2
1959	37
1960	5
1961	1

Como ocurría con el resto de trámites, el de indulto, era muy lento. Hubo algunos expedientes iniciados en 1947 que fueron resueltos en mayo de 1953. En cambio, a finales de los años cincuenta esta medida de gracia fue impulsada por el Gobierno, quien dio las instrucciones a los fiscales para que promovieran el expediente de indulto ante la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas. A partir de entonces los trámites fueron mucho más rápidos, fruto de una voluntad del Gobierno de acabar de una vez con el procedimiento de responsabilidades políticas. Hubo expedientes de indulto que se iniciaron en junio por el fiscal y el decreto fue otorgado en agosto del mismo año.

Los expedientes de indulto, al contrario de lo que sucedía con los recursos, afectaban a todos los inculcados de un mismo expediente. El decreto estaba firmado por Franco, de acuerdo con el parecer del fiscal y la Comisión Liquidadora, previa deliberación del consejo de ministros y a propuesta del ministro de Justicia. Todos los decretos aparecían en plantillas en las que se explicaba “...razones de Pública conveniencia aconsejan la concesión de indulto de la parte aún no cumplida de la condena impuesta al sancionado”¹¹⁰⁴. Este argumento da a entender que no se indultaba por convencimiento sino por la necesidad de dar finalización a un proceso que se había prolongado demasiado tiempo dando más problemas de los esperados en un principio.

Como se recoge en el párrafo anterior, pocos indultos eran totales (lo que implicaba la devolución de todos los bienes embargados), la mayoría eran parciales que perdonaban la parte de la sanción que restara de abonar. Por ejemplo de los bienes embargados a Prudencio de Benito se obtuvo en la subasta 197 pts. que fueron entregadas en la Caja de Depósitos de Segovia y remitidas a la Comisión Central Administradora de Bienes, en 1937. En virtud del indulto concedido, la cantidad depositada a disposición de la Jurisdicción de Responsabilidades Políticas quedó adjudicada al Estado como “pago de parte de la sanción antes de otorgarse el indulto del resto no cumplido de sanción”¹¹⁰⁵. En suma, fue indultado de las 803 pts. que le quedaban de pagar hasta las 1.000 pts. que le habían impuesto como multa.

7. 8. Análisis del proceso de responsabilidades políticas

Problemática del proceso

A la hora de analizar en su conjunto el procedimiento de responsabilidades políticas, hay que destacar lo farragoso del proceso debido a diversas razones: volumen de expedientes, los distintos organismos implicados, la falta de presupuesto que originaba carencias de personal en las distintas instituciones, etc. En el estudio de este procedimiento se ha descubierto que a lo largo de los distintos trámites, iban surgiendo multitud de pequeños problemas que lo hacían interminable.

Una de las contrariedades iniciales más usuales en la incoación del expediente era conocer la prisión donde cumplía sentencia el inculcado, al objeto de tomarle declaración y

¹¹⁰⁴ AGA, Justicia, 39.002, Caja 1284. Decreto de indulto de Salustiana Benito.

¹¹⁰⁵ AGA, Justicia, 39.001, Resp. Pol. Aud. Prov. de Segovia. Caja 81. Exp. de indulto de Prudencio de Benito.

después notificarle la sanción. Podían pasar varios meses hasta que el instructor averiguaba esta incógnita. Al final recurría a los familiares del inculcado para conocer el destino penitenciario de aquél.

Siendo preceptiva la publicación del anuncio de incoación de expediente en el *BOE* y *BOP*, este requisito originaba retrasos en los trámites, porque pasaban meses hasta que se producía ésta. Además, era necesario que los jueces remitieran al *BOE* escritos para recordar dicha publicación. Se han observado varias quejas del instructor en este sentido: *“habiéndose reiterado la citada inserción (...) diríjase oficio al tribunal regional en concepto de queja a fin de que por el mismo se tomen las medidas que considere oportunas”*¹¹⁰⁶.

Estos retrasos se produjeron hasta bien entrados los años cuarenta, cuando, en teoría, ya había descendido el abultado volumen de expedientes de responsabilidades políticas. El juez de instrucción de Segovia envió el edicto al *BOE* el 1 de junio de 1944, lo recordó el 30 de octubre de 1944 y, en vista del tiempo trascurrido sin publicar el edicto, hizo una reclamación formal el 23 de enero de 1945.

No sólo la publicación en el *BOE* originaba los retrasos, también los producían la declaración de los testigos, los informes de las autoridades y cualquier otro trámite; lo que aparecía recogido en la sentencia: *“cumplidas todas las formalidades salvo el plazo de instrucción del expediente motivado por el retraso de las diligencias, no imputable al instructor”*¹¹⁰⁷.

La notificación de la sanción debía ser realizada por el secretario del Juzgado. De lo contrario, si el inculcado reclamaba, el tribunal la declaraba nula y debía repetirse la diligencia. Hay un caso de este tipo que originó la advertencia del tribunal al secretario infractor, para que en lo sucesivo *“cuide de practicarlas conforme a la ley, bajo apercibimiento de ser corregido disciplinariamente”*¹¹⁰⁸.

A veces, el gobernador civil se implicaba o solicitaba premura para la resolución de trámites, consciente y conocedor de que si no había impulso oficial las diligencias se demoraban por espacio de años. El mismo día que recibió el escrito de Salomé Madrigal solicitando la apertura del comercio que habían embargado a su marido, la máxima autoridad provincial requirió al instructor para que *“gestione la pronta resolución del expediente para poder normalizar su vida y la de sus hijos (...) si fuera necesario alguna diligencia por ese juzgado vea si es posible resolver su situación con la celeridad que permita la ley”*¹¹⁰⁹.

Como los recursos se presentaban ante el Tribunal Nacional, éste requería para su resolución el expediente al Tribunal Regional. Estos envíos se demoraban demasiado tiempo. Por ejemplo, un expediente fue reclamado el 30 de enero de 1942, no habiéndose recibido el 18 de diciembre del mismo año, provocó la misiva del Nacional para que se lo enviaran *“ruego a VE removiendo cuantos obstáculos se opongan a ello lo remita...”*¹¹¹⁰.

Muchos expedientes quedaron cortados en los años 1940 y 1941, en el periodo de mayor apogeo represor, pues se iniciaban los trámites con entusiasmo, pero transcurrido breve tiempo, los distintos organismos estaban atascados por el ingente volumen de trabajo. No se tramitaron más diligencias hasta varios años después, pasado el año 1943, en que la Audiencia Provincial recogió los expedientes retomando los trámites en el punto en que hubieran quedado: reclamando el pago de las sanciones, notificando las sentencias o ejecutando los embargos. Había inculcados que, entretanto, se habían trasladado a vivir a otras localidades o habían fallecido, con lo que la justicia civil debía reiniciar la búsqueda de los domicilios actuales de los expedientados o de sus herederos.

¹¹⁰⁶ Escrito del juez instructor al TRRP, fechado 20 de enero de 1940. En Exp. Resp. Pol. Salomé Madrigal.

¹¹⁰⁷ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Pol. Pedro Peña. Del mismo modo aparecía recogido en la sentencia cualquier otro retraso, como el aludido de publicación en el *BOE*.

¹¹⁰⁸ Arch. Prov. Caja J/6348, Exp. Resp. Civ. 171/37, Segundo Vázquez.

¹¹⁰⁹ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Pol. de Salomé Madrigal.

¹¹¹⁰ Arch. Prov. Caja J/6354, Exp. Resp. Civ. 175/37, Santiago Muñoz.

La diversidad de organismos (Tribunal Nacional, Tribunales Regionales, la Subsecretaría de Justicia donde se resolvían las tercerías, el Juez Civil Especial, los Juzgados de Instrucción y la Comisión Liquidadora) originaba cierto descontrol y que los expedientes se “traspapelasen” de un organismo a otro. Esto se vio agravado con el incendio que se produjo en el local del Tribunal Regional, que motivó el traslado de expedientes con el consiguiente trastorno.

Por si no eran suficientes complicaciones los distintos organismos existentes, a veces se enviaba por error la documentación a otras provincias: Toledo, Zaragoza, Valladolid,...

Las devoluciones de los bienes embargados se hacían también muy trabajosas, con demoras excesivas. Cuando los bienes habían sido subastados, el Estado devolvía el dinero ingresado en la adjudicación de la subasta. Se aplicaba así el D. de 2 de diciembre de 1939 sobre revisión de sentencia, en el que se disponía que cuando los bienes ya habían sido adjudicados en subasta, se debía mantener el respeto de adjudicación de los bienes y sustituir su devolución por el valor obtenido en la subasta e ingresado en la cuenta especial de responsabilidades políticas¹¹¹¹. El importe obtenido generalmente era el 75% de la tasación hecha en la fecha de la subasta, casi siempre en 1937¹¹¹². Por tanto, al no reintegrarse con intereses, los inculpadados perdían todo el valor de la subida del coste de la vida durante los años que hubiera durado el embargo (en muchos casos hasta 20 años).

Uno de los ejemplos más claros es el reseñado de Rufino Bermejo. En 1957 le devolvieron lo obtenido en la subasta, que suponía el 75% del valor tasado de los dos autobuses incautados en 1937. Por tanto le reintegraron, 20 años después y sin intereses, 5.093,32 pts., que si en 1937 difícilmente podían ser suficientes para comprar dos autobuses, en 1957 no representaban la mitad del valor de los bienes embargados, y ahora no podía adquirir los vehículos para reemprender el negocio del que se había visto despojado.

Si a un inculpadado le habían embargado metálico de alguna cuenta bancaria y además bienes subastados, se daba el caso de devolución de una cantidad y la otra se extraviaba. El interesado tenía que reclamar dicha cantidad, con lo que el proceso seguía prolongándose debido a la diversidad de organismos que habían intervenido en el procedimiento. A Pedro Hurtado le alzaron los embargos en marzo de 1939, pocos días después le devolvieron la mayoría de los bienes, dejando 136,70 pts. sin reintegrar. En 1947 se produjo el sobreseimiento del expediente, descubriendo el juez que el Estado adeudaba todavía 136,70 pts. al inculpadado. Solicitado el reingreso a la delegación de Hacienda, ésta dijo que no era competente, remitiéndole a la Intervención General del Estado, donde le dijeron al juez que allí sólo habían recibido ingresos de la Comisión Central Administradora de Bienes y no de las comisiones provinciales, que habían pasado a los juzgados instructores de responsabilidades políticas y, tras la reforma de 1942, de nuevo a los juzgados ordinarios.

Ante este embrollo, la Comisión Liquidadora dictaminó, en octubre de 1947, que se le preguntara al interesado si le habían devuelto el dinero reclamado, en caso contrario, autorizaba al Juzgado de Instrucción a realizar la devolución y a cancelar las anotaciones de embargo. Conseguida por fin la devolución, sólo quedaba la cancelación. Hicieron falta otros 12 años para ello: en 1959 el Juzgado de Instrucción certificó que no estaban inscritas las cancelaciones de las anotaciones preventivas de embargo, aunque, dadas las circunstancias y las fechas de aquéllas, debían estimarse caducadas por el art. 86 de la Ley Hipotecaria, quedando únicamente que se anotara formalmente en el Registro, “*a petición de parte interesada*”, es decir, el inculpadado tenía que seguir insistiendo para que todo volviera a la normalidad. Lo más chocante del caso es que cuando fueron a anotar las

¹¹¹¹ D. 2 diciembre de 1939, apdo b) norma 5ª. BOP, 25 de diciembre de 1939.

¹¹¹² Ya se ha explicado que las 1ª subastas quedaban desiertas, y en la 2ª se efectuaba una rebaja del 25% del valor total de los bienes sacados a subasta.

cancelaciones al libro registro de depósitos, en éste figuraban canceladas las 136,70 pts., con fecha de 26 de febrero de 1947, recordando incluso el funcionario de la delegación de Hacienda haber devuelto la cantidad al inculpado.

Hay otros casos similares, en que los inculpados y sus familiares fueron perjudicados por la lentitud y los olvidos de la Justicia. En febrero de 1939 se dictó resolución de cancelación de los embargos de las propiedades de dos hermanos del sancionado Pedro García (que se habían visto perjudicados por el embargo de los bienes que pertenecían a los tres hermanos). Posteriormente, en abril de 1943, se hizo una copia certificada de la resolución anterior y se alzaron los embargos. Pero los bienes no fueron puestos en posesión de los propietarios, ni cesado la administración judicial de los mismos. En septiembre de 1945, fecha del último documento del expediente, todavía no se había solucionado este asunto.

Análisis del proceso de Responsabilidades Políticas

Hemos encontrado, y por tanto consultado, 159 expedientes de responsabilidades políticas, la mayoría en el Archivo Provincial de Segovia (de los fondos de la Audiencia Provincial y de los Juzgados de Sepúlveda, Riaza y Santa María de Nieva) y el resto en el AGA (procedentes de los fondos del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas). No todos los expedientes están completos.

Se conoce la resolución definitiva de 132 expedientes. La cantidad total de las sanciones económicas conocidas se cifra en 60.850 pts. Tan sólo hay constancia de que fueron ejecutadas 7 sanciones, pagadas por los inculpados, con un importe total de 20.350 pts.

En octubre de 1941 se habían incoado 72 expedientes, de los que 42 habían sido terminados por el juez instructor, pero no todos ellos estaban sentenciados. Por la documentación consultada, sabemos que antes de la reforma de 1942 fueron resueltos 21 expedientes, de los que resultaron un total de 17 sanciones económicas (de ellas 10 acompañadas de inhabilitación) y 4 absoluciones.

En enero de 1943, cuando se hizo efectiva la reforma, estaban en la Audiencia Provincial 137 expedientes en fase de tramitación, 42 ya juzgados, y quedaban, pendientes de incoación, otros 658¹¹¹³. Esta cantidad se corresponde con la relación aludida anteriormente de “presuntos responsables políticos”, fechada en julio de 1941¹¹¹⁴, que comprendía a los segovianos de la provincia (pues no hay ningún vecino de la capital) que habían tenido relación con el Frente Popular: interventores en las elecciones de febrero de 1936, regidores síndicos, jueces municipales o miembros de gestoras municipales en representación de la misma coalición.

A partir de 1943 se aceleró el proceso de responsabilidades políticas, debido en gran medida a los sobreseimientos. Estos eran dictados, en su inmensa mayoría, por los tribunales judiciales civiles, que en aplicación de la Ley de 19 de febrero de 1942, eran los que tenían la potestad de hacerlo. Con la reforma de 1942 se aligeró el volumen de un modo expeditivo, pues en un par de meses de 1943 fueron sobreseídas 91 denuncias de la Guardia Civil (en aplicación del art. 6º de la Ley: por informe contrario del fiscal), de las 657 que estaban pendientes desde junio de 1941.

Los sobreseimientos, que se aplicaban indistintamente a los expedientes de responsabilidad civil y a los de responsabilidad política, eran dictados por los jueces de instrucción y debían ser aprobados por la Audiencia Provincial, previo informe favorable del fiscal. De aquí pasaban para su aprobación definitiva a la Comisión Liquidadora, si bien este trámite no aparece en todos los expedientes.

¹¹¹³ AGA, Justicia, Responsabilidades Políticas (TN), Cpta. 1492.

¹¹¹⁴ La referida relación de “presuntos responsables políticos”, son unas hojas sueltas que tiene el director del Archivo Provincial encima de su mesa, no están guardadas en ninguna carpeta como el resto de documentación. Aunque hay 658 nombres, se corresponden con 657, pues hay un presunto responsable repetido. La lista incluye 32 alcaldes, 66 concejales, 533 interventores y 9 jueces municipales.

Muchos de los numerosos expedientes de responsabilidad civil que estaban resueltos y con sanción recaída, pero que no había sido ejecutada, se reiniciaron por la Audiencia Provincial en los primeros meses de 1943. Ésta remitía al juez de instrucción de Segovia la pieza de embargo y el expediente para que se ejecutara el embargo, por ser firme el fallo y haber sido notificada la sanción al inculpado. El juez de instrucción hacía una diligencia para que se cumpliera lo ordenado. Pero, en algunos de ellos no se produjeron más actuaciones hasta 1946, cuando se concluyó el expediente porque *“en vista del resultado que ofrecen las presentes actuaciones (que no aparecen en ningún papel del expediente), se declara concluso este expediente y (...) proceda a su archivo”*¹¹¹⁵. De este modo se archivaron estos expedientes sin haberse producido el embargo de los bienes de los inculpadados ni éstos haber pagado la sanción.

Las causas de sobreseimiento estaban determinadas por la Ley de 19 de febrero. En primer lugar, por la aplicación del art. 4, que establecía dos vías: por un lado, los condenados por tribunales militares a penas inferiores a 12 años (de los que sólo se ha encontrado un caso) y, por otro, los que tenían escasa responsabilidad política (de los que han aparecido 2 expedientes). Por ejemplo, fue sobreseído el expediente a Florentino del Río que le había sido incoado por propaganda del Frente Popular antes del movimiento, *“sin haberse probado con posterioridad al mismo hiciese ninguna manifestación en contra de los ideales de derechas”*. Además se le aplicó también el apartado c) *“en atención a la mera significación de afiliado a las organizaciones políticas a que se refiere y la escasa actividad proselitista realizada”*¹¹¹⁶.

En segundo lugar, el art. 6º que introducía la figura del fiscal en este procedimiento de represión económica, preveía que su único informe desfavorable originaba el sobreseimiento del expediente, sin efectuar ningún trámite más. Así ocurrió con las reseñadas 91 denuncias de la Guardia Civil a los cargos del Frente Popular.

Una tercera vía establecía el art. 8: el Juzgado debería acordar el sobreseimiento del expediente cuando de la valoración de bienes practicada y de los informes adquiridos sobre la situación económica y social apareciera que *“el inculpado era insolvente o que atendía a sus necesidades y a las de los familiares a su cargo con un jornal o retribución equivalente, o con el producto del arrendamiento de tierras que no rebasase el doble jornal de un bracero en la localidad de su residencia, aún cuando tuviese algunos bienes que sumados a los del cónyuge y familiares que con él vivieran, no excediesen de 25.000 pts.”*¹¹¹⁷. Este requisito se aplicó en 18 expedientes.

La notificación de los sobreseimientos también se demoraba en exceso, muchos de los decretados en 1943, no se comunicaron a los interesados hasta 1946. Tras el sobreseimiento se decretaba la libre disposición de los bienes que habían sido embargados y la cancelación de las anotaciones preventivas del embargo en el Registro de la Propiedad; supeditándose la devolución de los depósitos a la rendición de la liquidación definitiva de su gestión por el administrador judicial. Este trámite también se demoraba varios años antes de llevarse a cabo. Hay casos en que el administrador judicial hizo la liquidación en enero de 1945, y no citaron al inculpado hasta enero de 1956 para que dijera si estaba de acuerdo con la referida liquidación.

¹¹¹⁵ Así ocurrió con los expedientes incoados a las empresas Garriga y las de los periódicos, *La Libertad*, *Claridad*, *El Socialista*, *El Sol* y *La Voz*, *El Liberal* y *Política*. Arch. Prov. Caja J/6342.

¹¹¹⁶ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 166/37, Florentino del Río.

¹¹¹⁷ Art. 8º, Ley de 19 de febrero de 1942.

8. LA DEPURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

La depuración de los funcionarios de la administración fue uno de los objetivos prioritarios de los militares sublevados. Ya desde los primeros momentos de la sublevación se elaboraron listas en los establecimientos oficiales de los funcionarios que no acudían a sus puestos de trabajo (al secundar la huelga general convocada por UGT y CNT para oponerse al movimiento militar) para su posterior sanción por desafectos.

En su lucha por hacer desaparecer cualquier vestigio republicano de todos los rincones de la sociedad española, un campo fundamental fue la administración pública, a todos los niveles, del Estado, de la provincia y de los municipios.

Morente cree que las depuraciones fueron una de las *“formas preferidas del Nuevo Estado para ajustar las cuentas a los vencidos en la guerra”*¹¹¹⁸. Aunque sus efectos iban más allá del carácter vengativo, porque a través de la selección ideológica de los trabajadores de los distintos sectores de la administración se perseguía no sólo el castigo de los opuestos a la sublevación o desafectos al régimen, sino también la intimidación de los indecisos –o indiferentes– y la promoción de los adictos. Por una parte pretendía colocar en puestos clave a personas fieles y, por otra, premiar con un puesto de trabajo a los que habían colaborado con el bando nacional en la guerra.

Podríamos distinguir tres fases en el proceso depurador: una primera depuración provisional, sin una legislación que la sustentara; después una depuración de guerra, ya con unas normas establecidas; y por fin la depuración exhaustiva y metódica, en aplicación de la Ley de 10 de febrero de 1939 que se llevó a cabo especialmente en las zonas de España que habían permanecido bajo la legalidad republicana a lo largo de la guerra. Por tanto, esta última fase afectó muy poco a la provincia de Segovia.

En este capítulo vamos a ver las características generales de la depuración franquista, sus objetivos, los procesos, los afectados, las sanciones y, por último, explicaremos un poco más a fondo (mediante el estudio de unos grupos profesionales concretos) los distintos ámbitos de aplicación en la provincia de Segovia: el Magisterio Nacional, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital.

En los anexos se recoge el listado de todos los funcionarios depurados en la provincia de Segovia que aparecieron publicados en los diarios oficiales, *BOE* y *BOP*. En estas listas figuraban todos los empleados públicos dependientes de la administración central, provincial y de algunos municipios. Pueden echarse en falta algunos funcionarios municipales de diversas localidades de la provincia, cuyo cese o suspensión provisional no se publicó en los boletines de la provincia.

8. 1. La Depuración provisional

Bajo este epígrafe se expone la primera depuración, podríamos denominar de "choque", realizada, de una forma un tanto precipitada, por las nuevas autoridades militares provinciales, comandante militar de la plaza, coronel José Tenorio y gobernador civil, comandante Joaquín España.

En Segovia, desde los primeros momentos de la sublevación, se advirtió un notable empeño, por parte de las autoridades militares, de contrarrestar la oposición de los trabajadores que se declararon en huelga general para combatir el movimiento militar. Aunque Arrarás no cree que actuaran con la debida contundencia, pues escribe concretamente que, ante la huelga general, *“las autoridades no procedían con la energía exigida por las circunstancias”*¹¹¹⁹.

¹¹¹⁸ MORENTE VALERO, Francisco. *La escuela y el Estado Nuevo: la depuración del magisterio nacional (1936-1943)*. Ámbito, Valladolid, 1997, pág. 187.

¹¹¹⁹ ARRARÁS, J., op. cit., pág. 335.

El primer Bando del comandante militar para acabar con la huelga fue el 27 de julio¹¹²⁰. En él amenazaba con la baja en sus nóminas a todos los funcionarios públicos (del Estado, provincia o municipio) que antes del 1 de agosto no se reintegraran a sus trabajos. Lo mismo les ocurriría al resto de trabajadores de empresas públicas y particulares que no se reincorporasen.

El comandante España hizo un seguimiento a la aplicación de este Bando, a través de una circular de 22 de septiembre dirigida a los jefes de todos los centros de la provincia, dependientes del Estado. En ella pedía le remitieran la relación nominal de los funcionarios cesados en virtud del Bando de 27 de julio¹¹²¹. Pero esta norma tuvo poca repercusión en Segovia, pues sólo afectó a los siete empleados de la Diputación Provincial que no se habían presentado a sus puestos de trabajo antes del 1 de agosto (como explicaremos más adelante) y al juez instructor de Sepúlveda, Juan Becerril y Antón Miralles, cesado ya en una fecha totalmente extemporánea, para el Bando que lo ocasionó, el 2 de octubre de 1936¹¹²².

La depuración propiamente dicha del personal desafecto, por parte de las autoridades militares provinciales, se inició con una expeditiva circular del comandante España, fechada el 14 de agosto, en la que las amenazas anteriores se convirtieron en el cese definitivo de los adversarios en los puestos que desempeñaban. Las autoridades militares dejaron claro, desde el principio, contra quiénes se habían sublevado: *“todas las personas que por hechos anteriores o posteriores al Movimiento Militar, hayan demostrado simpatía por las doctrinas de tipo marxista”*¹¹²³. Haber sido simpatizante de una ideología concreta o incluso haber ejercido los derechos políticos cuando todavía éstos permanecían dentro de la legalidad democrática, antes del 18 de julio, pasaba a ser motivo, entre otros, de la pérdida del puesto de trabajo. Pero, bajo la denominación de "doctrinas de tipo marxista" se incluía un amplio abanico, desde las organizaciones estrictamente marxistas (PSOE, UGT, PC, POUM), a las libertarias (CNT y FAI), pasando por los simpatizantes de partidos republicanos progresistas (I.R., U.R.) o incluso de ideología conservadora (Derecha Liberal).

También eran castigados con el cese las personas que *“por sus actos o palabras hayan incurrido en responsabilidad y se encuentren detenidos a disposición de la autoridad civil o militar desde el 19 de julio último”*¹¹²⁴. En el capítulo 2 sobre la sublevación militar en Segovia ya estudiamos los hechos y en el capítulo de la represión judicial ya advertimos hasta qué punto las palabras eran motivo de condena, debido a la aplicación arbitraria -y en toda su extensión- del artículo 6º del Bando de 28 de julio.

Al igual que en el bando de la autoridad provincial de 27 de julio, esta circular incluía, entre sus posibles destinatarios, tanto a los funcionarios civiles como a los trabajadores en general. Para dar cumplimiento a esta orden, el comandante España dictó otra directiva instando a los alcaldes para que remitieran al Gobierno Civil una relación detallada de los funcionarios de todas clases y obreros, que por su actuación anterior al movimiento, estuvieran afectados por la mencionada circular. De este modo obligaba a los alcaldes a participar en el engranaje depurador denunciando a sus propios vecinos. Era,

¹¹²⁰ BOP, 28 de julio de 1936.

¹¹²¹ BOP, 25 de septiembre de 1936.

¹¹²² Libro de Sesiones de la Diputación Provincial, sesión de 11 de agosto de 1936, fueron cesados:

1. Ángel Lara Hernández, secretario interino.
2. Fermín Cristóbal López, jefe de Negociado.
3. Ricardo Carrascón Ruiz, ayudante de Vías y Obras.
4. José del Hierro San Martín, ingeniero de Vías y Obras.
5. Antonio Romero Arbeiza, auxiliar administrativo temporero.
6. César Sanz Pastor, ingeniero de Vías y Obras.
7. Francisco Frutos Ballesteros.

Por su parte, el cese del J. Ins. de Sepúlveda, se publicó en el BOP, 2 de octubre de 1936.

¹¹²³ Circular del Comandante Militar de la Plaza de Segovia. BOP, 14 de agosto de 1936.

¹¹²⁴ Ver nota anterior.

por un lado, el único modo de que desde la capital se pudiera conocer a los desafectos de la provincia y, por otro, el intento de hacer cómplices a las autoridades locales en la instauración del nuevo régimen.

El último párrafo no dejaba lugar a dudas sobre la obligación de los alcaldes de implicarse en una labor que no era la suya: *“Los alcaldes (...) cumplimentarán sin excusa ni pretexto alguno lo ordenado (...) en evitación de la responsabilidad consiguiente”*¹¹²⁵. Esta amenaza de castigo a las autoridades locales que no colaboraran, es algo que se hizo norma habitual en las circulares de los nuevos dirigentes nacionales, como vemos en otros capítulos de este trabajo.

A partir del 14 de agosto, y hasta el mes de diciembre, aparecieron en el *BOP* y en *El Adelantado*, casi a diario, listas de funcionarios del Estado, provinciales y locales, cesados por el comandante militar en función de esta circular, sin formación de expediente ni posibilidad de defenderse. Desde mediados de octubre asumió la responsabilidad depuradora la Junta Técnica del Estado, como abordaremos más adelante. Pero todavía en 1937, aparecieron más ceses, motivados por la aplicación de esta circular, el 19 de febrero y el 26 de marzo¹¹²⁶, aunque ya son claramente anacrónicos, puesto que la dinámica depuradora había adquirido otros derroteros.

Fueron cesados por el comandante militar de Segovia un total de 407 funcionarios en sus distintas escalas administrativas: estatal, provincial o municipal. Destacaban considerablemente los 136 maestros. De ellos, 64 fueron cesados directamente aplicando esta circular, y otros 72 más, por estar afiliados al sindicato Trabajadores de la Enseñanza, integrado en la UGT, aunque aplicándoles el art. 3º del Bando de Guerra de 28 de julio de la JDN¹¹²⁷. Los empleados municipales eran el segundo grupo más numeroso, con 81 funcionarios cesados, incluidos los 21 empleados del Ayuntamiento de Segovia. La administración de Correos y Telégrafos con 45 funcionarios, los 23 trabajadores de Obras Públicas, los 21 médicos y los 20 secretarios de Ayuntamiento eran otros grupos reseñables.

A continuación exponemos los datos agrupados por la institución a la que pertenecían:

¹¹²⁵ *BOP*, 24 de agosto de 1936. Cir. gob. Civ.

¹¹²⁶ *BOP*, 19 de febrero y 26 de marzo de 1937, eran cesados el alumno de Magisterio, Luis Felipe Estirado Álvaro y Benito Martín Moreno, farmacéutico titular de Fuentepelayo, respectivamente.

¹¹²⁷ *BOP*, 5 de agosto de 1936. Decía así dicho artículo: *“serán suspendidos inmediatamente de sus cargos los funcionarios (...) que no presten el inmediato auxilio que por mi autoridad o por mis subordinados sea reclamado para el restablecimiento del orden o ejecución de lo mandado en este bando”*. Entre los 74 afiliados a T Ens. había también dos profesores de Instituto: Ginés Ganga y Manuel Tamayo.

Cuadro nº 31: La depuración provisional de los empleados de la provincia de Segovia

INSTITUCIÓN		Nº DE EMPLEADOS	
Maestros	por la Circular de 14 de agosto	64	136
	por el Bando de 28 de julio	72	
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza		8 profesores + 1 portero	
Escuela Normal de Magisterio Primario		3	
Alumnos Escuela Normal del Magisterio Primario		9	
Correos	Oficiales	7	33
	Carteros	26	
Telégrafos		10	
Teléfonos		2	
Obras Públicas		23	
Delegación del Trabajo		5	
Delegación de Hacienda		6	
Policía		1	
Prisiones		3	
Médicos		21	
Sanidad		17	
Preventorio Infantil de San Rafael		4	
Veterinarios		3	
Agricultura		11	
Justicia municipal		5	
Jueces de Instrucción		1	
Diputación Provincial		19	
Secretarios Ayuntamiento		20	
Empleados municipales		81	
Estanqueros		4	
Camilleros Cruz Roja		9	
TOTAL EMPLEADOS CESADOS		407	

Hubo algunas confusiones a la hora de publicar las listas de ceses: funcionarios cesados por error, que fueron repuestos rápidamente¹¹²⁸, otros empleados que se presentaron posteriormente a la destitución y justificando su ausencia (y, lo que es más importante en este caso, su conducta ante el movimiento militar) fueron restituidos en sus puestos¹¹²⁹.

Este proceso, que denominamos depuración provisional, se extendió hasta diciembre de 1936, momento en que, en función de las nuevas disposiciones, se crearon las distintas comisiones, como vemos en el apartado siguiente.

¹¹²⁸ "Queda sin efecto la baja, que por confusión, de circular de 25 de agosto, del inspector farmacéutico municipal de Villacastín, José Ferrari Zamorano". BOP, 31 de agosto de 1936.

¹¹²⁹ "Presentada en esta plaza y justificado su ausencia y conducta, con relación al MN, queda sin efecto la baja dispuesta en la circular de 30 de agosto, BOP, 31 de agosto de 1936, de la profesora de Física y Química del Instituto de Segunda enseñanza, Narcisa Martín Retortillo". BOP, 7 de septiembre de 1936.

8. 2. La Depuración definitiva

Así denominamos a la depuración llevada a cabo por las instituciones destinadas al efecto, a nivel estatal, provincial o local, pero ya aplicando una legislación y tras un procedimiento más o menos organizado. Se iniciaba así un proceso depurador que se prolongó, para muchos funcionarios, al menos hasta los años cincuenta, fecha en que se resolvieron definitivamente sus expedientes, tras la interposición de numerosos recursos.

8. 2. 1. La Legislación

Las primeras pautas depuradoras se dieron en el tan repetido Decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional de 13 de Septiembre de 1936, dictado para combatir las *“actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional”*. En su articulado se contemplaban únicamente las sanciones que podían recaer a los funcionarios y las personas o instituciones encargadas de tomar las decisiones. En principio, las sanciones se limitaban a correcciones, suspensiones y destituciones; pero no se llegaron a concretar los requisitos para distinguir los castigos según los *“delitos”* cometidos.

Los destinatarios de esta disposición eran los funcionarios públicos -ya fueran administrativos, judiciales o fiscales- y los de las empresas subvencionadas por el Estado, la provincia o el municipio o concesionarias de servicios públicos. Es de imaginar que suscitara dudas (por parte de las autoridades depuradoras) en cuanto a qué tipo de funcionarios afectaba la depuración, puesto que se hizo necesaria la Orden de la Comisión de Justicia de 30 de octubre de 1936, para clarificar los destinatarios del proceso. Esta norma aportaba una definición clara e inapelable de la condición de funcionario: *“...todo el que por disposición de la ley, por elección popular o por nombramiento (...) tuviere participación en el desempeño de funciones públicas”*¹¹³⁰.

Para perseguir a aquellos funcionarios que, quizá escapando de la más que posible represión, pasaban a la zona republicana, se dictó el Decreto 93, de 3 de diciembre de 1936. En él se disponía el cese, sin formación de expediente, es decir, sin ningún tipo de procedimiento administrativo, de todos los funcionarios que abandonaran su residencia oficial en la zona liberada, a partir del 18 julio, *“sin licencia, autorización o comisión concedida por autoridad competente, o no se presentaran en plazo debido, al extinguirse aquéllas, serán declarados cesantes”*¹¹³¹.

El Decreto de 5 de Diciembre de 1936, ya específico y exclusivo sobre depuración, profundizaba, ampliaba y desarrollaba el número 108. En él se autorizaba a la Junta Técnica del Estado (JTE) y demás organismos creados por la Ley de 1 de Octubre de 1936 a separar definitivamente del servicio a todos los empleados públicos, de cualquier tipo y función, considerados contrarios al movimiento militar, de nuevo según *“su conducta anterior o posterior al movimiento nacional”*¹¹³².

Las empresas concesionarias de servicios públicos o monopolios debían separar de sus puestos a los empleados que se considerasen *“incompatibles, opuestos o peligrosos”* para el nuevo régimen, y a aquéllos que no le sirvieran con *“eficacia o lealtad”*. Estas “consideraciones” dependían del libre criterio de jefes y nuevas autoridades, dando lugar a numerosas arbitrariedades. En estos casos la JTE, formaría, como *“base de la resolución de su presidente, ligero expediente o exposición de hechos o circunstancias justificativas de la medida”*¹¹³³. El procedimiento depurador no tenía por qué extenderse, era suficiente una simple enumeración de los cargos achacables al empleado para que el

¹¹³⁰ Orden de la Comisión de Justicia 30 de octubre de 1936. BOE, 1 de noviembre de 1936.

¹¹³¹ Art. 1 D. 93 de 3 de diciembre. BOE, 9 de diciembre de 1936.

¹¹³² Art. 1 D. de 5 de diciembre de 1936. BOE, 9 de diciembre de 1936.

¹¹³³ Art. 2 D. de 5 de diciembre de 1936. BOE, 9 de diciembre de 1936.

presidente de la JTE, Franco, tomara la decisión que estimara conveniente. Hasta ese punto llegaba el poder omnímodo de Franco y su deseo de ejecutar el mando en todos los terrenos, especialmente en el represivo.

El artículo 3º era más antidemocrático, si cabe, puesto que eliminaba de un plumazo cualquier posibilidad de recurso ante las resoluciones sancionadoras. De este modo amparaba todo tipo de arbitrariedades, manipulaciones y aberraciones administrativas.

Partiendo de los decretos anteriores y órdenes que los desarrollaron, cada organismo de la Administración se encargaba de la depuración de sus funcionarios, en sus distintos ámbitos: para los funcionarios del Estado, las comisiones integrantes de la JTE; para los empleados provinciales, la Diputación Provincial; y para los municipales, los ayuntamientos. De tal manera que, por ejemplo, la Comisión de Cultura y Enseñanza se encargaba de la depuración de los docentes, la Diputación Provincial de sus peones camineros, y los ayuntamientos de sus guardias municipales.

Aunque el reparto de responsabilidades depuratoras estuviera claro para las autoridades de Burgos, parece que no lo era tanto en las provincias, o los responsables provinciales eran reacios a ejercer sus atribuciones represivas, puesto que hubieron de publicarse varias órdenes explicando los procedimientos y recordando a quiénes correspondía la responsabilidad de llevar a cabo el proceso depurador.

Así, la Orden del Gobernador General Luis Valdés de 2 de enero 1937 obligaba a las corporaciones locales a resolver los expedientes de depuración de sus funcionarios, de acuerdo con el Decreto 108, aplicando las sanciones que considerasen pertinente imponer¹¹³⁴. Esta disposición da a entender que los ayuntamientos enviaban los informes del personal a depurar para que el Gobernador General decidiera si había lugar o no a la sanción, y en caso afirmativo cuál sería la correspondiente. Según esta disposición sólo debía intervenir el Gobierno General en las apelaciones, recursos y quejas que contra las resoluciones interpusieran los interesados.

La Orden de la JTE de 10 de febrero de 1937 estaba destinada a las empresas concesionarias de servicios públicos o monopolios¹¹³⁵. En ella, les otorgaba un plazo de 10 días para que enviaran relación de su personal propuesto para la sanción correspondiente por Franco.

Debían resistirse todavía las autoridades locales o provinciales a ejecutar, ellas mismas, la depuración, puesto que la JTE se vio obligada a dictar, *“ante las dudas suscitadas”*, la Orden de 9 de marzo de 1937, en la que se insistía en que las entidades autorizadas a hacer los nombramientos de personal a su servicio, estaban facultadas para llevar a efecto la depuración del mismo¹¹³⁶.

No debieron ser suficientes las anteriores disposiciones, pues no hubo demasiado celo depurador en los pueblos de la provincia, siendo necesaria la intervención, ahora del gobernador civil Pérez Mirete, quien en una circular de 22 de abril de 1937, volvía a recordar la responsabilidad depuradora de los ediles. Tras un curioso preámbulo *“Por si alguno de los Ayuntamientos no hubiera realizado la previa depuración de personal con arreglo a las normas dadas por el estado español”*, les recordaba que *“la lleven a cabo con la justicia debida y sujeción a las disposiciones vigentes sobre la materia”*¹¹³⁷.

Las habituales amenazas de las autoridades militares de nuevo se expresaban al final del escrito: *“La importancia del servicio motivo de esta circular induce a mi Autoridad a formular seria advertencia de que se exigirá responsabilidad personal a los concejales de los ayuntamientos que incurran en censurable negligencia en el cumplimiento de la misma, que ordeno tenga lugar con la máxima prontitud”*¹¹³⁸.

¹¹³⁴ BOE, 5 de enero de 1937.

¹¹³⁵ BOE, 12 de febrero de 1937.

¹¹³⁶ BOE, 11 de marzo de 1937.

¹¹³⁷ Circular de 22 de abril de 1937. BOP, 22 de abril de 1937.

¹¹³⁸ Ver nota anterior.

Además de las distintas órdenes y circulares, todavía la Junta Técnica del Estado no confiaba mucho en las instituciones locales y provinciales, reservándose la potestad de ordenar la formación de expediente de expulsión cuando las instituciones inferiores no hubieran actuado con respecto a algún funcionario contra el que procediera su separación.

8. 2. 2. El procedimiento depurador

La aplicación práctica de la legislación anterior se plasmó con la formación de las distintas comisiones depuradoras en cada ámbito administrativo, desde las más tempranas sobre personal docente, en noviembre de 1936, hasta las de funcionarios de la Diputación y municipios, que se crearon en enero de 1937, por orden del gobernador civil de la provincia, quien pidió que se instruyeran los expedientes de depuración, conforme al Decreto 108¹¹³⁹.

El procedimiento depurador fue básicamente el mismo en todas las administraciones, salvo en algunos aspectos formales que variaban de unos organismos a otros. Las comisiones, generalmente, se componían de funcionarios de la misma administración a la que pertenecían los empleados a depurar, de igual o superior categoría profesional. Los integrantes de las comisiones se distribuían los casos a estudiar, constituyéndose en jueces instructores y encargándose de la confección de cada expediente personal que constaba de los siguientes elementos, muy similares al procedimiento económico:

1. Informes sobre la conducta político-social.
2. Pliego de cargos, por la comisión depuradora.
3. Pliego de descargos, por el interesado.
4. Propuesta de sanción por parte de la Comisión Depuradora.
5. Sanción definitiva por los órganos de la Junta Técnica del Estado.

Los Informes

En primer lugar, el juez instructor recababa informes sobre el afectado. Éstos se referían a la conducta política, social y religiosa. En muy pocos casos se requería la información sobre la valoración profesional del trabajo desarrollado, e incluso en éstos no era determinante, ni en favor ni en contra. Hay varios ejemplos de ello: a pesar de que sobre el maestro de Olombrada opinaban los vecinos y el alcalde que era *“competente y trabajador”*¹¹⁴⁰, fue sancionado con la pena máxima, la separación definitiva. Era más grave que, también en el caso de la depuración de los maestros, en los informes sobre la valoración estrictamente profesional se ahondara en apreciaciones sobre la conducta político-social, pero en cuanto al trabajo pedagógico anotaban la coletilla *“se desconoce la labor realizada en la escuela”*¹¹⁴¹.

Por lo que se ha podido deducir de los numerosos expedientes consultados en los distintos ámbitos administrativos, se pueden enumerar varias consideraciones generales con respecto a los informes, que tienen las mismas características ya comentadas en el capítulo económico: aparecían informes repetidos, incluso de distintas autoridades. Muchos de ellos se hacían por informaciones de terceros, puesto que las autoridades no conocían a los informados, pero aun así, no dejaban pasar la oportunidad de expresar sus opiniones o se limitaban a recoger comentarios "interesados" de otros vecinos. Solían ir encabezados por *“al parecer”*, *“según parece”*, *“dicen”*. Sólo se ha encontrado una persona que no emitió

¹¹³⁹ En el archivo Sta. Cruz, leg. 847, se recoge la orden remitida por el Gob. Civ. al presidente de la Diputación, fechada el 9 de enero de 1937.

¹¹⁴⁰ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, 4, Exp. Dep. Luis R. Ferrari.

¹¹⁴¹ Palabras repetidas en casi todos los informes: Lorenzo del Amo, Esteban de Andrés, Alejandro Cobos,...

el informe que le solicitaron porque no conocía al afectado. Fue el párroco del barrio de San Lorenzo de la capital, Salustiano Llorente, quien expresó “...no posee elementos suficientes de juicio acerca de la conducta político-social y religiosa de (...) a quien apenas conoce personalmente (...) Por lo que, fiel a la práctica de no informar solamente por referencias ajenas, ruega a VS dispense de emitir informe, que pudiera no ajustarse a la verdad”¹¹⁴². Aparecían numerosas contradicciones entre informes sobre la misma persona, a veces no expresaban más que vaguedades, la objetividad era muy escasa, denotaban ignorancia política,

A veces eran tan evidentes las anomalías recogidas en los informes, que no pasaban desapercibidas a los ojos de las comisiones correspondientes, pero éstas se limitaban a tomar nota de la acusación y la comunicaban al afectado para que éste se preocupara de desmentirla. Como en la represión económica, el expedientado era quien tenía que demostrar su inocencia y no las autoridades las que probaran la culpabilidad.

La vaguedad en la redacción de los cargos, profesar “*ideología de izquierdas*”, tener “*simpatías con el FP*”, etc. dificultaban enormemente la defensa, porque el afectado no podía demostrar lo contrario. Incluso, a veces la comisión no exponía en el pliego de cargos los hechos en que se basaba la acusación, con lo que el empleado depurado no se podía defender o aludía a hechos que no eran precisamente los que le acusaban. Ante ello, la comisión confirmaba el cargo, por no haberse defendido debidamente. Así se recogía de forma expresa en la resolución sobre el maestro Ferrari: “*Aunque el expediente aparece excesivamente conciso se considera como fehaciente toda la prueba de acusación por la ausencia total de pruebas de descargos solamente imputable al propio interesado*”¹¹⁴³. Se daban por confirmados los cargos cuando el afectado no presentaba ningún aval o informe favorable, lo que a ojos de la comisión significaba que nadie le respaldaba debido a su culpabilidad.

Las autoridades depuradoras indicaban que faltaban pruebas a favor del afectado, pero tampoco contaban con evidencias en contra. En el caso de Ferrari, tan sólo eran afirmaciones de la Guardia Civil sobre si “*explicaba en clase la constitución, y cómo vienen los niños, que a juicio del que suscribe debe ser ignorado por las criaturas*”¹¹⁴⁴. En cambio para los vecinos y el alcalde, el maestro era “*competente y trabajador*”, y “*trabajaba mucho*”¹¹⁴⁵.

Se han constatado numerosas intromisiones en la labor de las comisiones, recomendaciones para inclinar la balanza en uno u otro sentido, para conseguir sanciones o absoluciones. En los propios informes, las distintas autoridades introducían sugerencias, que se han comprobado especialmente abundantes entre los miembros del clero. El obispado comunicó sobre Francisco Sacristán: “*Según un informante, aunque sus hijos son de ideas muy izquierdistas, él no parece mala persona. Quizás quedase suficientemente castigado con un traslado*”¹¹⁴⁶.

Las autoridades que tenían potestad para informar eran las siguientes:

El **gobernador civil**, quien respondía, a veces, a través de la Comisaría de Investigación y Vigilancia sobre los antecedentes del expedientado. Sólo aparecían “fichados” los que estaban afiliados a algún partido político. Advertía también si los afectados estaban detenidos en el momento de la expedición del informe.

¹¹⁴² Arch. Sta. Cruz. Leg. 506. Exp. Dep. Luis Cerezo.

¹¹⁴³ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Luis R. Ferrari. Propuesta de resolución por el ponente de la Comisión Superior Dictaminadora.

¹¹⁴⁴ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Luis R. Ferrari. Informe de la Guardia Civil del puesto de Olombrada

¹¹⁴⁵ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Luis R. Ferrari. Informe del alcalde y dos vecinos de la localidad.

¹¹⁴⁶ Arch. Sta. Cruz, Leg. 506, Exp. Dep. Francisco Sacristán.

El **alcalde** de la ciudad o pueblo donde vivía el expedientado. No todos los expedientes cuentan con esta diligencia. El sentido del informe dependía mucho de la personalidad del edil que lo emitiera, o del secretario que, en muchos casos, lo escribiera. Por esta razón nos hemos encontrado gran variedad de ellos, favorables y desfavorables a la actuación de los procesados.

La **Guardia Civil** informaba a través del comandante de puesto. Los informes de la capital eran casi todos iguales: *“en cuanto al asunto católico bastante dudoso y en lo político simpatizante con los partidos que integraban el llamado Frente Popular, con tendencia a izquierda extrema, por lo que se le tiene por persona de mala conducta”*¹¹⁴⁷. Estaban escritos a mano, pero con el mismo modelo. De los pueblos llegaba más variedad de informes, en algunos casos favorables al informado, o cuando menos asépticos.

La **Falange** de la capital estaba bastante bien informada, pues ya hemos apuntado que disponían de un buen archivo de militancias republicanas y obreras. Por ejemplo, en el informe sobre Mariano de la Orden, funcionario de la Diputación Provincial, aparecía: *“afiliado a la Agrupación Socialista de Segovia desde el 1 de marzo de 1933, ignorándose si cotizaba o no al Socorro Rojo, aunque es de suponer que así lo hiciera por ser una obligación impuesta a los afiliados al Partido Socialista”*¹¹⁴⁸. En los pueblos de la provincia informaba el jefe local.

Eran informes generalmente muy negativos. La mayoría de los que emitía el Servicio de Información e Investigación llegaban a conocimiento de los familiares e incluso del inculpado a las pocas horas de haberlos remitido. Esta indiscreción por parte de los organismos oficiales a quienes se enviaban -según la queja expresa del jefe provincial de Falange- *“coloca a la organización y especialmente a nuestro servicio en una situación muy poco agradable, ya que nos crea enemistades sin cuento, debido a la imparcialidad y veracidad con que informamos, haciendo caso omiso de recomendaciones o presiones (...) lo que según me informan no hacen otras dependencias que se dejan presionar, e informan callándose algunas cosas que son del dominio público y hasta existen documentos que lo atestiguan”*¹¹⁴⁹.

Para las comisiones depuradoras, los informes del **párroco** eran de los más determinantes a la hora de tomar una decisión sobre cada caso. Este apartado es, junto con el de los alcaldes, el más variado en cuanto a informes, pues también dependía mucho de la personalidad del cura. Algunas parroquias, como la de San Martín, tenían un censo de feligreses, con fichas personales de los vecinos del barrio. En cualquier caso eran generalmente negativos, especialmente con los maestros. En principio debió haber tal avalancha de informes, sin ningún tipo de control, que el obispo Luciano Platero envió una prudente circular, a todos los párrocos de la provincia, en noviembre de 1936, *“Con el fin de evitar graves inconvenientes de todos conocidos y mirando por la mejor observancia de la disciplina, (...) que ninguno de los sacerdotes diocesanos expida certificaciones sin haber obtenido previamente de este obispado autorización para ello”*¹¹⁵⁰. Aunque, dada la contrastada poca comprensión del obispo con los adversarios políticos, es posible que no dictara la circular en aras de atenuar los castigos, sino para controlar los informes de sus subordinados.

Existía tal profusión de informes de las distintas autoridades locales (alcaldes, curas párrocos, jueces municipales y comandantes-jefes de los puestos de la Guardia Civil) y tal

¹¹⁴⁷ Arch. Diputación. Exp. Dep. Mariano de la Orden y Arch. Sta. Cruz, Leg. 506, Exp. Dep. A. Ignacio González.

¹¹⁴⁸ Arch. Diputación. Exp. Dep. Mariano de la Orden

¹¹⁴⁹ AGA, Presidencia. SGM-DNP. Caja 21. Informe de la Jef. Prov. a Sec. Gen. de Provincias. Sin fecha, pero de 1940.

¹¹⁵⁰ BOOS, nº 22, 30 de noviembre de 1936.

diferencia de criterio entre unos y otros, que el gobernador civil Pérez Mirete envió una circular el 19 de agosto de 1937, con instrucciones bien precisas: los informes habían de emitirse siempre que se les pidiera, aunque ya lo hubieran emitido con anterioridad, y *“sin referirse (...) al anterior informe, sino reproduciéndole en toda su extensión y completándole con los datos que últimamente haya obtenido respecto de la persona en cuestión”*. La circular prohibía terminantemente que las autoridades se pusieran de acuerdo para hacer un informe concreto, por una razón muy simple: *“mi autoridad necesita el asesoramiento del concepto que merezca el informado y si aquéllas se ponen de acuerdo previamente, no recibo yo cuatro informes, sino uno sólo, repetido cuatro veces”*¹¹⁵¹.

Pretendía Pérez Mirete, a través de la circular, hacer creer a los informantes que participaban de una gran labor social al realizar los informes, que habían de ser elaborados con un *“criterio de absoluta justicia y con desprecio total de toda sugestión ajena al cumplimiento de un altísimo deber ciudadano”*. No podían tener en cuenta circunstancias de familia especiales del interesado, ni mucho menos *“afectos u odios creados por la convivencia o por relaciones de vecindad”*. El informante debía alejarse de toda predisposición, *“para fijarse tan sólo en el cumplimiento del deber y con miras a los altísimos intereses de la patria”*¹¹⁵².

No se permitían las evasivas, ni mucho menos la alegación de falta de conocimiento del informado. En este caso, si alguna de las autoridades no lo tuviera reciente, *“deberá procurarse aquellos asesoramientos mediante la búsqueda y captación de noticias que le permitan formar el concepto que mi autoridad solicita de la suya”*. Ninguna autoridad podía permanecer al margen de esta obligación, bajo ningún pretexto, siempre pendientes de la amenaza del gobernador: *“exigiré responsabilidades estrechísimas a aquellos que soslayan o eludan la emisión de los informes”*¹¹⁵³.

Así mismo, el gobernador pretendía asustar a los ciudadanos de a pie que no desempeñaban cargo alguno pero que debían informar en calidad de testigos. Éstos estaban también obligados a dar su opinión con un *“alto espíritu de justicia y de patriotismo, sin dejarse llevar de afectos ni de odios, con la mira puesta exclusivamente en el servicio de la patria, bajo su más estrecha responsabilidad moral y también ciudadana. De la primera habrán de dar cuenta a Dios, pero la segunda la exigiré yo y sancionaré su incumplimiento con toda energía”*¹¹⁵⁴. Para terminar, Mirete advertía a todos en general: *“exigiré estrechísimas responsabilidades, aplicando sanciones de extraordinaria severidad para aquellos que burlen las disposiciones. (...) Los informantes parciales, habilidosos o falsarios, serán fulminantemente destituidos y castigados con ejemplar vigor”*¹¹⁵⁵.

Parecía como si se hubiera iniciado una carrera desenfrenada para ver quién era más patriota y más afecto al nuevo régimen, y eso sólo se demostraba empleando dureza con los adversarios, denunciando cualquier actuación mínimamente sospechosa. Hemos explicado anteriormente que las autoridades animaban a la denuncia, incluso anónima. Ya en 1936, se habían dictado unas Órdenes de la Dirección de Prensa y Propaganda que obligaban a los diarios a publicar, *constantemente*: *“Vigilad todos el espionaje enemigo y detened y denunciad a los traidores”*¹¹⁵⁶. Se daban todo tipo de facilidades para ello, incluso gratificaciones económicas, con lo que muchas personas sucumbieron ante la presión del ambiente, algunos por desquite por rivalidades pasadas, otros por hacerse perdonar desviaciones políticas anteriores o ganar puntos para promocionar en el Nuevo Estado. Algunas de las denuncias eran justificadas como *“producto de una ofuscación, muy*

¹¹⁵¹ Circular el 19 de agosto de 1937. BOP, 20 de agosto de 1937.

¹¹⁵² Ver nota anterior.

¹¹⁵³ Ver nota anterior.

¹¹⁵⁴ Ver nota anterior.

¹¹⁵⁵ Circular de 19 de agosto de 1937. BOP, 20 de agosto de 1937.

¹¹⁵⁶ El Adelantado, 4 de diciembre de 1936.

*explicable dado el nerviosismo y suspicacia de algunas gentes en las horas trágicas en que vivimos*¹¹⁵⁷.

El Pliego de Cargos

Los informes recogidos sobre cada funcionario objeto de depuración eran estudiados por la comisión correspondiente, en la que ejercía de portavoz el juez instructor de cada expediente. Las acusaciones recogidas entre los informantes se referían siempre al ejercicio de derechos y libertades políticas y sociales, es decir, actuaciones propias de la vida en democracia y en libertad, lo que, obviamente, hasta el 18 de julio de 1936 estaba dentro de la legalidad. El resumen de las "acusaciones" constituía los pliegos de cargos, que eran una enumeración de los "*delitos*" cometidos por el depurado, tales como:

- Estar afiliado a un partido político republicano o de izquierda o sindicato del mismo signo.
- Hacer propaganda de tales ideas.
- No ser católico, o no ejercer de tal, al menos con la misma ostentación que otros.
- Haber contribuido al Socorro Rojo Internacional.
- Haber sido apoderado o interventor del Frente Popular en las elecciones de febrero.
- Haber contribuido a la suscripción en favor de los presos y familiares, "*con motivo de los injustificables hechos de la revolución del indicado octubre*"¹¹⁵⁸.
- Cuando la muerte de Calvo Sotelo, hizo manifestaciones de júbilo y dijo que "*ya había muerto un canalla y que como éste tenían que caer otros muchos*"¹¹⁵⁹.
- No haber contribuido a la cuestación del Auxilio Social.
- Haber acudido a manifestaciones del Primero de Mayo.
- Haber estado suscrito a periódicos republicanos o de izquierda, como *La Libertad*, *El Socialista*...

El Pliego de Descargos

El pliego de cargos se enviaba al interesado para que en un plazo de 10 días alegara lo que estimara conveniente en su defensa, pudiendo aportar más informes o certificaciones sobre su conducta político-social, conseguidos por él. Si no se conociera el domicilio del interesado, se le emplazaba por medio del *BOP*, para que comunicara su dirección. A las personas detenidas se les concedía audiencia en la propia prisión para que declararan en su defensa¹¹⁶⁰. Algunos funcionarios fusilados fueron requeridos por este medio para que comunicaran su domicilio. Con muy poca delicadeza anotaban en el expediente (en un formato tipo utilizado para otros muchos casos):

Requerido el enjuiciado para que señale su domicilio---por haberse ausentado de su residencia habitual poco después del alzamiento salvador de España---según consta en el Boletín Oficial de 12 de Abril que se acompaña, sin haberse obtenido resultado alguno, se le siguió el expediente reglamentariamente¹¹⁶¹.

Pero, como ya hemos explicado, puede que estos feos detalles con las víctimas y sus familiares no fueran totalmente debidos a la mala voluntad de los nuevos gobernantes, sino al desconcierto organizativo del Nuevo Estado o a la falta de comunicación entre los distintos organismos depuradores y los tribunales militares que condenaban y ejecutaban, y las prisiones abarrotadas de las que salían detenidos sin el control debido.

¹¹⁵⁷ Arch. Sta. Cruz. Leg. 506, Exp. Dep. Anselmo Romero. Declaración del Superior Padres Misioneros.

¹¹⁵⁸ Arch. Sta. Cruz. Leg. 506, Exp. Dep. Segundo de Andrés.

¹¹⁵⁹ Arch. Sta. Cruz. Leg. 506, Exp. Dep. A. I. González Murillo.

¹¹⁶⁰ Arch. Sta. Cruz. Leg. 506, Exp. Dep. A. I. González Murillo y Arch. Diputación. Exp. Dep. Mariano de la Orden; y los empleados del Ayuntamiento de Segovia: Juan Olalla, Diómedes Merino, Ignacio de la Cruz,...

¹¹⁶¹ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Mariano y Aniano Domínguez, Pedro Natalías, Ángel Gracia, etc.

Las propuestas de sanción

Recibido o no el pliego de descargos se pasaba al estudio de la sanción a proponer o imponer, según los casos. Por ejemplo, en los municipios y Diputación Provincial, la misma comisión proponía y disponía la sanción. En el caso de los funcionarios del Estado, las comisiones provinciales proponían la sanción a las autoridades de Burgos.

El pliego de descargos no servía para mucho pues si el funcionario negaba los cargos, como ocurría habitualmente, no era creído, anotando en el expediente la expresiva coletilla: *“no desvirtúan los cargos que se le habían imputado”*.

Las propuestas podían acordarse por unanimidad o por mayoría de votos, en estos casos los vocales en minoría tenían la posibilidad de formular su propuesta particular.

Las sanciones

A pesar de que éstas se limitaban en el D. 108 a correcciones, suspensiones y destituciones, con el paso del tiempo y las distintas disposiciones emanadas de Burgos, las sanciones se ampliaron y diversificaron, resultando, en definitiva, las siguientes:

1. Traslado forzoso de destino o de puesto de trabajo, con prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de uno a cinco años.
2. Inhabilitación para el desempeño de puestos de mando y confianza.
3. Suspensión de empleo y sueldo de un mes a dos años.
4. Destitución o separación definitiva, con pérdida de todos los derechos, salvo los de carácter pasivo.

Para finalizar este apartado, con la documentación que se ha estudiado (por un lado la publicación en el *BOE* de las sanciones de los funcionarios del Estado, los expedientes de depuración de los maestros, depositados en el AGA; y la propia documentación de la Diputación Provincial o del Ayuntamiento de Segovia, sobre los funcionarios provinciales y del consistorio de la capital), podemos ofrecer un balance del resultado de la depuración en la provincia de Segovia. Si bien, del resto de empleados municipales de las otras localidades no se ha podido hacer el mismo seguimiento porque la resolución definitiva de sus expedientes no fue publicada en los boletines oficiales.

De los 407 ceses iniciales, recogidos al inicio del capítulo, conocemos las resoluciones de 202 expedientes, que darían el siguiente resultado:

Cuadro nº 32: Resultado de la depuración de los empleados cesados provisionalmente

Sanción	Nº de sancionados
Separación definitiva	120
Inhabilitación perpetua	3
Traslado de destino	52
Suspensión de empleo y sueldo	24
Reposición	3
TOTAL SANCIONADOS	202

Aparte de ellos, se conoce el resultado final de la depuración de otros 113 funcionarios que no habían sido cesados previamente por las autoridades militares provinciales, pero que, posteriormente, serían sometidos a expediente depurador, de los que la mayoría de ellos, 71, eran maestros.

Cuadro nº 33: Resultado de la depuración de los empleados que no habían sido cesados provisionalmente

Sanción	Nº de sancionados
Separación definitiva	41
Inhabilitación perpetua	3
Traslado de destino	34
Inhabilitación para cargos de confianza	20
Suspensión de empleo y sueldo	12
Reposición	3
TOTAL SANCIONADOS	113

El desenlace definitivo (que se ha podido comprobar) de la depuración en la provincia de Segovia en las distintas ramas de la administración fue el siguiente:

Cuadro nº 34: Resultado definitivo de la depuración en la provincia de Segovia

INSTITUCIÓN		SANCIÓN			
		destitución	suspensión	reposición	totales
Administración del Estado					
Correos	Oficiales	3			32
	Carteros	29			
Obras Públicas		3			3
Maestros		dest.*: 51 inhab. perp.: 6	Susp.+inhab.: 20 Traslado: 86	Inhab. carg. 21	184
Escuela Elemental de Trabajo		1			1
Instituto Nacional 2ª Enseñanza		6	3	1/inhab	10
Escuela Normal de Magisterio		3		1	4
Inspección Primera Enseñanza		1		1	2
Prisiones		2		1	3
Ministerio de Gobernación		2			2
Delegación de Hacienda		6			6
Médicos		2			2
Agricultura		15			15
Patrimonio del Estado en S. Ildelfonso		2			2
Delegación de Trabajo		2			2
Diputación Provincial		13	5		18
Ayuntamiento de Segovia		20	8	1	29
Total empleados depurados		167	122	26	315

*dest: destitución

inhab. perp.: inhabilitación perpetua

Susp.+inhab.: suspensión de empleo más inhabilitación

Inhab. carg.: inhabilitación para desempeñar cargos directivos y de confianza

Los recursos de los afectados

Ya en el mes de septiembre de 1936, se presentaron instancias solicitando la reposición en el cargo de funcionarios del Ayuntamiento de Segovia. El 20 de septiembre de 1936 fue rechazada por el pleno de la corporación la solicitud del interventor de arbitrios municipales, que había sido cesado el día 3 del mismo mes¹¹⁶².

A pesar de lo inapelable del art. 3º del D. de 5 de diciembre de 1936 que eliminaba la posibilidad de recurso alguno contra las disposiciones depuradoras, la Orden de 2 de enero de 1937 del Gobierno General, ya aludida anteriormente, establecía la actuación del Gobernador General en los casos de apelaciones, recursos o quejas de los funcionarios locales depurados (por tanto daba a entender la posibilidad de interposición de recursos). El ejercicio de este derecho fue ampliado y concretado por otra Orden de 10 de agosto de 1937¹¹⁶³, en la que marcaba el plazo para los recursos de alzada: 30 días naturales desde la fecha de la notificación al interesado. Transcurrido el plazo sin formular recurso, el acuerdo de sanción sería firme y efectivo.

Más adelante, con la Orden de 12 de marzo de 1939¹¹⁶⁴, que implantaba las normas generales de depuración para la posguerra, establecía, tanto el recurso de alzada del interesado, como la revisión de oficio por parte de la administración. La alzada sería realizada por el interesado en el término de 30 días hábiles, mediante escrito (en el que debía alegar la aparición de nuevas pruebas que justificaran la revisión de la sanción) ante el gobernador civil, quien reclamaría el expediente, elevándolo al ministerio correspondiente junto con el recurso y con su informe. Era preceptivo el informe del gobernador civil sobre la conveniencia o no de la revisión del expediente. La revisión de oficio de las resoluciones, se podía producir en cualquier momento, fundándose en la injusticia de las actuaciones o en el conocimiento de nuevos hechos o elementos de juicio.

Esta Orden de 12 de marzo provocó una avalancha de recursos de los afectados, quienes creyeron ver una posibilidad de rehabilitarse y recuperar su puesto de trabajo. Los depurados buscaron -y muchos tuvieron que mendigarlos- ante las nuevas autoridades o personas bien situadas dentro del nuevo orden político y social, nuevos informes favorables que lavaran su pasado a los ojos del régimen. De este modo tenían la posibilidad de reapertura del proceso administrativo, que era largo y tortuoso.

A continuación exponemos un ejemplo de trámite burocrático seguido por los recursos de algunos funcionarios depurados de la Diputación Provincial en su intento de revisión de su sanción¹¹⁶⁵ y que valía también para los empleados municipales:

1º. La Diputación enviaba las instancias de los afectados solicitando la reapertura del expediente al gobernador civil, para que éste las tramitara.

2º. El gobernador civil pedía informes a la Diputación sobre los antecedentes de la conducta político-social de los depurados.

3º. La Diputación enviaba todo el expediente de depuración al gobernador civil.

4º. El gobernador civil pedía opinión a la Diputación sobre el cumplimiento de la Orden de 12 marzo, (aparición de nuevas pruebas, etc.).

5º. La Diputación requería al interesado para que aportara nuevas pruebas (informes nuevos, justificantes, etc.).

6º. El afectado presentaba nuevos informes u otras pruebas de buena conducta.

7º. Si la Diputación creía que la reapertura cumplía los requisitos de la Orden de 12 de marzo, así se lo comunicaba al gobernador civil.

¹¹⁶² BOP, 22 de marzo de 1937. Sesión del Ayuntamiento, 20 de septiembre de 1936.

¹¹⁶³ BOE, 14 de agosto de 1937.

¹¹⁶⁴ BOP, 22 de marzo de 1939.

¹¹⁶⁵ Arch. Sta. Cruz. Leg. 506, Exp. Dep. A. I. González Murillo.

8º. El gobernador, unido a su informe preceptivo, remitía toda la documentación (expediente personal, más nuevas pruebas) al subsecretario del Ministerio de Gobernación.

9º. Si el subsecretario decidía la reapertura del expediente o su revisión, así se lo comunicaba a la Diputación Provincial.

10º. La Diputación nombraba un juez instructor que solicitaba de nuevo los informes preceptivos a párroco, alcalde, jefe local de FET, etc.

11º. Confección del nuevo pliego de cargos.

12º. Presentación por el interesado del nuevo pliego de descargos.

13º. Acuerdo definitivo de sanción.

14º. Por vía del gobernador civil, la corporación provincial remitía la nueva resolución al ministerio, que aprobaba o denegaba.

La reapertura del expediente no suponía, ni mucho menos, la reposición en el cargo del depurado. Es más, al final de este proceso, que se prolongaba durante años, cabía la posibilidad de que se resolviera el expediente con la confirmación de la sanción.

8. 3. La Depuración del Personal Docente

8. 3. 1. La depuración provisional

La depuración del personal docente fue el ámbito administrativo al que prestaron mayor atención los militares sublevados; tanto a nivel legal, de disposiciones y decretos; como a nivel represivo: ceses, detenciones y ejecuciones de maestros. Es muy significativo que un porcentaje elevado, casi el 10%, de las ejecuciones “ilegales” en la provincia de Segovia, durante los primeros meses de contienda, fuera de maestros, como ya hemos estudiado en el capítulo correspondiente.

Los militares sublevados eran conscientes de la gran importancia que tenía la educación, especialmente la primaria, a la hora de despertar inquietudes y formar ciudadanos libres. Se trataba de contrarrestar la influencia de la República en este campo, que, como ya había hecho la República Francesa durante el siglo XIX, pretendía implantar una enseñanza obligatoria, pública, laica y gratuita. Podríamos hablar de un interés de los militares de Burgos por volver a la educación católica y tradicional, directamente proporcional al empeño de la República por modernizar y democratizar las enseñanzas.

La finalidad de la depuración era inicialmente la destrucción de la obra escolar republicana, acabar con el laicismo, la coeducación, la organización democrática de la enseñanza y el espíritu de innovación pedagógica. Pero, como explica Borja Riquer, no se proponía simplemente el regreso a 1931, *“sino sobre todo una involución mucho mayor, profundamente reaccionaria y antiliberal, agresivamente nacionalista y ultracatólica. Parecía que existiera una clara voluntad de regreso a un siglo atrás, a los tiempos anteriores a la misma revolución liberal”*¹¹⁶⁶. Así lo reconocía expresamente José María Pemán en su Circular de 7 de diciembre de 1936: *“es preciso combatir resueltamente el sistema seguido desde hace más de un siglo de honrar y enaltecer a los inspiradores del mal”*¹¹⁶⁷.

La depuración era el paso previo y necesario para construir el nuevo sistema educativo, de ahí el carácter punitivo y preventivo de la represión, que mencionaba Pemán en la circular. El objetivo de la purga no era exclusivamente castigar y expulsar del cuerpo docente a los maestros por sus ideas y hechos anteriores a la guerra, también se hacía

¹¹⁶⁶ Borja Riquer en el prólogo de MORENTE VALERO, Francisco. *La escuela y el Estado Nuevo: la depuración del magisterio nacional (1936-1943)*. Ámbito, Valladolid, 1997, pág. 18.

¹¹⁶⁷ Circular de 7 de diciembre de 1936. BOE, 10 de diciembre de 1936.

como prevención por lo que pudieran hacer, o más bien por lo contrario, lo que no podrían hacer: educar en los valores del Nuevo Estado que estaban forjando los sublevados.

Los docentes fueron considerados por los sublevados como los principales responsables de la situación de España, que había hecho inevitable el movimiento militar. Como se recogía en el preámbulo del Decreto 66:

El hecho que durante varias décadas el Magisterio en todos sus grados y cada vez con más raras excepciones haya estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y tradición nacional, hace preciso que en los solemnes momentos por que atravesamos se lleve a cabo una revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública, trámite previo a una reorganización radical y definitiva de la enseñanza, extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra patria¹¹⁶⁸.

En la provincia de Segovia se adelantaron a las disposiciones oficiales emanadas de Burgos, y, ya antes de la Orden de 19 agosto, el comandante militar de la plaza, José Tenorio, en aplicación del Bando de Guerra de 28 de julio (*“los funcionarios (...) que no presten el inmediato auxilio que por mi autoridad o mis subordinados sea reclamado para el restablecimiento del orden o ejecución de lo mandado en este bando, serán suspendidos inmediatamente de sus cargos...”*¹¹⁶⁹), suspendió en sus funciones a los 72 maestros que pertenecían o habían pertenecido a la Asociación *“Trabajadores de la Enseñanza”* (afecta a UGT) con fecha, a efectos retributivos, de 31 de julio¹¹⁷⁰.

El mismo día, 14 de agosto, el comandante Tenorio dictó una Circular en la que disponía el cese inmediato de *“todas las personas que por hechos anteriores o posteriores al movimiento militar, hayan demostrado simpatía por las doctrinas de tipo marxista o que por sus actos o palabras hayan incurrido en responsabilidad y se encuentren detenidos a disposición de la autoridad civil o militar desde el 19 de julio último”*¹¹⁷¹. Esta Circular afectó, además de otros colectivos obreros o funcionarios, también a maestros, alumnos de la Escuela Normal de Magisterio y a profesores del Instituto de Enseñanza Media.

Por este conducto fueron cesados un total de 53 maestros, 13 maestras, 4 alumnos maestros, 6 alumnos de 2º y 3º de Magisterio, 7 profesores del Instituto de Segunda Enseñanza, un portero de 3º del mismo Instituto y 3 profesores de la Escuela Normal de Magisterio¹¹⁷². A partir de esa fecha no tenemos más noticias de destituciones hasta las propuestas por la Comisión D (desde la entrada en acción de este organismo, tan sólo va a aparecer en el BOP del 19 de febrero de 1937, la destitución de Luis Felipe Estirado, alumno de Magisterio, en aplicación de la mencionada Circular).

Estos ceses afectaban, incluso, a los maestros pertenecientes a Trabajadores de la Enseñanza que no tenían escuela oficial, pero que *“debían tenerse en cuenta para que no se nombren interinamente, ni se les autorice para dedicarse a la enseñanza privada”*¹¹⁷³. Esta disposición sólo afectó a Lucas Lobo.

Entre agosto y noviembre de 1936 se llevó a cabo una depuración desordenada, sin coordinación entre instituciones ni criterios claros de actuación. El primer objetivo era separar del servicio a los maestros que se habían significado por ideas o actuaciones que las nuevas autoridades consideraban contrarias a los principios que habían inspirado la sublevación militar. Burgos quería que la actuación depuradora fuera contundente y rápida, para lo que dieron poderes especiales a los rectores de las universidades. Pero su realización se mostró inviable porque la única sanción prevista, sin posibilidad de

¹¹⁶⁸ D. nº 66. BOE, 11 de noviembre de 1936.

¹¹⁶⁹ Artículo 3º del Bando de Guerra de 28 de julio de 1936, BOP, 5 de agosto de 1936.

¹¹⁷⁰ BOP, 14 de agosto de 1936, nº extra.

¹¹⁷¹ BOP, 14 de agosto de 1936.

¹¹⁷² Todos los afectados están recogidos en los anexos, con expresión de la fecha de cese.

¹¹⁷³ BOP, 7 de septiembre de 1936.

graduación, era la separación del servicio, lo que hubiese originado la destitución generalizada de maestros.

8. 3. 2. La legislación depuradora

En el amplio marco de la depuración, fue en el terreno educativo -concretamente el de la enseñanza primaria- donde antes se dictaron normas reguladoras en el territorio dominado por el Ejército sublevado. La Orden de 19 de agosto de 1936¹¹⁷⁴ fue la primera, y en ella se encargaba a los alcaldes o delegados (de la autoridad militar) la realización del primer filtro de los maestros destinados en sus municipios.

Los alcaldes pasaban así a ser los primeros agentes depuradores. Su valoración negativa era suficiente para que el maestro informado fuera destituido de su puesto por el rector de la Universidad de Valladolid (la provincia de Segovia pertenecía al rectorado de Madrid, pero, a causa de la guerra, pasaba a depender *“por ahora”* del distrito vallisoletano; según la Circular de la Presidencia de la Junta de Defensa Nacional¹¹⁷⁵).

Los informes enviados al rectorado se referían a la conducta observada por los maestros, propietarios o interinos, si había sido *“la conveniente (...) o si por el contrario han mostrado (...) ideario perturbador de las conciencias infantiles, así en el aspecto patriótico como en el moral”*¹¹⁷⁶. Recogían así la doble vertiente político-religiosa que estaba tan estrechamente unida en la España sublevada.

En este sentido parece que los alcaldes no estaban muy convencidos de su labor, o no estaban capacitados para ella, puesto que desde la Universidad se les llamó la atención. En el comunicado se quejaba el rectorado de que la mayoría de los ayuntamientos de la provincia *“no han enviado hasta la fecha los informes que en relación a los maestros de los Municipios exige el nº 6 de la Orden de la Junta de Defensa Nacional de 19 de agosto. Algunos informes (...) son tan confusos e incompletos que no hay posibilidad de formar juicio exacto para la imposición de la sanción correspondiente”*¹¹⁷⁷.

A la vez que se realizaban las labores represivas, se iban dictando las normas para el restablecimiento de una escuela católica donde los principios religiosos y conservadores estuvieran perfectamente unidos. Como apuntamos en el capítulo 3.2.3, se prohibieron los libros de texto y de lectura utilizados hasta entonces, se repuso el crucifijo en las aulas, así como el rezo al comienzo y finalización de las clases, se volvió a la asistencia a la misa dominical de todos los alumnos en formación, acompañados del maestro, etc.

La norma fundamental de depuración del personal, docente y no docente, dependiente del antiguo Ministerio de Instrucción Pública, fue el Decreto nº 66 de 8 noviembre de 1936. Era muy interesante la declaración de principios e intenciones de su preámbulo:

La atención que merecen los problemas de enseñanza, tan vitales para el progreso de los pueblos, quedaría esterilizada si previamente no se efectuase una labor depuradora en el personal que tiene a su cargo una misión tan importante como la pedagógica¹¹⁷⁸.

Los sublevados querían una escuela nueva totalmente distinta a la republicana, para ello habían de acabar con las personas e ideologías contrarias a sus intereses, a los que culpaban de todos los males de España.

Era primordial para los gobernantes de Burgos la depuración del personal docente, que estaba *“influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en*

¹¹⁷⁴ BOP, 26 de agosto de 1936.

¹¹⁷⁵ BOP, 31 de agosto de 1936.

¹¹⁷⁶ O. de 19 de agosto de 1936, art. 6º. BOP, 26 de agosto de 1936.

¹¹⁷⁷ BOP, 2 de octubre de 1936.

¹¹⁷⁸ Preámbulo D 66. BOE, 11 de noviembre de 1936.

abierta oposición con el genio y tradición nacional"¹¹⁷⁹. Esta creencia de que los maestros en general tenían tendencias republicanas o izquierdistas, estaba asumida mayoritariamente en los medios conservadores durante la época republicana, y también aceptada por los progresistas, incluso hasta la actualidad. Pero Morente (al analizar en su estudio los datos generales de la depuración, donde recoge que no más de un 25% o 30% de los maestros fueron sancionados por las expeditivas autoridades franquistas) pone en cuestión esa creencia, aunque reconoce que los maestros depurados eran la vanguardia del magisterio, a la cabeza de la innovación pedagógica.

Con "carácter temporal" se crearon distintas comisiones (es reseñable este dato de la temporalidad, puesto que, lógicamente, una vez realizada la depuración total, aquéllas ya no serían necesarias). En el caso de Segovia, al no existir universidad, sólo se crearon la Comisión C) y la D). Los integrantes de ambas comisiones eran, personas "*libremente*" elegidas por el presidente de la JTE, a propuesta de la Comisión de Cultura y Enseñanza, "*siendo los cargos irrenunciables*"¹¹⁸⁰.

La Comisión C) estaba integrada por el gobernador civil, que ejercía de presidente, un profesor de Instituto, un profesor de la Escuela Normal, un profesor de la Escuela de Artes y Oficios y un vecino residente en la capital. Esta comisión debía recabar informes, instruir expedientes y proponer resoluciones, sobre todo el personal adscrito a Institutos, Escuelas Normales, Artes y Oficios, de Trabajo, Inspecciones de Primera Enseñanza, Sección Administrativa y de cuantos dependían del Ministerio de Instrucción Pública y no estaban incluidos en las anteriores comisiones.

La Comisión D) estaba presidida por el Director del único Instituto de Segunda Enseñanza de la capital, Daniel Fraga Aguiar e integrada por un inspector de Primera Enseñanza, el presidente de la Asociación de Padres de Familia y dos personas de máximo arraigo y solvencia moral y técnica. Fue nombrado secretario Jesús Tablado Santamaría, dirigente de la Federación Católica Agraria, también designado Delegado Provincial de Trabajo y concejal del Ayuntamiento de Segovia. El cometido principal de la Comisión era formular propuestas razonadas de suspensión o separación del personal del magisterio destinado en esta provincia.

Las comisiones depuradoras ahora creadas reiniciaron todo el proceso depurador: las medidas anteriores tomadas por gobernadores civiles y rectores quedaron con el carácter de provisionales; los expedientes volvieron a su inicio, ampliándose los informes, o incluso apareciendo nuevas acusaciones. La instrucción de los expedientes afectaba a todo el personal de los respectivos escalafones, incluidos los no docentes, en cualquier situación, (interinos, sustitutos, etc.) con cargo el 18 de julio. Afectó incluso al propio presidente de la Comisión D, Daniel Fraga, quien, por supuesto, fue confirmado en el cargo. También se incluía a los que hubieran sido sancionados ya por disposiciones emanadas de la JDN, porque la depuración realizada por las comisiones tenía un "*carácter de revisión de las primeras sanciones, con una mayor garantía para el interesado*". Suponían un avance estas mayores garantías, pero la práctica totalidad de los maestros cesados se quedó con el despido (de los 138 maestros cesados inicialmente por las autoridades militares provinciales, sólo 8 fueron repuestos entre noviembre de 1936 y abril de 1937), aunque ahora, al menos, tenían derecho a presentar un escrito de defensa.

La ideología en que se basó la depuración del nuevo régimen en el campo de la enseñanza venía muy bien explicada en la Circular de la Comisión Cultura y Enseñanza a los Vocales de las Comisiones Depuradoras de Instrucción Pública, de 7 de diciembre de 1936. Estaba firmada por José María Pemán, intelectual muy cercano a Franco, ahora presidente de la Comisión. La Circular era una declaración de principios claramente contrarrevolucionaria y en ella obligaba a comisiones y autoridades a que participaran en

¹¹⁷⁹ Ver nota anterior.

¹¹⁸⁰ Art. 2º, D. 66. El subrayado es mío.

las labores depuradoras por *“la trascendencia de la sagrada misión que hoy tienen en sus manos”*¹¹⁸¹.

La depuración tenía un carácter punitivo, pero también preventivo, es decir, el objetivo era garantizar para el futuro una enseñanza acorde con los ideales del Nuevo Estado y para esta labor no servían los maestros con ideologías progresistas. Esta circular, en ningún caso recomendaba que las comisiones actuaran con responsabilidad, seriedad, equidad, alejados de toda pasión que nublara la objetividad necesaria para realizar un proceso justo. Más bien al contrario, era de lo más beligerante con las personas que profesaran ideas distintas a las que sustentaban la sublevación militar:

El carácter de la depuración no es sólo punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizar a los españoles (...) que no se volverá a tolerar ni menos a proteger o subvencionar a los envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y han sembrado de duelo la mayoría de los hogares honrados de España. (...) Las Comisiones (deben) proponer la separación inexorable de sus funciones magistrales de cuantos directa e indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los partidos, ideario e instituciones del llamado FP.

Los individuos que integran esas hordas revolucionarias (...) son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y profesores que a través de instituciones como la llamada ‘Libre de Enseñanza’, forjaron generaciones incrédulas y anárquicas (...) es preciso combatir resueltamente el sistema seguido desde hace más de un siglo de honrar y enaltecer a los inspiradores del mal, mientras se reservaban los castigos para las masas víctimas de sus engaños¹¹⁸².

El futuro del Nuevo Estado se ligaba estrechamente al del resultado satisfactorio del proceso depurador en la enseñanza, pues *“la perspectiva del resurgir de una España mejor (...) está en razón directa de la justicia y escrupulosidad que pongan en la depuración del Magisterio en todos sus grados”*¹¹⁸³.

Mediante la publicación de sucesivas normas, la depuración se fue extendiendo a todos los ámbitos educativos; a las Fundaciones Benéfico-Docentes, a los alumnos de las Escuelas Normales (cuya depuración tenía únicamente dos posibilidades: confirmación en sus derechos y autorización para continuar sus estudios o pérdida de los derechos adquiridos y prohibición de continuarlos), a los colegios privados (aunque la depuración de estas instituciones se había encargado directamente a las empresas propietarias, normas posteriores prohibieron a los maestros depurados, separados del servicio, ejercer en la enseñanza privada) y, por fin, a los maestros interinos y sustitutos también¹¹⁸⁴. El objetivo final era que ningún maestro ejerciera la docencia en la enseñanza privada o pública, sin haberse sometido a expediente de depuración.

Debido a la gran importancia dada por Burgos a estas acciones depuradoras, la Orden marcaba los plazos de actuación de las distintas comisiones: un mes para la C y tres meses la D, es decir *“con la mayor urgencia compatible con su delicada misión”*. Pero pronto se vio que el procedimiento era proceloso, con multitud de normas aclaratorias, el retraso en la emisión de informes, la falta de personal, la inicial obligación de publicación en *BOE* se tuvo que hacer en el *BOP* por la avalancha de listas¹¹⁸⁵, etc.

¹¹⁸¹ Circular de la Comisión Cultura y Enseñanza de 7 de diciembre de 1936. *BOE*, 10 de diciembre de 1936. Según afirma Morente Valero esta circular fue redactada por Vegas Latapié y firmada sin conocer su contenido por Pemán. MORENTE VALERO, F., op. cit., pág. 213.

¹¹⁸² Circular de la Comisión Cultura y Enseñanza de 7 de diciembre de 1936. *BOE*, 10 de diciembre de 1936.

¹¹⁸³ Ver nota anterior.

¹¹⁸⁴ O. Presidencia JTE, 3 de febrero de 1937, sobre depuración de Fundaciones Benéfico-Docentes; O. 29 de abril de 1937, *BOE*, 2 de mayo, alumnos Escuelas Normales; y O. 14 de mayo de 1938, prohibía a los maestros depurados separados del servicio, ejercer en colegios privados.

¹¹⁸⁵ *BOP*, 6 de diciembre de 1937, O. Presidencia JTE, de 27 de noviembre de 1937, *“Alcanzada la labor depuradora la cifra de 50.000 maestros (...) Los acuerdos recaídos sólo saldrán publicados en Boletín Oficial de la provincia donde se haya hecho el expediente, o última donde haya servido el maestro”*.

8. 3. 3. Formación de los Expedientes

La formación de los expedientes de depuración venía dispuesta en la Orden de 10 de noviembre de 1936. Se basarían en la recogida de informes de autoridades, centros oficiales y personas, sobre la *“conducta profesional, social o particular, así como actuaciones políticas del personal cuyos antecedentes y actuación les corresponda investigar, con objeto de poder formar un concepto acabado y total de cada uno de los interesados”*¹¹⁸⁶.

La recogida de informes estaba "animada" por la referida Circular de 7 de diciembre, en la que se atemorizaba a los posibles informantes, a los que las comisiones provinciales deberían hacerles presente *“la gravísima responsabilidad en que incurren para con Dios y con la Patria ocultando determinados extremos, cuando no, llegando a falsear hechos, valiéndose de reprobables reservas mentales o sentimentalismos extemporáneos”*¹¹⁸⁷.

En esta Circular se llegaba a la amenaza de escarnio público a los que no colaboraran en la labor represora: *“También se ha de combatir y de hacer público, para perpetua vergüenza del que en tal falta de ciudadanía incurra, el nombre de quienes aleguen indebidamente desconocer los hechos o las personas sobre los que se interesan informes”*¹¹⁸⁸. Seguimos observando que cualquier norma dictada por Burgos era aprovechada para infundir miedo a la sociedad civil.

En los expedientes formados a los maestros, eran informes obligados los del alcalde, cura párroco, comandante de puesto de la Guardia Civil y de un *“padre de familia bien reputado”*-es decir, de ideología claramente conservadora- del lugar donde radicara la escuela.

Podemos añadir a estos informes preceptivos, los del Gobierno Civil, la Comisaría de Vigilancia (sólo en algunos casos), carteros (sobre las suscripciones a periódicos de los maestros¹¹⁸⁹), habilitados pagadores de los maestros (que realizaban en los haberes los descuentos por las cuotas sindicales), FET (que disponía de completos archivos sobre militantes de los partidos políticos) y los de dos maestros que informaban de todos sus compañeros, con un tono muy crítico en casi todos los casos, como veremos ahora.

La solicitud de informes de la Comisión de Segovia era muy concisa, característica que pedía también al informante, sobre *“cuantos datos conozca en el orden político, social, religioso, moral y singularmente la actuación docente en la escuela, de los maestros (...) desde el 1 de enero de 1934, advirtiéndole que la falsedad, parcialidad u omisión de los datos, tanto a favor como en contra de los interesados, serán consideradas como grave falta de patriotismo, que será puesta en conocimiento de la Autoridad para su sanción oportuna”*¹¹⁹⁰. Cada comisión provincial elaboraba su propio formato de carta, así, la de Burgos remitía un cuestionario muy exhaustivo, donde recogía además las advertencias de la Circular de 7 de diciembre sobre la *“gravísima responsabilidad para con Dios y con la Patria...”*¹¹⁹¹.

Las características de los informes sobre los docentes son muy similares a los que ya hemos advertido en otros capítulos: aparecen informaciones repetidas, incluso de distintas autoridades, muchas de ellas no conocían al afectado, lo que no les impedía emitir

¹¹⁸⁶ Art. 2º, O. de 10 de noviembre de 1936. BOE, 13 de noviembre de 1936.

¹¹⁸⁷ Circular de la Comisión Cultura y Enseñanza de 7 de diciembre de 1936. BOE, 10 de diciembre de 1936.

¹¹⁸⁸ Ver nota anterior.

¹¹⁸⁹ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Félix Barrio. Figura el certificado del cartero de Olombrada de que no recibía *La Libertad* desde enero de 1936.

¹¹⁹⁰ Carta que remitía la Comisión D. de Segovia a las autoridades para que remitieran los informes pertinentes sobre los maestros que ejercían en su localidad. Arch. Mun. de Cuéllar.

¹¹⁹¹ CRESPO REDONDO, J. y otros. *Purga de maestros en la Guerra Civil*, Ámbito, Valladolid, 1987. En las págs. 112-114 se recoge el cuestionario completo en dos hojas, que abarcaba la conducta profesional, social, particular (en la que incluía la religiosa) y política, con preguntas como *¿cantó a los niños la Internacional o algún otro himno parecido? o ¿saludaron los niños con puños en alto?*; y la carta de la Comisión Provincial solicitando los informes.

su opinión, informes elaborados por terceras personas, contradicciones entre los realizados sobre la misma persona, casi siempre aludían a generalidades, no existía la objetividad, etc.

Lo más habitual era que la mayoría de informes (de la Guardia Civil, alcalde y vecinos), aunque reconocieran la militancia o simpatías del maestro con ideologías republicanas o de izquierda, admitieran también su buena labor profesional en la escuela. En cambio, el párroco solía atacar directamente tanto las ideas como el comportamiento religioso del maestro. Así le ocurrió a Callejo Hernández, maestro de Villovela, quien para la Guardia Civil presentaba una *“conducta profesional, social y particular buena, sin haberse mezclado en política, si bien en sus conversaciones ha demostrado simpatías por el FP, se casó por lo civil, ya en la guerra por la iglesia”*. Así mismo los informes del alcalde y dos vecinos eran favorables. Por el contrario, el párroco arremetió contra él con la acusación de que *“rompió las hojas de Historia Sagrada de la enciclopedia, no dejaba entrar en clase a los monaguillos cuando salían de misa, hizo propaganda protestante, metía a los adultos en los bolsillos de la americana hojas de esa doctrina”*¹¹⁹².

Pero a otros, como a Francisco Díez Peñalver, maestro de Cuéllar, mientras la Guardia Civil era muy dura *“...por sus ideas muy avanzadas y extremistas deja mucho que desear (...) organizador de los muchos actos, a los que concurría sin dilación, distinguiéndose en los vivas a Rusia y el Comunismo en las manifestaciones, cuyas ideas así como las antirreligiosas propagaba en las clases entre los niños”*; el cura era mucho más benévolo *“...no creo que tenga malas ideas, pero tampoco su conducta ha sido cristiana y patriótica hasta la fecha del MN, después ya sí. En la escuela tengo entendido que han sido (informaba también sobre su mujer, maestra como él) extremadamente neutrales y nada malo han inculcado a los niños”*¹¹⁹³.

Entre los informes aparecían también rivalidades entre las distintas autoridades locales. Por ejemplo, el Gobierno Civil se quejó de la toma de posesión de Francisco Díez –en septiembre de 1936- porque no había sido sancionado como, a criterio del gobernador, merecía. Así lo expresó en su informe: *“Con todo respeto y creyendo interpretar los deseos de todo el pueblo de Cuéllar, hace constar su más sincera protesta contra la toma de posesión de la escuela por este señor, que en su actuación profesional y particular no solamente no ha demostrado patriotismo sino que ha procurado ayudar moralmente a los enemigos de España”*¹¹⁹⁴. Resulta sorprendente esta queja, puesto que el gobernador civil tenía la autoridad suficiente para haber cesado al maestro, como ya había hecho con tantos otros.

Los informes no estaban exentos de presiones de distinto tipo y procedentes de diversas autoridades. El alférez de complemento Salvador Bernal Martín, hijo del maestro Frutos Bernal, acompañado de otro alférez, Gabriel de Cáceres, acudió a Tres Casas, donde trabajaba su padre, para presionar a los vecinos con el fin de que dieran certificados de buena conducta del maestro, amenazándoles con su pistola. El párroco de la localidad denunció las coacciones al Gobierno Civil, que informó de los hechos al gobernador militar, utilizando este razonamiento tan clarividente: *“como estos actos no están de acuerdo con quien viste tan honroso uniforme, y máxime si se tiene en cuenta que Salvador Bernal está actuando de juez militar, aunque ha sido siempre abogado y procurador del FP, muy izquierdista, se lo pongo en su conocimiento para los fines que crea convenientes”*¹¹⁹⁵.

¹¹⁹² AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, 11, Exp. Dep. Callejo Hernández.

¹¹⁹³ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, 16, Exp. Dep. Francisco Díez.

¹¹⁹⁴ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, 16, Exp. Dep. Francisco Díez.

¹¹⁹⁵ Informe 2435, del Negociado de Orden Público al Cmte. Militar de Plaza, fechado el 17 de septiembre de 1936. Como se ha explicado en el capítulo 5.3., tanto Salvador Bernal como Gabriel de Cáceres ejercieron de jueces instructores durante la guerra. Este informe no tuvo consecuencias para ninguno de los alféreces, que continuaron en sus puestos de jueces militares el resto de la contienda. En el A. G. M. de Segovia, en el exp. B-2098, de Salvador Bernal figuran las diligencias previas instruidas por el Jgdo. Mil. de Plaza, con motivo de esos sucesos. Al final, el párroco retiró las acusaciones y se sobreescribió el caso.

Los Informes

Las personas o autoridades obligadas a informar de la conducta de los maestros eran las siguientes:

El **Gobierno Civil** informaba normalmente si el maestro depurado estaba en la cárcel, había estado detenido, se encontraba desaparecido, o tenía antecedentes sobre su filiación política o sindical. Esta dependencia no siempre estaba bien informada, porque, por ejemplo según sus datos, Constantino García había sido detenido *“por sus ideas marxistas el 19 de julio de 1936”*, mientras que el alcalde de la localidad y testimonios que hemos recogido en su pueblo, Duruelo, afirman que su detención fue el 9 de agosto. Fue fusilado en Segovia el 15 de agosto, y en el Gobierno Civil, no sabían nada o no querían saberlo. El informe de la **Comisaría de Vigilancia** tampoco era preceptivo, sólo se ha encontrado en algunos expedientes sobre maestros de la capital y coincide normalmente con el del Gobierno Civil.

La **Guardia Civil** emitía su informe firmado por el comandante del puesto del municipio donde ejercía el maestro o del cuartel más cercano al mismo. Normalmente recogía la actividad político-social del maestro informado. Un ejemplo clarificador es el que emitió la Guardia Civil de Carbonero sobre Circuncisión Marcos, maestra en el barrio de Fuentes. En él se manifestaba que su conducta profesional era *“malísima por su ideal marxista al extremo que con los niños en clases simulaba elecciones, con urna y papeletas de izquierda y derecha, a una niña la recriminó duramente por votar a la derecha”*¹¹⁹⁶.

El **alcalde** de la localidad donde prestaba sus servicios el maestro. Estos informes eran muy variados, pues respondían a la personalidad de cada edil. Algunos se limitaban a informar sobre el trabajo educativo, mientras que otros entraban de lleno en la vida privada del maestro afectado. Sirvan como ejemplos de las distintas posturas, los referidos a los siguientes maestros fusilados:

- Ángel Prieto era de buena conducta, aunque de izquierda, su *“actuación docente de encomio, habiendo obtenido discípulos aventajados en instrucción general”*¹¹⁹⁷.

- Hermenegildo Domínguez era *“comunista y directivo de (...) Trabajadores de la Enseñanza (...) su conducta dentro de la escuela ha respondido a estos principios defendidos siempre por él”*¹¹⁹⁸.

- Jesús Gilmartín *“no fue a misa ni demás actos religiosos, actuación bastante deficiente”*¹¹⁹⁹.

Los **vecinos de “reconocida solvencia”**, lo que significaba marcada ideología conservadora. Muchos de los informes recogidos a los vecinos de la localidad de los maestros eran desfavorables, incluso los emitían algunos que no tenían hijos en edad escolar por lo que no conocían la labor del maestro, como expresaba un vecino de San Ildefonso *“aunque carezco de datos por no haber tratado con ninguno de ellos personalmente, en su convivencia de vecinos de esta localidad...”*¹²⁰⁰.

Hay algunos informes repetidos y muy similares a los del alcalde, firmados por personas distintas, y totalmente desfavorables. Así, para dos vecinos de El Espinar, Hermenegildo Domínguez era *“comunista peligroso y su conducta corresponde a sus pensamientos dentro y fuera de la escuela”*¹²⁰¹. La conducta de su hermano Mariano

¹¹⁹⁶ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Circuncisión Marcos.

¹¹⁹⁷ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Ángel Prieto.

¹¹⁹⁸ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Hermenegildo Domínguez.

¹¹⁹⁹ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Jesús Gilmartín.

¹²⁰⁰ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Aniano Domínguez.

¹²⁰¹ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Hermenegildo Domínguez. Declaración de los vecinos Mariano María y Gregorio Núñez.

Domínguez, maestro de Nieva, para el vecino Alejandro Arribas *“dejaba mucho que desear en todos los órdenes a que se refiere dicha comunicación”* y otro vecino, según recoge literalmente el informe *“dice exactamente lo mismo que Alejandro Arribas”*¹²⁰².

En estos informes es donde más se percibían los diferentes niveles de cultura, incluso la ignorancia política de algunos vecinos. Por ejemplo Juan Monje hacía *“propaganda comunista”*, aunque estaba afiliado a I.R., iba al “centro” (puede que se refiriera a la Casa del Pueblo o a la sede del partido republicano) y a los pueblos inmediatos a dar mítines, por lo que *“éste era jefe de por aquí de todo lo malo”*¹²⁰³. Ese era el concepto que amplios sectores de la población tenían de las actividades político-sociales progresistas. Sobre Jesús Gilmartín, fusilado en agosto, *“se dice de todo, con que Dios le haya perdonado”*¹²⁰⁴.

En cambio, también había personas que se atrevían a defender o a dar informes favorables sobre maestros de izquierdas. Así Ferrari, como hemos escrito anteriormente, era *“competente y trabajador”*, aunque en lo político simpatizaba con el Frente Popular, y era *“antirreligioso”*.

Dos maestros debían informar sobre el resto de sus compañeros de toda la provincia. Ambos eran afiliados a la Asociación de Maestros Españoles, de significación católica y conservadora. Desiderio López Velicia daba charlas antes de la guerra en ambientes católicos (tenía un hermano sacerdote, Fausto, capellán del Hospital Asilo y también conferenciante¹²⁰⁵) y fue vocal de la Junta Provincial de Primera Enseñanza, desde septiembre de 1936. El otro maestro era Cipriano Martín. En sus informes sobre los docentes de la capital, lo hacían en su doble vertiente: como vecinos de la localidad y como maestros.

La mayoría de sus declaraciones eran muy desfavorables, incluso en contra de lo que decían otras autoridades locales. No informaban de la labor pedagógica de los afectados, pues la desconocían, lo que cínicamente expresaban literalmente, *“se desconoce la labor realizada en la escuela”*, aunque en otros se atrevían a expresar *“se presume haya hecho labor perniciosa en la escuela”*¹²⁰⁶.

Los calificativos más repetidos por estos maestros sobre sus compañeros, eran *“irreligioso, inmoral y deshonesto, izquierdista, no bien conceptuado”*, *“apartado de los deberes religiosos, moral acomodaticia, frentepopulista, regularmente conceptuado”*, o *“comunista furibundo y propagandista de ideas disolventes, pertenecía a trabajadores de la enseñanza, muy mal conceptuado”*.

El **cura párroco** del municipio o de la parroquia del barrio donde residía el maestro, si hubiera varias iglesias en la localidad. Son los informes más interesantes en este campo de la depuración, por su tradicional enemistad con los maestros progresistas.

Como se ha escrito, algunos párrocos se atrevían a recomendar la sanción a imponer a los maestros objeto de depuración. Para Roque Santa Engracia, maestro de Orejana, *“más que merecer la suspensión sería conveniente para bien del pueblo y suyo trasladarse a otra escuela no muy lejos de este lugar por hallarse casi completamente inútil físicamente”*¹²⁰⁷, o para Nicolás Valdivieso, *“...yo quisiera que mi declaración no fuera móvil*

¹²⁰² AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Mariano Domínguez, declaración de Alejandro Arribas y Restituto de Andrés.

¹²⁰³ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Juan Monje. Declaración de un vecino sin identificar.

¹²⁰⁴ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Jesús Gilmartín.

¹²⁰⁵ A Fausto López ya lo citamos en el incidente de los exdirigentes de AP, con su firma en un restaurante de la capital, por lo que fue criticado por el jefe provincial del Movimiento.

¹²⁰⁶ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Frutos Bernal.

¹²⁰⁷ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Roque Santa Engracia. Informe del párroco de Orejana.

*para quedarse sin paga por los hijos que tiene, pero si merece algún castigo por haber votado a esa canalla, lo mejor sería un traslado y todos conformes*¹²⁰⁸.

En lo referente a las prácticas religiosas, indicaban si practicaban los preceptos religiosos: acudían a misa los domingos y festivos, cumplían por Pascua, estaban casados por la Iglesia, bautizaban a los hijos, etc., de modo que, lógicamente, era muy mal conceptuado el maestro que no los cumplía. Por ejemplo, un párroco apoyaba su juicio de que Francisco Cuello era de extrema izquierda, en que en las horas de misa *“procuraba manifestarse con paseos y lugares bien visibles”*¹²⁰⁹. Por su parte, Matilde Bravo, iba al lavadero los domingos en horas de misa, alegando que tenía 6 hijos, *“con escándalo naturalmente de los buenos cristianos”*¹²¹⁰.

Otro “pecado” de algunos maestros era criticar las enseñanzas o dogmas de la Iglesia, como la propia Matilde Bravo, quien había hecho indicaciones críticas con algunos dogmas *“concretamente contra la virginidad de María Santísima”*¹²¹¹. En este sentido, es curiosa la anécdota recogida de algunos testimonios en Palazuelos. Dicen que Timoteo Domínguez, maestro de Tabanera decía a los alumnos que salieran de clase y llamaran a Dios. Cuando entraban de nuevo les indicaba que lo llamaran a él, para que los niños se dieran cuenta de que el maestro -al contrario que Dios- sí les respondía.

Algunos curas elucubraban sobre los cambios de comportamiento de los maestros, después de iniciada la guerra.

*En resumen, de soltero e interino, dejó bastante que desear, de casado y propietario, hasta el 17 de julio ha sido cauto y prudente, aunque no católico, y desde esta fecha a la actualidad, católico practicante. Este cambio ¿es una conversión real o una adaptación aparente por la fuerza de las circunstancias y el miedo a perder su colocación?. Difícil responder a esta pregunta. Humanamente pensando y a juzgar por sus antecedentes, más probablemente se puede colegir lo segundo*¹²¹².

En estos informes se obtiene información sobre otros aspectos represivos, como apreciamos en el capítulo de la represión ilegal. En algunos se explicaba por qué ciertos maestros se habían salvado de la ejecución. Teodoro Martín eludió el fusilamiento porque un tío suyo era militar retirado y *“con grande amistad –se dice- con los actuales comandante militar o gobernador, a lo que se atribuye el que vaya saliendo ileso (...) pues desde el 17 de julio ha pasado sus miedos y aún los está pasando pues ha sido visitado repetidamente por los falangistas”*¹²¹³.

Las críticas de los curas, aunque estaban centradas de un modo más exhaustivo en la cuestión religiosa, abarcaban la vida privada, social y política. En cuanto al terreno político cualquier atisbo de ideas nuevas o progresismo era totalmente pernicioso, de ahí las acusaciones que se repetían: *“poseía ideas avanzadísimas”* o *“por sus ideas muy avanzadas y extremistas deja mucho que desear”*. El conservadurismo de la derecha era radical, cualquier idea nueva era condenada, pues por el simple hecho de serlo ya se consideraba peligrosa.

Consecuentes con los dogmas cristianos, los párrocos valoraban mucho el arrepentimiento para atenuar las responsabilidades de “pecados” anteriores. Lo contrario, lógicamente, era agravar la culpabilidad. Ángel Costa no sólo era marxista *“sino que no está arrepentido según ha manifestado”*¹²¹⁴.

¹²⁰⁸ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Nicolás Valdivieso. Informe del párroco de Narros de Cuéllar.

¹²⁰⁹ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Francisco Cuello. Informe del párroco de Languilla.

¹²¹⁰ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Matilde Bravo. Informe del párroco de Paradinas.

¹²¹¹ Ver nota anterior.

¹²¹² AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Teodoro Martín Informe del párroco de Navas de Oro.

¹²¹³ Ver nota anterior.

¹²¹⁴ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Ángel Costa. Informe del párroco de Fuentesoto.

Por su parte, Nicolás Valdivieso en todas las elecciones votaba a la izquierda, según el criterio del cura *“me supongo que lo ha hecho porque creía que las izquierdas los subían las pagas”*¹²¹⁵. La actuación de Fuencisla Moreno, maestra de Valverde, era más “grave”, pues, como aseguraba el párroco, *“no te digo más que estaba afiliada al partido socialista y marchaba en Segovia a la cabeza de las manifestaciones públicas de este partido”*¹²¹⁶.

Aunque el párroco llevara poco tiempo en el pueblo, se atrevía (en parte también porque era obligado a ello, como hemos visto, por la Circular de 7 de diciembre de 1936) a manifestarse por lo que le decían terceras personas. El cura de Turégano así lo reconoció al informar, *“por referencias de mayores y pequeños”,* de que los maestros eran de *“ideas rabiosamente disolventes, sin embargo, aparentemente al menos, Esteban era menos malo”*¹²¹⁷. Esta última expresión “menos malo” era muy sintomática de la concepción del clero sobre muchos maestros, aparte de lo que para el clero pudiera significar que un maestro fuera “malo”.

La única culpa de Florentino Agueda era haber estado suscrito a *La Libertad*. Las razones de esta suscripción se aventuraba a expresarlas el cura: *“ya por el hijo, ya por pusilanimidad, no sea que le suprimieran las 3.000 pts., reconozco que algo culpable es”*. Pero, al fin, la valoración era favorable al maestro, pues su actuación *“no será perjudicial para la religión y la patria, sino antes bien, beneficioso y un asiduo colaborador”*¹²¹⁸.

Sin duda uno de los informes más duros de los estudiados, fue el del cura de Nieva sobre Mariano Domínguez, fusilado en agosto de 1936:

*Nunca cumplió con sus deberes cristianos, en la labor en la escuela antirreligiosa y antipatriótica en grado supremo, poseía ideas avanzadísimas y pertenecía a partidos políticos de extrema izquierda, todo ello comprobadísimo y desgraciadamente palpable en el pueblo y en los niños, y por documentos escritos de su puño y letra, algunos de ellos obran en mi poder, era suscriptor de El Liberal y en su biblioteca y en la de la escuela había gran número de libros perversos contra la moralidad y contra la Patria*¹²¹⁹.

Los Pliegos de Cargos

Reunidos todos los informes, la Comisión pasaba al estudio de los datos recogidos. Si no había suficientes elementos de juicio para declarar una posible culpabilidad que derivara en sanción, en ese momento finalizaba el expediente, proponiendo la confirmación en el cargo o en los derechos del afectado, en caso contrario, se elaboraba un pliego de cargos, que recogía la acusación. En dicho documento constarían los cargos que a juicio de todos o algunos vocales resultaran, pero *“sin poner la persona o personas que los mantengan”*¹²²⁰, con el fin de cohesionar a la Comisión de modo que se solidarizaran los miembros entre sí, al tiempo que se impedía que se conociera qué vocales habían formulado cargos, evitando de esta manera posibles presiones o amenazas.

El pliego de cargos se trasladaba por escrito al interesado, para que en un plazo de 10 días remitiera un escrito de descargos, aportando la documentación que estimara necesaria para su defensa. Esta documentación normalmente eran nuevos informes de personas afectas al nuevo régimen, falangistas, militares, miembros del clero, etc.

Para hacer llegar el pliego de cargos a los maestros que no residían habitualmente en el lugar de trabajo durante el curso, que eran muchos, se publicaba el aviso en el *BOP*, dándole un plazo para que comunicara su domicilio. Si transcurrido el plazo de 10 días el interesado no manifestaba su residencia, continuaba la tramitación del expediente como si

¹²¹⁵ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Nicolás Valdivieso.

¹²¹⁶ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Fuencisla Moreno. Informe del párroco de Valverde del Majano.

¹²¹⁷ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Esteban de Andrés. Informe del párroco de Turégano.

¹²¹⁸ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Florentino Agueda. Informe del párroco de Turrubuelo.

¹²¹⁹ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Mariano Domínguez. Su biblioteca fue incautada, como se apuntó en el cap. 7.

¹²²⁰ Art. 2º, O. 28 de enero de 1937. *BOE*, 3 de febrero de 1937.

hubiese sido oído el interesado. La lista más numerosa de este tipo, fue el 12 de abril de 1937, por la que se convocaba a 177 maestros. Entre ellos había ya varios fusilados, otros en prisión, y alguno que había pasado al bando republicano¹²²¹.

Los Pliegos de Descargos

El plazo para presentar el pliego de descargos era de 10 días, lo que originaba ciertas dificultades para la defensa. Aunque todos los afectados tenían un mínimo nivel de formación, no en vano eran maestros, hemos comprobado grandes diferencias culturales entre ellos. Había pliegos de distintos tipos: escritos a máquina, a mano, con gran retórica, breves y concisos, o incluso con faltas de ortografía. A la hora de la redacción, los maestros planteaban distintas estrategias de defensa, del mismo modo que los afectados en el capítulo económico. Unos expresaban sorpresa ante los cargos de los que se les acusaba, otros aludían a enemistades, envidias, etc.

A la Comisión no le agradaba que los afectados aludieran a la anormalidad de la situación creada con la sublevación militar, al carácter legal de las actuaciones político-sociales ahora perseguidas o la injusticia de la retroactividad depuradora. Los dos maestros que ponemos como ejemplos en este sentido fueron separados del servicio:

Aurelio García González, maestro en Hontalbilla, se atrevió a considerar en su pliego de descargos: *“...admitamos que se pudieran **considerar delictivos hechos aparentemente contrarios a un movimiento antes de producirse éste. Llevemos hasta el límite la concesión y admitamos que se pueda considerar delictiva una forma de pensar que no se ha traducido en acciones posteriores ni anteriores al MN...**”*¹²²². Por su parte, Ángel Costa, maestro de Fuentesoto, fue más contundente y directo con el procedimiento depurador, afirmando que la militancia en Trabajadores de la Enseñanza y la participación en actividades políticas de izquierda, cargos por los que era acusado, *“realizados en la época a que se refieren, entraban en la categoría de lo legalmente lícito. Esta consideración a mi juicio sería suficiente para destruirlos”*¹²²³.

A la hora de analizar los pliegos de descargos, hay que tener en cuenta las situaciones personales, los maestros ponían en juego su puesto de trabajo y no volver a trabajar por ser desafecto, lo que llevaba directamente a la miseria. Porque la depuración implicaba la pérdida de la plaza docente, impidiendo además la posibilidad de dedicarse a la enseñanza privada. Esta situación angustiosa hacía que algunos expresaran sumisión ante las nuevas autoridades, puede que incluso rayando con lo humillante. Para cierto número de maestros, cualquier argumentación, aunque fuera la negación por escrito de sus principios ideológicos, se daba por bien empleada con tal de mantener el empleo.

La Propuesta de la Comisión

Contestado el pliego de cargos, las comisiones podían ampliar las diligencias probatorias. Una vez finalizado este trámite, el ponente encargado de cada expediente proponía la sanción que la Comisión aprobaba generalmente por unanimidad, o por mayoría de los vocales, siempre que *“en conciencia crean acreedor a ella al encartado, aun en los casos en que por circunstancias especiales no haya en el expediente prueba bastante por escrito”*¹²²⁴. Hasta ahí llegaba la arbitrariedad de las actuaciones depuradoras, en este caso, el beneficio de la duda se aplicaba en contra de los afectados: aunque no hubiera pruebas suficientes para acreditar la “culpabilidad” del maestro, se recomendaba la sanción.

¹²²¹ BOP, 12 de abril de 1937. Entre otros cita a los tres hermanos Domínguez Martín, Clemente de Dios, Pedro Natalias, Ángel Gracia,... hasta los 16 maestros fusilados en 1936, además de los que estaban en la cárcel: Domitilo de Pablos, Juan Monje, Antonio Serrano,... o habían pasado al lado republicano como Alejandro de Frutos y José Delgado.

¹²²² AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Aurelio García. El subrayado es mío.

¹²²³ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Ángel Costa.

¹²²⁴ Circular Comisión de Cultura y Enseñanza, 28 de enero de 1937. (BOE, 3 de febrero de 1937).

Las propuestas de resolución habían evolucionado mucho desde el inicio del proceso depurador. En principio, con la Orden de 10 de noviembre y Circular de 7 de diciembre de 1936, sólo había tres tipos de sanción:

*Confirmación en el cargo o libre absolución, para los maestros que superaban el proceso depurador.

*Traslado de destino, para los que, *“siendo profesional y moralmente intachables”*, hubieran simpatizado con partidos nacionalistas vasco o catalán, sin haber tenido *“participación directa ni indirecta con la subversión comunista-separatista”*. Este tipo de sanción dirigida en principio para los nacionalistas no tenía por qué haberse dado en Segovia, por la lógica ausencia de maestros de este signo, pero, en cambio se aplicó a 82 maestros.

*Separación definitiva del servicio, para los que hubieran militado en partidos del Frente Popular o Sociedades Secretas, *“muy especialmente después de la revolución de octubre y de un modo general, los que perteneciendo o no a esas agrupaciones hayan simpatizado con ellas u orientado su enseñanza o actuación profesional en el mismo sentido disolvente que las informa”*¹²²⁵.

La dureza y lo limitado del abanico de estas sanciones, obligó a que se añadieran, con la Orden de 17 de febrero de 1937¹²²⁶, la suspensión de empleo y sueldo de 1 mes a dos años, la jubilación forzosa del interesado, siempre que tuviera un mínimo de 20 años de servicio, y la inhabilitación para desempeñar cargos directivos.

Las comisiones podían proponer, en caso de existencia de *“causas graves que lo aconsejen”*¹²²⁷, a la Comisión de Cultura y Enseñanza la suspensión de empleo y sueldo del funcionario expedientado, aunque se hallara en tramitación su expediente.

La Comisión de Cultura y Enseñanza podía solicitar informes complementarios, devolver los expedientes para su ampliación, o acordar o proponer, según los casos, las sanciones.

En los expedientes estudiados, no siempre se correspondían las mismas sanciones con los mismos cargos. Morente afirma que todas las comisiones coincidían en proponer la destitución de los maestros fusilados, lo que el Ministerio de Educación corroboraba sin excepción. Esta afirmación no se puede aplicar totalmente a la provincia de Segovia, puesto que de los 16 maestros fusilados en esta provincia, esa sanción la sufrieron 11, mientras que 2 fueron inhabilitados a perpetuidad y 2 trasladados fuera de la provincia¹²²⁸.

¹²²⁵ Los tres entrecomillados correspondientes a las sanciones son de la Circular de la Comisión Cultura y Enseñanza de 7 de diciembre de 1936. BOE, 10 de diciembre de 1936.

¹²²⁶ BOE, 27 de febrero de 1937.

¹²²⁷ O. 10 de Noviembre de 1936. desarrollando el D. 66. BOE, 11 de noviembre de 1936.

¹²²⁸ Desconocemos la sanción del maestro fusilado que hace el número 16, Julio Fuster, porque no estaba destinado en la provincia de Segovia.

8. 3. 4. Resultados del proceso depurador

Inicialmente, como se ha apuntado en el apartado anterior, fueron cesados 158 docentes en todo el ámbito educativo de la provincia de Segovia:

Cuadro nº 35: Depuración provisional de los docentes segovianos

Cuerpo docente		Nº profesionales	
Maestros	por Circular 14 agosto	66	138
	por Bando 28 julio	72	
Profesores del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza		7	
Profesores de la Escuela Normal de Magisterio Primario		3	
Alumnos de la Escuela Normal del Magisterio Primario		10	
Total docentes destituidos provisionalmente		158	

Entre la primera depuración, de urgencia, y la resolución definitiva hubo otras disposiciones provisionales que fueron apareciendo en el *BOP*, en las que se repuso a maestros que no tenían acusaciones graves. Se han recogido 3 listas, publicadas el 25 de octubre y 5 de noviembre de 1937 y 6 de abril de 1938, afectando a 48, 3 y 5 maestros respectivamente¹²²⁹.

El desenlace final del proceso depurador en Segovia, que había sido iniciado por el D. 66 de 1936 (cuyas propuestas de sanción por la Comisión Provincial, se iniciaron en la primavera de 1937) llegó a partir de los meses finales de 1938. Las primeras resoluciones definitivas correspondían a los confirmados en sus cargos, que aparecieron en el *BOP* de 2 de diciembre de 1938 afectando a 266 maestros. El 7 de diciembre de 1938 se publicó otra lista, en este caso de 228 maestros, también confirmados definitivamente en sus cargos. Por su parte, las sanciones fueron publicadas en el *BOP* de 22 de diciembre de 1939 y de 2 de febrero de 1940¹²³⁰.

¹²²⁹ *BOP*, 25 de octubre y 5 de noviembre de 1937 y 6 de abril de 1938.

¹²³⁰ *BOP*, 22 de diciembre de 1939. Las sanciones eran: inhabilitación para cargos directivos y de confianza (21); traslado dentro de la provincia (42); traslado fuera de la provincia (44); suspensión de empleo y sueldo por el tiempo que lo hubiera estado e inhabilitación para cargos directivos y de confianza (21); e iniciar expediente a 10 alumnos de la Escuela Normal. Además de las sanciones, publicaba la confirmación en sus cargos de 24 maestros. Por su parte, en el *BOP* de 2 de febrero de 1940, apareció la separación definitiva de 50 docentes y la inhabilitación perpetua de otros 6. Los maestros depurados están recogidos en los anexos.

Los datos definitivos fueron los siguientes:

Cuadro nº 36: Resultado de la depuración del magisterio segoviano

RESOLUCIÓN DEFINITIVA	Nº MAESTROS
Confirmados en sus cargos , con <i>“todos los pronunciamientos favorables”</i>	518
Inhabilitación perpetua para el desempeño de escuelas	6
Separación definitiva y baja en escalafón	51
Suspensión de empleo y sueldo por el tiempo que lo hayan estado y traslado forzoso fuera de la provincia , con prohibición de solicitar puestos vacantes durante 5 años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en Instituciones Culturales de enseñanza	45
Suspensión de empleo y sueldo <i>“por el tiempo que lo hayan estado”</i> y traslado forzoso dentro de la provincia , con prohibición de solicitar puestos vacantes durante 5 años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en Instituciones Culturales de enseñanza	42
Suspensión de empleo y sueldo por el tiempo que lo hayan estado e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en Instituciones Culturales de enseñanza	20
Inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en Instituciones Culturales de enseñanza	21
TOTAL MAESTROS AFECTADOS	702

El proceso depurador afectó a todos los maestros y maestras destinados en la provincia de Segovia, 702. De ellos fueron sancionados 184, lo que representaba un 26,2% del total de maestros. Además la Superioridad aprobó la formación de expediente de disciplina a los 10 alumnos-maestros que habían sido sancionados previamente.

8. 3. 5. Valoración del proceso depurador del Magisterio segoviano

Al principio de la guerra, los sublevados actuaron con gran rigor, tal como reconocían las propias autoridades franquistas (*“conocida la severidad de la Junta Técnica en los primeros meses del glorioso Alzamiento Nacional en la depuración de los maestros”*), si bien este rigor había sido una *“medida de precaución absolutamente indispensable en aquellos tiempos heroicos...”*¹²³¹. Hasta el 7 de octubre de 1936 fueron cesados por las autoridades provinciales 138 maestros, de los que sólo 51 serían separados definitivamente en 1939. Las normas depuradoras de finales de 1936, fueron dulcificadas posteriormente, desde primeros de 1937, por ejemplo, con la ampliación de las posibilidades de sanción.

La Comisión D de Segovia había sido muy estricta y dura a la hora de formular las propuestas de sanción. Hubo muchos casos de propuesta de separación definitiva que en la resolución final del Ministerio de Educación Nacional, quedaron en una suspensión de empleo y sueldo con traslado de destino. Concretamente, de 28 propuestas comprobadas,

¹²³¹ MORENTE VALERO, F., op. cit., pág. 383, nota nº 3.

en 14 ocasiones fue rebajada la sanción, lo que representa exactamente el 50% (de ellas, 13 eran propuestas de separación definitiva que se quedaron en traslado de destino).

El desinterés de las autoridades del Nuevo Estado por la calidad profesional de los docentes se hizo patente a lo largo de todo el proceso depurador. Lo único que preocupaba a los dirigentes franquistas era la capacidad del maestro desde el punto de vista político, ideológico y religioso. Ya se vio cómo los informantes de los maestros, Desiderio López y Cipriano Martín, “desconocían la labor realizada en la escuela” y se limitaban a criticar el comportamiento político y social de sus compañeros.

Hasta 1938, con la Orden de 11 de marzo de 1938, por la que se creó la Oficina Técnico Administrativa, los maestros no tenían derecho a recurrir las sanciones del proceso depurador. Esta posibilidad fue perfeccionada con la Orden de 18 de marzo de 1939¹²³², que permitía la reapertura de expedientes para la revisión de fallos impuestos, ya fuera de oficio o a instancia de parte interesada, siempre que se aportasen nuevos elementos de juicio.

La posibilidad del recurso abría una esperanza a los maestros afectados por la depuración, para una revisión de las sanciones. También la administración franquista podía revisar de oficio, por vía de la Comisión Superior, o incluso por denuncias de personas que se quejaban del escaso rigor al sancionar al maestro, así como los tribunales militares. Por tanto, no todas las revisiones lo eran a favor de los afectados, también podían incrementar la sanción anterior.

Aunque las revisiones, en algunos casos, podían reducir la sanción, como en el procedimiento económico, las rebajas llegaban al cabo de muchos años, cuando ya habían sufrido los maestros las terribles consecuencias de la separación del cargo. Además, las revisiones pocas veces suponían la rehabilitación profesional. Como le ocurrió a Carlota Benito, cesada el 26 de agosto de 1936 por estar afiliada a FETE. Fue separada definitivamente en 1939 y, aunque inició su recurso en ese mismo año, hasta 1942 no fue admitida la revisión, y eso porque había sido “sancionada sin haber sido oída”. Hubo de formular de nuevo un pliego de descargos en 1943 y consiguió que su sanción se quedara en suspensión e inhabilitación para cargos de confianza en enero de 1944. Jubilada en 1945, volvió a solicitar la revisión, ante lo que la Comisión Liquidadora dictaminó:

Atenuados los cargos que en su día se hicieron, **no se desvirtúa totalmente su izquierdismo ni su afiliación a FETE**, (...) Cabe anular la sanción gravísima, pero no debe quedar sin alguna sanción que corresponda a sus antecedentes izquierdistas, **ni menos podría declararse el error evidente de la Administración que permitiese aconsejar el abono de haberes no percibidos**¹²³³.

El expediente quedó definitivamente revisado, manteniéndose la última sanción de suspensión por el tiempo que había estado separada del servicio e inhabilitación para cargos de confianza, el 28 de abril de 1945. La culpabilidad por ideología o militancia de izquierda se mantenía en todo su vigor, por lo que -a criterio de las autoridades franquistas- no debía de quedar sin sanción. Por lo demás, no le abonaban los sueldos no cobrados durante los 9 años de sanción. Lo que prueba, una vez más, la *misericordia del Caudillo*.

Esteban de Andrés Cobos tuvo más suerte, pero también tuvo que esperar hasta 1946 para que se revisara y anulara su separación del servicio.

...nuevos documentos atenúan las responsabilidades, no fue sometido a consejo de guerra, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido con separación del servicio (...) es posible aplicarle el criterio de benevolencia que inspira actualmente los actos gubernamentales, proponiendo su reintegro al Magisterio, aunque fuera del pueblo, donde por su anterior conducta, carece del prestigio necesario para el desempeño de Escuela¹²³⁴.

¹²³² BOE, 23 de marzo de 1939.

¹²³³ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Carlota Benito. El subrayado es mío.

¹²³⁴ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Esteban de Andrés.

El razonamiento de la autoridad para acceder a la revisión habla de la “benevolencia” del régimen. En este caso se valoraba positivamente que el maestro no fuera procesado por los tribunales militares, como tampoco lo había sido Carlota Benito. Una muestra más de la arbitrariedad del Gobierno franquista. La sanción definitiva de Esteban de Andrés quedó en 2 años de suspensión, con abono de los haberes que había dejado de percibir, traslado dentro de la provincia, no podía solicitar vacantes durante 2 años e inhabilitación para cargos de confianza.

Otro dato a tener en cuenta, incluso desde el inicio de 1937 (con las primeras normas que atenuaban el rigor inicial de la depuración), era la necesidad de personal docente que originaron las primeras medidas de carácter más expeditivo. De haberse llevado a la práctica la depuración con el rigor pretendido por Pemán, gran número de las escuelas de la zona nacional hubieran quedado completamente desatendidas. Por ello dictaron normas de nombramiento de sustitutos para esas vacantes (O. de 28 de agosto de 1936), que en la provincia de Segovia alcanzó un total de 144 vacantes¹²³⁵.

Morente aporta, en su estudio sobre 14 provincias investigadas, que, salvo Asturias, el resto de provincias no sobrepasaron el 30% de sancionados, lo que indica que el 70% de los maestros que superaron el proceso depurador eran, *“a los estrictos (y reaccionarios) ojos de las autoridades franquistas, idóneos para la enseñanza, tanto desde el punto de vista político, como moral o profesional, lo cual se compadece mal con la tópica imagen de un Magisterio unánimemente entregado a los brazos de la anti-España”*¹²³⁶.

Consecuentemente con el análisis anterior, Morente cree que debe cuestionarse seriamente el tópico del Magisterio como baluarte de la República, y empezarse a valorar que era un cuerpo complejo donde convivían diversas ideologías e intereses. Sí había un sector progresista que había recibido a la República con entusiasmo: los maestros más comprometidos con la renovación pedagógica. Pero este sector era una minoría, activa y dinámica, pero no tan fuerte como para contrarrestar el peso de los profesionales tradicionales.

Aunque representaran la cuarta parte del total los maestros depurados en la provincia de Segovia, un 26,2%, esto no puede restar importancia al proceso represor, pues fueron sancionados los que constituían la vanguardia del Magisterio, aquellos maestros que tenían inquietudes por llevar las innovaciones pedagógicas a las escuelas. Muchos de ellos escribían en revistas especializadas como *Magisterio Segoviano*, que precisamente dirigía Ángel Gracia (fusilado en agosto de 1936), colaboraban en la prensa de información general, *Segovia Republicana*, *Heraldo Segoviano*, *El Adelantado de Segovia* o daban conferencias por toda la provincia.

Los líderes sindicales de los maestros fueron fusilados: Jesús Gilmartín, secretario provincial de Trabajadores de la Enseñanza (adscrita a UGT), Lorenzo Fernández de la Confederación de Maestros y Julio González y Pedro Natalías de la Asociación Provincial del Magisterio.

Hay que destacar, además, el importante papel de muchos maestros en la organización de las Casas del Pueblo de la provincia. Por ejemplo, el gobernador civil acusaba a Frutos Bernal de haber sido el organizador de la sede obrera de Tres Casas, *“consiguiendo que de 70 vecinos, 60 se afiliaran”*. Julio Fuster era dirigente del PSOE en Segovia, incluso había sido candidato por esta provincia a las elecciones a Cortes en 1933.

Los maestros ayudaban a los obreros de diversos modos, dando clases nocturnas, o, como le acusaban a Teodoro Martín, *“ilustrándoles, dirigiéndoles, haciéndoles borradores de documentos, etc. no en la casa social sino en su propio domicilio”*¹²³⁷.

En fin, la depuración sirvió a dos fines prioritariamente, por un lado castigó a los maestros que pensaban de modo distinto al de los sublevados: las ideologías republicanas,

¹²³⁵ BOP, 26 de octubre de 1936.

¹²³⁶ MORENTE VALERO, F., op. cit., pág. 241.

¹²³⁷ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Teodoro Martín.

socialistas, comunistas, anarquistas, o simplemente independientes que preconizaban una escuela laica y democrática, fueron apartadas del Magisterio. Por otra parte, consiguió homogeneizar ideológicamente a los maestros para construir una escuela nueva (basada precisamente en todo lo tradicional: religión, autoridad, jerarquía, valores nacionales, etc.) acorde con la España franquista.

Los sublevados veían nítidamente la importancia de la escuela como instrumento fundamental de transmisión ideológica, como agente socializador del nuevo régimen. Conscientes de ello, el esfuerzo de las autoridades nacionales fue conseguir un Magisterio homogéneo que llevara a la práctica la labor de transmisión ideológica de los valores nacionales y católicos. De su consecución dependía en gran medida la continuidad del régimen, y es evidente que realizaron un buen trabajo, pues la dictadura se prolongó durante 4 décadas y sus consecuencias aún se hacen sentir en distintos ámbitos de la vida cultural y política.

8. 4. El Proceso depurador en la Diputación Provincial

Como se ha explicado anteriormente, al decretarse el estado de guerra, se declaró la huelga general, que también afectó a los funcionarios de la Diputación. El comandante militar de la plaza, coronel Tenorio, dio una *"orden verbal"*, (así está constatado en el documento consultado) para que, desde el 23 de julio, se recogieran en un pliego las firmas de todos los empleados que *"acudieran a sus puestos de trabajo, y relación de los que no, indicando las causas"*¹²³⁸. En el oficio de remisión de la hoja de firmas del mismo día 23, enviado por el secretario accidental de la Diputación (por no estar ni el titular, Ángel Lara ni el jefe de Negociado, Fermín Cristóbal, ambos depurados posteriormente) se citaban los empleados que no habían asistido, y *"las excusas verbales que por ellos han sido dadas"*:

Ángel Lara, familia enferma
 Fermín Cristóbal, se ignora
 José del Hierro, se le supone en Madrid
 César Sanz, con permiso, (dicen por un mes)
 Ricardo Carrascón, se le supone en Madrid
 Francisco de Frutos, con permiso
 Ignacio González Murillo, detenido
 Antonio Romero, detenido¹²³⁹.

En la sesión de la Comisión Gestora de la Diputación del 28 de julio, primera reunión de los nuevos gestores nombrados por la autoridad militar, se produjeron las primeras suspensiones de empleo y sueldo para los que no habían acudido a sus puestos de trabajo desde el día 20 de julio, *"como era de su obligación"*. Éstos eran los funcionarios: Ángel Lara, Fermín Cristóbal, José del Hierro y Ricardo Carrascón, (de la relación anterior faltaban Antonio Romero y González Murillo, ambos detenidos en prisión).

El 1 de agosto, el secretario accidental comunicó al presidente de la Diputación, en cumplimiento del Bando del Comandante Militar de la provincia de 27 de julio¹²⁴⁰, la relación nominal de los funcionarios afectos a su sección que no se habían reintegrado al trabajo hasta ese día, *"con la expresión de las causas que les impiden acudir"*, en la que se repetía

¹²³⁸ Arch. Sta. Cruz, Leg. 847. Aquí figura la comunicación en la que se da cuenta de la "orden verbal" aludida. A partir del día 24, el pliego de firmas se envía al delegado de la Autoridad Militar en el Gobierno Civil, Joaquín España Cantos.

¹²³⁹ Arch. Sta. Cruz, Leg. 847. Fermín Cristóbal era dirigente de un reducido grupo de masones de Segovia, había sido redactor de la publicación *Segovia Republicana* en 1931, pasó la guerra en zona republicana. Durante la segunda guerra mundial fue detenido por los alemanes y murió en el campo de concentración de Mathausen, según testimonio de Teodora Arroyo.

¹²⁴⁰ 1º Serán dados de baja (...) todos los funcionarios públicos, Estado, provincia o municipio, que antes del día 1º del mes de agosto, no se hayan reintegrado a sus oficinas, decretándose el cese el 31 del actual. BOP, de 28 de Julio de 1936.

la primera lista con las mismas excusas antepuestas. En la relación nominal de empleados no presentados, ya del 4 de agosto, aparecía un funcionario más que añadir a los anteriores: Antonio Solar y Santa Teresa (de *“absoluta confianza”*, en el original).

La anterior suspensión de empleo y sueldo se convirtió (en la sesión de 11 de agosto de la Comisión Gestora) en cese definitivo, con baja en la nómina, siguiendo las órdenes contenidas en el referido bando, sin ningún tipo de informe previo o formación de expediente, para los funcionarios: Lara, Cristóbal, Hierro, Sanz Pastor, Carrascón, Frutos y Romero (faltaba González Murillo de la primera lista).

Ya se ha expuesto que la Circular del 14 de agosto afectaba a todos los funcionarios, del Estado, locales, o provinciales; por ello la Diputación pidió al gobernador civil, el 17 de agosto, que determinara quiénes (de las listas remitidas al Gobierno que incluían a todos los empleados de la corporación provincial, activos y pasivos) estaban afectados por ella. El Gobierno Civil devolvió las listas, punteados los incluidos en las listas anteriores, añadiendo un jubilado, Mariano Palomo. De los 20 capataces y 83 peones camineros dependientes de la Sección de Vías y Obras Provinciales no había ninguno señalado, aunque veremos a continuación cómo se formó expediente a 9 peones.

De acuerdo con la nueva norma depuradora, en la sesión de la Comisión Gestora de 18 de agosto¹²⁴¹ se aplicó la aludida circular de 14 agosto, cesando, otra vez, en sus cargos los funcionarios: Lara, Cristóbal y Arbeiza, a los que se añadían ahora, González Murillo -que estaba en la primera lista- y Mariano de la Orden.

Hasta enero de 1937 no llegó la orden del gobernador civil para la incoación de expedientes a los funcionarios a que se refería el D. 108 de la JDN, entre los que se incluían peones camineros, ingenieros, médicos, etc. (pero entre los que no estaban Ángel Lara ni Antonio Romero, a los que se cesó sin más trámites, porque no eran fijos en el puesto de trabajo) que eran los siguientes:

1. José del Hierro San Martín, director de Vías y Obras.
2. Ricardo Carrascón Ruiz, ayudante de Vías y Obras.
3. Fermín Cristóbal López, jefe de Negociado.
4. Francisco de Frutos Ballesteros, oficial administrativo.
5. Anastasio Ignacio González Murillo, oficial administrativo.
6. Mariano de la Orden Liras, auxiliar técnico de Vías y Obras.
7. Anselmo Romero Becerril, jefe de Sección de Administración Local.
8. Segundo de Andrés Gilsanz, médico del Hospicio.
9. Mariano Palomo Lapeña, administrativo jubilado.
10. Gregorio Rucio Arribas, capataz caminero.
11. Lorenzo Crespo Illana, peón caminero.
12. Francisco Palomar Sanz, peón caminero.
13. Cirilo Álvarez Herranz, peón caminero.
14. Manuel Matesanz Gregoris, peón caminero.
15. Cástor Herrero Remondo, peón caminero.
16. Mariano Gómez Zamarrón, peón caminero.
17. Francisco Sacristán Benito, peón caminero.
18. Paula Rodríguez Cuenca, tornera de la Casa Cuna de Riaza.
19. Teófilo Medina Pascual, aspirante a peón caminero¹²⁴².

La Comisión Gestora de la Diputación acordó, en su sesión de 19 de enero de 1937, iniciar los expedientes de depuración nombrando dos jueces para su instrucción, que

¹²⁴¹ Arch. Sta. Cruz, leg. 506.

¹²⁴² Arch. Sta. Cruz, leg. 847. Orden fechada el 9 de enero de 1937, en ella no aparecían los maestros de taller Mariano Valverde López y Luis Cerezo Marinero, cuya depuración se inició en febrero del mismo año. En el archivo de Sta. Cruz se encuentran los expedientes de 14 empleados, más el exp. de Mariano de la Orden que está en la Diputación, desconociendo donde están el resto.

eran, a su vez, gestores de la institución: Esteban Rey Gozalo y Román Velasco San Miguel. Los trámites fueron los mismos que en el resto de ámbitos de la administración, por lo que nos limitamos a señalar lo más destacado de este proceso.

Las acusaciones que se hacían, como hemos estado analizando, eran sobre actuaciones propias de la vida en democracia y en libertad, perfectamente legales hasta el 18 de julio de 1936. Aparece una que no habíamos recogido en otras instituciones: haberse “regocijado” de la muerte de Calvo Sotelo, lo que, aunque no fuera de buen gusto, tampoco estaba prohibido cuando se produjo. Otra curiosa acusación era la de Francisco Sacristán, pues eran sus hijos los que le inducían a “propalar” las ideas contrarias a la patria y a la moral, siendo él culpable, no solamente de sus actos, sino de “*haber consentido a sus hijos el cultivo de sus ideas extremistas*”¹²⁴³. Si a Sacristán le acusaban de tolerar las ideas de los hijos, a Mariano Gómez Zamarrón le culpaban de permitir que en su casa se izara la bandera roja y su esposa la llevara en las manifestaciones que ella misma organizaba y arengaba, pues era con otra mujer, las únicas socias de la Casa del Pueblo de Fuente El Olmo de Fuentidueña.

Hay dos casos que muestran una arbitrariedad especialmente llamativa. En febrero de 1937 fueron detenidos dos maestros de taller (sastre y hortelano) del Hospicio, dependiente de la Diputación. A pesar de que el Gobierno Civil los consideraba “peligrosos”, no habían sido perseguidos desde la sublevación hasta entonces. Incluso al sastre le acababan de conceder, en enero, la licencia de armas para cazar, para lo que era necesario tener buenos informes de conducta política y social. Ahora eran denunciados, al parecer, por alguien que pretendía esos puestos de trabajo para familiares suyos. A estos hechos se deben añadir que el maestro-sastre tenía enemistad manifiesta con el director del Hospicio, el sacerdote Aniano Bravo, como mostraba su informe negativo en todos los órdenes: político, religioso y profesional, y que aún en 1950 cuando se produjo la revisión no se dignó declarar sobre la conducta del expedientado, alegando que no había vuelto a tratarle desde su salida del establecimiento.

Las conclusiones que sacaban las autoridades para basar sus juicios de valor sobre los informados, eran, cuando menos, demasiado inconsistentes. Por ejemplo, simplemente por reunirse con personas de extrema izquierda, ya se concluía que era de la misma forma de pensar que dichas personas. Las contradicciones entre los distintos informes se aprecian claramente en el caminero Zamarrón. Mientras la Guardia Civil de la zona donde realizaba su trabajo, era favorable: “*siempre observó buena conducta, prestando sus servicios con el mayor acierto y entusiasmo (...) juzgándole de intachable conducta*”, su superior de la Diputación, el jefe de la Sección de Vías y Obras César Zubiáur (exdirigente de AP, ahora concejal de Segovia nombrado por el Comandante España), era muy negativo, porque para él, desde el punto de vista profesional, merecía “*no muy buen concepto por el poco rendimiento en los trabajos encomendados*”¹²⁴⁴. Hay, además, tres instituciones que no informaban más que en los expedientes de depuración de la Diputación: la Delegación Provincial del Requeté, Renovación Española¹²⁴⁵ y las Milicias Armadas de Acción Popular, que sólo emitieron sus informes sobre los residentes en la capital.

Una buena interpretación de las ideas socialistas que predominaban en muchos sectores sociales españoles, la aportó el párroco de la catedral en su informe sobre

¹²⁴³ Arch. Sta. Cruz, Leg. 506. Exp. Dep. Francisco Sacristán.

¹²⁴⁴ Arch. Sta. Cruz, Leg. 506. Exp. Dep. Mariano Gómez Zamarrón. Informe Sección Vías y Obras, 14 de mayo de 1937, firmado por César Zubiáur Pons.

¹²⁴⁵ Que informó del mismo modo sobre Mariano de la Orden y Anastasio I. González, alegando de ambos “*No ha solicitado nunca pertenecer a las milicias ni a la Agrupación de RE y por lo tanto no hubo ocasión de practicar informaciones más o menos privadas respecto a la conducta moral y política de dicho señor*”. Lo que no les impedía afirmar de los dos empleados que “*es público y notorio en la población que el expedientado seguía una conducta política de izquierdas*”.

Mariano de la Orden, de quien decía que era *“únicamente partidario de la evolución doctrinal y de la adaptación de la propiedad a las nuevas necesidades sociales”*¹²⁴⁶.

Aparte de las autoridades, aparecían personas que se ofrecían a declarar, unos a favor y otros en contra de los expedientados. Entre estos últimos es destacable la carta de Félix San Frutos dirigida a Esteban Rey, juez instructor del expediente de Mariano de la Orden. Estaba escrita en una estampa de la Virgen del Pilar, con una portada con la efigie de Franco. Félix era el padre de un joven de 19 años que había muerto a causa de un bombardeo de la “aviación marxista”. En su misiva expresaba *“quisiera deponer algo en el expediente (...) sobre su conducta en contra del Movimiento salvador”* para probar que en las elecciones de febrero el informado había desempeñado el puesto de interventor del Frente Popular en el mismo colegio donde Félix lo era de *“las derechas”*. El instructor le contestó agradeciéndole su colaboración, pero como ya lo tenía concluso no le era ya necesario y, además, *“como tengo base para pedir una pena bastante fuerte, excuso a V de declarar”*¹²⁴⁷.

Del resto de trámites se puede reseñar que los afectados por la depuración presentaron como testigos a personas significadas del nuevo régimen, desde el marqués de Lozoya, al propio presidente de la Diputación, Antonio Sanz Gilsanz. Lógicamente con éstos testimonios a favor, las posibilidades de resolución propicia del expediente eran mayores, aunque no estaba garantizado el éxito, ni mucho menos. Otros testimonios importantes eran los de miembros del clero, como el del Superior del Colegio de los Padres Misioneros de la capital, que se sorprendió de la formación del expediente a Anselmo Romero Becerril, católico practicante, pues *“en su casa se practica la religión tanto o más que en muchas casas denominadas de derechas”*¹²⁴⁸.

Una vez recogidos los informes, el juez instructor emitía su resumen de las actuaciones, que concluía con la siguiente fórmula:

... estudiado el caso de este expediente con la fría serenidad de la justicia más estricta y libre de todo apasionamiento y analizados los cargos que contra (el depurado) aparecen probados, propone, de conformidad con (los decretos depuradores) la destitución de su cargo de (puesto que desempeñaba) siendo baja en nómina y en los escalafones de esta Excm. Diputación y dando cuenta de todo ello al Gobernador Civil, según interesa en oficio (en el que ordenaba la instrucción del expediente), previa audiencia por 5 días¹²⁴⁹ al interesado a fin de que pueda alegar en su defensa cuanto estime oportuno.

*Esto no obstante la Comisión acordará lo que estime procedente*¹²⁵⁰.

Aunque oficialmente se recogía el plazo de 5 días para que, *“a la vista del expediente”*, se presentara el pliego de descargos, tan sólo remitían al afectado los cargos y no todas las diligencias. La norma habitual en la defensa de los afectados era la negación de todas las imputaciones. Si se les atribuía haber ostentado cargos en partidos políticos de izquierda, restaban la importancia que hubieran podido tener. Es interesante la justificación de la militancia política de Mariano de la Orden: *“Ha habido algún momento en que pareció que todos los problemas de la vida pública española se iban a resolver en paz y que todos teníamos el deber de inscribir nuestro nombre en un partido”*¹²⁵¹. Esta declaración expresa perfectamente el sentir de una generación de españoles que creyó en la República como un sistema en el que todos los ciudadanos participaran aportando sus

¹²⁴⁶ Arch. Diputación. Exp. Dep. Mariano de la Orden. En su proceso depurador le defendió el alcalde de Segovia, Andrés Reguera, porque estaba relacionado con una mujer huida de Madrid, que estaba acogida en casa de Mariano de la Orden.

¹²⁴⁷ Arch. Diputación. Exp. Dep. Mariano de la Orden.

¹²⁴⁸ Arch. Sta. Cruz, Leg. 506. Exp. Dep. Anselmo Romero. Declaración del Superior del Colegio de Padres Misioneros, 26 de abril de 1937.

¹²⁴⁹ Este plazo lo disponía el art. 60 del Reglamento de funcionarios y subalternos provinciales de 2 de noviembre de 1925, en armonía con el art. 52 del de Secretarios e Interventores municipales.

¹²⁵⁰ Arch. Sta. Cruz, Leg. 847.

¹²⁵¹ Arch. Diputación. Exp. Dep. Mariano de la Orden.

opiniones, canalizadas a través de partidos, sindicatos y asociaciones, para contribuir al progreso de nuestro país. También era importante haberse dado de baja en las organizaciones antes del movimiento; González Murillo alegó que no había pagado su cuota de afiliación al PSOE del mes de junio de 1936.

La documentación más valorada como descargo eran los justificantes de actividades religiosas, tener a los hijos bautizados, que hubieran tomado la Primera Comunión durante los años de la República, etc. Esta vía la utilizó Anselmo Romero¹²⁵², quien hizo una descripción pormenorizada de su casa en cuya puerta de entrada tenía un Sagrado Corazón de Jesús,

*...rara es la habitación donde no haya imagen, (...) cuadros: Sagrado Corazón de Jesús y de María, Stos. Cristo del Gran Poder, Virgen de la Macarena, La Dolorosa, La Milagrosa, y otras pequeñas de S. C. de Jesús, S. José, S. Roque, etc., el crucifijo en la cabecera en los dormitorios, y una habitación reservada para rendir culto a la Inmaculada Concepción, escultura de gran tamaño y posee indulgencia. Se recibe una vez al mes para culto la capillita con la imagen del S. C. de María desde siempre como atestiguan los P.P. Misioneros. Tenemos bendición papal, rezamos el padrenuestro antes de las comidas*¹²⁵³.

Con razón se sorprendió el Superior de los Misioneros, de su depuración. Por si no fueran bastantes justificaciones para acreditar su catolicismo practicante, los días de Corpus Christi, Ascensión, Jueves y Viernes Santo, San José, la Purísima y otros que el Gobierno de la República había hecho laborables, Anselmo Romero no obligaba a los empleados a asistir a la oficina de Administración Local, que él dirigía. Pero no le valió la demostrada buena conducta religiosa, porque no presentó ni una sola prueba concreta que “desvirtuara” los informes de la Policía, Guardia Civil, Falange, y Gobierno Civil acerca de la actuación política anterior al MN por lo que fue destituido.

En su descargo, Segundo de Andrés, declaró que era antimarxista “*hasta con mi propio egoísmo*”, porque poseía bienes, y no iba a exponerse a que fueran a parar a manos de “*los que no admitían la propiedad individual*”¹²⁵⁴.

También hubo testigos propuestos por los afectados que no le ayudaron nada porque, o bien alegaron que no conocían las ideas políticas del expedientado, o redundaban precisamente en la acusación que pesaba sobre él. Como el médico José Useros, propuesto por Mariano de la Orden, quien afirmó que cuando la muerte de Calvo Sotelo “*ha oído decir, que había dicho en el Círculo Mercantil algunas frases como de regocijo por el asesinato de tan ilustre Señor*”¹²⁵⁵.

Por último, la Comisión Gestora de la Diputación Provincial se reunía para examinar el informe del juez instructor, con su propuesta de resolución, y el pliego de descargos elaborado por el afectado. La Comisión determinaba si las acusaciones habían sido probadas, en cuyo caso acordaba la sanción que creía pertinente, normalmente por unanimidad.

Las sanciones venían determinadas por el D. 108: correcciones, suspensiones y destituciones. En esa norma no se especificaba nada sobre el baremo a utilizar para elegir la sanción adecuada a cada caso, lo que originó las correspondientes arbitrariedades de las que venimos hablando a lo largo del presente estudio. Las sesiones en las que se

¹²⁵² Fue detenido el 14 de agosto, momentos después de producirse el bombardeo de la capital, en el que fueron heridos varios falangistas. Tuvo la mala fortuna de cruzarse con el comandante Ostolaza, recién nombrado jefe provincial de FE, quien le tenía por sospechoso de izquierdas por ser hermano de Mariano Romero y tío de Antonio y Pedro Romero, detenidos en prisión por ser miembros de Izquierda Republicana.

¹²⁵³ Arch. Sta. Cruz, Leg. 506. Exp. Dep. Anselmo Romero. Pliego de descargos. Se han respetado las mayúsculas y abreviaturas del original.

¹²⁵⁴ Arch. Sta. Cruz, Exp. Dep. Segundo de Andrés.

¹²⁵⁵ Arch. Diputación. Exp. Dep. Mariano de la Orden. Declaración de José Useros. El subrayado es mío.

tomaron los acuerdos de resolución de los expedientes de depuración fueron el 16 de junio y 31 de agosto de 1937, con el resultado definitivo de¹²⁵⁶:

Cuadro nº 37: La depuración en la Diputación Provincial

Resoluciones	Nº empleados
Destituidos	13
Repuestos tras suspensión temporal	3
Pendientes de resolución por ignorado paradero	3
Suspendido temporalmente	1
No se le permitió tomar posesión	1
Total expedientes	21

8. 4. 1. Los recursos

Reconocido por la propia Diputación que las destituciones acordadas en el proceso depurador se habían llevado a cabo *“ateniéndose a las circunstancias y a la inflexibilidad del D. 108”*, con la Orden de 12 de enero de 1939, los empleados sancionados tenían la esperanza de la revisión de su castigo, porque esta orden, según el criterio de la corporación, *“parece estar concebida en términos de una mayor benevolencia y espíritu de transigencia que el citado decreto”*¹²⁵⁷.

Para proceder a la reapertura de los expedientes y revisar las sanciones, el art. 9º de la Orden de 12 de marzo de 1939 exigía la aportación por parte de los empleados depurados de nuevos testimonios o informes favorables. En caso contrario, como los cargos no habían sido *“desvirtuados con prueba alguna, ni se acompañan nuevos elementos de juicio”* el Ministerio de Gobernación no admitía la revisión de las sanciones. Así fueron denegadas las revisiones de 5 empleados¹²⁵⁸ (de algunos, en varias ocasiones consecutivas, Mariano Gómez, por tres veces, y González Murillo, cuatro veces).

Entre los sancionados se encontraba Mariano Palomo, jubilado de 77 años, sin hijos, al que se dejó en la más absoluta miseria cuando le quitaron la pensión. Recurrió alegando que el art. 8º de la Orden de 12 de enero de 1939 enumeraba entre las distintas sanciones, la destitución con pérdida de todos los derechos, *“salvo los de carácter pasivo”*. Aunque en un principio la Diputación desestimó la petición, posteriormente el Gobierno dio la razón al pensionista. Con un más que razonable criterio, pues *“las leyes que establecieron sanciones tienen efecto retroactivo, en cuanto favorezcan a las personas a quienes se ha impuesto y que de no dar tales efectos retroactivos a la Orden de 12 de marzo, se crearía una evidente desigualdad en el trato, entre los sancionados antes de su promulgación y los de después”*, porque *“se vienen resolviendo peticiones análogas con criterios de humanidad y justicia...”*¹²⁵⁹. Resulta chocante leer estas palabras tan razonables y justas en algunas resoluciones administrativas, mientras que en otras ocasiones, siendo el mismo Gobierno y utilizando la misma legislación para juzgar conductas similares (militancias o simpatías políticas previas a julio de 1936) el vocabulario

¹²⁵⁶ En el anexo nº 8 incluimos un cuadro-resumen con expresión de los funcionarios depurados, las acusaciones, etc.

¹²⁵⁷ Arch. Sta. Cruz. Leg. 506, Exp. Dep. A. I. González Murillo. Informe J. Ins. de 4 de abril de 1951, sobre el nuevo expediente elaborado a raíz del recurso del afectado.

¹²⁵⁸ Los otros empleados cuya revisión no fue admitida fueron Mariano de la Orden, Mariano Palomo y Anselmo Romero.

¹²⁵⁹ Exp. dep. Mariano Palomo. Dictamen de la Subsecretaría del M. Gobernación de 18 de marzo de 1941. El subrayado es mío.

y las resoluciones eran mucho más duras y continuaban sancionando los mismos comportamientos.

Sólo en el caso de que se le hubiera impuesto (por falta constitutiva de delito y a consecuencia de sentencia por los Tribunales Ordinarios o Consejos de Guerra) la inhabilitación absoluta, perpetua o temporal, quedaría en suspenso el derecho al cobro de la pensión, lo que, evidentemente no ocurría en el caso de Mariano Palomo, quien recuperó así sus derechos pasivos.

González Murillo se quiso acoger al espíritu de la Ley de la Presidencia del Gobierno sobre conmutación de penas accesorias de 18 de diciembre de 1946¹²⁶⁰, para lo que alegó que *“si la generosidad de la ley alcanza a los que fueron juzgados y condenados, también alcanzará a los que como el recurrente no fue juzgado ni sujeto a proceso alguno”*¹²⁶¹. Era evidente que si las revisiones llegaban a los procedimientos penales, también debían llegar al procedimiento depurador. Tras cuatro recursos, consiguió la readmisión en su puesto de trabajo en 1950, catorce años después de haber sido cesado.

En los dos casos de los maestros del Hospicio, destituidos en 1937, el Gobierno central reconoció que pudo cometerse una *“injusticia notoria por extralimitación de sanción, escasa importancia de los cargos e insignificante categoría del empleo del expedientado”*¹²⁶². Ambos fueron readmitidos, Luis Cerezo en 1948 y Mariano Valverde en 1950, y sus resoluciones se justificaban en que no habían sido condenados por Tribunales Militares, *“por lo que dada la época en que fue destituido pudiera haberse cometido una injusticia notoria”*¹²⁶³. Pero como las reposiciones se hacían sin carácter retroactivo, no les abonaron los sueldos dejados de percibir por una sanción que la administración reconoció había sido injusta.

En cualquier caso, la arbitrariedad fue la norma de actuación también en la corporación provincial, puesto que utilizando los mismos criterios unos empleados fueron readmitidos y otros permanecieron destituidos.

8. 5. La depuración en el Ayuntamiento de Segovia

En la corporación local de Segovia el primer cese correspondió al secretario Juan Velasco, destituido en función de la Circular de 14 de agosto, el 26 del mismo mes. El resto de funcionarios municipales cesados por la aplicación de dicha circular lo serán el 14 de septiembre, si bien con efectos de 1, 12 de agosto o 3 de septiembre. En total fueron 20 los empleados municipales destituidos por aplicación de dicha circular:

Juan Antonio Velasco Pérez, secretario del Ayuntamiento.

Donato Herranz Antón, vigilante de arbitrios.

Anselmo Mardomingo Vacas, botones.

José Peña Huertas, recaudador-interventor de arbitrios.

Basilio Maté Blanco, vigilante de arbitrios.

Diómedes Merino Navares, sereno.

José Hernanz Esteban, matarife.

Manuel Martín Villacorta, matarife.

Desde el 12 de agosto:

Bernardo Ruiz Serrano, sereno.

¹²⁶⁰ Desarrollado por la O. M. Justicia 17 de enero de 1947.

¹²⁶¹ Arch. Sta. Cruz, Exp. Dep. A. I. González Murillo. Instancia dirigida al M. Gobernación solicitando revisión, 12 de septiembre de 1950.

¹²⁶² Arch. Sta. Cruz, Exp. Dep. Mariano Valverde. Informe J. Ins. 26 de agosto de 1950.

¹²⁶³ Arch. Sta. Cruz, Exp. Dep. Luis Cerezo. Dictamen de la Subsecretaría del M. Gobernación, 20 de septiembre de 1948. En la resolución sobre Mariano Valverde la redacción era muy similar *“...pudo cometerse una injusticia notoria por extralimitación de sanción”*, Dictamen de la Subsecretaría del M. Gobernación, 12 de julio de 1950.

Francisco Duque Núñez, barrendero.
 Desde el 3 de septiembre,
 Clemente Pérez Alguacil, administrador del Matadero.
 Serapia Escolar Garzón, encargada evacuatorio.
 María Calonge Mugarza, encargada evacuatorio.
 Filemón Gómez Rojo, recaudador de arbitrios.
 Juan Bautista Cabello, vigilante de arbitrios.
 Gorgonio Jimeno Cantalejo, matarife.
 Domingo Serrano Expósito, bombero.
 Juan Olalla Moreno, portero del Hospital de Epidemias.
 Juan Vacas, vigilante de arbitrios.
 Ignacio de la Cruz Galindo, auxiliar administrativo de las oficinas del Ayuntamiento.

A raíz del D. 108, la alcaldía remitió a la Comisaría la relación de todos los empleados municipales para que allí les notificaran quiénes eran los de dudosa conducta político-social, para formarles expediente. De las dependencias policiales enviaron, en diciembre de 1936, una lista con 26 funcionarios municipales a quienes se inició el procedimiento depurador, entre los que estaban los 20 cesados provisionalmente por orden del gobernador civil. A estos 26, hay que añadir otros tres empleados denunciados y depurados en 1938¹²⁶⁴.

La depuración propiamente dicha no se hizo hasta 1937. Para la confección de los expedientes, el pleno municipal designó como jueces instructores a los concejales Eusebio Provencio Arroyo y José Pérez Barahona. Los expedientes son muy parcos, no contienen más informes que los del Gobierno Civil ordenando la incoación del mismo, en los que se recogen los antecedentes facilitados por la Comisaría. Únicamente se permitieron los testimonios solicitados por los afectados en cinco de ellos, de los que en tres, se aportaron otros informes de autoridades distintas al Gobierno Civil.

Tras la apertura del expediente, el instructor tomaba declaración al funcionario, interrogándole concretamente, y es lo que les diferencia de otros procesos depuradores, si habían asistido a la manifestación "socialista" del Primero de Mayo, habían portado insignias o emblemas marxistas, habían efectuado "*ademanos propios de aquellos elementos*" o si se habían manifestado públicamente. Pero, a pesar de que todos los imputados negaban las acusaciones, en el pliego de cargos venían éstas recogidas de nuevo, así como en el de defensa del afectado. Entre los cargos más sorprendentes a añadir a los ya conocidos de otros ámbitos administrativos, se encuentra el de acudir a la manifestación del Primero de Mayo con un jersey *encarnado*, como le acusaron a Anselmo Mardomingo.

Aunque ya habíamos analizado cómo el arrepentimiento era valorado positivamente por las instituciones depuradoras, a Donato Herranz no le sirvió, pues "*...si bien parece deducirse que últimamente rectificó su conducta, hay que tener en cuenta que sus principios y siembra realizada por sus anteriores actuaciones en cargos directivos en la Casa del Pueblo y juventud socialista han influido en las causas e ideas contrarias al MN*"¹²⁶⁵.

La acusación al secretario del Ayuntamiento, Juan Velasco, era la más rocambolesca, porque no estaba afiliado pero "*alternaba con intelectuales izquierdistas*" en el café *Juan Bravo* de Segovia (incautado a su propietario, el republicano Aurelio García). Iniciada la guerra, envió un libro al secretario de Cuéllar, que estaba detenido, en el que

¹²⁶⁴ Los 6 empleados añadidos en enero de 1937 fueron: Martín Valentín Arranz López, Abundio Anaut Nieto, Primitivo Martín, Luis González Navarra, Basilio López Cardiel y Valentín Burgos. Por su parte, los 3 empleados cuyo expediente se formalizó en 1938 eran: Calixto Núñez Gómez, Mariano de la Orden Santander y Mariano Duque Núñez.

¹²⁶⁵ Arch. Mun. Segovia. Cpta. 626/5. Exp. Dep. Donato Herranz.

había escrito *“ánimo que el triunfo está próximo”*, por lo que él mismo quedó preso en el acto. Como no había más información sobre él para poder sancionarle, el instructor solicitó informes a la Guardia Civil sobre el secretario de Cuéllar, Juan Gutiérrez (dirigente local de I.R., y uno de los organizadores de la defensa de la villa ante la llegada de los sublevados, a pesar de lo cual fue absuelto en el consejo de guerra). La propuesta del instructor era muy interesante, pues de lo expuesto por el gobernador civil deducía que el secretario de Segovia era muy amigo del de Cuéllar y que dadas sus actividades políticas y tertulias que frecuentaba era francamente simpatizante del Frente Popular, por lo que fue destituido.

Como en otros ámbitos, aparecían aquí denuncias privadas, como se reconocía en el expediente de Serapia Escolar. En tanto que la Comisaría informaba únicamente que era de ideología de izquierda y no pertenecía a ningún partido político; el instructor aseveraba en su informe *“es pública y notoria la conducta extremista quien no se recataba en hacer manifestaciones extremistas, llegando a pronunciar frases molestas para las señoras y señoritas que visitaban el evacuatorio según consta al juzgado por denuncia que se le ha hecho”*¹²⁶⁶.

Los considerandos de los instructores municipales recogían la justicia al revés más atrevida, pues al acusar de militancias o de simpatías políticas de izquierda, o incluso de *“la convicción moral de ser persona nada simpatizante con el actual movimiento”*, conceptuaban estas actitudes como *“hechos todos ellos prohibidos y penados por el D. 108”*¹²⁶⁷. No hay una ley que pueda prohibir con efectos retroactivos, ni siquiera las leyes franquistas se atrevían a calificar de prohibidos los hechos anteriores a la sublevación militar. Los informes de los jueces instructores del Ayuntamiento son los únicos documentos encontrados donde se expresaba la prohibición sobre tales hechos.

A pesar de que el instructor reconoció que Valentín Burgos no había pertenecido a ningún partido del Frente Popular, le acusaba de una manera un tanto peregrina de que era *“de notoriedad su condición de acomodaticio, incorporándose siempre al que manda y ello pudiera haberle hecho que en alguna o algunas ocasiones haya hecho ostentación de afecto a elementos tanto de partidos políticos de derechas o izquierdas”*¹²⁶⁸. Esta acusación era de un cinismo atroz, pues, evidentemente, los empleados que habían hecho ostentación de ideología conservadora o incluso tenían militancia de este signo, no habían tenido el más mínimo problema con los organismos depuradores. Pero el razonamiento para justificar la sanción continuaba en la misma línea, porque los hechos de que se le acusaba, *“aunque no están comprendidos claramente en lo dispuesto en el D. 108, no son propios de persona seria y formal que ostenta una jefatura de Negociado en las oficinas de una corporación municipal, que en todo momento debe acreditar una seriedad y rectitud acrisolada”*¹²⁶⁹. Al final del procedimiento, su sanción se limitó a la suspensión por 4 meses.

La cuestión religiosa sólo se valoró para Clemente Pérez, debido la exhaustiva declaración del párroco de San Martín. Fue el único expediente donde el instructor requirió este informe, lo que hace sospechar del interés por testificar del cura, quien quizá tuviera alguna enemistad anterior con el afectado. El párroco aseguraba que había ayudado a un hijo del informado (el abogado Enrique Pérez Bonín, dirigente socialista) a conseguir una beca para estudiar en Madrid, y no se lo había agradecido, además no iba por la iglesia y le constaba al cura que tampoco iba a otras, ni contribuía al sostenimiento del culto.

Según el criterio del instructor, los cargos eran confirmados cuando el afectado no hacía ninguna manifestación en contra. Los cargos contra Clemente Pérez -simpatía por el Frente Popular y contribución al *“triunfo de aquellos ideales”*- se confirmaron *“ya que ninguna manifestación en contra ha realizado”*¹²⁷⁰.

¹²⁶⁶ Arch. Mun. Segovia. Cpta. 626/5. Exp. Dep. Serapia Escolar.

¹²⁶⁷ Arch. Mun. Segovia. En todos los Exptes. Dep. figura esta expresión.

¹²⁶⁸ Arch. Mun. Segovia. Cpta. 626/5. Exp. Dep. Valentín Burgos.

¹²⁶⁹ Arch. Mun. Segovia. Cpta. 626/5. Exp. Dep. Valentín Burgos.

¹²⁷⁰ Arch. Mun. Segovia. Cpta. 626/5. Exp. Dep. Clemente Pérez.

Entre los descargos más interesantes encontrados, está el de Valentín Arranz para acreditar que no era adicto a la Casa del Pueblo. No se le ocurrió nada mejor que alegar que había protagonizado algún enfrentamiento con obreros afiliados a UGT. En uno de ellos, Valentín Arranz estaba con un alférez requeté, precisamente la noche del Primero de Mayo de 1936, en un bar, en el que también se encontraba un significado militante obrero, Celedonio González Ortega. No explicaba por qué, pero terminaron discutiendo y entre ambos le rompieron la camisa a Celedonio, diciendo además que *“se ensuciaban en todas las camisas rojas y en quien las llevara”*. Al final, tuvo que acudir el sereno para apaciguar los ánimos. Por si estos hechos no eran suficientes para demostrar, si no la afección al régimen, al menos la no simpatía por las ideas izquierdistas, Valentín se afilió a Renovación Española, lo que sí le sirvió para eximirle de la acusación de propagar ideas marxistas, pues el instructor dedujo en él ideas monárquicas, *“hasta el punto que después del movimiento se asoció a Renovación Española”*¹²⁷¹, lo que le valió para que sólo le suspendieran a 9 meses. Otros intentaron la afiliación a Falange posterior a la sublevación, pero no lo consiguieron precisamente por sus antecedentes políticos.

Como la prensa era uno de los datos para conocer la ideología de los expedientados, Domingo Serrano, declaró que alternaba la lectura de *La Libertad*, que compraba algunos días, con *El Debate* que adquiría un compañero.

Ya expusimos en otros apartados lo importante que era haber causado baja en las organizaciones republicanas o de izquierda antes de octubre de 1934 o, al menos, antes de la formación del Frente Popular. La Comisaría, reconocía que Primitivo Martín después de mayo de 1934 no estaba afiliado a ningún partido, pero concluía, sin aportar ninguna justificación, *“pudiéndose asegurar no obstante simpatizante de izquierda y por tanto del FP”*¹²⁷².

De la depuración en el Ayuntamiento, produce gran tristeza el proceso a José Peña Huertas, que había sido detenido el mismo día de la sublevación en Segovia por ser dirigente socialista local, y fusilado en las tapias del cementerio el 15 de agosto. El instructor no tuvo ningún reparo de acusarle de *“abandono del destino sin que a pesar del tiempo transcurrido se haya incorporado al mismo”*¹²⁷³. En una capital pequeña como Segovia, se sabía perfectamente quién había sido fusilado, máxime cuando eran personas muy conocidas, como José Peña. Aún así, le convocaron con un edicto publicado en el BOP el 8 de febrero de 1937. Finalizado el expediente, fue destituido por las faltas graves de *“abandono inmotivado del destino y actividades políticas”*¹²⁷⁴.

Por otro lado, sorprende el considerando, tan noble y justo, como lógico, del concejal instructor González Calero en su propuesta sobre el empleado Calixto Núñez, depurado en 1938: *“tampoco es aconsejable extremar el rigor en personas que no tengan sobre sí méritos (sic) de sangre o sean destacados dirigentes del marxismo, puesto que nada hace reaccionar en sentido opuesto al que se persigue tanto como la injusticia”*¹²⁷⁵. Pero este razonamiento, que se podía haber aplicado a todos los empleados de la provincia de Segovia, pues ninguno tenía delitos de sangre ni era destacado dirigente del marxismo, no se fijó nada más que en este caso.

Las propuestas de los jueces instructores eran aprobadas en el pleno municipal, la mayoría de las veces por unanimidad, salvo en el caso de Clemente Pérez, en que el resto de concejales pidieron al instructor que ampliara los informes sobre el afectado. Falange confirmó las acusaciones, consiguiendo la destitución. El otro caso en que el pleno no aprobó la propuesta del instructor fue el de Primitivo Martín, para el que pedía 4 meses, y la corporación lo absolvió.

¹²⁷¹ Arch. Mun. Segovia. Cpta. 626/5. Exp. Dep. Valentín Arranz.

¹²⁷² Arch. Mun. Segovia. Cpta. 626/5. Exp. Dep. Primitivo Martín.

¹²⁷³ Arch. Mun. Segovia. Cpta. 626/5. Exp. Dep. José Peña. Informe del J. Ins.

¹²⁷⁴ Ver nota anterior.

¹²⁷⁵ Arch. Mun. Segovia. Cpta. 626/5. Exp. Dep. Calixto Núñez.

En una de las sesiones que trataban los expedientes de depuración se produjo una situación que nos ilustra como el ambiente represor de la corporación municipal del Movimiento no era del todo unánime. La propuesta del instructor de sancionar con la destitución al joven botones Anselmo Mardomingo provocó varias votaciones no exentas de cierta tensión. El concejal Jesús Tablado afirmó que venía observando que se juzgaba *“más severamente a los empleados humildes que a aquellos otros de oficinas que por su mayor ilustración, debían tener mayor responsabilidad, ya que éstos no podían ignorar el resultado de sus campañas”*, por lo que pedía la absolución, alegando además que se había *“absuelto a otros que habían hecho más daño”*. Esta afirmación provocó el enfado del instructor Eusebio Provencio, quien afirmó que *“había estudiado los expedientes con absoluta objetividad”*¹²⁷⁶. Tras varias votaciones correspondientes a distintas propuestas de sanción o de absolución, se llegó a la petición de compromiso de 3 años de suspensión (que fue la que finalmente se aprobó), ante la que Tablado dijo que, *como siempre*, se iba a *“castigar al humilde”* y abandonó la sesión.

La resolución definitiva de los expedientes de depuración en el Ayuntamiento de Segovia viene expresado en el siguiente cuadro¹²⁷⁷:

Cuadro nº 38: La depuración en el Ayuntamiento de Segovia

Resoluciones	Nº Empleados
Destitución	20
Suspensión por 3 años	1
Suspensión por 1 año	1
Suspensión por 9 meses	2
Suspensión por 8 meses	3
Suspensión por 4 meses	1
Reposición	1
Total expedientes	29

A pesar de lo expeditivo de la depuración del Ayuntamiento de Segovia, el delegado de Orden Público se quejó al gobernador civil en octubre de 1938, alegando *“la existencia en el ayuntamiento de personal que por sus antecedentes y conducta político-social no ofrece garantía alguna para nuestra Causa”*¹²⁷⁸. Esta queja transmitida por el gobernador al alcalde, originó el malestar consiguiente en la corporación local que respondió con la *“más respetuosa y enérgica protesta”*, acompañada de un informe sobre el resultado de las depuraciones efectuadas hasta 1938.

8. 5. 1. Los recursos

De los 29 funcionarios municipales sujetos a depuración, sólo 6 se atrevieron a recurrir, de ellos, tres insistieron por dos veces en la vía del recurso, pero sólo uno, el secretario Juan Velasco fue repuesto en 1949, el resto no fueron readmitidos. Basilio Maté, solicitó la revisión de su expediente en 1952, acogiéndose a la *“benevolencia de las directrices de nuestras autoridades de abrir caminos de convivencia entre todos los*

¹²⁷⁶ Arch. Mun. Segovia. Libro de actas. Sesión de 21 de abril de 1937.

¹²⁷⁷ En el anexo nº 8 incluimos un cuadro-resumen con expresión de los funcionarios depurados, las acusaciones, etc.

¹²⁷⁸ Arch. Mun. Segovia. Cpta. 626/5. Exp. Dep. Mariano de la Orden Santander, primo del empleado de la Diputación Mariano de la Orden Liras. Misiva remitida por el alcalde al gobernador civil fechada el 15 de septiembre de 1938, en la que recoge el entrecomillado de la comunicación previa del gobernador.

*españoles y en particular los referentes a los medios de vida de los trabajadores y funcionarios que por su humilde categoría han de tener lógicamente una menor responsabilidad política que otros a los cuales ha alcanzado ya la benevolencia y el perdón, siendo repuestos en sus destinos*¹²⁷⁹. En su apoyo presentó certificados de buena conducta del párroco, alcalde del barrio y de la empresa donde trabajaba. Para el Ayuntamiento eran elementos de juicio suficientes para readmitirle en su puesto. Pero la crueldad del régimen le devolvió a la dura realidad: el Ministerio de Gobernación desautorizó a la corporación de Segovia, instando a que se formara un nuevo expediente con los *“preceptivos informes de la guardia civil, FET y policía”*, con los que se hiciera una nueva propuesta.

El juez instructor solicitó los informes pertinentes, todos ellos favorables en cuanto a la actuación posterior al 19 de julio de 1936. El instructor reconocía que el afectado había sido presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de la Casa del Pueblo, pero que no había cometido delitos de sangre, que son los que *“el Estado actual no puede olvidar ni perdonar por más tiempo que transcurra, mientras que los de opinión han sido y están siendo, sin cesar, liquidados por el Poder público, siguiendo las instrucciones emanadas del Glorioso Caudillo Franco”*¹²⁸⁰. Aprobada la readmisión por el pleno municipal y por el gobernador civil, remitieron el acuerdo al ministerio, que mostró hasta dónde llegaba la *justicia del Caudillo*. La resolución decía que en el nuevo expediente *“no se desvirtúan los cargos que se le hicieron (...) subsistiendo en la revisión practicada los cargos principales que motivaron su destitución (...) no puede aceptarse la propuesta del instructor”*¹²⁸¹, ratificando de nuevo la destitución de Basilio Maté.

Evidentemente, en 1954 no había llegado todavía la hora de la reconciliación en España, a la que apelaba Maté en su instancia. Esta decisión, además sirve para corroborar, una vez más, lo que venimos expresando acerca de la arbitrariedad en las resoluciones por parte de las autoridades franquistas en todos los ámbitos represivos (penales, administrativos y económicos), pues en la década de los cincuenta ya habían sido liberados, repuestos en sus puestos de trabajo o devueltos los bienes, a personas que habían sufrido prisión por haber ostentado cargos directivos en partidos o sindicatos de izquierda.

¹²⁷⁹ Arch. Mun. Segovia. Cpta. 626/5. Exp. Dep. Basilio Maté, instancia fechada el 4 de enero de 1952.

¹²⁸⁰ Exp. Dep. Basilio Maté, propuesta del instructor, fechada el 30 de marzo de 1953.

¹²⁸¹ Exp. Dep. Basilio Maté, acuerdo de la Subsecretaría del M. Gobernación 16 de febrero de 1954.

9. LA COACCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS Y LA VIOLENCIA SIMBÓLICA

Como venimos analizando a lo largo de este trabajo, la implantación del régimen de Franco en España fue un proceso paulatino que se llevó a cabo sobre la base del empleo de la violencia en sus múltiples formas y abarcando todos los ámbitos posibles: represión penal, administrativa y económica. A ellos vamos a añadir en este capítulo la represión formal, entendiéndola como todos los medios de coacción -exceptuando la violencia física- utilizados por el régimen para conseguir el asentimiento de la población al Nuevo Estado.

Es decir, además de recurrir a todos los métodos violentos estudiados hasta ahora: fusilamientos, prisión, incautaciones, depuraciones; Franco se valió también de otras formas de violencia -en este caso simbólica- más subliminales para la implantación de su régimen, pero en modo alguno menos agresivas ni menos atentatorias contra los adversarios políticos que los estudiados hasta ahora, como fueron, por ejemplo la intimidación o las coacciones que se ejercían en cualquier terreno de la vida cotidiana y en cualquier lugar: en la escuela, en la iglesia o en la misma calle. En este aspecto la Iglesia Católica fue un instrumento muy importante para imponer si no la adhesión al régimen, sí al menos la resignación ante él de un amplio sector de los españoles.

9. 1. La intimidación

El régimen de Franco se basaba, ante todo, en la amenaza constante de la coacción represiva y en el recuerdo de sus violentos orígenes. El interés que unía a los partidarios del esfuerzo bélico nacionalista con Franco y el nuevo régimen era un “*pacto de sangre*”, como explica Richards¹²⁸².

Un elemento importante para conseguir la paralización por el terror -y en estrecha relación con la represión física- era el amedrentamiento, la intimidación, la humillación de la población, que se producía en cualquier lugar de las ciudades o de los pueblos. Las coacciones y amenazas eran una práctica diaria en cualquier ámbito de la vida cotidiana y tenían múltiples formas de expresión, pero todos ellos con la doble finalidad de atemorizar y humillar a los oponentes políticos. Para una mejor explicación de lo que entendemos por intimidación, veamos el hecho en tres apartados:

9. 1. 1. Intimidación física

No vamos a entrar aquí de nuevo en la explicación de la represión física: las prisiones, los fusilamientos, las sacas -ya estudiadas en los capítulos 5 y 6- pero, evidentemente, aunque la amenaza de estas formas de violencia estaba permanentemente en el pensamiento de los adversarios políticos, no eran las únicas que el régimen ponía en práctica.

Como era tan fácil y tan arbitrario caer preso, había en la sociedad un miedo generalizado a ser detenido, pues muchas personas eran denunciadas y encarceladas sin comprobar las delaciones ni los hechos que las originaban. Después de las detenciones, durante el trayecto desde los pueblos de la provincia donde eran apresados hasta las prisiones de la capital, los falangistas apeaban a los detenidos y simulaban fusilamientos, para atemorizarles y para torturarles psicológicamente.

¹²⁸² RICHARDS, Michael. *Un tiempo de silencio: la guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco*. Crítica, Barcelona, 1999, pág. 9.

Los adversarios eran maltratados físicamente por los falangistas o los guardias civiles cuando eran detenidos en sus cuarteles respectivos. En el *cuartelillo* de FE en Segovia se disponía incluso de calabozos. Hay multitud de testimonios de presos a los que pegaban al entrar en unas dependencias de la Comisaría, situadas en un sótano del Gobierno Civil. No eran raras las palizas empleando para ello medios como porras o vergas. Para aumentar la crueldad, en algunos casos, les obligaban a que se pegaran unos presos a otros, por parejas. Al socialista de Carbonero, Eufasio García, le tocó golpearse con un vecino de su pueblo de 70 años, pero como él se negó, le pegaron a Eufasio. La mayoría de los detenidos cuando ingresaban en la cárcel llegaban en un estado lamentable, procedentes de Comisaría. Así le ocurrió a Alejandro Arranz, al que su hermano Gabriel no reconoció cuando lo dejaron tirado en el patio de la *Cárcel Vieja* de Segovia¹²⁸³. Por su parte, Silvestre Ramos cuenta que le pusieron una soga al cuello para ahorcarlo, como tortura psicológica, para que declarara. También hacían simulacros de ejecuciones por las noches con el mismo fin.

Esta práctica de los apaleamientos se mantuvo hasta bien entrada la posguerra, si bien ya sólo en los cuarteles de la Guardia Civil o en el momento en que se producían las detenciones. Ángel García cuenta que acabada la guerra, un chapista que había venido de Madrid al taller donde él trabajaba, fue detenido allí mismo por la policía, que se lo llevó dándole golpes. Contamos con varios testimonios que ilustran este tipo de acciones:

Un vecino de Zarzuela, José Antón, tuvo un ridículo incidente con otro paisano: al parecer no dio las buenas noches al vecino que le siguió provocando, hasta que José, cansado le espetó que “*no le salía de los cojones*” saludarle. El vecino avisó a los guardias, y éstos fueron a por José y le pegaron una paliza. En Orejana, cuando había alguna disputa sobre utilización de los prados por el ganado, el alcalde avisaba a los guardias de Pedraza, que citaban al Ayuntamiento a los afectados, y allí les pegaban, cebándose especialmente en los que habían estado presos. En Navas de Oro, también eran detenidos los sospechosos de ser o haber sido *rojos*, y los apaleaban en el cuartel de la Guardia Civil. Los de Vegas de Matute eran llamados al Ayuntamiento o al *cuartelillo*, periódicamente. Los guardias de Cantalejo pegaron en el consistorio a los que se habían significado en la Casa del Pueblo, que además, después tuvieron que presentarse en el Ayuntamiento durante algún tiempo.

Otro modo de intimidación, que se desarrolló de un modo más acusado durante los primeros meses de guerra, eran los cánticos obligados, los saludos brazo en alto, los vivas, etc.; cualquier expresión o simbología del régimen era utilizada para amedrentar a la población. Cada día y en cada calle o plaza, camino o carretera, grupos de falangistas detenían a los viandantes para que al grito de ¡Arriba España! respondieran: ¡Arriba! u otros vivas “nacionales”. A todo aquél que no respondía debidamente -brazo en alto- o sin el mayor de los entusiasmos, se lo llevaban a su cuartel, a la cárcel o era ejecutado en una cuneta, como le ocurrió a Félix Verdugo en Cuéllar. Estas prácticas también se llevaban a cabo en establecimientos públicos, especialmente en los bares.

El empleo de aceite de ricino, fue una de las prácticas vejatorias más empleadas para humillar a los desafectos. Hubo demasiados casos en la capital y casi toda la provincia (Valverde, Sebúlcor, Navafría, Fuente el Olmo, Calabazas,...). Obligaban a ingerir este purgante normalmente a los detenidos en los pueblos y en la capital, tanto en la cárcel como en el cuartel de Falange; pero también lo aplicaban a personas que los falangistas encontraban por la calle. Uno de los casos más conocidos es el del maestro de Izquierda Republicana, Alejandro de Frutos, al que -antes de llevar a fusilar- pasearon por la Calle Real de Segovia, haciéndole entrar en los bares, donde era obligado a beber un vasito de aceite de ricino en cada establecimiento, y, además, tenía que decir “*Arriba España, muera Azaña*”¹²⁸⁴. Las consecuencias de la ingestión de este brebaje no sólo eran las lógicas e

¹²⁸³ ARRANZ MARINAS, G., op. cit., pág. 183.

¹²⁸⁴ Testimonio de Liborio López.

inmediatas, pues a Máximo Olalla -concejal de la Gestora Municipal de Nieva- *“le dieron un litro de aceite de ricino, le dejaron hecho polvo, murió a los pocos años”*¹²⁸⁵. Al vecino de Navas de Oro, Hipólito Arranz -a pesar de que no militaba en ninguna organización- los falangistas lo sacaron de casa una madrugada, se lo llevaron con la pistola apuntándole en el pecho y le obligaron a beber aceite a la puerta del bar. Cuenta Hipólito que los serenos del pueblo *“no lo quisieron evitar”* y además, como consecuencia de aquello, le quedó diarrea durante 30 años¹²⁸⁶.

Los cortes de pelo eran la práctica más humillante para las mujeres y se dieron también por toda la provincia. En casi todos los pueblos hubo cortes de pelo a las militantes izquierdistas y a esposas, hijas o madres de “rojos” (Riaza, El Espinar, Cuéllar, Segovia, Mudrián, Otero de Herreros¹²⁸⁷, etc.). Las mujeres eran paseadas por las calles de la localidad incluso con música, en algunos casos, para mayor escarnio. Una señora de Cuéllar se cruzó con un grupo de balillas de FET que la saludaron con ¡Arriba España!, como ella no quiso contestar, los niños la denunciaron. Poco después, los falangistas la llevaron al Ayuntamiento y le cortaron el pelo. Una joven de Mudrián se enfrentó a los falangistas que la insultaban y éstos la raparon pegándole una rosa en la cabeza, pero ella no se intimidó y se paseó así por el pueblo. Estas acciones se acompañaban con gran variedad de canciones sobre las “pelonas”, que agravaban la humillación a las afectadas.

Algunas mujeres que estaban de veraneo en la provincia al estallar la guerra y tenían a los maridos en la otra zona fueron consideradas como esposas de militantes republicanos y sufrieron también estas humillaciones¹²⁸⁸.

Estas prácticas tan habituales durante la guerra no se prohibieron por parte del Gobierno Civil y, aunque acabada la contienda fueron remitiendo, ni mucho menos desaparecieron.

9. 1. 2. Intimidación psicológica

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la crueldad y la extensión de la represión en sus distintas expresiones fue tal que dejó una sociedad tremendamente traumatizada. Además de las distintas formas de violencia ya estudiadas -que constituían un modo de intimidación psicológica, porque hacían mella en la sociedad que veía como en cualquier momento se podía caer en el “delito” o en la transgresión de las rígidas normas-, hubo otros modos de ejercer este tipo de intimidación.

La presencia constante de miembros de las milicias patrióticas armados -hasta los *balillas* iban con un puñal al cinto- hacía recordar a cada paso que los desafectos vivían en un territorio dominado por el enemigo. Incluso los no hostiles, los tibios o neutrales, eran amedrentados por las demostraciones de fuerza de los militantes del Nuevo Estado.

Un detalle que caracterizaba al régimen franquista era la publicidad de los castigos de todo tipo, ya fueran económicos o físicos. Como afirma Conxita Mir *“el escarmiento como objetivo era mucho más importante que la función sancionadora”*¹²⁸⁹. Las multas y sanciones eran publicadas en los diarios, *El Adelantado* y el *BOP*, y los consejos de guerra y fusilamientos eran de entrada libre, por lo que cualquier persona podía asistir a las vistas. Urbano Barreno cuenta que a los juicios asistían *“señoritas de derechas, que reían con las penas de muerte”*¹²⁹⁰. Hay testimonios que hablan de mujeres que iban a ver fusilar,

¹²⁸⁵ Testimonio de su hermano, Segundo Olalla.

¹²⁸⁶ Testimonio de Hipólito Arranz.

¹²⁸⁷ Un testigo de Otero cuenta que poco después, llevaron detenidos a los que habían cortado el pelo a sus propios vecinos.

¹²⁸⁸ Algunos cuentos de Jesús Fernández Santos están protagonizados por familias rotas cuando veraneaban en pueblos de la sierra y sufrieron estas experiencias. Sirvan como ejemplo *Muy lejos de Madrid* y *Pecados*. En FERNÁNDEZ SANTOS, J. *Cuentos*, Alianza Editorial, Madrid, 1978.

¹²⁸⁹ MIR CURCÓ, C. *Coacción legal y oposición interior*. En *AYER*, nº 33. 1999.

¹²⁹⁰ Testimonio de Urbano Barreno.

Maximina Mantecas, esposa de un guardia civil decía *“vamos que hay fiesta”*¹²⁹¹. Desde El Espinar vino gente a Segovia a ver los fusilamientos y comentaban que *“habían visto una corrida muy buena”*¹²⁹². Más ignominiosas fueron las ejecuciones producidas en Matabuena, pues fue avisado todo el pueblo por el alguacil, para que presenciaran el fusilamiento y los guardias amenazaron incluso para que todos miraran en el momento de la descarga.

Las visitas de falangistas y guardias a los domicilios eran frecuentes para controlar a las personas que vivían en la casa, por si había forasteros o familiares sospechosos. A casa de Narciso del Pozo fue varias veces la policía preguntando dónde estaban sus hermanos, que precisamente estaban en el frente con los nacionales. Mucho más miedo se desataba entre las familias que eran preguntadas por algún miembro que hubiera pasado al bando republicano, o simplemente le hubiera cogido allí la guerra. Éstos eran visitados continuamente por las fuerzas militarizadas del régimen por si los familiares hubieran vuelto o estuvieran escondidos. En la posguerra este tipo de control lo llevó a cabo la Guardia Civil, que en cualquier momento se asomaba a una ventana, llamaba a una casa y entraba para hacer un registro. La impunidad de sus actuaciones, especialmente en los pueblos de la provincia, era total. Esta indefensión provocaba un miedo constante en la sociedad.

Un aspecto difícil de evaluar son las muertes indirectas producidas como consecuencia del amedrentamiento de los distintos tipos de represión. Algunos desafectos tuvieron la suerte de no ser ejecutados, pero, por el contrario fueron perseguidos continuamente, *“les hicieron la vida imposible”*¹²⁹³, como dice Elías García. Se produjeron suicidios de personas desesperadas por haber sido despojadas de su puesto de trabajo, de sus bienes, haber padecido palizas en prisión, haber sufrido el fusilamiento de algún familiar, o de las secuelas de las malas condiciones de las cárceles: alimentación e higiene, sobre todo. Se conocen muchos casos de los distintos tipos enunciados, pero es prácticamente imposible conocer todos. El maestro Alejandro Laguna se suicidó acabada la guerra, porque *“le seguían persiguiendo y dando aceite de ricino”*¹²⁹⁴. En Coca al escribiente municipal lo cesaron, enfermó y murió al poco tiempo. Julián María Vara, que había perdido a dos hermanos, murió de pena acabada la guerra. La viuda de Bernabé Ranz enfermó y ya no se levantó de la cama. Matías Manso tenía mujer y dos hijos, que enfermaron de tuberculosis muy pronto y murieron, igual que su mujer Bernarda, despreciada además por sus vecinos. El padre de Patrocinio Merino, de edad avanzada, se suicidó unos meses después del fusilamiento de su hijo, tirándose al río. La abuela de los hermanos Serrano González no salió de casa hasta 1954, y todavía la miraban y la señalaban por la calle.

Los sublevados tenían especial interés por atemorizar a los familiares de desafectos o sospechosos de ello, incluso a los más pequeños. Al poco tiempo de enterarse de la muerte de su padre, los falangistas le dijeron a Afrodisio Bartolomé, que tenía 6 años: *“como te muevas, has perdido al padre, y pierdes a tu madre y a toda tu familia”*. En palabras del propio Afrodisio, *“te meten el miedo en el cuerpo que todavía no te ha salido”*, más de sesenta años después. El entorno familiar de las víctimas almacenó un *“odio para siempre”* hacia los asesinos. Como otros muchos hijos o hermanos de fusilados, Afrodisio *“ni perdona ni olvida”*¹²⁹⁵. Otros, como Cesáreo Álvarez, se resignan diciendo *“la venganza no la voy a ver nunca”*¹²⁹⁶.

La intimidación cumplía perfectamente su función coercitiva, no se movía nadie, como dice Aquilino García *“había mucho miedo en los pueblos”*, especialmente en las

¹²⁹¹ Testimonio Luisa Carrera.

¹²⁹² Testimonio Juan Muñumel.

¹²⁹³ Testimonio de Elías García.

¹²⁹⁴ Testimonio de Elías García.

¹²⁹⁵ Testimonio de Afrodisio Bartolomé, hijo de Joaquín Bartolomé.

¹²⁹⁶ Testimonio de Cesáreo Álvarez.

localidades donde había habido fusilados, presos, depurados y/o incautados. Este miedo irrefrenable, combinado con las penurias económicas, hacía que las personas se concentraran en las necesidades más primarias, la alimentación de la familia y borrar como si hubiera sido un espejismo la experiencia de ilusión que había traído la II República.

La literatura franquista era tan fantásticamente descalificadora de los adversarios políticos, de los “rojos”, la “escoria inmunda”, los “diablos”, los “Sin Dios”, que muchos niños creían realmente que los rojos eran verdaderos monstruos. Hay varios testimonios sobre la sorpresa de los niños al comprobar que eran personas tan normales como lo fueran sus propios padres. Fausto Pérez, que estuvo varios meses en el hospital por un tiro que le dieron estando en la prisión, cuenta que hubo varias visitas de niños del Hospicio que, al ver a los presos rojos, exclamaban “*¡si los rojos no llevan rabo!*”¹²⁹⁷.

La humillación por antonomasia a los familiares de represaliados se daba en los comedores del Auxilio Social (en Segovia estaba situado en la Casa de la Tierra, lugar que antes había sido comedor para los escolares de la capital), donde alimentaban a muchos hijos y huérfanos de presos o fusilados. Bien es verdad que aliviaban los sufrimientos materiales, pero a cambio de imponer unos elevados sufrimientos morales: cantar el *Cara al sol*, y rezar el Rosario, antes y después de comer, en suma, “*obligando a los huérfanos a cantar los himnos de los asesinos de su padre, a llevar el uniforme de los que le han ejecutado y a maldecir al muerto y a blasfemar su memoria*”¹²⁹⁸. Esta frase resume y expresa espléndidamente el fundamento de este aspecto de la represión simbólica.

Las amenazas de las autoridades eran continuas y constantes. La práctica totalidad de las normas que emanaban de Burgos, así como las que dictaban las autoridades provinciales, finalizaban con una clara amenaza para los que no cumplieran las normas antedichas. Que el tono amenazante se empleara al inicio del conflicto para atemperar a la población hostil, parece lógico, pero que continuara empleándose a lo largo de la contienda, incluso una vez terminada ésta, hace pensar que no había tanto asentimiento entre la población ante el nuevo régimen. Incluso las autoridades locales, los alcaldes, continuaron siendo multados por no cumplir las normas dictadas por el Gobierno nacional o el de la provincia, o por no poner el celo necesario para el cumplimiento de las mismas en su localidad.

Fueron constantes las coacciones en todos los ámbitos de la sociedad, que estaba permanentemente amenazada por los gobernantes: militares, falangistas y curas. A lo largo de este trabajo hemos comprobado que la mayoría de las circulares de los gobernadores civiles finalizaban amenazando con multas o la prisión a los que incumplieran las normas por ellos dictadas. La amenaza se dirigía por igual a instituciones y a particulares. El estado constante de peligro de infracción de cualquier norma, conseguía paralizar a la sociedad. Eran tan rígidas las normas sociales que tarde o temprano la mayoría de la población se veía infringiendo una u otra, o simplemente violando el severo código moral del régimen. La intimidación psicológica se ejercía desde muy diversos campos.

Como explica Richards, las condiciones económicas en las cuales la mayoría de las clases bajas se vio obligada a vivir provocaron una inevitable obsesión por la mera supervivencia durante el periodo inmediato de posguerra, una retirada forzosa a la conciencia individual. El ambiente de escasez, provocado por la guerra, acabó con las solidaridades colectivas del pueblo. Esta retirada forzosa al ámbito privado de la vida doméstica con el único fin de sobrevivir hizo que la resistencia fuera prácticamente imposible. Sólo los muy ideologizados políticamente se atrevían a plantearse algún tipo de acción opositora.

La mayoría de la gente vivía carencias materiales a las que habían de añadir la presión psicológica de tener que llevar una vida muy limitada, parcialmente cerrada, tanto

¹²⁹⁷ Testimonio de Fausto Pérez. Testimonios parecidos nos han dado Juan Quinzano y Carmen Arranz

¹²⁹⁸ FIDALGO, Pilar. *A young mother in Franco prisons* (London, Unitede editorial, 1939), pág. 31. Citado por Preston, en una conferencia, Barcelona, 2000, facilitada por Antonio Linaje Conde.

en el plano cultural, como en el espiritual y en el material. Pero si la gente participaba en las actividades de la Iglesia, como misas, procesiones, rosarios, etc., o de FET, no era porque hubiera triunfado la socialización del régimen, sino porque -afirma Richards- *“la mayoría se concentraba en asimilar la derrota, la sensación de horror y pérdida que se había abatido sobre el país y sus propias vidas”*¹²⁹⁹. A esta opinión añadimos nosotros que un porcentaje importante de personas que se implicaba en las actividades propias del régimen lo hacían obligados a ello para que no les señalaran, persiguieran, o fueran multados.

La actuación de la propaganda del nuevo régimen en todo lo referente a los homenajes a las víctimas de su propio bando, silenciando a las otras víctimas, era un modo cruel de humillación, porque cuanto más se exaltaba a sus muertos, a sus héroes, los “otros” se hundían más en el olvido. La celebración por parte del Estado franquista, año tras año, de la sublevación contra la legalidad democrática, el 18 de julio; de la victoria, no de la paz, el 1 de abril; del Caudillo, el 1 de octubre; y la conmemoración anual a sus caídos, suponía un golpe psicológico constante a los españoles que habían defendido la legalidad republicana.

El homenaje -que se pretendía perpetuo- a las víctimas del bando nacional se consagró con las placas colocadas en las fachadas de todas las iglesias de España con los nombres de todos los fallecidos de cada parroquia, bajo el epígrafe “Caídos por Dios y por España” y tras el obligado recuerdo a José Antonio Primo de Rivera. Una afrenta más, quizá con un contenido más profundo para los familiares de las víctimas del bando republicano, pues sus deudos sólo habían muerto para ellos, no para el resto de la sociedad, de la que habían sido borrados por un Estado vengativo. Además, como hemos explicado con anterioridad, los familiares de las víctimas chocaban con numerosas dificultades burocráticas para el reconocimiento legal de sus fallecidos. Para agravar la humillación quedaba para siempre la inscripción en los libros de defunciones del epígrafe *caído por Dios y por España*, para los muertos de los vencedores, en contraposición al *desafecto al Glorioso Movimiento Nacional*, que se escribía como castigo a los vencidos fallecidos.

La cuenta de agravios a los vencidos era extensa, pues *excombatientes* sólo eran denominados, reconocidos y remunerados los españoles que habían combatido en el bando nacional, al igual que los que habían sufrido alguna mutilación eran *caballeros mutilados*. En ambas situaciones, los españoles que habían luchado en las filas del Ejército republicano simplemente eran vencidos, inválidos, presos: “rojos”.

El miedo y el terror fijado con sangre en la sociedad, originaba que hijos o familiares de represaliados explicaran en público *“algo habrá hecho mi padre para que lo hayan matado”*, *“quién le mandaba meterse en política”*, *“hablaba mucho”*, etc. Ante estas creencias, la solución para salvarse y no tener problemas era demasiado evidente y fácil: no hablar, no significarse. Éste fue uno de los grandes éxitos del régimen: que los familiares reprendieran al militante que había sido represaliado, porque había motivado la miseria de todos, no era culpable el régimen que castigaba injustamente por pensar de manera diferente, el culpable era el militante, porque por sus ideas lo habían fusilado, encarcelado o despojado de los bienes.

Otra vía para no entrar en conflicto con el régimen era no relacionarse con nadie de los que habían sufrido represión. Los represaliados eran auténticos “apestados” en la España de la posguerra, muchas personas les negaban el saludo, se cambiaban de acera, por miedo a ser tomados por amigos de “rojos”, y sufrir las mismas consecuencias que ellos.

La violencia implicaba la eliminación brutal de cualquier opción alternativa, cualquier opinión distinta a la oficial era reprimida con dureza, no se podía siquiera evocar el pasado

¹²⁹⁹ RICHARDS, M., op. cit., pág. 168.

más reciente previo a la guerra: los franquistas pretendían -y consiguieron- el exterminio de la memoria y de la historia¹³⁰⁰.

La interiorización o evasión del pasado -tanto a nivel colectivo como individual- hace que el estudio de la represión franquista resulte muy difícil. Los recuerdos del dolor o la vergüenza fueron enterrados y por tanto no resulta fácil recuperarlos, articularlos o interpretarlos. El miedo fue tan grande que ha quedado anclado en muchas personas que vivieron esa época, todavía lo sienten. Hemos visto sus consecuencias al querer entrevistarnos con algunos testigos y familiares de las víctimas.

El trauma de la memoria se refiere no sólo al dolor sino también al sentimiento de culpabilidad. La derrota representó algo más que la derrota militar: supuso también una pérdida del pasado, de la identidad y de los ideales, así como de la visión de futuro. El bombardeo constante de la propaganda del régimen sobre la guerra, la legitimidad de los sublevados, la victoria, los vencedores, los desmanes de los rojos, los vencidos, etc. hacían que un sector importante de los que habían perdido la guerra se volcara en interiorizar la guerra, la memoria, el recuerdo.

Como explica Santacana *“cada vez que preguntábamos por un hecho anterior a ese año 1939, los mayores se llevaban un dedo a los labios y miraban a ambos lados. Éramos un pueblo sin pasado, sin recuerdos. El presente de entonces (...) no ofrecía tampoco muchos alicientes. Había que mirar al futuro. Un futuro que no llegaba nunca, por más que nos ocultasen nuestro pasado”*¹³⁰¹.

9. 1. 3. La coacción económica

Además de las formas de represión económica ya estudiadas: responsabilidad civil, responsabilidades políticas e incluso la depuración como modo de eliminar la fuente de ingresos de los oponentes; se dieron múltiples formas de intimidación económica, la mayoría de las veces basadas en la amenaza de multa, que podía ser efectuada sobre: las suscripciones, la declaración de bienes, el atesoramiento, etc. Pero también se ejercía a través de las cartillas de racionamiento, el subsidio al combatiente o el subsidio familiar.

La intimidación más extendida era el miedo que suponía ser objeto de expediente de depuración o de responsabilidades políticas en unos momentos de penuria extrema, pues, si eliminaban la fuente de ingresos o recaía una multa, la miseria podía ser absoluta.

Las mujeres y madres de presos tenían que ponerse a trabajar donde pudieran. La madre de María Moreno tuvo que ponerse a *“lavar para los sinvergüenzas”*¹³⁰². Para mayor escarnio, no todos los militares y guardias civiles pagaban los trabajos que se les hacían. Hubo mujeres que se tuvieron que entregar a hombres de derechas para conseguir algún dinero con que alimentar a sus hijos, otras incluso para que no las mataran. A Gregoria Díez, durante la guerra un vecino de derechas quiso forzarla, alegando que podía salvar a su hermano preso y a ella -que estaba sola con el padre enfermo-, pero Gregoria no lo consintió¹³⁰³.

Pero, en uno de los aspectos donde más se apreciaban las coacciones era en la recogida de fondos para las innumerables suscripciones. Eran una práctica que se había implantado tanto, y tan pronto, en Segovia que fue necesaria una circular del gobernador civil -ya en el mes de septiembre de 1936- en la que exigía *“que no se obligue a los vecinos*

¹³⁰⁰ Hay varias obras que tratan de un modo exhaustivo este tema de la memoria de la guerra civil: la pionera de AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma. *Memoria y olvido de la guerra civil*. Alianza, Madrid, 1996, y posteriormente REIG TAPIA, Alberto. *Memoria de la guerra civil*. Alianza, Madrid, 1999; además de la citada de RICHARDS, Michael: *Un tiempo de silencio: la guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco*. Crítica, Barcelona, 1999.

¹³⁰¹ Carles Santacana i Torres, *Victoriosos y derrotats. El franquisme a L'Hospitalet, 1939-1951*. Barcelona, 1994, pág. 113. Citado por RICHARDS, M., op. cit., pág. 191.

¹³⁰² Testimonio de María Moreno.

¹³⁰³ Testimonio de Gregoria Díez.

por coacción, amenazas o empleando la fuerza a entregar dinero, alhajas o víveres con destino al Tesoro, Ejército o Milicias Armadas”¹³⁰⁴. Por si no fuera suficiente el elevado número de suscripciones oficiales, a éstas había que añadir otras tantas clandestinas, que se ponían en práctica a pesar de la omnipresencia vigilante de la Administración franquista. Si bien, reconocía el Gobierno, que las no oficiales -en la mayoría de los casos- “respondían a un estimable espíritu de emulación patriótica”, se quejaba el régimen de que dificultaban y hacían “desmerecer a las que revestidas de un carácter legal y obligatorio, no tienen otra forma de ingresos con que atender a sus importantísimas obligaciones sociales”¹³⁰⁵. Desde Burgos se ordenaba extremar la vigilancia del gobernador civil e imponer el máximo de sanción por desobediencia en este sentido.

Un medio fundamental de coerción era la necesidad de informes favorables sobre conducta político-social para cualquier tipo de actividad, desde la obtención del carnet de conducir, a la posibilidad de participar en una oposición para acceder a un puesto de trabajo como maestro, guardia civil o policía; pasando por la superación de expedientes de depuración o de incautación de bienes, la obtención de la libertad condicional o conseguir cualquier empleo, por humilde que éste fuera. Estos informes los realizaban las nuevas autoridades: el gobernador civil, los alcaldes, los comandantes de los puestos de la Guardia Civil, los jefes locales de FET o, especialmente, los curas. En un Estado en el que la religión dominaba todos los aspectos de la vida se produjo la aparición del cura como garante de la “honradez” de sus convecinos. Para el acceso a un puesto en la administración era complemento necesario a la buena conducta la certificación del Registro Central de Penados, que había sido suprimido por la República.

Los certificados de buena conducta o avales no sólo eran necesarios para conseguir trabajo, también lo eran para mantenerlo. Gregorio González fue fogonero de Obras Públicas durante la guerra pero -a pesar de estar militarizado- le pidieron un salvoconducto para realizar un trabajo en el frente, para lo que era preciso el aval del jefe de Información de Falange, Felipe Ibarrondo, que también era alcalde de San Lorenzo, barrio donde residía Gregorio. El falangista dijo que el informado era “rojo” y no le dio el aval, por lo que le echaron del trabajo durante un mes.

También eran precisos los avales para conseguir que los hijos de los fusilados regresaran del frente, por ser huérfanos. El certificado tenían que firmarlo dos vecinos mayores de edad. Para reclamar al hijo del alcalde fusilado, Joaquín Bartolomé, el Ayuntamiento de Navas de Oro gestionó la petición, pero añadiendo que el fallecido era de ideas contrarias al movimiento nacional, por lo que no era conveniente que aprobaran la vuelta a casa de su hijo. Tuvo que intervenir el secretario para evitar que se remitiera el informe negativo.

Para la concesión de las licencias de caza la Orden del Ministerio de Agricultura, de 23 de julio de 1938, era mucho más directa, pues ordenaba expresamente a los gobernadores civiles que se otorgaran los permisos sólo a personas de “reconocida adhesión al Movimiento Nacional”¹³⁰⁶.

En los centros de trabajo se daban las mismas coacciones que en el resto de la vida cotidiana. En la fábrica de caretas, casi todos los trabajadores eran mujeres, jóvenes y viudas de fusilados o mujeres de presos. Según cuenta Emilia González (cuyo testimonio es importante por su objetividad porque no tenía relación de amistad o parentesco con represaliados ni militaba o simpatizaba con organizaciones republicanas o de izquierda), estas mujeres eran tratadas bastante mal. Si las condiciones laborales eran duras, las de seguridad eran nulas, pues las propias obreras eran las que probaban las caretas con “gases de verdad”, por lo que hubo intoxicaciones de varias trabajadoras. Emilia fue

¹³⁰⁴ BOP, 14 de septiembre de 1936.

¹³⁰⁵ BOP, 4 de marzo de 1938, Jefatura del Servicio Nacional de Beneficencia y Obras Sociales. Recordaba la vigencia de disposiciones de 21 y 26 de noviembre y 29 de diciembre de 1936, Circular de 18 de febrero de 1937 y O. de 22 de julio de 1937. Valladolid, 25 de febrero de 1938.

¹³⁰⁶ BOP, 1 de agosto de 1938.

despedida tres veces, una semana cada vez, con suspensión de empleo y sueldo. A unos obreros jóvenes de la misma fábrica, de edades comprendidas entre los 16 y 18 años, les querían obligar a trabajar a destajo; explica Emilia que por negarse a ello les hicieron un consejo de guerra sumarísimo, aunque no les pidieron pena de muerte por ser menores de edad¹³⁰⁷.

Otro modo de intimidación era el abuso de autoridad por parte de la Guardia Civil o miembros de las Milicias o del Ejército, que llegaban por la noche a un pueblo, y en cualquier casa decían que prepararan la cena y un lugar para dormir, ante lo que no cabían negativas. Incluso sacaban de la cama a quien estuviera en ella, si no había ninguna libre. En las localidades de la sierra cercanas al frente, había numerosos destacamentos militares que se repartían entre el vecindario o se metían en viviendas deshabitadas porque las familias que las ocupaban estaban en la cárcel o habían sido deportadas. Cuando estas familias regresaban a sus casas descubrían que no quedaba nada de sus enseres, ni los animales que hubieran dejado¹³⁰⁸.

Un fenómeno que no se ha podido estudiar como se hubiera deseado es el de las deportaciones de familiares de presos y fusilados. En la provincia de Segovia no se ha podido determinar el volumen total de afectados, pero se conocen casos en varias localidades: El Espinar, San Rafael y Vegas de Matute o incluso de la capital. Los segovianos deportados eran trasladados al norte, especialmente a Bilbao y Santander.

9. 2. La religión como coacción

El papel preponderante que alcanzó la Iglesia en zona nacional, al apoyar entusiásticamente la sublevación militar, se hizo notar en casi todos los órdenes de la vida social. La coerción religiosa fue muy importante y perduró en el tiempo, a lo largo de toda la dictadura incluso más que otro tipo de coacciones. Precisamente, como explica Sevillano, *“en medio de una población sometida sobresalió la mayor capacidad de penetración social del adoctrinamiento de carácter tradicional y religioso tutelado por la Iglesia”*¹³⁰⁹.

Desde el 19 de julio, la religión católica volvió a ser la oficial del Estado Nacional, como lo había sido hasta 1931, pero ahora se hizo más intolerante con los no practicantes, se convirtió en “casi obligatoria”. No lo era en su totalidad porque, oficialmente en zona “liberada”, *“la libertad de conciencia es uno de los derechos individuales que las Constituciones políticas de todos los estados modernos -y la propia de España-, reconoce a todos los ciudadanos”*¹³¹⁰. Pero la realidad de la vida cotidiana era que las personas que no cumplieran con los preceptos religiosos -al menos acudir a misa todos los domingos y *fiestas de guardar-* era tachado de ateo, lo que arrastraba irremisiblemente la condición de “rojo”, desafecto y traía el peligro de la depuración, de la incautación, de la cárcel o del fusilamiento. En Valverde, localidad donde funcionaba una activa Casa del Pueblo, la población aprendió rápido, como reconocía el párroco cínicamente: *“A pesar de lo que te decía de esta parroquia, tengo la satisfacción de decirte que desde que se inició el movimiento salvador y a los pocos días de fusilar a los 5 de que te hablé, asiste a misa y a la catequesis tres veces más de gente que antes”*¹³¹¹.

¹³⁰⁷ No conocemos el sumario, pero entre la documentación consultada en la Prisión Provincial, hemos encontrado la causa 1055/38, por la que fueron procesados, al menos, 5 jóvenes de 16 y 17 años, detenidos en agosto de 1938 y acusados de *abandono del servicio*. La causa fue sobreseída.

¹³⁰⁸ Testimonio de Vegas de Matute y El Espinar.

¹³⁰⁹ SEVILLANO CALERO, Fco. *Cultura, propaganda y opinión en el primer franquismo*. En *El primer franquismo*. AYER, nº 33, 1999, pág. 159

¹³¹⁰ BOP, 25 de septiembre de 1936. Cir. Gob. Civ. de reposición del Santísimo Viático.

¹³¹¹ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356, Exp. Dep. Fuencisla Moreno. Informe del párroco. Entre los cinco fusilados estaba el dirigente de la Casa del Pueblo, Teófilo Carrasco.

Desde la misma sublevación, los oponentes políticos que estaban en el punto de mira de las nuevas autoridades asumieron la necesidad de “tragar” con la Iglesia y acudían a ella todos los días de precepto. Los maestros fueron el grupo social que mejor mostró esta concienciación y esta necesidad de avenirse con los párrocos, cuyo informe era determinante para el proceso de depuración. Recuperaron la costumbre de acompañar a los niños a la misa dominical. Así lo hizo el maestro de Navas de Oro, Teodoro Martín, según expresaba el párroco:

...desde el 1 de septiembre ha cambiado completamente. En unión del otro maestro, que ya lo hacía antes de 1931, reúnen a los niños los domingos al toque de la misa mayor en su respectiva escuela, dirigiéndose en formación a la Iglesia precedidos por la cruz, cantando el ‘Perdona a tu pueblo, Señor’ y al salir en igual forma retornan a las escuelas cantando el himno de la Falange¹³¹².

Otro de los detalles donde se percibía la vuelta a la obligatoriedad de las prácticas religiosas era el mandamiento de la Iglesia de comulgar y confesar por Pascua. Este precepto no era gratuito, pues el monaguillo daba una cédula a cada persona al acudir a comulgar, con lo que a cada familia podían corresponderle varias de ellas. Días después, el párroco recogía las cédulas por las casas y el donativo *voluntario*, que normalmente era en especie (huevos, pan, leche, etc). Si en una pequeña localidad como Calabazas, donde no había ninguna organización política ni sindical, con 93 vecinos, y 371 *almas*, en 1932 - como buena prueba de la libertad religiosa- hubo 16 que “no cumplieron”¹³¹³, entre los que se encontraba el maestro Laureano Puche y su padre¹³¹⁴. En 1938, ya durante la guerra, pasaron a ser 4 los tenaces. En 1940, de las 431 *almas* -y 318 “obligados a precepto”, ya sólo resistió uno la presión y “no cumplió”.

Algunos curas llegaban a amenazar a los hombres que estaban en los bares, para que fueran a la iglesia, o no les hacían los informes favorables o los certificados de buena conducta para conseguir trabajo. Pero los castigos se escenificaban en el templo, cuenta Saturnino de Lucas que a los “rojos” de Mudrián los obligaban a rezar el Credo “a voz en cuello, y a quienes lo habían olvidado los golpeaban. Durante la misa, los colocaban al frente del altar con los brazos en cruz para que hicieran penitencia”¹³¹⁵.

Poco a poco se fueron restaurando las manifestaciones tradicionales religiosas cuyo carácter público había sido restringido por los gobiernos republicanos. En septiembre de 1936, se recuperó, por orden del gobernador civil, comandante España, la administración procesional del Santísimo Viático, “con toda la ostentación y honores que tradicionalmente se le ha venido tributando”. El preámbulo de la circular que lo restituyó era muy interesante:

La libertad de conciencia es uno de los derechos individuales que las Constituciones políticas de todos los estados modernos -y la propia de España-, reconoce a todos los ciudadanos (...) Manifestación propia de este derecho es el ejercicio del culto y demás actos religiosos, que son como la exteriorización de convicciones e ideas que por arraigar tan de firme en las conciencias de los hombres, han tenido las leyes que reconocerlas como derechos y regular su ejercicio (...) Si en términos generales aparecen desprovistas de fundamento jurídico cuantas cortapisas y limitaciones se establezcan para restringir el ejercicio del derecho de libre conciencia, con mayor razón lo será en un pueblo que, como el español, es de tradición eminentemente cristiana, manifestada de modo tan patente a través de su Historia¹³¹⁶.

¹³¹² Arch. Epis. Cpta. Correo de entrada, 1936. Informe del párroco de Navas de Oro sobre el maestro Teodoro Martín.

¹³¹³ Arch. Mun. de Calabazas. Aquí están los libros de la iglesia parroquial, entre ellos figura el Libro de Matrícula de la Iglesia, en el que se anotaban distribuidos por familias todas las *almas* (los que habían tomado la primera comunión) de la localidad. Aparece supervisado por el obispo. Sólo están hechas las inscripciones de 1932, 1938 y 1940. En la de 1932, a pesar de que al final de la lista apunta el cura “casi todos cumplieron”, no pone sí en 16, que como alguno repite en 1938 y ya sí que explica que “no cumplen”, podemos asegurar que aquellos 16 no habían aportado su contribución a la Iglesia.

¹³¹⁴ Laureano Puche, afiliado a Trabajadores de la Enseñanza, algún curso antes de la guerra se trasladó a Extremadura, de donde era originario. Testimonios de Calabazas lo creen fusilado durante la guerra.

¹³¹⁵ Testimonio de Saturnino de Lucas recogido en LEGUINECHE, M, op. cit., pág. 128.

¹³¹⁶ BOP, 25 de septiembre de 1936. Cir. Gob. Civ. de reposición del Santísimo Viático.

La ola de “religiosidad” inundó todos los rincones de la vida cotidiana. Desde los distintos sectores de la derecha sublevada se animaba la religiosidad de la sociedad, Falange y el resto de milicias organizaban o patrocinaban misas, procesiones, salves, novenas, tedeum, etc. Esta profusión de ceremonias religiosas *espontáneas* no agradaban a la Iglesia, que se vio obligada a velar por que se cumplieran unos mínimos indispensables. Así, el Obispo remitió una orden a los párrocos en la que les pedía, “*con el fin de corregir lamentables abusos existentes en esta materia y mirando por el honor y reverencia de los actos de culto*”, que “***no se permita celebrar la Santa Misa ni hacer de ministros en las funciones religiosas a nadie que no se presente en la iglesia vestido de sotana, si no ostenta permiso escrito de Nuestro Vicario General***”¹³¹⁷. Lo anterior no es obstáculo para que las victorias militares y los homenajes se celebraran con misas en la catedral que oficiaba el obispo Platero en perfecta simbiosis con las autoridades del régimen.

Las manifestaciones religiosas se pretendían grandiosas, reuniendo grupos numerosos para hacer ejercicios espirituales, penitencias, misas de campaña, comuniones en masa en las prisiones. Para los sectores católicos, la guerra se tomó como un castigo por los pecados de la patria, entonces había que rezar, toda la sociedad debía hacer penitencia. Explicaba Platero las que él consideraba causas de la guerra:

La causa del presente lamentabilísimo estado de nuestra patria, no son los socialistas, comunistas, sindicalistas, anarquistas; no son los hombres (...) son entera y exclusivamente la descristianización de la sociedad española y el paganismo redivivo en su conducta, en sus aspiraciones, en su vida (...) nuestros pecados, personales y colectivos y sociales (...) la relajación de las costumbres hasta el público desenfreno, (...) la falta de valor cristiano (...), la codicia de placeres (...), la ausencia de sumisión plena y perfecta a las normas y enseñanzas de los Maestros puestos por el Espíritu Santo para gobernar las almas...¹³¹⁸.

A continuación, el prelado de Segovia exponía el camino para solucionar el conflicto: “*Estos defectos nuestros (...) sólo se neutralizan y compensan con actos de penitencia*”¹³¹⁹. En este sentido, explica Richards que desde el régimen franquista se decretó una reflexión constante y silenciosa sobre el pecado (en especial sobre el pecado de la revolución y de la guerra), sobre la pureza y la salud de la nación.

El catolicismo imperante era el más reaccionario y recalcitrante, se impusieron las demostraciones religiosas públicas más ostentosas. Se aprovechaban con fines propagandísticos todo tipo de manifestaciones religiosas, como las ya citadas del Bautizo de niños “rojos” o la Primera Comunión de los niños del Preventorio. El prelado “*impulsado por su celo pastoral y amor a los niños, accedió gustosísimo al ruego del gobernador civil de celebrar la Santa Misa*”. Asistieron el gobernador civil, el alcalde y otras personalidades; la Unión Diocesana de Mujeres Católicas, la Juventud Femenina de Acción Católica y las familias que se ofrecieron sustituir a las de los neocomulgantes (...) “*Ni el calor de la familia, ni el vestido y calzado (...) ni el desayuno y comida extraordinaria, ni el recordatorio impreso y demás detalles que son costumbre tradicional, faltaron a los niños*”¹³²⁰.

Se produjo una vuelta de tuerca en la valoración social de ciertos temas de índole moral o privada de las personas, como la homosexualidad, que volvió a ser condenada. Las mujeres, liberadas de la opresión secular por las ideas renovadoras de la República, eran ahora descalificadas, el adulterio fue de nuevo objeto de persecución¹³²¹.

¹³¹⁷ Arch. Epis. Cpta. Correo de salida, fechada el 25 de septiembre de 1936. El subrayado es mío.

¹³¹⁸ BOOS, nº 15, 14 de agosto de 1936. Pastoral: *El deber de todos en la hora presente*.

¹³¹⁹ Ver nota anterior.

¹³²⁰ BOOS, nº 22, 30 noviembre de 1936, pág. 450. La ceremonia se celebró el domingo 29 de noviembre.

¹³²¹ Por la Ley de 11 de mayo de 1942 se restableció la penalización del adulterio.

La bendición *post partum* de nuevo tuvo plena vigencia, que llegará hasta bien entrada la década de los años sesenta. Consistía en que la mujer que acababa de dar a luz no salía a la calle hasta que no asistía a la iglesia y era bendecida. Debía acudir con una vela para ser purificada por el párroco.

Los medios católicos aludían a la protección de la Virgen de la Fuencisla, patrona de la capital, ante los bombardeos aéreos republicanos, que se ciñeron, casi exclusivamente al mes de agosto de 1936. Esa protección llegó hasta el extremo de nombrar a la patrona “Mariscal de Campo” en 1942, siendo ministro del Ejército el general Varela¹³²² (vinculado a Segovia desde que había dirigido la defensa de la capital, ante el ataque republicano de 1937). Contreras, en su libro *Iniciación al Movimiento*, llevaba impresa en portada la imagen de la patrona.

Desde la emisora local, radio Segovia, se emitía la *Hora Católica Radiada*, los sábados a las 8 de la tarde, organizada por la junta diocesana de Acción Católica. Se fundó durante la guerra una *Congregación de Sirvientas* con fines netamente religiosos, pero sus prácticas tenían algunas dificultades por el apretado horario de trabajo. De tal modo que la organización se vio obligada a publicar el siguiente anuncio en la prensa local “*Se ruega a las señoras que concedan fácilmente a sus sirvientas el permiso para hacer estos ejercicios (espirituales) que tan grandes bienes traen a sus almas*”¹³²³.

El papel que debían desempeñar los sacerdotes en la guerra (“*cuando tanta sangre cristiana y tanta sangre sacerdotal enrojece el patrio suelo cubriéndolo de flores de heroísmo y de martirio*”) estaba muy claro para el obispo Platero: debían disponerse a “*extirpar las malas semillas de blasfemias, de lecturas perniciosas y modas indecentes, para desvanecer los rastros del laicismo en las familias y en los municipios, legitimando matrimonios, bautizando niños y restaurando veneradas tradiciones populares*”¹³²⁴. El clero debía permanecer vigilante contra las transgresiones, ser el gendarme de la moralidad y devolver a los cauces religiosos todas las acciones laicistas que había realizado la República.

Una de las manifestaciones paganas más arraigadas entre los españoles siempre ha sido el Carnaval, pero la Junta Técnica del Estado, “*en atención a las circunstancias excepcionales que atraviesa el país, momentos que aconsejan el retraimiento en la exteriorización de las alegrías internas, que se compaginan mal con la vida de sacrificio que debemos llevar*”¹³²⁵, ordenó la suspensión de estas fiestas en enero de 1937. En Segovia, a la vista de la orden anterior, el alcalde publicó un bando recomendando la suspensión del Carnaval¹³²⁶. Pero ésta no quedó limitada a la guerra civil, al contrario, se confirmó en 1939, no sólo en los actos celebrados en la vía pública, sino también en “*fiestas de Sociedad o empresa que acostumbraran a celebrarse con ese motivo*”¹³²⁷. Esta prohibición, como tantas otras, perduró hasta el final de la dictadura.

El obispo Platero no llegaba a pedir la prohibición de actos recreativos durante la Cuaresma, pero animaba al recogimiento:

¡Cuanto nos acercaría a Dios y nos honraría ante los hombres el que en esta Cuaresma histórica dejarasen de funcionar, por falta de asistencia, los teatros, los cines, los bailes, los juegos, los casinos; y por el contrario que se aumenten las confesiones y comuniones....¹³²⁸.

¹³²² MARTÍNEZ BANDE, J. M. *La ofensiva sobre Segovia y la batalla de Brunete*. San Martín, Madrid, 1972., pág. 54.

¹³²³ *El Adelantado*, 8 de enero de 1939.

¹³²⁴ BOOS, nº 16, 31 de agosto de 1936. Pastoral, pág. 332.

¹³²⁵ BOE, 22 de enero de 1937.

¹³²⁶ *El Adelantado*, 2 de febrero de 1937.

¹³²⁷ BOP, 15 de enero de 1939. Cir. Gob. Civ. con motivo de la O. M. de 12 de enero de 1939.

¹³²⁸ BOOS, nº 2 de 1937, 30 de enero de 1937.

El Estado nacional-católico se mostraba hasta en los detalles más inocuos. Los serenos volvieron a dar la hora anunciando en primer lugar *Ave María Purísima*, como se hacía desde el siglo XVI hasta 1931.

9. 2. 1. La vigilancia de las buenas costumbres

Como manifestación lógica del apogeo religioso era la preocupación asfixiante por la moralidad y buenas costumbres, acordes con los principios de la Iglesia Católica, que abarcaban múltiples aspectos. Entre las conductas más perseguidas en zona nacional se encontraba la blasfemia, precisamente una de las costumbres más extendidas en nuestro país. Si a esta característica le añadimos las condiciones tan difíciles por la guerra, siempre más duras para los oponentes políticos represaliados y sus familiares, nos daremos cuenta que los disconformes de la sociedad además de tener prohibido quejarse, ni siquiera podían utilizar como válvula de escape las palabras malsonantes. Esta es una muestra más de la preocupación del régimen por la apariencia formal de la vida cotidiana: pretendían una sociedad idílica donde los pecados no tuvieran cabida.

Una de las primeras muestras en este sentido la adoptó el alcalde accidental de Segovia, Andrés Reguera Antón, cuando publicó un Bando Municipal contra la blasfemia, que encabezaba así: *“Hallándose muy extendido en esta ciudad el feo vicio de la blasfemia...”*¹³²⁹. En él se preveían multas de 200 pts. para los infractores de la norma.

Mucho más adelante, en 1938, el Ministerio del Interior dictó una orden contra la blasfemia *“proferida en injuria de Dios y los santos”* y la difamación de personas -fueran autoridades o particulares- para que ambas fueran perseguidas por los gobernadores civiles, aplicando las sanciones que *“la ley autoriza”*. La actuación en este campo tenía sus raíces en una ley de 1882, por la que los gobernadores estaban obligados a reprimir los actos contrarios a la moral y a la decencia pública, con lo que *“cae dentro de la esfera de sus atribuciones la vigilancia y la sanción de cuantas expresiones orales se viertan en lugares públicos y a las que pueda aplicarse aquella calificación”*¹³³⁰.

En el ámbito penitenciario también se hicieron eco de esta práctica, tanto en reclusos como en funcionarios, hasta el punto de la publicación de una Orden de la Jefatura Nacional de Prisiones, en la que criticaba especialmente el comportamiento de los funcionarios *“que desmoralizan y alientan con su mal ejemplo a los peores elementos de la población reclusa”*. Los empleados que así procedían se manifestaban en *“franca desafección al glorioso Movimiento Nacional, como enemigos de los principios en que éste se inspiró, e incompatibles con el régimen de la nueva España, por lo que habrán de ser tratados como tales enemigos y este Centro será inexorable en la sanción de su conducta, en especial para con los directores”*¹³³¹, por su mayor responsabilidad. Con esta orden se prohibía la blasfemia, castigando, además, a los reclusos con privación de comunicaciones orales y escritas por tiempo ilimitado, hasta que se apreciara su *“arrepentimiento”* y, en caso de reincidencia, quedarían siempre inhabilitados para obtener el beneficio de la libertad condicional y la redención de penas por el trabajo.

La moralidad era incluso necesaria para ganar la guerra, así planteaba una nota editada por el obispado de Segovia, bajo el expresivo título: *Por el triunfo de la patria*. En ella se pedía

Se ruega a todas las señoras y señoritas se presenten vestidas honestamente, sin escote y con manga hasta la muñeca, para evitarnos el disgusto de prohibirlas la entrada a la visita.

¹³²⁹ *El Adelantado*, 24 de octubre de 1936.

¹³³⁰ O. Circular M. Interior, 11 de julio de 1938. *BOP*, 18 de julio de 1938.

¹³³¹ Pris. Prov. LOD. Orden de la Jefatura Nacional de Prisiones de 19 de enero de 1939.

Cualquiera manifestación de inmoralidad es siempre reprobable; pero en los actuales momentos sería un reto lanzado a la justicia de Dios y al heroísmo de nuestros soldados¹³³².

Objeto especial de crítica por los moralistas oficiales eran los bailes -que para un canónigo de Calatayud eran *“gavilla de demonios, estrago de la inocencia, solemnidad del infierno, tiniebla de varones, infamia de doncellas”*¹³³³. Estas ideas retrógradas se llevaron a la práctica con la prohibición de bailes públicos en pueblos y pequeñas capitales. En Ávila, en noviembre de 1939, fueron prohibidos los bailes públicos y privados, salvo la jota serrana, que se realiza sin establecer contacto físico entre los danzantes.

Otro aspecto apreciado como peligroso por los sectores más conservadores del clero eran los baños en las playas, que, en palabras de un padre capuchino, *“no hay, pues, en la conducta social de la mujer una acción más grave, más excitante al pecado feo, que la que realiza tranquilamente en sus baños públicos en la playa. Son ocasión próxima de pecado mortal”*¹³³⁴.

Los comentarios, artículos y homilías de algunos religiosos eran expresión de una reacción rígida e intransigente ante cualquier manifestación pública de amor entre las personas. Algunos sermones eran clarificadores de esta actitud, como el del padre Avellanosa, dedicado a las parejas de novios, que en su opinión no debían salir solas, pues los riesgos de la tentación son muchos y el maligno no descansa en su empeño por pervertir las almas puras. Por eso es bueno que los novios vayan siempre acompañados por persona formal, con años y moralmente preparada, que sea para ellos como escudo que les libre de las tentaciones. Esta sana precaución no debe abandonarse ni cuando la formalización de las relaciones asegura la proximidad del Santo Sacramento del matrimonio. Antes al contrario: la cercanía del tálamo vuelve a los hombres más rijosos y a las mujeres más fáciles a entregarse a un anticipo: por ello, ni las más firmes promesas deben eludir la vigilante compañía de un familiar o carabina que los haga mantener castos y puros hasta la hora en que, bendecida la unión, puedan entregarse a cumplir con los deberes estrictamente procreativos para los que se fundó y santificó la unión matrimonial¹³³⁵.

Pero que la Iglesia dictara sus normas, en temas de moralidad, entra dentro de lo lógico. Lo que ya no parece tan lógico era la implicación del Gobierno en dictar normas morales que debían ser del ámbito exclusivo de la vida moral de los católicos que quisieran llevarlo a la práctica, con lo que estas órdenes muestran palpablemente hasta dónde llegaba la simbiosis de la Iglesia con el Nuevo Estado. Como la Orden de la Dirección General de Seguridad, dictada en *defensa de la moralidad pública*, sobre los baños veraniegos. En ella, entre otras prohibiciones, quedaba vedada la *“permanencia en playas, clubes, bares, etc., bailes y excursiones y, en general, fuera del agua, en traje de baño, ya que éste tiene su empleo adecuado y no puede consentirse más allá de su verdadero destino”*¹³³⁶. Así mismo no se podían tomar baños de sol sin albornoz, con excepción de los tomados en los *solarium* cerrados al exterior.

Otro ejemplo en el que se plasmaba la ideología intolerante, era la Circular de la Dirección General de Seguridad bajo el epígrafe de “Decencia Pública”, en cuya fundamentación se lamentaba de que en la calle, en paseos y en lugares de esparcimiento, teatro, cines, cafés, etc., *“se advierte un relajamiento de nuestras costumbres, oyéndose frases obscenas y viéndose parejas de jóvenes que, sin recato alguno, mantienen actitudes, más que incorrectas, desvergonzadas”*. Ante dicha situación exigía a los

¹³³² Arch. Epis. Cpta. Correo de salida, 1936. No tiene fecha ni especifica el lugar de su utilización, pero podría ser para las visitas a la catedral.

¹³³³ ABELLA BERMEJO, Rafael. *La vida cotidiana durante el régimen de Franco*. Temas de Hoy, Madrid, 1996, pág. 109.

¹³³⁴ ABELLA BERMEJO, R., op. cit., pág. 111.

¹³³⁵ ABELLA BERMEJO, R., op. cit., pág. 107.

¹³³⁶ ABELLA BERMEJO, R., op. cit., pág. 111.

gobernadores civiles “*dar sensación de energía en la corrección de tales licencias*” porque “*es deber primordial de la autoridad, y en tal aspecto recomiendo a VE el mayor rigor en la imposición de multas que estén en relación con la importancia de la falta cometida, publicando en la prensa los nombres de los corregidos*”¹³³⁷. Ya venimos apuntando que ésta era una de las sanciones preferidas del régimen: la publicación en la prensa de la identidad de los infractores de las normas. Para combatir mejor las inmoralidades era necesario que las autoridades fueran inexorables en el cumplimiento del horario de cierre de los lugares que cultivaran el género frívolo, imponiéndose a los *contraventores* fuertes sanciones.

Las normas en defensa de la decencia tenían aplicación práctica en la vigilancia en parques y jardines por guardias municipales y Policía Armada. En los cines había personal con linterna encargado de mantener el decoro, que expulsaba a las personas que superaban el límite de lo consentido.

La vigilancia de la moralidad alcanzaba cotas exageradas, hasta el punto de exigir los obispos la prohibición de las representaciones teatrales organizadas por congregaciones religiosas, Juventud de Acción Católica o pías Asociaciones, en las que actuaran jóvenes de ambos sexos¹³³⁸.

El resultado de esta agobiante presión religiosa a toda la sociedad -desde los más pequeños, en la escuela, hasta los más mayores, incluso en sus propias casas- fue una larga época de represión sexual -pues esta coerción ha perdurado durante todo el régimen franquista- y de muy oscuro recuerdo para la mayoría de los que lo vivieron.

¹³³⁷ ABELLA BERMEJO, R., op. cit., pág. 111.

¹³³⁸ BOOS, nº 23, 15 diciembre de 1936, pág. 460.

TERCERA PARTE:
CONCLUSIONES GENERALES

10. CONCLUSIONES

Sea cual fuere la naturaleza del régimen de Franco –dictadura reaccionaria, forma del fascismo o Estado autoritario fascistizado-, los hechos objetivos que hemos estudiado en este trabajo de investigación son todas las manifestaciones de la violencia ejercidas por el franquismo para conseguir su implantación durante la guerra y la posterior consolidación del régimen tras su victoria por las armas. Franco utilizó y se sirvió de la violencia con el mismo fin que los regímenes fascistas de Alemania o Italia. La violencia cumplió su función en la resolución de conflictos sociales sirviendo a los intereses del bloque dominante tradicional (oligarquía agraria, burguesía industrial y banca) para restituirle en el poder político que habían perdido con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero. En definitiva, la represión estaba planificada previamente por los militares sublevados y contaba con unos objetivos predeterminados, como se comprueba en las *Bases Técnicas* del general Mola.

La ideología de la represión franquista aglutinaba distintas concepciones: represión de clase, castigo a los trabajadores reivindicativos y como recuperación del poder perdido por la burguesía ante el movimiento obrero durante la República; “*extirpar los males de la patria*”; el exterminio, la eliminación del oponente y la ejecución de la venganza. Los objetivos de la represión franquista eran evidentes: la paralización por el terror, la ejemplarización –que se conseguía mediante dos vías: por un lado, con la selección de las víctimas entre los dirigentes o militantes más destacados de organizaciones republicanas y de izquierdas y, por otro, con la violencia indiscriminada, que hacía sentir el peligro a cualquier militante de base o simple simpatizante- para que la sociedad en general tomara nota de lo que podía ocurrir a los oponentes y asegurar la retaguardia dejándola libre de posibles enemigos. Sin embargo, la clave fundamental de la imposición del nuevo régimen era la paralización por el terror, sentimiento que se infundía a los adversarios políticos, pero también a los neutrales o incluso a los afectos al movimiento que no se mostraban especialmente firmes ante los oponentes.

10. 1. El amplio espectro represivo

10. 1. 1. La represión “ilegal”

En primer lugar, en este trabajo hemos abordado el estudio de los numerosos casos de ejecuciones sin procesamiento ni procedimiento judicial previo que ocurrieron durante la guerra civil en Segovia, lo que hemos llamado “represión ilegal”.

El procedimiento habitual era la detención -por parte de escuadras falangistas en su mayoría y, sólo en algunos casos, por la Guardia Civil- de la víctima en su trabajo o en su domicilio y, tras un corto viaje en coche o camioneta, se producía la ejecución en algún descampado, en el pinar, en alguna cuneta, etc., sin que la víctima llegara a estar detenida en ninguna prisión. Otras veces la víctima era llevada al cuartel de Falange de la localidad, donde -con el pretexto del interrogatorio- el detenido sufría palizas, torturas físicas y psíquicas. Otro método muy utilizado fue el de las sacas de presos de las cárceles. Hubo al menos dos en Segovia (los días 14 y 30 de agosto) tras sendos bombardeos republicanos. De igual manera hubo sacas en las prisiones de la provincia, si bien éstas no habían sido “provocadas” por bombardeos previos. Sufrieron sacas Cuéllar (8 de septiembre), Riaza (7 de septiembre), Sepúlveda (21 de agosto) y San Ildefonso (se conoce la fecha concreta de una saca el 5 de septiembre, pero testimonios aseguran que hubo más).

La práctica totalidad de las ejecuciones se produjeron en el verano de 1936, siendo especialmente trágico el mes de agosto, con la mayoría de las ejecuciones. Este mes representa el momento crítico, tras el cual descendieron algo en el mes de septiembre, y

aún más en octubre, para llegar prácticamente sin ejecuciones no judiciales hasta el final de la guerra. Fue paralelo a los desmanes ocurridos en el otro bando, pero su significación profunda es distinta. Desde estas fechas -meses de septiembre y octubre de 1936- se comenzó a aplicar más exhaustivamente la justicia militar imponiéndose los fusilamientos originados por sentencias de consejos de guerra.

La inmensa mayoría de los fusilados eran adversarios políticos, republicanos e izquierdistas, pero además de la ideológica, algunos de ellos tenían alguna enemistad concreta con los personajes que los delataron o los ejecutaron (venganza por motivos económicos, personales, pasionales, etc.), o se trataba de un desquite al no haber podido eliminar al hijo o al padre que había pasado al bando republicano.

El análisis socioprofesional (que desarrollamos en los anexos) revela que el 57,5% eran obreros, lo que nos puede apuntar ya una primera clave de represión de clase. Los militares sublevados se cuidaron especialmente de castigar de un modo ejemplar a los trabajadores que se habían distinguido por su lucha o habían destacado en labores de propaganda. Por el contrario, fueron muy pocos los empresarios o industriales ejecutados y, de entre ellos, únicamente dos podría decirse que eran auténticos empresarios: Antonino Albarrán, propietario de una línea de autobuses y Pedro Antón, dueño de un aserradero. El resto poseían o regentaban carnicerías, molinos y tabernas, por lo que se les ha incluido en el apartado de autónomos. El sector más numeroso de trabajadores eran jornaleros de temporada, sin oficio habitual ni especialización, muchos de ellos dedicados a labores de agricultura -especialmente la siega o explotación de la resina de los pinares- o cuidado del ganado. Entre los trabajadores con oficio, destacan los *obreros del carril* (como se denominaban en aquellos años), de los que en casos como los de la Estación de El Espinar, cuentan testigos que algunos fueron castigados sólo por ser ferroviarios. En este sector era mayoritaria la afiliación a UGT.

En lo que se refiere a la adscripción política de las víctimas, hay que decir que se han obtenido pocos datos, tan sólo de un 47,86% del total. Faltan las fuentes oficiales en este sentido y las orales son un poco confusas, pues se hablaba de “izquierdas” en general, de “rojos” o “comunistas”, cuando podían ser simplemente de ideología republicana. Además, la afiliación como tal, con carnet de militante, en aquella época era más numerosa a los sindicatos que a los partidos políticos. La mayoría de las víctimas estaban vinculadas a las Casas del Pueblo, en su vertiente sindical, es decir a la UGT. Los afiliados al sindicato socialista representan el 42,57% del total de los datos conocidos. En cuanto a los partidos políticos, predominan el PSOE, Izquierda Republicana y la Juventud Socialista Unificada (fruto de la fusión de las Juventudes Socialista y Comunista, durante la primavera de 1936).

Con referencia a la geografía de la represión, se deben hacer algunas aportaciones sobre la diferente incidencia a lo largo de la provincia (como se puede observar en el mapa nº 4, donde se recoge el domicilio conocido de 203 víctimas de la represión sumaria). Fue especialmente dura y cruel en toda la franja de la sierra, con casi la mitad del total de víctimas. La provincia de Segovia -por su situación de límite, por el sur y el este, a lo largo de las sierras de Guadarrama y Somosierra, con las provincias de Madrid y Guadalajara- fue frente durante todo el conflicto, si bien la actividad bélica se limitó al verano de 1936 y a la ofensiva republicana de mayo/junio de 1937 por el sector de La Granja. La labor de *limpieza* fue exhaustiva en toda la franja de la sierra, que era línea de frente, y desde Villacastín hasta Ayllón prácticamente todos los pueblos serranos fueron afectados. En esta zona hubo un total de 91 fusilados (como expusimos en el cuadro nº 9).

Además de la sierra, fueron también duramente castigadas la Tierra de Pinares y algunas localidades atravesadas por las carreteras que procedían de Burgos y Valladolid, de donde venían los falangistas. Destacan entre ellas: Segovia (28 víctimas), Cuéllar (10), Linares del Arroyo (8), Sepúlveda (7), Navas de Oro (6) y Valverde del Majano (5).

10. 1. 2. La represión “legalizada”

Los militares sublevados se valieron fundamentalmente de los procedimientos penales ya existentes para reprimir a los oponentes políticos, utilizaron el Código de Justicia Militar hasta la saturación. Pero la aplicación a personal civil de la legislación castrense vino originada por la ilegalidad que supuso la sublevación contra el Estado de derecho iniciada la tarde del 17 de julio en las guarniciones del norte de África.

En esta fundamentación de la persecución de los defensores de la legalidad acusados de rebelión se apoya lo que se ha venido a denominar la *“justicia al revés”*, en expresión de Serrano Súñer. Porque, como afirma Aróstegui, curiosa y significativamente, los sublevados *“no eliminaron a sus enemigos por la aplicación de unos principios jurídicos nuevos, de una ‘justicia revolucionaria’ (...) sino basándose en el Estado que querían destruir, retorciendo hasta la aberración las figuras delictivas contempladas en el Código de Justicia Militar. Las figuras de sedición, auxilio a la rebelión, etc. fueron aplicadas a los adictos o sostenedores del Estado legítimo”*¹³³⁹.

El mayor número de sumarios de la plaza de Segovia se formaron en 1936 (un total de 133, que agrupaban a 680 procesados), en 1937 ya descendieron a 101 sumarios y “sólo” 225 procesados, y en 1938, 42 causas sobre 116 inculpados. Por su parte, la mayoría de las causas del periodo 1939-1944 afectaron a segovianos que habían pasado la sierra para alistarse con el Ejército republicano, algunos de los cuales fueron detenidos en Madrid o en otros frentes al finalizar la guerra; pero la gran mayoría serían apresados al regresar a sus localidades una vez terminada la contienda.

La aplicación literal del referido artículo 6º del Bando de Guerra fue mucho menor que la utilización del artículo 237 del Código de Justicia Militar, puesto que la gran mayoría de procesados por rebelión, en la plaza de Segovia, lo fueron en función del CJMil, aplicado a cualquier manifestación verbal, acción o hecho que supusiera oposición al movimiento militar, debido a que los sublevados alegaban la legitimidad de su poder desde el momento en que se alzaron en armas. En consecuencia, todos los que luchaban contra ellos eran rebeldes por la aplicación del CJMil.

Para la identificación delictiva de los hechos perseguidos eran fundamentales los antecedentes políticos de los procesados, lo que constituía una aberración jurídica, pues se castigaba con carácter retroactivo por el ejercicio de unos derechos y libertades propios del sistema democrático republicano que, obviamente, no estaban prohibidos cuando se ejercieron. Aunque así lo reconocía un tribunal militar *“la mera profesión de ideas con anterioridad al movimiento nacional no aparece penada en la legislación vigente”*¹³⁴⁰, en cambio, era determinante para agravar o atenuar la responsabilidad y como consecuencia de ello, hacía variar la cuantía de la condena.

A la hora de aplicar la calificación de los delitos, la arbitrariedad de los tribunales militares era tan habitual que se hizo norma común, por lo que las generalizaciones son muy difíciles de formular en el presente estudio. No obstante, y con las debidas precauciones, podemos hablar de unos criterios generales:

1. Rebelión en calidad de jefes: los organizadores de los actos de oposición a la sublevación: tales como huelga, cortes de vías de comunicación y vigilancia armada de las localidades.
2. Adhesión a la rebelión: las personas que realizaron los actos de oposición.
3. Auxilio a la rebelión: aquéllos que participaron en manifestaciones contrarias a la sublevación y muchos de los que realizaron los actos de oposición.

¹³³⁹ ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J. *Los componentes sociales y políticos*. En TUÑÓN DE LARA, M. y otros; *La guerra civil 50 años después*. Cita a SERRANO SÚÑER, Ramón. *Entre el silencio y la propaganda, la historia como fue*. Memorias. Planeta, Barcelona, 1977, pág. 245.

¹³⁴⁰ Causa 1274/36, contra Alfonso Núñez Carrión y 7 más.

4. Excitación a la rebelión: los que animaron a otros a participar en las acciones de oposición.

Por último, no se pueden adscribir a ninguna de las anteriores calificaciones los procesados por manifestaciones verbales contrarias al alzamiento militar, puesto que hubo distintas catalogaciones que impiden la generalización.

10. 1. 3. Las responsabilidades políticas

A los fines represivo y económico resaltados por otros autores, nosotros añadimos que la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas resultó ser más bien una campaña de propaganda de atemorización a los desafectos y a los no entusiastas del nuevo régimen, más que recaudatoria. Llegamos a esa conclusión porque, económicamente -al menos en la provincia de Segovia- este proceso no ingresó tantos fondos como se tenía previsto en un principio. En cambio sí contribuyó, junto con el resto de estrategias represivas (penales y administrativas), a paralizar a los adversarios por medio del embargo de sus bienes o el miedo a la sanción.

La reforma de 1942 demostró el fracaso del procedimiento creado en 1939, aunque también obedecía a la evolución de la II Guerra Mundial, pues en esta fecha ya no era tan evidente la victoria de las potencias fascistas y el régimen franquista moderó la dureza, al menos aparentemente, de la represión. La pretensión de castigar a todos -llegando a todos los pueblos de España- y por todo -cualquier actividad política, por mínima que fuera, de signo nacionalista, republicano, marxista o anarquista- se había revelado imposible de realizar porque afectaba a centenares de miles de españoles y habría supuesto un ingente esfuerzo del Estado, de recursos económicos y humanos, que hubiera tenido que distraer de otras actividades. No faltó voluntad represora al Estado franquista, si ésta no se llevó a la práctica en todo el rigor de la Ley de 1939 fue por falta de presupuesto o de personal suficiente para llevarlo a cabo.

Prueba de esta voluntad represora, es que hasta 1966, treinta años después de iniciada la guerra con la sublevación militar, no se dictó el indulto para la extinción definitiva de las responsabilidades políticas. Hasta entonces se aligeraba el volumen de expedientados con el “carpetazo” del sobreseimiento, término que no reconocía la inocencia de los sancionados o el perdón de la responsabilidad, sino exclusivamente el cerrar la puerta al problema. Los indultos no llegaron hasta finales de la década de los 50, más por cansancio del Estado de no ver finalizado el proceso represor, que por convencimiento de la necesidad de superar el enfrentamiento civil, intención que nunca tuvieron los vencedores de la guerra.

La mayoría de los sancionados por ambos procedimientos de responsabilidad civil y de responsabilidades políticas fue indultada o sobreseída: de los 1063 expedientes incoados en la provincia de Segovia, tuvieron resolución favorable 808, lo que supone el 76%, como se refleja en el cuadro:

Cuadro nº 39: Resolución favorable de los expedientes de responsabilidades civiles y políticas

Tipo de resolución favorable	Nº de exptes.
Expedientes sobreseídos	89 + 657*
Expedientes indultados	62
Total	808

*Los 657 “presuntos responsables políticos de la provincia de Segovia”.

Estas medidas originaron que fueran devueltos la mayor parte de los bienes intervenidos y el dinero en metálico (aunque en este caso, la devolución se hacía con el valor de las fechas de incautación, lo que suponía una devaluación considerable). En vista de lo cual, podríamos aventurar que, con este procedimiento, el régimen de Franco obtuvo un préstamo sin intereses efectuado por los adversarios políticos para poner los cimientos de la construcción del Nuevo Estado.

10. 1. 4. La depuración de la administración

El tercer campo de estudio que hemos abordado es el de la depuración administrativa. En primer lugar, es necesario hacer constar que la depuración era una aplicación más de lo que venimos denominando “justicia al revés”, pues los españoles que se habían sublevado contra la legalidad vigente, llevaban a los tribunales, acusaban, encarcelaban y fusilaban a aquellos españoles que habían permanecido fieles a la democracia republicana.

Como afirma Morente, la fuente sobre la que se basó la mayor parte de las resoluciones sancionadoras fue una documentación viciada, ya fueran informes de autoridades o anónimos colaboradores, lo que *“no hace sino añadir arbitrariedad en un proceso en el que el verdadero sentido de la justicia estaba viciado desde el origen”*¹³⁴¹.

Ahora bien, que la arbitrariedad se limitara en los años cuarenta no quiere decir que desapareciera de los procesos depuradores (ya hemos observado ejemplos de ella en los tres ámbitos que hemos estudiado más detenidamente). En la década de posguerra se pudo observar un ambiente generalizado en el régimen franquista de admitir las revisiones de las sanciones de los funcionarios que no tenían delitos de sangre, no habían sido condenados por tribunales civiles o militares, o no eran destacados dirigentes del marxismo. Siguiendo esta línea, deberían haber sido reintegrados a sus puestos de trabajo la práctica totalidad de los destituidos porque, de todos los empleados depurados en la provincia de Segovia, muy pocos fueron condenados en consejos de guerra (y de ellos, ninguno acusado de delitos de sangre) y eran minoría los dirigentes de partidos políticos o sindicatos integrantes del Frente Popular. Es decir, la inmensa mayoría fueron sometidos a depuración por ser militantes de base, simpatizantes o simplemente tener ideología republicana o de izquierda.

10. 1. 5. La represión de la conducta

Por último, hemos abordado el estudio de uno de los elementos más importantes para conseguir la paralización por el terror –y en estrecha relación con la represión física-, cual era el amedrentamiento, la intimidación y la humillación de la población, que estaba a la orden del día y se producía en cualquier lugar de las ciudades o de los pueblos. Las coacciones y amenazas eran una práctica diaria en cualquier ámbito de la vida cotidiana y tenía múltiples formas de expresión, pero todos ellos con la doble finalidad de atemorizar y humillar a los oponentes políticos.

Los informes favorables sobre conducta político-social, tan necesarios para desarrollar cualquier tipo de actividad, se convirtieron en un medio fundamental de coerción. Eran precisos los avales para la obtención del carnet de conducir, para participar en una oposición de acceso a un puesto de trabajo como maestro, guardia civil, policía; o conseguir cualquier empleo, por humilde que éste fuera. Pero también lo eran para superar

¹³⁴¹ MORENTE VALERO, F., op. cit., pág. 271.

los procedimientos represivos: expedientes de depuración o de responsabilidades políticas, o la obtención de la libertad condicional. Estos informes los realizaban las nuevas autoridades: el gobernador civil, los alcaldes, los comandantes de los puestos de la Guardia Civil, los jefes locales de FET y los párrocos.

Uno de los detalles más característicos del régimen franquista era la publicidad de los castigos de todo tipo, ya fueran económicos o físicos. Para el Nuevo Estado el escarmiento era tan importante como la función sancionadora. Las multas y sanciones eran publicadas en los diarios *-El Adelantado* y el *BOP-* con fines ejemplarizantes, y los consejos de guerra y fusilamientos eran de entrada libre, aunque de éstos no había información en la prensa de Segovia.

Un instrumento fundamental de la violencia ideológica fue el Ministerio de Educación, cuyo objetivo educativo se centró fundamentalmente en la pérdida de la memoria histórica. Fernández Buey explica que *“borrar las huellas de la resistencia a los poderes establecidos ha sido siempre el movimiento previo a la consecución del consenso social después del uso de la fuerza o cuando esta ya no resulta necesaria”*¹³⁴².

Por último apuntamos un aspecto que sería interesante investigar, pero que es difícil de evaluar numéricamente: las muertes indirectas sobrevenidas como consecuencia del amedrentamiento que provocaban los distintos tipos de represión. Algunos desafectos tuvieron la suerte de no ser ejecutados pero, por el contrario, sufrieron una persecución constante, que no finalizó al tiempo que la guerra. Se produjeron suicidios de personas desesperadas por haber sido despojadas de su puesto de trabajo, de sus bienes, haber padecido palizas en prisión, haber sufrido el fusilamiento de algún familiar, o de las secuelas de las malas condiciones de las cárceles, especialmente alimentación e higiene.

10. 2. Las responsabilidades

El estudio histórico de las formas de violencia empleadas para implantar y consolidar el régimen no quedaría completo sin un análisis de las responsabilidades morales y, por tanto, históricas de los protagonistas centrales y los ejecutores de todo el aparato represivo. La represión fue una acción prevista y calculada por los promotores de la sublevación militar, quienes, conscientes de la fuerza de la oposición que se iban a encontrar enfrente, planearon perfectamente la violencia que debían emplear para vencer esa oposición. Por tanto, la represión tuvo unos primeros responsables en los cabecillas del golpe pero, una vez puesto en práctica, las responsabilidades se centraron en otros sectores de la sociedad: la prensa que preparó el terreno a la sublevación, los jueces civiles que se sometieron a la jurisdicción militar, el Ejército como institución, Falange y otras milicias, la Guardia Civil, las autoridades políticas, la Iglesia y los particulares. Todos ellos cumplieron su papel en la puesta en práctica del dispositivo represor y en su desarrollo.

Desde luego, no se puede alegar que hubiera un determinismo, un destino histórico que marcara el camino de la represión y que sus autores no tuvieron más remedio que llevarlo a cabo. Como apunta Santos Juliá, *“la responsabilidad de los sujetos individuales, de las elites dirigentes de partidos e instituciones, de los que armaron con sus palabras o sus consignas, con sus órdenes y admoniciones, aquellas matanzas, no puede diluirse en la cuenta de las culpas colectivas, que son de todos, y, por eso no son de nadie”*¹³⁴³.

Con referencia a las responsabilidades de la represión, Broué y Témime denuncian que *“casi nadie reclamó su fin, pues sus organizadores, requetés y falangistas, eran también los amos del orden público. Las matanzas de prisioneros se convirtieron en un*

¹³⁴² Citado por NICOLÁS MARÍN, Encarna. *Conflicto y consenso en la Historiografía de la dictadura franquista: una Historia Social por hacer*. En *Historia y fuentes orales*. IV Jornadas, Ávila, 1994, pág. 36.

¹³⁴³ JULIÁ, S., op. cit., pág. 13.

*fenómeno cotidiano (...) La represión estaba organizada y dirigida, justificada por todos, sin exceptuar a las más altas autoridades eclesíásticas*¹³⁴⁴. Los propios falangistas se exculpaban alegando que obraban bajo el mando de las autoridades militares. Vilaplana revelaba que Falange de Valladolid decía por su emisora que *“jamás ha actuado como fuerza de represión, aisladamente, sino con el beneplácito de las autoridades militares constituidas”*¹³⁴⁵. Como explica Reig, *“el terror practicado en zona franquista se ejerció con la aquiescencia y cobertura de sus máximas jerarquías, que incluso incitaban a las masas con sus declaraciones”*¹³⁴⁶.

10 . 2. 1. El Ejército

En las *Bases Técnicas* dictadas por el director de la conspiración, Emilio Mola, podemos comprobar que en la planificación del movimiento militar se preveía la necesaria represión para contrarrestar la fuerza opositora a la sublevación. Es especialmente gráfica la base quinta que decía concretamente: *“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado”*¹³⁴⁷. Desde el 18 de julio, la responsabilidad total y absoluta fue de los militares sublevados, puesto que la primera medida tomada por los insurgentes fue la declaración del estado de guerra, mediante el cual cada jefe militar se hacía con todos los poderes dentro de la jurisdicción correspondiente. De esta manera, los poderes judicial, militar, político y económico eran asumidos por el sector del Ejército que se había levantado contra la legalidad.

Aparte de la finalidad política, la represión servía además de factor de unión entre los máximos responsables de ella. *“Franco -afirma Payne- pensó que no era conveniente reprimir los deseos sanguinarios de sus seguidores, sino más bien utilizarlos como uno de los elementos cohesionadores del movimiento rebelde. La violencia servía para aniquilar a los enemigos del nuevo régimen y además para que gran cantidad de nacionalistas, por haber participado en tan monstruosa orgía, se sintieran irrevocablemente unidos”*¹³⁴⁸.

Franco, Queipo, Mola y el resto de jefes de la sublevación, ostentaban el poder real y eran quienes disponían de verdadera capacidad de imponer su voluntad e influir en sus correligionarios. Y fueron precisamente ellos, los primeros en ejercer la política del terror, a través de las amenazas y los hechos, como hemos explicado en capítulos anteriores. Salas Larrazábal corrobora esta afirmación

En la zona nacional había control de la situación y la actividad de las milicias quedaba limitada por la autoridad militar. Donde ésta fue cruel la extensión de la represión fue mayor, donde tendió a la benignidad, disminuyó notablemente. La geografía de la represión es mucho menos homogénea en zona nacional, lo que delata una intención menos dirigida. En el centralizado y disciplinado sistema impuesto por los militares sublevados, las atribuciones de las autoridades locales eran mucho más amplias y actuaban con enorme autonomía. En Zamora, Valladolid, Logroño hubo mucha más represión que en Segovia, Soria...¹³⁴⁹.

Aun estando de acuerdo con la relación entre la personalidad del mando militar correspondiente y la represión ejercida en la zona bajo su jurisdicción, no podemos compartir la idea de Salas de que *“la intención (de la represión franquista) es menos dirigida”*, es de suponer que comparándola con la represión del bando republicano. Una

¹³⁴⁴ BROUE, P. y TEMIME, T. *La revolución y la guerra de España*. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1977, pág. 210.

¹³⁴⁵ RUIZ VILAPLANA, A. *Doy Fé... un año de actuación en la España nacionalista*. América, Cali, Colombia, 1938, pág. 131.

¹³⁴⁶ REIG TAPIA, A., op. cit., pág. 135.

¹³⁴⁷ BERTRAND GÜELL, F., op. cit., pág. 123.

¹³⁴⁸ PAYNE, Stanley G. *Los militares y la política*. Ruedo Ibérico, París, 1968, pág. 362.

¹³⁴⁹ SALAS LARRAZABAL, R., op. cit., pág. 382.

cosa es que hubiera distintas gradaciones en cuanto a la represión, dependiendo del mando militar correspondiente, y otra bien distinta que todos los jefes militares sublevados comulgaran de las mismas ideas ya apuntadas: represión de clase, castigo a los trabajadores reivindicativos, “*extirpar los males de la patria*” -personificados en los adversarios políticos-, el exterminio, la eliminación del adversario y la ejecución de la venganza.

En pleno apogeo represor de la retaguardia sublevada llegó un telegrama de Mola al Estado Mayor de la VII División, fechado el 22 de agosto de 1936: “*prohíban de forma terminante que falangistas o fuerzas similares practiquen detenciones sin orden escrita y cometan actos de violencia, pues estoy dispuesto a castigar severamente, en juicio sumarísimo, los crímenes que se cometan, llegando incluso a la disolución de las agrupaciones que los realicen. De esta forma dará usted conocimiento a los jefes de las fuerzas movilizadas civilmente*”¹³⁵⁰. No conocemos la verdadera intención de este mensaje: si era acabar realmente con las ejecuciones sumarias que efectuaban los falangistas, o era una declaración de cara a la galería. Desde luego, si Mola pretendía suprimir los fusilamientos ilegales, no lo consiguió, puesto que éstos continuaron en la zona controlada por el Ejército del Norte. De esta comunicación no hay constancia en la provincia de Segovia; es más, desde esta fecha todavía fueron ejecutados sumariamente otros 72 adversarios políticos, la mayoría de ellos a manos de falangistas.

Ni el gobernador militar, coronel Tenorio, ni el gobernador civil, comandante España, hicieron nada por frenar o impedir la represión, al menos hasta septiembre de 1936, pues la única nota que se ha encontrado para poner fin a estos modos de actuar de los falangistas es la Circular de 14 de septiembre de 1936 del gobernador civil. Podría tratarse de un modo de pretender acabar con la represión que estaba afectando a toda la provincia, o por el contrario, acabado ya el tratamiento de “choque” realizado en los *momentos de patriótica confusión*¹³⁵¹, se daba por finalizada la primera fase de represión sumaria. Si el comandante España no estaba de acuerdo con estas prácticas debía haber publicado antes la circular; de haber tenido voluntad de acabar con la represión, la hubiera cortado en el mismo mes de agosto, cuando la ola de terror recorrió toda la provincia. Además, era él quien firmaba las órdenes de traslado de presos y era de dominio público lo que a éstos les ocurría.

Dicha circular encargaba a los alcaldes, como “*representantes legítimos*” de la autoridad militar la responsabilidad de hacer cumplir las normas de orden público, “*prohibiendo las detenciones por individuos aislados ni por unidades de Milicias Armadas (Falange, Requetés, Juventud de Acción Popular y Somatenes) sino en los casos previstos en el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que confiere a cualquiera persona facultad para detener*”¹³⁵².

La responsabilidad del Ejército como institución en las labores represivas no se limitaba a las ejecuciones sumarias, pues eran los integrantes de los tribunales de los consejos de guerra, imponían las sanciones en los procedimientos de responsabilidad civil,

¹³⁵⁰ Citado por PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María. *La guerra civil en la ciudad de Valladolid*. Ayuntamiento de Valladolid. 2001, pág. 103, que a su vez cita a CHAVES PALACIOS, Julián. *La represión en la provincia de Cáceres durante la guerra civil (1936-1939)*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, Cáceres, 1995. Escrito reservado del Estado Mayor, sobre telegrama del general jefe del ejército del Norte.

¹³⁵¹ Así denominaba a los primeros meses de guerra el gobernador civil Rodríguez Lafuente en su informe al Gobierno de Burgos, referido anteriormente, en 1938. AGA, 25.01. Leg. 2792.

¹³⁵² BOP, 14 de septiembre de 1936. El subrayado es mío. Los supuestos aludidos de la LEC eran:

1º Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo.

2º Al delincuente in fraganti.

3º Al que se fugare del Establecimiento penal en que se hallare extinguiendo condena.

4º Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al Establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme.

5º Al que se fugare al ser conducido al Establecimiento o lugar mencionados en el número anterior.

6º Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.

7º Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.

integraban los tribunales de responsabilidades políticas y controlaban las jurisdicciones especiales: Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo.

10. 2. 2. Las autoridades civiles. La colaboración de los alcaldes en la represión

A los alcaldes se les hizo partícipes de la represión sobre los oponentes desde el principio de la contienda. El Gobierno de Burgos descargó sobre las autoridades locales gran parte de la responsabilidad represora en todos los ámbitos. Eran los delegados de las autoridades militares y los encargados de llevar el régimen a todas las localidades de España. Como el método empleado por las autoridades nacionales para llevar a cabo la consolidación del régimen era a base de violencia, ellos tenían que seguir los mismos caminos. No todos los alcaldes colaboraron de buen grado, prueba de ello eran las continuas amenazas de los gobernadores civiles y las numerosas multas impuestas a ediles de distintas localidades por su poco celo en hacer cumplir las normas.

En un tema fundamental en el que el Gobierno Civil debía incidir expresamente era en la depuración de los cargos públicos de los ayuntamientos, para evitar que exmilitantes o simpatizantes del Frente Popular ostentaran cargos públicos. Fueron dictadas varias circulares recordando las obligaciones de los alcaldes y concejales para que denunciaran a compañeros de corporación de significación republicana.

Por otro lado, los ayuntamientos debían depurar también a sus empleados, en aplicación del D. 108. Pero los alcaldes no parecían estar muy convencidos de esta labor, y fueron necesarias varias normas para obligar a realizarla: la Orden de Presidencia de la JTE, de 9 marzo y una circular del gobernador civil en abril de 1937, en la que ya había una *“seria advertencia”* por parte de Mirete de que exigiría *“responsabilidad personal a los concejales de los ayuntamientos que incurran en censurable negligencia en el cumplimiento de la misma, que ordeno tenga lugar con la máxima prontitud”*¹³⁵³.

En la depuración de los docentes, desde la Orden de 19 de agosto de 1936¹³⁵⁴ se encomendaba a los alcaldes realizar la primera criba de los maestros encargados de la enseñanza impartida en sus municipios. Los alcaldes pasaron así a ser los primeros agentes depuradores. Su único informe desfavorable era suficiente para que el maestro informado fuera destituido de su puesto por el rector de la Universidad de Valladolid. A la finalización de la guerra, su papel en la depuración de los maestros, no había decaído, pues en febrero de 1939, el gobernador civil les remitió un exhaustivo cuestionario sobre las escuelas, número de ellas, propietario (privado, religioso o no; o público), matrícula y asistencia media y *“concepto que merecen los maestros: puntualidad y métodos o prácticas que siguen en la enseñanza con relación a los sentimientos que inspira el GMN”*¹³⁵⁵.

10. 2. 3. El papel de la Magistratura

No se ha escrito lo suficiente respecto a la actitud de instituciones como la Justicia que debían o podrían haber suavizado la represión. Jueces, fiscales y abogados -en su papel de representantes de la Justicia- deberían haber aprovechado su función y reconocimiento social para interceder por sus conciudadanos ante los militares. Además, los jueces, fueran de paz o de instrucción, tenían la obligación legal de efectuar los levantamientos de los cadáveres que aparecían en la vía pública. Cuando actuaron -que no fue en todos los casos de ejecuciones indiscriminadas- no instruyeron ninguna

¹³⁵³ BOP, 22 de abril de 1937. Cir. Gob. Civ. recordando la O. de Presidencia de la JTE, de 9 de marzo de 1937.

¹³⁵⁴ BOP, 26 de agosto de 1936.

¹³⁵⁵ BOP, 8 de febrero de 1939.

investigación para esclarecer las muertes, descubrir y, en su caso, capturar y condenar a los autores; aunque se sabía perfectamente quiénes eran los ejecutores y que no iban a ser ni siquiera procesados. Las ejecuciones sumarias no tenían ninguna base legal, no eran fruto de una sentencia tras un consejo de guerra; por tanto, debían haber sido investigadas. Pero ni la Audiencia Provincial, organismo superior de Justicia, ni los jueces de Primera Instancia encargados directamente de la instrucción de los sumarios, ni los jueces municipales que tenían la obligación del levantamiento del cadáver encontrado iniciaron acciones tendentes al esclarecimiento de las ejecuciones arbitrarias.

La pasividad se tornó en negación de lo evidente en el caso del juez municipal de La Losa, que informó al Juzgado de Primera Instancia de Segovia alegando no saber nada de los cinco cadáveres aparecidos en su término municipal. Se justificaba el juez en que La Losa estaba enclavada en zona de guerra y que *“como ocurre en todas las líneas de combate, habría muertos, entre los cuales bien podría encontrarse el de Abel de Pablos, (...) sin que este juzgado tuviera conocimiento de una manera concreta del hallazgo de los cadáveres”*¹³⁵⁶. Es muy difícil creer que este hombre no se enterara de la recogida de los cinco cadáveres –en el término municipal de su jurisdicción– de los vecinos de Otero de Herreros, localidad distante 6 kilómetros de La Losa, por lo que, muy probablemente, incluso conociera a las víctimas.

Los distintos estamentos judiciales se limitaron –siempre que actuaron– al levantamiento del cuerpo y a la orden de enterramiento en el Cementerio Municipal del término donde fue encontrado o, incluso, en el mismo lugar de aparición del cadáver. Más chocante es el caso en que sí actuó el juez municipal para el levantamiento y posterior enterramiento de los cadáveres, pero después no realizó la preceptiva inscripción en los libros del Registro Civil; así ocurrió en Navas de San Antonio con los fusilados de El Espinar¹³⁵⁷.

En los otros ámbitos de la represión, la justicia ordinaria no pudo actuar de modo independiente debido al monopolio del Ejército, que había acaparado todos los resortes judiciales y creado jurisdicciones especiales –como la de responsabilidades políticas– en las que la participación de los miembros de la carrera judicial estaba contrarrestada por los representantes del Ejército y Falange. Pero, en cualquier caso su implicación en las labores represivas no es desdeñable. Sí pasó a primer plano represivo con la reforma de 1942 de la Ley de Responsabilidades Políticas, cuando las audiencias provinciales asumen la liquidación del procedimiento. Hasta entonces, tanto en los procesos de responsabilidad civil como en los de las políticas, el papel de los Juzgados civiles se limitaba –y no era menos importante– a las diligencias de embargo y subasta de bienes incautados, procesos ambos que también estaban viciados, como explicamos en el caso de los autobuses de Rufino Bermejo subastados por el hijo del competidor Galo Álvarez y adjudicados a un empleado de su padre, que, lógicamente, actuaba en nombre de su patrón.

10. 2. 4. La colaboración de los particulares

Desde el Nuevo Estado, las llamadas a la colaboración de los ciudadanos de a pie eran continuas, empleando todos los medios de comunicación y pretendiendo su concurso para todos los campos de la represión. Había un gran interés por parte del Gobierno de Burgos por implicar a todos en la labor depuradora de la sociedad, incitando a que cualquier ciudadano denunciara a cualquier sospechoso. Este interés no finalizó con la guerra; al contrario, el 2 de abril de 1939, desde Radio Nacional se proclamó:

¹³⁵⁶ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 299, 2, 1938, Exp. nº 6 de Abel de Pablos. Informe del j. mun. de La Losa al Jgdo. de 1ª Ins. de Segovia, fechado el 17 de septiembre de 1938. El subrayado es mío.

¹³⁵⁷ Eduardo García, hijo del juez municipal de Navas de San Antonio, Julio García, recuerda que su padre fue avisado para el levantamiento de los cadáveres, acudió y procedieron a enterrar en el mismo lugar los cuerpos; pero en el Registro Civil de la localidad no figuran los enterramientos porque no se efectuó la correspondiente inscripción.

Españoles, alerta: la paz no es un reposo cómodo y cobarde ante la historia: la sangre de los que cayeron por la patria no consiente el olvido, la esterilidad ni la traición. Españoles alerta. España sigue en pie de guerra contra todo enemigo del interior o del exterior¹³⁵⁸.

Es indudable que un sector importante de los españoles participó y colaboró con el régimen en las labores represivas, pero hay que tener muy en cuenta la magnitud de la represión llevada a cabo con extrema violencia que consiguió el objetivo de la paralización por el terror, lo que contribuyó enormemente a la consecución de ese “consenso”. Aunque Sevillano explica perfectamente que al *“alto grado de coacción ejercida correspondió una pasiva y resignada aceptación, no habiendo verdadero consenso porque no hubo participación”*¹³⁵⁹.

Para comprender la relación entre legitimidad de un régimen como el que instauró Franco y el ejercicio de la violencia anotamos las palabras de González Calleja que nos parecen esclarecedoras. Para él dicha relación

forma un continuum en cuyo extremo figuraría un hipotético Estado donde todos aceptasen la legitimidad del sistema político-social, el gobierno, la ley y su aplicación. No habría violencia, y la fuerza existiría más como capacidad que como acción. En el otro extremo se situaría un Estado ilegítimo, una tiranía que impusiera su voluntad a un pueblo que, sin excepción rechazase la legitimidad del régimen, sus orígenes, actos y fines, pero cuyo dominio se basara en una capacidad para la violencia (amenaza de coerción) tal que hiciera imposible toda resistencia. El talón de Aquiles de ese régimen radicaría en que la única fuente de legitimidad sería el poder físico del gobernante. La noción de un régimen autoritario capaz de gobernar sin apoyo es un mito, ya que ningún sistema político puede operar sin legitimidad. Cualquier régimen, por muy estrechos que sean sus apoyos, sus medios de acceso al poder o su ideología, debe construir una base de consenso entre aquellos grupos que tienen la capacidad de imponer altos costes y riesgos a través de la acción concertada si son ignorados de forma excesivamente arrogante. Entre la completa identificación o la aquiescencia bajo coacción, hay un amplio espectro de actitudes hacia la autoridad política que varía de persona a persona en cada sociedad y en cada momento.¹³⁶⁰

En la Circular de la Comisión de Cultura y Enseñanza de 7 de diciembre de 1936, se llegaba a la amenaza de escarnio público a los que no colaboraran en la labor represora: *“También se ha de combatir y de hacer público, para perpetua vergüenza del que en tal falta de ciudadanía incurra, el nombre de quienes aleguen indebidamente desconocer los hechos o las personas sobre los que se interesan informes”*¹³⁶¹.

El gobernador civil Pérez Mirete apelaba al deber ciudadano de los particulares para denunciar a concejales o alcaldes que hubieran militado en el Frente Popular y, todavía en febrero de 1937, permanecieran en sus cargos. Este deber sería de mayor exigencia a cuantos ejercían funciones de la administración o eran agentes de la autoridad: alcaldes, concejales, maestros, comandantes de la Guardia Civil y párrocos. Mirete incluso llegó a premiar, por un lado, a los segovianos que denunciaran casos de atesoramiento, pues, una vez debidamente comprobados, serían recompensados *“en consonancia con la importancia y utilidad de su confidencia”*¹³⁶²; y, por otro, a condenar a los que murmuraran del alza de los precios sin cumplir la *“obligación de denunciar”* ante las autoridades los abusos que conocían, o a los propietarios de las salas de proyecciones que tenían la obligación de denunciar cualquier infracción de las disposiciones sobre censura de películas de cine, bajo

¹³⁵⁸ *El Adelantado*, 2 de abril de 1939.

¹³⁵⁹ SEVILLANO CALERO, Fco. *Cultura, propaganda y opinión en el primer franquismo*. En *El primer franquismo*, AYER, nº 33. 1999, pág. 159.

¹³⁶⁰ GONZÁLEZ CALLEJA, E., op. cit., pág. 183.

¹³⁶¹ BOE, 10 de diciembre de 1936.

¹³⁶² BOP, nº extr. 16 de diciembre de 1937.

pena de multa o cierre del local¹³⁶³.

Los paisanos debían estar alerta y denunciar a vecinos, compañeros de trabajo, o desconocidos “sospechosos” que vieran por la calle. Entre los enemigos de Franco que nombraba Pérez Mirete, estaban **“los cobardes en denunciar a los malos españoles”**. Había que denunciar sin ningún reparo ni rubor. Ya analizamos en capítulos anteriores la intervención de unas personas acusando a otras, las denuncias anónimas -amparadas por las autoridades- que originaron ejecuciones, prisión, depuración, incautación, en fin, represalias que sin la colaboración ciudadana no se hubieran podido llegar a producir. En estas situaciones de miedo generalizado, el miedo y el terror a lo que les pudiera ocurrir hizo que muchas personas, que en otras condiciones no hubieran colaborado, denunciaran para no ser señaladas o perseguidas por desafectas. Pero, como es natural, también hubo muchas personas que estaban encantadas con la posibilidad de denunciar con total impunidad cualquier tipo de actividad de alguien con quien tuvieran alguna enemistad.

Las responsabilidades de la represión física también alcanzan a algunos españoles anónimos. El papel de los particulares en las ejecuciones ilegales era fundamental a la hora de denunciar, señalar a las víctimas, indicar el domicilio o dónde se encontraban escondidos. En muchos casos, los ciudadanos de a pie, vecinos de las víctimas, quedaban paralizados por el terror y no salían de casa por temor a ser llevados también en las sacas, (testimonios de Cabezuela así lo confirman). Pero en otros casos, incluso animaban a los verdugos. Honorio Muñoz cuenta que en Riaza, cuando se llevaban a su padre -hacia la 1 de la madrugada- *“había gente en la plaza tomando el fresco, nadie hizo nada, y se imaginaban donde iban y a qué. Algunas mujeres animaban a los falangistas para que mataran a más gente”*¹³⁶⁴. En Segovia a raíz del bombardeo republicano del 14 de agosto se formó una manifestación, en la que participaron muchas mujeres que pedían venganza personificada en los presos.

En los sumarios militares se han confirmado, por un lado, denuncias anónimas en la causa 689/36 sobre los sucesos de Coca y, por otro, particulares que se ofrecieron a testificar en contra de los procesados de la causa 109/36, de El Espinar. Además, el único modo de conocer qué había ocurrido en las localidades durante la ausencia de la Guardia Civil en los primeros días de contienda era que los habitantes del pueblo denunciaran a sus propios vecinos. A lo largo de la guerra, se practicaron innumerables detenciones originadas por denuncias privadas y secretas. Los sumarios que hemos estudiado por declaraciones o expresión de ideas eran iniciados por este tipo de delación, porque los comentarios objeto de persecución se habían realizado en ambientes privados o, si en establecimientos públicos, no había presencia policial o de miembros de las milicias.

En el procedimiento de responsabilidades políticas se preveía oficialmente la denuncia privada como una de las vías para incoar los expedientes. Con todo, la documentación estudiada sobre la provincia de Segovia demuestra que estas iniciativas representan un porcentaje muy limitado, lo que da a entender que la perversidad del régimen fue superior a la de muchos de los segovianos, al menos en este apartado represivo. Además, en el anuncio oficial de apertura de expediente ya se obligaba a declarar a cuantas personas tuvieran conocimiento de la conducta política y moral del inculpado, así como de los bienes que poseyera, lo que suponía una clara incitación a la denuncia del vecino.

La depuración administrativa afectó a buen número de segovianos que habían sido denunciados o informados en los expedientes por sus propios compañeros de trabajo o vecinos envidiosos que creían estar haciendo un servicio a la patria. Hemos comprobado el caso curioso de una persona que escribió una carta al juez instructor de la Diputación Provincial, en la que se ofrecía voluntariamente a informar sobre la desafección de un

¹³⁶³ BOP, 22 de diciembre de 1937, O. Sec. Gen. SE Jefe del Estado de 10 de diciembre de 1937.

¹³⁶⁴ Testimonio de Honorio Muñoz.

empleado. En el Ayuntamiento de la capital también se ha constatado una denuncia privada.

Para evitar la posibilidad de que miembros de la zona republicana se camuflaran en retaguardia franquista, se dieron continuas normas para que los ciudadanos colaboraran informando a las autoridades. Por ejemplo, una circular del gobernador civil imponía la obligación de dar los nombres de los forasteros acogidos en las casas, fondas y otros establecimientos de huéspedes¹³⁶⁵. Más adelante, se recordó a los dueños de las mismas la orden de dar cuenta a alcaldes o Comisaría de Vigilancia de *“cuantas personas, grado de parentesco, cuando llegaron, motivos, etc. tienen acogidos en sus casas”*¹³⁶⁶.

Estas órdenes creaban un estado de tensión permanente en la retaguardia, para que todos estuvieran atentos ante cualquier posibilidad o síntoma de espionaje. La prensa publicaba constantemente el anuncio decretado por las autoridades de Prensa y Propaganda: *“Vigilad todos el espionaje enemigo y detened y denunciad a los traidores”*¹³⁶⁷.

Poco después, el gobernador, comandante España, recordaba este dato recomendando a los segovianos que estuvieran atentos a conversaciones y noticias que les llegaran de personas sospechosas -especialmente cuando se tratara de personas extranjeras o desconocidas, cuyos medios de vida no estuvieran claros- y las comunicaran cuanto antes a la Comisaría, para que ésta practicara las averiguaciones correspondientes. Escribía el gobernador: *“es indispensable descubrir a todas aquellas personas que puedan proporcionar informes a los rojos y hacer caer sobre ellos la gravísima responsabilidad y el peso de la ley”*¹³⁶⁸.

En cualquier caso, la colaboración de los particulares en la represión a través de la dinámica de las denuncias privadas tiene su explicación, en palabras de Conxita Mir, en un contexto de ruptura de las estructuras políticas clásicas, la denuncia y la delación se convirtieron en un nuevo código político por todos inteligible. A través de él se procedió a la politización de la sociedad y por medio de su práctica se avanzó en la creación del consenso hacia un régimen necesitado de adhesiones inquebrantables. La denuncia ayudó a la afirmación de estas cohesiones, y aunque inicialmente las autoridades las consideraran escasas, pronto los mismos responsables del orden público se lamentaban de disponer de pocos medios para atender adecuadamente todos los asuntos puestos en su conocimiento¹³⁶⁹.

10. 3. La especial responsabilidad de la Iglesia en la legitimación de la violencia

El papel de la Iglesia Católica española durante la guerra civil fue casi unánime (salvo algunas personalidades y algunos sectores del clero vasco y catalán) de apoyo absoluto a los sublevados y posteriormente al régimen impuesto por los vencedores cuando la contienda finalizó. Desde los autores contemporáneos al conflicto a los más actuales, todos han coincidido en el alineamiento absoluto de la jerarquía con la causa del alzamiento militar. Esta toma de postura se inició con el respaldo a la acción del 18 de julio contra la legalidad republicana. Es ésta una responsabilidad histórica que la Iglesia española como institución se ha negado a reconocer hasta hoy.

¹³⁶⁵ *El Adelantado*, 12 de diciembre de 1936. Cir. Gob. Civ.

¹³⁶⁶ *BOP*, 17 de febrero de 1939. Cir. Gob. Civ.

¹³⁶⁷ *El Adelantado*, 4 de diciembre de 1936.

¹³⁶⁸ *El Adelantado*, 10 de diciembre de 1936.

¹³⁶⁹ MIR CURCO, Conxita. *Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra*. Milenio, Lleida, 2000, pág. 286.

10. 3. 1. Respaldo ideológico y moral a la sublevación

La Iglesia tuvo un papel fundamental en la justificación de la violencia en el campo insurgente. Justificando la propia sublevación que originó la violenta represión, bendiciéndola y arrastrando con su importante influencia en los sectores católicos de la sociedad. Sin embargo, el 17 de julio nadie había pensado en una guerra de religión ni en una “cruzada”. La sublevación, explica Tuñón de Lara, *“había sido contra el Gobierno de la República. Ni en los bandos, ni en los manifiestos de los generales sublevados, ni tampoco en el decreto de constitución de la Junta de Defensa Nacional, apareció ninguna alusión a motivos religiosos”*¹³⁷⁰. La Iglesia, que no había participado directamente en la preparación del movimiento, fue siempre beligerante contra la legislación progresista de la República y, ya iniciada la guerra, optó claramente por los sublevados. Al tomar partido en “nombre de Dios” convirtió la sublevación política en guerra de religión.

Uno de los primeros jerarcas de la Iglesia en hacer pública su postura de adhesión al movimiento militar fue el obispo de Segovia, Luciano Pérez Platero, antirrepublicano militante. Este detalle no lo olvidó Franco, que en la posguerra nombró a Platero arzobispo de Burgos. El prelado de Segovia justificaba la insurrección en la pastoral de 14 de agosto de 1936: *“Triste, tristísimo es que haya sido necesario encender la hoguera de la guerra civil y llegar a esta situación para librarnos de la hecatombe y de la barbarie que se cernían sobre el suelo de España”*¹³⁷¹. Con esta carta tomaba parte activa por el bando sublevado: *“os rogamos que humilléis a nuestros enemigos, los enemigos jurados de vuestro nombre santísimo y de vuestra santa Iglesia, y que inspiréis a nuestros caudillos y jefes militares acierto en sus planes y fortaleza en la ejecución para llevar a cabo la empresa salvadora que tan desinteresada y gloriosamente ha empezado”*¹³⁷².

Una de las primeras medidas dictadas por Platero de apoyo al bando sublevado fue ordenar las solemnes rogativas que diariamente se celebraban en la catedral para implorar *“la protección del Altísimo para nuestros ejércitos y el reflorecimiento de la Patria”*. Para su óptimo desarrollo prescribía el obispo que todos los sacerdotes residentes en Segovia *“sin excepción alguna asistan puntualmente (...) colocándose en el lugar destinado a los Presbíteros”*. Con el fin de asegurar la asistencia advertía a los párrocos que avisaran diariamente al obispado después del acto de si no había acudido algún cura de los residentes en la parroquia, para *“sancionar la falta”*. Por último pedía que con el mismo fin se hicieran preces en las parroquias *“aprovechando la hora del rosario u otra”*¹³⁷³.

Más adelante advirtió, *“con carácter preceptivo”*, a todos los párrocos y rectores de las iglesias que convocaran al pueblo cristiano todos los días, *“sin omitir ni uno solo, mientras duren las actuales circunstancias, para elevar preces al Todopoderoso a fin de obtener el triunfo total y rápido de España en esta guerra contra la barbarie y el ateísmo”*¹³⁷⁴.

En las partidas de defunción de las parroquias se reflejaba perfectamente la alianza política y religiosa de los sublevados, pues bien pronto comenzó a figurar en las causas de muerte la doble motivación de los combatientes nacionalistas. En principio aparecía el comentario poco elaborado *“muerto a causa de balazos recibidos en defensa de la religión y del orden”*, para más adelante anotar el que sería oficial *“peleando por Dios y por la Patria”*¹³⁷⁵.

¹³⁷⁰ TUÑÓN DE LARA, M., op. cit., pág. 383.

¹³⁷¹ BOOS, nº 15. 14 de agosto de 1936. Pastoral: *El deber de todos en la hora presente*.

¹³⁷² Ver nota anterior.

¹³⁷³ Carta dirigida a los párrocos, fechada el 19 de agosto de 1936. Arch. Epis. Correo de salida, 1936.

¹³⁷⁴ BOOS, nº 17. 15 de septiembre de 1936.

¹³⁷⁵ Arch. Epis. Cpta. de partidas de defunción de Segovia y El Espinar, 1936. Corresponden respectivamente a una anotación en El Espinar del 25 de julio de 1936 y otra en la parroquia de San Esteban de la capital, el 16 de septiembre de 1936.

Aunque el Papa Pío XI también apoyaba al bando sublevado, justificándolo como defensor de *“los derechos y el honor de Dios y de la Religión, es decir, los derechos de la conciencia, primera condición y la más sólida base de todo bienestar humano y social”*,¹³⁷⁶, contrariamente al clero español, expresaba su dolor *“por la matanzas entre hermanos”*¹³⁷⁶, es más, hablaría a la finalización de la guerra de la reconciliación de los bandos de españoles enfrentados. A pesar de su opinión de que los republicanos seguían el camino equivocado, el pontífice, al menos, no pretendía su *“vencimiento y la humillación definitiva y completa de las turbas facinerosas al servicio del sindiosismo y del infierno”*¹³⁷⁷, como pedía el obispo Platero.

El obispo de Segovia, además de justificar la guerra, destacaba la importancia de la contienda, comparándola con la Reconquista:

Por Dios y por la patria. Que estos son con toda verdad los supremos intereses, que se ventilan en esta guerra, desesperada y fratricida, cien veces más imperiosa y más trascendental y más santa que la que sostuvieron nuestros mayores, durante siete siglos, contra los sectarios de Mahoma por la reconquista de nuestro suelo. Trátase de decidir (...) si hemos de ser un pueblo religioso, justo, trabajador (...) o un pueblo degradado, inferior y salvaje...¹³⁷⁸.

Es llamativa la comparación de la guerra civil con la Reconquista equiparando aquélla con la lucha de la Edad Media en que se combatía en defensa del cristianismo contra los musulmanes mientras que ahora eran aliados en una nueva guerra de religión, católicos y musulmanes luchando contra, decían, los “Sin Dios”¹³⁷⁹. Platero pedía la participación de todos en la pelea: *“Todos debemos ser soldados, porque todos podemos serlo. (...) Todos tenemos un sitio que llenar, y todos, cada cual en su medida, debemos cooperar al éxito feliz de tan magno empeño. (...) Nadie puede ser neutral en esta contienda”*¹³⁸⁰.

Pero fue en la *“Carta colectiva de todos los obispos españoles ante la guerra”*, en agosto de 1937, donde el respaldo a la sublevación de la Iglesia Católica en su conjunto se hizo oficial. Después de enumerar todos los problemas originados por *“los legisladores de 1931”*, la jerarquía acusaba al

poder ejecutivo del Estado con sus prácticas de gobierno, los que se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional, y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el país. (...) Nuestro régimen político de libertad democrática se desquició, por arbitrariedades de la autoridad del Estado y por coacción gubernamental que trastocó la voluntad popular...¹³⁸¹.

La jerarquía eclesiástica justificaba la acción militar en las doctrinas de Santo Tomás sobre el *“derecho a la resistencia defensiva por la fuerza”*, pues *“nadie podrá negar que al tiempo de estallar el conflicto, la misma existencia del bien común, -la religión, la justicia, la paz- estaba gravemente comprometida”*¹³⁸².

La colaboración de la Iglesia se ofreció en muy diversos campos: directamente en el apoyo al reclutamiento, con los servicios religiosos en el frente, aportando los conceptos religiosos: *mártir, héroe y cruzada*, además de la campaña internacional, con el apoyo de la

¹³⁷⁶ BOOS, 14 de septiembre de 1936. *Discurso de SS el Papa Pío XI, a los españoles refugiados en Italia*.

¹³⁷⁷ BOOS, nº 18, 30 de septiembre de 1936. *Exhortación Pastoral para el mes de octubre*.

¹³⁷⁸ Ver nota anterior.

¹³⁷⁹ En el BOOS, nº 22, de 30 de noviembre de 1936 aparecía el siguiente titular: *La propaganda atea a través del mundo*.

¹³⁸⁰ *Acuerdo de dos internacionales de los Sin-Dios*.

¹³⁸¹ BOOS, nº 18, 30 de septiembre de 1936.

¹³⁸² BOOS, nº 15, 16 de agosto de 1937. *Carta colectiva de todos los obispos españoles ante la guerra*, págs. 258-285.

¹³⁸² Ver nota anterior.

Santa Sede. A la guerra se le dio el rango de Cruzada por parte de la Iglesia que apadrinó a los combatientes del bando sublevado. En palabras de Franco:

nuestra guerra es una Cruzada de los hombres que creen en Dios, que creen en el alma humana, que creen en el bien, en el ideal, en el sacrificio, que luchan contra los hombres sin fe, sin moral, sin nobleza (...) nuestra guerra es una guerra religiosa: Nosotros, todos los que combatimos, cristianos o musulmanes, somos soldados de Dios y no luchamos contra otros hombres, sino contra el ateísmo y el materialismo, contra todo lo que rebaja la dignidad humana, que nosotros queremos elevar, purificar y ennoblecer¹³⁸³.

Bahamonde ha afirmado rotundamente que el clero era *“el más firme sostén de la España nacionalista”* explicando por qué en zona republicana se atacaba a los religiosos: *“...el clero ha sido perseguido, no en su calidad de representante de Cristo, sino por sus actos contrarios en absoluto a su ministerio y por su participación decidida en el conflicto en contra del pueblo. No ha sido neutral, ha sido beligerante y como tal se le ha tratado”*¹³⁸⁴.

10. 3. 2. Participación y ocultamiento de la represión. Necesidad de la Violencia

Para la Iglesia y sus cabezas visibles, la violencia era necesaria y obligada por el anticlericalismo que imperaba en el bando republicano. *“La violencia no se hace en servicio de la anarquía, sino lícitamente en beneficio del orden, la Patria, la Religión”* dijo a comienzos de agosto 1936 Rigoberto Domenech, arzobispo de Zaragoza¹³⁸⁵.

Como bien explica Casanova, *“la violencia ejecutada en nombre de valores superiores como la Patria y la Religión, con mayúsculas, facilitaba mucho las cosas a la hora de reprimir; pues por un lado, identificaba el orden social con la religión”*¹³⁸⁶. Ésta era la opinión que habían mantenido muchos obispos durante la República. El cardenal Segura, recién caído el rey en 1931, ya advertía que *“cuando el orden social está en peligro, cuando los derechos de la religión están amenazados, es deber de todos defenderla y salvarla”*¹³⁸⁷. Por otro lado, si lo que se defendía era tan importante como la institución representante de Dios en la tierra, el derramamiento de la sangre de los “sin Dios” era justo y legítimo, consecuencia de una guerra santa de reconquista espiritual.

Gabriel Jackson ha escrito que *“la llamada ‘gente de orden’ asesinaba en nombre de Dios y le rendía culto con las manos ensangrentadas”*¹³⁸⁸. Por ejemplo, los falangistas que ejecutaron a cinco vecinos de Navas de Oro llevaban un escapulario de la Virgen del Carmen en las pistolas¹³⁸⁹. Es especialmente triste constatar que, como explica Jackson, *“la cobertura que la Iglesia ofreció a estos actos, salvo honrosísimas y muy contadas excepciones, confiere un especial dramatismo a la violencia ejercida en zona franquista”*¹³⁹⁰. Los falangistas y requetés que practicaban las sacas asistían posteriormente a misa, u otros oficios religiosos, sin ningún tipo de remordimiento. Clara muestra fue la doble saca del 15 de agosto de 1936, realizada en Pamplona respectivamente por falangistas y requetés. Como quiera que fuese muy numerosa la solicitud de confesiones por los que iban a ser fusilados, los sacerdotes abreviaron dando

¹³⁸³ Franco, a *L’Echo de Paris*, el 16 de noviembre de 1937. En *Palabras del Caudillo*, 19 de abril - 7 de diciembre de 1942, Editora Nacional, Madrid, 1943, págs. 453-454.

¹³⁸⁴ BAHAMONDE Y SÁNCHEZ DE CASTRO, A., op. cit., pág. 80.

¹³⁸⁵ Recogido por CASANOVA, J. en JULIÁ, Santos y otros, op. cit., pág. 113.

¹³⁸⁶ CASANOVA, J. en JULIÁ, S., op. cit., pág. 113.

¹³⁸⁷ CASANOVA, ver nota anterior.

¹³⁸⁸ JACKSON, G. Citado por REIG TAPIA, A., op. cit., pág. 53.

¹³⁸⁹ Testimonio anónimo de Navas de Oro.

¹³⁹⁰ De JACKSON, citado por REIG TAPIA, A., op. cit., pág. 53.

absoluciones en masa, para que los requetés volvieran a tiempo de la procesión que estaba entrando en la catedral.

El obispo de Segovia condenaba los excesos del bando republicano, que describía como *“un reguero de crímenes atroces y una estela negrísima de vandalismo y de barbarie”*¹³⁹¹, en tanto que silenciaba los que se cometían en su propia diócesis, que él conocía perfectamente puesto que en muchas de las ejecuciones asistían sacerdotes para confesar a las víctimas. Diversos testimonios hablan de curas en las camionetas de Cabezuela y Zarzuela, y en las sacas de San Ildefonso, del 30 de agosto en Segovia y 8 de septiembre en Cuéllar.

En Segovia, incluso, existen testimonios sobre la actuación de curas vestidos de falangistas, participando directamente en las labores de represión. Algunos eran descubiertos por llevar la sotana debajo del uniforme falangista, y otros dejaban al aire la tonsura cuando se quitaban la gorra¹³⁹². Vecinos de Navas de Oro dicen que el jefe de la escuadra de falangistas de Olmedo era un fraile.

La Iglesia en general, o más bien la jerarquía eclesiástica, no hizo nada por evitar los crímenes indiscriminados. No utilizaba su autoridad moral y su unión con el poder militar para frenar la represión. Bahamonde así lo denunciaba: *“Los que hemos vivido en zona nacional sabemos muy bien que los crímenes cometidos, por su magnitud, monstruosidad y constancia son del dominio público, y la Iglesia no ha hecho nada por evitarlo (...) Los autores de estos asesinatos eran bendecidos y alentados por el clero nacionalista”*¹³⁹³.

Jackson ratificaba la colaboración de la Iglesia explicando que

En conjunto la Iglesia cooperó de buen grado. Los obispos y arzobispos aparecían en compañía de las autoridades militares en toda clase de ceremonias públicas. Daban su bendición a las tropas y proporcionaban confesores para las cárceles. En ocasiones los curas párrocos intercedían por las vidas de ciertos individuos condenados a muerte; pero nadie ponía en duda los principios y el grado de extensión de la purga en sí misma. (...) Todas las jerarquías eclesiásticas de la zona nacionalista ratificaron todos los actos públicos del régimen insurgente con su presencia y jamás hicieron críticas en público¹³⁹⁴.

De esta manera procedía el obispo Platero, quien no se limitaba a reflexionar en sus pastorales sobre el espíritu de la guerra, las bondades de los militares y las maldades de los “enemigos”. Parecía, más que un clérigo, un político “mitinero”, pues aprovechaba cualquier oportunidad para arengar y exaltar la colaboración de los segovianos con el Ejército y las milicias nacionales. Así, un día era la entronización del Crucifijo en el salón del Ayuntamiento; otro día era la bendición de una bandera de Falange; otro, la inauguración del Comedor de Caridad, etc. En todos los actos donde asistía, intervenía para exaltar las virtudes del bando sublevado. Sirva como ejemplo la *“Entronización del Sagrado Corazón de Jesús”* en el despacho del gobernador civil de Segovia. En el *Boletín Eclesiástico* apareció la siguiente crónica: *“Con extraordinaria solemnidad y singular devoción, asistieron todas las autoridades y personal de la casa, (...) Ofició el prelado, (...) pronunció vibrantes, patrióticos y elocuentísimos discursos, que fueron escuchados por todos con grande emoción y continuos aplausos”*¹³⁹⁵. No quedó atrás la muestra de patriotismo de Platero en una fiesta emotiva celebrada en el Gobierno Civil, *“representantes militares, entidades locales y numerosísimo público, se izó con solemnidad*

¹³⁹¹ BOOS, nº 18, 30 de septiembre de 1936.

¹³⁹² Testimonios de Urbano Barreno, Felipe Dimas, Agapito Galindo, Elías García,... hablan del cura de Prados y el de Sta. Cecilia de San Ildefonso.

¹³⁹³ BAHAMONDE Y SÁNCHEZ DE CASTRO, A., op. cit., págs. 80 y 82 respectivamente.

¹³⁹⁴ JACKSON, G., op. cit., pág. 274. En el Archivo Episcopal se ha encontrado una carta de las esposas y madres de los procesados en un consejo de guerra pidiendo al obispo de Segovia su intercesión para conseguir el indulto de sus familiares condenados a muerte.

¹³⁹⁵ BOOS, nº 3, 15 de febrero de 1937.

y entusiasmo delirante la auténtica bandera española". Entre los discursos destacó el que pronunció el obispo, *"inspirado bellísimo canto a la bandera nacional, a la que besó con todo cariño y entre el fervoroso entusiasmo de cuantos asistían"*¹³⁹⁶.

La jerarquía católica española justificaba y excusaba los "excesos" del bando nacionalista y no dejaba de aprovechar la ocasión para criticar a sus enemigos –los españoles que defendían la República–: *"Tiene toda guerra sus excesos: los habrá tenido sin duda el movimiento nacional: nadie se defiende con total serenidad de la locas arremetidas de un enemigo sin entrañas"*. Eso sí, los obispos reprochaban *"en nombre de la justicia y de la caridad cristianas todo exceso que se hubiese cometido, por error o por gente subalterna"*; pero que, en todo caso, el número de víctimas no era tan elevado puesto que *"metódicamente (abultaba) la información extranjera..."*. Leído esto, parecería insignificante la importancia o volumen de la represión del bando sublevado. Además, para la Iglesia, la represión no tenía comparación con los crímenes cometidos en el otro lado, pues *"hay una distancia enorme, infranqueable, entre los principios de justicia, de su administración y de la forma de aplicarla entre una y otra parte"*¹³⁹⁷.

En las conclusiones de la carta colectiva parecía apuntarse -o podría interpretarse así- una crítica solapada a ciertos comportamientos represivos, cuando apuntaban: *"La Iglesia, no ha podido hacerse solidaria de conductas, tendencias o intenciones, que en el presente o en el porvenir, pudiesen desnaturalizar la noble fisonomía del movimiento nacional"*¹³⁹⁸. En cualquier caso, no hubo ninguna condena clara de la represión franquista por parte de la jerarquía católica. Como se lamenta Laín Entralgo: *"¿Tuvo verdadero fundamento para llamarse cristiano un bando beligerante en el cual ninguno de sus miembros, sacerdote o seglar, honestamente se atreviera a denunciar la verdad de lo que entre los suyos había ocurrido?"*¹³⁹⁹. Es más, cuando en octubre de 1938 se planteó la posibilidad de un final negociado a la guerra civil, desde la propia Iglesia Católica se alzaron distintas voces en contra, entre ellas la del arzobispo de Burgos quien afirmaba: *"es preferible que todos muramos a ver los males y la destrucción de la patria"*¹⁴⁰⁰.

La Iglesia segoviana, en general, no hizo nada por evitar o aminorar la represión. El que debía dar ejemplo -el prelado Platero- ya se ha escrito que no utilizó su influencia para frenar la ola represiva que recorrió la provincia. Incluso hacía comentarios muy provocadores en este sentido. Así lo corrobora algún testimonio que cuenta una visita a la cárcel de Cuéllar en la que arengó a los presos diciendo: *"reclusos desgraciados, yo soy el pastor y vosotros las ovejas, si quiero os mato a todos"*¹⁴⁰¹. Había párrocos con la misma beligerancia que el obispo, como el cura de Bernardos que comparaba la *limpieza* que pretendían hacer en la sociedad con *"ir a escardar al campo, quitando las malas hierbas"*¹⁴⁰².

Aún así, entre el clero segoviano se dieron distintas actitudes frente a la represión. Hubo quienes arriesgaron sus vidas para salvar a sus vecinos que iban a ser llevados en una saca (Mudrián, Brieva, Torre Val, Escalona, La Cuesta, Riofrío de Rianza, Boceguillas). Cuando llegaron los falangistas a estos pueblos, salía el párroco local y se enfrentaba a los visitantes diciendo que respondía por sus vecinos. Se dio el caso curioso del cura de Valleruela de Pedraza, al que los falangistas destrozaron el huerto como represalia por haber defendido a sus vecinos. Otros curas más beligerantes con los adversarios políticos de sus localidades alentaron las sacas, denunciando incluso a sus propios vecinos (San Rafael, Bernardos, Arcones). El cura de Arcones fue quien denunció al sacristán que había

¹³⁹⁶ BOOS, nº 17, 15 de septiembre de 1936.

¹³⁹⁷ Los entrecomillados de este párrafo son extractos de la *Carta colectiva de todos los obispos españoles ante la guerra*, publicada en el BOOS, nº 15, 16 de agosto de 1937.

¹³⁹⁸ Ver nota anterior.

¹³⁹⁹ LAÍN ENTRALGO, P. *Descargo de conciencia (1939-1960)*. Barral eds. Barcelona. 1976, pág. 192.

¹⁴⁰⁰ *El Adelantado*, 13 de octubre de 1938.

¹⁴⁰¹ Testimonio de Juan Muñumel.

¹⁴⁰² Testimonio de Leopoldo Cámara.

escondido su carnet de CNT en la escalera del campanario de la iglesia. El párroco de Riaza denunció a unos mozos que le habían gastado una broma por carnaval. A muchos sacerdotes les venció la cobardía y el miedo. No supieron enfrentarse a los falangistas y se escondieron mientras se llevaban a sus propios vecinos (Navas de Oro, Valsaín). En Fuenterrebollo, un vecino al que se llevaban en la camioneta imploraba que preguntaran al cura, pues informaría favorablemente de él y lo salvaría, pero aquél no quiso dar la cara.

Otros sacerdotes -los menos- no pudieron conseguir salvar a las víctimas a pesar de sus intentos por defenderlos. Así le ocurrió al cura de Fuentesauco, que no logró impedir que se llevaran al maestro Mariano Domínguez. El párroco de Navas de Oro, no habiendo impedido las sacas, más adelante socorría a las mujeres de los presos o fallecidos, lo que enfadó a algunos vecinos de derechas, que llegaron a acudir una noche a su casa a increparle. Lo insultaron por ayudar a los rojos, quienes -según el criterio de los agresores- no merecían esa ayuda.

Pero la colaboración de un importante sector del clero en la represión franquista no se limitó a la connivencia o al cerrar los ojos ante las sacas, muchos párrocos se implicaron en los procesos depuradores, especialmente en el de los maestros -con los que algunos estaban enfrentados-, al emitir sus informes negativos, que originaban la destitución o el traslado. También participaron con sus informes en el procedimiento de responsabilidades políticas, incluso ejerciendo la denuncia de sus propios vecinos, y en las adjudicaciones de las libertades condicionales¹⁴⁰³. En las prisiones había curas que hacían más dura la vida carcelaria, pues obligaban a los presos a abjurar de sus ideas políticas, sociales o religiosas. El arrepentimiento se convertía en la obsesión de los confesores: no procuraban evitar las muertes de los condenados a última pena, daba la sensación de que su único desvelo era que muriesen en paz con Dios. En una palabra, que los presos sintieran que se habían equivocado, se habían extraviado. Así sentían su utilidad como pastores, reconduciendo a las ovejas descarriadas para que volvieran al rebaño.

El papel de la Iglesia en la socialización del régimen de Franco fue fundamental, debido a la completa desarticulación y desmovilización de la sociedad civil desde el poder a través de la coacción, lo que hizo que el individuo permaneciera relegado al ámbito de su vida privada y a la exclusiva percepción de la realidad cotidiana más inmediata. Como explica Sevillano, precisamente en medio de una población sometida sobresalió la mayor capacidad de penetración social del adoctrinamiento de carácter tradicional y religioso tutelado por la Iglesia.

Por último, reseñamos dos muestras más de la perfecta simbiosis entre la Iglesia Católica y el Estado franquista: de una parte, las rígidas normas de la moralidad impuestas por la Iglesia y adoptadas por el Estado, que limitaron la vida social de los españoles. Y, de otra, la unión de dos preceptos indisolubles, uno religioso y otro político, pero de igual calado, el temor de Dios y el temor al Caudillo.

¹⁴⁰³ En este aspecto, había un formato de comunicación del Gobierno Civil a los curas párrocos, que expresaba:

Sírvase informar con la mayor urgencia, al dorso de este oficio, sobre la conveniencia de otorgar la libertad al detenido gubernativo nombrado al margen, expresando en conciencia si el pueblo lo recibiría bien y si aquella libertad conviene que se le otorgue en forma absoluta o condicionada.

¡VIVA CRISTO REY!, ¡VIVA ESPAÑA!, ¡VIVA FRANCO!.

Segovia, 15 de septiembre de 1937.

Valga como ejemplo de respuesta, el informe del párroco de Riaza sobre el médico Pedro Gaona Sanz:

...figuraba como presidente del partido de izquierdas que aquí se fundó y que no era otro que la UGT. Dadas sus ideas francamente socialistas, que no ocultaba y considerando la propaganda que abiertamente hizo en favor del funesto frente popular y en contra de la religión, yo creo que el pueblo recibiría mal que se le otorgara la libertad tanto absoluta como condicionada.

Riaza, 30 de septiembre de 1937, Viva Cristo Rey, Viva España, Viva Franco. Gerardo Saínz.

Arch. Epis. Cpta. Correo de entrada, 1936, informe del párroco de Riaza sobre el médico Pedro Gaona.

10. 4. Las consecuencias de la represión

Con la ejecución, el encarcelamiento, la incautación de bienes o la depuración de los adversarios no se cerraba el proceso represivo; es más, suponía el desencadenamiento de una serie de consecuencias. La eliminación física de los oponentes –ya fuera temporal o definitiva- tuvo unas repercusiones, que se podrían agrupar en cuatro categorías: económicas, sociales, políticas y psicológicas.

Consecuencias Económicas

Ya se ha apuntado anteriormente que entre las causas que motivaban las denuncias privadas abundaban las de índole económica: competencia por el mismo negocio, envidias, deseos de apoderarse de las posesiones de las víctimas, etc. Una vez desaparecido el propietario, en muchos casos se procedía a una apropiación de todos los bienes de los infortunados. Por ejemplo, en su afán por acaparar bienes, un vecino de Gallegos denunció a su propio cuñado para quedarse con la herencia dejada por sus suegros. Estas incautaciones en principio eran ilegales, pues aún no se había desarrollado legislación al respecto. Las autoridades locales, Ayuntamiento y Falange, los nuevos gobernantes o sus valedores, las fuerzas vivas o caciques que ejercían el poder en la sombra se apropiaban de dichos bienes, sin ningún escrúpulo, dejando viudas e hijos en la más absoluta indefensión y sin medios de vida, lo que les obligaba a trabajar en cualquier oficio en unas condiciones casi siempre desfavorables.

Se han recogido abundantes testimonios que nos dan una idea bastante clara de cómo el Nuevo Estado, los nuevos gobernantes y numerosos advenedizos se apropiaban de los bienes de los oponentes políticos. Las familias de las víctimas quedaban arruinadas, sin percibir ningún tipo de pensión o ayuda económica, ni tan siquiera los familiares de los empleados de la administración que oficialmente tenían derecho a ella; porque, si no se reconocía oficialmente el fallecimiento, no había ocasión de alcanzar la asignación. Pero, como la mayoría de las víctimas eran obreros que vivían exclusivamente de su trabajo sin ningún tipo de seguro, fallecido el cabeza de familia, los ingresos económicos desaparecían. Aun así, algunas familias se atrevían a solicitar la pensión oficial para “Huérfanos de la Revolución y de la Guerra”, que gestionaba la Junta Provincial de Beneficencia, presidida por el gobernador civil.

Consecuencias Sociales

La represión cumplió su función ejemplarizante de lo que ocurría a los adversarios políticos: la muerte, la prisión, la incautación de bienes, la pérdida del puesto de trabajo. Pero, además servía a su objetivo de paralizar a la sociedad, adormecer a la población por la estrategia del terror. Para ello se utilizaban los castigos ejemplares, el fusilamiento, la prisión, el destierro, las humillaciones, las amenazas y coacciones.

La represión se dirigía principalmente contra los oponentes, pero también contra las personas que no manifestaban adhesión entusiasta al nuevo régimen, o se mostraban blandos en su trato con el “enemigo”. Para ello se utilizó la calificación de “desafecto”, que se podía incluir en la partida de defunción del fusilado. Esta calificación se hacía en oposición a los denominados “afectos al Glorioso Movimiento Nacional”¹⁴⁰⁴.

Esta “marca” negativa producía discriminaciones en todos los campos de la vida social, desde el servicio militar a la “cola” de la compra, pasando por las cartillas de racionamiento, las oposiciones a cualquier puesto de trabajo, etc. Hemos constatado por distintos testimonios variadas situaciones de este tipo. Por ejemplo, el padre del maestro Esteban Barba, fue muy criticado cuando dio el pésame a la viuda de Julio Fuster, compañero maestro, fusilado el 15 de agosto de 1936. Por su parte, José Peña cuenta que tras la muerte de su padre, *“amigos y vecinos de la familia cambiaron el trato, empezaron*

¹⁴⁰⁴ Reg. Civ. Valvieja. Ins. Defunción de Esteban Ibáñez Aznara, 26 de julio de 1940, como afecto al GMN.

*a perseguir, insultar a la madre.... en suma nos dieron un trato vejatorio, había una atmósfera de terror en Segovia*¹⁴⁰⁵. Sofía Escudero dice que -ya en la posguerra- una mujer se apartó cuando se cruzó con su madre, porque era *“la madre de un rojo”*¹⁴⁰⁶. La madre de los hermanos Serrano no volvió a salir de casa hasta veinte años después de fusilados sus hijos.

Asustar y amedrentar a la población incluía multitud de caminos, todos ellos encaminados a la humillación de los vencidos. En casi todos los pueblos hubo cortes de pelo a las mujeres o madres de “rojos”. Los hombres eran sacados de madrugada de sus casas para obligarles a ingerir aceite de ricino y pasear sus consecuencias por las calles o por los bares de la localidad. Además eran obligados a cantar brazo en alto el “Cara al sol” u otros himnos nacionales.

Consecuencias Psicológicas

A pesar de no ser estudiosos de Psicología, después de las numerosas entrevistas mantenidas para la elaboración de este trabajo, hemos podido llegar a algunas conclusiones sobre este aspecto. El terror, el miedo, el odio, el rencor, la venganza o la resignación son sentimientos que la represión despertó en muchos de los familiares de las víctimas, como vamos a tratar de explicar.

En primer lugar, hay que señalar que a la mayoría de familiares de las víctimas, que eran católicos practicantes, les creó problemas de conciencia y de fe, pues veían con asombro cómo sus deudos eran ejecutados en defensa de un orden y unos valores apoyados por la Iglesia. La misma Iglesia que hablaba de amor al prójimo negaba ayuda a los condenados, no intercedía para conseguir los indultos, o se limitaba a ofrecerles la confesión y comunión antes de la ejecución. Muchos familiares dieron la espalda a esa Iglesia, que no trató de conciliar los bandos enfrentados en la guerra civil entre españoles.

El miedo y el terror afectaba a todos, fueran sospechosos o no por su pasado o presente, no adherido al movimiento. Familias de víctimas que desconocían dónde habían sido enterrados sus muertos, preguntaron tiempo después a los enterradores, pero éstos no decían nada, o no sabían o no podían, pues estaban aterrorizados también. Ya expusimos las dificultades de algunos familiares para encontrar testigos que declararan en los expedientes para oficializar los fallecimientos por ejecuciones sumarias.

Aún hoy continúa el miedo de muchas personas, algunos sueñan todavía con aquellos sucesos. Tan es así que en nuestros días es muy complicado hablar de estos temas. De hecho bastantes familiares se han negado a mantener una entrevista con este investigador porque no quieren oír mencionar sucesos que ni han olvidado, ni superado, ni perdonado. Se podría decir que muchos familiares se han impuesto una especie de autorrepresión, un autocontrol para dejar aletargado ese recuerdo que se niegan a rememorar. Quieren intentar olvidar a toda costa o no volver a hablar nunca de unos hechos que los han dejado marcados para toda la vida. Es impresionante ver cómo, a pesar de las seis décadas pasadas desde entonces, hay familiares a quienes aún se les saltan las lágrimas al hablar de aquellos sucesos, o se niegan a hablar de ello, porque les afecta demasiado y no pueden contener la emoción.

La rabia es otro sentimiento generalizado entre los familiares de las víctimas. En muchos casos han permanecido viviendo en la misma localidad verdugos y viudas, hermanos o hijos de ejecutados, lo que ha agravado el sufrimiento y el odio de éstos. Han tenido que coincidir en el bar, en la iglesia, en la tienda o en el Ayuntamiento. A lo largo de los años que han pasado desde la guerra se han sucedido miradas, insultos, incluso alguna pelea entre víctimas y verdugos.

El fusilamiento, la eliminación física del oponente y el peso de la propaganda y la educación dirigida durante cuatro décadas, han creado otro sentimiento en algunos

¹⁴⁰⁵ Testimonio de José Peña.

¹⁴⁰⁶ Testimonio de Sofía Escudero.

familiares, el de avergonzarse de sus padres o abuelos, que fueron ejecutados por estar “confundidos”, por “no ser buenos españoles”. El hijo de un fusilado decía que si habían matado a su padre “*sería por algo*”¹⁴⁰⁷.

La paralización por el terror afectó a una gran mayoría de españoles durante prácticamente toda la dictadura. Hasta bien avanzada la década de los sesenta no hubo apenas más oposición que la planteada por el PCE, partido que cargó sobre las espaldas de sus militantes la oposición frontal al régimen franquista.

La violencia implicaba la eliminación brutal de cualquier opción alternativa, cualquier opinión distinta a la oficial era reprimida con dureza, no se podía siquiera evocar el pasado más reciente previo a la guerra: los franquistas pretendían -y consiguieron- el exterminio de la memoria y de la historia. El trauma de la memoria se refiere no sólo al dolor sino también al sentimiento de culpabilidad. La derrota representó algo más que la derrota militar: supuso también una pérdida del pasado, de la identidad y de los ideales, así como de la visión de futuro. El bombardeo constante de la propaganda del régimen sobre la guerra, la legitimidad de los sublevados, la victoria, los vencedores, los desmanes de los rojos, los vencidos, etc. hacían que un sector importante de los que habían perdido la contienda se volcara en interiorizar la guerra, la memoria, el recuerdo, se impusieron una autorrepresión.

Estas consecuencias psicológicas de la represión no se han superado porque tras el silencio obligado de la dictadura vino la frustración por el silencio obligado por los artífices de la transición. Desde las instituciones no se hizo nada por restaurar el recuerdo de las víctimas, de modo que los familiares se vieron otra vez represaliados, no pudieron dar salida a esos sentimientos durante tanto tiempo reprimidos.

Consecuencias Políticas

En primer lugar, con el triunfo de la sublevación militar en Segovia, se produjo el desalojo del poder de republicanos y socialistas, gobernantes en Ayuntamientos, Diputación y Gobierno Civil. Todas las gestoras municipales nombradas tras la victoria del Frente Popular fueron destituidas. En los ayuntamientos constitucionales donde había representación republicana o socialista, los concejales de este signo fueron cesados. En la capital se destituyó a los 8 ediles de estas tendencias que habían sido elegidos democráticamente¹⁴⁰⁸. Entretanto, se mantuvieron en el cargo el resto de concejales conservadores. Se impuso así un sistema político autoritario sobre la base de una represión extremadamente dura, cuyo primer objetivo había sido el desalojo del poder de los representantes elegidos por el pueblo en las elecciones de febrero de 1936.

Las nuevas autoridades que nombraron los sublevados fueron generalmente representantes de la oligarquía tradicional. Para presidente de la Diputación se designó a Antonio Sanz Gilsanz, abogado y presidente local de Acción Popular en Segovia. En el Ayuntamiento de la capital los concejales sustitutos eran también destacados militantes de AP -César Zubiaur, Eusebio Provencio y Ángel Bagues-, de Falange -José Antonio Nieves- y tradicionalistas -García Gutiérrez-¹⁴⁰⁹. En los pueblos donde las derechas gobernaban los municipios antes de julio de 1936, los alcaldes y concejales se mantuvieron en el poder. En la capital permaneció como alcalde el republicano conservador Pedro Rincón, aunque sería sustituido en agosto de 1936 por el capitán de Artillería, Antonio Blanco. Se produjo una homogeneización conservadora/reaccionaria en el poder local y provincial. Escasearon los nombramientos de camisas viejas para cargos importantes. A partir de la unificación que estableció el partido único en la España franquista, la adscripción política de todos los cargos era falangista, pero el conglomerado de FET aglutinaba a distintas y dispares familias: fascistas, reaccionarios, tradicionalistas, monárquicos, católicos; y no fueron

¹⁴⁰⁷ Testimonio de un vecino de S. Ildefonso.

¹⁴⁰⁸ Arch. Mun. Segovia. Libro de actas del Ayuntamiento, sesión del 31 de julio de 1936, bajo la presidencia del Delegado de la Autoridad Militar, Joaquín España. Los concejales cesados eran los republicanos Aurelio García, Julián Fernández, Juan Zuloaga, Lope Tablada y Eduardo Lucio; y los socialistas Esteban Muñoz, Gregorio Olalla y Antonio Artalejo.

¹⁴⁰⁹ Arch. Mun. Segovia. Libro de actas del Ayuntamiento, sesión del 31 de julio de 1936.

precisamente los fascistas los que gobernaron en la provincia de Segovia. El bloque conservador tradicional encabezado por Rufino Cano de Rueda y Juan de Contreras mantuvo su influencia sobre la política segoviana.

La oposición política quedó descabezada de sus líderes locales y de muchos de sus militantes, hasta quedar paralizada totalmente. La mayoría de dirigentes desapareció, unos pasaron al otro bando (Carrasco Linares –I.R.-, Demetrio Hoyos –PSOE-, Enrique Pérez Bonín –PSOE-, Álvarez Matesanz –PCE-, Duque Serrano –PCE-), otros fueron presos (Esteban Muñoz –UGT-, Isidoro Romano –JSU-), y el resto fueron fusilados (los socialistas Fuster García, Gómez Fernández, Peña Huertas, Hernanz Benito).

Con el triunfo de la sublevación se prohibieron las organizaciones obreras y políticas republicanas y de izquierda, desapareciendo la lucha política democrática. Una de las primeras medidas fue la clausura de las Casas del Pueblo, como se recogía en *El Adelantado* del 29 de julio de 1936 donde se publicaba una nota del Gobierno Civil en la que obligaba al “*Cierre fulminante de Casas del Pueblo*”¹⁴¹⁰. El cierre iba acompañado, la mayoría de las veces, de su destrucción. Así ocurrió en Navas de Oro, donde los falangistas de Cuéllar saquearon la sede obrera y quemaron todos los enseres a la puerta del propio edificio. En la capital ocurrió otro tanto. En San Ildefonso, el 30 de julio de 1936, se produjo un “*Auto de fe con los muebles de los centros marxistas y Casa del Pueblo*”, como reflejó *El Adelantado*¹⁴¹¹. Las camisetas rojas de los militantes socialistas y otros símbolos de izquierdas fueron quemados públicamente para escarmiento general. En Sebúlcor, los falangistas de Sepúlveda hicieron una hoguera en la plaza quemando las camisetas rojas de los socialistas locales.

La bandera constitucional de España, es decir la tricolor republicana, fue arrancada de las escuelas públicas y quemada en la plaza del pueblo por las escuadras falangistas. Lo mismo hicieron con los libros de texto, con los ejemplares de la constitución de 1931 y con los cuadros divulgativos de la legislación republicana que había en las escuelas para educar a los niños en los valores democráticos.

Desde el bando declaratorio del estado de guerra se suprimieron por decreto todas las libertades y derechos que amparaba la Constitución de 1931: movimiento, opinión, prensa, huelga, hasta el mismísimo derecho a la vida. Los partidos políticos republicanos y de izquierda fueron declarados fuera de la ley por el Decreto 108. Los primeros bandos militares de la Junta de Defensa Nacional se centraban en la derogación de la obra legislativa republicana, para inmediatamente –y también mediante decretos dictados por la autoridad militar- sentar las bases del Nuevo Estado antidemocrático de corte fascista.

10. 5. Valoración final

La provincia de Segovia estaba dominada políticamente por la derecha más conservadora. En términos socio-económicos era netamente agraria, mayoritariamente rural, con escasa industria y un reducido número de obreros (concentrados en el campo, la construcción, montaje de líneas de electricidad y ferroviarios). Con estas características, es fácil comprender que la sublevación militar triunfara en esta provincia sin apenas resistencia y se mantuviera sometida sin problemas durante toda la guerra.

Hecha esta consideración, en cuanto a la posible “justificación” de la represión, se ha de señalar que en Segovia no había ocurrido antes de la guerra nada que pudiera justificar la dura represión con que se castigó a los oponentes de esta provincia castellana. Durante los cinco años de democracia republicana se habían dado en Segovia las rivalidades propias del juego democrático. Quizá simplemente a los sectores conservadores locales les disgustó que con la democracia se pusiera en duda el papel

¹⁴¹⁰ *El Adelantado*, 29 de julio de 1936.

¹⁴¹¹ *El Adelantado*, 23 de septiembre de 1936.

preponderante o la función social de la oligarquía tradicional. En la primavera de 1936 se agudizaron las rivalidades en Segovia en la misma medida que en el resto de España, pero aquí no llegó a producirse ningún atentado con tintes políticos. Tan sólo algunos incidentes alteraron la plácida vida de provincias¹⁴¹². Precisamente, la misma tranquilidad de una provincia tradicional que lamentaba un colaborador del *Heraldo Segoviano*, contrastándola con el avance y progreso de la España donde había triunfado el Frente Popular.

Ya iniciada la contienda, tampoco se dieron casos de violencia durante el breve tiempo en que las organizaciones obreras y republicanas dominaron sus localidades por la ausencia de la Guardia Civil. No hubo siquiera detenciones de elementos derechistas. En fin, nada que pudiera hacer “necesario” un castigo ejemplar a los cabecillas de las acciones de resistencia al nuevo poder militar, como más adelante se produciría.

En Segovia, el control de la capital y de la provincia no supuso para los militares sublevados demasiado esfuerzo, ni material, ni humano. Tan sólo hubo un tiroteo en los alrededores del caserío de Prados, en el que murieron cuatro obreros y un militar, y la toma de la Central de Teléfonos de San Rafael por los guardias civiles, que se saldó con la ejecución de tres milicianos. A los pueblos llegaban escuadras de falangistas para destituir a las gestoras frentepopulistas, imponer de nuevo a las autoridades conservadoras y consumir la correspondiente *limpieza* de adversarios políticos.

Por su parte, los soldados se limitaban a acudir al frente situado en la sierra, establecido allí desde el mismo día 20 de julio de 1936. Los militares sublevados dominaron todos los pasos de las sierras de Guadarrama y Somosierra entre las provincias de Segovia y Madrid. Sólo quedó en poder de los republicanos el puerto de Navacerrada (y otros de importancia secundaria como el Reventón y Malangosto). Esta situación se mantendría hasta el final de la contienda.

En lo que se refiere a la ideología de la represión franquista se han de hacer algunas consideraciones. Numéricamente hablando, es evidente que la represión en Segovia no fue tan dura como en otras zonas que desde un principio se sublevaron. Pero no es menos evidente que la ideología de la represión, los principios en que se basaba la represión de los sublevados, eran exactamente los mismos en toda la España que se alzó contra la República: la eliminación del adversario, la paralización por el terror, la represión de clase, asegurar la retaguardia o la ejecución de la venganza. La clave fundamental de la imposición del nuevo régimen era la paralización por el miedo y el terror, que se infundía tanto a los oponentes políticos como a los neutrales o incluso a los *tibios* afectos al movimiento que no manifestaban la suficiente firmeza ante los adversarios.

Problemática de la investigación, las cifras

Hemos de constatar que la investigación de la represión franquista es una ardua tarea, pues hemos encontrado numerosas dificultades para la elaboración de este trabajo: por un lado, para conseguir el censo total de víctimas de la represión ilegal, se acusa la falta de documentación oficial.

En primer lugar, no están inscritos ni en los cementerios, ni en los registros civiles todos los fallecimientos producidos por la represión. Los fusilamientos ordenados por los consejos de guerra se inscribieron todos, pero de todos los casos conocidos de ejecuciones ilegales solo están anotados el 65,40% de las defunciones. No aparecen todos los documentos oficiales que justificaban legalmente las sacas de las cárceles y en las que debían de figurar los nombres de los presos sacados para ser fusilados. Hemos encontrado algunas de las órdenes de traslado de las prisiones de Segovia y Sepúlveda, pero ninguna de las de Cuéllar y La Granja. Por último, no hay apenas expedientes judiciales de los levantamientos de los cadáveres que aparecían en descampados, pinares o cunetas y los

¹⁴¹² En el capítulo 1 ya hemos referido cómo se desarrolló la primavera de 1936 en Segovia, destacando los incidentes en el Baile *El Pensamiento* y en el desfile del 14 de abril.

que existen no aportan datos porque los jueces no abrieron las investigaciones necesarias, se limitaron a constatar la aparición de los cuerpos y recoger el resultado de las autopsias.

Debido a lo incompleto de las fuentes escritas, las fuentes orales se han convertido en imprescindibles para el estudio de la represión franquista. Los testimonios de familiares, compañeros, amigos, vecinos o conocidos de las víctimas han sido determinantes para la consecución del trabajo de investigación sobre la represión en Segovia, pues han aportado datos que no figuraban en ninguna documentación (por ejemplo, las ejecuciones que no estaban inscritas que representan un 34,60% del total).

Pero las fuentes orales también tienen sus limitaciones. Por un lado está el hándicap de los más de sesenta años pasados desde aquellos sucesos, lo que origina que no haya tantos testigos como hubiera sido necesario, y los que existen no recuerdan todo lo que podrían contar por haberlo vivido (se les han olvidado datos de los fallecidos, confunden algunas fechas, o creen muertos a compañeros o vecinos que pasaron al bando republicano y ya no volvieron tras la guerra). Pero, a pesar de lo incompleto de este tipo de fuentes, hay que agradecer enormemente la colaboración de todas las personas que han aportado cualquier dato o información, por pequeña que haya sido, pues, directa o indirectamente, han contribuido a que este trabajo haya salido adelante.

Debido a la problemática de las fuentes, este trabajo de investigación queda abierto, y es muy difícil establecer las cifras definitivas de todas las muertes fruto de la represión sumaria en la provincia de Segovia. Pero, en todo caso, el resultado que se ofrece es aproximado a la realidad, aun teniendo en cuenta que no se han podido comprobar todas las ejecuciones producidas en la provincia de Segovia¹⁴¹³. Además de las 211 ejecuciones ilegales comprobadas, quedan sin contrastar en torno a otros 30 fallecimientos, a los que habría que añadir los casos -que sin duda los habrá- que no han sido tan siquiera conocidos por el investigador. Por lo que la cifra definitiva de la represión ilegal en Segovia, durante la guerra civil, se podría cifrar en torno a 230/240 ejecutados.

Con respecto a otros ámbitos de nuestra investigación, no hemos encontrado ninguna documentación de las prisiones provisionales Sancti Spiritus, Santa María de Nieva, Villacastín y La Granja. De la *Cárcel Vieja* de Segovia sólo hemos podido consultar los expedientes personales, pero no los libros de ingresos, recuentos, salidas, etc. Podemos aproximarnos al número de presos de Segovia por los expedientes comprobados: más de 4.500, de los que 2.282 eran vecinos o naturales de esta provincia. Pero a ellos habría que añadir los presos que no pasaron por la capital (en su mayoría gubernativos que no llegaron a ser procesados, puesto que en el momento que pasaban a serlo, venían trasladados a la capital o a otras capitales como Burgos o Valladolid) y que calculamos no serían más de 200 entre las prisiones de Cuéllar, Sepúlveda y La Granja. Tampoco tenemos datos del número de segovianos que habiendo combatido en defensa de la República, fueron presos al finalizar la guerra y no llegaron a estar detenidos en cárceles de esta provincia¹⁴¹⁴.

¹⁴¹³ Son varios los factores que inciden en este sentido: 1) Las víctimas no tenían familiares en las localidades donde vivían o donde les ejecutaron. Por ejemplo, a un segador forastero que estaba trabajando en Villoslada, del que no se conocen más datos personales, según cuentan vecinos del pueblo, lo ejecutaron en el Puente Oñez. 2) En la actualidad no quedan familiares de las víctimas en las localidades donde residían cuando los ejecutaron. Por ejemplo, varios casos de Segovia, El Espinar y La Granja. 3) En los pueblos donde hubo fusilamientos recuerdan que hubo víctimas, pero no conocen el número total, ni la procedencia u otros datos del total de los ejecutados. Así ocurre con los fallecidos en Navas de San Antonio, Torrecaballeros y Cabezuela. 4) En localidades donde hubo ejecuciones en distintas fechas, no saben el número total de fallecidos, ni los datos completos de las personas que sí saben que murieron. Sucede esto en Segovia, Cuéllar, San Ildefonso y El Espinar. 5) En algunos pueblos creen que fallecieron personas que residían en otras localidades de los alrededores, pero de los que no quedan familiares en la actualidad para comprobar, al menos, si hubo fallecimiento o los desaparecidos habían pasado al otro bando, no volviendo nunca más. 6) Hay localidades donde se cree muertas a ciertas personas que pudieron haber pasado la sierra uniéndose al bando republicano, sin que necesariamente hubieran sido ejecutadas en esta provincia. 7) Existen lugares donde se sabe que hay varias personas enterradas, pero en los pueblos de alrededor no conocen quiénes, cuántos o de donde procedían los fallecidos. Se conocen al menos cuatro emplazamientos en las cercanías de Gallegos, Galíndez, Pinillos y Valleruela de Pedraza respectivamente.

¹⁴¹⁴ Tenemos el testimonio de Liborio López, Julio Quinzano, Regino Casado y Antonio Gil, que se encontraron en esta situación.

Capítulo aparte merecen los archivos militares porque hemos acudido personalmente a todos los existentes en Segovia -y por vía telefónica y correo, a los de Valladolid y La Coruña- y como resultado únicamente encontramos 2 sumarios completos, de los casi 1.000 instruidos durante la guerra. Del resto, contestan “*estarán aquí, estarán allá*”, pero no aparecen. Afortunadamente, hemos encontrado un gran número de sentencias, 120, que son las más importantes, porque llevan el mayor número de procesados y la mayoría de las penas de muerte¹⁴¹⁵.

La documentación del procedimiento de responsabilidad civil está prácticamente completa, faltan muy pocos expedientes personales y la mayoría de los existentes tienen todos los originales (aunque muchos carecen de la resolución definitiva: si se abonó la sanción o ésta fue devuelta tras el indulto). No podemos decir lo mismo del proceso de responsabilidades políticas, pues no hay apenas expedientes, y de los que hay en el Archivo Provincial, la mayoría quedan incompletos.

Sobre las depuraciones, hemos logrado verificar los datos de los funcionarios del Estado que aparecían el *BOE*, pero por otras vías hemos comprobado que no todos los empleados depurados eran anunciados en el diario oficial. Sobre los tres ámbitos del proceso depurador que nos hemos centrado específicamente, sí se encuentran todos los expedientes archivados. Por último, es más difícil recabar documentación sobre la represión formal o violencia psicológica, por lo variado y dispar de los aspectos que aglutina. Quizá este capítulo requiere una labor de mayor interpretación.

En otro orden de cosas, en este trabajo hemos podido desvelar algunos errores de un historiador que ha investigado sobre la represión como Salas Larrazábal. Parece claro que Salas da por sentadas algunas aseveraciones que la investigación científica ha demostrado eran aventuradas y no respondían a la realidad. Salas aseguraba que todas las muertes producidas por la represión en la España Nacionalista se habían inscrito en los registros civiles, lo que se ha comprobado incierto, pues, hay un porcentaje elevado de ejecuciones sumarias no inscritas. De las 211 víctimas comprobadas en este trabajo, se registraron 138, lo que representa un 65,40% de inscripciones. Por tanto el 34,60% de fusilamientos ilegales no fueron reconocidos oficialmente. Además, en términos numéricos quedan muy superadas las 147 víctimas aportadas por Salas para esta provincia, con las 211 que ofrecemos aquí, a las que se deben sumar las 145 personas fusiladas por la aplicación del Código de Justicia Militar, que nos da como resultado total 356 víctimas. Es como si Salas prácticamente hubiera anotado sólo los fusilamientos judiciales que sí estaban todos inscritos en los registros civiles.

En cuanto a las mujeres ejecutadas, Salas habla de 3 víctimas femeninas en la provincia de Segovia. En este estudio se han encontrado 8 mujeres fallecidas en estas circunstancias durante el mes de agosto de 1936, además del fusilamiento de una miliciana condenada por consejo de guerra en 1938¹⁴¹⁶.

Otra documentación oficial cuyos datos estamos en condiciones de refutar es la Causa General, instruida por el Ministerio Fiscal en 1940 para censar todos los casos de represión achacable al bando republicano en toda España. Las misivas que remitía el fiscal requerían a los ayuntamientos “*los nombres, apellidos, edad, profesión y lugar y personas responsables de la muerte o desaparición de los residentes habituales en el término municipal, que les sorprendió el Glorioso Movimiento Nacional en lo que fue zona roja y dieron su vida por Dios y por España*”¹⁴¹⁷. La caja de Segovia incluye un total de 31

¹⁴¹⁵ Como sumarios importantes, nos faltarían las sentencias, si las hubo, de los consejos de guerra de trincheras que provocaron la ejecución de 8 soldados, y de los sumarios: 1726/37 contra varios soldados canarios, 2315/37 contra milicianos miembros del SIEP, 950/36 por los sucesos de Carbonero el Mayor, con 20 procesados y, por último, un sumario que fue militar y paso a civil (20/36) contra 26 vecinos de Navas de Oro.

¹⁴¹⁶ La miliciana era Petra del Peso procedente de Navaluenga, Ávila; como explicamos en los anexos.

¹⁴¹⁷ Arch. Fiscalía General del Estado. Segovia, Caja 1311. Pieza Primera: pueblos. La Causa General fue creada por el Decreto de 26 de abril de 1940. Carta remitida a Segovia el 11 de julio de 1941.

segovianos presuntamente víctimas de la represión republicana: figuran anotados cuatro fallecidos en el frente de batalla, una mujer muerta al estallar una bomba y sólo acredita el fusilamiento de siete. Del resto, no aporta más información sino que desaparecieron, pero sin especificar si fue en combate o por represión en retaguardia. En lo que nos atañe a este trabajo, hay dos claras equivocaciones que se corresponden con sendas ejecuciones realizadas por los falangistas en esta provincia, como hemos constatado y explicamos en el anexo nº 1: José Frutos Gila en Fuentemilanos y Pascual Aguña en Labajos.

En comparación con otras provincias, se puede decir que en cifras absolutas -vistos los datos ofrecidos en el compendio coordinado por Santos Juliá- tan sólo Soria, con 281 víctimas, está por debajo de los 356 ejecutados en la provincia de Segovia. Este frío dato resulta numéricamente insignificante comparado en términos absolutos con otras provincias como Córdoba, con 9.579 muertos; pero hay que tener en cuenta que la población de la provincia andaluza también era mucho más numerosa que la de Segovia. Por ello, hemos realizado una comparación con otras provincias para comprobar lo que representan porcentualmente el número de víctimas con respecto a la población absoluta de cada provincia. Valorando los datos de otras provincias que se conocen los resultados de la represión franquista se obtiene la siguiente tabla¹⁴¹⁸:

Cuadro nº 40: Valoración comparativa de la represión franquista

Provincia	Población	Nº de víctimas	Porcentaje
Almería	328.027	373	0,1137 %
Alicante	576.180	742	0,1288 %
Girona	325.500	519	0,1596 %
Soria	160.232	281	0,1756 %
Segovia	180.417	356	0,1973 %
Sevilla	902.935	8.000	0,8869 %
Córdoba	771.739	9.579	1,2412 %

Los datos reflejados en el cuadro muestran que la represión franquista en la provincia de Segovia proporcionalmente fue más importante que en otras provincias, a priori con mayor porcentaje de población republicana o de izquierda, como Alicante o Almería (aunque estas provincias fueron tomadas por el Ejército franquista al finalizar la guerra).

A las pérdidas demográficas como consecuencia directa de la represión, hay que añadir, lógicamente, que durante la guerra descendieron alarmantemente los matrimonios y se produjo una caída importante en el número de nacimientos. Por último, no hemos de olvidar que la guerra provocó un incremento del número de viudas y huérfanos. A los familiares de las víctimas propias del campo de batalla, reconocidos socialmente y por el nuevo régimen, se añadieron las viudas y huérfanos fruto de una represión injustificada y desproporcionada en la provincia de Segovia. Los familiares de las 356 víctimas de la represión no sólo no tuvieron el apoyo institucional a través de pensiones, becas, ayudas para viviendas, etc. que tuvieron los afectados del bando vencedor; sino que, además, sufrieron el rechazo de sus propios vecinos, que los señalaban y trataban como si fueran “apestados”. Este tratamiento padecieron también los 2.282 presos segovianos y sus familias, los 520 depurados y los 1.063 afectados por los procedimientos de responsabilidades civiles y políticas.

¹⁴¹⁸ Para ello hemos tomado como base la estimación calculada para julio de 1939 por el INE. En INE. Anuario Estadístico de 1941, pág. 115.

Con otros datos numéricos de la represión, como cifras de presos, depurados o incautados, no podemos hacer comparaciones porque no hay trabajos de este tipo en los que se recojan dichas cuantificaciones. Si acaso con Morente Valero en su estudio sobre la depuración del Magisterio Primario. Este proceso depurador afectó a todos los maestros y maestras destinados en la provincia de Segovia, un total de 702 docentes. De ellos fueron sancionados 184 (destituidos definitivamente 51, inhabilitados a perpetuidad para desempeñar escuelas 6, suspensos de empleo y sueldo por el tiempo que lo estuvieron e inhabilitación para cargos directivos y de confianza 20; y los 82 restantes castigados con traslado de destino) lo que representa un 26,2% del total de maestros, que entran dentro del análisis de Morente, quien indica que la depuración osciló entre el 25 y el 30%¹⁴¹⁹. Además la *Superioridad* aprobó la formación de expediente de disciplina a los 10 alumnos-maestros que habían sido sancionados previamente.

En fin, la represión franquista en la provincia de Segovia afectó, al menos, a 4.221 personas, distribuidas de la siguiente manera:

Cuadro nº 41: Resumen general de la represión franquista en Segovia

Formas de represión		Nº de afectados	
Fusilados	Represión sumaria	211	356
	Represión judicial	145	
Presos		2.282	
Responsabilidades civiles y políticas		1.063	
Depuración		520	
TOTAL		4.221	

Del número total de represaliados habría que, por un lado, descontar el centenar de afectados por varias formas de represión, por ejemplo, los maestros que sufrieron prisión, fueron fusilados, incautados sus bienes y depurados; y por otro, añadir los presos, los depurados o ejecutados ilegales que no hemos podido recoger en este trabajo. En fin, la cifra total estaría en torno a 4.200 afectados directamente por la represión franquista en la provincia de Segovia. Más difícil de evaluar es la cuantía de la repercusión indirecta, puesto que la represión de los desafectos dejaba en la más absoluta miseria a los familiares de los fusilados, depurados, presos o incautados.

Para concluir este trabajo, debemos hacer algunas consideraciones finales. La primera es que la imposición del régimen de Franco se hizo a través del terror, desde la propia sublevación militar, la guerra de 3 años, la larga posguerra, hasta los últimos fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, cuando el dictador ya estaba enfermo de muerte. Aunque ciertas tendencias de la historiografía de los últimos años nos puedan presentar a Franco como el estadista que colocó a España en el décimo puesto de los países desarrollados y que tuvo el acierto de designar al hombre que trajera la democracia

¹⁴¹⁹ MORENTE VALERO, Francisco. *La escuela y el Estado Nuevo: la depuración del magisterio nacional (1936-1943)*. Ámbito, Valladolid, 1997, pág. 27.

a España, nosotros hemos estudiado los años más trágicos de nuestra historia reciente, de los que Franco fue triste protagonista.

Hemos abordado las múltiples manifestaciones de la violencia ejercidas, primero para vencer la oposición al alzamiento militar que pretendía acabar con la segunda experiencia democrática de la Historia de España y, después, para derrotar la resistencia y borrar cualquier tipo de discrepancia. En el haber de Franco, para la provincia de Segovia, hay que consignar, al menos, 356 ejecuciones, 2.282 presos, 520 depurados y 1.063 segovianos sometidos a represión económica (en cualquiera de sus vertientes responsabilidad civil o responsabilidades políticas). Estos son datos objetivos que no admiten interpretación, no es cuestión de simpatías o antipatías políticas. A estos datos habrían de añadirse los incalculables daños psicológicos, sociales y culturales que no se pueden cuantificar. Además, los datos que se aportan están identificados, todos tienen nombres y apellidos, no se quedan en meras cifras para una estadística.

En esta investigación hemos pretendido algo que expresa perfectamente Vidal Beneyto: *“No hay acción sin identidad, ni identidad sin historia. Hay que recuperar los orígenes. Cada uno los suyos. Y devolverle a la victoria su provisionalidad y al franquismo sus vencidos”*¹⁴²⁰. Creemos que ya ha llegado la hora de que los hechos que han desatado pasión y se han utilizado para fomentar la polémica entre los españoles se conviertan en hechos históricos, es decir, documentados, admitidos e insertos en la totalidad histórica. Lo que no quiere decir que cada uno los vea desde su prisma, conformado por la ideología, los sentimientos, etc. Así debe ocurrir con todos los hechos históricos, sean la guerra civil española, la revolución bolchevique, la guerra de Afganistán o la de Palestina; cada cual los sentirá según su escala de valores, pero *“su conocimiento histórico debe tener un mínimo rigor objetivo y un máximo desprendimiento de la carga ideológica”*, como escribía Tuñón de Lara¹⁴²¹.

¹⁴²⁰ En *La victoria que no cesa*, publicado en *El País*, 14 de diciembre de 1980.

¹⁴²¹ TUÑÓN DE LARA, M. *La guerra civil española 50 años después*. Labor, Barcelona, 1985, pág. 433.

BIBLIOGRAFÍA

- ABELLA BERMEJO, Rafael.** *La vida cotidiana durante el régimen de Franco.* Temas de Hoy, Madrid, 1996.
- ACADEMIA DE HISTORIA Y ARTE DE SAN QUIRCE.** *Segovia 1088-1988. Congreso de Historia de la Ciudad.* Actas. Junta de Castilla y León, 1991.
- AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma.** *Memoria y olvido de la guerra civil.* Alianza Editorial, Madrid, 1996.
- ÁLVAREZ BOLADO, A.** *Para ganar la guerra, para ganar la paz. Iglesia y guerra civil: 1936-1939.* UPCO, Madrid, 1995.
- ÁLVAREZ OBLANCA, Wenceslao.** *La represión de posguerra en León.* Depuración de la enseñanza, 1936-1943. Santiago García Ed., León, Valladolid, 1988.
- ÁLVARO DUEÑAS, Manuel.** *Los militares en la represión política de la posguerra: la jurisdicción de responsabilidades políticas hasta la reforma de 1942.* En *Revista de Estudios Políticos*, nº 69, 1990, págs. 141-462.
- ÁLVARO DUEÑAS, Manuel.** *Por ministerio de la ley y voluntad del caudillo. La jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas.* Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 1997. (Inédita).
- ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio. (coord.)** *Historia y memoria de la Guerra Civil.* Junta de Castilla y León, Valladolid, 1988.
- ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio.** *Conflicto social e ideologías de la violencia, 1917-1936,* en García Delgado (Ed.), *España, 1896-1936: estructuras y cambio.* Madrid, 1984.
- ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio.** *La guerra civil, 1936-1939.* En *Historia de España*, Historia 16 – Temas de Hoy, Madrid, 1996. Vol. 27.
- ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio.** *La investigación histórica: teoría y método.* Crítica, Barcelona, 1995.
- ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio.** *La oposición al franquismo. Represión y violencia políticas.* En Tusell, J. y otros. *La oposición al régimen de Franco. Estudio de la cuestión y metodología de la investigación.* UNED, 1990.
- ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio.** *Violencia y política en España.* En *AYER*, nº 13, 1994.
- ARRANZ MARINAS, Gabriel.** *Una vida truncada por la naturaleza.* Folleto mecanografiado. Segovia, 1975.
- ARRARÁS IRIBARREN, Joaquín (director literario), PÉREZ BUSTAMANTE, Ciriaco y SÁEZ DE TEJADA, Carlos.** *Historia de la Cruzada Española.* 8 Vol. Ediciones Españolas, Madrid, 1940.
- ASOCIACIÓN DE VIUDAS de los defensores de la República y el FP de Asturias.** *Fosa común del cementerio de Oviedo.* Oviedo, 1984.
- ASOCIACIÓN DE VIUDAS de los defensores de la República y el FP de Asturias.** *Represión de los tribunales militares franquistas de Oviedo. Fosa común del cementerio civil de Oviedo.* Oviedo, 1988.
- AZAÑA, Manuel.** *La velada de Benicarló.* Losada, 1939, Buenos Aires.
- BAGUES, A.** *Charlas dadas por Ángel Bagues los días 25 al 29 de agosto, ante el micrófono de Radio Segovia, dedicadas a la muy noble y muy leal ciudad de Segovia y su provincia con motivo del Glorioso Alzamiento Salvador de España.* Segovia, 1937.
- BAHAMONDE Y SÁNCHEZ DE CASTRO, A.** *Un año con Queipo. Memorias de un nacionalista.* Ediciones Españolas, Barcelona, 1938.

- BALLBÉ, M.** *Militarismo y orden público en la España contemporánea*. Alianza Editorial, Madrid, 1985.
- BARCIELA, Carlos.** *La España del estraperlo*. En García Delgado (Ed.) *El primer franquismo. España durante la segunda guerra mundial*. Siglo XXI, Madrid, 1989.
- BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación; EIROA SAN FRANCISCO, Matilde y NAVARRO JIMÉNEZ, Paloma.** *Mujer, cárcel y franquismo. La prisión provincial de Málaga (1937-1945)*. Málaga, s.e., 1994.
- BARRIO GOZALO, M.** *Estudio socioeconómico de la Iglesia en Segovia. S. XVIII*. Segovia, 1982.
- BARRIOS, Manuel.** *El último virrey, Queipo de Llano*. Argos Vergara, Barcelona, 1978.
- BENNASSAR, M. B.** *Historia de los españoles*. Crítica, Barcelona, 1985.
- BERDUGO, Ignacio. CUESTA, Josefina. DE LA CALLE, M^a Dolores. LANERO, Mónica.** *El Ministerio de Justicia en la España "Nacional", en Justicia en Guerra. Jornadas sobre la Administración de Justicia durante la Guerra Civil Española: Instituciones y fuentes documentales*. Ministerio de Cultura, Madrid, 1990.
- BERNANOS, G.** *Los grandes cementerios bajo la luna*. Alianza Editorial, Madrid, 1986.
- BERTRAN GUELL, F.** *Preparación y desarrollo del Movimiento Nacional*. Librería Santa María, Valladolid, 1939.
- BIBLIOGRAFÍAS DE HISTORIA DE ESPAÑA.** *Bibliografía General de la Guerra Civil, 1936-1939*. CINDOC, Madrid, 1996. 2 vols.
- BIESCAS, J. A. y TUÑÓN DE LARA, M.** *España bajo la dictadura franquista*. En *Historia de España* dirigida por Tuñón de Lara, Tomo X, Labor, Barcelona, 1980.
- BLANCO RODRÍGUEZ, Juan A.** *El Quinto Regimiento en la política militar del PCE en la guerra civil*. UNED, Madrid, 1993.
- BLANCO RODRÍGUEZ, Juan A., FERNÁNDEZ CUADRADO, Manuel y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A.** *Las milicias populares republicanas de origen castellano-leonés*. En Aróstegui, Julio, (coord.), *Historia y memoria de la Guerra Civil*. Junta de Castilla y León, Valladolid, 1988.
- BOTTI, Alfonso.** *Cielo y dinero. El nacional-catolicismo en España (1881-1975)*. Alianza Editorial, Madrid, 1992.
- BOWERS, C.** *Misión en España*. Méjico, 1963.
- BRAJOS GARRIDO, A; ÁLVAREZ REY, L; ESPINOSA MAESTRE, F.** *Sevilla 1936: sublevación fascista y represión*. Muñoz Moya y Montraventa Ed. Sevilla, 1990.
- BRAVO MORATA,** *La República y el ejército*. Madrid, 1978.
- BRENAN, Gerald.** *El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil*. Ruedo Ibérico, París, 1962.
- BROUE, P, FRASER, R. y VILAR, P.** *Metodología histórica de la guerra y revolución españolas*. Fontamara, Barcelona, 1980. 2 vols.
- BROUE, P. y TEMIME, T.** *La revolución y la guerra de España*. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1977.
- CABRERA ACOSTA, M. A.** *La guerra civil en Canarias*. Francisco Lemus, La Laguna, 2000.
- CÁMARA VILLAR, Gregorio.** *Nacional Catolicismo y escuela. La socialización política del franquismo (1936-1951)*. Hesperia, Jaén, 1984.
- CARR, R.** *Estudios sobre la República y la guerra civil española*. Ariel, Barcelona, 1973.
- CARRETERO Y JIMÉNEZ, L.** *La personalidad de Castilla en el conjunto de los pueblos hispánicos; epílogo: Cataluña, Castilla, España*. San Sebastián, Pedro Bosch, 1977.

- CASANOVA GÓMEZ, Marina.** *Tribunales de depuración de funcionarios diplomáticos durante la guerra civil en zona franquista.* En *Justicia en Guerra. Jornadas sobre la Administración de Justicia durante la Guerra Civil Española: Instituciones y fuentes documentales.* Ministerio de Cultura, Madrid, 1990.
- CASANOVA, Julián (coord.). ESPINOSA, Francisco, MIR, Conxita y MORENO, Francisco.** *Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco.* Crítica, Barcelona, 2002.
- CASANOVA, Julián.** *La Iglesia de Franco.* Temas de Hoy, Madrid, 2001.
- CASANOVA, Julián.** *La sombra del franquismo: ignorar la historia y huir del pasado.* Siglo XXI, Madrid, 1992.
- CASANOVA, Julián; CENARRO, Ángela; CIFUENTES, Julita; MALUENGA, Pilar y SALOMÓN, Pilar.** *El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939).* Siglo XXI, Madrid, 1992.
- CASAS DE LA VEGA, R.** *Las Milicias Nacionales.* Editora Nacional, Madrid, 1977. 2 vols.
- CAUSA GENERAL** instruida por el Ministerio Fiscal. *La dominación roja en España.* Publicaciones Españolas, Madrid, 1961.
- CENARRO LAGUNAS, A.** *El fin de la esperanza: fascismo y guerra civil en la provincia de Teruel (1936-1939).* Diputación Provincial, Teruel, 1996.
- CENARRO LAGUNAS, A.** *Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de la violencia como base del nuevo Estado.* *Historia Social*, nº 30, 1998. págs. 5-22.
- CHAVES PALACIOS, Julián.** *La represión en la provincia de Cáceres durante la guerra civil (1936-1939).* Servicio de publicaciones de la Universidad de Extremadura, Cáceres, 1995.
- CHUECA, R.** *El fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre FET y las JONS.* Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1983.
- CHUECA, R.** *FET y JONS: la paradójica victoria de un fascismo fracasado.* En Josep Fontana *España bajo el franquismo*, Crítica, Barcelona, 1986.
- CIERVA, R. L.** *Bibliografía General integrada de la Guerra de España y sus antecedentes históricos.* Ariel, Barcelona, 1968.
- CIERVA, R. L.** *Historia del franquismo. Orígenes y configuración del franquismo (1936-1945).* Planeta, Barcelona, 1977.
- CIERVA, R. L.** *Los documentos de la primavera trágica. Análisis documental de los antecedentes inmediatos del 18 de Julio de 1936.* Secretaría General Técnica del Ministerio de Información y Turismo, Madrid, 1967.
- CLERISSE, H.** *Espagne, 1936-1937.* París, 1937.
- COBO ROMERO, FCO.** *La guerra civil y la represión franquista en la provincia de Jaén.* Diputación Provincial, Jaén, 1993.
- COLECTIVO AFAN.** *¡No general! Fueron más de TRES MIL los fusilados.* Mintzoa, Pamplona, 1984.
- COMÍN COLOMER, Eduardo.** *Comunismo y masonería.* Jefatura Provincial FET y de las JONS, Departamento Provincial de Seminarios, Segovia, 1951.
- CONTRERAS y L. de AYALA.** *La iniciación en Segovia del Movimiento Nacional.* Imprenta El Adelantado de Segovia, Segovia, 1938.
- CRESCO ABARCA, Enrique.** *Segovia durante la II República. Las elecciones para Cortes Constituyentes.* En Academia de Historia y Arte de San Quirce. *Segovia 1088-1988. Congreso de Historia de la Ciudad.* Actas. Junta de Castilla y León, 1991.

- CRESPO REDONDO, J. y otros.** *Purga de maestros en la Guerra Civil*. Ámbito, Valladolid, 1987.
- CUENCA TORIBIO, José Manuel.** *Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea 1833-1985*. Alhambra, Madrid, 1985.
- CUEVA MERINO, J de la.** *El anticlericalismo en la segunda república y la guerra civil*. En Emilio La Parra y Manuel Suárez (coords.), *El Anticlericalismo español contemporáneo*. Biblioteca Nueva, Madrid, 1998.
- DÁVILA Y HUGUET, J. M.** *Código de Justicia Militar con notas aclaratorias y formularios*. Imprenta Aldecoa, Burgos, 1937.
- DELGADO, M.** *La ira sagrada. Anticlericalismo, iconoclastia y antirritualismo en la España contemporánea*. Humanidades, Barcelona, 1992.
- DÍAZ DE AGUILAR ELÍZAGA, I.** *Justicia Militar en la España Nacional: 2. Instituciones*. En *Jornadas sobre la Administración de Justicia durante la Guerra Civil Española: Instituciones y fuentes documentales*. Ministerio de Cultura, Madrid, 1990.
- DICTAMEN** de la comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936. 2 vols. Editora Nacional, Barcelona, 1939.
- DUEÑAS, María Jesús.** *La enseñanza Primaria en Valladolid durante la Segunda República y la guerra civil, 1931-1939*. Tesis doctoral en la Universidad de Valladolid, 1998. (Inédita).
- EGEA BRUNO, Pedro María.** *La represión franquista en Cartagena 1939-1945*. Pedro María Egea Ed., Cartagena, 1987.
- EL EPISODIO DEL ALTO DEL LEÓN (materiales para su historia)**. Tipografía del 13 Regimiento Ligero de Segovia. Segovia, 1936.
- ELLWOOD, S.** *Prietas las filas. Historia de la Falange española. 1933-1983*. Crítica, Madrid, 1984.
- ELORZA, Antonio.** *Las raíces ideológicas del franquismo*. En Antonio Elorza *La modernización política en España*, Endymion, Madrid, 1990.
- ESCOBAL, P.** *Las sacas de España de 1936*. Mensaje, Nueva York, 1974.
- ESPINOSA MAESTRE, F.** *La guerra civil en Huelva*. Diputación Provincial, Huelva, 1996.
- FELICE, Renzo de.** *Interpretations of fascim*. Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1998.
- FERNÁNDEZ SANTOS, J.** *Cuentos*, Alianza Editorial, Madrid, 1978.
- FERRER BENIMELI, J. A.** *Masonería española contemporánea*. Siglo XXI, Madrid, 1980. 2 vols.
- FIDALGO, Pilar.** *A young mother in Franco prisons*. Unitede, London, 1939.
- FONTANA, Josep.** *Reflexiones sobre la naturaleza y las consecuencias del franquismo*. En Josep Fontana, *España bajo el franquismo*, Crítica, Barcelona, 1986.
- FONTECHA, A., GIBAJA VELAZQUEZ, J.C. y BERNALTE.** *La vida en retaguardia durante la Guerra Civil en zona franquista: Coca, Segovia (1936-1939)*. En Aróstegui, Julio, (coord.), *Historia y memoria de la Guerra Civil*. Junta de Castilla y León, Valladolid, 1988.
- FRASER, R.** *Recuérdalo tú y recuérdaselo a otros, historia oral de la guerra civil española*. Crítica, Barcelona, 1985.
- FRÍAS RUBIO, Ana Rosa.** *El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Soria, 1939-1959*. *Revista de Investigación en Geografía e Historia del Colegio Universitario de Soria*, vol. XI, nº 3, 1991-1992.
- GABARDA, Vicente.** *Els afusellaments al País Valencià (1938-1956)*. Alfons El Magnánim, Valencia, 1993.
- GABARDA, Vicente.** *La continuación de la guerra civil: la represión franquista*. En *Estudis d'història contemporània del País Valencià*, nº 7.

- GABARDA, Vicente.** *La represión franquista en el País Valenciano*. Universidad de Alicante. Tesis Doctoral, 1993.
- GABARDA, Vicente.** *Los serranos 1936/42. Años de Revolución y Muerte*. En *Añil. Cuadernos de Castilla-La Mancha*, nº 5, 1994.
- GALLARDO MORENO, J.** *La guerra civil en la Serena*. Diputación Provincial, Badajoz, 1994.
- GALLO, Max.** *Histoire de l'Espagne franquiste*. Marabout Université, París, 1969.
- GARCIA DURAN, J.** *La guerra civil española. Fuentes*. Crítica, Barcelona, 1985.
- GARCÍA GARCÍA, C.** *Aproximación al estudio de la represión franquista en Asturias; paseos y ejecuciones en Oviedo (1936-1952)*. En *El Basilisco*, Oviedo, 2ª época, nº 6.
- GARCÍA LUIS, L.** *La justicia de los rebeldes: los fusilados en Santa Cruz de Tenerife (1936-1940)*. Tegueste, Santa Cruz de Tenerife, 1994.
- GARCIA VENERO, M.** *Falange en la Guerra de España: la unificación y Hedilla*. Ruedo Ibérico, París, 1967.
- GIBAJA VELAZQUEZ, J.C.** *La vida cotidiana en Segovia durante la guerra civil*. En *Estudios Segovianos* nº 9, Segovia, 1989.
- GIL BRACERO, R.** *Jaque a la República*. Caja General de Ahorros de Granada, 1998.
- GIL BRACERO, Rafael.** *La justicia Nacional y el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Granada. Las fuentes y las primeras conclusiones*. En *Jornadas sobre la Administración de Justicia durante la Guerra Civil Española: Instituciones y fuentes documentales*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1990.
- GIL DE BIEDMA, Jaime.** *Las personas del verbo*. Círculo de Lectores, Barcelona, 1994.
- GIL ROBLES, J. M.** *No fue posible la paz*. Barcelona, 1968.
- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo.** *El fracaso de las milicias políticas*. *Historia*, nº 1. Madrid, 1986, págs. 72-86.
- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo.** *La violencia en política*. Madrid, CSIC, (en imprenta).
- GRIMAU, Dolores.** *La depuración del magisterio segoviano*. Ámbito, Valladolid (en imprenta).
- GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (LA).** *Historia* 16, Madrid, 1986 y ss. 24 fascículos.
- HEINE, Hartmut.** *La oposición política al franquismo*. Crítica, Barcelona, 1983.
- HEINE, Hartmut.** *Tipología y características de la represión y violencia políticas durante el periodo 1939-1961*. En J. Tusell *La oposición al régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de la investigación*. Congreso internacional. Octubre, 1988. UNED, Madrid, 1990. Tomo I, vol. 2.
- HERMET, G.** *L'Espagne de Franco*. A. Colin, París, 1974.
- HERNÁNDEZ GARCÍA, A.** *Represión en la Rioja durante la guerra civil*. Hernández García Ed., Logroño, 1984. 3 vols.
- HERRERO Balsa, Gregorio y HERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio.** *La represión en Soria durante la guerra civil*. Hernández García Ed., Soria, 1982.
- IGLESIA Y GUERRA CIVIL.** *Cincuenta años después*. Simposio. Instituto Fé y Secularidad. 1989. Fundación Friedrich Ebert.
- IRIBARREN, J. M.** *Con el general Mola. Escenas y aspectos inéditos de la guerra civil*. Imprenta Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1937.
- ITURRALDE, J.** de (padre Juan de Usubiaga). *El catolicismo y la cruzada de Franco*. Epi-Indarra, Vienne, 1960.
- JACKSON, G.** *Entre la reforma y la revolución. 1931-1939*. Crítica, Barcelona, 1988.
- JACKSON, G.** *La República española y la guerra civil, 1931-1939*. Orbis, Barcelona, 1985.
- JÁUREGUI, Fernando y VEGA, Pedro.** *Crónica del Antifranquismo*. Argos Vergara, Barcelona, 1983.

- JIMÉNEZ CAMPO, J.** *El fascismo en la crisis de la Segunda República*. C.I.S., Madrid, 1979.
- JULIÁ, Santos (coord), CASANOVA, J., SOLÉ I SABATÉ, J. M., VILARROYA, J. y MORENO, F.** *Víctimas de la guerra civil*. Temas de Hoy, Historia, Madrid, 1999.
- LABOA, A. J.** *Iglesia e intolerancia: la guerra civil*. Sociedad de Educación Atenas, Madrid, 1987.
- LAFUENTE, Isaías.** *Tiempos de hambre. Viaje a la España de posguerra*. Temas de Hoy, Madrid, 1999.
- LAÍN ENTRALGO.** *Descargo de conciencia. 1930-1960*. Barral, Barcelona, 1976.
- LANNON, Frances.** *Privilegio, persecución y profecía. La iglesia católica en España 1875-1973*. Alianza Editorial, Madrid, 1990.
- LEGUINECHE, Manuel.** *Los topos*. Circulo de Lectores, Barcelona, 1978.
- LINAJE CONDE, Antonio.** *9 de octubre de 1931: En torno a un discurso parlamentario del presbítero segoviano Jerónimo García Gallego*. En *Estudios Segovianos*, tomo XXXVII, nº 9, de 1996.
- LINAJE CONDE, Antonio.** *Un eclesiástico constitucionalista en la Segunda República, Jerónimo García Gallego*. En *Anuario de Historia del Derecho Español*, tomo LXVII, vol. 1. Ministerio de Justicia.
- LINCOLN, Bruce.** *Revolutionary exhumations in Spain, July 1936*. (Traducción al castellano en *Historia Social*, nº 35, 1999).
- LINZ, Juan.** *Una teoría del régimen autoritario. El caso de España*. En S. Payne, *Política y sociedad en la España del s XX*, Akal, Madrid, 1978.
- MALEFAKIS, E.** *Reforma agraria y revolución campesina en la España del s. XX*. Ariel, Madrid, 1982.
- MALERBE, P, TUÑÓN DE LARA, M., GARCÍA NIETO, M. C. y MAINER, J.C.** *La crisis del estado: dictadura, república, guerra (1923-1939)*. Historia de España dirigida por M. Tuñón de Lara, Tomo IX, Labor, Barcelona, 1980.
- MARTÍN GARCÍA, E.** *El turismo penitenciario franquista*. En *Historia* 16, nº 239, 1996, Madrid.
- MARTÍN JIMÉNEZ, Ignacio.** *La guerra civil en Valladolid (1936-1939). Amaneceres ensangrentados*. Ámbito, Valladolid, 2000.
- MARTÍNEZ BANDE, J. M.** *La ofensiva sobre Segovia y la batalla de Brunete*, San Martín, Madrid, 1972.
- MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo.** *Segovia, evolución de un paisaje urbano*. Colegio Superior de Ingenieros de caminos, canales y puertos, Madrid, 1976.
- MASSOT Y MUNTANER, J.** *Guerra civil i repressió a Mallorca*. L'Abadía de Monserrat, Barcelona, 1997.
- MERINERO, María Jesús.** *Segovia durante la II República: una aproximación histórica*. En Academia de Historia y Arte de San Quirce. *Segovia 1088-1988. Congreso de Historia de la Ciudad*. Actas. Junta de Castilla y León, 1991.
- MILLARES, S. y otros.** *Movimiento obrero, resistencia y represión en la provincia de Las Palmas 1931-1939*. En *Revista de Estudios de Historia Social*, nº 48-49, enero-junio 1989, págs. 231-335.
- MINGO BLASCO, J. A.** *Las depuraciones laborales en el primer franquismo: el canal de Isabel II*. En *I Encuentro de Investigadores del Franquismo*, Barcelona, 1992.
- MIR CURCO, Conxita y otros.** *Repressió econòmica i franquisme: L'actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la provincia de Lleida*. L'Abadía de Monserrat, Barcelona, 1997.

- MIR CURCO, Conxita.** *Coacción legal y oposición interior.* En *El primer franquismo.* AYER, nº 33, 1999.
- MIR CURCO, Conxita.** *Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra.* Milenio, Lleida, 2000.
- MONTÁN, Luis.** *Episodios de la guerra civil. Cómo fue tomado el Alto del León.* Valladolid, 1936.
- MONTERO MORENO, A.** *La persecución religiosa en España, 1936-1939.* BAC, Madrid, 1961.
- MONTERO, J.M.** *Los católicos y el nuevo estado. Los perfiles ideológicos de la ACNP durante la primera etapa del franquismo.* En Josep Fontana, *España bajo el franquismo*, Crítica, Barcelona, 1986.
- MORENO GÓMEZ, Francisco.** *Córdoba en la posguerra (la represión y la guerrilla, 1939-1959).* Francisco Baena, Córdoba, 1987.
- MORENO GÓMEZ, Francisco.** *La guerra civil en Córdoba (1936-1939).* Alpuerto, Madrid, 1985.
- MORENTE VALERO, Francisco.** *La escuela y el Estado Nuevo: la depuración del magisterio nacional (1936-1943).* Ámbito, Valladolid, 1997.
- MORODO, Raul.** *Acción Española. Orígenes ideológicos del fascismo.* Túcar, Madrid, 1980.
- MORROW, F.** *Revolución y contrarrevolución en España 1936-1938.* Akal, Madrid, 1978.
- NADAL, A.** *Guerra civil en Málaga.* Arguval, Málaga, 1984.
- NICOLÁS MARTÍN, Encarna.** *Conflicto y consenso en la historiografía de la dictadura franquista: una Hª social por hacer.* En *Historia y Fuentes Orales.* IV Jornadas, Ávila, 1994.
- NICOLÁS MARTÍN, Encarna.** *Los poderes locales y la consolidación de la dictadura franquista.* En *El primer franquismo.* AYER, nº 33, 1999.
- NOAKES, J.** *Orígenes, estructura y funciones del terror nazi.* En Noel O'Sullivan, *Terrorismo, ideología y revolución*, Alianza Editorial, Madrid, 1987.
- NOLTE, Ernst.** *El fascismo. De Mussolini a Hitler.* Plaza y Janés, Barcelona, 1975.
- NÚÑEZ ALONSO, Julio.** *El movimiento obrero en la ciudad de Segovia durante la II República.* En Academia de Historia y Arte de San Quirce, *Segovia 1088-1988. Congreso de Historia de la Ciudad.* Actas. Junta de Castilla y León, 1991.
- NÚÑEZ DÍEZ BALART, Mirta y ROJAS FRIEND, Antonia.** *Consejo de guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1939-1945).* Compañía literaria, Madrid, 1998.
- NÚÑEZ DÍEZ BALART, Mirta y ROJAS FRIEND, Antonia.** *Víctimas del franquismo en Madrid: los fusilamientos en el cementerio del Este (1939-1945).* En *El régimen franquista 1936-1975.* Actas del Congreso internacional, UNED, Madrid, 1993.
- ORDUÑA REBOLLO, E.** *Evolución histórica de la Diputación Provincial de Segovia 1833-1980.* Diputación Provincial, Segovia, 1991.
- ORS, M.** *La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1945).* Institut de Cultura Juan Gil Albert, Alicante, 1995.
- ORTEGA VALCÁRCCEL, M^a. E.** *La represión en Asturias. Ejecutados y fallecidos en la cárcel del Coto de Gijón.* Azucel, Avilés, 1994.
- ORTIZ HERAS, MANUEL.** *Violencia política en la II República y el primer franquismo. Albacete 1936-1956.* Siglo XXI, Madrid, 1996.
- ORTIZ VILLALBA, J.** *Sevilla: del golpe militar a la guerra civil.* Imprenta Vistalegre, Córdoba, 1998.

- OSTEOLAZA ESNAL, Maitane.** *El garrote de la depuración. Maestros vascos en la guerra civil y el franquismo (1936-1945).* Ibaeta Pedagógica, San Sebastián, 1996.
- PALOMARES IBÁÑEZ, J. M. (coord.).** *Historia de Castilla y León.* Ámbito, Valladolid, 1988.
- PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María.** *La guerra civil en la ciudad de Valladolid.* Ayuntamiento de Valladolid, 2001.
- PASTOR MARTÍN, Jesús.** *Segovia (1931-1939): Una ciudad en retaguardia.* Tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, 1990. (Inédita).
- PAYNE, S.** *El régimen de Franco, 1936-1975.* Alianza Editorial, Madrid, 1987.
- PAYNE, S.** *Falange: historia del fascismo español.* Sarpe, Madrid, 1986.
- PAYNE, S.** *La revolución y la guerra civil.* Júcar, Madrid, 1974.
- PAYNE, S.** *Los militares y la política en la España contemporánea.* Ruedo Ibérico, París, 1968.
- PEDRAZ PEÑALVA, E.** *La administración de Justicia durante la guerra civil en la España Nacional. Justicia en Guerra, Jornadas sobre la administración de Justicia.* Madrid, Ministerio de Cultura, 1990, págs. 346 y ss.
- PEMÁN, José María.** *Arengas y crónicas de guerra.* Ediciones Cerón, Cádiz, 1937.
- PEMÁN, José María.** *Mis almuerzos con gente importante.* Dopesa, Barcelona, 1970.
- PEMARTÍN, José.** *Qué es "lo Nuevo". Consideraciones sobre el momento español presente.* San Sebastián, 1938.
- PRADAS MARTÍNEZ.** *Holocausto en la Rioja.* En Cuadernos Riojanos, Logroño, 1982.
- PRATS DE LA IGLESIA, Rosa María.** *Represión económica de la posguerra: la Ley de Responsabilidades Políticas contra la Generalitat Republicana: una aproximación.* En TIEMPOS DE SILENCIO, Actas del IV Encuentro de Investigadores del Franquismo, Universidad de Valencia, 1999.
- PRESTON, P.** *Franco, Caudillo de España.* Grijablo, Barcelona, 1994.
- PRESTON, P.** *La destrucción de la democracia en España.* Turner, Madrid, 1978.
- PRESTON, P.** *Las derechas españolas en el siglo XX: autoritarismo, fascismo y golpismo.* Sistema, Madrid, 1986.
- PRESTON, P.** *Politics of revenge. Fascism and the military in twentieth-century Spain.* Unwin Hyman, Londres, 1990, págs. 3-29.
- PROSS, H.** *La violencia de los símbolos sociales, Conciencia y Libertad.* (Traducción de Vicente Romano), colección Anthropos dirigida por Vicente Romano, El Hombre, Barcelona, 1983.
- QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, R.** *Política y guerra civil en Almería.* Cajal, Almería, 1986.
- RAGUER, H.** *La espada y la cruz (La Iglesia, 1936-1939).* Bruguera, Barcelona, 1977.
- RAYMUNDO, Fco de.** *Cómo se inició el Glorioso Movimiento en Valladolid y la gesta del Alto del León.* Imprenta Católica, Valladolid, 1936.
- REIG TAPIA, A.** *Violencia y terror. Estudios sobre la guerra civil española.* Akal, Madrid, 1990.
- REIG TAPIA, Alberto.** *Consideraciones metodológicas para el estudio de la represión franquista en la guerra civil.* En Sistema, nº 33, Madrid, noviembre, 1979.
- REIG TAPIA, Alberto.** *Franco "Caudillo" mito y realidad.* Tecnos, Madrid, 1996.
- REIG TAPIA, Alberto.** *Ideología e historia: sobre la represión franquista y la guerra civil.* Akal, Madrid, 1986.
- REIG TAPIA, Alberto.** *Memoria de la guerra civil. Los mitos de la tribu.* Alianza Editorial, Madrid, 1999.

- REQUES VELASCO, Pedro.** *Atlas socioeconómico de la provincia de Segovia.* Diputación Provincial, Segovia, 1985.
- RICHARDS, Michael.** *Un tiempo de silencio: la guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco.* Crítica, Barcelona, 1999.
- RIDRUEJO, Dionisio.** *Casi unas Memorias.* Planeta, Barcelona, 1976.
- RIVERO NOVAL, M. C.** *La ruptura de la paz civil. Represión en La Rioja. 1936-1939.* Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1992.
- RODRÍGUEZ OLAZABAL, J.** *La administración de justicia en la guerra civil.* Guatemala, 1981.
- RUBIO, Javier.** *La emigración de la guerra civil 1936/39.* San Martín, Madrid, 1977.
- RUIZ RICO, J. J.** *El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco.* Tecnos, Madrid, 1977.
- RUIZ VILAPLANA, A.** *Doy Fé... un año de actuación en la España nacionalista.* América, Cali, 1938.
- SABÍN, José Manuel.** *Prisión y muerte en la España de Franco.* Anaya, Madrid, 1996.
- SALAS LARRÁZABAL, R.** *Los datos exactos de la guerra.* Ríoduero, Madrid, 1980.
- SALAS LARRÁZABAL, R.** *Pérdidas de la guerra.* Planeta, Barcelona, 1977.
- SALAS, N.** *Sevilla fue la clave: república, alzamiento, guerra civil (1931-1939).* Castillejo, Sevilla, 1992.
- SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José.** *La jerarquía eclesiástica y el Estado franquista: las prestaciones mutuas.* En *El primer franquismo.* AYER. nº 33, 1999.
- SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (coord.).** *El primer franquismo.* AYER. nº 33, 1999.
- SÁNCHEZ RECIO, Glicerio.** *Las Responsabilidades Políticas en la posguerra española. El partido judicial de Monóvar.* Universidad de Alicante, 1984.
- SANTACANA I TORRES, Carles.** *Victoriosos y derrotats. El fraquisme a L'Hospitalet, 1939-1951.* Barcelona, 1994.
- SAZ CAMPOS, I.** *El franquismo. ¿régimen autoritario o dictadura fascista?.* En J. Tusell y otros. *El régimen de Franco.* UNED, Madrid, 1993.
- SEARA VALERO, R.** *La guerra civil y sus consecuencias en la Universidad Española. Represión y depuraciones en el cuerpo de catedráticos de las facultades de Medicina.* Tesis inédita. Dpto. Historia de la Medicina Universidad de Granada, 1986.
- SECO SERRANO, C.** *Militarismo y civilismo.* Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1984.
- SERRANO SÚÑER, Ramón.** *Entre el silencio y la propaganda. La historia como fue.* Planeta, Barcelona, 1977.
- SEVILLANO CALERO, Fco.** *Cultura, propaganda y opinión en el primer franquismo.* En *El primer franquismo,* AYER, nº 33, 1999.
- SIERRA HOYOS, Félix.** *La fuga de San Cristobal. 1938.* Pamiela Argitaletxea, Pamplona, 1981.
- SOLÉ I SABATÉ, J. M.** *La repressió franquista a Catalunya 1938-1953.* Edicions 62, Barcelona, 1985.
- SOPEÑA MONSALVE, Andrés.** *Florido Pensil.* Barcelona, Crítica, 1994.
- SOUTO BLANCO, María Xesús.** *La represión franquista en Lugo.* Edicions do Castro, Lugo, 2001.
- SOUTWORTH, H. R.** *Antifalange. Estudio crítico de Falange en la guerra de España.* Ruedo Ibérico, París, 1967.
- SOUTWORTH, H. R.** *El mito de la cruzada de Franco.* Ruedo Ibérico, París, 1963.
- STAMPA IRUSTE, F.** *El delito de rebelión.* Ediciones Estudiantes Españoles, Madrid, 1945.
- SUÁREZ, Ángel y Colectivo 36.** *Libro blanco sobre las prisiones del franquismo.* París, Ruedo Ibérico, 1976.

- TAMAMES, R.** *La República. La era de Franco*. Alianza Editorial, Madrid, 1977.
- THOMAS, H.** *La guerra civil de España*. Grijalbo, Barcelona, 1981.
- TOMÁS ARRIBAS, J. (coord.)**. *Historia de Segovia*. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1987.
- TORRENT, Martín.** *¿Qué me dice usted de los presos?*. Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, 1942.
- TUÑÓN DE LARA, M. (director)**. *La guerra civil española 50 años después*. Labor, Barcelona, 1985.
- TUSELL, Javier.** *Carrero Blanco*. Temas de Hoy, Madrid, 1994.
- TUSELL, Javier.** *La dictadura de Franco*. Alianza Editorial, Madrid, 1988.
- TUSELL, Javier.** *La oposición al régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de la investigación*. Congreso internacional. Octubre, 1988. UNED, Madrid, 1990. vol. 2.
- TUSELL, Javier.** *Las elecciones del Frente Popular*. 2 vols. Edicusa, Madrid. 1971.
- VEGA SOMBRÍA, S.** *La construcción del Nuevo Estado desde la perspectiva del servicio de espionaje republicano*. En *Segon Congrés Recerques, Enfrontaments Civils: posguerres i reconstruccions*, Universitat de Lleida, 2002.
- VEGA SOMBRÍA, S.** *La implantación del franquismo en Segovia. La incautación de bienes a los oponentes políticos*. En *TIEMPOS DE SILENCIO, Actas del IV Encuentro de Investigadores del Franquismo*. Universidad de Valencia, 1999.
- VILAR, P.** *La guerra civil española*. Crítica, Barcelona, 1986.
- VILAR, Sergio.** *La naturaleza del franquismo*. Península, Barcelona, 1977.
- VILLAR SALINAS, J.** *Repercusiones demográficas de la última guerra civil española*. Sobrinos de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos, Madrid, 1942.
- VIÑAS, Ángel** *Guerra, dinero, dictadura. Ayuda fascista y autarquía en la España de Franco*. Crítica, Barcelona, 1984.
- WHITAKER, J.** *We cannot escape History*. The Macmillan Company, New York, 1943.
- WOLF, S. J. (comp)**. *La naturaleza del fascismo*. Grijalbo, México, 1974.
- WOLF, S. J.** *Fascism in Europe*. Methuen, Londres, 1981.

LOS ANEXOS:
LAS VÍCTIMAS DE LA
REPRESIÓN FRANQUISTA EN SEGOVIA

Nº 1. Relación cronológica de víctimas de la represión “ilegal” por localidades

A continuación se relatan todos los casos comprobados de ejecuciones ilegales a lo largo de la provincia de Segovia. La amplitud o escasez de los datos de las víctimas o de los pormenores de los hechos, dependen de la información que se haya podido obtener que, como se verá, varía mucho de unos casos a otros.

Segovia

A pesar de ser en la capital de la provincia donde se concentraron, como es fácil imaginar, mayor contingente de falangistas, no fue el lugar donde se inició la represión, al menos no se han encontrado datos, ni documentales ni testimoniales, de fallecidos en estas circunstancias hasta bien entrado el mes de agosto.

Las primeras víctimas en Segovia eran vecinos del barrio de San Lorenzo, precisamente fallecidos el 10 de agosto, día de su patrón. En *El Adelantado* del 11 Agosto de 1936, se publicaba la noticia del hallazgo de dos cuerpos sin vida en los alrededores de Segovia: *“Aparecen dos cadáveres en la Alameda, de **Cecilio García San Felipe** y **Petra García San Felipe**, ambos naturales de Escobar de Polendos y con domicilio en las barracas próximas al puente de la carretera de Boceguillas. Los dos sujetos bien conocidos de la policía, habiendo sufrido varias quincenas por robos. Parece ser que anoche estos sujetos se dedicaban a robar patatas. Se ignora quienes han dado muerte a las personas citadas”¹.*

Cecilio tenía 23 años, era soltero y trabajaba como jornalero, mientras que Petra tenía 29 años y estaba casada. Según testimonios², fueron muertos por la Guardia Civil, mientras cogían patatas en las huertas de la Alameda del Parral, pues eran gente humilde con pocos recursos. Al parecer estas muertes no tenían motivación política, si bien es una extraña coincidencia que murieran recién iniciada la guerra.

• 10 de agosto

Jesús-Vito Hernández Gil; 27 años, nacido en Navas de Oro, vivía en Segovia, abogado, soltero. Militante activo de las JSU. Había dado un mitin en su pueblo poco antes de las elecciones de febrero. Murió en el término de Sotosalbos, en la finca “Mata de Pirón”, a unos 15 km. de la capital. Fue enterrado en el mismo lugar donde se recogió el cadáver. Fue la primera víctima política conocida de la capital. Fue sacado y ejecutado por una escuadra de falangistas de Segovia³.

Los primeros días de represión en Segovia, los falangistas utilizaron el procedimiento que eufemísticamente llamaban “la carrera del galgo” o “la del conejo”, también llamada “ley de fugas”. Este método consistía en que llevados los detenidos a las inmediaciones del cementerio, a una señal de los verdugos, las víctimas debían echar a correr, si todavía les quedaban fuerzas, después de las palizas que habían sufrido previamente. De tal manera que quién conseguía escapar vivo se salvaba. Bajaban corriendo desde el cementerio por la avenida de San Gabriel, conocida en Segovia como la “Cueva de la zorra”; o por el lado este bajando por las cuevas hacia el río Eresma. Según cuenta Gregorio González hubo carrera dos o tres días⁴.

• 12 de agosto

Este día murieron tres o cuatro jóvenes obreros en los alrededores de la capital. Gregorio González, vio a José Escudero, con otros tres fallecidos del mismo día, pero sólo se tiene constancia de los tres anotados más abajo. Ninguno de ellos pasó por la cárcel.

¹ *El Adelantado*, 11 de Agosto de 1936.

² Testimonio de Gregorio González y María Fuentetaja.

³ Testimonio de Manuel González.

⁴ Testimonio de Gregorio González.

José Escudero Otero; 22 años, soltero, nacido y residente en Segovia, cantero. Militante de las JSU. Es muy probable que corresponda a este joven la anotación del cementerio de la capital que apunta la *“recogida de un cadáver en la explanada del cementerio, hacia las 4, sin identificar, sólo residía en San Lorenzo”*; corroborado en el libro de enterramientos en el que se inscribió únicamente la sepultura de *“uno de San Lorenzo”*⁵. Por el contrario sí está anotado en el libro de defunciones de Santa Eulalia, parroquia a la que pertenecía el cementerio municipal. En la partida de defunción se recoge que fue *“muerto a las 4 de la mañana (del día 12), junto al cementerio (en la explanada) por heridas producidas por arma de fuego”*⁶.

Su hermana Sofía recuerda que los falangistas fueron a buscarlo a su casa, a pleno sol, él los conocía pues los visitantes eran de Segovia. Les dijo: *“¿Dónde vais?”*. *“A por ti”*, le contestaron. Se lo llevaron al cuartel de FE, donde pasó la noche y al día siguiente lo llevaron al cementerio, junto a otro detenido, José Díez. En la explanada les dijeron que echaran a correr. Cuando ambos infortunados comenzaron a correr, Escudero cayó al suelo herido en una pierna, donde lo remataron, por el contrario José Díez pudo escapar⁷.

Otros dos jóvenes fueron muertos, en el Puente de Tejadilla, a las afueras de Segovia, en la carretera de Arévalo. Ambos eran también afiliados a las Juventudes Socialistas Unificadas. De todos los fusilados en la capital recogidos en este trabajo, Atanasio y Eugenio son los únicos inscritos en los libros del cementerio de Segovia y en el Registro Civil. Además se realizó el preceptivo expediente judicial de levantamiento de los cadáveres, pero en él tan sólo figura el resultado de la autopsia⁸.

Los dos jóvenes eran:

Atanasio Antonio Álvaro; 20 años, natural y vecino de Segovia, ebanista, soltero.

Eugenio Fernández Gómez; 20 años, natural y vecino de Segovia, carpintero, soltero. Residía en el barrio de San Lorenzo, donde sus padres tenían una taberna.

- **14 de agosto**

Juan Romano Sacristán; 34 años, casado, nacido en Turégano, vivía en los jardines del Alcázar de Segovia, donde trabajaba como guarda. Fue encontrado su cadáver en el término de La Lastrilla, en cuyo cementerio fue enterrado⁹. Según el informe de la Guardia Civil *“fue de ideología izquierdista y propagandista de tales ideas, como también desafecto al Glorioso Movimiento Nacional”*¹⁰.

- **15 de agosto**

En la madrugada del 15 de agosto se produjo una saca de presos de la *Cárcel Vieja* y de la provincial, como represalia del bombardeo republicano de la mañana anterior. Hemos podido comprobar la muerte de 10 detenidos en las tapias del cementerio de la capital. Las órdenes de traslado llevaban la firma del comandante España (se hizo cargo de los presos de ambas sacas Santos Fernández) y pretextaban la conducción a la prisión de Burgos de los siguientes presos:

⁵ Cementerio de Segovia, libro de enterramientos y carpeta de agosto de las licencias de enterramiento.

⁶ Arch. Epis. Cpta. de licencias de defunción Parroquia de Sta. Eulalia, 1936.

⁷ Testimonio de Sofía Escudero, hermana del fallecido.

⁸ Arch. Prov. J. 4850. Exp. nº 104/36. Auto del 24/09/36. *“Encontrados el 13 por la mañana en Tejadilla, termino municipal de Segovia, los cadáveres que resultaron ser (...) Eugenio sufría herida cavidad craneal y pérdida masa encefálica, y Atanasio perforación paquete vascular del cuello principalmente la carótida de la aorta y borde interno del pulmón izquierdo ambas por arma de fuego y por personas hasta ahora desconocidas”*.

⁹ Arch. Prov. J. 4850. Exp. nº 105/36. Auto del 30/09/36: *“En la mañana del 14, en el Parralejo de la carretera de Boceguillas, encontrado un cadáver no identificado, muerte por dos heridas de bala, región frontoparietal derecha orificio entrada dicha región y salida orbitaria derecha y otra de entrada y salida por el costado izquierdo”*.

¹⁰ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 220, 2, 1948, Exp. nº 1, Juan Romano Sacristán.

De la Cárcel Vieja: Fueron llevados a pie desde la céntrica prisión hasta el cementerio para mayor escarnio público, los siguientes presos:

Pedro Natalías García; natural de Barcelona, 45 años, casado, maestro nacional, era director del Grupo Colmenares. Padece una campaña de *El Adelantado* y los medios católicos de la provincia, acusado de haber retirado "*irrespetuosamente*" y después destruido, los crucifijos de las aulas de la escuela que dirigía. Tras una inspección se demostró que estaban almacenados en el propio centro. Había sido redactor encargado de la sección de enseñanza del diario *Segovia Republicana*, en 1931¹¹. Era militante de Trabajadores de la Enseñanza.

Manuel Gómez Fernández; natural y vecino de Segovia, 43 años, casado, jefe de cartería de Correos, depurado. Permanecía preso desde el 23 de julio. Era el presidente de la Agrupación Socialista de Segovia.

Santos San Frutos Anceja; natural de Bernardos, vecino de Segovia, 38 años, maquinista de Obras Públicas, casado. Fue detenido el 5 de agosto por una patrulla de requetés en el taller de Obras Públicas donde trabajaba. A continuación fue puesto a disposición del comandante militar en la prisión provisional por ser "*extremista peligroso*" según el informe del Gobierno Civil¹².

Teofilo Carrasco Linares; vecino de Valverde del Majano, sólo se sabe de él que había nacido en Granada y estaba casado. Era el presidente de la Casa del Pueblo de su localidad, corresponsal del *Heraldo* y hermano del militar retirado, José Carrasco Linares, presidente de Izquierda Republicana de Segovia (pasado a Madrid el 19 de julio, mandó -durante algún tiempo- las Milicias Segovianas Antifascistas).

Por su parte, otros presos iban a ser trasladados oficialmente a Salamanca:

Desde la Cárcel Vieja:

Julio Fuster García; 44 años, casado, nacido en Toledo, maestro nacional. Dirigente socialista en Segovia, fue candidato a diputado por esta provincia en las elecciones de 1933. Durante la campaña electoral compañeros maestros le enviaron cartas de apoyo que después fueron utilizadas como prueba contra ellos para depurarlos¹³. En las misivas se ofrecían para colaborar en la campaña o en las mesas para el día de las votaciones. En 1934 fue procesado por la huelga general de octubre. Al resultar absuelto en este proceso recibió otra oleada de "*cartas de encomio y de felicitación*" de sus compañeros maestros.

Alejandro Arranz Marinas; 23 años, nacido y vecino de Segovia, soltero. Detenido el 13 de agosto, "*le dieron una paliza y lo dejaron tirado, medio muerto, en el patio de la Cárcel Vieja*", donde estaba su hermano Gabriel, que no lo reconoció de "*lo desfigurado que estaba*"¹⁴. En el sumario 586/36 aparece la siguiente explicación oficial de su desaparición: "...se dieron órdenes para que entre otros fuera trasladado a Salamanca Alejandro Arranz y resultando que él mismo al ser conducido (...) huyó de la camioneta en que era conducido sin que se haya vuelto a tener noticias de su paradero"¹⁵.

Jesús Serrano González; 20 años, nacido en Fuentepelayo, soltero, fontanero, vecino del barrio de San Lorenzo. Afiliado a Juventudes Socialistas Unificadas. Había sido interventor durante las elecciones de febrero. Tuvo un incidente cuando impidió que los militantes de derecha se llevaran la urna de su colegio electoral, durante un apagón de luz que había sido provocado por los simpatizantes de la candidatura conservadora.

¹¹ Arch. Mun. Segovia. *Segovia Republicana*. nº 1. 5 mayo 1931.

¹² Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 299, 1, 1936, Exp. nº 8.

¹³ Entre las muchas cosas encontradas en domicilio de Julio Fuster aparecían cartas de compañeros, al menos 24, pues aparece en un informe un maestro con el nº 24. AGA, Educación, Depuración, Exp. Dep. Bernabé Ranz Vázquez, figura con el nº 18 en la lista de maestros que escribieron a Fuster.

¹⁴ ARRAZ MARINAS, Gabriel. op. cit. pg. 183.

¹⁵ Arch. Prov. J. 4852. Causa 586/36.

De la Prisión Provincial:

Fueron sacados de la Prisión Provincial y llevados al cementerio de la capital:

Pascual Pascual Galindo; 31 años, nacido en La Lastrilla, vivía en Segovia. Militante socialista, había sido procesado ya en 1934, por la huelga general de octubre en Segovia. Preso desde el 21 de julio de 1936.

José Peña Huerta; Natural de Pelayos del Arroyo, 45 años, funcionario del Ayuntamiento de Segovia, casado. Era dirigente del PSOE de Segovia, por lo que fue detenido el mismo 19 de julio. En la mañana del 15 de agosto informaron a su familia que había sido trasladado a Burgos.

Manuel Serrano González; 18 años, nacido en Francia (donde había ido su familia a trabajar), soltero, estudiante. Hermano del anterior y también afiliado a JSU..

Por otro lado, también el día 15, fallecieron en Segovia dos significados vecinos de Duruelo, el médico y el maestro, ambos de ideología republicana y -según testimonios de aquella localidad- habían sido detenidos el mismo día y trasladados a Segovia.

Constantino García Martín; 58 años, casado, nacido en La Lastrilla, maestro nacional en Duruelo, donde residía. Según el informe del alcalde para el expediente de depuración, *"había sido detenido por milicias de Falange el 9 de agosto de 1936 y pertenecía a Izquierda Socialista"*¹⁶.

Mariano Álvaro Mateos; 49 años, casado, médico de Duruelo. En su expediente de desaparición la viuda afirmaba que su marido había muerto por las bombas de la aviación el día 14 de agosto¹⁷. Puede que la esposa prefiriera que figurara oficialmente dicha información y no la de haber sido fusilado.

Otro vecino de Segovia fue fusilado el mismo día, según su familia sin pasar por la cárcel, en el Puente Oñez:

Mario Tomé Villoslada; 41 años, natural de Zamarramala, residía en Segovia, obrero, soltero, afiliado a UGT. Era cuñado de un dirigente socialista, el ferroviario Delfín Arroyo Cuesta, que no estaba en la casa porque se sabía perseguido. Fue detenido a la hora de comer por un guardia de seguridad vestido de falangista, con el que había discutido Mario en la Plaza Mayor¹⁸.

Detuvieron a la vez a un vecino de Mario Tomé, que también fue ejecutado el mismo día:

Mariano Barba de Pablos, nacido en Sangarcía, 53 años, jornalero, viudo.

• 19 de agosto

Francisco de la Serna Lobato; 30 años, casado, taxista segoviano, probablemente de ideología republicana. Fue asesinado por un compañero taxista que *"aprovechando los servicios de los falangistas en aquellos días"*¹⁹, sació su sed de venganza personal. Por distintos testimonios hemos sabido que al acusado le llamaban "el chulo de la valbulina", con alguna enemistad personal, sin tintes políticos, con Francisco Serna. Algunos dicen incluso si Serna era falangista. En cualquier caso, parece que tuvieron una pelea poco antes del mes de julio.

¹⁶ AGA, Educación, Depuración, Leg. 356. Exp. Dep. Constantino García.

¹⁷ Puede ser que la viuda no quisiera que se supiera que su marido había sido ejecutado. En cualquier caso el enterrador del cementerio Eusebio Callejo no aclara las circunstancias de la muerte del médico, pues declaró que Mariano *"...fue enterrado en el segundo patio, si poder precisar ni la zanja ni la sepultura, suponiéndose que lo sería con las otras víctimas que recibieron sepultura aquel mismo día, muertos a consecuencia de la aviación y de la guerra y que por no conocerse los datos personales de ellas, no se registrasen en el registro del cementerio ni en ningún registro"*. Reg. Civ. de Segovia, carpeta de 1938. Exp. de defunción de Mariano Álvaro Mateos.

¹⁸ Testimonio de Modesta Arroyo, sobrina de Mario Tomé. Cuenta que el conductor de la camioneta le informó a una hermana de Mario que éste se había santiguado antes de ser fusilado.

¹⁹ Pris. Prov. Exp. nº 4134, de Felipe Valverde Muncio. Figura la sentencia de la causa 467/36 por asesinato, contra Felipe Valverde Muncio, dictada en Segovia, 25/11/36.

Cuando llegaron a Segovia los falangistas de Valladolid, éstos tenían su cuartel en el céntrico palacio de la plaza del Conde Cheste, allí fue a denunciarle Felipe Valverde diciendo que era un *“extremista masón y contrario al movimiento nacional”*. Fueron a casa de Serna, al que dijeron que tenían que hacer un servicio, aunque él decía que venía ya del regimiento²⁰, pero fue con ellos. Según la sentencia que enjuició los hechos, *“el 19 de agosto sobre las 20.30 horas se presentó Felipe acompañado de otro, Benigno Pereda, en un coche conducido por Evaristo Barrero a la puerta domicilio Laserna (sic), al que sacó de su casa, lo llevaron a la carretera de la Granja y pasada la casilla de peón caminero le obligó el Valverde a bajar haciéndole varios disparos, que le provocaron la muerte. Evaristo Barrero es de intachable conducta y denunció los hechos a los jefes FE”*²¹. Leído este comentario sobre Evaristo Barrero da a entender como que fue él quien denunció un vulgar asesinato, habiendo colaborado en un crimen contra su voluntad, o inesperadamente, pues no sabía el objetivo del viaje. Por el contrario hay testimonios que le señalan como uno de los falangistas más significados en la represión de la capital²².

Este fue el único caso de ejecución “ilegal” investigado por los tribunales de justicia, en este caso militar.

- **20 de agosto**

José Gutiérrez Sastre; 40 años, natural y vecino de Segovia, casado, oficial de Correos, dirigente de I.R. En el pinar de Torrecaballeros fue ejecutado por la espalda como figura en la inscripción de defunción pues tenía una *“herida por arma de fuego en región subclavicular, según resulta del reconocimiento practicado...”*²³. Fue cesado de su cargo por orden del gobernador civil el 26 de agosto de 1936.

- **27 de agosto**

En esta madrugada fueron sacados tres condenados por la justicia militar y un destacado detenido gubernativo: el delegado provincial de Trabajo Juan Marco Elorriaga. La *“superior autoridad militar de la plaza”* (así escribía el comandante España²⁴) ordenó el traslado a Salamanca, a donde, evidentemente, no llegaron. Se hizo cargo de los presos José Hernández Contreras. Es probable que fueran ejecutados en el Puente Oñez, lugar elegido también por el encargado de la conducción para el fusilamiento de la saca del 31 de agosto.

Juan Marco Elorriaga; 49 años, natural de Zamora, vecino de Segovia, delegado de Trabajo. En *El Adelantado* había merecido una felicitación por haber evitado la huelga en el sector cerámico: *“Merece plácemes la labor de Marco Elorriaga, evitando huelga en cerámica”*²⁵.

Los tres sentenciados a 30 años por la causa 112/36, formaban parte de las milicias republicanas de Madrid que habían tomado El Espinar durante unas horas del día 25 de julio²⁶. Por ese sumario habían sido fusilados cuatro milicianos el 2 de agosto, acusados de haber disparado contra un falangista. Al parecer, a sus correligionarios de Segovia no les pareció suficiente castigo los 30 años de condena y los fusilaron por su cuenta. Eran los siguientes:

Enrique Castelló Castelló; 23 años, nacido y vecino de Madrid, dependiente.

²⁰ A raíz del inicio de la guerra todos los conductores profesionales propietarios de vehículos, tenían que pasar por los centros oficiales: Regimiento, Academia y Gobierno Civil, antes de ir a casa por la noche para informar de lo que habían hecho, y por si tenían que hacer algún servicio.

²¹ Sentencia aludida en la nota 19.

²² Testimonios de Gregorio González, Manuel González, Isidoro Romano.

²³ Reg. Civ. Torrecaballeros, Ins. Def. José Gutiérrez Sastre.

²⁴ Orden de traslado firmada por el Cmte. España, con fecha 26 de agosto. Contenida en el Exp. de Marco Elorriaga, Pris. Prov.

²⁵ *El Adelantado*, 25 de junio de 1936.

²⁶ Causa 112/36, que explicamos en el anexo siguiente.

José Aguilar Roldán; 34 años, natural de Granada, tallista.

José Pizarro Ciné; 30 años, nacido en Madrid, tipógrafo.

- **30 de agosto**

Anastasio Miguel Pérez; 44 años, natural de Fuentespina, (Burgos); ayudante de la farmacia de Bernardos, donde residía. Estaba encartado en la pieza separada de la causa 392/36 que enjuiciaba los hechos ocurridos en Bernardos, al iniciarse la guerra. Aunque en el Registro Civil de Segovia figura *“muerto en Segovia”*, los testimonios aportados en su expediente aseguran que vieron su cadáver en el Puente Oñez²⁷, como también afirman Leopoldo Cámara y otros vecinos de Navas de Oro.

- **31 de agosto**

En la segunda saca como represalia por bombardeos republicanos, se ha comprobado la muerte de 7 presos, que fueron llevados al Puente Oñez²⁸, donde serían ejecutados y enterrados. De la *Cárcel Vieja* fueron entregados el 31 de agosto *“a la fuerza que se presentó a recogerlos en virtud de orden del gobernador civil de la provincia para traslado a Valladolid a disposición de la autoridad militar de aquella provincia”*²⁹. Como había ocurrido con la saca del 27 de agosto, se hizo cargo de los presos José Hernández Contreras. Oficialmente, según figura en sus expedientes de desaparición, sus muertes fueron ocasionadas cuando *“al ser conducidos desde la prisión de esta capital a Valladolid saltaron de la camioneta en la cual iban transportados”*³⁰.

Arturo Aparicio González; nacido en Bercial, 59 años, casado, residía en Espirido, donde era médico. Militante de I.R. En *El Adelantado* de 31 de agosto de 1936 aparece como detenido. Según el informe del Gobierno Civil, *“fue archivada la causa que se instruyó por excitación a la rebelión, la que se dió por terminada sin responsabilidades, sentencia aprobada por la auditoría de guerra, decretándose quedara en libertad en cuanto a dicha causa y continuara detenido a disposición del Gobierno Civil, cumplimentándose dicho acuerdo el 20 de agosto pasado desde cuya fecha quedó a disposición del gobernador civil”*³¹.

Ángel Gracia Morales; nacido en Becerril de la Sierra, Madrid, 42 años, casado, maestro nacional. Director de la Escuela Graduada de los Huertos en Segovia. Afiliado a I.R. y a Trabajadores de la Enseñanza. Según informe del gobierno militar *“no tenía antecedentes ni se había ordenado instruir diligencias ni causa de ninguna clase”*³².

Agustín Hernández y Hernández; nacido en Villa del Campo, Cáceres, 59 años, casado, vivía en Segovia. Era teniente de la Guardia Civil retirado. Tesorero de la Directiva

²⁷ Arch. Prov. 1948, Exp. nº 3. Anastasio Miguel Pérez. El testigo Santos Gozalo Gil, vecino de Sta. María de Nieva, 26 años, mecánico, ayudante del conductor del coche de línea, *“el 30 de agosto, por la carretera de Sta. María a Segovia, un puente a unos 19 km. de Segovia y en la parte de abajo, vio varios cadáveres y entre ellos el de Anastasio...”*.

²⁸ Este paraje aparece en la memoria popular como el lugar donde hubo más ejecuciones de la provincia, aunque en este trabajo no se hayan comprobado más que 9. Jaime Gil de Biedma, que siendo niño pasó la guerra civil en Nava de la Asunción (villa cercana al Puente Oñez), escribió un poema en el que habla de 5 cadáveres, aunque no sabemos a qué saca se refieren. Dicen así los versos:

A la vuelta, de paso por el puente Oñez,
buscábamos la arena removida
donde estaban, sabíamos, los cinco fusilados.
Luego la lluvia los desenterró,
los llevó río abajo.

GIL DE BIEDMA, Jaime. *Las personas del verbo*. Círculo de Lectores, Barcelona, 1994.

²⁹ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 299, 1, 1936, Exp. nº 1 desaparición de Agustín Hernández. Informe del dtor. Prís. Salustiano Martín, fechado el 24/11/36.

³⁰ Arch. Prov. Exptes. de Reg. Civ. Cpta. 1937. Exp. Desap. Agustín Hernández. Informe firmado por el gob. civ. interino de Segovia, José Jiménez Alfaro el 17/12/36.

³¹ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 299, 1, 1936, Exp. nº 3, Arturo Aparicio. Informe fechado el 25/11/36.

³² Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 299, 1, 1936, Exp. nº 2, Ángel Gracia.

provincial de I.R. Fue detenido el 26 de julio. Según el informe del gobierno militar *“no tenía antecedentes ni se había ordenado instruir diligencias ni causa de ninguna clase”*³³.

Manuel González Herrero; natural de Fuentepelayo, residente en Segovia, 35 años, casado, fontanero, dirigente de la Casa del Pueblo. Lo habían detenido el 20 de julio. Era tío de los hermanos Serrano González, fusilados el 15 de agosto.

Heliodoro Gregorio Fernández Caraballo; 42 años, de Villaconejos (Madrid), casado. Secretario del Ayuntamiento de Carbonero el Mayor. Dirigente de la Casa del Pueblo local, en su sección de Oficios Varios. Detenido en la Prisión Provincial desde el 29 de julio.

Antonio Hernanz Benito; natural de La Matilla, vecino de Segovia, 25 años, camarero. Había sido detenido el 25 de julio. Dirigente de la Casa del Pueblo de Segovia, de la que había sido presidente interino en los primeros meses de 1936.

Gregorio Esteban Álvaro; natural de Siguero, 27 años, carpintero, apodado *Dientes de Oro*, afiliado a JSU. Había sido detenido el 20 de julio, liberado el 25, reingresó el 26 del mismo mes. Figura en una diligencia de citación, firmada por el oficial encargado de la Audiencia de Segovia de las notificaciones a los procesados, *“le han manifestado algunas personas que fue trasladado a la cárcel de Valladolid”*³⁴, que, como ya se ha escrito, era la fórmula utilizada para encubrir la saca del 31 de agosto.

También formaba parte de la saca, el guardia de seguridad **Florencio de Rey García**, de antecedentes izquierdistas, *“se distinguió en la manifestación del 1 de mayo de 1936 donde era portador de una bandera roja”*, pero se salvó pues, *“al ser sacado de la cárcel en una camioneta se tiró de ella y huyó a zona roja”*³⁵. En 1941 fue procesado por auxilio a la rebelión y condenado a 6 años.

Además de los reseñados, por diversas fuentes, hemos comprobado la muerte de otros vecinos de Segovia, pero de los que no se tiene constancia de la fecha de ejecución:

Anselmo San Frutos de Diego; 27 años, casado, nacido y residente en Segovia. Obrero de la fábrica Klein, donde fue detenido por un sargento de la Guardia Civil. Según testimonios fue fusilado en el “Pinarillo”, situado a las afueras de la capital. No se conoce el día exacto del mes de agosto en que se produjo su muerte. Era un obrero muy conocido por su actividad sindical en la Casa del Pueblo. Era uno de los 62 obreros despedidos de la Klein por la huelga de 1934. Además estuvo procesado por el sumario 110/34, acusado (con Vicente Galocha) de reunión clandestina en las cercanías del cementerio con otros 14 huelguistas, el 6 de octubre de 1934³⁶.

Nicolás Álvaro Lobo; 24 años, natural de Sepúlveda, vecino de Segovia, cerámico, soltero. Militante del PCE. Aficionado al deporte, era portero del equipo de fútbol local Gimástica Segoviana.

Atilano-Félix Guantes Herrero; 29 años, nacido en Castronuño (Valladolid), ferroviario, soltero. Dirigente de la JSU. Testimonios lo creen muerto el 15 de agosto³⁷.

Es muy posible que estos últimos formaran parte de la saca del 15 de agosto pues, tanto Nicolás como Félix, aparecen en un informe del Gobierno Civil, al Juzgado de 1ª Instancia, fechado el 26 de enero de 1937, en el que figura *“habiendo desaparecido”*³⁸ en una relación con otros detenidos cuya muerte ha sido comprobada el 15 de agosto: José Peña, hermanos Serrano y Alejandro Arranz. Dicho informe era sobre los procesados en

³³ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 299, 1, 1936, Exp. nº 1, Agustín Hernández.

³⁴ Arch. Prov. Caja J/4851. Causa 117/36, folio 299. Antes de conseguir la orden de la saca, encontramos una diligencia de citación (firmada por el oficial encargado de la Audiencia de Segovia de las notificaciones a los procesados) en la que figuraba *“le han manifestado algunas personas que [Gregorio Esteban] fue trasladado a la cárcel de Valladolid”*, que, como ya se ha escrito, era la fórmula utilizada para encubrir la saca del 31 de agosto.

³⁵ Sumario 66.355, contra Florencio del Rey.

³⁶ Arch. Prov. Penal 140(2) 1933/1943.

³⁷ Testimonio Carmen Arranz, Liborio López.

³⁸ Arch. Prov. Caja J/4851. Causa 117/36, 2ª Cpta.

rebeldía por el sumario 117/36 (reseñado en el cap. 2. 1.). De todos los encausados, unos habían pasado al otro lado, otros estaban presos y el resto habían sido fusilados.

LAS COMARCAS SERRANAS

Villacastín

Esta villa era un centro importante de actividad política republicana, había mítines y reuniones políticas con cierta asiduidad. El líder republicano local era el cartero y concejal republicano Feliciano Gordo, que tuvo que escapar para no ser ejecutado. Villacastín, situada estratégicamente haciendo encrucijada entre la carretera de la Coruña y la carretera de Ávila a Segovia, vivió el paso de la Columna Mangada el 24 de julio de 1936.

• **6 de agosto de 1936**

Fueron muertos en un despoblado a las afueras de Villacastín, cerca de la carretera, un capataz de montes, su hija y un yerno.

Celedonio Benito García; 66 años, nacido en Peguerinos (Ávila), vecino de Villacastín, capataz de montes.

Purificación Benito Bernaldo de Quirós; hija del anterior, 32 años, también nacida en Peguerinos; vecina de Villacastín, soltera.

Benito Rubio Martín; 37 años, nacido en Villacastín, vivía en San Rafael, albañil, casado con otra hija de Celedonio. Estaba en casa de los suegros cuando los falangistas fueron a buscar a Celedonio y a su cuñada. Benito quiso impedir la ejecución acompañando a las víctimas, pero sólo consiguió que lo fusilaran también a él.

• **12 de agosto**

En el término de Vegas de Matute, en un soto llamado "La Fresneda", fueron hallados el 13 de agosto, e inhumados allí mismo, los cadáveres de:

Luis García Hernández; 42 años, nacido en Otero de Herreros, maestro destinado en Villacastín. Afiliado a Trabajadores de la Enseñanza.

Julio Maroto Ortega; 60 años, casado, nacido en Guijasalvas. Trabajaba de caminero en Villacastín, aunque vivía en Ituero, a donde fueron los falangistas a buscarlo.

• **19 de agosto**

Julio González Gil; 41 años, casado, natural de Navas de Oro, maestro en Villacastín. Muerto en esta última villa, en un despoblado cerca de la carretera de la Coruña. Estaba pasando las vacaciones en su pueblo. Allí acudieron los falangistas a reclamarlo para llevárselo de nuevo a Villacastín donde lo ejecutaron. Testimonios afirman que su cadáver estuvo sin enterrar durante varios días, en el paraje "Valdeherrera", al lado de la carretera porque "*nadie se atrevía a recogerlo*"³⁹; lo que justifica que fuera inscrito en el Registro Civil por el sereno de la villa el día 24 de agosto⁴⁰, 5 días después de su ejecución.

Además, por distintos testimonios conocemos la muerte de otros tres vecinos de esta villa, si bien no sabemos la fecha de sus ejecuciones:

Tomás Gómez; nacido en Villacastín, casado, obrero, de unos 50 años. Era el presidente de la Casa del Pueblo local. Los falangistas, la "columna negra" fueron a buscarlo al campo, en el término denominado "Cacerón", y allí mismo lo ejecutaron.

Sigeberto Fernández García; nacido y vecino de Villacastín, 28 años, casado, era sastre.

Antonio Macalla Cuello; nacido en Cañaveras (Cáceres), 47 años, casado, labrador. Este hombre había disparado a los camiones con soldados que venían de

³⁹ Testimonio de Pedro Grande Valverde.

⁴⁰ Reg. Civ. de Villacastín, Ins. Def. 24/08/36.

Valladolid camino del Alto del León, a su paso por la plaza de la villa. Poco después fue denunciado por su propia esposa, con la que, al parecer, ya no mantenía buenas relaciones.

Navas de San Antonio

El día 26 de julio de 1936, hacia las 3 de la tarde, los falangistas fusilaron a dos hermanos asturianos, que estaban trabajando a jornal como segadores de hierba con guadaña. Eran buenos trabajadores por lo que llevaban varios años viniendo a segar. Cuentan que venían del tajo y se cruzaron en la carretera con un camión con falangistas, les saludaron con el puño levantado y allí mismo en el pueblo, cerca de la fuente, al lado de la carretera de Madrid, fueron ejecutados. Poco después serían enterrados en el cementerio de la localidad.

Los infortunados segadores eran:

Álvaro Menéndez Martínez; entre 30 y 35 años, jornalero, casado con tres hijos, natural de Quirós, Oviedo.

Aurelio Menéndez Martínez; 26 años, jornalero, soltero, como su hermano nacido en Quirós.

Además de estos dos hermanos, en esta localidad fueron ejecutados los vecinos de El Espinar, los días 21 y 27 de agosto, reseñados a continuación.

El Espinar

Esta villa incluye además de la villa del mismo nombre, la colonia de San Rafael y el barrio de la Estación de ferrocarril. Era un importante núcleo obrero y socialista. Fue sin duda el más castigado por los represores. Además de los 15 aquí reseñados, fueron fusilados en Segovia 33 vecinos de la villa⁴¹.

Eustaquio López María; natural y vecino de El Espinar, 27 años, casado, panadero. Fue muerto el 25 de julio en la Calle Mirador de El Espinar, por *“disparos arma de fuego en acción de guerra”*. Según testimonio de su hermana, cuando entraron de nuevo los falangistas en la villa, tras unas horas de dominación republicana, iban disparando por las calles, Eustaquio, que estaba trabajando con un cuchillo en la mano, al oír los tiros echó a correr y lo mataron. Algún tiempo después un jefe militar fue a pedir perdón a los padres de la víctima⁴². Por el contrario, en el acta de defunción de la Iglesia reza *“balazos recibidos en defensa de la religión y del orden”*⁴³.

Martín Martín Arteaga; natural de Guadarrama, 43 años, vecino de El Espinar. Muerto el 28 de julio.

Hermenegildo del Pozo Herranz; 21 años, natural y vecino de El Espinar, jornalero, soltero. Muerto el 6 de agosto. Para la Guardia Civil era *“de marcada ideología izquierdista, figurando entre los propagandistas del citado matiz como uno de los más destacados de esta localidad”*, fue procesado en rebeldía por la causa 122/36, acusado de reunión ilegal.

Narciso del Pozo Heras; 41 años, natural y vecino de El Espinar, jornalero. Fallecido el 23 de agosto, y enterrado en el entorno de la ermita del Cristo del Caloco. Había participado en un “convoy” para llevar armamento al frente y al verse tan cerca de la batalla huyó asustado. El informe de la Guardia Civil lo explicaba de un modo muy claro: *“de ideas izquierdistas, se desconoce si militaba y nunca se le vió en manifestaciones. Sobre el 20 de agosto fue requerido por el jefe de la columna acampada en dicha villa para que con una caballería trasladase municiones a la base de operaciones, y al establecer aquella contacto con las fuerzas rojas abandonó dicho individuo las municiones y huyó a su casa, por cuyo motivo fue considerado desafecto a la Causa Nacional y fusilado en la noche del 23 de*

⁴¹ En sucesivas ejecuciones fueron fusilados vecinos de la villa, el 6/9/36: (5); 7/10/36: (1); 4/12/36: (2); 23/4/37: (23); 8/10/37: (1); 29/11/37: (1), como se puede ver en el anexo nº 2.

⁴² Testimonio de María López.

⁴³ Arch. Epis. Cpta. licencias de defunción de El Espinar, 1936.

agosto”, eso sí, apostillaba el informe que *“ignorándose las fuerzas que llevaron a efecto la ejecución y Autoridad que la dispusiera”*⁴⁴.

- **27 de agosto**

El 27 de agosto los guardias civiles y falangistas hicieron muchas detenciones en el pueblo. Se llevaron a la mayoría de los detenidos a Segovia y a otros cuatro al vecino pueblo de Navas de San Antonio. Los cuatro infortunados ya iban bastante maltratados por el camino, llenos de golpes, cuando llegaron a las Navas, donde fueron rociados con gasolina, y quemados. Fueron fusilados al lado de la carretera de la Coruña, en un lugar denominado “Prado Nuevo”.

Las víctimas eran:

Secundino de las Heras Martín; 46 años, jornalero, casado. Le llamaban *Azaña*. Había sido presidente del partido Radical Socialista de El Espinar, era, sin duda, uno de los líderes políticos del pueblo. Para la Guardia Civil era un *“gran propagandista del marxismo, muy avaro”*⁴⁵. Antes de ejecutarlo, le habían arrancado el bigote.

Andrés de las Heras Martín; 33 años, nacido en El Escorial, hermano del anterior, casado.

Juan de la Falla Silvestre; 60 años, natural y vecino de El Espinar. Era el padre de dos hermanos (Francisco y Enrique) fusilados posteriormente, el 23 de abril de 1937.

Martín Olmos; apodado “Crieles”. Nacido en Segovia, residente en El Espinar, de unos 40 años, ganadero, casado.

Julián Aparicio de Andrés; natural de Otero de Herreros, vecino de El Espinar, 36 años, casado. No figura en el Registro Civil, ni la fecha, ni el lugar de muerte, ni más datos del fallecido. Por testimonios se sabe que era guarda en el chalet donde veraneaba el presidente del consejo de ministros José Giral, y le acusaron de haber ayudado a escapar al político⁴⁶. Murió el 21 de agosto de 1936 en El Espinar, en cuyo cementerio fue enterrado.

Para la Guardia Civil era *“considerado como de izquierdas no destacado, por las personas con quienes se reunía”*⁴⁷.

***Estación de El Espinar**

En este barrio, además de los muchos trabajadores ferroviarios, había numerosos obreros en los dos aserraderos existentes, la mayoría afiliados a UGT. Según cuenta Silvestre Ramos, se llevaron en una camioneta a 14 vecinos de este barrio, aunque otros testimonios hablan de un número mayor o menor⁴⁸. Habían sido detenidos en el pueblo y se los llevaron a Navas de San Antonio, donde los ejecutaron en el término denominado la “Lancha del Tejo”, en el kilómetro 79 de la carretera de la Coruña. Uno de ellos era cojo, secretario de UGT en la Estación, pero no se ha podido averiguar su nombre.

No podemos asegurar si las ejecuciones fueron el 21 o el 22 de agosto, pues hemos encontrado ambas fechas en las inscripciones del Registro Civil, pero parece lógico que todos murieran el mismo día.

Testimonios afirman que los autores de la saca eran falangistas; si bien, el entonces alcalde de Navas de San Antonio, Pedro Polo Puente, no quería delatar a los ejecutores, alegando en su testimonio que *“no conocía al jefe de la fuerza armada que reclamó su auxilio para el enterramiento”*⁴⁹.

De todos ellos, hemos conseguido los datos de:

⁴⁴ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 220, 2, 1943, Exp. nº 7 bis. Informe fdo. por tte. coronel de la Guardia Civil de Segovia, fechado el 14/12/43.

⁴⁵ Arch. Prov. Audiencia Provincial. Caja sumario 122/36.

⁴⁶ Testimonio de Hipólito Herranz.

⁴⁷ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 220, 2, Exp. nº 6, 1946.

⁴⁸ Testimonio de Miguel Bartolomé Cámara habla de 39 personas en la camioneta. En Navas de San Antonio familiares del juez de paz afirman que fueron 7 los cadáveres encontrados y enterrados.

⁴⁹ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 299, 1, 1937, Exp. nº 24, Pedro García Garrido.

Pedro García Garrido; nacido en Basardilla, 38 años, ferroviario. Figura en su inscripción fallecido el 22 de agosto.

Pedro San Mateo Segovia; nacido en El Espinar, 26 años, ferroviario. Aparece muerto el 22 de agosto, como *“consecuencia de las incidencias ocurridas con motivo Movimiento Nacional”*. Era militante de Izquierda Republicana. Su hermano Marcelino fue fusilado en Segovia el 23 de abril de 1937.

Cesáreo Escanciano Matute; natural y vecino de El Espinar. De unos 50 años, obrero.

Lorenzo Sebastián Gómez; natural de El Espinar, 17 años, soltero. Su inscripción reza: *“muerto el 21 de agosto”*.

Hipólito Gómez María; natural y vecino de El Espinar, 28 años, casado.

***San Rafael**

Licinio Antón Rubio; 22 años, soltero, cantero. Fueron por él a Vegas de Matute, donde estaba trabajando como vaquero. Su familia no sabe cuando murió, si bien hay testimonios que hablan de dos obreros sacados de Vegas de Matute, por lo que podría haber sido ejecutado junto a Raimundo Hernández.

Raimundo Hernández Prieto; 41 años, nacido en Guijasalvas, anejo de Valdeprados, vecino de San Rafael, casado, vaquero. Apareció el cadáver entre los términos municipales de Ituro y Navas de San Antonio (a unos 4 km. de cada localidad) donde fue enterrado. Su viuda apuntó como fecha probable de muerte el 22 de agosto, si bien en otra anotación posterior figura el 31 de agosto⁵⁰.

Matías Prieto Gila; 30 años, casado, nacido en Vegas de Matute, vecino de San Rafael, jornalero. Aunque la viuda propone la fecha del 18 o 19 de agosto, dos testigos cuentan que Matías había estado escondido en su pueblo hasta primeros de septiembre cuando volvió a San Rafael, donde fue detenido por falangistas. Sobre su muerte existen dos versiones en el expediente de fallecimiento: por un lado, una vez preso quiso escapar por la noche y los vigilantes lo dispararon, o bien, habiendo coincidido su detención con un combate con los republicanos en el que hubo numerosas bajas por ambas partes, *“los supervivientes de la acción de guerra, dolidos por el recuerdo de sus compañeros caídos, le dieron muerte en la línea de fuego”*⁵¹.

Vegas de Matute

Según testimonios de vecinos de la localidad, el 25 de agosto, se llevaron a dos jóvenes en una camioneta: José de Frutos, rentero en el caserío de Aldeallana, término de Fuentemilanos y Andrés Gila, obrero. A José lo cogieron en su casa y a Andrés en la fábrica de luz de Vegas de Matute, donde trabajaba su hermano, de filiación derechista, quien confiaba en defenderlo de los falangistas. Pero el hermano no pudo impedir que se lo llevaran y, aunque Andrés intentó escapar, los falangistas lo cogieron por el río.

Testimonios cuentan que *“les hicieron ‘herejías’, perrerías antes de matarlos. A Pepe le hincharon a golpes paseándole por el pueblo para que denunciara a los rojos. Le tuvieron que bajar de la camioneta entre tres para que pudiera orinar”*⁵².

Uno de los implicados en la ejecución fue Petronilo Pérez Escorial, coronel del Ejército, propietario del caserío Colina, del término municipal de Vegas. Este hombre tuvo la desvergüenza de contar jocosamente, en el bautizo, precisamente de un sobrino de José, *“cómo le habían dado la paliza y lo habían matado”*⁵³.

No está muy claro cuando murieron, si el mismo día que se los llevaron, 25 de agosto, fecha que aparece en la Causa General para José de Frutos o el 31 del mismo mes, como figura en la inscripción del propio José en el Registro Civil de Anaya. Podría ser esta

⁵⁰ Reg. Civ. El Espinar, anotaciones del 3/04/46 y 31/07/80.

⁵¹ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 220, 2, 1946, Exp. nº 3. Testimonios de Fermín Mateos y Gilberto Calvo Arquero, respectivamente.

⁵² Testimonio de Aquilino García de Diego.

⁵³ Testimonio de Felipe Dimas.

última fecha porque en un informe de la comisaría de Segovia para el expediente de incautación de bienes se recoge que fue *“trasladado a Valladolid por orden superior”*⁵⁴, lo que, como hemos advertido, era la excusa oficial de la saca del 31 de agosto en el Puente de Oñez. Por el contrario, Andrés Gila no está anotado en ningún Registro Civil.

José de Frutos Gila; nacido en Fuentemilanos, 35 años, labrador. En la Causa General, figura como desaparecido en la 1ª quincena de agosto, sin más información. En nota al margen, figura: *“Filiación política desconocida, no desempeñaba cargos. Muerto el 25 de agosto de 1936. El cadáver no fue encontrado, se ignoran sospechosos; pero en una carta del Ayuntamiento de Fuentemilanos se explica que estando en su domicilio fueron a por él 4 o 5 desconocidos con uniforme de Falange, armados, se lo llevaron y nunca más se supo”*⁵⁵.

En el proceso de incautación de bienes, fue sancionado con la pérdida de todos sus bienes, por haber sido *“propagandista del Partido Comunista, y dar asilo en su finca (...) a elementos extremistas que escapaban de Segovia”*⁵⁶.

Andrés Gila Alonso; natural de Vegas de Matute, donde residía, obrero.

Otero de Herreros

El 3 de agosto los falangistas fusilaron a 5 vecinos de este pueblo en el paraje denominado *Cepones* (del término municipal de La Losa, a unos 500 metros de la carretera de Madrid, en su km. 12). Oficialmente fueron muertos *“al sostener una refriega con las fuerzas beligerantes”*⁵⁷. Es curioso, pero en el expediente de uno de los fallecidos, testificó Eliseo Gómez, falangista del mismo pueblo, al que señalan numerosos testigos como uno de los más destacados en la represión de la zona de la sierra⁵⁸.

Según cuenta Regino Casado, fue un guarda del palacio de Riofrío quien descubrió los cadáveres enfrente de la estación de La Losa, en un barranco. Dice que *“fueron regados con gasolina y prendidos fuego ese mismo día sin avisar a la familia ni enterrar”*⁵⁹. Cuentan que algunas de las víctimas estaban escondidas por el monte y volvían a casa por la noche. Una de esas noches los descubrieron y detuvieron.

Tan sólo están registrados Pedro Sebastián y Pedro Aparicio, en Otero, y Abel de Pablos, en Segovia.

• 3 de agosto

Pedro Sebastián Vela; 27 años, jornalero, soltero, natural y vecino de Otero. Según el informe de la Guardia Civil *“pertenecía a extrema izquierda, afiliado al Partido Comunista, y presidente de la Casa del Pueblo”*⁶⁰.

Pedro Aparicio Bravo; 36 años, casado, ferroviario de la Compañía del Norte, (según testigos trabajaba en Villalba).

Abel de Pablos Andrés; 27 años, jornalero, casado, natural de Otero y vecino de Segovia. Fue detenido al salir del trabajo.

Julián Martín Pascual; 18 años, nacido en El Escorial, vecino de Otero, soltero. Era de la junta de la Casa del Pueblo.

Miguel Durán Prieto; 29 años, natural de Zarzuela del Monte, vecino de Otero, jornalero, casado con la hermana de Julián. Afiliado a la Casa del Pueblo.

⁵⁴ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. 47/37 de José de Frutos Gila.

⁵⁵ Arch. Fiscalía General del Estado, Causa General, Segovia, Caja 1311. Pieza Primera: pueblos.

⁵⁶ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399. Por su Exp. Resp. Civ., 47/37, conocemos que era militante del PSOE y había dado mítines por los pueblos de su zona con motivo de las elecciones de febrero de 1936.

⁵⁷ Reg. Civ. Otero de Herreros, Exp. def. Pedro Sebastián.

⁵⁸ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Caja 299, 2. 1938. Exp. nº 6, Abel de Pablos, declaración de Eliseo Gómez, redactada por el secretario del Jgdo.: *“vio el cadáver de Abel que yacía detrás de una pared como a unos 500 m. de la carretera, con otros cuatro cadáveres más y que como dicho sujeto pertenecía a la Casa del Pueblo y eran los primeros días de Movimiento y por otra parte aquellos lugares eran de frente, cree que debió morir por choque con la fuerza pública, y que desconoce el sitio donde habrá sido enterrado como ocurrió con otras víctimas de la guerra”*.

⁵⁹ Testimonio de Regino Casado Subtil.

⁶⁰ Reg. Civ. Otero de Herreros. Exp. def. Pedro Sebastián.

San Ildefonso

Esta villa era de las más radicales de la provincia, junto con sus barrios obreros de Valsaín y La Pradera. Para Contreras era el *“núcleo de extrema izquierda más poderoso e influyente de la provincia, especialmente la barriada obrera de Valsaín, casi totalmente entregada al comunismo”*⁶¹. En estas localidades la represión fue extremadamente cruel, tanto en La Granja de San Ildefonso como en Valsaín. Incluso se recoge este hecho en *El Adelantado* de 23 de septiembre de 1936: *“durante estos días el Ejército y las milicias limpian de rojos la Granja ¡y había bastantes!, en Valsaín sobre todo”*⁶². No hemos podido averiguar las fechas de varias de las muertes (pues no están registradas y los testigos tampoco las recuerdan), por lo que no podemos afirmar si fueron ejecuciones en grupo o individuales. Los lugares más repetidos para las ejecuciones de esta zona fueron el Puente de Segovia sobre el río Eresma, en la carretera hacia la capital y las tapias de los cementerios de ambas localidades. Los autores de muchas de las ejecuciones fueron falangistas de Valladolid, como da a entender el informe de la Guardia Civil sobre Tomás de la Santísima Trinidad, *“siendo detenido a finales de agosto de 1936 al presentarse en la localidad la Falange de Valladolid”*⁶³.

De las varias sacas realizadas en la cárcel provisional de San Ildefonso, situada en las antiguas Caballerizas del Palacio Real, se conoce una por el expediente de desaparición de Andrés Nogales Astudillo. En él se explica que fueron sacados, en la madrugada del 5 de septiembre de 1936, once detenidos, y en un lugar ignorado del término municipal de San Ildefonso fueron muertos, siendo enterrados en el mismo lugar. De los once ejecutados, tan sólo está inscrito el aludido Andrés Nogales y Claudio Martín Martín, pero podrían incluirse algunos de los que no se conoce la fecha de ejecución, como Lucas Carrera y su hijo Mariano.

Los fallecidos de los que se tiene constancia oficial o familiar de que fueron ejecutados, son los siguientes:

Enrique Álvaro de Andrés; 53 años, casado, nacido en Segovia, vivía en San Ildefonso donde trabajaba como guarda jurado del Patrimonio de la República. Estaba destinado en la caseta de Cabeza de Gatos en el término de Revenga. Fue muerto el 29 de julio de 1936, el mismo día en que fuera requerido por agentes de la autoridad. Militaba en el partido Radical Socialista y sindicalmente en UGT, *“como todos los demás guardas”*, así explicaba el Guarda Mayor del Patrimonio en su informe de 1941⁶⁴.

Aniano Domínguez Martín. Tenía 26 años, había nacido en Cascajares, anejo a La Cuesta. Era uno de los maestros de la localidad. Estaba en casa de sus padres en el vecino pueblo de Tabanera del Monte. Según testimonio de su hermana Dipna, fueron a buscarlo vecinos de Palazuelos: el hijo del secretario y el hermano del cura. Había sido denunciado por sus propios compañeros maestros de San Ildefonso. Dipna cree que lo fusilaron en el viaje de vuelta hacia La Granja el 10 de agosto de 1936⁶⁵. Estaba afiliado a Trabajadores de la Enseñanza. Era hermano de Mariano y Hermenegildo, también maestros fusilados⁶⁶.

Tomás de la Santísima Trinidad Lucas; 33 años, natural de Logroño, vivía en San Ildefonso, casado. Obrero de la fábrica de vidrio. Afiliado a UGT. La Guardia Civil decía que iba a crear con otros dos individuos, ya iniciada la guerra, un comité en la fábrica donde trabajaba. Achacan su desaparición a los falangistas de Valladolid, al informar que Tomás fue *“detenido a finales de agosto de 1936 al presentarse en la localidad la Falange de Valladolid, fecha desde la cual se ignora su actual paradero”*⁶⁷. Fue fusilado el 30 de agosto de 1936.

⁶¹ CONTRERAS y L. de AYALA. Op. cit. Introducción.

⁶² *El Adelantado de Segovia*, 23 de septiembre de 1936.

⁶³ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 220, 2, 1945, Exp. nº 2. Tomás Santísima Trinidad.

⁶⁴ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 220, 1, 1942, Exp. nº 6. Enrique Álvaro.

⁶⁵ Testimonio de Dipna Domínguez Martín.

⁶⁶ Mariano era el maestro de Nieva, anotado en dicho pueblo y Hermenegildo era maestro en El Espinar, fue fusilado en Segovia el 29/11/37, como explicamos en el anexo nº 2.

⁶⁷ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 220, 2, 1945, Exp. nº 2. informe fechado el 8 de mayo de 1945.

Juan Cualberto Perez Martín; 36 años, nacido y vecino de San Ildefonso, casado. Según aparece en su expediente de defunción de 1979: *“en la madrugada del 31 de agosto, un grupo de hombres armados con el uniforme de un partido político que intervenían en la sublevación contra el gobierno (...) se personó en el domicilio, (...) le detuvo por motivos políticos (...) fue trasladado a un ignorado y apartado lugar del término municipal de S. Ildefonso donde esa misma madrugada le dieron muerte”*⁶⁸.

- **2 de septiembre**

Carlos Sastre Postigo; 31 años, nacido y vecino de San Ildefonso, casado. Era jardinero del Patrimonio de la República en San Ildefonso. Fue sacado del domicilio de sus padres, donde vivía con su esposa e hijos, por fuerzas de la Guardia Civil e internado en las Caballerizas, de donde fue sacado en la madrugada del 2 de septiembre y ejecutado en una de las carreteras próximas a La Granja.

José María Sáez Bartolomé; 47 años, casado, vecino de San Ildefonso, factor del ferrocarril. Fue detenido el 25 de agosto, y sacado de la prisión el 2 de septiembre de 1936. Según informe de la Guardia Civil, *“llevaba unos once meses viviendo en San Ildefonso (...) habiendo hecho durante su permanencia en dicha localidad una activa propaganda en favor del Partido Comunista y distinguido en reuniones y manifestaciones, considerándole peligroso para la Causa Nacional, por sus ideas comunistas”*⁶⁹.

5 de septiembre

Andrés Nogales Astudillo; 30 años, nacido en Santander y residente en San Ildefonso, casado. Como se ha escrito más arriba, la noche del 30 de julio fue detenido en su domicilio por los falangistas y conducido a Caballerizas. En la madrugada del 5 de septiembre, con otros diez detenidos más, fue sacado de la prisión y ejecutado.

Claudio Martín Martín; 35 años, natural y vecino de San Ildefonso, casado. Afiliado a UGT, para la Guardia Civil era *“un propagandista peligroso y perturbador”*. Fue muerto el 6 de septiembre de 1936.

Luis Isabelo Blanco García; 28 años, nacido y vecino de San Ildefonso, casado. Estaba preso en Caballerizas, de donde fue sacado y muerto el 9 de octubre de 1936.

Además por testimonios de familiares y vecinos se conoce la muerte, aunque no la fecha ni el lugar de ejecución, de:

Teófilo Martín Velasco; vecino de San Ildefonso. Trabajaba como guarda del Patrimonio de la República. Murió el 10 de septiembre. Está anotado en el cementerio de Segovia, pero sin más datos personales.

Laureano Gómez Nieto; Nacido y vecino de San Ildefonso, tenía 16 años. su único “delito” fue tener un burro al que puso por nombre *Gil Robles*.

Saturnino Fernández Pérez; apodado *Fleta* porque cantaba muy bien. Natural y vecino de San Ildefonso, 30 años, soltero. Trabajaba de cocinero en Canónigos, donde estaban hospedados los oficiales del Ejército.

Jesús Fernández Pérez; albañil del Patrimonio. Hermano del anterior. También soltero y nacido en La Granja.

Pedro Alonso Álvarez; natural de Revenga, vecino de San Ildefonso, 32 años, casado, jornalero.

⁶⁸ Reg. Civ. de Segovia, Cpta. Exptes. Reg. Civil. 1979. Exp. de Cualberto Pérez Martín.

⁶⁹ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 220, 1, 1940, Exp. nº 6. Informe fechado el 23 de julio de 1940.

Valsaín

Esta barriada también fue duramente castigada. Se han comprobado los siguientes fusilados:

Mariano Luis Abastas de Frutos; 31 años, natural de San Ildefonso, casado. Afiliado a UGT. Fusilado en Valsaín el 6 de agosto de 1936. Era el guarda en la presa cercana al pueblo.

Lucio de Miguel Moral; 41 años, nacido en Valsaín. Era el teniente de alcalde de San Ildefonso encargado de los asuntos del barrio de Valsaín. Obrero del Aserradero de Valsaín, afiliado a UGT. Lo habían detenido ya una vez y lo habían liberado. Fue muerto el 19 de agosto de 1936, según cuentan lo crucificaron en el paraje denominado "Robledo"⁷⁰.

Antonio Arcones Baeza; nacido en Navafría, 49 años, casado. Estaba afiliado a la UGT y al PSOE, si bien *"no se distinguió en reuniones, ni manifestaciones ni hacía propaganda alguna"*, como informaba la Guardia Civil⁷¹. El 9 de septiembre fue sacado de su domicilio por falangistas.

Víctor Sanz Sáez; nacido en Valsaín, donde vivía, 18 años, soltero. Sacado del domicilio de sus padres y muerto el 4 de septiembre de 1936 en la misma localidad. Estaba afiliado a JSU.

Matías García Herrero; 44 años, nacido en El Cubillo, vecino de Valsaín, casado, obrero de la fábrica de madera. Afiliado a la UGT. Muerto el 19 de septiembre de 1936.

- **16 de septiembre**

Fueron fusilados en las tapias del cementerio de Valsaín tres vecinos de este barrio, de los que se conocen al menos dos.

Felipe de Jesús Alejo Goya del Pozo; 51 años, nacido y vecino del barrio de La Pradera de Valsaín, casado. El 15 de septiembre fue *"sacado por la fuerza por un grupo de falangistas y llevado a las escuelas públicas de Valsaín, donde se encontraban otras tres personas más, de las cuales una se escapó"*⁷². Posteriormente fue conducido en unión de las otras dos al cementerio de la localidad donde los ejecutaron. Tenía un yerno falangista que no hizo nada por salvarle pues ambos estaban enemistados.

Juana García Cantalejo; natural de Valsaín, 55 años, Viuda. Detenida como represalia porque un hijo suyo, Felipe Arnay García, había cruzado la sierra pasando al otro bando. Felipe murió en 1938 en el cercano puerto del Reventón, en acción de guerra.

Además de los anteriores, no están inscritos en ningún libro oficial los siguientes fusilados:

Juan de Miguel Valverde; nacido en La Losa, 73 años, casado, padre de Lucio de Miguel. Obrero del Aserradero de Valsaín, afiliado a UGT.

Lucas Carrera García; nacido en Madrona, 57 años, albañil, casado. Fueron a buscar a dos hijos suyos, afiliados a las JSU, que habían pasado al otro lado de la sierra para defender a la República. Como no estaban se llevaron al padre y a otro hijo más pequeño,

Mariano Carrera Vega; 15 años, nacido en Valsaín, se abrazó a su padre para que no se lo llevaran. La familia no sabe el día exacto de las muertes, pero saben que fueron sacados de la cárcel de San Ildefonso, donde estaban presos, y fusilados en los alrededores del Puente de Segovia, en dirección a la capital.

León Isabel Velasco; carretero, 51 años, nacido en Espirido, casado. Afiliado a UGT. Un falangista le pidió la documentación en la plaza de Valsaín, como no la llevaba encima fue a su casa para buscarla. Cuando volvió con ella, el falangista sin llegar a mirarla le dijo que se marchara y cuando se dio la vuelta lo disparó por la espalda. Estos hechos

⁷⁰ Testimonio de Luisa Carrera.

⁷¹ Arch. Prov. Caja 220, 1, 1942, Exp. nº 8, Antonio Arcones. Informe fechado el 7/02/42.

⁷² Reg. Civ. de Segovia, 1988. Exp. Def. de Goya del Pozo. Testimonio de Cipriano Bermejo Martín, vecino de Valsaín.

sucedieron a pleno día y fueron presenciados por la hija pequeña de la víctima, Asunción Isabel, de 10 años, que estaba jugando con otros niños en la plaza⁷³.

Cipriano Alonso Álvarez; 55 años, nacido en Sebúcor, casado. Trabajaba en el monte haciendo teas que vendía en Segovia. No estaba afiliado ni a partido ni a sindicato. Testimonios apuntan la posible responsabilidad de un hermano que tenía un bar donde paraban los falangistas. Además un hijo suyo, Eduardo Alonso, había pasado al lado republicano. Su hijo Zacarías cree que los falangistas lo subieron de casa directamente al cementerio⁷⁴.

Valentín Sanz García; nacido en San Ildefonso, 54 años, casado, guarda del Patrimonio, afiliado a UGT. Dos hijos suyos, Siro y Francisco, afiliados a JSU pasaron la sierra para defender a la República.

Lucas Rodríguez Fernández; nacido en San Ildefonso, 19 años, obrero.

Carlos Martínez García; 42 años, casado, nacido en San Ildefonso. Trabajaba en la limpieza del monte, afiliado a UGT. Había estado escondido durante un tiempo, hasta que lo descubrieron.

Palazuelos

Martín Llorente García; 27 años, nacido y vecino de Palazuelos, soltero, jornalero. De ideología izquierdista. Este muchacho había hecho el servicio militar en la Granja, durante el cual había tenido una pelea con un cabo, poco antes del verano de 1936. Ya iniciada la guerra, un domingo, Martín estaba en la era con su padre trillando, cuando llegó el cabo con otros dos guardias y se lo llevaron. Dicen que Martín tenía mucha fuerza, *“él sólo tumbó a dos, porque iban armados si no.... (...) iban por una calleja del pueblo forcejeando, el cabo decía ‘ahora me las vas a pagar’, casi lo matan allí mismo”*⁷⁵. Salió a la calle su madre a suplicar que no se lo llevaran, por lo que casi también ella sufre las mismas consecuencias, pero tuvo la suerte de que la defendió el alcalde. Por fin a Martín lo subieron en una camioneta y por el Puente de Segovia, en dirección a San Ildefonso, lo ejecutaron, al mediodía entre la una y las dos de la tarde.

Tres Casas

Juan Pascual Gómez; natural de Tres Casas, vecino del barrio de Sonsoto, 58 años, labrador. Era el presidente de la Casa del Pueblo de la localidad y tenía 4 hijos en zona republicana. Detenido el 31 de julio de 1936, por la causa 385/36, acusado de auxilio a la rebelión, fue liberado el 6 de septiembre. En los días siguientes, fueron a buscarle a su casa con una camioneta y se lo llevaron. Ejecutado por los alrededores del pueblo, su familia lo enterró algún tiempo después⁷⁶.

Torrecaballeros

En el libro de defunciones del Registro Civil se anota, el 7 de septiembre de 1936, la recogida de tres cadáveres sin identificar, encontrados en el km. 12 de la carretera Segovia-Sepúlveda, en el lugar llamado "Lavazuelos", a la izquierda, a unos:

1. *“...140 metros de allí, por ‘eridas’ (sic) de arma de fuego según parte facultativo. Tiempo posible de defunción, 6 a 7 días muerto, sin hallarse nada para identificar su personalidad”.* De unos 40/45 años.
2. *“...metro de allí, ‘arma de fuego según reconocimiento facultativo’. Tiempo posible de defunción, 6 a 7 días muerto, sin hallarse nada para identificar su personalidad”.* De unos 45 años.
3. *“...metros de allí, por ‘eridas’ de arma de fuego según parte facultativo. Tiempo posible de defunción, 6 a 7 días muerto, sin hallarse nada para identificar su personalidad”.* De 40/45 años.

⁷³ Testimonio de Asunción Isabel.

⁷⁴ Testimonio de Zacarías Alonso.

⁷⁵ Testimonios de varios vecinos de Palazuelos sin identificar.

⁷⁶ Testimonio de un vecino de Tres Casas.

Fueron enterrados los tres cadáveres en el cementerio del pueblo. De los tres ejecutados, es muy probable que uno de ellos fuera el pastor de Arcones, Gregorio Sanz, anotado en dicho pueblo; de los otros dos no se sabe nada.

En el término municipal de esta localidad fueron fusilados además José Gutiérrez y Lorenzo Fernández, ya reseñados en otros apartados.

Collado Hermoso

Lorenzo Fernández González; maestro de Collado Hermoso. Según su esposa, el 21 de agosto había sido *“invitado por unos señores, al parecer falangistas, a que saliera de su domicilio para tomarle declaración”*⁷⁷.

Fue muerto el mismo día, sobre las 20 horas, en el término de Torrecaballeros, en *“el kilómetro 14 de la carretera Segovia-Sepúlveda, camino de la ermita del Pedernal, a 14 mts. de la carretera”*⁷⁸. Según testimonios fue denunciado por personas de derecha del mismo pueblo de Collado, y no dejó que lo taparan los ojos pues *“quería mirar a la cara a los verdugos”*⁷⁹.

Navafría

Situada al pie del puerto del mismo nombre, Navafría sufrió una dura represión por estar situada tan cerca del frente de batalla. Al menos murieron 7 personas fusiladas en esta localidad o en el puerto.

José Berzal García; 50 años, casado, nacido en La Velilla, era molinero en Aldealengua de Pedraza, localidad cercana a Navafría. Los falangistas fueron buscando a su hijo Francisco, militante izquierdista, como quiera que éste había ido al mercado a Pedraza y no se encontraba en casa, se llevaron al padre. Testigos declararon que *“el 25 de agosto a la una de la tarde, habían venido unos falangistas y se lo habían llevado en un coche a Navafría”*⁸⁰. Sería fusilado el mismo día 25 en Navafría entre las 5 y las 6 de la tarde.

31 de agosto

Cuentan distintos testimonios que esta madrugada, a la vuelta del convoy, fueron fusilados por los requetés en las tapias del cementerio de Navafría, al menos, los siguientes vecinos de la zona⁸¹:

Francisco Sancho López; 28 años, nacido en Gallegos, pero vecino de Navafría, donde estaba casado. Varios testigos informan en el expediente de desaparición que *“tras efectuar el convoy el 30 de agosto de 1936, quedó en la comandancia militar de Navafría, a las 5 de la tarde, no volvieron a saber de él”*⁸².

Carlos Benito Gil; 32 años, natural y vecino de Matabuena, albañil, casado.

Pedro Lucas Martín; 46 años, natural de Matabuena, vecino de Gallegos, casado.

• 29 de octubre

Este día sacaron a tres detenidos en la comandancia de Navafría para subirlos al puerto del mismo nombre, donde los ejecutaron.

Martín Sánchez y de la Mata; 34 años, natural y vecino de Navafría, jornalero, casado. Según varios testigos que declararon en el expediente de su desaparición, *“fue llamado el 29 de octubre de 1936 por la Guardia Civil del puesto, donde se presentó a las 4 de la tarde, hora que en que vino del trabajo, sin volver a saber de él”*⁸³. En el expediente posterior, de 1980, los testigos confirman los datos anteriores añadiendo que *“fue trasladado*

⁷⁷ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 299, 2, 1938, Exp. nº 1. Lorenzo Fernández.

⁷⁸ Reg. Civ. Torrecaballeros, libro de defunciones. Ins. Def. del 23/08/36.

⁷⁹ Testimonio de Antonia García Casillas.

⁸⁰ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1940. Exp. Desap. José Berzal García.

⁸¹ Testimonio de Antonia García Casillas.

⁸² Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1940. Exp. Desap. Fco. Sancho López.

⁸³ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1940. Exp. Desap. Martín Sánchez y de la Mata.

del cuartel de Navafría al cercano Puerto del mismo nombre, situado en el frente de batalla, en unión del maestro Vicente Gil, y allí fueron fusilados los dos⁸⁴.

Vicente Gil Cantalejo; 29 años, nacido en Olombrada, casado, vivía en Navafría donde era el maestro. Lo sacaron de la escuela, mientras estaba impartiendo su clase.

Isidoro Moreno Barroso; de unos 50 años, nacido en Navafría, casado. Trabajaba como hachero. Se lo llevaron del trabajo, cuando estaba descombrando en una casa. No estaba afiliado ni a partido ni a sindicato.

José Moreno García; 19 años, hijo de Isidoro, soltero, nacido y vecino de Navafría, jornalero. Lo detuvieron el mismo día que al padre, pero lo dejaron detenido unos días más, si bien su hermana no sabe el día exacto de su muerte.

Dionisio Sanz González; 57 años, natural y vecino de Navafría, casado, industrial. Tenía un bar precisamente al lado del cuartel de la Guardia Civil. Fue *“llevado por una pareja de la Guardia Civil el 12 de junio de 1937, nunca más se supo”*⁸⁵.

Gallegos

Pedro Lucas Martín; 46 años, natural de Matabuena, vecino de Gallegos, casado. Explica su expediente de desaparición que *“le tocó ir al convoy el 30 de agosto de 1936 a las 3 de la mañana, después de efectuado se quedó en la comandancia militar de Navafría”*⁸⁶.

Luis Ayuso García; natural de Navafría, 58 años, casado, vivía en Gallegos donde era el maestro. El 30 de octubre de 1936, los guardias civiles *“se lo llevaron a las 11 de la mañana, cuando estaba dando clase”*⁸⁷. Muerto el 31 de octubre de 1936. Según el informe de la Guardia Civil *“no perteneció a ningún partido, ni realizó propaganda, tendencia izquierda”*⁸⁸.

Matabuena

Alejandro García Gil. Era sacristán en Arcones. Afiliado a CNT. Iniciada la guerra escondió el carnet del sindicato en la escalera de la iglesia, con tan mala fortuna que lo vio el cura de Arcones y lo denunció. Fue llevado al monte, al cerro Cebollera, cercano al puerto de Somosierra y allí lo ejecutaron.

Carlos Benito Gil; 32 años, natural y vecino de Matabuena, albañil, casado. Según testimonios, el 30 de agosto de 1936 recibió aviso del Ayuntamiento para presentarse al convoy en la comandancia de Navafría. Allí llegó sobre las diez de la noche, pero *“sobre las tres de la madrugada del día siguiente fue llamado entre sus compañeros que iban en número de 80, por unos jefes de dicha comandancia, sin que volviera a salir de allí en presencia de sus compañeros”*⁸⁹.

Felipe de Lucas García; 41 años, natural de Matabuena, vivía en Madrid, casado. Según testigos era afecto al Movimiento Nacional. Fue *“detenido el 8 de septiembre de 1936, por la Guardia Civil de Navafría, llevado a su destacamento, nunca más se supo”*⁹⁰. Cuentan que los guardias sospechaban que era espía, porque lo habían visto hablando con un vecino guerrillero que venía de vez en cuando del lado republicano⁹¹.

• 16 de febrero de 1939

Prácticamente terminada la guerra, hubo un fusilamiento, según testimonios en las tapias del cementerio de Navafría, como represalia por una acción de la guerrilla republicana

⁸⁴ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1980, Exp. Def. Martín Sánchez y de la Mata.

⁸⁵ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1940. Exp. Desap. Dionisio Sanz González.

⁸⁶ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1940. Exp. Desap. Pedro Lucas Martín.

⁸⁷ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1943, Exp. Desap. Luis Ayuso García.

⁸⁸ AGA, Educación, Depuración, Leg. 358. Exp. Dep. Luis Ayuso García.

⁸⁹ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1940, Exp. Desap. Carlos Benito Gil.

⁹⁰ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1942, Exp. Desap. Felipe de Lucas García.

⁹¹ Testimonio de Antonio Gil.

que actuaba por la zona de la Sierra. La acción fue una incursión de miembros del Batallón Alpino que originó la muerte de un guardia civil de la zona. Los fusilados fueron:

Luis Gil Manso; 26 años, nacido y vecino de Matabuena, soltero. Dicen que *“su padre era comunista, pero como ya había muerto, mataron al hijo, que estaba enfermo”*⁹².

Leandro Gil Sanz; 49 años, natural y vecino de Matabuena, jornalero, viudo. Según testigos *“Hablaban mucho, pero no era rojo”*⁹³. Había sido interventor del Frente Popular en las elecciones de febrero.

Arcones

Gregorio Sanz Rubio; 45 años, natural y vecino de Arcones, casado, pastor, apodado “Chiflas”. Era uno de los líderes de los muchos pastores de la zona de la sierra. Estos trabajadores estaban haciendo una campaña reivindicando mejores condiciones laborales. Reclamaban los beneficios de la lana de las ovejas propias. Cada pastor cuidaba un rebaño de unas 200 ovejas, de las que sólo era propietario de entre 30 y 40 que formaban la “excusa”. Los dueños de las ovejas decían que no cobraban a sus obreros los pastos, pero se quedaban con el vellón de las ovejas propiedad de los pastores. Este era el punto de la discordia con los propietarios. El pastor tan sólo sacaba el beneficio de los posibles corderos que le dieran las ovejas de la excusa y pretendían obtener también los beneficios de la lana.

Gregorio estaba trabajando con un rebaño para un ganadero en Espirido. Según el informe de la Guardia Civil recogido en el expediente de desaparición fue *“detenido el 28 de agosto por milicias de FET y JONS, que se lo llevaron en una camioneta” (...)* En cuanto a su significación política, era de ideal muy izquierdista, propagandista de acción muy simpatizante de los actos y manifestaciones del FP⁹⁴. Lo fusilaron en el pueblo cercano de Torrecaballeros, por lo que debe de ser uno de los cadáveres sin identificar, ya reseñados, descubiertos el 7 de septiembre.

Casla

Venancio Blanco Arribas; 25 años, nacido en Valdevacas-El Guijar, secretario del Ayuntamiento de Casla.

En su expediente de desaparición aparece la declaración del padre: *“...el 22 de agosto de 1936, en casa donde se hospedaba le dijeron que el 19 agosto hacia las 13 horas en presencia de varios vecinos, incluidos algunos del Ayuntamiento de Casla y el señor cura, se presentaron individuos afectos al movimiento, requerido y obligado a subir a un auto y desaparecieron por la carretera que empalma con la de Francia suponiendo haya muerto ignorando el punto”*. Según otro testigo fuerzas de Falange se lo llevaron en dirección a Cerezo de Abajo o Santo Tomé⁹⁵.

Santo Tomé del Puerto

Rufino Blanco Arribas; nacido en Valdevacas-El Guijar, 39 años, hermano de Venancio, casado, secretario del Ayuntamiento de Santo Tomé del Puerto, donde residía con su esposa. Fue sacado de su domicilio a las seis y media del 19 de agosto de 1936, *“no habían transcurrido muchas horas cuando se recibió la noticia de que (...) era cadáver en las proximidades del mismo pueblo y Dehesa Boyal titulada ‘Las Posturas’, cerca de la carretera que estaban construyendo para la estación de ferrocarril”*; así declaró su padre, Santiago Blanco de la Calle, en el expediente de declaración de defunción de su hijo⁹⁶. Rufino fue enterrado en el mismo lugar de la ejecución.

⁹² Testimonio de Antonio Gil.

⁹³ Testimonio de Antonio Gil.

⁹⁴ Arch. Prov. Cpta. Exptes. Civil, 1941. Exp. nº 1 de desaparición de Gregorio Sanz. Informe de la Guardia civil fechado el 21/02/41.

⁹⁵ Jgdo. Sepúlveda. Civil, 1937. Exp. Desap. Venancio Blanco Arribas.

⁹⁶ Reg. Civ. de Sto. Tomé del Puerto. Exp. Def. Rufino Blanco Arribas.

Se da la circunstancia de que los dos hermanos fueron sacados y ejecutados el mismo día y por idéntica zona, pero no en el mismo lugar exacto. No hemos podido comprobar si fue casualidad o hubo intencionalidad en la coincidencia de ambas ejecuciones.

Cerezo de Arriba

De este pueblo eran naturales dos vecinos que fueron ejecutados en Santo Tomé del Puerto, en el "Prado de Navorquiles", *"a unos cien metros aproximadamente de la carretera N-110 Soria/Plasencia"*⁹⁷, donde fueron inhumados. Debe de haber una confusión en la fecha de alguna de las dos anotaciones del Registro Civil, puesto que al ser dos vecinos del mismo pueblo e idéntico lugar donde murieron, no parece probable que lo fueran en distintas fechas. Además, Julio Sanz, de Riaza, afirma que fueron fusilados el mismo día.

Bonifacio García Pérez; natural de Cerezo de Arriba, 63 años, viudo, carnicero. En su inscripción figura como fecha de ejecución el 13 de agosto de 1936.

Ciriaco Díez Vitón; nacido en Cerezo de Arriba, 35 años. Trabajaba en Riaza, fue depurado en su trabajo de obrero de Obras Públicas. Figura anotada como fecha del fallecimiento el 19 de agosto de 1936.

Riaza

En esta villa serrana hubo dos sacas, realizadas ambas por guardias civiles y falangistas de la zona de Aranda de Duero. La primera se realizó el 7 de agosto, cuando, ya por la noche, se llevaron detenidos a:

José Muñoz Pérez; natural y vecino de Riaza, 42 años, industrial carnicero.

Tiburcio Muñoz Pérez; hermano del anterior, casado, también nacido en Riaza, 49 años, y carnicero como José. En su acta de desaparición figura que era *"desafecto al Glorioso Movimiento Nacional, no acreditado su fallecimiento"*⁹⁸.

Pedro Cancho Barriga; 56 años, casado, natural de Zorita (Cáceres), vecino de Riaza, donde era propietario de una taberna. La Casa del Pueblo local estaba en la casa vieja al lado de su taberna, dice su hija Eulalia que los sindicalistas *"le quisieron alquilar el piso de arriba, (...) le darían negocio, pero él quería llevarse bien con todo el mundo"*⁹⁹. También figura en su anotación de desaparición: *"desafecto, no acreditado su fallecimiento"*¹⁰⁰.

También formaba parte de la saca el médico de la villa, Pedro Gaona Sanz, que sería cesado por orden del gobernador civil el 7 de septiembre de 1936. Este hombre tenía familiares en Aranda de Duero, a los que comunicó urgentemente su esposa la detención del marido. Cuando llegaba la "comitiva" a aquella ciudad de Burgos, separaron al médico del resto, y éste fue trasladado de vuelta a la prisión de Sepúlveda.

A las tres víctimas les llevaron camino de Burgos, ejecutándolos, según Honorio Muñoz, a poco de pasar Aranda. Pero no sabe el lugar exacto.

• 7 de septiembre

Un mes después, el 7 de septiembre de 1936, víspera de la patrona de la localidad, Virgen del Rosario, llegaron a esta villa varios falangistas y guardias civiles de la zona de Aranda de Duero. Se llevaron a 6 vecinos del pueblo que no llevaban más de dos días detenidos en una casa situada en la plaza del pueblo, utilizada como cuartel de la Falange local. Los forasteros habían llegado en varios coches, avisaron al conductor de la camioneta que estuviera preparado por la noche, sin decirle el objeto de la misión, pero que no faltara a la cita. Tomaron la carretera de Burgos en dirección a Aranda, y entre los pueblos de

⁹⁷ Reg. Civ. Sto. Tomé, inscripciones de ambos fallecidos.

⁹⁸ Reg. Civ. Riaza. Exp. Desap. Tiburcio Muñoz.

⁹⁹ Testimonio de Eulalia Cancho.

¹⁰⁰ Reg. Civ. Riaza. Exp. Desap. Pedro Cancho.

Milagros y Fuentespina, en una bajada grande de la carretera, y a la luz de la camioneta los dispararon y mataron¹⁰¹.

De todos ellos, tan sólo Genaro Gil está anotado en el Registro Civil de Riaza. Cuentan vecinos de la villa que los jóvenes fueron castigados porque habían gastado una broma al párroco con motivo de los carnavales. Ésta consistió en la realización de un “entierro de la sardina” que pasó por la puerta de la casa del cura, quien, dicen, no les perdonó la gamberrada. Los fusilados eran:

Genaro Gil Guijarro; natural y vecino de Riaza, 32 años, casado, zapatero. Había sido interventor del FP en las elecciones de febrero.

Francisco Licerias Gutiérrez; natural y vecino de Riaza, soltero, 27 años, panadero.

Fernando Gutiérrez Arribas; soltero, jornalero, entre 25 y 30 años.

Julián Campos Sanz, 26 años, natural y vecino de Riaza, sastre.

Francisco Azuara; posiblemente García de segundo apellido. Aunque era vecino de Riaza no había nacido en esta villa.

Julián Cerrinegro Cerezo; 27 años, nacido y vecino de Riaza.

Entre ambas sacas, fue fusilado en esta misma villa, el 19 de agosto de 1936:

Felipe Domingo Benito, natural de Fuentenebro, Burgos, soltero, vivía en Cerezo de Abajo, tenía 26 años.

Ayllón

Se han recogido los datos de dos fusilados en esta villa, si bien no se conoce el lugar de las ejecuciones de ambos fallecidos.

Juan Hernando Núñez; 57 años, natural y vecino de Ayllón, labrador, viudo. Ejecutado el 22 de agosto de 1936.

Desiderio Maté Escribano; 32 años, nacido en Cuéllar, residente en Ayllón, casado. Muerto el 30 de agosto de 1936.

TIERRA DE PINARES

Nava de la Asunción

Maximino García Marugán; 40 años, casado, natural y vecino de Nava de la Asunción, de oficio tejero. Fusilado el 16 de agosto en el Puente Oñez. Juan Quinzano dice que, antes de ejecutarlo, *“lo sacaron los ojos y le hicieron otras perrerías, como bailar la jota encima de él”*. Lo dieron por muerto, pero no lo estaba, fue arrastrándose hasta una fuente, donde murió¹⁰².

Navas de Oro

El día 12 de agosto llegó a Navas de Oro una escuadra de falangistas, al parecer de Valladolid. Según testigos no llevaban lista preparada para llevarse a nadie. Ya en el pueblo, en la oficina de la fábrica de resinas de la familia Mesa, los caciques de la zona, elaboraron la lista de las víctimas. Hubo quien se salvó por estar escondido en el pinar. Otros estaban ya presos en Segovia. Los falangistas se llevaron a los cinco infortunados en una camioneta, haciendo una parada en Santa María de Nieva, donde los verdugos cenaron y bebieron. A la altura de Pascuales, en dirección a Segovia pararon la camioneta y los fusilaron en la madrugada del 13 de agosto 1936.

Los fallecidos eran:

Joaquín Bartolomé Gallego; 41 años, casado, natural y vecino de Navas de Oro, labrador. Era el alcalde de la Gestora Municipal, del Frente Popular.

¹⁰¹ Testimonio obtenido por Juan Antonio Estremera del conductor de la camioneta, y proporcionado amablemente al que escribe este trabajo.

¹⁰² Testimonio de Juan Quinzano.

Marcos Vela Santos; 46 años, natural y vecino de Navas de Oro, carnicero y alguacil del Ayuntamiento, casado.

Felipe Gómez Mayo; 43 años, natural y vecino de Navas de Oro.

Eufemio de la Villa Rubio; 40 años, casado, natural y vecino de Navas de Oro. Industrial panadero.

Basilisa Zarracín García; 28 años, natural y vecina de Navas de Oro, casada. Estaba embarazada. Era una de las tres mujeres que participaban en las manifestaciones de la Casa del Pueblo de la localidad. Dicen que si se la llevaron por enfrentarse a los falangistas cuando se llevaban a los otros vecinos.

A los cinco anteriores hay que añadir la ejecución de un adolescente:

Manuel Martín Velázquez; de unos 14 años. Dormía en casa de su tío Agripino Martín Bartolomé, dirigente de la Casa del Pueblo, para acompañar a su tía sola porque el marido estaba escondido en el pinar. Cuando llegaron los falangistas por la noche, rompieron la puerta, el chico se asustó y salió corriendo, saltando la tapia lo dispararon, decían unos: *“si parece un chico”*, y otros: *“si huye será por algo”*¹⁰³. El chico murió y los visitantes se lo llevaron, quedándose los familiares sin saber siquiera donde está enterrado su cuerpo.

Nieva

José Hernández Vázquez; 43 años, natural de Nieva, carretero. Oficialmente muerto *“por choque con fuerza pública y arma de fuego”* el 15 de agosto de 1936, a las 17 horas, en la Cuesta Blanca, término municipal de Nava de la Asunción. Era miembro de la Gestora Municipal por Unión Republicana. Unos falangistas de Santiuste de San Juan Bautista se lo llevaron del bar del pueblo donde estaba jugando a las cartas con otros vecinos.

Mariano Domínguez Martín; 30 años, natural de Cascajares, anejo de La Cuesta, casado, maestro nacional. Fue detenido en Fuentesauco, donde estaba pasando las vacaciones con la familia de su esposa. Fue ejecutado el 8 de agosto, aunque no se ha podido comprobar el lugar. Era hermano de Hermenegildo y Aniano, también maestros fusilados.

Carbonero el Mayor

Heliodoro Gregorio Fernández Caraballo; 42 años, natural de Villacanejos (Madrid), secretario del Ayuntamiento de Carbonero, donde residía, casado.

En su expediente de desaparición viene muy bien explicada la saca en que fue ejecutado. Había sido *“detenido en los primeros días del Movimiento Nacional y trasladado a Segovia, en una de las prisiones como gubernativo”*. El 31 de agosto de 1936, fue hallado el cadáver en el sitio conocido por Puente Oñez, del término municipal de Anaya, donde recibió sepultura. Según el director de la Prisión Provincial, había sido *“entregado a la fuerza pública para su traslado a Valladolid el 31 de agosto de 1936”*¹⁰⁴.

Matías Manso Manso. No está inscrito en el Registro Civil, por lo que sabemos pocos datos personales, únicamente que era nacido y vecino de Carbonero, y estaba casado. El 11 de mayo de 1936 había sido designado alcalde de la Comisión Gestora entre los representantes del Frente Popular local¹⁰⁵. Testimonios cuentan que estuvo escondido los primeros días de la guerra por los alrededores del pueblo, en las huertas; alguien lo vio y lo denunció, lo llevaron a Segovia, y no saben más de él¹⁰⁶. No hemos podido averiguar la fecha de su saca, pero un testigo que estaba en la *Cárcel Vieja* recuerda que se llevaron a un alcalde de esa zona de la provincia, siendo el de Carbonero el único edil de dicha zona del que se han encontrado testimonios de haber sido ejecutado. Así lo confirman testimonios de Carbonero, Bernardos y Navas de Oro¹⁰⁷.

¹⁰³ Testimonio de un vecino de Navas de Oro.

¹⁰⁴ Reg. Civ. Carbonero el Mayor. Exp. Desap. adjunto a la hoja de inscripción de desaparición de 20/09/41.

¹⁰⁵ Arch. Mun. Carbonero el Mayor. Libro de actas Ayuntamiento, sesión 11/05/36.

¹⁰⁶ Testimonio de Eufasio García.

¹⁰⁷ Testimonio de Eufasio García, Leopoldo Cámara y Crispín Rubio.

Cuéllar

La segunda villa en importancia de la provincia de Segovia tuvo también numerosas ejecuciones (se conocen al menos 10 víctimas). La Falange local era importante en número y con algún cabecilla bastante cruel, como Pedro Gordo. Los falangistas cuellaranos se encargaron de la represión en toda su comarca.

Félix Verdugo Pilar; 29 años, residente y natural de Cuéllar, jornalero, casado. Muerto en el *“término municipal de esta villa, denominado ‘el monte’ a mediados de agosto de 1936”*¹⁰⁸. Testimonios cuentan que estaba segando en el campo, cuando los falangistas que pasaban por la carretera gritaron ¡Arriba España!, y él levantó la hoz, a lo que respondieron con una descarga que lo dejó muerto en el acto. No estaba afiliado a ningún partido político¹⁰⁹.

• **8 de septiembre**

Esta noche fueron sacados de sus domicilios cinco vecinos de Cuéllar, por *“un grupo de personas afines al Movimiento”*¹¹⁰ y reunidos en el cuartel local de Falange. Desde allí salieron en una camioneta en dirección a Valladolid y a la altura del Puente Herrera, del término municipal de Laguna de Duero, fueron ejecutados.

Los cinco infortunados eran:

Isidoro Senovilla Muñoz; 42 años, vecino de Cuéllar, casado, afiliado a la Casa del Pueblo. Trabajaba para José Ríos Rojas, también socialista.

José Quevedo Pascual; 41 años, natural y vecino de Cuéllar, casado. Afiliado al PSOE. Reconocido su cadáver *“entre varias personas muertas por heridas de bala que yacían en la carretera de Cuéllar a Valladolid”*¹¹¹.

Juan de Dios Cantalejo; 61 años, de Olombrada, vecino de Cuéllar, propietario, soltero. Concejal del Frente Popular en la Gestora Municipal.

Ángela de la Flor Gómez; 49 años, nacida en San Martín y Mudrián, residente en Cuéllar, casada. Trabajaba como resinera. Era una mujer destacada de la Casa del Pueblo local.

Angelita Gómez Alonso; natural y vecina de Cuéllar, casada. Dicen que comentó cuando entraron los falangistas en Cuéllar *“no tengáis miedo que esos vienen por mandar no por matar a nadie”*¹¹².

• **16 septiembre 1936**

Desiderio Pascual Sacristán; 22 años, nacido y vecino de Cuéllar, jornalero, casado. Ejecutado en el pinar de Vallelado, cercano a Cuéllar, donde había acudido a buscar leña. Su mujer cuenta que cantaba muy bien y había sacado coplas críticas con los personajes de derechas del pueblo¹¹³.

Otros dos hermanos, naturales de Samboal y vecinos de Cuéllar, fueron ejecutados en fechas desconocidas, pero del mismo verano de 1936.

Pablo Marinero Criado; 18 años, soltero. Los falangistas iban buscando a su hermano Benito. Llegaron a su casa a preguntar dónde estaba escondido. A Pablo, por no delatar a su hermano, se lo llevaron preso, le dieron una paliza en la cárcel de la villa, de dónde lo sacaron y fusilaron.

¹⁰⁸ Reg. Civ. Cuéllar, Ins. Def. Félix Verdugo.

¹⁰⁹ Testimonio de Cayo Quintanilla Suárez.

¹¹⁰ Jgdo. Cuéllar, Civil, Exp. nº 64/1980 de José Quevedo Pascual.

¹¹¹ Ver nota anterior. Auto J. 1ª Ins. de Cuéllar 23/06/80.

¹¹² Testimonio de Felipa Laguna.

¹¹³ Testimonio de Felipa Laguna.

Benito Marinero Criado; Estaba amenazado por Pedro Gordo, jefe local de FE de Cuéllar, por lo que huyó del pueblo con intención de entregarse en Segovia a la Guardia Civil. A la altura del pinar del “Temeroso”, muy cerca de Navalmanzano, pero en el término de Mudrián, descansó para esperar a la noche. Algún resinero de por allí lo descubrió, denunciándolo a los falangistas de Cuéllar. A la cabeza de ellos llegó Pedro Gordo, que era carnicero, quien, según testimonios, debía de hacer *“verdaderas crueldades con sus víctimas”*¹¹⁴. Un vecino de Navas de Oro cuenta que se encontró por el pinar, con unos falangistas de Cuéllar que venían de Navalmanzano. Le contaron que acababan de dejar un muerto en el Temeroso¹¹⁵.

Mariano Suárez (muy posiblemente **Quevedo** de segundo apellido). Sabemos de él que era obrero, vecino de Cuéllar y había sido interventor del FP en las elecciones de febrero. Según cuenta su primo Cayo Quintanilla, fue ejecutado en la misma saca que Pablo Marinero.

Fuentepelayo

Jesús Gilmartín de Francisco; 33 años, natural y vecino de Fuentepelayo, casado, maestro. Pertenecía a Trabajadores de la Enseñanza. Para la Guardia Civil era de *“izquierda extrema, soñando con altos cargos si triunfaban los afines...”*. Fue ejecutado el 12 de agosto en Mozoncillo.

Vecinos del pueblo declararon que *“encontrándose prestando servicio de guardia, como falangistas en el Ayuntamiento, donde se encontraban varios detenidos, se personaron de 11 y media a doce de la noche del 11 de agosto, varios falangistas con orden de conducir a los presos entre ellos Jesús, llevándoselos conducidos ignorándose su destino”*. Otros vecinos completaron el relato de los hechos declarando que *“al día siguiente empezó a rumorear por el pueblo que había sido muerto a poco de pasar por Mozoncillo, quienes se entrevistaron con el alcalde, juez y cura párroco y afirmaron que lo encontraron muerto en dicho término municipal siendo enterrado en su cementerio”*¹¹⁶.

Bernardos

En la pequeña localidad de Los Huertos se encontraban segando muchos jornaleros de otros pueblos, entre ellos,

Félix Gaitero Bartolomé; 41 años, natural y vecino de Bernardos, jornalero, casado. Concejal socialista de la Gestora Municipal. Una escuadra de falangistas fue a buscarlo y lo ejecutó en el mismo término de Los Huertos, el día 11 de agosto de 1936¹¹⁷.

CARRETERAS QUE PROCEDEN DE VALLADOLID Y BURGOS

Montuenga

Bernabé Ranz Vázquez; de unos 50 años, nacido en Aranjuez, casado, maestro de Montuenga, ejecutado a finales de agosto. Vecinos del lugar afirman que está enterrado en un pinar cercano al pueblo, del término municipal de Rapariegos¹¹⁸. Estaba afiliado a Izquierda Republicana.

En su expediente de depuración como maestro figura que *“desapareció en agosto de 1936, y se le cree muerto en la actualidad”*¹¹⁹. Vinieron falangistas de Segovia a buscarlo a Espinosa, localidad cercana de la provincia Ávila, donde había ido a esconderse. Dicen que

¹¹⁴ Testimonio de Francisco Marinero.

¹¹⁵ Testimonio De Hipólito Arranz.

¹¹⁶ Auto Jgdo. 1ª Ins. de Segovia; fechado el 7 de octubre de 1937, en el libro defunciones del Reg. Civ. de Mozoncillo, anotación del 2/11/37.

¹¹⁷ Reg. Civ. Los Huertos, anotación del 9 de enero de 1981.

¹¹⁸ Testimonio de Fernando de Pablos y Pedro González. No está inscrito en los Reg. Civ. de la zona.

¹¹⁹ AGA, Educación, Depuración. Leg. 356. Exp. Dep. Bernabé Ranz.

había impedido la celebración de un mitin derechista con motivo de las elecciones de febrero.

Labajos

El 24 de julio de 1936 a las 12 y media de la mañana murió en Labajos Onésimo Redondo, en el curso de un tiroteo¹²⁰. Contreras culpa a los vecinos de Labajos de colaboración con la avanzadilla de la columna Mangada, protagonista de los hechos, pues afirma que con los milicianos estaban *“los extremistas de Labajos, pequeña aldea cuyo ambiente se apartaba del sentir común de las de su clase”*¹²¹. Este comentario viene al caso por la importante actividad de la Casa del Pueblo de la localidad.

Lucio Pascual Agaña; 66 años, viudo, natural y vecino de Labajos, jornalero. En la Causa General se recoge que su cadáver apareció el 24 de julio, (mismo día de la muerte de Onésimo) *“próximo a la torre de la iglesia, presentando heridas en costado derecho por arma de fuego. Se desconocen sospechosos”*¹²². Estos datos vienen confirmados en el Registro Civil de dicha localidad.

Testimonios recogidos en esta localidad cuentan que este señor era un poco sordo y estaba detrás de la iglesia haciendo sus necesidades. Cuando por la tarde llegaron los falangistas para investigar el tiroteo de la mañana, detuvieron a muchas personas. A este infortunado le dieron el alto y él no lo oyó, yéndose sin hacer caso a las órdenes de quedarse quieto, por lo que lo dispararon creyendo que huía, muriendo en el acto.

Por otro lado, fueron fusilados en el Campo de San Isidro de Valladolid varios vecinos de Labajos por la muerte de Onésimo Redondo. Éstos eran Anastasio Domínguez, Félix Merinero, Teodomiro Valribera, y Juan García Martín¹²³.

Claudio Gómez Estévez; 40 años, casado, industrial, presidente de la Casa del Pueblo de Labajos. Había formado parte del Jurado Mixto Agrario creado en junio de 1936 representando a los obreros, junto a Mariano Velasco Soria, alcalde socialista de Cuéllar y Vicente Gomáriz secretario de la Casa del Pueblo de Carbonero el Mayor¹²⁴. Era uno de los que habían sido detenidos en el pueblo, aunque no figuraba entre los procesados. Según *El Adelantado* de 15 de septiembre de 1936 *“se suicidó arrojándose por la ventana, del cuartel de Falange donde estaba detenido”*¹²⁵. Por el contrario, en el Registro Civil de Valladolid consta que Claudio murió el 28 de agosto, *“sin que consten más circunstancias”* en un cuartel del Ejército situado en el Paseo de Zorrilla de aquella ciudad¹²⁶. Ésta es la razón por la que no estaba procesado, pues falleció antes de la celebración del juicio el 3 de septiembre de 1936¹²⁷.

CARRETERAS INTERIORES

Zarzuela del Monte

En esta localidad había mayoría de simpatizantes republicanos y de izquierda, así quedaba demostrado en las elecciones, cuando alcanzaron mayoría absoluta los candidatos del Frente Popular¹²⁸. Al parecer, según algunos testimonios, los instigadores de la represión fueron los hijos del veterinario Vicente Sevilla (enemistado con la mayoría del pueblo por sus

¹²⁰ Reg. Civ. Labajos, inscripción de fallecimiento de Onésimo Redondo Ortega, día 14 de diciembre de 1936. Ya explicamos el suceso en el cap. 2. 3. 8.

¹²¹ CONTRERAS, J. Op. cit. pg. 93.

¹²² Arch. Fiscalía General del Estado, Causa General, Segovia, Caja 1311. Pieza Primera: pueblos.

¹²³ Arch. Pris. Prov. Pamplona, Fuerte S. Cristóbal, Exp. nº 1068 de Ángel García Díez, donde aparece la sentencia del consejo de guerra, que extractamos en el anexo siguiente.

¹²⁴ *El Adelantado*, 25/06/36.

¹²⁵ *El Adelantado*, 15/09/36.

¹²⁶ Reg. Civ. de Valladolid, sección tercera, tomo 116, folio 273, acta 555.

¹²⁷ Causa 505/36 contra Ángel Salgado Pérez y 13 más, vecinos de Labajos, por rebelión militar y cinco homicidios conexos.

¹²⁸ Concretamente Francisco Martín de Antonio, candidato del FP más votado, obtuvo 275 votos, mientras que Juan de Contreras, el más votado de la derecha se quedó en 139. Datos obtenidos en el BOP del 24 de febrero de 1936.

ideales derechistas y “*ganas de meterse en todo*”), que se hicieron de Falange¹²⁹. Se cuenta con el testimonio de Cipriano Herrero Barrio, una de las víctimas que tuvo la suerte de no morir en el fusilamiento, aunque resultó herido muy grave. Cipriano dice que no se había significado políticamente, “*sólo me preocupaba de leer, cualquier cosa, teatro, periódicos,...*”¹³⁰. Dirigía un grupo de jóvenes del pueblo y representaban obras de teatro. Una de ellas, “Por una idea” la había escrito el propio Cipriano, era una crítica de la sociedad caciquil tan típica en Castilla, denunciando las injusticias sociales que originaba. Esta obra fue representada en otros pueblos de los alrededores¹³¹.

Cipriano cuenta que el 10 de agosto, a la hora de comer, sobre las 3 de la tarde, llegaron los falangistas en una camioneta. El alguacil fue a buscarlo a casa, para que fuera al Ayuntamiento a declarar, pues “*habían venido unos señores para ello*”. Su mujer no veía con muy buenos ojos la situación, pero él decía “*nada he hecho y nada me puede pasar*”. Los falangistas, entre seis y ocho -no recuerda cuántos- uniformados y armados, llevaron al consistorio a todos los que había llamado el alguacil para declarar. Allí y después de unas frases groseras, delante del secretario y el alcalde, intentaron disparar sobre los detenidos, a lo que la autoridad se opuso, pero aún los falangistas se atrevieron a amenazar al alcalde y al secretario. Por fin se llevaron a tres en la camioneta. Cipriano fue atado fuertemente al brazo derecho de José García, y con la misma cuerda, ambos iban amarrados a un falangista. A los 3 km. de viaje pararon, desatando y dejando marchar, a Vicente, hermano de Cipriano¹³².

Cuando llegaron al barranco, al lado de Aldeallana (entre Fuentemilanos y Guijasalvas) llegó un avión republicano, los falangistas se asustaron y los otros intentaron escapar, pero como estaban atados, cuando el avión pasó, los encontraron y dispararon en la cabeza, con lo que cayeron rodando ambos por el barranco, dándoles los verdugos por muertos.

José García García; natural y vecino de Zarzuela, jornalero. Fue el único fallecido en la saca (pues como se ha escrito Cipriano quedó herido grave). Oficialmente “*desapareció el 10 de agosto de 1936, requerido por elementos de Falange, sin que hasta la fecha haya vuelto a saberse de él, a pesar de cuántas gestiones se han realizado (...)* Se tiene el convencimiento de que sucumbió en algún choque con la fuerza pública en aquellos primeros momentos del MN”.

Según el informe de la Guardia Civil: “*sobre las 13 horas del 10 de agosto, se presentaron en su domicilio, varios individuos, suponiendo eran falangistas, ignorando dónde se lo llevaron (...) estando considerado elemento de izquierda, muy significado, no afecto al movimiento nacional*”¹³³.

Además, en el Registro Civil de Zarzuela se encuentra la partida de defunción de un soldado evadido del bando republicano:

Pedro Hoyos Sánchez; natural de un pueblo de Badajoz, 24 años, labrador, soldado evadido de la zona “roja”, muerto el 25 de agosto de 1938, “*cuando le trasladaban al campo de concentración de Segovia, al intentar huir*”¹³⁴.

¹²⁹ Testimonios de Felipe Dimas y Cipriano Herrero.

¹³⁰ Testimonio de Cipriano Herrero.

¹³¹ Ya expusimos en el cap. 1.1.3. la repercusión de dichas obras de teatro.

¹³² Felipe Dimas cuenta que Vicente Herrero “*como tenía hijos y mujer, no paraba de pedir clemencia. Reconoció entre los falangistas a un cura pues le vio afeitada la coronilla, le dijo que sabía rezar, y el cura le mandó que rezara un credo y se salvaba. Él había oído que al rezar el credo, al llegar a una parte era cuando disparaban, acabó de rezar, y no lo mataron y lo dejaron saltar a la altura del caserío de Berbete*”. Otro factor que parece más verosímil es que la mujer de Vicente era hermana del secretario de Zarzuela.

¹³³ Este entrecuillado y el del anterior párrafo sacados del expediente de desaparición de José García, adjunto a la hoja de Ins. Desap. en Reg. Civ. de Zarzuela del Monte el 7/07/43.

¹³⁴ Reg. Civ. de Zarzuela del Monte, Ins. Def. el 25/08/38.

COMARCA DE CANTALEJO

Cabezuela

En el término municipal de Cabezuela se produjeron dos fusilamientos en fechas distintas, el 13 de agosto y el 21 de septiembre de 1936. Es muy interesante comprobar que en las hojas del Registro Civil figura (aunque en la actualidad aparece tachado, todavía se puede leer) la autoría de los fusilamientos: *“Fue muerto por individuos o milicianos de Falange Española, según noticias que ellos dieron al alcalde”*¹³⁵. En la certificación de defunción de Francisco Sanz Herrero aparece la misma expresión sin tachaduras, como se puede comprobar en el anexo documental.

• **13 de agosto**

Cuatro personas fueron fusiladas y enterradas allí mismo, en el monte cercano a la carretera general en dirección a Segovia. Las ejecuciones ocurrieron, según las anotaciones del Registro *“sobre las 11 o 12”*. Los fallecidos eran:

Pío Lobo Yubero; 53 años, natural de Garganta de los Montes, Madrid, vivía en Cabezuela, era albañil. Formaba parte de la Gestora Municipal.

Francisco Sanz Herrero; 33 años, natural y vecino de Sauquillo de Cabezas, carnicero, casado. De ideología republicana. Había sido interventor del FP en las elecciones de febrero.

Ubaldo Herrero López; 22 años, natural y vecino de Sauquillo de Cabezas, industrial. Testimonios afirman que se llevaron a este joven porque no quería ir voluntario con los falangistas a la guerra¹³⁶.

Daniel Gómez Lobo; 46 años, natural y vecino de Cantalejo, casado. Era el presidente de la Casa del Pueblo. Testimonios cuentan que había ido a Segovia a buscar armas para defender el pueblo, pero no llegó a conseguirlas¹³⁷.

• **21 de septiembre**

En esta fecha fue anotada en el Registro Civil de Cabezuela la recogida de cuatro cadáveres desconocidos, ejecutados en un pinar de dicho término municipal, denominado "Sitio de los Piñonares". De todos ellos se han encontrado las filiaciones de dos víctimas. En el Juzgado de Sepúlveda están recogidos los expedientes de desaparición de Marcos de Miguel Martín y de Benito Francisco Asenjo, donde se recoge que *“...en las inmediaciones del término de Cabezuela aparecieron unos cadáveres, entre ‘otras personas’, por orden de la autoridad enterrados en referido término municipal el 21 de septiembre de 1936, entre ellos ‘mi querido y admirado esposo’ vecino que fue de Condado de Castilnovo”*¹³⁸.

Por el contrario, en las anotaciones de los libros de defunciones de ambos vecinos de Villafranca del Condado, figura como fecha del fallecimiento el 23 de septiembre¹³⁹.

Benito Francisco Asenjo; 37 años, natural y vecino de Villafranca del Condado, labrador, casado.

Marcos de Miguel Martín; 37 años, natural de Aldeonsancho, vecino de Villafranca del Condado, barrio de Torrecilla, labrador, casado.

Por el expediente penitenciario conocemos la identidad de la tercera víctima *“entregada a las fuerzas de Falange para su conducción a Segovia”*,¹⁴⁰ el 21 de septiembre.

Félix Casado Herrero; 24 años, nacido y residente en Condado de Castilnovo, labrador, soltero.

El cuarto fallecido en esta saca era, muy probablemente, pues distintos testimonios así lo corroboran, el médico de Bercimuel, Teotino Gil Tesedo, reseñado más adelante.

¹³⁵ Reg. Civ. Cabezuela, anotaciones del día 13/8/36.

¹³⁶ Testimonio de Pedro Sanz Bermejo.

¹³⁷ Testimonio de Alejandro Fisac.

¹³⁸ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1937. Exp. Def. Benito Francisco Asenjo.

¹³⁹ Reg. Civ. Villafranca del Condado, anotaciones del 6/06/41.

¹⁴⁰ Pris. Prov. Exp. de Félix Casado Herrero, había sido detenido el 19 de septiembre.

Veganzones

La noche del 13 de agosto hubo cuatro muertos en los pinares de Veganzones. Algunos testigos creen que era la misma camioneta, con falangistas de Sepúlveda, la que descargó primero en el pinar de Cabezuela los cuatro anotados en dicho pueblo (referidos anteriormente). En el expediente de Ponciano Herrero figura *“fue muerto por Falange en noche 13 agosto 36 en término municipal de Veganzones”*¹⁴¹. Un testigo que iba en el coche de línea hacia Segovia vio (el 14 de agosto, a primera hora de la mañana) en un carro varios cadáveres que llevaban al cementerio de Veganzones, *“por ir el coche tan despacio reconoció a uno de ellos, Santiago Martín, convecino de Fuenterrebollo”*. Otro testigo que estaba regando cerca del cementerio de Veganzones, vio también los 4 cadáveres¹⁴².

Las cuatro víctimas eran:

Ponciano Herrero Lobo; 41 años, natural y vecino de Cabezuela, militar retirado trabajaba de albañil, casado. Integraba la Gestora Municipal de su Ayuntamiento. Cuentan que escapó del camión, pero lo descubrieron con los focos del vehículo, y lo fusilaron también en el pinar.

Santiago Martín Calvo; 29 años, natural y vecino de Fuenterrebollo, casado, resinero. Era el presidente de la Casa del Pueblo de su localidad.

Agustín Pastor Baeza; 31 años, natural y vecino de Fuenterrebollo, soltero, hortelano. Ocupaba el cargo de secretario de la Casa del Pueblo.

Elías de Lucas Guedán; 46 años, natural y vecino de Sebúlcor, casado, labrador. Cuentan vecinos de Sebúlcor que Elías y su familia *“eran de los más ricos del pueblo (...) Se lo llevaron los falangistas de Sepúlveda, acusado de ser afiliado a CNT o FAI, era un pobre hombre, de poco valor”*¹⁴³.

Pero para la Guardia Civil era clara su ideología de *“significación inequívoca izquierdista, afiliado a este partido (sic)”*¹⁴⁴. Había sido interventor del FP en las elecciones de febrero.

Olombrada

Los dos vecinos de Olombrada fusilados fueron ejecutados en Chañe, distante unos 30 km., el 1 de septiembre de 1936. Por el expediente de depuración de Clemente de Dios Ortega sabemos que, al menos a él, lo detuvieron el 11 de agosto los falangistas de Cuéllar¹⁴⁵. Es posible que lo llevaran primero a la prisión de la villa y de allí lo sacaran junto con Zacarías el día 1 de septiembre.

Clemente de Dios Ortega; 50 años, natural de Olombrada, casado, vivía en Adrados, donde era maestro. Afiliado a Trabajadores de la Enseñanza. Estaba en su pueblo pasando las vacaciones.

Zacarías Rojo García; 42 años, nacido y vecino de Olombrada, labrador, casado. Poco antes de la guerra había tenido un pleito con un convecino del pueblo, y lo había ganado. Incluso después de muerto y enterrado, sus enemigos lo desenterraron para quitarle los papeles del juicio que llevaba en la chaqueta¹⁴⁶.

Escarabajosa de Cuéllar

Algunos testigos creen que fueron fusilados dos hermanos, apodados *Cachapanes*. Si bien, tan sólo se ha podido comprobar la muerte y averiguar el nombre de uno de ellos:

Arcadio Muñoz. Los falangistas se lo llevaron y lo dejaron malherido, creyendo que lo habían matado. Sangrando volvió a casa por la noche, pero ante la gravedad de las

¹⁴¹ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1936. Exp. Def. Ponciano Herrero.

¹⁴² Ver nota anterior.

¹⁴³ Testimonios de varios vecinos de Sebúlcor sin identificar.

¹⁴⁴ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 220, 2, 1946, Exp. nº 4. La expresión *afiliado a este partido* referida a izquierdista es otra muestra más de la preparación cultural y política de algunos guardias civiles en esta época, pues evidentemente no había ningún partido político cuyo nombre fuera “izquierdista”.

¹⁴⁵ AGA, Educación, Depuración, Exp. Dep. Clemente de Dios Ortega.

¹⁴⁶ Testimonio de Felipa Laguna.

heridas tuvieron que llamar al médico, que lo trasladó al hospital de Cuéllar. Allí tuvo algún incidente con las monjas que trabajaban como enfermeras, pues fue acusado por ellas de haberlas insultado. Éstas lo denunciaron y lo llevaron a la prisión de la villa, ubicada en el castillo. Este detalle está confirmado por una carta de Falange fechada el 25 de agosto de 1936 y firmada por el médico director del Hospital: *“el herido Arcadio Muñoz, profirió blasfemias, pase a la cárcel”*¹⁴⁷. Según testigos fueron al castillo los falangistas de nuevo por él y ahora se aseguraron bien de *matarlo*¹⁴⁸. Aunque es posible que lo fusilaran el mismo día que se lo llevaron del hospital y no llegara a ir a la cárcel.

Sepúlveda

Políticamente, tenía gran influencia Izquierda Republicana en Sepúlveda debido al liderazgo de Antonio Linaje, procurador de los tribunales y gestor de la Diputación Provincial. La Guardia Civil creía que Linaje *“debía recibir dinero de agentes rojos pues sus gastos era cuantiosos en relación con sus ingresos legales”*. Afortunadamente, había marchado a Madrid antes de comenzar la guerra, lo que le salvó, porque, según dicho informe, *“impidió que sufriera el castigo personal que merecía”*¹⁴⁹.

• 21 de julio

Feliciano Martín Poza; 29 años, natural de Valle de Tabladillo, soltero, aserrador, asalariado de Pedro Antón, afiliado a la Casa del Pueblo.

Mariano Antón cuenta que Feliciano venía hacia la villa en una yegüa por la carretera de Segovia, cuando los falangistas, que hacían guardia a la entrada, *“lo acribillaron a balazos, cayó de la montura y todavía moribundo lo arrastraron hasta la plaza, donde murió apoyado en un banco”*¹⁵⁰.

La versión oficial del suceso difiere un poco, como se ve en el informe del alcalde al juez de 1ª Instancia: *“...la noche de ayer a las 23 y 30, prestando servicio de vigilancia al frente de una patrulla, sorprendido un individuo por carretera de Santiago, se le dió la voz de alto, a la que respondió con un disparo contra la patrulla y ésta repelió la agresión con una descarga cruzada a causa de la que cayó al suelo, siendo recogido ya cadáver, trasladado al hospital primero, luego al cementerio (...) no habiendo fuerza militar (aquí), designado por autoridad militar. Firmado: el delegado de dicha autoridad militar”*¹⁵¹.

• 1 de agosto

Dos navarros fueron *“entregados a fuerzas de Falange”* para su traslado de la prisión de Sepúlveda a la de Segovia, donde únicamente llegaron los expedientes penitenciarios. Habían sido detenidos en Cantalejo. Es probable que fueran obreros del campo.

Victoriano Satrústegui García; 31 años, natural y vecino de Arcona? (Pamplona), jornalero.

Genaro (o Generoso) Marugán (o Harduya) Barrón¹⁵²; 28 años, natural de Murujone? (Pamplona), vecino de Uyaro? (Pamplona), jornalero.

• 19 de agosto

Juan Manuel Gómez Cornejo; natural de Nerva, Huelva, 33 años, casado, vecino de Sepúlveda; empleado de telégrafos; depurado. Fue sacado de la prisión de Burgos, donde había sido trasladado desde Sepúlveda, y muerto en la carretera de Valladolid a Burgos, Km.102, junto al puente de Frandosvínéz, el 19 de agosto¹⁵³.

¹⁴⁷ Arch. Mun. Cuéllar, Cpta. entrada correspondencia, 1936.

¹⁴⁸ Testimonio de Elías García Criado y vecinos de Chañe

¹⁴⁹ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1937. Ambos entrecomillados son del Exp. Resp. Civ. Antonio Linaje.

¹⁵⁰ Testimonio de Mariano Antón, corroborado por Daniel Cristóbal.

¹⁵¹ Arch. Mun. de Sepúlveda, Leg. 10, Registro de salida de documentos, fechado el 21 de julio de 1936.

¹⁵² En el Arch. Mun. de Sepúlveda consta la orden de ingreso en la prisión de partido de Genaro Marugán Barrón, por el contrario, el Exp. Personal de la prisión escribe Generoso Harduya Barrón. De igual modo, tampoco se entiende la letra de las localidades navarras, por lo que las anotamos con interrogantes.

¹⁵³ Mariano Antón piensa que el fallecido reseñado en las págs. 68 y 69, del libro *Doy Fe...*, de Ruiz Vilaplana, era este hombre.

- **21 de agosto**

Este día fueron sacados de la cárcel de Sepúlveda 5 vecinos de la villa y fusilados en la carretera de Castillejo de Mesleón a Riaza, donde aún hoy siguen sepultados. En el expediente de defunción de Antonino Albarrán se recoge el lugar exacto: *“El 21 de agosto de 1936 aparecieron 5 cadáveres, en la carretera de Segovia, km. 88, en su lado derecho, por orden autoridad enterrados en proximidades, sitio ‘Camino de la Divisa’”*¹⁵⁴.

Las cinco víctimas eran significados republicanos y socialistas de la localidad:

Fermín Sanz Velasco; natural y vecino de Sepúlveda, 44 años, casado, capitán del Ejército, retirado, alcalde de la villa, de Izquierda Republicana.

Antonino Albarrán Moreno; nacido en Aranda de Duero, 56 años; dueño de una empresa de autocares, de Izquierda Republicana.

Pedro Antón Morata; nacido y vecino de Sepúlveda, 40 años, casado, socialista, presidente de la Casa del Pueblo, fabricante de maderas y carpintería.

Luciano Esteban Mansilla; natural de Sepúlveda, 56 años, casado; agente de seguros, socialista.

Ángel Prieto Alonso; nacido en Astorga, 68 años, viudo, maestro, afiliado a Izquierda Republicana.

- **24 de agosto**

Tres días después, otros dos presos fueron sacados de la prisión de Sepúlveda. Esta vez les tocó el turno a un vecino del pueblo cercano de Consuegra y a otro sin domicilio conocido.

Anastasio Izquierdo López; 32 años, nacido en Segovia, ambulante, jornalero, soltero.

Paulino Casado Casado; 51 años, natural y vecino de Consuegra, jornalero, soltero.

Castrojimeno

En esta pequeña localidad había estado destinado como maestro Norberto Cerezo Marinero, aunque ya en el curso 1935/36 se había trasladado a Madrid. En *El Adelantado* del 13 de agosto de 1936, se publicó la detención en Sepúlveda *“del maestro **Fernando Norberto Cerezo** y su hijo **Manuel Cerezo Sacristán**, de unos 18 años”*¹⁵⁵. No parece probable que las víctimas llegaran a la cárcel de Sepúlveda, siendo más factible que murieran el mismo día 13, o en la madrugada del 14, durante el trayecto. Aunque la viuda dio como fecha de la desaparición el 12 de agosto¹⁵⁶. El padre era hermano de Luis Cerezo Marinero, empleado de la Diputación Provincial, también depurado. Norberto había ido a Castrojimeno a pasar las vacaciones con la familia de su esposa, y además en el cercano pueblo de Carrascal del Río trabajaba su hijo Manuel como secretario.

Al parecer, el abogado de Sepúlveda Mariano Cristóbal estaba enemistado con Norberto Cerezo porque las personas de los alrededores, cuando tenían algún problema, le pedían consejo gratuito al maestro en lugar de acudir pagando al abogado¹⁵⁷.

Los falangistas de Sepúlveda (Frutos Onrubia, Marcos Cristóbal –hijo del abogado- y alguno más) lo habían buscado durante varios días por Carrascal y los alrededores, pues el maestro había permanecido oculto en distintos lugares, por las cuevas del río Duratón cercanas a la ermita de San Frutos y en un desván en el pueblo del Burguillo. Su hijo Manuel era el que lo iba avisando de que lo perseguían.

Fue denunciado a los falangistas por un vecino de Carrascal, Isidro, apodado “Píliá”, quien también se haría de FE. Los falangistas de Sepúlveda lo detuvieron en Castrojimeno

¹⁵⁴ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1936. Exp. Def. Antonio Albarrán.

¹⁵⁵ *El Adelantado*, 13 de agosto de 1936. Existe una confusión en el diario pues el segundo apellido del hijo es Gil, pues era hijo de Fernando y una hermana de Teotino Gil, médico de Bercimuel, también fusilado.

¹⁵⁶ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1948. Exp. nº 27 de Norberto Cerezo.

¹⁵⁷ Testimonios de vecinos de Carrascal del Río.

donde estaba escondido en casa de sus suegros. Rodearon la casa y amenazaron con prenderla fuego si no se entregaba el maestro. Se lo llevaron junto a su hijo, porque éste no quería separarse del padre, alegando que él iba donde fuera su padre, pensando, sin duda, que así lo podría salvar. Testimonios apuntan que los falangistas “no querían” matar al hijo. Los ejecutaron en Castillejo de Mesleón, en un barranco llamado “La Rebollá”, puede que el mismo día 13. Testigos de Castillejo afirman que el día 15 de agosto descubrieron unos perros dos cadáveres que estaban mal enterrados, y unos vecinos del pueblo fueron a quemarlos. Después se habló que eran un padre y un hijo de Carrascal¹⁵⁸.

El padre tenía 48 años, y había nacido en Segovia. El hijo era natural de Bercimuel y estaba soltero.

Juan Santos Fernández; 48 años, natural de Lastras de Cuéllar, soltero, maestro destinado en Castrojimeno. Diversos testimonios aseguran que los falangistas se lo llevaron cuando Juan volvió de su pueblo a Castrojimeno para recoger sus enseres, pues le habían destinado a otra localidad. En los informes de la Guardia Civil para el expediente de depuración lo daban por “*desaparecido los primeros días del alzamiento*”, mientras que un vecino decía que había sido “*detenido por la autoridad competente en los primeros meses alzamiento*”¹⁵⁹.

El expediente penitenciario aclara que fue detenido el 1 de septiembre e ingresado en la prisión de Sepúlveda. Días después, el 6 fue “*entregado a fuerzas de Falange para su traslado a Segovia*”¹⁶⁰, donde no llegó. Su sobrino Víctor de Santos averiguó que lo habían ejecutado en el término municipal de Espirido, ya en las cercanías de Segovia. Afirma que lo denunció un vecino de Carbonero el Mayor que debía dinero a Juan Santos¹⁶¹.

Bercimuel

Teotino Gil Tesedo; natural de Riaza, 54 años, casado, médico, depurado. Curiosamente había aparecido pocos meses antes en *El Adelantado*, diario conservador, la boda de la “*sobrina del culto y bondadoso médico Teotino (...) miembro de una acomodada familia*”¹⁶². Aunque en la inscripción del Registro Civil no aparece anotada la fecha del fallecimiento, según testimonios es uno de los fusilados el 21 de septiembre en Cabezuela¹⁶³.

Duruelo

Testigos del pueblo afirman que los falangistas se llevaron al médico **Mariano Álvaro Mateos**, y al maestro, **Constantino García Martín**, tras varias visitas infructuosas a la localidad, porque estaban escondidos. Según el informe del alcalde para el expediente de depuración, Constantino “*había sido detenido por milicias de Falange el 9 de agosto de 1936*”¹⁶⁴. Ambos eran amigos, republicanos y estaban enfrentados al alcalde de la localidad. Los quisieron matar muy cerca del pueblo, pero al fin se los llevaron a Sepúlveda¹⁶⁵. De aquí serían trasladados a Segovia, donde creemos fueron ejecutados en la saca del 15 de agosto (pues ese día está reconocido oficialmente su fallecimiento, por lo que están reseñados en ese apartado). Ambas víctimas fueron cesados de sus puestos de trabajo por orden del gobernador civil del 6 de septiembre de 1936¹⁶⁶.

Linares del Arroyo

Dos grandes obras públicas habían traído un buen número de obreros a esta localidad cercana de Aranda de Duero: estaban construyendo un embalse y la línea férrea

¹⁵⁸ Testimonios de vecinos sin identificar de Castillejo de Mesleón.

¹⁵⁹ AGA, Educación, Depuración. Leg. 356. Exp. Dep. Juan Santos Fernández.

¹⁶⁰ Arch. Pris. Prov. Exp. Juan Santos Fernández.

¹⁶¹ Testimonio de Víctor de Santos.

¹⁶² *El Adelantado*, 26 de junio de 1936.

¹⁶³ Testimonio de Frutos de Veganzones y vecinos de Bercimuel.

¹⁶⁴ AGA, Educación, Depuración. Leg. 356, Exp. Constantino García.

¹⁶⁵ Testimonio de un vecino sin identificar de Duruelo.

¹⁶⁶ BOP, 7 de septiembre de 1936.

Madrid-Burgos. El 14 de agosto, los falangistas se llevaron en una camioneta y fusilaron a siete vecinos de Linares en el cercano Maluque, entre ellos una mujer, después de haber matado en el mismo pueblo a otro vecino que se resistía a la detención¹⁶⁷.

Manuel Gil Antón; natural y vecino de Linares del Arroyo, obrero, soltero. Los falangistas lo iban buscando a él y a su hermano; ambos echaron a correr, al hermano lo hirieron en un brazo, Manuel continuó corriendo y, al subir una cuesta enfrente de la iglesia, cayó abatido por los disparos.

El resto de fusilados eran:

Faustino Ramos Antón; 33 años, natural y vecino de Linares del Arroyo, labrador, casado.

Bonifacio Peñas del Val; 42 años, natural y vecino de Linares del Arroyo, panadero, casado.

Alejandro Martín Encinas; 25 años, herrero, natural y vecino de Linares del Arroyo, casado.

Telesforo Moral Cristóbal; 44 años, natural y vecino de Linares del Arroyo, obrero, soltero.

Dionisio Cano Alemán; 29 años, nacido en Madrid, vecino de Linares del Arroyo, tenía un camión para transporte, y una panadería que atendía su esposa.

Segundo Cerezo; vecino de Linares del Arroyo, obrero, casado.

Carmen; había llegado recientemente al pueblo con su marido carpintero.

Valdevacas y El Guijar

De esta localidad eran naturales los dos hermanos Blanco Arribas, ya anotados; uno era secretario del Ayuntamiento de Casla, Venancio, y su hermano Rufino, secretario en Santo Tomé Puerto. El padre de ambos era el secretario de El Guijar.

José Gutiérrez Martínez; natural de Arcones, vecino del Guijar, tenía 23 años, era veterinario, soltero. Fue fusilado el 5 de septiembre de 1936 en el puerto de Navafría. Claramente fue una confusión por parte de las milicias nacionales pues este joven *“tuvo siempre ideal derechista, adhiriéndose al Glorioso Movimiento Nacional, al que prestó su entusiasta colaboración, tanto en el aspecto social, como en el de ciudadano moral, distinguiéndose por su conducta juiciosa y sensata”*. Era un rotundo defensor del movimiento militar pues *“prestó guardias nocturnas, gestionó su ingreso voluntario en Falange, para ir a primera línea, a la que estaba afiliado, sin ser requerido para ello, hizo el servicio de convoy a Navafría, en el que halló la muerte; con el auto de su padre fue a por fusiles, a la Academia de Artillería, para la defensa de este pueblo, y cuantos servicios las Autoridades Municipales le encomendaron”*.

Testigos de la comarca dicen que lo fusilaron por “preguntar mucho” y así fue. El convoy del que formaba parte José Gutiérrez llegó al puerto de Navafría a las dos de la tarde. Al ver las posiciones *“poseído de gran empeño y contento”*, el veterinario empezó a preguntar a los soldados por las ametralladoras, los cañones y *“dónde estaban los Rojos”*. Este inusitado interés y tantas preguntas *“causaron desconfianza y le tomaron por sospechoso, lo que motivó que el soldado, avisara al capitán de las fuerzas, el cual tras corto interrogatorio y sin convencerse de la documentación del señor Gutiérrez presentada para probar su personalidad e inocencia, le preguntó si era católico y al contestar afirmativamente, llamó al capellán, para confesarle, y al poco rato fue pasado por las armas, hora de dos a tres de la tarde. Se nos hizo a todos los compañeros presenciar los sucesos a corta distancia, con el natural terror y dolor, por el rápido e injustificado procedimiento seguido con el señor Gutiérrez”*¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Testimonios de Basilio Ramos, Felisa Peñas, Amalia Cano y otro vecino sin identificar de La Vid (Burgos) localidad creada para los vecinos de Linares del Arroyo trasladados a raíz de la inauguración del embalse que anegó su pueblo.

¹⁶⁸ Jgdo. Sepúlveda, Civil, 1940. Exp. Desap. José Gutiérrez. Los entrecorridos de ambos párrafos corresponden al Exp. Desap.

Valverde del Majano

Los falangistas sacaron y ejecutaron a cuatro vecinos del pueblo, y todavía algún vecino de esta localidad afirma que el cura D. Matías, “*defendió para que no se llevaran a más gente*”¹⁶⁹. Según testimonios los fusilados están enterrados en la carretera de Ávila, la antigua nacional 110, *en el km. 6 a la izquierda*; en el término municipal de Hontoria, lindante con el de Madrona. Aunque otro testigo del pueblo piensa que no fueran el mismo día todos los fusilamientos¹⁷⁰.

En cualquier caso los fallecidos fueron:

El matrimonio **Cabrera**, ambos eran naturales del pueblo, aunque habían estado toda la vida trabajando en Francia. Estaban entre los 50 y 60 años de edad. Dicen que el primer cocido que hacían era para los pobres. Tenían ideas progresistas, puede que al venir del Francia surgieran entre los sectores conservadores de la localidad cierta enemistad o miedo a lo extranjero.

Mariano Velasco Lázaro; natural y vecino de Valverde, 45 años, labrador, casado. Es el único que está anotado en el Registro Civil, aunque sin apenas datos: “*muerto el 12 de agosto de 1936*”, en un lugar “*ignorado*”, a causa de “*la guerra civil española*”¹⁷¹. Antes de la guerra había tenido problemas familiares por cuestiones de fincas, le amenazaban, hasta que un día se cansó y fue con una escopeta y mató a un padre y un hijo, que además eran parientes suyos. Llegada la guerra, la novia del hijo muerto, que vivía en Segovia dio parte a los falangistas para que fueran por él. Estaba en la era trabajando cuando se lo llevaron.

Tejero. Este hombre se escondió en un arca con un hacha cuando se enteró de que iban a buscarlo, pues pensaba que le iban a quitar el dinero. Al descubrirle en actitud amenazadora, se lo llevaron también.

Además de los cuatro reseñados, murió en la saca del 15 de agosto el líder de la Casa del Pueblo Teófilo Carrasco, referido anteriormente.

Puente Oñez

Según los distintos testimonios recogidos a lo largo de toda la provincia, el Puente Oñez fue el lugar donde más personas fueron fusiladas. Este dato no se ha podido comprobar totalmente pues en los registros civiles no están anotadas más que siete víctimas identificadas a las que hay que añadir dos cadáveres sin identificar, uno el 18 de agosto y otro el 15 de septiembre, todos ellos de 1936. Posiblemente haya muchos más fallecidos en este lugar, bien anotados en este trabajo sin especificar el lugar de su muerte, por no haber conseguido comprobarlo; o bien sin haber podido incluirlos por no haberlos descubierto.

Los datos con que contamos son los siguientes:

15 de agosto

Mario Tomé Villoslada.

16 de agosto

Maximino García Marugán

18 de agosto y 15 de septiembre

Dos cadáveres desconocidos

30 de agosto

Anastasio Miguel Pérez

¹⁶⁹ Testimonio de un vecino de Valverde sin identificar.

¹⁷⁰ Testimonios de vecinos de Hontoria aseguran que todos fueron fusilados el mismo día, en cambio un testigo de Valverde sin identificar, afirma que no todos fueron ejecutados la misma fecha.

¹⁷¹ Reg. Civ. Valverde, Ins. Def. de Mariano Velasco el 28/4/80.

31 de agosto

Antonio Hernanz Benito
 Arturo Aparicio González
 Ángel Gracia Morales
 Agustín Hernández y Hernández
 Gregorio Esteban Álvaro
 Manuel González Herrero
 Heliodoro Gregorio Fernández Caraballo

Villovela de Pirón

En esta pequeña localidad perteneciente al término municipal de Escobar de Polendos, apareció el 7 de agosto un cadáver desconocido, *“de un varón de 36 años aproximadamente, (...) siendo el lugar de la muerte el kilómetro 26 de la carretera de Segovia a Turégano. (...) de conformación robusta, tiempo probable de defunción cuatro o cinco días del hallazgo, estado del cadáver, de cubito supino y carbonizado, como igualmente todas sus ropas, habiéndose encontrado cerca del cadáver tres vainas de fusil y dos cartuchos de escopeta del 12”*¹⁷². No se ha podido averiguar la personalidad del fusilado.

Perogordo

El 18 de agosto se encontró en Tejadilla, paraje de los alrededores de Segovia, un cadáver sin identificar que *“fue trasladado al cementerio del anejo Perogordo donde recibió sepultura, no pudiendo ser identificado por su estado de descomposición y no encontrarle documentos acreditativos de su personalidad”*¹⁷³. Es muy probable que la víctima fuera vecino de Segovia, porque fue un funcionario del Ayuntamiento de la capital quien avisó al juez municipal de Madrona, del que dependía el pueblo anejo de Perogordo.

¹⁷² Reg. Civ. Escobar, anotación de defunción del 7/08/36.

¹⁷³ Diligencia del Juez municipal de Madrona, fechado el 4 de marzo de 1937 en el Exp. Desap. de Mariano Velasco Lázaro. Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia, Reg. Civ. Caja 299, 2ª, 1937.

Nº 2. Relación cronológica de víctimas de la represión “legalizada”

En primer lugar, para una mejor comprensión de este tipo de ejecuciones tras sentencia de consejo de guerra podríamos dividir las víctimas en varios grupos:

1. Los oponentes a la sublevación en la provincia de Segovia, que defendieron la República en los primeros momentos de insurrección militar (El Espinar, San Ildefonso, Coca y Nava de la Asunción, explicado en el cap. 2.3)
2. Los milicianos de otras provincias, mayoritariamente de Madrid, que acudieron a Segovia para combatir a los sublevados en los primeros días de la guerra.
3. Los soldados de las filas nacionales que tenían ideología contraria a la insurrección militar.
4. Los soldados republicanos, apresados e integrados en Batallones de Trabajadores.
5. Los condenados a muerte a lo largo de la guerra por distintas actividades o comentarios, como los miembros del servicio de espionaje republicano.

A continuación reseñamos la información que hemos conseguido de los fusilados judiciales en la provincia de Segovia. Incluimos también lo averiguado sobre los segovianos ejecutados en otras provincias. Al igual que ocurre con los fusilamientos ilegales, la información referida depende de la documentación que se ha encontrado de cada caso (que no siempre es clara a la hora de los datos personales, por lo que puede originar algunas confusiones en cuanto a nombres, apellidos, localidades, edad, etc.) Hay sumarios que no se han localizado. El orden del relato es cronológico. Indicamos la fecha y el lugar de la ejecución.

- **Robregordo (Madrid), 24 de julio de 1936**

Raúl Moya Alzaa; 50 años, nacido en Burgos, vecino de Madrid, comandante de artillería, casado. Fue ejecutado en la posición de Robregordo, en la zona de Somosierra, y “*enterrado en el campo*” de Cerezo de Abajo¹⁷⁴.

Nos aporta información sobre este caso Arrarás, quien escribe que el comandante de Artillería, destinado en el Ministerio de Guerra, Raúl Moya, estaba al inicio de la guerra en Burgos, donde tenía “familia y relaciones”. Se unió al alzamiento, a pesar de tener ideas izquierdistas. Cuando se encontraba en plena batalla de Somosierra con un capitán del mismo arma (aunque no cita su identidad sabemos que se refiere a Felipe Moreno), iba a retirarse del combate al mando de un grupo de falangistas, momento en que fue detenido por el jefe de la Columna sublevada, García Escámez. Moya le explicó que estaban siendo confundidos y disparados por la artillería propia y se retiraban, ante lo que Escámez les obligó a que volvieran a sus puestos y, al darse la vuelta, oyó que Moya decía que disparasen a Escámez por traidor. Según Arrarás, fue detenido el comandante y “*fusilado en el acto en pleno campo de batalla. El compañero capitán huyó*”¹⁷⁵.

- **Cerezo de Abajo, 26 de julio de 1936**

Felipe Moreno García, natural de Segovia, vecino de Madrid, capitán de Artillería, casado. Fusilado en Cerezo de Abajo, en las cercanías del puerto de Somosierra.

Completamos la información sobre el cmte. Moya, con las aportaciones del jefe provincial del Movimiento en Segovia, Luis Hermosa, sobre su compañero, el capitán Moreno. Informaba Hermosa que, en los primeros días del movimiento, se había presentado en la Comandancia Militar de Segovia (*acompañado de un comandante apellidado Moya*, del que no contaba nada más) el capitán de Artillería, Felipe Moreno, cuyos “*antecedentes marxistas así como los de Moya eran conocidos*”. Salieron para Somosierra, donde fue fusilado Moya, y fue “*creencia general de familiares (...) fusilado también Moreno días*

¹⁷⁴ Reg. Civ. Cerezo de Abajo, Ins. Def. 20/09/37.

¹⁷⁵ ARRARÁS, Joaquín (coord. literario), *Historia de la Cruzada*. Ediciones Españolas. Madrid 1940. Volumen III, *El Alzamiento*. Pg. 539.

después, parece ser que el jefe de las fuerzas de Somosierra ordenó su detención pues fue hallado su cuerpo acribillado a balazos en las proximidades de Cerezo, donde fue enterrado, sin precisar quienes enterraron (...) posteriormente fueron descubiertos unos cadáveres, entre ellos, por las iniciales de la ropa, el capitán Moreno, inhumado por familiares en Cerezo de Abajo (...) por parte de la familia no hubo entonces públicamente ningún intento de reivindicar la memoria del mismo, afianzándose por tanto la opinión general....¹⁷⁶.

En julio de 1938, en *El Adelantado* apareció el anuncio de que llegaban a Segovia los ministros de Acción Sindical, González Bueno (cuñado del capitán Moreno) y de Hacienda, Andrés Amado, con motivo del traslado de los restos de Felipe Moreno “muerto por Dios y por España”¹⁷⁷. El diario invitaba a los actos, lo que aumentaba, a criterio del jefe provincial, “el mal estado de ánimo habido en la capital por la creencia de que había sido fusilado”¹⁷⁸. Además, el gobernador civil también animaba la asistencia al “traslado del heroico capitán”¹⁷⁹.

Por su parte, un hermano del ministro, Carlos González Bueno, residente en Segovia, retiró las invitaciones del gobernador de los despachos oficiales, dado el “carácter privado” de la visita a Segovia de los ministros. Añadía Hermosa que el “escaso público y autoridades en el funeral” corroboraba que la viuda “sólo recibiera el 50% pensión”. El jefe provincial denunciaba también las presiones del ministro al gobernador civil para “convertir el funeral en un acto oficial, al lado de caídos un reo de traición”¹⁸⁰.

Por otro lado, la única información recabada del Ejército afirma que Moya y Moreno de la guarnición de Madrid, estaban de “veraneo en Las Navillas, al inicio del Movimiento se presentaron en el Regimiento de Artillería de Segovia y salieron juntos a Somosierra (...) Moya fue mandado fusilar por García Escámez y al ser ejecutado pronunció palabras que acreditaban no era su intención haber prestado ayuda sino todo lo contrario pues dicen que aquellas palabras fueron ‘me había equivocado’. Moreno se dijo que también había sido fusilado por su actuación sospechosa y después se supo que había aparecido su cadáver enterrado y pasado algún tiempo trasladado a Segovia exequias (...) asistieron autoridades y comisiones y el ministro González Bueno lo que venía a rehabilitar la memoria del capitán”¹⁸¹.

• Segovia, 2 de agosto de 1936

A raíz de la toma y control de El Espinar, durante unas horas del 25 de julio, por parte de las fuerzas republicanas de Madrid, bajo el mando del capitán Sabio (500 hombres del Círculo Socialista del Oeste de Madrid, “con tres mujeres”)¹⁸². Cuatro milicianos fueron fusilados por la **causa 112/36, contra Francisca Solana García y siete más**, vista en procedimiento sumarísimo. Juez Instructor (J. Ins.) capitán Antonio Blanco García. Segovia, 30 de julio de 1936.

El 25 de julio numerosos grupos de individuos pertenecientes a las llamadas milicias rojas, ocuparon El Espinar, izando la bandera roja en el Ayuntamiento, atemorizando al vecindario, hasta que fuerzas de la Guardia Civil salidas de Segovia, al mando de dos oficiales del Instituto y otro del Ejército consiguieron tras fuerte tiroteo hacer huir a los revoltosos consiguiendo detener a Francisca Solana, Manuel García Mular, Domingo Martín Barrios, Moisés Alonso Álvarez, Simeón García Martínez, José López Jiménez, José Picazo Ciné, José Aguilar Roldán y Enrique Castelló Castelló, todos los que (...) tenían armas en la mano (...) Resultando que Manuel García, Domingo Martín, Simeón García y José López penetraron en

¹⁷⁶ Presidencia, SGM-DNP, Caja 21. Informe del jefe provincial de Segovia, Luis Hermosa, al Sec. General de Provincias del Movimiento de 1940, nº 40.

¹⁷⁷ *El Adelantado*, 22 de julio de 1938.

¹⁷⁸ Informe de L. Hermosa.

¹⁷⁹ Informe de L. Hermosa.

¹⁸⁰ Informe de L. Hermosa.

¹⁸¹ AGM, Exp. CG- M-495, Felipe Moreno. Dirección General de Reclutamiento y Personal, sección Artillería, Madrid, 12 enero de 1945. Informe de la Dirección General de Reclutamiento y Personal, sección Artillería.

¹⁸² ARRARÁS, Joaquín. Op. cit. Pg. 374. Arrarás ratifica la versión de que en el Hospital fueron “fusilados un oficial del Ejército y un falangista”. Noticia que corroboraba *El Adelantado* de 3 de agosto de 1936, explicando que los procesados “asaltaron el Hospitalillo de Sangre y tras sacar a la calle a los heridos, fusilaron en ropas menores a un alférez y un militante de F.E.”

unión de otros conocidos en las escuelas públicas, y sacaron del mismo, convertido entonces en hospital de sangre a algunos heridos y enfermos, disparando sobre dos de ellos, uno oficial del Ejército y otro paisano, no continuando en tan sangrientos designios por influjo de la procesada Francisca Solana que intercedió cerca de los grupos para que no siguieran por el camino emprendido. Considerando hechos 1º Res. rebelión militar, nº 4, art 237 (...) Cons. 2º Res. enorme grado de perversidad demostrado por los procesados (...) Fallamos que debemos condenar y condenamos a (...) como ejecutores de un delito de rebelión militar con una circunstancia aparente muy cualificada a la pena de muerte¹⁸³.

Los cuatro fusilados fueron:

Simeón García Martín; 19 años, nacido en S. Martín de la Vega (Madrid), jornalero, soltero.

Manuel García Mullar; 24 años, natural de Madrid, mecanógrafo, soltero.

José López Jimeno; 34 años, nacido en Segovia, impresor, casado.

Domingo Martín Barrios; 18, natural de Madrid, ebanista, soltero.

Otros tres milicianos enjuiciados en esta causa fueron condenados a 30 años y sacados de la cárcel de Segovia el 27 de agosto, con el delegado de Trabajo, como hemos referido anteriormente.

- **San Ildefonso, 15 de agosto de 1936**

La resistencia que opuso San Ildefonso a la sublevación militar costó numerosas vidas. Los primeros en caer fueron el administrador del Patrimonio de la República, Fernández Cordero y el presidente de Izquierda Republicana y 1º teniente de alcalde de la localidad Joaquín Trillo. Fueron juzgados por procedimiento sumarísimo en la **causa nº164/36 contra Luis Fernández Cordero y 4 más**. J. Ins. tte. Artillería retirado Andrés Ortega¹⁸⁴. Segovia, 9 de agosto de 1936.

...Luis Fernández y Joaquín Trillo, el primero en calidad de Administrador del Patrimonio de la República en La Granja y el segundo en la de presidente del partido Izquierda Republicana en dicha localidad se habían entrevistado la noche del 18 con el gobernador civil de Segovia del que recibieron instrucciones para oponerse al movimiento nacional (...) al día siguiente 19, (...) como representante del Ministerio de Hacienda asumió el mando de los carabineros afectos al Patrimonio, recogió el armamento del único guarda que no le merecía confianza y con ellos se hizo fuerte en el interior del edificio de la administración 'casa de Oficios' y en ella se mantuvo en armas hasta el 21 por la tarde no obstante existir en el pueblo fuerza pública desde el lunes día 20 integrada por fuerzas de la Guardia Civil y del Ejército, constando además que durante este tiempo permaneció en contacto telefónico con el Ministerio de Hacienda del gobierno de Madrid y solamente ante la amenaza inminente de bombardeo sobre el edificio abandonó éste y depuso las armas. Res. Joaquín Trillo se puso en relación con los elementos marxistas y demás izquierdistas de la localidad y promovió que entre éstos formasen grupos armados que recorrieron el pueblo y sus inmediaciones e interceptaron las carreteras para obstaculizar el tránsito de las fuerzas del Ejército, efectos que consiguió precisamente en razón de su significación política y el ascendiente moral que desde hace tiempo ejerce sobre las masas extremistas. Cons. Luis Fernández y Joaquín Trillo rebelión militar, art. 237, el 1º en calidad de jefe (art. 238, 1º) y Trillo como adherido (art. 238,

¹⁸³ Arch. Pris. Prov. Exp. José Aguilar. Por la pieza separada de la causa nº 112/36; contra Moisés Alonso Álvarez (J. Ins. Bautista. Segovia, 17 de marzo de 1937), sabemos que no murieron ni el oficial ni el paisano, causa por la que habían sido fusilados los cuatro milicianos. Dice así la sentencia:

Res. el 25 de julio cuando el pueblo de Espinar estaba dominado por las fuerzas nacionales, pero desguarnecido, una partida roja organizada militarmente y mandada por militares se apoderó por sorpresa de dicha localidad durante unas horas, cometiendo diversos desmanes sin que conste que hayan fusilado a nadie y sosteniendo después un nutrido fuego con la fuerza nacional que acudió a dispersar a aquellos de los que hicieron varios prisioneros (...) Cons. que habiendo retirado el ministerio fiscal la acusación de asesinato, por aparecer que el oficial y falangista que se decía asesinaron en el asalto al preventivo de El Espinar, afortunadamente viven no procede hacer ningún especial pronunciamiento en cuanto a tal particular...

¹⁸⁴ Arch. Pris. Prov. Exp. Cipriano Chaverri.

2º) con la agravante de su influencia moral sobre las masas y la peligrosidad social que representan sus campañas de extremista...

En este sumario es muy interesante la justificación del auditor de guerra de Valladolid, quien ratificó la pena de muerte, aun confirmando que no hubo resistencia armada en San Ildefonso, no se produjo un solo disparo, pero no evitó el fusilamiento.

Desde que los acusados (Cordero y Trillo) se alzaron en armas o promovieron directa o de modo eficiente tal alzamiento contra la fuerza armada del nuevo Gobierno Nacional asumido por sus autoridades militares del mando legítimo y de hecho, incurrieron en el delito de rebelión militar (...) **prescindiendo de que se disparasen o no las armas como en otro sitio se dispararon a igual fin ya que esto constituye simple accidente, tras el levantamiento consumado, y que no dependió tanto de la voluntad de los procesados como de la fuerza que se le puso de frente**¹⁸⁵.

Los ejecutados eran:

Luis Fernández Cordero; 37 años, natural de Vallecas (Madrid), vecino de San Ildefonso, empleado, soltero.

Joaquín Trillo Matilla; 56 años, nacido en Madrid, residente en San Ildefonso, médico, casado.

- **Segovia, 22 de agosto de 1936**

A pesar de los escasos datos que aparecen en el Registro Civil y de que en la prisión tampoco existen antecedentes, podemos afirmar que eran milicianos republicanos los cuatro fusilados el 22 de agosto.

Antonio Abeiga García; 36 años, natural de Boceguillas, sargento, soltero.

Vicente Ferrer Albiot; 31 años, natural de Calascito (Teruel), sargento, soltero.

Francisco Pizarro González; 39 años, natural de Córdoba, vecino de Madrid, trompeta de la Guardia Civil, soltero.

Ernesto Sánchez Cabezado Barbero; 18 años, natural de Madrid, "miliciano rojo", soltero.

- **San Ildefonso, 25 de agosto de 1936**

Dos hermanos médicos de Madrid fueron fusilados por la **causa 209/36 contra Marcelino de la Calle y 13 más**. Proc. sumarísimo. J. Ins. Luis Gil Delgado, cap. Artillería retirado. Segovia, 16 de agosto de 1936¹⁸⁶.

...Varios paisanos de La Granja (...) constituyeron grupos provistos de diversas armas con las que trataron de oponerse al Movimiento Nacional interceptando las carreteras de las inmediaciones, practicando registros y cacheos con objeto de proveerse de armas y algunos de ellos dirigiéndose a otros puntos para oponerse a las fuerzas del Ejército y entre ellos se hallan destacadamente Daniel y Wilfredo Martínez López-Ocaña, que durante varios días permanecieron fuera de la localidad ofreciendo resistencia armada a los movimientos de fuerzas acompañando a otros, toda vez que ejercían por su cultura y profesión de médicos influencias sobre las masas. (...) agravante mayor peligrosidad Wilfredo y Daniel por su grado de cultura e influenciar sobre las masas.

Daniel Martínez López-Ocaña, 27 años, nacido y residente en Madrid, de vacaciones en San Ildefonso, médico-odontólogo, soltero.

Wilfredo Martínez López-Ocaña; 24 años, al igual que su hermano acudía a pasar el verano en San Ildefonso, también médico y soltero.

¹⁸⁵ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399. Causa 164/36. Fechado el informe del auditor el 10 de agosto de 1936.

¹⁸⁶ Arch. Pris. Prov. Pamplona. Fuerte S. Cristóbal, Exp. nº 721, Félix Hoyos.

- **Segovia, 3 de septiembre de 1936**

El ferroviario Ciriaco de Frutos fue fusilado por la **causa 398/36**. J. Ins. cmte. Artillería Ramón Utrilla Selles. Segovia, 24 de agosto de 1936¹⁸⁷.

...Ciriaco de Frutos, factor de la Compañía de Ferrocarriles del Norte, mantenía relaciones con elementos contrarios al Movimiento Militar, utilizaba el teléfono de la estación de La Losa, hasta su detención el 23 de julio y estando presente el agente de vigilancia que practicó la detención, sonó el teléfono, el comunicante dijo ser Otero, refiriéndose al pueblo, solicitó se pusiese el Ciriaco para asuntos de UHP. (...) Cons. hechos atribuyen a Ciriaco ponen de manifiesto que se hallaba en la ocasión de autos plenamente identificado con los elementos hostiles al Ejército Nacional por lo que justificadamente ha de ser estimado como adherido al delito calificado según art. 238, 2º, siendo de apreciar como agravante el grave daño que pudo causar a los intereses generales.

Ciriaco de Frutos García; 40 años, natural de El Escorial (Madrid), vecino de La Losa, ferroviario.

- **Segovia, 4 de septiembre de 1936**

Valentín Fernández Cubo; Villaleza del Agua (Zamora), residente en Segovia, artillero 2º en la Academia de Segovia.

- **Segovia, 6 de septiembre de 1936**

A pesar de que la mayoría de los procesados de El Espinar lo fueron a raíz de los sucesos de Prados, por la causa 109/36, otros cinco vecinos fueron acusados de portar armas, pero no de haberlas disparado. **Causa 420/36 contra Hilario Pérez Dorrego y otros**. J. Ins. cmte. Artillería Ramón Utrilla Selles. Segovia, 29 de agosto de 1936.

...El 20 de julio se presentó en El Espinar una camioneta ocupada por milicianos marxistas, que requirieron el concurso de varios individuos, entre ellos los procesados, para oponerse por las armas al Ejército, a cuyo efecto se proveyeron de escopetas y municiones los procesados Sixto Olalla y Julián García que subieron al vehículo en dirección al caserío de Prados, con objeto de atacar la casa cuartel de la Guardia Civil, Pedro García, que se apostó con su escopeta en el Alcantarillón, para impedir la entrada en el pueblo; a Hilario Pérez y Pedro García y Julio de Castro, que provistos igualmente de escopetas anduvieron por el pueblo aún después de haberse ausentado los ocupantes de la camioneta.

Se les consideró como agravante la *“trascendencia de los hechos”*¹⁸⁸.

Los cinco fusilados eran:

Julio de Castro Pérez; 36 años, natural y vecino de El Espinar, jornalero.

Pedro García Mateo; 39 años, natural y vecino de El Espinar, jornalero.

Julián García Sacristán; 28 años, natural y vecino de El Espinar, jornalero.

Sixto Olalla Cámara; 40 años, natural y vecino de El Espinar, jornalero.

Hilario Pérez Dorrego; 30 años, natural y vecino de El Espinar, jornalero.

El mismo día fue ejecutado un miliciano de Madrid, procesado por el delito de rebelión en la **causa 481/36** (que no hemos podido consultar), aunque sabemos que el J. Ins. fue el cmte. Antonio Rey Sánchez, y el consejo de guerra se celebró el 29 de agosto.

Carlos García Herrera; 18 años, nacido en Puertollano (Ciudad Real), vecino de Madrid, peluquero.

¹⁸⁷ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

¹⁸⁸ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 133/37, Pedro García Mateos. Causa 420/36 contra Hilario Pérez Dorrego y otros.

- **Valladolid, 14 de septiembre de 1936**

A raíz del tiroteo que acabó con la vida de Onésimo Redondo en Labajos, fueron fusilados cinco vecinos de esta localidad, acusados de colaborar con los autores de los disparos. **Causa 505/36, contra Ángel Salgado Pérez y 13 más**, vecinos de Labajos, por rebelión militar y cinco homicidios conexos¹⁸⁹. Procedimiento sumarísimo, Valladolid, 3 de septiembre de 1936. A pesar de que los hechos se habían producido en la provincia de Segovia, y aquí se inició el sumario 157/36, los procesados fueron trasladados a la capital castellana donde fueron juzgados y ejecutados.

...Con motivo de la resistencia opuesta al movimiento nacional por elementos socialistas y comunistas, salió de esta capital el 24 de julio un coche ligero conduciendo al jefe territorial de Falange Onésimo Redondo Ortega y los afiliados de Falange Andrés Redondo, Eduardo Martín Alonso Calero y los señores Salcedo y Sanz, éste último de Mojados, todos los cuales iban con uniforme de su organización e iban provistos de armamento. Res. Al llegar a Labajos un grupo de comunistas de ignorada procedencia, a los que se habían mezclado elementos del mismo carácter de la localidad, rompieron inesperadamente el fuego sobre los citados señores, una vez que les reconocieron como falangistas y de esta agresión resultaron muertos Onésimo y Sanz, habiendo logrado huir y ponerse a salvo los dos restantes. Entre los vecinos del pueblo que acompañaron y se habían unido al grupo agresor, los destacados socialistas del pueblo Anastasio Domínguez, Félix Merinero, Teodomiro Valribera, José Valribera y Juan García Martín; que de forma conjunta con los elementos forasteros realizaron la agresión y persiguieron tratando de capturar infructuosamente a los fugitivos.

Res. Francisco González, sargento de Infantería, con destino en el Regimiento nº 2 de guarnición en Madrid, con permiso de verano en Labajos, a pesar de tener noticias del Movimiento Nacional no se presentó ante autoridad militar alguna y lejos de ello permaneció en su pueblo, encontrándose el día de autos en el lugar donde los hechos ocurrieron en compañía de los grupos socialistas y comunistas forasteros y si bien no se demuestra interviniera en la agresión (...) dejó escondida su pistola en casa del vecino Alberto Caro y a la llegada de fuerzas militares al pueblo, tampoco compareció, ni en los siguientes días, dio noticia alguna de lo sucedido a la autoridad competente.

Cons. Que los actos de agresión armada (...) constituyen el delito de rebelión militar, toda vez que fueron producidos por una de las numerosas partidas que diseminadas por distintos puntos del territorio nacional se han opuesto activamente con las armas en la mano al nuevo poder legítimo encarnado en las autoridades militares territoriales y porque además fueron dirigidos expresamente contra individuos que aún con carácter civil desempeñaban funciones de servicio público al lado del movimiento nacional y en concepto de auxiliares del Ejército, los cuales tienen equiparación de fuerza armada por disposición del Bando aclaratorio al estado de guerra, apdo. b), art. 3º (...) no cabe la apreciación de delito (...) homicidio (...) sino resultado de hecho rebelde a efectos de agravación de pena.

Cons. el sargento, Francisco González, dejando de efectuar una presentación obligada ante la Autoridad Militar, teniendo contacto más o menos persistente con grupos rebeldes, ocultando su armamento, no acudiendo el mismo día de autos a la llegada de fuerzas militares a dar cuenta de los hechos y ofrecer una cooperación ineludible, integra una verdadera adhesión al movimiento rebelde contra la Autoridad Militar.

Anastasio Domínguez Pérez; 31 años, natural y vecino de Labajos, labrador, soltero.

Juan García Martín; 50 años, natural y vecino de Labajos, jornalero, casado.

Francisco González Mayoral; 29 años, nacido en Labajos, residente en Madrid, sargento de Infantería, soltero.

Félix Merinero Arévalo; 47 años, natural y vecino de Labajos, jornalero, soltero.

Teodomiro Valderribas Carreras; 27 años, natural y vecino de Labajos, jornalero, casado.

¹⁸⁹ Exp. nº 1068 de Ángel García Díez, Arch. Pris. Prov. Pamplona, Fuerte S. Cristóbal.

- **San Ildefonso, 20 de septiembre de 1936**

Otro de los sumarios que enjuiciaron la resistencia a la sublevación en San Ildefonso fue la **causa 393/36 contra Mariano Alonso Alonso y otros**. Tte. Artillería retirado Andrés Ortega García. San Ildefonso, 8 de septiembre de 1936¹⁹⁰.

En las últimas horas del día 18 (...) el procesado Eulogio Marcos Huertas, llegó a S. Ildefonso procedente de Segovia dirigiéndose a la Casa del Pueblo, para transmitir unas órdenes e instrucciones recibidas en Segovia de los elementos extremistas sobre el movimiento militar, pues servía de elemento de enlace entre las organizaciones de ambas poblaciones valiéndose de su cargo de conductor del coche correo, el 19 varios individuos, entre ellos, los procesados Pedro Álvaro Yubero, Emilio Alejandro Gil, Antonio Grande Gómez, Daniel de Lucas Maroto, asaltaron la Casa Cuartel de la Guardia Civil de La Granja, registrándola minuciosamente con objeto de apoderarse de las armas que allí hubiera, aprovechando el estar concentradas en Segovia todas las fuerzas, y el mismo día el procesado Manuel López Blanco con un grupo de individuos desconocidos asaltó la Casa Cuartel de Valsaín con idéntica finalidad. (...) Cons. que los actos ejecutados (...) no obstante sus variados matices, ofrecen todos ellos una característica común, cual es la de expresar de una manera clara y categórica simpatía y deseo de favorecer en todo lo posible a los elementos hostiles al Ejército, por lo cual jurídicamente han de ser considerados dichos procesados como adheridos a la rebelión, conforme al art. 238, nº 2 del CJMil. Cons. que a los efectos de fijar la pena imponible a cada uno de los procesados ha de tomarse en cuenta además de la trascendencia de los hechos común a todos, la mayor gravedad de los actos realizados por Emilio, Pedro, Antonio, Daniel, Eulogio y Manuel, evidentemente superior a los demás.

Emilio Alejandro Gil; 19 años, natural y vecino de San Ildefonso, jornalero, soltero.
Pedro Álvaro Yubero; 28 años, natural y vecino de San Ildefonso, gabarrero.

Antonio Grande Gómez; 21 años, natural y vecino de San Ildefonso, jornalero, soltero.

Manuel López Blanco; 27 años, natural de Córdoba, vecino de La Pradera (Valsaín), casado.

Daniel de Lucas Maroto; 22 años, natural y vecino de San Ildefonso, jornalero, soltero.

Eulogio Marcos Huertas; 47 años, natural de Cuéllar, vecino de San Ildefonso, casado.

- **Segovia, 25 de septiembre de 1936**

De la ejecución de dos paisanos de El Espinar y San Rafael, únicamente conocemos que el consejo de guerra que los condenó se celebró el 11 de septiembre en Segovia, y el J. Ins. fue el cap. Leonardo González Amador.

Eustaquio Gómez Sanz; 31 años, natural y vecino de El Espinar, sastre.

Antonio Librán Riesgo; 41 años, natural de Madrid y vecino de San Rafael, jornalero.

- **Segovia, 7 de octubre de 1936**

Otro vecino de El Espinar fue ejecutado por la denuncia de una señora de Madrid veraneante en dicha villa. **Causa 482/36**. J. Ins. Pedro Bautista. Segovia, 19 de septiembre de 1936¹⁹¹.

....El 25 de julio fuerzas republicanas entraron en El Espinar, les esperó tranquilamente y confraternizó con ellos dándoles cigarros, les instó a que disparasen contra Milagros Butragueño, lo que hicieron. (...) Adhesión a la rebelión, art. 238, nº 2 relacionado

¹⁹⁰ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

¹⁹¹ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

con 237. (...) agravante el elevado grado de perversidad del procesado, demostrado: por sus antecedentes sociales y por los hechos que realizó.

Ricardo García Vicente; 38 años, nacido en Aldealengua de Pedraza, vivía en El Espinar, albañil, casado.

- **Segovia, 7 de octubre de 1936**

Francisco Pérez Hernández de León; 19 años, natural y vecino de Madrid, dependiente de sastrería, soltero.

- **Segovia, 4 de diciembre de 1936**

Pedro Arias Rodríguez; natural de Valladolid, soldado del Regimiento San Quintín de Valladolid.

El mismo día fue fusilado un vecino de Segovia, por la **causa 555/36**, por incitación a la rebelión contra **Patrocinio Merino Herrero**. J. Ins. cap. Juliano Quevedo. Consejo de guerra, celebrado el 12 de octubre de 1936, en la Academia de Artillería.

El 18 de agosto encontrándose varios soldados del Regimiento de Artillería Ligera nº 13 cargando paja en camiones (...) Patrocinio se dirigió a ellos y les dijo que habían sido traídos engañados, que lo que debían hacer era abandonar a sus jefes en la primera ocasión que tuvieran, y que si salían para el frente dispararan sobre sus oficiales. Después de su detención, el 26 de agosto le fue ocupada en una chaqueta del procesado cuando era llevada a la cárcel, una hoja clandestina dirigida a los soldados, en la cual excita a éstos a abandonar la filas del Ejército Nacional y sumarse a las del gobierno de Madrid. Cons. (...) lejos de constituir un delito de excitación a la rebelión, integran el más grave de adhesión a la rebelión militar, ya que los propósitos que exteriorizó (...) denotan de una manera clara su ideología en un todo conforme con los elementos armados que mantienen la insurrección frente al poder legítimo, y su deseo de favorecer en la medida de sus fuerzas al progreso de las armas de los rebeldes. (...) Agravante el grave daño que pudo producir a los intereses generales del Movimiento Nacional¹⁹².

Patrocinio Merino Herrero; 41 años, nacido en S. Martín del Castañar (Salamanca), vecino de Segovia, jornalero.

También el 4 de diciembre fueron ejecutados en Segovia dos hermanos vecinos de El Espinar, por la **causa 204/36**, contra Miguel Santamaría Beltrán y sus hijos Miguel y Francisco Santamaría Cámara. J. Ins. Ramón Utrilla, Segovia, 17 de octubre de 1936.

El día 20 de julio, en ocasión de que el pueblo de El Espinar se hallaba en poder de los elementos afectos al gobierno de Madrid, Miguel Santamaría Cámara reclutaba gente para luchar contra el Ejército, excitándoles y animándoles a tal fin (...) el día 23 o 24 llevaba dos ejemplares del diario *Ahora* con fotos e información de la toma del Cuartel de la Montaña, mostrándolo con gran satisfacción a cuantos encontraba, diciendo que el triunfo de los suyos era seguro porque el FP tenía mucha fuerza. Los otros dos procesados se distinguieron el día 20 animando a los marxistas que marchaban a combatir a las fuerzas leales y mostraron también gran satisfacción al conocer noticias de la toma (...) y se dedicaron junto a Miguel a propagar por el pueblo las noticias de Unión Radio de Madrid. (...) los hechos denotan ostensiblemente una identificación con los elementos que el 19 de julio se alzaron en armas contra la única representación del gobierno legítimo encarnada en tal fecha en las Autoridades Militares. Por lo cual legalmente constituyen la figura de adhesión a la rebelión con la agravante de responsabilidad criminal el extremismo de su ideología política y social, que

¹⁹² Arch. Pris. Prov. Exp. Patrocinio Merino.

ponen de manifiesto los periódicos, cartas, y carnet que le fueron ocupados y aparecen unidos en autos...¹⁹³.

Miguel Santamaría Cámara; 25 años, nacido en Madrid, residía en El Espinar, dorador.

Francisco Santamaría Cámara; 23 años, nacido en Madrid, residente en El Espinar, peletero.

- **Valladolid, 5 de diciembre de 1936**

El gobernador civil de Segovia, Adolfo Chacón de la Mata, fue fusilado en Valladolid, donde había sido juzgado, por la **causa 578/36**, el 13 de octubre de 1936.

Adolfo Chacón ejercía el cargo de gobernador civil de Segovia y era elemento destacado de la masonería, ordenó a los elementos extremistas de la citada capital patrullasen armados en la noche del 18 al 19 de julio último, con el fin de oponerse violentamente al movimiento preparado por el Ejército (...) Considerando que la conducta del procesado (...) denota una total y absoluta identificación con los rebeldes a las Autoridades Militares, constituye adhesión a la rebelión (...) siendo de apreciar la agravante (...) el haberse prevalido del cargo que detentaba y su grado de perversidad que se deduce de ser un elemento destacado de la masonería, entidad que notoriamente ha sido causante de la actual situación....¹⁹⁴.

Adolfo Chacón de la Mata, 44, natural de Estepona (Málaga), vecino de Segovia, médico, casado.

- **San Ildefonso, 6 de diciembre de 1936**

Otros seis vecinos de La Granja fueron fusilados por su resistencia a la sublevación militar en la **causa 664/36, contra Lorenzo Grande Gómez y 25 más**. Segovia, 12 de octubre de 1936.

En S. Ildefonso al tenerse conocimiento de la iniciación al movimiento nacional, Macario de la Cruz Martínez dirigente de primera fila de la Casa del Pueblo y organizador de huelgas y revueltas se personó en la Casa del Pueblo y allí juntamente con otros, entre ellos, Gregorio Puentes Ruiz, también destacado dirigente se tomaron medidas para oponerse al movimiento, entre las que se adoptaron cortar y derribar árboles en las carreteras para dificultar el paso de las tropas, asaltar la casa cuartel de la Guardia Civil y al Ayuntamiento, vigilar las entradas de la población y cachear y registrar vehículos. Res: Lorenzo Grande Gómez, elemento de ideas comunistas, juntamente con Fernando Parrea Soler, asaltaron el Ayuntamiento y derribaron árboles en las carreteras; Antonio Martín Martín, además de figurar entre quienes asaltaron al Ayuntamiento se dedicó al registro de vehículos habiendo permitido se fabricasen porras de plomo en los talleres de Palacio; Eugenio Serrano Matesanz anduvo armado de escopeta por el pueblo durante los tumultos y tomó parte en el asalto al Ayuntamiento¹⁹⁵.

Lorenzo Grande Gómez; 28 años, natural y vecino de San Ildefonso, jornalero, soltero.

Macario de La Cruz Martín; 27 años, natural y vecino de San Ildefonso, jornalero, casado.

Antonio Martín Martín; 44 años, natural y vecino de San Ildefonso, jornalero, casado.

Fernando Parrea Soler; 20 años, natural y vecino de San Ildefonso, jornalero, soltero.

Gregorio Puente Ruiz; 58 años, natural y vecino de San Ildefonso, jornalero, casado.

¹⁹³ AGA, Justicia, Caja 399.

¹⁹⁴ Arch. Pris. Prov. Exp. Fernando González.

¹⁹⁵ Arch. Pris. Prov. Pamplona, Fuerte S. Cristóbal, Exp. nº 1651, Pedro Valdenebro.

Eugenio Serrano Matesanz; 28 años, natural y vecino de San Ildefonso, jornalero, casado.

- **San Ildefonso, 12 de diciembre de 1936**

Francisco Aparicio Martín, uno de los dirigentes de la Casa del Pueblo de Valsaín, fue el único condenado a muerte por la **causa nº 768/36, contra Emilio López Alonso y 11 paisanos más**. J. Ins. tte. Andrés Ortega, Segovia, 31 de octubre de 1936.

3º Res. Francisco Aparicio Martín, presidente del gremio de carreteros de la Casa del Pueblo de la Pradera de Valsaín, se reunía con las demás asociaciones obreras los días que se inició el Alzamiento Nacional y cuando el Regimiento de Transmisiones de El Pardo pasó por Valsaín creyéndole adicto a la causa roja dijo: camaradas todos a mis órdenes que ahora todo es nuestro, vamos a por la Guardia Civil a cortar la cabeza al sargento¹⁹⁶.

Francisco Aparicio Martín; 55 años, nacido en San Ildefonso, vecino de Valsaín, jornalero, casado.

- **Olmedo (Valladolid), 1936**

No hemos encontrado la fecha del fusilamiento, pero sí nos consta que se ejecutó la sentencia antes de finalizar el año 1936¹⁹⁷. **Causa 471/36**, J. Ins. cmte. Infantería Anastasio Cristóbal Tamayo. Fue juzgado en Olmedo (pues allí se ubicaba el Regimiento en el que estaba destinado como soldado, el maestro Felipe Martín) el 25 de agosto de 1936¹⁹⁸.

Felipe Martín Ruano, soldado de aviación y maestro nacional, vecino de Fuenterrebollo, hizo a los soldados de permiso de verano en el pueblo, manifestaciones (...) no debían acatar la orden de incorporación a filas, de la Junta de Defensa Nacional, (...) el único gobierno legítimo era el de Madrid, y que él llegado el caso no se presentaría, puesto que no era la bandera que él había jurado, la que estaba al frente del Movimiento, expresión que repitió en varias ocasiones y a varias personas, (...) al llegar la orden de su reemplazo acató la misma, destinado al aeródromo provisional de ésta. Cons. (...) identificación con el propósito y procedimiento de los que a la sazón y aún en estos momentos se hallan alzados en armas contra (...) adherido a la rebelión militar, nº 2 art. 238, relación con el 237 (...) agravante manifestaciones punibles hechas a individuos sujetos a la disciplina militar, con el que el daño que el delito pudo producir, fue mayor, y por otra parte el índice de cultura del procesado agrava también subjetivamente su responsabilidad.

Felipe Martín Ruano; natural y vecino de Fuenterrebollo, maestro.

- **Sevilla, 1936**

No nos consta la fecha, pero *“por sus ideas y actuación comunista”* fue fusilado en Sevilla el juez de 1ª Instancia de Palma del Condado, Pablo Guillén Guillén. Según la Guardia Civil de aquella localidad: *“En los días de dominio rojo, mientras los revolucionarios detenían a personas de orden y metían en la cárcel, se paseaba tranquilo por la plaza sin que se metieran con él o él hiciera nada por impedir tan ilegales detenciones. Los presos le pidieron intercediera por ellos, por los rumores de que les iban a matar, les dijo que tranquilos no pasaría nada, el 26 julio, 15 asesinados, al día siguiente los supervivientes la misma petición, él tenía las llaves de la prisión, les dijo lo mismo, a las pocas horas entraron las fuerzas que los pusieron en libertad”*¹⁹⁹.

Pablo Guillén Guillén; nacido en Cuéllar, vecino de Palma del Condado (Huelva), juez de 1ª Instancia.

¹⁹⁶ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

¹⁹⁷ Testimonio de Navallilla, Sebúcor y Fuenterrebollo.

¹⁹⁸ AGA, Justicia, 39.002, Caja 399.

¹⁹⁹ Arch. Prov. Caja J/6356, Exp. Resp. Civ. 65/37, Pablo Guillén.

- **Burgos, 1936**

Aunque no hemos podido averiguar la fecha de ejecución, fueron fusilados en Burgos los hermanos Leandro y Rufino Antoranz Gómez, naturales de Sepúlveda²⁰⁰. Residentes en la provincia de Madrid, en las cercanías del frente de Somosierra, fueron tomados por espías que pasaban información al Gobierno republicano, juzgados y condenados a muerte.

Leandro Antoranz Gómez, residente en Buitrago (Madrid), trabajaba en el embalse de la localidad, casado.

Rufino Antoranz Gómez, vecino de Puentes Viejas (Madrid), casado.

- **Segovia, 10 de marzo de 1937**

Esteban García Gómez; 43 años, natural de La Cuesta, vecino de Segovia, brigada de Artillería, casado.

- **Talavera de la Reina (Toledo), 10 de marzo de 1937**

Alejandro González Gómez; vecino de Segovia, 31 años, dibujante. Dirigente del PC de Segovia y directivo de la Sociedad de Amigos de las Bellas Artes. Pasó a Madrid en la madrugada del 18 de julio y se alistó en las *milicias rojas*. Desaparecido en combate en Aravaca, fue detenido en Talavera, el 24 de febrero de 1937, allí sería condenado a muerte y ejecutado²⁰¹.

- **Segovia, 17 de abril de 1937**

Un cabo de la Academia de Artillería fue fusilado por proponer a otros pasarse al bando republicano. **Causa 407/37, por proposición para cometer traición**. Segovia, 15 de marzo de 1937.

Benito Formigo, en ocasión de formar parte de las fuerzas que salieron de la Academia el 25 de julio de 1936 con el fin de proteger las carreteras que conducen a esta ciudad de las incursiones de la llamada columna Mangada y que iban al mando del capitán Camilo Vázquez y el sargento Mariano San José, propuso al educando de música Job Egido y al artillero Francisco Chamorro que también formaban dicha fuerza que en caso de que las rojas fuesen numerosas había que matar al teniente y al sargento y pasarse todos a las fuerzas rebeldes. Cons. adhesión a la rebelión que se mantiene contra el poder que representa el generalísimo Franco, legítimo de hecho y de derecho (...) agravantes la gran trascendencia y el momento de su ejecución así como su perversidad puesto que de todos los informes y conceptos que obran en el sumario aparecen que (...) en cuanto a su conducta dejaba mucho que desear²⁰².

Benito Formigo Estévez; 23 años, nacido en Beade (Orense), vecino de Segovia, cabo de la Academia de Artillería.

- **Segovia, 23 de abril de 1937**

El único enfrentamiento armado entre milicianos segovianos y fuerzas sublevadas en la provincia de Segovia se produjo en las inmediaciones del caserío de Prados, ubicado en el término municipal de El Espinar. Se saldó con la muerte de 4 milicianos y un militar (hijo del también oficial Ildefonso Rebollo). La muerte de este último motivó que la represión en

²⁰⁰ Testimonio de su sobrino Alejandro Antoranz y Daniel Cristóbal.

²⁰¹ AHN, Salamanca. SM, Leg. 5027, Cpta. 29, Exp. 43, folio 6 al 9-11.

²⁰² Arch. Prov. Caja J/6345. Exp. Resp. Civ. 63/47, Benito Formigo.

esta villa fuera de extrema dureza. El sumario principal que enjuició los denominados sucesos de Prados finalizó con la ejecución de 32 procesados.

Causa 109/36 contra Julio Valdeón y 86 más. J. Ins. cap. Leonardo González Amador. Segovia, 20 de febrero de 1937. Consejo de guerra ordinario.

1º Res. El 18 de julio, al conocer el Glorioso Movimiento Nacional, en El Espinar, San Rafael y Guadarrama, los elementos extremistas adictos al gobierno de Madrid, acordaron oponerse (..) y al efecto y para convenir en detalles (...) distintas conferencias telefónicas y diversas y muy concurridas reuniones en diferentes sitios, entre ellos en casa de los procesados Miguel del Pozo García y Alfonso López Pérez, entre otros acuerdos, cortar carreteras, muy especialmente la de Madrid-Coruña, levantando sus adoquines y colocando con ellos y los árboles talados a tal fin las oportunas barricadas; detener los coches para registrar a las personas que los ocupaban y obrar en consecuencia con la significación política de ellas; asaltar los cuarteles de la Guardia Civil para apoderarse del armamento que en estos edificios militares pudiera existir, registrar las casas de los elementos de derechas para apoderarse de sus armas, que habían de repartirse entre los de significación extremista; vigilar las entradas y salidas de los pueblos y reclutar entre ellos a los elementos adictos a la revolución marxista, para hacer como efectivamente hicieron frente y fuego a las fuerzas nacionales. En la adopción de estos acuerdos, en su dirección y enlace para conseguirlos, y en la actividad desplegada para su más rápida consecución, figuran como elementos destacados, directivos o dirigentes, además de otros varios, unos ya juzgados y otros huidos, Marcelino García Oñoro, sujeto peligroso, directivo de CNT y comunista que anduvo en automóvil actuando de agente de enlace, obligando con su ascendiente a que dejaran el trabajo y colocando brazaletes rojos a los milicianos, y a quien posteriormente se le ocuparon diez carnets de CNT y dos escopetas, Raimundo Escudero Miguel, de pésimos antecedentes, presidente y directivo del Comité de Acción Republicana de San Rafael, dedicado personalmente a reclutar gente para hacer frente a las fuerzas nacionales, Paulino Dueñas Figueredo, comunista, dueño de la taberna La Estrella, en donde se concentraban las camionetas de las milicias rojas, trayendo y sacando de dicha taberna el armamento preciso para aquellas, y que llegó a convertir sus casa en verdadero depósito, del que se provistaron (sic) aquellos elementos, que en la posterior sucesión de los hechos hicieron fuego y bajas a las fuerzas nacionales, Alfonso López, que además de ser sujeto peligroso por su conducta excesivamente pésima y de celebrarse en su casa alguna de las reuniones de elementos extremistas, prestó su teléfono no sólo a aquellos que lo necesitaban para lograr el acuerdo de la reunión, sino que personalmente el 19 julio, llamó por teléfono a los milicianos de Guadarrama y otros puntos, para indicarles que podían bajar camionetas ocupadas por ellos, indicándoles los pueblos donde no había Guardia Civil por haber sido reconcentrada para llevar con más facilidad la ejecución de sus proyectos.

2º Res. Que en ejecución de los acuerdos convenidos el 20 julio comenzaron a llegar al Espinar, San Rafael y otros caseríos las camionetas de milicianos rojos, reclutados entre todos los pueblos limítrofes, en los que para dominarlos y reducirlos a un servicio de policía y limpieza, tuvo que salir de Segovia la tarde del 20 fuerzas de la Guardia Civil, al mando tenientes Ruiz Santa Olalla e Higinio Valle, llegan a las 4 al caserío del Portachuelo (...) recibida con fuego por un grupo de más de 26 hombres armados todos con escopetas y carabinas y de los cuales después de repelida la agresión fueron detenidos Aurelio Cabrero, Domingo Paredes, Eusebio García, Francisco Palomero, Isabelo Heras, Lorenzo Aparicio, Mariano Cuesta, Ramiro González, Rafael Martín, Valentín Jiménez, Victorio González, Basilio Barreno, Benigno Bartolomé, Juan Andrés González, Jesús Fernández y Marcelino San Mateo ocupándoles 7 escopetas y 2 tercerolas, propiedad de los guardas, Juan y Jesús, únicos de todos los prisioneros que han tenido hasta el momento de la agresión buena conducta, lo mismo oficial que particularmente (...) ya que todos los demás son extremistas, afiliados al PC y mala conducta en su mayor parte, ya que la otra por tratarse de elementos forasteros, no ha podido determinarse.

3º Res. Vencido el anterior encuentro y de pedir refuerzos a Segovia el jefe que mandaba las fuerzas continuó con éstas su avance hacia San Rafael, donde tuvo lugar otro encuentro con elementos extremistas, que no es objeto de este procedimiento, y que vencido como el oficial supiese que las fuerzas que venían en su auxilio formadas por guardias civiles y cadetes de

Artillería al mando del sargento Herguedas había sido atacada en el caserío de Prados, salido en su auxilio y en dicho lugar de Prados se celebra contra la fuerza nacional la segunda y más grave agresión (...) combate del que resulta muerto además de 4 extremistas, el alumno de la Academia de Artillería Rafael Rebollo y heridos graves los guardias civiles García y Valle, con rotura del mosquetón de la fuerza y cuyos daños no han sido tasados pericialmente, y habiéndose detenido y hechos prisioneros Raimundo Rodríguez, Julián Miño, Gonzalo Martín, Narciso Fernández, Amadeo de las Heras, Enrique de la Falla, Dionisio Rodríguez, A. Antonio Santiago, de los cuales los 6 últimos intervinieron armados con escopetas, habiendo sido detenidos en días sucesivos como participantes este encuentro, aunque no consta disparasen personalmente contra la fuerza (...).

4º Res. Adheridos a la rebelión y en unión de otros desconocidos fueron al cuartel de la Guardia Civil de El Espinar, en ausencia de las fuerzas Federico García y Jesús Martín penetraron para buscar las armas que en él había y sin que ocupasen más que dos tercerolas (...) haciendo levantar con el consiguiente sobresalto a las mujeres y familiares de los guardias que ya estaban dormidas y de cuyas propagandistas aparece como, propagandista y destacado extremista Federico García.

Cons. Hechos 3 primeros Res., rebelión militar, 2º, 3º y 4º art. 237. Cons, hechos 4º Res, adhesión a la rebelión Federico García y Jesús Martín....²⁰³.

Lorenzo Aparicio Díez; 32 años, Sotillo de la Adrada (Ávila), vecino de Guadarrama (Madrid), resinero.

Demetrio Barreno García; 39 años, natural y vecino de El Espinar, jornalero, casado.

Basilio Barreno Llorente; 25 años, nacido en Guadarrama, vecino de San Rafael, jornalero, soltero.

Benigno Bartolomé Cámara; 19 años, natural y vecino de El Espinar, albañil, soltero.

Aurelio Cabrero Plaza; 32 años, nacido en Alcolea del Campo (Ciudad Real), vecino de Tablada (Madrid).

Mariano Cuesta García; 27 años, natural y vecino de Olombrada, jornalero.

Paulino Dueñas Figueredo; 44 años, nacido en Navas de San Antonio, vecino de El Espinar, industrial.

Raimundo Escudero Miguel; 40 años, nacido en Villacastín, vecino de San Rafael, guarda.

Francisco de la Falla Sanz; 27 años, natural y vecino de El Espinar, jornalero,

Enrique de la Falla Sanz; 39 años, natural y vecino de El Espinar, jornalero, casado.

Eusebio García de las Heras; 20 años, natural y vecino de Guadarrama, jornalero.

Federico García García; 63 años, natural y vecino de El Espinar, jornalero. Padre de Marcelino y Bernardo.

Marcelino García Oñoro; 31 años, natural y vecino de El Espinar, jornalero.

Bernardo García Oñoro; 29 años, natural y vecino de El Espinar, jornalero.

Ramiro González Dabaca (o Balaca); 28 años, nacido en León, vecino de Leganés (Madrid), chófer, soltero.

Celedonio González García; 49 años, nacido en Segovia, vecino de El Espinar, jornalero.

Manuel González González; 26 años, nacido en Cándamo (Asturias), vecino de San Rafael, jornalero.

Victorio González Rubio; 24 años, natural y vecino de Ingrecilla (Toledo), jornalero.

Isabelo Heras Delgado; 24 años, natural de Cidones (Soria), vecino de Tablada (Madrid), jornalero.

Valentín Jiménez Marugán; 25 años, nacido en Maello (Ávila), vecino de San Rafael, jornalero.

Alfonso López Pérez; 29 años, natural del Madrid, vecino de San Rafael, industrial.

²⁰³ Arch. Pris. Prov. Exp. nº 4073, Santiago Rodríguez González.

José Lozoya Olmos; 44 años, nacido en Sotosalbos, residente en El Espinar, jornalero.

Francisco Luengo de Frutos; 21 años, natural y vecino de San Rafael, vaquero, soltero.

Claudio María Vara; 35 años, natural y vecino de El Espinar, jornalero.

Gonzalo Martín Ramos; 46 años, nacido en Nava de la Asunción, vecino de El Espinar, carpintero.

Rafael Martín Salido; 18 años, natural y vecino de San Rafael, jornalero. Hijo de Gonzalo.

Francisco Palomero García; 25 años, nacido en El Espinar, vecino de San Rafael, jornalero.

Domingo Paredes Santín; 19 años, natural y vecino de Castañeda de Valcárcel (León), jornalero.

Raimundo Rodríguez Escanciano; 22 años, natural y vecino de El Espinar, jornalero.

Dionisio Rodríguez García; 30 años, nacido en Navafría, vecino de San Rafael, jornalero, casado.

Marcelino San Mateo Segovia; 23 años, nacido en El Espinar, residente en San Rafael, jornalero, soltero.

Ángel Antonio Santiago González; 23 años, natural y vecino de Santander, peón, soltero.

- **Segovia, 7 de mayo de 1937**

La resistencia a la sublevación militar en Bernardos fue juzgada por la **causa 392/36 contra Manuel Sierra Iglesias y 62 más**, por el delito de rebelión. J. Ins. cmte. Artillería Ramón Utrilla Selles. Segovia, 19 de febrero de 1937.

1º Res. Al conocerse el 18 de julio en Bernardos la iniciación al Movimiento Nacional, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento Clemente Casas Postigo, de acuerdo con el gestor Mariano Casas Ramos, el presidente de la Casa del Pueblo Isidro Sánchez Aparicio y los extremistas Antonio Francisco Silva y Manuel Sierra Iglesias, decidieron oponerse al Movimiento y negándose el Alcalde con el consejo de los demás, ya indicados, a publicar el Bando declaratorio del Estado de Guerra que a la Autoridad Municipal había remitido el Gobernador Militar; y facilitándole la difusión de las noticias que daba Unión Radio de Madrid por los aparatos receptores que en su taberna tenía el Alcalde y Dimas Cañas Ruiz, decidieron todos, menos el último, declarar la huelga general en Bernardos y pueblos limítrofes, impedir la circulación del trabajo y vigilar el pueblo, armando a los elementos socialistas y de izquierda y desarmando a los de derechas cortar la comunicaciones telefónicas y de carreteras y nombrar un comité de huelga con jefes de grupos que vigilaran el cumplimiento de los anteriores acuerdos (...) Para llevarles a efecto se celebró una reunión en Casa del Pueblo a la que asistieron los anteriores (salvo Dimas Cañas), que con otros muchos elementos y en la que siguieron instrucciones que comunicaba Radio Madrid, que decretó en aquel momento, en que la reunión se celebraba -madrugada del 23 de julio- la huelga general, dándose a conocer esa madrugada por medio de un bando dictado por el Alcalde, y constituyéndose un comité de huelga, presidido por Ignacio Cámara, secretario Mario Miguel Casado, vicepresidente Emilio Gozalo Cañas, y vocales Felipe Segovia Herrero e Ignacio Piquero Herranz, y con los jefes de grupo también nombrados Gerardo Casas, Gerardo Sánchez, Antonio Francisco Silva, Estanislao Gozalo, Eleuterio Sacristán de Frutos y Néstor García Herranz, auxiliados de otros obreros, que impidieron todos los trabajos durante los días 22 al 24 julio, no sólo en Bernardos, sino en Migueláñez y Domingo García, donde tumultuariamente y dirigidos por Gerardo Casas Mateo, Estanislao Gozalo, Saturnino Corral Sancho, como muy destacados, se presentaron en diversos domicilios de distintos vecinos exigiendo las escopetas que tenían los elementos de orden, y montaron con ellas y las que se facilitaron en Bernardos la vigilancia armada de las calles de este pueblo para impedir la entrada de los elementos del Ejército y de Falange.

2º Res. a las 8 mañana del 22 de julio, se detuvo el coche correo de línea que se dirigía a Segovia, interviniendo en detención Gerardo Casas, Mateo Escolar, Pedro Llorente, Emilio Vázquez y Lucio Lázaro, haciendo apearse a los ocupantes del autobús, y en dicho coche, al día siguiente 23, por orden de los indicados en el 1º Res. y dirección del extremista Francisco Silva, fueron a la estación de Armuña, convenientemente armados, un grupo de obreros entre ellos Antonio Casas, Celestino Cubero, Gerardo Casas, Gerardo Sánchez, Félix Matesanz, Mario Miguel, Dositeo Valcárcel, Saturnino Corral, Constantino Manzanedo, Cándido Estévez y Aurelio Troncoso, y previa detención y coacción del jefe y factores estación férrea referida, se colocaron sin saber por qué en las agujas de la línea férrea dos cartuchos de dinamita, con el fin de impedir la circulación de trenes ocupados por militares y falangistas, y cuyos cartuchos explotaron inutilizando la vía férrea, siendo autorizado el viaje de autobús a la estación por el presidente del comité de huelga Ignacio Cámara, que amenazó incluso con una pistola al conductor del mencionado vehículo que se oponía a efectuar el viaje. HP.

Cons. jefes de la rebelión: Clemente Casas, Isidro Sánchez, Manuel Sierra, Mario Miguel, Estanislao Gozalo, Mateo Escolar, José Villacorta, Dositeo Valcárcel, Mariano Casas, Francisco Silva, Ignacio Cámara, Gerardo Casas, Saturnino Corral, Hilario Santa Cruz, Gerardo Sánchez y Marcelino Peña Galán (...) por resultar de la prueba practicada (...) como las más destacadas dirigentes y reiterantes en la realización de la multitud de hechos que perpetraron en Bernardos y pueblos limítrofes²⁰⁴.

De los 16 condenados a muerte inicialmente, fueron fusilados 12:

Ignacio Cámara González; 27 años, natural y vecino de Bernardos, albañil, casado.

Gerardo Casas Mateo; 25 años, natural y vecino de Bernardos, jornalero.

Clemente Casas Postigo; 49 años, natural y vecino de Bernardos, industrial, casado.

Mariano Casas Ramos; 26 años, natural y vecino de Bernardos, jornalero, casado.

Saturnino Corral Sancho; 25 años, natural y vecino de Cuéllar, jornalero.

Mateo Escolar Navarro; 27 años, natural y vecino de Bernardos, sastre.

Antonio Francisco Silva; 29 años, nacido en La Cañiza (Pontevedra), residente en San Martín (Pontevedra), jornalero, casado.

Estanislao Gozalo Gómez; 26 años, natural y vecino de Bernardos.

Mario Miguel Casado; 36 años, natural y vecino de Bernardos, jornalero.

Isidro Sánchez Aparicio; 32 años, natural y vecino de Bernardos, jornalero, casado.

Gerardo Sánchez Gómez; 24 años, natural y vecino de Bernardos, jornalero.

Hilario Santa Cruz Revuelta; 31 años; nacido en Sotillo del Rincón (Soria), vecino de Navas de Oro, jornalero, casado.

Manuel Sierra Iglesias, 39 años, nacido en Oviedo, sin domicilio fijo, residente eventual en Bernardos, relojero, casado.

Dositeo Valcárcel López; 26 años; nacido en Noceda de Traijero (Lugo), residente en Bernardos, jornalero, soltero.

- **Segovia, 25 de mayo de 1937**

Los actos de oposición al golpe militar en Coca se juzgaron en la **causa nº 689/36 contra Eduardo Sanz González y 46 más. J. Ins. Cmte. Caballería Luis de Cabanyes y de Vivanco, Segovia, 29 de abril de 1937**, consejo de guerra ordinario de plaza, por rebelión militar y *“procedimiento sumarísimo”*²⁰⁵.

Al tener conocimiento en la villa de Coca de la existencia del Glorioso Movimiento Nacional, los elementos socialistas y comunistas, y siguiendo las instrucciones que por radio Madrid comunicaba, se reunieron en la Casa del Pueblo para determinar la conducta a seguir, y en cuya reunión se dispuso en firme la huelga general resinera y campesina, el desarme de las personas de derecha para repartir las armas entre los de izquierda con las que se hicieron

²⁰⁴ Arch. Pris. Prov. Pamplona, Fuerte S. Cristóbal, Exp. Elías Herrero Heras,

²⁰⁵ Arch. Pris. Prov. Pamplona, Fuerte S. Cristóbal, Exp. nº 1766, Romualdo Acosta.

guardias y vigilancia; el cacheo y registro de las personas y casas más significadas, el corte de árboles y su colocación en la entrada y salida de carreteras que conducen al pueblo para interrumpirlos, el levantamiento de la vía férrea en el puente sobre el río Voltoya, del que llegaron a aflojarse algunos tornillos y tirafondos, y que no se desarmó en su totalidad, por la intervención de otras personas, intentar buscar coches para ir a Madrid, a Ávila y Segovia, con el fin de proveerse de armas con que oponerse al alzamiento nacional, el realizar todo género de arbitrariedades que han sido la pasión y norma en todos los pueblos rebeldes, y que en el de Coca tuvieron lugar durante los días 19 a 28 de julio en que entraron las fuerzas de Falange para dominar (...) aquella situación y a las que también en el momento de entrar se las hizo fuego.

H. P. Resultando que en la realización de los hechos intervinieron personal y directamente:

A. Los servicios de vigilancia y guardia con armas en los lugares más estratégicos del pueblo. Efectuaron dichos servicios, entre otros, Luis Frías, Rufino Palomares y Eduardo Sanz.

B. En el intento de cortar el puente de ferrocarril. Entre otros, Rufino Palomares y Cándido García.

C. En la corta de árboles para atravesarlos en la carretera. (Los que participaron en estas acciones no fueron condenados a muerte).

D. En el registro de personas de las casas de derecha y en el apoderamiento de sus armas. Entre otros, Rufino Palomares, Eduardo Sanz y Cándido García.

E. En la tentativa de ir a Madrid, Ávila y Segovia por armas, queriendo requisar para ello los coches de la localidad. Entre otros, participaron Luis y Valeriano Frías y Eduardo Sanz.

F. En la huelga general del pueblo, Valeriano Frías Sanz quién fue quién (sic) la ordenó.

Res. (...) no sólo participantes, sino que intervinieron como promotores o dirigentes en su ejecución: Eduardo Sanz, Valeriano y Luis Frías, Anselmo Rubio Jiménez (que no aparece citado hasta ahora en el relato anterior), Cándido García y Rufino Palomares (...) de los cuales los tres últimos hicieron fuego contra las fuerzas de la Falange, que conquistó el pueblo siendo el Eduardo Sanz extremista peligroso y director de todo lo ocurrido, y Valeriano Frías presidente de la Casa del Pueblo, y directivo de todos los acuerdos que en dicho centro se tomaron en unión de su hermano Luis también vocal de la Junta Directiva.

Los 6 vecinos ejecutados fueron:

Valeriano Frías Sanz; 32 años, natural y vecino de Coca, jornalero, casado.

Luis Frías Sanz; 35 años, natural y vecino de Coca, guarda jurado, casado.

Cándido García Laguna; 19 años, natural y vecino de Coca, resinero.

Rufino Palomares García; 20 años, natural y vecino de Coca, resinero.

Anselmo Rubio Jiménez; 27 años, natural y vecino de Coca, resinero, soltero.

Eduardo Sanz González; 35 años, natural y vecino de Coca, carpintero, casado.

- **Segovia, 4 de junio de 1937**

La **causa 614/36, contra Ciriaco Serrano y 45 más**, enjuició a los vecinos de Nava de la Asunción que se opusieron a la sublevación militar. El consejo de guerra se celebró en Segovia, el 16 de marzo de 1937. El J. Ins. fue el Cmte. Caballería Luis de Cabanyes.

1º. Res. al tenerse noticia en Nava de la Asunción, de la existencia del Glorioso Movimiento Nacional, los elementos integrantes y afectos al Frente Popular, acordaron oponerse al mismo, y al efecto, después de formarse grupos a la puerta del Ayuntamiento pidiendo que se recogieran armas por haber estallado la revolución social, se autorizó por los directivos de los partidos políticos de hacer fatídico frente, para que poniéndose a la cabeza de la oposición el procesado Ciriaco Serrano se procediera, como se procedió a la recogida de armas que se entregaron a los elementos extremistas que repetidamente quisieron apoderarse del armamento del cuartel de la Guardia Civil, se declaró la huelga general, impidiéndose el trabajo, se hicieron servicios de vigilancia con armas por las calles de la localidad, se cortaron las

carreteras, atravesando árboles en las de Cuéllar y Santiuste de San Juan Bautista, rompiéndose una alcantarilla en la de Bernardos, se intentó detener un tren militar, se agredió a la Guardia Civil que custodiando presos pasaba por la carretera de Navas de Oro y se practicaron en fin todos aquellos hechos que han sido antes de la liberación por el Ejército Nacional, desgraciado patrón en todos los pueblos. 2º Res. (...) han tenido destacada intervención Ciriaco Serrano, jefe de las Milicias Rojas y de la oposición al Movimiento Nacional, intervino personalmente en la recogida de armas y corte de carreteras, así como en el asalto al cuartel de la Guardia Civil y en el requisamiento del coche de Pedro Santos para ir por armas, prestando servicio de vigilancia por el pueblo e impidiendo subir las barreras del paso a nivel de la carretera de Navas de Oro para interceptarla (...) Quintín Maestro presidente de Izquierda Republicana, fue uno de los que prohibieron a los obreros acudir al trabajo intervino en la recogida de armas y firmando por su condición de Presidente y con tal carácter el documento que autorizaba a Ciriaco Serrano para llevar la dirección de la rebelión (...) Leocadio, no sólo intervino en la recogida, sino que fue de los más distinguidos en el asalto al cuartel de la Guardia Civil donde se presentaron a que les fueran entregadas las armas, haciendo también guardia con ellas (...) Cons. responsables en concepto de jefes nº 1 art. 238 que no excluye la pluralidad de personas los procesados que se indican en el 2º Res.(...) Cons. a los que se estiman como jefes de la rebelión su grado de perversidad así como la gran trascendencia que tuvieron los hechos y el momento de su ejecución...

De los 11 condenados a muerte en un principio, tres serían los fusilados:

Quintín Maestro García; 39 años, natural y vecino de Nava de la Asunción, labrador.

Ciriaco Serrano Piquero; 37 años, natural y vecino de Nava de la Asunción, hortelano.

Leocadio Villagrán de Santos; 39 años, natural y vecino de Nava de la Asunción, jornalero.

- **Segovia, 12 de junio de 1937**

Unos jóvenes de JSU intentaron organizar una sociedad de resistencia en Segovia y de apoyo a los combatientes republicanos. Desarticulada antes de llegar a desarrollar sus actividades, constituyó la **causa 1222/36**, contra **Lucas Gómez Muñoz y 5 más**²⁰⁶. J Ins. Pedro Bautista Bautista. Segovia, 22 de abril de 1937.

Res. Lucas Gómez afiliado a UGT y CNT desde 1932 y extremista peligroso concibió la idea de formar una sociedad extremista en esta capital con el exclusivo fin de ayudar a los elementos rojos, facilitándoles todo género de auxilios, incluso el de reclutar hombres para el frente rebelde y en el hipotético caso de triunfar la causa marxista, indicarles al entrar en Segovia quienes habían sido los más significados en el Movimiento Nacional para eliminarlos, cuya sociedad para evitar su descubrimiento por la posible indiscreción de sus socios, funcionaría a base de dar a cada persona un número, habiendo comunicado sus proyectos Lucas a Luis García Martín, Víctor García Berzal, Modesto Luengo y Francisco Herrero, todos los que aceptaron la proposición, y habiendo dado aviso para que los procesados se reuniesen Francisco Gómez, que como todos los anteriores pertenecían a las juventudes marxistas unificadas y eran concurrentes a cuantos actos se celebraban por los elementos marxistas en Segovia. (...) Cons. mayor perversidad Lucas Gómez, fundador y dirigente de la sociedad.

Lucas Gómez Muñoz; 20 años, nacido en Navalmanzano, vecino de Segovia, camarero.

²⁰⁶ Arch. Pris. Prov. Pamplona, Fuerte S. Cristóbal, Exp. Fco. Herrero Casado.

- **San Ildefonso, 5 de julio de 1937**

Tomás Cabezas Garrido; 25 años, Mucientes (Valladolid), cantero. Soldado de la 5ª Compañía del Batallón de Zapadores, destinado en San Ildefonso.

- **Segovia, 8 de octubre de 1937**

Causa 1270/37. Cmte. Caballería, Luis de Cabanyes, Juez Militar nº 3. Segovia, 30 de julio de 1937.

Res. (...) tomó parte muy significativa en todos los actos revolucionarios que se realizaron en El Espinar el día 20 de Julio de 1936, formando parte del grupo que asaltó el cuartel de la Guardia Civil y de los que coaccionaron al Alcalde para que les entregase las armas que tuviera, contribuyendo a que diversos vecinos montasen en las camionetas en las que se trasladaron al Caserío de Prados, donde fue agredida la fuerza pública y encontró gloriosa muerte el cadete Sr. Rebollo, interviniendo asimismo en la detención de dos falangistas que habían llegado al pueblo con una orden del Comandante Militar y requisando a los automóviles de la empresa Figueredo, para movilizar a los elementos rebeldes. (...) Cons. a los efectos de la penalidad es muy de tener en cuenta el grado de perversidad del procesado, y de gran trascendencia de los hechos en que intervino y que **desde luego fueron los más graves de los realizados en esta provincia**²⁰⁷.

Evaristo Martín Santos; 34 años, nacido en Segovia y vecino de El Espinar, albañil, casado.

- **Segovia, 29 de noviembre de 1937**

A pesar de no residir en El Espinar durante esos días, el maestro Hermenegildo Domínguez fue condenado a muerte como inductor de los obreros de la villa, que se habían opuesto con firmeza a la sublevación militar. **Causa nº 1619/ 37.** J. Ins. Cmte. Caballería L. de Cabanyes y de Vivanco. Segovia, 13 de octubre de 1937.

Res. (...) afiliado a Trabajadores de la Enseñanza (...) desplegó una intensa actividad dentro de su esfera, de su ideología comunista, haciendo formaciones con los niños a los que enseñó a cantar la Internacional y levantar el puño, procurando asimismo descristianizarles con ejemplos groseros y materialistas en relación con la presencia real de Dios y llevando su sectarismo al extremo de ordenar a los niños en las elecciones de febrero, de que rompiesen los carteles de propaganda de derechas. El procesado está así mismo considerado como el principal inductor de los obreros de El Espinar, en donde al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional ocurrieron hechos luctuosos que han sido juzgados en otros procedimientos. Cons. habida cuenta de que la rebelión tuvo caracteres violentos en El Espinar (...) son constitutivos de delito de rebelión militar, art. 237, de cuyo delito es responsable en concepto de autor por inducción (...) agravantes de perversidad y trascendencia.

Hermenegildo Domínguez Martín; 25 años, nacido en Rebollo, vecino de El Espinar, maestro, soltero.

- **Segovia, 31 de enero de 1938**

La **causa 1726/37** juzgó a varios soldados de un Regimiento de Canarias destinado en San Ildefonso. De ellos, fueron fusilados dos:

Antonio Brito Vargas; 25 años, nacido en Guía de Siora (Tenerife), industrial, casado.

Lucas Cardona Quintero; 25 años, nacido en Santa Cruz de Tenerife, electricista.

²⁰⁷ En esta sentencia se reconoce oficialmente que la resistencia a la sublevación fue especialmente fuerte en El Espinar.

- **El Espinar, 6 de marzo de 1938**

Claudio Berauzquin Berechategui; 24 años, natural de Ormazegui (Guipúzcoa), conductor, soldado de un Batallón de Trabajadores.

- **El Espinar, 7 de marzo de 1938**

Miguel Alberdi Alberdi; 24 años, nacido en Azcoitia (Guipúzcoa), herrero, soldado de un Batallón de Trabajadores.

- **San Ildefonso, 11 de mayo de 1938**

Fernando Isustia Maíz; nacido en Hernani, soldado del Regimiento La Victoria nº 28, destinado en San Ildefonso. Fue fusilado concretamente en el Cerro del Puercio.

- **Segovia, 11 de julio de 1938**

Únicamente sabemos que fue la **causa 2316/37** por la que fueron ejecutados los milicianos republicanos miembros del servicio de espionaje republicano, Servicio de Inteligencia Especial Periférico (SIEP).

Antonio Cañizares Agudo; 30 años, nacido en Málaga, encuadernador, soltero.

Petra del Peso Lorenzo; 49 años, nacida y vecina de Navaluenga (Ávila), labradora, viuda.

Pedro del Peso Muñoz; 26 años, nacido y vecino de Navaluenga (Ávila), jornalero, soltero.

Francisco Trigo Melo; 18 años, natural de Lora del Río (Sevilla), vecino de Sevilla, alfarero, soltero.

Francisco Trujillo Romero; 34 años, nacido en Rozas de Puerto Real (Madrid), jornalero, soltero.

- **San Ildefonso, 26 de julio de 1938**

Tres soldados del 2º escuadrón del Regimiento de Calatrava nº 2 fueron *“pasados por las armas por el delito de traición”* en la Cruz de la Gallega, en las inmediaciones de Valsaín.

Arcadio Gutiérrez Llanos; 24 años, nacido en Valle de Cabuérniga (Santander), soldado.

José Somonte Ruiz; 19 años; nacido en Igollo Camargo (Santander), soldado.

Rafael Máximo Caso; 18 años, natural de Prollezo (Santander), soldado.

Por su parte, el mismo día fueron ejecutados cinco soldados de la 2ª Compañía del Regimiento de Trabajadores (tras consejo sumarísimo de trincheras efectuado por el Regimiento San Quintín nº 25) en la posición Lomo Areneros, del frente de La Granja.

Juan Madariaga Erdoiza; 25 años, nacido en Bermeo (Vizcaya), ajustador/militar.

Florentino Cavada Hoz; 32 años, natural de Laredo (Santander), pescador.

José Gómez Mozo; 25 años, nacido en Sestao (Vizcaya), militar.

Fernando Masasa Saéz; 24 años, nacido en Navarrete (Logroño), barbero.

Antonio Picó Moltó; 22 años, natural de Alcoy (Alicante), comerciante.

- **Pamplona, 8 de septiembre de 1938**

En Pamplona fusilaron a 3 segovianos, acusados -junto con otros 13 presos- de ser los cabecillas de la fuga del Fuerte de San Cristóbal, establecimiento penitenciario cercano a

la capital navarra. En la fuga, efectuada el 22 de mayo de 1938, participaron 795 presos, de los que 185 fueron muertos por disparos de los guardias civiles que los perseguían. Únicamente consiguieron llegar a Francia 3 de los fugados²⁰⁸. El sumario que los condenó era el 1915/38, que no hemos encontrado en la Prisión Provincial de Pamplona y sí el 1917/38 que juzgó a los que se limitaron a participar en la huida.

Los segovianos eran:

Antonio Casas Mateo; 23 años, natural y vecino de Bernardos, jornalero. Estaba condenado a 30 años por el sumario 392/36.

Francisco Herrero Casado; 20 años, natural y vecino de Segovia, camarero. Cumplía condena de 30 años por la causa 1222/36.

Francisco Hervás Salomé; 29 años, nacido en Luena (Santander), vecino de Segovia, jornalero. Como los anteriores, condenado a 30 años, en este caso por el sumario 506/37.

- **Segovia, 22 de noviembre de 1938**

En 1938, el servicio de espionaje republicano (SIEP) estableció una red en Segovia, en la que llegaron a participar una veintena de personas, familiares y amigos de presos y de pasados al bando republicano. Desmantelada la red, fueron procesados por la **Causa 1377/38, contra Francisco Yagüe Matesanz y otros**. J. Ins. Of. Cuerpo Jurídico Militar Gabriel de Cáceres. Segovia, 14 de noviembre de 1938.

Res. Desde primeros días de abril ha venido funcionando en Segovia y su provincia una red de espionaje al servicio de la causa roja, con el fin de facilitar al ejército rebelde datos y noticias que pudieran ser útiles a fines militares, red organizada y dirigida en nuestra zona por los vecinos de Hontoria Francisco Yagüe y Faustina García, activamente secundados por su hermana Gregoria y de una manera pasiva por la madre Tomasa que apoyaba las gestiones realizadas de las que estaba al corriente, siguiendo las inspiraciones de elementos de la zona roja, y entre ellos un hermano de Faustina, que bien sólo o acompañado de algún otro miliciano rojo se internaban en nuestra zona frecuentemente reuniéndose con sus hermanas en su domicilio de Hontoria y con Francisco Yagüe en un pajar de su propiedad, en las afueras del pueblo. Res. Como agentes informativos de este servicio han colaborado: Mariano Fuentetaja, mozo de tren de la Compañía del Norte, destinado en Segovia, su esposa María Martín, informaron principalmente del movimiento de tropas por ferrocarril, así como que en la Academia de Artillería e Ingenieros se preparaban botellas de líquido inflamable y propusieron e insistieron a Francisco Yagüe que pasase a un matrimonio a la zona roja; Mauro Rodríguez, guardafrenos de la citada compañía y su esposa Estefanía, padres de Felipe y Mari Tere, pasados por Francisco Yagüe para que Mari trabajase por la causa roja, hecho realizado con consentimiento de los padres, y además éstos facilitaron informes sobre movimiento de tropas, material y heridos por el ferrocarril y otras análogas noticias.

(...) Valentín Duque, que también conocía la organización, valiéndose de Faustina quería pasarse a la zona roja por dos veces, lo que no realizó por no dar con el lugar donde había de ser recogido por los enlaces rojos; Tomás Duque y su esposa Petra Marugán, recibieron por conducto de Faustina fotografías de dos hermanos en zona roja y una esquela en la que se les encomendaba atendieran a las peticiones que les hiciera Faustina y su familia y recibieron las notas que con los informes sobre el paso de tropas y material les dio Manuel Herrero para su entrega a Faustina, no constando si lo hicieron o no, y a su vez entregaron a éste para que entregara a Faustina unas copias que se cantaban por Segovia alusivas a Azaña, la Pasionaria y otros cabecillas rojos. Jerónimo Heras, mantuvo entrevista con los que se internaban en nuestra zona y era el encargado de facilitarles la prensa diaria nacional. (...) Res. Francisco Herrero, se enteró por Gregoria cuando estaba detenido gubernativo, del funcionamiento de la red de espionaje y al ser puesto en libertad se relacionó para estos fines con Faustina, habiendo encargado algunos libros interesados por los rojos; (...) Julián García, padre de Faustina no veía con agrado las gestiones de su esposa e hijas en pro de los rojos pero no

²⁰⁸ SIERRA HOYOS, Félix. *La fuga de San Cristóbal. 1938*. Pamiela Argitaletxea, Pamplona, 1981.

denunció los hechos e incluso se prestó a llevar a Tomás Duque la carta y fotografías de sus hermanos en zona roja.

Res. que el procesado Ángel García, miliciano rojo se internó en zona nacional en unión de otros a los que se sigue pieza separada, por el frente de la sierra a mediados de octubre, con propósito de espionaje, vestido de sargento provisional del Ejército Nacional, cuyas divisas y emblemas le facilitó Faustina, siendo detenido al intentar regresar a la zona roja por el frente de Teruel, después de haber recorrido diversas plazas. El también miliciano rojo Andrés Martín, que tuvo anteriormente su domicilio en Segovia, se internó varias veces en zona nacional entrevistándose con Faustina para comunicarla órdenes y recibir los informes que ésta le hubiera recogido, siendo la última vez el 26 de octubre último que en unión de otro miliciano, pero como por el servicio de contraespionaje se supieran sus actividades y propósitos, fueron esperados donde celebraban las reuniones, y hecho fuego sobre ellos, logrando merced a la oscuridad de la noche huir, pero como hubiera de regresar para recoger a un compañero que no había vuelto a la zona roja por motivos que no constan, se hizo pasar como evadido, presentándose en Revenga. Res. que Francisco Yagüe se le ocupó un pasaporte en blanco del gobierno militar de Segovia falsificado, y a varios de ellos cantidades en moneda nacional que ascienden a tres mil ciento sesenta y ocho pesetas.

Cons. que el procurarse noticias relativas al desarrollo militar del Glorioso Movimiento Nacional, para transmitir las al enemigo y favorecer sus planes bélicos, hayan o no llegado en todos los casos a conocimiento de éste, si bien implica una total adhesión a la rebelión existente contra el Poder legítimo, por la total y absoluta identificación que supone para con los rebeldes, constituye específicamente el delito de espionaje que define y sanciona el nº 4 del art. 228 del Código de Justicia Militar, y por tanto los procesados: Francisco Yagüe, Faustina García, Gregoria García, Mariano Fuentetaja, María Martín, Mauro Rodríguez, Cesárea Estefanía, Tomás Duque, Petra Marugán, Jerónimo Heras y Francisco Herrero Valdivieso, que se han procurado tales noticias, son autores responsables criminal y civilmente del expresado delito, según art. 174, en relación con el 14, nº 1 del penal ordinario, concurriendo la agravante del grave daño que han podido producir a los intereses generales de la nación, con arreglo al art. 173 del CJMil. (...) Valentín Duque (...) agravante el que si no realizó su propósito de internarse en la zona rebelde fue por causas ajenas a su voluntad, lo que implica un elevado grado de perversidad²⁰⁹.

De los 14 condenados inicialmente a muerte, fueron absueltas las 5 mujeres y Valentín Duque, por ser menor de 21 años. Los fusilados eran:

Tomás Duque Serrano; 35 años, natural y vecino de Segovia, hortelano, casado.

Mariano Fuentetaja Arranz; 37 años, nacido en Navalmanzano, vecino de Segovia, ferroviario, casado.

Ángel García Rodríguez; 20 años, nacido en Granada, carnicero (soldado), soltero.

Jerónimo Heras Marinas; 36 años, natural y vecino de Hontoria, jornalero, casado.

Francisco Herrero Valdivieso; 32 años, nacido en Madrid, residente en Segovia, librero, soltero.

Andrés Martín Sastre; 25 años, natural y vecino de Segovia, carnicero, soltero.

Mauro Rodríguez García; 49 años, nacido en Tabanera de Cerrato (Palencia), residente en Segovia, ferroviario, casado.

Francisco Yagüe Matesanz; 38 años, natural y vecino de Hontoria, lechero, casado.

• Segovia, 26 de noviembre de 1938

Dos presos gubernativos fueron detenidos en la sierra cuando intentaban cruzarla para llegar a zona republicana. No hemos tenido acceso a la **causa 643/38**, por adhesión a rebelión, contra Antonio Romero Arbeiza y Rufino Rodríguez Hernández, pero nos consta que el J. Ins. fue Emilio Isasa Navarro, alférez honorífico del Cuerpo Jurídico Militar, juez de la División nº 72, y el consejo de guerra se celebró el 8 de julio de 1938.

²⁰⁹ Arch. UAPO.

Antonio Romero Arbeiza; 26 años, natural y vecino de Segovia, empleado de la Diputación Provincial, casado con Gregoria García, condenada a 30 años por el sumario 1377/38.

Rufino Rodríguez Hernández; 26 años, nacido en Cadalso de Los Vidrios (Madrid), residente en Segovia, albañil, soltero.

- **Segovia, 29 de noviembre de 1938**

De la **causa 1377/38** derivaron **2 piezas separadas**, la **nº 1** procesaba a **Antonio Otero Allas**. Consejo de guerra de Oficiales Generales en Valladolid, 22 de noviembre de 1938.

Res. Antonio Otero, de antecedentes políticos desfavorables, integraba en Segovia, donde estaba destinado en la Caja de Recluta, una organización dedicada a facilitar a los rojos noticias sobre situación, objetivos, etc. de las fuerzas de nuestro Ejército de operaciones en sectores cercanos a dicha plaza, y en esa misión informativa fue nombrado el nº 2, proporcionó al nº 1 de la organización (Francisco Yagüe) a fin de que a su vez les hiciera llegar a los mandos rebeldes datos detallados de personal y material de guerra existentes en S. Ildefonso, Villacastín, Quitapesares, Otero, San Rafael y Alto del León, así como de convoyes y tropas en movimiento por aquellos lugares y posiciones. Cons. al procurar y transmitir para los elementos que sostienen la rebelión contra nuestro Ejército y el Nuevo Estado Nacional Español noticias relativas a fuerzas (...) incurrió en delito espionaje, nº 4 art. 228. Cons. agravantes daño inmenso que pudo derivarse del delito en la campaña patriótica que trataba de perjudicar y la condición jurídica militar del culpable...

Antonio Otero Allas; 47 años, nacido en Fuentemilanos, residente en Segovia, auxiliar administrativo con la consideración de oficial militar, casado.

- **Segovia, 17 de julio de 1939**

La **pieza separada nº 2** (contra Francisco Arribas Calleja y 6 más) de la **causa 1377/38**, por espionaje, se vio en Segovia, el 13 de abril de 1939.

Res. Francisco Arribas perteneciendo al ejército rojo en Madrid, fue designado por su jefe para el servicio de espionaje, infiltrándose el 16 de octubre de 1938 en nuestra zona, con tarjeta de identidad y pasaporte falso, nombre supuesto Antonio Fuentes López, al objeto de averiguar el movimiento de nuestra fuerza y comunicarlo al enemigo, siendo apresado en el frente de Teruel al intentar reintegrarse en zona roja. Res. León Hernández aceptó a propuesta del espía rojo Ángel García, con pleno conocimiento de que éste era, y la misión que le traía a zona nacional, de proporcionarle cuantos datos sabía sobre el Movimiento y desplazamiento de fuerzas de nuestro Ejército llegando a señalar "Ront Fronh" para que si alguien se la dijese, el pudiera darle cuantos datos conociera, y en la primera ocasión así lo hizo. (...) Cons. Francisco Arribas (...) ha incurrido en delito espionaje (...). Cons. León Hernández al aceptar proposición espía y proporcionar datos militares incurrió en delito espionaje...

Francisco Arribas Calleja; 22 años, nacido en Madrid, residía en Alcalá de Henares, conductor (soldado), soltero.

León Hernández Casado; 61 años, natural y vecino de Almazán (Soria), ferretero, casado.

- **Madrid, 10 de noviembre de 1939**

Casto Martín Vírveda; 45 años, nacido en Orejana, vivía en Chozas de la Sierra (actual Soto del Real, Madrid), labrador, casado, afiliado a UGT.

- **Cuéllar, 13 de marzo de 1940**

Antonio Santamaría del Brío; 37 años, nacido en Sevilla, residente en Málaga. El Juzgado Militar nº 6 de Segovia fue quien llevó a cabo el procedimiento judicial.

- **Segovia, 24 de febrero de 1941**

Ángel Alonso Bermejo; 22 años, nacido en Casla, vivía en Arcones, pastor, soltero. Fue ejecutado por sentencia de los sumarísimos 63.468/63.446, juzgado en Segovia, el 15 de enero de 1941.

- **Segovia, 10 de octubre de 1942**

La última ejecución en la provincia de Segovia fue por aplicación de la **causa 101.096. contra Francisco Rueda Cano**. J. Ins. Cmte. Artillería Bruno Fraile Balbuena. En Segovia, 11 de agosto de 1942. Reunido el Consejo de Guerra permanente nº 3 en procedimiento sumarísimo de urgencia.

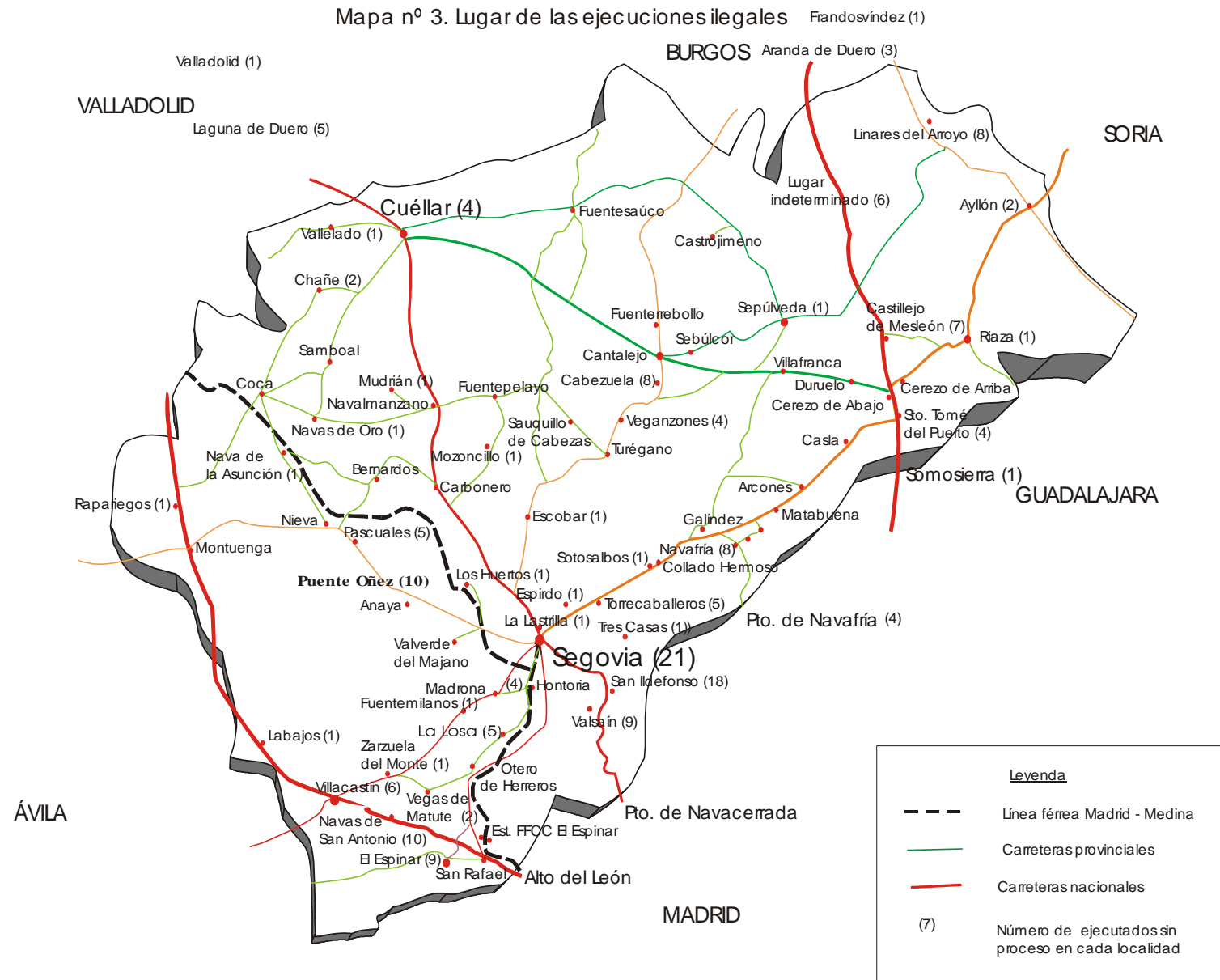
Res. Francisco Rueda, de pésimos antecedentes, tomó parte activa en asalto del Cuartel de la Montaña, de donde robó y sustrajo diferentes objetos, quedando probado hasta la saciedad (...) su participación en los crímenes del teniente de Ingenieros Bergón Vivanco y de un guardia de Segovia asesinado en la calle del Pez, sin que los otros crímenes de que se le acusa hayan sido probados suficientemente (...) testimonios, abundante información de la autoridad policíaca y testimonios de testigos presenciales (...) ingresó en las milicias de retaguardia, después en la policía roja, en la que tiene una actuación destacada como jefe en varios pueblos de la Mancha. Cons. hechos (...) delito adhesión a la rebelión agravantes peligrosidad y trascendencia....²¹⁰

Francisco Rueda Cano; 31 años, nacido en Vicálvaro (Madrid), vecino de Rebollo, metalúrgico, casado.

²¹⁰ Exp. en Arch. Pris. Prov.

Nº 3: MAPAS DE LA REPRESIÓN

Mapa nº 3. Lugar de las ejecuciones ilegales Frandosvíndez (1)



Nº 3. Mapas de la represión

De los 211 casos de ejecuciones ilegales comprobados en este trabajo, conocemos el lugar de ejecución de 179 víctimas, como se recoge en el mapa nº 3. Se ordenan por términos municipales, indicando el nombre del término específico, cuando éste se conoce.

Cuadro nº 1: Lugar de las ejecuciones sumarias en la provincia de Segovia

Localidad		Nº de víctimas lugar concreto	Nº de víctimas por localidad
Anaya (Puente Oñez)			9
Ayllón			2
Cabezuela			8
Carretera de Aranda (lugar indeterminado)			6
Castillejo de Mesleón			7
Chañe			2
Cuéllar			4
El Espinar	Cristo del Caloco	1	8
	San Rafael	1	
Escobar de Polendos (Villovela)			1
Espirdo			1
Fuentemilanos (Aldeallana)			1
La Losa			5
Labajos			1
La Lastrilla			1
Los Huertos			1
Madróna/Hontoria			5
Mozoncillo			1
Mudrián (Pinar Temeroso)			1
Nava de la Asunción			1
Navafria	Cementerio	3	12
	Puerto Navafria	4	
Navas de Oro			1
Navas de San Antonio	Lancha del Tejo	4	10
	casco urbano	2	
Pascuales			5
Rapariegos			1
Riaza			1
San Ildefonso	Puente de Segovia	3	27
	Valsaín	9	
Segovia	Alameda del Parral	2	21
	Cementerio	12	
	Pinarillo	1	
	Tejadilla	3	
Sepúlveda			1
Sotosalbos			1
Santo Tomás del Puerto	Las Posturas	3	4
	Prado Navorquiles	1	
Torrecaballeros	Lavazuelos	3	5
	Sitio del Pinar	1	
	Ermita del Pedernal	1	
Vallelado			1

Veganzones		4
Vegas de Matute		2
Villacastín		6
Zarzuela del Monte		1

El resto de ejecutados ilegales, cuyo lugar de ejecución se conoce, fueron fusilados en las provincias vecinas.

Cuadro nº 2: Lugar de las ejecuciones sumarias fuera de la provincia de Segovia

Provincia	Localidad	Nº víctimas por localidad	Nº víctimas por provincia
Burgos	Aranda de Duero	3	4
	Frandosvinez	1	
Valladolid	Laguna de Duero	5	6
	Valladolid	1	
Madrid	Peña Cebollera	1	1

Los lugares concretos de ejecución utilizados, que se han podido comprobar, fueron:

Cuadro nº 3: Parajes donde se producen las ejecuciones sumarias

Lugar de ejecución	Nº de víctimas
Carreteras	36
Descampados	22
Tapias de cementerios	19
Orillas de un río	19
Pinares	16

Estos datos prueban que las tapias de los cementerios, ubicación tradicional de los fusilamientos, fueron casi los lugares menos utilizados. Las ejecuciones no eran legales, por lo que no cumplían los requisitos habituales en estos casos. La elección de las cunetas al lado de las carreteras podría tener una doble interpretación. Por un lado, una explicación superficial diría que los falangistas se llevaban a sus víctimas en camionetas y no se paraban a pensar o buscar un lugar idóneo para la ejecución. En un momento dado se detenían en la carretera, apeaban a los detenidos y los fusilaban sin más dilación ni ceremonia. Dejaban los cadáveres a la vista y se daban a la fuga. Por otro lado, elaborando una interpretación un poco más argumentada, explicaríamos que el procedimiento de abandonar los cadáveres al lado de la carretera estaba perfectamente estudiado. La presencia de los cuerpos sin vida de los fusilados ejercía el terror de una manera más cruel y efectiva incluso que la propia ejecución, pues recordaba a todo aquél que lo viera, el castigo que sufrían los oponentes, quiénes eran los dueños de la situación y la total impunidad con que ejercían la represión.

En cuanto a las ejecuciones judiciales, se llevaron a cabo especialmente en Segovia, sede de los juzgados militares, pero también hubo fusilamientos en San Ildefonso y El Espinar; y en pleno frente de batalla, como Valsaín. Finalizada la guerra se produjo una única ejecución judicial en Cuéllar.

Nº 4. Calendario de la represión

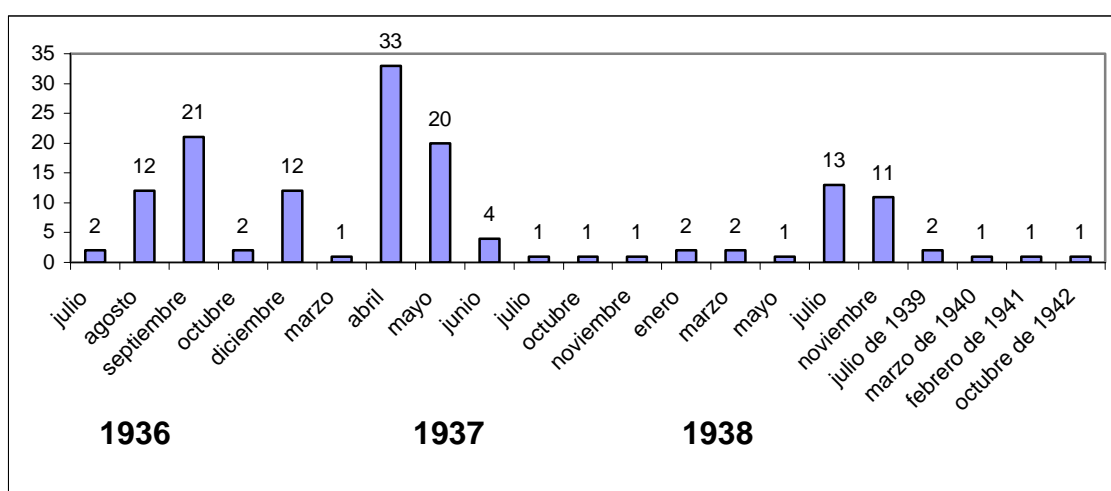
Hemos podido comprobar las fechas de todas las ejecuciones judiciales producidas en la provincia de Segovia. Por el contrario, se ha logrado acreditar la fecha de un total de 182 fusilamientos ilegales, con lo que quedan sin comprobar las fechas de las 29 víctimas restantes.

a) Calendario de la represión judicial

Año	Mes	Nº ejecuciones	Total por año
1936	Julio	2	49
	Agosto	12	
	Septiembre	21	
	Octubre	2	
	Diciembre	12	
1937	Marzo	1	61
	Abril	33	
	Mayo	20	
	Junio	4	
	Julio	1	
	Octubre	1	
	Noviembre	1	
1938	Enero	2	32
	Marzo	2	
	Mayo	1	
	Julio	13	
	Noviembre	11	
1939	Julio	2	2
1940	Marzo	1	1
1941	Febrero	1	1
1942	Octubre	1	1

Gráficamente quedaría reflejado así:

Gráfico nº 1:



Parece evidente el punto álgido de las ejecuciones en los meses de abril y mayo de 1937, momento en que fueron ejecutados los procesados por los actos de resistencia a la sublevación en El Espinar (32), Bernardos (12) y Coca (6). Pero, proporcionalmente, es mucho más importante la cifra de fusilamientos de 1936 (cuando habían sido fusilados los vecinos de San Ildefonso y algunos de El Espinar, también acusados de oponerse al movimiento militar), pues en sólo 6 meses fueron ejecutados 49 oponentes, en cambio, durante todo el año 1937, lo fueron 61. En 1938 fueron ejecutados los acusados de espionaje y los soldados trabajadores. Finalizada la guerra las cifras se redujeron al mínimo.

b) Calendario de la represión ilegal

• Fusilados durante el mes de julio de 1936:

7 víctimas

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21 (1) *	22	23	24 (1)	25 (1)	26 (2)
27	28 (1)	29 (1)	30	31		

*(Entre paréntesis figura el número de víctimas cada día).

• Fusilados durante el mes de agosto de 1936:

135 víctimas

lunes	martes	miércoles	Jueves	viernes	Sábado	domingo
					1 (2)	2 (1)
3 (5)	4	5	6 (5)	7	8 (4)	9
10 (5)	11 (1)	12 (11)	13 (15)	14 (12)	15 (15)	16 (1)
17	18 (1)	19 (9)	20 (2)	21 (9)	22 (3)	23 (1)
24 (2)	25 (2)	26	27 (8)	28 (2)	29	30 (5)
31 (14)						

- **Fusilados durante el mes de septiembre de 1936: 30 víctimas**

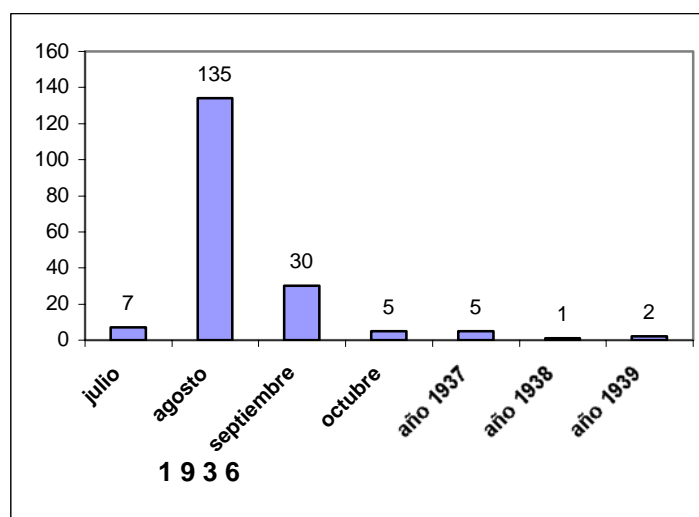
lunes	martes	miércoles	Jueves	viernes	sábado	domingo
	1 (2)	2 (2)	3	4 (1)	5 (2)	6 (1)
7	8 (12)	9 (1)	10 (1)	11	12	13
14	15 (1)	16 (2)	17	18	19 (1)	20
21 (4)	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

El resto de las ejecuciones sumarias en la provincia de Segovia fueron más aisladas:

Mes/año	Fecha	Víctimas por día	Total víctimas
Octubre de 1936	Día 9	1	5
	Día 29	3	
	Día 30	1	
1937	12/6/37	1	1
1938	25/8/38	1	1
1939	16/2/39	1	1

La representación gráfica del calendario de las ejecuciones sumarias quedaría como sigue:

Gráfico nº 2: Las ejecuciones ilegales



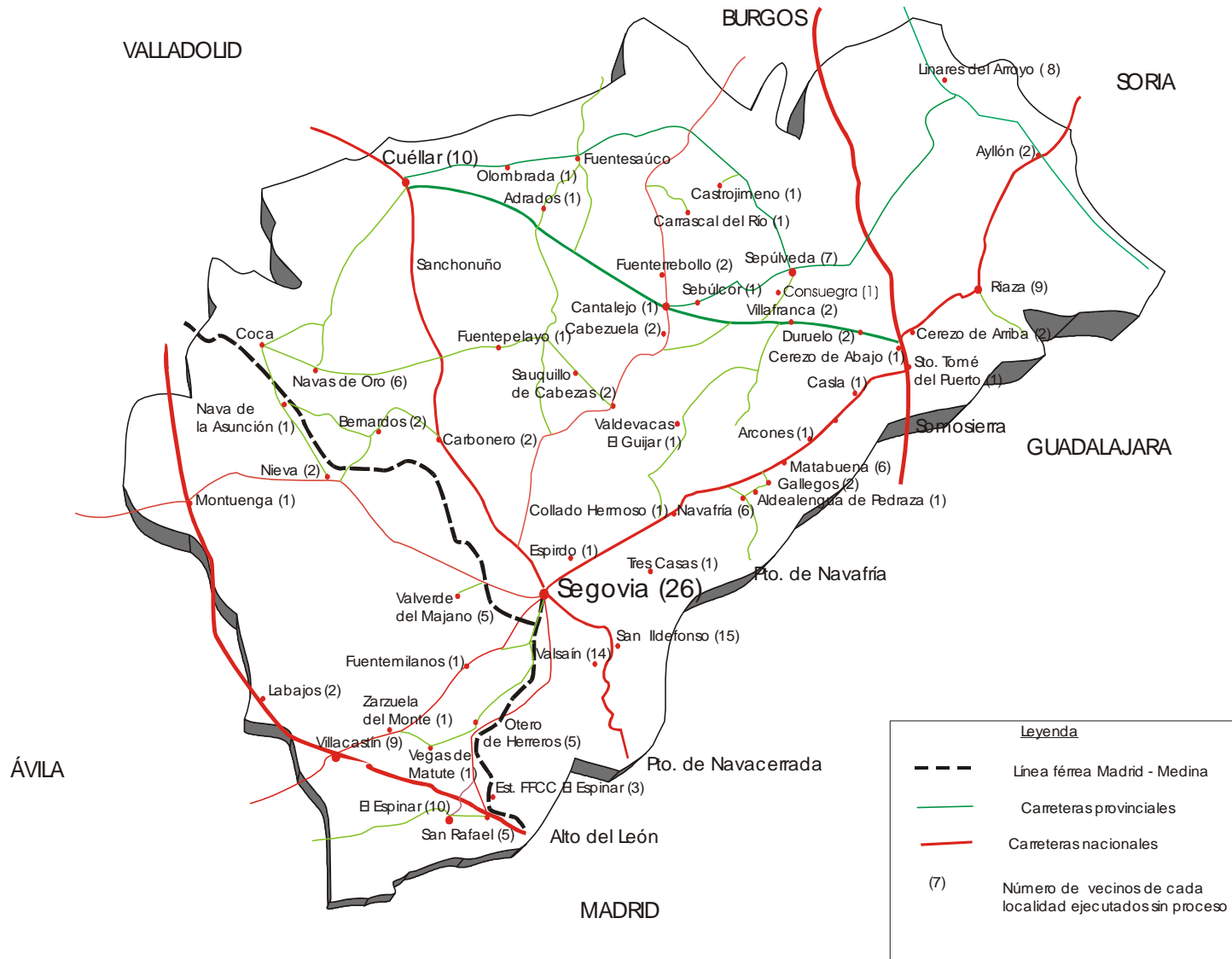
Salta a la vista que la práctica totalidad de las ejecuciones se produjeron en el verano de 1936, siendo especialmente trágico el mes de agosto, con la mayoría de las ejecuciones. Representa el punto álgido, tras el cual va descendiendo algo en el mes de septiembre, y aún más en octubre, para llegar prácticamente sin ejecuciones “ilegales” hasta el final de la guerra. Desde estas fechas, meses de septiembre y octubre de 1936, se aplicó

casi exclusivamente la justicia militar, imponiéndose los fusilamientos originados por sentencias de consejos de guerra.

Dos fechas concretas fueron especialmente trágicas, el 15 de agosto y el 8 de septiembre, con 15 y 12 ejecuciones respectivamente. Coincidían con dos fiestas religiosas de gran tradición, no sólo en la provincia, sino en toda Castilla, donde existe importante devoción mariana: la Virgen de la Asunción en agosto y Nuestra Señora de septiembre, con una advocación concreta en cada localidad. Estas fechas podrían explicarse por la motivación religiosa que pretendían dar a sus actuaciones las escuadras falangistas al ejercer la represión sobre los "Sin Dios", como ya se ha explicado con anterioridad.

Nº 6: IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS SEGÚN DIVERSAS VARIABLES

Mapa nº 4: Domicilio de los víctimas de la represión sumaria



VALLADOLID



Nº 5. Identificación de las víctimas según diversas variables

a) Domicilio

Por un lado, se ha comprobado el domicilio de 203 víctimas de la represión ilegal, y por otro, conocemos el lugar de residencia de 132 fusilados judiciales.

Cuadro nº 3: Domicilio de las víctimas de la represión residentes en Segovia

Localidad		Nº víctimas repr. judicial	Nº víctimas repr. ilegal	Nº total víctimas
Adrados			1	1
Aldealengua de Pedraza			1	1
Arcones		1	1	2
Ayllón			2	2
Bercimuel			1	1
Bernardos		11	2	13
Cabezuela			2	2
Cantalejo			1	1
Carbonero el Mayor			2	1
Carrascal del Río			1	1
Casla			1	1
Castrojimeno			1	1
Cerezo de Abajo			1	1
Cerezo de Arriba			2	2
Coca		6		6
Collado Hermoso			1	1
Consuegra			1	1
Cuéllar		1	10	11
Duruelo			2	2
Escarabajosa de Cuéllar			1	1
El Espinar	Barrio de la Estación		3	53
	San Rafael	11	5	
	Villa de El Espinar	24	10	
Espirdo			1	1
Fuentemilanos			1	1
Fuentepelayo			1	1
Fuenterrebollo			2	2
Gallegos			2	2
Hontoria		2		2
Labajos		4	2	6
La Losa		1		1
Linares del Arroyo			8	8
Matabuena			4	4
Montuenga			1	1
Nava de la Asunción		3	1	4
Navafría			6	6
Navas de Oro		1	6	7
Nieva			2	2
Olombrada		1	1	2
Otero de Herreros			4	4
Palazuelos			1	1
Rebollo		1		1

Riaza			9	9
San Ildefonso	San Ildefonso	15	15	46
	Valsaín	2	14	
Santiuste de S. Juan Bautista			1	1
Sauquillo de Cabezas			2	2
Sebúlcór			1	1
Segovia		14	28	41
Sepúlveda			7	7
Santo Tomé del Puerto			1	1
Tres Casas			1	1
Valdevacas - El Guijar			1	1
Valverde del Majano			5	5
Vegas de Matute			1	1
Villacastín			8	8
Villafranca del Condado			3	3
Zarzuela del Monte			1	1
Total domicilios conocidos		99	194	293

El resto de víctimas cuyo domicilio se ha comprobado, residía fuera de la provincia:

Cuadro nº 4: Domicilio de las víctimas de la represión residentes fuera de Segovia

Provincia	Localidad	Nº víctimas repr. judicial	Nº víctimas repr. ilegal	Nº total víctimas
Ávila	Navaluenga	2		2
León	Castañeda de V.	1		1
Madrid	Alcalá de Henares	1		25
	Guadarrama	2		
	Leganés	1		
	Madrid	13	5	
	Tablada	2		
	Villalba		1	
Málaga	Málaga	2		2
Oviedo	Quirós		2	2
Pontevedra	San Martín	1		1
Santander	Santander	1		1
Sevilla	Sevilla	1		1
Soria	Almazán	1		1
Tenerife	Tenerife	2		1
Toledo	Ingrecilla	1		2
	Toledo		1	
Valencia	Valencia	1		1
Valladolid	Valladolid	1		1
Total domicilios conocidos		33	9	42

En primer lugar, del estudio de los domicilios de las víctimas de la represión sumaria podemos hablar de una geografía de la represión, pues hubo algunas zonas especialmente castigadas por la represión, como se puede observar en los mapas 4 y 5.

1. Comarcas Serranas. Abarcan los pueblos cercanos a las sierras de Guadarrama y Somosierra, desde Villacastín hasta Ayllón. Hay que tener en cuenta que la práctica

totalidad de esta zona fue frente de guerra durante toda la contienda, si bien la actividad bélica se limitó al verano de 1936 y a la ofensiva republicana por San Ildefonso en la primavera de 1937.

Por un lado, hemos comprobado un total de 91 víctimas de la represión ilegal residentes en los pueblos de esta zona lo que representa el 43,12% del total de ejecutados en la provincia. Se podría explicar que la cercanía del frente hacía que las labores de limpieza de la retaguardia fueran más exhaustivas que en otras zonas de la provincia más lejanas de la guerra.

Pero también debemos apuntar que, precisamente varias de las localidades de esta zona tenían importantes Casas del Pueblo, con fuerte afiliación y viva actividad política y sindical. De entre ellas, los centros obreros de San Ildefonso (29) y El Espinar (18), con sus respectivas barriadas (Valsain, la Estación y San Rafael), eran los más destacados por lo que fueron también los más castigados. Otras localidades con activas Casas del Pueblo, igualmente reprimidas con gran dureza, fueron Villacastín (8), Otero de Herreros (4), Navafria (6), Matabuena (5) y Riaza (9).

2. Tierra de Pinares. Es la comarca que atraviesa la provincia de este a oeste, en su parte central. La actividad principal de sus habitantes era la explotación de los pinares: resina, madera y leña. La mayoría de los trabajadores estaban sindicados en las Casas del Pueblo de la UGT.

De esta zona destacan por el número de represaliados, Cuéllar (10), Navas de Oro (6) y Carbonero el Mayor (2). Los fusilados de Nava de la Asunción (3) y Coca (6) lo fueron por la ejecución de sentencia tras consejo de guerra. Bernardos sufrió ambos tipos de represión: 2 ejecutados ilegales, y 11 por pena de muerte.

3. Carreteras que vienen de Burgos y Valladolid. Eran las vías por las que llegaron los falangistas de esas provincias a Segovia. Tuvieron especial cuidado de limpiar estas carreteras para que sus movimientos no tuvieran peligro alguno.

De la carretera de Aranda, fueron fusilados vecinos de Fuenterrebollo, Cantalejo y Cabezuela. Por su parte, de la carretera de Burgos hacia Madrid hubo fusilamientos en Castillejo de Mesleón, Cerezo de Abajo y Santo Tomé del Puerto.

Por el oeste, en la carretera que procedía de Valladolid varias localidades sufrieron la represión de los falangistas: Montuenga, Labajos, Villacastín, Navas de San Antonio y El Espinar.

4. Segovia. Lógicamente era la ciudad más grande de la provincia, y la más poblada de oponentes a la sublevación militar. Pero no llega a tener el mayor número de víctimas, pues sus 28 ejecutados son superados por los 29 de San Ildefonso y los 35 de El Espinar.

5. Otros pueblos. Destacan especialmente, por el número de fusilados, Linares del Arroyo (8), Sepúlveda (7) y Valverde del Majano (5).

6. Casos personales. Los numerosos casos restantes, corresponden a la actuación de escuadras que recorrían los pueblos a la caza del adversario. Donde ni alcalde, ni cura se oponían a las sacas los falangistas se llevaban a los señalados como "rojos". En este apartado figuran las localidades que no superan la cifra de dos fusilados: Sauquillo, Villafranca del Condado, Olombrada, Duruelo, etc.

En cuanto al análisis de las víctimas de la represión judicial comprobamos que su menor número total afecta también a menos localidades, concentrándose especialmente en El Espinar (35), San Ildefonso (17), Segovia (14) y Bernardos (11); aunque también Coca (6), Labajos (4) y Nava de la Asunción (3) sufrieron este tipo de fusilamientos. La coincidencia de la mayor cantidad de represaliados en El Espinar y San Ildefonso en los dos tipos de ejecuciones nos hace pensar en el ensañamiento de los sublevados con estas dos localidades, con un número de víctimas totales de 53 y 46, respectivamente. Es lógico, por

otra parte, que la capital, siendo la ciudad más poblada de la provincia, sufra un duro castigo, pero, aún así, sus 41 víctimas quedan por detrás de El Espinar y San Ildefonso.

Las víctimas procedentes de otras provincias son escasas en la represión ilegal, únicamente 7, entre 211, es decir el 3,31%. En cambio, las víctimas de las ejecuciones judiciales (34), representan el 22,75%, lo que nos desvela un tipo de represión de guerra, de frente de batalla y de depuración del Ejército, a diferencia de la anterior que era una represión de retaguardia.

b) Profesión

Conocemos los datos profesionales de la mayoría de las víctimas de ambos tipos de represión que venimos estudiando en este apartado. Los especificamos en columnas distintas porque existen algunos detalles dignos de comentario.

Cuadro nº 5: Profesión de las víctimas de la represión franquista

	Víctimas represión judicial		Víctimas represión ilegal	
Profesión	Nº de víctimas	Porcentaje	Nº de víctimas	Porcentaje
Trabajadores	99	71%	103	57,54%
Autónomos	11	8%	30	16,75%
Propietarios			4	2,23%
Funcionarios	2	1%	30	16,75%
Profesiones liberales	4	3%	5	2,79%
Amas de casa			7	3,91%
Militares	10	7%		
Soldados	14	10%		
Total	140	100%	179	100%

Los datos anteriores quedarían representados gráficamente del siguiente modo:

Gráfico nº 4: Profesión de los fusilados judiciales

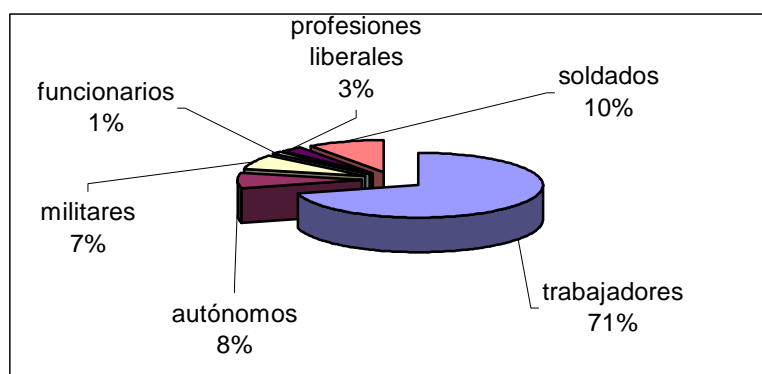
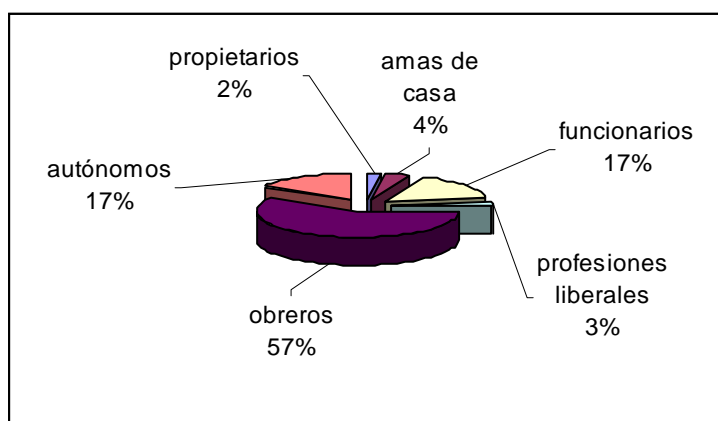


Gráfico nº 5: Profesión de los fusilados “ilegales”

Más de la mitad de las víctimas eran trabajadores, lo que puede apuntar ya una primera clave de represión de clase. Como ya se ha escrito, los militares sublevados se cuidaron especialmente de castigar de un modo ejemplar a los trabajadores que se habían distinguido por su lucha o habían destacado en labores de propaganda. Por el contrario, fueron muy pocos los empresarios o industriales ejecutados, y de ellos, sólo dos podría decirse que eran auténticos empresarios, ambos de Sepúlveda: uno era propietario de una línea de autobuses y el otro de un aserradero. El resto poseían o regentaban carnicerías, molinos y tabernas, por lo que se les ha incluido en el apartado de autónomos. La mayoría de los trabajadores eran jornaleros de temporada, sin oficio habitual ni especialización, de los que muchos se dedicaban a labores de agricultura (especialmente la siega o explotación de la resina) o cuidado del ganado.

Entre los trabajadores con oficio destacan los obreros del carril (como así se denominaban en aquellos años), que en casos como los de la Estación de El Espinar, cuentan testigos que algunos fueron castigados sólo por el hecho de ser ferroviarios.

El número de albañiles fusilados también es destacable, pues era uno de los oficios especializados más extendidos. A pesar de lo escasa industrialización de la provincia (curtidos, cerámica y resina) no es desdeñable el número de obreros industriales.

En cuanto a los guardas, se ha recogido un comentario muy significativo del Guarda Mayor del Patrimonio de la República, en San Ildefonso, quien referido a un subordinado que había sido fusilado declaraba “...*perteneció a la Casa del Pueblo como todos los demás guardas*”²¹¹.

El número de empleados o funcionarios, también fue significativo. Destacan entre todos ellos los 16 maestros de primaria, que fueron castigados con especial dureza por el importante papel que desempeñaban al educar en los valores laicos y democráticos. También hay que reseñar los 4 secretarios de Ayuntamiento o los 3 empleados de Correos y Telégrafos.

Por último, tan sólo se conoce el caso de tres médicos, un veterinario y un abogado, como representantes de profesiones liberales.

Con respecto a las víctimas de la represión judicial, hemos de ratificar el carácter de represión de clase, puesto que los trabajadores representan el 71% del total de los fusilados.

A pesar de tratarse de una guerra, las ejecuciones de soldados y militares no representan más que el 17%, una muestra más de que nuestra guerra civil no era una guerra convencional.

Otros detalles a tener en cuenta, en comparación con las víctimas de la represión ilegal, son la ausencia de amas de casa, sólo fue fusilada una mujer (miliciana de Ávila) y la

²¹¹ Arch. Prov. Jgdo. 1ª Ins. Segovia. Caja 220, 1, 1941. Exp. nº 6, Enrique Álvaro de Andrés.

disminución hasta cifras irrelevantes de funcionarios represaliados (2 maestros, el gobernador civil y el administrador del Patrimonio). También desciende a la mitad el porcentaje de propietarios represaliados.

c) Edad

Se ha comprobado la edad de 184 víctimas de la represión ilegal, y otras 144 de la judicial, que hemos distribuido de la siguiente manera:

Cuadro nº 6: Edad de las víctimas de la represión franquista

Edades	Víctimas repr. judicial		Víctimas repr. ilegal	
	Nº de víctimas	Porcentaje	Nº de víctimas	Porcentaje
menores de 21 años	20	14%	15	8%
de 21 a 29 años	60	42%	42	23%
de 30 a 40 años	42	29%	48	26%
de 41 a 59 años	20	14%	71	39%
mayores de 60	2	1%	8	4%

La representación gráfica de las edades de las víctimas de ambas ejecuciones quedaría así:

Gráfico nº 6: Edad de los fusilados ilegales

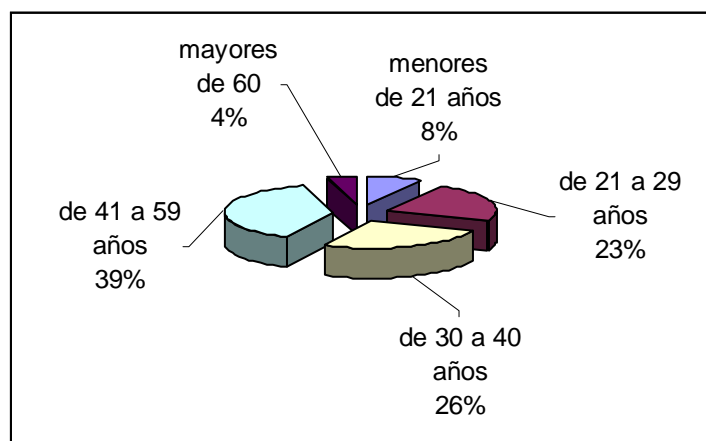
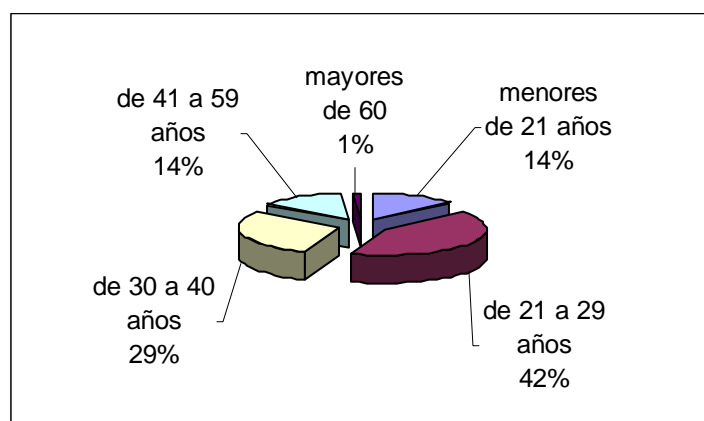


Gráfico nº 7: Edad de los fusilados judiciales

En cuanto a la represión ilegal, de todas las franjas de edad destacan las correspondientes a la madurez, pues, sumando los dos apartados de fallecidos entre 30 y 60 años, resultan 119, lo que supone un 65% del total de edades conocidas.

Los 14 fallecidos menores de 21 años, la edad a la que se obtenía la mayoría de edad, hablan ya muy claro de la militancia política y sindical en edad juvenil, fruto de una época en la que los hijos de la clase obrera empezaban a trabajar a los 14 años, nada más finalizar los estudios primarios. No tenían opción de continuar su aprendizaje siquiera con los secundarios.

Es también muy importante el número de víctimas de edades comprendidas entre los 21 y los 29 años.

Son especialmente significativos el importante número de fusilados menores incluso de 18 años (4) y mayores de 60 años (8). Este detalle hace pensar en los pocos escrúpulos que tenían los ejecutores a la hora de seleccionar a las víctimas.

Comparando ambas estadísticas, observamos en primer lugar que los fusilados judiciales eran más jóvenes, el 56% eran menores de 30 años, mientras que la misma franja de la represión ilegal se queda en el 31%. Este detalle denota claramente que empuñaron las armas los más jóvenes a la hora de defender sus localidades ante la sublevación militar, y una vez triunfante ésta, marcharon a zona republicana para defender la legalidad. Lo que explica que la represión ilegal, ejercida en la retaguardia, afectara más a los oponentes adultos. Además, la gran mayoría de los soldados, como es lógico, eran menores de 30 años.

Por el contrario, en concordancia con el mismo razonamiento, la franja de 41 a 60 años es muy inferior en la represión judicial (14%), mientras que en la ilegal supone el 39%.

d) Estado Civil

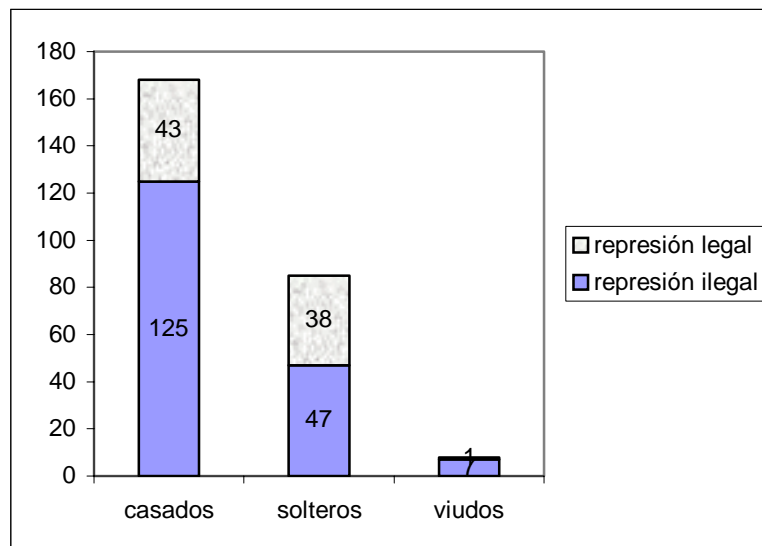
Se conoce el estado civil de 179 fusilados ilegales y 82 ejecutados judiciales.

Cuadro nº 7: Estado civil de las víctimas de la represión franquista

Estado	Víctimas represión judicial		Víctimas represión ilegal	
	Nº de víctimas	Porcentaje	Nº de víctimas	Porcentaje
Casados	43	53%	125	73%
Solteros	38	46%	47	24%
Viudos	1	1%	7	3%
Total datos conocidos	82	56,55%	179	84,83%

La representación gráfica de los datos sobre el estado civil quedaría de la siguiente manera:

Cuadro nº 8:



La inmensa mayoría de las víctimas de la represión ilegal estaban casados, lo que representa un 73% del total; y de ellos prácticamente todos tenían hijos. Lo que supone un fiel reflejo de una época en que el matrimonio era el modo habitual de formación familiar.

En contraposición, y como consecuencia de la mayor juventud de las víctimas judiciales, entre éstas hay un menor porcentaje de casados y viudos.

e) Análisis de género

En una sociedad machista como la española de los años treinta, en la que las mujeres todavía apenas se habían incorporado al mercado laboral, y tan sólo llevaban tres años participando en el sistema democrático-parlamentario, tanto en la capital como en la provincia se estaban iniciando en la actividad política algunas mujeres. En casi todas las localidades se han recogido testimonios sobre una o varias mujeres destacadas en la propaganda socialista o comunista, hasta el punto de ser más militantes que sus respectivos maridos. Hay ejemplos en San Rafael, Segovia, Coca, etc. Ya reflejamos que en Fuente el Olmo de Fuentidueña se dio el caso curioso de la depuración por la Diputación Provincial del peón caminero Mariano Gómez, por la acusación principal de haber permitido que su mujer izase una bandera roja en el balcón de su casa o asistiese a las manifestaciones siendo la única mujer militante de la Casa del Pueblo²¹².

Como se correspondía con su menor porcentaje de militancia política, las ejecuciones sumarias de mujeres fueron escasas en la provincia de Segovia, un total de ocho: (Villacastín, Valverde, Navas de Oro, Segovia, Cuéllar (2), Linares del Arroyo y Valsaín), lo que representa un 3,79% del total de las víctimas. Pero un número mucho más elevado de mujeres sufrieron salvajes cortes de pelo, fueron obligadas a ingerir aceite de ricino, y objeto de ataques sexuales y menosprecio público. Ser mujer de “rojo” era excusa para todo ello. Igual castigo sufrían las que habían bordado alguna bandera republicana o revolucionaria, o simplemente habían participado en alguna manifestación de aquel signo.

Por otro lado, se produjo una única ejecución judicial de una mujer, en la persona de una miliciana de Ávila. También cinco mujeres de Segovia fueron condenadas a muerte por

²¹² Arch. Dip. Prov. Leg. 847. Exp. Dep. Mariano Gómez Zamarrón.

la causa 1377/38, acusadas de espionaje pero, finalmente, serían indultadas, siendo conmutadas sus penas capitales por la de 30 años.

f) Adscripción política

Es muy complicado realizar un trabajo definitivo sobre la adscripción política de las víctimas de la represión, pues hemos encontrado una serie de dificultades para hacer un análisis exhaustivo sobre este tema:

En primer lugar, no existe apenas documentación. Las numerosas Casas del Pueblo de la provincia, como ocurrió en el resto de España fueron arrasadas y sus documentos desaparecieron. En muchos casos sirvieron para aplicar la represión, pues figuraban los datos personales, domicilio incluido, de los militantes. Las sedes del resto de partidos republicanos corrieron la misma suerte.

Las acusaciones generales eran la norma común en aquellas fechas. Los oponentes políticos a la sublevación eran tachados de comunistas, aunque la inmensa mayoría de aquéllos fueran de militancia o ideología republicana o socialista, pues hasta el estallido de la guerra el PCE no pasaba de ser una minoría en el seno del Frente Popular, especialmente en Segovia, donde no tenía sede propia. Era más la influencia de la propaganda comunista que la fuerza real del partido.

Las familias de las víctimas, o bien no se acuerdan de la militancia de sus padres y hermanos, o bien no quieren acordarse porque sientan vergüenza en la actualidad, pues las ideas de los hijos no son las de los padres.

En los años treinta la militancia era mucho más activa que en la actualidad, pero podría no estar reconocida oficialmente. Es decir, muchas personas trabajaban en la actividad política de un partido pero no estaban afiliados, no figuraban en los libros. En otros casos los carnets de la UGT no llegaron a la recién creada Casa del Pueblo. Por ejemplo desde Matabuena habían enviado las solicitudes a UGT de Madrid, pero estalló la guerra antes de que llegaran los carnets de afiliados.

En el caso concreto de militantes socialistas, es difícil de conocer ahora si la afiliación de la víctima era al partido, PSOE, o al sindicato, UGT. Los testimonios hablan de la militancia socialista en general sin saber o poder concretar la misma. Hay bastantes casos de doble militancia al partido y al sindicato. En cambio, otra posibilidad era la militancia sindical a la UGT y la no militancia política o la afiliación a otro partido que no fuera el socialista, por ejemplo el PCE.

A pesar de los problemas enumerados, conocemos los datos concretos de afiliación de 101 víctimas de la represión ilegal, lo que supone el 47,86% del total de ejecutados. En unos casos, la información se ha encontrado en los informes (de la Guardia Civil, Falange o Ayuntamiento, sobre la conducta política de los fallecidos) para los expedientes de desaparición o fallecimiento; y en otros por testimonios de familiares o compañeros de las víctimas.

En cuanto a los ejecutados judiciales, son muy escasos los datos que tenemos, porque ni en los sumarios ni en las sentencias aclaran esta información. A la hora de aludir a la filiación política califican la ideología como izquierdista o comunista, pero sin concretar siquiera si eran militantes de algún partido o sindicato.

Los datos obtenidos de la militancia política y sindical los hemos agrupado de la siguiente manera:

Cuadro nº 8: Adscripción política de las víctimas de la represión franquista

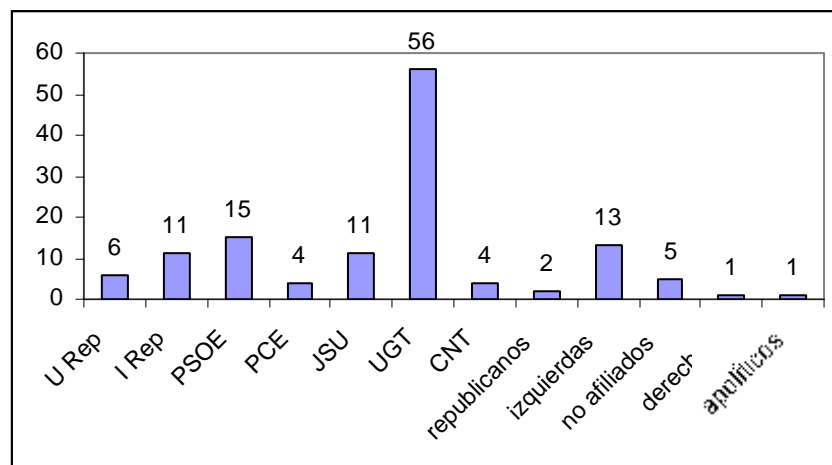
Filiación política	Víctimas Represión judicial		Víctimas Represión ilegal	
	Nº de víctimas	Porcentaje	Nº de víctimas	Porcentaje
Unión Republicana	3	10,71%*	3	2,97%
Izquierda Republicana	2	7,14%	9	8,91%
"Izquierdas"			13	12,87%
JSU	2	7,14%	9	8,91%
PCE	1	3,57%	3	2,97%
PSOE	4	14,28%	11	10,89%
CNT	3	10,71%	1	0,99%
UGT	13	46,42%	43	42,57%
Republicanos			2	1,98%
No afiliados/apolítico			6	5,94%
"derechas"			1	0,99%
Total datos conocidos	28	19,31%**	101	47,86%

*En este caso, los porcentajes parciales se han elaborado sobre el total de los datos conocidos.

**Por el contrario, los porcentajes de esta fila se han confeccionado sobre el total de las víctimas de cada tipo de represión.

Uniendo los resultados de ambas columnas, los datos obtenidos se podrían representar así:

Gráfico nº 10: Adscripción política de las víctimas de la represión



A grandes rasgos, los datos de ambos tipos de represión tienen similitudes, por lo que los analizamos de modo conjunto. Como se puede apreciar, la mayoría de las víctimas estaban vinculadas a las Casas del Pueblo, en su vertiente sindical, es decir a la UGT. Los afiliados al sindicato socialista representan más del 40% del total de los datos conocidos. Como ya se explica en otro apartado de este trabajo la militancia en la década de los años treinta era mayoritariamente a las organizaciones sindicales de la clase obrera, UGT y CNT, si bien ésta última tenía una repercusión limitada en Segovia, circunscrita a la capital, El Espinar, Ayllón y Linares del Arroyo. En cuanto a los partidos políticos predominan el PSOE e Izquierda Republicana, organizaciones mayoritarias entre el sector obrero y republicano.

Nº 6. La vida en las prisiones de Franco

Para construir una visión general sobre las condiciones de vida en las cárceles de la España de Franco hemos analizado la documentación incompleta que existe en la Prisión Provincial de Segovia sobre dos de los centros de reclusión: la Prisión Central de Cuéllar y del Hospital Asilo Penitenciario sito en la capital. De la *Cárcel Vieja* se han encontrado los expedientes personales, pero no el resto de libros de entrada y salida, de recuentos, etc. A través de los datos obtenidos sobre las dos prisiones intentaremos explicar como era la vida cotidiana de los presos en las cárceles nacionales durante la guerra.

El Hospital Asilo Penitenciario era un edificio de reciente construcción situado a las afueras de la ciudad. Tenía una capacidad de 200 reclusos, que se vio desbordada inmediatamente por la avalancha de detenidos²¹³. A pesar de ser un centro de nueva creación, ya antes de la guerra presentaba algunos problemas, como la falta de una cocina adecuada. Unos reclusos sin capacitación alguna preparaban la comida diaria, tanto el rancho general, como el extraordinario de Enfermería. No había un cocinero del exterior para supervisar esos trabajos²¹⁴. Los funcionarios se quejaban de las *escasísimas* condiciones de seguridad, que padecían, especialmente, en los cuatro patios. El edificio no reunía condiciones para Hospital porque había sido construido para Prisión Provincial, convirtiéndose más tarde en establecimiento hospitalario para ancianos y enfermos²¹⁵. A ojos de los trabajadores de la prisión debían llevarse a cabo grandes reformas para transformarlo en un hospital penitenciario. En cuanto al personal especializado, disponía de un practicante y dos enfermeros.

A este centro con tales carencias llegaron una avalancha de presos fruto de las detenciones en masa de adversarios políticos a la sublevación militar (hasta el 31 de julio habían llegado a las prisiones de la capital al menos 296 detenidos, a lo largo del mes de agosto se añadieron otros 450 presos). Las prisiones se vieron desbordadas y se tuvieron que habilitar edificios que no estaban preparados para albergar a tantas personas, que debían dormir, asearse, pasear, etc. Así, las celdas eran como pocilgas, donde había comida, agua, heces, orines,...²¹⁶. Gabriel Arranz, que estuvo preso en la *Cárcel Vieja* sólo hasta el 8 de septiembre de 1936, escribió en sus memorias *“Ya no hay casi sitio donde poner tanta gente (cada vez entran más presos). Han tenido que ocupar los calabozos de castigo los últimos que entraban, hasta que no cabían más”*²¹⁷. Isidoro Romano estuvo preso siempre en la Prisión Provincial, donde, a pesar de su capacidad para unos treinta presos, hubo más de 200. En el Hospital Asilo, entre julio y noviembre de 1937 había en torno a 500 reclusos²¹⁸. Con los pocos datos que disponemos de las prisiones que sólo albergaron

²¹³ En la publicación de la *Obra de la Redención de Penas*, de la Dirección General de Prisiones, original sin fecha, posiblemente de 1941, aparecen unos comentarios sobre el Sanatorio-Prisión de Segovia en la pág. 86:

Fue construido para Prisión Provincial. Más tarde se convirtió en Hospital Asilo para ancianos y enfermos. Hoy es sólo sanatorio para penados enfermos de tuberculosis pulmonar. Tenía 160 camas y este año se le instalaron 50 más. Ahora tiene 210 camas. En excelentes condiciones de altitud, frente a la sierra de Guadarrama, tiene dos salas amplias, galerías encristaladas, celdas individuales, cuatro patios, uno de ellos con solarium y otro con rotonda de cristales; servicios de lavadero, estufas de desinfección y gabinete de rayos X. A todo penado se le hace exploración radiológica y radiográfica al ingreso, y luego periódicamente. Un médico radiólogo, el Dr. Gaspar, auxiliado por tres médicos penados, dos practicantes y un farmacéutico, también penados, son los que atienden al servicio clínico de este sanatorio, donde a los enfermos se les da ración doble, de 4,20 pts. diarias.

En la España de la posguerra sólo había otro sanatorio penitenciario, Porta Coeli, situado en Valencia.

²¹⁴ Hemos comprobado la visita de inspección del *Centro Directivo* –como así se denominaba hasta hace pocos años a la Dirección General de Prisiones– a dicho Hospital Asilo el día 14 de julio de 1936. Nos viene muy bien para evaluar cómo estaba la prisión y comparar con la situación posterior. Precisamente, ese día el inspector tuvo una queja de un recluso sobre la comida, echando la culpa también a la falta de instalaciones adecuadas. El funcionario Sr. Amor ahondaba en este tema: *“Los alimentos son abundantes y de la mejor calidad, pero no bien presentados por la falta de una buena cocina, y de un cocinero libre”*. Prisión Provincial, Libro de Acuerdos de la Junta de Disciplina (LAJD), 14 de julio de 1936.

²¹⁵ Arch. Pris. Prov. Comentarios sobre el Sanatorio-Prisión de Segovia, en la publicación de la *Obra de la Redención de Penas*.

²¹⁶ Testimonio de Juan Blasco Alonso.

²¹⁷ ARRANZ MARINAS, G., op. cit., pág. 186.

²¹⁸ Pris. Prov. En el desván de la prisión encontramos un papel suelto, sin duda resto del cuaderno dedicado al efecto, donde se anotan los recuentos, a las 20 y a las 2 horas, desde el 24 al 28 de julio y del 31 de octubre al 3 de noviembre (ambos de 1937). Dan como resultado 501 presos en julio y 504 en noviembre. En estas fechas ya se habían trasladado un centenar de presos segovianos al Fuerte de San Cristóbal en Pamplona, a los que hay que añadir, para tener una mejor idea del total de reclusos políticos en la provincia, los que había en la *Cárcel Vieja*, Sancti Spiritus, San Ildefonso, Sta. María de Nieva, Cuéllar y Sepúlveda.

detenidos gubernativos, Santa María de Nieva y Sancti Spiritus, podemos apuntar que no pasaron de 200 reclusos en cada centro²¹⁹.

Un detalle importante a tener en cuenta era el estado en el que los presos ingresaban en las cárceles: todos iban ya castigados física y psíquicamente, como relata Gabriel Arranz:

Esta pobre gente, ni tenían luz ni aire para respirar, eso sí, no entraba uno, que no hubiese sufrido la gran paliza, como lo atestiguaba su cuerpo, el árnicia estaba a la orden del día, era lo único que proporcionaban cuando se pedía, y el yodo, no daban nada más. Entraban más presos cada día, con palizas y aceite de ricino. Más del 75% de los presos que allí había pasaron por el mismo suplicio. Aunque dentro también maltrataron y mucho -oíamos los golpes y los lamentos de las víctimas- todos venían golpeados de fuera²²⁰.

Una de las consecuencias del hacinamiento era el ambiente irrespirable, lo que motivaba que algunos presos, olvidándose de las estrictas normas, se acercaran a la ventana a respirar. Esta acción tenía sus peligros. Hemos conocido dos casos de heridos por disparo de los vigilantes externos de la *Cárcel Vieja*. Gabriel nos cuenta cómo hirieron a Fausto Pérez: *“Una tarde cuando subían los presos después de cenar, uno se acercó a una ventana, y el centinela sin previo aviso disparó de fusil, hiriéndole grave en la cabeza”*. Peor suerte tuvo Teodoro Heras Díez, que murió del disparo. Para procurar, mínimamente, la ventilación de la *Cárcel Vieja*, la dirección del establecimiento no permitía cerrar la ventana grande de la galería (la que llamaban los presos “el pulmón”)²²¹.

Otra muestra más de la aglomeración en las prisiones de la provincia es el traslado, en 1937, de 28 reclusos de la cárcel de San Ildefonso a la prisión auxiliar de la misma localidad, a fin de *“evitar el desarrollo de alguna epidemia dada la aglomeración excesiva de reclusos que existen en esa prisión”*²²².

Por último, otro problema derivado del exceso de población era la escasez de camas para todos, por lo que las familias que podían mandaban colchones para sus presos.

1º. Horario

La vida cotidiana en las prisiones estaba regulada por el horario. Era norma de obligado cumplimiento tanto para los presos como para los empleados del centro. Los preceptos del horario habían de ser *“cumplidos con la más rigurosa puntualidad”*²²³. Dicho horario establecía y distribuía las distintas actividades: comida, lectura, visitas, incluso el dormir. Había dos tipos de horario dependiendo de la época del año -uno de verano y otro de invierno²²⁴-, para adaptarse a las características del duro clima meseteño y aprovechar mejor las horas de luz solar. Unas campanadas eran las señales para el inicio de las distintas actividades. Se efectuaban tres recuentos de la población reclusa a lo largo del día, uno al levantarse, otro en la sobremesa (coincidiendo con el relevo de los empleados) y el último al encierro de los reclusos, con el toque de oración.

La misa diaria era por la mañana y constituía un *“acto reglamentario los días de precepto, del que sólo están dispensados los enfermos con prescripción facultativa que estén en cama”*²²⁵. El resto de días la asistencia era voluntaria, permaneciendo, los que no acudieran, en sus departamentos *“en absoluto silencio”*²²⁶.

Después de las labores propias de limpieza de dependencias en las que participaban casi todos los reclusos, se iniciaban las actividades generales del centro: escuela, paseos,

²¹⁹ Hemos visto una orden del gobernador civil de traslado de 200 detenidos gubernativos, enviados a Sta. María, fechado el 12 de octubre de 1936. Hay otra relación de detenidos gubernativos a disposición del gob. civ., en Sta. María, un total de 100, fechada el 7 de junio de 1937.

²²⁰ ARRANZ MARINAS, G., op. cit., pág. 186.

²²¹ ARRANZ MARINAS, G., op. cit., pág. 187.

²²² Orden del gob. civ. al dtor. Prisión de San Ildefonso, fechada el 2 de agosto de 1937.

²²³ Art. 19 del Reglamento de Prisiones. Con el Decreto nº 83 de 24 de noviembre de 1936 se restableció el Reglamento de Prisiones de 14 de noviembre de 1930 (BOE, 21 de noviembre de 1930), anulando la legislación republicana en materia penitenciaria.

²²⁴ En la actualidad permanece la adaptación del horario a las distintas épocas del año.

²²⁵ Arch. Pris. Prov. Libro de Órdenes de Dirección (LOD), 29 de mayo de 1939.

²²⁶ Ver nota anterior. Subrayado en el original.

trabajo, etc. Una actividad fundamental para los presos era el paseo, nunca superaba el par de horas por la mañana y otro tanto por la tarde. No podían salir del patio de la dependencia en que estuvieran, *“sino por causa muy justificada, con autorización del funcionario, y en silencio”*. Había órdenes muy precisas de cómo habían de hacerse los paseos:

A partir de la fecha, las reclusas de este Establecimiento tendrán dos horas de paseo por la mañana, de 10 hasta el momento del rancho, y de 3 a la hora de la cena por la tarde. Los paseos para todas las reclusas (no incomunicadas) en el salón de aglomeración que fue dormitorio de los ancianos y naturalmente con la puerta cerrada. Durante estos paseos el departamento que sirve de alojamiento a las mujeres, permanecerá abierto para su mejor ventilación. En los días festivos, el paseo de la mañana de este personal, comenzará inmediatamente después de la misa²²⁷.

El toque de oración ponía punto final a las actividades en común y significaba el encierro hasta el día siguiente. Este acto se había suspendido, al igual que otros tantos de significación religiosa, en instituciones estatales o públicas como correspondía a un estado republicano y laico²²⁸.

2º. Alimentación

Durante la guerra las condiciones alimentarias no eran todo lo buenas que se hubiera deseado. Era un periodo de escasez generalizada, lo que se agravaba en el interior de las cárceles. El gasto de alimentación de los reclusos venía dispuesto oficialmente con una cantidad fija. En ella se estipulaba la cantidad de calorías para los reclusos sanos o para los enfermos, la cantidad de pan o de leche, etc.²²⁹.

Tal era la penuria alimenticia que todo aquél que tenía familiares o amigos que se lo pudieran permitir, recibía comida del exterior, práctica incluso fomentada por las autoridades que de este modo se ahorraban un dinero normalmente muy escaso. El Reglamento así lo permitía (art. 264): *“si algún recluso solicitase alimentación a su costa, podrá ser autorizado inspeccionándose los alimentos no sean diferentes de la prescripción del médico”*. Esta disposición cambió durante la guerra con una circular de la Jefatura Superior de Prisiones de julio de 1938: *“...a partir de la fecha queda prohibida en absoluto toda comunicación con el exterior, (...) so pretexto de introducir alimentos, ropas o cualquier otra cosa, que sólo en casos indispensables y con la inspección más severa, podrá autorizarse en forma individual por Vd.”*²³⁰. Oficialmente se prohibía la entrada de comida a las prisiones, pero se permitían a criterio de los directores las autorizaciones particulares²³¹. A partir de esta orden, desde el 20 al 23 de julio de 1938, fueron autorizados a recibir comida del exterior 32 presos. El día 26, tres días después, vino la rectificación: *“Con el fin de ajustarse a las disposiciones de la*

²²⁷ Arch. Pris. Prov. LOD, 22 de enero de 1939.

²²⁸ En cambio, el nuevo Estado Nacional recuperaba multitud de normas religiosas propias del Estado confesional prerrepblicano. Entre ellas estaba recogido el toque de oración, contenido en el Reglamento de noviembre de 1930, art. 27, párrafo 2º: *“se efectuará con los reclusos situados en las puertas de sus respectivas celdas y los funcionarios en sus puestos en actitud de firmes, con la mano derecha sobre la visera de la gorra. Una vez terminado se hará el recuento y la clausura de los departamentos. El toque consistirá en 9 campanadas lentas, con intervalo de tres en tres y después una campanada, punto que será la señal del cierre de celdas y cubrirse para los reclusos y cesar en la posición de saludo para los funcionarios”*. Una Orden del Director de 9 de diciembre de 1936 recordaba la vigencia de esta norma. Arch. Pris. Prov. LOD, 9 de diciembre de 1936.

²²⁹ La escasez de trigo en los graneros del Gobierno de Burgos era grande en los primeros meses de 1937, lo que se tradujo en la disminución de la ración de pan que se otorgaba a los presos. Se recibía en marzo de 1937 una comunicación de la Superioridad que rebajaba la ración de pan a 400 grs. y el panecillo a 0,070. Arch. Pris. Prov. LAJD, 1 de marzo de 1937. Hasta la posguerra no subieron los presupuestos de gastos en la alimentación de los presos. La Orden de 24 de noviembre de 1939, BOE, 26 de noviembre de 1939, dictaba que el rancho pasaba de 1,15 pts/día a 1,40 pts/día, debido a *“la transitoria elevación de precios de artículos alimenticios de primera necesidad (que) aconseja elevar, transitoriamente también, la asignación diaria que para la alimentación abona el Estado”*.

²³⁰ Arch. Pris. Prov. LOD, copia de comunicación del Jefe del Servicio Nacional de Prisiones en *“diversas fechas”*, 19 de julio de 1938. Subrayado en el original.

²³¹ Tenemos varios ejemplos: *“Por razones especiales y en virtud de autorización que me está permitida por Superioridad, se concede permiso entrada comida y cena para los reclusos (enumeración de los presos autorizados). Los funcionarios a quienes compete (...) extremarán el celo y cuidado en el cumplimiento (...) como previene el Centro Directivo, sobre inspección de la misma, minuciosamente”*. Arch. Pris. Prov. LOD, 20 de julio de 1938. A otros se les permitía la entrada diaria de fruta y verdura, el desayuno y la comida, sólo la comida, o incluso tan sólo la comida del domingo. Arch. Pris. Prov. LOD, 21 de julio de 1938.

Superioridad, a partir de la fecha, los presos que devenguen ración de enfermería no podrán recibir alimentos del exterior. Y en cuanto a los demás detenidos y penados, habida cuenta de las circunstancias que concurren, se autoriza puedan pasar las comidas de los siguientes...", de nuevo se autorizó la entrada de comida a 13 reclusos, a los que se añadirían otros cuatro el día siguiente, 27 de julio²³².

Algunos presos se tenían que pagar la comida, en virtud de la Orden General del 8 de agosto de 1936. Así le ordenó el Capitán Juez Instructor al director del Hospital Asilo, sobre el procesado Aurelio Pérez Melero: *"debe satisfacer el importe de alimentación, formulando V el cargo correspondiente, que pasará contra el habilitado del Centro telegráfico, por donde el mencionado percibe sus haberes"*²³³.

Otro medio de contrarrestar la escasa alimentación que proporcionaba el centro eran los encargos a través del botones. Por este medio se podían adquirir alimentos frescos o enlatados, u otros alimentos que no precisaran elaboración o cocinado. Cuando el médico lo prescribía, podían disponer de medio litro de vino cada día.

Era tal la necesidad de ahorrar que incluso se sacaron a subasta las sobras del rancho, siguiendo indicaciones de la Jefatura Nacional de Prisiones²³⁴. Otra preocupación del establecimiento con respecto a la alimentación era la cantidad y calidad de los productos que llegaban del exterior a través de los proveedores. La orden del director de 5 de septiembre de 1939 era muy clara: *"El funcionario de centro, controlará diariamente el peso y calidad de los artículos alimenticios de toda clase, suministrados por los abastecedores de este Establecimiento, y en presencia de éstos, procediendo en el acto, si hubiera causa para ello, la reclamación que proceda, con la exigencia que sea subsanada por aquéllos en el mismo día, la deficiencia o falta observadas"*²³⁵.

3º Comunicaciones

Este término se utilizaba para denominar a las visitas de familiares o amigos. A lo largo del periodo que estudiamos variaron notablemente tanto los días como las horas de su realización. También atravesaron periodos más permisivos, y otros muchos más restrictivos. Al principio de la guerra la mayoría de los presos a disposición judicial permanecieron incomunicados: no les permitían ni visitas, ni cartas, sólo podían llevarles comida. Una vez reguladas las visitas, en ningún caso pasaban de dos horas diarias dedicadas para este fin, una hora por la mañana, *"dando preferencia a los forasteros"* y otra por la tarde, *"para los de la localidad"*²³⁶. Al acabar la guerra se acortaron las horas de visita, escudándose en la excesiva aglomeración. Se redujo a una hora y un día a la semana para los penados y las mujeres, y para los demás reclusos los domingos de 11 a 13 h.²³⁷. Había autorizaciones personales para casos especiales, por ejemplo a las mujeres que trabajaban de sirvientas y por su horario de trabajo sólo podían visitar los domingos por la tarde²³⁸.

La masificación que existía dentro de las prisiones se acrecentaba aún más a la hora de las visitas, puesto que los locales eran pequeños y los visitantes y visitados numerosos. Con el fin de regular y organizar este servicio se dictaron normas expresas: *"Con el objeto de que puedan entenderse mejor los reclusos con sus respectivos visitantes, se prohíbe a unos y otros rebasar el tono moderado de toda conversación normal"*. El no cumplimiento de esta norma suponía la suspensión de la visita. La tercera infracción llevaría a la *"adopción de las medidas procedentes"* por parte del director del Hospital Asilo²³⁹.

La escasez de espacios para atender a las numerosas visitas hizo que se utilizasen otros locales para tal fin. De este modo un locutorio llamado de "abogados" (por ser empleado por los letrados en visita a sus defendidos) fue reconvertido para las

²³² Arch. Pris. Prov. LOD, 20 a 27 de julio de 1938.

²³³ Arch. Pris. Prov. Exp. Aurelio Pérez. Comunicación del Capitán J. Ins, fechada el 18 de agosto de 1936.

²³⁴ Arch. Pris. Prov. Libro de Acuerdos de la Junta de Disciplina (LAJD), 1 y 10 de septiembre de 1938. Se llevó la subasta Sebastián Mazariñas, proveedor habitual de la prisión, que ofreció 125 pesetas al mes.

²³⁵ Arch. Pris. Prov. LOD, 5 de septiembre de 1939.

²³⁶ Arch. Pris. Prov. LOD, 26 de noviembre de 1936.

²³⁷ Arch. Pris. Prov. LOD, 27 de abril de 1939.

²³⁸ Arch. Pris. Prov. LOD, 21 de marzo de 1937.

²³⁹ Arch. Pris. Prov. LOD, 18 de junio de 1937 y 20 de marzo de 1938.

comunicaciones generales. Hasta que el 20 de marzo de 1938 se cerró, *“con el fin de cercenar abusos y extralimitaciones cometidas en las visitas de reclusos”*²⁴⁰, porque, aun reconociendo en dicha orden la escasa capacidad del locutorio general, para la dirección era más importante *“controlar en todo momento las comunicaciones por parte del funcionario”* que las mejores condiciones de la visita. Pero, como en todas las normas, había excepciones: *“El funcionario de Conserjería recogerá las autorizaciones dadas por esta dirección”*²⁴¹.

4º Cultura y propaganda

En las prisiones trabajaba un maestro cuya actividad prioritaria era alfabetizar a los reclusos que lo necesitaran. Además se le encomendó otras obligaciones, entre las que destacaba la censura de la correspondencia de los reclusos. Para ello, las cartas eran depositadas en un buzón cada día a las 10 de la mañana²⁴². Al finalizar la guerra se le añadió otra responsabilidad "cultural": enseñar a cantar los distintos himnos nacionales a los presos, con la pretensión de humillar aún más a los vencidos:

De acuerdo con lo mandado por la Superioridad:

1º. Todos los reclusos que no estén impedidos para ello aprenderán bajo al dirección del maestro Martín Rascón, la letra de los himnos nacionales y los no exceptuados por el médico del Establecimiento aprenderán bajo la misma dirección la música también. Los destinos no serán causa de excepción a lo preceptuado, este aprendizaje será de 12 a 13 y de 16 a 17.

2º. Inmediatamente después del toque de oración, formados todos los penados, que no guarden cama, en la 1ª galería (pabellón de tuberculosos) y los de la propia galería, así como los de celdillas; en la 2ª y 3ª galerías en dos agrupaciones iguales todos los demás, colocados en primer lugar los que no se hallen dispensados de cantar; todos, brazos en alto (saludo nacional) oirán en esta actitud un himno nacional, que será distinto en días consecutivos, desfilando luego en silencio y en orden perfecto a los respectivos departamentos²⁴³.

Estos himnos se dedicaban a las autoridades que visitaban el centro, como recogía la Orden de 7 de febrero de 1940, que proporcionaba una serie de normas para esos casos:

1ª. Todos los reclusos útiles, al toque convenido, formarán en la galería 1ª a cuyo frente estará el Sr. Mújica Gorricho. Los imposibilitados para salir de sus dependencias, permanecerán en éstas al pie de su cama en actitud de firme, hallándose a la entrada al frente de ellas el médico respectivo, quien procurará se encuentre, así desde el punto de vista higiénico y estético, todo en perfectas condiciones, según las instrucciones conocidas.

2ª. Al pasar del 2º rastrillo la Autoridad superior de que se trate, el funcionario del centro, dirigiéndose a la población reclusa formada, hará en voz enérgica y brazo en alto, el saludo del Movimiento, que repetirán en la misma forma los penados. Seguidamente entonarán bajo la dirección del Sr. Mújica, uno de los himnos nacionales.

3ª. El funcionario de centro, después de entregar la llave del rastrillo al de interior, guiará (precediendo inmediatamente) al visitante, a cada una de las dependencias del Establecimiento y, al entrar en las mismas, proferirá en voz enérgica el saludo del movimiento que repetirán en la misma forma, brazo en alto, todos los penados que se hallen en la dependencia, anunciando a continuación al visitante con el cargo que ostente. A la salida de cada una de ellas se repetirá el saludo nacional.

4ª. Se despedirá al visitante cantando brazo en alto otro himno del movimiento distinto del cantado a la entrada, por la formación dicha anteriormente, que en momento oportuno entonará el Sr. Mújica.

5ª. Durante el tiempo que se halle la autoridad visitadora en el Establecimiento, se guardará silencio absoluto. Todos los jueves, a las 4 de la tarde, el oficial o funcionario de centro hará un ensayo, para lo cual todos los penados que desempeñen destinos en el Establecimiento, menos los médicos y el cocinero (que habrán de encontrarse en su puesto) se incorporarán a la

²⁴⁰ Arch. Pris. Prov. LOD, 20 de marzo de 1938.

²⁴¹ Ver nota anterior.

²⁴² Arch. Pris. Prov. LOD, 29 de abril de 1937.

²⁴³ Arch. Pris. Prov. LOD, 22 de octubre de 1939.

formación, así durante los ensayos como en todo tiempo que dure la visita, en su caso, procurando naturalmente, dejar en perfecto orden de aseo las dependencias de trabajo²⁴⁴.

Por otro lado, una pequeña biblioteca intentaba distraer a los reclusos de las penurias diarias, si bien los libros disponibles no eran muchos ni variados. Predominaban los libros de lectura *"sana y tratados elementales de los distintos oficios y artes (...) siempre que no sean contrarios a la moral y buenas costumbres, a las instituciones establecidas ni a las autoridades públicas"*²⁴⁵. Los libros adquiridos durante el periodo republicano fueron depurados al igual que los del resto de bibliotecas públicas, para lo que se creó una comisión específica. Sólo se autorizaba la entrada de libros del exterior para procesados y penados de 3º periodo de tratamiento, pero según las normas aludidas del art. 157, con censura previa por el maestro bibliotecario, el que en caso de duda consultaba al director.

A nivel nacional, los intentos de "reconducir" a los presos políticos se plasmaron en la creación de la revista *Redención*, cuyo primer número apareció el 1 de enero de 1939. El primer corresponsal de esta publicación en el Hospital Asilo fue Fernando González García²⁴⁶, comisario republicano de la policía de Segovia, depurado y condenado por los nuevos gobernantes.

5º. Convivencia

En las prisiones había distintas categorías de reclusos: por un lado estaban los detenidos gubernativos, que eran personas detenidas que dependían del gobernador civil o del militar, no estaban sujetos a proceso alguno, pero podían estar recluidos varios años²⁴⁷. No se les acusaba de nada, simplemente las autoridades los consideraban peligrosos. Era una figura ya prevista por la legislación republicana. Los presos eran los reclusos que estaban a la espera de juicio (en la actualidad se los denomina preventivos). Y, por último, los penados eran aquéllos sobre los que había recaído condena en juicio²⁴⁸. En cambio, la mayoría de los muchos que eran absueltos, quedaban en prisión como gubernativos. Los reclusos no podían estar juntos en las mismas dependencias, en teoría debía haber estricta separación entre detenidos, presos y penados, y dentro de estos últimos, entre los distintos periodos de tratamiento. Es más, el art. 91 establecía que detenidos y presos por delitos políticos tenían que mantenerse en un departamento especial, separados del resto de reclusos, incluso en paseos, comunicaciones y demás actividades. En la práctica, debido al hacinamiento, esta separación no se podía llevar a cabo.

Entre los presos políticos había ambiente de buena camaradería, aunque a veces surgían problemas entre militantes de distintas ideologías, como ocurría con los anarquistas y los comunistas. El intercambio cultural fue el único elemento positivo de la vida en prisión. Así, Gabriel Arranz *"había hecho grandes amistades con todas las clases sociales: maestros, médicos, abogados y otros intelectuales. Pero había también muchos obreros y campesinos, con unos conocimientos vastísimos, y un don de palabra que no tenían que envidiar a muchos intelectuales (...) a veces quedaban asombrados de la cultura de estos hombres"*²⁴⁹.

La tensión acumulada, debido a las *actuales circunstancias*, se agravaba por las pésimas condiciones de vida en la prisión, en la que convivían y compartían mesa los defensores de la República (acusados de rebelión) con algunos de los sublevados de julio de 1936 (falangistas, carlistas, etc, que se habían "excedido" en el ejercicio de su patriotismo); y junto a ellos los presos por delitos comunes. Esta mezcla de personas tan dispares originaba roces entre los reclusos. Un preso militar escribió al gobernador militar de Segovia una carta muy significativa sobre estas fricciones. En ella denunciaba que, habiendo tenido que convivir durante las horas del día con los presos políticos y comunes

²⁴⁴ Arch. Pris. Prov. LOD, 7 de febrero de 1940.

²⁴⁵ Art. 157 del Reglamento de 1930.

²⁴⁶ Arch. Pris. Prov. LOD, 12 de enero de 1939.

²⁴⁷ Según los expedientes consultados en la Prisión Provincial hubo 1.020 gubernativos durante la guerra civil en las prisiones de la capital.

²⁴⁸ De la documentación consultada podemos aportar la cifra de 1.297 penados o sujetos a procedimiento judicial militar.

²⁴⁹ ARRANZ MARINAS, G., op. cit., pág. 195.

“tenemos los militares continuamente rozamientos y discusiones de carácter político con ellos debido a la tendencia marxista de los mismos en contraposición a nuestros ideales en favor de la Santa Causa”. A continuación detallaba algunos ejemplos de los roces²⁵⁰.

6º. Disciplina

La disciplina en una prisión siempre es una de las exigencias propias y habituales, e incluso necesaria para el buen funcionamiento del centro. Pero en los distintos grados de dureza en su aplicación es donde radica la diferencia de unas prisiones a otras y de unos sistemas penitenciarios a otros. En el caso que nos ocupa, al hecho de encontrarnos en una guerra había que añadir que el régimen de Franco era especialmente duro con sus adversarios políticos e incluso con los presos comunes. Para ver más gráficamente este capítulo vamos a enumerar algunos de los variados y múltiples motivos por los que eran castigados los reclusos.

Con ocasión de unas obras en el establecimiento, se dictó una orden de Dirección en la que se prohibía a los presos *“dirigir la palabra a los operarios y quedando prohibida a todos los presos de dicho departamento la circulación por el patio”*²⁵¹. Las ventanas de la prisión estaban para ventilar las dependencias, no para asomarse los reclusos, bajo el peligro de ser disparados por los centinelas que vigilaban los exteriores del edificio²⁵².

Estaba recogida reglamentariamente la censura de la correspondencia de los reclusos, tanto la que enviaban como la que recibían. Ésta última era abierta por el director en presencia del recluso en cuestión, y leída por aquél, con anterioridad a su entrega. El director, podía delegar en otro funcionario, que normalmente era el maestro. Las cartas que enviaban al exterior tenían que depositarse en un buzón y, tras la censura correspondiente, se daban curso²⁵³. La Junta también decidía la entrega o no de una carta que, procedente del exterior, fuera dirigida a los reclusos: *“...A continuación se da lectura de una carta dirigida a Leandro Antón, detenido del glorioso movimiento, por su hijo y se acuerda que no es procedente entregarla al interesado”*²⁵⁴. *“Se leen dos cartas dirigidas a los reclusos (...), se deduce que hay conceptos no admisibles regimentalmente consideradas, por lo que son decomisadas”*²⁵⁵. *“No se entrega carta a Baldomero Sánchez por contener conceptos contrarios a las buenas normas disciplinarias”*²⁵⁶.

²⁵⁰ La carta, firmada por Javier Mirat Rena y fechada el 20 de junio de 1938, dice así:

Que en ocasión de marchar en libertad nuestro compañero Luis Pravarodea destinado a su Tercio de Requetés, el médico Mariano Romero, recluso en esta Prisión, le dijo ‘bueno muchacho no mates muchos rojos, procura tirar al aire’, a lo cual yo contesté: ‘dí que no, tu tira a matar y apunta al corazón’. En otra ocasión entró en nuestra celda y saludó con el puño en alto, al repugnante estilo marxista, muy corriente aquí, al despedirse entre ellos cuando hay algún traslado. Que en otra ocasión estando en la celda a la hora de la siesta Pedro León y Mariano Repila oyeron decir a Antonio Romero que ‘José Antonio Primo de Rivera debió ser fusilado al hacerse el mismo la defensa en Madrid, una vez que en su defensa ofendió al tribunal y que además demostró ser un grosero’.

En fin, en distintas ocasiones hemos oído varios compañeros y un servidor alusiones y manifestaciones rojas y tendenciosas no pudiendo determinar nombres por no haber prestado toda nuestra atención y no conocer a los interesados.

²⁵¹ Arch. Pris. Prov. LOD, 6 de octubre de 1938.

²⁵² Además de los casos ya reseñados anteriormente (Fausto Pérez y Teodoro Heras), *“..un centinela se ha visto obligado a disparar su arma contra las reclusas Romana Iglesias y Carmen González, que hallándose en el departamento de aglomeración en paseo reglamentario y faltando a las instrucciones recibidas se asomaron a una de las ventanas que dan al muro de ronda, por lo cual las mencionadas reclusas han quedado encerradas en su celda. La Junta acuerda se mantenga el castigo por tiempo indefinido”*. Arch. Pris. Prov. LAJD, 1 de abril de 1939, Año de la Victoria.

²⁵³ En la época republicana del gobierno radical-cedista también hubo una cierta censura, como hemos comprobado en el Libro de Acuerdos de la Junta de Disciplina. Fueron recogidas varias cartas de diversos penados en las cuales *“se habla de política y asuntos sociales y algunos otros dirigidas a otros Establecimientos, acordándose que no circule la referida correspondencia, queden archivadas en los expedientes de los interesados, para constancia y que los sobres sean devueltos a los mismos. Se acuerda así mismo advertir a la población reclusa no se cursará correspondencia que trate de temas políticos, sociales o sindicales, y vaya dirigida a otros Establecimientos, a excepción éstas últimas si son para padres, hijos, hermanos o esposas”*. Arch. Pris. Prov. LAJD, 20 de noviembre de 1935.

²⁵⁴ Arch. Pris. Prov. LAJD, 10 de marzo de 1937.

²⁵⁵ Arch. Pris. Prov. LAJD, 10 de abril de 1937.

²⁵⁶ Arch. Pris. Prov. LAJD, 10 de julio de 1937.

La censura en la correspondencia era eludida por los presos de múltiples maneras, a través de la ropa, escondida en el forro de los calzoncillos, entre la comida, en un paquete de tabaco o en una botella negra²⁵⁷.

Dentro de la prisión los reclusos no podían hablar de temas políticos o sociales que se pudieran tomar por subversivos o contrarios al nuevo régimen. Recordemos que era muy fácil caer en este "delito". Es más, cualquier declaración catalogada como subversiva pasaba a la autoridad militar correspondiente, para que ésta tomara cartas en el asunto²⁵⁸. Las autoagresiones y los intentos de suicidio también eran castigados, con más razón dada la confesionalidad del régimen que consideraba un pecado grave atentar contra la propia vida (algunos presos veían en el suicidio un último acto de rebeldía en contra del régimen²⁵⁹).

Aunque la comida fuera escasa y sin demasiada calidad, evidentemente no se podía protestar, y menos en público, las amenazas al encargado eran consideradas falta muy grave²⁶⁰. Otros motivos de parte informativo de los vigilantes eran las protestas a *"la norma de bajada al patio"* de los enfermos de la Enfermería Alta²⁶¹, pronunciar durante la lectura del parte oficial de guerra la frase: *"¡va, bola! ¡va, bola!"*. Se envió copia del citado parte al gobernador de la plaza y al Juzgado Militar y fue castigado el penado con reclusión en celda. Pero este castigo le fue levantado posteriormente, *"previas las advertencias de rigor, por entender la autoridad militar que el acto realizado del que ya se dió cuenta (...) simplemente dentro del marco del régimen interno de la prisión, y que el funcionario que reprendió, sea quien advierta de su comportamiento en lo sucesivo"*²⁶².

Los reclusos no podían tener en prisión ni dinero, ni objetos preciosos (pulseras, anillos, relojes, etc) ni otros que no fueran estrictamente prendas de vestir. Al ingreso en el centro se les recogían todos los enseres no permitidos, que eran anotados en un libro al efecto y depositados para su custodia en un almacén. Para evitar malas tentaciones, se emitían unos recibos (una copia del cual se adjuntaba al paquete) con la firma del oficial que requisaba los objetos y el oficial encargado del almacén donde éstos se custodiaban²⁶³. Aquí permanecían hasta su devolución al propietario si éste salía en libertad o se trasladaba a otra prisión. En caso de fallecimiento aquellos objetos personales eran entregados a la familia que los reclamara.

Como no estaba permitida la posesión de dinero en efectivo, cuando aparecía alguna moneda o billete, el poseedor era sancionado con reclusión en celda, y su dinero *"invertido en tabaco para repartirlo entre los reclusos pobres"*²⁶⁴. En otra ocasión se descubrió una peseta en el encargo de un recluso. La moneda en cuestión fue repartida entre cuatro

²⁵⁷ Así le explicaba a su esposa Antonio Romero *"cuando tengas que decirme algo importante: de un paquete de tabaco sacas la mitad, metes la nota, lo vuelves a llenar y lo pegas de manera que no se note que se ha abierto o bien y mejor en una botella negra metes un preservativo y dos o tres perdigones lo atas bien para que no se moje y lo metes en la botella la cual se llena de café con leche, pero esto cuando sea algo importante y urgente"*. Archivo UAPO. Pieza separada nº 2. Causa 1377/38, contra Antonio Romero Arbeiza.

²⁵⁸ Arch. Pris. Prov. LAJD, 20 de diciembre de 1936: *"El presidente da cuenta de la denuncia formulada a su autoridad sobre conceptos subversivos emitidos por algunos reclusos (...) pase a la autoridad militar correspondiente"*. Más adelante vemos otro ejemplo del mismo tipo *"...habiendo tenido conocimiento el director que suscribe, de que entre los penados, circulan noticias que además de ser totalmente falsas y tendenciosas, sin que se pueda averiguar el origen de las mismas, se llama la atención de los funcionarios, una vez más para que pongan especial cuidado en dar parte por escrito al que suscribe, de cualquier juicio emitido en relación con las actuales circunstancias, sea cual fuere el penado que lo pronuncie y que supongan o impliquen adhesión a la rebelión, a los efectos de elevar la oportuna denuncia a la autoridad que corresponda"*. Arch. Pris. Prov. LOD, 4 de agosto de 1938.

²⁵⁹ Arch. Pris. Prov. LAJD, 20 de mayo de 1939. En mayo de 1939, un detenido gubernativo, intentó quitarse la vida arrojándose por una ventana. No consiguió su objetivo, haciéndose una herida en la región frontal. En la siguiente reunión de la Junta, informó el capellán que el detenido *"ofuscado por la enfermedad de parálisis progresiva que padece, realizó el hecho sin darse cuenta plena de lo que hacía, y que, además, el afectado al serle puesta de relieve la gravedad objetiva del hecho en sí tan reprochable, ha dado muestras de profundo pesar"*, debido a lo cual, se le levantó el castigo impuesto. Arch. Pris. Prov. LAJD, 1 de junio de 1939.

²⁶⁰ Arch. Pris. Prov. LAJD, 10 de mayo de 1937.

²⁶¹ Arch. Pris. Prov. LAJD, 20 de junio de 1938.

²⁶² Arch. Pris. Prov. LAJD, 1 de octubre de 1938 y LAJD, 20 de octubre de 1938.

²⁶³ Arch. Pris. Prov. LOD, 7 de octubre de 1937.

²⁶⁴ Arch. Pris. Prov. LAJD, 10 de octubre de 1937.

penados ancianos, los más pobres por antigüedad²⁶⁵. Otro caso curioso fue la recogida de 26 huevos al recluso enfermero de tuberculosos²⁶⁶.

Una de las normas de la prisión que hubo de ser recordada repetidamente era la de que cada recluso únicamente entrara en su celda y no en ninguna otra. Es decir, quedaban prohibidas las vistas internas y, por supuesto, las reuniones: *“Se prohíbe terminantemente entren en los departamentos y celdas otros reclusos que no fueran sus ocupantes, exigiendo la consiguiente responsabilidad a los infractores de esta disposición”*²⁶⁷.

Una importante actividad de control de los presos eran los *cacheos* (aún se utiliza este término) que consistían en el registro de las ropas o vestimentas de los reclusos, con el fin de detectar cualquier objeto o instrumento prohibido. Habitualmente se realizaba al ingreso de los reclusos en el centro, y posteriormente en algunos casos: vuelta al centro tras un juicio o después de trabajar en el exterior²⁶⁸; tras haber comunicado con la familia, o cuando así lo dispusiera el funcionario. Periódicamente se hacían registros generales y *cacheos* de todos los reclusos²⁶⁹. Otros *cacheos* se efectuaban a cierto número de reclusos elegidos al azar, para *sorprender*²⁷⁰.

Las requisas eran los registros minuciosos de los locales habitados por los reclusos, (celdas, letrinas, comedor....). Esta actuación era realizada diariamente, si bien el director tenía que recordarlo de vez en cuando, *“se recuerda a los funcionarios, la obligación de practicar diariamente la requisa de locales, rejas, etc. antes de verificarse el encierro de la población reclusa, (...) será practicada por los funcionarios de interior y auxiliar, una vez terminadas las comunicaciones de la tarde, distribuyéndose equitativamente el trabajo de ambos empleados”*²⁷¹.

Uno de los personajes siniestros de las cárceles era el cabo de varas, preso de confianza de los funcionarios, encargado de introducir los paquetes del exterior a los presos y también de apalear a otros presos. Eran presos comunes, que también pegaban a los políticos, incluso, asegura Gabriel Arranz, *“a algunos se llevó por delante”*²⁷².

Un elemento más de coacción, que se ejercía con gran arbitrariedad, eran los traslados de prisión. Cuando un preso se adaptaba a la vida y condiciones de una cárcel, lo llevaban a otra, para romper los posibles lazos de camaradería, la organización interna de

²⁶⁵ Arch. Pris. Prov. LAJD, 10 de junio de 1938. El castigo para el sancionado fue que *“en lo sucesivo no se admitiera encargo alguno para el mencionado”*.

²⁶⁶ Arch. Pris. Prov. LAJD, 1 de febrero de 1938. No hemos encontrado lo que se hizo con el producto requisado, si fue repartido, como se hacía con el dinero, o simplemente se llevó a la cocina.

²⁶⁷ Arch. Pris. Prov. LOD, 15 de octubre de 1937. Sólo hemos podido comprobar una *reunión de penados* en la celda de Fernando González García y su hijo Fernando González Sobrino, estando en ella además, Federico Pérez Lago, Francisco Hernández Castro, José Luis Peñalver y Manuel Angulo. Dicha celda era *“visitada constantemente por reclusos, siendo el sitio donde se adquieren y propalan noticias que seguramente no favorecen al régimen interno del Establecimiento”*. Pris. Prov. LAJD, 20 de marzo de 1938. El castigo por la reunión fue la suspensión de las comunicaciones orales y escritas, los encargos de la calle y el suplemento de alimentación al que lo tenía.

²⁶⁸ Arch. Pris. Prov. LOD, 1 de abril de 1938: *“Todos los presos que van a los distintos trabajos, serán cacheados tanto a la salida como a su reingreso al Establecimiento, mañana y tarde por el funcionario correspondiente”*.

²⁶⁹ Arch. Pris. Prov. LOD, 31 de agosto de 1940.

²⁷⁰ Arch. Pris. Prov. LOD, 29 de abril de 1937. Se dio una orden de *cacheo* diario de 16 reclusos, de los que 13 fueron fusilados en el transcurso de un mes. No sabemos a que se debió dicha orden, pero para aparecer en el libro con esa literalidad y ser algo inusual el *cacheo* diario, sin duda fue fruto de alguna sospecha o simplemente para hacer la vida un poco más difícil a los condenados. Arch. Pris. Prov. LOD, 28 de abril de 1937:

A partir de la fecha, diariamente, después del encierro de la población reclusa, el oficial de Centro acompañado del Sr. Victoriano Amor verificará personalmente, con toda escrupulosidad el *cacheo* de los individuos de la presente relación:

Ciriaco Serrano Piquero, Manuel Tavira Cabrera, Hilario Santa Cruz Revuelta, Isidro Sánchez Aparicio, Dositeo Valcárcel López, Ignacio Cámara González, Cándido García Laguna, Valeriano Frías, Eduardo Sanz González, Quintín Maestro, José de Pablos Gómez, Clemente Casas Postigo, Mariano Casas Ramos, Manuel Sierra Iglesias, Lucas Barbado Domingo y Antonio Francisco Silva, y registro de locales ocupados por los mismos, haciendo ambas operaciones celda por celda. Se hallará presente a la puerta de éstas, el Sr. Martín Montero. Mediante parte independiente suscrito por los expresados funcionarios darán cuenta del resultado positivo o negativo de las operaciones en cuestión, durante las cuales se hará cargo del servicio de Centro el funcionario auxiliar correspondiente.

A esta orden fueron añadidos, dos semanas después, los ocupantes de otras cuatro celdas. Arch. Pris. Prov. LOD, 14 mayo 37, *“Los cacheos y requisas prescritas en 28 abril se extenderán en la misma forma a los presos que ocupan las celdas nº 93, 22, 91 y 86, así como a los objetos de las mismas”*.

²⁷¹ Arch. Pris. Prov. LOD, 29 de abril de 1937.

²⁷² ARRANZ MARINAS, G., op. cit., pág. 183. Julián Ajo Yagüe murió el 15 de agosto de 1936, oficialmente por apendicitis, mientras testimonios de su pueblo, Nava de la Asunción, aseguran que fue de una paliza.

los presos, los hipotéticos planes de fuga y, lo que es más importante, recordar al preso político que su vida estaba en manos de un poder represivo²⁷³.

7º. Premios y Castigos

Desde tiempo antiguo, la política penitenciaria se había basado en la concesión de premios y castigos. Entre los primeros se encontraban (hasta la aparición de la redención de penas por el trabajo) los bonos de descuento en el cómputo global de la condena²⁷⁴, las notas meritorias e incluso los premios en metálico. Los penados que *“no se limitaban al cumplimiento de sus deberes y observación de la disciplina, distinguiéndose excepcionalmente por actos extraordinarios”*, eran compensados con bonos de cumplimiento de condena, para adelantarles el disfrute de la libertad condicional²⁷⁵. Estos bonos podían ser de un mes por año, o dos de quince días, también por año. Las notas meritorias eran beneficios conseguidos por labores o trabajos excepcionales, o desarrollados con especial eficacia o dedicación²⁷⁶. A un auxiliar de biblioteca le otorgaron una *“nota favorable por su meritoria labor en el puesto”*²⁷⁷.

Las sanciones eran muy variadas y de distinto grado de dureza, si bien no hemos logrado averiguar el baremo para aplicarlas. En la Junta de Disciplina se acordaba el levantamiento de castigos o su continuación. La revocación de las sanciones podía coincidir con alguna festividad religiosa. Con motivo de la celebración de la Pascua, la Junta quitó el correctivo a los penados con faltas leves²⁷⁸ y a los que mostraron arrepentimiento²⁷⁹. Otro modo de obtener el final del castigo era la simple solicitud por parte del afectado²⁸⁰. A veces la Junta consideraba el hecho poco importante o ya pasado en el tiempo: *“Teniendo en cuenta que el hecho ha de retrotraerse bastante en el tiempo, y dada la calidad de los castigados, la junta acuerda que el funcionario [que había dado el parte] haga las advertencias correspondientes a los interesados y pueda levantarles el castigo”*²⁸¹. No parece que se rigiera por ninguna norma establecida el levantamiento de castigos, pues en la reunión de 10 de diciembre de 1936, se *“levanta el castigo a todos los que llevan mucho tiempo, salvo (...) que llevan poco”*²⁸². Sin especificar en ningún momento a cuánto ascendía el mucho o el poco tiempo.

En este aspecto el vocal secretario, Sr. Méndez, hizo una interesante propuesta que decía así:

...se está siguiendo el criterio de que el que ingresa castigado en celda continua en ella indeterminadamente en ella, sin dejación del tiempo, y como éste no es el criterio que se ha seguido hasta ahora, pudiera parecer que, por las actuales circunstancias, prevalece un criterio de venganza, incompatible con el de simple justicia que debe presidir todos los actos de todos los funcionarios de prisiones, máxime en este caso cuando algunos reclusos están enfermos. Propone se revisen las causas y se marque un tiempo determinado²⁸³.

²⁷³ A raíz de la ofensiva republicana de La Granja, en mayo de 1937, los militares se dieron cuenta del peligro que acechaba a Segovia, al estar tan cerca del frente de batalla, y la posibilidad real de que en una acción rápida pudieran ser liberados los presos políticos. En ese verano, y hasta diciembre de 1937 fueron trasladados al Fuerte de San Cristóbal, en los alrededores de Pamplona, al menos tenemos constancia de ello, por los libros de la prisión, 168 presos segovianos, que habían sido condenados en consejo de guerra.

²⁷⁴ Arch. Pris. Prov. LAJD, 22 de enero de 1937.

²⁷⁵ Rglto. Pris. 1930, art. 54.

²⁷⁶ Arch. Pris. Prov. LAJD, 10 de abril de 1937.

²⁷⁷ Arch. Pris. Prov. LAJD, 10 de junio de 1937.

²⁷⁸ Arch. Pris. Prov. LAJD, 20 de abril de 1937.

²⁷⁹ Arch. Pris. Prov. LAJD, 1 de junio de 1938: *“para conmemorar el cumplimiento pascual”*.

²⁸⁰ Arch. Pris. Prov. LAJD, 20 de febrero de 1938.

²⁸¹ Arch. Pris. Prov. LAJD, 10 de noviembre de 1936. El director visitó a los sancionados, algunos de ellos considerados peligrosos, no les quitó el correctivo, pero propuso que hicieran el paseo a la hora que está *“marcada para los de periodo, pero sin permitirseles que hablen entre sí. La Junta aprueba”*.

²⁸² Arch. Pris. Prov. LAJD, 10 de diciembre de 1936.

²⁸³ Arch. Pris. Prov. LAJD, 1 de noviembre de 1936. *“Así se aprueba”*.

8º. Trabajo

Hasta la creación del Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo²⁸⁴ los reclusos penados no podían trabajar en el exterior. Con este fin se organizaron destacamentos de trabajadores para ser empleados por empresas privadas o estatales. Con el Decreto de 9 de junio de 1939 se conectó la redención de penas por el trabajo con la libertad condicional.

A partir de la implantación de la redención de penas por el trabajo -que suponía el cumplimiento de dos días de condena por cada día trabajado- los reclusos solicitaban los destinos para redimir, aún estando enfermos. Pero no todos los presos podían trabajar: estaban excluidos los pertenecientes a sociedades secretas (masonería) y militantes comunistas, y los que habían intentado la evasión o eran reincidentes²⁸⁵. Dadas las características propias de un Hospital Penitenciario y las necesidades presupuestarias, tanto materiales como de personal, y aprovechando el alto nivel profesional de muchos de los reclusos allí alojados, se utilizaron penados profesionales de la medicina que desarrollaron una importante labor para contrarrestar las carencias de especialistas. De este modo nombraron médico auxiliar del titular del establecimiento al recluso Mariano Romero Becerril, cumpliendo órdenes de la Jefatura Nacional de Prisiones y por ser el penado de menor condena. Incluso fue destinado, por la Jefatura Nacional de Prisiones, un penado para prestar sus servicios como facultativo en el Hospital Asilo²⁸⁶.

Un destino característico del nuevo régimen instaurado por Franco era el de *lector*. Un recluso leía a sus compañeros obras cuya temática era muy limitada. En la confirmación en el cargo del lector oficial del centro, se le adjudicaba más funciones:

Habida cuenta de las condiciones que reúne el penado J. L. Peñalver, he acordado confirmarle en el cargo de lector del Establecimiento, debiendo completar la jornada con la lectura de una obra **de carácter moral**, en el pabellón de tuberculosos, por espacio de media hora durante el paseo de la mañana, de 12 a 12 y media, y otra hora por la tarde, de 5 a 6, en el patio general (....) leerá otra media hora, de 12 y media a una, en la enfermería general. Todo ello, repito, independientemente de la lectura que viene realizando mañana y tarde en ambos comedores, general y de tuberculosos²⁸⁷.

Dentro del Hospital, los reclusos que sabían algún oficio hacían trabajos para otros compañeros, con los que además obtenían pequeñas cantidades de dinero o comida. Unos lavaban ropa a otros reclusos²⁸⁸, otros confeccionaban zapatillas y alpargatas²⁸⁹ (Silvestre Ramos se hizo artesano elaborando anillos con monedas que le pasaban los mismos militares que vigilaban la prisión de Cuéllar. La suegra de Aquilino García hacía guantes, bufandas y otras prendas de lana).

²⁸⁴ O. 7 de octubre de 1938, *BOE*, 11 de octubre. Al año siguiente la Orden 27 de abril de 1939, determina que Nuestra Señora de la Merced, sea la patrona del Cuerpo de Prisiones y del Patronato de Redención. La fiesta se celebra el 24 de septiembre, *"proporcionando a los reclusos aquellas alegrías compatibles con el régimen de la Prisión, concediéndoles una vista extraordinaria y sirviéndoles una comida especial"*.

²⁸⁵ Orden 11 de enero de 1940, (*BOE*, 16 de enero de 1940) y Orden 14 marzo de 1939, (*BOE*, 18 de marzo de 1939), respectivamente.

²⁸⁶ Mariano Romero, militante de I.R. había trabajado como médico para el Ayuntamiento de Segovia, fue detenido al comienzo de la guerra. Arch. Pris. Prov. LOD, 3 de mayo de 1939 y LOD, 24 de enero de 1940. Por otra parte, las enfermedades que padecían algunos reclusos no impedían que desarrollaran los diferentes destinos a ellos encomendados: apuntamos el caso de unos enfermeros, que precisaron parte facultativo donde esto se especificara para mantener el puesto de trabajo (Arch. Pris. Prov. LOD, 26 de diciembre de 1939). Así le ocurrió a un maestro, quien habiendo experimentado una *"notable mejoría que le permite desempeñar algún cometido que esté de acuerdo con su profesión habitual"* se le nombró maestro auxiliar del Establecimiento, con la obligación de dar clase diariamente a los analfabetos de 11 a 12, y desde ésta a las 13 horas a los que sabiendo leer no sabían escribir. Los días festivos de 11 y media a 12 y media daba clase a los reclusos de las brigadas de limpieza. (Arch. Pris. Prov. LOD, 21 de junio de 1940).

²⁸⁷ Arch. Pris. Prov. LOD, 13 de agosto de 1939.

²⁸⁸ Arch. Pris. Prov. LOD, 21 de julio de 1938.

²⁸⁹ Para este oficio de zapatero, era preciso autorización para adquirir las herramientas propias: una aguja de almera y dos agujas de coser sacos (Pris. Prov. LOD, 6 de abril de 1939. Instancia del recluso Eduardo Sanz Muñoz solicitando la autorización pertinente, que consiguió). La dirección del centro autorizó a los destinos sastre y zapatero para que *"una vez cubierta la jornada en utilidad del mismo, puedan trabajar en su propio provecho en las horas restantes de los días laborables"*, sólo hasta el toque de silencio. Ambos penados quedaban dispensados de la realización de las faenas mecánicas generales del Establecimiento, es decir no tenían que limpiar o recoger basuras, etc. (Pris. Prov. LOD, 7 de junio de 1940).

Entre los múltiples y variados puestos de trabajo que desempeñaban los presos estaban las labores burocráticas del centro, lo que había estado prohibido hasta la guerra²⁹⁰. En julio de 1937 se nombró un escribiente de la dirección, que había de salir al despacho indicado todos los días de 11 a 13 horas²⁹¹, al que fueron añadiendo un auxiliar de oficinas y contable del economato²⁹², otro para auxiliar de la administración²⁹³ y, por último, un destino de limpieza para las oficinas exteriores del centro, que había de ser acompañado de un vigilante²⁹⁴. Otro de los cometidos que en condiciones de normalidad realizaría un funcionario era el registro de entrada y salida de correspondencia de los reclusos, que en estos momentos de “*especiales circunstancias*” era desempeñado por un recluso²⁹⁵.

Los trabajos exteriores -en principio y hasta la redención de penas- sólo podían efectuarlos los detenidos gubernativos, que no estaban sujetos a procedimiento judicial. Desde el día 20 de julio de 1936 se autorizó la salida de gubernativos al exterior del edificio para “*efectuar trabajos en la Prisión Provisional del Parque*”²⁹⁶, naturalmente acompañado de un guardián. Más adelante salieron cerca del centenar de detenidos para trabajar en la ampliación del cementerio²⁹⁷, la pista militar del Regimiento, las casas de la colonia Valera, el cuartel de la Guardia Civil, etc. Además, cuando nevaba limpiaban de nieve las calles de Segovia. Los detenidos que salían a trabajar a diario continuaban en el establecimiento para pernoctar y efectuar las comidas reglamentarias. Al ser muchos, era necesario organizar su higiene:

Para atender a la necesidad impuesta por el aseo personal de los reclusos que salen a trabajar al cementerio, sin merma del tiempo dedicado a dicha labor (...) permanecerá abierta la peluquería, en los días laborables hasta las 8 y media de la noche, para el servicio exclusivo de los presos gubernativos en cuestión. Una vez encerrados saldrán celda por celda simultáneamente los de cada una acompañados del empleado de interior hasta dicha dependencia, la cual estará bajo la directa, inmediata y permanente vigilancia, hasta la clausura de aquella, de otro funcionario²⁹⁸.

8º. Higiene y salud

La masiva detención de personas los primeros días del movimiento militar originó el desbordamiento de los centros de reclusión de Segovia. Esta avalancha provocó graves problemas de higiene y contagio de enfermedades. El médico del Hospital Asilo Penitenciario, Gaspar Pérez, suscribió un informe el 21 de julio de 1936, dirigido al director del establecimiento, Primitivo Gallego, denunciando precisamente el peligro de contagio por el hacinamiento. Es muy interesante, especialmente por la fecha de su emisión, tan sólo habían transcurrido dos días desde el inicio de la guerra en Segovia. Dicho informe fue trasladado literalmente a la “*autoridad correspondiente*”, en el mismo oficio, por el director. El facultativo exponía en su escrito: “*cumpliendo un deber de conciencia (...) que en este establecimiento se alberguen los reclusos tuberculosos con lesiones abiertas, así como (con) algún traumatismo, y constituye un peligro para todo aquél que sea recluido en ésta, pues no puedo responder del contagio de los mismos, por lo que deseo lo comunique así a la autoridad para su conocimiento, sin perjuicio que la misma decida lo que crea más conveniente y cuyas órdenes gustoso acato*”²⁹⁹.

²⁹⁰ Se ha consultado una orden de 3 de octubre de 1934 en la que se apuntaba literalmente: “*Queda terminantemente prohibido que los reclusos hagan ningún trabajo burocrático del Establecimiento*”.

²⁹¹ Arch. Pris. Prov. LAJD, 22 de julio de 1937.

²⁹² Arch. Pris. Prov. LOD, 22 de enero de 1937.

²⁹³ Arch. Pris. Prov. LOD, 25 de julio de 1939.

²⁹⁴ Arch. Pris. Prov. LOD, 26 de abril de 1937.

²⁹⁵ Arch. Pris. Prov. LOD, 15 de abril de 1938.

²⁹⁶ No hemos podido averiguar a qué prisión se refiere, pero podría ser la *Cárcel Vieja* o la del Parque de Automovilismo del Regimiento de Artillería.

²⁹⁷ En la sesión del Ayuntamiento de Segovia, de 7 de octubre de 1936, se aprobó la adquisición de terrenos colindantes al camposanto. En la parte del acarreo de tierras “*trabajarán los presos gubernativos*”. Isidoro Romano cuenta que, como gubernativo, trabajó en las obras de ampliación del cementerio, en la colonia Varela y en una pista de aviación en Torrecaballeros. Les llevaban unas personas voluntarias que se ofrecían para custodiarlos, con unas carabinas, y alguna vez también algún funcionario.

²⁹⁸ Arch. Pris. Prov. LOD, 14 de diciembre 1936.

²⁹⁹ Arch. Pris. Prov. Informe contenido en el expediente de Valentín Jiménez Marugán.

Las numerosas mujeres hacinadas cuando tenían algún problema importante de salud que no se podía solucionar en el centro eran trasladadas a los Establecimientos Provinciales de Beneficencia, institución dependiente de la Diputación Provincial. Los nacimientos se atendían en la Maternidad allí ubicada. Las operaciones quirúrgicas más complejas se realizaban en el Hospital de la Misericordia.

Los reclusos que perdían la razón eran sometidos a observación y tras el estudio médico pertinente, se iniciaban los trámites para instruir el *"expediente de demencia legal"*. Una vez conseguida esta certificación, pasaban a los Establecimientos Provinciales de Beneficencia, para ser trasladados al manicomio penal del Puerto de Santa María³⁰⁰.

Para ventilar los distintos locales del centro tan masivamente ocupados, se mantenían día y noche abiertas tanto las ventanas de los departamentos de "aglomeración" como de las celdas. Ésta era una orden de dirección que había de repetirse periódicamente, por ejemplo, el 28 de mayo de 1937, cuando se recordaba *"la necesidad de tener permanentemente abiertas (...) velando cuidadosamente los funcionarios por el cumplimiento de tal orden"*³⁰¹.

Un intento de aliviar las apreturas se produjo en diciembre de 1937, cuando se dispuso que los penados condenados con posterioridad al 19 de julio de 1936, de 60 y más años, *"pasaran durante las horas de paseo al patio de gubernativos, con el fin de descongestionar el general, con beneficio para la higiene y salubridad del establecimiento. Durante las horas de paseo se encenderán las estufas de ambos solarium"*³⁰².

Un problema grave de las prisiones franquistas era la escasez de presupuesto, que se reflejaba especialmente a la hora de adquirir medicinas y aparatos quirúrgicos. No olvidemos que era un Hospital Asilo con numerosos enfermos, básicamente tuberculosos pero no exclusivamente. Ya advertimos al principio de este capítulo las carencias del centro en cuanto a infraestructura operativa. Con la guerra se agravaron los problemas. El capellán del centro llegó a denunciar en una reunión de la Junta de Disciplina la falta de medicación suficiente de los enfermos, eso sí, *"sin que ello envuelva censura para el personal facultativo"*, el médico le respondió que no era debido a falta de asistencia médica, sino a la *"escasez de productos y preparados farmacéuticos, y a la demora, ésta sin duda motivada por la falta de personal en el despacho de los recetarios correspondientes en la farmacia militar, donde reglamentariamente habían de comprarse las medicinas, no por la situación de guerra"*³⁰³.

Las dificultades presupuestarias llegaron incluso a limitar las raciones de enfermería, en sus dos categorías, ordinarias y dobles, con *"objeto de obtener la mayor economía posible, dadas las circunstancias por las que atraviesa España. Se dará al médico una relación de raciones ordinarias y dobles, para si alguna doble puede rebajarse a sencilla y algunas de estas suprimirse"*³⁰⁴.

Las condiciones de vida eran tan ínfimas que numerosos presos contrajeron enfermedades que les produjeron la muerte, bien en prisión o al ser liberados, o que derivaron en problemas crónicos de salud³⁰⁵. Otros simplemente murieron de hambre. Desde el 19 de julio de 1936 hasta el 31 de diciembre de 1946, fallecieron en las prisiones de Segovia 161 personas, de las que 19 eran vecinos de la provincia. A ellos hay que añadir los 28 segovianos muertos en el Fuerte de San Cristóbal de Pamplona, 10 por enfermedad y 18 en la fuga de 1938. No disponemos de datos sobre segovianos fallecidos en los campos de concentración de Santa Espina (Valladolid), Los Almendros (Alicante), o las prisiones de mujeres de Ondarreta (Guipúzcoa), Santurrarán (Vizcaya) o Tarragona, donde sabemos que hubo presos de esta provincia.

³⁰⁰ Arch. Pris. Prov. LAJD, 20 de junio de 1937 y 10 de marzo de 1938.

³⁰¹ Arch. Pris. Prov. LOD, 28 de mayo de 1937.

³⁰² Arch. Pris. Prov. LOD, 5 de diciembre de 1937.

³⁰³ Arch. Pris. Prov. LAJD, 10 de febrero de 1939. Ejercía como capellán el profesor del Seminario Fausto López Velicia, nombrado en noviembre de 1938, y secretario de la Junta de Disciplina desde el 20 de aquel mes.

³⁰⁴ Arch. Pris. Prov. LAJD, 1 de febrero de 1937.

³⁰⁵ Por ejemplo, Arsenio Arranz como preso gubernativo, junto a otro grupo de detenidos, recogía camas de hierro con las que después hacían metralla para las bombas. Una de ellas le explotó y quedó herido algún tiempo. Liberado una vez finalizada la guerra, continuaba enfermo por la metralla que le había quedado en el cuerpo, murió en enero de 1940.

9. Vida religiosa

La legislación laica de la II República había prohibido la celebración de oficios religiosos en las prisiones, del mismo modo que en otras instituciones públicas o estatales. La acción del nuevo régimen se hizo notar muy pronto en este sentido. En agosto de 1936, el gobernador civil de Segovia, comandante España, autorizó la celebración de misas dominicales en la cárcel³⁰⁶.

Una documentación importante para ilustrar este apartado son unos cuadernillos, titulados "culto y sepultura"³⁰⁷ donde se anotaban los gastos que originaba tanto la asistencia religiosa en prisión como los enterramientos. No hay constancia de los fusilados en las tapias del cementerio, pues la prisión tan sólo se hacía cargo de los fallecidos en el establecimiento, independientemente de las causas que lo provocaran.

Llama la atención que los gastos fueran netamente superiores durante el periodo republicano que en el posterior Nuevo Estado confesional católico. La rebaja en el gasto no se produjo por la disminución de servicios religiosos, pues éstos aumentaron significativamente, sino por el descuento del 50% que se aplicaba a las misas, que pasaron de costar 10 a 5 pts. cada una. Al igual que los gastos de oblata, como se denominaban los originados por la compra de vino y pan de consagrar, y otros elementos necesarios en las celebraciones: cirios, velas, etc. Al coste de las misas y la oblata, había que añadir los derechos de depósito que se pagaban al Ayuntamiento propietario del cementerio, por un valor de 3 pts. por cadáver. Las cajas "corrientes" –como eran todas las vistas en la documentación consultada- de enterramiento ascendían a 30 pts. Por último, había que añadir los certificados de defunción pagados al Colegio Provincial de Médicos, que salían a 50 cts. cada uno³⁰⁸.

Durante la primera cuaresma de la guerra se celebraron unas conferencias diarias preparatorias para la confesión y comunión pascuales, lo que afectó al horario de los reclusos que trabajaban en el cementerio, pues se les adelantó la hora de salida al tajo y la hora de regreso a prisión para que pudieran asistir a dichas conferencias³⁰⁹. El capellán organizó una gran confesión general "coincidiendo" con las vistas de los numerosos consejos de guerra que estaban condenando a muerte a decenas de segovianos. De hecho, la semana siguiente a esta demostración de fervor religioso fueron fusilados 32 condenados. El director del Hospital Asilo mostró máxima rigurosidad con el asunto religioso, llegando a escribir una orden de dirección, que transcribimos por lo significativo de su contenido:

No puede con propiedad llamarse católico, el bautizado que desobedece los preceptos de nuestra Sta. Madre Iglesia. Esta manda, bajo pena de pecado mortal, 'confesar, a lo menos, una vez al año, o antes si hay peligro de muerte o hay que comulgar, y comulgar por pascua florida'. Para los que voluntariamente deseen confesar y salvar, por lo tanto sus deudas morales con Dios, que en día no lejano, ha de exigirnos cuenta de nuestros actos, como juez soberano de vivos y muertos, se fija el día 17 desde las 15 horas, por cuya circunstancia, los operarios no saldrán al trabajo en dicha fecha por la tarde (...) La Comunión Pascual, tendrá lugar el día siguiente, domingo, a las 9. (...) El director (...) invita a penados, sentenciados, procesados y gubernativos, que se albergan en esta Prisión Central, a que despreciando todo respeto humano, con la mira puesta en Dios únicamente y dando de lado a las falsedades inventadas por los elementos díscolos e indeseables de la casa, se acerquen con las debidas disposiciones de alma y cuerpo a ambos Santos Sacramentos, pensando sólo en agradar a nuestro Redentor, que especialmente nos está mirando para premiarnos o castigarnos, muchas veces aún en este mundo, según realicemos bien o mal tan esenciales actos de la Religión Católica³¹⁰.

³⁰⁶ *El Adelantado*, 11 de agosto de 1936.

³⁰⁷ Arch. Pris. Prov. Servicio Religioso. (Culto y Sepultura).

³⁰⁸ Las cuentas se hacían trimestralmente. El último trimestre previo a la guerra los gastos ascendieron a 345,80 pts, mientras que el primero de la guerra ya el gasto total había bajado sustancialmente: 247 pts.; llegando a alcanzar, el último trimestre del año, 182 pts.

³⁰⁹ Arch. Pris. Prov. LOD, 12 de abril de 1937.

³¹⁰ Arch. Pris. Prov. LOD, 16 de abril de 1937. Subrayado en el original. Tal despliegue exigía el correspondiente esfuerzo a los empleados de la prisión, de tal manera que todos los funcionarios que libraban en dicha fecha, habían de personarse en

En 1939 celebraron *Santos Ejercicios Espirituales* para los reclusos a cargo del “virtuoso y culto sacerdote” D. Jenaro García Burgos, capellán de la Residencia Provincial, con asistencia de toda la población reclusa que dio muestras durante el rito religioso, en palabras del capellán, “de un gran fervor y recogimiento espiritual, lo que es presagio de gran fruto y aprovechamiento para las almas de los ejercitantes en orden a la santificación y reforma de vida”³¹¹. La convocatoria resultó un éxito, pues en la Misa de comunión general se acercaron a “cumplir con el precepto eclesiástico de confesión y comunión anual, el 93 % de la población reclusa”³¹².

Siendo un Hospital Asilo con gran número de enfermos graves, había presos que morían repentinamente. Este asunto preocupaba a la dirección del centro, por lo que dictó la Orden de 17 de julio de 1939, en la que se recogía: “Cuando la gravedad de un enfermo envuelva peligro de muerte (procurando hacerlo hallándose el enfermo en pleno conocimiento) avisará (el médico auxiliar) inmediatamente al funcionario de centro quien en el acto telefoneará al capellán, nº 275, a los efectos de la administración de los auxilios espirituales al enfermo, constituyendo mérito especial ante esta dirección, si con procedimientos persuasivos facilita la misión religiosa de aquél”³¹³. La referencia a la persuasión se hizo necesaria por la negativa de muchos presos de izquierdas, no creyentes, a recibir los sacramentos católicos. Esta orden era recordada y ampliada por otra de 19 de diciembre del mismo año. Para evitar el fallecimiento sin tomar los sacramentos, en caso de “indisposición repentina que ponga en peligro la vida de algún penado, sin perjuicio de dar aviso inmediatamente al capellán (...) se llame a D. Baldomero Sánchez para que in extremis, administre al paciente o moribundo los auxilios espirituales de nuestra sacrosanta religión, y evitar así la gran responsabilidad moral ante Dios nuestro Señor de tan grave omisión”³¹⁴.

La blasfemia era perseguida y castigada en zona nacional desde el inicio de la guerra, pero lo fue especialmente tras una Circular de la Jefatura Nacional de Prisiones de 19 de enero de 1939:

Con profundo disgusto ha tenido conocimiento esta jefatura de que en algunas prisiones no solamente se tolera o disimula la blasfemia en boca de los reclusos, no imponiéndoles el correctivo merecido, sino que llega a proferirse por algunos funcionarios o subalternos del servicio, que desmoralizan y alientan con su mal ejemplo a los peores elementos de la población reclusa, siquiera se registre eso, como caso de excepción. En uno u otro aspecto, los funcionarios que así proceden se manifiestan en franca desafección al glorioso Movimiento Nacional, como enemigos de los principios en que éste se inspiró, en incompatibles con el régimen de la nueva España, por lo que habrán de ser tratados como tales enemigos y este Centro será inexorable en la sanción de su conducta, en especial para con los directores o jefes de establecimiento, cuya mayor responsabilidad y correlativa de la Autoridad que ejercen³¹⁵.

el establecimiento a las 3 y media de la tarde, hasta el término de las confesiones. Todos los funcionarios francos (así se denominaba en el argot penitenciario a los que libraban), tenían que acudir también el 18 a las 8 de la mañana, permaneciendo en el centro hasta la terminación del acto. Los funcionarios cumplieron tan bien con lo encomendado, que el director se dignó “conceder un voto de gracias a todos los funcionarios por el celo con que intervinieron”. Arch. Pris. Prov. LAJD, 20 de abril de 1937.

³¹¹ Arch. Pris. Prov. LAJD, 20 de marzo de 1939.

³¹² Arch. Pris. Prov. LAJD, 1 de abril de 1939.

³¹³ Arch. Pris. Prov. LOD, 17 de julio de 1939.

³¹⁴ Arch. Pris. Prov. LOD, 19 de diciembre de 1939.

³¹⁵ Arch. Pris. Prov. En el LAJD, de 10 de abril de 1937, ya había referencias sobre esta prohibición. Pero con la circular de 1939, se reafirmó la prohibición, estipulando los castigos para los reclusos trasgresores, la primera vez, sería de: privación de comunicaciones oral y escrita por tiempo ilimitado, hasta que se aprecie su arrepentimiento y, en caso de reincidencia, además de aplicarles algunas de las restantes correcciones que determina el art. 100 del Rglto., quedarán siempre inhabilitados para obtener el beneficio de la libertad condicional y la redención de penas por el trabajo (...) Para conocimiento de los reclusos se dará lectura pública a los mismos (...) en alguno de los actos de formación.

**LISTADOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN LA
PROVINCIA DE SEGOVIA**

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN LOS LISTADOS

a.	años
acred.	acreditado
activ.	actividad/es
acto op.	acto oposición
admdor. bie.	administrador de bienes
admdor. rent. públ.	administrador rentas públicas
Admon.	administración
admtivo. jubilado	administrativo jubilado
afil.	afiliado
agr.	agricultura
alc.	alcalde
Alcolea del C.	Alcolea del Campo
Aldealengua de P.	Aldealengua de Pedraza
antirel.	antireligioso
Arr.	Arriba
Art.	Artillería
arti.	artículos
asis.	asistencia
aux.	auxiliar
ayte.	ayudante
ayto.	Ayuntamiento
C. de Valcárcel	Castañeda de Valcárcel
C. V. T.	Comunidad de Villa y Tierra
Cabe.	Cabezas
cap.	capitán
car. dir./conf.	cargos directivos y de confianza
Castroji/Lastras	Castrojimeno/Lastras de Cuéllar
cat.	catedrático
CdP	Casa del Pueblo
cem. mun.	cementerio municipal
Cese. P.	Cese. Provisional
Chozas de la S.	Chozas de la Sierra
Cir. Mer.	Círculo Mercantil
cmte.	comandante
cnel.	coronel
com. lib.	comunista libertario
conc.	concejal
Concep.	Concepción
cond.	condenado
confir./pérdida haberes	confirmación en el cargo con pérdida de haberes dejó de percibir
confirmar/inhab. cargos	confirmar en cargo e inhabilitación para cargos directivos y confianza
conm.	conmutada
contrib. amb. rebeldía soc.	contribución ambiente rebeldía social
Cptaz. Montes	capataz de Montes
CR	Ciudad Real
Del.	Delegado
dest.	destacado
Dip. Prov.	Diputación Provincial

<i>dir.</i>	<i>dirigente</i>
<i>disol.</i>	<i>disolventes</i>
<i>dpte. Sastre.</i>	<i>dependiente sastrería</i>
<i>ec.</i>	<i>economía</i>
<i>ed.</i>	<i>edad</i>
<i>elem.</i>	<i>elemento</i>
<i>emb.</i>	<i>embargado</i>
<i>empl.</i>	<i>empleo/ado</i>
<i>encarg.</i>	<i>encargado</i>
<i>encuaderna.</i>	<i>encuadernador</i>
<i>enl.</i>	<i>enlace</i>
<i>Ens.</i>	<i>Enseñanza</i>
<i>Escara.</i>	<i>Escarabajosa</i>
<i>escrib. J. Cargas. Jus.</i>	<i>escribiente Junta Cargas Justicia</i>
<i>Est. Prov. Ben.</i>	<i>Establecimientos Provinciales de Beneficencia</i>
<i>extr.</i>	<i>extremista</i>
<i>farm.</i>	<i>farmacéutico</i>
<i>Fil.</i>	<i>Filosofía</i>
<i>Fil.Pol.</i>	<i>Filiación Política</i>
<i>Fr.</i>	<i>Francés</i>
<i>Fte.O.</i>	<i>Fuente el Olmo</i>
<i>Fuent.</i>	<i>Fuentidueña</i>
<i>fun.</i>	<i>funcionario</i>
<i>fund.</i>	<i>fundador</i>
<i>fusil.</i>	<i>fusilamiento/fusilado</i>
<i>G. Civ.</i>	<i>Guardia Civil</i>
<i>Garganta de M.</i>	<i>Garganta de los Montes</i>
<i>gob. civ.</i>	<i>gobernador civil</i>
<i>Hontanares de E.</i>	<i>Hontanares de Eresma</i>
<i>hosp.</i>	<i>hospital</i>
<i>I.R.</i>	<i>Izquierda Republicana</i>
<i>ideol.</i>	<i>ideología</i>
<i>imp.</i>	<i>impedir</i>
<i>impr.</i>	<i>imprimir</i>
<i>ind.</i>	<i>industrial</i>
<i>indep.</i>	<i>independiente</i>
<i>Inf.</i>	<i>Infantería</i>
<i>ing.</i>	<i>ingeniero</i>
<i>inh.esp.</i>	<i>inhabilitación especial</i>
<i>inhab.</i>	<i>inhabilitación</i>
<i>Ins. 2ª</i>	<i>Instituto 2ª Enseñanza</i>
<i>insp.</i>	<i>inspector</i>
<i>inst.</i>	<i>instigador</i>
<i>int.</i>	<i>interino</i>
<i>interv.</i>	<i>interventor electoral</i>
<i>izqda.</i>	<i>izquierda</i>
<i>J. 1ª Ins.</i>	<i>Juez 1ª Instancia</i>
<i>j.m.</i>	<i>juez municipal</i>
<i>jf.</i>	<i>jefe</i>
<i>LU</i>	<i>Lugo</i>
<i>m.</i>	<i>mes/es</i>

<i>M</i>	<i>Madrid</i>
<i>M. Ins. Pública</i>	<i>Ministerio de Instrucción Pública</i>
<i>Mª</i>	<i>María</i>
<i>manif.</i>	<i>manifestación/es</i>
<i>maqu.</i>	<i>maquinista</i>
<i>milc.</i>	<i>miliciano</i>
<i>mon.</i>	<i>montes</i>
<i>mov.</i>	<i>movimiento</i>
<i>mun.</i>	<i>municipal</i>
<i>Nav. Riofrío</i>	<i>Navas de Riofrío</i>
<i>Navas S. Ant.</i>	<i>Navas de San Antonio</i>
<i>neg.</i>	<i>negociado</i>
<i>O.P.</i>	<i>Obras Públicas</i>
<i>obrero del c.</i>	<i>obrero del campo</i>
<i>of.</i>	<i>oficial</i>
<i>org.</i>	<i>organizador</i>
<i>P</i>	<i>Palencia</i>
<i>Patr. Est. Aserr.</i>	<i>Patrimonio del Estado-Aserradero</i>
<i>pert.</i>	<i>pertenencia</i>
<i>PO</i>	<i>Pontevedra</i>
<i>por.</i>	<i>portero</i>
<i>pract. Farmacia</i>	<i>practicante de Farmacia</i>
<i>proc.</i>	<i>procedimiento</i>
<i>prof. Fis. y Qui.</i>	<i>profesor Física y Química</i>
<i>prof. Psicol. y Fil.</i>	<i>profesor Psicología y Filosofía</i>
<i>prom.</i>	<i>promotor</i>
<i>prop.</i>	<i>propagandista</i>
<i>prov.</i>	<i>provincial</i>
<i>pto.</i>	<i>puerto</i>
<i>R.</i>	<i>retirado</i>
<i>Rad.</i>	<i>Radical</i>
<i>Rad. Soc.</i>	<i>Radical Socialista</i>
<i>rec.</i>	<i>recurso</i>
<i>recaud.</i>	<i>recaudador</i>
<i>red.</i>	<i>reducido</i>
<i>repr.</i>	<i>representante</i>
<i>resp. pol.</i>	<i>responsabilidades políticas</i>
<i>rev.</i>	<i>revolucionario</i>
<i>S</i>	<i>Santander</i>
<i>S. Ild.</i>	<i>San Ildefonso</i>
<i>S. M. de la V.(M)</i>	<i>San Martín de la Vega</i>
<i>S. M. del Castañar</i>	<i>San Martín del Castañar</i>
<i>S. Martín de la V.</i>	<i>San Martín de la Vega</i>
<i>S. Raf.</i>	<i>San Rafael</i>
<i>SA</i>	<i>Salamanca</i>
<i>SE</i>	<i>Sevilla</i>
<i>Sebúl.</i>	<i>Sebúlcór</i>
<i>sec.</i>	<i>secretario</i>
<i>SG</i>	<i>Segovia</i>
<i>sgto.</i>	<i>sargento</i>
<i>signif.</i>	<i>significado</i>

<i>sobres.</i>	<i>sobreseimiento</i>
<i>soco.</i>	<i>Socorro Pro-presos</i>
<i>sol.</i>	<i>soldado</i>
<i>Sta. M.</i>	<i>Santa María</i>
<i>sub.</i>	<i>subasta</i>
<i>susp.</i>	<i>suspensión</i>
<i>tb.</i>	<i>también</i>
<i>temp.</i>	<i>temporal</i>
<i>tes.</i>	<i>tesorero</i>
<i>Tfónica.</i>	<i>Telefónica</i>
<i>Tlgrfos.</i>	<i>Telégrafos</i>
<i>Torreg.</i>	<i>Torregutiérrez</i>
<i>traslado dentro prov.</i>	<i>traslado dentro de la provincia de Segovia</i>
<i>tromp.</i>	<i>trompeta</i>
<i>U.R.</i>	<i>Unión Republicana</i>
<i>V. del Campo</i>	<i>Villa del Campo</i>
<i>Val. Montejo</i>	<i>Valdevacas de Montejo</i>
<i>vpres.</i>	<i>vicepresidente</i>
<i>ZA</i>	<i>Zamora</i>

N ° 7: RELACIÓN DE EJECUTADOS SIN PROCESO

RELACIÓN DE EJECUTADOS SIN PROCESO

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	ED	NATURALEZA	DOMICILIO	PROFESIÓN	ESTADO	LUGAR DE EJECUCIÓN	FECHA	FIL. POLIT.
1	MARTÍN POZA	Feliciano	29	Valle Tabladillo	Sepúlveda	jornalero	soltero	Sepúlveda	21/07/36	
2	PASCUAL AGUÑA	Lucio	66	Labajos	Labajos	jornalero	viudo	Labajos	24/07/36	
3	LÓPEZ MARÍA	Eustaquio	27	El Espinar	El Espinar	panadero		El Espinar	25/07/36	
4	MENÉNDEZ MARTÍNEZ	Álvaro	30?	Quirós (Asturias)	Oviedo	jornalero	casado	Navas de San Antonio	26/07/36	
5	MENÉNDEZ MARTÍNEZ	Aurelio	26	Quirós (Asturias)	Oviedo	jornalero	casado	Navas de San Antonio	26/07/36	
6	MARTÍN ARTEAGA	Martín	43	Guadarrama (M)	El Espinar			El Espinar	28/07/36	
7	ÁLVARO DE ANDRÉS	Enrique	53	Segovia	San Ildefonso	guarda	casado	San Ildefonso	29/07/36	Rad Soc
8	MARUGÁN/HARDUYA BARRÓN	Genaro	28	Murujone? (Pamplona)	Uyaro? (Pamplona)	jornalero	casado		01/08/36	
9	SATRÚSTEGUI GARCÍA	Victoriano	31	Arcona? (Pamplona)	Arcona? (Pamplona)	jornalero			01/08/36	
10	Sin IDENTIFICAR		36					Escobar	02/08/36	
11	APARICIO BRAVO	Pedro	36	Otero de Herreros	Villalba	ferroviario	casado	La Losa	03/08/36	
12	DURÁN PRIETO	Miguel	29	Zarzuela del Monte	Otero de Herreros	jornalero	casado	La Losa	03/08/36	CdP
13	MARTÍN PASCUAL	Julián	18	El Escorial	Otero de Herreros		soltero	La Losa	03/08/36	CdP
14	PABLOS ANDRÉS	Abel de	27	Otero de Herreros	Otero de Herreros	jornalero	casado	La Losa	03/08/36	UGT
15	SEBASTIÁN VELA	Pedro	27	Otero de Herreros	Otero de Herreros	jornalero	soltero	La Losa	03/08/36	PC-CdP
16	ABASTAS DE FRUTOS	Mariano Luis	31	San Ildefonso	Valsaín	guarda	casado	Valsaín	06/08/36	UGT
17	BENITO BERNALDO DE QUIRÓS	Purificación	32	Peguerinos	Villacastín	sus labores	soltera	Villacastín	06/08/36	
18	BENITO GARCÍA	Celedonio	66	Peguerinos	Villacastín	cptaz. Montes	casado	Villacastín	06/08/36	
19	POZO HERRANZ	Hermenegildo	21	El Espinar	El Espinar	jornalero	soltero	El Espinar	06/08/36	izquierdas
20	RUBIO MARTÍN	Benito	37	Villacastín	San Rafael	albañil	casado	Villacastín	06/08/36	
21	CANCHO BARRIGA	Pedro	56	Zorita (Cáceres)	Riaza	tabernero	casado	Aranda de Duero	08/08/36	
22	DOMÍNGUEZ MARTÍN	Mariano	30	La Cuesta	Nieva	maestro	casado		08/08/36	UGT
23	MUÑOZ PÉREZ	Tiburcio	49	Riaza	Riaza	carnicero	casado	Aranda de Duero	08/08/36	UGT
24	MUÑOZ PÉREZ	José	42	Riaza	Riaza	carnicero	casado	Aranda de Duero	08/08/36	UGT
25	DOMÍNGUEZ MARTÍN	Aniano	26	La Cuesta	San Ildefonso	maestro	soltero	San Ildefonso	10/08/36	UGT
26	GARCÍA GARCÍA	José		Zarzuela del Monte	Zarzuela del Monte	jornalero	casado	Aldeallana	10/08/36	izquierdas
27	GARCÍA SAN FELIPE	Cecilio	23	Escobar de Polendos	Segovia	jornalero	soltero	Segovia	10/08/36	
28	HERNÁNDEZ GIL	Jesús-Vito	27	Navas de Oro	Segovia	abogado	soltero	Sotosalbos	10/08/36	JSU
29	LÓPEZ SAN FELIPE	Petra	29	Escobar de Polendos	Segovia	sus labores	casada	Segovia	10/08/36	
30	GAITERO BARTOLOMÉ	Félix	41	Bernardos	Bernardos	jornalero	casado	Los Huertos	11/08/36	
31	ANTONIO ALVARO	Atanasio	20	Segovia	Segovia	ebanista	soltero	Segovia	12/08/36	JSU
32	PEDRO	Agapito de		Garcillán	Valverde del Majano		casado	Madrona/Hontoria	12/08/36	
33	FERNÁNDEZ	Eulalia		Valverde del Majano	Valverde del Majano	sus labores	casado	Madrona/Hontoria	12/08/36	
34	ESCUDERO OTERO	José	22	Segovia	Segovia	cantero	soltero	Segovia	12/08/36	JSU
35	FERNÁNDEZ GÓMEZ	Eugenio	20	Segovia	Segovia	carpintero	soltero	Segovia	12/08/36	JSU
36	GARCÍA HERNÁNDEZ	Luis	42	Otero de Herreros	Villacastín	maestro		Vegas de Matute	12/08/36	UGT
37	GILMARTÍN DE FRANCISCO	Jesús	33	Fuentepelayo	Fuentepelayo	maestro	casado	Mozoncillo	12/08/36	UGT
38	MAROTO ORTEGA	Julio	60	Valdeprados	Villacastín	caminero	casado	Zarzuela/Vegas Matute	12/08/36	
39	ROLDÁN	Ladislao		Carbonero de Ahusín	Valverde del Majano			Madrona/Hontoria	12/08/36	
40	VELASCO LÁZARO	Mariano	45	Valverde del Majano	Valverde del Majano	labrador	casado	Madrona/Hontoria	12/08/36	
41	BARTOLOMÉ GALLEG0	Joaquín	41	Navas de Oro	Navas de Oro	labrador	casado	Pascuales	13/08/36	U.R.

RELACIÓN DE EJECUTADOS SIN PROCESO

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	ED	NATURALEZA	DOMICILIO	PROFESIÓN	ESTADO	LUGAR DE EJECUCIÓN	FECHA	FIL. POLIT.
42	CEREZO GIL	Manuel	18	Bercimuel	Carrascal del Río	sec. Ayto.	soltero	Castillejo de Mesleón	13/08/36	socialista
43	CEREZO MARINERO	Norberto	48	Segovia	Madrid	maestro	casado	Castillejo de Mesleón	13/08/36	socialista
44	GÓMEZ LOBO	Daniel	46	Cantalejo	Cantalejo		casado	Cabezuela	13/08/36	UGT
45	GÓMEZ MAYO	Felipe	43	Navas de Oro	Navas de Oro		casado	Pascuales	13/08/36	
46	HERRERO LOBO	Ponciano	42	Cabezuela	Cabezuela	militar retirado	casado	Veganzones	13/08/36	
47	HERRERO LÓPEZ	Ubaldo	22	Sauquillo de Cabezas	Sauquillo de C.	industrial	soltero	Cabezuela	13/08/36	
48	LOBO YUBERO	Pío	53	Garganta de M. (M)	Cabezuela	albañil		Cabezuela	13/08/36	
49	LUCAS GUEDÁN	Elías de	46	Sebúlcor	Sebúlcor	labrador	casado	Veganzones	13/08/36	izquierdas
50	MARTÍN CALVO	Santiago	29	Fuenterrebollo	Fuenterrebollo	resinero	casado	Veganzones	13/08/36	UGT
51	PASTOR BAEZA	Agustín	31	Fuenterrebollo	Fuenterrebollo	hortelano	soltero	Veganzones	13/08/36	UGT
52	SANZ HERRERO	Francisco	33	Sauquillo de Cabezas	Sauquillo de C.	carnicero	casado	Cabezuela	13/08/36	republicano
53	VELA SANTOS	Marcos	46	Navas de Oro	Navas de Oro	alguacil	casado	Pascuales	13/08/36	
54	VILLA RUBIO	Eufemio de la	40	Navas de Oro	Navas de Oro	panadero	casado	Pascuales	13/08/36	izquierdas
55	ZARRACÍN GARCÍA	Basilisa	28	Navas de Oro	Navas de Oro	sus labores	casada	Pascuales	13/08/36	UGT
56	CANO ALEMÁN	Dionisio	29	Madrid	Linares del Arroyo	industrial	casado	Linares del Arroyo	14/08/36	
57	CEREZO	Segundo			Linares del Arroyo	obrero	casado	Linares del Arroyo	14/08/36	
58	DESCONOCIDO	Carmen			Linares del Arroyo	sus labores	casado	Linares del Arroyo	14/08/36	
59	GIL ANTÓN	Manuel	20	Linares del Arroyo	Linares del Arroyo	obrero	soltero	Linares del Arroyo	14/08/36	
60	MARTÍN ENCINAS	Alejandro	25	Linares del Arroyo	Linares del Arroyo	herrero	casado	Linares del Arroyo	14/08/36	
61	MORAL CRISTOBAL	Telesforo	44	Linares del Arroyo	Linares del Arroyo	obrero	soltero	Linares del Arroyo	14/08/36	
62	PASCUAL GALINDO	Pascual	31	La Lastrilla	Segovia	carpintero	casado	Segovia	14/08/36	UGT/PSOE
63	PEÑAS DEL VAL	Bonifacio	42	Linares del Arroyo	Linares del Arroyo	panadero	casado	Linares del Arroyo	14/08/36	
64	RAMOS ANTÓN	Faustino	33	Linares del Arroyo	Linares del Arroyo	labrador	casado	Linares del Arroyo	14/08/36	
65	ROMANO SACRISTÁN	Juan	34	Turégano	Segovia	guarda jurado	casado	La Lastrilla	14/08/36	izquierdas
66	SAN FRUTOS DE DIEGO	Anselmo	27	Segovia	Segovia	obrero Klein	casado	Segovia	14/08/36	UGT
67	Sin IDENTIFICAR				Segovia?			Tejadilla	14/08/36	
68	ÁLVARO LOBO	Nicolás	24	Sepúlveda	Segovia	cerámico	soltero	Segovia	15/08/36	PCE
69	ÁLVARO MATEOS	Mariano	49		Duruelo	médico	casado	Segovia	15/08/36	
70	ARRANZ MARINAS	Alejandro	23	Segovia	Segovia	panadero	soltero	Segovia	15/08/36	UGT/JSU
71	BARBA DE PABLOS	Mariano	53	Sangarcía	Segovia	jornalero	viudo	Puente Oñez (Anaya)	15/08/36	
72	CARRASCO LINARES	Teófilo		Granada	Valverde Majano	molinero		Segovia	15/08/36	UGT
73	FÚSTER GARCÍA	Julio	44	Segovia	Toledo	maestro	casado	Segovia	15/08/36	UGT/PSOE
74	GARCÍA MARTÍN	Constantino	58	La Lastrilla	Duruelo	maestro	casado	Segovia	15/08/36	Izqda. Soc.
75	GÓMEZ FERNÁNDEZ	Manuel	43	Segovia	Segovia	cartero	casado	Segovia	15/08/36	UGT
76	GUANTES HERRERO	Atilano-Félix	30	Castronuño (VA)	Segovia	ferroviario		Segovia	15/08/36	UGT/JSU
77	HERNÁNDEZ VÁZQUEZ	José	43	Nieva	Nieva	carretero	casado	Nava de la Asunción	15/08/36	U.R.
78	NATALÍAS GARCÍA	Pedro	45	Barcelona	Segovia	maestro	casado	Segovia	15/08/36	UGT
79	PEÑA HUERTA	José	36	Pelayos del Arroyo	Segovia	fun. Municipal	casado	Segovia	15/08/36	PSOE
80	SAN FRUTOS ANCEJA	Santos	38	Bernardos	Segovia	maqu. O.P.	casado	Segovia	15/08/36	izquierdas
81	SERRANO GONZÁLEZ	Manuel	18	Francia	Segovia	estudiante	soltero	Segovia	15/08/36	JSU
82	SERRANO GONZÁLEZ	Jesús	20	Segovia	Segovia	fontanero	soltero	Segovia	15/08/36	JSU

RELACIÓN DE EJECUTADOS SIN PROCESO

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	ED	NATURALEZA	DOMICILIO	PROFESIÓN	ESTADO	LUGAR DE EJECUCIÓN	FECHA	FIL. POLIT.
83	TOMÉ VILLOSLADA	Mario	41	Zamarramala	Segovia	obrero	soltero	Puente Oñez (Anaya)	15/08/36	UGT
84	GARCÍA MARUGÁN	Maximino	40	Nava de la Asunción	Nava Asunción	cerámico	casado	Puente Oñez (Anaya)	16/08/36	
85	Sin IDENTIFICAR							Puente Oñez (Anaya)	18/08/36	
86	BLANCO ARRIBAS	Venancio	25	Valdevacas-El Guijar	Casla	sec. Ayto.	soltero	Sto. Tomé Puerto	19/08/36	
87	BLANCO ARRIBAS	Rufino	39	Valdevacas-El Guijar	Sto. Tomé Puerto	sec. Ayto.	casado	Sto. Tomé Puerto	19/08/36	
88	DÍEZ VITÓN	Ciriaco	35	Cerezo de Arriba	Cerezo de Arriba	obrero O.P.	casado	Sto. Tomé Puerto	19/08/36	
89	DOMINGO BENITO	Felipe	26	Fuentenebro (BU)	Cerezo de Abajo		soltero	Riaza	19/08/36	
90	GARCÍA PÉREZ	Bonifacio	63	Cerezo de Arriba	Cerezo de Arriba	carnicero	viudo	Sto. Tomé Puerto	19/08/36	
91	GÓMEZ CORNEJO	Juan Manuel	33	Nerva (Huelva)	Sepúlveda	empl.Telgrfs.	casado	Frandosvínéz (Burgos)	19/08/36	
92	GONZÁLEZ GIL	Julio	41	Navas de Oro	Villacastín	maestro	casado	Villacastín	19/08/36	
93	MIGUEL MORAL	Lucio de	41	San Ildefonso	Valsaín	jornalero	casado	Valsaín	19/08/36	
94	SERNA LOBATO	Francisco	30	Segovia	Segovia	taxista	casado	Segovia	19/08/36	
95	FERNÁNDEZ GONZÁLEZ	Lorenzo	46	Navares las Cuevas	Collado Hermoso	maestro	casado	Torrecaballeros	20/08/36	izquierdas
96	GUTIÉRREZ SASTRE	José	40	Segovia	Segovia	oficial Correos	casado	Torrecaballeros	20/08/36	
97	ALBARRÁN MORENO	Antonino	56	Aranda de Duero	Sepúlveda	industrial	casado	Castillejo de Mesleón	21/08/36	U.R.
98	ANTÓN MORATA	Pedro	40	Sepúlveda	Sepúlveda	carpintero	casado	Castillejo de Mesleón	21/08/36	UGT
99	APARICIO DE ANDRÉS	Julián	36	Otero de Herreros	San Rafael	guarda	casado	San Rafael	21/08/36	izquierdas
100	ESTEBAN MANSILLA	Luciano	56	Sepúlveda	Sepúlveda	jornalero		Castillejo de Mesleón	21/08/36	UGT
101	GARCÍA GARRIDO	Pedro	38	Basardilla	Estación Espinar	ferroviario	casado	Navas de San Antonio	21/08/36	
102	GÓMEZ MARIA	Hipólito	28	El Espinar	El Espinar		casado	Navas de San Antonio	21/08/36	
103	PRIETO ALONSO	Angel	68	Astorga (León)	Sepúlveda	maestro	viudo	Castillejo de Mesleón	21/08/36	I.R.
104	SANZ VELASCO	Fermín	44	Sepúlveda	Sepúlveda	militar retirado	casado	Castillejo de Mesleón	21/08/36	I.R.
105	SEBASTIÁN GÓMEZ	Lorenzo	17	El Espinar	Estación Espinar		soltero	Navas de San Antonio	21/08/36	
106	ESCANCIANO MATUTE	Cesáreo	50	El Espinar	Estación Espinar	obrero		Navas de San Antonio	22/08/36	UGT
107	HERNANDO NÚÑEZ	Juan	57	Ayllón	Ayllón	labrador	viudo	Ayllón	22/08/36	
108	SAN MATEO SEGOVIA	Pedro	26	El Espinar	El Espinar	ferroviario	casado	El Espinar	22/08/36	I.R.
109	POZO DE LAS HERAS	Narciso del	41	El Espinar	El Espinar	jornalero	casado	El Espinar	23/08/36	izquierdas
110	CASADO CASADO	Paulino	51	Consuegra	Consuegra	jornalero	soltero		24/08/36	
111	IZQUIERDO LÓPEZ	Anastasio	32	Segovia	ambulante	jornalero	soltero		24/08/36	
112	BERZAL GARCÍA	José	50	La Velilla	Aldealengua de P.	molinero	casado	Navafría	25/08/36	no afiliado
113	GILA ALONSO	Andrés			Vegas de Matute	obrero			25/08/36	izquierdas
114	AGUILAR ROLDÁN	José	34	Granada	Madrid	tallista		Puente Oñez (Anaya)?	27/08/36	
115	CASTELLÓ CASTELLÓ	Enrique	23	Madrid	Madrid	dependiente		Puente Oñez (Anaya)?	27/08/36	
116	FALLA SILVESTRE	Juan de la	60	El Espinar	El Espinar		casado	Navas de San Antonio	27/08/36	
117	HERAS MARTÍN	Secundino de	46	El Escorial	El Espinar	jornalero	casado	Navas de San Antonio	27/08/36	Rad. Soc.
118	HERAS MARTÍN	Andrés de las	33	El Escorial	El Espinar		casado	Navas de San Antonio	27/08/36	
119	MARCO ELORRIAGA	Juan	49	Zamora	Segovia	delegado de Trabajo		Puente Oñez (Anaya)?	27/08/36	republicano
120	OLMOS	Martín	40?		El Espinar	ganadero	casado	Navas de San Antonio	27/08/36	
121	PIZARRO CINÉ	José	30	Madrid	Madrid	tipógrafo		Puente Oñez (Anaya)?	27/08/36	
122	GÓMEZ ESTÉVEZ	Claudio	40	Labajos	Labajos	industrial	casado	Valladolid	28/08/36	UGT
123	SANZ RUBIO	Gregorio	45	Arcones	Arcones	pastor	casado	Torrecaballeros	28/08/36	CdP

RELACIÓN DE EJECUTADOS SIN PROCESO

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	ED	NATURALEZA	DOMICILIO	PROFESIÓN	ESTADO	LUGAR DE EJECUCIÓN	FECHA	FIL. POLIT.
124	LUCAS MARTÍN	Pedro de	40	Matabuena	Gallegos	albañil	casado		30/08/36	
125	MATEO ESCRIBANO	Desiderio	32	Cuéllar	Ayllón		casado	Ayllón	30/08/36	
126	MIGUEL PÉREZ	Atanasio	44	Fuentespina (BU)	Bernardos	pract. farm.	casado	Puente Oñez (Anaya)	30/08/36	
127	SANCHO LÓPEZ	Francisco	28	Gallegos	Navafria	labrador	casado	Navafria	30/08/36	
128	SANTÍSIMA TRINIDAD LUCAS	Tomás de la	33	Logroño	San Ildefonso	obrero	casado	San Ildefonso	30/08/36	UGT
129	APARICIO GONZÁLEZ	Arturo	59	Bercial	Espirdo	médico	casado	Puente Oñez (Anaya)	31/08/36	I.R.
130	BENITO GARCÍA	Carlos	32	Matabuena	Matabuena	albañil	soltero	Navafria	31/08/36	
131	ESTEBAN ÁLVARO	Gregorio			Segovia			Puente Oñez (Anaya)	31/08/36	
132	FERNÁNDEZ CARABALLO	Heliodoro G.	42	Villaconejos (M)	Carbonero el Mayor	sec. Ayto	casado	Puente Oñez (Anaya)	31/08/36	UGT
133	FRUTOS GILA	José de	35	Fuentemilanos	Fuentemilanos	labrador	casado	Puente Oñez (Anaya)	31/08/36	PSOE
134	GONZÁLEZ HERRERO	Manuel	35	Fuentepelayo	Segovia	fontanero	casado	Puente Oñez (Anaya)	31/08/36	UGT
135	GRACIA MORALES	Angel	42	Becerril de la S. (M)	Segovia	maestro	casado	Puente Oñez (Anaya)	31/08/36	UGT/IR
136	HERNÁNDEZ PRIETO	Raimundo	41	Valdeprados	San Rafael	jornalero	casado	El Espinar	31/08/36	izquierdas
137	HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ	Agustín	59	V. Del Campo (CC)	Segovia	Tte.G.Civ. r.	casado	Puente Oñez (Anaya)	31/08/36	I.R.
138	HERNANZ BENITO	Antonio	25	La Matilla	Segovia	camarero	soltero	Puente Oñez (Anaya)	31/08/36	UGT
139	PÉREZ MARTÍN	Juan C.	36	San Ildefonso	San Ildefonso		casado	San Ildefonso	31/08/36	
140	PRIETO GILA	Matías	30	Vegas de Matute	San Rafael	jornalero	casado	El Espinar	31/08/36	UGT/PSOE
141	Sin IDENTIFICAR		45					Torrecaballeros	31/08/36	
142	Sin IDENTIFICAR		45					Torrecaballeros	31/08/36	
143	DIOS ORTEGA	Clemente de	50	Olombrada	Adrados	maestro	casado	Chañe	01/09/36	UGT
144	ROJO GARCÍA	Zacarías	42	Olombrada	Olombrada	labrador	casado	Chañe	01/09/36	
145	SAEZ BARTOLOMÉ	José María	47	Madrid	San Ildefonso	ferroviario	casado	San Ildefonso	02/09/36	PCE
146	SASTRE POSTIGO	Carlos	32	San Ildefonso	San Ildefonso	obrero	casado		02/09/36	
147	SANZ SAEZ	Víctor	18	Valsaín	Valsaín	jornalero	soltero	Valsaín	04/09/36	JSU
148	GUTIÉRREZ MARTÍNEZ	José	23	Arcones	Valdevacas-El Guijar	veterinario	soltero	Puerto de Navafria	05/09/36	derechas
149	NOGALES ASTUDILLO	Andrés	30	Santander	San Ildefonso	obrero	casado	San Ildefonso	05/09/36	
150	MARTÍN MARTÍN	Claudio	35	San Ildefonso	San Ildefonso		casado	San Ildefonso	06/09/36	UGT
151	SANTOS FERNÁNDEZ	Juan de	48	Lastras de Cuéllar	Castrojimeno	maestro	soltero	Espirdo	06/09/36	
152	AZUARA GARCÍA	Francisco			Riaza		soltero	Carretera de Aranda	08/09/36	
153	CAMPOS SANZ	Pedro	26	Riaza	Riaza	sastre		Carretera de Aranda	08/09/36	
154	CERRINEGRO CEREZO	Julián	27	Riaza	Riaza			Carretera de Aranda	08/09/36	
155	DIOS CANTALEJO	Juan de	61	Olombrada	Cuéllar	propietario	soltero	Laguna de Duero	08/09/36	
156	FLOR GÓMEZ	Ángela de la	49	Mudrián	Cuéllar	resinera	casada	Laguna de Duero	08/09/36	UGT
157	GIL GUIJARRO	Genaro	32	Riaza	Riaza	zapatero	casado	Carretera de Aranda	08/09/36	
158	GÓMEZ ALONSO	Angelita		Cuéllar	Cuéllar	sus labores	casada	Laguna de Duero	08/09/36	UGT
159	GUTIÉRREZ ARRIBAS	Fernando			Riaza	jornalero	soltero	Carretera de Aranda	08/09/36	
160	LICERAS GUTIÉRREZ	Francisco	27	Riaza	Riaza	panadero	soltero	Carretera de Aranda	08/09/36	apolítico
161	LUCAS GARCÍA	Felipe de	41	Matabuena	Madrid		casado	Navafria	08/09/36	
162	QUEVEDO PASCUAL	José	41		Cuéllar		casado	Laguna de Duero	08/09/36	PSOE
163	SENOVILLA MUÑOZ	Isidoro	42		Cuéllar	encargado	casado	Laguna de Duero	08/09/36	PSOE
164	ARCONES BAEZA	Antonio	49	Navafria	Valsaín	obrero	casado	Valsaín	09/09/36	PSOE

RELACIÓN DE EJECUTADOS SIN PROCESO

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	ED	NATURALEZA	DOMICILIO	PROFESIÓN	ESTADO	LUGAR DE EJECUCIÓN	FECHA	FIL. POLIT.
165	MARTÍN VELASCO	Teófilo			San Ildefonso	guarda			10/09/36	
166	Sin IDENTIFICAR							Puente Oñez (Anaya)	15/09/36	
167	GOYA DEL POZO	Felipe de J.	51	San Ildefonso	San Ildefonso	herrador	casado	Valsain	16/09/36	
168	PASCUAL SACRISTÁN	Desiderio	22	Cuéllar	Cuéllar	jornalero	casado	Valledado	16/09/36	
169	GARCÍA HERRERO	Matías	44	El Cubillo	Valsain	obrero	casado	Valsain	19/09/36	UGT
170	CASLA (CASADO) HERRERO	Félix	24	Villafranca del C.	V. del Condado	labrador	soltero	Cabezuela	21/09/36	
171	FRANCISCO ASENJO	Benito	37	Villafranca	Villafranca	labrador	casado	Cabezuela	21/09/36	
172	GIL TESEDO	Teotino	54	Riaza	Bercimuel	médico	casado	Cabezuela	21/09/36	
173	MIGUEL MARTÍN	Marcos	37	Aldeonsancho	Villafranca	labrador	casado	Cabezuela	21/09/36	
174	BLANCO GARCÍA	Luis Isabelo	28	San Ildefonso	San Ildefonso		casado	San Ildefonso	09/10/36	
175	GIL CANTALEJO	Vicente	29	Olombrada	Navafria	maestro	casado	Puerto de Navafria	29/10/36	
176	MORENO BARROSO	Isidoro	50?	Navafria	Navafria	hachero	casado	Puerto de Navafria	29/10/36	
177	SÁNCHEZ Y DE LA MATA	Martín	34	Navafria	Navafria	jornalero	casado	Puerto de Navafria	29/10/36	
178	AYUSO GARCÍA	Luis	58	Navafria	Gallegos	maestro	casado		30/10/36	izquierdas
179	SANZ GONZÁLEZ	Dionisio	57	Navafria	Navafria	tabernero	casado	Navafria	12/06/37	
180	HOYOS SÁNCHEZ	Pedro	24	Badajoz		labrador		Zarzuela del Monte	25/08/38	
181	GIL MANSO	Luis	26	Matabuena	Matabuena	jornalero	soltero	Navafria	16/02/39	
182	GIL SANZ	Leandro	49	Matabuena	Matabuena	jornalero	viudo	Navafria	16/02/39	
183	VERDUGO PILAR	Félix	29	Cuéllar	Cuéllar	jornalero	casado	Cuéllar	--/08/36	
184	ALONSO ÁLVAREZ	Pedro	32	Revenga	San Ildefonso	jornalero	casado			
185	ALONSO ÁLVAREZ	Cipriano	55	Sebúlcor	Valsain	jornalero	casado	Valsain		no afiliado
186	ANTÓN RUBIO	Licinio	22		San Rafael	cantero	soltero			
187	CARRERA GARCÍA	Lucas	57	Madrona	Valsain	albañil	casado	San Ildefonso		no afiliado
188	CARRERA VEGA	Mariano	15	Valsain	Valsain	jornalero	soltero	San Ildefonso		no afiliado
189	FERNÁNDEZ GARCÍA	Sigeberto	28	Villacastín	Villacastín	sastre	casado	Villacastín		
190	FERNÁNDEZ PÉREZ	Jesús		San Ildefonso	San Ildefonso	albañil	soltero	San Ildefonso		UGT
191	FERNÁNDEZ PÉREZ	Saturnino	30	San Ildefonso	San Ildefonso	cocinero	soltero	San Ildefonso		UGT
192	GARCÍA CANTALEJO	Juana	55	Valsain	Valsain	sus labores		Valsain		izquierdas
193	GARCÍA GIL	Alejandro			Matabuena	sacristán		Cebollera (Somosierra)		CNT
194	GÓMEZ	Tomás			Villacastín	esquilador	casado	Villacastín		UGT
195	GÓMEZ NIETO	Laureano	15	San Ildefonso	San Ildefonso	jornalero	soltero	San Ildefonso		no afiliado
196	ISABEL VELASCO	León	51	Espirdo	Valsain	carretero	casado	Valsain		UGT
197	LLORENTE GARCÍA	Martín	27	Palazuelos	Palazuelos	obrero	soltero	San Ildefonso		
198	MACALLA CUELLO	Antonio	47	Cañaveras (CC)	Villacastín		casado			
199	MANSO MANSO	Matías		Carbonero el Mayor	Carbonero el Mayor		casado			UGT
200	MARINERO CRIADO	Benito		Samboal	Cuéllar	jornalero		Mudrián (Temeroso)		UGT
201	MARINERO CRIADO	Pablo	18	Samboal	Cuéllar	jornalero	soltero	Cuéllar		
202	MARTÍN VELÁZQUEZ	Manuel	14	Navas de Oro	Navas de Oro		soltero	Navas de Oro		
203	MARTÍNEZ GARCÍA	Carlos	42	San Ildefonso	Valsain	obrero	casado	San Ildefonso		UGT
204	MIGUEL VALVERDE	Juan de	73	La Losa	Valsain	obrero		San Ildefonso		UGT
205	MORENO GARCÍA	José	19	Navafria	Navafria	jornalero	soltero	Navafria		

RELACIÓN DE EJECUTADOS SIN PROCESO

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	ED	NATURALEZA	DOMICILIO	PROFESIÓN	ESTADO	LUGAR DE EJECUCIÓN	FECHA	FIL. POLIT.
206	MUÑOZ	Arcadio			Escarabajosa Cuéllar			Cuéllar		
207	PASCUAL GÓMEZ	Juan	58	Tres Casas	Sonsoto	labrador	viudo	Tres Casas		UGT
208	RANZ VÁZQUEZ	Bernabé		Aranjuez (Madrid)	Montuenga	maestro	casado	Rapariegos		I.R.
209	RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ	Lucas	19	San Ildefonso	Valsaín			San Ildefonso		
210	SANZ GARCÍA	Valentín	54	San Ildefonso	Valsaín	guarda	casado	San Ildefonso		UGT
211	SUÁREZ	Mariano			Cuéllar		soltero	Cuéllar		
212	GONZÁLEZ MATABUENA	Juan		Valsaín	Valsaín	obrero	casado	Valsaín		
213	GARCÍA GARCÍA	Vicente			San Ildefonso	electricista	casado	San Ildefonso		

Nº 8: RELACIÓN DE FUSILADOS POR SENTENCIA DE CONSEJO DE GUERRA

RELACIÓN DE FUSILADOS POR SENTENCIA DE CONSEJO DE GUERRA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	ED	NATURALEZA	DOMICILIO	PROFESIÓN	ESTADO	FECHA	FUSILAMIENTO	FIL. POL.
1	MOYA ALZAA	Raúl	50	Burgos	Madrid	cmte. Art.	casado	24/07/36	Robregordo (M)	
2	MORENO GARCÍA	Felipe		Segovia	Madrid	cap. Art.	casado	26/07/36	Cerezo de Abajo	
3	GARCÍA MARTÍN	Simeón	19	S. Martín de la V.(M)	Madrid	jornalero	soltero	02/08/36	Segovia	
4	GARCÍA MULLAR	Manuel	24	Madrid	Madrid	mecanógrafo	soltero	02/08/36	Segovia	
5	LÓPEZ JIMENO	José	34	Segovia	Madrid	impresor	casado	02/08/36	Segovia	
6	MARTÍN BARRIOS	Domingo	18	Madrid	Madrid	ebanista	soltero	02/08/36	Segovia	
7	FERNÁNDEZ CORDERO	Luis	37	Vallecas Madrid	San Ildefonso	empleado	soltero	15/08/36	San Ildefonso	
8	TRILLO MATILLA	Joaquín	56	Madrid	San Ildefonso	médico	casado	15/08/36	San Ildefonso	I.R.
9	ABEIGA GARCÍA	Antonio	36	Boceguillas	Valencia	sargento	soltero	22/08/36	Segovia	
10	FERRER ALBIOT	Vicente	31	Calascito (Teruel)	Madrid	sargento	soltero	22/08/36	Segovia	
11	PIZARRO GONZÁLEZ	Francisco	39	Córdoba	Madrid	tromp. G. Civil	soltero	22/08/36	Segovia	
12	SÁNCHEZ CABEZUDO BARRENO	Ernesto	18	Madrid	Madrid	milc/fontanero	soltero	22/08/36	Segovia	
13	MARTÍNEZ LÓPEZ-OCAÑA	Daniel	27	Madrid	San Ildefonso	odontólogo	soltero	25/08/36	San Ildefonso	
14	MARTÍNEZ LÓPEZ-OCAÑA	Wilfredo	24	Madrid	San Ildefonso	médico	soltero	25/08/36	San Ildefonso	
15	FRUTOS GARCÍA	Ciriaco	40	El Escorial	La Losa	ferroviario		03/09/36	Segovia	
16	FERNÁNDEZ CUBO	Valentín		Villaleza del Agua (ZA)	Segovia	artillero 2º		04/09/36	Segovia	
17	CASTRO PÉREZ DE	Julio de	36	El Espinar	El Espinar	jornalero	casado	06/09/36	Segovia	CNT
18	GARCÍA HERRERA	Carlos	18	Puertollano (CR)	Madrid	peluquero		06/09/36	Segovia	
19	GARCÍA MATEOS	Pedro	39	El Espinar	El Espinar	jornalero	casado	06/09/36	Segovia	
20	GARCÍA SACRISTÁN	Julián	28	El Espinar	El Espinar	jornalero		06/09/36	Segovia	
21	OLALLA CÁMARA	Sixto	40	El Espinar	El Espinar	jornalero		06/09/36	Segovia	
22	PÉREZ DORREGO	Hilario	30	El Espinar	El Espinar	jornalero		06/09/36	Segovia	
23	DOMÍNGUEZ PÉREZ	Anastasio	31	Labajos	Labajos	labrador	soltero	14/09/36	Valladolid	socialista
24	GARCÍA MARTÍN	Juan	50	Labajos	Labajos	jornalero	casado	14/09/36	Valladolid	socialista
25	GONZÁLEZ MAYORAL	Francisco	29	Labajos	Madrid	sargento inf.	soltero	14/09/36	Valladolid	
26	MERINERO ARÉVALO	Félix	47	Labajos	Labajos	jornalero	soltero	14/09/36	Valladolid	socialista
27	VALDERRIBERAS CARRERAS	Teodomiro	27	Labajos	Labajos	jornalero	casado	14/09/36	Valladolid	socialista
28	ALEJANDRO GIL	Emilio	19	San Ildefonso	San Ildefonso	jornalero	soltero	20/09/36	San Ildefonso	
29	ÁLVARO YUBERO	Pedro	28	S. Ildefonso	San Ildefonso	gabarrero		20/09/36	San Ildefonso	
30	GRANDE GÓMEZ	Antonio	21	S. Ildefonso	San Ildefonso	jornalero	soltero	20/09/36	San Ildefonso	
31	LÓPEZ BLANCO	Manuel	27	Córdoba	La Pradera	no consta	casado	20/09/36	San Ildefonso	
32	LUCAS MAROTO	Daniel de	22	San Ildefonso	San Ildefonso	jornalero	soltero	20/09/36	San Ildefonso	
33	MARCOS HUERTAS	Eulogio	47	Cuéllar	San Ildefonso	no consta	casado	20/09/36	San Ildefonso	UGT
34	GÓMEZ SANZ	Eustaquio	31	El Espinar	El Espinar	sastre		25/09/36	Segovia	
35	LIBRÁN RIESGO	Antonio	41	Madrid	San Rafael	jornalero		25/09/36	Segovia	
36	GARCÍA VICENTE	Ricardo	38	Aldealuenga de P.	El Espinar	albañil	casado	07/10/36	Segovia	
37	PÉREZ HERNÁNDEZ DE LEÓN	Francisco	19	Madrid	Madrid	dpte. Sastre	soltero	07/10/36	Segovia	
38	ARIAS RODRÍGUEZ	Pedro	19	León	Valladolid	soldado		04/12/36	Segovia	
39	MERINO HERRERO	Patrocinio	41	S. M.del Castañar (SA)	Segovia	jornalero		04/12/36	Segovia	
40	SANTA MARÍA CÁMARA	Miguel	25	Madrid	El Espinar	dorador		04/12/36	Segovia	
41	SANTA MARÍA CÁMARA	Francisco	23	Madrid	El Espinar	peletero		04/12/36	Segovia	
42	CHACÓN DE LA MATA	Adolfo	44	Estepona	Segovia	gob. civ.	casado	05/12/36	Valladolid	U.R.

RELACIÓN DE FUSILADOS POR SENTENCIA DE CONSEJO DE GUERRA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	ED	NATURALEZA	DOMICILIO	PROFESIÓN	ESTADO	FECHA	FUSILAMIENTO	FIL. POL.
43	GRANDE GÓMEZ	Lorenzo	28	San Ildefonso	San Ildefonso	jornalero	soltero	06/12/36	San Ildefonso	comunista
44	LA CRUZ MARTÍN	Macario de	27	San Ildefonso	San Ildefonso	jornalero	casado	06/12/36	San Ildefonso	UGT
45	MARTÍN MARTÍN	Antonio	44	San Ildefonso	San Ildefonso	jornalero	casado	06/12/36	San Ildefonso	
46	PARREA SOLER	Fernando	20	San Ildefonso	San Ildefonso	jornalero	soltero	06/12/36	San Ildefonso	
47	PUENTE RUIZ	Gregorio	58	San Ildefonso	San Ildefonso	jornalero	casado	06/12/36	San Ildefonso	
48	SERRANO MATESANZ	Eugenio	28	San Ildefonso	San Ildefonso	jornalero	casado	06/12/36	San Ildefonso	
49	APARICIO MARTÍN	Francisco	55	San Ildefonso	Valsaín	jornalero	casado	12/12/36	San Ildefonso	UGT
50	GARCÍA GÓMEZ	Esteban	43	La Cuesta	Segovia	brigada	casado	10/03/37	Segovia	
51	GONZÁLEZ GÓMEZ	Alejandro	31		Segovia	dibujante		10/03/37	Talavera	PCE
52	FORMIGO ESTEVEZ	Benito	23	Beade (Orense)	Segovia	cabo		17/04/37	Segovia	
53	APARICIO DíEZ	Lorenzo	32	Sotillo de/la Adrada-AV	Guadarrama	resinero		23/04/37	Segovia	
54	BARRENO GARCÍA	Demetrio	39	El Espinar	El Espinar	jornalero	casado	23/04/37	Segovia	
55	BARRENO LLORENTE	Basilio	25	Guadarrama	San Rafael	jornalero	soltero	23/04/37	Segovia	
56	BARTOLOMÉ CÁMARA	Benigno	19	El Espinar	El Espinar	albañil	soltero	23/04/37	Segovia	UGT
57	CABRERO PLAZA	Aurelio	32	Alcolea de C. (CR)	Tablada	jornalero		23/04/37	Segovia	
58	CUESTA GARCÍA	Mariano	27	Olombrada	Olombrada	jornalero		23/04/37	Segovia	
59	DUEÑAS FIGUEREDO	Paulino	44	Navas de San Antonio	El Espinar	industrial		23/04/37	Segovia	comunista
60	ESCUDERO MIGUEL	Raimundo	40	Villacastín	San Rafael	guarda		23/04/37	Segovia	I.R.
61	FALLA SANZ DE LA	Francisco	27	El Espinar	El Espinar	jornalero		23/04/37	Segovia	
62	FALLA SANZ DE LA	Enrique	39	El Espinar	El Espinar	jornalero	casado	23/04/37	Segovia	
63	GARCÍA DE LAS HERAS	Eusebio	20	Guadarrama	Guadarrama	jornalero		23/04/37	Segovia	
64	GARCÍA GARCÍA	Federico	63	El Espinar	El Espinar	jornalero		23/04/37	Segovia	CNT
65	GARCÍA OÑORO	Marcelino	31	El Espinar	El Espinar	jornalero		23/04/37	Segovia	CNT
66	GARCÍA OÑORO	Bernardo	29	El Espinar	El Espinar	jornalero		23/04/37	Segovia	
67	GONZÁLEZ DABACA (BALACA)	Ramiro	28	León	Leganés (Madrid)	chófer	soltero	23/04/37	Segovia	
68	GONZÁLEZ GARCÍA	Celedonio	49	Segovia	El Espinar	jornalero		23/04/37	Segovia	
69	GONZÁLEZ GONZÁLEZ	Manuel	26	Cándamo (Asturias)	San Rafael	jornalero		23/04/37	Segovia	
70	GONZÁLEZ RUBIO	Victorio	24	Ingrecilla (Toledo)	Ingrecilla (Toledo)	jornalero		23/04/37	Segovia	
71	HERAS DELGADO	Isabelo	24	Cidones (Soria)	Tablada	jornalero		23/04/37	Segovia	
72	JIMÉNEZ MARUGÁN	Valentín	25	Maello (Ávila)	San Rafael	jornalero		23/04/37	Segovia	
73	LÓPEZ PÉREZ	Alfonso	29	Madrid	San Rafael	industrial		23/04/37	Segovia	
74	LOZOYA OLMOS	Jose	44	Sotosalbos	El Espinar	jornalero		23/04/37	Segovia	
75	LUENGO DE FRUTOS	Francisco	21	San Rafael	San Rafael	vaquero	soltero	23/04/37	Segovia	
76	MARÍA VARA	Claudio	35	El Espinar	El Espinar	jornalero		23/04/37	Segovia	
77	MARTÍN RAMOS	Gonzalo	46	Nava de la Asunción	El Espinar	carpintero		23/04/37	Segovia	U.R.
78	MARTÍN SALIDO	Rafael	18	San Rafael	San Rafael	carpintero		23/04/37	Segovia	
79	PALOMERO GARCÍA	Francisco	25	El Espinar	San Rafael	jornalero		23/04/37	Segovia	
80	PAREDES SANTÍN	Domingo	19	C. de Valcárcel (León)	Castañeda de V. (LE)	jornalero		23/04/37	Segovia	
81	RODRIGUEZ ESCANCIANO	Raimundo	22	El Espinar	El Espinar	jornalero		23/04/37	Segovia	
82	RODRIGUEZ GARCÍA	Dionisio	30	Navafria	San Rafael	jornalero	casado	23/04/37	Segovia	
83	SAN MATEO SEGOVIA	Marcelino	23	El Espinar	San Rafael	jornalero	soltero	23/04/37	Segovia	
84	SANTIAGO GONZÁLEZ	Angel Antonic	23	Santander	Santander	peón	soltero	23/04/37	Segovia	

RELACIÓN DE FUSILADOS POR SENTENCIA DE CONSEJO DE GUERRA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	ED	NATURALEZA	DOMICILIO	PROFESIÓN	ESTADO	FECHA	FUSILAMIENTO	FIL. POL.
85	CÁMARA GONZÁLEZ	Ignacio	27	Bernardos	Bernardos	albañil	casado	07/05/37	Segovia	
86	CASAS MATEO	Gerardo	25	Bernardos	Bernardos	jornalero		07/05/37	Segovia	
87	CASAS POSTIGO	Clemente	49	Bernardos	Bernardos	industrial	casado	07/05/37	Segovia	
88	CASAS RAMOS	Mariano	26	Bernardos	Bernardos	jornalero	casado	07/05/37	Segovia	
89	CORRAL SANCHE	Saturnino	25	Cuéllar	Cuéllar	jornalero		07/05/37	Segovia	
90	ESCOLAR NAVARRO	Mateo	27	Bernardos	Bernardos	sastre		07/05/37	Segovia	
91	FRANCISCO SILVA	Antonio	29	La Cañiza (PO)	San Martín (PO)	jornalero	casado	07/05/37	Segovia	
92	GOZALO GÓMEZ	Estanislao	26	Bernardos	Bernardos	tejedor		07/05/37	Segovia	
93	MIGUEL CASADO	Mario	36	Bernardos	Bernardos	jornalero		07/05/37	Segovia	
94	SÁNCHEZ APARICIO	Isidro	32	Bernardos	Bernardos	jornalero	casado	07/05/37	Segovia	
95	SÁNCHEZ GÓMEZ	Gerardo	24	Bernardos	Bernardos	jornalero		07/05/37	Segovia	
96	SANTA CRUZ REVUELTA	Hilario	31	Sotillo del Rincón (SO)	Navas de Oro	jornalero	casado	07/05/37	Segovia	
97	SIERRA IGLESIAS	Manuel	39	Oviedo	Bernardos	relojero	casado	07/05/37	Segovia	
98	VALCARCEL LÓPEZ	Dositeo	26	Noceda de Traijero (LU)	Bernardos	jornalero	soltero	07/05/37	Segovia	
99	FRIAS SANZ	Valeriano	32	Coca	Coca	jornalero	casado	25/05/37	Segovia	UGT
100	FRIAS SANZ	Luis	35	Coca	Coca	guarda jurado	casado	25/05/37	Segovia	UGT
101	GARCÍA LAGUNA	Cándido	19	Coca	Coca	resinero		25/05/37	Segovia	
102	PALOMARES RODRIGUEZ	Rufino	20	Coca	Coca	resinero		25/05/37	Segovia	
103	RUBIO JIMÉNEZ	Anselmo	27	Coca	Coca	resinero	soltero	25/05/37	Segovia	
104	SANZ GONZÁLEZ	Eduardo	35	Coca	Coca	carpintero	casado	25/05/37	Segovia	
105	MAESTRO GARCÍA	Quintín	39	Nava de la Asunción	Nava de la Asunción	labrador	casado	04/06/37	Segovia	I.R.
106	SERRANO PIQUERO	Ciriaco	37	Nava de la Asunción	Nava de la Asunción	hortelano	casado	04/06/37	Segovia	
107	VILLAGRÁN DE SANTOS	Leocadio	39	Nava de la Asunción	Nava de la Asunción	jornalero	casado	04/06/37	Segovia	
108	GÓMEZ MUÑOZ	Lucas	20	Navalmanzano	Segovia	camarero		12/06/37	Segovia	
109	CABEZAS GARRIDO	Tomás	25	Mucientes (Valladolid)		cantero/sol.		05/07/37	San Ildefonso	
110	MARTÍN SANTOS	Evaristo	34	Segovia	El Espinar	albañil	casado	08/10/37	Segovia	
111	DOMÍNGUEZ MARTÍN	Hermenegildo	25	Rebollo	El Espinar	maestro	soltero	29/11/37	Segovia	UGT
112	BRITO VARGAS	Antonio	25	Guía de Siora-Tenerife	Tenerife	industrial/sol.	casado	31/01/38	Segovia	
113	CARDONA QUINTERO	Lucas	25	Sta. Cruz de Tenerife	Tenerife	electricista/sol.		31/01/38	Segovia	
114	BERAUZQUIN BERECHATEGUI	Claudio	24	Ormazegui (Guipúzcoa)		conductor/sol.		06/03/38	El Espinar	
115	ALBERDI ALBERDI	Miguel	24	Azcoitia (Guipúzcoa)		herrero/sol.		07/03/38	El Espinar	
116	ISUSTIA MAÍZ	Fernando		Hernani		militar		11/05/38	Segovia	
117	CAÑIZARES AGUDO	Antonio	30	Málaga	Málaga	encuaderna.	soltero	11/07/38	Segovia	
118	PESO LORENZO	Petra del	49	Navaluenga (Avila)	Navaluenga (Avila)	labradora	viuda	11/07/38	Segovia	
119	PESO MUÑOZ	Pedro del	26	Navaluenga (Avila)	Navaluenga (Avila)	jornalero	soltero	11/07/38	Segovia	
120	TRIGO MELO	Francisco	18	Lora del Río (Sevilla)	Sevilla	alfarero	soltero	11/07/38	Segovia	
121	TRUJILLO ROMERO	Francisco	34	Rozas de Pto. Real (M)	Madrid	jornalero	soltero	11/07/38	Segovia	
122	CAVADA HOZ	Florentino	32	Laredo (Santander)		pescador/sol.		26/07/38	San Ildefonso	
123	GÓMEZ MOZO	José	25	Sestao (Vizcaya)		soldado		26/07/38	San Ildefonso	
124	GUTIERREZ LLANOS	Arcadio	24	Valle Cabuérniga (S)		soldado		26/07/38	San Ildefonso	
125	MADARIAGA ERDOIZA?	Juan	25	Bermeo (Vizcaya)		ajustador/sol.		26/07/38	San Ildefonso	
126	MASASA SAEZ	Fernando	24	Navarrete (Logroño)		barbero/sol.		26/07/38	San Ildefonso	

RELACIÓN DE FUSILADOS POR SENTENCIA DE CONSEJO DE GUERRA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	ED	NATURALEZA	DOMICILIO	PROFESIÓN	ESTADO	FECHA	FUSILAMIENTO	FIL. POL.
127	MÁXIMO CASO	Rafael	18	Prellezo (Santander)		soldado		26/07/38	San Ildefonso	
128	PICÓ MOLTÓ	Antonio	22	Alcoy (Alicante)		comerciante/		26/07/38	San Ildefonso	
129	SOMONTE RUIZ	José	19	Igollo Camargo (S)		soldado		26/07/38	San Ildefonso	
130	CASAS MATEO	Antonio	23	Bernardos	Bernardos	jornalero		08/09/38	Pamplona	
131	HERRERO CASADO	Francisco	20	Segovia	Segovia	camarero		08/09/38	Pamplona	
132	HERVÁS SALOMÉ	Francisco	29	Luená (Santander)	Segovia	jornalero		08/09/38	Pamplona	
133	DUQUE SERRANO	Tomás	35	Segovia	Segovia	hortelano	casado	22/11/38	Segovia	PCE
134	FUENTETAJA ARRANZ	Mariano	37	Navalmanzano	Segovia	ferroviario	casado	22/11/38	Segovia	PSOE
135	GARCÍA RODRÍGUEZ	Ángel	20	Granada	Madrid	dependiente	soltero	22/11/38	Segovia	
136	HERAS MARINAS	Jerónimo	36	Hontoria	Hontoria	jornalero	casado	22/11/38	Segovia	UGT
137	HERRERO VALDIVIESO	Francisco	32	Madrid	Segovia	comerciante	soltero	22/11/38	Segovia	PSOE
138	MARTÍN SASTRE	Andrés	25	Segovia	Segovia	carnicero	soltero	22/11/38	Segovia	JSU
139	RODRÍGUEZ GARCÍA	Mauro	49	Tabanera Cerrato (P)	Segovia	ferroviario	casado	22/11/38	Segovia	
140	YAGÜE MATESANZ	Francisco	38	Hontoria	Hontoria	lechero	casado	22/11/38	Segovia	
141	RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	Rufino	26	Cadalso Vidrios (M)	Segovia	albañil	soltero	26/11/38	Segovia	
142	ROMERO ARBEIZA	Antonio	26	Segovia	Segovia	empleado	casado	26/11/38	Segovia	PSOE
143	OTERO ALLAS	Antonio	47	Fuentemilanós	Segovia	militar	casado	29/11/38	Segovia	
144	ARRIBAS CALLEJO	Francisco	22	Madrid	Alcalá de Henares	conductor	soltero	17/07/39	Segovia	
145	HERNÁNDEZ CASADO	León	61	Almazán (Soria)	Almazán (Soria)	ferretero	casado	19/07/39	Segovia	
146	MARTÍN VÍRSEDA	Casto	45	Orejana	Chozas de la S.(M)	labrador	casado	10/11/39	Madrid	UGT
147	SANTAMARÍA DEL BRÍO	Antonio	37	Sevilla	Málaga			13/03/40	Cuéllar	
148	ALONSO BERMEJO	Ángel	22	Casla	Arcones	pastor	soltero	24/02/41	Segovia	
149	RUEDA CANO	Francisco	31	Vicálvaro (Madrid)	Rebollo	metalúrgico	casado	10/10/42	Segovia	
150	ANTORANZ GÓMEZ	Leandro		Sepúlveda	Buitrago (Madrid)		casado	1936?	Burgos	
151	ANTORANZ GÓMEZ	Rufino		Sepúlveda	Puentes Viejas (Madrid)		casado	1936?	Burgos	
152	GUILLÉN GUILLÉN	Pablo		Cuéllar	Palma del Condado (H)	Juez 1ª Ins.		1936?	Sevilla	
153	MARTÍN RUANO	Felipe		Fuenterrebollo		maestro		1936?	Valladolid	

**Nº 9: CENSO DE AFECTADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES
CIVILES**

RELACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CIVILES

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DOMICILIO	SANCIÓN EC	FECHA	DENUNCIA	ACUSACIÓN	INDULTO	SOBRES	OBSERVACION
1	ACEBES ACEBES	Pedro	labrador	Frumales	sin decl. resp	10-08-38		izqda/apoyo FP en elecc.			no pagada
2	ACOSTA VILLACORTA	Romualdo		Coca	todos	06-09-38	sentencia	condenado 30 años			no pagada
3	ALBARRÁN MORENO	Antonino		Sepúlveda	100 Pts						no pagada
4	ALFAYA LÓPEZ	Mª Concep.	prof. E.Norm.	Segovia	5.000 Pts	03-08-38	FET	pres. I.R. 1934/pro-presos			pagó/ tb resp. pol.
5	ALONSO ALONSO	Mariano		San Ildefonso	10.000 Pts	09-08-38		Afil/prop. izqda. en pueblo	19-06-59		
6	ALONSO ÁLVAREZ	Moisés	obrero	Madrid	no aparece en exp.		sentencia	condenado 30 años		20-06-43	art. 8 Ley 19 feb.
7	ALONSO SÁNCHEZ	Ángel	contratista	Segovia	1.000 Pts	11-08-38					pagada
8	ANAUD NIETO	Abundio	tte. Art.	Segovia	25.000 Pts	13-07-37		opuesto al movimiento	28-02-47		pagada
9	ANDRÉS ALLAS	Florentino	empl.Tfónica	Otero Herreros			J.m. Otero	socialista		29-04-44	
10	ANDRÉS GILSANZ	Segundo	médico	Segovia	1.000 Pts						pagada
11	ANDRÉS RUIZ	Matías		Navafria	3.000 Pts	26-02-39	sentencia			25-11-44	
12	ANTÓN BARBERO	Fernando		Vegas Matute			sentencia	condenado 20 años		23-03-44	
13	ANTÓN LÓPEZ	Julio		Cuéllar	20.000 Pts	11-08-38		I.R.	04-11-60		
14	ANTÓN MARTÍNEZ	Julio		Cuéllar							
15	ANTONA BARRIO	Cecilio		Madrid/Sebúl	10.000 Pts	10-08-38		com. lib/inst. cdp,casa suya		15-11-44	art. 8 Ley 19 feb.
16	ANTONIO DOMINGO	Bernardo de		Segovia	1.000 Pts	13-07-37		contrib. amb. rebeldía soc.			pagada
17	ARANDA BLANCO	José		Coca	todos	06-09-38	sentencia	condenado 30 años			
18	ARRANZ IZQUIERDO	Florián	labrador	Fuentesaúco	100 Pts	14-05-38		asistir acto Largo Caballero			
19	BARBERO CUBO	Hilario		Vegas Matute			sentencia	condenado 30 años		23-03-44	
20	BARBOLLA GONZÁLEZ	Mario	Ind./carnicero	Cuéllar	todos	13-06-37		PSOE/fund. CdP Cuéllar	23-09-59		
21	BARRENO GILA	Feliciano		Vegas Matute			sentencia	muerte/conm. 30 años		23-03-44	
22	BARRENO GONZÁLEZ	Estanislao		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	
23	BARRENO GONZÁLEZ	Rafael		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
24	BARRENO RODRÍGUEZ	Florencio		El Espinar	2.000 Pts	10-08-38		afiliado dest. Rad. Soc.	02-07-59		
25	BENAVIDES SHELLEY	Miguel de		Segovia	todos			I.R./gob. civ. Guadalajara	19-07-59		pagó 2000
26	BENITO AYUSO	Pedro		Navafria	3.000 Pts	26-02-39	sentencia			25-11-44	
27	BENITO MARTÍN	Isidro		Val. Montejo	todos	22-09-37		afiliado CNT /Soc. Rojo	19-06-59		condena 15 años
28	BENITO SÁNCHEZ	Prudencio de		Villacastín	1.000 Pts	26-02-39		ideol. Prop. FP manif. CdP	18-05-59		
29	BERMEJO ALONSO	Martín		Villacastín							
30	BERMEJO HERRERO	Rufino	industrial	Fuentepelayo	todos	16-06-37		I.R.hasta 18 julio 1936		06-07-44	sobres.tras rec.
31	BERZAL RUIZ	Francisco		Navafria	3.000 Pts	26-02-39	sentencia			25-11-44	
32	BLAS GOZALO	Rufino de	labrador	Fuentesaúco	500 Pts	10-09-38		Afil. UGT/asis. mitin Largo			pagada
33	BOLIVAR PIeltaIN	Cándido	Dtor.Gen.Sa	Madrid/S.Raf	todos	26-02-39		alto cargo con FP		28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
34	BURGOS ARRIBAS	Victoriano		Navafria	4.000 Pts	26-02-39	sentencia			25-11-44	
35	CABANAS PASCUAL	Felipe		Segovia							
36	CABRERO ARRANZ	Julián		Cuéllar							
37	CABRERO ORTEGA	Pablo	labrador?	Olombrada	5.000 Pts			I.R./Socorro Rojo	18-11-60		
38	CALLE ARAGÓN	Lucio de la		Samboal			sentencia			01-07-59	art. 8 Ley 19 feb.
39	CALLE FERNANDEZ	Gregorio de la		Samboal			sentencia			01-07-59	art. 8 Ley 19 feb.
40	CALLE MARTÍN	Fernando de la		Segovia	todos	21-05-37			05-04-46		
41	CALLE SÁNCHEZ/SANCHO	Telesforo		Escará. Cuéll	1.000 Pts	06-09-38		afiliado a UGT y prop.	12-06-59		
42	CAMPANO ALVARADO	Benjamín		Cozuelos	10.000 Pts			secretario CdP Cozuelos			no pagada
43	CANO MARTÍN	Tomás	ind./comercio	Cuéllar	todos	08-05-37		gestor Ayto/sec. I.R.			

RELACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CIVILES

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DOMICILIO	SANCIÓN EC	FECHA	DENUNCIA	ACUSACIÓN	INDULTO	SOBRES	OBSERVACION
44	CAÑAS RUIZ	Dimas		Bernardos	todos	09-08-39	sentencia				
45	CÁRDABA GONZÁLEZ	Francisco	labrador?	Cozuelos	500 Pts	11-08-38		UGT y simp. FP/ prop.	22-05-59		
46	CÁRDABA GONZÁLEZ	Teodoro	labrador?	Cozuelos	2.000 Pts	06-08-38		UGT y CdP, FP	12-06-59		no pagada
47	CARO CABRERO	Alberto	labrador	Labajos	1.000 Pts	26-02-39		CdP/camioneta mitin izqda.			tb. resp/pol 500 pts
48	CARRASCO LINARES	José	militar	Segovia	todos						
49	CARRIÓN MUÑOZ	Cástor		Coca	todos	06-09-38	sentencia	condenado 30 años			
50	CARSI ZANCARES	Francisco	fiscal	Segovia	1.000 Pts	17-07-37		no consta pert.part/cont.Soco.			pagada
51	CASADO DOMÍNGUEZ	Gil		Segovia	2.000 Pts			pres CdP Segovia/prop.	12-06-59		
52	CASADO VELASCO	Lorenzo		Nava Asunción	todos	02-09-38	sentencia	condenado 8 años	18-08-59	28-02-45	art. 8 Ley 19 feb.
53	CASAS POSTIGO	Clemente		Bernardos	todos	09-08-39	sentencia				
54	CASTRO GONZÁLEZ	Niceto		Bernardos	todos	09-08-39	sentencia				
55	CASTRO PÉREZ	Julio de		El Espinar	todos	07-09-38	sentencia	condenado a muerte		30/1/47	art. 8 Ley 19 feb.
56	CLARIDAD			Madrid	todos	09-09-38					
57	COLCHERO ARRIBARREN	Virgilio	cat. Ins 2ª	Segovia	todos	16-06-37		significado socialista	22-05-59		
58	COSTA GONZÁLEZ	Ángel	maestro	Fuentesoto	200 Pts	24-07-37		Trabajador Enseñanza			pagada
59	CRISTOBAL CASADO	Agapito		Pedraza	10.000 Pts	11-08-38	sentencia	condena 12 años		26-06-43	
60	CRUZ ANTOLÍN	Ángel	médico	Fuentesauco	1.000 Pts	09-08-38					
61	CHACÓN DE LA MATA	Adolfo	gob. civ.	Segovia			sentencia	condenado a muerte			
62	DELGADO GUTIÉRREZ	José	maestro	Turégano							
63	DELGADO MOLINA	José	ayte.ing.mon	Segovia	2.500 Pts	17-07-37		izqda/pero no contra mov.			pagada
64	DÍEZ MATE	Romualdo	labrador	Fte.O. Fuent.	5.000 Pts	02-09-38		dirigente marxista		27-07-45	
65	DÍOS ORTEGA	Clemente	maestro	Adrados	10.000 Pts	10-08-38		Trab. Ens. interv. FP	22-05-59		
66	DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ	Valeriano		Labajos			sentencia	condenado a 15 años		20-06-43	art. 8 Ley 19 feb.
67	DOMÍNGUEZ MARTÍN	Mariano		Nieva							
68	DOMÍNGUEZ PÉREZ	Anastasio		Labajos						01-02-60	art. 8 Ley 19 feb.
69	DORREGO GARCÍA	Lucio		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
70	DORREGO ORDÓÑEZ	Hilario		El Espinar	todos	09-08-38		ideas extr/columna Mangada			
71	DUEÑAS FIGUEREDO	Anselmo		San Rafael							
72	DUQUE SERRANO	Tomás	hortelano	Segovia							
73	DUQUE SERRANO	Valentín	albañil	Segovia							
74	DURÁN RINCÓN	Lucio	ind./taberna	Hontanares E	sin decl. resp	03-07-37		conc. indep/inclinado izqda			
75	ECHEVERRIETA MARRURI	Horacio	Industrial	Bilbao (S.Ild.)							
76	EJIDO SANTOS	Leonardo		Villacastín						jul 59	art. 8 Ley 19 feb.
77	EL LIBERAL				todos	02-09-38					
78	EL SOCIALISTA			Madrid	todos	02-09-38					
79	EL SOL Y LA VOZ			Madrid	todos	02-09-38					
80	ELÍAS GONZÁLEZ	Germán	industrial	Segovia	absolución	03-06-37		pres. P Rad			
81	ESCOLAR SANZ	Florencio		Bernardos	todos	09-08-39	sentencia				
82	ESCRIBANO GARCÍA	José	jornalero	Valsaín			sentencia	condenado 20 años		06-07-44	art. 8 Ley 19 feb.
83	ESCRIBANO GARCÍA	José	jornalero	Valsaín			sentencia	condenado 20 años		06-07-44	art. 8 Ley 19 feb.
84	ESTEFANÍA HERNÁNDEZ	Cesárea		Segovia							
85	FERNÁNDEZ CARAVALLO	Heliodoro	sec. Ayto.	Carbonero							
86	FERNÁNDEZ CORDERO	Luis	admdor. Hac	San Ildefonso	todos	29-07-37	sentencia	condenado a muerte			

RELACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CIVILES

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DOMICILIO	SANCIÓN EC	FECHA	DENUNCIA	ACUSACIÓN	INDULTO	SOBRES	OBSERVACION
87	FERNÁNDEZ QUINZANO	Cipriano		Nava Asunción	todos	02-09-38	sentencia	condenado 30 años	18-08-59		
88	FERNÁNDEZ RINCÓN	Julián	propietario	Segovia	4.000 Pts	30-07-37		concejal I.R.		26-03-41	tb. exp. resp. pol.
89	FERNÁNDEZ SANCHO	José		Segovia	5.000 Pts	11-06-37		pres. Cir. Merc./prop. izqda.			pagada
90	FLORES MARCOS	Esteban		Villaverde Isc	todos	26-02-39	sentencia	condenado 25 años			
91	FORMIGO ESTEVEZ	Benito	artillero	Segovia						20-06-43	art. 8 Ley 19 feb.
92	FRÍAS SANZ	Luis		Coca	todos	06-09-38	Guardia C	interventor FP		0/1943	
93	FRÍAS SANZ	Valeriano		Coca	todos	06-09-38	sentencia	condenado a muerte			
94	FRUTOS GILA	José	labrador	Fuentemilano	todos	17-07-37		PSOE y conferencias		28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
95	FUENTE BERNARDOS	Aurelio de la		Madrona	1.000 Pts	10-05-38		CdP/ prop. ideas extrem.	24-11-59		
96	FUENTES TORRES/PARDO	Cayetano	falangista	Segovia	no desafecto			condenado/no desafecto			
97	FUENTETAJA ARRANZ	Mariano	ferroviario	Segovia							
98	GALICIA ARRIBAS	Eusebio/Oren	maestro	Cuéllar	5.000 Pts	26-02-39				15-06-44	
99	GALINDO GARCÍA	Francisco		Segovia	2.500 Pts						pagada
100	GALINDO MARTÍN	Mariano		Fuentesauco							
101	GALINDO SANTA MARÍA	Mariano		Fuentesauco							
102	GANGA TREMIÑO	Ginés		Segovia	todos						
103	GARCÍA AGUÑA	Agapito		Labajos			sentencia	12 /conm. 3 años		01-11-59	art. 2 Ley 19 feb.
104	GARCÍA ARAGÓN	Sotero		Samboal			sentencia			01-07-59	art. 8 Ley 19 feb.
105	GARCÍA BENITO	Salustiana		Segovia	todos	17-07-37		activa prop. PC/pasada	23-07-59		
106	GARCÍA COBOS	Justino		Coca	todos	06-09-38	sentencia	condenado 30 años			
107	GARCÍA COBOS	Ramón		Coca	todos	06-09-38	sentencia	condenado 30 años	07-05-43		
108	GARCÍA DE BLAS	Leonardo		Navafria	todos	26-02-39	sentencia	condenado 20 años		24-11-44	art. 8 Ley 19 feb.
109	GARCÍA DE LAS HERAS	Fermín		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	
110	GARCÍA GARCÍA	Aurelio		Segovia				I.R./concejal desde 1931			
111	GARCÍA GARCÍA	Félix	industrial	Segovia	todos	29-07-37		I.R.			rec.2000pts/1940
112	GARCÍA GARCÍA	Francisco		Nava Asunción	todos	02-09-38	sentencia	condenado 8 años	18-08-59		
113	GARCÍA GARCÍA	Juan	labrador	Madrona	500 Pts	11-08-38					pagada
114	GARCÍA GARCÍA	Mariano		Madrona	500 Pts						pagada
115	GARCÍA GIL	Mariano	labrador	Matabuena	2.000 Pts	11-08-38		ideas soc./pasado			
116	GARCÍA GÓMEZ	Nicomedes	industrial	Segovia							
117	GARCÍA JORGE	Mariano	labrador	Cobos de SG	3.000 Pts						
118	GARCÍA MARTÍN	Luis		Segovia	25.000 Pts						susp. proc. apremio
119	GARCÍA MARTÍN	Silverio	labrador	Fuentesauco	1.000 Pts	02-09-38		apoyo FP en elecciones			
120	GARCÍA MATEOS	Pedro		El Espinar	todos	06-08-38					
121	GARCÍA OÑORO	Bernardo		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
122	GARCÍA OÑORO	Marcelino		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
123	GARCÍA OTAOLA	Faustina		Segovia			sentencia	condenado 30 años		12-11-45	
124	GARCÍA OTAOLA	Gregoria		Segovia			sentencia	condenado 30 años		12-11-45	
125	GARCÍA OTERO	Indalecio									
126	GARCÍA PÉREZ	Audifaz		Navafria	5.000 Pts	26-02-39	sentencia			25-11-44	
127	GARCÍA RODRÍGUEZ	Ángel		Segovia			sentencia			12-11-45	
128	GARCÍA RODRÍGUEZ	Julián		Segovia			sentencia			12-11-45	
129	GARCÍA SEGOVIA	Nicasio		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.

RELACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CIVILES

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DOMICILIO	SANCIÓN EC	FECHA	DENUNCIA	ACUSACIÓN	INDULTO	SOBRES	OBSERVACION
130	GARCÍA TAPIA	Ceferino		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
131	GARCÍA USEROS	Julián		Vegas Matute			sentencia	condenado 30 años		23-03-44	
132	GARCÍA VICENTE	Ricardo		El Espinar	todos	07-09-38	sentencia	condenado a muerte		30/1/47	art. 8 Ley 19 feb.
133	GARRIGA ESCARPANTER			Barcelona	todos	09-09-38					
134	GIBAJA SANZ	Fabián		Cuéllar	20.000 Pts	10-08-38		dest. CdP/cond. 30 años	19-06-59		
135	GIL GIMENO	Eugenio		Torreiglesias							no pagada
136	GIMÉNO SANZ	Felipe	maestro	Otero Herrero	todos	21-10-37		propaganda izquierda			
137	GIMENO/JIMÉNEZ CATÁNE	Ángel	jefe neg/Telg	Segovia	5.000 Pts	18-07-37		simp. FP/cartel en oficina			pagada
138	GÓMEZ DE CASO BERMEJ	Mariano	of correos	Segovia	1.000 Pts	11-06-37		Pro-presos 34/ dir. I.R.			pagada
139	GÓMEZ PARADA	Tomás	industrial	Segovia	1.000 Pts	27-10-37		destacado I.R.			pagada
140	GÓMEZ ROJO	Filemón	fun. mun.	Fuentesauco	2.500 Pts	02-09-38		fun. mun. Sec. CdP/PSOE			
141	GÓMEZ SANZ	Eustaquio		El Espinar	todos						
142	GÓMEZ TRAPERO	Félix	fun.Telégrafo	Segovia	2.000 Pts	17-07-37		Sind. Telégrafos hasta disol.			pagada
143	GONZÁLEZ GARCÍA	Fernando	comisario	Segovia			sentencia	condenado 30 años			
144	GONZÁLEZ GARCÍA	Mariano		El Espinar	20.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	
145	GONZÁLEZ PEÑA	Petra		Segovia							
146	GONZÁLEZ PIQUERO	Juan		Villaverde Íscar			sentencia				
147	GORDO SASTRE	Eladio Pelayo	cartero	Villacastín	todos	26-02-39			03-07-59		
148	GORDO SASTRE	Feliciano		Villacastín	5.000 Pts	06-08-38		CdP mitines y manif.	12-06-59		pagada
149	GOZALO DE DIOS	Julián	labrador	Olombrada	500 Pts	09-09-38		pres. UGT			
150	GUILLÉN Y GUILLÉN	Pablo	J. 1ª Ins.	P. Condado (100.000 Pts	10-08-38		dest. marx/no imp. fusil. en Palma		30-01-47	no bienes/Cuéllar
151	GUTIERREZ MARTÍNEZ	Juan	sec. Ayto.	Cuéllar	todos	11-06-37		I.R./org. rebelión Cuéllar	13-02-61		
152	HERAS MARINAS	Jerónimo		Hontoria			sentencia				
153	HERAS SANZ	Elías		El Espinar	todos	07-09-38	sentencia	condenado 30 años		30/1/47	art. 8 Ley 19 feb.
154	HEREDERO ARCONES	Modesto		Navafría	3.000 Pts	26-02-39	sentencia	absuelto		25-11-44	art. 8 Ley 19 feb.
155	HERGUEDAS PASCUAL	Pedro	labrador	Cuéllar (Torre	500 Pts	10-08-38	Guardia C	alcalde PSOE/coacciones		0/1943	tb. exp. en 1943
156	HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ	Guillermo		Segovia							
157	HERNÁNDEZ SEGOVIA	Jesús		Nava Asunción	todos	02-09-38	sentencia	condenado 8 años	18-08-59		
158	HERNÁNDEZ VÁZQUEZ	Orosio	fun.Hacienda	Segovia	500 Pts	17-06-37		U.R./prop. izqdas. elecc.	12-06-59		
159	HERNANSANZ GOZALO	Julio		Fuentesauco	200 Pts	10-09-38		Afil. UGT/asis. mitin Largo			
160	HERRANZ GOZALO	Demetrio		Olombrada	500 Pts	06-08-38		vicepres. CdP Olombrada	11-02-60		no pagada
161	HERRERO ARTEAGA	Mariano		Segovia	todos			I.R. propagandista			
162	HERRERO BARBA	Afrodisio		Sangarcía							
163	HERRERO BARBA	Librado		Labajos							
164	HERRERO CONSUEGRA	Valentín		Sanchonuño	20.000 Pts	10-08-38		org. y pres. CdP/org. manif.			
165	HERRERO GARCÍA	Mariano			todos						
166	HERRERO VALDIVIESO	Cándido	ind./comercio	Segovia							
167	HERRERO VALDIVIESO	Francisco	librero	Segovia						12-11-45	
168	HERVÁS MARTÍN	Florentino		Codorniz	10.000 Pts	09-08-38		condena 20 años	12-06-59		no pagada
169	HURTADO JIMÉNEZ	Pedro	ind./café	San Ildefonso	sin decl. resp	09-09-38	sentencia	absuelto/bar elem. izqdas.			
170	JIMÉNEZ MARTÍN	Florencio		San Rafael						01-02-66	art. 8 Ley 19 feb.
171	JUÁREZ HERVÁS	Agapito	industrial	San Ildefonso	todos			dirigente Rad. Soc.			pagada 4000/1941
172	JUNQUERA CAMPOS	José		Santander							susp. exp.

RELACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CIVILES

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DOMICILIO	SANCIÓN EC	FECHA	DENUNCIA	ACUSACIÓN	INDULTO	SOBRES	OBSERVACION
173	LA LIBERTAD		empresa	Madrid	todos	02-09-38					
174	LA VOZ		empresa	Madrid	todos						
175	LANDA VAZ	Rubén	cat. Ins 2ª	Segovia	todos	03-07-37		izdista peligroso, masón		26-02-47	art. 8 Ley 19 feb.
176	LINAJE REVILLA	Antonio	procurador	Sepúlveda	todos			dirigente I.R.	23-07-59		pagó/resp. pol.
177	LOBEJÓN	Félix		Cuéllar							
178	LÓPEZ ESCORIAL	Eusebio		S. M. Mudrián	todos		sentencia				
179	LÓPEZ PÉREZ	Alfonso	ind./taberna	El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
180	LÓPEZ RODRÍGUEZ	Santiago	labrador	Muñoveros	todos	28-12-38	sentencia	condenado 6 años		26-07-43	art. 2 Ley 19 feb.
181	LÓPEZ TORRA	José		Segovia						12-11-45	
182	LÓPEZ VELÁZQUEZ	Victoriano		Coca	todos	06-09-38	sentencia	condenado 30 años			
183	MADRID FERNÁNDEZ	Francisco		San Ildefonso	2.000 Pts	11-08-38		UGT y CdP/Condena 3 m.	12-06-59		
184	MAESTRO GARCÍA	Quintín		Nava Asunción	todos	02-09-38	sentencia	condenado a muerte	18-08-59		
185	MALDIVO RUA	Eduardo		Segovia							
186	MARÍA GETE	Ignacio		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
187	MAROTO FERNÁNDEZ	Gabriel		Samboal			sentencia			01-07-59	art. 8 Ley 19 feb.
188	MARTÍN ALONSO	Julio	procurador	Cuéllar	sin decl. resp.	14-05-38		no acred. activ. contra mov.			
189	MARTÍN ARTEAGA	Albino		Sangarcía							
190	MARTÍN BARTOLOMÉ	Agripino	labrador	Navas de Oro	100.000 Pts	06-09-38	sentencia	dir. signif. marx/conc. FP		28-06-44	
191	MARTÍN CALVO	Miguel		Fuenterreboll	1.000 Pts	10-08-38		afiliado Casa del Pueblo	12-06-59		
192	MARTÍN CARRERAS	Vicente		Bernardos	todos	09-08-39	sentencia		23-07-59		
193	MARTÍN CID	Pablo		Coca	todos	06-09-38	sentencia	condenado 30 años			
194	MARTÍN CRESPO	Carlos	industrial	Segovia	25.000 Pts	13-07-37	Comisaría	impr. periódicos/prop. FP	09-05-53	27-03-41	
195	MARTÍN CHAVENTE	Ceferino	industrial	Segovia	todos	16-06-37		dirigente I.R.			pagada 2000/1941
196	MARTÍN DEL BARRIO	Félix		Madrona	500 Pts						pagada
197	MARTÍN DÍEZ (DÍAZ)	Victoriano		Cuéllar	1.000	18-07-37		I.R./no prop. ni acto op. mov.			
198	MARTÍN GÓMEZ	Narciso		Fuentepeayo	10.000 Pts	06-08-38	sentencia	condenado a 15 años			sub. sin ofertas 1943
199	MARTÍN GUIJARRO	María		Segovia							
200	MARTÍN GUTIÉRREZ	Máximo	sec. Ayto.	Vegas Matute	todos	09-09-37		ideas izqda/org. CdP		26-11-52	otro expte sobres/44
201	MARTÍN MARÍA	Miguel		El Espinar	sin resp.	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
202	MARTÍN MONTANCHE	Mariano	ferroviario	Nav. Riofrío/I	1.000 Pts	06-08-38		izqdista/pasado			pagada
203	MARTÍN MUÑOZ	Timoteo		Samboal			sentencia			01-07-59	art. 8 Ley 19 feb.
204	MARTÍN NAVACERRADA	Mariano	labrador	Trescasas	todos	10-08-38		Soc. peligroso/pasado		28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
205	MARTÍN RAMOS	Aurelio		Nava Asunción	todos	02-09-38	sentencia	muerte/conm. 30 años	18-08-59		
206	MARTÍN RAMOS	Gonzalo		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
207	MARTÍN RAMOS	Jesús		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
208	MARTÍN SANZ	Feliciana		Prádena	1.000 Pts	10-08-38		simpatizante izquierdas			pagada
209	MARTÍN SASTRE	Andrés	carnicero	Segovia							
210	MARTÍN TAPIA	Marcos		Navas S. Ant.	500 Pts	09-09-38		conc. Rad.Soc./ UGT		30-01-47	bienes embargados
211	MARTÍNEZ LÓPEZ-OCAÑA	Daniel	médico	Madrid/S. Ild	todos	26-02-39	sentencia	condenado a muerte		16-06-52	art. 8 Ley 19 feb.
212	MARTÍNEZ LÓPEZ-OCAÑA	Wilfredo	médico	Madrid/S. Ild			sentencia	condenado a muerte			
213	MARUGÁN NAVAS	Petra		Segovia							
214	MARUGÁN PASCUAL	Benito		Nava Asunción	todos	02-09-38	sentencia	condenado 6 años	18-08-59		
215	MATEO CALLEJA(O)	Hermenegildo	labrador	Sanchonuño	2.500 Pts	02-09-38		dirigente CdP			pagada

RELACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CIVILES

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DOMICILIO	SANCIÓN EC	FECHA	DENUNCIA	ACUSACIÓN	INDULTO	SOBRES	OBSERVACION
216	MATESANZ GÓMEZ	Isaac		S. M. Mudrián	todos		sentencia				
217	MAURA GAMAZO	Miguel		Madrid							
218	ME(A)RINERO MARTÍN	Juan	labrador	Cuéllar				I.R./regidor síndico			
219	MEDINA CAMPOS	Gabriel		Nava Asunción	todos						
220	MERCADO MARUGÁN (G.)	Zacarías		Sangarcía	5.000 Pts	06-08-38		ideas extr. mitin/arti. marx.	12-06-59		
221	MERINO POZAS	Rodrigo		Turégano	10.000 Pts		sentencia				
222	MIGUEL CASADO	Mario		Bernardos	todos	09-08-39	sentencia		23-07-59		
223	MIGUEL GARCÍA	Víctor		Pedraza	25.000 Pts	11-08-38	sentencia	condenado 20 años		26-06-43	
224	MIGUELÁÑEZ TRIGO	Pablo		Zarzuela Mor	10.000 Pts	19-08-38	sentencia	condena 12 años	12-06-59		
225	MIGUELSANZ HONTORIA	Juana de		El Espinar	500 Pts	9/8/38		extrem. en zona nacional	18-06-59		
226	MIÑO ÁLVAREZ	Fructuoso		San Rafael	todos	26-02-39		dir. P Rad/ hijo pasado			Pagada 5000/1944
227	MIÑO RODRÍGUEZ	Julio		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
228	MOLINERO HERRERO	Fabriciano		Bernardos	todos	09-08-39	sentencia				
229	MONJE CEBRIÁN	Juan		Cuéllar	todos	13-06-37	FET				
230	MONTALBÁN Y MAZAS	Luis de	médico	Cerezo de Ar	3.000 Pts	26-02-39	Dil. Previa	activa prop FP/org. CdP			pagada
231	MORENO AIZPURÚA	José	sec. Gob.Civ	Segovia	10.000 Pts	26-02-39		actuación sectaria/antirel.	25-09-59	30-01-47	
232	MORENO BARRENO	Benedicto		Vegas Matute			sentencia	condenado 30 años		23-03-44	
233	MORENO BARROSO	Marina		Navafria	todos	26-02-39	sentencia	condenado 20 años		17-07-43	art. 8 Ley 19 feb.
234	MUÑOZ BENITO	Santiago		El Espinar	2.000 Pts	06-08-38		U.R./extremista peligroso			pagó 500/1944
235	MUÑOZ CRISTOBAL	Esteban	tipógrafo	Segovia	1.000 Pts	13-07-37	Comisaría	UGT, alcalde, moderado	25-09-59		pagó/art.8/19 feb.
236	MUÑOZ DE LUNA CARRAS	Francisca		Segovia	sin decl por a	16-06-37					
237	MUÑOZ DE LUNA CARRAS	Joaquín	jefe neg/Telg	Segovia	todos	16-06-37		U.R. y masón	5/3/52		tb. exp. resp. pol.
238	MUÑOZ DÍEZ	Esteban		Escar. Cabe	3.000 Pts	10-08-38		izqdist. dest./prop. FP	25-09-59		
239	MUÑUMEL RODRÍGUEZ	Nicolás		El Espinar	20.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
240	NIETO GARCÍA	Agustín	ind./chofer	San Ildefonso	todos	25-04-38	sentencia	perpetua/dirigente I.R.		28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
241	NÚÑEZ MARTÍN	Victorio		Muñopedro							
242	OLMEDO GARCÍA	Fabián		Coca	todos	06-09-38	sentencia	condenado 30 años	07-05-43		
243	OLMOS CÁRDABA	José		Olombrada	1.000 Pts	10-08-38		UGT y prop. FP			pagada
244	ORTEGA SANZ	Eleuterio		Olombrada	500 Pts	09-08-38		socialista			
245	OTAOLA SABANDO	Tomasa		Segovia			sentencia	condenada		12-11-45	
246	OTERO MARTÍN	Jesús	labrador	Otero Herrero	20.000 Pts	11-08-38	sentencia	condena 12 años		28-03-47	
247	PABLOS GARCÍA	Domitilo		Cuéllar	todos	26-02-39	sentencia	condenado 20 años		29-07-45	
248	PALOMO BARTOLOME	José		Segovia			sentencia				
249	PASCUAL GARCÍA	Juan		Trescasas							
250	PASCUAL GÓMEZ	Juan		Trescasas	todos	10-08-38		Soc. peligroso/pasado		28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
251	PASCUAL LAGUNA	Blas		Coca	todos	06-09-38	sentencia	condenado 30 años			
252	PASCUAL MORAL(ES)	Francisco		Chañe	todos	10-08-38					
253	PECHARROMÁN NAVAJO	Marcos		Cozuelos	100 Pts	03-08-38		UGT y prop. FP			
254	PÉREZ BALLESTEROS	José "el Pepita"		San Ildefonso	50.000 Pts	06-08-38		PSOE y CdP/ pasado	5/9/59		susp. proc.
255	PÉREZ BONÍN	Enrique	abogado	Segovia	todos	07-09-37		dirigente CdP y FP		30-08-47	art. 8 Ley 19 feb.
256	PÉREZ BORREDA	Julia		Segovia							
257	PÉREZ MORENO	Víctor		Vegas Matute	500 Pts	11-08-38	sentencia	condena 12 años		28-03-47	
258	PÉREZ OTERO	Calixto	recaud. Ayto	San Ildefonso	todos	25-04-38	sentencia	6 años/ideas comunistas		28-03-47	

RELACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CIVILES

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DOMICILIO	SANCIÓN EC	FECHA	DENUNCIA	ACUSACIÓN	INDULTO	SOBRES	OBSERVACION
259	PÉREZ TAPIA	Mariano		El Espinar	5.000 Pts	07-09-38	sentencia	condenado 6 años		30/1/47	art. 8 Ley 19 feb.
260	PÉREZ VILLAR	Mariano	labrador	Fte.O. Fuent.	3.000 Pts	10-09-38					
261	PILAR ORTEGA	Victorio		Cuéllar							
262	PIQUERO ROMÁN	Ignacio		Bernardos	todos	09-08-39	sentencia		23-07-59		
263	PLAZA OTERO	Maximino		S. M. Mudrián	todos		sentencia				
264	POLÍTICA		empresa	Madrid	todos						
265	POSTIGO FRAILE	Donato	fun.Hacienda	Segovia	50.000 Pts	10-08-38		izqda. rev./afil. PSOE	03-11-59		pagó 377 pts.
266	POZO BARRENO	Francisco del		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
267	POZO GARCÍA	Miguel del		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
268	QUEVEDO SANZ	Esteban		Cuéllar							
269	QUINTANILLA ROMERO	Mariano	cat. Ins 2ª	Segovia	sin decl. resp	23-06-37	gob. civ.	gob.civ. Zamora/dtor. Ins. 2ª			resp/pol 15.000/40
270	QUINZANO SANTOS	Julio		Nava Asunción	todos	02-09-38	sentencia	condenado 30 años	18-08-59		
271	RAMOS AYUSO	Laureano	ayte. Agr.	Segovia	1.000 Pts	26-02-39		dirigente I.R.			pagada
272	RAMOS GARCÍA	Santiago		Nava Asunción	todos	02-09-38	sentencia	condenado 8 años	18-08-59	28-02-45	art. 8 Ley 19 feb.
273	RAMOS HERRANZ	Eustasio		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
274	RAMOS MELERO	Antonio		Cuéllar	15.000 Pts	17-07-37		no afil./ ideas izqda.			
275	REDONDO GONZÁLEZ	Mariano		Cuéllar	100 Pts	16-05-38		I.R.	03-02-60		
276	RÍO AYUSO	Florentino del		Villacastín	5.000 Pts	26-02-39		CdP y manifestaciones		31-07-43	art. 4 Ley 19 feb.
277	RÍO AYUSO	Jerónimo		Villacastín							
278	RIOS ROJAS	José	ayte. OP	Cuéllar	40.000 Pts	02-09-38		PSOE/fund. CdP Cuéllar	23-07-59		
279	RODRÍGUEZ	Vicente	labrador	Fuentesauco	100 Pts	02-09-38		Afil. UGT/asis. mitin Largo			
280	RODRÍGUEZ CÁMARA	Ramón		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
281	RODRÍGUEZ GARCÍA	Mauro		Segovia							
282	RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	Rufino		Segovia							
283	RODRÍGUEZ MARTÍN	Isidro		El Espinar	5.000 Pts	09-09-38					
284	ROMASANTA FERNÁNDEZ	Celedonia		San Rafael	250 Pts	26-02-39		simpatizante izquierdas			pagada
285	ROMERO ARBEIZA	Antonio		Segovia							
286	RUBIO REDONDO	Agraciano		Cuéllar							
287	RUJAS CÁMARA	Francisco		Bernardos	todos	09-08-39	sentencia				
288	SALAMANCA SANTOS	Antonio		Escara. Cuéllar	1.000 Pts	06-09-38		UGT y prop. FP			pagada
289	SAN FRUTOS SANZ	Alfonso		Segovia	6.000 Pts						
290	SÁNCHEZ GÓMEZ	Horacio		El Espinar	20.000 Pts	26-02-39		ideol. Izda. activa marx/oculto			pagó 1000/1941
291	SANSANO FENOLL SA	Vicente	industrial	Elche	todos						pagada
292	SANTA CRUZ REVUELTA	Hilario		Navas de Oro	100.000 Pts	06-09-38		dir. signif. marx/conc. FP			
293	SANTA MARÍA BELTRÁN	Miguel		El Espinar	20.000 Pts	09-09-38	sentencia	prop. com/oposición MN	04-06-59		
294	SANTOS FERNANZ	Juan de	maestro	Castroji/Lastr.	todos	26-02-39					
295	SANZ ALLAS	Víctor		Vegas Matute			sentencia	condenado 20 años		23-03-44	
296	SANZ CARRIÓN	Teodoro		Nava Asunción							
297	SANZ FERNÁNDEZ	Timoteo		El Espinar	1.000 Pts	07-09-38	sentencia			30/1/47	art. 8 Ley 19 feb.
298	SANZ GARCÍA	Juan		Coca	todos	06-09-38	sentencia	condenado 30 años			
299	SANZ GONZÁLEZ	Agustín		Coca	todos	06-09-38	sentencia	condenado 30 años			
300	SANZ GONZÁLEZ	Eduardo		Coca	todos	06-09-38	sentencia	condenado a muerte			
301	SANZ HERNÁNDEZ	Secundino		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.

RELACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CIVILES

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DOMICILIO	SANCIÓN EC	FECHA	DENUNCIA	ACUSACIÓN	INDULTO	SOBRES	OBSERVACION
302	SANZ MUÑOZ	Aurelio		Nava Asunción	todos	02-09-38	sentencia	condenado 30 años	18-08-59		1940 red./3.000
303	SANZ MUÑOZ	Marcelino		Frumales	1.000 Pts	06-08-38		ideas izqda. y prop. FP.			
304	SANZ MUÑOZ	Mariano	labrador	Frumales						feb 60	art. 8 Ley 19 feb.
305	SANZ MUÑOZ	Raimundo	labrador	Frumales	500 Pts	07-09-38		ideol. izqda/simp.FP/elecc.			
306	SANZ NAVAS	Lorenzo		Villaverde Iscar							
307	SANZ SANTOS	Alberto		S. M. Mudrián	todos		sentencia				
308	SANZ SEBASTIÁN	Pedro		Otero Herreros							
309	SASTRE GARCÍA	Adrián		Segovia							
310	SEBASTIÁN GONZALO	Primitivo		El Espinar	100.000 Pts	08-09-38	sentencia			28-03-47	art. 8 Ley 19 feb.
311	SEBASTIÁN MARTÍN	Juan		Cozuelos	20.000 Pts	03-09-38		muy significado izqda. prop.	09-06-59		no pagada
312	SEGOVIA DEL ÁLAMO	Cristino		Segovia							
313	SENOVILLA DE DIOS	Juana	ind./cantina	Cuéllar	20.000 Pts	06-09-38		prop/manif. dueña cantina	03-02-60		no pagada
314	SENOVILLA VELASCO	Mariano		Cuéllar	5.000 Pts	11-08-38		I.R. gestor Ayto.			
315	SERRANO PIQUERO	Ciriaco		Nava Asunción	todos	02-09-38	sentencia	condenado a muerte	18-08-59		
316	SOTO CEREZO	Manuel	labrador	Cozuelos	10.000 Pts	02-09-38		UGT/enl. Marx. con Madrid	22-03-60		
317	TAMAYO BENITO	Manuel	cat. Ins 2ª	Segovia	todos						
318	TAPIA MARTÍN(MUÑOZ)	Ángel		Nava Asunción	todos	02-09-38	sentencia	condenado 30 años	18-08-59	28-02-45	art. 8 Ley 19 feb.
319	TARRAGATO ÁLVAREZ	Felipe		La Losa							
320	TEJERO CÁCERES	Feliciano		Escara. Cabe	1.000 Pts	02-09-38		afiliado Casa del Pueblo			
321	TEJERO LLORENTE	Felipe		Segovia							
322	TRILLO MATILLA	Joaquín	médico	San Ildefonso							
323	TURRERO FERNÁNDEZ	Tiburcio	ind./cantina	El Espinar	5.000 Pts	09-09-38		signifi. izqda/ muy avaro		08-03-45	art. 8 Ley 19 feb.
324	URQUIZA CUBERO	José	admtivo. OP	Segovia	sin decl. f.bie.	16-08-37		dirigente PC		16-12-43	art. 8 Ley 19 feb.
325	VALDENEBRO MATESANZ	Pedro		San Ildefonso	20.000 Pts	09-09-38	sentencia	30 años/ afil. CdP		27-02-47	emb. 1/5 su casa
326	VALENTÍN GARCÍA	Bruno		Fuentesauco	1.000 Pts	10-09-38		Afil. UGT/asis. mitin Largo			
327	VALLE GARCÍA	Dámaso		Fuentesauco	500 Pts	03-09-38		UGT y prop. FP			no pagada
328	VÁZQUEZ DE LAS HERAS	Gregorio	cptaz.carret.	El Espinar	500 Pts	26-02-39		ideas izqda. y prop.			pagada
329	VÁZQUEZ DE LAS HERAS	Segundo	chófer	El Espinar	todos	26-02-39		princip.prom/inductor Prados		14-03-46	
330	VIDAL LORIGA	Antonio	cmte. Art.	Segovia	todos	17-06-37		cmte. mando en filas rojas			
331	YAGÜE MATESANZ	Francisco	lechero	Hontoria						12-11-45	
332	YUSTA BARBADO	Felipe		Chañe	todos	10-08-38					
333	YUSTA MUÑOZ	Regino		Samboal			sentencia			01-07-59	art. 8 Ley 19 feb.

**Nº 10: CENSO DE AFECTADOS POR EL PROCESO DE RESPONSABILIDADES
POLÍTICAS**

RELACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	DOMICILIO	PROFESIÓN	SANCIÓN	SANCIÓN E.	DENUNCIA	ACUSACIÓN	SOBRES	OBSERVACION
1	ABAD ANTÓN	Cirilo	Honrubia La Cuesta						10/07/1959	art. 8 Ley 19 feb.
2	ARTALEJO SEGOVIA	Antonio	Segovia	ferroviario		sobres.	comisaría	PSOE concejal/gestor Dip.	18/05/1942	art. 8 Ley 19 feb.
3	AYUSO FERNÁNDEZ	Basilio	Cerezo Abajo	obrero del c.		3.000 Pts	sentencia			
4	BARRAS MARTÍN	José	Orejana				sentencia	condena 15 años	25/05/1946	art. 8 Ley 19 feb.
5	BARRIO GONZÁLEZ	Manuel	Arevalillo de Cega				sentencia	condena 12 años	25/05/1946	art. 8 Ley 19 feb.
6	BARROSO DE ANTONIO	Félix	Segovia/Madrid				sentencia	condenado checa en Madrid	12/03/1946	art. 8 Ley 19 feb.
7	CALLEJO GARCÍA	Fermín	Segovia	militar			sentencia			
8	CASANOVA OCHOA	Víctor	S. Ildefonso	mecánico		14.000 Pts	sentencia	condena 30 años		
9	CONDE LÓPEZ	Manuel	Sepúlveda	admndor. bie.		absuelto	FET	retramiento ante el MN		
10	CONDE MONTERO	Francisco	Sepúlveda	empleado		absuelto	FET	conc. desde 1931/Rad. Soc.		
11	CONDE MONTERO	César	Sepúlveda	perito		absuelto	FET	pres. mesa elec. Rad. Soc.		
12	CUBO GARCÍA	Santiago	Vegas de Matute				sentencia	condena 12 años	28/06/1944	art. 8 Ley 19 feb.
13	DELGADO PEDRIZA	Bonifacio	San Ildefonso				sentencia	condena 12 a/conm. 2 a.	20/07/1944	art. 8 Ley 19 feb.
14	DÍEZ SANTAMARÍA	Pedro	San Ildefonso				sentencia	condena 30 años	20/01/1945	art. 8 Ley 19 feb.
15	DUQUE NAVACERRADA	Juan	Segovia	mecánico		10.000 Pts	sentencia	condena 15 años	20/05/1941	decl. insolv. total
16	ESCRIBANO NÚÑEZ	Gil	Segovia	industrial/bar	inh. 3 a.	2.000 Pts	comisaría	I.R., bar reunían izqdas.		pagada
17	FRUTOS PROVENCIO	Toribio de	Encinas	labrador			párroco		06/03/1941	
18	GALINDO ACEBES	Aurelia	Coca	sus labores						
19	GARCÍA ARCONES	Dionisio	San Ildefonso				sentencia	sobreseida sentencia		pase al fiscal
20	GARCÍA ARRIBAS	Mariano	Matabuena				sentencia	condena 30 años		
21	GARCÍA DE ANDRÉS	Guillermo	Valsaín	obrero			sentencia	condena 20 años	06/07/1944	art. 8 Ley 19 feb.
22	GARCÍA GARCÍA	Bernardino	Pradales	metalúrgico			sentencia	condena 30 años/pasó otro lado		
23	GARCÍA NÚÑEZ	Bonifacio	Madrid				sentencia		10/05/1946	
24	GARCÍA UTANDA	Lucio	Segovia	ferroviario	inh.esp. 6	500 Pts		dirigente socialista	30/01/1947	art. 8 Ley 19 feb.
25	GIL BARRIO	Jerónimo	Villar de Sobrepeña		inh. 8 a.	3.000 Pts	particular	interventor FP, sectario		pagada
26	GIL GIMENO	Eugenio	Torreiglesias							no pagada
27	GIL PESQUERA	Alejandro	Fuentepelayo				sentencia	condena 12 años		
28	GÓMEZ SAN ANTOLÍN	Cándido					sentencia	absuelto causa	25/05/1946	art. 8 Ley 19 feb.
29	GÓMEZ SANJUAN	Natividad	Torrelaguna				sentencia	condena 6 años		
30	GÓMEZ TRIMIÑO	José	Madrid				sentencia			
31	GONZÁLEZ MURILLO	Emilio	Segovia	fun.Hacienda	inh. 4 a.	1.500 Pts				
32	GONZÁLEZ SEÑAS	Cecilio	Donhierro	labrador			sentencia			
33	GONZÁLEZ VALDÉS	Néstor	Segovia	maestro ajustador			sentencia		01/07/1959	art. 8 Ley 19 feb.
34	GONZALO LINAJE	José	Sepúlveda	comerciante			sentencia	infracción Ley de tasas		
35	HUERTAS MUÑOZ	Manuel	Segovia	panadero		10.000 Pts	sentencia	condena 20 años		
36	JIMÉNEZ MARUGÁN	Víctor M.	San Rafael	obrero			sentencia	Prados/ condenado y conm.	24/06/1944	art. 8 Ley 19 feb.
37	LARA HERNÁNDEZ	Ángel	Segovia	sec. Dip.Prov.			sentencia	condena 9 años		
38	LÁZARO ESCOBAR	Julián	Garcillán	labrador		abs	jgdo funcion	dil. previas/pasado		
39	LÓPEZ ALBA (ÁLVAREZ)	Carlos	Segovia	industrial	inh. 3 a.	2.000 Pts	comisaría	presidente U. Republicana		pagada
40	LÓPEZ GONZÁLEZ	Liborio	Segovia	alumno-maestro			sentencia	perpetua/conm. 30 años		
41	LÓPEZ POZAS	Isaac	Madrid							
42	LÓPEZ TORREGO	Juan	Carbonero el Mayor				sentencia			
43	LUCIO CERVERO	Eduardo	Segovia	industrial	inh. 4 a.	10.000 Pts	comisaría	concejal I.R.		pagada
44	LUENGO MARTÍN	Pablo	Juarros/?	fun. correos			sentencia	Trib. Mas. y Comunismo		

RELACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	DOMICILIO	PROFESIÓN	SANCIÓN	SANCIÓN E.	DENUNCIA	ACUSACIÓN	SOBRES	OBSERVACION
45	LLORENTE BARAHONA	Basilio	Encinas	labrador	inh. 4 a.	450 Pts	párroco	ideas izqda/interv. FP		
46	MADRIGAL MARTÍNEZ	Salomé	Cuéllar	industrial		sin decl	gob civ	apoyo a FP	04/10/1944	art. 6 Ley 19 feb.
47	MARTÍN ARIAS	Ernesto	Segovia	tte. cnel. Inf.			sentencia	condena 20 años	20/06/1943	art. 8 Ley 19 feb.
48	MARTÍN BARRIO	Cristina	Grajera				sentencia	no aparece la sentencia		
49	MARTÍN GIL	Valentín	Madrid				sentencia	asalto cuartel Montaña	25/05/1946	art. 8 Ley 19 feb.
50	MARTÍN HERNANZ	Pedro	Cercedilla	vaquero			sentencia	condena 12 años	17/07/1943	art. 8 Ley 19 feb.
51	MARTÍNEZ MARTÍN	Jesús	La Pradera				sentencia	condena 20 años	06/07/1944	art. 8 Ley 19 feb.
52	MATESANZ CONDE	Lorenzo	San Ildefonso				sentencia	30 años/ conm. por 20	06/07/1944	art. 8 Ley 19 feb.
53	MATESANZ GUEDÁN	Crescencio	Turégano				sentencia			
54	MONTERO S. CRISTOBAL	Absalón	Cantalejo	industrial			sentencia		25/05/1946	art. 8 Ley 19 feb.
55	MURIEL MIELGO	Eleuterio	Coca				sentencia			
56	NOGALES EGIDO	Anselmo	Valsaín				sentencia	12 años/conm. por 4	18/01/1945	art. 8 Ley 19 feb.
57	OLALLA ESCOLAR	Gregorio	Segovia	albañil	inh. 2 a.	150 Pts		concejal por UGT		pagada
58	PABLO BAHÓN	Alejandro	Estebanvela	pastor			sentencia	30 años/conm. por 12	26/05/1946	art. 8 Ley 19 feb.
59	PABLO YAGÜE	Bernardo de	Collado Hermoso				sentencia	muerte/conm. 30 años	28/06/1944	art. 8 Ley 19 feb.
60	PEÑA GARCÍA	Pedro	Ayllón			750 Pts	sentencia	condena 2 años	05/10/1943	art. 8 Ley 19 feb.
61	PEÑA PÁEZ	Agustín	Valsaín				sentencia	sobreseida		
62	PINDADO MORALES	Crispín	Segovia	tte.G.Civ.r.	inh. 7 a.	3.000 Pts	comisaría	tesorero de I.R.	03/07/1943	art. 8 Ley 19 feb.
63	POZAS MATÉ	Andrés	Segovia	industrial	inh. 4 a.	3.000 Pts	comisaría	socialista, llegando a dirigente		pagada
64	PRIETO TAPIA	Manuel	Navas San Antonio			5.000 Pts	sentencia	condena 20 años	30/01/1947	art. 8 Ley 19 feb.
65	RODRÍGUEZ ESTEFANÍA	Mª Teresa	Segovia/Zaragoza				sentencia	muerte/conm. 30 años	28/06/1944	art. 8 Ley 19 feb.
66	RODRÍGUEZ LÓPEZ	Florentino	Montuenga			1.500 Pts	sentencia	condena 6 años		
67	ROLDÁN BAYÓN	Damiana	Cuéllar				sentencia	absuelta	13/12/1944	no incura resp.
68	ROZAS SEIRIETZ	Carlos	Segovia	cap. médico		200 Pts	sentencia	condena 6 años		pagada
69	SANZ ALONSO	Joaquín	Valsaín						01/07/1959	art. 8 Ley 19 feb.
70	SANZ CARRIÓN	Teodoro	Nava Asunción							
71	SANZ GUTIÉRREZ	Donato	Arcones	jornalero			sentencia	condena 15 años		
72	TRUJILLO ROMERO	Pedro					sentencia	condena 20 años		

LISTA DE RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	DOMICILIO	PROFESIÓN	ACUSACIÓN	FIL. POL.
1	CONTRERAS CALLEJO	José	Abades	carretero	interv. electoral	
2	ITUERO LLORENTE	Germán	Abades	jornalero	interv. electoral	
3	MARÍA CALLE	Jesús	Abades	jornalero	interv. electoral	
4	GÓMEZ MARTÍN	Erasmus	Adrada de Pirón	labrador	interv. electoral	
5	ROJO ROMERO	Luciano	Adrados	industrial	interv. electoral	
6	BALLESTEROS MATESANZ	Celestino	Aguilafuente	industrial	alcalde	I.R.
8	CABRERO HERRANZ	Isaac	Aguilafuente	jornalero	concejal	I.R.
9	GARCÍA SANTOS	Miguel	Aguilafuente	industrial	concejal	I.R.
12	SASTRE GONZALO	Isidoro	Aguilafuente	jornalero	concejal	UGT
13	YUBERO SANZ	Manuel	Aguilafuente	jornalero	concejal	UGT
7	BALLESTEROS OLMOS	Pascual	Aguilafuente	jornalero	concejal	
10	RODRÍGUEZ SANZ	Bernardo	Aguilafuente	industrial	concejal	
11	SANTOS DE DIEGO	Pablo de	Aguilafuente	labrador	concejal	
18	SANZ HERRERO	Joaquín	Aguilafuente	labrador	interv. electoral	UGT
14	CEREZO FRUTOS	Prudencio	Aguilafuente	jornalero	interv. electoral	
15	DÍEZ CEREZO	Cástor	Aguilafuente	jornalero	interv. electoral	
16	GARCÍA JIMÉNEZ	Basilio	Aguilafuente	jornalero	interv. electoral	
17	POLO LÓPEZ	Severino	Aguilafuente	albañil	interv. electoral	
19	CÁCERES MARTÍN	Hilario	Alconada de Maderuelo	labrador	interv. electoral	
20	GUIJARRO BERZAL	Joaquín	Alconada de Maderuelo	labrador	interv. electoral	
21	DOMINGO ROMANO	Antonio	Aldea Real	jornalero	interv. electoral	
22	HERRANZ DELGADO	Vicente	Aldea Real	jornalero	interv. electoral	
23	LOZANO HERRANZ	Leonardo	Aldea Real	labrador	interv. electoral	
24	TARDÓN TARDÓN	Mariano	Aldea Real	labrador	interv. electoral	
25	ASENJO AZUARA	Longinos	Aldealengua de Sta. M.	labrador	interv. electoral	
26	MORENO MORENO	Félix	Aldealengua Pedraza	jornalero	interv. electoral	
27	AGÜERO ARMADA	Emilio	Aldeanueva del Codonal	labrador	interv. electoral	
28	MARTÍN GÓMEZ	Doroteo	Aldeanueva del Codonal	labrador	interv. electoral	
29	NÚÑEZ CALVO	Emiliano	Aldeasoña	jornalero	interv. electoral	
30	PARRA CANO	Marcos	Aldeasoña	labrador	interv. electoral	
31	SACRISTÁN COBOS	Eugenio	Aldeasoña	labrador	interv. electoral	
32	SAN JUAN GARCÍA	León	Aldeasoña	jornalero	interv. electoral	
33	HERRERO PÉREZ	Celso	Aldehorno	labrador	interv. electoral	
34	SANZ CANORA	Indalecio	Aldehuela del Codonal	jornalero	interv. electoral	
35	MARTÍN DEL OLMO	Silvestre	Aldeonte	labrador	interv. electoral	
36	ANTÓN ESTEBAN	Román	Anaya	labrador	interv. electoral	
37	MANSO DE ANDRÉS	Leoncia	Anaya	labrador	interv. electoral	
38	MANSO RAMOS	Restituto	Anaya	labrador	interv. electoral	
39	MONJAS AYUSO	Matías	Anaya	jornalero	interv. electoral	
40	TORRES DE FRUTOS	Mariano	Añe	labrador	interv. electoral	
41	LUENGO MARTÍN	Anatolio	Aragoneses	labrador	interv. electoral	
42	MARTÍN MARTÍN	Sabino	Aragoneses	industrial	interv. electoral	
43	DIEGO FRANCISCO	Genaro	Arahuetes	caminero	interv. electoral	
44	ANTONIO ÁLVARO	Francisco	Arcones	albañil	interv. electoral	
45	PASCUAL DÍEZ	Nicolás	Arevalillo de Cega	labrador	interv. electoral	
46	GARCÍA PLAZA	Hilario	Armuña	jornalero	interv. electoral	
47	LÁZARO GIL	Juan	Armuña	labrador	interv. electoral	
48	PALOMAR ACERO	Juan	Ayllón	labrador	alcalde	afiliado
49	ACERO OLIVARES	Jacinto	Ayllón	labrador	interv. electoral	afiliado
50	YUNQUERA LALLANA	Julián	Ayllón	herrero	interv. electoral	
51	BERZAL CASADO	Donato	Barbolla	labrador	interv. electoral	
52	IGLESIAS	Efrén	Barbolla	labrador	interv. electoral	
53	GARCÍA GALINDO	Manuel	Basardilla	labrador	interv. electoral	
54	RODRÍGUEZ GARCÍA	Antonio	Basardilla	labrador	interv. electoral	
55	REDONDO CARDENAL	Nicolás	Becerril	labrador	interv. electoral	
56	GARCÍA RODA	Pablo	Bercial	jornalero	interv. electoral	
57	MARUGÁN	Tomás	Bercial	jornalero	interv. electoral	
58	ASENJO TOMÉ	Emiliano	Bercimuel	labrador	interv. electoral	
59	CARIDAD	Hermenegildo	Bercimuel	labrador	interv. electoral	
60	CASAS RAMOS	Mariano	Bernardos	jornalero	concejal	socialista
61	FERRODO NICOLÁS	Aquilino	Bernardos	industrial	concejal	socialista
62	FRUTOS GONZÁLEZ	Sergio	Bernardos	jornalero	concejal	socialista
63	MIGUEL SANZ	Atanasio	Bernardos	industrial	concejal	socialista

LISTA DE RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	DOMICILIO	PROFESIÓN	ACUSACIÓN	FIL. POL.
64	GAITERO BARTOLOMÉ	Félix	Bernardos	jornalero	interv/concejal	socialista
65	GAITERO SASTRE	Ismael	Bernardos	jornalero	interv. electoral	
66	CID ALONSO	Mario	Bernuy de Coca	labrador	interv. electoral	
67	HERNANDO GILARRANZ	Pío	Bernuy de Porreros	albañil	interv. electoral	Rad. Soc.
68	GARCÍA GIL	Juan	Boceguillas	labrador	interv. electoral	
69	LÓPEZ HERNANDO	Román	Boceguillas	labrador	interv. electoral	
70	MARTÍN CARDIEL	Antonio	Brieva	labrador	interv. electoral	
71	PAJARES CARRETERO	Toribio	C. Fuentidueña	labrador	interv. electoral	
72	POZAS DE PABLOS	Félix	C. Fuentidueña	labrador	interv. electoral	
73	BORREGUERO TAPIAS	Juan	Caballar	labrador	interv. electoral	
74	PASCUAL GONZÁLEZ	Dionisio	Caballar	tendero	interv. electoral	
75	CARDIEL BAEZA	Mariano	Cabañas de Polendos	labrador	interv. electoral	
76	HIGUERA GIL	Justo	Cabañas de Polendos	labrador	interv. electoral	
77	TORREGO CARDIEL	Alejo	Cabañas de Polendos	jornalero	interv. electoral	
78	VALLE SANZ	Daniel	Cabañas de Polendos	labrador	interv. electoral	
79	LÓPEZ MÉNDEZ	Quintín	Cabezuela	resinero	interv. electoral	
80	MÍNGUEZ DIEGO	Esteban	Cabezuela	carpintero	interv. electoral	
81	GARCÍA MUÑOZ	Pablo	Campo de Cuéllar	jornalero	interv. electoral	
82	SASTRE MUÑOZ	Longinos	Campo de Cuéllar	industrial	interv. electoral	
83	DIEGO ÁLAMO	Eleuterio de	Cantalejo	jornalero	interv. electoral	
84	DIEGO ARRANZ	Leónides	Cantalejo	carpintero	interv. electoral	
85	FUENTENEbro MARTÍN	Casimiro	Cantalejo	jornalero	interv. electoral	
86	RDORGO SAÉZ	Modesto	Cantalejo	jornalero	interv. electoral	
87	SANZ SANZ	Claudio	Cantalejo	jornalero	interv. electoral	
88	ANDRÉS YUBERO	Felipe	Cantimpalos	industrial	interv. electoral	
89	PALOMO MARINAS	Vicente	Cantimpalos	industrial	interv. electoral	
90	PEDRAZUELA RUBIO	Mariano	Cantimpalos	industrial	interv. electoral	
91	POSTIGO LÁZARO	Broco	Cantimpalos	labrador	interv. electoral	
92	SAN FRUTOS REDONDO	Faustino	Cantimpalos	jornalero	interv. electoral	
93	VALLE GARRIDO	Macario	Cantimpalos	labrador	interv. electoral	
94	HERNANDO CECILIA	Clemente	Carbonero de Ahusín	albañil	interv. electoral	
95	LÁZARO PÉREZ	Miguel	Carbonero de Ahusín	labrador	interv. electoral	
96	RINCÓN ARRIBAS	Ignacio	Carbonero de Ahusín	labrador	interv. electoral	
97	GALÁN LLORENTE	Tomás	Carbonero el Mayor	labrador	interv. electoral	
98	GARCÍA MANSO	Juan	Carbonero el Mayor	jornalero	interv. electoral	
99	GARCÍA RUBIO	Eustaquio	Carbonero el Mayor	labrador	interv. electoral	
100	GOMÁRIZ GARCÍA	Vicente	Carbonero el Mayor	zapatero	interv. electoral	
101	HERRANZ PASCUAL	Eugenio	Carbonero el Mayor	labrador	interv. electoral	
102	LÓPEZ HERRERO	Amor	Carbonero el Mayor	labrador	interv. electoral	
103	LLORENTE MANSO	Esteban	Carbonero el Mayor	labrador	interv. electoral	
104	MARTÍN ASTABOA	David	Carbonero el Mayor	labrador	interv. electoral	
105	MAYO HERRERO	Jesús	Carbonero el Mayor	tejero	interv. electoral	
106	MIGUELÁNEZ DOMÍNGUEZ	Vicente	Carbonero el Mayor	jornalero	interv. electoral	
107	MUÑOZ LÓPEZ	Mariano	Carbonero el Mayor	labrador	interv. electoral	
108	MUÑOZ MANSO	Juan	Carbonero el Mayor	labrador	interv. electoral	
109	QUIZA LÓPEZ	Miguel	Carbonero el Mayor	industrial	interv. electoral	
110	FRESNILLO VALLE	Gonzalo	Carrascal del Río	labrador	interv. electoral	
111	GARCÍA LÓPEZ	Doroteo	Carrascal del Río	zapatero	interv. electoral	
112	ARANGUEZ PÉREZ	Doroteo	Casla	sirviente	interv. electoral	
113	HORCAJO LÓPEZ	Francisco	Castrillo de Sepúlveda	labrador	interv. electoral	
114	LÓPEZ MALDONADO	Celedonio	Castrillo de Sepúlveda	labrador	interv. electoral	
115	POZO MATESANZ	Miguel	Castrillo de Sepúlveda	labrador	interv. electoral	
116	PEÑA PECHARROMÁN	Saturnino	Castro de Fuentidueña	labrador	interv. electoral	
117	REDONDO VALLEJO	Vicente	Castroserracín	labrador	interv. electoral	
118	GONZÁLEZ GARCÍA	andrés	Cedillo de la Torre	labrador	interv. electoral	
119	SANZ DE PABLOS	Nicolás	Cedillo de la Torre	labrador	interv. electoral	
120	DÍAZ MARTÍN	Felipe	Cerezo de Abajo	industrial	interv. electoral	
121	LOBO LLORENTE	Frutos	Cerezo de Abajo	labrador	interv. electoral	
122	DÍAZ VITÓN	Diego	Cerezo de Arriba	fallecido	interv. electoral	
123	GARCÍA GÓMEZ	manuel	Cerezo de Arriba	labrador	interv. electoral	
124	LOBO GONZÁLEZ	Eugenio	Cerezo de Arriba	labrador	interv. electoral	
125	PASCUAL MORALES	Francisco	Chañe	jornalero	alcalde	UGT
127	CARABIAS MARINERO	Fermín Emilia	Chañe	resinero	concejal	UGT

LISTA DE RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	DOMICILIO	PROFESIÓN	ACUSACIÓN	FIL. POL.
126	BOAL MUÑOZ	Ramón	Chañe	labrador	concejal	
128	LAGUNA MUÑOZ	Felipe	Chañe	panadero	concejal	
129	POZO ACEBES	Ángel del	Chañe	labrador	concejal	
130	SASTRE MUÑOZ	José	Chañe	labrador	concejal	
131	YUSTA BARBADO	Felipe	Chañe	destilador	interv/concejal	UGT
132	ESTEBAN SASTRE	Juan	Chañe	labrador	interv. electoral	
133	PILAR CUÉLLAR	Basilio	Chañe	viajante	juez municipal	Acc. R.
134	CHAVIDA RICO	Ponciano	Chatún	jornalero	interv. electoral	
135	NARROS MAROTO	Tomás	Chatún	labrador	interv. electoral	
136	PASCUAL HERRERO	Modesto	Ciruelos de Coca	jornalero	interv. electoral	
137	TOLEDANO GÓMEZ	Mariano	Ciruelos de Coca	portero (Madrid	interv. electoral	
138	GARCÍA JORGE	Gregorio	Cobos de Segovia	labrador	interv. electoral	
139	GARCÍA JORGE	Emiliano	Cobos de Segovia	comisionista	interv. electoral	
140	CÁMARA MUÑOZ	Víctor	coca	resinero	interv. electoral	
141	GONZÁLEZ SANZ	Luciano	Coca	resinero	interv. electoral	
142	ORCHA GONZÁLEZ	Eusebio	Coca	resinero	interv. electoral	
145	MUÑOZ ALONSO	Sinesio	Codorniz	jornalero	interv. electoral	UGT
143	GARCÍA YUBERO	Florencio	Codorniz	labrador	interv. electoral	
144	GÓMEZ PÉREZ	Salustiano	Codorniz	labrador	interv. electoral	
146	HUERTAS DE FELIPE	Ramón	Collado Hermoso	labrador	interv. electoral	
147	VELASCO MANZANO	Francisco	Collado Hermoso	labrador	interv. electoral	
148	ESTEBARANZ RUIZ	Calixto	Condado Castilnovo	labrador	interv. electoral	
149	PÉREZ CASADO	José	Condado Castilnovo	jornalero	interv. electoral	
150	CASTRO GUTIÉRREZ	leoncio	Corral de Ayllón	labrador	interv. electoral	
151	GARCÍA CARRETERO	Marcos	Cozuelos	labrador	interv. electoral	
152	SEBASTIÁN MARTÍN	Juan	Cozuelos	industrial	interv. electoral	
153	BLANCO TAPIAS	Juan	Cubillo	labrador	interv. electoral	
154	HERGUEDAS PASCUAL	Pedro	Cuéllar	labrador	alcalde	I.R.
155	REDONDO PASCUAL	José	Cuéllar	confitero	alcalde	I.R.
156	SALAMANCA SANZ	Antonio	Cuéllar	labrador	alcalde	I.R.
157	VELASCO SORIA	Mariano	Cuéllar	jornalero	alcalde	I.R.
159	GONZÁLEZ LÓPEZ	Gabriel	Cuéllar	jornalero	concejal	I.R.
160	SANZ GARCÍA	Rafael	Cuéllar	electricista	concejal	I.R.
161	SENOVILLA VELASCO	Mariano	Cuéllar	industrial	concejal	I.R.
158	BLANCO MARTÍN	Ramiro	Cuéllar	chófer	concejal	I.R.
166	MONTERO SANZ	Adrián	Cuéllar	obrero	interv. electoral	I.R.
162	GARCÍA MERINO	Teófilo	Cuéllar	obrero	interv. electoral	
163	GONZÁLEZ JIMÉNEZ	Zacarías	Cuéllar	obrero	interv. electoral	
164	MARTÍN CUESTA	Filiberto	Cuéllar	hojalatero	interv. electoral	
165	MARTÍN MADRUGA	Manuel	Cuéllar	maestro	interv. electoral	
167	PARRA QUEVEDO	Florencio	Cuéllar	capataz	interv. electoral	
168	ROBLEDINOS GARCÍA	Valeriano	Cuéllar	maestro	interv. electoral	
169	SANZ SENOVILLA	Florián	Cuéllar	albañil	interv. electoral	
170	SUÁREZ QUEVEDO	Mariano	Cuéllar	obrero	interv. electoral	
171	MARINERO MARTÍN	Juan	Cuéllar	labrador	regidor síndico	I.R.
172	GARCÍA POZA	Isidro	Cuéllar	funcionario	tte. alcalde	I.R.
173	VELASCO GÓMEZ	Valentín	Cuéllar	obrero	tte. alcalde	I.R.
174	ESTEBAN SANZ	Leopoldo	Donhierro	jornalero	interv. electoral	
175	MANZANARES MARTÍN	Isidro	Duratón	labrador	interv. electoral	
176	MONTERO BLANCO	Domingo	Duratón	labrador	interv. electoral	
177	PILAS PASCUAL	Fermín	Duratón	labrador	interv. electoral	
178	GETE ALONSO	Tomás	El Espinar	herrero	interv. electoral	
179	HERAS	Secundino de	El Espinar	fallecido	interv. electoral	
180	LOBO OJEDA	José	El Espinar	fallecido	interv. electoral	
181	MARTÍN RAMOS	Gonzalo	El Espinar	carpintero	interv. electoral	
182	MARTÍN RAMOS	Bruno	El Espinar	carpintero	interv. electoral	
183	PASTOR GONZÁLEZ	Ángel	El Espinar	fallecido	interv. electoral	
184	TAPIA VILLA	Ramón	El Espinar	jornalero	interv. electoral	
185	LICERAS PÉREZ	Mariano	El Muyo	labrador	interv. electoral	
186	VELASCO HERNANGÓMEZ	Julio	Encinillas	labrador	alcalde	
187	BARROSO PALACIOS	Juan	Encinillas	jornalero	interv. electoral	R. Indep.
188	VELASCO MIGUEL	Esteban	Encinillas	labrador	juez municipal	
189	PEINADOR SANZ	Manuel	Escalona del Prado	labrador	interv. electoral	

LISTA DE RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	DOMICILIO	PROFESIÓN	ACUSACIÓN	FIL. POL.
190	HERRANZ TORREGO	Paulino	Escarabajosa de Cabezas	jornalero	interv. electoral	
191	PINTADO PASCUAL	Florencio	Escarabajosa de Cabezas	jornalero	interv. electoral	
192	GALINDO GARCÍA	Justo	Escobar	maestro	interv. electoral	
193	LÓPEZ MÁRQUEZ	Faustino	Escobar	labrador	interv. electoral	
194	MARCOS YUSTE	Teodosio	Escobar	jornalero	interv. electoral	
195	MARTÍN MANRIQUE	Quintín	Escobar	fallecido	interv. electoral	
196	BAYÓN SANZ	Pedro	Espirdo	labrador	interv. electoral	
197	GÓMEZ ISABEL	Marcelino	Espirdo	labrador	interv. electoral	
198	CASTELLANOS HUERTAS	Paulino	Espirdo	labrador	juez municipal	
199	GARCÍA DE ANDRÉS	Áureo	Etreros	obrero	interv. electoral	
200	MARTÍN AGUADO	Pedro	Etreros	industrial	interv. electoral	
201	CANERA ALONSO	Cruz	Fresneda de Cuéllar	labrador	alcalde	Acc. R.
202	ALBERTO SASTRE	Jesús	Fresneda de Cuéllar	labrador	concejal	Acc. R.
203	SASTRE ALONSO	Juan	Fresneda de Cuéllar	labrador	concejal	
204	ALBERTO SASTRE	Emiliano	Fresneda de Cuéllar	labrador	concejal/pres.	Acc. R.
205	BENITO CERRO	Miguel de	Fresneda de Cuéllar	labrador	interv. electoral	
206	BENITO FUENTE	Victorio de	Fresneda de Cuéllar	industrial	interv. electoral	
207	BENITO GARCÍA	Calixto	Fresneda de Cuéllar	industrial	juez municipal	Acc. R.
208	MARTÍNEZ SANZ	Gervasio	Fresno de Cantespino	labrador	interv. electoral	
209	VÁZQUEZ ESPINAL	Justo	Fresno de Cantespino	labrador	interv. electoral	
210	LÓPEZ MINGUELA	Mariano	Frumales	labrador	interv. electoral	
211	PUNTES PUNTES	Félix	Frumales	jornalero	interv. electoral	
212	CALLE HERNÁNDEZ	Crispulo	Fuente de Sta. Cruz	zapatero	interv. electoral	
213	VILLOSLADA MARTÍN	Millán	Fuente de Sta. Cruz	jornalero	interv. electoral	
214	GOMEZ MARTÍN	Lorenzo	Fuente el Olmo de Fuent.	jornalero	alcalde	UGT
215	GÓMEZ	Agustín	Fuente el Olmo de Fuent.	jornalero	concejal	UGT
216	MARTÍN ÁLVARO	Claudio	Fuente el Olmo de Fuent.	jornalero	concejal	UGT
217	PÉREZ HERRERO	Agustín	Fuente el Olmo de Fuent.	jornalero	concejal	UGT
218	GÓMEZ CACHORRO	Telesforo	Fuente el Olmo de Fuent.	jornalero	interv. electoral	
219	GÓMEZ MARTÍN	Pedro	Fuente el Olmo de Fuent.	jornalero	interv. electoral	
220	HERAS GARCÍA	Pablo	Fuente el Olmo de Fuent.	jornalero	interv. electoral	
221	VILLALPANDO?	Liberto	Fuente el Olmo de Íscar	jornalero	alcalde	socialista
222	MARTÍN LUENGO	Pedro	Fuente el Olmo de Íscar	maestro	interv. electoral	socialista
223	PUNTE ALONSO	Florentino	Fuente el Olmo de Íscar	labrador	interv. electoral	socialista
224	ANTÓN MARAZUELA	Jesús	Fuenterrebollo	herrero	interv. electoral	
225	HERNÁNDEZ CASADO	Leandro	Fuenterrebollo	labrador	interv. electoral	
226	BRELL GIL	Fernando	Fuentepeyayo	jornalero	interv. electoral	
227	GIL DE FRANCISCO	Eufemio	Fuentepeyayo	maestro	interv. electoral	
228	PESQUERA GOZALO	Donato	Fuentepeyayo	jornalero	interv. electoral	
229	CISNEROS SAMANIEGO	Juan	Fuentepeñel	labrador	interv. electoral	
230	DÍAZ MARTÍN	Alonso	Fuentepeñel	labrador	interv. electoral	
231	FRUTOS GARCÍA	Felipe de	Fuentepeñel	labrador	interv. electoral	
232	LÁZARO SANZ	Balbino	Fuentepeñel	labrador	interv. electoral	
233	MUÑOZ BERZAL	Anastasio	Fuenterrebollo	labrador	alcalde	UGT
235	CALVO VAQUERIZO	Nicolás	Fuenterrebollo	labrador	concejal	UGT
236	FERNÁNDEZ SACRISTÁN	Victorio	Fuenterrebollo	carpintero	concejal	UGT
237	MIGUEL SACRISTÁN	Marcelino	Fuenterrebollo	resinero	concejal	UGT
238	PASTOR VAQUERIZO	Pedro	Fuenterrebollo	labrador	concejal	UGT
239	SACRISTÁN MARTÍN	Antonio	Fuenterrebollo	labrador	concejal	UGT
240	SACRISTÁN VAQUERIZO	Vicente	Fuenterrebollo	labrador	concejal	UGT
241	SAN JOSÉ	Eustasio	Fuenterrebollo	labrador	concejal	UGT
234	CALVO DIEGO	Victoriano	Fuenterrebollo	labrador	concejal	
242	FERNÁNDEZ SACRISTÁN	Julián	Fuenterrebollo	jornalero	interv. electoral	
243	GARCÍA DOMINGO	Benedicto	Fuenterrebollo	jornalero	interv. electoral	
244	MERINO MERINO	Laureano	Fuenterrebollo	labrador	interv. electoral	
245	MUÑOZ BERZAL	Anastasio	Fuenterrebollo	labrador	interv. electoral	
246	PÉREZ GUADARRAMA	Fernando	Fuenterrebollo	jornalero	interv. electoral	
247	SACRISTÁN MARTÍN	Antonio	Fuenterrebollo	labrador	interv. electoral	
248	GALINDO SANTAMARÍA	Mariano	Fuentelesaúco	labrador	interv. electoral	
249	GOZALO PASCUAL	Régulo	Fuentelesaúco	jornalero	interv. electoral	
250	MIGUEL HERNANDO	Narciso	Fuentelesaúco	jornalero	interv. electoral	
251	MIGUEL PASCUAL	Bonifacio	Fuentelesaúco	jornalero	interv. electoral	
252	RODRIGO GOZALO	Felipe	Fuentelesaúco	jornalero	interv. electoral	

LISTA DE RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	DOMICILIO	PROFESIÓN	ACUSACIÓN	FIL. POL.
253	SANTAMARÍA GONZÁLEZ	Victorio	Fuentesaúco	labrador	interv. electoral	
254	VALLE GARCÍA	Dámaso	Fuentesaúco	jornalero	interv. electoral	
255	VILLAR DE FRUTOS	Mariano	Fuentesaúco	labrador	interv. electoral	
256	BRAVO CRESPO	Aquilino	Garcillán	labrador	interv. electoral	
257	CANTALEJO YAGÜE	Aquilino	Garcillán	labrador	interv. electoral	
258	ESCOBAR FRANCISCO	Vicente	Garcillán	labrador	interv. electoral	
259	HERRERO GÓMEZ	Genaro	Gomezterracedo	carpintero	interv. electoral	
260	BRAVO SANZ	Tomás	Grado del Pico	labrador	interv. electoral	
261	CUESTA PÉREZ	Aniceto	Grado del Pico	labrador	interv. electoral	
262	MARTÍN ARRANZ	Gregorio	Grajera	labrador	interv. electoral	
263	PÉREZ MARTÍN	Pedro	Grajera	labrador	interv. electoral	
264	MARTÍN BARRIO	Faustino	Guijar de Valdevacas	labrador	interv. electoral	
265	FRESNILLO BARRIO	Hipólito	Hinojosa del Cerro	labrador	interv. electoral	
266	MIGUEL RODRÍGUEZ	Isidro	Honrubia de la Cuesta	herrero	interv. electoral	
267	CALVO ARRANZ	Mariano	Hontalbilla	jornalero	interv. electoral	
268	GONZÁLEZ SALVADOR	Remigio	Hontalbilla	jornalero	interv. electoral	
269	MINGUELA MONJAS	Ángel	Hontalbilla	jornalero	interv. electoral	
270	HERAS LÁZARO	Celedonio de	Hontanares	jornalero	interv. electoral	
271	PABLOS GILPÉREZ	Rafael de	Hontanares	labrador	interv. electoral	
272	SANTOS GARCÍA	Saturnino	Hontanares de Eresma	panadero	interv. electoral	
273	VALVERDE HERRERO	Andrés	Hontanares de Eresma	labrador	interv. electoral	
274	ESTEBAN LÓPEZ	Ángel	Hontoria	jornalero	interv. electoral	
275	HERAS MERINO	Jerónimo de l	Hontoria	jornalero	interv. electoral	
276	ZORZO PÉREZ	Evaristo	Hoyuelos	labrador	interv. electoral	
277	ZORZO PÉREZ	Julio	Hoyuelos	hortelano	interv. electoral	
278	GARCIMARTÍN DIMAS	Manuel	Ituero y Lama	molinero	interv. electoral	
279	GARCIMARTÍN DIMAS	Cándido	Ituero y Lama	labrador	interv. electoral	
280	SEVILLANO GARCIMARTÍN	Marcelino	Jemenuño	labrador	alcalde	
281	CASADO DOMÍNGUEZ	Constantino	Jemenuño	jornalero	interv. electoral	
282	SANZ AGUADO	Pedro	Jemenuño	labrador	interv. electoral	
283	FARALDOS YUBERO	Teófilo	Juarros de Voltoya	hortelano	alcalde	
287	JORGE HEREDERO	Efraín	Juarros de Voltoya	albañil	gestor	UGT
284	ANAYA BERNARDOS	Ricardo	Juarros de Voltoya	jornalero	gestor	
285	FARALDOS LLORENTE	Eladio	Juarros de Voltoya	hortelano	gestor	
286	GARCÍA GARCÍA	Abelardo	Juarros de Voltoya	labrador	gestor	
288	MARTÍN RUBIO	Columbiano	Juarros de Voltoya	labrador	interv. electoral	
289	TEMIÑO GARCÍA	Primitivo	Juarros de Voltoya	herrero	regidor síndico	
290	SANZ SANZ	Emilio	Juarros de Voltoya	industrial	tes.UGT/interv.	UGT
291	SANZ MARTÍN	Eleuterio	Juarros de Voltoya	hortelano	tte. alc./interv	
292	LLORENTE GONZÁLEZ	Bernardino	Juarros Riomoros	labrador	interv. electoral	
293	CONTRERAS ANDRÉS	Benito	La Cuesta	labrador	interv. electoral	
294	DOMÍNGUEZ MARTÍN	Valeriano	La Cuesta	labrador	interv. electoral	
295	COBOS MARTÍN	Enrique	La Higuera	jornalero	interv. electoral	
296	MARTÍN JIMENO	Ignacio	La Higuera	labrador	interv. electoral	
297	SEGOVIA GARCÍA	Isidro	La Lastrilla	labrador	interv. electoral	
298	SEGOVIA MARTÍN	Juan	La Lastrilla	labrador	interv. electoral	
299	MORAL PIÑUELA	Benito	La Losa	jornalero	interv. electoral	
300	PIÑUELA BERNARDO	Mariano	La Losa	jornalero	interv. electoral	
301	CASTRO MAYORAL	Vicente	La Matilla	labrador	interv. electoral	
302	BAEZA GONZÁLEZ	Vicente	La Salceda	jornalero	interv. electoral	
303	GONZÁLEZ VELASCO	Miguel	La Salceda	jornalero	interv. electoral	
304	LÁZARO	máximo	Laguna de Contreras	labrador	interv. electoral	
305	REGIDOR ARRANZ	Pedro	Laguna de Contreras	labrador	interv. electoral	
306	JIMÉNEZ RUBIO	Basilio	Laguna-Rodrigo	pastor	interv. electoral	
307	VELASCO PEÑALOSA	Teófilo	Laguna-Rodrigo	pastor	interv. electoral	
308	QUINTANA MONEDERO	Ángel	Languilla	labrador	interv. electoral	
309	FRUTOS ARRANZ	Eleuterio de	Lastras de Cuéllar	labrador	interv. electoral	
310	GÓMEZ SANZ	Lorenzo	Lastras de Cuéllar	resinero	interv. electoral	
311	HERRERO FERNÁNDEZ	Magdaleno	Lastras de Cuéllar	labrador	interv. electoral	
312	LOZOYA LÓPEZ	Saturnino	Lastras de Cuéllar	obrero	interv. electoral	
313	BRAVO MARTÍN	Pedro	Lastras del Pozo	labrador	interv. electoral	
314	BRAVO TABANERA	Roque	Lastras del Pozo	labrador	interv. electoral	
315	NUÑO PEÑA	justo	Linares del Arroyo	labrador	interv. electoral	

LISTA DE RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	DOMICILIO	PROFESIÓN	ACUSACIÓN	FIL. POL.
316	FLOR ESCRIBANO	Cirilo de la	Los Huertos	labrador	interv. electoral	
317	MONJAS ROLDÁN	Jesús	Los Huertos	labrador	interv. electoral	
318	MIGUEL EGIDO	Dionisio	Losana de Pirón	labrador	interv. electoral	
319	MARTÍN DEL RÍO	Domingo	Maderuelo	labrador	interv. electoral	
320	CARNICERO ARROYO	Marcelino	Maderuelo		juez municipal	
321	FERNÁNDEZ BAHÓN	Moisés	Madriguera	maestro	interv. electoral	
322	GRADO FLOR	Florián del	Madriguera	maestro	interv. electoral	
323	MARTÍN DEL BARRIO	Félix	Madrona	labrador	interv. electoral	
324	MIGUELSANZ GARCÍA	Salvador	Madrona	labrador	interv. electoral	
325	ANDRÉS AGUADO	Lauro	Marazoleja	cartero	interv. electoral	
326	GORALLAY GARCÍA	Nicolás	Marazoleja	jornalero	interv. electoral	
327	GARCÍA	Juan	Marazuela	cartero	interv. electoral	
328	INAGUADO FRUTOS	Justo	Marazuela	labrador	interv. electoral	
329	LUENGO	Vicente	Marazuela	labrador	interv. electoral	
330	HERNÁNDEZ GÓMEZ	Santiago	Martín M. de las Posadas	labrador	interv. electoral	
331	SEÑAS MATEOS	Esteban	Martín M. de las Posadas	jornalero	interv. electoral	
332	YAGÜE DE FRUTOS	Macario	Martín Miguel	labrador	interv. electoral	
333	ROJO VELASCO	Primitivo	Martín Muñoz	jornalero	sec./interv.	UGT
334	SERRANO SERRANO	Antolín	Martín Muñoz	jornalero	tes.UGT/interv.	UGT
335	SASTRE FADÓN	Fermín	Marugán	labrador	alcalde	
336	ÁLVAREZ MARTÍN	Félix	Marugán	panadero	interv. electoral	
337	PASTOR MARUGÁN	máximo	Marugán	labrador	interv. electoral	
338	MUÑOZ SANCHO	Emilio	Mata de Cuéllar	labrador	alcalde	
339	GIL GIL	Miguel	Matabuena	labrador	interv. electoral	
340	GIL SANZ	Luis	Matabuena	labrador	interv. electoral	
341	GIL SANZ	Leandro	Matabuena	labrador	interv. electoral	
342	SÁNCHEZ CRISTOBAL	Juan	Matabuena	industrial	interv. electoral	
343	LÓPEZ ACEBES	Saturnino	Melque	tejero	interv. electoral	
344	RUBIO BURGOS	Mariano	Melque	labrador	interv. electoral	
345	GONZÁLEZ DÍEZ	Zoilo	Membibre de la Hoz	labrador	interv. electoral	
346	IZQUIERDO ROJO	Nemesio	Membibre de la Hoz	labrador	interv. electoral	
347	PEÑA CUÉLLAR	Ciriaco	Membibre de la Hoz	labrador	interv. electoral	
349	ZAMARRÓN SANZ	Julio	Miguel Ibáñez	industrial	interv/concejal	
348	HERNÁN REDONDO	máximo	Miguel Ibáñez	labrador	interv. electoral	
350	HERNÁN HERNÁN	José	Migueláñez	industrial	alcalde	
351	ÁLVAREZ CUBERO	Esteban	Migueláñez	jornalero	concejal	
352	GÓMEZ PASTOR	Leoncio	Migueláñez	industrial	concejal	
353	GOZALO HERRERO	Esteban	Migueláñez	industrial	concejal	
354	HERRANZ GOZALO	Ángel	Migueláñez	industrial	concejal	
357	HURTADO GOZALO	Cayetano	Migueláñez	industrial	interv/concejal	
355	HERNANSANZ GOZALO	Ángel	Migueláñez	industrial	interv. electoral	
356	PASTOR ARÉVALO	mauricio	Migueláñez	labrador	interv. electoral	
358	AJO SANZ	Julio	Montejo de Arévalo	labrador	interv. electoral	
359	GONZÁLEZ GABILONDO	Álvaro	Montejo de Arévalo	jornalero	interv. electoral	
360	ALONSO DEL CURA	Procopio	Montejo de la Vega	labrador	interv. electoral	
361	GONZÁLEZ FERNÁNDEZ	Cándido	Montejo de la Vega	labrador	interv. electoral	
362	GARCÍA MARÍA	Eufonio	Monterrubio	hortelano	interv. electoral	
363	GONZÁLEZ ESTEBAN	Gaudencio	Montuenga	labrador	interv. electoral	UGT
364	MARTÍN PABLO	Mariano	Moral de Hornuez	labrador	interv. electoral	
365	MARTÍN RUBIO	Eladio	Moral de Hornuez	labrador	interv. electoral	
366	MARTÍNEZ GÓMEZ	Melchor	Moraleja de Coca	jornalero	interv. electoral	
367	ACEBES SANZ	Marcelino	Moraleja de Cuéllar	trapero	interv. electoral	
368	MELERO BAYÓN	Antolín	Moraleja de Cuéllar	trapero	interv. electoral	
369	CASADO DE SANTOS	Jesús	Mozoncillo	labrador	interv. electoral	
370	GÓMEZ LÓPEZ	Siro	Mozoncillo	jornalero	interv. electoral	
371	HERRANZ BERMEJO	Dionisio	Mozoncillo	labrador	interv. electoral	
372	MARTÍN DEL POZO	Justino	Mozoncillo	jornalero	interv. electoral	
373	APARICIO	Pablo	Muñopedro	labrador	interv. electoral	
374	MENÉNDEZ NÚÑEZ	José	Muñopedro	labrador	interv. electoral	
375	CAZ SANTO TOMÁS	Ignacio del	Muñoveros	sargento	interv. electoral	
376	ALONSO ALBERTO	Agapito	Narros de Cuéllar	labrador	interv. electoral	
377	ALONSO LAGUNA	Mariano	Narros de Cuéllar	labrador	interv. electoral	
378	GÓMEZ YUSTE	Mariano	Narros de Cuéllar	resinero	interv. electoral	

LISTA DE RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	DOMICILIO	PROFESIÓN	ACUSACIÓN	FIL. POL.
379	HERNANSANZ CABRERO	Clemente	Narros de Cuéllar	labrador	interv. electoral	
380	LAGUNA ARRANZ	Hilario	Narros de Cuéllar	jornalero	interv. electoral	
381	AJO GARCÍA	Luciano	Nava de la Asunción	jornalero	interv. electoral	
382	FERNÁNDEZ MARTÍN	Casimiro	Nava de la Asunción	industrial	interv. electoral	
383	GARCÍA DE LOS FRAILES	Valentín	Nava de la Asunción	jornalero	interv. electoral	
384	GARCÍA ENCINAS	Eustaquio	Nava de la Asunción	factor	interv. electoral	
385	MAESTRO GARCÍA	Aurelio	Nava de la Asunción	jornalero	interv. electoral	
386	MAESTRO GARCÍA	Quintín	Nava de la Asunción	fallecido	interv. electoral	
387	MARTÍN RAMOS	Aurelio	Nava de la Asunción	carpintero	interv. electoral	
388	SANZ GARCÍA	Ángel	Nava de la Asunción	fallecido	interv. electoral	
389	BERZAL RUIZ	Francisco	Navafría	jornalero	interv. electoral	socialista
390	SACRISTÁN RODRÍGUEZ	Ángel	Navalilla	labrador	alcalde	
391	JOSÉ FRANCISCO	Agapito	Navalilla	labrador	concejal	
392	LÓPEZ VAQUERIZO	Dionisio	Navalilla	albadero	concejal	
393	MERINO MERINO	Cesáreo	Navalilla	labrador	concejal	
394	PONZAL? CALVO	Simeón	Navalilla	labrador	concejal	
395	SACRISTÁN GONZÁLEZ	Eusebio	Navalilla	jornalero	concejal	
396	FERNÁNDEZ HERRERO	Juan	Navalilla	resinero	interv. electoral	
397	SACRISTÁN RODRÍGUEZ	Ángel	Navalilla	labrador	interv. electoral	
398	TANARRO MERINO	Simeón	Navalilla	zapatero	interv. electoral	
399	ENCINAS DIEGO	Heliodoro	Navalmanzano	industrial	alcalde	
400	ÁLVAREZ GILSANZ	Demetrio	Navalmanzano	ebanista	interv. electoral	
401	OLMOS CABALLERO	Frutos	Navalmanzano	labrador	interv. electoral	
402	OLMOS OTERO	Mariano	Navalmanzano	labrador	interv. electoral	
403	GARCÍA MATÉ	Fidel	Navares de Ayuso	labrador	interv. electoral	
404	CALLEJA GARCÍA	Fernando	Navares de Enmedio	labrador	interv. electoral	
405	ANTONIO TORRES	Zacarías	Navares de las Cuevas	labrador	interv. electoral	
406	REDONDO VELÁZQUEZ	Rosendo	Navares de las Cuevas	labrador	interv. electoral	
407	GALLEGO ARÉVALO	Ciriaco	Navas de Oro	labrador	gestor	
408	HERRERO HERAS	Elías	Navas de Oro	jornalero	gestor	
409	PABLOS RUBIO	Florencio	Navas de Oro	resinero	gestor	
410	PABLOS VILLACORTA	Daniel	Navas de Oro	resinero	gestor	
414	SANTA CRUZ REVUELTA	Hilario	Navas de Oro	ejecutado	interv./sindico	PSOE
411	GÓMEZ MAYO	Felipe	Navas de Oro	jornalero	interv. electoral	
412	RUBIO ÁLVAREZ	Ángel	Navas de Oro	fallecido	interv. electoral	
413	SANZ ESCRIBANO	Aureo	Navas de Oro	jornalero	interv. electoral	
416	BARTOLOMÉ GALLEGO	Joaquín	Navas de Oro	labrador	pres./PS/alc.	PSOE
415	MARTÍN BARTOLOMÉ	Agripino	Navas de Oro	jornalero	pres.PS/tte.alc.	PSOE
417	GIL MARTÍN	Pablo	Navas de Oro	jornalero	sindico	
418	CASADO GARCÍA	Pedro	Navas de S. Antonio	jornalero	interv. electoral	
419	HERNÁN GARCÍA	Leandro	Navas de S. Antonio	jornalero	interv. electoral	
420	MARTÍN GARCÍA	Constantino	Navas de S. Antonio	jornalero	interv. electoral	
421	PEÑA APARICIO	Pío	Navas de S. Antonio	jornalero	interv. electoral	
422	HERRANZ SANZ	Antonio	Nieva	labrador	alcalde	afiliado
423	HERNÁN GÓMEZ	Blas	Nieva	labrador	interv. electoral	
424	NICOLÁS DOMINGO	Sabino	Nieva	labrador	interv. electoral	
425	ESTEBAN SANZ	Faustino	Ochando	jornalero	interv. electoral	
426	SALINERO SACRISTÁN	Gervasio	Ochando	jornalero	interv. electoral	
427	COLOMO VELASCO	Félix	Olombrada	jornalero	interv. electoral	
428	DIOS OLMOS	Vicente de	Olombrada	jornalero	interv. electoral	
429	MELECIO GARCÍA	Mariano	Olombrada	jornalero	interv. electoral	
430	OLMOS CÁRDABA	José	Olombrada	pastor	interv. electoral	
431	OLMOS SERNA	Saturnino	Olombrada	albarquero	interv. electoral	
432	VALENTÍN GARCÍA	Andrés	Olombrada	industrial	interv. electoral	
433	VELASCO ENJUTO	Mariano	Olombrada	labrador	interv. electoral	
434	SANTA ENGRACIA M.	Antonio	Orejana	labrador	interv. electoral	
435	ARRIBAS MARTÍN	Eleuterio	Ortigosa	labrador	interv. electoral	
436	FERNÁNDEZ DUEÑA	Miguel	Ortigosa del Monte	jornalero	interv. electoral	
437	BLASCO APARICIO	Juan	Otero de Herreros	jornalero	alcalde	UGT
438	GARCÍA DE FRUTOS	Lucas	Otero de Herreros	jornalero	alcalde	UGT
439	AMO APARICIO	Mariano	Otero de Herreros	jornalero	interv. electoral	
440	PRIETO PIÑUELA	Mariano	Otero de Herreros	jornalero	interv. electoral	
441	VELA INCLÁN	Bernardo	Otero de Herreros	jornalero	interv. electoral	

LISTA DE RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	DOMICILIO	PROFESIÓN	ACUSACIÓN	FIL. POL.
442	MARTÍN MANRIQUE	Florencio	Otones	labrador	interv. electoral	
443	ASENJO ÁGUEDA	Anacleto	Pajarejos	labrador	interv. electoral	
444	MARTÍN ARRANZ	Valentín	Pajarejos	labrador	interv. electoral	
445	ALONSO MORENO	Bonifacio	Pajares del Fresno	labrador	interv. electoral	
446	ALONSO MORENO	Valentín	Pajares del Fresno	labrador	interv. electoral	
447	ALONSO PONCE	Martín	Pajares del Fresno	labrador	interv. electoral	
448	GARCÍA MARINA	Elías	Pajares del Fresno	labrador	interv. electoral	
449	MUÑOZ PROVENCIO	Martín	Pajares del Fresno	labrador	interv. electoral	
450	GONZÁLEZ YAGÜE	Genaro	palazuelos	jornalero	alcalde	afiliado
451	VELASCO GARRIDO	José	palazuelos	labrador	interv. electoral	
452	PÉREZ	Fermín	palazuelos	jornalero	juez municipal	afiliado
453	GARCÍA GARCÍA	mauricio	Paradinas	labrador	interv. electoral	
454	MAROTO CALLEJO	Eugenio	Paradinas	labrador	interv. electoral	
455	ÁLVARO BERNABÉ	celedonio	Pedraza	jornalero	interv. electoral	
456	PASCUAL HERNANZ	Mariano	Pedraza	hortelano	interv. electoral	
457	GILA MARTÍN	Pedro	Pelayos	labrador	interv. electoral	
458	GARCÍA BURGOS	Isidro	Perorrubio	labrador	interv. electoral	
459	SACRISTÁN PÉREZ	Mariano	Perorrubio	labrador	interv. electoral	
460	TANARRO GARCÍA	Ángel	Perorrubio	labrador	interv. electoral	
461	OVIEDO PAZ	Nicolás	Perosillo	jornalero	interv. electoral	
462	MARTÍN MAROTO	Gregorio	Pinarejos	labrador	alcalde	
463	CABRERA F	Bienvenido	Pinarejos	resinero	interv. electoral	
464	HERRERO MAROTO	Juan	Pinarejos	jornalero	interv. electoral	
465	OTERO SANZ	juan	Pinarejos	propietario	juez municipal	
466	ÁLVAREZ SANTOS	Victoriano	Pinarnegrillo	jornalero	interv. electoral	
467	ARÉVALO SANCHO	Raimundo	Pinarnegrillo	jornalero	interv. electoral	
468	HERNÁN AGUADO	Elías	Pinilla Ambroz	labrador	interv. electoral	
469	MONJA RODRÍGUEZ	teodoro	Pinilla Ambroz	labrador	interv. electoral	
470	GARCÍA MONTES	José	Pradales	labrador	interv. electoral	
471	GONZÁLEZ GUIJARRO	Segundo	Pradales	labrador	interv. electoral	
472	SANZ GIL	José	Prádena	labrador	interv. electoral	
473	MARTÍN SANZ	Cecilio	Puebla de Pedraza	labrador	interv. electoral	
474	MIGUEL URSE	Cristobal	Puebla de Pedraza	jornalero	interv. electoral	
475	POLO MARTÍN	Manuel	Puebla de Pedraza	jornalero	interv. electoral	
476	POLO MARTÍN	Santos	Puebla de Pedraza	jornalero	interv. electoral	
477	GALINDO GARCÍA	Isaías	Rapariegos	jornalero	interv. electoral	
478	ARRIBAS GARCÍA	Domingo	Rebollo	labrador	interv. electoral	
479	GÓMEZ BARRIO	Juan	Rebollo	labrador	interv. electoral	
480	SANZ MANSO	Andrés	Remondo	hortelano	alcalde	
481	MARTÍN MANSO	Serafín	Remondo	jornalero	interv. electoral	
482	SANZ ESTEBAN	Pascasio	Remondo	sargento	interv. electoral	
483	MARTÍN CASADO	Fernando	Riaguas de S Bartolomé	labrador	interv. electoral	
484	MARTÍN DEL CASTILLO	Cristino	Riaguas de S Bartolomé	labrador	interv. electoral	
485	LIGOS FERNÁNDEZ	Mariano	Riahuelas	labrador	interv. electoral	
486	MORENO SANZ	Abdón	Riahuelas	labrador	interv. electoral	
487	BARAHONA BENITO	José	Riaza	chófer	interv. electoral	
488	CEREZO PONCE	Cecilio	Riaza	labrador	interv. electoral	
489	CERRINEGRO CEREZO	Casiano	Riaza	jornalero	interv. electoral	
490	GIL GUIJARRO	Genaro	Riaza	zapatero	interv. electoral	
491	ASENJO CERVERO	Inocencio	Ribota	maestro	interv. electoral	
492	PABLO MARTÍN	Genaro de	Ribota	labrador	interv. electoral	
493	GARCÍA RODRÍGUEZ	Bonifacio	Riofrío de Riaza	labrador	interv. electoral	
494	HERNANDO FRUTOS	Faustino	Roda de Eresma	labrador	interv. electoral	
495	MARTÍN PEÑA	Tomás	Roda de Eresma	jornalero	interv. electoral	
496	PEÑA DE FRUTOS	Teodoro	Roda de Eresma	labrador	interv. electoral	
497	SEBASTIÁN FRUTOS	Adrián	Roda de Eresma	labrador	interv. electoral	
498	GÓMEZ ORTEGA	Aquilino	S Ildefonso	ganadero	alcalde	I.R. y UGT
499	ANTORANZ GONZÁLEZ	Teodoro	S Ildefonso	fallecido	interv. electoral	
500	MARTÍNEZ MARTÍNEZ	Ángel	S Ildefonso	jornalero	interv. electoral	
501	ORTEGA GÓMEZ	Hermenegildo	S Ildefonso	jornalero	interv. electoral	
502	PUENTE GARCÍA	Pedro	S Ildefonso	jornalero	interv. electoral	
503	RODRÍGUEZ CALLEJO	Jacinto	S Ildefonso	fallecido	interv. electoral	
504	SANTANDER GIL	Félix	S Ildefonso	jornalero	interv. electoral	

LISTA DE RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	DOMICILIO	PROFESIÓN	ACUSACIÓN	FIL. POL.
505	MATESANZ GÓMEZ	Isaac	S Martín y Mudrián	jornalero	interv. electoral	
506	SANZ SANTOS	Alberto	S Martín y Mudrián	jornalero	interv. electoral	
507	MAGDALENO SANZ	Celestino	S Martín y Mudrián	labrador	juez municipal	
508	FRUTOS MARINERO	Agustín de	S. Cristobal de Cuéllar	labrador	alcalde	
509	FRAILE SAN MIGUEL	Víctor	S. Cristobal de Cuéllar	jornalero	interv. electoral	
510	VILORIA SANZ	Martín	S. Cristobal de Cuéllar	jornalero	interv. electoral	
511	ARROYO GARCÍA	Julián	S. Cristobal de la Vega	jornalero	interv. electoral	
512	MIGUEL RODRÍGUEZ	Nicasio	S. Cristobal de la Vega	labrador	interv. electoral	
513	MARCELO DEL CAMPO	Juan	S. Martín y Mudrián	labrador	alcalde	
514	GÓMEZ FUENTE	Mariano	S. Miguel de Bernuy	labrador	interv. electoral	
515	SAN JOSÉ SAN JOSÉ	Mariano	S. Miguel de Bernuy	labrador	interv. electoral	
516	TORDESILLAS PEÑA	Alejandro	S. Miguel de Bernuy	labrador	interv. electoral	
517	GARCÍA GARCÍA	Juan	S. Pedro de Gáillos	labrador	interv. electoral	
518	CARBONERO PECHARROMA	Antonino	Sacramenia	labrador	interv. electoral	
519	VÁZQUEZ ARRANZ	juan	Saldaña de Ayllón		interv. electoral	
520	GARCÍA ARAGÓN	Sotero	Samboal	jornalero	interv. electoral	
521	MARTÍN OTERO	Hipólito	Samboal	jornalero	interv. electoral	
522	GIL RICO	Benigno	Sanchonuño	labrador	interv. electoral	
523	HERRERO CONSUEGRA	Valentín	Sanchonuño	labrador	interv. electoral	
524	RICO RICO	Ángel	Sanchonuño	labrador	interv. electoral	
525	RICO RICO	Antolín	Sanchonuño	industrial	interv. electoral	
526	GARCIMARTÍN	manuel	Sangarcía	cartero	interv. electoral	
527	RUBIO ARTEAGA	Plácido	Sangarcía	labrador	interv. electoral	
528	BERMEJO VILLA	José	Santibáñez de Ayllón	labrador	interv. electoral	
529	BERMEJO VILLA	Domingo	Santibáñez de Ayllón	labrador	interv. electoral	
530	POZO	Francisco del	Santibáñez de Ayllón	maestro	interv. electoral	
531	GÓMEZ BENITO	Gregorio	Santiuste de Pedraza	labrador	interv. electoral	
532	MARTÍN MIGUEL	Santiago	Santiuste de Pedraza	labrador	interv. electoral	
533	DIOS GARCÍA	Claudio de	Santiuste S. J. Bautista	jornalero	concejal	socialista
534	BLANCO HERNÁNDEZ	Eugenio	Santiuste S. J. Bautista	jornalero	interv. electoral	
535	NICOLÁS VELÁZQUEZ	Casildo de	Santiuste S. J. Bautista	jornalero	interv. electoral	
536	SANZ MUÑOZ	Pedro	Santiuste S. J. Bautista	albañil	interv. electoral	
537	ZAMARRÓN SARABIA	Mariano	Santiuste S. J. Bautista	jornalero	interv. electoral	
538	ARÉVALO DOMINGO	Juan	Sauquillo	labrador	interv. electoral	
539	SANZ HERRERO	Francisco	Sauquillo	carnicero	interv. electoral	
540	LUCAS GUEDÁN	Elías	Sebúlcór	jornalero	interv. electoral	
541	RODRIGO BARRAL	Godofredo	Sebúlcór	jornalero	interv. electoral	
542	VERDUGO PAZ	Benedicto	Segovia	carpintero	interv/concejal	UGT
543	BARRIO MOLINERO	Pablo del	Sepúlveda	industrial	concejal	afiliado
544	GARCÍA ARRANZ	Pablo	Sepúlveda	jornalero	concejal	afiliado
545	HERNANZ MARUGÁN	Eleuterio	Sepúlveda	panadero	concejal	afiliado
546	CASADO ABAD	Félix	Sepúlveda	impresor	interv/concejal	afiliado
547	CRISTOBAL MONTE	Juan	Sepúlveda	jornalero	interv/concejal	afiliado
548	PÉREZ CASADO	José	Sepúlveda	jornalero	interv/concejal	afiliado
549	AYUSO LÁZARO	Félix	Sepúlveda	jornalero	interv. electoral	
550	LÓPEZ PÉREZ	Celedonio	Sepúlveda	labrador	interv. electoral	
551	ORTIZ LOBO	Donato	Sepúlveda	zapatero	interv. electoral	
552	RODRÍGUEZ CRUZ	Severiano	Sepúlveda	zapatero	interv. electoral	
553	FRUTOS	Justo de	Sequera del Fresno	labrador	interv. electoral	
554	BURGOS GONZÁLEZ	Vicente	Siguero	labrador	interv. electoral	
555	MARTÍN BALLESTEROS	Cipriano	Siguero	labrador	interv. electoral	
556	MARTÍN GÓMEZ	Frutos	Siguero	industrial	interv. electoral	
557	BARAHONA HERRERO	Agustín	Sotillo	labrador	interv. electoral	
558	HERAS ÁLVARO	Serapio	Sotillo	labrador	interv. electoral	
559	SEBASTIÁN TANARRO	Pedro	Sotillo	labrador	interv. electoral	
560	SAINZ VÁZQUEZ	Julián	Sotosalbos	labrador	interv. electoral	
561	VÁZQUEZ SANZ	Dionisio	Sotosalbos	labrador	interv. electoral	
562	OLALLA ESCOBAR	Mariano	Sta. María	relojero	interv. electoral	
563	ARRIBAS LOZANO	Gil	Sta. María de Riaza	cartero	interv. electoral	
564	ARRIBAS LOZANO	Pedro	Sta. María de Riaza	labrador	interv. electoral	
565	PORRA RAMÍREZ	Mariano	Sta. María de Riaza	jornalero	interv. electoral	
566	LLORENTE VELASCO	Manuel	Sta. María del Cerro	albañil	interv. electoral	
567	PLAZA SAINZ	Primo	Sto. Domingo de Pirón	labrador	interv. electoral	

LISTA DE RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	DOMICILIO	PROFESIÓN	ACUSACIÓN	FIL. POL.
568	BLANCO ARRIBAS	Rufino	Sto. Tomé Puerto	secretario ayto	interv. electoral	
569	GARCÍA GONZÁLEZ	Félix	Sto. Tomé Puerto	labrador	interv. electoral	
570	MARTÍN SANZ	Francisco	Sto. Tomé Puerto	fallecido	interv. electoral	
571	MATUTE BARRENO	Mariano	Tabanera la Luenga	sargento	interv. electoral	
572	GARCÍA GONZÁLEZ	Eladio	Tolocirio	jornalero	interv. electoral	
573	RAMIRO SANZ	Antonio	Tolocirio	jornalero	interv. electoral	
574	SALINAS DUQUE	Blas	Torre Val de S Pedro	camintero	interv. electoral	
575	BARRIO CRISTOBAL	Antonio	Torreadrada	maestro	interv. electoral	
576	BLANCO DE ANDRÉS	Eladio	Torreadrada	labrador	interv. electoral	
577	HONTORIA GARCÍA	Gerardo	Torrecaballeros	industrial	interv. electoral	
578	ARRANZ LOBO	Marcos	Torrecilla del Pinar	jornalero	interv. electoral	
579	DEL SOL CÁRDABA	Justo	Torrecilla del Pinar	jornalero	interv. electoral	
580	HANOJO BERNABÉ	Aniceto	Torrecilla del Pinar	jornalero	interv. electoral	
581	NAVAJO ARRANZ	Venancio	Torrecilla del Pinar	industrial	interv. electoral	
582	VELA NAVAJO	Robustiano	Torrecilla del Pinar	jornalero	interv. electoral	
583	VELA ROMERO	Cipriano	Torrecilla del Pinar	jornalero	interv. electoral	
584	GRANDE GRANDE	Wenceslao	Torreiglesias	zapatero	interv. electoral	
585	SANZ GIL	Manuel	Tres Casas	labrador	alcalde	UGT
586	PASCUAL MIGUEL	Claudio	Tres Casas	labrador	interv. electoral	huyó campo
587	SANZ PUENTE	Mariano	Tres Casas	labrador	juez municipal	UGT
588	BORREGUERO MIGUEL	Lucio	Turégano	labrador	interv. electoral	
589	GARCÍA TARRAGATO	Emilio	Turégano	jergonero	interv. electoral	
590	ALONSO GARCÍA	Ruperto	Turrubuelo	labrador	interv. electoral	
591	MARTÍN BARAHONA	Juan	Turrubuelo	labrador	interv. electoral	
592	GUIJARRO PEÑA	Maximino	Urueñas	jornalero	interv. electoral	
593	SOLI GARCÍA	Mariano	Urueñas	labrador	interv. electoral	
594	SASTRE SÁNCHEZ	Tomás	Valdeprados	jornalero	interv. electoral	
595	SEGOVIANO BARRENO	Patricio	Valdeprados	industrial	interv. electoral	
596	ALONSO ARIAS	Pantaleón	valdesimonte	maestro	interv. electoral	
597	ÁLVARO BENITO	León	valdesimonte	labrador	interv. electoral	
598	GARCÍA SANZ	Miguel	valdesimonte	labrador	interv. electoral	
599	BENITO MARTÍN	Isidro	Valdevacas de Montejo	labrador	interv. electoral	
600	FERNÁNDEZ ISIDORO	Celedonio	Valdevacas de Montejo	labrador	interv. electoral	
601	ASENJO BERNAL	Lorenzo	Valdevarnés	labrador	interv. electoral	
602	SANZ SANZ	Leocadio	Valdevarnés	labrador	interv. electoral	
603	POZA LOBA	Hipólito	Valle de Tabladillo	albañil	interv. electoral	
604	POZA PAJARES	Pedro	Valle de Tabladillo	labrador	interv. electoral	
605	FRAILE GARCÍA	Mariano	Vallelado	labrador	alcalde	
606	GALICIA ARRIBAS	Eusebio	Vallelado	ex-maestro	interv. electoral	
607	MARTÍN MUÑOZ	Adalberto	Vallelado	jornalero	interv. electoral	
608	ORTEGA HERGUEDA	Pablo	Vallelado	herrero	interv. electoral	
609	FRUTOS	Guillermo de	Valleruela de Pedraza	labrador	interv. electoral	
610	SAN JUAN GARCÍA	Melchor	Valleruela Sepúlveda	labrador	interv. electoral	
611	PÉREZ VALVERDE	Victoriano	Valseca	jornalero	interv. electoral	
612	PINELA VALVERDE	Cipriano	Valseca	labrador	interv. electoral	
613	MELERO CARBONERO	Raimundo	Valtiendas	jornalero	interv. electoral	
614	LÁZARO VELA	Ricardo	Valverde	labrador	interv. electoral	
615	LIRAS RINCÓN	Amadeo	Valverde	jornalero	interv. electoral	
616	LUCÍA LLORENTE	Julián	Valverde	jornalero	interv. electoral	
617	PABLOS CONCEPCIÓN	Felipe	Valverde	jornalero	interv. electoral	
618	ÚBEDA DE PABLOS	Manuel	Valverde	carpintero	interv. electoral	
619	BENITO BARRIOS	Cástor	Vegafría	labrador	interv. electoral	
620	BRISOS BAYÓN	Julián	Vegafría	labrador	interv. electoral	
621	DÍEZ CÓRDOBA	Vicente	Vegafría	jornalero	interv. electoral	
622	GÓMEZ SAN PEDRO	Florentino	Vegafría	labrador	interv. electoral	
623	CAMAZÓN JERÓNIMO	Celestino	Veganzones	comercial	interv. electoral	
624	CUBO SANZ	Samuel	Vegas de Matute	labrador	presidente de UGT	
625	CRUZ	Benjamín	Vegas de Matute	jornalero	secretario UGT	
626	BARRENO OREJUDO	Urbano	Vegas de Matute	jornalero	tes.UGT/interv.	
627	DÍEZ ADEVA	Cándido	Villacastín	jornalero	interv. electoral	
628	EGIDO RUEDA	Pedro	Villacastín	jornalero	interv. electoral	
629	LÓPEZ GARCÍA	Clodoaldo	Villacastín	jornalero	interv. electoral	
630	ORTEGA ARRANZ	Luis	Villacorta	labrador	interv. electoral	

LISTA DE RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	DOMICILIO	PROFESIÓN	ACUSACIÓN	FIL. POL.
631	GÓMEZ MOREJÓN	Justino	Villagonzalo de Coca	obrero	interv. electoral	
632	GÓMEZ PINILLA	Tomás	Villagonzalo de Coca	jornalero	interv. electoral	
633	ANTORANZ CALVO	Pablo	Villar de Sobrepeña	industrial	interv. electoral	
634	CRUZ GARCÍA	Miguel de la	Villaseca	labrador	interv. electoral	
635	CALLE ALONSO	Florencia	Villaverde de Íscar	jornalero	interv. electoral	
636	MUÑOZ GUIJAR	Florentino	Villaverde de Íscar	jornalero	interv. electoral	
637	ESTEBAN LLORENTE	Clementino	Villoslada	labrador	interv. electoral	
638	LÁZARO GUTIÉRREZ	máximo	Vivar de Fuentidueña	labrador	interv. electoral	
639	POSTIGO HERNANZ	José	Vivar de Fuentidueña	jornalero	interv. electoral	
640	CAMPO PUENTES	Federico	Yanguas de Eresma	panadero	alcalde	
641	ANDRÉS GIL	Eugenio de	Yanguas de Eresma	labrador	concejal	Rad. Soc.
643	LLORENTE GARCÍA	Eulogio	Yanguas de Eresma	labrador	concejal	Rad. Soc.
642	LOZANO RODAO	Santiago	Yanguas de Eresma	labrador	concejal	
644	MANZANO MUÑOZ	Cándido	Yanguas de Eresma	labrador	concejal	
645	MARTÍN LÓPEZ	Pedro	Yanguas de Eresma	labrador	concejal	
646	MOLINA PÉREZ	Juan	Yanguas de Eresma	labrador	concejal	
647	ANDRÉS GIL	Juan de	Yanguas de Eresma	jornalero	interv. electoral	
648	HERRANZ PUENTES	Rafael	Yanguas de Eresma	jornalero	interv. electoral	
649	LÁZARO GIL	Tiburcia	Yanguas de Eresma	jornalero	interv. electoral	
650	VÁZQUEZ AMPUERO	Macario	Yanguas de Eresma	labrador	interv. electoral	
651	YUSTE MUÑOZ	Francisco	Yanguas de Eresma	labrador	interv. electoral	
652	ANDRÉS TOMÉ	Donato de	Zamarramala	labrador	interv. electoral	
653	ANDRÉS TOMÉ	Bernardo	Zamarramala	labrador	interv. electoral	
654	FERNÁNDEZ HERRERO	Primitivo	Zarzuela del Monte	jornalero	interv. electoral	
655	LOZANO CASTRO	Mariano	Zarzuela del Monte	albañil	interv. electoral	
656	GUIJARRO CRIADO	Mariano	Zarzuela del Pinar	resinero	interv. electoral	
657	TEJEDOR OLMOS	Segundo	Zarzuela del Pinar	labrador	interv. electoral	

Nº 11: RELACIÓN DE EMPLEADOS DEPURADOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

RELACIÓN DE EMPLEADOS DEPURADOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DESTINO	ADMON	CESE P.	SANCIÓN DEFINITIVA	FECHA
1	ABAD CONDE	Estanislao	médico	Castillejo Mesleón	Sanidad	02-10-36		
2	ADRADOS SEDEÑO	Máximo	camillero Cruz Roja		Sanidad	26-10-36		
3	ÁGUEDA SANZ	Florentino	maestro	Aldeanueva	M. Ins. Pública	07-09-36	traslado a Oviedo	22-12-39
4	ALFAGEME ALFAGEME	Manuel	médico	Hontalbilla	Sanidad	12-10-36		
5	ALFAYA LÓPEZ	Mª Concepción	profesora Historia	Es. Normal Magisterio	M. Ins. Pública	31-08-36	separación definitiva	15-05-37
6	ALONSO FERNÁNDEZ	Marcelina	maestro	Olombrada	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
7	ALONSO LAGUNA	Francisco	maestro	Segovia	M. Ins. Pública		susp. empl./ inhab.	22-12-39
8	ALONSO POZAS	Ángel	maestro	Caballar	M. Ins. Pública	26-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
9	ALONSO ZAPATA	Encarnación	maestro	Carbonero de Ahusín	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
10	ÁLVAREZ ARRANZ	Cirilo	peón caminero	Tres Casas	Dip. Prov.	26-10-36	destitución	16-06-37
11	ÁLVAREZ GONZÁLEZ	Francisco	alguacil	Marugán	Municipal	07-09-36		
12	ÁLVAREZ LÓPEZ	Félix	encarg. cem. mun.	Coca	Municipal	12-10-36		
13	ÁLVAREZ MATESANZ	Francisco	maestro	Segovia	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
14	ALVAREZ REDONDO	Juan	maestro	Remondo	M. Ins. Pública	26-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
15	ÁLVAREZ TEJERINA	José	secretario Ayto.	Riaza	Municipal	07-09-36		
16	ÁLVARO MATEOS	Mariano	médico	Duruelo	Sanidad	07-09-36		
17	AMO SANZ	Lorenzo del	maestro	La Salceda	M. Ins. Pública	26-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
18	AMORES DE NICOLÁS	Eustasio	veterinario	Coca	M. Agricultura	12-10-36		
19	ANAUT NIETO	Abundio	insp. veterinario	Segovia	Ayto. Segovia		destitución	06-10-38
20	ANDRÉS	Julio	maestro			14-08-36		
21	ANDRÉS ARRIBAS	Marcos de	maestro	Barbolla	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
22	ANDRÉS CASAUS	Purificación	encargada	San Rafael	Preventorio Infantil	11-09-36		
23	ANDRÉS COBOS	Esteban	maestro	Turégano	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
24	ANDRÉS GILSANZ	Segundo de	médico	Est. Prov. Ben.	Dip. Prov.	02-10-36	suspensión 1 año	07-11-38
25	ANDRÉS GUTIÉRREZ	Julia	maestro	Zarzuela del Pinar	M. Ins. Pública		susp. empl./ inhab.	22-12-39
26	ANDRÉS POZAS	Zacarías de	cartero	S. Miguel de Bernuy	Correos	08-12-36	separación definitiva	18-03-37
27	ANGULO LLUIS	Manuel	interventor	Valsaín	Patr. Est. Aserr.		separación definitiva	17-03-37
28	ANTERO	Pablo	celador	Sepúlveda	Telégrafos	07-09-36		
29	APARICIO GONZÁLEZ	Arturo	médico	Espirido	Sanidad	31-08-36		
30	APARICIO MARÍA	Telesforo	cartero	Monterrubio	Correos		separación definitiva	18-03-37
31	ARAGONESES GILSANZ	Jesús	maestro	Torrecaballeros	M. Ins. Pública	21-10-36	traslado dentro provincia	22-12-39
32	ARENAS MANSINO	Francisco	maestro	Nava de la Asunción	M. Ins. Pública	14-08-36	susp. empl./ inhab.	22-12-39
33	ARENAS RUIZ	Francisco	depositario fondos	San Ildefonso	Municipal	07-09-36		
34	AREVALILLO AGUDO	Ángel	cartero	Segovia	Correos		separación definitiva	18-12-37
35	ARÉVALO	Gerardo	maestro interino	Segovia	M. Ins. Pública	12-11-36		
36	ARRANZ ALONSO	Miguel	maestro	Ayllón	M. Ins. Pública	14-08-36	susp. empl./ inhab.	22-12-39
37	ARRANZ GÓMEZ	Mariano	guarda mun.	Moral de Hornuez	Municipal	12-11-36		
38	ARRANZ JIMENO	Alejandro	maestro	Nava de la Asunción	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
39	ARRANZ LÓPEZ	Martín Valentín	jefe negociado	Segovia	Ayto. Segovia		suspensión 9 meses	29-09-37
40	ARRIBAS ARRIBAS	Catalina	maestro	Fuentesoto	M. Ins. Pública	07-10-36	susp. empl./ inhab.	22-12-39
41	ARRIBAS BENITO	Gorgonio	maestro			14-08-36	susp. empl./ inhab.	22-12-39
42	ARRIBAS BLANCO	Juan	repr. C. V. T. Pedraza	Rebollo	Municipal	12-11-36		
43	ASENJO CERVERO	Inocencio	maestro	Ribota	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
44	AYUSO GARCÍA	José	maestro	Ceguilla	M. Ins. Pública	26-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39

RELACIÓN DE EMPLEADOS DEPURADOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DESTINO	ADMON	CESE P.	SANCIÓN DEFINITIVA	FECHA
45	AYUSO GARCÍA	Luis	maestro	Gallegos	M. Ins. Pública		traslado a Oviedo	22-12-39
46	AZORERO GARCÍA	Pedro J.	maestro	Boceguillas	M. Ins. Pública	07-09-36		
47	BADÍA DE LA CRUZ	Aurora	maestro	Fresno de la Fuente	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
48	BARRERA CORDÓN	Felipe	alumno 2º curso	Segovia	E. Normal	18-09-36		
49	BARRIO	Cesáreo	peón caminero		Obras Públicas	08-12-36		
50	BARRIO	Manuel del	maestro			14-08-36		
51	BARRIO ANTÓN	Gregorio del	secretario Ayto.	Rebollo y Arevalillo Cega	Municipal	07-09-36		
52	BARRIO CRISTOBAL	Antonio	maestro	Torreadrada	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
53	BARROSO GÓMEZ	Carlos	maestro	Tabanera la Luenga	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
54	BARROSO SAN JUAN	Anselmo	peón caminero	Aldealuenga de Pedraza	Obras Públicas	09-10-36		
55	BAUSLÓ MUÑOZ	Eleuterio	juez municipal	Mata de Cuéllar	Justicia	26-10-36		
56	BAUTISTA CABELLO	Juan	vigilante arbitrios	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	destitución	14-04-37
57	BECERRIL Y ANTÓN MIRALLE	Juan	juez de instrucción	Sepúlveda	Justicia	02-10-36		
58	BENITO	Ignacio	cartero	Carabias	Correos	30-09-36		
59	BENITO GARCÍA	Celedonio	capataz	Dto. forestal Segovia	M. Agricultura		separación definitiva	01-05-37
60	BENITO MARTÍN	Carlota	maestro	Segovia	M. Ins. Pública	26-08-36	separación definitiva	02-02-40
61	BENITO MAYOR	José	juez municipal	Torreadrada	Justicia	21-11-36		
62	BERMEJO	Lorenzo	secretario Ayto.	Chañe	Municipal	07-09-36		
63	BERMEJO ALONSO	Martín	veterinario	Villacastín	M. Agricultura	31-08-36		
64	BERMEJO ÁLVARO	Dámaso	estanquero	Segovia		12-10-36		
65	BERMEJO GONZÁLEZ	Luis	oficial 2º	Segovia	Del. Hacienda	31-08-36	separación definitiva	11-04-37
66	BERMEJO HEREDERO	Florián	cartero	Sauquillo de Cabezas	Correos		separación definitiva	25-05-37
67	BERMEJO HERRERO	Anibal	maestro interino	La Losa	M. Ins. Pública	07-09-36		
68	BERNAL MARTÍN	Frutos	maestro	Tres Casas	M. Ins. Pública	31-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
69	BERNAL MARTÍN	Marcelino	maestro	San Cristobal	M. Ins. Pública		traslado a Oviedo	22-12-39
70	BERNALDO DE QUIRÓS	Pedro	profesor Caligrafía	Instituto 2ª. Enseñanza	M. Ins. Pública	12-10-36	confirmar/inhab. cargos	18-10-37
71	BLANCO ARRIBAS	Venancio	secretario Ayto.	Casla	Municipal	26-08-36		
72	BLANCO GARCÍA	Rafael	vigilante arbitrios	San Ildefonso	Municipal	07-09-36		
73	BOBILLO BERNÁLDEZ	Rodrigo	jefe Negociado 3ª	Segovia	M. Gobernación		separación definitiva	06-03-37
74	BRAVO DELGADO	Mariano	cartero	Otero de Herreros	Correos	07-09-36	separación definitiva	25-05-37
75	BRAVO GARCÍA	Matilde	maestro	Paradinas	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
76	BRAVO ZARZUELA	Gregorio	capataz	Dto. forestal Segovia	M. Agricultura	11-09-36	separación definitiva	01-05-37
77	BUENDÍA MARTÍN	Casildo	maestro	Fuente el Olmo Fuent.	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
78	BURGOS Y MUÑIZ	Valentín	oficial Ayto.	Segovia	Ayto. Segovia		suspensión 4 meses	16-04-37
79	CALLE FERNÁNDEZ	Crispulo	cartero	Fuente de Santa Cruz	Correos	12-10-36	separación definitiva	14-04-37
80	CALLE MARTÍN	Fernando	jefe negociado 2º	Segovia	Del. Hacienda		separación definitiva	18-03-37
81	CALLE MATESANZ	Román	maestro	Mansilla/Cerezo de Abajo	M. Ins. Pública	07-09-36		
82	CALLEJO FERNÁNDEZ	Martín	maestro	Villovela de Pirón	M. Ins. Pública		traslado a Oviedo	22-12-39
83	CALONGE MUGARZA	María	encarg. evacuatorios	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	destitución	14-04-37
84	CALVO BARBUDO	Florencio	cartero	Fuente el Olmo	Correos	07-09-36	separación definitiva	25-05-37
85	CARDIEL BAEZA	Mariano	estanquero	Cabañas Polendos		12-11-36		
86	CASADO ESTEBARANZ	Elías	maestro	Consuegra	M. Ins. Pública	07-09-36	traslado dentro provincia	22-12-39
87	CASADO MANRIQUE	Anastasio	maestro	Otones	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
88	CASADO MARTÍN	Pantaleón	estanquero	Fuente de Santa Cruz		12-10-36		

RELACIÓN DE EMPLEADOS DEPURADOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DESTINO	ADMON	CESE P.	SANCIÓN DEFINITIVA	FECHA
89	CASLA BENITO	Mateo	maestro	Valleruela	M. Ins. Pública		traslado a Oviedo	22-12-39
90	CASTELLANOS PEREDA	Victoriano	médico	Turégano	Sanidad	31-08-36	separación definitiva	20-06-37
91	CASTILLO LAGUNA	Emigdio del	maestro	Cuéllar	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
92	CEBRIÁN	Ruperto	chófer		Obras Públicas	21-11-36		
93	CEREZO GIL	Purificación	maestro	Segovia	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
94	CEREZO MARINERO	Luis	hortelano	Segovia	Dip. Prov.	16-02-37	destitución	31-08-37
95	COBOS DÍEZ	Alejandro	maestro	Cantalejo	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
96	COCO RODRÍGUEZ	José	médico	Torreiglesias	Sanidad	21-10-36		
97	COLCHERO ARRUBARRENA	Virgilio	prof. Gª e Historia	Instituto 2ª. Enseñanza	M. Ins. Pública	31-08-36	separación definitiva	23-06-37
98	COLOMO DE LA VILLA	Santiago	insp. prov. Sanidad	Segovia	Sanidad	31-08-36		
99	CONTRERAS MANSO	Agustín	camillero Cruz Roja		Sanidad	26-10-36		
100	CORRAL CAMPO	Pilar	maestro	Valsaín	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
101	CORREA	Juan	guarda mun.	Fresneda de Cuéllar	Municipal	07-10-36		
102	COSTA GONZÁLEZ	Ángel	maestro	Fuentesoto	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
103	CRESPO ILLANA	Lorenzo	peón caminero	Dip. Prov.	Dip. Prov.	15-09-36	suspensión 1 año	31-08-37
104	CRISTOBAL	Gregorio	sepulturero	Sepúlveda	Municipal	07-09-36		
105	CRISTOBAL LÁZARO	Fidel	cartero	Tejares/Valtiendas	Correos	12-11-36	separación definitiva	14-04-37
106	CRISTOBAL LÓPEZ	Fermín	jefe negociado	Segovia	Dip. Prov.	18-08-36	destitución	16-06-37
107	CRUZ ANTOLÍN	Ángel	médico	Fuentesauco	Sanidad	12-11-36		
108	CRUZ GALINDO	Ignacio de la	aux. amdtivo	Segovia	Ayto. Segovia		destitución	29-09-37
109	CRUZ MARTÍNEZ	Flora	maestro	Hontalbilla	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
110	CUELLO RABADÁN	Francisco	maestro	Languilla	M. Ins. Pública		inhab. perpetua	02-02-40
111	DÉGANO GARCÍA	María	maestra interina	Fuentidueña	M. Ins. Pública		inhab. perpetua	02-02-40
112	DEGRADO BARRERA	Eufemia	maestro	Navares de Enmedio	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
113	DELGADO GUTIERREZ	José	maestro	Turégano	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
114	DELGADO HERNANZ	Casimiro	auxiliar	Segovia	Del. Trabajo	31-08-36	separación definitiva	19-11-37
115	DÍAZ ÁLVAREZ	Francisco	guardia mun.	Marugán	Municipal	07-09-36		
116	DÍAZ PEÑALVER FLÓREZ	Francisco	maestro	Cuéllar	M. Ins. Pública		traslado a Oviedo	22-12-39
117	DIAZ SABATER	María Rosa	maestro	S. Rafael (El Espinar)	M. Ins. Pública	21-09-36	separación definitiva	02-02-40
118	DIEGO MARTÍN	Alejandro de	maestro	Cubillo	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
119	DÍEZ VITORI	Ciriaco	obrero auxiliar	Riaza	Obras Públicas	07-09-36		
120	DIMAS PUENTE	Cayo	portero 3º	Instituto 2ª. Enseñanza	M. Ins. Pública	31-08-36		
121	DIOS ORTEGA	Clemente de	maestro	Adrados	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
122	DOMINGO	Facundo	guarda	Dto. forestal Segovia	M. Agricultura		separación definitiva	01-05-37
123	DOMINGO GIL	Alejandro	médico	Escalona del Prado	Sanidad	16-09-36	separación definitiva	20-06-37
124	DOMÍNGUEZ DE ANDRÉS	Timoteo	maestro	Palazuelos	M. Ins. Pública	26-08-36	separación definitiva	02-02-40
125	DOMÍNGUEZ GARCÍA	Ulpiano	maestro	Aldea Real	M. Ins. Pública	07-09-36	separación definitiva	02-02-40
126	DOMÍNGUEZ MARTÍN	Aniano	maestro	San Ildefonso	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
127	DOMÍNGUEZ MARTÍN	Hermenegildo	maestro	El Espinar	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
128	DOMÍNGUEZ MARTÍN	Mariano	maestro	Nieva	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
129	DORREGO	Esteban	guarda forestal		M. Agricultura	12-11-36		
130	DUQUE HERVÁS	Joaquín	maestro	Cantalejo	M. Ins. Pública	07-09-36	susp. empl./ inhab.	22-12-39
131	DUQUE NÚÑEZ	Francisco	barrendero	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	destitución	07-04-37
132	DUQUE NÚÑEZ	Mariano	Guarda arbolado	Segovia	Ayto. Segovia		suspensión 1 año	05-10-38

RELACIÓN DE EMPLEADOS DEPURADOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DESTINO	ADMON	CESE P.	SANCIÓN DEFINITIVA	FECHA
133	ENCINAS	Tomás	cartero	Valsaín	Correos	07-09-36		
134	ESCOLAR GARZÓN	Serapia	encarg. evacuatorios	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	destitución	14-04-37
135	ESPEJO SIERRA	Juan A.	maestro	Santibáñez	M. Ins. Pública	26-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
136	ESTEBAN PRIEGO	Facundo	oficial	Segovia	Telégrafos	07-09-36		
137	ESTEBAN PULIDO	Félix	oficial	Segovia	Telégrafos	07-09-36		
138	ESTEBAN TORRALBA	Modesto	aux. a extinguir	Ins. Prov. Segovia	M. Agricultura		separación definitiva	01-05-37
139	ESTEPA CASTILLO	Desiderio	auxiliar	Segovia	Del. Trabajo	31-08-36		
140	ESTEVE MIGUEL	Pascual	maestro taller cerámic	Escuela Elem.Trabajo	Escuela Elem.Tr.		separación definitiva	25-06-37
141	ESTIÁN JÓDAR	Felipe	oficial 3º	San Ildefonso	Patr. Est.		separación definitiva	01-03-37
142	ESTIRADO ÁLVARO	Luis Felipe	alumno	Segovia	E. Normal	19-02-37		
143	ESTIRADO VALVERDE	Felipe	secretario Ayto.	Arcones y anejos	Municipal	07-09-36		
144	FALLA SANZ	Mariano	obrero arbolado	El Espinar	M. Agricultura	14-09-36		
145	FERNÁNDEZ	Mariano	sec. C. V. T. Cuéllar	Cuéllar	Municipal	12-11-36		
146	FERNÁNDEZ ÁLVAREZ	Rafael	prof. Psicol. y Fil.	Es. Normal Magisterio	M. Ins. Pública	31-08-36	separación definitiva	06-03-37
147	FERNÁNDEZ BAHÓN	Andrés	secretario Ayto.	Madriguera	Municipal	26-08-36		
148	FERNÁNDEZ BAHÓN	Moisés	maestro	Madriguera	M. Ins. Pública	26-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
149	FERNÁNDEZ CABALLERO	Antonio	guarda	Dto. forestal Segovia	M. Agricultura		separación definitiva	01-05-37
150	FERNÁNDEZ CARABALLO	Heliodoro	secretario Ayto.	Carbonero Mayor	Municipal	07-09-36		
151	FERNÁNDEZ DE GARCÍA	Germán	médico	Cedillo de la Torre	Sanidad	07-09-36		
152	FERNÁNDEZ GONZÁLEZ	Lorenzo	maestro	Collado Hermoso	M. Ins. Pública	07-09-36	separación definitiva	02-02-40
153	FERNÁNDEZ HEREDERO	Andrés	cartero	Samboal	Correos	07-09-36	separación definitiva	25-05-37
154	FERNÁNDEZ MOLLA	Amador	maestro	Carbonero el Mayor	M. Ins. Pública		traslado a Oviedo	22-12-39
155	FERNÁNDEZ MORGAZO	Mª Dolores	maestro	Torredondo	M. Ins. Pública	12-11-36	traslado a Oviedo	22-12-39
156	FERNÁNDEZ ORDUÑA	Laudelina	maestro	Mozoncillo	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
157	FERNÁNDEZ PÉREZ	Florentino	alguacil	Valsaín	Municipal	07-09-36		
158	FERNÁNDEZ SANCHO	Felipe	maestro	Monterrubio	M. Ins. Pública	26-08-36	separación definitiva	02-02-40
159	FERNÁNDEZ SILVA	Jesús	guarda	Dto. forestal Segovia	M. Agricultura	11-09-36	separación definitiva	01-05-37
160	FERRARI FERNÁNDEZ	Luis Roberto	maestro	Olombrada	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
161	FOO MARTÍN	Julián	maestro			14-08-36	susp. empl./ inhab.	22-12-39
162	FRUTOS	Alejandro de	maestro			14-08-36		
163	FRUTOS DE FRUTOS	Francisca	maestro	Bernardos	M. Ins. Pública	26-08-36	susp. empl./ inhab.	22-12-39
164	FRUTOS JARAMILLO	Sixto	secretario Ayto.	Cantimpalos	Municipal	12-10-36		
165	FRUTOS MARIGÓMEZ	Salvador de	camillero Cruz Roja		Sanidad	26-10-36		
166	FUENTE JIMÉNEZ	Antonio de la	secretario Ayto.	Calabazas	Municipal	07-09-36		
167	FUENTES HERRANZ	Ángel	maestro	Santa María de Nieva	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
168	FUSTER	Julio	maestro			14-08-36		
169	GABRIEL NOMBELA	Teofilo	maestro	Sequera del Fresno	M. Ins. Pública		separación definitiva	02-02-40
170	GALICIA RIVAS	Eusebio	maestro	Vallelado	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
171	GALINDO GARCÍA	Justo	maestro	Pinillos Polendos	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
172	GALINDO HERRANZ	Antonino	camillero Cruz Roja		Sanidad	26-10-36		
173	GALINDO SANTAMARÍA	Mariano	juez municipal	Fuentesauco	Justicia	21-11-36		
174	GANGA TREMIÑO	Ginés	encarg.curso int. Fil.	Instituto 2ª. Enseñanza	M. Ins. Pública	31-08-36	separación definitiva	21-05-37
175	GAONA SANZ	Pedro	médico	Riaza	Sanidad	07-09-36		
176	GARCÍA BARAHONA	Cándido	peón caminero	Santo Tomé del Puerto	Obras Públicas	07-09-36		

RELACIÓN DE EMPLEADOS DEPURADOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DESTINO	ADMON	CESE P.	SANCIÓN DEFINITIVA	FECHA
177	GARCÍA DíEZ	Nicolás	oficial prisiones	Prisión Provincial	M. Gobernación		separación definitiva	24-02-37
178	GARCÍA GARCÍA	Albino	repartidor	Segovia	Telégrafos	26-08-36		
179	GARCÍA GARCÍA	Juan	cartero	Madrona	Correos	07-09-36	separación definitiva	18-03-37
180	GARCÍA GARCÍA	Juan	cartero/estanquero	Madrona	Correos	26-10-36	separación definitiva	18-03-37
181	GARCÍA GONZÁLEZ	Aurelio	maestro	Hontalbilla	M. Ins. Pública	31-08-36	separación definitiva	02-02-40
182	GARCÍA HERNÁNDEZ	Luis	maestro	Villacastín	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
183	GARCÍA HERRANZ	Alberto	alumno maestro	Segovia	E. Normal	21-09-36		
184	GARCÍA HERRERO	Andrés	maestro	Ituero y Lama	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
185	GARCÍA HERRERO	Mariano	cartero	Arroyo de Cuéllar	Correos		separación definitiva	21-04-37
186	GARCÍA JIMENO	Ángel	maestro	Vivar Fuentidueña	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
187	GARCÍA JUEZ	Leonardo	maestro	Migueláñez	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
188	GARCÍA MARTÍN	Conrado	vigilante	Hospital. Asilo Pen.	M. Gobernación	19-11-36		
189	GARCÍA MARTÍN	Constantino	maestro	Duruelo	M. Ins. Pública	07-09-36	traslado a Oviedo	22-12-39
190	GARCÍA MARTÍN	Máximo	encarg. cem. mun.	Riaza	Municipal	08-12-36		
191	GARCÍA ONATE	Victoria	auxiliar	Segovia	Del. Trabajo	31-08-36		
192	GARCÍA POZAS	Pedro	oficial 2º	Cuéllar	Correos	12-11-36	separación definitiva	14-04-37
193	GARCÍA RODRÍGUEZ	Florencio	obrero maquinista		Obras Públicas	30-09-36		
194	GARCÍA SALINERO	Fernando	maestro		M. Ins. Pública	26-08-36	susp. empl./ inhab.	22-12-39
195	GARCÍA SANZ	Aniceto	caminero	Otero de Herreros	Obras Públicas	07-09-36		
196	GARCIMARTÍN TORREÑO	Rogelia	maestro	Ortigosa del Pestaño	M. Ins. Pública		traslado a Oviedo	22-12-39
197	GIL BERNUY	Salvador	guarda	Dto. forestal Segovia	M. Agricultura		separación definitiva	01-05-37
198	GIL CANTALEJO	Vicente	maestro	Navafria	M. Ins. Pública		traslado a Oviedo	22-12-39
199	GIL MARINAS	Basilio	maestro	Basardilla	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
200	GIL MARTÍN	Bienvenido	secretario Ayto.	Escobar y anejos	Municipal	07-09-36		
201	GIL ONDERO	Elías	médico	Roda Eresma	Sanidad	31-08-36		
202	GIL PASCUAL	Manuel	maestro	Zarzuela del Pinar	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
203	GIL SANZ	Quintín	alguacil	Cantimpalos	Municipal	12-10-36		
204	GIL TESEDO	Teotino	médico	Bercimuel	Sanidad	07-09-36		
205	GILMARTÍN	Eufemio	maestro			14-08-36		
206	GILMARTÍN DE FRANCISCO	Jesús	maestro	Fuentepelayo	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
207	GILO GILO	Eulogio	cartero	Vegas de Matute	Correos	07-09-36	separación definitiva	25-05-37
208	GIMÉNEZ	Agustín	voz pública	Riaza	Municipal	08-12-36		
209	GÓMEZ BARRIO	Juan	depositario	Rebollo	Municipal	07-09-36		
210	GÓMEZ CORNEJO	Juan Manuel	repartidor	Segovia	Telégrafos	26-08-36		
211	GÓMEZ DE CASO	Mariano	oficial	Segovia	Correos	07-09-36		
212	GÓMEZ DE PRADO	Teodoro	recaud. interino	Otero de Herreros	Municipal	07-09-36		
213	GÓMEZ FERNÁNDEZ	Manuel	cartero	Segovia	Correos	26-08-36	destitución?	
214	GÓMEZ GARCÍA	Daniel	cartero	Navalmanzano	Correos	07-09-36	separación definitiva	21-04-37
215	GÓMEZ GÓMEZ	Florentino	secretario Ayto.	Tres Casas y Sonsoto	Municipal	26-10-36		
216	GÓMEZ GÓMEZ	Moisés	alguacil	Escobar Polendos	Municipal	12-11-36		
217	GÓMEZ HUERTAS	Pedro	camillero Cruz Roja		Sanidad	26-10-36		
218	GÓMEZ LÓPEZ	Domingo	maestro	Cerezo de Arriba	M. Ins. Pública	07-09-36	inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
219	GÓMEZ MOYA	Amador	maestro	Carbonero Mayor	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
220	GÓMEZ OREJÓN	Justino	alguacil	Villagonzalo	Municipal	07-09-36		

RELACIÓN DE EMPLEADOS DEPURADOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DESTINO	ADMON	CESE P.	SANCIÓN DEFINITIVA	FECHA
221	GÓMEZ ROJO	Filemón	recaud. arbitrios	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	destitución	07-04-37
222	GÓMEZ TRAPERO	Félix	oficial	Segovia	Telégrafos	07-09-36		
223	GÓMEZ ZAMARRÓN	Mariano	peón caminero	Fuente el Olmo Fuent.	Dip. Prov.	07-09-36	destitución	31-08-37
224	GONZÁLEZ	Emilio	inspección	Segovia	Del. Hacienda	31-08-36		
225	GONZÁLEZ DE ANDRÉS	Mariano	oficial 1º	Segovia	Correos	07-09-36		
226	GONZÁLEZ DE CANALES	Fernando	médico	Arcones	Sanidad	07-10-36		
227	GONZÁLEZ DE LA RIVA	María	maestro	Segovia	M. Ins. Pública	26-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
228	GONZÁLEZ DEL POZO	Francisco	maestro	La Cuesta (Carrascal)	M. Ins. Pública	21-09-36	separación definitiva	02-02-40
229	GONZÁLEZ ESCOLAR	Germán	oficial prisiones	Hospital Asilo Pen.	M. Gobernación	07-09-36	separación definitiva	26-02-37
230	GONZÁLEZ FERNÁNDEZ	Juan Andrés	capataz	Dto. forestal Segovia	M. Agricultura	11-09-36	separación definitiva	01-05-37
231	GONZÁLEZ GARCÍA	Fernando	comisario 3ª clase	Segovia	D. Gen. Seguridad	07-10-36	separación definitiva	10-11-36
232	GONZÁLEZ GIL	Julio	maestro	Villacastín	M. Ins. Pública		inhab. perpetua	02-02-40
233	GONZÁLEZ GÓMEZ	Doroteo	maestro	Sepúlveda (Santa Cruz)	M. Ins. Pública	26-08-36	separación definitiva	02-02-40
234	GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	Pablo	cartero peatón	Fuentemizarra a Moral	Correos	07-09-36		
235	GONZÁLEZ MURILLO	Anastasio I.	administrativo	Segovia	Dip. Prov.	18-08-36	destitución	31-08-37
236	GONZÁLEZ MURILLO	Emilio	funcionario	Segovia	Del. Hacienda	31-08-36	separación definitiva	28-08-37
237	GONZÁLEZ NAVARRA	Luis	cabo sereno	Segovia	Ayto. Segovia		destitución	07-07-37
238	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	Sinforosa	maestro	Cuéllar	M. Ins. Pública		traslado a Oviedo	22-12-39
239	GONZÁLEZ SOBRINO	Fernando	insp. mun. Sanidad	Segovia	Sanidad	14-09-36		
240	GONZÁLEZ TELMO	José	maestro	Sotillo	M. Ins. Pública	07-09-36	separación definitiva	02-02-40
241	GONZALO GALLEGO	Feliciano	maestro	Hontalbilla	M. Ins. Pública		traslado a Oviedo	22-12-39
242	GORDO	Rafael	maestro			14-08-36		
243	GORDO SASTRE	Pelayo	cartero	Villacastín	Correos		separación definitiva	18-03-37
244	GOZALO BLANCO	Elena	inspector jefe	Inspector 1ª Ens.	M. Ins. Pública		separación definitiva	07-11-37
245	GRACIA MORALES	Ángel	maestro	Segovia	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
246	GRADO BARRERA	Eufemio de	maestro	Navares de Enmedio	M. Ins. Pública	07-09-36		
247	GUANTES HERRERO	Felicitas	maestro	La Losa	M. Ins. Pública	26-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
248	GUIJARRO MIGUEL	Carlos	insp. farm. mun.	Villaverde Montejo	Municipal	26-08-36		
249	GUTIÉRREZ CUESTA	Mariano	sereno	Cuéllar	Municipal	07-09-36		
250	GUTIÉRREZ HERRERO	Zacarías	cabo sereno	Cuéllar	Municipal	07-09-36		
251	GUTIÉRREZ MARTÍNEZ	Juan	secretario Ayto.	Cuéllar	Municipal	07-09-36		
252	GUTIÉRREZ SASTRE	José	oficial 1º	Segovia	Correos	26-08-36		
253	HEREDERO	Ángel	peón caminero		Obras Públicas	08-12-36		
254	HEREDERO FERNÁNDEZ	Mauro	sereno	Samboal	Municipal	07-09-36		
255	HEREDERO TINAQUERO	Sisinio	agente 1ª clase	Segovia	D. Gen. Seguridad		separación definitiva	14-01-37
256	HERNÁNDEZ GIL	Jesús	fiscal municipal	Segovia	Justicia	08-12-36		
257	HERNÁNDEZ VÁZQUEZ	Orosio	admdor. rent. públ.	Segovia	Del. Hacienda	31-08-36		
258	HERNANDO	Andrés	peón caminero		Dip. Prov.	15-09-36		
259	HERNANDO BARRERO	Francisco	maestro	Espirdo (Tizneros)	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
260	HERNANZ ESTEBAN	José	matarife	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	suspensión 9 meses	16-04-37
261	HERRANZ ANTÓN	Donato	vigilante arbitrios	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	destitución	29-09-37
262	HERRANZ HERRANZ	Daniel	maestro	Aldeanueva del Monte	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
263	HERRERO	Tomás	médico	Abades	Sanidad	12-10-36		
264	HERRERO CASADO	Mariano	alumno 3º curso	Segovia	E. Normal	18-09-36		

RELACIÓN DE EMPLEADOS DEPURADOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DESTINO	ADMON	CESE P.	SANCIÓN DEFINITIVA	FECHA
265	HERRERO CASADO	Simón	alumno maestro	Segovia	E. Normal	21-09-36		
266	HERRERO HERNÁNDEZ	Hilario	guarda	Dto. forestal Segovia	M. Agricultura	25-09-36	separación definitiva	01-05-37
267	HERRERO MUÑOZ	Jesús	camillero Cruz Roja		Sanidad	26-10-36		
268	HERRERO REMONDO	Cástor	peón caminero	Dip. Prov.	Dip. Prov.		destitución	31-08-37
269	HERRERO SANZ	Isidro	maestro	Sanchonuo	M. Ins. Pública	26-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
270	HERRERO SANZ	Joaquina	maestro	Castroserna de Abajo	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
271	HIGUERA CASTELLANOS	Nemesio	maestro	Cantalejo	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
272	HIGUERA NOGALES	Juan	maestro	Sanchonuo	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
273	HORCAJO PÉREZ	Mariano	maestro	Chavida (Santiuste J.B.)	M. Ins. Pública	30-09-36	traslado dentro provincia	22-12-39
274	IGLESIA	Salvador de la	mozo calefactor	San Rafael	Preventorio Infantil	11-09-36		
275	IGLESIAS GIL	Baltasar	secretario Ayto.	Navares de Enmedio	Municipal	07-09-36		
276	IGLESIAS TOMERO	Eloisa	maestro	Escalona del Prado	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
277	IZQUIERDO GOZALO	Mariano	maestro	Segovia	M. Ins. Pública	26-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
278	JIMÉNEZ CROZAT	María	profesora	Segovia	E. Normal		reposición/pérdida	04-05-38
279	JIMÉNEZ DE ANDRÉS	Bernardino	médico	Lastras de Cuéllar	Sanidad	12-10-36		
280	JIMENO CANTALEJO	Gorgonio	matarife	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	destitución	14-04-37
281	JORGE	Fernando	maestro			14-08-36		
282	LAGUNA ALONSO	Alejandro	maestro	Cuéllar	M. Ins. Pública	26-08-36	separación definitiva	02-02-40
283	LANDA VAZ	Rubén	cat. Filosofía	Instituto 2ª. Enseñanza	M. Ins. Pública	31-08-36	separación definitiva	21-05-37
284	LARA HERNÁNDEZ	Ángel	sec. interino	Segovia	Dip. Prov.	18-08-36	destitución	18-08-36
285	LÓPEZ	Eugenio	chófer		Obras Públicas	21-11-36		
286	LÓPEZ	Martín	maquinista		Obras Públicas	21-11-36		
287	LÓPEZ	Rafael	maquinista		Obras Públicas	21-11-36		
288	LÓPEZ CARDIEL	Basilio	guarda arbolado	Segovia	Ayto. Segovia	11-09-36	destitución	21-04-37
289	LÓPEZ COIRA	Emilio	cartero	La Matilla	Correos	23-09-36		
290	LÓPEZ CORTIJO	Sinforoso	celador	Dto. forestal Segovia	M. Agricultura		separación definitiva	01-05-37
291	LÓPEZ DE FRANCISCO	Marco	maestro	Pinarejos	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
292	LÓPEZ GARCÍA	Francisco	aux. admtivo		Obras Públicas	02-10-36	separación definitiva	06-10-37
293	LÓPEZ GONZÁLEZ	Liborio	alumno maestro	Segovia	E. Normal	18-09-36		
294	LÓPEZ GONZÁLEZ	Luis	secretario Ayto.	Juarros Voltoya	Municipal	07-09-36		
295	LÓPEZ MARTÍN	Emilio	farmacéutico	La Matilla	Sanidad	31-08-36		
296	LÓPEZ TORREGO	Miguel	vigilante arbitrios	Navalmanzano	Municipal	07-09-36		
297	LUNA LUNA	Francisco	oficial 1º	Segovia	Correos	07-09-36		
298	M. SIETEIGLESIAS	Matilde	maestro	Domingo García	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
299	MAGADALENO SANZ	Mariano	cartero	S. Martín y Mudrián	Correos		separación definitiva	18-03-37
300	MANRIQUE RODRÍGUEZ	Anselmo	guarda	Dto. forestal Segovia	M. Agricultura		separación definitiva	01-05-37
301	MARBÁN SANTOS	Pilar	niñera	San Rafael	Preventorio Infantil	11-09-36		
302	MARCO ELORRIAGA	Juan	delegado de Trabajo	Segovia	Del. Trabajo	31-08-36	separación definitiva	06-08-37
303	MARCOS GÓMEZ	Segundo	vigilante arbitrios	San Ildefonso	Municipal	07-09-36		
304	MARCOS YUSTE	Circuncisión	maestro	Fuentes de Cuéllar	M. Ins. Pública		traslado a Oviedo	22-12-39
305	MARDOMINGO VACAS	Anselmo	botones	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	suspensión 3 años	21-04-37
306	MARINAS	Manuel M.	maestro			14-08-36		
307	MARTÍN	Epifanio	maestro			14-08-36		
308	MARTÍN	Mariano	sereno	San Rafael	Preventorio Infantil	11-09-36		

RELACIÓN DE EMPLEADOS DEPURADOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DESTINO	ADMON	CESE P.	SANCIÓN DEFINITIVA	FECHA
309	MARTÍN CASTELLANOS	Abraham	maestro	Escalona del Prado	M. Ins. Pública	26-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
310	MARTÍN DE MIGUEL	Miguel	maestro			14-08-36		
311	MARTÍN DEFAUCE	Vicente	maestro	Vegas de Matute	M. Ins. Pública	07-09-36	separación definitiva	02-02-40
312	MARTÍN GALÁN	Evencio	maestro	Marazuela	M. Ins. Pública	26-08-36	susp. empl./ inhab.	22-12-39
313	MARTÍN GARCÍA	Nicolasa	maestro	Cantimpalos	M. Ins. Pública	26-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
314	MARTÍN GARCÍA	Pedro	camillero Cruz Roja		Sanidad	26-10-36		
315	MARTÍN GARCÍA	Primitivo	veterinario mun.	Segovia	Ayto. Segovia		reposición	14-04-37
316	MARTÍN GÓMEZ	Eusebio	estanquero	Fuente el Olmo Fuent.		12-10-36		
317	MARTÍN GONZÁLEZ	Ángel	practicante	Cuéllar	Sanidad	07-09-36		
318	MARTÍN GUTIÉRREZ	Máximo	secretario Ayto.	Vegas de Matute	Municipal	07-09-36		
319	MARTÍN LEONOR	Domingo	maestro	Muñoveros	M. Ins. Pública		susp. empl./ inhab.	22-12-39
320	MARTÍN LÓPEZ	Gregorio	depositario	Fuente de Santa Cruz	Municipal	07-09-36		
321	MARTÍN LUENGO	Pedro	maestro	Fuente el Olmo Fuent.	M. Ins. Pública		traslado a Oviedo	22-12-39
322	MARTÍN MADERUELO	Desiderio	celador	Boceguillas	Telégrafos	07-09-36		
323	MARTÍN MADRUGA	Manuel	maestro	Cuéllar	M. Ins. Pública		separación definitiva	02-02-40
324	MARTÍN MANRIQUE	Constancio	maestro	Anaya	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
325	MARTÍN MANRIQUE	Juan	maestro	La Cuesta	M. Ins. Pública	07-10-36	traslado a Oviedo	22-12-39
326	MARTÍN MARTÍN	Dionisio	maestro	Aldeanueva (Hinojosas)	M. Ins. Pública	26-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
327	MARTÍN MARTÍN	Teodoro	maestro	Navas de Oro	M. Ins. Pública		traslado a Oviedo	22-12-39
328	MARTÍN MARTÍN	Tomás	maestro	Aguilafuente	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
329	MARTÍN MORENO	Benito	farmacéutico titular	Fuentepeelayo	Sanidad	26-03-37		
330	MARTÍN RAMOS	Bruno	cartero	San Rafael	Correos		separación definitiva	18-03-37
331	MARTÍN RETORTILLO	Narcisa	prof. Fis. y Qui.	Instituto 2ª. Enseñanza	M. Ins. Pública	31-08-36		
332	MARTÍN VILLACORTA	Manuel	matarife	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	destitución	07-04-37
333	MARTINEZ LECEA	Francisco	maestro	Valtiendas	M. Ins. Pública		separación definitiva	02-02-40
334	MARTÍNEZ MARINA	Manuel	maestro	Carbonero el Mayor	M. Ins. Pública		susp. empl./ inhab.	22-12-39
335	MARTÍNEZ NIETO	Hermenegildo	maestro	Arevalillo de Cega	M. Ins. Pública		traslado a Oviedo	22-12-39
336	MARUGÁN ALONSO	Mariano	capataz	Villacastín	Obras Públicas	07-09-36		
337	MARUGÁN LÓPEZ	Gregorio	cartero peatón	Nava de la Asunción	Correos	21-10-36	separación definitiva	18-03-37
338	MATÉ BLANCO	Basilio	vigilante arbitrios	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	destitución	16-04-37
339	MATESANZ	Pablo	guarda forestal		M. Agricultura	12-11-36		
340	MATESANZ ÁLVAREZ	Emiliano	maestro	Cedillo de la Torre	M. Ins. Pública	25-09-36	traslado dentro provincia	22-12-39
341	MATESANZ DE ANTONIO	Victoriano	maestro	S. Cristobal la Vega	M. Ins. Pública	07-09-36	susp. empl./ inhab.	22-12-39
342	MATESANZ GREGORIS	Manuel	peón caminero	Dip. Prov.	Dip. Prov.	15-09-36	suspensión 23 meses	31-08-37
343	MAZORRIAGA MARTÍNEZ	Antonio	prof. auxiliar. Letras	Instituto 2ª. Enseñanza	M. Ins. Pública	18-09-36	suspensión definitiva	13-11-36
344	MEDINA CAMPOS	Gabriel	maestro	Nava de la Asunción	M. Ins. Pública		separación definitiva	02-02-40
345	MERCADO GONZÁLEZ	Zacarías	maestro	Sangarcía	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
346	MERINO NAVARES	Diómedes	sereno	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	destitución	16-04-37
347	MIAJA CARNICERO	Amalia	Pedagogía y su Hª	Es. Normal Magisterio	M. Ins. Pública	31-08-36	separación definitiva	10-04-37
348	MIGUEL COBOS	Mariano	maestro	Fuenterrebollo	M. Ins. Pública	14-10-36	traslado a Oviedo	22-12-39
349	MIGUEL GARCÍA	Félix	maestro	Aldeonsancho	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
350	MIGUEL GARCÍA	Juan	maestro	Carrascal del Río	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
351	MIGUEL GARCÍA	Víctor	capataz	Dto. forestal Segovia	M. Agricultura	11-09-36	separación definitiva	01-05-37
352	MIGUEL ROBLEDANO	Mariano	cartero	La Losa	Correos	07-09-36		

RELACIÓN DE EMPLEADOS DEPURADOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DESTINO	ADMON	CESE P.	SANCIÓN DEFINITIVA	FECHA
353	MIGUEL SOLECHERO	Miguel de	maestro	Casla	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
354	MIGUEL Y MUÑOZ MORAL	Juan		La Losa	Teléfonos	07-09-36		
355	MIGUELÁNEZ GIL	Vicente	maestro	Santiuste S. Juan Bautista	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
356	MÍNGUEZ LUENGO	Luis	maestro	Santa María de Nieva	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
357	MÍNGUEZ LUENGO	Ramón	maestro	Fresneda de Cuéllar	M. Ins. Pública	31-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
358	MÍNGUEZ LUENGO	Tomás	maestro	Cabezuela	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
359	MÍNGUEZ MUÑOZ	Juan	maestro	Hontalbilla	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
360	MONJE CEBRIÁN	Juan	maestro	Cuéllar	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
361	MONTES DE ANDRÉS	Pablo	secretario Ayto.	Torredrada	Municipal	07-09-36		
362	MORENO BERNARDO	Julio	alumno 3º curso	Segovia	E. Normal	18-09-36		
363	MORENO BLANCO	Siro	alguacil	Vegas de Matute	Municipal	07-09-36		
364	MORENO LLORENTE	Paulino	maestro	Fuentesoto	M. Ins. Pública	14-08-36	susp. empl./ inhab.	22-12-39
365	MORENO RODRÍGUEZ	Agustín	cat. Hª Natural	Instituto 2ª. Enseñanza	M. Ins. Pública		suspensión 3 meses	29-11-37
366	MORENO VELASCO	Fuencisla	maestro			14-08-36	susp. empl./ inhab.	22-12-39
367	MUÑOZ	Dionisio	cartero	Fresneda de Cuéllar	Correos	20-11-36		
368	MUÑOZ CRISTOBAL	Esteban	vpres. Jurado Mixto	Segovia	Del. Trabajo	31-08-36		
369	MUÑOZ DE LUNA	Joaquín	jefe negociado	Segovia	Telégrafos	26-08-36		
370	MUÑOZ MUÑOZ	Julián	cartero	Gomezterracedo	Correos	20-11-36	separación definitiva	18-03-37
371	NATALÍAS GARCÍA	Pedro	maestro	Segovia	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
372	NAVARES	Lorenzo	barrendero	Sepúlveda	Municipal	07-09-36		
373	NAVARRO CUESTA	Isaac Manuel	maestro	Bernardos	M. Ins. Pública	26-08-36	susp. empl./ inhab.	22-12-39
374	NAVARRO PLAZA	Emilio	maestro	El Muyo	M. Ins. Pública	26-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
375	NAVASES SERRANO	Vitores	empleado	Fuentepeelayo	Municipal	07-09-36		
376	NEBREDÁ GONZÁLEZ	María	maestro	Alconada	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
377	NIETO RUBIO	Atilano	sepulturero	Navas de Oro	Municipal	07-09-36		
378	NÚÑEZ GÓMEZ	Calixto		Segovia	Ayto. Segovia		suspensión 8 meses	09-02-39
379	NÚÑEZ SANZ	Pedro	practicante	Disp. Antivenéreo Jef. San.	Sanidad	07-09-36		
380	NÚÑEZ VELMAR	Nicolás	maestro	Cuéllar	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
381	OLALLA MORENO	Juan	por. hosp. epidemias	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	destitución	29-09-37
382	ÓLEO PLAZA	Francisco	médico	Fuentidueña/Calabazas	Sanidad	12-11-36		
383	OLIVARES MARTÍNEZ	Enrique	maestro	Riáza	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
384	ORDEN LIRAS	Mariano de la	aux. técnico	Segovia	Dip. Prov.	18-08-36	destitución	31-08-37
385	ORDEN SANTANDER	Mariano de la	guardia mun.	Segovia	Ayto. Segovia		susp. 8 meses/traslado	08-02-39
386	ORTEGA CEBRIÁN	Fe	operadora		Teléfonos	31-08-36		
387	ORTIZ	Giordano	médico	Veganzones	Sanidad	26-10-36		
388	PABLOS GARCÍA	Domitilo de	maestro		M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
389	PALOMAR SANZ	Francisco	peón caminero	Ayllón	Dip. Prov.	15-09-36	destitución	16-06-37
390	PALOMO CASADO	Luciano	maestro	Tolocirio	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
391	PALOMO LAPENA	Mariano	admtivo. jubilado	Segovia	Dip. Prov.	02-09-36	suspensión 1 año	31-08-37
392	PARADES LLORENTE	Honorio	maestro	Carbonero el Mayor	M. Ins. Pública		susp. empl./ inhab.	22-12-39
393	PARRA QUEVEDO	Florencio	capataz caminero	Cuéllar	Obras Públicas	26-08-36	separación definitiva	27-07-37
394	PASCUAL	Luis	maestro			14-08-36		
395	PASCUAL NEVADO	Cesareo	cartero	Sanchoño	Correos	12-11-36	separación definitiva	14-04-37
396	PASCUAL SALINAS	Anastasio	cabo sereno	Carbonero Mayor	Municipal	31-08-36		

RELACIÓN DE EMPLEADOS DEPURADOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DESTINO	ADMON	CESE P.	SANCIÓN DEFINITIVA	FECHA
397	PASTOR MUÑOZ	Marcelino	caminero	Carbonero Mayor	Municipal	31-08-36		
398	PASTOR SACRISTÁN	Abdón	guarda	Dto. forestal Segovia	M. Agricultura	11-09-36	separación definitiva	01-05-37
399	PECHARROMÁN BENITO	Agapito	cartero	Torreadrada	Correos	21-11-36	separación definitiva	25-05-37
400	PECHARROMÁN CRISTOBAL	Guillermo	maestro	Sotosalbos	M. Ins. Pública	26-08-36	separación definitiva	02-02-40
401	PEINADOR DE LA FUENTE	Nemesio	cartero peatón	Escalona del Prado	Correos	16-09-36	separación definitiva	25-05-37
402	PEÑA	Teodoro	juez municipal	Castro Fuentidueña	Justicia	30-09-36		
403	PEÑA HUERTAS	José	recaud. arbitrios	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	destitución	28-04-37
404	PÉREZ ALGUACIL	Clemente	admdor. matadero	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	destitución	29-09-37
405	PÉREZ BENITO	Isidoro	auxiliar		Obras Públicas	25-09-36		
406	PÉREZ CRUZ	Serio	caminero	Vegas de Matute	Obras Públicas	07-09-36		
407	PÉREZ ESTEBAN	Epifanio	maestro	Pinilla Ambroz	M. Ins. Pública		susp. empl./ inhab.	22-12-39
408	PÉREZ FERNÁNDEZ	Martín	vigilante arbitrios	San Ildefonso	Municipal	07-09-36		
409	PÉREZ GARCÍA	Gaspar	médico	Hospital Asilo Pen.	M. Gobernación	31-08-36	reposición	15-04-37
410	PÉREZ MELERO	Aurelio	oficial	Segovia	Telégrafos	26-08-36		
411	PÉREZ PALOMAR	José	maestro	Segovia	M. Ins. Pública	31-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
412	PIQUERO GARCÍA	Marcelino	practicante	Santiuste S. Juan Bautista	Sanidad	21-11-36		
413	PLAZA	Nilamón	médico	Valdevacas Montejo	Sanidad	31-08-36		
414	POSTIGO	Gregorio	caminero	Sepúlveda	Obras Públicas	07-09-36		
415	POZO	Purificación	maestro interino	La Losa	M. Ins. Pública	21-11-36		
416	POZO ARAGONESES	Pedro del	maestro	Labajos	M. Ins. Pública	31-08-36	separación definitiva	02-02-40
417	POZO CALVO	Eustaquia	maestro	Torreadrada	M. Ins. Pública	21-11-36	traslado dentro provincia	22-12-39
418	PRADOS GONZÁLEZ	Próculo	secretario Ayto.	Frumales y Aldehuela	Municipal	07-09-36		
419	PRIETO ALONSO	Ángel	maestro	Sepúlveda	M. Ins. Pública	26-08-36	separación definitiva	02-02-40
420	PUERTAS ALONSO	Casimiro	maestro	Aldealuenga S.María	M. Ins. Pública		separación definitiva	02-02-40
421	QUINTANILLA ROMERO	Mariano	catedrático	Instituto 2ª. Enseñanza	M. Ins. Pública		separación definitiva	21-05-37
422	RAMÍREZ RODRÍGUEZ	Mateo	maestro	Sotos de Sepúlveda	M. Ins. Pública		traslado a Oviedo	22-12-39
423	RAMÓN MORENO	Demetrio	maestro	Castrillo de Sep-lveda	M. Ins. Pública	07-09-36	separación definitiva	02-02-40
424	RAMOS AYUSO	Laureano	perito agrícola	Sección Agronómica	M. Agricultura	07-09-36	separación definitiva	25-04-37
425	RAMOS MELERO	Antonio	farmacéutico titular	Cuéllar	Sanidad	25-09-36		
426	RANZ VAZQUEZ	Bernabé	maestro	Montuenga	M. Ins. Pública		separación definitiva	02-02-40
427	RASCÓN BERNARDOS	Manuela	maestro	Melque	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
428	REDONDO PASCUAL	Félix	escribiente	Cuéllar	Municipal	07-09-36		
429	REDONDO SACRISTÁN	Herminio	maestro	Pelayos Arroyo	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
430	REVILLA CASLA	Luis	escrib. temporal	Sepúlveda	Municipal	07-09-36		
431	REVILLA MARCOS	Ángel	catedrático	Instituto 2ª. Enseñanza	M. Ins. Pública	31-08-36	suspensión definitiva	14-11-36
432	REYES	Rafael	cat. Francés	Instituto 2ª. Enseñanza	M. Ins. Pública		separación definitiva	17-10-37
433	RINCÓN VELASCO	Mariano	perito agrícola	Sección Agronómica	M. Agricultura	07-09-36		
434	RIVERO RIVERA	Manuel J.	maestro	Segovia	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
435	ROBLEDINOS GARCÍA	Valeriano	maestro	Cuéllar	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
436	RODRIGO	Maximiliano	maestro	Valvieja	M. Ins. Pública	14-08-36		
437	RODRIGO SANZ	Policarpo	maestro	Campo de San Pedro	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
438	RODRÍGUEZ	Félix	herrero		Obras Públicas	21-11-36		
439	RODRIGUEZ CUENCA	Cándido	admdor. arbitrios	Riaza	Municipal	08-12-36		
440	RODRIGUEZ CUENCA	Paula	tornera Casa-cuna	Riaza	Dip. Prov.	08-12-36		

RELACIÓN DE EMPLEADOS DEPURADOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	PROFESIÓN	DESTINO	ADMON	CESE P.	SANCIÓN DEFINITIVA	FECHA
441	RODRÍGUEZ FRAILE	Eloy	maestro	Escalona del Prado	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
442	RODRÍGUEZ GARCÍA	Manuel	alumno 3º curso	Segovia	E. Normal	21-09-36		
443	ROMÁN FERNÁNDEZ	Manuel	escrib. J.Cargas Jus.	Sepúlveda	Municipal	07-09-36		
444	ROMERO	Diosdado	guarda talleres		Obras Públicas	21-11-36		
445	ROMERO ARBEIZA	Antonio	aux. admtivo. temp.	Segovia	Dip. Prov.	18-08-36	destitución	18-08-36
446	ROMERO BECERRIL	Anselmo	jefe S. Admón Local	Segovia	Dip. Prov.	26-08-36	destitución	16-06-37
447	ROMERO BECERRIL	Mariano	médico	Segovia	Sanidad	31-08-36		
448	RON URÍA	José María	tesorero	Segovia	Del. Hacienda	21-09-36	separación definitiva	20-03-37
449	ROS DE CASTRO	María	aux. mayor	Segovia	Del. Hacienda	31-08-36	separación definitiva	28-08-37
450	RUBIO	Rogelio	cartero	Puebla de Pedraza	Correos	23-09-36		
451	RUBIO DONOSO	Manuel	maestro	Chatún	M. Ins. Pública	14-08-36	susp. empl./ inhab.	22-12-39
452	RUCIO ARRIBAS	Gregorio	capataz		Dip. Prov.	17-09-36	destitución	16-06-37
453	RUIZ SERRANO	Bernardo	sereno	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	destitución	07-04-37
454	SABATÉ CASAS	Emilio	veterinario	Maderuelo	M. Agricultura	16-10-36		
455	SACRISTÁN BENITO	Francisco	peón caminero	Dip. Prov.	Dip. Prov.	08-12-36	suspensión 1 año	31-08-37
456	SACRISTÁN HERNANDO	Domingo	cartero peatón	Maderuelo	Correos	07-09-36	separación definitiva	18-03-37
457	SACRISTÁN MONJAS	Mª Angeles	maestro	Aguilafuente	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
458	SAEZ NAVASES	Nicanor	empleado	Fuentepelayo	Municipal	07-09-36		
459	SAINZ-PARDO JÁVEA	Valentín	maestro	Laguna Contreras	M. Ins. Pública		separación definitiva	02-02-40
460	SALGADO	Agapito	maestro			14-08-36		
461	SAMANIEGO CASTILLO	Gregorio	secretario Ayto.	Torreclilla	Municipal	26-10-36		
462	SAN JOSÉ	Juan Francisco	guarda	Dto. forestal Segovia	M. Agricultura		separación definitiva	01-05-37
463	SAN PEDRO BOCOS	Luis	médico	Fuente de Santa Cruz	Sanidad	12-10-36		
464	SÁNCHEZ IGLESIAS	Cecilio	maestro	Segovia	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado dentro provincia	22-12-39
465	SÁNCHEZ MARTÍN	Manuel	oficial 2º	Segovia	Correos	07-09-36	separación definitiva	18-03-37
466	SÁNCHEZ NÚÑEZ	Florentino	sereno	Cuéllar	Municipal	07-09-36		
467	SÁNCHEZ SÁNCHEZ	Francisco	maestro	Riaza	M. Ins. Pública	26-08-36		
468	SANSIGRE GARCÍA	Manuel	alumno 2º curso	Segovia	E. Normal	18-09-36		
469	SANTA MARÍA ÁLVARO	Juan	maestro	Cobos Fuentidueña	M. Ins. Pública	14-08-36	inhab. perpetua	02-02-40
470	SANTAMARÍA LÁZARO	Alfredo	alumno maestro	Segovia	E. Normal	18-09-36		
471	SANTOS BARATO	Inocencio	inspector 1ª Ens.	Segovia	M. Ins. Pública		confir./pérdida haberes	05-11-37
472	SANTOS FERNANZ	Juan	maestro interino	Castrojimeno	M. Ins. Pública	26-08-36	inhab. perpetua	02-02-40
473	SANZ BERNARDOS	Jesús	maestro	Cabanillas	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
474	SANZ BLANCO	Hermenegilda	maestro	Cantalejo	M. Ins. Pública	14-08-36	traslado a Oviedo	22-12-39
475	SANZ CASAS	Baldomero	médico	Martín M.de la Dehesa	Sanidad	07-09-36		
476	SANZ DORADO	Polcarpo	maestro	Riaguas S. Bartolomé	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
477	SANZ GALINDO	Andrés	maestro	Adrada de Pirón	M. Ins. Pública		inhab. cargos. dir./conf.	22-12-39
478	SANZ GARCÍA	Vicente	maestro	Castillejo Mesleón	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
479	SANZ HERRERO	Genoveva	telegrafista	Segovia	Telégrafos	26-08-36		
480	SANZ MONTARELO	Moisés	maestro			14-08-36		
481	SASTRE VILLAGROY	Dionisio	maestro	Brieva	M. Ins. Pública		traslado dentro provincia	22-12-39
482	SEBASTIÁN DÍEZ	Carlos	maestro	Maderuelo	M. Ins. Pública	14-08-36	separación definitiva	02-02-40
483	SEBASTIÁN FRUTOS	Luciano	recaud. excedente	Otero de Herreros	Municipal	07-09-36		
484	SERRANO EXPÓSITO	Domingo	bombero	Segovia	Ayto. Segovia	14-09-36	suspensión 8 meses	16-04-37

RELACIÓN DE EMPLEADOS DEPURADOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

[illegible]

CUADRO-RESUMEN DEL PROCESO DEPURADOR EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

EMPLEADO	CARGO	ACUSACIÓN	SANCIÓN	RECURSO
Mariano Palomo Lapeña	Administrativo jubilado	Afiliado U.R. <i>"extremista"</i>	Destitución. Pérdida haberes jubilación	Si, recupera derechos pasivos en 1941
Anastasio Ignacio González Murillo	Administrativo	Afiliado PSOE y preso	Destitución	Si (3) Readmitido en 1951
Anselmo Romero Becerril	Jefe Sección Provincial de Administración Local	<i>"izquierdista de acción, marxista y protegido del FP y socialista"</i>	Destitución	Si, desestimado
Mariano Gómez Zamarrón	Caminero	<i>"Votó FP; consintió en su casa se izase la bandera roja"</i>	Destitución	Si (5) Readmitido en 1949
Mariano Valverde López	Maestro sastre	<i>"Propaganda izquierdista en el trabajo"</i> ; preso	Destitución	Si (2) Readmitido en 1950
Luis Cerezo Marinero	Maestro hortelano	Afiliado PSOE, <i>"propaganda izquierdista en su bar"</i> ; preso	Destitución	Si (2) Readmitido en 1950
Mariano de La Orden Liras	Aux. técnico Vías y Obras	Afiliado PSOE y preso	Destitución	Si
Francisco Sacristán Benito	Caminero	Simpatizante FP	Absuelto con abono de haberes	
José del Hierro San Martín	Ingeniero Vías y Obras	<i>"No presentado, Trabajado y cobrado haberes de los rojos"</i>	Destitución	
Segundo de Andrés Gilsanz	Médico	Afiliado I.R. <i>"Cotizante pro-presos"</i>	Suspensión 1 año	
Francisco Palomar Sanz	Caminero	<i>"Ideas marxistas. No cumplía deberes profesionales. Hijo con los rojos"</i>	Destitución	Si, queda en suspensión por 6 meses
Lorenzo Crespo Illana	Caminero	Interventor FP	Suspensión 6 meses	
Manuel Matesanz Gregoris	Caminero	<i>"Simpatía elementos FP"</i>	Suspensión 23 meses	
Teófilo Medina Pascual	Aspirante a Caminero	<i>"Socialista"</i> , preso	Anulación de su ingreso en el puesto	
Femín Cristobal López	Jefe negociado	Pasado al bando republicano	Destitución	
Ricardo Carrascón Ruiz	Ayte Obras Públicas	En zona republicana	Repuesto al finalizar la guerra	
Francisco de Frutos Ballesteros	Oficial administrativo	En zona republicana	Repuesto al finalizar la guerra	
Gregorio Rucio Arribas	Capataz de carreteras		Destitución	
Cirilo Álvarez Herranz	Peón caminero		Destitución	
Cástor Herrero Remondo	Peón caminero	Preso	Destitución	
Paula Rodríguez Cuenca	Tornera casa-cuna		Destitución	
Andrés Hernando García	Peón caminero		Repuesto sin sanción	

CUADRO-RESUMEN DE LA DEPURACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

EMPLEADO	PUESTO	ACUSACIÓN	SANCIÓN	RECURSO
Juan Antonio Velasco Pérez	Secretario del Ayuntamiento	Ideas izquierda y preso	destitución	Si, repuesto en 1949
Donato Herranz Antón	Vigilante arbitrios	UGT y PSOE y preso	destitución	No
Anselmo Mardomingo Vacas	Botones	JSU y preso	Suspensión por 3 años	No
José Peña Huertas	Inteventor de arbitrios	UGT y PSOE y fusilado preso	destitución	No
Basilio Mate Blanco	Guarda arbolado	UGT	destitución	Si (dos) No readmitido
Diómedes Merino Navares	Sereno	UGT y preso	destitución	No
José Hernanz Esteban	Matarife	Izquierda Republicana y preso	Suspensión por 9 meses	No
Manuel Martín Villacorta	Guarda arbolado	UGT y preso	destitución	No
Abundio Anaut Nieto	Inspector veterinario	Izquierda Republicana	destitución	Si; Destituido, pero puede pedir otro destino en otra localidad
Bernardo Ruiz Serrano	Guarda arbolado	UGT y preso	destitución	No
Francisco Duque Núñez	Barrendero	UGT e I.R., preso	destitución	No
Basilio López Cardiel	Guarda arbolado	UGT y PSOE, preso	destitución	No
Clemente Pérez Alguacil	Administrador del Matadero	Simpatizante del FP	destitución	Si (dos) No readmitido
Serapia Escolar Garzón	Encargada evacuatorio	Ideas izquierda	destitución	No
María Calonge Mugarza	encargada evacuatorio	Ideas marxistas	destitución	No
Filemón Gómez Rojo	Recaudador arbitrios	preso	destitución	
Juan Bautista Cabello	Vigilante arbitrios	UGT	destitución	No
Gorgonio Jimeno Cantalejo	Matarife		destitución	
Domingo Serrano Expósito	Bombero	UGT	Susp. Por 8 meses	No
Juan Olalla Moreno	Portero del hospital de epidemias	UGT y Juventudes Socialistas y preso	destitución	No
Juan Vacas Martín	Vigilante arbitrios	Izquierda Republicana, preso	destitución	No
Ignacio de la Cruz Galíndc	Auxiliar administrativo	JSU y preso	destitución	Si
Calixto Núñez Gómez	Vigilante arbitrios	UGT y no besar mano a obispo	Suspensión 8 meses y traslado destino	No
Primitivo Martín	Inspector veterinario	Simpatizante del FP	Repuesto	
Luis González Navarra	Cabo de serenos	Unión Republicana	Destitución	Si (dos) No readmitido
Mariano de la Orden Santander	Guardia municipal	Simpatizante del FP y no contribuir Auxilio Social	Suspensión 8 meses y traslado destino	No
Valentín Burgos	Jefe negociado	Unión Republicana	Suspensión 4 meses	No
Martín Valentín Arranz López	Jefe negociado	Propaganda ideas marxistas entre	Suspensión 9 meses	No
Mariano Duque Nuñez	Guarda arbolado	PSOE y UGT, preso	Suspensión de 1 año	No

LISTA DE TESTIMONIANES ORALES

Se han mantenido entrevistas con las siguientes personas en las fechas y lugares que se indican:

Abad, de Maderuelo, 7 diciembre de 2001.
 Adelino Martín de la Morena, 13 de enero 2001.
 Afrodisio Bartolomé Aceves, Navas de Oro, 20 enero 1999.
 Agapito Galindo Aceves, Coca, 2 de junio de 1998.
 Alcalde de Carbonero; 15 abril de 1998.
 Alcalde de Labajos, 2 de marzo de 1999.
 Alejandro Fisac, Fuenterrebollo, 29 julio 1999.
 Alejandro González, Segovia, 12 diciembre de 2001.
 Alejandro Sebastián, Villacastín, 18 mayo 1999.
 Amador Marugán Arribas, Nava de la Asunción, 19 de febrero de 2002.
 Amalia Cano, La Vid, 7 de diciembre de 2001.
 Ángel García Nuño, Segovia, 12 febrero 1998.
 Ángel Gracia Moreno, Segovia, 19 mayo 1999.
 Ángel Pérez Barreno, Segovia, 29 de marzo de 1998.
 Antolín, de Samboal, 16 abril 1998.
 Antolín, de Valleruela de Pedraza, 23 julio 1998.
 Antonia García Casillas, Gallegos, 22 de julio 1998.
 Antonio Gil, Matabuena, 4 de junio de 1998.
 Antonio Senovilla, Cuéllar. 27 julio 1999.
 Aquilino García de Diego, Vegas de Matute, 11 de mayo 1998,
 Basilio Ramos, La Vid, 7 de diciembre de 2001.
 Bernabé Vega y María Sombría, Calabazas, 16 de agosto de 1999.
 Calixto, Cabezuela, 29 de julio de 1999.
 Carlitos, Riaza, 22 de julio de 1999.
 Carlos Fernández Plata, San Ildefonso, 18 enero 2000.
 Carmen Arranz Marinas, Segovia, 11 enero 1998, 4 febrero, 11 de junio 1999.
 Cayo Quintanilla Suárez, Cuellar, 27 de julio de 1999.
 Celia Barbado García, Nava de la Asunción, 19 de febrero de 2002
 Cesáreo Álvarez, San Rafael, 29 de julio de 1998.
 Cipriano Herrero Barrio, Zarzuela del Monte, 16 febrero 1998.
 Concha Zamorano, Estación de El Espinar, 2 septiembre 1999.
 Crispín Rubio Arranz, 20 años, Navas de Oro, 1 de febrero 1999.
 Daniel Cristóbal, Sepúlveda, 23 de noviembre de 2001.
 Dimpna Domínguez Martín, La Cuesta, 2 de julio 1998.
 Dolores Romero Arbeiza, Segovia, Septiembre 1998.
 Domingo Rincón, Martín Miguel, 13 julio 1998.
 Eduardo Antoranz, Sepúlveda, 4 de enero de 2002.
 Elías García Criado, "Cachano", Cuéllar, 30 julio 1998.
 Eliseo Vega Galindo, Calabazas, 13 de junio de 1998.
 Emilia, Segovia, 11 mayo 1998.
 Esteban Barba del Barrio, 21 de enero de 2002.
 Eufasio García Pascual, Carbonero, 29 de abril de 1998.
 Eulalia Cancho, Riaza, 19 jul 1999.
 Fausto Pérez Bonín, Segovia, 3 de abril de 1998, 15 de enero 1999.
 Felipa Laguna, Cuéllar, 30 julio 1998.
 Felipe Dimas, de Zarzuela del Monte, 8 de mayo 1998.
 Felisa Peñas, La Vid, 7 de diciembre de 2001.
 Félix, Cabezuela, 29 julio 1999.
 Félix, Estación de El Espinar, 2 septiembre 1999.
 Fernando de Pablos, Montuenga, 18 abril 2000.

Fidel de Maderuelo, 7 diciembre de 2001
 Francisco Marinero, de Samboal, vive en Cuéllar. 7 de abril 1998.
 Gregoria Díez Maté, Fuente el Olmo, 14 septiembre 1998.
 Gregorio González Llorente, Segovia, 15/12/97, 19/1/98, 15/9/98.
 Hipólito Arranz González, Navas de Oro, 13 de enero de 1999.
 Hipólito Herranz García e Inés García de Pablos, San Rafael, 10 noviembre 1998.
 Honorio Muñoz, Riaza, 19 julio 1999, 84 años.
 Inés Santa Engracia, Orejana, 22 de julio 1998.
 Irene Arranz Gómez, Fuente el Olmo, 14 septiembre 1998.
 Isaac Díez, Fuente el Olmo, 30 julio 1998.
 Isaías Rodrigo Criado, Cuéllar, 22 julio 1999.
 Isidoro Romano Pascual, Segovia. 19/1/98, 2/2/98, 23/3/98, 15/9/98.
 José Arroyo Tomé, Segovia, 3 enero 2002
 José Peña Quevedo, Segovia, 21 julio 1999.
 Juan Antonio Cerezo Estremera, Riaza, 22 octubre 1998, 19 julio 1999.
 Juan Blasco Alonso, San Rafael, 14 de mayo 1999.
 Juan Gil, de Matabuena, 21 mayo 1998
 Juan Muñomel Cámara y su mujer Anastasia, El Espinar, 17 abril 2000.
 Juan Olmos, vecino de Madrid, por teléfono, 19 de abril 2000
 Juan Quinzano Santos, Nava de la Asunción, 2 de junio 1998.
 Julia, archivera de Cuéllar, 12 mayo 1998.
 Julio Sanz, Riaza, 22 julio 1999.
 Justiniana Melero, Laguna de Contreras, 11 julio 1998.
 Leopoldo Cámara González, Bernardos, 9 julio 1997, 26 de marzo 1998.
 Liborio López González, Segovia, 1 de julio 1998.
 Lucía García, Villacastín, 18 mayo 1999.
 Luciano de Frutos García, Navares de Enmedio, 3 julio 1998.
 Luis Cerezo Marinas, Segovia, 20 de abril 1998.
 Luis Navarro Huertas, Palazuelos, 28 julio 1999.
 Luisa Carrera Vega, Valsaín, 16 diciembre 1998.
 Manuel González Herrero, Segovia, 28 de mayo de 1998.
 Manuel Rodríguez, Segovia, 1 de julio 1998.
 Manuel Sansigre, Segovia, 17 septiembre 1998.
 María Fuentetaja Arranz, Segovia, 9 de junio de 1998.
 María López María, El Espinar, 18 abril 2000.
 María Moral, San Rafael. 26 julio 2001.
 María Moreno García, y Justo Moreno, 10 febrero 2000
 Mariano Antón, Sepúlveda, 4 noviembre 1994.
 Mariano de Sebúlcór, 19 de mayo de 1998.
 Mariano Martín Arribas, Segovia, 14 de abril de 1999.
 Mariano Revillo de Lucas, San Ildefonso, 24 enero 2000.
 Mariano Vázquez Sebastián, Segovia, 8 de febrero de 2002.
 Maribel, de Castrojimeno, 9 de agosto 1999.
 Martín Borreguero, Muñoveros; 5 de mayo 1998.
 Matrimonio, naturales de Ituerto, vecinos de la Estación de El Espinar, 2 septiembre 1999
 Mercedes González Serrano, Segovia, 24 abril 1998.
 Mercedes González, Segovia, 11 de junio 1998.
 Miguel Ángel, secretario Juzgado de Riaza, 23 julio 1998.
 Miguel Bartolomé Cámara, Estación de El Espinar, 29 de julio 1998.
 Miguel Martín Salido, San Rafael, 26 julio 2001.
 Miguel Romano Pilar, 5 de febrero de 2002.
 Modesta Arroyo Tomé, Segovia, 16 enero 2002
 Modesto Liceras, Riaza, 19 julio 1999.
 Narcisa Sanz Velasco, Estación de El Espinar, 2 septiembre 1999.

Nicolás Berzal Encinas, Aldealengua de Pedraza, 15 de junio de 1998.
 Nicomedes Carreras, Navalilla, 25 febrero de 1999.
 Nieto de Basilisa Zarracín, Navas de Oro, 20 enero 1999.
 Pablo Acebes Martín, Chañe, 21 julio 1998.
 Patricia, vecina de Carrascal del Río, 25 de febrero de 1999.
 Paula Sombría Sanz, 14 de abril 1998.
 Pedro Espinar García, San Ildefonso, 29 julio 1999.
 Pedro González, Montuenga, 18 abril 2000.
 Pedro Sanz Bermejo, Sauquillo de Cabezas, 30 julio 1998, 14 de septiembre 1998.
 Pérez, Palazuelos, 6 de junio 1998.
 Poli de Frutos, Navalmanzano, 16 de mayo 1998.
 Primitivo Mingueta García, Calabazas, 12 julio 1998.
 Regino Casado Subtil, La Losa, 4 diciembre 1994.
 Restituto Sanz Blanco, Arcones, 9 noviembre 1998.
 Ricardo Mateo González, Segovia, 6 de octubre de 1998, 27 octubre 1998.
 Rodrigo Pascual, Chañe, 21 julio 1998.
 Romualdo Díez Maté, Fuente el Olmo, 20 noviembre 1998.
 Rufino de Castro, El Espinar, 17 abril 2000.
 Segunda Bermejo Antón, Segovia, 4 febrero 1994.
 Segundo Olalla, Nieva, 28 julio 1998.
 Serapio Bermejo Rey, Segovia, 14 de febrero de 2002.
 Severiano Alonso Soriano, Estación de El Espinar, 2 septiembre 1999.
 Silvestre Ramos Barreno, El Espinar, 12/12/94, 26/07/96, 11/3/98, 27/7/98.
 Sofía Escudero Otero y Narciso de la Orden Fraile, Segovia, 11 de enero 1999.
 Sotero García Aragón, Samboal, 16 de abril 1998.
 Teófilo García López, Valsaín, 29 de mayo de 1998, 20 julio 1998.
 Tomás Rodríguez Borrego, Zamora, 10 septiembre 1998.
 Urbano Barreno Orejudo, Vegas de Matute, 7 de mayo 1998.
 Valeriano García, Hontoria, 19 febrero 1998.
 Vecina de Navas de Oro, 20 enero 1999.
 Vecina de Riaza, 19 julio 1999.
 Vecino de Castrojimeno, 9 de agosto 1999.
 Vecino de La Vid, 7 de diciembre de 2001.
 Vecino de Navas de Oro, 13 de enero de 1999.
 Vecino de Otero de Herreros, 19 noviembre 1994.
 Vecino de Tres Casas, 26 julio 2001.
 Vecino de Valverde del Majano, 10 marzo 1998.
 Vecinos de Carrascal del Río, 25 de febrero de 1999.
 Vecinos de Martín Muñoz de las Posadas, 27 julio 1998.
 Vecinos de Vallelado, 21 de julio 1998.
 Víctor de Santos, Vitines, Lastras de Cuéllar, 22 de abril de 2000.
 Víctor Herranz Palomares, Nieva, 28 julio 1998.
 Zacarías Alonso Gómez, Valsaín, 21 febrero 2000.

COPIA QUE SE CIERA.

"Hay un sello en tinta que dice: - Gua. Civil - 1er. Jefe. - Comand* de Segovia. - Al margen: - Agresión a fuerza del Cuerpo. - Excmo. Señor: - Sobre las 16 horas del día 20 del actual, y en cumplimiento de Ordenes recibidas del Comandante Militar de esta Plaza, el Teniente D. Gregorio Ruiz Santa Olalla, al mando del de igual clase D. Evaristo Valle Fernández y 20 individuos de tropa, salió de esta Capital con dirección a El Espinar y San Rafael, ambos de esta provincia, al objeto de efectuar una operación de policía y limpieza de las milicias marxistas que hostilizaban y tenían atemorizado al vecindario por aquellos parajes, y al llegar sobre las 17,30 horas a las inmediaciones del caserío denominado de "Prados", situado en El Portachuelo, término municipal de El Espinar fue agredido por un grupo de unos 20 individuos, correspondientes a dichas milicias, los cuales, armados con escopetas y rifles, hicieron fuego contra la fuerza, repeliendo esta la agresión sin que hubiera que lamentar de los agresores. Los nombres de los agresores a los que se les dio muerte son: JOSEFINO GARCIA EL LAS HERAS, de 31 años; RUBEN GARCIA EL LAS HERAS, de 20, de Guadarrama (Madrid); RAFAEL MARTIN CALADO, de 18; BASILIO BARRERO LÓPEZ, de 25; MANUELINO SAN PABLO SEGOVIA, de 23; VALENTIN JIMENEZ MARQUEL, de 25, y FRANCISCO BALONERO GARCIA, de 25, todos ellos vecinos de San Rafael; RAMIRO GONZALEZ BALACA, de 26, Leganés (Madrid); ISABELO HERAS DELGADO, de 24; AURELIO CABRERA PEALA, de 32, ambos de Tablada (Madrid); DOMINGO PAREDES SANTIN, de 19, Castañeras (León); BENIGNO BARTOLOME CAMARA, de 19, El Espinar; FRANCISCO ILORANTE GONZALEZ, de 48, Los Baños; MARTINO CUESTA GARCIA, de 27, Clombrades; VICTORIO GO-

REPRODUCCIONES DOCUMENTALES

COPIA QUE SE CITA:

=====

"Hay un sello en tinta que dice: = Gua. Civil - ler. Jefe. - Comand^a de Segovia. = Al margen: - Agresión a fuerza del Cuerpo. = Excmo. Señor: = Sobre las 16 horas del día 20 del actual, y en cumplimiento de órdenes recibidas del Comandante Militar de esta Plaza, el Teniente D. Gregorio Ruiz Santa Olalla, al mando del de igual clase D. Higinio Valle Fernández y 20 individuos de tropa, salió de esta Capital con dirección a El Espinar y San Rafael, ambos de esta provincia, al objeto de efectuar una operación de policía y limpieza de las milicias marxistas que hostilizaban y tenían atemorizado al vecindario por aquellos parajes, y al llegar sobre las 17,30 horas a las inmediaciones del caserío denominado de "Prados", situado en El Portachuelo, término municipal de El Espinar fué agredido por un grupo de unos 20 individuos, correspondientes a dichas milicias, los cuales, armados con escopetas y rifles, hicieron fuego contra la fuerza, repeliendo ésta la agresión sin que hubiera que lamentar baja alguna; habiendo hecho prisioneros a los agresores paisanos CARLOS LLORENTE MORENA, de 31 años; EUSEBIO GARCIA DE LAS HERAS, de 20, de Guadarrama (Madrid); RAFAEL MARTIN SALIDO, de 18; BASILIO BARRERO LLORENTE, de 25; MARCELINO SAN MATEO SEGOVIA, de 23; VALENTIN JIMENEZ MARUGAL, de 25, y FRANCISCO PALOMERO GARCIA, de 25, todos ellos vecinos de San Rafael; RAMIRO GONZALEZ BALACA, de 28, Leganés (Madrid); ISABELO HERAS DELGADO, de 24; AURELIO CABRERA PLAZA, de 32, ambos de Tablada (Madrid); DOMINGO PAREDES SANTIN, de 19, Castañeras (León); BENIGNO BARTOLOME CAMARA, de 19, El Espinar; FRANCISCO LLORENTE GONZALEZ, de 48, Los Huertos; MARIANO CUESTA GARCIA, de 27, Clombrada; VICTORIO GO-

MEZ RUBIO, de 24, Iglezuela (Toledo); LORENZO APARICIO DIAZ, de 32, Sotillo de la Adrada (Avila); JESUS FERNANDEZ SILVA, de 25, El Espinar, y JUAN ANDRES GONZALEZ, de 54, San Rafael, estos dos últimos guardas forestales; replegándose la fuerza hacia el poblado de San Rafael, y conducidos los prisioneros a esta Capital; y viéndose obligado a pedir refuerzos, por haber recibido a su llegada a dicha localidad confidencias de que en la estación del citado Espinar se organizaban grandes partidas para hostilizar a la fuerza, para lo que consideraba insuficiente la que llevaba, la autoridad militar dispuso la inmediata salida de otros 20 hombres al mando del Sargento de esta Comandancia D. Claudio Herguedas Ortega, Jefe de la escolta de prisioneros, con dirección a San Rafael. = A la llegada a dicho punto del meritado Oficial, se encontró con un grupo de marxistas hechos fuertes en el edificio destinado a Central telefónica, desde donde fué agredida nuevamente la fuerza con escopetas y al repeler la agresión resultaron muertos los vecinos de dicha localidad PEDRO CUESTA, de 55 años, y Félix del Pozo, de 65, y herido gravísimo, falleciendo poco después, otro individuo que no pudo ser identificado (se supone pueda ser un Teniente de Alcalde del pueblo de Guadarrama) por haber tenido que salir precipitadamente para el caserío de "Prados", al recibir noticias de que la fuerza al mando del meritado Sargento Herguedas, que se dirigía en su auxilio, no podía pasar por haber sido detenida y agredida por un numeroso grupo de revoltosos parapetado en los alrededores del expresado caserío, encontrando al llegar al misma la fuerza en el interior de una casa y rechazados los revoltosos, y que habían resultado en el encuentro, sostenido a las 19,30 horas, heridos de arma de fuego, los guardias segundos ANASTASIO GARCIA GARCIA y VALENTIN VALLE SANZ, que han quedado hospitalizados en la Clínica Militar de esta Capital; el primero con fractura del brazo derecho, gravísimo, y el segundo en la cabeza, leve, y rota la garganta del mosquetón serie E número 2345 correspondiente al guardia de igual clase EMILIANO LOZANO PEREZ, así como también muerto el alumno de la Academia de Artillería e Ingenieros Sr. Rebollo, que se encontraba entre dichas fuerzas;

y por parte de los agresores, muertos los paisanos ALEJANDRO ARANDA MARTIN, de 22 años, vecino de Madrid; MARCELINO MESIA VARA, de 31, y BRAULIO ROMANO (guardia municipal), de 45, ambos de El Espinar, y PIO BARBIERI, de filiación desconocida, y prisioneros GONZALO MARTIN RAMOS, de 45 años; RAIMUNDO RODRIGUEZ ESPONCIANO, de 21; NARCISO FERNANDEZ HERRANZ, de 30; JULIAN MIÑO RODRIGUEZ, de 30; SANTOS DE LAS HERAS MARICALVA, de 33; y heridos prisioneros AMADEO DE LAS HERAS SANZ, de 30; ENRIQUE DE LA FALLA SANZ, de 34, y DIONISIO RODRIGUEZ GARCIA, de 30, todos vecinos de El Espinar, y ANGEL ANTONIO SANTIAGO GONZALEZ, que por el estado en que se encuentra a consecuencia de las heridas no puede saberse por el momento su edad y vecindad; los que en unión del mosquetón reseñado y las armas y efectos ocupados a los agresores: 19 escopetas, 4 carabinas, 17 picos, 7 hachas, 3 palas, 2 hoces, 1 bastón-estoque, 18 cajas de cartuchos, 40 sueltos de diferentes calibres, 2 bandoleras de cuero de guardas forestales, 1 corneta de los mismos, así como la camioneta marca Ford, de 8 cilindros matrícula M-58488, propiedad de D. Pío Moreno Horcajo, vecino de Madrid, calle de Barbieri, número 4, que habían utilizado para su transporte, fueron puestos a disposición del Sr. Comandante Militar de la Plaza, y regresando la fuerza a su base sin más novedad. = Lo que como continuación y ampliación a mi radiograma de ayer, tengo el honor de participar a V. E. para su superior conocimiento. = Viva V. E. muchos años. = Segovia 22 de Julio de 1936. = El Teniente Coronel primer Jefe, Mariano Nieto Sánchez. = Rubricado. = Excmo. Señor General Jefe de la 7ª División Orgánica. - VALLADOLID."

Es copia:

El Teniente Coronel primer Jefe,



[Handwritten signature]



El Excmo. Sr. General de la 7ª División Orgánica en comunicación de lo de los corrientes, me dice lo siguiente:»
Las circunstancias actuales que de hecho y derecho, determinan la situación de campaña, obliga a simplificar trámites en lo concerniente a actuaciones para levantamiento y reconocimiento pericial de cadáveres de individuos presuntamente fallecidos por choque con la fuerza pública, debiendo en estas causas limitarse la actuación de los Juzgados, tanto militares como civiles, a ordenar rapidísimamente su traslado a los depósitos correspondientes donde serán identificados y reconocidos a los fines de certificación de fallecimiento y referencia solamente del aspecto exterior del mismo, sin práctica de autopsia, procediéndose lo más rápidamente posible al enterramiento».

Lo que transcribo a V.S. para su más exacto cumplimiento, sirviéndose acusar inmediato recibo de la presente.

Segovia 15 de Agosto de 1.936.

Juan de los Rios



Gobierno Civil
de la
Provincia de Segovia

Legaciado

Número

752

El Jefe de la Prision Preventi
va y correccional de esta Capital
se servira entregar ,a los portador
res de esta orden los detenidos
que al respaldo se expresan, para
su traslado a Salamanca.

Segovia 14 de agosto de 1934.

El Gobernador Delegado de
la Autoridad Militar



E. Rospaina

[illegible]

- Alejandro Arranz Marinas (a) ✓
- Jesus Serrano Gonzalez ✓
- Manuel Serrano Gonzalez
- Julio Fuster Garcia. ✓

Resili en tres determinados segmentos
Alexandria aranea Maximo #
tenis terrano fuvoral
fulu Fuster farcia
zera ner conduendo a un
der tus .

15 de agosto de 1988

Sanctus Fernandez





Gobierno Civil
de la
provincia de Segovia

ociado

nero

1091



Ordenado por la superior au-
ridad militar de la plaza el tras-
lado a Salamanca de los condena-
dos por Consejo de Guerra que se
relacionan al respaldo y del dete-
nido gubernativo que figura en úl-
timo lugar, se servirá entregarlos
al dador de la presente que con
escolta se hará cargo de los mis-
mos a los expresados efectos.

Dios guarde a V. muchos años.

Segovia 26 de Agosto de 1936.

El Gobernador civil, Delegado de
la Autoridad Militar.

G. Rosas

ctor de a Prisión Provisional.....Segovia.

CONDENADOS POR CONSEJO DE GUERRA

José Pizarro Ciné
Enrique Castelló Castelló
José Aguilar Roldán

Detenido Gubernativo

Juan Marco Elorriaga

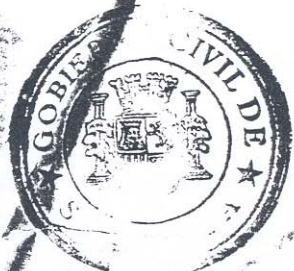
Me hago cargo de los cuatro
primeros a que se refiere lo que
ordenaba para ser cumplido en
el momento a la una hora del día de hoy
Segoria 27 Agosto 1936

José Hernández Contreras



orden del Excmo Gobierno Civil
 de la
 provincia de Segovia

ciado
 1233



segoviano

Habiendose ordenado el traslado a Valladolid a disposicion de la Autoridad militar de aquella plaza los detenidos anotados al respaldo, sírvase Vd. hacer entrega de los mismos al dador de la presente para su cumplimiento.

-Dios guarde a V. muchos años.

Segovia 30 de Agosto de 1936.

El Delegad de la Autoridad Militar:

C. España

Director de la Prision Provisional Segovia.

31-Agosto
Angel Gracia

Agustin Hernandez +

Eliodoro Fernandez +

Antonio Hernandez Benito +

Arturo Aparicio Gonzalez +

Gregorio Esteban Alvaro +

Manuel Gonzalez Herero +

Florencio del Rey Garcia T

Total once

Me hago cargo de todos los
tenidos a que se refiere la pre-
sente orden para ser inducido
a su destino.

Lejovian 21 Agosto 18
Jose Hernandez

Expediente procesal del detenido Juan Santos Fernandez

Imp. E. R. Alcalá. — Mod. 117.

Natural de *Las Huesas de Cuellar* provincia de *Segovia*,
vecino de *Castrojo* provincia de *Madrid*,
hijo de *Miguel* y de *María*.
edad *48* profesión *Maestro Vendedor*
instrucción *buena* religión *—*
estado *soltero* hijos *—* núm. de ellos *—*
antecedentes *no consta* ingresa por *1ª*
Domiciliado *—*

SEÑAS PARTICULARES

COLOR DE
Iris (ojos) *grises*
Cabello *castaño*
Piel *morena*
Cejas *rectas*
Nariz *ancha*
Boca *regular*
Barba *peluda*
Cara *ovoidal*
Talla *—*

Fórmula dactiloscópica

SEÑAS PARTICULARES

Pulgar derecho

Registro del individuo al ingresar

CAUSA

NUMERO			NUMERO					FECHAS	
General	De orden	De libro	Sumario	Rollo	AÑO	JUZGADO	SECRETARIA	DELITO	
<i>197</i>						<i>Sección Político</i>			<i>1.º 9-1926</i>

FECHAS

hora	Día	Mes	Año	VICISITUDES
------	-----	-----	-----	-------------

1.º Septe 1926 Ingresa en esta prisión, procedente de *Castrojo*
entregado por *fueros de plaza Diputado*
en concepto de *detenido* a disposición
de la *autoridad militar* de



Septiembre 1.º Septe 1926
El jefe
Angel Martín

Fechas

VICISITUDES

A Mes Año

5 Setiembre 1936 Se entregado a la fuerza de falange por
violencia y condición a seguir



Al jefe
Muyil marqués

Expediente procesal de *detenido* *Antonio* *Albarran Moreno*

Imp. E. R. Alcalá. — Mod. 117.

Natural de *Granada* provincia de *Buenos*
vecino de *Septiembre* provincia de *Segovia*
hijo de *Lorenzo* y de *Edmundo*
edad *56* profesión *Industria*
instrucción *buena* religión *—*
estado *casado* hijos *tres* núm. de ellos *6*
antecedentes *contra* ingresa por *1* vez
Domiciliado

SEÑAS PARTICULARES

COLOR DE { *Iris (ojos)*
Cabello
Piel
Cejas
Nariz
Boca
Barba
Cara
Talla

Fórmula
dactiloscópica

SEÑAS PARTICULARES

Pulgar derecho

Registro del indi-
viduo al ingresar

CAUSA

NUMERO			NUMERO		AÑO	JUZGADO	SECRETARIA	DELITO	FECHAS	
General	De orden	De libro	Sumario	Rollo					De la detención o prisión	De la libertad
<i>105</i>									<i>21-7-1925</i>	

FECHAS

hora Día Mes Año

VICISITUDES

1925 Julio 1925

Ingresar en esta prisión, procedente de esta villa.
entregado por *fueros* del *gobierno*
en concepto de *detenido*
de la *Autoridad Militar* con *mandamiento* a disposición
del *Alcalde de esta villa*
H. Liza
Juyl martín

Fechas

VICISITUDES

Hora Día Mes Año

2 Agosto 1986 Se entregó a la firma de la empresa española en virtud de orden verbal del Comandante. Imágenes de este plano.

Al fide
Angel marín



D. Francisco Pelado Martín Juez municipal interino
y encargado del Registro civil de Caberuela

CERTIFICO: Que en el tomo diez y seis Sección de defunciones, del
Registro civil de mi cargo, al folio veintidós y dos, aparece el acta
que a la letra dice así:

Número 128 En Caberuela provincia de Segovia
a las diez y media de la mañana minutos
del día diez y seis de agosto de mil nove-
cientos veinte y seis, ante D. Francisco Pelado
Martín Juez municipal interino

y D. Francisco Pelado de los Hornos Secretario interino
se procede a inscribir la defunción de D.
de edad 37 años de edad natural de Sanjurjo de Caberuela
provincia de Segovia hijo de D. Fabiano Laine y de
D.^a Emilia Laine, domiciliado en Sanjurjo de Caberuela
número -, piso -, de profesión

Industria y de estado casado con Juana Bernero
y un sex hijos menores de edad ignorando el nombre de todos y que
signados a María Laine y Fernando Laine Bernero

falleció en el interio de su casa de este término
el día diez de este mes de la mañana entre las once y dos
y - minutos, a consecuencia de heridas de bala
según resulta de las diligencias practicadas
y reconocimiento practicado, y su cadáver habrá de recibir sepultura en el ce-
menterio de Sanjurjo de Caberuela

Esta inscripción se practica en virtud de manifestación verbal de

Juan Gomez Benal, natural y vecino de Cabanella, casado, status
municipal y de S.S. en edad
consignándose además que fue muerto por indios de Mlanga Española
según noticias por ellos al Sr. Alcalde.

habiéndola presenciado como testigos D. Eugenio Sam Gargia
y D. Teodoro Cabal Pastor, mayores de edad y vecinos
de Cabanella.

Leída este acta, se sella con el del Juzgado y la firma el Sr. Juez, los testi-
gos y el manifestante de que certifico.

El Sr. Man, Brancio Perales = El manifestante Juan Gomez =
Testigo Eugenio Sam = Testigo Teodoro Cabal = El secretario
mito Juan Cabal = con rubrica = hay un sello en tinta
que dice = Juzgado Municipal de Cabanella.

Es copia de la original

Y para que conste a petición de la señora Juana Delmeja
expido la presente en Cabanella a diez y nueve
de Octubre de mil novecientos veinte y cinco.

El Sr. Municipal

Brancio Perales

P. S. M.
El Secretario,

Juan Cabal

DON LUIS GASQUE PEREZ AZNAR ABOGADO SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTA CIUDAD Y SU PARTIDO.

E

DOY FE: Que en el expediente a que se hara mencion se ha dictado siguiente.

A U T O. = En la Ciudad de Segovia a diez y nueve de Junio de mil novecientos treinta y siete.

R e s u l t a n d o que Doña Maria Martin Fraile, mayor de edad, viuda, vecina de esta Capital y con domicilio accidental en Santa Maria de Nueva, acudio a este Juzgado con su escrito fecha quince de Febrero ultimo exponiendo que su esposo Don Pedro Natalias Garcia, Maestro Nacional que fue de esta Capital habia desaparecido de la prision llamada "Carcel vieja" de esta Ciudad donde estaba detenido gubernativamente el dia quince de Agosto del pasado año de mil novecientos treinta y seis, habiendo tenido noticias ese mismo dia de que fue inhumado en el Cementerio Municipal y sin poder averiguarse su paradero y que como su defuncion no se hallaba inscrita en el Registro Civil acudia al Juzgado amparada en el Decreto numero sesenta y siete de la Junta de Defensa Nacional y la Orden concordante de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado de diez de Noviembre de mil novecientos treinta y seis a fin de que se procediera a inscribir la expresada defuncion o en su caso la desaparicion; haciendo constar que contrajo matrimonio el dia once de Mayo de mil novecientos diez y nueve con el referido Pedro Natalias Garcia, de cuyo matrimonio tenia dos hijas llamadas Maria Soterrana y Maria Asuncion, siendo su marido natural de Barcelona, donde nacio el dia dos de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos y que era hijo de Pedro y de Vicente, de cuyo escrito ratifico la recurrente ante el Juzgado de igual clase de Santa Maria de Nueva por haberse asi acordado por providencia de veinte de Febrero ultimo y nayo exhorto obra unido a este expediente.

R e s u l t a n d o que con fecha dos de Marzo ultimo se acordo librar oficio al Señor Capellán del Cementerio del Santo Angel de la Guarda, de esta Ciudad para que comunicase a este Juzgado si era cierto que se habia recibido en dicho Camposanto sepultura a Don Pedro Natalias Garcia el dia quince de Agosto ultimo asi como al Señor Director de la Prision Provincial tambien de esta Ciudad llamada "Carcel Vieja" a fin de que manifestara el actu al paradero del referido Pedro Natalias, recibiendo en este Juzgado las contestaciones, que obran unidas en este expediente por medio de oficio resultando del primero que dicho individuo no aparecia como inhumado en referido Camposanto y del segundo que fue entregado por la fuerza que se presentó a recogerlo con orden del Excmo. Señor Gobernador, Delegado de la Autoridad Militar para su traslado a Burgos el dia quince del pasado Agosto: habiendose recibido con citacion y audiencia del Ministerio Fiscal la informacion testifical complementaria de los hechos que se exponia en el referido escrito, y cuyos siete testigos que en la oportuna lista formalizaba la recurrente manifestaron conocer y tratar al Don Pedro Natalias Garcia y sabian que dicho individuo encontraba detenido en la Carcel vieja, desapareciendo de alli el mismo dia sin tener noticia de su actual paradero acordandose comunicar al Excmo.

diente al Ilmo Señor Fiscal quien le devolvio con dictamen de que no apareciendo de momento acreditado la defuncion ni la desaparicion del tan repetido Pedro Natalias se practicasen por este Juzgado cuantas diligencias se estimasen pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y en su virtud acordose por providencia de veintiocho de Mayo ultimo en vista de lo que se expresaba en el oficio del Jefe de la Prision Provincial de esta Capital y que obra unido al folio cinco de este expediente librar exhorto al Juzgado de igual clase de Burgos a fin de determinar los datos que en aquel se expresaba cuyo exhorto fue debidamente diligenciado apareciendo del oficio de la Prision Provincial de Burgos que en dicho Establecimiento no se ha hallado ni se halla actualmente recluido en el mismo Pedro Natalia y del de la Prision Central tambien de Burgos que no existia ningun recluso con el nombre de Pedro Natalia y que consultado los libros del mismo no figuraba hubiera tenido ingreso en dicho Establecimiento cuyos oficios obran unidos al exhorto referido y en su consecuencia diose vista al Señor Fiscal para dictamen devolviendole de que asida tenia que oponerse a la declaracion de desaparecido de Don Pedro Natalia Garcia.

Con siderando que con arreglo a lo dispuesto en el articulo primero del Decreto de once de Noviembre proximo pasado y en el texto del del dia diez de dicho mes y año dictado para su aplicacion es procedente declarar que de la situacion no resulta acreditada la defuncion de Don Pedro Natalia Garcia y si solo su desaparicion por lo que es procedente mandar inscribir la misma en el registro civil correspondiente.

Vistos los articulos citados y los datos de aplicacion e inscribese la informacion practicada en esta diligencia de Don Pedro Natalia Garcia, de 45 años de edad, natural de Barcelona, hijo de Pedro y Vicenta, domiciliado en Segovia, de profesion Maestro Nacional, y de estado casado con Doña Maria Martin Fraile dejando dos hijos llamados Maria Soterrera y Maria de la Asuncion que desaparecio de la prision llamada "Carcel vieja de esta Ciudad, donde estaba detenido gubernativamente el dia quince de Agosto del pasado año de mil novecientos treinta y seis, cuyo asiento sera inscrito en la seccion tercera de dicho Registro Civil y en las hojas y libros correspondientes, pero en el espacio en blanco destinados en aquellos libros o notas marginales, librandose a tal efecto testimonio de esta resolucion al referido inferior que debiera comunicar a esta Superioridad habiendolo llevado a efecto en la forma que se expone.

El Señor Don Santos de Gandarillas Calderon Juez de primera Instancia de esta Ciudad y su partido así lo acordó y firmó en la misma fecha al principio expresada. Doy fe. Santos Gandarillas.

llas.=Ante mi.=L. Gasquez.=rubricados.=

Lo relacionado es cierto y lo inserto corresponde con lo copiado de que doy fe y me remito. Y para que así conste cumpliendo lo mandado expido el presente que firmo en Arevalo a diez y nueve de Junio de mil novecientos treinta y siete.

R E L A C I O N de Asociaciones, Partidos políticos y Sociedades de la Provincia de Segovia que fueron declarados fuera de la Ley con arreglo al Decreto número 108 de la Presidencia de la Junta de Defensa Nacional por pertenecer a agrupaciones que integraron el Frente Popular formalizada en cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de Justicia de la Junta Técnica del Estado Español:

=====	
P U E B L O	A G R U P A C I O N
=====	
Arcones.....	Trabajadores de la Tierra.
Bercial.....	Idem.
Bercimuel.....	Idem.
Cabezuela.....	Idem.
Cantalejo.....	Idem.
Cerezo de Arriba.....	Idem.
Ciruelos de Coca.....	Idem.
(X) Cobos de Segovia.....	Idem.
Collado Hermoso.....	Idem.
Condado de Castilnovo.....	Idem.
Cozuelos de Fuentidueña.....	Idem.
Chañe	Idem.
Escalona del Prado.....	Idem.
Escarabajosa de Cabezas.....	Idem.
Fuente el Olmo de Fuentidueña.....	Idem.
Fuentesauco de Fuentidueña.....	Idem.
Fuentidueña.....	Idem.
Gallegos.....	Idem.
Gomez serracin.....	Idem.
Juarros de Voltoya.....	Idem.
Laguna de Contreras.....	Idem.
Matabuena.....	Idem.
Madrona.....	Idem.
Mozoncillo.....	Idem.
Nava de la Asunción.....	Trabajadores "El Porvenir"
Navas de Oro.....	Trabajadores de la Tierra.
Idem.	Trabajadores Resineros.
(X) Navas de San Antonio.....	Trabajadores de la Tierra.
(X) Nieva.....	Idem.
Palazuelos de Eresma.....	Idem.
(X) Idem.	Obreros de la Industria y derivados
Perogordo.....	Trabajadores de la Tierra.
(X) Prádena.....	Idem.
Sangarcía.....	Idem.
San Ildefonso.....	Choferes y similares.
Valsain.....	Oficios Varios "La Defensa".
Santo Tomé del Puerto.....	Trabajadores de la Tierra.
Sepúlveda.....	Profesiones y Oficios Varios.
(X) Sebulcor.....	Trabajadores de la Tierra.
Sotosalbos.....	Idem.
Segovia.....	Obreros carroceros.
Torre cilla del Pinar.....	Trabajadores de la Tierra.
Trescasas.....	Idem.
Turégano.....	Idem.
Vallelado.....	Idem.
Valtiendas.....	Idem.

=====	
P U E B L O	A G R U P A C I O N
=====	
Valseca.....	Trabajadores de la Tierra.
Valsain.....	Aserradores mecánicos y similares."La Unión Obrera".
Vegas del Matute.....	Trabajadores de la Tierra.
(X) Zamarramala.....	Idem.
Zarzuela del Monte.....	Idem.
Aguilafuente.....	"El Trabajo"
Idem.	Trabajadores de la Tierra.
Arroyo de Cuellar.....	Idem.
Valsain.....	Transportes y similares.
Bernardos.....	Profesiones y Oficios Varios.
X) .Fuentepelayo.....	"La Amistad" (Obrera Agrícola)
Cantalejo.....	Oficios Varios "El Progreso"
Cantimpalos.....	Profesiones y Oficios Varios.
Carbonero el Mayor.....	Trabajadores de la Tierra.
Idem.	Oficios Varios.
Ciruelos de Coca.....	Obreros Agrícolas.
Coca.....	Oficios Varios.
Codorniz.....	Unión de Trabajadores de la Tierra.
Cuellar.....	Oficios Varios.
Idem.	Trabajadores de la Tierra.
Idem.	Casa del Pueblo.
Idem.	Artes Blancas.
Chañe.....	Oficios Varios.
Lastras de Cuellar,,,,,,.....	Trabajadores de la Tierra.
Labajos.....	Trabajadores de la Agricultura.
Juarros de Voltoya.....	Oficios Varios.
X) .Hontalbilla.....	Profesiones y Oficios Varios.
Jemenuño.	Oficios Varios.
(X) Fuentidueña.....	Obrera de Socorros Mutuos.
Fuenterrebollo.....	"Trabajadores".
X) .Fuentepelayo.....	Profesiones y Oficios Varios.
Fuente el Olmo de Iscar.....	Oficios Varios.
Fuente el Olmo de Fuentidueña.....	Idem.
Fresneda de Cuellar.....	Idem.
X) .El Espinar.....	Trabajadores de la Tierra y Profesio- nes u Oficios Varios.
Idem.....	Madera, Construcción y Oficios Varios
Donhierro.....	La Segoviana.
Mata de Cuellar.....	Obreros Agricultores.
Martín Muñoz de la Dehesa.....	La Deseada.
Montejo de Arevalo.....	La Invencible.
Montuenga.....	Obreros del Campo.
Mozoncillo.....	Profesiones y Oficios Varios.
Nava de la Asunción.....	Trabajadores de la Tierra.
Idem.	El Porvenir.
Navafria.....	La Protección Obrera.
Idem.....	"La Lucha" Carreteros de transporte tracción de Sangre.
Navas de Oro.....	La Libertad. Oficios Varios.
(X) Idem.....	"La Escoda"
Otero de Herreros.....	Agrícolas y Oficios Varios.

=====	
P U E B L O	A G R U P A C I O N
=====	
Pinarejos.....	Trabajadores de la Tierra.
Remondo.....	Oficios Varios.
X) Samboal.....	La Esperanza. (Sociedad Obrera)
San Cristobal de Cuellar.....	Oficios Varios.
San Cristobal de la Vega.....	"La Unión"
San Ildefonso.....	Construcción "Renovación"
Idem.	Peones en general.
Idem.....	Trabajadores de la Tierra.
Idem.....	Unión General de Trabajadores.
San Martín y Mudrian.....	Trabajadores de la Tierra.
Santiuste de San Juan Bautista....	La firmeza de la Tierra.
Rep Sepúlveda.....	Profesiones y Oficios Varios.
Muñopedro.....	Trabajadores de la Tierra.
Torrecilla del Pinar.....	Profesiones y Oficios Varios.
Valverde del Majano.....	Idem.
Villacastín.....	Trabajadores de la Tierra.
Riaza.....	Profesiones y Oficios Varios.
Segovia.....	Casino de Alianza Republicana.
Idem.....	Partido Republicano Radical Socialista.
Torrecilla del Pinar.....	Idem.
SegoviIdem.....	Derecha Liberal Republicana.
Santiuste de San Juan Bautista....	Republicana Radical Socialista.
Zarzuela del Monte.....	Idem.
Chañe.....	Idem.
Carbonero el Mayor.....	Idem.
Sebulcor.....	Idem.
Cantalejo.....	Idem.
Otero de Herreros.....	Idem.
Valverde del Majano.....	Idem.
Segovia.....	Partido Republicano Radical.
Sepúlveda.....	Partido Republicano Radical Socialista.
Yanguas.....	Idem.
San Ildefonso.....	Idem.
Cantimpalos.....	Idem.
Muñopedro.....	Partido Derecha Liberal Republicana.
Sepúlveda.....	Idem.
Navalmanzano.....	Partido Republicano Radical Socialista.
Sacramenia.....	Idem.
Villacastín.....	Idem.
X) El Espinar.....	Idem.
Turégano.....	Idem.
Santa María de Nieva.....	Agrupación Socialista.
Aguilafuente.....	Partido Republicano Radical.
Fuente de Santa Cruz.....	Partido Republicano Radical Socialista.
San Martín y Mudrian.....	Idem.
Juarros de Voltoya.....	Idem.
Carbonero el Mayor.....	Partido Republicano Radical.
Vegafria.....	Partido Republicano Radical Socialista.
Jemenuño.....	Idem.
Aldehorno.....	Partido Derecha Liberal Republicana.
Carbonero el Mayor.....	Idem.
Otero de Herreros.....	Idem.
X) San Rafael.....	Partido Republicano Radical.

=====		=====	
P U E B L O		A G R U P A C I O N	
=====		=====	
Coca.....	0	Partido Derecha Liberal Republicana.	
La Pradera.....	0	Partido Republicano Radical Socialista.	
Villacastín.....	0	Comité Republicano.	
Abades.....	0	Partido Republicano Radical Socialista.	
Cuellar.....	0	Partido Republicano Radical.	
Cantimpalos.....	0	Partido Republicano Radical Socialista.	
Pradales.....	0	Idem.	
Cobos de Segovia.....	0	Idem.	
Muñopedro.....	0	Idem.	
Valdevacas y el Guijar.....	0	Idem.	
Segovia.....	0	Partido Republicano Conservador.	
Santo Tomé del Puerto.....	0	Partido Republicano Radical Socialista.	
Coca.....	0	Juventud Socialista.(Sociedad de Recreo).	
Sangarcía.....	0	Partido Republicano Radical Socialista.	
Escarabajosa de Cabezas.....	0	Idem.	
Turégano.....	0	Partido Republicano Conservador.	
Cantalejo.....	0	Idem.	
Moral de Hornuez.....	0	Partido Republicano Radical Socialista.	
Valle de Tabladillo.....	0	Idem.	
Valladolid.....	0	Partido Acción Republicana.	
Pinarejos.....	0	Idem.	
Aldehorno.....	0	Partido Republicano Radical Socialista.	
San Ildefonso.....	0	Partido Republicano Radical.	
Cuellar.....	0	Comité Republicano Conservador.	
Aguilafuente.....	0	Partido Republicano Conservador.	
Gomezarracín.....	0	Partido Acción Republicana.	
Juarros de Voltoya.....	0	Idem.	
Mata de Cuellar.....	0	Idem.	
Cuellar.....	0	Partido Acción Republicana.	
San Cristobal de Cuellar.....	0	Partido Republicano Radical.	
San Martín y Mudrián.....	0	Partido Acción Republicana.	
Pinarejos.....	0	Partido Republicano Conservador.	
Segovia.....	0	Partido Republicano Radical.	
Chañe.....	0	Partido Acción Republicana.	
Guijasalvas.....	0	Partido Republicano Radical Socialista.	
Arroyo de Cuellar.....	0	Partido Republicano Conservador.	
Narros de Cuéllar.....	0	Idem.	
Villaverde de Iscar.....	0	Idem.	
Vegafria.....	0	Partido Acción Republicana.	
Sauquillo de Cabezas.....	0	Idem.	
San Cristobal de la Vega.....	0	Partido Republicano Conservador.	
Fuenterrebollo.....	0	Partido Republicano Radical Socialista.	
Vegas de Matute.....	0	Partido Acción Republicana.	
Encinas.....	0	Partido Republicano Radical Socialista.	
Fuentesauco de Fuentidueña.....	0	Idem.	
Turégano.....	0	Partido de Acción Republicana.	
Santa María de Nieva.....	0	Idem.	
Segovia.....	0	Juventudes Socialistas.	
Navafria.....	0	Agrupación Socialista Obrera.	
Aguilafuente.....	0	Partido Republicano Radical.	
San Ildefonso.....	0	Partido Juventud Socialista.	
Segovia.....	0	Partido Republicano Radical Socialista	
		Independiente.	

=====	
P U E B L O	A G R U P A C I O N
=====	
Segovia.....	Partido de Izquierda Republicana.
San Ildefonso.....	Idem.
Segovia.....	Partido de Juventud Izquierda Republicana.
Idem.	Partido Republicano Radical.
Idem.	Partido Unión Republicana.
Sauquillo de Cabezas.....	Partido de Izquierda Republicana.
Villacastín.....	Idem.
San Rafael.....	Idem.
Cantalejo.....	Idem.
Carbonero el Mayor.....	Idem.
Segovia.....	Partido Radio Comunista.
Abadés.....	Partido de Izquierda Republicana.
Nava de la Asunción.....	Idem.
Cuellar.....	Idem.
San Martín y Mudrian.....	Idem.
Cuellar.....	Partido Juventud Socialista.
Carbonero el Mayor.....	Idem.
Cuellar.....	Partido de Izquierda Republicana.
San Martín y Mudrian.....	Idem.
Cuellar.....	Partido Juventud Socialista.
Carbonero el Mayor.....	Idem.
Santiuste de San Juan Bautista.....	Partido Izquierda Republicana.
Escarabajosa de Cuellar.....	Partido Unión Republicana.
Cantimpalos.....	Partido Izquierda Republicana.
Turégano.....	Idem.
Gomezterraceda.....	Idem.
Linares del Arroyo.....	Sindicato Unico Oficios Varios.
San Ildefonso.....	Partido Socialista Obrero.
Sebúlcor.....	Partido Izquierda Republicana.
Navas de Oro.....	Partido Unión Republicana.
(X) Navas de San Antonio.....	Partido Izquierda Republicana.
Nava de la Asunción.....	Agrupación Socialista.
(X) Fuente de Santa Cruz.....	Partido Izquierda Republicana.
Escalona del Prado.....	Idem.
San Cristobal de Cuellar.....	Idem.
Sepúlveda.....	Idem.
Chañe.....	Idem.
Navas de Oro.....	Idem.
Moral de Hornuez.....	Idem.
Torreclilla del Pinar.....	Idem.
Navalmanzano.....	Idem.
Idem.....	Partido Unión Republicana.
Valledado.....	Partido Izquierda Republicana.
(X) Los Huertos.....	Idem.
Segovia.....	Sección Local y Provincial de Amigos de la U. R. R. S.
San Ildefonso.....	Sindicato Unico Oficios Varios.
Coca.....	Radio Comunista.
Nava de la Asunción.....	Sindicato Unico Oficios Varios.

P U E B L O	A G R U P A C I O N
Segovia.....	Sociedad Administrativa de la Casa del Pueblo.
Idem.....	Idem.
Idem.....	Metalurgicos "El Porvenir"
Idem.....	Dependientes de Comercio.
Idem.....	Acomodadores de Teatro...
Idem.....	Obreros Cerámicos.
Idem.....	Dependientes de Teatro.
Idem.....	Obreros Peluqueros.
Idem.....	Arte de imprimir.
Idem.....	Obreros Carpinteros.
Idem.....	Artes Blancas.
Idem.....	Carrereros y Similares.
Idem.....	Canteros y marmolistas.
Idem.....	"El Trabajo" Obreros albañiles.
Idem.....	La Unión Fabril.
Idem.....	Asociación de Dependientes Municipales.
Hontalbilla.....	Profesiones y Oficios Varios.
Segovia.....	Trabajadores de la Enseñanza.
Idem.....	Federación de Trabajadores del Estado.
Idem.....	Sociedad de Herradores de Segovia y su Provincia.
Idem.....	Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Cafetera y Anesos de Segovia y Provincia.
Idem.....	"El Watio" Obreros electricistas y similares.
Idem.....	"El Automovil" Sociedad de chauffeurs.
Idem.....	Federación Provincial de Sociedades Obreras.
Idem.....	Agrupación del personal al servicios de maquinaria de Obras Públicas, y Diputación Provincial.
Coca.....	Sociedad Oficios Varios.
Cuellar.....	Asociación Obreros Agrícolas.
El Espinar.....	Sindicato Unico Oficios Varios.
San Ildefonso.....	Casa del Pueblo.
Idem.....	El Porvenir Obrero de Montes.
Pinarejos.....	Oficios Varios.
Valsaín.....	La Union Obrera" Aserradores mecánicos y similares.
Villaverde de Iscar.....	Sociedad de Oficios Varios.



Segovia 23 noviembre 1936

EL GOBERNADOR CIVIL,

Joaquín España Canto

NOTA.

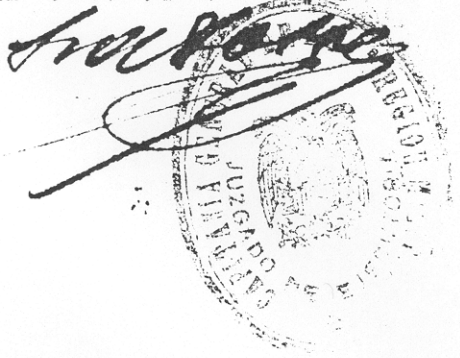
Los pueblos señalados con (X) marginal, son los en que existian Sociedades cuyos bienes fueron incautados por las Alcaldias respectivas de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 108 de la Junta de Defensa Nacional.

CERTIFICADO: Que en el procedimiento sumarisimo de urgencia a que luego se hará mención se ha dictado la siguiente:

SENTENCIA; en Sagovia a treinta de Junio de mil novecientos cuarenta y una treinta y nueve.- Año de la Victoria. Vista en Consejo ordinario de Plaza la causa núm 500 de 1.939 seguida por el supuesto delito de ADHESION A LA REBELION, y contra EUSEBIO MARTIN HERRERO, oído el Fiscal Militar, la Defensa, y RESULTANDO: Que el procesado EUSEBIO MARTIN HERRERO, vecino de Valsain y marxista destacado se marchó en dicho Pueblo con los elementos rojos al ser tomados por las fuerzas "nacionales, incorporándose voluntariamente al que fue ejercito enemigo, al que sirvió de guia en el ataque que se desencadenó sobre Sa. Ildefonso, el día 31 de Mayo de 1.937 apoderándose durante dicho ataque en unión de otros de cintos treinta y cinco reses de ganado vacuno, que se encontraba en la finca de San Lucas, y que en otra ocasión sirvió tambien de guia a una patrulla roja que se internó en nuestro campo. HECHOS PROBADOS: CONSIDERANDO: que los hechos anteriormente relatados cometidos por el procesado EUSEBIO MARTIN HERRERO, son constitutivos de un delito de REBELION MILITAR, previsto en el art. 237 y penado en el 238 del núm. 2º del Código de Justicia Militar. CONSIDERANDO: Que a efectos del art. 173 del citado Código deben apreciarse como agravantes la gran trascendencia de los hechos y los daños causados al Estado y particulares, VISTOS los arts. citados y temas de general aplicación. FALAMOS: que debemos condenar y condenamos al procesado EUSEBIO MARTIN HERRERO a la pena de MUERTE, haciendo reserva de las acciones civiles pertinentes. Firmado y rubricado por el Presidente Vocales, y Vocal. Ponente.- Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos mandamos y firmamos.- Esta sentencia ha sido probada por el Ilmo Sr. Auditor de Guerra de la 2ª Región Militar de Valladolid, con fecha 12 de Julio de mil novecientos treinta y nueve. Año de la Victoria.- Habiéndose recibido así mismo la aprobación de el Excmo Sr. General Jefe de la misma Región. Habiéndose recibido la ~~aprobación~~ COMUTACIÓN de la pena capital impuesta al referido procesado con fecha 16 de Noviembre de mil novecientos treinta y nueve.- Año de la Victoria.-

Concuerda bien y fielmente con su original a que me refiero y a efectos oportunos expido el presente testimonio con el Vº Bº de D. E. dado en esta Madrid a veinte de Octubre de mil novecientos cuarenta y uno.-

Vº Bº
EL COMANDANTE JUEZ



[Handwritten signature]

